

Capítulo Cinco

***La discusión en torno a la Asamblea del Pueblo y el diálogo con
la Democracia Cristiana***

***El enfrentamiento violento en la población marginal Lo Hermida
y la discusión sobre la nueva política económica
(julio-octubre de 1972)***

www.cepochile.cl

Introducción al capítulo cinco

Este período se caracteriza ante todo por la agudización del antagonismo entre las fuerzas gobiernistas y la oposición. A partir de julio de 1972 la ofensiva opositora comienza a desplazarse hacia las acciones directas y de masas, logrando con ello superar el carácter espontáneo e inorgánico que estas acciones tuvieron en los primeros momentos (noviembre de 1971). Justamente en la medida en que la situación objetiva acentúa este carácter, sectores de la Unidad Popular y el MIR comienzan también a articular una contraofensiva que supera los márgenes de la dirección política de la UP y busca solucionar el problema más allá de los marcos institucionales.

En este horizonte se sitúa tanto el intento de constituir una Asamblea Popular en Concepción, como el conjunto de actitudes y declaraciones provocadas por el enfrentamiento entre pobladores y policías en la población Lo Hermida. Entre tanto el Gobierno, situado entre dos fuegos, busca solucionar el problema político (ante todo centrado en torno a la cuestión de la reforma constitucional) buscando el diálogo con la Democracia Cristiana, y el problema económico, renovando el gabinete (cambio de ministros de tendencia socialista de izquierda por comunistas y socialistas cercanos al Gobierno) y cambiando radicalmente las orientaciones de la política económica, la cual va a tender ante todo a financiar el área social abriendo las compuertas a fuertes reajustes de precios.

Este marco formal es el que va a situar el ascenso de la agresividad opositora articulada en el paro empresarial del mes de octubre que constituye el centro del período tratado en el próximo capítulo.

Los acontecimientos más importantes del período son:

La presentación de una acusación constitucional contra el Ministro del Interior Hernán del Canto (Socialista y Vicepresidente de la CUT), iniciada por el Partido Nacional y apoyada por la Democracia Cristiana. Esta acusación es aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de julio y despachada por el Senado el 17 del mismo mes, lográndose con ello la destitución del ministro. Allende lo designa entonces Secretario General de Gobierno.

En la misma fecha que la Cámara de Diputados aprobaba la acusación, el Senado rechazaba los vetos enviados por el Gobierno a la reforma constitucional. La oposición insiste nuevamente en la necesidad de resolver el conflicto mediante un plebiscito, mientras el Gobierno exige la intervención del Tribunal Constitucional. Este rechazo significaba a la vez el término de las conversaciones entre el gobierno y la Democracia Cristiana, iniciadas sobre la base de discutir individualmente la situación de ciertas empresas. La polémica no tuvo resultados en especial debido a la imposibilidad de acuerdos sobre la industria papelera y los bancos.

2418 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

En la segunda semana de julio se produce en Santiago una importante ocupación simultánea de empresas conserveras (Watts, Orlandini, Bozzolo, Deyco y Juan Bass) incluyendo alguna de sus plantas en provincia. Vanguardia de esta acción fue un organismo sindical (Federación del Envase y la Conserva, FETECO) que surgió de la base de ese sector productivo sin recibir apoyo significativo de ningún sector político, pese a lo cual consiguió una fuerte expansión.

En la tercera semana de julio, el gobierno —mediante un decreto de insistencia—, incorpora al área social siete empresas, provocando con ello una fuerte reacción opositora.

El 24 de julio el Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MIR) ocupa calles del barrio alto de Santiago y consolida con ello el Comando de Pobladores del sector de Lo Hermida.

Hacia fines de julio, los trabajadores de la principal industria transformadora de gas (GASCO) ocupan su empresa, presionando con ello al gobierno para obtener la estatización.

El 22 de julio se efectúa en la provincia de Coquimbo una elección parlamentaria parcial. Planteada en dos bloques, resulta victoriosa la candidata de la Unidad Popular, Amanda Altamirano (Partido Comunista).

El 28 de julio, promovido por la Dirección Regional del MAPU y apoyado por el MIR, la Izquierda Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Radical, se gesta en Concepción un movimiento que termina en la constitución provisoria de una “Asamblea del Pueblo” en la que se reúnen obreros, pobladores, campesinos y estudiantes. Esta acción provoca una fuerte crítica del Presidente Allende a los partidos que estuvieron allí representados, los cuales (a excepción del Partido Socialista y la Izquierda Cristiana) se distancian entonces de sus directivas regionales. La polémica en torno a estos hechos sobrepasa los márgenes coyunturales y agudiza las contradicciones estratégicas en el seno de la UP y la izquierda. Los enfrentamientos de Concepción ocurridos en el período anterior tienen su culminación en el proyecto de Asamblea Popular, ante todo en tanto ellos materializan la tendencia a establecer una “alternativa revolucionaria” distinta a la Unidad Popular y a la vez alternativa a la institucionalidad vigente. Con ello comienza a plantearse la cuestión del doble poder (poder popular) en términos concretos, cuestión que alcanzará dimensión nacional a partir de octubre.

La oposición entrega el 3 de agosto una violenta declaración contra el Gobierno, centrando su ataque en la gestión del Presidente a quien se hace responsable de permitir la destrucción del sistema institucional. Para la oposición la izquierda busca el término del Estado de Derecho usando para ello, a la vez, la vía institucional y las acciones directas promovidas por el MIR y otros sectores afines. Esta declaración en la que se incluyen todas las proposiciones del Partido Nacional, significa un acercamiento aún más claro entre los sectores opositores.

En la noche del 5 de agosto se produce un grave incidente en la población Lo Hermida en Santiago. El incidente mismo, entre vecinos y policía civil, produjo un muerto y varios heridos. El tratamiento ulterior de la cuestión, en especial la acción policial contra los detenidos (en su mayor parte provenientes de sectores cercanos al MIR) provocó una violenta polémica en el seno de la izquierda y requirió la presencia de Allende en la población.

Un nuevo acontecimiento vino a empeorar aún las relaciones entre los diferentes sectores de la izquierda. Un grupo de diez guerrilleros argentinos logró huir de

la prisión de Rawson capturando un avión en el aeropuerto de Trelew con el cual llegaron a Santiago. La solicitud de asilo fue apoyada ante el Gobierno por el Partido Socialista, la Izquierda Cristiana y el MIR. Los órganos periodísticos del Partido Comunista, en cambio, recomendaron devolver los miembros del grupo al gobierno argentino de Lanusse. Incluso se llegó, en Santiago, a enfrentamientos callejeros de cierta importancia entre manifestantes y la policía en las cercanías del lugar en donde habían sido alojados los guerrilleros. Finalmente la Cancillería autorizó (el 23 de agosto) su salida hacia Cuba.

En la segunda semana de agosto, Carlos Matus, nuevo Ministro de Economía, que reemplazaba a Pedro Vuskovic, anuncia reajustes en los precios de artículos de primera necesidad, en especial alimenticios. Estos aumentos tendientes a financiar el área social oscilaron entre el 30% y el 200%. Paralelamente a estas alzas comienzan a hacerse sentir fuertes márgenes de desabastecimiento de harina y por tanto en la venta de pan. En la tercera semana del mismo mes, los comerciantes obedecen las instrucciones de su directiva nacional demócratacristiana y cierran sus negocios en todo el país durante 24 horas. En forma puntual el Gobierno ordena la apertura de algunos negocios en Santiago y provincias produciéndose algunos enfrentamientos callejeros de violencia. A la contraofensiva opositora el Gobierno responde declarando la provincia de Santiago en Estado de Emergencia.

El mes de septiembre comienza con un violento movimiento del sector de estudiantes secundarios, dirigido por la Democracia Cristiana que exige la renuncia del Ministro de Educación.

A mediados de septiembre, la Democracia Cristiana propone en la Cámara de Diputados un voto repudiando las acciones de la Kennecott Copper Corporation que habían provocado las requisiciones contra el Estado chileno. El primer embargo había de ser ordenado en Francia el 4 de octubre. El voto demócratacristiano fue aprobado por unanimidad.

A fines de septiembre, el Ministro de Economía anuncia un proyecto de racionalizar el consumo de productos esenciales cuya desaparición del mercado se debía, según la argumentación izquierdista, al excesivo poder de compra de los sectores altos provocando con ello el desarrollo incontrolable del mercado negro. La primera iniciativa en este sentido (en todo caso más radical que el proyecto del Gobierno) fue presentada a la opinión pública por la Izquierda Cristiana. Ella exigía el establecimiento de una “canasta popular” con productos esenciales a distribuir a través de instancias creadas por el mismo pueblo. La oposición parlamentaria argumentando que ello derivaría en un control político de la distribución de alimentos, se opuso al proyecto y este no logró ni siquiera ser tramitado.

El primer documento incluido es un artículo de Orlando Millas en el cual se ponen de manifiesto las críticas del Partido Comunista al documento elaborado por un sector de la izquierda y que fue publicado junto con la movilización que debía promover la Asamblea del Pueblo en Concepción. Lo esencial del artículo de Millas es que ve una contradicción antagónica entre el programa de la Unidad Popular y el Documento de Concepción. Luego de destacar que fue elaborado por sólo un sector de la UP conducido por el MIR y que fue descalificado por las direcciones nacionales de casi la totalidad de esos partidos, Millas expresa que las tesis expuestas en torno a la unificación de las organizaciones populares en una nueva instancia, los Consejos Comunales de Trabajadores, implican “anarquismo

puro". Al decir que los trabajadores chocan ya con el aparato burgués del Estado, aquellos sectores "quieren contribuir a unir, contra el Gobierno, a todos los opositores de derecha y de centro (...) socavar y dividir a la Unidad Popular y, además, lanzar masas populares desorientadas a enfrentar la autoridad gubernativa". "Este es el mayor obsequio que se puede brindar a la reacción". Para Millas, esta acción se viene a sumar a la ofensiva derechista en orden a crear un ambiente propicio al golpe de Estado. Ha llegado la hora de poner orden y de elaborar normas para una acción homogénea.

El documento siguiente ("La clase obrera en las condiciones del Gobierno Popular"), también de O. Millas, es, sin duda, uno de los documentos centrales que el PC elaboró durante el período. En él se comienza reiterando la contradicción principal: el pueblo conducido hegemónicamente por la clase obrera contra imperialistas, monopolistas y latifundistas. Deber fundamental de la clase obrera es no aislarse con "criterios egoístas" uniendo en su lucha a todos los sectores susceptibles de ser unidos. Ello significa ante todo no limitar la lucha a transformaciones puramente políticas, estimuladas y basadas en la creencia idealista de qué consignas cambian los hechos históricos. Es el caso de lo ocurrido en Bolivia, en donde la precipitación por establecer instituciones, sin previa transformación de la base social y económica, condujo al golpe reaccionario. Tarea central de la clase obrera es por tanto fundamentar el cambio histórico en la transformación económica, en nuevas "relaciones de producción". Esta transformación se basa, por un lado, en las estatizaciones y, por otro, en la participación obrera en la producción. La unión dialéctica de ambos factores ha de permitir la superación del capitalismo de Estado que se presenta a la vez como posibilidad y peligro en el desarrollo. Elemento central es el respeto de las leyes económicas objetivas, pero sólo en la medida de que los elementos nuevos introducidos al sistema tradicional no produzcan alteraciones esenciales. Para ello se hace necesario introducir la disciplina democrática en las nuevas empresas, la proposición de metas y planes basados en estudios reales de la capacidad productiva, necesidades del mercado, materias primas disponibles, etc. La clase obrera debe responder, por su parte, con disciplina laboral y superando el economicismo. Ciertos sectores ponen irracionalmente, el acento de la política de participación en tareas de pura fiscalización, tareas que antes eran confiadas por los empresarios a los capataces. Apoyando esta línea, Millas recuerda no sólo las resoluciones de la Conferencia Nacional Comunista sino la misma Declaración de El Arrayán. Es importante hacer notar que para subrayar el carácter cualitativo de los cambios obtenidos y por obtener, Millas denomina el sistema productivo anterior "dictadura de los patrones", frente al cual debe surgir la democratización de la economía. Esta denominación es usada por primera vez en los documentos de que disponemos. La democratización radica, en lo central en que el obrero "es integrante de la sociedad y no un explotado". La explotación es superada, entonces, en el acto de la participación, "en una democratización del sistema de trabajo que rompa implacablemente las trabas burocráticas y sectarias y los resabios gerenciales". El criterio de que las empresas sociales no deben generar excedente es un criterio contrarrevolucionario y oportunista. El excedente es necesario para satisfacer las necesidades generales del pueblo. El nuevo papel a asumir por parte de los sindicatos debe conducir, de este modo, no sólo a la superación del economicismo particularista, sino a la destrucción de tendencias anarquistas de propiedad directa de las empresas concebidas como empresas de trabajadores, lo que, en realidad, favorece los intereses de la burguesía.

Capítulo central del documento es el destinado al análisis de las alianzas de clases. El Gobierno Popular corresponde a la necesidad de establecer una “democracia avanzada” que “asegura condiciones favorables a la lucha por el socialismo”. Para lograrlo se requiere una política de alianzas con “las masas populares de la ciudad y el campo y con la pequeño-burguesía y la burguesía pequeña y media para aislar al imperialismo, a los terratenientes y a la oligarquía financiera”. Por ello, al sobrepasar las metas del programa, la ultraizquierda “ayuda a los contrarrevolucionarios a la formación de una plataforma con alcances de masas para el fascismo”. Se trata aquí de la primera ocasión en que el Partido Comunista busca establecer explícitamente una relación entre las acciones a la izquierda de la UP y un posible desarrollo “fascista”. Mientras para el MIR el peligro del fascismo provenía de la falta de decisión de la UP y el Gobierno para conducir la lucha de las masas contra la burguesía y el aparato burgués del Estado, dejando así las fuerzas populares sin capacidad ofensiva y ofreciendo un amplio margen para ser agredidos, el Partido Comunista ve el peligro fascista a partir del problema de la acumulación de fuerzas: la ofensiva centrada sobre los sectores subsidiarios de la burguesía, entrega estas fuerzas sociales a la conducción ultraderechista. Sobrepasar las metas del programa equivale a desarrollar el fascismo, en especial cuando las ocupaciones de empresas medianas y aún pequeñas ocurren precisamente en lugares en que las empresas monopólicas no han sido estatizadas. Para Millas el peligro fascista debe ser enfrentado con una estrategia que reafirme el carácter policlasista de la alianza asegurando con ello su base y la correlación de fuerzas favorable. Al entender la situación real de la clase obrera como estratégicamente en posesión de sectores centrales del poder, Millas busca el apoyo de una cita de Lenin sobre la Nueva Política Económica en el cual la cuestión central es la tarea de afianzar el poder ya obtenido. Análogamente a los fracasos económicos del naciente poder soviético, la UP sufre un deterioro en la correlación de fuerzas “por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen transgresiones al programa de la Unidad Popular”. Sería suicida aumentar el número de los enemigos. Por el contrario, para asegurar la continuidad del Gobierno “deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a algunas capas y determinados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos”.

Con ello el P. Comunista abre la ofensiva contra la política económica de Pedro Vuskovic, cuya sustitución por el socialista Matus (incluyendo al propio Millas en el Ministerio de Hacienda) se realizará diez días después de haber sido publicado el artículo presente.

Un nuevo ataque contra el MIR constituye el análisis de Jorge Texier (“La transición al socialismo y el ultraizquierdismo”), aparecido en el órgano doctrinario del P. Comunista. El artículo incluido busca fundamentar sus posiciones en el análisis que hiciera Lenin del período de transición del capitalismo al socialismo. Texier destaca el hecho de que Lenin, a pesar de haber destruido el aparato estatal burgués, ve la necesidad de “dar cima a la revolución democrático-burguesa”, en la convicción clara de que “al mismo tiempo el poder proletario llevaba a cabo ‘tareas para la revolución proletaria, socialista’, y que todo esto ‘excedía enormemente los marcos de la revolución burguesa’”. El error de “la ultraizquierda” es justamente olvidar el carácter dialéctico entre ambos objetivos. Aun en 1921 Lenin escribía: “La vida nos hizo comprender nuestro error, ver que son necesarias una serie de etapas de transición: el

capitalismo de Estado y el socialismo, para preparar por medio de un prolongado trabajo –que requiere varios años– el paso al comunismo”. En tal olvido radica el trabajo obrerista de quienes buscan sobrepasar el programa del momento.

El Informe Central de la Conferencia Constitutiva del Partido Comunista Bandera Roja, ilustra el nacimiento, en junio de 1972, de un grupo disidente del Partido Comunista Revolucionario, formado en 1967 por el retiro de un sector pequeño del Partido Comunista encabezado por el senador Jaime Barros. Tanto el PCR como el PC Bandera Roja buscaron apoyarse en la línea política generada por Mao Tse Tung y la Revolución China. Punto central del programa de ambos grupos era la aceptación de etapas cualitativamente distintas en el desarrollo de la revolución chilena, incluyendo por cierto un período prolongado de radicalización de la democracia, estructurado en un gobierno popular (Nueva Democracia). Sus diferencias con la UP y en particular con el PC radicaban en que para aquellos era necesario el quiebre violento de la institucionalidad y la convicción de que la nueva democracia debía ser el resultado de una guerra popular y prolongada. Discrepaban a su vez del MIR en tanto éste pretendría eliminar un período democrático de transición cayendo así en desviaciones pequeño-burguesas. Particularmente violenta es su crítica respecto al rol de la Unión Soviética en la desarticulación de las luchas de liberación nacional. Paralelamente el PC Bandera Roja postulaba la creación de organismos-frentes de base (Movimiento Clasista Proletario) que debían sustituir a las centrales obreras dirigidas por los partidos hegemónicos de la Unidad Popular.

Parte importante del documento es el análisis dedicado al artículo de Millas recién descrito. Tanto el PCR como el PC Bandera Roja alcanzaron muy poca difusión entre la clase obrera. Su división acentuó esta situación. El PC Bandera Roja se disolvió en 1973 y sus militantes ingresaron al MAPU.

La respuesta del MIR al documento de Millas está contenida entre otros documentos en el artículo “Las tareas de los revolucionarios en la etapa actual” de Manuel Cabieses. Teniendo en cuenta el apoyo ideológico que Millas buscaba en Lenin, Cabieses busca hacer lo propio, resaltando el carácter esencialmente rupturista del leninismo en lo relativo a la cuestión del poder real. El “golpe de timón” implícito en la dirección política de la NEP obedece a la necesidad de reafirmar el poder político ya en manos de la clase obrera, y por ello, para Cabieses, no es posible comparar aquella situación con la vivida en Chile en 1972. El Estado burgués experimenta, por el contrario en Chile aquí una “época de renacimiento”. A ese renacimiento de las formas tradicionales del Estado debe oponerse la fuerza y el poder directo de masas: “Contrariamente a lo que pudiera suponerse –ya que los reformistas, mayoría inicial, se empeñan en difundir esa idea falsa–, el proceso revolucionario no se inicia con un aplastante respaldo político y ni siquiera con el apoyo cohesionado y orgánico de las masas obreras y campesinas. La voluntad revolucionaria de las masas trabajadoras corre por cauces profundos que irrumpen en la superficie después que se ha definido la lucha ideológica entre reformistas y revolucionarios. Es en ese instante –el ‘momento revolucionario’– cuando los trabajadores toman en sus manos la conducción del proceso, bajo consignas revolucionarias. Las masas se lanzan a la lucha, vencen a sus enemigos de clase y conquistan el poder”. El supuesto de Millas de que la desorganización en la producción proviene de la excesiva acentuación del control obrero es falsa. Más aún, al proponer concesiones al capital restando fuerza al poder obrero, Millas elimi-

na la única fuerza capaz de ordenar y racionalizar la economía. Cabieses busca poner de manifiesto la contradicción surgida entre la dirección económica dada por Vuskovic y la propuesta por el P. Comunista, recordando que para Vuskovic y su equipo el problema económico, tal como lo plantea el programa UP, trasciende el horizonte técnico y es un problema político y dependiente de la solución política del conflicto fundamental. Recuerda, además, la fuerte polémica del mismo Millas con Fidel Castro en 1966, agregando que “no es la primera vez, por lo tanto, que él asume la defensa del reformismo”. Para Cabieses, el mejoramiento de la correlación de fuerzas depende de la capacidad ofensiva de los revolucionarios. Y es también esa decisión política lo que recién ha de permitir el apoyo decidido del mundo socialista: “La solidaridad activa y concreta de los países socialistas, al mismo tiempo, seguramente se pondría en acción si Chile se plantea de verdad crear un Estado proletario y antiimperialista”.

La tarea de los revolucionarios es “ganar a las masas para conquistar el poder, ampliando sus reivindicaciones democráticas de hoy” y en esa tarea es necesario que los partidos superen su chovinismo de grupo (“secta”). Con ello Cabieses apunta en dos direcciones: por un lado a activar las contradicciones que él ve entre la base del PC y su dirección y, por otro, a promover la idea de la reagrupación de las fuerzas revolucionarias en la constitución de un “polo” en el seno de la izquierda. “Los bolcheviques, por ejemplo, se fusionaron en 1917 con varios grupos y tendencias que les eran afines y a las cuales antes habían combatido. La vida interna del partido bolchevique fue extraordinariamente rica y esa lucha no lo dividió sino que, al contrario, lo hizo más fuerte para afrontar la gloriosa tarea de llevar a cabo la primera revolución socialista”.

El Quinto Pleno de la Dirección Nacional del MAPU desarrolla los ya conocidos puntos de vista de ese partido; pero en su parte política destaca el siguiente párrafo: “El Gobierno no se ha detenido, sin embargo, y está dispuesto a seguir adelante. Pero para hacerlo necesita corregir algunos graves errores. El principal de éstos tiene que ver con su estilo político que no toma en cuenta suficientemente a las masas y su potencial inmenso de combate. Se confunde el respeto a la legalidad con el legalismo, la necesidad de eficiencia con el burocratismo y la mantención del orden con el inmovilismo del pueblo. De esta manera se desarrolla una acción que aunque es profundamente revolucionaria en sus objetivos, es burguesa en su estilo de aplicación, en la medida que no abre canales para que la clase obrera ejerza su hegemonía y las masas en general su presencia vigilante y creadora”. Este párrafo fue propuesto por los sectores de la izquierda de la Dirección Nacional y aceptado por la mayoría ante la expansión de la abrumadora ofensiva opositora. El MAPU, por otra parte, representado en el ministerio Vuskovic por el Subsecretario de Economía Oscar G. Garretón, había defendido a ese equipo en la reunión de la UP en Lo Curro sin tener ningún éxito. También ello explica la radicalización de su crítica a la conducción política de la UP.

No obstante, el Pleno repite tanto sus criterios respecto a los “sectores progresistas” de la Democracia Cristiana y sus críticas violentas a la “ultraizquierda”. En este sentido es obvia la radicalización de la crítica que, en lo general, llega a coincidir con la del Partido Comunista y el documento de Millas: “Si siguiéramos la política del MIR, terminaríamos con el apoyo de una minoría “depurada”, pero con el país de vuelta a las cavernas del fascismo y entregados de pies y manos al dominio imperialista”. La violencia de esta crítica se explica por el creciente desarrollo en el seno del MAPU de

una tendencia que buscaba radicalizar los contenidos socialistas del programa de la Unidad Popular, tendencia que se había expresando ante todo en las movilizaciones de masas encabezadas por la dirección regional de la provincia de Concepción. El Pleno, haciéndose cargo de la ofensiva generalizada de la oposición y de sus éxitos electorales, en la lucha extraparlamentaria y en el plano ideológico, busca retomar el asunto de la batalla “próxima y decisiva por el poder”. Tal enfrentamiento, se dice, se producirá en las elecciones parlamentarias de 1973. La crítica respecto a la incapacidad directiva de la UP se hace, entonces, en relación a la importancia estratégica que se le atribuye al comicio parlamentario. Se repiten entonces las consignas previas a la elección de abril de 1971: “Un Congreso ganado por la UP permite enfrentar la transformación del Estado con una correlación de fuerzas muy favorables. Posibilita enfrentar la transformación revolucionaria del Estado burgués, utilizando los centros fundamentales del actual Estado: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”. El rol de las Fuerzas Armadas ha de quedar determinado en esos marcos: Nadie duda, por otra parte, que emprender la transformación del Estado a partir de la legalidad vigente condicionará decisivamente la actitud de las Fuerzas Armadas hacia ese proceso, como ya se ha demostrado durante todo el periodo de Gobierno Popular”. La derrota electoral, abriría, por el contrario, las puertas a un conflicto institucional de proporciones muy graves. La posibilidad de invertir la situación presente depende, para el MAPU, de la capacidad de la UP en desarrollar el programa, “de su capacidad para neutralizar las armas del adversario, de generar alianzas, de utilizar los instrumentos de poder de que dispone”. A ello se opondría tanto una sobreestimación de las propias fuerzas que conduciría a “posiciones izquierdistas”, como también la subestimación de las propias capacidades, posición ésta que se ha desarrollado “incluso en nuestro partido”.

Respecto a las desviaciones en el seno de la UP y del MAPU el Pleno entregó un informe anexo que incluyó junto al informe económico, poniendo sin embargo el acento sobre las diferencias con el Partido Comunista y Socialista cuyas desviaciones son “de derecha”. Junto a ello, y contra sectores del mismo MAPU, el anexo pone en claro que se trata tan sólo de diferencias tácticas relativas a la conducción política.

El informe de Víctor Díaz que se incluye a continuación constituye, junto al artículo de Millas ya comentado, uno de los manifiestos doctrinarios más importantes del PC en la fase.

Fundamental es la valoración que Díaz hace del carácter de la Democracia Cristiana y del valor de entendimientos concretos con ella en torno a las reformas constitucionales debatidas en esos días. La derecha “destila su odio ya no sólo contra la Unidad Popular, sino también contra la Democracia Cristiana”. “El hecho concreto de que se haya abierto el diálogo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana saca de quicio a los enemigos fundamentales. Y si no hubiera otros argumentos –que los hay– esta desesperación muestra la justeza del camino emprendido por la Unidad Popular”. El Partido Comunista, en este sentido, saluda los cambios acordados por la coalición en el encuentro de Lo Curro en orden a producir “una significativa modificación en el Gabinete” que permita “corregir errores propios del curso de un proceso revolucionario”. Se trata de “un golpe de timón” en el cual la actitud del PC ha tenido importancia. No se trata, para Díaz, en modo alguno de que en el encuentro se hayan enfrentado dos tendencias diferentes. Son los “reaccionarios [quienes] presentan las cosas como si en el seno de la Unidad Popular hubieran chocado dos tendencias,

una, encabezada por nuestro partido, que sería partidario de consolidar y paralizar el proceso, de entrar por un camino de conciliación y otra, de carácter extremista, encabezada por el Partido Socialista. Esta es una burda caricatura, porque ni nosotros somos partidarios de consolidar paralizando el proceso, ni el Partido Socialista de transgredir el programa o de adoptar posiciones aventureras". El PC entiende por consolidar el hecho de reafirmar institucionalmente la situación de las empresas monopólicas intervenidas, pero aún no en propiedad del Estado. Es por eso que "el acuerdo que se ha abierto con la Democracia Cristiana, como posibilidad, es positiva.

La oposición es concebida por Díaz como un complejo en el cual subsisten una tendencia "fascista" y otra, "democrático-parlamentaria". "Los hechos están demostrando" que si bien la derecha fascista, sostiene Díaz, logra utilizar a la Democracia Cristiana en sus proyectos golpistas, ésta tiene una autonomía relativa para llegar incluso a aplicar "una política abierta al diálogo" recibiendo por ello "el ataque y la injuria con virulencia parecida a la que nosotros hemos resistido". "Queda en evidencia que más allá de la Unidad Popular hay gente que está por los cambios, que por sobre la línea divisoria entre oposición y gobierno hay posibilidades de desarrollar la acción común por el avance del proceso revolucionario".

Díaz afirma que la Unidad Popular vivió una verdadera crisis. Ella radicó en que se intentó "echar abajo la línea que permitió construir la Unidad Popular". "Para imponerse, la Unidad Popular tuvo que derrotar concepciones estrechas que limitaban las posibilidades de alianzas de la clase obrera apenas a grupos revolucionaristas de la pequeña burguesía". El respeto de la institucionalidad es una concesión necesaria. "Digamos francamente que el país no nos entendería si actuáramos de otra manera, y en vez de ser mayoría nos transformaríamos en minoría". A ello sigue una fuerte crítica del intento de instituir en Concepción una Asamblea del Pueblo.

Díaz concreta, más adelante, lo dicho al inicio sobre las conveniencias de los acuerdos posibles con la Democracia Cristiana. En efecto, la polémica —central en el diálogo— sobre las "empresas de trabajadores" no debe transformarse en una cuestión "de palabras". "Y si es posible, como todo lo indica, que se cautelen los intereses de la clase obrera y que a través de las empresas de trabajadores no se pretenda transformar a los trabajadores en capitalistas, ni negar el concurso de esas empresas al desarrollo del país, podemos llegar a acuerdo".

Importante es también la parte del informe en la cual se enfrenta el problema del agudizamiento de la contradicción con las compañías del cobre. Ante todo, se insiste en la necesidad de hacer más racional la producción y mejorar la disciplina laboral. La eficacia productiva no se logrará, sin embargo, mediante el tecnocratismo, sino gracias a una política de agitación y propaganda entre los trabajadores del cobre. No se plantea, tampoco aquí, la posibilidad de la suspensión de pago de la deuda externa como arma en la lucha antiimperialista. Ello armoniza, por lo demás, con el hecho de que no se denuncia una relación entre las compañías del cobre y el State Department como tal. La ayuda de los países socialistas será un aporte importante, "pero nuestro proceso revolucionario no se consolidará sino a condición de integrar a nuestro pueblo en la lucha por la solución de sus problemas y la ayuda de los países amigos rendirá frutos sobre esa base y sólo sobre esa base".

En lo relativo a la ordenación de la economía, no cabe sino favorecer (junto al Área Social) el vasto sector de las empresas privadas medias. "Aunque parezca lo con-

trario, es contrarrevolucionario pretender reemplazar por empresas socializadas que requieren cuadros técnicos y nueva organización de la producción –la producción que realizan tales empresas porque el desarrollo productivo en ellas es suficiente para garantizar una socialización efectiva”. El método para lograr ese concurso privado debe ser: dar plena garantía a ese sector de propietarios, transformarlos en aliados del movimiento popular y convencerlos, en base a medidas prácticas, de la necesidad de colaborar a la solución de los problemas del país, haciéndoles patente las ventajas que implica la eliminación de la concentración monopólica privada...” Esta política de colaboración ya ha dado pruebas de su eficiencia. Como ejemplo de esto, Díaz cita el caso del trabajo en común con los comerciantes mediante las Juntas de Abastecimientos y Precios.

El Informe de Resumen leído en el mismo Pleno por Mario Zamorano ratifica las cuestiones de fondo del Informe inicial.

El Editorial de El Siglo del 27 de junio de 1972 entrega un comentario de las resoluciones centrales del Pleno.

El artículo de Carlos Cerda (“La revolución chilena y la propiedad no monopolista”) detalla sumariamente la convicción del Partido Comunista de que el diálogo de la clase obrera con los sectores medios no monopolísticos pasa por los acuerdos previstos con la Democracia Cristiana. La política de alianzas debe partir de la base que ella es imprescindible y de que “transcurridos un año de Gobierno Popular, está claro que en estos sectores de pequeños y medianos empresarios ha cundido la desconfianza y el temor, y hoy, más que ayer, o al menos de manera más clara, hacen de la conservación de su propiedad su principal bandera. Este es un hecho objetivo”. Con otras palabras, para Cerda no se trata en modo alguno de que estas clases se hayan entendido como enemigos antagónicos del proyecto de la Unidad Popular (de apertura al socialismo). Su “desconfianza y temor” eran recuperables, en tanto que no pasaban de allí. El diálogo con la Democracia Cristiana y el “golpe de timón” tenían, así vistas las cosas, el poder de “quebrar la alianza del gran capital con los sectores ligados a la pequeña propiedad. Dos peligros deben ser claramente visualizados: el de que “la ultraizquierda” impida los acuerdos, y el que las capas medias vean en la Democracia Cristiana a la fuerza política que ha defendido sus intereses.

El documento del MIR que incluyo a continuación tenía carácter confidencial e interno. Se trata de una descripción y análisis que la Comisión Nacional Sindical del MIR entregó a los militantes en junio de 1972 acerca de la concepción, organización, funcionamiento y desarrollo orgánico del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR). Su contexto es el resultado negativo obtenido por éste en las elecciones generales de la CUT.

El documento comienza por exponer sucintamente el desarrollo de los FTR en el país. Agrega a ello una crítica de su programa desde el punto de vista del MIR, crítica que se dirige ante todo al carácter prioritariamente reivindicativo de sus consignas, posponiendo la vinculación de ellas con las cuestiones políticas generales. Con ello, agrega el informe, se deja a la clase obrera a menudo sin perspectivas generales de acción. Autocríticamente, sin embargo, se destaca “el esfuerzo insuficiente que el partido en todos sus niveles le ha dado al trabajo sindical”. Se critica también el que las tareas orgánicas no han sabido mantener las diferencias entre MIR y FTR llevando esto a confusiones no sólo en la masa sino incluso dentro del partido. Luego de definir los

caracteres fundamentales del partido revolucionario, el documento analiza las relaciones entre “los organismos de masas del movimiento obrero” y “el frente político: el FTR”. En la diferenciación del frente, el partido y el sindicato, el informe busca delimitar las características propias de los FTR. En ello se fundamenta la autonomía que deben tener respecto al MIR, y los rasgos generales de su organización y funcionamiento.

Incluyo a continuación el documento entregado a la opinión pública por el Gobierno mediante el Ministro de Justicia, Jorge Tapia, para dar cuenta del fracaso de las conversaciones con la Democracia Cristiana y del curso general que ellas tomaron. Del análisis de este documento se puede inferir que se llegó entre los grupos políticos mayoritarios (UP y DC) a un acuerdo general, pero su consumación institucional fracasó en la tramitación, debido a la oposición del pequeño Partido de Izquierda Radical (PIR).

El 10 de julio, Salvador Allende se dirige al país para dar cuenta del resultado de las conversaciones del Gobierno con el PDC y de la crisis institucional que se plantea a partir de este fracaso. Uno de los aspectos objetivos relevantes del discurso incluido es poner de manifiesto el desconcierto inicial y la actitud del Gobierno frente al punto muerto a que se había llegado.

El MIR comenta en el documento entregado el 11 de julio, la situación resultante de la ruptura del diálogo relacionando este hecho a la reunión de la UP en Lo Curro de la cual surgió el “golpe de timón”. Para el MIR, “los dirigentes reformistas del PC y de algunos sectores de la UP” le deben una explicación clara al pueblo. Ellos fueron culpables no sólo de ocultar al pueblo el contenido real de las conversaciones, sino de “desarmar ideológicamente una vez más a los trabajadores, presentando publicitariamente a la DC, al PIR y al parlamento como demócratas partidarios del cambio”. La Unidad Popular “no llegó a estas conversaciones –por haber renunciado a ello–, en la cima de un incontenible avance de las masas, a la cabeza de un movimiento trabajador fuerte, organizado, unido nacionalmente y con un gran desarrollo de su conciencia política”. Sin tener en cuenta que un diálogo de tal naturaleza debe inscribirse en un contexto ofensivo que obligue al adversario a aceptar las condiciones propuestas, la UP, al renunciar al ataque en contra del conjunto de la gran burguesía se puso “en contradicción con importantes sectores de las masas y ha provocado la dispersión del movimiento obrero y campesino”. Es así como entonces la burguesía llegó a conversaciones (que ella no buscó) en una posición de ofensiva. Todo ello en el marco de “un viraje hacia la derecha” impuesto por el Partido Comunista, en base a “la ficción, profundamente mentirosa, de dos extremos buscando la guerra civil y el baño de sangre”. Luego de acentuar su crítica al documento de Millas, el MIR “reitera que la alternativa reformismo o revolución en el seno de la izquierda persiste como la disyuntiva fundamental del período. El combate en el seno de la izquierda por aislar y derrotar el reformismo encuentra, en este momento, su mejor terreno, su mejor oportunidad y su mayor urgencia”. Para ello se hace necesaria la creación paulatina y desde la base de la Unidad Popular, de un polo de revolucionarios cuya meta inmediata debe ser la creación del doble poder, “formas orgánicas que posibiliten el ejercicio directo y creciente del poder político... Los Consejos Comunales de Trabajadores en la ciudad y el campo”. El documento incluye así el “incidente parlamentario” en el contexto estructural en que se cuestiona la situación general.

El documento siguiente corresponde a la entrevista hecha por Punto Final a Alejandro Montesinos, presidente de la Juventud Radical Revolucionaria con ocasión del fracaso de las conversaciones UP-DC. Este sector del Partido Radical, partido eminentemente centrista, había ido izquierdizando rápidamente sus posiciones llegando, en algunos casos, a efectuar acciones en común con la izquierda de la UP y el MIR. La crítica clara del diálogo con la DC es la característica central de la entrevista. No obstante sus evidentes discrepancias con la dirección de su partido, este grupo nunca fue expulsado o aislado dentro del PR.

Incluyo a continuación los tres proyectos de ley enviados por el Gobierno al Parlamento el 15 de julio y relativos a las empresas de autogestión, la participación de los trabajadores en las empresas del Area Social y Mixta y las garantías a los pequeños y medianos empresarios. Estos proyectos de ley corresponden al intento por parte del Ejecutivo de encontrar acuerdos con la Democracia Cristiana la cual había hecho proposiciones análogas al respecto. El acuerdo no fue logrado, por lo cual los documentos adquieren gran relevancia para la comprensión del debate en cuestión, centro de la polémica en curso.

Una posición aún más crítica del diálogo queda expresada en la entrevista de Pedro Felipe Ramírez, Secretario General Subrogante de la Izquierda Cristiana. Por el hecho de pertenecer a un partido proveniente de la Democracia Cristiana, es interesante constatar que para Ramírez, el diálogo estaba a priori destinado a fracasar porque las bases mismas demócratacristianas “no son distintas de sus dirigentes. Incluso es posible percibir que ciertos dirigentes son más ‘razonables’ que las bases.”

También en torno del documento de Orlando Millas, el resumen hecho por Punto Final del artículo de Arnoldo Camú, miembro del Comité Central del Partido Socialista, pone de manifiesto contradicciones de este partido con la línea seguida por el Partido Comunista. El error fundamental de Millas es, para Camú, “enfocar el problema de la correlación de fuerzas exclusivamente desde la perspectiva de la eficacia o debilidad para dividir al enemigo y neutralizar a los sectores influenciados y desde allí auspiciar una nueva táctica para el movimiento popular”. Esto significa un cambio cualitativo en la estrategia de la UP para conquistar el poder político. La verdadera cuestión es, por el contrario, la capacidad ofensiva respecto de la cual hay aspectos más decisivos que “el grado de cohesión o división del enemigo” o la actitud de los “neutrales”. Lo central es pues el “grado, cantidad y calidad de las fuerzas proletarias”.

Es interesante destacar, por otra parte, la importancia que Camú otorga al estudio de Julio López (MAPU), incluido en el capítulo anterior, en oposición al documento de Orlando Millas.

Incluyo a continuación las actas del Senado con parte de la discusión sobre los vetos del Gobierno a la Reforma Constitucional aprobada por el Parlamento. A fin de ilustrar mejor la polémica se agrega el discurso del senador demócratacristiano Juan Hamilton. De los diferentes discursos gobiernistas incluyo el del senador Valente (Partido Comunista).

En la entrevista a la revista Chile Hoy, Carlos Altamirano comienza valorando como exitosa la gestión del Gobierno para obtener créditos de la Unión Soviética. Luego agrega elementos para su crítica a las conversaciones con la Democracia Cristiana. Para el PS ese diálogo estaba a priori condenado al fracaso, porque ya el triunfo de la UP en 1970 convirtió la unidad entre Partido Demócrata Cristiano y Partido Nacional “en

un hecho irreversible". La fuerza electoral de la izquierda hace imposible "que la DC, que pretende ser una fuerza civilista en 1976, abandone como partido sus vínculos con la derecha". El peligro de no superar la barrera del 50% de los votos es un riesgo que se debe correr. "Todo proceso revolucionario debe correr ciertos riesgos". Un plebiscito adecuadamente planteado es perfectamente ganable. No obstante, el querer solucionar las dificultades mediante conversaciones es una tendencia errónea y propia "de un estilo convencional tradicional". Las discusiones deben hacerse frente a la masa de trabajadores. Altamirano insiste en que el carácter revolucionario de un proceso es fundamentalmente definido por "la forma, el estilo, el contexto en que se rodean" las medidas de transformación estructural. La violencia revolucionaria radica, por tanto, en el nivel de la movilización de masas y no necesariamente en su carácter armado. Después del fracaso en las conversaciones, se impone una radicalización del proceso. No obstante, para Altamirano, ello equivale a la realización de los acuerdos de la reunión de Lo Curro.

El 21 de agosto de 1972, Simón Wiesenthal, director del Centro de Documentación de la Liga de los Judíos perseguidos por el régimen nazi (Viena), dirigió una carta a Salvador Allende a fin de solicitar su ayuda para reactivar el proceso de extradición del criminal de guerra nazi Walter Rauff, residente en Chile como próspero y millonario empresario. Apelando a los compromisos respecto a los crímenes contra la humanidad suscritos por Chile ya en la Conferencia de Londres en 1984, renovados en 1952 y 1969 y al principio de extraterritorialidad de la justicia en los casos de crímenes contra la humanidad, Simón Wiesenthal cuestiona la legalidad y coherencia de la resolución de la Corte Suprema de Chile que había proclamado la prescripción de la pena contra Rauff contraviniendo el derecho internacional vigente tras Nuremberg. Allende respondió esta solicitud negándose a tomar cualquier tipo de iniciativa, ignorando del todo la argumentación de Wiesenthal, legitimando la resolución de la Corte Suprema, pese a que a Rauff se le imputaban cien mil asesinatos de hombres, mujeres y niños mediante el uso de gas de escape de cientos de camiones construidos especialmente para ello. En abril de 1973, rindiendo homenaje a los 40 años del partido Socialista, Allende destacará, sin embargo, "la lucha frontal contra el nazi-fascismo" de su partido y su «rol sin discusión como el adversario más duro, más firme en la lucha anti-nazi y antifascista». Mientras el fue Secretario Regional del Partido en Valparaíso "hubo muertos por ambos lados". También en el Segundo Mensaje al Parlamento (21 de mayo de 1972) había proclamado que su "gobierno condena a todos los regímenes reaccionarios que promueven la segregación racial y el antisemitismo".

El documento de Kalki Glauser incluido a continuación, tuvo importancia fundamental en la discusión interna del MAPU en la época previa al Segundo Congreso Nacional de ese partido. En él se expresa la línea política del sector de izquierda que lograría conquistar, más tarde, la dirección del MAPU. El texto tuvo carácter de "estricta circulación interna".

Su tesis central es la afirmación de que en la Unidad Popular se ha desarrollado de modo hegemónico una línea política "centrista revolucionaria" que corresponde exactamente a la concepción "etapista" del Partido Comunista y de acuerdo a la cual, el momento histórico que vive la izquierda debe adaptarse a la lógica propia de un período de transformaciones nacionales y democráticas, postergando las tareas socialistas para una etapa cualitativamente diferente y posterior. Para Glauser, el desarrollo de estas

tarear implica, sin embargo, la realización simultánea de metas socialistas. Ellas, basadas en la movilización de masas, son las únicas que pueden garantizar tanto el cumplimiento del programa básico como la verdadera transición al socialismo. Esta línea estratégica se opone, cualitativamente, a la sustentada por el PC y por ello el carácter de la alianza se ha modificado: la unidad con el sector "centrista revolucionario" es sólo táctica, en lo estratégico es necesario asumir la lucha.

El documento comienza analizando el período septiembre 1970-junio 1972 (Lo Curro) a fin de explicar las causas de la contradicción que es el tema central del documento. El desarrollo de las reformas económicas ha implicado, objetivamente, un avance hacia el socialismo. Pero, al no haber avanzado en resolver el problema del poder político, la UP, en lo fundamental, sólo ha desarticulado la "normalidad" capitalista. Incluso en lo económico no se ha logrado instituir un sistema de reemplazo. Para Glauser, esta desarmonía entre lo económico y lo político habría sido una de las exigencias formuladas por el MAPU durante el período, proponiendo constantemente a la UP el "buscar un enfrentamiento global y decisivo" durante 1971. Este enfrentamiento, apoyado por el Partido Socialista, fue diluido por "otras fuerzas dentro de la Unidad Popular" que resultaron hegemónicas. Sobre esta base se articula la unidad de la oposición y su ofensiva "que el MAPU llamó una ofensiva táctica". Ello tiene a su vez como consecuencia y marco un fenómeno polivalente: el espontaneísmo salarial, el surgimiento del capitalismo especulativo que invierte a corto plazo y buscando las mayores ganancias, el aumento desmedido de la inversión fiscal, el cierre de los créditos del mundo capitalista y una grave situación inflacionaria y desabastecimiento con fuerte incidencia en la actitud de las masas. Estos fenómenos son, para Glauser, a la vez que problemas reales, consecuencia de "un éxito, de un avance también real, en dirección a nuestros objetivos socialistas". Con todo, estas dificultades comienzan a tener "un valor estratégico a medida que nos acercamos a marzo de 1973" (las elecciones parlamentarias). Y ello porque, si bien las elecciones "no son la única condición" del avance, en la situación dada, el control del Parlamento "es hoy una condición indispensable para que la UP pueda seguir avanzando en dirección socialista". No obstante, considerado el grado de unidad de la derecha, Glauser estima que el control del Parlamento es imposible sin asegurar la mayoría absoluta. Ante esta situación tampoco sería adecuado pensar en soluciones "ultraizquierdistas", en el puro y simple reemplazo de la vía pacífica por la vía armada. La alternativa política que propone Glauser, y que es a la vez "decisiva" para la "destrucción del carácter burgués del Estado es siempre el surgimiento, al margen de las viejas instituciones del Estado, de Organos de Poder Popular y Proletario de base, a través de los cuales pueda organizarse, coordinarse y centralizarse la voluntad de las masas". Es en este contexto en el cual surge "la alarma del Partido Comunista ante la posibilidad de ser aislado dentro de la UP por una alianza PS - MAPU-Izquierda Cristiana - MIR (...)".

El segundo capítulo busca poner de manifiesto el carácter de las contradicciones que se hacen presente en Lo Curro. La discusión es tematizada en lo económico, pero las divergencias ponen en claro que el problema central es político. Las únicas posiciones claras son las del P. Comunista y el MAPU. El Partido Socialista, manteniendo diferencias, apoya en lo básico al PC. Más adelante, Glauser explica las líneas centrales de las dos posiciones fundamentales. En el tercer capítulo, Glauser busca demostrar que las correcciones en la política económica propuestas por el Partido Comu-

nista, pasan por el entendimiento estratégico con el Partido Demócrata Cristiano. El cuarto capítulo tiene por objeto demostrar el margen en que los acuerdos de Lo Curro corresponden por completo a la línea comunista, no sólo en lo relativo a posibles entendimientos con la Democracia Cristiana, sino también en cuanto a la necesidad de homogeneizar la conducción política en contra de los disidentes. En este último punto, y debido a la radicalización de este proyecto, está implícita una actitud represiva en el seno de la izquierda que visualiza ante todo al MIR, pero que puede dirigirse contra “todos los que dentro de la UP están por una revolución socialista”. El quinto capítulo se propone demostrar que una serie de factores objetivos favorecen la viabilidad del proyecto comunista. Ante todo cuenta, para Glauser, la existencia de un sector en la DC que está por acuerdos con los partidos de la UP que no buscan “la dictadura marxista” (esto es la dictadura del proletariado). Este sector deberá buscar en el PC su aliado natural, incluso en lo estratégico. Glauser pone, por otra parte, en duda la posibilidad de que este sector llegue a controlar al PDC y con ello se abrirían perspectivas tan sombrías al pueblo chileno como lo fueron Indonesia o Grecia. Glauser pone en duda, enseguida, que el “centrismo revolucionario” buscado por el Partido Comunista sea un camino efectivo para llegar al socialismo. En especial, porque ese camino busca tan sólo cambios en la propiedad de medios productivos con apoyo popular, sin acentuar el rol de las masas en el control del Estado, cuestión que es la que define la sociedad socialista. “El socialismo se decide en el terreno del poder colectivo de decisión de las masas, dirigidas por el proletariado, sobre el uso de los medios de producción, de la fuerza colectiva de trabajo y de los excedentes, es decir, el socialismo se decide en el terreno del control por parte del proletariado de la actividad económica y del Estado.” El surgimiento de capas burocráticas (“nueva burguesía”) y con ellas de “régimenes postcapitalistas que no son socialistas” es una de las lecciones de la historia contemporánea.

En el sexto capítulo, Glauser enuncia la posición divergente que debería asumir su partido. El último capítulo enumera las circunstancias que favorecen la hegemonía del “centrismo revolucionario”. No obstante, planteadas las cosas como tareas a solucionar, la alternativa del momento histórico es elegir entre el centrismo revolucionario y el socialismo. La situación real (el carácter estratégico que el PC atribuye, aunque mediatamente, al socialismo, su ascendencia en las masas, su capacidad organizativa y el hecho de que no es posible en Chile una revolución sin él) hacen necesario el diálogo con los comunistas y la permanencia en la Unidad Popular; ante todo porque una posible alianza con el Partido Socialista puede ayudar al MAPU a cambiar la correlación interna de la Unidad Popular.

El fracaso de las conversaciones con la Democracia Cristiana fue un duro golpe para la Unidad Popular en su conjunto. El Gobierno, por su parte, buscó retomar la iniciativa mediante un replanteo de cuestiones económicas y líneas concretas. En este contexto se sitúa el discurso radial del Presidente Allende. Este discurso es, en lo económico, el de mayor importancia que el Presidente leyera ante el país. Su contenido concretiza la línea determinada por la UP en el encuentro de Lo Curro. Una cuestión planteada en él adquirió en las próximas semanas, una función extremadamente crítica: las medidas propuestas para abordar los problemas del transporte. Allende anuncia la creación de un Comité Ejecutivo de Transporte que debía depender de los tres ministros del sector económico. “Sus facultades serán las más amplias; tanto en la formulación como en la

ejecución de políticas y coordinación de las organizaciones y empresas públicas de transportes". Este párrafo fue interpretado por la oposición, y en especial por los empresarios privados del transporte, como un intento de estatizar estas empresas. Ya a mediados de septiembre se organizará el movimiento patronal del transporte al que había de sumarse todo un sector de la mediana empresa y el comercio.

Otro documento que adquirirá un valor prospectivo es el comunicado del Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR) creando el Consejo Local de Pobladores de Lo Hermida. En este lugar se producirá algunos días más tarde un grave incidente entre policía civil y pobladores.

El 31 de julio, Allende se dirige por escrito y públicamente a todos los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular para hacer presente su total desacuerdo con la Asamblea de Concepción. En el documento que incluyo a continuación, Allende atribuye a los hechos "una potencialidad perturbadora de la más extrema gravedad". Agrega que la decisión de hacer pública su opinión se basa en la intención de poner el debate ante todo el pueblo y hacer ver a cada militante de la UP su responsabilidad revolucionaria. Además busca poner a los dirigentes de los partidos ante "la responsabilidad histórica" que se ha adquirido al constituir la UP y su programa. Esta responsabilidad está reñida con lo que el Presidente llama "obtener una satisfacción puramente individual" partidista. "Es por eso que rechazo cualquier intento de diseñar tácticas paralelas, espontaneístas, so pretexto de que personas o grupos se sientan depositarios de la verdad y persistan en su afán de desviar la marcha del pueblo para colocarlo frente a riesgos en los cuales la vida de hombres, mujeres y jóvenes está innecesariamente expuesta". En esta hora de crisis interna, Allende llama a la disciplina partidaria, en especial porque todo movimiento divisionista ayuda a las metas subversivas del "enemigo común". Los partidos deben reforzar su autoridad y organicidad. La efectividad del trabajo de un revolucionario "no necesita de la espectacularidad de una acción para sentir que está cumpliendo con su deber."

Distinguiendo entre "conflicto de Poderes del Estado" y "conflicto político", Allende caracteriza la situación del momento como una situación políticamente conflictiva, debido a la actitud del Parlamento ante el carácter de los vetos enviados a la reforma. La contradicción principal, surgida con toda claridad en el fracaso de las conversaciones con la DC, debe solucionarse –según Allende– ganando las elecciones parlamentarias. Con ello queda entonces en claro que los conflictos de poder deben quedar solucionados por la solución política. Y conyunturalmente: el punto muerto surgido del fracaso del diálogo queda superado por la perspectiva de la nueva lucha electoral. El poder popular "no surgirá de la maniobra divisionista de los que quieren levantar un espejismo lírico surgido del romanticismo político al que llaman, al margen de toda realidad 'Asamblea Popular' (...). Una Asamblea Popular auténticamente revolucionaria concentra en ella la plenitud de la representación del pueblo." Por ello debe concentrar todos los poderes del Estado, incluido el Ejecutivo. "En otras experiencias históricas, ha surgido como un 'doble poder', contra el poder institucional reaccionario sin base social y sumido en la impotencia. Pensar en algo semejante en Chile en estos momentos es absurdo, si no crasa ignorancia o irresponsabilidad." La razón es que, además de haber en Chile un Gobierno legítimo éste es un Gobierno del pueblo. "Y con la más profunda conciencia revolucionaria, no toleraré que nada ni nadie atente contra el Gobierno del país." "No concibo que ningún auténtico revolucionario respon-

sable pueda, sensatamente, pretender desconocer en los hechos el sistema institucional que nos rige y del que forma parte el Gobierno de la Unidad Popular. Si alguien así lo hiciera, no podemos sino considerarlo un contrarrevolucionario”.

Agrego a continuación un artículo de Guaraní Pereda, en el que el Partido Socialista, indirectamente, responde al Presidente. El artículo, resumido en “Punto Final”, se opone en todos los puntos a la carta de Allende.

En el mismo sentido se orienta la carta-respuesta de la Izquierda Cristiana a Allende. Para este partido, los hechos de Concepción son el resultado de la insuficiente capacidad de dirección política por parte de la Unidad Popular para movilizar masas en apoyo de sus metas programáticas. Estos hechos tienen, así, un aspecto positivo: “Se trata de una forma de movilización de masas para seguir avanzando.” “En efecto, esa reunión no pretende transformarse en un sustituto del esquema institucional de poderes del Estado, ni en ente paralelo a ello, sino que aspira a ser lugar de encuentro, diálogo y coordinación para el combate de fuerzas populares y progresistas de esa provincia.” Lo que cabe a la UP es, como vanguardia, canalizar estos movimientos de masas y coordinarlos con su acción de gobierno. “La UP es el mejor y más acerado instrumento revolucionario que el pueblo se haya dado nunca en nuestra patria.”

A continuación incluyo la lista de resultados oficiales de la elección de la Central Unica de Trabajadores (CUT). Lo más importante en este resultado es el aumento en la votación demócrata cristiana (16 delegados), a pesar de que la mayoría PC-PS fue clara.

Enseguida se incluye un documento de circulación interna del MIR que analiza la situación política y sus perspectivas generales. En primer lugar, este informe de la Comisión Política al Comité Central, analiza las posibilidades y el carácter que asumirá la alianza opositora luego de fracasado el diálogo. Ante todo se hace visible que la coyuntura es favorable a la derecha, a tal punto que la discusión entre DC y P. Nacional no afectará tal alianza. La derecha, enseguida, se ve obligada a aceptar las elecciones de marzo como el enfrentamiento próximo y por ello buscará asegurarse los votos de los sectores medios. Allí surgirán contradicciones secundarias en su seno. Otros aspectos importantes son la “relativa autonomía alcanzada por las FF.AA. luego que un sector ‘constitucionalista’ logró la hegemonía decantándola relativamente de los extremos ‘politizados’ de izquierda y de derecha, enfrentando hoy como fuerza autónoma tanto a la clase dominante como al Gobierno.” Ello obliga a la derecha a hacer concesiones al Gobierno. Un segundo asunto importante es la relativa autonomía de los empresarios respecto a los partidos que tradicionalmente los representaban. Estos se ven también aquí obligados a transigir. Influye, también sobre la izquierda, el que los sectores medios tienden a autonomizarse de las fuerzas populares, a diferencia de otras experiencias históricas. Para el MIR, en este momento, las capas medias estarían condicionando su apoyo a la izquierda o a la derecha.

A continuación se incluye la Introducción que contiene los Documentos Interiores del MIR durante el año 1972, que he repartido en esta colección según sus fechas de publicación restringida. Esta Introducción deberá ser consultada en la lectura de los respectivos documentos.

En seguida reproducimos las principales intervenciones en el Pleno Agrario del Comité Central del Partido Comunista. Se trata de una serie de documentos muy importantes que ilustran las líneas de política agraria después de la renovación de Lo Curro.

El documento que sigue corresponde a una de las primeras publicaciones del MIR en que combate la nueva política económica del gabinete Millas-Matus, denunciada como inflacionaria y antipopular.

Se incluyen, a continuación, los documentos más importantes surgidos en torno al enfrentamiento en la población Lo Hermida. En particular es relevante la intervención de Osvaldo Romo, de la Unión Socialista Popular.

La entrevista a Miguel Enríquez hecha por el semanario Chile Hoy incluye un análisis general de la situación, pero su aspecto más relevante es la denuncia que hace el Secretario General del MIR respecto de desviaciones de derecha e izquierda en el seno del movimiento popular. Estas últimas consisten en partir “de un análisis errado del período y de una definición incorrecta del carácter de clase del Gobierno”.

Sin identificar estas últimas desviaciones, Enríquez agrega que ellas son “fenómenos que se producen en el seno del pueblo” y que deben solucionarse mediante la lucha ideológica. Enríquez agrega que la consigna de “destruir el Parlamento” es una consigna estratégica y no a cumplir hoy. Las fuerzas deben agruparse, sin embargo, en esa dirección.

Importante es también su caracterización general de los Consejos Comunales de Trabajadores.

El documento siguiente corresponde a la entrevista concedida por el Ministro de Economía Carlos Matus (PS) al semanario Chile Hoy. Tiene importancia porque en ella Matus delinea el carácter de la nueva política económica sobre la base del fracaso de las conversaciones UP-DC.

El artículo de Kalki Glauser y Julio López expone la posición del MAPU frente a la nueva política económica, en especial en lo relativo a las consecuencias inflacionarias. Para Glauser y López no es posible a corto plazo, solucionar el problema del desabastecimiento, es decir, del exceso de demanda, usando mecanismos de mercado que reduzcan la demanda privada de sectores privilegiados. Incluso un alza fuerte de los artículos suntuarios no constituiría un obstáculo dada la enorme cantidad de dinero atesorada por esos sectores. En el hecho, la única demanda reductible es la del sector laboral, reduciendo los ingresos reales. En ello radica el aspecto político y central de la cuestión porque se arriesgaría el apoyo de esos sectores (y el subproletariado) a la UP. La única base de apoyo sería, entonces, el sector medio, la DC y el aparato del Estado y no el movimiento de masas. A la vez con ello se dejaría fuera de lugar la dirección hacia el socialismo.

La única solución viable es el ataque frontal contra el 7% de la población que consume el 50% de lo consumido en el país, empleando el control obrero y proletario de la producción y la distribución. No obstante que las medidas democráticas (como la redistribución del ingreso) deben continuarse, “es necesario impulsar desde ya tareas de contenido socialista, tales como el control popular sobre la economía”. Con todo, el riesgo de una derrota de la política que acentúe las tareas socialistas, es real.

El discurso de Jaime Gazmuri, leído por cadena de emisoras, coincide en sus líneas generales con el artículo de Glauser y López y constituye un documento importante para ilustrar la posición crítica del MAPU ante la nueva orientación de la economía, posición que ya había sido visible en las conversaciones de Lo Curro. El documento busca enfrentar la ofensiva derechista en vías de generalización. De ahí el carácter dramático que adquiere en su forma. El problema coyuntural más importante del momento era tanto el tipo de reajuste compensatorio a las alzas y el bono com-

pensatorio adicional que debían darse. El MAPU propuso que el reajuste fuese discriminatorio aumentando los ingresos más bajos y castigando los de mayor nivel con la doble finalidad de mantener los ingresos reales y, a la vez, proceder de modo de ir solucionando el problema del exceso de liquidez. En ello coincidía con la política recomendada por la CUT. Simultáneamente, Gazmuri critica las alzas, a su juicio desmedidas, de los productos vitales. Para asegurar el éxito de estas políticas deberá asegurarse el control popular sobre la distribución. En este sentido Gazmuri, sin embargo, no va más allá de promover la generalización de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), sin aludir a la eventual estatización de los grandes monopolios distribuidores. En la línea de combatir “la ofensiva fascista” Gazmuri propone, por un lado la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra la organización extremista Patria y Libertad y por otro afirma que el pueblo, los trabajadores deben “estar alertas para responder al llamado que haremos los partidos populares y su gobierno para derrotar al fascismo en todos los terrenos”.

La segunda parte del documento, es una carta al Presidente Allende, añadida a modo de anexo, que, además de agudizar la crítica del uso de mecanismos de mercado para solucionar el problema de la demanda y el abastecimiento, critica duramente concesiones hechas por el Gobierno al Fondo Monetario. La devaluación operada (90%) tuvo como “objetivo principal presentar ante los organismos internacionales de crédito y especialmente ante el Fondo Monetario Internacional, la decisión del Gobierno de iniciar una política económica “ortodoxa” y “sensata”. Entendemos además que estuvieron en Chile un asesor de alto nivel del FMI, y uno de sus directores (lo que no se informó a la Unidad Popular), quienes plantearon como cuestión previa al apoyo financiero de ese organismo, la necesidad de una devaluación sustancial. Esta actitud frente al imperialismo contradice todas las posiciones que nuestro partido ha planteado acerca del Bloqueo Invisible, y de la forma en que el Gobierno y la Unidad Popular deben enfrentarlo. Una concesión de este tipo no es neutra: parte importante de las alzas que se están planteando obedece a los mayores costos provocados por la modificación cambiaria. Así, el proletariado recibe un golpe en su lucha económica, como consecuencia de una forma errónea de enfrentar al imperialismo.” La CUT carecía de toda información y “el pueblo y los partidos están completamente desorientados”.

Esta carta del MAPU al Presidente fue publicada por ese partido sólo parcialmente en su recopilación de documentos partidarios, “El Segundo Año de Gobierno Popular”, de la cual hemos extraído el texto que se reproduce aquí.

La declaración pública del Comité Político de la Unidad Popular (26 de agosto de 1972), surgida en medio de la crisis desencadenada por la huelga del comercio, denuncia que “la acción de la derecha y en general de todos los partidos de oposición... está buscando un enfrentamiento de hecho”.

Acusa además de que la derecha y la oposición estimulan “grupos armados de orientación derechista en permanente acción en las calles y en el campo de todo el país”, agregando a ello una ofensiva parlamentaria y en los medios de comunicación. A esa acción la izquierda opone “la violencia revolucionaria enfrentando la lucha en todos los terrenos”.

A continuación se incluye la carta-respuesta del Partido Comunista al Presidente Allende en torno a los acontecimientos de Concepción. Esta carta, escrita por Luis Corvalán, comienza lamentando que no sean los partidos de la UP en su conjunto los

que entreguen una única respuesta al Presidente. El escrito de Corvalán expresa el acuerdo total de los comunistas con el documento. A “despecho de lo que dicen los reaccionarios, Chile es hoy más independiente y el pueblo más libre. A pesar de lo que afirma la ultraizquierda, lo que se ha hecho en estos 20 meses tiene un contenido profundamente revolucionario”, lo hecho tiene un carácter revolucionario en tanto que “proceso de cambios profundos, de desplazamiento y reemplazo de las clases dominantes (...) en vistas a abrir el camino a la sociedad socialista”. Las clases “hasta ayer dominantes” contratan desesperadamente por recuperar lo perdido. Esta desesperación coincide con “la desesperación pequeño-burguesa de la ultraizquierda”. Entre ambas tendencias surge la actitud contradictoria de la Democracia Cristiana “que está contra la sedición y el golpe de Estado venga de donde venga”, pero que se identifica, a la vez y en aumento, a la más oscura reacción, llegando algunos de sus voceros “a suñar en procacidad y reaccionarismo a los dirigentes del propio Partido Nacional”.

Contra “los fascistas” es necesario adoptar una política dura, es decir, “adoptar las medidas legales correspondientes”. Del mismo modo que a “los provocadores de ultraizquierda”.

En general, por tanto: “Nuestra primera y principal obligación con el pueblo y el país es ponerles camisa de fuerza a los que quieren arrastrar a Chile a un baño de sangre”. No obstante, la firmeza contra “la ultraizquierda” no debe tener carácter de represión.

Los hechos promovidos en Concepción tenían por meta “al menos, sustituir la alianza y el Programa de la Unidad Popular”, lo cual es inaceptable en la medida en que ambos conservan plenamente su vigencia.

Pero en cuanto a las relaciones entre Unidad Popular y Gobierno, y en este momento crítico, Corvalán enuncia un criterio cuyo carácter polémico no fue recogido expresamente en la discusión. En efecto, Corvalán afirma: “El papel de los partidos de la Unidad Popular debe ser, en nuestra opinión, fundamentalmente, el de organizadores y orientadores de las luchas de las masas”. Y en la medida en que estas “luchas de las masas” tienen más bien un carácter de apoyo a las medidas del Gobierno, agrega: “En cuanto a su participación en el Gobierno, la concebimos, en todo lo que tiene que ver en las tareas concretas, con estricta sujeción a las decisiones que tomen los respectivos órganos colegiados como el Comité Económico de Ministros y los Jefes Administrativos”. Esta política debe aplicarse en las más altas instancias: “El Comité Nacional de la Unidad Popular, principalmente por iniciativa suya mantiene con Ud. un permanente contacto, enteramente justo en el plano del intercambio de opiniones sobre orientación política. Esta es una buena práctica. No obstante, nos parece que en el Presidente de la República y en su Gabinete se debe concentrar la suma de las decisiones gubernamentales. Este es un procedimiento más operativo.” La tarea principal de los partidos de movilizar las masas tras las acciones del Gobierno, se justifica tanto más cuanto que las nuevas direcciones económicas son garantía de avance.

La tensión producida en el seno de la izquierda en torno a la petición de asilo de los guerrilleros argentinos que lograron fugarse de la prisión de Trelew, es documentada aquí en su fase final por el documento que enviara el Canciller Clodomiro Almeyda al gobierno argentino concediendo el asilo solicitado. El problema que el documento busca obviar es un retroceso de los avances logrados en las relaciones con el gobierno del General Lanusse y que se basaban en la intención argentina de ter-

minar con la doctrina Onganía de las “barreras ideológicas”. Consecuencia directa de esta nueva política era un mayor espacio para Chile en el contexto latinoamericano.

El informe de la Comisión Política del MIR al Comité Central Restringido (8 de septiembre de 1972) tuvo carácter interno y en su extraordinaria amplitud (50 páginas y 12 capítulos) constituye un documento muy importante para conocer detalles acerca de la posición de ese partido durante el período 1971-1972.

El primer capítulo analiza “el modelo político de la UP en 1971”. Centro de la estrategia de esa coalición fue: 1. No golpear al conjunto de la burguesía, 2. No incorporar y unir al conjunto del pueblo al no resolver los problemas de todos los sectores y 3. No enfrentar la superestructura política e institucional del sistema.

Ello provoca ante todo la debilidad del Gobierno y “la fortaleza relativa de la clase dominante”. Enseguida, aquella estrategia motivó los problemas económicos conocidos, la “división del pueblo” y “la división de la izquierda y los revolucionarios”.

El segundo capítulo valora el resultado de la política UP en 1971: En setiembre de 1970 se produjo una “situación pre-revolucionaria” que no llegó en 1971 a transformarse en “revolucionaria” sin que, por otra parte, revirtiera en la “normalidad”. Se enumeran los factores que determinan este diagnóstico.

El tercer capítulo trata de “la política reformista para 1972”. “La política reformista consistió en esencia, primero, en intentar poner el ya existente capitalismo de Estado al servicio de sectores de la clase dominante; segundo, en la mantención y sujeción al aparato institucional burgués como tal; tercero, en buscar alianzas con fuerzas de la burguesía (de sus representantes políticos: es decir, el PDC). Freno por tanto a la movilización y las aspiraciones del pueblo.”

A partir de estos rasgos comunes, “los reformistas se dividen en dos sectores: los reformistas inconsecuentes y los estalinistas”. Unos no quieren admitir la represión al pueblo y otros la impulsan. Así, la UP busca fuerza en alianzas con la burguesía en el Congreso, con los militares y con representantes políticos de los empresarios.

Analizando la “evolución de la política reformista durante 1972” el informe tematiza la pugna interna en el Partido Comunista que terminará, luego de pugnas también en la UP, al imponerse “los sectores ‘más’ reformistas” dirigidos por Millas y Teitelboim. Esta lucha en el PC y con sectores de la UP abarca el período diciembre 1971-junio 1972.

El cuarto capítulo se refiere a “la política de los revolucionarios en 1972” diferenciando los aspectos ya conocidos a través de los documentos del MIR que se han incluido anteriormente.

El capítulo quinto explica la “situación previa a la crisis de agosto”. La clase dominante se ve “favorecida ampliamente” en la correlación de fuerzas. El freísmo busca una salida “demagógico-populista”, mientras el P. Nacional delinea un proyecto “con rasgos fascistas” originándose así una lucha por el liderazgo. El informe agrega que estas dos líneas “representan políticas distintas y no exactamente partidos políticos diferentes, puesto que ambas tienen tras ellas miembros destacados de los dos partidos”. El freísmo buscaba entonces ganarse con su proyecto a las capas medias, mientras el “jarpismo” (Onofre Jarpa, jefe del P. Nacional), con su convocatoria fascistoide, a la pequeña burguesía. Estos sectores preveían las elecciones de marzo de 1973 como una fecha de definiciones. Junto a ellas se distinguía (antes de agosto de 1972) un tercer

sector que “buscaba resolver las cosas” antes de 1973. En este sector se encontraban círculos empresariales, Patria y Libertad y tendencias en el P. Nacional. En aquella fecha, este sector era minoritario en el conjunto de la clase dominante. La UP, por su parte, se debilitaba en medida importante. Su base de apoyo popular se “quebraba y debilitaba” por el alejamiento de las capas pobres. Su apoyo en el aparato estatal (Parlamento, Justicia, Fuerzas Armadas en especial) comenzó a verse condicionado. En segundo lugar, se produce la hegemonía reformista y con ella el surgimiento de sectores UP radicalizados que no la aceptan, sin tener, por otra parte, “fuerte expresión en la cumbre”. Junto al “enardecimiento” de la pequeña burguesía, se destaca la relativa autonomía de los militares quienes aumentan sus condiciones y cuya dirección “no-golpista” debe contar con “un poderoso sector golpista” con expresión real en “la cúspide”. Importante es también en este contexto “el repliegue interno” del MIR (con discusión y reajuste interno) porque le restó “un grado de eficiencia” durante la crisis. Ello en un momento, además, en que “la política de ir conquistando sectores de la UP para una reagrupación revolucionaria de fuerzas iba teniendo éxito relativo, pero lentamente”.

El capítulo sexto (“Evolución de la situación hasta la crisis de agosto”) comienza analizando las conversaciones del MIR con la UP. En ellas se pone de manifiesto el “débil intento del sector ‘izquierdista’ del PC” por lograr entendimientos con el MIR y sectores izquierdistas de la UP, sector que fracasa ya en el seno del PC. Luego de analizar brevemente las conversaciones UP-DC y los hechos de Concepción, el informe se dirige al análisis de Lo Hermida. Estos acontecimientos fueron, en todo caso, y en lo que respecta a la represión, dirigidos detalladamente por “un poderoso sector del PC”. Enseguida se agrega una relación de los hechos en su detalle y amplitud organizativas. Para el informe, el intento, fracasado, muestra que “el PC o su sector más reformista cree tener ya las condiciones necesarias para golpear al MIR y a sectores radicalizados del pueblo”. El fracaso y las condiciones en que se produjo son detalladas a continuación. En el mismo sentido el informe analiza los “hechos alrededor de los revolucionarios argentinos”. Por último el capítulo se refiere, extensamente, al problema suscitado por las alzas y su trasfondo político.

El capítulo séptimo (“Evolución de la crisis de Agosto”) se refiere a 1. la asonada de los comerciantes, 2. la marcha en Concepción, 3. la asonada del 1° de septiembre en Santiago, 4. la marcha del 4 de septiembre y la situación al 8 de septiembre. Especialmente importante en este capítulo del informe es el análisis de los desplazamientos tanto de los sectores de la burguesía y pequeña burguesía que se han dado una organización armada, como de los sectores de la policía que comienzan a escaparse del control del Gobierno.

El capítulo octavo (“La evaluación de la crisis”) se divide en cuatro puntos: los dos primeros se refieren a los factores constantes de la situación y los factores precipitantes de la crisis. El tercero tematiza la debilidad del Gobierno y el último las perspectivas que se abrieron.

Los factores constantes son: la fortaleza de la clase dominante y su crisis; la debilidad del Gobierno y el descontento del pueblo causados por la política alcista del nuevo gabinete. A estos factores se unen aún dos de la mayor importancia: ante todo el “enardecimiento de la pequeña burguesía” que se refleja en el apoyo masivo de los sectores medios habitantes de sectores céntricos y altos a las acciones violentas de estudiantes

y manifestantes. Apoyo que va desde arrojar papeles para que los manifestantes hagan hogueras en las calles, hasta apedrear a la policía que debería reprimir las asonadas. "Allí hay una base social de apoyo, hay un fenómeno político y social, no un accidente conspirativo." Un quinto factor esencial es la situación interna de las Fuerzas Armadas: "Descontento de su suboficialidad por las alzas, la agresividad de ciertos sectores y la sedición de otros". Los francamente sediciosos son pocos, pero están en la cúspide, sin que se pueda, por el momento, determinar su influencia efectiva. El sector "mayoritario, predominante" es "enormemente agresivo entre la oficialidad, baja y media, en contra del Gobierno, pero se resiste al golpismo y pone condiciones para intervenir en la situación política: que haya caos o anarquía".

Los factores precipitantes de la crisis son analizados en general y se reducen a las alzas, la discusión en torno a los revolucionarios argentinos y la lucha entre las fracciones burguesas por la hegemonía interna.

La debilidad intrínseca del Gobierno podría aminorarse tanto por la incorporación del PDC o de los militares al gabinete, pero ello no constituiría sino un paliativo en la superficie motivado por "juegos, maniobras o intentos" que no modifican "la relación y la actitud de las clases". De acuerdo a esto, las salidas son: o bien un intento rupturista en septiembre o un retroceso del Gobierno a posiciones extremadamente graves de "concesión y negociación". Lo más probable es la incorporación de la DC o los militares al Gobierno. Lo improbable es que el Gobierno se apoye en las masas y busque una salida revolucionaria. El capítulo noveno ("Políticas planteadas en la izquierda como salidas a la crisis") analiza "la política reformista" y "las corrientes revolucionarias". Dentro de "la política reformista", el MIR distingue dos variantes: la sustentada por "algunos personeros de Gobierno, tecnócratas, políticos, burócratas", representantes de una "pequeña burguesía reformista". Su proyecto incluye preferentemente la integración de los militares al Gabinete y concesiones económicas y políticas amplias a la burguesía. En especial a aquel sector renuente a dejarse representar políticamente "ya que ellos aspiran asumir por sí mismos la representación política". Manteniendo las líneas ya en práctica, este sector gobiernista piensa que este camino debe asegurar la estabilidad del Gobierno hasta marzo 1973. Esta variante "conduciría... a una división de la UP (dependiendo de la forma y en perspectiva). Se ha planteado, pero es dudoso, que el PC podría retirarse del Gobierno; no está claro, pero parece que al menos se opone a la constitución de un Gabinete con militares". En el mismo sentido se aproximaría una división del Partido Socialista. "La represión a las organizaciones revolucionarias y a sectores del pueblo, sería una norma de un Gobierno de ese tipo." "El camino militar sería irreversible y terminaría en definitiva por intentar copar todo el poder; después de desarticular y confundir al pueblo." Enfrentar a un gobierno de este tipo presenta particulares dificultades: "hará necesario construir todo un esqueleto conceptual, político y agitativo que pudiera demostrar que ese Allende, en el que de hecho el pueblo delega una importante cuota de conducción, fuera una pieza en el juego que interese a la clase dominante, y que esos militares no están en el Gabinete producto de una 'astucia' de Allende".

Una segunda variante es la que se puede llamar "reformismo obrero". Ella tiene más a la alianza con la Democracia Cristiana que con los militares. La política económica actual no sufriría cambios. Su entendimiento se dirige a hacer concesiones directamente "con los representantes políticos de la clase dominante". A diferencia de

la otra variante, a ésta le interesa reforzar su conducción de masas, sindicatos, etc., para asumir desde allí sus conversaciones con la burguesía. No buscan transformarse en representantes de ella. Su actitud dura frente a la derecha “no progresista” es puramente burocrática, con lo cual se “lleva a confusión a sectores más radicales de la izquierda y a veces, incluso, confunden a gente nuestra”. Su decisión por “aplicar la ley”, a “imponer impuestos”, a “no financiar la propaganda de la derecha”, “a reprimir policialmente a la clase dominante, todo se asemeja al esquema stalinista de represión burocrática”. Su radicalización es, así, sólo aparente, “en lo fundamental buscan dar la lucha antifascista sin contenido de clase... no se plantea como objetivo la lucha por el socialismo, avanzar y golpear, o ser derrotados, sino que artificialmente se intenta paralizar la lucha del pueblo y su lucha por conquistar el poder...”

En lo relativo a las “corrientes revolucionarias”, el MIR distingue en el Informe “sectores vacilantes” y “sectores consecuentes”. Los “sectores vacilantes” son examinados en torno a su actitud estratégicamente débil frente a la nueva política económica, la cual denuncian y rechazan “sólo entre cuatro paredes”. Más fácil es un entendimiento con estos sectores en la formulación general de algunas “tareas de poder”. Pero en la medida en que aquellos sectores no denuncian la política económica reciente, se hace difícil movilizar las masas y buscar, con ellas, las soluciones. Sin embargo, esos sectores se incorporan con facilidad en coyunturas agudas y luchas callejeras, “pero no van mucho más allá”. También rechazan “el entendimiento con los demócratacristianos y los militares, pero, otra vez, es más bien entre cuatro paredes”. Su análisis de la DC es cuantitativo “de sectores”, capas sociales y tendencias y no “con criterio de clase”. En cuanto a la política de “reagrupación de los revolucionarios” vacilan. “Más bien les interesa la “unidad de la izquierda”. Como se encuentran en la práctica con una cerrada oposición del PC a cualquier apertura a la Izquierda Revolucionaria, puntualmente entran en acuerdos con nosotros, pero estratégicamente trabajan en alianza y, en los hechos, subordinados a los reformistas”.

La “política revolucionaria consecuente” pasa por una vinculación directa a las masas. Sólo ella puede garantizar una alianza adecuada con las demás fuerzas de izquierda, en casos de ofensiva reaccionaria. Lo principal no es, por tanto, “cerrar filas” y “olvidar diferencias”, ni tampoco la lucha entre “los comunistas y nosotros”, sino “construir una relación revolucionaria entre el movimiento de masas y los revolucionarios”. Lo general es la denuncia del reformismo, salvo en momentos en que “la condición de ofensiva reaccionaria sea muy evidente y aguda”. En todo caso no es posible, nunca, dejar de denunciar la nueva política de precios y salarios. “La lucha por la defensa de los niveles de ingresos de las masas es, para nosotros, la única forma de recuperar la confianza de masas; siendo, por eso, además, el punto de partida de la formulación de cualquier otra política”. Un segundo punto irrenunciable es la consigna de “golpear al conjunto de la burguesía” (“quitémosle las fábricas y los fundos”). En ello “no hay ultraizquierdismo”: “se trata de un manejo elemental de las leyes de la lucha de clases”, que debe poner de manifiesto que “frente a la contrarrevolución burguesa sólo hay una alternativa: la revolución socialista”. Un tercer punto que debe definir la política revolucionaria es resolver correctamente el problema de los militares. No es posible hacer como que “los militares no existieran, que es, aproximadamente lo que hace la UP”. “Tenemos que resolver el problema de la fuerza militar enemiga y de la debilidad militar nuestra”. El trabajo hacia los militares implica levantar con-

signas adecuadas (vgr. exigir su derecho a votar), sin dar margen a que ellas puedan constituir provocaciones. Un cuarto elemento es el de la organización de masas. En esta parte, el Informe detalla algunos criterios básicos, dirigiendo la atención a la formación de los Consejos Comunales de Trabajadores que superan las organizaciones puramente reivindicativas o sociales. “Es decir, hay que diferenciar la organización por la clase (hasta allí llega el PC) de la coordinación comunal que para nosotros es básica, pues será el embrión de los futuros órganos de poder popular.” Un quinto punto, es el concerniente a “las movilizaciones de masas contra el fascismo”. El informe se refiere a las formas orgánicas y realiza una autocrítica. Más adelante, el MIR define su política de alianza con la UP. Ella se resume en el principio de “marchar separados y golpear juntos”, fórmula que “ha buscado, en especial, resolver el problema con el PC y el reformismo”. No se trata, por tanto, de una indiscriminada “unidad de la izquierda”, sino la “unidad de los revolucionarios” y “golpear juntos” con la totalidad de la izquierda. Será preciso ser intransigentes en lo fundamental, pero “enormemente flexibles en lo formal y secundario”. Respecto a la política hacia los opositores al Gobierno, sólo cabe hacer ver que unos quieren derrocar al Gobierno antes de marzo de 1973 y los otros después. Toda otra diferenciación desarma al pueblo y “da base a la política comunista –que influye entre los vacilantes– de que habría ‘progresistas democratacristianos’ que están con la legalidad”. Por último, se analiza el significado que debe asumir la próxima lucha electoral en lo relativo al aspecto fundamental (fuerza de masas), en lo que debe ser mostrado como contradicción principal: la oposición entre clase dominante y trabajadores. La parte final, la más extensa de este capítulo, contiene un análisis en detalle de la estructura que debe asumir la movilización de masas y la correspondiente actividad del partido MIR.

Los dos últimos capítulos del Informe se refieren a precisiones sobre el carácter de la crisis y a la actitud de la organización ante la crisis. Ambos destacan la necesidad de no confundir las estabilizaciones relativas con la solución de los problemas y el desaparecimiento del peligro. Ello lleva a la necesidad de perfeccionar la organización interna y su capacidad ofensiva.

A continuación se incluyen diez declaraciones o artículos del MIR en esta fase. En ellos destacan los relativos a Lo Hermida y a la política económica del nuevo gabinete.

La entrevista concedida a Radio Portales por el Presidente Allende (10 de septiembre de 1972), ilustra ante todo la actitud del Gobierno ante el conflicto surgido con las empresas del cobre y sus intentos de confiscación de propiedad chilena.

Destaca la violencia con que Allende rechaza las movilizaciones que tienden a radicalizar el programa de Gobierno. Y su condena de los hechos violentos producidos en Concepción y que condujeron a la muerte de un carabinero. Para él es “inconcebible que alguien pueda pensar que un partido de gobierno pueda deliberadamente haber provocado, a través de un militante, la muerte de un carabinero, en circunstancias que el orden público, el orden que el Gobierno necesita, lo mantiene el Cuerpo de Carabineros; fue de hecho un provocador o un degenerado, que puede haber estado infiltrado en las filas de los partidos populares”. Y expresando la actitud del Gobierno que “no quiere, que rechaza la violencia”, Allende se refiere a la decisión con que se la ha combatido: “Yo sé perfectamente bien que en los sectores de izquierda tenemos termocéfalos pero... nadie puede negar que el Gobierno ha sido duro con ellos.

En Curimón: detenidos, justicia militar; eso que llaman Ejército Nacional de Liberación –además es un mito– también en la cárcel. Lamentablemente lo de Las Ventanas: en la cárcel. No hemos tapado ni taparemos jamás a un hombre de izquierda, porque si es hombre de izquierda, y si es militante del Partido Socialista, es doblemente delincuente.”

Más adelante, Allende tematiza los hechos de Lo Hermida y el carácter fascista que ha asumido la oposición, la cual, a diferencia de los aislados hechos violentos causados por la izquierda, habría sistematizado su actividad en ese sentido.

Incluyo finalmente un documento que, hacia fines del período, alcanzó gran significación. Se trata del texto de los vetos del Gobierno a la Reforma de la Ley de Seguridad Interior del Estado en lo relativo al control de armas y explosivos. Estos vetos buscaban modificar el artículo 23 de esa ley que entregaba funciones de control a los fiscales de las Cortes Suprema y de Apelaciones, a los prefectos, alcaldes y regidores. La “incorrecta redacción de los vetos” (se aludía al artículo 18 en lugar del 23) tuvo por resultado que la reforma propuesta por el senador demócratacristiano, Juan de Dios Carmona, fuera despachada sin variaciones. A diferencia de algunas versiones que circularon en esa época, los vetos se referían sólo a las atribuciones de esos funcionarios civiles y en ningún caso a la de los militares, tal como lo confirma el texto de los vetos que he incluido.

Orlando Millas (Partido Comunista): Salvar la crisis y reforzar la Unidad Popular

(*El Siglo*, 28 de mayo de 1972)

Sería suicida asumir la actitud proverbial de los avestruces ante los peligros. En la Unidad Popular hay una crisis que afecta su orientación y su conducción política. Los acontecimientos de Concepción, que están muy lejos de haber sido superados, mostraron la profundidad de esta crisis. Es evidente que los enemigos cantan victoria, confiando en que la división de la Unidad Popular permita la derrota del Gobierno. No hay que darles en el gusto. Y la única forma seria y eficaz de restablecer la unidad de la Izquierda es hacerlo sobre una base de principios, poniendo término a las trasgresiones del programa común.

¿Una nueva “alianza”?

El miércoles de esta semana se publicó en Concepción un manifiesto bastante extenso, dividido en cuatro capítulos. Lo suscribieron, al pie de la página completa del diario que lo contenía: “Partido Socialista, Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Izquierda Cristiana y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”.

A mediados de este mes, formularon declaraciones conjuntas con el MIR las directivas provinciales de Concepción, del Partido Socialista, el MAPU, la Izquierda Cristiana y el Partido Radical. Esas declaraciones fueron desautorizadas por las directivas nacionales de los partidos Socialistas, Radical e Izquierda Cristiana y, parcialmente, también por la del MAPU. Ahora, el Partido Radical no participó en la responsabilidad por el manifiesto de la presente semana.

Este, a diferencia de las declaraciones anteriores, no precisa que sus firmantes lo hagan sólo como dirigentes provinciales, sino que se toman la representación de sus colectividades. Además, le dan un nombre característico: “Documento de Concepción”, que es como se titula.

En su texto, lo más singular es el anuncio de que se trata “de una alianza que busca la discusión y la puesta en práctica de una línea que asegure la irreversibilidad del proceso revolucionario”. Nos encontramos, por lo tanto, ante una situación delicada: en escala nacional, existe la coalición denominada Unidad Popular, con una línea condensada en su Programa Básico de Gobierno y que está formada por los partidos Socialista, Comunista, MAPU, Radical, Izquierda Cristiana, API y Socialdemócrata; pero en Concepción hay una “alianza” diferente, con otra línea, y en que los partidos Socialista, MAPU e Izquierda Cristiana hacen causa común con el MIR.

El último de los capítulos del “Documento de Concepción”, denominado “Las Perspectivas Futuras”, contiene un programa claramente opuesto al de la Unidad Popular.

Por ejemplo, uno de los puntos del programa de la alianza indicada exige que la participación de los trabajadores en el área social sea dotada de “mayor poder de decisión y control sobre los cuerpos administrativos”. El control de la administración de las empresas por los organismos de participación corresponde a una concepción anarquista antisocialista. Tampoco tiene que ver con el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular el postulado de la nueva alianza sobre implementación del “control de los trabajadores en la industria privada”, que pudiera entenderse en términos contradictorios con la subsistencia del área privada. Sin embargo, pudiera haber en dichas formulaciones más bien sólo imprecisiones de redacción. Aún en ese caso, lo que sin ambages y, se interprete como se interprete, representa una negación absoluta de la política de la Unidad Popular es el planteamiento de una administración que se constituya “unificando las organizaciones populares en Consejos Comunales de Trabajadores, que a través de Asambleas por la base resuelvan cuestiones de interés inmediato para los trabajadores como el control del abastecimiento a través de las JAP; como Educación y Salud, etcétera”.

Esto es anarquismo puro.

En las condiciones del Gobierno Popular, los miembros de la alianza constituida en Concepción definen como “contradicción fundamental” lo siguiente: “En la medida que las masas no reconocen en la oposición política otra cosa que la contrarrevolución en ciernes, entran en contradicción con el aparato del Estado construido por la burguesía en sus largos años de dominación política y social. Es decir, que en su lucha para aplastar la contrarrevolución, que se reviste de oposición, las masas chocan permanentemente contra un Estado construido básicamente para resguardar los intereses de la reacción burguesa”. Más claro echarle agua. Quieren contribuir a unir, contra el Gobierno, a todos los opositores de derecha y de centro, en cambio socavar y dividir la Unidad Popular y, además, lanzar masas populares desorientadas a enfrentar a la autoridad gubernativa.

La bandera de la unidad

Contestando a la torpe descalificación del gobierno popular, a pretexto de considerarlo “reformista”, que hacen los miembros de la alianza de Concepción, el Secretario General del Partido Comunista, compañero Luis Corvalán, indicó en la reunión con la prensa del mismo miércoles último:

“Nosotros, comunistas, consideramos que en la política de Gobierno y de la Unidad Popular hay rasgos reformistas. Eso es otra cosa. Pero, dígame lo que se quiera del Gobierno y de la Unidad Popular, lo cierto es que bajo el gobierno de la Unidad Popular se han hecho grandes cosas, grandes transformaciones revolucionarias y este Gobierno está bajo el asedio del imperialismo y de la reacción, porque ha herido profundamente sus intereses. Y nosotros creemos que lo más revolucionario es cerrar filas en torno a este Gobierno. Pensamos que cualquiera que sea la fraseología que se emplee por parte de alguna gente, todo

aquello que va dirigido a minar la autoridad de este Gobierno favorece al imperialismo y a la reacción. Esto nos parece absolutamente claro. Pensamos que hay en este terreno un abuso muy grande. Ni el Presidente de la República, Salvador Allende, ni los partidos de la Unidad Popular y, en primer lugar, el Partido Comunista, pensamos, ni de lejos, que debemos tomar medidas represivas contra aquellos grupos de obreros, campesinos, estudiantes que sobrepasan la legalidad. Esto lo sabe el MIR y de ello abusa. Sería erróneo creer que las discrepancias están circunscritas a Concepción. En mayor o menor medida, las encontramos en todo el país, en una parte más, en unas partes menos. Nosotros, comunistas, creemos tener algunos deberes con nuestro pueblo, con nuestra clase obrera, con el Gobierno, y estamos dispuestos, decididos, a enfrentar esta crisis levantando la bandera de la unidad de los trabajadores, de la unidad del pueblo, del cumplimiento irrestricto del Programa de la Unidad Popular sin ninguna transgresión”.

En efecto, la unidad de la Izquierda chilena es el patrimonio fundamental que debe ser resguardado.

No puede extrañarnos que el imperialismo trata de vengarse por la nacionalización de la gran minería del cobre y recurra a todas las armas contra el Gobierno Popular. Otro tanto ocurre con la oligarquía financiera que han perdido los bancos, la aristocracia terrateniente furiosa por la Reforma Agraria y los dueños de monopolios como los Yarur, Sumar y Edwards. Pero lo que reviste una gravedad inmensamente mayor es que también se ataque al Gobierno desde posiciones, aparentemente de izquierda y se movيلة a contingentes del pueblo en enfrentamientos contra la dirección estatal a cargo del Presidente Allende. Este es el mayor obsequio que se puede brindar a la reacción.

Los diarios de la empresa El Mercurio han abordado el asunto con su cinismo habitual. Magnifican sin vergüenza al MIR, destacan todo lo que diga o haga, lo han convertido en su regalón. Redoblan, a la vez, sus ataques más canalleros contra el Partido Comunista. Un cartel de primera página de La Segunda del viernes propone aprovechar la situación para obtener la caída del Gobierno Popular y califica de “repugnante” la actitud del Partido Comunista de combatir las posiciones en que se coloca el MIR.

Simultáneamente con las andanadas del MIR contra los comunistas y el Gobierno Popular, arrecia a ojos vistas la escalada sediciosa de la ultrareacción. En el fondo, converge en tenazas una sola operación, que trata de crear un ambiente favorable al derrocamiento del Gobierno Popular, desde la Derecha y la Izquierda.

Hay que desbaratar esa maniobra; lo que requiere decir las cosas como son, para que recapaciten y rectifiquen su actitud quienes por error ayudan inconscientemente a un juego contra el pueblo.

Una conducción homogénea

En medio de una situación tan crítica, lo único positivo reside en que la complejidad de esta coyuntura, la magnitud de las dificultades y la inminencia de los mayores peligros han puesto al desnudo el carácter de la amenaza.

El Presidente Allende llamó en su Mensaje del 21 de Mayo a cumplir el Programa Básico de Gobierno. Este Mensaje fue, en su conjunto, una argumentación lúcida, convincente, profunda, en favor de la estrategia y de las tácticas en razón de las cuales se formó la Unidad Popular y pudo obtener la victoria.

Ya en el documento en que desautorizó a sus dirigentes provinciales de Concepción que habían tomado bando en la alianza con el MIR, formuló el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical un análisis que aporta valiosos antecedentes sobre la necesidad de restablecer una política coherente de entendimiento de la Unidad Popular.

En la reunión del miércoles de la Comisión Política del Partido Comunista con periodistas, Luis Corvalán fue categórico al decir: “Creemos que hay urgencia en cerrar filas en torno al Programa de la Unidad Popular, al Gobierno de la Unidad Popular, al Presidente de la República, y que es posible cambiar la correlación de fuerzas, pues no son fascistas todos los que no están con el Gobierno. De ninguna manera. Ello equivaldría a pensar que la mitad del país sería fascista y eso sería una ofensa a la mitad del país. No es así. Los fascistas constituyen una minoría muy reducida y a éstos en primer término hay que golpear. Creemos que el momento es difícil; pero no es sin salida. Esto tiene salida y no concebimos ninguna salida ciertamente fuera de los compromisos contraídos por la Unidad Popular y en ese sentido estamos dispuestos a entregar el máximo de nuestro aporte, de nuestra capacidad”.

La Acción Popular Independiente (API) y el Partido Social Demócrata han mantenido, en todo el curso de cada crisis, una actitud invariable de lealtad al Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular.

El jueves último, en el Teatro Caupolicán, pronunciaron discursos de extraordinaria importancia el Secretario General del Partido Socialista, compañeros Carlos Altamirano, y el dirigente de la Comisión Política de esa colectividad, compañero Rolando Calderón. Con franqueza, directa y claramente, además de criticar los factores de dispersión de la Izquierda y de reafirmar la línea del Programa Básico de Gobierno, denunciaron la táctica desleal de las infiltraciones y dobles militancias, junto con mostrar la disposición unitaria del Partido Socialista.

Hoy se reúne el Comité Político Nacional de la Unidad Popular. Nada se sacaría con doblar la hoja sobre lo ocurrido. Se requieren medidas concretas tendientes a asegurar una conducción homogénea en todos los terrenos y en todos los niveles, que realce la autoridad del Gobierno Popular al sancionar sin contemplación cualquier trasgresión a los compromisos contraídos con el pueblo.

En las actuales circunstancias hay que poner el acento más que nunca en la unidad socialista-comunista. Todo lo que debilite abre brechas favorables a los enemigos. Debemos esforzarnos, tesonera y decididamente, a cerrar tales brechas.

Con el mismo énfasis, se coloca en primer plano la necesidad de defender el entendimiento entre cada uno y todos los partidos de la Unidad Popular. La lucha por la rectificación drástica de los errores sólo será fructífera si se afirma en el Programa elaborado en conjunto.

Orlando Millas (Partido Comunista): La clase obrera en las condiciones del Gobierno Popular

(5 de junio de 1972)

La profundidad y magnitud de los cambios revolucionarios planteados e iniciados por el Gobierno Popular conmueven a todas las clases y capas sociales y llevan la lucha política a condiciones de sensibilidad y de agudización extremas. Puede decirse que, en estas circunstancias, se ponen a prueba todos los sectores y todos los destacamentos del pueblo. Y el asunto primordial en el proceso revolucionario chileno consiste, en la actual coyuntura, en que la clase obrera asuma, en él, el papel que históricamente le corresponde. No se trata de que la clase obrera desarrolle una acción que la encierre en sí misma y la constituya en un estamento con criterios egoístas, sino de que reagrupe junto a ella a todas las fuerzas interesadas en el progreso, lo cual exige que apoye resueltamente las reivindicaciones legítimas y los derechos democráticos de cada una de las clases y capas sociales susceptibles de interesarse en la lucha antimperialista y antioligárquica. La primera condición es que la propia clase obrera se cohesione, tenga conciencia de su responsabilidad revolucionaria, una dialécticamente en su vida cotidiana sus preocupaciones inmediatas y sus demandas económicas y culturales con la perspectiva clara de la liberación social.

Revolucionarios, reformistas y contrarrevolucionarios

El Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular señala: “En Chile, las recetas “reformistas” y “desarrollistas” que impulsó la Alianza para el Progreso, e hizo suyas el Gobierno de Frei, no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental, ha sido un nuevo Gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado una vez más que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo”.

Por ello, con absoluta razón, surge a cada paso la preocupación por que el Gobierno Popular actúe con una política revolucionaria y no con una política reformista.

Este no es un asunto subjetivo. La dilucidación de si una conducta es revolucionaria o es reformista no depende de las palabras y ni siquiera de los propósitos. Esto se decide en el terreno de la posición que asume en la sociedad la clase obrera, la forma en que se resuelven los problemas de la propiedad sobre los medios de producción fundamentales, el carácter del proceso mismo de trabajo y las alianzas de clase que, de acuerdo a la correlación de

fuerzas, permitan asegurar la estabilidad del propio Gobierno Popular y cierren el paso a la sedición reaccionaria.

Cuando el imperialismo, la oligarquía financiera y la aristocracia terrateniente se desviven por socavar la autoridad del Gobierno Popular, por presentarlo como incapaz de mantener el orden público, y en especial por rebajar el papel de la clase obrera, no sólo es reformista, sino que es contrarrevolucionaria cualesquiera acción que, objetivamente, favorezca el plan de los reaccionarios. La formulación de consignas radicalizadas, que, a pesar del respetable afán de proselitismo de sus autores, muestran dispersión, anarquía y falta de claridad de propósitos en las fuerzas de sustentación del Gobierno Popular, constantemente traen consecuencias contraproducentes. Tales consignas tienen una raíz reformista en la concepción de que todo se podría lograr con frases, juegos políticos, medidas administrativas, decisiones burocráticas y gestos románticos; pero, lo más grave es que, ante la profundidad revolucionaria de las transformaciones de fondo emprendidas por el Gobierno Popular, el dilema inmediato es el de la preservación y el avance consecuente de dichas transformaciones o el de su derrota a manos de la contrarrevolución.

Por lo demás, no debe olvidarse que el papel revolucionario de la clase obrera surge de su intervención en el proceso productivo. Allí se decide la suerte de todo. En la época del imperialismo y del paso de la humanidad del capitalismo al socialismo y al comunismo, ninguna revolución es tal si no se propone y no consigue alterar substancialmente las condiciones en que la clase obrera participa en la actividad económica. Naturalmente, no basta con eso, y los cambios deben irse expresando correlativamente en todas las demás esferas; pero el establecimiento de un determinado Gobierno en un país no podría calificarse de revolucionario en caso que no traiga consigo, a la vez, la modificación del papel de la clase obrera en la producción. Por ejemplo, la insurrección boliviana que llevó al poder los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario se tradujo en la nacionalización del estaño y su transferencia al Estado, pero la fraseología sobre el “conjunto obrero”, el desborde de consignas trotskistas y las “milicias armadas” ocultaban el hecho concreto de que no se trazaron planes económicos que realmente traspasasen la antigua dictadura en sus empresas de los barones del estaño a una dirección democrática de los trabajadores y, en consecuencia, bajo la administración burocrático-política de un Estado bajo un comando burgués y pequeñoburgués, se desarrollaron múltiples formas de corrupción, fue regalando posiciones al capitalismo y el proceso se hizo reversible. En el fondo, lo sucedido en Bolivia corresponde, por lo demás, al carácter de clase que tuvo, como gobierno de la burguesía y pequeñoburguesía, el del Movimiento Nacionalista Revolucionario.

Algunos rasgos indispensables en una gestión revolucionaria

La nacionalización de la gran minería del cobre, el control estatal de la banca, la formación de un área social de la economía y la Reforma Agraria, representan, en primer término, gigantescas transferencias de propiedad sobre bienes de producción que en Chile son decisivos en toda la actividad económica. Aunque esto es de una extraordinaria importancia y ha significado un golpe demoledor a las posiciones en nuestro país del imperialismo norteamericano,

de la oligarquía financiera interna y de los terratenientes, lo cierto es que los resultados de tales medidas dependerán de que no se limiten al reemplazo de unos propietarios por otros, sino que impliquen cambios en las relaciones de producción.

La acentuación del capitalismo de Estado puede asumir una connotación antimperialista y, en general, antimonopolista, especialmente por la vía de las nacionalizaciones, no obstante lo cual difícilmente es susceptible de consolidarse con ese carácter en las actuales condiciones de internacionalización del peso financiero, económico, político y militar del imperialismo en la esfera de los países capitalistas. Limitarse al capitalismo de Estado conduce, se quiera o no, a la inestabilidad y al peligro real de retrocesos hasta de la peor especie.

Para que se afiancen transformaciones revolucionarias como las emprendidas en Chile por el Gobierno Popular, deben asumir las cualidades de un gran movimiento social, profundo, y en el que la clase obrera entre a dirigir realmente la economía. Esto significa una auténtica democratización de las actividades productivas. Son suicidas las tentaciones a obtener dividendos proselitistas en los marcos de los viejos procedimientos de un Estado burocrático. Hay que abrir paso a la participación en escala de masas, sometiéndose a estas nuevas reglas del juego.

No se puede conseguirlo sin modificar de raíz los métodos de gestión económica, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba.

Uno de los rasgos esenciales de una dirección revolucionaria de la economía debe ser, indispensablemente, su carácter científico. Sirven a la contrarrevolución las decisiones subjetivas y voluntaristas de los que pretendan hacer a un lado las leyes económicas o “derogarlas” de acuerdo a sus deseos. Otro de esos rasgos esenciales de una dirección revolucionaria tiene que ser, también indispensablemente, respetar a las masas y trabajar esmeradamente con ellas.

De lo que se trata es de actuar con las masas para aprovechar las leyes económicas a fin de desarrollar el proceso revolucionario.

No hay participación si no hay plan

Cuando se injerta en los mecanismos capitalistas tradicionales la intervención de autoridades que son opuestas a ellos, debe resolverse sin lugar a equívocos si van a conducirse de acuerdo a los procedimientos tradicionales en dichos mecanismos o si van a modificarlos. En el primer caso, lo que conseguirán será anarquizarlos en gran medida, perturbando la actividad económica. En el segundo caso, o sea, operando con los nuevos métodos, se manifestará la superioridad de éstos y se elevará la actividad económica.

Ciertos interventores de empresas que, al reemplazar a los anteriores gerentes capitalistas, se adaptan, de hecho, a sus procedimientos, revistiéndolos sólo de denominaciones y propósitos diferentes, son como un cochero que pretendiera dirigir un camión con las riendas, la huasca y los silbidos. Lo cierto es que de nada les servirá recurrir ni siquiera a las escuelas. Deben resignarse a entender que manejan algo cualitativamente diferente. La empresa en manos de los gerentes capitalistas se rige por la dictadura burguesa, mientras que la misma empresa, al incorporarse al área social de la economía bajo el Gobierno Popular, tiene que responder a una disciplina democrática, rigurosa, pero consciente.

Los gerentes capitalistas se proponen, sistemáticamente, ocultar a los trabajadores las cifras concretas de producción y las condiciones financieras. Eso les parece indispensable para facilitar su explotación. A la inversa, el paso de una empresa al área social o al área mixta de la economía tiene que notarse, porque todos los datos se colocan, limpiamente, a disposición de los trabajadores, a fin de que sepan a qué atenerse. Pero proceden muy mal los que, orientándose en el fondo por el mismo afán de misterio de los gerentes capitalistas y con desprecio por las masas, pretenden reemplazar los planes científicos de producción por chapucerías, como son las cifras improvisadas de metas que se indican sin examinar las disponibilidades de materias primas, las materias auxiliares, los combustibles, las necesidades del mercado y, a veces, ni siquiera la real capacidad instalada y sin ningún debate previo en que se escuchen las sugerencias de los trabajadores. Es evidente que las divagaciones de ese tipo, aunque contengan cifras y se denominen pomposamente “planes”, no pasan de ser algo así como planficciones y no expresan cambios auténticos en la dirección de clase.

Cuando se sigue operando al viejo estilo, los obreros no experimentan cambios reales en su ubicación en las empresas, no se sienten liberados sino de una manera abstracta y poco comprensible y, por lo mismo, tienden a continuar planteando, también, sus reivindicaciones de la manera tradicional, a través de los pliegos de peticiones meramente economicistas, de las huelgas y, en general, de las luchas que manifiestan su antagonismo con la administración.

En tales circunstancias, la actitud de los comunistas de encarar las reivindicaciones de una manera diferente, si no encuentra asidero en las relaciones reales entre administradores y trabajadores, puede no ser entendida por muchos obreros, empleados y técnicos y llega, a veces, a aislar momentáneamente a nuestros compañeros, separándolos de algunos sectores de las masas. Por lo tanto, se hace indispensable que, en vez de idealizar la situación, las células y los comités de empresa del partido tengan debidamente en cuenta cuando la mala dirección económica, ejercida en forma burocrática y tradicional, y manifestada en arbitrariedades, impide desarrollar los nuevos cauces en que la producción se conjugue con la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores, frente a lo cual no puede impedirse que éstos traten de conquistar dichas reivindicaciones enfrentándose, igual que antes, con los responsables de la dirección de la empresa y con un Estado que se les presenta como el sucesor del viejo patrón. Sin caer en las posiciones oportunistas de los que lanzan el tejo pasado, los comunistas deben sostener las reivindicaciones de los trabajadores, en lucha contra los defectos y por una auténtica participación.

Si no se aprecian debidamente estas realidades, penosas pero efectivas, se corre el riesgo de que muchos trabajadores no comprendan la política de los comunistas y suelen suponer que obedecería a propósitos oportunistas, derivados de estar participando en el Gobierno. El peligro de que la vanguardia se aisle de las masas de la clase revolucionaria amenazaría, entonces, con socavar todo el proceso.

Otro tanto hay que decir sobre las frustraciones que derivan del funcionamiento de los organismos de participación de determinadas empresas como comisiones decorativas, sin un poder real. Con mayor razón cuando ciertos administradores pretenden que estos organismos de participación y los sindicatos se encarguen sólo de tareas de fiscalización del proceso productivo que antes correspondían a los capataces con la colaboración de los elementos amarillos.

Barbaridades que denotan incomprensiones tan supinas del verdadero carácter de la participación, echa agua al molino de la desconfianza y dan pábulo para que se dé oído a las intrigas de los agentes del enemigo de clase.

La existencia de estas deformaciones tiene que enfrentarse resueltamente. Los comunistas no pueden cruzarse de brazos ante ellas. La verdad es que para una efectiva participación se hace indispensable que existan planes económicos rigurosos, y se vinculen orgánicamente la producción y los salarios y demás beneficios sociales. Es tarea de los comunistas de cada empresa esclarecerlo ante los aliados, unir a los militantes de la Unidad Popular y, con la masa de los trabajadores, luchar hasta conseguir que el Programa Básico de Gobierno se aplique incondicionalmente.

Convenios colectivos de producción y salarios

La Conferencia Nacional del partido realizada del 30 de septiembre al 3 de octubre del año pasado, en el llamamiento que aprobó, al convocar a “un esfuerzo supremo, trabajar cada vez mejor, ponerse en pie de guerra”, indicando que “cada patriota tiene un puesto de responsabilidad en la lucha por la libertad y la independencia de Chile, por la defensa del Gobierno Popular, por el desarrollo de las transformaciones sociales dentro del Estado de Derecho, por la erradicación en nuestra patria del imperialismo y de la oligarquía”, planteó como una de las tareas claves la de “hacer efectiva sin demora la participación de los trabajadores en la dirección de todas las empresas de las áreas social y mixta de la economía, en los servicios públicos y en las reparticiones del Estado”.

En el Informe rendido a esa Conferencia, en nombre de la Comisión Política, expresamos: “Lo fundamental para que la sedición pierda su principal base de sustentación y se asegure el desarrollo democrático es resolver a favor del pueblo la pugna con la oligarquía financiera, lo que exige conformar orgánicamente el sector social de la economía, delimitar su área a fin de evitar temores injustificados de los industriales medios y pequeños, y, dentro de los sectores social y mixto, romper los esquemas del antiguo funcionamiento de las empresas en las condiciones de la explotación capitalista y eliminar de raíz las formas burocráticas de dirección. De lo que se trata es de crear algo nuevo, en que todo funcione sobre la base de la participación democrática, con una férrea disciplina social de los trabajadores en el conjunto del proceso y en cada una de sus instancias, haciendo realidad la tesis del Programa Básico de la Unidad Popular de que “las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente”. No está planteada una mera participación formal, sino establece una dirección eficiente, racionalizada, moderna y avanzada, en una palabra, una dirección revolucionaria del área social de la economía, con responsabilidades individuales, mandos eficaces, intervención democrática de los trabajadores en las decisiones generales, disciplina social y una nueva estructura del proceso mismo de trabajo, acorde con las nuevas relaciones de producción y de propiedad. Ello debe conducir, por ejemplo, a una conexión coherente, dinámica y directa entre la producción, la productividad, la rentabilidad de las empresas del área social, su entrega de excedentes y los salarios e incentivos materiales al trabajo. Como norma, toda empresa del área social deberá autofinanciarse y generar excedentes destinados al conjunto de la economía nacional y al Estado”.

El 9 de febrero de este año dio a conocer la Unidad Popular la denominada “Declaración de El Arrayán”, fruto de un prolongado análisis conjunto de la situación del país por todos los partidos que la integramos, con intervención del propio Presidente de la República. La “Declaración de El Arrayán” fijó la siguiente meta, obligatoria y que constituye un compromiso ante el pueblo de Chile: “Se necesita para el área social de la economía una dirección eficiente, una organización racional, un desarrollo planificado armónico y riguroso, una consideración de dicho plan desde la base y una administración que abra paso a la participación responsable de todos los estamentos de los trabajadores en todos los niveles y asegure mayores oportunidades a los técnicos que laboran en ella. Las empresas del área social, trabajando planificadamente, deben alcanzar niveles óptimos de productividad y rentabilidad”.

El 15 de marzo último, exponiendo el pensamiento de la Comisión Política en el Informe a la Sesión Plenaria de esta fecha del Comité Central de nuestro partido, dijimos: “La batalla de la producción no es tal sin planes concretos, metas precisas y una auténtica participación de los trabajadores. Cuando hablamos de planes, no nos referimos a los cálculos de supuestos y la formulación de previsiones en los términos acostumbrados en las condiciones del capitalismo. Proponemos planes que comprendan tareas determinadas, cuantificadas en forma estricta, respecto de la producción, la comercialización, las inversiones, las finanzas, la mano de obra, la productividad del trabajo, el promedio de remuneraciones, las exportaciones, las importaciones, las medidas de alcances sociales y culturales y la destinación de los excedentes. Sin planes de esa especie, no se puede concebir una estabilización que promueva el aumento de la productividad y asegure la rentabilidad de las empresas del área social. Formular y cumplir estos planes no puede concebirse como algo burocrático, sino como un proceso de elaboración en que los índices orientadores, preparados con criterios científicos, sean la base para decisiones adoptadas con la más amplia participación de los trabajadores y distribuidas sección por sección y mes a mes, de modo que las tareas sean comprensibles para todo obrero y técnico y se fiscalicen por ellos mismos. Los Consejos de Administración debieran rendir cuentas mensuales a las asambleas de los trabajadores sobre la marcha de los planes. En lugar de la antigua dictadura de los patrones en las fábricas y del sistema consiguiente de pliegos de peticiones, hay que abrir paso en el área social y en la mixta a convenios democráticos de planes de producción y de remuneraciones, en que participen los sindicatos como expresión de la clase obrera en un nuevo papel de fuerza dirigente del país, con responsabilidad revolucionaria y patriótica. La anarquía capitalista, el manejo voluntarista de las empresas del área social por buenos o malos interventores o gerentes, el mantenimiento de los viejos sistemas de administración, son fuentes de compadrazgos, de amiguismos, de proselitismos sectarios, de cuoteos y parcelaciones, de derroches y de ineficiencias. Nada de eso se resuelve con organismos burocráticos, como el “Comité Sectorial Textil”, cuya incapacidad se puso una vez más de manifiesto al no saber programar siquiera el abastecimiento oportuno de uniformes escolares. Además, la subsistencia de las viejas prácticas en las empresas desalienta a los obreros revolucionarios y crea el caldo de cultivo favorable para que proliferen las tendencias de un economicismo oportunista y la demagogia de los caudillos de ultraderecha y de ultraizquierda”.

Con alarma, debemos observar que hasta la fecha no se ha conseguido que estas formulaciones, tanto las de la Unidad Popular en su conjunto como las coincidentes de nuestro partido, se apliquen consecuentemente en las nuevas empresas incorporadas al área social y en las antiguas, como Ferrocarriles del Estado, LAN, Empresa Portuaria, Empresa Marítima, ETC, IANSA, ENDESA, Chilectra, C.A.P., ENAMI, Empresa Nacional del Petróleo y todas las filiales de la CORFO.

La participación revolucionaria, a diferencia de la participación reformista, tiene que manifestarse en toda la línea, comenzando por modificar los reglamentos de fábricas, de talleres o de minas, derogando los anteriores y confeccionando otros con el acuerdo democrático de los trabajadores. La disciplina basada en la explotación capitalista hay que reemplazarla por una disciplina consciente, revolucionaria, colectiva.

Una participación revolucionaria es real si opera en el terreno, antes que todo, de los convenios de producción y de salarios, basados estrictamente en un plan económico realista, que se proponga metas muy claras de aumento de la productividad y de reproducción ampliada, que haya sido discutido sección por sección, que se elabore democráticamente y que comprometa a cada obrero, empleado y técnico. Todo trabajador debe saber lo que va a hacer y cómo va en la parada, adquiriendo conciencia de las diferentes rentabilidades de las empresas y que ellas no son entes aislados sino partes de un conjunto nacional y entendiendo, con hechos, que ahora es integrante de la dirección de la sociedad y no un explotado. Eso no depende de los discursos de los personeros del Gobierno o de los interventores, sino de que exista un plan para el cual se le consultase oportunamente, un convenio de producción y salarios aprobado en votación secreta, organismos de administración que hayan contribuido a integrar cifras diarias de rendimiento sujetas a su examen y asambleas mensuales en que fiscalice lo que se está haciendo, su aporte y sus beneficios. Así llega a respaldar con convencimiento la necesidad de las jerarquías, de la dirección democrática central, de la disciplina y de las responsabilidades individuales de los ministros, directores de servicios, gerentes, interventores, administradores y jefes de secciones.

La mayor representatividad la tiene el sindicato

El proceso será revolucionario y, por lo tanto, será a la vez irreversible, únicamente si cada obrero interviene en él como miembro de la clase que asume la dirección de la sociedad y lo experimenta en carne propia, en su nuevo sistema de salarios, en su participación real, en una democratización del sistema de trabajo que rompa implacablemente las trabas burocráticas y sectarias y los resabios gerenciales.

Uno de los grandes temas de tal participación es el de los excedentes y su distribución para incrementar el fondo de salarios, financiar las inversiones y aportar a los gastos generales del Estado. Son contrarrevolucionarios los criterios oportunistas según los cuales podría tolerarse que no hubiese excedentes y que empresas del área social se conviertan en cargas onerosas para la sociedad. Ello implica que los excedentes, que antes acrecentaban las rentas de los capitalistas, ahora sean quemados en aras de la ineficiencia, de la

insensibilidad pequeñoburguesa y de múltiples formas de corrupción burguesa. Cualquier grado de conciliación con esos vicios conduce a que se sacrifique al conjunto de la clase obrera y del pueblo, porque la no entrega de excedentes de las empresas que son fundamentales en la economía nacional se traduce en falta de recursos para viviendas, urbanización, salud, educación, cultura, seguridad y demás necesidades colectivas, además de estagnar el desarrollo de las propias actividades productivas, junto con promover la inflación monetaria. Al respecto, la ley suprema está indicada en el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, que dispone perentoriamente: "Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecúen el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, controlen y redistribuyan el crédito y eviten la usura en el comercio del dinero, racionalicen la distribución y el comercio, estabilicen los precios, impidan que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas incentive el alza de los precios. La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico, expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas".

Creemos que ha planteado en sus justos términos este asunto el editorial del número 14, correspondiente a octubre de 1971, de la revista *Finanzas Públicas*, publicada por la Dirección de Presupuesto, al vincular el carácter que asuman la construcción de bases para el socialismo y la organización política, social y cultural del país, al uso que hoy hagamos del excedente y sostener: "El curso futuro del proceso de cambios que vive el país y las características específicas y concretas que asuma el socialismo chileno estarán, de acuerdo a estas consideraciones, estrechamente vinculadas al nivel, composición, formas de apropiación y utilización del excedente económico".

De otro lado, si el área social pasó ya a ser decisiva en la economía nacional y está acompañada por una amplia e importante área mixta, asume una nueva dimensión la participación obrera en el área privada. En otras condiciones, bajo la dominación del aparato estatal por la oligarquía financiera y las empresas imperialistas, en dicha participación podían prevalecer los peligros de incurrir en colaboración de clases, atentando contra la independencia del proletariado. Hoy estamos ante una realidad diferente y tenemos la obligación, en las nuevas circunstancias, de no ponerle cortapisas tampoco a esa participación, sino desarrollarla, reconsiderando nuestros criterios de acuerdo a los intereses permanentes de la clase obrera y al desenvolvimiento de la revolución chilena.

En todas las áreas de la economía, los instrumentos naturales y normales de la representación de los trabajadores y, por lo tanto, de la participación, son históricamente, los sindicatos. Eso corresponde, aún con mayor razón en un país como Chile, que cuenta con tan ricas tradiciones de unidad sindical.

Una de las dificultades con que ha tropezado hasta ahora la participación deriva de que los mecanismos contemplados en el Convenio CUT-Gobierno consideran por separado la actividad de los sindicatos y de los organismos de la participación propiamente tal. De ello han partido, en la práctica, determinados conflictos y diferencias artificiales y, a veces, hasta cierto grado de

antagonismos entre los dirigentes sindicales y los trabajadores elegidos para integrar Consejo de Administración.

Algunos antiguos cuadros sindicales suelen tender, por inclinación proveniente de su anterior experiencia en la lucha de clases, a darle a la participación un estilo más bien reivindicacionista estrecho y economicista. Esto no puede sorprendernos; corresponde a una realidad objetiva y sólo se podrá corregir en la medida en que esos dirigentes sindicales se adentren, también, en los problemas de la producción y en todas las nuevas tareas de clase obrera.

No es posible corregir de una plumada la cualidad entre los sindicatos y los organismos de participación. En la práctica, el asunto presenta más de un tropiezo y es complejo. En todo caso, los comunistas debemos orientarnos a que haya una representación unitaria de los trabajadores y los sindicatos desempeñen un rol superior.

El asunto es que la clase obrera llegue a ser dueña de los medios de producción y deje, por lo tanto, de ser explotada. Ello sólo es posible, en las condiciones de la lucha de clases contemporáneas, mediante la propiedad estatal de los medios de producción fundamentales, sobre la base de un Estado de nuevo tipo, al servicio del pueblo, o sea, plenamente democrático y socialista. Lenin advirtió sobre la necesidad imperiosa, en un proceso de esta especie, de la coordinación y de la planificación, así como de la centralización nacional de la dirección operativa económica. La quimera anarquista de una propiedad directa de las fábricas, las minas y los bancos asumida por los trabajadores de cada empresa, por consejos obreros o por consejos o congreso de productores, se transformó hace tiempo, en cualquier país, en una consigna revisionista de Derecha enarbolada por sectores oportunistas contra el socialismo, especialmente cuando la revolución del actual desarrollo de la producción la convierte, de más en más, en un absurdo. Por lo mismo, las formas cooperativas de propiedad, las empresas mixtas, el área privada de propiedad capitalista y aquella otra área privada integrada por “empresas de trabajadores”, sólo caben, en la transición al socialismo, como esferas importantes, pero complementarias. Ello exige que el área social de propiedad estatal, constituida en el motor de la economía, se desenvuelva planificadamente y con una real participación de los trabajadores, adquiriendo su propio dinamismo, que requiere suscitar el entusiasmo, las iniciativas y la emulación de las masas. En Chile ya comienza a manifestarse esa nueva actitud. Lo demuestran las proezas de la juventud en los trabajos de verano, las jornadas de trabajo voluntario y el trabajo voluntario en las empresas del área social, en algunos servicios públicos y en innumerables poblaciones, como igualmente, las iniciativas creadoras que se observan en Textil Progreso y en otras partes.

Las alianzas de clases

Chile se ha dado un Gobierno Popular correspondiente a una democracia avanzada que asegura condiciones favorables a la lucha por el socialismo. En esta democracia avanzada y con este Gobierno Popular, para que la clase obrera desempeñe su papel revolucionario se requiere una política certera, muy clara y movilizadora, de alianzas suyas con las masas populares de la ciudad y del campo y con la pequeñoburguesía y la burguesía pequeña y me-

dia, para aislar al imperialismo, a los terratenientes y a la oligarquía financiera.

El Gobierno Popular es la resultante de la política patriótica de vinculación del proceso revolucionario con el desarrollo democrático, en el curso de cuya aplicación la clase obrera, guiándose por las enseñanzas del leninismo, tomó en sus manos las reivindicaciones legítimas de todas las clases y capas sociales antimperialistas y antioligárquicas. Los enemigos tienen presente que esta correlación les perjudica y, por eso, se proponen reducir la base social de sustentación del Gobierno Popular y aislar a la clase obrera. Aprovechan cualquier concesión al oportunismo ultraizquierdista, hacen resaltar la fraseología revolucionaria revestida de formulaciones antidemocráticas, sacan dividendos de todo lo que indique en los hechos a algún desprecio de gente de izquierda por los problemas reales de las masas populares de la ciudad o del campo, se interesan por el socavamiento de la autoridad gubernativa, se refocilan con las tomas indiscriminadas que atentan contra los derechos de los pequeños y medianos propietarios, arman escándalo con las arbitrariedades en que incurren a veces unos u otros funcionarios. Todas estas trasgresiones al Programa de la Unidad Popular ayudan a los contrarrevolucionarios a la formación de una plataforma con alcances de masas para el fascismo.

Se han considerado ampliamente en el seno de la Unidad Popular las consecuencias de estos defectos de conducción y de la tolerancia con el oportunismo en algunos niveles de la aplicación de la reforma agraria. Mientras inmensos latifundios, como el de Guailah en Lonquimay, siguen en pie, constantemente se afectan pequeños predios. Los campesinos se indignan por el derroche de recursos fiscales en algunos servicios agropecuarios, que ocurren a pesar que se desatiendan sus problemas y la producción. Los acuerdos adoptados sobre reestructuración del sector público agrícola, se proponen una corrección rápida cuya orientación fundamental debe ser que se hagan las cosas con los campesinos, enfocando la reforma agraria con el criterio de alianza obrero-campesina. En cuanto a los sectores no afectados por la actual etapa de la reforma agraria, debe llegarse con ellos a acuerdos concretos de producción, asegurando su estabilidad y ascenso económico en condiciones que a la vez, garanticen los derechos de los asalariados agrícolas y de los inquilinos, medieros, arrendatarios y chacareros.

Lamentablemente, la indisciplina y el voluntarismo con que en materia agraria se ha trasgredido el Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, enajenándonos los ánimos de grandes masas de campesinos y de los agricultores medios, también se observan respecto de la industria y del comercio. Esto brinda a los monopolistas el apoyo de una gran masa de burguesía pequeña y mediana y hasta de un amplio porcentaje de la pequeñoburguesía e, incluso, de empleados y funcionarios o profesionales, médicos, abogados e ingenieros. La confusión existente en algunos rangos de los propios personeros del Gobierno sobre las áreas de la economía, tiene efectos perniciosos.

El Programa Básico del Gobierno precisa que el área de propiedad social sólo se constituirá con las siguientes actividades: "1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; 2) el sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros; 3) el comercio exterior; 4) las grandes empresas y monopolios de distribución; 5) los monopolios industriales

estratégicos; 6) en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel". Las tomas de pequeñas y medianas industrias y últimamente en Valparaíso, hasta de un restaurante, así como de granjas avícolas y otros establecimientos de pequeño volumen, con el planteamiento de su "estatización", ha sido una ayuda inmensa a la defensa de los intereses de algunos grandes monopolios que hasta hora permanecen inmunes.

Sergio Ramos formula una observación muy certera, en su libro "Chile, ¿una economía en transición?", al señalar: "En una economía como la chilena, en que existe un número tan elevado de pequeños y medianos productores capitalistas, sometidos a la explotación y dominación de los grandes monopolios, se generan al menos dos condiciones muy importantes de tener en cuenta: en primer lugar, desde el punto de vista de sus intereses objetivos en cuanto capitalistas, la eliminación de la concentración monopólica privada y la creación de un nuevo dinamismo del crecimiento económico, les abre condiciones nuevas mucho más favorables para su acción, toda vez que uno de los objetivos centrales del nuevo sistema deberá ser la elevación rápida y permanente de la producción y de la productividad. En segundo lugar, desde el punto de vista más general de la economía en su conjunto, la nueva articulación de la producción y la distribución en torno a un sector estatal dominante y las necesidades de elevar el ritmo de crecimiento económico necesitan la mantención de la operación del sector privado de la economía, cuya vastedad y complejidad no es posible reemplazar bruscamente por empresas socializadas (con todos sus requisitos de cuadros técnicos, organización nueva de la producción, etc.), tanto más cuanto que el desarrollo del proceso productivo en esos sectores es insuficiente para asegurar una socialización efectiva de ellos".

A la clase obrera le interesa vitalmente contar con aliados en escala social. Su hegemonía no puede concebirse si permite que se la aisle. han causado un mal tremendo los que, con apresuramiento oportunista, han estimado más fácil proponerse la incorporación si ton ni son y a la guerrucha de cualquier empresa al área social, en vez de sostener una acción sindical, social, política, económica y administrativa coordinada y eficiente que asegure los derechos de los trabajadores, atienda sus reivindicaciones y gane a los empresarios para desarrollar la producción, construyendo las actividades especulativas y de sabotaje.

En un artículo escrito en marzo de 1971 con el título: "El proceso revolucionario chileno y la violencia física", que publicó en la edición de abril de este año en la Revista de la Universidad Técnica del Estado, acotaba Joan Garcés: "No son los ex banqueros o ex grandes industriales los que saldrán a la calle a enfrentar al Gobierno Popular. Se trata, precisamente, de aislarlos para que no logren hacer salir en su defensa a los pequeños comerciantes, empleados o agricultores pequeños". Y, en otra parte del mismo artículo, hacía presente la magnitud de este peligro, explicando: "Esta pequeña burguesía, castigada por un régimen capitalista frustrado en su dinámica, en otras cir-

cunstancias históricas ha sido la base de apoyo de los movimientos fascistas. En Chile, por el contrario, la configuración social y política en virtud de la cual ha llegado al poder la Unidad Popular ha tenido por resultado que no se encuentran reunidos los factores que pudieran propiciar el surgimiento de tendencias fascistas en la pequeña burguesía". ¿Podría hoy decirse exactamente lo mismo?

El método más eficaz de que han dispuesto los imperialistas y los monopolistas internos y terratenientes para socavar en Chile las posiciones de la clase obrera y del Gobierno Popular ha consistido en alentar toda manifestación de política ultraizquierdista. Por esta vía se proponen el aislamiento de la clase obrera; pero, no sólo eso, sino además, destruirla internamente. En el artículo citado de Joan Garcés, recordaba ese autor una experiencia histórica dramática: "Piénsese sólo por un momento, en qué medida contribuyó a la impotencia e ineficacia del Gobierno republicano español el hecho de que tuviese a más de dos millones de trabajadores tras las banderas anarquistas, en una situación de disidencia y escepticismo respecto de la política del Gobierno, que ayudó a debilitarlo decisivamente cuando debió hacer frente a la insurrección armada de la contrarrevolución". Y, ¿no es ésta la misma esperanza que deposita la contrarrevolución chilena en la difusión por la ultraizquierda del veneno anticomunista?

Afianzar una autoridad revolucionaria

La invariable línea de clase con que Lenin enfocó siempre todos los asuntos lo hizo denunciar constantemente el enlace de las posiciones anarquistas y ultraizquierdistas con las posiciones oportunistas. Ya en 1905, en su obra *Dos Tácticas de la Socialdemocracia en la Revolución Democrática*, al rebatir la tesis de los mencheviques que se oponían a una posible participación del partido obrero en un gobierno provisional que surgiese de la caída del zarismo, hizo ver que, bajo la apariencia de un purismo doctrinarista, de una preocupación por no contaminarse con la burguesía y de un afán de reservarse para las tareas socialistas, haciendo concesiones a la fraseología anarquista, los oportunistas trataban en verdad de dejar libre el campo a los políticos burgueses. Lo expresó en estos términos: "He aquí el quid de la cuestión. He aquí donde las ideas anarquistas se entretajan (como les ocurre continuamente también a los bernsteinianos de Europa occidental) con el más puro oportunismo". No es de extrañar que, de nuevo, en nuestra experiencia, ciertos círculos burgueses con prejuicios respecto de los comunistas den apoyo logístico al MIR, lo apoyan en múltiples formas, le faciliten publicidad y le otorguen padrinazgo, como se ha observado característicamente, por ejemplo, en Concepción.

En los años de lucha por el poder soviético y por su defensa, Lenin jamás condescendió con las declamaciones de los que ven en cada batalla política "la lucha final". Con realismo descarnado, encarnó siempre las dificultades tal como se presentaban, para superarlas salvando el proceso revolucionario. Es así como en 1921 formuló la Nueva Política Económica. En su informe sobre *La N.E.P. y los objetivos de la educación política*, el 19 de octubre de 1921, ante el 2° Congreso de los organismos de educación política de Rusia, la explicó en los siguientes términos: "Y, en realidad, nuestra nueva

política económica tiene su raíz en el hecho de haber sufrido una derrota en este punto; ahora nos dedicaremos a organizar un retroceso estratégico como quien dice: mientras no nos hayan vencido definitivamente, retrocedamos y reconstruyamos todo de nuevo, pero con mayor solidez. A los comunistas no nos puede caber la menor duda de que hemos sufrido una derrota muy dura en el frente económico; no podemos dudarlo, ya que planteamos conscientemente la cuestión de una política económica nueva. Y desde luego, es inevitable que ciertas personas se dejen dominar aquí por un estado de ánimo depresivo, casi de pánico, con motivo del retroceso. Es algo que no se puede evitar. Este período de pánico lo sufrió también alguna gente cada vez que el victorioso Ejército Rojo tuvo que retroceder ante el enemigo en uno u otro frente. Pero siempre ocurrió –en el frente de Kolchack, como en el de Denikin, Ludénich, Wrangel y en el polaco–, siempre ocurrió que después de una buena paliza, y a veces de más de una, justificáramos el refrán: “Un escarmentado vale por dos. Después de las palizas comenzábamos a avanzar lenta, sistemática y prudentemente”.

En este mismo trabajo, Lenin subrayó que los éxitos económicos requieren disciplina. Recomendó: “Discute, pero gobierna sin la menor vacilación; y gobierna con mayor firmeza de lo que lo hizo el capitalista antes que tú. De lo contrario, no podrás derrotarlo. Recuerda que es necesario gobernar con mayor firmeza y rigor que antes”. Insistió: “En esto no hay elección posible ni puede haberla; tampoco tiene que existir sentimentalismo de ninguna clase. El sentimentalismo en la guerra es un crimen no menor que el egoísmo. Quien en estos momentos olvida la disciplina y el orden, deja que el enemigo entre en su medio”. Exigió que, en vez de explicaciones, se obtuvieran resultados económicos palpables: “En su oportunidad los manifiestos, decretos y declaraciones fueron necesarios. Ya son suficientes. En un momento estas cosas fueron indispensables, para explicar al pueblo qué cosas nuevas e insólitas queríamos edificar y cómo hacerlo. ¿Pero es posible que prosigamos explicándole qué queremos edificar? ¡No, no es posible! En tal caso, el obrero más simple se burlaría de nosotros. Y nos diría: “Basta de explicar cómo quieren edificar: demuéstranos en la práctica cómo sabes hacerlo. ¡Y si no lo sabes, nuestros caminos son diferentes; vete al diablo!”. Y tendría razón”.

Nuestra situación es diferente a la que vivía la Unión Soviética en 1921, cuando Lenin, en un golpe de timón, consideró que lo primordial era defender el gobierno soviético y sostener el poder obrero y campesino, por lo cual aplicó la NEP. Sería absurdo comparar circunstancias históricas tan disímiles como esa y la del Chile de 1972. Incurriríamos en una torpeza si copiásemos las medidas correspondientes a condiciones muy diversas. Pero, la actitud leninista es fuente de profundas lecciones, por sobre las modalidades distintas.

Lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que la correlación de fuerzas ha sido afectada, en contra de la clase obrera y del Gobierno Popular, por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen trasgresiones al programa de la Unidad Popular. Cabe, entonces, poner el acento en la defensa del Gobierno Popular, en su mantenimiento y en la continuidad de su obra. Sería funesto seguir ampliando el número de los enemigos y, por el contrario, deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a algunas capas y determinados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos.

En estas condiciones, en nada ayuda al proceso revolucionario poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro cuando haya condiciones más desarrolladas. Estos son asuntos que, en su momento, deberán estudiarse mejor y abordarse adecuadamente. No obstante, ahora pueden contribuir a que despierten suspicacias, incomprensiones y resistencias innecesarias. Antes que bosquejar la etapa siguiente a la actual de la reforma agraria o de hacer poner las barbas en remojo a nuevas empresas capitalistas, lo que procede, en primer término es aprovechar la incorporación al área reformada del 45% o 50% de la tierra, el inmenso poder económico de la gran minería del cobre y del acero, la irradiación financiera de la banca estatizada y de las empresas ya expropiadas o intervenidas y los resortes de que dispone el Gobierno, para establecer una real dirección obrera y popular de todo esto, que se traduzca en una autoridad efectiva, bien ejercida, eficiente y creadora, de auténtica proyección revolucionaria. Sobre esta base, podemos y debemos completar la reforma agraria en los términos de la ley vigente e igualmente completar la constitución del área social de la economía en los marcos del Programa Básico de Gobierno, o sea, respecto de las grandes empresas de importancia estratégica. Ello requiere aislar a los sediciosos, afianzar el Gobierno, consolidar su obra y modificar en su favor la correlación de fuerza.

En las alianzas de clases del proletariado, una importancia decisiva reviste, así como la unidad de clase obrera con las masas populares rurales, o sea, la alianza obrero-campesina, la unidad de la clase obrera con las masas populares urbanas. Su expresión más relevante se manifiesta, orgánicamente, en las poblaciones populares, a través de las Juntas de Vecinos, y, con ellas, de las luchas de los pobladores. Se necesita ir mucho más adelantado en la articulación de un sistema de entrega de atribuciones a las Municipalidades y a las Juntas de Vecinos como órganos de poder popular en sus jurisdicciones y como bases de las Asambleas Provinciales futuras. Los Centros de Madres son instituciones de masas que están llamadas a constituirse cada vez más en depositarias de la participación directa de la mujer dueña de casa y pobladora en general en la solución de los problemas colectivos. Se necesitan cambios muy profundos en la manera de operar los servicios de vivienda y urbanismo, de manera que las reivindicaciones de las familias sin casa y de los pobladores, sean atendidas sin paternalismo, rompiendo las trabas burocráticas y a base de planes y convenios específicos con ellos. La organización de masas todavía está en embrión, ya que aún en la mayoría de las comunas no se han formado las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos y de Centros de Madres y no se cuenta con las Federaciones Provinciales y menos con las Confederaciones Nacionales de dichas entidades. En su reemplazo, siguen pesando como verdaderas lápidas los viejos servicios burocráticos de estructura burguesa, que debieran reestructurarse de manera de transferir muchas de sus funciones habitacionales y relativas a las organizaciones femeninas, a las instituciones creadas por las propias masas populares. Hay que llevar allí el aire renovador de la revolución.

Una creación del movimiento popular que surge pujante son las Juntas de Abastecimientos y Precios, en que participan las Juntas de Vecinos, los Centros de Madres, los sindicatos de los respectivos sectores y los comerciantes minoristas, para asegurar la distribución oportuna de las mercaderías de

primera necesidad, fiscalizar a los organismos estatales que realizan o dirigen la comercialización, descubrir los acaparamientos, controlar los precios y combatir toda manifestación de especulación y de agio.

La participación obrera y popular es la enjundia de un gobierno popular, auténticamente revolucionario. Hay que abrirle paso en todos los terrenos, sistemáticamente, sin sectarismos ni exclusiones, hasta dar vuelta el sistema administrativo, de manera de aprovechar todo lo positivo de los antiguos servicios, pero reordenándolos y democratizándolos, elevando la personalidad de sus obreros y empleados, dándoles oportunidad de manifestar sus iniciativas creadoras, desmontando sin contemplaciones los privilegios y haciendo intervenir a los usuarios, al pueblo al que deben atender. Esta democratización no puede entenderse, porque sería suicida, desplazando de sus funciones directivas y de su responsabilidad técnica a los médicos en el ámbito de la Salud, a los maestros en el de la Educación o a los ingenieros y arquitectos en el de la Vivienda, etcétera, sino integrando de manera dinámica a los profesionales.

Quizás si la esfera en que el Gobierno Popular tiene que mostrar de manera más viva su carácter revolucionario es en el desarrollo de una política para la juventud, con plena confianza en ella.

De otro lado, la revolución tiene tareas culturales de una magnitud inmensa y sin abordar las cuales no podría realizarse.

Lo decisivo, en todos los terrenos, es que la clase obrera vaya asumiendo, realmente y en forma orgánica, más y más funciones correspondientes a un papel dirigente de la economía y de la sociedad, a fin de que el proceso tome su orientación adecuada y siga profundizándose, como punto de partida para nuevos avances hacia el socialismo, perspectiva luminosa de nuestro pueblo.

Allí reside la clave del éxito del Gobierno Popular. Necesitamos que la clase obrera asuma, paso a paso, cada vez más, un papel dirigente efectivo, lo que no es posible sino sosteniendo el rumbo en los términos del Programa Básico de Gobierno y de las alianzas de clases que posibilitaron hacer Presidente de la República al compañero Salvador Allende.

Para que éste sea el rumbo, o sea, para que el movimiento popular no sufra derrotas sino que alcance éxitos, reviste suma importancia una conducción política homogénea, como la ha reclamado el Presidente Allende, y para la cual hay una base valiosa en los acuerdos de El Arrayán de la Unidad Popular. Uno de los pilares de tal conducción cohesionada tiene que ser el que obtengamos hacer más efectiva la unidad comunista-socialista, mediante un trabajo tesonero de entendimiento en la base y en la dirección. Todos los partidos aliados en la Unidad Popular tenemos la responsabilidad –el Partido Comunista junto con los partidos Socialista, Radical, Mapu, Api, Socialdemócrata e Izquierda Cristiana– de dar nuestros aportes para que a una conducción política homogénea corresponda, en la misma medida, una dirección gubernativa igualmente homogénea, de equipo, con una sola línea central y de alta calidad, que dé la sensación de una autoridad fuerte y vinculada en todo a las masas.

Jorge Texier (Partido Comunista): La transición al socialismo y el ultraizquierdismo

(Principios, mayo-junio 1972)

A medida que se multiplican las acciones y la difusión de las ideas de los diversos grupos de ultraizquierda, se pone aún más en evidencia el propósito común de todos ellos. Aparecen discrepando temporalmente en torno a situaciones en que se pone el juego el predominio de uno u otro, pero coinciden en los objetivos finales y en el enjuiciamiento de la situación política chilena. Plantean una alternativa diferente a la defendida por la Unidad Popular, intentan caracterizar al actual Gobierno como vacilante y reformista, pretenden convencer a las masas que ellos son los únicos que tienen una perspectiva revolucionaria, y que son la fuerza llamada a conducir al pueblo hacia el socialismo.

Pretensión anticomunista

El MIR es el grupo que expresa con más publicidad tales concepciones. Es el que hace más esfuerzos, además, para ganar a sectores de trabajadores hacia sus tesis. Primero, negó dogmáticamente uno de los caminos seguidos por el pueblo chileno para el acceso al poder político, planteando a las masas que ante ellas se abría la disyuntiva de colocarse en la barricada de los que harían la revolución con el fusil, “único método revolucionario”, o de conciliar con “el reformismo y el legalismo” de los comunistas. “Por medio de nuestras acciones comenzamos a ofrecer caminos revolucionarios, primero a los cuadros de la izquierda y luego a las masas”, decía el manifiesto lanzado por el MIR al pronunciarse en mayo de 1970 sobre las elecciones presidenciales que se avecinaban¹, mientras los comunistas impulsaban las tareas concretas de organización de la unidad del pueblo en la base, sus luchas contra los monopolios y el gobierno proimperialista, la propaganda y difusión del Programa de la Unidad Popular con su perspectiva del socialismo para Chile.

El MIR se autopresenta como la auténtica alternativa revolucionaria. Lo ha pretendido desde que agrupó a los primeros anticomunistas en torno a su llamado inicial. No oculta, sino más bien difunde su propósito. En un comentario de prensa² se habla de la “creciente influencia de la izquierda revolu-

¹ Suplemento a la edición N° 104 de “Punto Final”, 12 de mayo de 1970.

² “Punto Final” N° 136, 3 de agosto de 1971.

cionaria entre los campesinos, los pobladores y sectores de la clase obrera". Hablar de "izquierda revolucionaria" en un país como Chile, donde los auténticos organizadores de la clase obrera, campesinos y pobladores, mujeres y jóvenes, han sido comunistas y socialistas, es decir, partidos de base obrera, en un país como Chile, donde el Partido Comunista ha sido perseguido ferozmente por la oligarquía y el imperialismo, precisamente por mostrar a las masas un camino de lucha organizado, de unidad y de victoria, es simplemente pretender reemplazar a estos partidos obreros, dividir a los trabajadores y a las fuerzas de izquierda, sembrar la confusión ideológica, desprestigiar el marxismo-leninismo.

En la misma edición de la revista citada son defendidas las tesis de la ultraizquierda sosteniendo precisamente que "Punto Final" pertenece a una corriente revolucionaria latinoamericana, que se ha librado de traumas del pasado, y, agrega, que se basa en el marxismo-leninismo.

En esta ocasión no vamos a exponer todas las tesis del MIR y la ultraizquierda en general. Solamente deseamos mostrar la coincidencia de todos estos grupos en lo que les es fundamental, y en la afirmación de "Punto Final" se contienen los elementos precisos para caracterizar a los que hacen anticomunismo desde posiciones de "izquierda".

Es cierto que el término "izquierda" engloba a todos los sectores sociales y tendencias ideológicas que asumen la defensa de los trabajadores, del pueblo. Pero el MIR es una "izquierda revolucionaria", que "marca una nueva etapa en la lucha política y revolucionaria de Chile".³ Se declara marxista, a pesar que niega la esencia de la teoría que inspira al movimiento comunista creado por Marx, Engels y Lenin: su carácter de clase, su fidelidad a los intereses finales de la clase obrera. ¿Qué significado puede tener declararse corriente revolucionaria y agregar, además, latinoamericana, sino pretender que se trata de una fuerza nueva, independiente del movimiento revolucionario internacionalista cuya expresión política son los Partidos Comunistas? ¿Puede existir un movimiento latinoamericano diferente, por sus objetivos, por su carácter de clase, al movimiento obrero mundial? Solamente en la cabeza de los ultraizquierdistas, que siguen pretendiendo desplazar a la auténtica vanguardia de los trabajadores de su papel dirigente. ¿Qué pretenden al decir expresamente que "se han librado de traumas del pasado", sino tirar por la borda toda la experiencia acumulada por los comunistas, despremiar la teoría científica elaborada a la luz del desarrollo histórico concreto de la humanidad, reemplazar los métodos de lucha y los principios estratégicos y tácticos que han permitido crear un sistema socialista mundial y poner en jaque al régimen capitalista?

El MIR hace esfuerzos por transformarse en una organización de masas. Para ello no se detiene en lanzar tergiversaciones, acusaciones falsas, deformaciones del proceso que vive Chile en las condiciones de un Gobierno Popular. Llevado por el anticomunismo, declara ahora, por boca de Andrés Pascal, que el Gobierno, después de efectuar una serie de reformas positivas

³ "El MIR y las elecciones presidenciales, PF citado.

para el pueblo, “se ha ido empantanando en la maraña de la legalidad burguesa, el boicot político de la Derecha que controla el Parlamento a través de una mayoría artificial, de la Contraloría, del aparato judicial reaccionario”.⁴ “Punto Final” acusa al Gobierno de tendencia a inmovilizar el proceso chileno en un punto que no pasa más allá de formas capitalistas de Estado, sin avanzar hacia el socialismo”;⁵ Miguel Enríquez, secretario general del MIR, habla de la “política legalista y vacilante del Gobierno”. A los representantes del MIR se suman otros sectores de la ultraizquierda, en el mismo tono.

Es indudable que la prédica del MIR surte cierto efecto en sectores populares que se confunden ante la complejidad de los nuevos procesos sociales, económicos y políticos que se desarrollan en el país. Grupos políticos faltos de una teoría científica como el marxismo-leninismo, o que están a medio camino en la comprensión cabal de ella, también son propicios a ser influenciados por tesis anticomunistas.

El pensamiento de Lenin

Si hacemos una elemental comparación entre Chile actual y la situación existente en Rusia en el período inmediatamente posterior a la Revolución de Octubre y, por encima de las específicas condiciones concretas, diferentes, desde luego, en ambos países, fijamos la atención en el análisis leninista de los problemas que trae consigo el acceso de la clase obrera y los campesinos al poder, podremos ver con nitidez la errónea concepción de los ultraizquierdistas chilenos de hoy. Esta se podría sintetizar en cuatro cuestiones fundamentales:

1°) Insuficiente análisis del desarrollo económico en relación a los tipos económicos existentes y a la táctica política a seguir en consonancia con esta realidad.

2°) Confusión en el análisis de la actual correlación de las fuerzas de clase y de la política a seguir por los partidos revolucionarios.

3°) Deformación del carácter de clase del actual Gobierno de Unidad Popular y desconocimiento del papel que juega en él la clase obrera y sus partidos revolucionarios.

4°) Apreciación dogmática del significado de la revolución socialista y desconocimiento del período de transición por el que empieza a caminar Chile.

En 1921 Lenin escribe en “Pravda” un artículo⁶ poniendo al desnudo las inconsecuencias de los grupos pequeñoburgueses que, desde posiciones de derecha o de izquierda, desconocían la etapa concreta que vivía el país y planteaban consignas que no contribuían a su reconstrucción económica, al mismo tiempo que ponían una vez más en duda la capacidad de la clase obrera y el

⁴ Entrevista de “El Mercurio” a Andrés Pascal, 24 de abril de 1972.

⁵ “Punto Final” N° 131, 25 de mayo de 1971.

⁶ “Nuevos tiempos y errores antiguos”. Obras Completas, Ed. Cartago, 1960, Tomo XXXIII. (Nota: las citas de Lenin que siguen, pertenecen al mismo trabajo).

Partido Comunista para dirigir el trabajo de las masas. Destaca las diferentes etapas que se han sucedido desde la insurrección victoriosa, enseñando a los revolucionarios del mundo entero cómo hay que pasar de la palabrería hueca y vociferante sobre “la revolución socialista” o “el poder obrero”, a una determinación exacta del momento político concreto y de las tareas que éste exige de la vanguardia revolucionaria. Las etapas señaladas por Lenin para los primeros años posteriores a octubre son:

1) Del 25 de octubre (7 de noviembre) al 5 de enero, “cuyo objetivo final era dar cima a la revolución democrático-burguesa, dado que aún no había lucha de clases en el seno del campesinado”. Encontramos aquí un elemento teórico de especial importancia: cómo Lenin, a pesar que el poder había sido tomado en sus manos por la clase obrera unida a los campesinos pobres y a los soldados ganados por los bolcheviques; cómo, a pesar de que la insurrección armada barrió violentamente con las viejas instituciones burguesas y monárquicas, nacionalizó la tierra y las empresas capitalistas, habla, después de casi tres años, acerca de la necesidad de llevar a término tareas propias de la revolución burguesa. Golpea no sólo a los sectarios de entonces, sino a los dogmáticos que hoy repiten en Chile una actitud parecida a la de aquéllos.

Pero Lenin no se queda en la determinación del carácter democrático-burgués de esa primera etapa. Argumenta a renglón seguido a favor de una concepción dialéctica del proceso que se vivía en esos primeros meses de revolución. Plantea que, al mismo tiempo, el poder proletario llevaba a cabo tareas “para la revolución proletaria, socialista”, y que todo esto “excedía enormemente los marcos de la revolución burguesa”. Concepción dialéctica, dinámica, que permitía a los trabajadores ver no sólo un aspecto, una característica de las transformaciones, sino el otro, el más importante: *hacia dónde* conducían los éxitos en el cumplimiento de aquellas que Lenin consideraba aún simplemente democrático-burguesas. Aquí es donde encontramos una de las limitaciones teóricas fundamentales de los ultraizquierdistas chilenos actuales. Ponen un dique, una barrera insalvable entre la revolución democrática, antiimperialista, antimonopolista y antioligárquica que se está llevando adelante incuestionablemente por la Unidad Popular, y la revolución socialista, objetivo hacia el cual se camina ahora, en cierta medida, al liquidar las bases económicas de estos sectores explotadores.

Esta primera etapa de la revolución rusa no podemos, sin duda, transportarla mecánicamente a Chile. Lo que interesa aquí es demostrar la actitud teórica correcta de un genio revolucionario, aplicada a una situación histórica irrepetible, análisis que en su esencia ayuda a aplicar a nuestra situación actual un método dialéctico materialista, que sea capaz de orientar correctamente la conducta de las masas frente a un Gobierno en el cual la clase obrera es una fuerza importante y, aún más, decisiva para su consolidación y para que el curso ulterior del proceso revolucionario desemboque en el socialismo. Precisamente, al hablar de las realizaciones de esa primera etapa, Lenin colocaba en lugar destacado el hecho de que el partido había movilizado “en escala nunca vista, las fuerzas de la clase obrera, para que ésta utilizara el poder del Estado en su favor”.

2) Segunda etapa: concertación de la paz de Brest, en la cual, como es sabido, el poder soviético naciente debió hacer concesiones importantes a los imperialistas alemanes en resguardo de la nueva república soviética. Fue entonces, dice Lenin, cuando viene el “auge de la fraseología revolucionaria contra la paz”. Y agrega: “De frases como la que afirmaba que ‘no tenemos fe en las fuerzas de la clase obrera’ estábamos hasta la coronilla, pero no nos dejábamos engañar”. Una vez más, la necesidad de combatir a los desesperados, a los que recurren de palabra a los trabajadores, pero que expresan en sus consignas ultrarrevolucionarias, precisamente la desconfianza hacia la capacidad de la clase obrera organizada, la duda frente al partido de esta clase.

3) La guerra civil, durante la cual se puso de manifiesto la impotencia de los anarquistas, una parte de los cuales ayudaba al partido y “otra malograba el trabajo con su griterío contra la disciplina militar, o con su escepticismo”.

4) La etapa de ruina económica, posterior a la intervención armada y el bloqueo de las potencias imperialistas. Lenin se refiere a esa etapa, en la cual se vivía cuando escribe el artículo que comentamos criticando las posiciones del ex comunista Levi, el cual, desde el extranjero, daba argumentos a los ultraizquierdistas del interior de Rusia, escribiendo que los bolcheviques “no tienen fe en las fuerzas de la clase obrera”. Saliéndole al paso, Lenin escribe: “Tanto los mencheviques como los elementos anarquizantes convierten el concepto ‘fuerza de la clase obrera’ en un fetiche, y no son capaces de reflexionar sobre su contenido real y concreto. En vez de estudiar y analizar este contenido se limitan a declamar acerca de él”. ¿Cuál es este “contenido real y concreto” para Lenin? Lo define así: “La burguesía tiene bien en cuenta que ‘las fuerzas de la clase obrera’, las fuerzas reales, se componen hoy de la poderosa vanguardia de esta clase (el Partido Comunista de Rusia, que se ha ganado, no de golpe, sino a lo largo de 25 años de lucha, el papel, el nombre, la fuerza de “vanguardia” de la única clase revolucionaria) y de los elementos más debilitados por el desclasamiento, más susceptibles de caer en vacilaciones mencheviques y anarquistas”.

Hallamos en estas palabras no sólo un concepto aplicado a una realidad social objetiva, la clase obra, en la cual Lenin distingue dos sectores bien diferenciados, sino además, y esto es lo fundamental, una reafirmación de que la potencia revolucionaria de esta clase está representada por su vanguardia política, el Partido Comunista.

La nueva etapa concreta que vivía en 1921 la revolución rusa consistía en un crecimiento lento de las nuevas fuerzas, en una situación económica difícil, situación que requería una hábil y correcta política del partido y el Estado. Esto no significa que el partido no cometiera errores. El propio Lenin escribe a fines de 1921, que al comienzo de la revolución, llevados por el entusiasmo y el fervor político de las masas, se pensó que esto era suficiente para cumplir grandes objetivos económicos. “Suponíamos, –dice– pues no lo había entendido bastante, poder organizar en forma directa, por la sola existencia del Estado proletario, al modo comunista, la producción y distribución estatal de productos, en un país de pequeños campesinos. La vida nos hizo comprender nuestro error, ver que son necesarias una serie de etapas de transición: el

capitalismo de Estado y el socialismo, para preparar por medio de un prolongado trabajo –que requiere varios años– el paso al comunismo”.⁷ El hecho de cometer el error de saltar etapas no impidió al partido, sin embargo, corregirlo y continuar siendo la vanguardia política.

Lenin prosigue en el artículo que nos guiaba más arriba planteando que el frente más importante de esa nueva etapa de la revolución era el económico, “la obra de construcción de la economía”⁸. Hay que preguntarle a los detractores del partido, escribía, cuál es su aporte para incorporar a los trabajadores sin partido a ese trabajo: “Así es como se puede y se debe desmascarar siempre a los vociferadores, demostrar que en la práctica no ayudan, sino que obstaculizan la construcción de la economía; no ayudan, sino que obstaculizan la revolución proletaria; que son los portadores de las aspiraciones pequeñoburguesas y no de las proletarias, y prestan un servicio a una clase ajena”⁹.

Los ultraizquierdistas chilenos rebaten hoy la afirmación de los partidos de la Unidad Popular que en nuestro país se desarrolla un período de transición, que se marcha hacia el socialismo, que la clase obrera está en el gobierno –por tanto en un sector importantísimo del poder político–, y acusan al gobierno de conciliar con la burguesía, con los terratenientes ricos, de consolidar un capitalismo de Estado que no conduce al socialismo, sino que refuerza el poder de los monopolios.

En estas tesis también se expresa el insuficiente y unilateral enfoque del proceso actual. Un enfoque deformante, que pierde de vista el contenido de clase de las transformaciones en desarrollo, que no ve la perspectiva que se abre a la clase obrera y al pueblo entero, que desprecia las posibilidades legalistas del gobierno para maniobrar haciendo las concesiones que sean necesarias, para consolidar lo alcanzado y permitir, con la indispensable movilización de masas –negado por los ultraizquierdistas, pero evidente para todos los que no están cegados como ellos por el anticomunismo– el avance ulterior. Tanto en esta etapa, como en la que sobrevendrá, se realizan, como decía Lenin refiriéndose a la situación de Rusia, tanto las tareas democráticas-burguesas (en Chile la primera etapa de la reforma agraria, elevación del nivel de vida de las masas mediante la redistribución de ingresos, etc.), como una serie de tareas que corresponde a la transición hacia el socialismo.

Lenin enseñó a los bolcheviques a determinar la táctica que correspondía a las condiciones específicas de cada etapa de la revolución. En otro de sus trabajos fundamentales¹⁰ aplica la economía política marxista para esclarecer qué modo de producción es el predominante en Rusia, cuáles son los tipos de producción existentes, qué clases o capas sociales existen como resultado de las relaciones de

⁷ “Con motivo del 4° Aniversario de Octubre”, Ed. Cartago, 1960, Tomo XXXIII.

⁸ “Nuevos tiempos y errores antiguos”, *ob. cit.*

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ “El impuesto en especie”, Ed. Cartago, 1960, Tomo XXXII. (Nota: a este trabajo pertenecen las citas siguientes).

producción, cuáles son las que predominan entre éstas y cuál debe ser la política económica del Estado en consonancia con ese complejo cuadro social.

Rusia vive un período de transición, afirma Lenin, y nadie lo puede negar. Agrega un planteamiento de gran importancia actual si lo repensamos en relación con la situación chilena: “Tampoco comunista alguno ha negado que la expresión República Socialista Soviética significa la decisión del poder soviético de realizar el tránsito al socialismo, *y de ningún modo que las nuevas formas económicas pueden considerarse socialistas*” (Subrayado nuestro, JT). Los ultraizquierdistas chilenos gritan todos los días exigiendo el socialismo inmediato, y Lenin, a tres años de Octubre, insistía en que todavía no había que considerar las transformaciones como correspondientes a las relaciones socialistas de producción.

Prosiguiendo en su argumentación, Lenin escribe: “¿Pero qué significa la palabra transición? En lo que atañe a la economía ¿no significa acaso que el régimen actual contiene elementos, partículas, fragmentos, tanto de capitalismo como de socialismo? Cualquiera reconocerá que sí. Pero no todos, al reconocerlo, han reflexionado sobre cuáles son exactamente los elementos que forman las diferentes estructuras económico-sociales de la Rusia presente. Y en esto reside la cuestión”.

“Enumeremos estos elementos –agrega.

- “1) Economía campesina patriarcal; es decir, natural en grado considerable;
- “2) pequeña producción mercantil (aquí figuran la mayoría de los campesinos que venden su trigo);
- “3) capitalismo de economía privada;
- “4) capitalismo de Estado;
- “5) el socialismo”.

¿Podría alguien negar que en Chile coexisten los mismos o la mayoría de estos tipos económicos? ¿Puede esto significar que no se vive una etapa de transición hacia el socialismo? El propio Lenin caracteriza precisamente tal transición como existencia y entrelazamiento de esta diversidad de relaciones de producción. Lo decisivo es cuál de ellas predomina, y no necesariamente debe ser, en este período, el de las relaciones socialistas. En Rusia post-revolucionaria era la pequeña producción mercantil campesina. En Chile de 1970 eran los monopolios privados, y hoy tiende a ser el Área Social.

Teniendo en cuenta cuál es la dirección en que el Estado de obreros y campesinos encauzaba el conjunto de estas relaciones económicas y sociales, y cómo se preocupaba por ir fortaleciendo las relaciones socialistas, Lenin llega a la conclusión de que en tales condiciones era indispensable concertar una alianza entre el capitalismo de Estado y el socialismo (considerado como tipo económico), para vencer en la confrontación económica a la pequeña producción mercantil campesina y al capitalismo privado (nótese la diferencia establecida por Lenin entre capitalismo de Estado y capitalismo privado). Para nosotros, en Chile, está claro que no es esta la correlación existente en el terreno económico. Lo importante es el concepto de capitalismo de Estado y la política económica del poder soviético hacia él, en cuanto nos permite valorizar mejor las medidas adoptadas por el Gobierno Popular.

¿A qué le llama “capitalismo de Estado” Lenin? Consiste en las concesiones que otorga el Estado soviético a los capitalistas extranjeros para explotar una empresa, el arrendamiento de fábricas estatales a empresarios privados, la cooperación de los pequeños productores y pequeños agricultores capitalistas. “¿Es posible la combinación, la convivencia, la compatibilidad del Estado soviético, de la dictadura del proletariado, con el capitalismo de Estado?” –pregunta Lenin. Y contesta enfáticamente: “Por supuesto que sí”.

¿Qué pueden argumentar los ultrarrevolucionarios de hoy que se escandalizan porque el Gobierno Popular delimita la existencia de un área privada, porque no crea de inmediato las haciendas estatales en el campo, porque no expropia la reserva de los latifundios, porque no estatiza todas las empresas industriales? Se pierde de vista lo más importante, que en Chile dominaba la economía y las finanzas un puñado de grandes oligarcas, de grandes monopolios extranjeros, y que es precisamente allí donde debe golpear la clase obrera y el gobierno para asegurar el control sobre el conjunto de la economía, realizando una alianza económica con las clases o capas que corresponden a los demás tipos económicos (pequeña y mediana producción y comercio). Permitir en Chile, cuando incluso aún no se producen las transformaciones esenciales en la superestructura política y jurídica, necesarias para el socialismo, que exista un sector numeroso de pequeños y medianos capitalistas, tanto en la industria como en la agricultura y el comercio, no es sino ser fieles al pensamiento marxista, al pensamiento y la práctica de Lenin, a la experiencia de numerosos Estados socialistas.

“El problema consiste –tanto en su aspecto teórico como práctico– en encontrar los métodos acertados para llevar el inevitable (hasta cierto grado y durante un período determinado) desarrollo del capitalismo al cauce del capitalismo de Estado, en qué condiciones hacerlo y cómo asegurar, en un futuro próximo, su transformación en socialismo”. Las concesiones, dice Lenin, son también un aspecto de la lucha, la continuación de la lucha de clases bajo otra forma, “pero de ninguna manera una expresión de la conciliación de clases”.

Algunos artículos publicados por “Punto Final” han reconocido que el capitalismo de Estado puede conducir al socialismo, pero niegan, de inmediato, que esto esté ocurriendo o pueda ocurrir en Chile. “Una cosa es cuando se trata de una sociedad en la que el poder pertenece al capital, y otra muy distinta cuando está en manos del proletariado”, explica Lenin en su discurso en el III Congreso de la Internacional Comunista, refiriéndose al capitalismo de Estado. Y la cuestión en Chile es que la ultraizquierda niega la participación de los trabajadores en el Gobierno Popular, niega el papel que objetivamente está jugando la clase obrera en el área social de la economía, en la socialización de la agricultura, en el control de la producción y el abastecimiento, en la planificación económica centralizada, en la nacionalización y funcionamiento de los bancos en manos del Estado popular. “Los grandes bancos constituyen el ‘aparato del Estado’ que necesitamos para realizar el

¹¹ “¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?”, Ed. Cartago, 1960, Tomo XXVI.

socialismo”, escribía Lenin¹¹. Y en otra oportunidad definía el control obrero como una medida de tipo socialista, agregando que el tránsito del control obrero a la administración obrera es el segundo paso hacia la construcción del socialismo. En Chile existe tanto el uno como el otro, y se camina sin duda hacia el socialismo, mal que les pese a los oportunistas de izquierda.

No nos cansaremos de citar y comentar a Lenin, cuyo pensamiento sigue siendo actual, continúa orientando el difícil camino y la compleja lucha de los comunistas hacia la sociedad nueva, “. . . no en vano hablaron los maestros del socialismo de un largo período de transición del capitalismo al socialismo –escribe–, no en vano subrayaron los ‘largos dolores de parto’ de la nueva sociedad, y que, por lo demás, esta nueva sociedad es una abstracción, que no puede realizarse de otro modo que a través de una serie de intentos concretos, variados e imperfectos, de crear uno u otro Estado socialista”¹².

¹² “El impuesto en especie”, ob. cit.

Partido Comunista Bandera Roja: Informe Central de la Conferencia Constitutiva

(3-4-5 de junio de 1972)

Resolución del CC del Partido Comunista Bandera Roja: el nacimiento del partido y la situación actual

A un mes de realización de nuestra Conferencia Constitutiva, se han producido hechos de gran significación que ratifican la línea aprobada en ella y confirman que el surgimiento de nuestro partido es una necesidad para la resolución exitosa de la lucha de clases del proletariado contra las clases dominantes y por la conquista del Poder Político.

Se agudizó la lucha de clase y antimperialista a nivel internacional, en especial Vietnam y en América Latina el Cono Sur. Nuevamente se ponen en evidencia signos claros del debilitamiento del imperialismo yanqui y del recrudecimiento de las contradicciones interimperialistas; reafloró la crisis del dólar, repercutiendo en los capitales de los grandes monopolios, las Fuerzas Armadas Populares de Liberación en Vietnam, golpean duramente el ejército títere y a las tropas yanquis, y se afianza; extiende y fortalece el poderío y la influencia del Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur, con la ayuda internacionalista y fraternal del Ejército y el Pueblo de Vietnam del Norte, de su partido y su Gobierno. Se afianza y se extiende la lucha en Indochina, al fortalecerse y extenderse la unidad revolucionaria de los pueblos de Indochina con la República Popular China y la República Popular de Corea. Los imperialistas se empantanar día a día y la crisis se agudiza, como se ha visto en estas semanas, mientras la febril actividad de los revisionistas soviéticos después de sus acuerdos contrarrevolucionarios con Nixon, demuestra hasta qué punto está alborotado el gallinero del revisionismo.

La revista "Confirmado", vocero oficioso de la dictadura militar argentina encabezada por Lanusse, tal como –sugestivamente– lo recogió "Ercilla", señaló su preocupación por la situación en Chile, señalando su aprobación a las tratativas UP-DC pero, destacando que "la respuesta real del entuerto reside de todos modos en una cita de Lenin: "Sólo cuando las *capas bajas* no quieren lo viejo, y las *capas altas* no pueden sostener el modo antiguo, sólo entonces puede triunfar la revolución". Confirmado –cita Ercilla– termina diciendo: "En Chile son las bases, azoradas (?), las que tienen la decisión en sus manos".

El New York Times, vocero yanqui, luego de comentar también favorablemente –y con entusiasmo– los acuerdos de la UP con la DC, advierte a las

clases dominantes que la política de impulsar la guerra civil es suicida, recomendando no tratar de derrocar a Allende, sino de obligarlo a marchar por los carriles constitucionales.

Los hechos de Concepción conmueven a las clases dominantes y al imperialismo, porque allí las masas obreras y populares rompieron los diques frenadores del reformismo, a pesar de las llamadas de Allende, y al volcarse a las calles se enfrentaron con el aparato represivo del Estado enviado por el Intendente comunista-revisionista con el fin de ahogar a sangre y fuego la lucha de las masas.

La preocupación de los yanquis y de sus aliados nativos frente al deterioro del reformismo es evidente. Luego de lo de “Confirmado”, Lanusse (acosado a su vez por la lucha proletaria y popular que hace tambalear su “Gran Acuerdo Nacional” con el jefe populista Perón, lucha que avanza hacia la fusión con las ideas del socialismo y el comunismo revolucionario, rompiendo en forma creciente con el nacionalismo y el reformismo burgués peronista, en marcha hacia la insurrección general de todo el pueblo) cambia a su Ministro de RR.EE. como una forma de velada presión al Gobierno chileno para que marche a rápidos entendimientos con la DC, que permitan apagar la hoguera explosiva que se incubaba especialmente en las grandes fábricas y también en el campo.

Los acuerdos UP-DC (parte y consecuencia del acuerdo global adoptado en Moscú por los jefes del revisionismo y el imperialismo yanqui, Brezhnev y Nixon contra el proletariado, el pueblo y los países oprimidos del mundo, y contra el torrente revolucionario –cuyo destacamento más avanzado lo constituye el pueblo chino y su partido de vanguardia, el PC de Chile) han agudizado las contradicciones por arriba, tanto en la UP como en la oposición pro-yanqui.

Sectores del PS y del Gobierno, buscando apoyarse e instrumentar al proletariado y sus luchas desde posiciones populistas de izquierda, para mejorar sus posiciones por arriba en su forcejeo con el PC, empujan contra el acuerdo UP-DC, pero más que para romperlo, para mejorar sus términos.

Los grupos golpistas, nacionalistas de derecha –PN y Patria y Libertad–, apoyándose en la creciente crisis del reformismo y en el descontento obrero y popular, por el contrario, sostienen frente a la DC que no se trata de ganar tiempo sino de definir ya la situación antes de que sea tarde. Se agudiza la lucha entre ambas posiciones en el Ejército.

La dirección del MIR, ratificando las vacilaciones propias del revolucionarismo pequeño-burgués, oscila entre marchar a la cola de sectores de izquierda del reformismo (empujado además por el doctrinarismo trotskista, que busca ganar al MIR, para posiciones defensistas, a partir de negar el auge revolucionario mundial y nacional, y enfrentarlo con China y las fuerzas que luchan por la reconstrucción del comunismo proletario-revolucionario) y las viejas posiciones –también defensistas y vacilantes frente al proletariado mundial– de corte militarista, revolucionarias pequeño-burguesas. Al tensarse la lucha de clases, y jugar en ellas un rol protagónico las secciones de vanguardia del proletariado industrial (los obreros de las grandes fábricas), se agu-

diza la crisis del revolucionismo pequeño-burgués, que a pesar del heroísmo de sus militantes, ha sido usado durante años por el reformismo y el revisionismo para ayudar a frustrar el surgimiento de proyectos políticos proletario-revolucionarios, auténticamente comunistas.

Tal como previó nuestra Conferencia Constitutiva, la situación actual tiende a generar situaciones explosivas por abajo, a partir de la agudización de los problemas del pueblo y del deterioro de la economía nacional. Situación que se agrava con los acuerdos UP-DC, acuerdos que a su vez hacen que el revisionismo se desenmascare ante las masas. Lo que ha llevado al recrudescimiento de la lucha de clases en todo el país, en el campo y la ciudad.

Tanto el defensismo trotskista como aquellos que se ubican como izquierda del reformismo, renunciando a ser alternativa, han insistido en la misma cantinela que usa el revisionismo: “la correlación de fuerzas es desfavorable”. Desde esa óptica (que mira el retroceso de las posiciones revisionistas y reformistas como retroceso de las masas, sin ver que justamente el avance de éstas genera ese retroceso) cualquier estallido obrero o popular se constituye en una “excepción” que se explica siempre por “condiciones locales especiales”. Es la “teoría del reflujo”, tan cara al trotskismo, que sólo sirve para ensanchar el margen de maniobra del PC revisionista para sus negocios por arriba con sectores de las clases dominantes. Pero como siempre ha ocurrido en la historia, *la vida* está resolviendo esa discusión. En mayo de 1971, el número de obreros comprometidos en conflictos era alrededor de 20.000; un año después, esa cifra alcanza cerca de 260.000. Ayer, fue Concepción hoy el propio corazón proletario de Chile, el cordón Cerrillos, y empresas grandes vinculadas a tenebrosos pulpos como “los pirañas”, por ejemplo las empresas de la llamada “línea blanca”.

APEUCH; conflicto con serio enfrentamiento con el Gobierno de los obreros avícolas, CIMET paralizada, FENSA en conflicto, al igual que PERLAK, POLYCRON, FANTUZZI, etc., huelga ferroviaria, (que obliga al Gobierno a designar a un interventor militar), Cabildo Abierto de los pobladores y campesinos de Maipú, que repudia al alcalde, luego de tomarse las calles protestando por la falta de locomoción adecuada, por la vivienda y la salud; Consejos y Asambleas de Pobladores en Talca; tomas de predios y enfrentamientos con los latifundistas y grandes burgueses agrarios –que son apoyados por Carabineros– de los campesinos de Melipilla y Ñuble; choques constantes de los obreros y de los campesinos con la justicia burguesa, y crecientes enfrentamientos *también* con el Estado y los funcionarios de Gobierno, ejemplificaba en la agresión de la Ministro de Trabajo a un militante obrero en Perlak (adonde no se la dejó entrar en repudio a su actitud).

Esta situación ha demostrado como justa nuestra característica del momento actual como de auge revolucionario de las masas, que desbordan por la izquierda a los dirigentes reformistas y conciliadores. Lo que ha facilitado y enriquecido nuestra rápida inserción en las luchas obreras y populares. Justamente, lo nuevo de las últimas luchas en Cerrillos-Maipú, ha sido la incidencia en su desencadenamiento de una línea proletario-revolucionaria, clasi-sista, que no transige frente al Gobierno y los contubernios por arriba, y que

planteó a las masas un camino claro de acumulación de fuerzas políticas a partir de sus luchas, con vistas a la conquista del Poder Político y la Revolución Popular dirigida por la clase obrera: *la línea de nuestro partido y del Movimiento Clasista Proletario (MCP)*.

La receptividad de la clase obrera frente a nuestras posiciones, posibilitó a nuestros cuadros obreros jugar un papel dirigente real en el combate, a la cabeza de las principales barricadas levantadas en la ocupación de Maipú-Cerrillos el viernes 30 de junio; ocupación que fue posible, entre otras cosas, gracias a nuestra firme posición en las reuniones del Comité Coordinador de las luchas de Maipú. A partir de nuestro combate intransigente contra las que pretendían diluir la lucha limitándola a un estrecho economicismo, al simple peticionismo frente al gobierno, fue posible derrotar también las posiciones vacilantes y conciliadoras –o simplemente traidoras y divisionistas, como las del PC revisionista Zamorano– que pretendían frenar la lucha o impedirla. Esas posiciones –francamente derrotadas– fueron impulsadas por el PC revisionista, realmente alarmado ante el auge obrero y la explosividad y radicalización del descontento. La contradicción entre esa situación por abajo y las posiciones de los jerarcas del revisionismo, agudizó sus contradicciones internas, y a su vez ensanchó la brecha que los separa de los sectores de izquierda del Partido Socialista, aun de aquellos sectores simplemente combativos.

Es que hay una *nueva situación* en la clase obrera. El proletariado mostró en esa jornada sus ansias de debate, de posiciones y hechos revolucionarios. Los volantes del MCP eran leídos con avidez por los obreros, y los carteles que estos portaban eran todos contra la justicia, contra el retroceso, por avanzar contra la explotación y la conciliación.

Eso es lo que explica que nuestra línea de impulsar la Asamblea Popular basada en los Consejos de Delegados revocables por abajo, como alternativa frente al Gobierno Reformista y al Parlamento Burgués (a partir de la lucha obrera contra el creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera y el pueblo), verdaderos embriones de poder de las masas, haya prendido en la clase obrera.

Esto posibilitó (aunque aun de modo incipiente) un momento de fusión de nuestras ideas, de las banderas rojas del comunismo, proletario, con las masas, en el seno mismo de la lucha de clases.

El Partido Comunista Bandera Roja ha nacido pues a la vida política al calor de la lucha de clases y fundido con ella.

El interés y respeto de los obreros por el Movimiento Clasista Proletario (MCP) es creciente. Cosa que preocupa al PC revisionista, hasta el punto de atacarnos furiosamente en el editorial de Rodrigo Rojas de “El Siglo” del 2 de julio.

Es que no es de ninguna manera casual que nuestro partido y el MCP hayan sido los únicos que levantarán la defensa de la clase obrera frente a la agresión de Mireya Baltra, comunista de palabra y burguesa en los hechos. Y eso ha pesado en la clase obrera.

Ha pesado, porque la clase obrera está haciendo su experiencia. Cuando los obreros van al Ministerio del Trabajo a plantear sus problemas (como

hicieron los obreros de Polcrón, Fantuzzi y Parlak) y no son recibidos porque la titular *está reunida con los patrones*, los obreros dicen: Comunistas de palabra y burguesa de hecho. Cuando los obreros luchan en Maipú-Cerrillos, levantando barricadas por un programa de lucha claro y firme, y después conocen que Allende repudia como “provocación” el combate librado, otorgando sin embargo migajas para tratar de calmar los ánimos (llevando como vocero al candidato socialista a la Presidencia de la CUT, Rolando Calderón), los obreros dicen: Gobierno reformista, popular en las palabras y burgués en los hechos; cuando los dirigentes de la CUT se marginan de la lucha y después vienen a querer imponer la burocracia y dividir al movimiento, los obreros dicen: *unidad por abajo* contra el reformismo y las direcciones traidoras.

No es casual tampoco que nos silencie la “gran prensa”, tergiversando las declaraciones de nuestros dirigentes, y atenuando el carácter de la lucha librada el viernes 30 de junio en Cerrillos: ¡es al proletariado y no al reformismo que temen las clases dominantes!

Es por eso que, pese a nuestra pequeña fuerza, recién surgida, los obreros nos reciben con cariño, como uno de ellos, leen y aprueban nuestros volantes, y proyectan a nuestros cuadros obreros a la cabeza del combate.

Desde la Conferencia Constitutiva hasta hoy, en sólo cuatro semanas, el partido y el MCP se han desarrollado en el proletariado de las grandes empresas y en los pobladores y campesinos de Santiago. Nuevos contingentes se han incorporado al partido y al MCP. Hemos comenzado a arraigar por abajo.

Esta situación, combinándose con el deterioro creciente del reformismo y la agudización de la crisis en el seno de la UP, ha incidido en el desencadenamiento de las luchas, si bien nuestra incipiente y debilidad no permiten que podamos aún decidir en el curso del proceso. Los ataques contra nuestro partido y contra el MCP recrudecerán. Sin embargo, en Cerrillos se vio una fuerza que no teme el ataque represivo, ni al matonaje o la presión burocrática del revisionismo y el reformismo, porque no va a los acuerdos por arriba sino por abajo.

La tendencia del proceso es que este crecimiento a saltos siga en desarrollo, a condición de que el partido comprenda que lo fundamental está en nuestro arraigo, *por abajo*, en la construcción de *células de empresa*. En un momento de agudización creciente de la lucha de clases y de crisis para arriba, la condición del éxito para la clase obrera en la lucha por conducir la revolución al triunfo hacia la conquista del Poder, radica en *fortalecer política y orgánicamente al partido del proletariado, el PC Bandera Roja, y al Movimiento Clasista Proletario (MCP)*.

Así, por otra parte, lo han puesto en evidencia los sucesos de Cerrillos y Maipú. La lucha obtuvo un pequeño triunfo, la requisición de Perlak (contrariando resoluciones judiciales), la intervención laboral prometida a los obreros de Fantuzzi y Polcrón. Sólo nuestra debilidad orgánica y política posibilitó el margen de maniobra del reformismo, permitiendo un momento de respiro al Gobierno, la negociación con la DC y las clases dominantes, al resolverse la jornada sin satisfacerse *el grueso* del programa de lucha levantada por los obreros. Varios dirigentes sindicales de las fábricas en conflictos expresaron su des-

engaño; las bases obreras no disimularon su frustración ante lo que para el reformismo era “un gran triunfo”. Sin embargo, ese respiro es pasajero. ya se anuncian nuevas salidas a la calle para esta semana, tanto en Maipú como en Santa Rosa: CIMET entre otras empresas. *Cunde el ejemplo de Maipú.*

Es que esa misma victoria parcial –conseguida a pesar de la justicia burguesa, de las maniobras del Gobierno y de la presión que contra ella ejerció el propio aparato revisionista y el Ministerio del Trabajo–, señala el camino para avanzar; hoy para arrancarle concesiones tanto al Parlamento burgués a los patrones como al Gobierno, que pugnan y forcejean entre sí por el control del Estado burgués, hay que golpear fuerte donde más duele, sacudir el árbol para que caída la fruta y no esperar que caigan solas de arriba.

Las luchas iniciadas en Maipú y Cerrillos están llenas de enseñanzas para la clase obrera. Han surgido nuevos organismos para la lucha de clases del proletariado. Se han constituido Consejos de Pobladores y Campesinos, y Comités de Coordinación de las luchas, interfabriles y obrero-campesino-populares que pueden transformarse en polos reales de conducción para la lucha, necesarios ante la actitud traidora de las direcciones revisionistas de la CUT, incapaces de jugar otro papel que no sea el de verdaderos frenadores del proletariado, cómplices de los grandes empresarios con los que negocian a espaldas de las masas. El hecho de que se haya expulsado a instancias nuestras de la reunión de los 21 sindicatos de Cerrillos y Maipú al burócrata Zamorano, que fue a sabotear las medidas de lucha, evidencia el grado profundo de desprestigio al que han llegado los dirigentes revisionistas, lo que impulsa incluso a quienes vacilan seriamente frente a ellos, a crecientes enfrentamientos.

Esta situación abre posibilidades reales de impulsar la democratización de la CUT por abajo, en marcha a un Congreso de Bases que resuelva su crisis.

Nuestra línea es impulsar la unidad en lucha de la clase obrera, por abajo, pasando por sobre los reformistas y traidores, a través de desarrollar cientos de Comités de Coordinación de las luchas sustentados en Consejos de delegados capaces de organizar por la base a la clase obrera, por:

- La expropiación a cargo de los Consejos de todas las Grandes Fábricas, y el control obrero de la producción, la distribución y el consumo;

- El reajuste automático de los salarios, la eliminación del salario a trato, y de las primas y premios, incorporándolos al salario base, y la creación del Consejo Obrero Nacional del Salario;

En repudio a:

- La actual política económica del Gobierno, antiobrera y antipopular, y a la Ministro del Trabajo, comunista de palabra y burguesa en los hechos;

- A la justicia, la Contraloría y el Parlamento burgueses, dedicados a atacar y reprimir las luchas populares y a legislar contra ellas;

- Las direcciones burocráticas y traidoras que se atrincheran en la cúspide de la CUT;

En marcha hacia la creación de Asambleas Populares regiones y zonales de obreros, campesinos, pobladores, estudiantes, soldados y otras capas populares, verdaderos embriones de un nuevo poder sustentado en las bases, el poder popular revolucionario dirigido por la clase obrera.

Esta línea debe impulsarse nacionalmente, desde el carbón a las salitreras, en lucha constante contra el reformismo y el revisionismo y contra las vacilaciones hacia ellos de otros sectores provenientes de las alas de izquierda del reformismo. Ese es el camino de acumulación de fuerzas revolucionarias, en marcha a la insurrección general de todo el pueblo que destruya el Estado burgués, instaure el nuevo Estado Popular Revolucionario dirigido por la clase obrera, en marcha ininterrumpida al socialismo y, junto al proletariado, los pueblos y los antimperialistas de todo el mundo, a la revolución mundial y el comunismo.

La condición del avance de ese proceso es el fortalecimiento y desarrollo del *Partido Comunista Bandera Roja* y de las corrientes clasistas, proletario-revolucionarias, en el seno de la clase obrera, alrededor del MCP.

A sólo un mes de nacido nuestro partido, las luchas libradas ratifican el camino emprendido y la justeza de la línea aprobada en la Conferencia Constitutiva.

A despecho del odio revisionista, del disgusto de los sectores ubicados en la izquierda del reformismo y de la alarma de las clases dominantes y proyanquis, ha surgido el partido de los obreros comunistas, verdadero *instrumento del proletariado* para conducir la lucha popular hacia la victoria y a la construcción de una nueva sociedad.

En la situación de Chile, las cosas envejecen muy rápido: debemos estar preparados para virajes bruscos en la situación política. Se acercan cientos de estallidos proletarios y populares. El partido debe redoblar sus esfuerzos, tensarse al máximo, para jugar su papel en ellos.

Arraigar células en las grandes empresas, fundos y Universidades. Fortalecer al partido, orgánica y políticamente. Romper con el movimientismo y las lastres reformistas.

PARTIDO COMUNISTA BANDERA ROJA,
COMITE CENTRAL

3 de julio de 1972.

Informe Central de la Conferencia Constitutiva del Partido

Introducción

Las experiencias de la lucha obrera, popular y estudiantil del último período, no sólo han confirmado las ideas fundamentales de nuestra resolución política, sino que han puesto en evidencia (especialmente las elecciones de la CUT) la ausencia de una vanguardia capaz de ponerse a la cabeza de las masas obreras y populares y de sus luchas, para transformarlas en lucha por la conquista del poder *ahora*.

Ello ha templado y renovado nuestros esfuerzos por llegar a esta conferencia constitutiva. Este objetivo ha significado una puesta en tensión muy

grande por parte de los compañeros, que nos permite plasmar hoy la posibilidad de sacar adelante una nueva organización capaz de llenar el vacío que deja esa ausencia de un auténtico y leninista partido del proletariado, sobre la arena de la lucha de clases en nuestro país.

El proceso ya realizado es importante, sobre todo porque ha habido experiencias ya, de una cierta y mínima pero *existente* fusión de algunas de nuestras ideas, no todas, con la práctica política y con las masas, fusión que aún se realiza con timidez, vacilaciones o ciertos doctrinarismo, pero que en lo fundamental, puso en tensión al conjunto de los compañeros en la necesidad de la aplicación práctica de esas ideas.

Ha habido luchas políticas que nos han encontrado en primera fila, y también muchas luchas de masas que han contado con nuestra presencia combativa y revolucionaria. Así fue en la marcha hacia la UNCTAD, marcha que *no hubiese sido posible* sin habernos puesto nosotros decididamente a la cabeza, primero en concretarla (el MIR vaciló) y luego en evitar que se diluyera, encabezando el espíritu de lucha y combativo de la mayoría de los manifestantes, que querían el combate y no la conciliación. No fue casualidad que dos compañeros nuestros fuesen quienes quemaron la bandera yanqui frente a las mismas puertas de la UNCTAD.

También estuvimos presentes en las luchas campesinas, especialmente a fines del año pasado, a pesar de la dilución a la que nos empujó el eje nihilista burgués que luchaba contra la perspectiva de que la organización plasmará en partido. Y en solidaridad con las luchas obreras en Santa Rosa, a pesar del sabotaje consciente del MIR, que trabajó para hacer fracasar la concentración. Y en las elecciones a Rector en la U. de Chile, bregando por impedir (aún con vacilaciones y errores) que la izquierda revolucionaria jugara allí dentro un triste papel de comparsa, en vez de ser alternativa de combate por una nueva legalidad desde las bases y por la Universidad Popular Revolucionaria junto al proletariado. Y hoy en la lucha por garantizar la continuidad de las batallas del año pasado como la de Ingeniería, contra el plebiscito y por construir la alternativa revolucionaria en la "U", cuyas banderas ha dejado caer el MIR, a la cola del reformismo, tras una unidad filistea y poco clara.

También en luchas obreras importantes, cosa que nos permite saldar hoy cierta base orgánica en el proletariado industrial, lo que nos abre perspectivas importantes de un crecimiento a saltos en las grandes fábricas, perspectivas que para concretarse necesita y exige redoblar el combate en el seno de la organización, contra ideas reformistas, economicistas, de crecimiento en cuenta-gotas, que traban la fusión con el proletariado al desenmarcarse del real estado de ánimo de las masas. Por fortuna, tales ideas no provienen en lo fundamental, de nuestros compañeros obreros, cosa que ha sido evidenciada en algunas experiencias fabriles en Santa Rosa, tanto en las metal-mecánicas como en algunas textiles, que auguran pronto estallidos proletarios en algunas de esas fábricas a impulso nuestro, así como también en algunos sectores del campesinado y pobladores cercanos al cordón Cerrillos y también de Talca; procesos similares son posibles en Temuco, a condición de superar ciertos lastres doctrinarios que traban a nuestros obreros de la zona.

La existencia en Chile de una organización que levanta con firmeza una línea proletaria y comunista auténticamente revolucionaria, que se identifica en el plano internacional con procesos similares y confluyentes que buscan reconstruir el MCI revolucionario rescatando las banderas de Lenin y Marx (prostituidas por el revisionismo); proceso que tiene su centro en China y en el PC de China, a partir de algunos hechos reseñados, ha comenzado a preocupar tanto a sectores de la reacción, como al revisionismo y al reformismo.

Evidencia miedo político por parte de los sectores más negros de las clases dominantes, cuando usando el método que le conocemos para “asustar” al Gobierno, nos destaca, siendo la fuerza pequeña que somos, en la primera página de sus diarios.

Hay miedo político por parte del revisionismo cuando envía a sus principales cuadros, allí donde nosotros tenemos mayor fuerza, tratando de barrernos sin éxito, o del reformismo cuando envía emisarios para amedrentar a nuestros compañeros o intentar comprarnos; cuando *El Siglo* destaca algunas de nuestras consignas en su lucha furibunda contra la izquierda revolucionaria (lucha que parecería estar haciendo mella especialmente en el MIR, por los vuelcos hacia la conciliación con el reformismo que ha dado especialmente desde lo de Concepción en el plano político nacional, y en la Universidad después de las elecciones).

Y también tiene miedo político la propia izquierda revolucionaria pequeño-burguesa, en particular el MIR: cosa evidente y notoria, incluso sorprendente, cuando ante la impotencia para responder a nuestra línea y defender su actual viraje hacia posiciones de “izquierda del reformismo”, pretende de un modo insólito, tan sigilosamente que haría pensar que lo hace con vergüenza, expulsar administrativa y burocráticamente a los compañeros de los NBI del FER, negándose a abrir un debate de masas al respecto. Sus vacilaciones y la debilidad de sus ideas, que siembran la confusión entre sus militantes, que buscaron allí una alternativa frente al reformismo y el revisionismo, los ha obligado incluso a retroceder en varias asambleas, sin poder concretar su objetivo aún estando en circunstancial superioridad numérica, sobre todo al encontrarse frente a una firme posición de nuestros compañeros, con la cual no contaban. La exigencia en que los pone la proximidad de las elecciones FECH, probablemente apresurará definiciones en el FER, que, cualquiera sea su resultado, lo único que hará será acelerar su crisis.

Hemos iniciado la construcción de zonas obreras en Santiago, hemos retomado contacto con toda la organización a nivel nacional, con distintos regionales desatendidos durante meses durante el período de la desviación reformista y doctrinaria. Se ha viajado a Concepción, a Talca, a Osorno, a Punta Arenas y a Valparaíso, y en todos los casos los resultados son positivos en términos de crecimiento cuantitativo y cualitativo: se inició entonces en la práctica el viraje de línea que hoy se plasma aquí con esta Conferencia Nacional Constitutiva. Viraje de línea que había sido planteado como un eje de construcción de partido, entendido como una batalla política que expresaba una profunda lucha de clases en el seno de la organización, por construir o no el Partido del Proletariado.

Era por lo tanto, una lucha de clases que se expresaba por un lado en la necesidad política del proletariado de darse *su* vanguardia, cuestión que hasta ahora el reformismo ha logrado impedir con éxito en Chile, y por otro, en quienes desde el nihilismo burgués, desde posiciones enemigas o desde vacilaciones de línea, y también desde la simple irresponsabilidad política, intentaron consciente o inconscientemente impedir que una línea política se transformara en organización revolucionaria y comunista *del* proletariado, y no para el proletariado.

El objetivo trazado de llegar a esta Conferencia en un período determinado, en lo fundamental ha sido logrado. Principalmente, se consiguió tensar nuestras fuerzas, lo que permitió detectar a fondo nuestras debilidades y nuestros errores, hacer autocríticas profundas y no formales, no “golpeándose el pecho” estilo Padilla o como pretendía siempre el PCR, sino yendo a las profundas raíces doctrinarias, reformistas y espontaneistas que arrastramos (cuestiones siempre presentes en la construcción del Partido del Proletariado). Desde los orígenes de las teorías leninistas de la construcción de partido, esta discusión está presente; la polémica entre el reformismo obrero de un lado y el espontaneísmo del otro, entre el polo del reformismo kautskiano por un lado, que niega la necesidad de la fusión en la acción de las ideas del comunismo revolucionario con la clase obrera y entiende al partido y a su construcción *como un momento previo a la acción*; y por el otro lado las ideas espontaneistas de tipo luxemburguista, de aquellos que creen que el partido será simplemente un producto espontáneo y natural del movimiento; este debate lo tenemos presente también nosotros *y lo seguiremos teniendo presente*. Por lo tanto, consideramos que esta lucha de clases no termina en esta Conferencia sino que ésta salda el debate en un primer momento; (si logra agotar buena parte del debate político) y define la salida de una organización que llene el vacío político que existe en Chile alrededor de la necesidad de la vanguardia para el proletariado.

Esta necesidad no surge como un simple reclamo voluntarista de un puñado de místicos; *somos un producto histórico*. Podemos o no cumplir con el objetivo de llenar el vacío de vanguardia, sentando las bases del partido proletario, auténticamente comunista y revolucionario que exige la lucha de clases

Pero lo que aparece claro ya, de todas maneras, ante el fracaso del revolucionarismo pequeño burgués en América Latina y en Chile, ante la impotencia y la crisis del revisionismo y del reformismo (que tiene por marco la agudización de la lucha de clases) es la *necesidad histórica* del surgimiento de un partido, y a partir de él, una corriente y un movimiento organizado tras estas ideas y con los objetivos históricos del proletariado.

Hay *un solo camino* para la revolución en Chile, no varios, y por lo tanto, también *un solo partido* capaz de dirigirla. Ese camino es la revolución de hegemonía proletaria en marcha al socialismo y al comunismo, la alianza del proletariado con el campesinado y demás capas oprimidas y explotadas, la *insurrección popular dirigida por la clase obrera y su partido*. Nosotros nos proponemos hoy día una tarea de gran magnitud, cual es llenar el vacío que existe alrededor de ese camino. Y si bien la tarea es inmensa, superior a nuestras

fuerzas actuales, contamos con la fortaleza del proletariado para realizarla. Estamos conscientes pues, de que somos *un instrumento* del proletariado para cumplir sus metas históricas, y esto es lo que nos da fuerzas para afrontar el futuro con optimismo. No tenemos vocación de grupúsculo; sabemos que la dispersión de fuerzas y la atomización de la izquierda revolucionaria es producto de la ausencia de la alternativa proletaria revolucionaria, comunista y consecuencia de que hasta ahora el revisionismo supo y pudo impedir su surgimiento.

Hoy día, depende de nosotros que este proceso necesario se acorte o se alargue. Estar conscientes de esa responsabilidad es lo que nos va a permitir estar a la altura de las circunstancias, sobreponernos a nuestras fuerzas actuales para centuplicarlas. Para esto es preciso renunciar a muchas ideas y las tres ajenos a la clase obrera; comprender cabalmente de que somos un *instrumento* de ella para sus tareas revolucionarias. La existencia de una incipiente, pero sólida y real base obrera en la organización nos ayudará a ello. ¡A cumplir cabalmente, a agrandarnos y no achicarnos frente a las dificultades y las vallas que nos pone delante el enemigo de clase! Los compañeros obreros, tanto de la dirección como de la base del partido tienen entonces una gran responsabilidad, que deben asumir a fondo.

Nacemos del propio vientre de la lucha de clases en Chile. A partir de la crisis, de la agudización de las contradicciones se ha polarizado la lucha de clases, gestando así la necesidad histórica y la circunstancia que determina la *exigencia* de una vanguardia del proletariado. No es casual que esta organización nazca aquí y ahora, y que ya en su mismo proceso de gestación haya avanzado cuantitativa y cualitativamente.

Por último, será “ese viejo topo, la historia”, como decía Carlos Marx, la encargada de dar su juicio definitivo sobre el proceso. Nosotros no podemos hacer más que estar a la altura de lo que se nos reclama; aproximarnos lo más posible a la tendencia objetiva de la marcha de la sociedad hacia el comunismo, la sociedad sin clases, transitando *el camino más probable*, tal como lo enseñan las masas en su práctica diaria de lucha contra la explotación y su sistema político de dominación. Generalizar esta experiencia de las masas, elevarla a teoría revolucionaria, a acción consciente, es la *misión del partido*, que no puede realizarse *al margen* de la acción de las propias masas, ni “como momento previo” ni “como producto” de la acción de las masas, sino *en el seno de ella*.

Esta Conferencia Constitutiva tiene la responsabilidad de decidir los rumbos fundamentales, de sentar las bases sólidas para alcanzar tales objetivos.

I.- La situación actual y sus principales enseñanzas

“Hace dos años, cuando la guerra imperialista estaba aun en su apogeo, la insurrección del proletariado ruso y la conquista del poder político por él parecían a todos los partidarios de la burguesía en Rusia, parecían a las masas populares y quizás a la mayoría de los obreros de los restantes países una tentativa audaz, pero sin perspectiva. Parecía entonces que

el imperialismo mundial era una fuerza enorme e invencible, que de intentar los obreros de un país atrasado alzarse contra él, procederían como unos insensatos, pero ahora, lanzando una mirada retrospectiva a los dos años transcurridos, vemos que hasta nuestros adversarios comienzan a reconocer cada vez más la razón que nos asiste. Vemos que el imperialismo, que parecía un coloso imbatible, ha resultado ser, a los ojos de todos, un coloso de pies de barro. Estos dos años de experiencia y de lucha marcan con más evidencia cada día la victoria no sólo del proletariado ruso, sino también del proletariado internacional. (Lenin “dos años de poder soviético”, informe del 7 de noviembre de 1919, la alianza de la clase obrera y el campesinado, Moscú 1959, pp. 599).

“La comuna ha demostrado, sobre todo, que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines (prólogo a la edición alemana del *Manifiesto Comunista*, Carlos Marx, 1872).

Chile está viviendo una situación excepcional. El ascenso de la lucha obrera y campesina se hace día a día más evidente. Miles de obreros y campesinos, pobladores y estudiantes, soldados y clases, discuten el socialismo y lo que se ha dado llamar “participación” (detrás de la cual está el control obrero de la producción y el cuestionamiento del actual papel del Estado). A medida que se agudiza la lucha de clases y la polaridad del enfrentamiento, se va evidenciando que Chile se encamina a definiciones de fondo; que día a día, detrás de cada lucha y cada reivindicación, detrás de cada marcha, de cada paso adelante de la reacción y de cada paso atrás del gobierno, va apareciendo el problema *del poder* ya no como simple referencia obligada sino como *problema práctico* que se plantea a miles y miles de obreros y campesinos con toda actualidad.

La política del gobierno reformista de Allende, socialista de palabra y burgués en los hechos, encamina al país a la debacle económica. Las vacilaciones frente a la oligarquía burguesa-terrateniente que pretenden ser escondidas detrás de supuestas concesiones a las capas medias –no hacen más que agudizar el desabastecimiento, sembrar el caos en el campo y bajar la producción. La impunidad de los enemigos del pueblo llega a la insolencia, mientras el Gobierno busca ganar tiempo. Frente a esta situación (que por arriba bordea el enfrentamiento institucional comprometiendo a las Fuerzas Armadas) cunde el descontento *por abajo* y estallan luchas por doquier. No hay día que no se anuncie una toma de fundo o de fábrica, una huelga obrera en una industria, muertos y heridos en choques con los latifundistas o las fuerzas represivas; se realizan por miles asambleas masivas, y por primera vez las direcciones sindicales reformistas o revisionistas son desbordadas *hacia la izquierda* como lo evidencia especialmente la asamblea popular realizada en Concepción, la asamblea en Sumar o la situación en Mademsa. Va siendo cada día más evidente que Chile no saldrá de la crisis sin una revolución auténtica, sin la toma del poder por el proletariado y sus aliados (¡lo que exige la derrota del re-

formismo conciliador!), sin la destrucción del estado burgués y su reemplazo por un estado de nuevo tipo, revolucionario, de obreros y campesinos, en marcha ininterrumpida al socialismo y al comunismo. En Chile como en el resto de América Latina, *ha sonado la hora del proletariado*.

En nuestra resolución política, elaborada en los primeros días de mayo, decíamos:

“En función del recrudecimiento de la lucha de clases en Chile y del auge revolucionario mundial, se desarrollan procesos en el seno de sectores de la UP –en especial del PS, también del PC, el MAPU y la IC– cuya tendencia es reubicar una política que dé respuesta al ascenso revolucionario de masas. Si bien –por la ausencia de un polo proletario revolucionario– tales procesos no escapan todavía de límites en lo fundamental pequeño burgueses revolucionarios, con serias vacilaciones frente al revisionismo y la URSS, la incidencia en ellos del desarrollo espontáneo del movimiento de masas (en particular de la clase obrera) los empuja a contradicciones crecientes con la línea hegemónica en la coalición reformista-revisionista. Para agudizar estas contradicciones, la influencia de hechos de masas y políticos producto de la fusión de nuestro partido y nuestra línea con el proletariado, es fundamental.

Los procesos señalados se expresan por un lado en reagrupamientos y coincidencias de sectores del PS, el MAPU y la IC con el MIR... “La incidencia y la confluencia de estos sectores puede generar hechos y situaciones nuevas que aceleran las definiciones por arriba y el estallido de la crisis revolucionaria”.

A pocos días de publicada esta resolución, estallaron los sucesos de Concepción, donde más de 15.000 personas, en su mayoría obreros, también estudiantes, debatieron públicamente en asamblea, durante 3 horas, los problemas del poder, la revolución y el socialismo. Más tarde, pasando por encima de las vacilaciones de la coordinadora de los “rebeldes” (PS, MAPU, IC, junto al MIR y sectores del PR) las masas empujaron y lograron arrancar la marcha popular contra el momiaje, debiendo enfrentarse con el aparato represivo del Estado, puesto en acción por este Gobierno que se dice popular. Esto es lo que el MIR pretende ocultar, expresando así su esencia vacilante (característica común a todas las fuerzas revolucionaristas pequeño-burguesas). El MIR desdeña y oculta que las masas no sólo salieron a la calle contra las clases reaccionarias proyanquis, en el camino, *al chocar contra el aparato del Estado, reclamaban la caída del Intendente de Concepción, Vladimir L. Chávez, del PC*, apuntando ya, tanto en la asamblea como en la lucha callejera, *hacia el poder político*.

Se imponía allí la consigna de Asamblea Popular surgida de los consejos de obreros, campesinos, pobladores, soldados y estudiantes, revocables por las bases, para reemplazar al intendente, eso, como parte de una línea de acumulación de fuerzas que pasa por hacer estallar la bomba que se incubaba a partir del descontento popular, generalizando la lucha a escala nacional por un *poder popular revolucionario* rumbo al socialismo, sustentando en las masas

organizadas por abajo y armadas. Sin embargo, el MIR, jugando una vez más como izquierda del reformismo, desnudando la impotencia de su línea revolucionarista frenó *de hecho* la lucha, echándole agua a los brotes incipientes del incendio. Fue esa y no otra la razón por la que fueron vejados y golpeados los compañeros de los NBI en la marcha de Santiago originalmente dispuesta en protesta por la muerte del estudiante Caamaño. Allí o se empujaba a la protesta abierta contra la represión, transformándose en *polo aglutinador* de la efervescencia y el descontento popular –como intentaron empujar nuestros compañeros– o se diluía el objetivo de la marcha. Los dirigentes miristas optaron, lamentablemente, por este último camino.

Los hechos del último mes, han evidenciado la juzteza de nuestra resolución política.

Se habla de “conciencia reformista de las masas”, y eso es un equivalente del planteo del reformismo y del revisionismo, cuando dice que existe hoy “una correlación de fuerzas desfavorables”. Desfavorable es, claro. Desfavorable para la línea revisionista que hegemoniza a la UP. De este modo, aquellos que ubican la contradicción con el reformismo y el revisionismo “en el seno del pueblo”, se subordinan de hecho a él, como lo hacen también en el plano internacional frente a la URSS.

Lo que no se ve es que, a despecho de todo subjetivismo, eso *choca con los hechos y la realidad por abajo*, que está precipitando la crisis del reformismo y *también* de la línea del revolucionarismo pequeño burgués, impotente en esencia para ser alternativa frente a ella.

Se divide la UP en Concepción, a impulso del potente accionar de masas, y la directiva del PS, se cuadra entonces con la dirección revisionista, sepultando las ilusiones de aquellos que recuerdan con nostalgia el revolucionarismo verbal de los Altamiranos y la mayoría del grupo “Eleno” que hegemoniza al PS. Lo que, al contrario de lo que suponían los escépticos de la intelectualidad aburguesada, no afianza ni asegura la dominación política e ideológica del revisionismo sobre las masas obreras y populares, sino que, *al contrario*, ayuda a escindir a las direcciones reformistas y revisionistas de sus propias bases. Los que creyeron en los márgenes de maniobra del revisionismo, ven asombrados hoy cómo la euforia de la “vía chilena” se empieza a resquebrajar por los cuatro costados. A este proceso le sirve de abono el recrudecimiento de la lucha de clases. Mientras el PC revisionista negocia por arriba el pacto con la DC (echando por la borda el propio programa de la UP, frenando la reforma agraria y la expropiación de las grandes empresas) la clase obrera empuja por abajo, “le echa para adelante” y a la vez que dificulta las trenzas por arriba, estrecha el margen de maniobra de los jefes del revisionismo. Se negocia febrilmente entre el Gobierno y fracciones burguesas de las clases dominantes, el veto a la reforma constitucional de la DC, que busca imponer la restauración bajo nuevas condiciones de la propiedad privada en las grandes empresas. Y mientras Allende intenta acordar con el pulpo de “los pirañas” el freno a la estatización de las fábricas de la línea blanca, los obreros de Mademsa, empujando a los dirigentes sindicales, pasan por arriba de las maniobras y consiguen la intervención.

Pero no que quedan allí: cuando se filtra a la prensa que se designaría un interventor militar –que además es miembro del grupo de las pirañas, los propios obreros del MAPU se amotinan en el entierro de Rodrigo Ambrosio y se niegan a marchar. El Gobierno debe ceder y nombrar a un hombre del equipo de Vuskovic. Pero los obreros siguen adelante, siguen empujando, y a través de la asamblea obrera *imponiendo la democracia sindical por abajo*, exigen la toma de la administración de la empresa. ¡Los agoreros del reflujo de masas deberían haber visto a esos obreros, que mientras izaban la bandera chilena, cantaban la Internacional!

Los jefes del revisionismo son conscientes del proceso y han pasado a la ofensiva. Con lo cual se desenmascaran crecientemente. Primero, fue Volodia Teitelboim en el Senado:

“En verdad en este país se practica una siembra de odios. Pero para sembrar odios, como para provocar una pelea, una disputa, se necesitan por lo menos dos... la siembra de odio fue importada... porque en Chile el odio político no llegaba a los extremos del asesinato... fue el anti-pueblo el que lo importó; implantando un estilo desconocido en nuestras prácticas cívicas... pero lo más grave es que el odio de los extremos... va envolviendo a sectores que jamás han estado por la guerra civil y que no desean llevar a este país al despeñadero de una contienda armada... no queremos para este país ni la suerte de un Vietnam invadido, ni un Santo Domingo, ni una Guatemala. Deseamos que los problemas de nuestra nación sean resueltos por la mayoría nacional... sabiendo... que esta disputa no puede sobrepasar los límites que hagan saltar los carriles institucionales para precipitar la lucha hacia un camino que no tiene regreso... creemos que se está jugando con fuego... me parece horrible el maridaje oscuro que, en nombre de la ley, se mantiene con la violencia. Estamos contra toda forma de violencia que pueda despeñar al país en una lucha fratricida. Pero así como se necesitan dos para pelear, también se necesitan dos para evitar la querrela. Y a este respecto, creemos que la responsabilidad no es sólo de la UP, sino también del PDC y de toda la gente que... considera que los hombres justos pueden salvar a este país de... la catástrofe”.

Luego fue Corvalán en la conferencia de prensa, exigiendo un golpe de timón para maniatar firmemente a las masas. Finalmente, Orlando Millas, en un extenso artículo, explicó claramente la línea que se propone: “No se trata de que la clase obrera desarrolle una acción que la encierre en sí misma y la constituya en un estamento con criterios egoístas, sino que reagrupe junto a ella a todas las fuerzas interesadas en el progreso”. Así explica Millas la tarea esencial de la clase obrera hoy día. Luego demuestra el grado profundo de comprensión de la situación actual y del estado de ánimo de las masas obreras a que ha llegado el PC revisionista, y su preocupación por esto: “La actitud de los comunistas de encarar las reivindicaciones de una manera diferente, si no encuentra asidero en las relaciones reales entre administradores y trabajadores, puede no ser enten-

dida por muchos obreros, empleados y técnicos y llega, a veces, a aislar momentáneamente a nuestros compañeros, separándolos de algunos sectores de las masas. Por lo tanto se hace indispensable que en vez de idealizar la situación, las células... tengan debidamente en cuenta cuando la mala dirección económica... impide desarrollar los nuevos cauces... frente a lo cual no puede impedirse que estos traten de conquistar (sus) reivindicaciones, enfrentándose, igual que antes, con los responsables de la dirección de la empresa y con un estado que se les presenta como el sucesor del viejo patrón... barbaridades que denotan incomprendimientos... del verdadero carácter de la participación, echan agua al molino de la desconfianza”.

Como siempre los jefes revisionistas echan la culpa a los que ejecutan su política, de los problemas que ella les trae. ¿Cómo piensa Millas que debe resolverse esta situación? *Liquidando todos los instrumentos de participación sobre los cuales no pueden ejercer control estricto y directo*: “En todas las áreas de la economía, los instrumentos naturales y normales de la representación de los trabajadores y, por lo tanto, de la participación, son históricamente los sindicatos... una de las dificultades con que ha tropezado hasta ahora la participación deriva de que los mecanismos contemplados en el convenio CUT-Gobierno consideran por separado la actividad de los sindicatos y de los organismos de la participación propiamente tal. De ello han partido, en la práctica *determinados conflictos y diferencias artificiales y, a veces, hasta cierto grado de antagonismo entre los dirigentes sindicales y los trabajadores elegidos para integrar Consejos de Administración*”.

Y aquí Millas se desnuda: “La quimera anarquista de una propiedad directa de las fábricas, las minas y los bancos asumidos por los trabajadores de cada empresa, por consejos obreros o por consejos o congresos de productores, se transformó hace tiempo, en cualquier país, en una consigna revisionista de derecha enarbolada por sectores oportunistas contra el socialismo”.

¡Así transforma el revisionismo las ideas de Lenin en una chacra! y ya luego de haber explicado como piensa maniatar a la clase obrera para que no “perturben” su política de alianza con sectores de las clases dominantes, Millas llega al descaro burdo de citar a Lenin para justificar el abandono del programa de la UP: “En los años de la lucha por el poder soviético y por su defensa, Lenin jamás condescendió con las declamaciones de los que ven en cada batalla política la lucha final”. Con realismo descarnado encaró siempre las dificultades tal como se presentaban, para superarlas salvando el proceso revolucionario. Es así como en 1921 formuló la Nueva Política Económica. En su informe sobre la NEP... la explicó en los siguientes términos: “Y en realidad nuestra nueva política económica tiene su raíz en el hecho de haber sufrido una derrota en este punto; ahora nos dedicaremos a organizar un retroceso estratégico como quien dice: “Mientras no nos hallan vencido definitivamente, retrocedamos y reconstruyamos todo de nuevo, pero con mayor solidez”.

¿Qué pretende hacer Millas? Usar un discurso de Lenin de 1921 para justificar su línea de retroceso. ¡Esto ya es el colmo de la desvergüenza! En 1921, el poder soviético estaba aislado, acosado por la guerra civil, el hambre y las dificultades con los campesinos, y en un mundo (cosa particularmente importante) donde había sido derrotada la insurrección armada en Alemania y de-

rocado el poder soviético húngaro. Se había iniciado la contrarrevolución en Europa y la revolución mundial estaba en reflujo. En esas condiciones, Lenin dijo: preservar el poder soviético como instrumento a consolidar para proseguir desde estas trincheras la lucha por la revolución mundial. (Y digamos de paso que el poder soviético era justamente el poder de los obreros y campesinos electos por la base y revocables en cualquier momento que justamente Millas califica de “engendro anarquista”). ¿Hay reflujo hoy día? Lo que hay es reflujo de “la vía chilena”, y lo que hace este tergiversador del marxismo-leninismo, es desencajar la cita de su contexto histórico, poniéndola en otro completamente diferente, para explicar, como lo dice claramente, de que aquí se ha sufrido una derrota, golpes duros, y de que entonces hay que marchar para atrás. Y así dice: “Lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que la correlación de fuerzas ha sido afectada en contra de la clase obrera y del gobierno popular por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen transgresiones al programa de la Unidad Popular... Sería funesto seguir ampliando el número de los enemigos y, por el contrario, deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar algunas capas y determinados grupos sociales enmendando desaciertos tácticos.

En estas condiciones, en nada ayuda al proceso revolucionario poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro cuando haya condiciones más desarrolladas... ahora pueden contribuir a que despierten suspicacias, incomprendiones y resistencias innecesarias. Antes de bosquejar la etapa siguiente a la actual de la Reforma Agraria o de hacer poner las barbas en remojo a nuevas empresas capitalistas, lo que procede en primer término es aprovechar... lo que ya hay hecho para establecer una real dirección obrera y popular de todo esto”.

Millas señala luego que se puede y debe completar la reforma agraria “en los términos de la ley vigente”, e igualmente “completar la constitución del área social en los marcos del programa de la UP”. Pero advierte que aún sólo esto requiere previamente “aislar a los sediciosos, afianzar al Gobierno, consolidar su obra y modificar en su favor la correlación de fuerzas”.

En resumen, Millas está cumpliendo las condiciones que le exige la DC para llegar a un acuerdo.

Esta es la línea actual del PC revisionista expresada con toda claridad.

Así como ayer disolvieron los CUP porque las masas desbordaron los límites prefijados, hoy tienen que liquidar todo instrumento democrático que escape a su control. Ellos imaginaban que la verticalidad de los sindicatos, su transformación creciente en instrumentos para maniatar a las masas, en simples poleas de transmisión de la política del gobierno les aseguraría el control sobre la lucha de clases, para poder amortiguarla y así capear el temporal y negociar con calma con el reformismo burgués proyanqui, que les reclama para ellos el frenar la lucha, y la liquidación del propio programa de la UP en la ciudad y el campo. (Cosas que los revisionistas cumplen presurosamente).

Pero las cosas no les salen a los falsos comunistas de Millas-Corvalán. En la articulación de tal plan, la CUT es una pieza maestra. Y es justamente allí donde las masas le asestaron un duro golpe al revisionismo, lo que agu-

diza aún más la crisis del reformismo. Como decía Lenin, “los obreros votan con los pies”. Lo esencial en las últimas elecciones de la CUT ha sido un repudio masivo a la política del gobierno, en especial al PC: los obreros votaron por *sindicatos independientes de los patrones y del Estado*. En las elecciones de la CUT no se presentó ninguna real alternativa proletario-revolucionaria frente al revisionismo y la derecha. Por otra parte la burguesía reformista proyanqui se vio obligada a cambiar el rostro; a hablar de “revolución” y “anticapitalismo”, contrabandeando su empresa de trabajadores, lo que le fue facilitado por la política del gobierno, que genera un creciente enfrentamiento de los obreros con un estado que los sigue explotando, en nombre de un supuesto socialismo que no es otra cosa que impulso a un “capitalismo de Estado” fuertemente burocrático y dependiente. Y también porque quienes pretendían ser una alternativa revolucionaria, como el MIR (a través del FTR), aparecieron ante las masas como una variante de izquierda del reformismo que no cuestionaba lo esencial: la necesidad de *destruir el actual Estado* para reemplazarlo por un *Estado nuevo* de obreros y campesinos: que por lo tanto no desnudó el carácter de la política del reformismo y del revisionismo hacia los sindicatos y la CUT, que quiere transformarlos en instrumentos verticales de la política del gobierno, que, en suma, se convirtió en izquierda revolucionaria de la trampa del revisionismo y no como debía ser, en alternativa de combate por la conquista del poder *ahora*.

Se demostró en esta elección que al igual que el PC, la DC no teme al revisionismo ni al reformismo sino a los miles de obreros y campesinos que hoy profundizan la lucha de clases. A la derecha no le interesa que haya sindicatos, que los obreros se organicen y luchen; con ese objetivo la DC entra a las elecciones, pero lo debe hacer con consignas engañosas de corte populista. La tan famosa democratización de la CUT no es real (trampa en la que también entró el FTR), se acentuó por el contrario su degeneración parlamentaria. Por lo demás de más de un millón de afiliados a la CUT y de 800.000 obreros con derecho a voto, sólo votaron 450.000. El famoso mito del control del revisionismo sobre la clase obrera comienza a desvanecerse. En el mejor de los casos el PC no ha sacado más de 1/3 de los votos.

La izquierda revolucionaria, en sus variantes economicistas-doctrinarias (PCR) y revolucionarista pequeño-burguesa (MIR) no alcanzó siquiera a acercarse al MAPU, quinto partido en la elección: con ello los obreros (incluso en aquellas fábricas donde había apoyado al FTR cuando combatió (aún confusamente) al PC, como en Hirmas y el carbón) le dijeron al MIR que no están dispuestos a seguirlo en sus vaivenes que reflejan las vacilaciones de la izquierda revolucionaria pequeño-burguesa.

Caen en un error quienes ven en la alta votación DC (que según informaciones de la propia UP sería la primera o segunda mayoría) un “vuelco a la derecha de las masas”. La confrontación en la CUT era un “juego con cartas marcadas”, con las reglas de juego parlamentaristas, la degeneración de los sindicatos intentando hacer de ellos instrumentos para liquidar la democracia proletaria, como piezas del aparato de estado (proceso que el falso PC quiere acelerar) hacían de las elecciones un torneo electoralista. Por encima de cálculos

e ilusiones, los obreros demostraron *que* era lo que había que hacer en esas elecciones: golpeando duro y fuerte a una línea esencialmente conciliadora, reformista, y en los hechos contra revolucionaria, *agudizar la crisis del reformismo y de sus mecanismos de control sobre las masas*, facilitando su reemplazo por organismos reales y democráticos del proletariado, tales como los Consejos de Delegados de fábricas. Los obreros votaron contra la burocratización de la CUT, contra la explotación que existe en las empresas estatizadas, contra una política de conciliación con los grandes burgueses que frena la expropiación de las empresas monopólicas, y contra una política de negociación y forcejeo con los yanquis (que es parte de una estrategia mundial del revisionismo, de acuerdo con los imperialistas y pugna con ellos para repartirse el mundo) que también paga el pueblo, porque los acuerdos de renegociación de la deuda externa en el Club de París, los paga el pueblo al cumplir el gobierno la exigencia de devaluar el escudo y restringir el consumo para “racionalizar” la producción. (Léase: Superexplotación, aumento del ritmo de trabajo, etc.).

¿Cómo votar por quienes dicen: “Lucha para fortalecer el gobierno popular”? cuando la lucha se da no *contra* el estado burgués para destruirlo y levantar otro (que ya *no será* propiamente un estado, puesto que estará basado en la organización de las masas por abajo, a través de sus consejos de delegados revocables y sus comités de fábricas), sino que *dentro* del estado burgués, en un forcejeo por controlarlo; las masas obreras sin opción propia presente en la elección, se ven obligados a votar por *opciones que no le son propias*, y entonces canalizan su descontento apoyando a la oposición. Como hemos dicho, la derecha cataliza y aprovecha de las contradicciones que genera el gobierno con las masas a través de su política antipopular. Incluso esto ha hecho recrudecer afanes golpistas de las facciones más derechistas de las clases dominantes y la oposición burguesa; se ilusionan, dada la evolución de la situación política, en que es posible un golpe con base de masas. La aparición de Marshall en Bolivia, los acuerdos militares de este país con Perú y con los yanquis, la inestabilidad de la situación política en la Argentina, caracterizada por un auge de masas, son evidencias de la agudización de las tensiones y de la alarma frente a ello del imperialismo yanqui; sin duda alguna las fricciones por arriba se agudizarán.

Las elecciones en la CUT, por sobre todo, evidencian la ausencia de una alternativa clasista, proletario-revolucionaria, y la necesidad y urgencia de su surgimiento y desarrollo. Por eso, estas elecciones agudizan y aceleran la crisis del reformismo, pero además, los que ven en esto un afianzamiento de la derecha, olvidan que la DC *no puede* capear la crisis ni resolverla, como lo demostró el propio gobierno de Frei. El reformismo burgués proyanqui ha fracasado, y hoy fracasa el reformismo revisionista prosoviético. Una vez más, se demuestra que la única salida a la crisis es una revolución antimonopolista, agraria, antiimperialista, popular, de hegemonía proletaria en marcha ininterrumpida al socialismo y al comunismo. El vacío de dirección que empieza a generar la crisis del reformismo en el movimiento obrero, puede y debe ser ocupado por la *izquierda revolucionaria comunista*, levantando un polo de alternativa clasista e insurreccional.

Como dice la resolución política, se ha entrado en *un momento de definiciones por abajo y por arriba*.

Los revisionistas de la URSS acentúan sus exigencias al gobierno reclamando el cese de las “arrancadas de tarro” del equipo de Vuskovic. Fieles a su política de superpotencia; imperialista de nuevo tipo, exigen el *control total* del equipo económico, para negociar la “ayuda” destinada a resolver los problemas de la balanza de pagos de Chile y de la deuda con el Club de París. De allí que reclamen el peso decisivo en la política económica para Hacienda y busquen desde allí crear las condiciones para reemplazar a Vuskovic. Economía está en el tapete de las negociaciones con la DC¹.

Así como la lucha de clases es internacional, así como la lucha del proletariado y los pueblos es una sola en el mundo, la problemática internacional no es ajena, sino parte de la lucha de clases en Chile. Hay compañeros que miran el problema con anteojeras chauvinistas: no ven el entrelazamiento inseparable de las luchas mundiales y nacionales. Si hoy es posible la revolución y la toma del poder en Chile, es porque existe una coyuntura favorable en el plano internacional, caracterizada por el debilitamiento de los imperialistas norteamericanos, la agudización de las contradicciones interimperialistas y la crisis del reformismo. En el centro de ese proceso –de la lucha contra el enemigo fundamental, el imperialismo norteamericano–, está China y el Partido Comunista de China. Olvidar ese entronque con la revolución mundial y latinoamericana, lleva necesariamente a caer en posiciones estrechas, reformistas y defensistas, que empujan hacia atrás.

La política de apaciguamiento del falso PC con la DC y otras fuerzas burguesas, y con la jerarquía de las Fuerzas Armadas, responde a una política internacional del revisionismo, que ha quedado expresada claramente en el pacto firmado entre el jefe de los imperialista yanquis, Richard Nixon y el jefe de los revisionistas, Leonid Breshnev. Ese pacto ha sido hecho contra China y la lucha mundial del proletariado y sus aliados, y a espaldas y *contra* la lucha heroica del pueblo vietnamita y su partido. Dice la declaración, firmada en Moscú bajo el título de “Fundamentos de las relaciones mutuas entre la URSS y los EE.UU.:

“Los Estados Unidos y la URSS otorgan primordial importancia a la prevención del desarrollo de situaciones susceptibles de emponzoñar sus relaciones. En consecuencia, hará todo cuanto esté a su alcance para evitar

¹ Una semana después de aprobado este informe, Orlando Millas fue nombrado Ministro de Hacienda y Pedro Vuskovic salió de Economía reemplazado por el socialista Carlos Matus, anterior interventor en CAP (Compañía de Aceros del Pacífico). Nuevamente empieza a trabajar el revisionismo en las filas revolucionarias: hay ingenuos que creen realmente en un “ascenso” de Vuskovic, lo que los hace suponer que éste se impuso al PC revisionista. El Editorial del New York Times, saludando el cambio de Gabinete (al que caracteriza de “reubicación hacia el centro”) debe hacer pensar a los que se dejen engañar por la propaganda revisionista o por sus variantes “de izquierda”.

las confrontaciones militares y prevenir el desencadenamiento de una guerra nuclear”.

“Mantendrán siempre cierta moderación en sus mutuas relaciones y estarán dispuestos a negociar y resolver sus diferencias por vías pacíficas... Las discusiones y negociaciones sobre los problemas en suspenso serán llevadas a cabo dentro de un espíritu de reciprocidad, de arreglo y mutua confianza... EE.UU. y la URSS tienen una responsabilidad particular... y deben hacer todo lo que esté en su poder para que no se desarrollen conflictos o situaciones que agraven las tensiones internacionales”.

Y en el mismo momento Fidel Castro afirmaba en su discurso del 1° de Mayo de 1972: “Nosotros tenemos plena y absoluta confianza en la política exterior de la URSS. Y nosotros sabemos que las maniobras del Sr. Nixon chocarán con la política de principios de la Unión Soviética en el campo internacional” (Gramma, 7 de mayo de 1972).

A despecho de las diferencias entre Cuba y los revisionistas moscovitas y de la existencia de indudables reservas revolucionarias y clasistas en el seno del PC y del pueblo de Cuba no hay dudas de que se quieren reforzar los lazos que atan a Cuba con la URSS. Lo que no hará más que profundizar la enorme crisis que hoy sufre el revolucionarismo pequeño burgués.

Se agudiza la lucha por el control del aparato del Estado entre el gobierno y la oposición burguesa. En estos momentos se desnuda una vez más el carácter vacilante de la política de la dirección del MIR, que por boca de sus más altos dirigentes ha proclamado la existencia de un “ ‘doble poder’ en Chile... ¡Entre el Gobierno y el Parlamento” Esto es una muestra sorprendentemente profunda de las consecuencias que tienen sobre la izquierda revolucionaria la conciliación con el revisionismo. Y no constituye más que una tergiversación burda de las ideas de Marx y de Lenin que siempre concibieron la pugna de poderes como la lucha entre el poder directo de las masas *organizadas por abajo* y el poder del estado al cual es preciso destruir.

Para avanzar en destruir a los enemigos fundamentales de la clase obrera y el pueblo chileno, es preciso, *enfrentar y derrotar* a quienes hoy se transforman en la *traba principal* para lograr ese objetivo, los falsos comunistas del PC y sus aliados social demócratas hoy encarnados en la cúspide del estado burgués al cual llegaron montados en la oleada revolucionaria de masas y con el propósito fundamental de *desviar* el proceso revolucionario que se incubaba en las entrañas de la lucha de clases. Mientras el MIR no comprenda esto seguirá siendo la izquierda radicalizada del reformismo.

Pero es preciso comprender que el revolucionarismo pequeño burgués no romperá con el reformismo a menos que se desarrolle la *corriente revolucionaria comunista*, clasista y proletaria, capaz de levantar con fuerza, a partir de *fundirse* con las masas obreras y populares, un polo real proletario-revolucionario, socialista e insurreccional, que hegemonice, organice y dirija la lucha popular contra los enemigos fundamentales y el revisionismo.

Esas son las *principales enseñanzas* que nos dejan estos meses de intensa lucha de clases. Hirmas, el carbón, Chuquicamata, Melipilla, Sumar, Madem-

sa, Fensa y ahora CIMET y Maipú y sobre todo, *Concepción*, ratifican que el proletariado y el pueblo buscan un camino y una alternativa revolucionaria capaz de conducirlos exitosamente hacia el poder. Frente a la ausencia de una vanguardia clasista del proletariado, ante la traición del revisionismo, surge una izquierda revolucionaria pequeño-burguesa, incapaz de romper por sí sola con el revisionismo, y desde ya, impotente para dirigir al proletariado. Urge el surgimiento y desarrollo de la izquierda revolucionaria *comunista* capaz de llenar ese vacío y de ser el instrumento necesario del proletariado en su lucha por la conquista del poder y la instauración de la dictadura del proletariado rumbo al comunismo. Destacamento nacional del proletariado revolucionario y comunista del mundo entero, cuya reconstrucción y unidad hoy es posible merced a la existencia del Partido Comunista de China.

II. ¿Insurrección o “vía chilena”?

Nosotros, en base al análisis de la realidad, partiendo de lo que está creando la *lucha de clases* del proletariado y sus aliados, y de lo que ha creado históricamente durante largos años, hemos concluido que se avecinan tormentas revolucionarias y que, como lo señala nuestra resolución política, el *gran problema* es el retraso en la construcción del partido del proletariado capaz de vanguardizar el proceso hacia el poder.

Hay quienes nos dicen “aventureros alocados”, “neochinos ultraizquierdistas”, etc. Si tales epítetos vinieran del revisionismo, que –como aparece claro en el discurso de Orlando Millas– califica de “anarquismo” a las teorías leninistas sobre el estado, no nos preocuparía: quienes llaman “socialismo” a un capitalismo de estado burocrático, quienes ven sus aliados en la derecha y sus enemigos en la izquierda, quienes buscan el acuerdo con el imperialismo contra la revolución, nos honran insultándonos.

El problema es que tales calificativos, dignos de un revisionista, vienen de aquellos, que, como el MIR, han hecho profesión de fe de la lucha contra “el sectarismo” y agitan la bandera de la revolución. El MIR ha comenzado también a aplicar mores benévolos hacia su derecha, y ha de enfrentarse con quienes están a su izquierda. Problemas que tienen que hacer pensar a los militantes del MIR.

¿Quiénes son los que nos dicen “aventureros”? ¡Los que se identifican con la línea del terrorismo urbano, comandista, pequeño-burguesa, del ERP y otros grupos foquistas o neofuquistas de América Latina! ¡Los que nacieron como un grupo de terrorismo urbano a la lucha política en Chile! (línea de la que sólo se autocritaron ante el revisionismo, –llegando incluso a integrar la guardia personal de Allende–, pero no ante las masas). Son revolucionarios que, sin embargo no señalan *cuál es* el camino de la destrucción del estado burgués y de la conquista del poder y que cuando lo hacen remedan al revisionismo en la suplantación de las ideas marxistas y leninistas sobre el estado burgués y el estado proletario, caracterizando el enfrentamiento actual entre el Gobierno y la oposición burguesa *dentro* del estado burgués como “situación de doble poder”. O que, siguiendo los pasos de quienes optaron en

América Latina por el acuerdo con el revisionismo, *también* revisan el carácter del *ejército*, reclamándole a la UP “no acelerar la integración de las FF.AA. al desarrollo nacional”, en momentos en que el Gobierno le entregaba al Ejército el control de Santiago para evitar que las masas salgan a la calle, después de la concentración de “las ollas vacías” en diciembre. Lo que lleva a Miguel Enríquez en la concentración del FTR en el Caupolicán, a decir: “Con el proyecto de Carmona, *se quiere arrastrar a las FF.AA.* a tareas policiales y represivas de gobierno interior, que sólo han asumido en países dictatoriales, como Brasil, Uruguay, Grecia o Indonesia. Se quiere colocar a las FF.AA. contra el pueblo. Se pretende colocar a las FF.AA. al servicio de los odios, rencores y rivalidades de los parlamentarios de la reacción”.

(El que Enríquez haya olvidado mencionar al gobierno dictatorial de Lanusse –a quien el PC revisionista argentino dejó de llamar dictadura desde hace más de un año– no nos parece una simple casualidad).

¿Qué decía Lenin al respecto en 1917?

Respeto a la dualidad de poderes y acerca del Ejército:

“¿En qué consiste la dualidad de poderes? En que junto al gobierno provisional, junto al gobierno de la burguesía, se ha formado otro gobierno, débil aun, embrionario, pero existente sin duda alguna y en vías de desarrollo. Los soviets de diputados, obreros y soldados”.

Y aclarando respecto de los soviets agrega: ¿cuál es el carácter político de este gobierno? es una dictadura revolucionaria, es decir, un poder que se apoya directamente en la conquista revolucionaria, en la iniciativa directa de las masas populares directas desde abajo, y no en la ley promulgada por el poder centralizado del Estado. Es un poder completamente diferente del de la república parlamentaria democrático-burguesa que impera hasta ahora en los países avanzados de Europa y América. Estas circunstancias se olvidan con frecuencia, no se medita sobre ellas, a pesar de que en ella reside toda la esencia del problema. Este poder es un poder del mismo tipo que la comuna de París de 1871. Los rasgos fundamentales de este tipo de poder son:

- 1.- La fuente del poder no está en una ley, previamente discutida y aprobada en el Parlamento, si no en la iniciativa directa de las masas populares desde abajo y en cada lugar, en la “toma” directa del poder;
- 2.- Sustitución de la policía y el ejército, como instituciones apartadas del pueblo y contrapuestas a él, por el armamento directo de todo el pueblo;
- 3.- Los funcionarios y la burocracia son sustituidos también por el poder directo del pueblo o, al menos, sometidos a un control especial, se transforman en simples mandatarios, no sólo elegibles si no removibles en todo momento, en cuanto el pueblo lo exija, se transforman de casta privilegiada, con una elevada retribución, con una retribución burguesa de sus “puestecitos”, en obreros de un “arma” especial, cuya remuneración no exceda al salario corriente de un obrero calificado”. (Lenin. La dualidad de poderes, OE, tomo II, p. 44).

“El marxismo se distingue del anarquismo en que reconoce la necesidad del Estado y del Poder Estatal durante el período revolucionario, en general, y en la época del tránsito del capitalismo al socialismo en particular”. El marxismo se distingue del “social democratismo” pequeño burgués y oportunista de los señores Plejanov, Kautsky y Cía., en que el Estado que considera necesario para esos períodos no es un estado como la república parlamentaria burguesa corriente si no un estado del tipo de la comuna de París.

Las diferencias fundamentales entre este último tipo de estado y el anti-guio estriban en lo siguiente: de la república parlamentaria burguesa es fácil volver a la monarquía..., ya que queda intacta toda la máquina de opresión: el ejército, la policía y la burocracia. La comuna y los soviets de diputados obreros, soldados, campesinos, etc., destruyen y eliminan esa máquina.

La república parlamentaria burguesa dificulta y ahoga la vida política independiente de las masas, su participación directa en la edificación democrática de todo el estado, de abajo a arriba. Con los soviets... ocurre lo contrario... suele objetarse que el pueblo ruso no está preparado todavía para “implantar” la comuna. Es el mismo argumento que empleaban los defensores del régimen de la servidumbre, cuando decían que los campesinos no estaban preparados aun para la libertad” (Lenin, Las tareas del proletariado en nuestra revolución, oe, tomo II, p. 59-60).

Los compañeros del MIR le contestan a Carmona que *hoy* no practican el terrorismo personal, estamos de acuerdo, pero *no* en defenderse frente a la burguesía, sin señalar la vía de acceso al poder: ‘eso es oportunismo! y por eso preguntamos:

¿Cuál es el camino para la revolución en Chile? ¿Apoyar al gobierno?

Nosotros decimos que en Chile está planteado el problema del poder, que el reformismo prosoviético *ha fracasado*, que el país va a la crisis y el Gobierno *se encamina* hacia el derrumbe. Y decimos también, a diferencia del MIR: el imperialismo y sus aliados *aún* tienen fuerza y poderío, *pero* la *tendencia* fundamental *es la revolución*: esto quiere decir que *puede* que, por la incipien- cia de la vanguardia y el aún vigente peso de reformismo, triunfe *temporalmente* un gobierno de derecha apoyado en un golpe de Estado (tal como sucedió en Bolivia) o en una maniobra “legal” parlamentaria apoyada en sectores del ejército. Pero que ese triunfo será *totalmente inestable y precario*, porque por un lado no existen condiciones mundiales ni nacionales para que las clases dominantes puedan resolver o paliar la crisis del sistema y absorber a las masas, y además, por el otro, porque existe en Chile, a diferencia de Brasil, por ejemplo, un proletariado de una larga tradición de lucha y de organización, de resistencia a los capitales y de combate por los derechos políticos y democráticos, que han arrancado al sistema una democracia a la que no renunciará sin combatir.

El Gobierno actual es débil, conciliador y reformista, y por la acción de su propia política está perdiendo el sustento de masas; día a día se ve obligado a apoyarse más y más en el aparato estatal y en el Ejército para subsistir.

La clase dominante está *dividida, debilitada y en crisis*, lo que agudiza sus dificultades para encontrar una opción política que atraiga a las masas, por lo que el sector demoliberal busca una opción en el capitalismo de estado a través de la negociación, mientras que el sector más tradicional, ligado a la oligarquía financiera, la gran burguesía agraria y terrateniente –los más golpeados por el proceso nacionalista– empuja en cambio tras salidas drásticas dirigidas a derrotar al Gobierno.

Frente a ambos se impone levantar una *nueva alternativa de poder: la Asamblea Popular*, basada en los *Consejos de Delegados obreros, campesinos, soldados, pobladores y estudiantes*, y sustentada en las *milicias obreras y populares, en el pueblo organizado y armado, asamblea popular* que será la base del nuevo poder popular revolucionario, órgano de la *insurrección triunfante*.

La vía revolucionaria y la táctica de acumulación de fuerzas

Estamos de acuerdo con el MIR cuando dice: “Se trata de no despreciar otras formas de lucha” que la lucha armada. La clase obrera utiliza *todas las formas de lucha* en el camino hacia el poder. Lo que pasa es que hay que puntualizar *cuál es la vía de la revolución* hacia la cual *confluyen* todas las formas de lucha, violentas o no; y en función de ella, *cuál es el camino fundamental de acumulación de fuerzas*. Nosotros decimos, a diferencia del MIR que en este país de estructura deformada por la dependencia con resabios precapitalistas en el campo y con un importante sector de capas medias asalariadas y propietarias de la ciudad y del campo, oprimidas y explotadas por los monopolios, los bancos, y los grandes dueños de los fundos, el tipo de poder está caracterizado por *la alianza del proletariado con el campesinado pobre y las capas medias rurales y urbanas, bajo la hegemonía del proletariado*.

Es decir, una *dictadura democrático-revolucionaria* sustentada en la *alianza obrero-campesina*, que se corresponde a una *fase de transición popular avanzada*, de revolución antimonopolista, antiimperialista y agraria en marcha ininterrumpida al socialismo y al comunismo, tránsito *garantizado por la hegemonía proletaria en el nuevo estado y el nuevo poder*.

Según el MIR, muy caro a las simplificaciones (y que en general olvida que el socialismo es sólo una etapa de transición al comunismo, que se corresponde con un poder cuya forma es la *dictadura del proletariado*), “no hay otra revolución que la socialista”. Nosotros decimos: Nuestro objetivo es el comunismo *como parte de la revolución mundial*. Para ello el *único camino eficaz y posible en Chile* en la actual fase del imperialismo, en las condiciones del capitalismo dependiente, es que el proletariado *conduzca una alianza de clases explotadas y oprimidas* capaz de conquistar el poder y abrir curso así a la dictadura del proletariado rumbo a la *desaparición del estado y la instauración del comunismo*, junto al proletariado mundial, y derrumbando el sistema imperialista de dominación. Y decimos más: *Hoy eso es posible, gracias al auge revolucionario mundial, al cambio en la correlación mundial de fuerzas a favor del proletariado y sus aliados, a partir de la Revolución Cultural China, el Mayo francés, la Revolución Indochina y el auge de la lucha popular continental, a pesar del reformismo y el*

revisionismo. Situación sustentada en la crisis mundial del imperialismo que hace fracasar todos los caminos tendientes a absorber a las masas ya que existe un polo revolucionario mundial en surgimiento con centro en China.

Respecto a las opiniones del MIR acerca del carácter de la revolución, recordamos la polémica de Lenin con Rykov: “El camarada Rykov ha dicho también que no hay fase de transición entre el capitalismo y el socialismo. Eso no es verdad. Eso es romper con el marxismo”. (Informe resumen a la Séptima Conferencia del P.O.S.D.R. (B) Abril 1917, Lenin OE, tomo II, pág. 105).

Es muy fácil hablar de socialismo y luego subordinarse a la política burguesa del revisionismo. Pero esa línea sobre el carácter de la revolución empuja al MIR a *aislar al proletariado de los campesinos*. Los campesinos quieren *la tierra*, y nosotros queremos garantizar la alianza para que el proletariado pueda avanzar hacia la conquista del poder, y la dictadura del proletariado. Es por eso que *no* estamos de acuerdo con la línea campesina del MIR ni tampoco con la línea campesina de los sectores más de izquierda del propio Gobierno, Gobierno que plantea para peor, la estatización de la tierra “para incorporarla al desarrollo nacional”.

Es por eso que cada vez más campesinos se enfrentan al Gobierno, al que ven, facilitada la penetración de la DC por esa política, como al “momio rojo”, así como los obreros de las industrias estatizadas ven a una gran parte de los interventores como “los nuevos patrones”.

Para esa línea, un solo camino posible: *la insurrección de todo el pueblo dirigida por el proletariado*. No se trata de impulsar como camino central las formas de lucha armada propias de otras capas y clases, como el terrorismo urbano o la “guerra popular”. Se trata de impulsar *aquel* camino, el *único* que puede recorrer el proletariado *para protagonizar como clase la revolución y la lucha armada*

Por otra parte: no hay “dos vías” de la revolución, no existen una vía “pacífica” y una “no pacífica”.

La teoría de “las dos vías” es una de las tantas tergiversaciones del revisionismo. Preocupa, por ello, lo dicho por Miguel Enríquez en el Caupolicán: “Son los dueños del poder y la riqueza los que decidirán en qué terreno se harán las cosas en Chile, dependiendo de cuál sea la forma en que se decidan a defender sus privilegios”.

Ese es el lenguaje de los revisionistas: eso es ilusionar a las masas en que los “dueños del poder y la riqueza” chilenos son o pueden ser distintos a los capitalistas de cualquier país, ilusionar a las masas en que los capitalistas, dueños *no sólo* de la riqueza sino del Ejército (o de una buena parte de él), la Justicia, el aparato burocrático del Estado, etc., dejarán *sin lucha* sus privilegios, dejarán derrumbarse su estado y su sociedad sin organizarse y sin luchar, y, lo que es peor: *ilusiona a las masas en que es posible construir el socialismo sin destruir la maquinaria estatal burguesa*.

Que quede bien claro: no despreciamos ninguna forma de lucha que aporte al camino estratégico fundamental, *la insurrección general*, apoyada y sustentada en los obreros y campesinos *organizados y armados* en los *Consejos Obreros y Populares y las milicias*.

Por lo demás, entrando al terreno de la acumulación de fuerzas, para ese camino, el *único* de la revolución chilena, existe un camino de acumulación *insurreccional* de fuerzas.

Este no es un momento *pacífico* de la lucha revolucionaria; es un momento donde recrudece día a día la violencia en la lucha de clases. *Organizar, conducir y unir a las masas obreras y populares para avanzar en la lucha de clases violenta, con vistas al poder político*, es el camino de la acumulación de fuerzas. Hay que tener en cuenta para ello, que en la actual fase del desarrollo capitalista, *ha cambiado la relación entre la lucha económica y la lucha política*. No es posible analizar con criterio libresco la *realidad viva* de las formaciones económico-sociales desde la pura doctrina del *modelo* económico: de ese modo, la realidad se la ve muerta, estática, y no cambiante, viva, como es realmente.

Actualmente, en la época del imperialismo, y más aún, avanzada la fase de *centralización y concentración capitalista, toda la política laboral y salarial es planificada a largo plazo*, como una parte articulada en la política económica de las clases dominantes. Es otra vieja mentira revisionista desmentida por la vida, que “el plan” caracteriza a la sociedad socialista. El plan es hoy ingrediente esencial de la economía de mercado.

Por lo que las luchas económicas se transforman *rápidamente en luchas políticas, y de aquí al enfrentamiento con el sistema*. Cualquier pliego da lugar a que el Estado intervenga “como mediador”, en el caso de las empresas privadas, en las estatales, este papel lo juega el sindicato (tal como lo concibe el revisionismo que está en la cúspide).

Los convenios CUT-Gobierno *son parte de una política económica*, y el Gobierno no está dispuesto a apartarse de ésta, pues si lo hiciera, se desequilibraría el plan económico, como ya se está viendo hoy día. Esto es así, porque, especialmente en las condiciones de los países capitalistas dependientes de América Latina en el marco de la creciente debilidad del imperialismo yanqui, se hace extraordinariamente débil, endeble, frágil el sistema de equilibrio, lo que *limita extraordinariamente el margen de maniobra y de concesiones del Estado y los grandes capitalistas, frente a la lucha económica de los obreros y las exigencias de las capas medias*. Por lo que rápidamente la lucha, en condiciones en que se agudiza la superexplotación, adquiere el carácter de una *confrontación con el Estado*.

Las tomas de fábricas y fundos, el reciente episodio donde muriera un industrial momio, la situación en Mademsa, donde ante el auge de la lucha obrera el Estado hace intervenir a la Contraloría, la tendencia a designar interventores militares por parte de Allende en lugares de conflicto explosivo, la reaparición del Grupo Móvil para reprimir al pueblo en nombre del supuesto “Gobierno Popular”, (medida impulsada y apoyada por el PC Revisionista) y, especialmente el creciente cuestionamiento por parte de los obreros en las grandes empresas intervenidas de un régimen que los margina del *protagonismo directo en la planificación y el control de la producción, la distribución y el consumo* y el reclamo de la *democracia obrera*, que están expresando un grado elevado en el desarrollo de la conciencia de clase de los obreros industriales, demuestra que esto es así. *Prácticamente ninguno de los conflictos del último período ha dejado de cuestionar ya sea al Parlamento, al Gobierno, al aparato*

burocrático estatal, a los carabineros o al Ejército. La expresión más elevada de esta realidad está dada por grandes movilizaciones masivas alrededor de problemas políticos: la gran concentración de Santiago y especialmente la de *Concepción*.

La táctica de acumulación en la lucha de clases violenta, se acerca hoy día a día al plano de la *huelga política de masas*. Y ella es el preludio de la insurrección.

Nosotros no levantamos hoy la consigna de derrocar al Gobierno. Tal idea sería aventurera e insensata. Levantamos la consigna de construir *los embriones del poder obrero y popular*, los consejos obreros, populares, campesinos, y sus milicias, y la consigna de avanzar en ese camino por el control obrero, la nacionalización y entrega de la tierra a los campesinos, y el control de toda la banca y el comercio exterior, anulando los convenios leoninos y la deuda externa con las potencias imperialistas en marcha hacia la insurrección que acabe con el Estado actual para suplantarlo por un Estado Popular Revolucionario dirigido por la clase obrera.

El peso del reformismo y el revisionismo, la ausencia de una vanguardia proletaria y comunista, ha posibilitado a las fuerzas burguesas y al revisionismo, capear el temporal y amortiguar crisis profundas (que sin embargo han abierto brechas importantes); *pero no les ha permitido avanzar*, el camino es pues, *generalizar nacionalmente la experiencia de Concepción, a partir de hacer estallar los conflictos latentes en la inmensa mayoría de las grandes fábricas, minas y fundos*.

Los falsos comunistas dicen: "son anarquistas que quieren el caos y la subversión". Nosotros somos marxistas y como Marx, decimos que frente al sistema capitalista y al Estado burgués, somos "el partido de la subversión". ¡Queremos, sí, agudizar a través de *impulsar la lucha de las masas, el "caos" entre los de arriba, en el Estado, el Ejército, y las filas de las clases dominantes y de los revisionistas que se apoltronaron en la cúspide del Estado burgués!*

Es oportunismo, pero además, *infantilismo revolucionario* y también desconocimiento de las leyes del proceso histórico, y del curso actual del capitalismo dependiente, concebir que debe llegarse inexorablemente al enfrentamiento con *toda la clase dominante unida*, por un lado, y no ver por otro de aprovechar la democracia que las masas le han arrancado al Estado para avanzar *utilizando las contradicciones que se generan en el Estado entre el gobierno reformista y la oposición burguesa-terrateniente, para impulsar un poder revolucionario de las masas obreras y populares, decidiendo en cambio, marchar a la cola del Gobierno Reformista*. Recordamos al respecto, la carta de Federico Engels a Bebel, del 28 de octubre de 1872: "en la vida real... la revolución empieza de modo precisamente opuesto, juntándose la mayoría del pueblo y también de los partidos oficiales contra el gobierno, que con ello queda aislado, y derrocándolo... Sí, como Vollmar quisiéramos empezar por el acto final de la revolución, nos encaminaríamos por una vía miserablemente mala".

Así destruye el marxismo la idea simplista (que conduce a la derrota) implícita en la consigna "socialismo o fascismo", consigna que va en contra de toda la inmensa experiencia recogida de las revoluciones ocurridas en este siglo. Sólo el troskismo sostiene ese dogma absurdo, y no por casualidad jamás el troskismo dirigió revolución alguna.

III. Crisis del reformismo revisionista y su proyecto

Somos “locos y aventureros”. Pero ¿existe o no una base objetiva y real para levantar la consigna de poder, para ponerse a la cabeza de las masas por la insurrección y el socialismo?

Parecería ser que aquellos que hablan de “defender al Gobierno Popular” contra “la reacción y el fascismo” (a pesar de que en el último tiempo se ha acentuado su distanciamiento respecto del revisionismo especialmente) consideren que en lo fundamental *no es así*.

El grueso de las medidas progresistas tomadas por el Gobierno de Allende fueron dictadas por la necesidad de encauzar y calmar la efervescencia popular, y en ningún caso, a pesar de las ilusiones generadas por estas medidas, con la intención de cambiar las relaciones de producción.

Una serie de importantes medidas en favor del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las masas obreras y populares se adoptaron en los primeros meses. Especialmente la nacionalización de las riquezas básicas (nacionalización del cobre, estatización del mineral de hierro, carbón y salitre), la estatización de gran parte de la banca privada (en base a la *compra de acciones* por el Estado), expropiación (en un año) de 1.300 predios de más de 80 hectáreas de riego básico (más de 3 millones de hectáreas), incorporación al Estado (aunque en su gran mayoría solamente requisadas o intervenidas) de los grandes monopolios del cemento, industria textil, siderúrgica básica y otras del área metalmecánica, las principales empresas pesqueras, y el monopolio de la cerveza, la principal empresa elaboradora de cobre, etc.

En el plano del comercio exterior, fundamentalmente, cierta diversificación.

Lo más significativo fue el esfuerzo en la redistribución del ingreso, con control de los precios, de la inflación y de la devaluación de la moneda. Así, en un año, la inflación se redujo del 35% a un 22,4% (aumentando en un 20% el ingreso real de los asalariados). La reactivación del consumo y la disminución de la cesantía (que llegó a bajar del 8,3% al 3,6%). El aumento de la producción (alrededor de un 14% de la producción industrial, y de un 8% el producto bruto) y de la inversión pública.

En este período, desde el 9 de noviembre de 1970, hasta fines de junio de 1971 fueron ocupados según parte de carabineros, más de 874 predios agrícolas: especialmente entre septiembre y octubre, proliferaron los CUP, las tomas de fábricas, el control obrero de hecho de la producción en varias grandes fábricas, y el control en los bancos, a cargo de los CUP, tendiente a impedir la fuga de capitales y el caos económico que quisieron generar las clases dominantes mediante el sabotaje directo.

El objetivo *explícito* de la política del Gobierno en este período fue “ensanchar la base política del Gobierno”. Si bien Vuskovic afirma que la política económica tiene que subordinarse “sirviendo principalmente como instrumento para ampliar y consolidar las posiciones de poder de los trabajadores”, ya en el discurso del 1° de mayo de 1971, luego del triunfo electoral de abril de 1971, Allende afirmará que el problema de fondo era “la disciplina laboral” y el aumento de la producción mediante el esfuerzo “consciente” de los trabajadores”.

Para entonces el Partido Comunista Revisionista había logrado disolver los CUP, sin que ningún sector político opusiera mayores resistencias. Pero el proletariado y las masas no cesaron en sus luchas. Siguieron buscando caminos para encauzar su empuje revolucionario. La lucha de clases no se detuvo en Chile, pese a la ilusión de Allende y del falso PC.

A un año y siete meses de gobierno, la ilusión se terminó. Los estrategas de la UP decían en 1971 “sustituiremos la estructura predominantemente capitalista por el predominio de relaciones socialistas de producción” (Pedro Vuskovic, octubre de 1971). La ilusión de Vuskovic es, quizás, que eso es posible desde lo económico *sin tocar* lo político. Un reformismo de izquierda “optimista” que, como lo reconocen los propios estrategas del Gobierno, hoy ya no tiene asidero en la realidad.

El Gobierno fue articulando un sistema de alianzas por arriba, en donde lo fundamental era frenar a toda costa el empuje revolucionario de las masas y si ayer desbordaron los CUP hoy desbordan los comités de producción, las asambleas obreras, etc. Los obreros destituyen interventores, pasan por arriba de la Contraloría o la Justicia (como en Mademsa, Fensa, Melipilla, etc.), en fin, reclaman bajo formas, diversas, *el poder*. Es cuando el Partido Comunista Revisionista le tiende la mano al PDC, y Fuentealba le responde prestamente que la DC está dispuesta a crear “una franja de estabilidad democrática” mediante el acuerdo con “los partidos sensatos” de la UP. Es la búsqueda del acuerdo común contra las masas revolucionarizadas, expresión particular, *específica en Chile* de la “moda” que recorre a las clases dominantes debilitadas de América Latina, “moda” de la que dan un buen ejemplo Lanusse y Perón en Argentina con el “gran acuerdo nacional” (en el que entra “de izquierda” el PC), Paz Estenssoro (el MNR) y la falange socialista en Bolivia, y los blancos y los colorados en Uruguay. *Concepción alertó al Gobierno* y a la oposición de que había *algo nuevo* en la situación política: que la UP y el PC controlan con crecientes dificultades *el desborde espontáneo de las masas*.

Es que sólo en un año, autoasumiéndose como administrador de un capitalismo dependiente en crisis, el Gobierno pasó de la euforia a la impotencia. Inevitablemente, pretender resolver la crisis *en los marcos* del capitalismo dependiente, exige que ésta se descargue sobre los trabajadores.

Se habla hoy de que los trabajadores han llegado al Gobierno, sin embargo lo que hace un año y medio generaba expectativas en las masas hoy ya sólo genera indignación. Las masas están hartas del cuoteo, de la burocracia, y sobre todo se encuentran al borde del estallido a consecuencia de la exacerbación de la explotación. Se descomponen las máquinas y no hay repuestos, baja la importancia de materias primas, baja la producción, y quienes deben enjugar esos problemas *son los obreros*, mientras el Gobierno negocia con los grandes capitalistas. En el campo, los empleados estatales sustituyen hoy día al viejo “recaudador de impuestos” napoleónico, y a la sangría a la que se sometía al campesino en el fundo del terrateniente. La producción baja, hay anarquía en la explotación agraria. Y los antiguos propietarios hacen pingües negocios con los instrumentos y aperos de labranza, y contratan a campesinos desesperados, nada se hace por terminar con los

monopolios bodegueros. *Cunde realmente* el desabastecimiento: el Gobierno concilia con los representantes políticos de los grandes monopolios: ¿Cómo puede controlar la evasión, el sabotaje al que tanto se refiere el PC Revisionista, lamentando la “incomprensión de los grandes empresarios”?

Desde el 1° de enero de 1972 se aprobó el reajuste contemplado en el Convenio CUT-Gobierno: acuerdo a espaldas de los trabajadores, hecho por arriba, contempla el 22,1% de aumento, las alzas producidas casi simultáneamente en productos básicos transformó el reajuste en una burla. Ya en abril, el índice fue de 19,8% *para los tres primeros meses del año*.

¿Cuánto está ganando de básico un obrero que ingresa a la industria? E° 850, los interventores solamente ganan arriba de E° 16.000 y a veces el doble...

Mientras la clase obrera recibe aumentos miserables y paga los errores de los funcionarios estatales designados por cuoteo y *también* las concesiones a los grandes burgueses y latifundistas, mientras crece la inflación (aumentando las ganancias de los capitalistas que aun son dueños de las grandes fábricas y de gran parte de las tierras fértiles de Chile, y se encarecen las mercancías –y desaparecen del comercio, donde cunde la especulación sin control– los funcionarios de Gobierno, los diputados, los jueces, y la alta oficialidad del Ejército (que además de sus sueldos reciben prebendas y regalías tales como tierras, casas y participación en la ganancia de empresas en las que participa como dirección) los académicos de varios años, ganan sueldos fabulosos, en una proporción de 10 a 1 y más también respecto a los obreros.

El programa básico de la UP contemplaba un mecanismo automático de reajustes de remuneraciones cada vez que el costo de la vida aumentara en un 5%. Obviamente, no se ha cumplido en esto (como tampoco en la disolución del Grupo Móvil, el reemplazo del Parlamento por la Asamblea del Pueblo, la ley de arriendos y muchos puntos más); entre otras cosas, la promesa de terminar con las devaluaciones de la moneda que favorecen a los importadores y golpean a las masas, tampoco se ha cumplido: el dólar negro se cotiza ya arriba de E° 160, y el oficial ha sido devaluado ya tres veces, el Gobierno deberá importar más de 300 millones de dólares en alimentos este año. Sólo en trigo se importará un 54% del consumo nacional lo que constituye un aumento del 35%. Las grandes minas como Chuquicamata, como El Salvador y El Teniente (sacudidas en forma constante por luchas obreras) disminuyeron su producción en 1971 en 50.000 toneladas. Y además, ha bajado el precio del cobre en el Mercado Internacional de Londres, lo que, considerando que el cobre es el principal rubro exportador, genera una difícil situación para la reserva de divisas.

Obviamente, la capacidad instalada de las industrias ha llegado a su máximo, sin que se halla expandido la producción industrial y sin que se hallan creado bases para la diversificación industrial (o sea, sin resolver la distorsión fundamental de la dependencia). La desocupación otra vez se ha elevado –en marzo de 1972– a 4,8%, hay signos de *recesión económica*. Problemas que se agudizan si se toma en cuenta la tremenda deuda externa del país, que asciende a más de 4.000 millones de dólares, una de las más abultadas del continente.

Ante esta situación recrudece el debate en las alturas. No es casual un artículo de Cademártori (negociador en el Club de París por el Gobierno de Chile) en *El Siglo*, señalando “que el proletariado comprendería su rol de vanguardia... para hacer *los sacrificios necesarios* que permitan ganarse a las capas medias”.

Se conoció en Chile que el FMI exigía un acuerdo de stand-by para resolver la renegociación de la deuda externa en el Club de París. El Gobierno rechazó indignado lo que calificó de “presión inadmisible”. Poco después de anunciado el acuerdo en París, se cumple aquí una de las cláusulas que trae implícito el stand-by: la devaluación de la moneda y ya está en marcha la segunda, motivo central de los misteriosos cónclaves en Lo Curro: restringir drásticamente el gasto público, y el consumo, lo que en buen romance quiere decir apretar aún más el cinturón de los trabajadores para pagar la crisis. Una reedición –en condiciones de un Gobierno que impulsa un capitalismo de estado dependiente, dándole el nombre de “socialismo”– de las políticas monetaristas aplicadas por las clases dominantes latinoamericanas en sus períodos de crisis... (que no sólo no resuelven ningún problema, sino que más tarde o más temprano estallan en una incontenible espiral inflacionaria). No sólo eso; la política de ampliación del crédito ha fracasado también, cuestión que golpea fundamentalmente a las capas medias, puesto que el crédito a las grandes empresas no se restringió sino que se amplió moderadamente a los sectores pequeños. Las cifras demuestran que en Chile, como ocurre siempre en la sociedad capitalista, la tendencia actual es –una vez más– *la concentración de crédito en pocos clientes*.

En tal situación, las clases dominantes lanzan una poderosa ofensiva tendiente a recuperar posiciones en el aparato del Estado y en la estructura económica. Hay varias resoluciones judiciales favorables a la restitución de empresas: se destituyó al Director de Dirinco, se suspende al Director de Investigaciones, etc.

Mientras tanto, Allende proclama en su discurso ante las Cámaras del 21 de mayo: “un régimen social es auténticamente democrático en la medida que proporciona a todos los ciudadanos posibilidades equivalentes”. ¡Bonito marxista! semejante definición de democracia es la que dio siempre la burguesía para defender su régimen de explotación. Causa estupor el pensar hasta dónde ha llegado la mistificación política, como para permitir que a este jefe populista se lo califique de “líder revolucionario”. Su filosofía política queda clara cuando dice (en el mismo discurso):

“Las instituciones políticas resistieron sólidamente la presión extranjera (en septiembre-noviembre de 1970) y el ánimo destructor de un sector de la burguesía, porque lo sostuvo el pueblo agrupado tras las candidaturas presidenciales de la DC y la UP. Nuestras fuerzas armadas derrotaron la presión ejercida para utilizarlas contra el libre desarrollo del régimen institucional”.

¡Nunca había aparecido tan claro ante las masas el deterioro de los mecanismos de consenso burgueses, tal como el Parlamento, y su papel de ins-

trumento de la dictadura burguesa! Nunca como hasta ahora se había evidenciado tan a las claras la naturaleza antipopular de las instituciones del Estado y sus deformaciones burocráticas. A un año y medio del arribo de Allende al Gobierno los esfuerzos actuales del revisionismo y el reformismo por embellecer las instituciones burguesas aparecen ante cada vez más amplios sectores del pueblo como una gran burla. Se empieza a deshacer el sueño reformista del revisionismo, así como ayer se desmoronó el sueño del reformismo burgués proimperialista de Frei. Uno entrampado en los proyectos imperialistas de nuevo tipo de la URSS, de alianza con las burguesías nacionales; el otro, en el proyecto (ya a arrojado al basurero de la historia) de la "Alianza para el Progreso". La lucha de clases sigue su curso, desmoronando uno a uno los intentos por preservar el sistema de explotación.

La tendencia fundamental en el mundo es la revolución. En Chile, como en el resto de América Latina, *ha sonado la hora del proletariado*. La crisis del capitalismo dependiente no tiene solución en los marcos del régimen. Sólo la revolución de hegemonía proletaria podrá resolver de fondo, abriendo curso el socialismo en nuestra patria.

Nuestra política sindical

Partiendo de lo dicho, de una línea de desarrollo que pasa por una definición precisa del carácter de la revolución como revolución de hegemonía proletaria; por una vía fundamental de la revolución que es la insurrección general de todo el pueblo; por una táctica de acumulación de fuerzas que pone *el centro* en el desarrollo de embriones de poder por abajo y en la creación de las milicias populares, con vistas a un poder sustentado de modo directo en las masas organizadas en los consejos de delegados revocables y armadas a través de las milicias, ponemos en *el centro* el trabajo de las empresas, especialmente en las empresas de concentración industrial y de alto valor estratégico. Para ello, tomaremos en cuenta (alrededor de la polémica que suscita el MIR cuando plantea el problema de los obreros no sindicalizados, diciendo que la mayoría de los obreros están en las empresas pequeñas y medianas) que el análisis objetivo nos demuestra que el 52% de los excedentes brutos producidos lo controla la gran industria y el 48% restante las empresas pequeñas y medianas, muchas de las cuales son simples sucursales de las grandes empresas. De modo que desde el punto de vista de *lo que decide* en el proceso económico, lo central está en las grandes empresas.

Partiendo de una táctica general que caracteriza la situación como crecientemente explosiva, la línea es hacer estallar la bomba que se incubaba por abajo, a partir de la superexplotación obrera generalizando los conflictos a nivel nacional, y bregando por impedir que las luchas sean aisladas. Con una concepción de la lucha que pasa por comprender que cualquier lucha que quede aislada en los estrechos marcos de las fábricas necesariamente tiende a entrar en los cauces del reformismo y castrarse. Ejemplo de esto es la propia marcha de Concepción que luego, en vez de extenderse es enchalecada en una marcha inocua sin repercusión ni contenido. Y también el ejemplo de grandes luchas obreras que al no

enfilarse en una perspectiva de poder, al no desarrollar los consejos por la base (y buscar ligarse a través de delegados de los obreros en conflicto que vayan a las otras fábricas y que construyan *consejos interfabriles*, y que desde los consejos interfabriles construyan consejos comunales populares, de obreros, de campesinos y pobladores) unificando esa lucha obrera y popular en un solo haz tendiente a gestar la *asamblea del pueblo, por abajo como nuevo poder de las masas obreras y populares*, se agotan a sí mismas, frustrándose la lucha de las masas. A partir de levantar la línea de la expropiación de todas las grandes empresas de más E° 14.000.000 privadas o mixtas, levantar la línea del *control obrero* de la producción, la distribución y el consumo, para *todas* las grandes empresas ya sean privadas, mixtas o estatales.

Para esta línea no se trata de “reclamarle al Estado” que venga a “intervenir” la fábrica, sino de que *los obreros expropien a los patrones*, se hagan cargo de la expropiación de la empresa a través de los consejos de delegados por la base revocables en cualquier momento, y desde allí que levanten el pliego que le exigirán al interventor del Estado como condición para aceptar su entrada a la fábrica.

Nosotros planteamos también en las empresas estatizadas, y hasta tanto no se conquiste el poder popular revolucionario, la única línea posible, la línea del control obrero. Porque el problema de la dirección obrera *efectiva* no es un problema que se resuelva *desde lo económico*. Esa es una concepción economicista muy cara al troskismo; la cuestión de la dirección obrera se resuelve desde el *poder político*. El poder político es el que decide la organización y la planificación económica y el poder político no se logra simplemente –como enseña el marxismo– apropiándose de la maquinaria del Estado sino destruyéndola y construyendo *otra nueva*, y desde ese nuevo Estado, cambiando radicalmente las nuevas relaciones sociales lo que permite *por primera vez* que sea posible al proletariado pasar a decidir en la *planificación, posesión y disposición*, que es lo fundamental para definir el carácter de las relaciones de producción. (Y no simplemente el cambio jurídico “de propiedad” de las empresas del área privada al área estatal).

Los ejemplos más claros de esto es que muchas de las empresas que hoy están en conflicto para pasar al área estatal, fueron empresas que en los tiempos de Aguirre Cerda estaban ya en manos del Estado, y que el Gobierno de Aguirre Cerda las tomó a su cargo para revitalizarlas y después devolverlas al área privada ya en condiciones de funcionamiento (el caso de Mademsa, Siam Di Tella, Compañía de Acero del Pacífico, Insa, etc.).

A partir de esto es que nos damos una política que tiene su centro en las grandes empresas del cordón industrial de Cerrillos, en la zona de Santa Rosa (zona de importancia estratégica insurreccional por la concentración proletaria no sólo fabril sino de poblaciones obreras); en la zona de Valparaíso, especialmente el puerto, y en la zona de Concepción. Con una concepción del desarrollo de la corriente clasista revolucionaria, que pasa por hacer estallar los conflictos potenciales –el caso de Cimet, de Mademsa, de Fensa, etc.– levantando las reivindicaciones de la clase, que chocan con el régimen actual de las grandes empresas y su pésimo estado actual: empresas anticuadas con equipos no renovados

durante años, con fuga de capitales, con condiciones insalubres de trabajo, y también con un régimen de contrato salarial que es lisa y llanamente un régimen de abierta superexplotación: el régimen de trabajo “a trato”, por pieza. Tomar estos nudos, estos eslabones de la cadena para tirar desde allí todo el conjunto de las reivindicaciones, y no simplemente limitarse a los pliegos habituales que sólo ponen el acento en diferencias monetarias. Exigir el control obrero en la empresa hacerse cargo de ella, y desde ahí generalizar el conflicto a toda la zona, impulsando asambleas interfabriles y comunales y concentraciones y marchas proletarias desde las fábricas al centro.

Para esta política se impone el desarrollo y la creación de corrientes revolucionarias clasistas, insurreccionales en el seno del proletariado. La corriente es un agrupamiento amplio de obreros que se unifican alrededor de la *línea* del partido; para eso es necesaria desterrar ideas oportunistas, reformistas tales como las del PCR, que concibe a la corriente como una máscara para esconder la presencia del partido. Para la corriente nosotros planteamos un término de unidad: La unidad política de los obreros revolucionarios alrededor de *nuestra línea*, alrededor del carácter de la revolución de la vía estratégica fundamental de la revolución, y de la táctica de acumulación de fuerzas sustentada en el auge de la lucha de clases violenta, de hacer estallar los conflictos y generalizarlos regional y nacionalmente, aliando tras el proletariado en la lucha a los demás sectores populares, y *al calor* de estas luchas y *en el seno* de ellas, crear, impulsar y desarrollar los consejos obreros y populares por la base, embriones de nuevo poder popular revolucionario, la asamblea del pueblo, y las *milicias*.

Para esa línea construimos una corriente y exigimos un compromiso *político*, no ideológico: no reclamamos de esos obreros que “se adscriban al marxismo-leninismo”, no les reclamamos que “se hagan” comunistas. Lo que reclamamos es la unidad revolucionaria alrededor de los puntos fundamentales de la fase actual de la revolución chilena, alrededor de la línea de hegemonía proletaria de la revolución, sin lo cual es *imposible* construir en el movimiento obrero y por abajo.

Esos son los términos de unidad de la corriente, concebirlos de otro modo sería diluir la línea del partido en el movimiento y caer en el más burdo economicismo. En una coyuntura de ascenso revolucionario como el actual, eso sería ubicarse detrás de los obreros y no delante de ellos.

Desde la tendencia, levantar la lucha de los obreros, desarrollando una nueva concepción de las alianzas, que se contraponen radicalmente a la concepción frentista del revisionismo y el reformismo. Acá no se trata de hacer alianza “de partida”, por arriba; se trata por el contrario de unir a los obreros por abajo y, *en el seno* de los nuevos organismos que propugnamos desarrollar (usando los mecanismos que ya existen creados en las fábricas: Comités de producción, consejos de delegados de taller, asamblea general de fábrica, etc.), a través de la discusión y la polémica franca impulsando al máximo la democracia proletaria, obligar a la unidad de lucha contra las clases dominantes y el reformismo y por los objetivos de la clase obrera. Cambiar entonces la concepción parlamentaria burguesa, que impulsa el revisionismo y a la cual se adscriben los socialdemó-

cratas. Concepción que de fondo *tampoco* es cuestionada por el MIR pese a que en muchas oportunidades ha proclamado su adhesión programática a la idea de los consejos. El MIR levanta los consejos en forma doctrinaria, y después cuando tiene que resolver alianzas, termina haciendo acuerdos por arriba como fue por ejemplo en el caso de LAN (cuando la sustitución del presidente de la empresa planteada por un sector socialista), que de hecho impidió al FTR jugar allí un papel de alternativa en las masas.

Se trata de desarrollar los consejos por abajo, en cuestionamiento del sindicalismo parlamentarista y vertical, la plena vigencia de la democracia obrera. Y como punto de unidad *central* llamar a la unidad revolucionaria en el seno de esos consejos y con los obreros como protagonistas. Que se terminen las negociaciones a espaldas de las masas; se acabaron los negocios por arriba, son los obreros los que deben *vivir* el proceso político.

El partido debe crecer y desarrollarse arraigando por abajo con los obreros más avanzados a partir de la concepción de construir células de empresa insertada en la fábrica, en los comités de producción y en una nueva estructura sindical concebida con la óptica de la más amplia democracia obrera. Los últimos intentos por parte del MIR de expulsar a los NBI del FER con métodos burocráticos y sin una sola fundamentación política, demuestran las contradicciones en que incurren quienes practican concepciones frentistas por arriba. Es que en el fondo, como siempre, el problema es *de líneas* y no de métodos: el MIR quiere echar a una corriente de izquierda revolucionaria *consecuente* porque su presencia le significa una traba para sus enjuagues con sectores de izquierda del reformismo y del propio gobierno; tienen que dividir al FER para poder unirse con la UP (o sectores de ella) en las próximas elecciones de la FECH, y hacer olvidar a la masa que lo apoyó la consigna levantada en las últimas elecciones universitarias, de que “la alternativa revolucionaria es intransable y no morirá con las elecciones”. Igual cosa sucede con las elecciones de la CUT.

Nosotros por el contrario impulsamos esta línea de alternativa clasista y revolucionaria insurreccional y de unidad clasista en el seno y no por fuera de los organismos de masa.

Los consejos (o comités) en las fábricas *no son* el equivalente de los consejos de administración sancionados en el convenio CUT-Gobierno, y que pretenden elegir un “Parlamento” para los obreros con representación electa igual a como se elige un diputado por 2 años y no revocable, y en la que se incluye una representación mayoritaria del Gobierno. Tanto en este caso como en la elección de directiva nacional de la CUT, se destierra así el protagonismo directo de los obreros.

Nosotros, con o sin ley, dentro o fuera de ella, impulsamos que los obreros *impongan de hecho su propia legalidad*, sus reivindicaciones y derechos, *su control sobre* la fábrica, la administración y la planificación estatal.

Nuestra línea es pues completamente diferente correspondiente con el planteo de la lucha por la conquista del poder *ahora*. Nosotros no planteamos ese tipo de consejo de administración, no planteamos reproducir el Parlamento burgués en las fábricas: lo que planteamos es la representación directa de

los obreros en consejos de delegados por taller y de comités obreros de fábrica surgidos de la asamblea obrera de fábrica, revocables en cualquier momento por ésta.

Desde allí; que la clase obrera dirija e impulse, unificándola con sus luchas en una perspectiva de poder, la lucha de otros sectores sociales como por ejemplo los pobladores, el movimiento de los sin casa, las Juntas de Abastecimientos y Precios de los barrios populares, etc., por el control de la distribución y el consumo, la expropiación de los grandes monopolios distribuidores, los grandes almacenes, las empresas de la construcción, por la vivienda gratuita para todos los trabajadores, etc.

Teniendo en cuenta, además, que en la actual fase de la lucha obrera y popular no hay ninguna posibilidad de generalizar y entender este proceso sin organizar desde ya las milicias obreras y populares que en este período defiendan y garanticen las luchas, y que se vayan transformando en el verdadero *instrumento* de la insurrección popular de masas. Problema que ha sido puesto a la orden del día por enfrentamientos como los de Concepción, huelgas mineras como las de Chuquicamata, etc.

V. Nuestra política en el agro

El campo chileno evidenció su despertar especialmente en la década del 50 al 60. Cuando, en una economía débil se pretendió resolver la crisis mediante el camino de la inversión imperialista en el seno de la estructura capitalista dependiente, lo que aceleró la concentración monopolista con su secuela de superexplotación para la clase obrera y de ruina y pobreza para vastos sectores de las capas medias, el auge de las luchas obreras, consecuencia directa de éstos, atrajo a la inquietud al campesino, en un agro profundamente atrasado, en donde predominaba el cultivo extensivo de la tierra en vastos sectores del país.

El modelo de desarrollo agrícola siguió durante este período en Chile, los moldes generales del capitalismo dependiente latinoamericano: el intento de desarrollar el capitalismo en el campo a través del llamado “camino prusiano”, es decir, la “modernización del agro”, la tecnificación de latifundios sin cambiar sus estructuras básicas de producción y dominación, Alessandri aumentó la inversión en la agricultura casi una vez y media (de 65 a 155 millones); sin embargo, el carácter parasitario del latifundista en lo fundamental no varió. Sin embargo, cierto desarrollo del capitalismo en el campo trajo aparejado el desarrollo de un proletariado agrícola que inició luchas que presagiaban procesos de radicalización de los pobres del campo. Hay quienes sostienen que el desarrollo de las clases dominantes se ha dado “escindido” y “paralelo” entre la burguesía y los terratenientes. Sin embargo, ya en la colonia, la necesidad de mano de obra (incluso esclava) para la minería y la agricultura, o la misma colonización, su carácter *hacia afuera* (dependiente desde el inicio) determinó la concentración de la tierra como gran propiedad.

Existió siempre una complementación entre la burguesía y los terratenientes, una *oligarquía burguesa terrateniente* que en conjunto, y bajo la hegemonía imperialista, lideró el desarrollo capitalista moderno de Chile.

Ya en la década de 1960, el desarrollo de la concentración monopolista determina una crisis en la migración de mano de obra a la ciudad. Ello sólo conduciría al aumento de la explosividad de las contradicciones en el campo, ante la incapacidad de absorber en el campo el exceso de mano de obra. Y esa es la raíz *principal* de la puesta en práctica de los planes de reforma agraria freísta integrada en el plan de la Alianza para el Progreso, cuyo objetivo primordial era desarrollar un “colchón” de capas medias rurales con el fin de frenar la lucha de clases en el campo, (y sólo secundariamente ampliar el mercado interno).

Sin embargo, aún bajo este panorama, hasta fines de la década del 30, Chile exportaba frutas, lana, miel, etc., por un valor de US\$ 30 millones. El desarrollo capitalista, el aumento de la población, etc., generó un aumento de la demanda al que el agro chileno no respondió, dada su estructura. La población aumento a un ritmo del 2,5% anual; pero el agro no alcanzó siquiera a crecer en esa proporción lo que llevó a un crecimiento paulatino en las importaciones de alimentos. En 30 años se pasó a importar de 30 millones a 200 millones de dólares, y hoy esa suma supera los 300 millones. ¡Y se siguen exportando 30 millones!

Esta situación haría del agro chileno un verdadero eslabón débil de la estructura capitalista dependiente chilena, potencialmente explosivo. Frei pretendió resolverlo mediante una reforma que, aspiraba a desarrollar una agricultura basada en propietarios de pequeños fundos, buscando una mayor estabilidad de la sociedad chilena, apoyada, sin embargo, en planes de *modernización* del agro. Así nacieron los *asentamientos*, que se suponía era una situación *transitoria*, hacia la entrega de los “títulos de propiedad”, que duraría 3 años... Cómo en este sector se hallan incluidos los campesinos (inquilinos, medieros, etc.), que trabajan los grandes fundos se gestó una situación de gran explosividad y de descontento. En poco tiempo se agudizó la lucha de clases en el área “reformada”, el patrón del fundo, con derecho a reserva y a conservar los instrumentos y aperos de labranza fue haciendo trabajar bajo su mando a los supuestos futuros colonos. Algunos de ellos explotaban a los más chicos; por lo demás, los fundos expropiados por el freísmo fueron los de menor rendimiento y calidad. Al subir Allende, los títulos entregados eran bien pocos; la frustración del campesino muy grande, la población obrera del campo se desarrolló en este período. Esta situación deterioró el peso DC, entre los campesinos, lo que incluso se reflejó en las elecciones de septiembre del 70 y de abril del 71.

Hace un tiempo el Gobierno anunció que a fines de junio, quedaría completada la expropiación de todos los fundos de más de 30 hectáreas de riego básico, que constituye cerca del 55% del área cultivable, aunque sin descontar la reserva del terrateniente. Sin embargo, la situación de las tierras (salvo la que está en manos de medianos y pequeños colonos, en el sur y en la zona cercana a Santiago) es de muy baja productividad, y ello puede generar una situación de desempleo que se sume como un elemento más a la crisis agraria en desarrollo.

En los asentamientos, dada su situación, existe una profunda explotación del obrero rural y de los semiproletarios (inquilinos), carente de la esencial

protección sindical. Sólo recientemente ha comenzado a hacerse importante la sindicalización campesina. Por lo general, apenas tienen derecho a salarios. Se ha calculado que en realidad sólo unas 20.000 familias de 350 mil accede al tipo de propiedad, el resto se va proletarizando a medida que pasa el tiempo de asentado.

Justamente algunos de los puntos principales que hay que incluir en cualquier plataforma de lucha campesina, desde la óptica de la hegemonía proletaria, son la lucha contra la actual situación de los obreros agrícolas y la garantía de la lucha por su derecho, su sindicalización; la exigencia de la expropiación de todo propietario que no cumpla las leyes laborales, y de todas las tierras muertas y despobladas. La garantía del desarrollo de la lucha en la perspectiva de la revolución de hegemonía proletaria, exige la organización *independiente* de los obreros y asalariados agrícolas, respecto al resto de la masa campesina, y de los campesinos pobres respecto a las organizaciones de campesinos medios y ricos. Hay que tomar en cuenta que, según los cálculos de ICIRA hay alrededor de 600 mil trabajadores rurales y 110 mil pequeños propietarios que constituyen la base de la capa de campesinos pobres, que hay que tener en cuenta para cualquier política de alianza de clases en el campo.

Además, la presencia del antiguo patrón acentúa las contradicciones en los asentamientos. Esto incluye también a una capa privilegiada que rodeaba al patrón, que se ven favorecidos para contratar mano de obra asalariada usando su viejo poder.

Al mismo tiempo, creció la organización de los grandes capitalistas agrarios, que a su vez mejoraron sus fundos y contaron con apoyo del Estado durante el Gobierno de Frei.

Y, además, los expropiados han sido en realidad *desplazados* y no eliminados. Hablar de "eliminación de los terratenientes" es una burda mentira del revisionismo. Por lo demás, el pago al contado por la expropiación es bien elevado. Y los campesinos de fundos tienen todo el aparato estatal y burgués en contra, y no tienen derecho legal alguno a tomarse fundos. En el campo, además, cerca del 50% de la población rural tiene ingresos inferiores a un sueldo vital por lo demás la proletarianización en el campo se ve acentuada por la necesidad de los campesinos de pagar gruesas sumas anuales al latifundista expropiado, para pagar su tierra. Con una tierra mal trabajada, sin gran apoyo tecnológico y químico, ni fundamentales incrementos en la política de créditos, con las máquinas y los instrumentos de trabajo en manos de los grandes propietarios y los capitalistas del campo, se acelera y agudiza la estratificación de clases agrarias. Pero, además, habiéndose hecho cargo el Estado de la deuda con los latifundistas, son los funcionarios estatales y los organismos que representan hacia quienes se desplazan hoy día la contradicción de los campesinos endeudados, especialmente los más pobres, que no pueden sacar de la tierra lo necesario para pagar sus deudas. Y además, aparece también un nuevo elemento: Y es que los campesinos no pueden abandonar el asentamiento a causa de sus deudas. Como estas en lo fundamental son con el Estado, es este quien aparece como su opresor directo, y el arrendatario, gran propietario o burgués que le ofrece fórmulas de trabajo y de

reendeudamiento para resolver su situación inmediata, en cambio, aparece como un “protector” frente al “momio rojo”.

A esto hay que agregarle la situación de los mapuches particularmente importante en la provincia de Cautín. Los mapuches, especialmente desde el año 1970 reiniciaron una vez más su pelea tras viejos reclamos que no habían sido replanteados desde fines del siglo pasado, después de su derrota, salvo algunos intentos en los comienzos de la década del 60.

Una política revolucionaria para el campo debe tener presente algunos rasgos esenciales, fundamentales:

En primer lugar, la gran confusión existente en la situación de propiedad, y en la organización de la producción agraria (asentamientos, centros de reforma agraria, consejos campesinos, de distinto tipo, los comités de reforma agraria, etc.). En segundo lugar: ¿Adónde penetró más el capitalismo en el campo? ¿Cuál es la zona de la agricultura más moderna? ¿Cuál es el eslabón que une los problemas de la tierra a los problemas del cultivo industrial, y a los problemas de la elaboración de la materia prima agropecuaria?

En tercer lugar, nuestro trabajo debe apuntar primero que nada al proletariado rural; a los afuerinos; a los fijos o permanentes, y desarrollar una política de sindicalización separada del resto de las capas campesinas, como ya hemos dicho; dando autonomía al proletariado para cumplir su función de hegemonía en el campo. Y segundo, a los semiproletarios (inquilinos) y campesinos pobres, minifundistas y pequeños agricultores. Los campesinos pobres constituyen *la principal capa aliada del proletariado en la revolución*. Sin su apoyo la revolución es imposible.

Hay que tener mucho cuidado con aquellos programas agrarios destinados expresamente a impedir al proletariado realizar la alianza con los campesinos, garantizar la alianza necesaria para conquistar el poder, programas que aparecen enmascarados tras reivindicaciones revolucionarias “socializantes”, o “estatistas”, como por ejemplo el propio programa de Chonchol para la organización del agro, que aparte de una concepción estatizante, y que hoy día es evidentemente rechazada en forma mayoritaria por el campesinado, incluso el campesinado pobre; y sectores bastante grandes de trabajadores rurales.

La experiencia de la revolución rusa demuestra que en la lucha contra los terratenientes el proletariado marchó unido a todo el campesinado. Al estallar la guerra civil se desplegaron las contradicciones del campesinado y se abrió allí la lucha de los pobres del campo contra los ricos. Sin embargo, *no se golpeó a los ricos recién hasta fines de la década de 1920* (o sea, 10 años después de la conquista del poder), cuando comenzó la colectivización en gran escala.

Decía Lenin en 1918: “Por lo que se refiere a los Kulacs (es decir, los campesinos ricos) no decimos que deban ser privados de todas sus propiedades, como los terratenientes capitalistas. Decimos que debe ser aplastada la resistencia de los Kulacs a la aplicación de medidas necesarias, como por ejemplo el monopolio del trigo, que los Kulacs no cumplen, para lucrar vendiendo a precio de especulación los sobrantes de trigo, mientras los obreros y los campesinos de las zonas no agrícolas pasan un hambre espantosa”, O.C. Tomo 28, P. 342).

Nuestra política en el campo debe basarse en la *alianza con el campesinado pobre, la mayoría del medio y neutralización del resto de los medios y del campesinado rico*. Con el objetivo claro y preciso de escindir a la gran burguesía agraria terrateniente del campesinado rico.

Respecto a la situación actual en el campo: Decía Lenin en 1918, “sabíamos perfectamente que los campesinos viven como si estuviesen enraizados en la tierra: Temen las novedades, se aferran con tenacidad a lo antiguo. Sabíamos que los campesinos creen en las ventajas de una u otra medida sólo cuando comprenden con su propia inteligencia esas ventajas. Por eso ayudamos *al reparto de la tierra aunque comprendíamos que esa no era solución*”. (O.C. Tomo 28, P.171); el subrayado es nuestro).

En esta cita está presente la *esencia* del pensamiento leninista sobre la alianza obrero-campesina.

Es particularmente importante recordar la experiencia húngara –la derrota del Soviet creado en 1918 un año más tarde– para comprender hasta qué punto errores en la política de alianza con el campesinado llevan a la derrota de la revolución.

“La socialización de la tierra y de todas las empresas provocó dificultades muy serias. No tiene nada de asombroso que los campesinos húngaros, la tercera parte de los cuales se componía de pequeños propietarios, no haya comprendido el sentido de la socialización y que esta parte de campesinos no quisiese hablar de “comunidades” o de “bienes pertenecientes al Estado”. Fue en vano que se los exhortase a sostener el poder obrero y campesino: Se rehusaron a librar cereales a los obreros de las ciudades y esa fue la razón por la cual en Hungría, Estado agrario, faltase el pan” (M. Gabor. Texto publicado por el órgano de la Internacional Comunista, 1919. Reproducido por E. Mandel “Controle Ouvrier. . .”. F. Maspero, París, 1970).

Y finalmente, respecto al campesinado medio decía Lenin: “El campesino medio no es modo alguno enemigo de las instituciones soviéticas, no es enemigo del proletariado, no es enemigo del socialismo. Vacilará, naturalmente, y accederá a pasar al socialismo sólo cuando vea un ejemplo seguro, convincente de verdad, de que ese paso es necesario. Como es lógico, al campesino medio no se le puede convencer de eso con razonamientos teóricos o discursos de agitación –no confiamos en ello– pero lo convencerá el ejemplo y la estrecha unión de la parte trabajadora del campesinado. Lo convencerá la alianza de este campesinado trabajador con el proletariado, en este terreno depositamos nuestras esperanzas en una larga labor de convencimiento gradual, en una serie de medidas de transición que lleven a la práctica el acuerdo de la parte proletaria, socialista, de la población, el acuerdo de los comunistas –que libran una lucha decidida contra el capital en todas sus formas– con los campesinos medios”. (O.C. Tomo 28, P. 343).

El campesino medio (junto a la pequeña burguesía urbana) es el principal actor social que sirve de base a la democracia pequeño burguesa y burguesa (como por otra parte lo ratifican todas las elecciones realizadas en el último período). En particular sirven de sustento a sectores DC, del PR y del PIR. La política hacia el campesinado medio de ser *tenderle la mano*. ¿Cuáles son sus

reivindicaciones? El conjunto de reivindicaciones, entendemos nosotros que están señaladas en nuestra plataforma: Protegerlo, créditos adecuados, etc.

Debemos estudiar a fondo para desarrollar una correcta política campesina, que todavía está simplemente delineada en sus rasgos más generales; 1.- La estructura agraria chilena en su totalidad; 2.- la experiencia del proletariado en las revoluciones del mundo entero (china, vietnamita, coreana, rusa, húngara, argelina, cubana, etc.); 3.- No podremos desarrollar ninguna política agraria si no tenemos además de una concepción general y de una visión general del problema agrario, una política *específica* para cada sector y zona; 4.- Hay que considerar y rebatir a *fondo* la línea revolucionarista pequeño burguesa en el campo y del Partido Socialista, y de la línea del Gobierno, línea burguesa, estatista y desarrollista que queda expresada por ejemplo en la siguiente cita de J. Chonchol, Ministro de Agricultura: "En el fondo, está planteada la transformación de la sociedad agraria para ir hacia una agricultura socializada". Sin embargo, como es lo habitual, la retórica socialista se transforma luego, en simple política desarrollista estatista: "Esa es la estrategia del Gobierno en la materia (organizarnos para exportar): Impulsar el desarrollo agrícola no sólo buscando una sustitución de las importaciones, sino tratando de incrementar nuestra exportación". (Discurso de J. Chonchol, año 1971).

Eso sólo es posible hoy día, con la actual estructura agraria, con la necesidad de desarrollar un plan a 5, 6 o 7 años plazo para cambiar y reactivar los cultivos, y cambiar la base de la estructura agraria, en base a la restricción del consumo y a *la superexplotación del proletariado agrícola*. Esa es la política que lleva a que el conjunto del campesinado rechace a los funcionarios del Estado como enemigos, y que los considere verdaderos reemplazantes de los antiguos explotadores.

Lo de fondo, es que hay que entender que un rasgo fundamental de atraso del campesinado, se puede transformar en un instrumento importante para garantizar la alianza obrero campesina; si no nos dejamos arrastrar por la oleada del revolucionarismo pequeño burgués y del altruismo reformista, socialista de palabra y burgués en los hechos.

Entender que la desconfianza del campesinado en el Estado es ancestral de años y años, transformarla en desconfianza hacia el Estado burgués, y en confianza en la alianza entre el proletariado rural y el campesinado pobre, ofreciéndole a través de la organización de los consejos campesinos por la base la entrega de la tierra para su usufructo directo, a partir de la supresión de toda forma intermedia de propiedad que aleje al campesino de la tierra, nacionalizándola y entregándosela en usufructo, permitiéndole su comercialización y haciendo acuerdos ventajosos para ellos: ¡Esa es una política revolucionaria que garantiza hoy la alianza obrero campesina! Sobre estas bases se desarrolla nuestra política en el campo, extensa y precisamente fundada en el informe de la Comisión Campesina aprobado por esta Conferencia.

Camaradas: iniciamos este informe, señalando que esta Conferencia, de carácter constitutivo, daba inicio al proceso de construcción del Partido Comunista, Proletario, Rojo, Revolucionario que nace como una necesidad del proceso de lucha de clases chileno, frente al vacío que existe en nuestro país. Vacío que es producto de la traición histórica del revisionismo y de la incapaci-

ciudad del revolucionarismo pequeño burgués por llenarlo y resolver la principal tarea del partido revolucionario en el actual período histórico, que es ser el instrumento eficaz del proletariado en su lucha por conquistar el poder *ahora e iniciar* la construcción del socialismo, rumbo al comunismo junto al proletariado mundial.

Hemos hecho un balance de nuestra actividad y de la situación general, balance que demuestra que el camino emprendido es justo, y que en esta dirección hemos avanzado. La construcción de células en la clase obrera, que en poco tiempo se ha extendido, rodeándose de una periferia amplia; experiencias como las vividas en las grandes empresas textiles, que evidencian la explosividad por abajo y la radicalización de las masas; las perspectivas abiertas por otros hechos ocurridos en distintos sectores del país: los estallidos en Concepción, la receptividad de pobladores en Talca, etc., nos señalan que caminamos por la senda justa. Las enseñanzas que nos han dejado, aún en su incipiente y pequeñez, y en los errores cometidos; la experiencia de luchas realizadas en la clase obrera, en provincias, en el movimiento estudiantil y en la Universidad; las marchas realizadas, una de protesta antiimperialista frente a la UNCTAD, la otra en solidaridad con los obreros de MADEMSA, una que adquirió resonancia internacional, la otra que nos sirvió para señalar un camino justo de unidad obrero-estudiantil; la línea de desarrollar y producir hechos políticos de masas vinculados a la lucha de clases concreta, vinculados a los momentos políticos que vive el país; los nudos de conflictos esenciales que se viven en las grandes fábricas; el transformar, el hacer *virar* el eje de esta organización, poniendo nuestro centro en la construcción de *células de empresas en el proletariado*, volcando al grueso de los camaradas al trabajo en la clase y desde la clase; cada uno de esos hechos nos fue acercando día a día a esta Conferencia, a la necesidad del partido, a comprender cabalmente nuestra responsabilidad histórica de no vacilar ante lo enorme de la tarea, ante los cantos de sirena del reformismo, que nos llama a corrompernos como ha ocurrido con tantos honestos revolucionarios que entraron a los partidos tradicionales llenos de ilusiones, convirtiéndonos en esclavos corruptos de sus pegas; ante el escepticismo clásico del intelectualismo academicista burgués; ante el espejismo de los movimientos de la izquierda revolucionaria pequeño burguesa, que cuando más cerca estamos de las definiciones fundamentales del poder y la revolución, vacilan lamentablemente frente al reformismo y giran a la derecha, a su cola. Muchos dicen, nos han dicho sus ideas son muy justas, ¡pero qué pueden hacer ustedes, tan pequeños, tan incipientes, frente a la magnitud de lo que hay que hacer! Nosotros, frente a los que vacilan, de cara a las masas obreras y populares que, nos señalan el camino de la independencia ideológica y política como *el único* camino para construir la vanguardia todavía ausente en las luchas de clases en Chile (que se evidencia justamente con la evolución que sigue la lucha de clases, y que evidencia un verdadero reclamo proletario de la necesidad de una nueva alternativa proletaria y comunista, para hacer desembocar esas luchas en la conquista del Poder), queremos terminar este informe con una cita de Lenin, que no sólo es una enseñanza, sino que advertencia frente a todo oportunismo, un índice levantado señalándonos el camino:

“Se nos dice. Ustedes se han aislado, han echado a volar palabras terribles sobre el comunismo, han atemorizado la burgués hasta hacer que le diera un patatus. . . ¡¡Sea!! . . . Pero no es esto lo que nos ha aislado. Lo que nos ha aislado es la cuestión del empréstito. . . En este punto nos hemos quedado en minoría. Sí, estamos en minoría. Pero ¿que importa eso? Ser socialista, en estos tiempos de borrachera chovinista, es estar en minoría, pero estar en mayoría es ser chovinista”. (Lenin, “Informe sobre el momento actual, 24 de abril de 1917, Obras Escogidas”, tomo II, página 104).

Manuel Cabieses (MIR): Las tareas de los revolucionarios en la etapa actual

(Punto Final N° 160, 20 de junio de 1972)

"Dijimos que en nuestro país teníamos un Gobierno de los trabajadores pero que no sólo bastaba eso. Que lo importante era el control de todo el poder político y que el poder político era la manta que cubría los intereses de los patrones, llamándose Parlamento, Justicia, Leyes, Fuerza Represiva, etc. Señalamos que el socialismo se consigue quitando sin conciliaciones el poder político a los patrones".

(Declaración del Consejo Comunal Campesino de Nueva Imperial).

"Punto Final" ha procurado recoger en sus páginas –en todas sus dimensiones– el trascendental debate ideológico que tiene lugar en el seno de la izquierda chilena. Nuestra única limitación ha sido el espacio que se hace insuficiente para registrar tan variadas posiciones políticas. Por eso, lamentablemente, sólo hemos podido publicar aquellos documentos, discursos y declaraciones que cubren los substantivos de la discusión. Esta lucha ideológica se polariza –básicamente– entre dos posiciones antagónicas, representadas por reformistas y revolucionarios, respectivamente. Entre ambos polos a veces se tienden hilos de comunicación y aún de circunstancial entendimiento. Pero, en realidad, ni con la mejor buena voluntad puede llegarse a una fórmula de conciliación permanente entre ambas posiciones. El debate puede –como ocurre muchas veces– tener reflujos pacíficos, pero las diferencias son tan grandes que no tardan en saltar al primer plano, superando los entendimientos técnicos. Esta divergencia insalvable entre reformistas y revolucionarios se ha dado en todo episodio histórico en que las masas proletarias vislumbraron la conquista del Poder.

El triunfo de los revolucionarios en su confrontación ideológica con los reformistas significó enseguida la victoria del proletariado en su enfrentamiento armado con la burguesía. O sea, una cosa está ligada a la obra, dialécticamente por así decirlo. La lucha ideológica que precede a una revolución, es condición *sine qua non* para hacer madurar las condiciones subjetivas del proceso revolucionario. Dicho de otra manera, el proletariado necesita, antes de pasar a la ofensiva revolucionaria contra la burguesía, derrotar al reformismo que actúa en su propio seno.

Otra característica singular, que se reproduce una y otra vez en todo caso histórico, es la minoría inicial en que se encuentran los revolucionarios dentro del país donde se plantean condiciones revolucionarias objetivas.

Contrariamente a lo que pudiera suponerse –ya que los reformistas, mayoría inicial, se empeñan en difundir esa idea falsa–, el proceso revolucionario no se inicia con un aplastante respaldo político y ni siquiera con el apoyo cohesionado y orgánico de las masas obreras y campesinas. La voluntad revolucionaria de las masas trabajadoras corre por cauces profundos que irrumpen en la superficie después que se ha definido la lucha ideológica entre reformistas y revolucionarios. Es en ese instante –el “momento revolucionario”– cuando los trabajadores toman en sus manos la conducción del proceso, bajo consignas revolucionarias. Las masas se lanzan a la lucha, vencen a sus enemigos de clase y conquistan el Poder. Así ha ocurrido siempre en la historia de las revoluciones y en cada nuevo episodio se repite el esquema señalado. Desde 1917, cuando los bolcheviques derrotaron previamente a los reformistas (mencheviques y social-revolucionarios), que probaron hasta la saciedad ser agentes de la burguesía, a cuyo lado se pusieron en la guerra civil, la lucha ideológica entre revolucionarios y reformistas, y la minoría inicial aparente de los primeros, viene formando parte del cuadro general de toda revolución.

Si bien es cierto que cada revolución es original, tienen entre sí no sólo objetivos comunes que definen su carácter socialista, sino que, también, reproducen condiciones esenciales, como es el previo enfrentamiento ideológico entre reformistas y revolucionarios; entre los que plantean al proletariado no avanzar y le infunden temor y dudas sobre sus propias fuerzas, y quienes –como Lenin en el curso de 1917– muestran a las masas trabajadoras el camino que deben seguir para la toma del Poder.

No queremos, de ninguna manera, ser pedantes en la utilización de ejemplos históricos o de citas de los clásicos de la revolución. Pero los sectores reformistas, en sus argumentaciones, utilizan ahora en Chile todo un arsenal ideológico que en realidad no les pertenece, pretendiendo que las palabras de los revolucionarios fortalezcan precisamente las posiciones que ellos combatieron.

Si bien las citas de Lenin amenazan convertirse en los latinazgos que los teólogos se lanzan por la cabeza, no hay duda de que parte importante de esta discusión es el rescate de las grandes figuras revolucionarias de las manos reformistas en que habían caído. Esto sin contar con que el estudio y análisis de las revoluciones y de los escritos de los revolucionarios, tienen un saludable efecto esclarecedor en una coyuntura como la que vive Chile.

En septiembre del año 1917, en cuyo inicio los bolcheviques eran una minoría insignificante comparada con la fuerza del reformismo, Lenin abordó francamente el problema del Poder.

I

“El problema principal de toda revolución –escribió– es, indudablemente, el problema del poder estatal. ¿Qué clase es la que tiene el poder en sus manos? Ello decide todo. No se puede esquivar ni apartar el problema referente al poder, pues precisamente este es el problema fundamental que lo de-

termina todo en el desarrollo de la revolución, en la política exterior e interna. El hecho de que nuestra revolución haya “gastado en vano” seis meses de vacilaciones respecto a la organización del poder, es indiscutible, y está determinado por la política vacilante de los socialistas-revolucionarios y de los mencheviques. Pero, a su vez, la política de estos partidos se ha determinado, en última instancia, por la posición de clase de la pequeña burguesía, por su inestabilidad económica en la lucha entre el capital y el trabajo. El interrogante reside ahora en saber si la democracia pequeñoburguesa ha aprendido algo o no en estos tan importantes seis meses, extraordinariamente ricos en contenido. Si la respuesta es negativa, entonces la revolución ha perecido y sólo una insurrección victoriosa del proletariado podrá salvarla. Si la respuesta es afirmativa, hay que empezar con la inmediata creación de un poder firme y estable”. “. . . Sólo el poder soviético podría ser estable, sólo a él no se le podría derrocar, aún en las horas más agitadas de la revolución más violenta. . .”

“Pero la consigna “El poder a los soviets” se entiende, con mucha frecuencia, si no en la mayoría de los casos, de una manera completamente equivocada, en el sentido de “un ministerio formado con los partidos mayoritarios de los soviets”; y en esta opinión profundamente equivocada deseáramos detenernos con más detalle”,

“Un ministerio formado por los partidos mayoritarios de los soviets implica un cambio de personas en el cuerpo ministerial, conservando intangible todo el viejo aparato del poder gubernamental, aparato íntegramente burocrático, íntegramente no democrático, incapaz de llevar a cabo reformas serias que constan incluso en los programas de los socialistas-revolucionarios y de los mencheviques”.

“El poder a los soviets significa una transformación radical de todo el viejo aparato del Estado, aparato burocrático que frena todo lo que es democrático; significa la eliminación de dicho aparato y su reemplazo por otro nuevo, popular, o sea, auténticamente democrático, el de los soviets, que implica una mayoría organizada y armada del pueblo: obreros, soldados y campesinos; significa ofrecer la iniciativa y la independencia a la mayoría del pueblo, no sólo en la elección de los diputados, sino también en el manejo del Estado y en la realización de reformas y transformaciones”.

“Toda la historia de los países parlamentarios burgueses y, en medida considerable, la de los países burgueses constitucionales, demuestra que un cambio ministerial significa muy poco, pues la labor administrativa real está en manos de un ejército gigantesco de funcionarios. Y este ejército está impregnado de un espíritu antidemocrático, está ligado por miles de hilos con los terratenientes y la burguesía, dependiendo de ambos en todas las formas imaginables. Este ejército está rodeado por una atmósfera de relaciones burguesas, sólo respira ese aire, se ha congelado, encallecido, anquilosado; no tiene fuerzas para liberarse de esa atmósfera, no puede pensar, sentir ni obrar de otro modo que no sea a la manera antigua. Este ejército está ligado por relaciones de respeto a la jerarquía, por determinados privilegios ligados a los “servicios del Estado”; en cuanto a sus cuadros superiores, están totalmen-

te supeditados, por medio de las acciones y de los bancos, al capital financiero y vienen a ser, en cierta medida, sus agentes, los defensores de sus intereses y transmisores de su influencia”.

“El intento de llevar a cabo, por medio de ese aparato estatal, transformaciones tales como la supresión de la propiedad terrateniente sin indemnización o el monopolio del trigo, etc., es una mera ilusión, el más grande autoengaño y el mayor engaño del pueblo. Ese aparato puede servir a la burguesía republicana, creando una república a modo de “una monarquía sin monarcas”, tal como la tercera república en Francia; pero un aparato estatal de este tipo es absolutamente incapaz de llevar a cabo reformas que no sólo aniquilen, sino que ni siquiera cercenen o limiten seriamente los derechos del capital, los derechos de la “sagrada propiedad privada”. Por eso resulta siempre que, con todos los posibles ministerios “de coalición” donde participan “socialistas”, dichos socialistas vienen a ser, en la práctica, aun en el caso de una completa probidad por parte de algunos de ellos, un simple adorno o pantalla del gobierno burgués, un pararrayos de la indignación popular provocada por ese gobierno, un instrumento del gobierno para engañar a las masas”.

“Falta de fe en las masas, miedo a su iniciativa, miedo a que actúen por sí mismas, estremeciendo ante su energía revolucionaria, en lugar de un apoyo total y sin reservas, tales han sido los mayores pecados de los jefes socialista-revolucionarios y mencheviques. Allí está una de las raíces más profundas de su indecisión, de su vacilación, de sus interminables e infinitamente estériles intentos de verter vino nuevo en los viejos odres del aparato estatal burocrático”¹.

La lectura de esta cita de Lenin, resulta aleccionadora, ya que ayuda a ubicar en sus exactos términos el problema substancial que se debate hoy en Chile.

Cabe, sin embargo, una reflexión adicional. Con todo lo esclarecedor que resulta buscar inspiración y lecciones en el leninismo, es imposible insertar calculadamente una situación histórica determinada –como la chilena– en el contexto peculiar que abordaron Lenin y los bolcheviques. Eso es justamente otro rasgo característico de todo proceso revolucionario. Cada situación histórica que coloca a las masas en posición de avanzar a la conquista del Poder, abre nuevos y multifacéticos problemas, y plantea una diversidad de aspectos importantes o adjetivos, que el genio y lucidez de los revolucionarios de cada país deben resolver por sí mismos.

Creemos que conviene insistir en este punto no sólo porque el propio Lenin rechazó convertirse en “ícono sagrado”, sino porque, además, en la lucha ideológica entre reformistas y revolucionarios que trae aparejado el proceso chileno, se suelen confundir los “tiempos históricos”.

Por ejemplo, el dirigente del Partido Comunista, Orlando Millas, en un artículo que insertamos más adelante, ha buscado inspiración para sus tesis

¹ Ver texto de Lenin en PF N° 150, págs. 16-17.

reformistas en la Nueva Política Económica (NEP) que los bolcheviques bajo la dirección de Lenin aplicaron en 1921. Aunque el diputado Millas se apresura al aclarar que “sería absurdo comparar circunstancias históricas tan disímiles como ésta y la de Chile de 1972”, calificando anticipadamente de “torpeza” copiar las medidas tomadas en la URSS hace más de medio siglo, lo evidente es que él toma pie de la cita de Lenin para propiciar un “golpe de timón” que sería el equivalente de la NEP. Así por lo menos lo han entendido la mayoría de los lectores del artículo de Millas. Pues bien, el principal y no único error que comete Millas al citar a Lenin, consiste en que cuando los bolcheviques diseñaron por necesidad imperiosa la NEP, hacía ya cuatro años que controlaban el Poder y eran la única nación socialista del mundo. Estos detalles trastocan todo el cuadro y convierten el “golpe de timón” en Chile en algo muy distinto al que dio Lenin en 1921. Repitamos la pregunta que hacía Lenin en la extensa cita que reproducimos más arriba: “¿Qué clase es la que tiene el poder en sus manos? Ello decide todo”. En la URSS, cuando se planteó la NEP, después de remontar aislado una sangrienta guerra civil en que la burguesía fue apoyada directamente por el imperalismo, el proletariado ruso tenía todo el Poder en sus manos. Los obreros, soldados y campesinos revolucionarios eran la inmensa mayoría del país. Habían quedado atrás esos meses de la primera mitad de 1917, cuando al partido bolchevique lo seguía una minoría de la clase obrera.

La actitud leninista de 1921, forzosa en un cuadro como el que afrontaban los bolcheviques, solitarios en un planeta capitalista, no “es fuente de lecciones” como pretende Orlando Millas para resolver qué hacer en la perspectiva de Chile. Mucho más provechoso, en cambio, sería que Millas repasara los escritos leninistas anteriores a la conquista del Poder.

Pero así como constituye una falsificación histórica e ideológica la que hace el reformismo, al asimilar la situación chilena a la soviética de 1921, algunos sectores revolucionarios caen en parecido error cuando plantean que el gobierno de la Unidad Popular mantenga una actitud similar a la de los bolcheviques en el Poder, realizando tareas de construcción socialista que corresponde dirigir al proletariado.

En Chile de 1972, después de veinte meses de gobierno con participación de ministros comunistas y socialistas, ni siquiera se ha producido el quiebre de las viejas instituciones burguesas, como el Parlamento, los Tribunales y la Contraloría, y mucho menos el aparato armado se ha fracturado en beneficio de las clases revolucionarias. Por el contrario, es perceptible claramente que la institucionalidad burguesa vive una época de “renacimiento”. En términos proporcionales, podría afirmarse que instituciones como el Parlamento, los Tribunales y la Contraloría son en este momento mucho menos cuestionadas que hace dos años. El dominio de la ideología burguesa —mediante el método casi pueril de infundir miedo con una dictadura proletaria que en su fuero íntimo consideran remota—, resulta demasiado ostensible como para subrayar ese aspecto de la oposición burguesa.

Chile de 1972 no es ni la solitaria URSS de 1921, que obligue a un repliegue táctico del proletariado, ni es Rusia de 1917 con los bolcheviques

combatiendo al ejército reaccionario y a la intervención militar extranjera, y aplicando con todo rigor la dictadura del proletariado. Ni una ni la otra cosa.

En Chile se da una posibilidad para el proletariado, mucho más favorable que hace cortos años, de avanzar a la conquista del Poder, apoyándose en sus propias fuerzas y en la existencia de un poderoso campo socialista. Pero esto debe hacerse en forma orgánica y cohesionada, bajo la dirección de un partido revolucionario, tal como ha sucedido en otras experiencias históricas. Los revolucionarios necesitan, en primer lugar, ganarse a las masas librando una lucha ideológica contra los reformistas para alinear a los obreros, soldados y campesinos y conducirlos a la lucha contra la burguesía y el imperialismo. Los revolucionarios hoy, en Chile, arrastran a una minoría de la clase obrera. La ideología dominante es la ideología de la burguesía, o sea, el reformismo. Aun más, como también ocurría en el partido bolchevique, hay desacuerdos entre los propios revolucionarios que militan dentro y fuera de los partidos de la Unidad Popular. Pero no cabe ninguna duda que bajo una correcta dirección, basándose en el desarrollo del propio proceso revolucionario, será posible convencer a la mayoría de la clase obrera y de atraer a su lado a los soldados y campesinos.

El propio caso soviético, el chino o el cubano –o la admirable enseñanza vietnamita–, indican que durante un proceso revolucionario la conciencia de clase despierta con increíble rapidez entre obreros y campesinos y en otros grupos sociales, convirtiéndose ese salto en calidad de la conciencia colectiva en el factor impulsor más importante y dinámico de la revolución.

Nada hace pensar que en Chile no vaya a ocurrir igual. El miedo a la iniciativa de las masas, que se trasluce en los planteamientos reformistas, no hará variar el curso de un proceso que ya está en marcha. El estremecimiento que los reformistas sienten ante la energía revolucionaria de los trabajadores, puede –y de hecho lo hace– dificultar y demorar el proceso revolucionario chileno. Pero no podrá detenerlo. Siempre los reformistas han sido derrotados por los revolucionarios cuando éstos, como en Rusia, China o Cuba, han planteado su lucha en los términos rigurosos que exige esa tarea histórica.

Los reformistas serán desplazados por los revolucionarios, además, por un imperativo ineludible. El propio Lenin advirtió que el tránsito de la democracia al socialismo, mediante formas orgánicas, sólo se puede concebir bajo la dictadura del proletariado. Está archiprobadado como para abundar en eso. Pero vale la pena añadir que los objetivos puramente democráticos, como los que se plantearon inicialmente los revolucionarios rusos o cubanos, fueron superados en cuanto el proletariado cobró conciencia de su fuerza. En el proceso chileno hay también un potencial emergente en el seno de la clase obrera, que se orienta hacia el socialismo. Esa fuerza que está naciendo a ojos vista en las fábricas y en el campo, se plantea metas mucho más elevadas que una NEP. En la medida en que eso existe, cobra cuerpo otra amenaza peor para los reformistas: la aparición de una fuerza de rechazo al proletariado, dirigida por el fascismo. Esto también se da en el caso chileno y es indiscutible –ahí está el caso español para probarlo– que únicamente con métodos de lucha proletarios, o sea revoluciona-

rios, se puede contrarrestar el peligro fascista. El reformismo es incapaz por sí solo de atajar al fascismo y mucho menos de conquistar el apoyo de las masas para vencerlo en un combate frontal. El reformismo, como método de transición al socialismo, es perfectamente incapaz, por todas estas razones, de suplantarse a la dictadura del proletariado.

II

“Nosotros creemos que frente a este tipo de canallas, de engaño, hay que responder de otra forma. El salitre es de todos los chilenos, la industria textil es de todos los chilenos, el cobre es de todos los chilenos, y todos los recursos que son de la nación pertenecen a la nación entera, porque eso es lo que determina el interés y el deber de los obreros y de todo el pueblo chileno”.

Fidel Castro (discurso en la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, hablando sobre las “empresas de trabajadores”, PF N° 144).

El extenso artículo de Orlando Millas –que reproducimos más adelante– tiene una gran importancia política. Por una parte, la línea que allí se traza es más o menos la que, en definitiva, adoptó el gobierno, a juzgar por los hechos conocidos al cierre de esta edición. De otra parte, el artículo de Millas se ha convertido en el eje de una confrontación dentro de la Unidad Popular entre posiciones reformistas y revolucionarias. También al interior de la UP los revolucionarios están en minoría, como reflejo del marco nacional en que opera esa coalición política. Por último, el artículo de Millas hay que analizarlo con la seriedad que merece la voz oficial de la Dirección del partido más orgánico de la UP.

Hay aspectos en ese artículo con los cuales no se puede estar en desacuerdo. Por ejemplo, en lo que se refiere a las limitaciones del capitalismo de Estado, aspecto que “Punto Final” ha abordado más de una vez atrayendo sobre sí muy poco fraternales ataques de sectores del PC que hoy expresan parecidas reservas.

Tampoco disintimos de las críticas que hace Millas a las deficiencias de la participación obrera en las empresas del área social. Creemos que el problema es mucho peor a como él lo pinta y que, sin duda, aparte del economicismo y de la burocracia sindical, herencias de medio siglo de práctica política de la izquierda tradicional, hay una peligrosa y fuerte tendencia tecnocrática entre interventores y otros funcionarios, que amenaza fortalecer todavía más el capitalismo de Estado, cerrando el paso a relaciones auténticamente socialistas de producción.

Pero Millas busca el ejemplo de la abortada revolución nacionalista de Bolivia, en la década del 50, para disparar contra “la fraseología sobre el “control obrero. . .” Y es aquí donde empiezan a aparecer las orejas reformistas de su artículo. Porque justamente es a partir del control obrero donde se forma el poder proletariado. Los trabajadores encuentran en esos comités y consejos la mejor escuela para aprender a ejercer su dictadura de clase que habrá

de suplantar a la dictadura de la burguesía. Todavía más: solamente el control obrero en las áreas mixta y privada podrá evitar los desajustes y problemas reales que crea el proceso y que se traducen en boicot, escasez de productos de consumo popular, especulación, mercado negro, etc. Las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), una excelente iniciativa, no tendrán eficacia si no están apoyada en el control obrero a nivel de la producción.

En palabras de Lenin:

“La propaganda en favor de los consejos obreros debe llevarse de manera de inculcar en la convicción de las grandes masas obreras, aun de aquellas que no pertenecen directamente al proletariado industrial, que la responsabilidad de la desorganización económica, incumbe a la burguesía, y que el proletariado, al exigir el control obrero, lucha por la organización de la industria, por la eliminación de la especulación y la carestía de la vida”. (Tesis al Segundo Congreso de la Internacional Comunista).

Lo que ocurre con esto del control obrero es que a los reformistas les atemoriza porque lo confunden con los soviets, o consejos de obreros, soldados y campesinos, cuya formación requiere que esté a la orden del día la lucha por el poder.

Lenin advierte que sería un error formar los consejos industriales obreros “sólo con obreros partidarios de la dictadura del proletariado. La tarea del Partido Comunista –añade–, consiste, por el contrario, en aprovechar la desorganización económica para organizar a los obreros y ponerlos en la necesidad de combatir por la dictadura del proletariado ampliando la idea de la lucha por el control obrero, idea que todos comprenden ahora”. (Id.).

Es aproximadamente lo que ha ocurrido en la industria manufacturera de metales MADEMSA. Obreros partidarios de la dictadura del proletariado decidieron tomarse esa industria, que pertenece a uno de los más influyentes clanes financieros del país. En la asamblea en que se aprobó pedir un interventor al gobierno, los obreros democristianos votaron en contra. Pero acataron la decisión de la mayoría y entregaron su apoyo valioso. El planteamiento de ellos para sumarse a la nueva fase del trabajo en la industria, fue participar sin discriminaciones sectarias en los comités que harán posible el control obrero en la fábrica. Un inteligente manejo de la situación en MADEMSA, desde los niveles del “equipo económico” del gobierno, hasta los obreros revolucionarios de la industria, ha deshecho todas las maniobras publicitarias y políticas montadas por el clan propietario de la fábrica.

El artículo de Millas induce, por otra parte, a creer que la responsabilidad de la desorganización económica, que en el grado del proceso chileno es infinitamente menor comparada con otras experiencias, es de los obreros y campesinos que se toman fábricas saboteadas o fundos desmantelados.

La burguesía aparece salvada de culpa hasta el extremo que Millas plantea que sea el proletariado el que haga concesiones, o sea, que concilie y pida perdón. Para el articulista “la correlación de fuerzas ha sido afectada, en contra de la clase obrera y del Gobierno Popular, por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen transgresiones al programa de la UP”. Lo mismo que dicen partidos de la burguesía, como el

PDC. Pero ha sido, en cambio, la excesiva observancia de un Programa que necesariamente debería ser dinámico (quizás por eso se le apellida “Básico”), lo que ha producido la actual debilidad de la UP. La receta de Millas no hará, pues, sino debilitarla todavía más.

Un miembro del “equipo económico” que dirige el Ministro Pedro Vuskovic parece refutar la acusación de Millas cuando dice: “El Programa planteado por la izquierda en 1970 y aprobado por el pueblo de Chile, es por lo tanto de un claro contenido revolucionario contrapuesto a todo intento de reformismo desarrollista. El Programa es no sólo antimperialista y antioligárquico, sino sobre todo anticapitalista, y por ende, de transición al socialismo. . . En consecuencia, el problema fundamental que plantea el Programa Básico no es un problema de carácter técnico-económico, sino el problema político de la transformación revolucionaria. Esta es la razón por la cual la política económica del Gobierno Popular es de naturaleza esencialmente política”. (Pío García, “La política económica del Gobierno Popular”, revista “Sociedad y Desarrollo” del CESO, N° 1, 1972).

En efecto, en el Programa Básico se plantea “iniciar la construcción del socialismo” en Chile y el accionar económico del gobierno debe contribuir a que la lucha decisiva por el poder, que es política, se libre en las mejores condiciones para el proletariado. El aporte del gobierno a esa lucha de clases debe consistir en lo que define el mismo autor: “suprimiendo en esta etapa la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales; nacionalizando las riquezas básicas del país; desarrollando la reforma agraria; nacionalizando el sistema bancario y financiero; nacionalizando el comercio exterior y los centros monopólicos y estratégicos de la industria y de la distribución” (Pío García, id.). “. . . Esto requiere –añade– establecer principios de organización y dirección socialista al interior del área de propiedad social, asegurar a ésta el carácter de dominante en la economía, subordinar a ella el área de la propiedad mixta y someter a sus condiciones el área de la propiedad privada; en suma, reemplazar el funcionamiento de la economía según la ley de la ganancia capitalista por su funcionamiento según la planificación socialista”.

El desplazamiento hacia la derecha que ha sufrido el eje político en el seno de la Unidad Popular, como efecto del planteamiento formulado por Millas, hace que la cita anterior –como estará pensando más de algún lector– parezca más la de un “ultraizquierdista” que el razonamiento de un técnico del “equipo de Vuskovic”. Y es que por efecto de la presión reformista en el interior de la UP, que no ha sido bien contrarrestada por la minoría revolucionaria, el “equipo económico” como suele llamarse al grupo que encabeza el ministro Vuskovic, ha terminado por situarse en la vanguardia de las fuerzas de la UP que luchan por poner al gobierno al servicio de los objetivos estratégicos del proletariado.

Ya el 30 de agosto de 1966, el Primer Ministro cubano, Fidel Castro, se vio obligado a denunciar a Millas que “se puso bravísimo con el discurso de 26 de julio” en que Fidel desenmascaró al reformismo burgués del gobierno de Frei. Millas se sintió aludido. No es primera vez, por lo tanto, que él asu-

me la defensa del reformismo. Este factor debe ser tomado en cuenta para no caer en el error de creer que todo comunista comparte los criterios expuestos por Millas. El representa una posición reformista –sin duda fuerte en el plano nacional–, pero el suyo no es un criterio comunista, o sea, revolucionario. Hasta qué punto la alta votación democristiana en la CUT contribuyó a envalentonar a los reformistas de todos los pelajes, es un asunto por esclarecer todavía.

El cumplimiento del Programa Básico de la UP no tiene –como se cree– un margen de aplicación de seis años, lo que haría posible detenerse ahora para seguir después. Ni siquiera mirado desde un ángulo estricto de política económica es prudente apagar el motor o reducir la velocidad para ceñirse a las normas de tránsito al socialismo que permite la burguesía. Completar el área social, estimulando la movilización de los propios trabajadores donde se pueda y con ayuda del aparato de gobierno donde se requiera; alentar el control obrero en las dos mil empresas industriales y comerciales, medianas y grandes de la burguesía no monopólica; completar la reforma agraria rebajando a 40 hectáreas la reserva; brindar seguridad de abastecimiento y precios a la pequeña burguesía productora y comercial; crear Consejos de Trabajadores Urbanos tal como en el campo, y dotarlos de facultades; y otras medidas que han señalado tanto el Partido Socialista como el MIR y el “equipo económico” del propio gobierno, echarían a andar un verdadero proceso revolucionario. La solidaridad activa y concreta de los países socialistas, al mismo tiempo, seguramente se pondría en acción si Chile se plantea de verdad crear un Estado proletario y antimperialista.

Pero al margen de lo que se desea que hiciera el gobierno, a los revolucionarios les están planteadas tareas propias. La principal es ganar a las masas para conquistar el poder, ampliando sus reivindicaciones democráticas de hoy. Para esa tarea no sirven las sectas. Hay que ver lo que hicieron organizaciones revolucionarias del pasado. Los bolcheviques, por ejemplo, se fusionaron en 1917 con varios grupos y tendencias que les eran afines y a las cuales antes habían combatido. La vida interna del partido bolchevique fue extraordinariamente rica y esa lucha no lo dividió sino que, al contrario, lo hizo más fuerte para afrontar la gloriosa tarea de llevar a cabo la primera revolución socialista. El Movimiento “26 de Julio” de Cuba, hizo otro tanto, reagrupando sectores revolucionarios hasta ganar el apoyo de las masas urbanas y campesinas que decidieron la revolución. En Chile, esta tarea también está planteada. El proletariado necesita una dirección revolucionaria consecuente. Para lo cual hay que “unir, unir y unir”, como aconsejaba Fidel Castro en su visita a Chile.

III

“El deber de todo revolucionario es hacer la revolución”.

Declaración general de OLAS, agosto de 1966.

“Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”.

Programa Básico del Gobierno Popular, diciembre de 1969.

Si bien es ilógico pedirle peras revolucionarias al olmo reformista, tampoco es justo aceptar el criterio tecnocrático y desarrollista que opone Orlando Millas al libre curso de un proceso de contenido revolucionario.

Su artículo pone el acento en la desorganización de la economía que se ha producido como resultado de las nacionalizaciones y cambios en marcha. Aun cuando esa desorganización no revista los caracteres dramáticos que parecen fluir del artículo de Millas, es cierto que existe. Pero de qué otra manera se podría “reemplazar la actual estructura económica”, como plantea el Programa Básico de la UP, si no es provocando algunos desajustes transitorios. Lo grave no está en los errores que ha cometido el “equipo económico” y ni siquiera en el peso que tiene el economicismo dentro de la clase trabajadora, factor que gravita seriamente y que no tardó en lanzar por la borda el Convenio CUT-Gobierno sobre remuneraciones. Lo serio es que los problemas económicos que afectan más intensamente a la población son el resultado del sabotaje deliberado, implacable y bien calculado de la burguesía y del imperialismo norteamericano. Ellos son los grandes responsables que no aparecen enjuiciados en el artículo de Millas. Sin embargo, él hace recaer la culpa en la clase trabajadora que lucha “transgrediendo” el Programa. Se trata de los obreros que se toman las fábricas boicoteadas o de los campesinos que ocupan los fundos dismantelados por los latifundistas. Millas se salta olímpicamente el fenómeno de la lucha de clases, reactivado a partir de la instalación de un gobierno que se compromete a terminar “con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”. Cae así, en forma por demás visible, en planteamientos puramente económicos y desarrollistas que compartiría sin vacilaciones hasta el más moderado experto de la CEPAL. No es extraño, pues, que la Democracia Cristiana los acoja jubilosamente.

Por la vía que dibuja Millas es imposible “reemplazar la actual estructura económica”, aunque ciertamente su alternativa puede traer orden y desarrollo. Si a esto se agrega que un programa reformista está en capacidad de obtener amplio apoyo internacional, comenzando por el respaldo del imperialismo, se entiende por qué los planteamientos de Millas fueron acogidos con tanto entusiasmo por el reformismo burgués representado por la Democracia Cristiana.

“El imperialismo –ha dicho Fidel Castro– alienta el reformismo. Y en la medida en que su desprestigio crezca y su influencia se pierda, su esfuerzo será para desalentar revoluciones y alentar reformas, pero que mantengan su dominio en la medida de lo posible” (PF N° 158).

Está de más decir que Cuba no alienta políticas reformistas. (“¡Nosotros dentro de nuestro país, y en el contexto del movimiento internacional, apoyamos la política revolucionaria! ¡Y en América Latina somos partidarios de políticas revolucionarias! Porque sabemos que el reformismo no resuelve nada, que los problemas son muy serios y muy profundos y sólo verdaderas revoluciones los pueden resolver”). En el esquema que plantea Millas, y que parece imponerse en la Unidad Popular, poco importa el apoyo de Cuba, ciertamente. Hay otras naciones, muy poderosas, que sí están dispuestas a prestar su contribución a una fórmula reformista para Chile. En ese sentido el programa del reformismo puede obtener éxito en la misma medida que lo logró el pasado gobierno de la Democracia Cristiana, o sea, dejará abierto el camino a una alternativa revolucionaria y ant imperialista verdadera. Hacia ese momento, apoyados por las masas organizadas de trabajadores, deben apuntar los revolucionarios y prepararse en forma consecuente para la conquista del poder. Para ello no bastan los buenos propósitos y ni siquiera ayuda mucho hacer conocer previamente al enemigo cada paso organizativo que se dé. Se trata, en cambio, de un trabajo silencioso, diario, que sin descuidar la lucha ideológica, más necesaria que nunca, ponga el acento principal en la organización.

Manuel Cabieses Donoso.

MAPU: El Quinto Pleno de la Dirección Nacional (Selección)

(23-24-25 de junio de 1972)

Informe Político

Han pasado seis meses desde nuestro último pleno y una serie de importantes sucesos políticos, algunos de los cuales sacuden particularmente a nuestro partido, marcan este período.

Nuestro análisis acerca de estos seis meses parte y se liga con lo que esta misma Dirección Nacional resolvía acerca de la situación política del año 1971 en diciembre último.

En ese IV Pleno nuestro partido realizó un exhaustivo balance del desarrollo del proceso revolucionario durante el primer año del Gobierno Popular.

El IV Pleno constató el creciente desarrollo de la ofensiva táctica del enemigo y la pérdida de iniciativa, en ese terreno, de la Unidad Popular. Señalábamos en esa oportunidad que “mientras en lo estratégico hemos estado y seguimos a la ofensiva, en lo táctico hemos pasado a la defensiva”; “la situación es, pues, muy positiva en términos estratégicos, pero en lo táctico aparecen síntomas de debilidad. Ahí es donde tenemos que revisar y corregir”.

Decíamos allí que, en un primer momento, hasta la muerte de Pérez Z., la UP se mostró con una capacidad de movilización y de implementación programática enorme. Entre noviembre de 1970 y mayo de 1971 inclusive, el Gobierno dio en el cobre, en los bancos, en el hierro, en el acero, en el carbón, en el salitre, en las industrias textiles y en otros monopolios, y en la expropiación de 1.300 latifundios, golpes demoledores a los enemigos fundamentales de nuestro pueblo. Este período no se vio ajeno a defectos que a su vez han costado caro posteriormente a la UP. Ya entonces comenzó un período de desmovilización y deterioro de las estructuras unitarias. Aparecieron allí sectarismos, apetitos de partido, tendencias al feudo y, sobre todo, las dificultades de dirección propias de un Gobierno Revolucionario, montado sobre un Estado y una administración burgueses.

El segundo período que distinguíamos en el plano táctico era el marcado por una recuperación y despliegue de las fuerzas de la derecha y el imperialismo. Estas ofensivas se caracterizaban por una coordinación muy grande entre el imperialismo y los yanacónas.

El propósito de estas acciones era monolítico y persistente: se trataba de demostrar, a cualquier precio, que este Gobierno no es garantía de respeto a las instituciones jurídicas, y de que más allá de su buena o mala voluntad está

de hecho sobrepasado por grupos armados e ilegales que imponen la violencia y el caos. De esta manera se buscaba barrenar la legitimidad legal del Gobierno, quitarle apoyo entre los sectores “constitucionalistas”, e incluso ambientar un golpe que restableciera la legalidad. El Gobierno, decían los enemigos, respeta el texto de las leyes pero no su espíritu. Es abiertamente ilegal y antidemocrático en sus verdaderos y “sinistros” propósitos.

El objetivo último de estas ofensivas era preparar el terreno para la caída, avalada por elecciones o no, del Gobierno Popular.

La derecha implementó, a partir de la muerte de Pérez Z., que marcó el hito donde se produjo un giro decisivo en la situación, ataques a fondo, y mantuvo permanentemente la iniciativa táctica, esas ofensivas se caracterizan por:

- Su carácter guerrillero. Enfrentamientos parciales que dieron al enemigo la oportunidad de golpear, de hostigar, de desgastar las fuerzas del Gobierno. Se dio así crédito a un “estado de crisis” siempre inminente.

- Su carácter de masas. La derecha salió a la búsqueda de la mediana y pequeña burguesía, tanto de la ciudad como del campo, y logró movilizar a vastas capas de la población tras su política.

- Unidad de acción de la oposición. Ella fue creciente en ese período. Pero no se requería de un comando único de la reacción: la diversidad de sus partidos ofrecía una mayor movilización de masas.

- Pugna entre fascistas y democráticos. Los sectores democráticos de los partidos de derecha, en general menos dóciles al dictado de los monopolios y el imperialismo, desarrollaron una cierta resistencia, aunque al final sirvieron de hecho a los dirigentes más derechistas.

- Apoyo del imperialismo norteamericano. La mano experta del imperialismo se reconoce en todos los actos de ese período. Es su manera de responder ante la imposibilidad de defenderse de sus heridas económicas, dada la impecabilidad legal y el apoyo nacional que reciben las medidas de nacionalización.

Por otro lado, anotábamos que las deficiencias de la Unidad Popular, que se mantuvo a la defensiva táctica, se debían a la ausencia de una dirección única y eficaz, a sus deficiencias operativas, a una precaria línea de masas y a la dificultad que los dirigentes populares tenían para manejar los aparatos del Estado burgués heredado.

Señalábamos también, en ese IV Pleno de la Dirección Nacional, que las tareas para este año de 1972 eran centralmente las siguientes: –la lucha antimperialista; –la expropiación de todos los monopolios y la creación del Área de Propiedad Social; –la liquidación del latifundio superior a las 80 hectáreas; –el ganarse para la política de la Unidad Popular, como aliados del proletariado, a los pequeños y medianos empresarios; –el organizar el abastecimiento en base a la población organizada y –el incorporar resueltamente a las masas. Todas estas tareas eran puestas en la perspectiva de la batalla por la conquista del Parlamento para el pueblo.

A nuestro juicio, el semestre que, ahora en este V Pleno nos toca analizar, se inicia en un momento culminante de la ofensiva táctica del enemigo:

las elecciones de O'Higgins y Colchagua, y Linares, donde se impide a la UP conquistar la mayoría.

El imperialismo y la derecha se han guiado por el objetivo central de acumular más fuerza que el Gobierno, uniendo las fuerzas opositoras, ganando a los sectores inestables de las capas medias, y pretendiendo dividir a las fuerzas que sustentan al frente y al Gobierno del pueblo. De un modo más claro, se trata de crear el frente amplio al revés; de sustraer a la pequeña y mediana burguesía de su alianza con el proletariado, para colocarlas bajo la hegemonía del imperio y los monopolios.

Para ello el imperialismo y la derecha conservan un poder material inmensamente superior al de la clase obrera y el pueblo chileno. Pero ese poder llevar consigo una debilidad, desde el momento en que está basado en círculos minoritarios. Es así como en Chile se ha manifestado una ley universal de todos los procesos revolucionarios: los pueblos pueden derrotar a enemigos inmensamente superiores sobre la base de que la clase obrera se convierta en intérprete de los intereses más profundos y sentidos de todas las capas de la población no interesadas directamente en la subsistencia de los monopolios. El Gobierno Popular permite el control de una parte del poder político, la que tiene, por cierto, mayor dinamismo que las otras, pero esto no constituye sino un paso estratégico en una lucha por el poder, prolongada y compleja.

La sola existencia del Gobierno Popular creó condiciones favorables para una nueva correlación de fuerzas, y de hecho trajo como consecuencia un repliegue del enemigo.

En la medida, sin embargo, en que la base material del poder enemigo es fuerte, éste sigue teniendo condiciones para retomar la iniciativa política, iniciar una embestida contra el Gobierno, preparando las condiciones para propinarle una derrota decisiva que cambie el cuadro de fuerzas y los ponga a la ofensiva en el plano estratégico.

Factor indispensable para la materialización de esa línea es la unidad de todas las fuerzas de la oposición, de tal modo que éstas se presenten al país como una alternativa poderosa y capaz de arrebatarle a la UP la posibilidad de obtener mayoría.

Esta es una consideración que está en la base del conjunto de ofensivas tácticas del enemigo.

El repliegue del fascismo

Las victorias derechistas en las elecciones de Linares, O'Higgins y Colchagua, expresaron logros exitosos de esa estrategia, porque proyectaron la imagen de un apoyo minoritario a la UP y manifestaron la capacidad de la reacción para capitalizar a su favor nuestros errores y para enfrentar la batalla por el poder con alguna perspectiva de victoria.

Especial importancia revistió en particular, la elección de Linares. En primer lugar porque la otra, la elección de O'Higgins y Colchagua, no fue sino la repetición, en nuevas condiciones, del esquema político que permitió la victoria a Frei en el año 64. Esto es, el apoyo del conjunto de las expresiones po-

líticas de la burguesía a un candidato demócratacristiano que dé confianza a todas ellas.

En Linares, sin embargo, la cosa revistió mayor gravedad, porque la unidad se dio en torno a un derechista confeso y en contra de una candidata ligada profundamente a la Reforma Agraria, llevada a cabo por la propia DC.

Es cierto, por otra parte, como los afirmamos en la reunión del Arrayán que esa victoria derechista fue también posible, porque la UP no se presentó en la elección con su plataforma y sus rasgos distintivos, ya que se dejó arrastrar a posiciones que no eran las suyas sino las del MIR.

De todas maneras allí se mostró una tendencia: la UP aparecía incapaz de volcar en su favor a la mayoría de la población, quedando claro que la posibilidad de conquistar el poder era una cuestión cuesta arriba.

La elección de Rector de la U. de Chile, en donde tanto el candidato como la plataforma permitían conquistar apoyos mucho más allá de la UP y la derrota en ella de las fuerzas que apoyan al Gobierno, no hizo sino confirmar esta peligrosa tendencia.

Todas esas elecciones abrieron paso, a nuestro juicio, a una nueva coyuntura política, por el efecto que ellas produjeron tanto en el campo del enemigo como en el de la alianza popular.

El primer efecto que ellas produjeron dentro de las fuerzas opositoras, fue el de un fortalecimiento de aquellos que confían en la posibilidad de derrotar electoralmente al Gobierno, sea en el 76 mediante las elecciones presidenciales, sea en 1973 en las elecciones parlamentarias. En consecuencia, aparecieron claramente replegados aquellos que se juegan por derrocar al Gobierno Popular, esperando en todo caso que una victoria electoral en el año 1973 abra la posibilidad de un golpe constitucional mediante una acusación al Presidente de la República.

Así pasaron a perdedores aquellos que apuestan a un golpe militar. Las victorias electorales alcanzadas por la oposición aislaron al fascismo, determinando el más absoluto de los fracasos de Marshall y su comparsa, quienes no recibieron para sus locuras ni siquiera el apoyo de Sergio Onofre Jarpa y sus afiebrados seguidores, y terminaron por buscar alero protector en sus primos hermanos, los fascistas bolivianos.

Las Fuerzas Armadas son de Chile

Por otra parte, estos aventureros se han estrellado una y otra vez con la firmeza con que nuestras FF.AA. mantienen en alto sus tradiciones constitucionalistas, profesionales y de progreso. Nuestro partido reitera en este sentido lo afirmado en el informe de la Comisión Política al Tercer Pleno de la Dirección Nacional, que rindiera el compañero Eduardo Rojas. Decíamos allí que las Fuerzas Armadas “están llamadas a jugar un papel positivo en el proceso de nuestra independencia nacional, de perfeccionamiento de nuestra democracia y de construcción del socialismo en nuestra Patria”. “Que ellas debían entregar su aporte de inteligencia y voluntad a las grandes tareas de desarrollo de nuestra independencia económica”. Que, con todo, entendíamos que su

principal tarea la constituye la defensa de la soberanía y de la seguridad de la nación. Que desde ese punto de vista las amenazas a nuestra soberanía son hoy distintas en calidad de procedencia a las tradicionales, en cuanto Chile emprede el camino de su liberación del imperialismo.

Desde entonces hasta ahora, los mil intentos de la derecha, torpes o sutiles, directos o indirectos, por quebrar el carácter profesional y constitucionalista de los Institutos Armados de nuestro país, han fracasado. Por el contrario, esas tradiciones se consolidan y desarrollan, las FF.AA. colaboran eficientemente en múltiples tareas relacionadas con el desarrollo del país y perfeccionan constantemente su capacidad de defensa de la soberanía de la Patria, tomando en cuenta las nuevas presunciones políticas, geográficas y técnicas en que se basa nuestra seguridad nacional.

El MAPU como partido del pueblo, preocupado por tanto de la defensa de la soberanía nacional, reitera una vez más su confianza plena en la actitud democrática, constitucionalista, profesional y patriótica de las Fuerzas Armadas chilenas.

La lucha por la hegemonía en la oposición

No todo, sin embargo, es luna de miel entre los reaccionarios. Surgen algunos escollos en su propio campo. El primero de estos es consecuencia directa de la elección de Linares. La victoria de Sergio Diez en esa provincia, le muestra al PN que también se la puede para nuclear en torno suyo a la oposición, agudizándose de este modo la lucha por la hegemonía en la oposición entre el PN y el PDC, estando claro que ni uno ni otro, menos el PDC por cierto, ponen en duda que Frei debe ser su líder, quedando por resolverse a quien le corresponderá ser el ojo de las fuerzas que lo sustentarán y lo llevarán adelante.

Este asunto adquiere especial gravedad para la DC, porque entran a tener parte en el negocio los sectores empresariales que han adquirido una autonomía de clase relativamente mayor y los círculos imperialistas, que si bien apuestan a la unidad de ambas fuerzas políticas, se resisten a poner los huevos en una sola canasta y esperan entregar su apoyo decisivo en esta pugna a aquella fuerza que se muestre más resuelta y más eficaz para detener el avance del pueblo y su revolución.

Esta pugna no impide que los enfrentamientos electorales contra la UP se den en forma conjunta, ni invalida la premisa de la unidad entre el PN y la DC, pero estimula la fuerza que en ambos bandos tienen aquellos que piensan que en este juego deben ir juntos, pero no revueltos. Esta cuestión está llamada a obstaculizar gravemente la unidad de acción de la derecha y abre, como lo demuestra la actitud de la actual directiva de la DC, la posibilidad de establecer una brecha en el campo enemigo que facilite el triunfo del pueblo siempre y cuando entendamos de conjunto en la UP la importancia que esta cuestión tiene.

Lo que decimos se ha visto comprobado por el surgimiento germinal y, por tratarse del PDC, inestable, de una nueva política de ese partido, orienta-

da a levantarse como alternativa del Gobierno Popular, pero una alternativa distanciada de la derecha, buscando conformar una fuerza política centrista que pone el acento, en su primera fase táctica, más en eliminar nuestro apoyo popular, que en buscar, por ahora, el apoyo de la derecha tradicional, dejando esta cuestión como un asunto de acción posterior.

No se trata para ellos, en suma, de apoyar el Gobierno, sino de oponerse a él desde otra perspectiva.

No cabe duda, sin embargo, que esta política exige, como condición básica, la coincidencia con nosotros en algunos asuntos de importancia.

El temor de la DC a la guerra civil

Esta política encuentra su explicación en la convicción que tiene la Democracia Cristiana de que un alineamiento del país en dos bloques lleva inevitablemente a un enfrentamiento que puede desencadenar en una guerra civil, en la que la DC perdería las riendas, siendo reemplazada por el fascismo que sin duda es un mejor jinete para esa coyuntura. Esta afirmación se ha probado a raíz de la Reforma Constitucional que legisla acerca de las tres áreas de la economía. En ella, la derecha introdujo, a través del freísmo, una serie de disposiciones, como la devolución de las empresas estatizadas, por ejemplo, que sólo podrían ser impuestas mediante un enfrentamiento a sangre y fuego con la clase obrera, siendo éste un precio muy alto que la DC no está en condiciones de pagar. Se abrió, entonces, un campo objetivo al entendimiento, sobre esta materia concreta, con el Gobierno.

Si las primeras negociaciones, antes que el Gobierno presentara los vetos, fracasaron, se debió a que la directiva del PDC prefirió en ese instante maniobrar con el PIR para arrastrarlo fuera del Gobierno y convertirlo así en un aliado de su política centrista, aun al precio de postergar la consumación de un entendimiento tácito con nosotros, indispensable para el desarrollo exitoso de esa misma política centrista.

Esa perspectiva política encarnada por Fuentealba e impuesta por él al PDC en el Plenario de Cartagena, sigue sin embargo, vigente. Vigencia que se ve reafirmada porque el desarrollo de la tramitación de la reforma ha llevado a la oposición a defender la tesis peregrina que necesita tan sólo de mayoría para insistir en sus criterios ante los vetos del Ejecutivo, buscando así limitar la capacidad ejecutiva del Gobierno Popular. Lo que se busca tras esta disputa aparentemente formal, es inutilizar de un modo sustancial el principal instrumento con que el pueblo cuenta para conquistar el poder: el Gobierno Popular. Esta es una cuestión en la que el pueblo no puede transar, abriéndose así las puertas a un enfrentamiento de proyecciones incalculables que los "centristas" del PDC no están interesados en provocar, ya que daría con su política en el tarro de la basura.

La política de la DC, sus contradicciones, sus virajes, sus ambigüedades tácticas, sus perspectivas estratégicas, no pueden ser entendidas al margen del carácter de clase de ese partido. La DC expresa múltiples intereses de clase. Sus sectores más progresistas representan en general a las capas no monopólicas de la bur-

guesía –mediana y pequeña– y a los sectores atrasados del pueblo, que la DC aún logra liderar. Ellos se resisten a la alianza abierta con la derecha y buscan permanentemente poner a la DC en el “centro político” del país. La campaña presidencial de Tomic ha sido el período en que, de una manera más clara, esas tendencias han logrado imponer su política al conjunto del partido.

El “freísmo”, en cambio, se halla estrechamente unido a la burguesía monopólica y al imperialismo. La política del gobierno de Frei es la demostración práctica más categórica de esta estrecha relación. Buscan permanentemente la unidad del conjunto de la derecha y tienen en Frei el “líder” capaz de sellar esa unidad. Para poder constituirse en el núcleo dirigente de la derecha y de la contrarrevolución necesitan, sin embargo, un PDC fuerte, unido y con capacidad de influir en amplios sectores de trabajadores.

Las contradicciones internas en el PDC se dan en ese marco político y de clases. Desde el punto de vista estratégico es el freísmo quien tiene las cartas del triunfo, tanto por su poder y su influencia al interior del PDC, como por el hecho de que la unidad del partido sólo es posible en la medida en que éste se plantee como alternativa a la UP y su Gobierno. Esa perspectiva requiere obviamente la unidad de toda la derecha, y los progresistas tendrán al fin que aceptarla aunque sea como el “mal menor”. Desde el punto de vista táctico, sin embargo, es posible que las tendencias progresistas logren imponer ciertas posiciones y usar por tanto un marco propicio para entendimientos puntuales con la UP.

Esta es la perspectiva que se ha abierto a partir de Cartagena. Su éxito depende en lo fundamental, de la forma en que la directiva de Fuentealba logre imponer su política al freísmo en el interior de la DC.

El bloqueo contra Chile y la política a dos bloques

El informe que la Comisión Política presentó al IV Pleno de la Dirección Nacional de diciembre del año pasado, afirmaba que el imperialismo buscaba a todo precio nuestra derrota, pero que no estaba en condiciones de jugarse abiertamente, mostrando su cara y disparando sus armas. Por ello es que prefería “sacar las castañas con la mano del gato”.

Esta afirmación sigue siendo plenamente válida. La correlación de fuerzas se ha visto fuertemente alterada por el fortalecimiento del campo socialista y por los avances alcanzados por la lucha de los pueblos de Vietnam, Medio Oriente y en Pakistán.

Especial importancia ha revestido el apoyo que a esta lucha han prestado los Estados Socialistas y las victorias sucesivas de los vietnamitas que tienen arrinconados en Saigón y con los pantalones en la mano a Nixon y sus compinches. Esta situación ha obligado a Nixon a levantar bandera de rendición y a ir a golpear en tono conciliador las puertas de Pekín y de Moscú. Por su reelección Mr. Nixon ha tenido que conceder puntos importantes de la hegemonía imperialista en el mundo. Y, en aquello que constituye lo único que no ha cedido, Vietnam, los propios vietnamitas lo obligaron, con su resuelto combate, a irse por donde vino.

El crecimiento de las fuerzas que de uno u otro modo están por desarrollar un mayor grado de autonomía en América Latina respecto del centro imperial, no hace sino empeorar el cuadro de los yanquis.

Este crecimiento se ha manifestado con mucha fuerza en la última votación de la O.E.A. acerca de Cuba, en donde los yanquis y sus medios pollos no alcanzaron a reunir los dos tercios para rechazar la proposición peruana sobre este asunto.

Esta situación inhibe seriamente las posibilidades intervencionistas de los norteamericanos, sumado además el hecho de que una acción de este tipo aislaría en forma manifiesta a los aliados internos con que el imperialismo cuenta. Estamos seguros que, incluso, a Mario Arnello le costaría apoyar a los marines en nuestro país y que éstos contarían apenas con el apoyo de Pablo Rodríguez y su mafia.

Por esta razón es que el imperialismo se camufla y trata de no aparecer jugando en la cancha. ¡Qué no se engañen, sin embargo, los que piensan que no está presente en el juego! Sigue jugando con toda su fuerza a la unidad de la oposición, premisa sin la cual su política está destinada al fracaso. Para ello mueve con mucho cuidado sus peones, acalla a los impacientes, respalda con billete del bueno a los indecisos, trata de aislar a los que siendo opositores mantienen una actitud digna y patriótica.

No es esto, sin embargo, lo único que el imperialismo aporta al negocio. Lo más decisivo es que de un modo sutil, pero eficiente, echa una manito a la acción de sus amigos, bloqueando comercial y financieramente a Chile. Lo hace de una manera tal que no se nota abiertamente, pero sí se sienten sus efectos graves para la economía del país. Este Bloqueo Invisible, como lo llamara en un discurso por cadena radial nuestro Secretario General Rodrigo Ambrosio, está destinado a provocar un embotellamiento de Chile en dos cuestiones vitales en su desarrollo: una es el abastecimiento para la actividad industrial y el consumo, para lo que han cerrado la capacidad de adquisición de Chile en EE.UU. o el peligro permanente del requisamiento de todo lo que con dificultad compramos allá; y otra es el de la agudización de nuestro déficit financiero mediante el cierre de nuestras principales líneas de crédito, excepto de algunas, muy escasas en todo caso, que sirven para pagar las deudas que tenemos con ellos. Es decir, consiguen pan y pedazo.

Esa es la verdadera cara de la política yanqui hacia Chile.

Esto se comprobó en forma fehaciente en la negociación de la deuda externa, en donde los yanquis presionaron para que se llegara a un arreglo, evitando la ruptura, pero a un acuerdo tal que, si bien significaba alivio, ha terminado limitando al máximo nuestra capacidad de maniobra financiera.

Hablando claramente, se trata de dejar actuar a los enemigos interiores, pero arreglándoles lo más que se pueda el camino, creando las condiciones para que éstos hagan escándalo del desabastecimiento y del déficit, provocados de manera principal aunque subterránea por el propio imperialismo.

Esta política encontrará dificultades gravísimas en la medida en que el campo enemigo pierda homogeneidad y unidad.

El enfrentamiento a dos bloques está, por tanto, en la base de la política yanqui en Chile.

De “El Arrayán” a “Lo Curro”: las debilidades de la UP

La nueva situación política creada tiene también manifestaciones en nuestro propio campo.

Las insuficiencias de conducción de la UP, los gérmenes de dos políticas contradictorias en algunos puntos en el terreno económico, la ausencia de una adecuada dirección unitaria de las masas, la indefinición en la actitud a seguir con partidos como el MIR y la DC y la debilidad de la coalición en la base, llevaron a la UP a celebrar la llamada reunión de El Arrayán. En esa reunión se dio libre curso a una autocrítica que entregó resultados formalmente correctos, pero abstractos y generales, que no dieron clara orientación respecto a las cuestiones fundamentales que hoy día preocupan al movimiento popular y al país.

En concreto, El Arrayán no definió una política económica capaz de meter en un mismo riel a Economía y Hacienda, no se definió ante el MIR y fue incapaz de trazar una política clara hacia la DC.

En la medida en que este acuerdo mostraba “cojeras” de ese calado, sus orientaciones no fueron suficientemente contundentes para permitir a la Unidad Popular dar un golpe en la mesa que cambiara el cuadro que mostraba importantes síntomas desfavorables.

Sus indefiniciones y la coexistencia de políticas distintas continuaron adelante con su carga demoledora para el avance del proceso y, pese a que el texto de los acuerdos fue profusamente repartido, la Unidad Popular fue incapaz de impulsar una discusión de masas acerca de ellos, y ni siquiera fue capaz de concretar en la práctica aquellos puntos en los que se llegó a un real acuerdo.

Pensamos que la reunión de El Arrayán nos entrega una amarga y dura lección: el pueblo de Chile no nos quiere unidos sólo de un modo formal, sino que exige de nosotros acuerdos claros y precisos sobre las principales cuestiones que hoy están puestas en la orden del día.

En la medida que se repitan Arrayanes sin resultados concretos cundirá el desánimo y la Unidad Popular perderá legitimidad como comando de un pueblo en lucha.

No es El Arrayán, sin embargo, lo único que ha sucedido en este tiempo. Hay un conjunto de acontecimientos que contienen avances y retrocesos y acerca de los cuales tenemos la obligación de decir una palabra.

Debilidades frente al imperialismo

Pensamos, por ejemplo, que pese a que las cosas no han estado del todo bien para nosotros, hemos seguido avanzando en el cumplimiento del programa y el panorama general de este avance demuestra que no hemos ido para atrás, sino que adelante en este terreno. Estando claros en este hecho fundamental, pensamos, sin embargo, que se han advertido debilidades en nuestra política, principalmente en lo que dice relación con nuestra actitud frente al imperialismo.

Esta cuestión está condicionada, en primer lugar, por las características subterráneas de la acción del imperialismo contra nuestro país.

En segundo lugar, porque de una u otra forma nos hemos dejado entrar por las sutilezas de los círculos imperiales, como lo demuestran algunos aspectos relacionados con la renegociación de la deuda externa.

En tercer lugar, por un manejo puramente diplomático de estas cuestiones, respecto de las cuales las masas prácticamente han quedado marginadas; excepto en el asunto de la ITT en donde se mostró, gracias a los documentos encontrados a esas empresas, la verdadera faz intervencionista del imperialismo y en donde nuestro partido impulsó con singular fuerza la necesidad de confiscar los bienes que la ITT mantiene en Chile, interesando en esa tarea patriótica a amplias capas del pueblo.

En todo caso, está claro que la independencia de Chile en su política internacional, no ha disminuido sino, por el contrario, se ha acentuado, como lo demuestra la apertura de relaciones con Vietnam y con Corea y el reconocimiento de Bangladesh como Estado independiente.

Estamos por impulsar esa independencia, que debe expresarse en nuevas muestras de solidaridad con los pueblos en lucha contra el imperialismo.

Por eso es que estamos porque nuestro país combata la discriminación internacional a la que es sometida la RDA, y reconozca diplomáticamente al Gobierno Provisorio Revolucionario de Vietnam del Sur y al Gobierno de Camboya, que encabeza Norodom Sihanouk, gobiernos que controlan de hecho más de las dos terceras partes del territorio de esos países y que mantienen en jaque las posiciones norteamericanas y de las camarillas títeres que gobiernan en su nombre.

El avance en el área social y la liquidación del latifundio

Para nosotros sigue siendo un punto central de definición programática la cuestión de la ampliación del APS y, sin perjuicio de que estemos por lograr acuerdos en esta materia con la DC, estamos porque a ella se incorporen de todas maneras las empresas en donde hay suficiente apoyo obrero para esta medida. Está claro que en esta materia se ha seguido avanzando. Allí están MADEMSA, primero; FENSA después y el Banco de Chile más tarde.

No podemos ocultar, sin embargo, que este avance ha sido más lento de lo que esperábamos y de lo que era necesario y que era posible ir más rápido.

En lo que dice relación a la reforma agraria, se ha seguido dándole duro al latifundio, pero han aparecido allí algunos matices divergentes que encuentran su raíz en algunas tendencias que no tienen suficientemente en cuenta el nivel de conciencia campesina en la determinación de las formas de organización del área reformada en el campo.

El choque del programa con el marco institucional

El avance del programa se ha visto dificultado, sin embargo, por el aumento en calidad y cantidad de algunos conflictos institucionales de una gravedad que no podemos ocultarnos.

Estos conflictos han tenido un carácter agudo y múltiple y en ellos han tenido especial participación el Congreso, el Poder Judicial y la Contraloría; instituciones que de un modo u otro han tomado resueltamente el bando de las clases dominantes, cumpliendo el rol para el que fueron creadas por éstas.

Así las cosas, en el Congreso ha operado una mayoría contraria al Gobierno que ha permitido detener el cumplimiento del programa acordado por el pueblo. Ha acusado constitucionalmente a algunos Ministros, llegando incluso a destituir al Ministro del Interior, compañero José Tohá, y a desaforar algunos intendentes y gobernadores. Esta mayoría reaccionaria ha ido todavía más allá y ha puesto dificultades incluso a la aprobación de la Ley de Presupuesto, poniendo en grave riesgo la estabilidad y el desarrollo del país.

La Contraloría, para no ser menos, ha puesto todas las dificultades que estaban en sus manos para impedir la ampliación del APS y extralimitándose en sus propias funciones, ha pretendido destituir al Director de DIRINCO y frenarlo en su política contra la especulación y se ha lanzado con saña en contra del Director General de Investigaciones.

Pero el que se ha salido de madre en esta materia ha sido el Poder Judicial, quien ha enfilado sus fuegos en contra del APS y en contra de la Reforma Agraria, tratando de demostrar a los momios que para algo sirve, y no precisamente para hacer justicia. Especial mención merece en este terreno la actitud del Juez de Melipilla, Hugo Olate, que encarceló a 30 campesinos, entre los que se encontraban varios de nuestros candidatos a la CUT, y que estuvo a punto de provocar una masacre que sólo impidió la resuelta actitud del Subsecretario de Justicia, compañero Antonio Viera Gallo, actitud que le mereció ser marcado a fuego por el odio de la reacción.

La reacción pone en juego, pues, en esta batalla todos los mecanismos que aún controla.

La movilización de las masas

El Gobierno no se ha detenido, sin embargo, y está dispuesto a seguir adelante. Pero para hacerlo necesita corregir algunos graves errores. El principal de éstos tienen que ver con su estilo político que no toma en cuenta suficientemente a las masas y su potencial inmenso de combate.

Se confunde el respeto a la legalidad con el legalismo, la necesidad de eficiencia con el burocratismo y la mantención del orden con el inmovilismo del pueblo.

De esta manera se desarrolla una acción que aunque es profundamente revolucionaria en sus objetivos, es burguesa en su estilo de aplicación, en la medida que no abre canales para que la clase obrera ejerza su hegemonía y las masas en general su presencia vigilante y creadora.

En el APS, por ejemplo, la participación, o no existe o es entendida de un modo puramente burocrático o administrativo. No vinculándola a la necesaria ingerencia de la clase obrera en la estructuración de un plan para la rama y para la empresa, que contemple, entre otras cuestiones, las metas de producción y los niveles de salarios.

En el terreno agrario, los Consejos Campesinos prácticamente no existen, y se cierra, de este modo, el camino a que los campesinos luchen junto al Gobierno por exterminar el latifundio como forma de producción en el campo.

Igual cosa sucede en la política juvenil, en la vivienda, etc.

Como resultado se produce una política manejada desde los escritorios, muchas veces, aunque no siempre, por burócratas o tecnócratas y el Gobierno no se resta a sí mismo su principal arma de combate: las masas en tensión protagonizando las principales batallas contra los enemigos de clase.

Repetimos una vez más, y antes que sea tarde, que las fuerzas revolucionarias han derrotado a adversarios superiores en fuerza material sólo a condición de echar mano a las reservas que guardan en su seno la clase obrera y las masas.

El MAPU no se ha quedado sólo en palabras en esta materia y es así como ha buscado vincular en forma cada vez más extensa a las masas a sus posiciones políticas. Así lo demuestra el grado de movilización alcanzado en torno a la confiscación de la ITT y la combativa movilización de los campesinos de Melipilla en respaldo a la política agraria del Gobierno.

Las masas son la clave de la victoria revolucionaria. Esa es una ley de la historia que ningún burócrata puede derogar.

Si las masas no se movilizan adecuadamente no es precisamente por culpa de ellas, sino que porque se mantiene un carácter burocrático en la relación del Gobierno y los partidos con ellas. El pueblo chileno ha mostrado una potencialidad de movilización como pocos y ha dicho presente cada vez que el Gobierno lo ha llamado a reconocer filas.

El problema reside en que esto ha sucedido sólo para responder ofensivas enemigas o para aprovechar algunos errores tácticos en los adversarios, pero aun así el pueblo ha respondido en forma masiva, decidida y resuelta, como lo demuestra la defensa del presupuesto y de las industrias estatizadas y la marcha de la Patria a la que el Gobierno convocó para responder a la marcha opositora.

Si estas movilizaciones revistieron un carácter puramente defensivo la explicación hay que encontrarla en las fallas mostradas por la dirección política de la UP.

Las elecciones de la CUT

Otro hecho que merece un destacado lugar en la discusión de este Pleno lo constituyen las elecciones de la CUT. En ellas se mostró con evidencia incontestable lo que para nosotros estaba claro. La UP cuenta con el abrumador respaldo del núcleo más decisivo y fundamental de la sociedad: sus trabajadores.

Este hecho manifiesta, sin lugar a equívocos, que más del 70% de los trabajadores está por la política del Gobierno, por la estatización de los monopolios, por la Reforma Agraria, por la derrota del imperialismo y sus lacayos.

Los trabajadores han dado una nítida luz verde al Gobierno para seguir avanzando. Contamos allí con un apoyo de una calidad de clase de la que el enemigo carece. Las elecciones, por el carácter universal que tuvieron, tanto desde el punto de vista de la forma de votación directa como de la participación que allí alcanzaron todas las tendencias del movimiento obrero y trabajador, han fortalecido la CUT y la han ratificado como el único instrumento válido que los trabajadores tienen para luchar por sus intereses.

Han pasado a la categoría de recuerdos prehistóricos los intentos imperialistas servidos por Frei y Thayer de levantar centrales paralelas que dividieran criminalmente a los trabajadores.

Otra cuestión que la elección de la CUT ha demostrado es que la derecha no le da el cuero para mostrar su cara entre los asalariados. Fuera de un bufonesco llamado a votar por los candidatos de oposición que hiciera el pintoresco Engelberto Frías y que motivó las risas, de todo el país, la derecha tuvo que esconderse y hacer mutis por el foro.

A la ultraizquierda no le fue precisamente bien en esta consulta democrática a la clase obrera.

Nuestro partido los duplicó y algo más. Su política pequeño burguesa y divisionista ha encontrado sólo repudios en la clase cuyos intereses dicen representar. Pese a su oportunismo, el carácter economicista de su lucha, rasguñan en forma trágica el 2% de la votación.

La votación DC no es insignificante precisamente. Ella ha alcanzado un nivel considerable. Nos obliga a analizarla con responsabilidad a los partidos obreros. Si bien en gran parte se debe al carácter nacional de la elección, que se dio también como una pugna general entre Gobierno y oposición, no seríamos realistas ni veraces si sólo redujéramos la cuestión a ese punto. El considerable apoyo logrado por la DC entre los trabajadores demuestra que ella contiene mucho de pueblo y de trabajadores en su interior y que mantiene, aunque no nos guste, mucha gravitación en esos sectores. Eso no lo explica todo, sin embargo la DC ha crecido en el terreno que han dejado en descubierto nuestros errores, nuestra falta de vinculación a las masas, nuestra incapacidad para aplicar nuestra política.

Esta afirmación se demuestra en forma especialmente aguda en el APS, en donde la DC ha logrado aumentar su influencia. Esto se debe en forma principal, a que en esa área, si bien hemos alterado las relaciones de propiedad, no hemos alterado las relaciones sociales de producción y que, por tanto, el cambio aparece todavía abstracto a los trabajadores, que no perciben la transformación lograda en su propia situación, ya que permanecen aún viejas formas de organización de la producción en las que se ha insertado a algunos interventores que muchas veces adoptan un estilo puramente gerencial. Siendo así las cosas, el cambio sólo puede ser percibido por los trabajadores que han accedido a más altos niveles de conciencia y no por el conjunto de la masa obrera.

Pensamos, sin embargo, que la participación de la DC en la elección y la votación alcanzada por ésta en ella, permiten por primera vez que la DC participe en forma real y no formal en los organismos de los trabajadores.

Estamos lejos de imaginar siquiera que esto puede infringir daños a la organización. Porque confiamos en la clase obrera estamos ciertos que los tra-

bajadores DC que participan en la CUT tendrán que moverse en la cancha proletaria y tendrán que sumarse a sus grandes batallas.

Está claro, además, que ellos constituirán un factor positivo que ayudaría al distanciamiento de la DC de la derecha. Eso depende, claro, de que desarrollemos en el seno de la Central una política resuelta y flexible que destierre el sectarismo y ponga en el centro la tarea de la unidad de los trabajadores.

Surgen algunos afiebrados en el seno de la DC, acicateados por la derecha, que pretenden retirar a la DC de la CUT y quebrar la Central, envalentonados por la votación alcanzada. Que les quede claro a estos aprendices de brujo que los votos que lograron fueron conquistados con banderas progresistas y que los trabajadores no los acompañarán en una aventura de este tipo. Se podrán ir de la CUT pero no partirán con el santo y la limosna.

Están pendientes muchos escrutinios provinciales, el de Santiago principalmente, y gran parte del escrutinio nacional. Manifestamos nuestra resolución de que ellos se hagan en forma limpia y correcta, de tal manera que cada uno alcance el lugar que sus votos le dan, ni más arriba ni más abajo. La democracia proletaria así lo exige.

Concepción

Las insuficiencias de la dirección de la UP, a la que hemos hecho referencia, se manifiestan en forma aguda en lo que se ha conocido como los “sucesos de Concepción”.

Allí, a raíz de una marcha de la derecha, algunos partidos de la UP, principalmente el PC, propusieron la realización de una concentración paralela que demostraría a la reacción que tendría que andarse con cuidado en esa zona de claro predominio popular.

El PC, en esta oportunidad, no hacía sino aplicar allí el anuncio hecho por el propio Secretario General de ese partido, en orden de impedir que los fascistas salieran a la calle y el consiguiente llamado al pueblo a cruzárseles en el camino.

El Comité Regional de nuestro partido en Concepción planteó la realización de una concentración previa a la de los momios, agregando un plan de movilización de masas que preparara dicho acto. La opinión de nuestro partido no encontró, desgraciadamente, mayor apoyo, y como todo el resto de los partidos se manifestaron partidarios de la proposición comunista, el MAPU se sumó a la mayoría, teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar una política única de la UP en el seno de las masas. El propio Intendente comunista dio la autorización a ambas marchas sumando a este error el de haber concedido además permiso para una tercera marcha organizada por el MIR.

Una decisión del Gobierno tardía sobre la materia y una posterior discusión del asunto en el Comité Central del PC, determinó, cuando ya la consigna estaba lanzada a las masas, un cambio en 180° en la actitud del PC en Concepción, que de fervoroso partidario de las marchas simultáneas pasa a ser

un furibundo opositor a su realización. Teniendo en cuenta que ya se había avanzado demasiado en el terreno de preparación de las masas para dicha concentración como para volver pie atrás, nuestro partido, junto al resto de los partidos de la UP, con excepción del PC y del API, estuvo por mantener lo acordado. Esta situación motivó el retiro del PC de los preparativos de la marcha y la acusación de “ultraizquierdismo” a quienes estaban por realizar lo propuesto por ellos mismos.

Nuestro partido continuó sumando su esfuerzo a la preparación del mitín, dejando en claro que rechazaba cualquier tendencia a que éste culminara en un enfrentamiento callejero que regalara pretextos a los derechistas.

A la marcha de la UP se sumó posteriormente el MIR, manifestando su total acuerdo con el carácter que se había acordado conferirle.

Esta política fue seguida en forma impecable y disciplinada por el partido, que movilizó más de 3.000 personas en su columna que, como ejemplar responsabilidad, no respondieron como otros, que se desbandaron a las provocaciones.

Nuestros compañeros marcharon cerca de 30 cuadras, agitando consignas de apoyo al Gobierno y su programa y luego disolviendo la manifestación frente al local del partido.

La represión policial, mientras tanto, se desató, no contra la derecha, sino contra la izquierda, produciéndose como resultado un sinnúmero de heridos y un estudiante muerto.

A esta altura de los acontecimientos, los hechos muestran un claro error del PC y una debilidad en la capacidad de dirección de la UP.

Sin embargo, el PC no reaccionó como era de esperar, haciéndose una autocrítica de un error que tan funestas consecuencias tuvo, sino, por el contrario, convirtió a lo sucedido en Concepción en piedra de toque de sus críticas al resto de los partidos de la UP, que no habían hecho otra cosa que seguir su proposición original.

A raíz de todo esto, hicimos pública nuestra opinión, en declaraciones e intervenciones como la del compañero Correa en el acto de clausura de nuestra campaña a la CUT, en la que dejábamos sentado nuestro criterio discrepante con el PC sobre este punto; en el que felicitábamos al Regional de Concepción por su conducta ejemplar, y en que denunciábamos la política oportunista y divisionista del MIR, que pretendía pescar a río revuelto.

El PC insistió, al comenzar el cónclave de la UP en Lo Curro, en que éste era un punto central de lo que ellos llamaban crisis de la UP. El Secretario General del partido manifestó allí nuestro criterio en el sentido de no convertir lo sucedido en Concepción en el centro de los problemas de la UP porque ello impedía que nos abocáramos a los asuntos realmente importantes que sí tienen una incidencia decisiva en la marcha del proceso que encabezamos de conjunto.

Somos partidarios de dar por superado el problema, de extraer de allí cada uno las lecciones que correspondan y de dar vuelta la hoja de manera definitiva.

Harina de otro costal, es compañeros, un posterior documento firmado por los Regionales del MIR, del MAPU, del PS y de la IC, y que se ha conoci-

do como “Documento de Concepción”. Allí se vierten opiniones políticas opuestas a la línea de nuestro partido y que por cierto no compartimos en absoluto.

En este sentido las cuestiones principales que allí se afirman tienen que ver con que en Concepción se habría creado una alianza revolucionaria que busca la discusión y puesta en práctica de una línea que asegure la irreversibilidad del proceso revolucionario; alianza distinta a la UP, llamada a extenderse por todo el país y que incluye al MIR. Se afirma la tesis peregrina y falsa de que la UP estaría irreconciliablemente dividida entre reformistas y revolucionarios. Se desarrolla, como broche de oro, una política hacia la DC que es exactamente la opuesta a la aprobada por la Dirección Nacional de nuestro partido en forma reiterada.

Cabría agregar la orientación que nuestro partido dio en orden a no suscribir acuerdos con el MIR al margen del conjunto de la UP.

Ese manifiesto expresa una línea que no es la línea de nuestro partido sino la del MIR, con lo que ese movimiento pretende convertirse en el centro de la política nacional. El MIR no podría esperar más. Que le regalaran en bandeja lo que la clase obrera se ha negado en forma abrumadora a concederle.

El propio Regional de Concepción ha entregado una aclaración respecto de ese documento.

No podíamos esperar otra cosa de nuestros compañeros y estamos por aplicar la política que esa rectificación plantea: impulsar el programa, fortalecer la UP y respaldar al Gobierno Popular.

El MIR: equivocado antes y ahora

Especial relación con estas cuestiones tiene la política general y permanente del MIR. Este no compartió los planteamientos centrales de la UP durante la campaña presidencial. A través de documentos de su órgano semioficial “Punto Final” y de su acción política, combatió el programa, la alianza que lo sustentaba y la táctica que seguíamos. En resumen, hizo lo posible y lo imposible por bombardear en forma irresponsable la alternativa que el pueblo se había dado con mucho trabajo y sacrificio. En el centro de su planteamiento estaba el supuesto de que era posible y necesario partir de cero, con la sola audacia y el heroísmo de un grupo, despreciando de hecho todo lo avanzado por la clase obrera desde Recabarren hasta la UP. Los ataques vertidos a los partidos de la UP, a sus concepciones estratégicas y tácticas e incluso a la propia CUT, fueron en ese tiempo pan de todos los días.

La vida y la fuerza de la clase obrera los desmintió. Alcanzamos el Gobierno y lo convertimos en un instrumento fundamental para resolver en nuestro favor, en favor de nuestra clase, la pugna por el poder.

Ante la evidencia de los hechos se vieron obligados a recoger cañuelas. Se abrió así cierto campo de entendimiento sobre la base de que ellos dejaran de lado los sueños locos de ser alternativa y se resolvieran a apoyar el proceso revolucionario, resignándose a que la clase obrera, y no ellos, fueran sus protagonistas.

La UP conversó con ellos e incluso se llegó a algunos acuerdos en materia agraria, orientados a definir una plataforma común y a terminar con la política de tomas de tierras de sectores de agricultores pequeños y medianos, llamados objetivamente a ser nuestros aliados contra el latifundio y jamás nuestros enemigos.

Los hechos demuestran, sin embargo, que no hay caso con ellos, porque han vuelto a las andanzas que pensábamos con satisfacción, ya estaban olvidadas.

La política del MIR, hoy día, parte de la base de que el Gobierno Popular ha fracasado, que tiene un carácter irremediablemente reformista y que la UP ha perdido toda conducción revolucionaria. Por consiguiente, lo que está planteado por el MIR, es levantarse a sí mismo como alternativa revolucionaria ante la UP, para lo cual busca acelerar el fracaso del Gobierno Popular, empujándolo a enfrentar a toda la oposición unida, para lo cual mete en un mismo saco a toda la DC junto al PN y a Patria y Libertad. Busca, además, dividir a la UP y dentro de ella a cada uno de sus partidos obreros, tratando de arrastrar para ello a los sectores que suponen, sin fundamentos, más dóciles a su política, impulsando además a las masas a enfrentarse sistemáticamente al Gobierno, que, según ellos, ya no las representa fielmente.

¡Nada más, ni nada menos!

Sobre esta base, está claro que no podemos entendernos.

Estamos lejos de considerarlos, como algunos lo hacen, enemigos principales, pero no cabe duda de que a no ser que tuviéramos vocación de suicidas, no hay otra posibilidad hoy día que enfrentar a combatir su política.

Se trata, en suma, de una fuerza que se resiste porfiadamente a apoyar la única alianza que, por las clases y capas que integra y es capaz de integrar, puede derrotar a los enemigos de Chile y su pueblo, y que no entiende que el Gobierno Popular es el instrumento principal e insustituible con que la clase obrera y el pueblo cuentan para conquistar el poder, ya que si el Gobierno fuera borrado del mapa, las posibilidades de triunfar se postergarían por un largo período.

Si siguiéramos la política del MIR, terminaríamos con el apoyo de una minoría “depurada”, pero con el país de vuelta a las cavernas del fascismo y entregados de pies y manos al dominio imperialista.

Los problemas de la actual coyuntura

1973: La próxima y decisiva batalla por el poder

Hoy se desarrolla una importante discusión en el seno de la UP, en el seno de las fuerzas revolucionarias chilenas. Esa discusión fue iniciada en el llamado Cónclave de Lo Curro, pero no fue agotada allí ni mucho menos. Si bien es cierto que dicho Cónclave ha resuelto algunas cuestiones importantes, como el de las relaciones de la UP y el Gobierno con la DC y el MIR, por ejemplo, han quedado sin resolver, planteados solamente, algunos problemas decisivos

para el éxito de la política de la UP. Tal es el caso, entre otros, de la política económica y del enfrentamiento a la política del imperialismo.

Nosotros pensamos que es necesario desarrollar una intensa discusión en torno a los problemas estratégicos y tácticos que se plantean hoy día a las fuerzas populares de nuestro país, a su vanguardia política que es la UP y a su Gobierno.

Esa discusión deberá realizarse en nuestros partidos, en la UP como conjunto y en el seno de las masas y sus organizaciones.

No cabe duda que uno de los defectos importantes que ha tenido la conducción de nuestro proceso revolucionario ha sido la insuficiente discusión de las cuestiones tácticas y estratégicas más importantes, tanto al interior de la UP como en el seno del pueblo. Ello ha debilitado la lucha ideológica y por tanto la movilización consciente de las masas tras los objetivos revolucionarios de la UP, facilitando, asimismo, el trabajo ideológico del enemigo, permitiéndole ganar algunas posiciones incluso entre la clase obrera, y ha contribuido, sin duda, a generar –muchas veces– una relación burocrática entre la dirección política de la UP y cada uno de sus partidos con las masas.

En periodos como los que vive nuestro país, en que la lucha de clases se agudiza día a día, en que la clase obrera y vastos sectores del pueblo se plantean como política principal la conquista del poder, se hace indispensable la más amplia difusión política en el seno de las masas. Sólo cuando éstas comprenden cabalmente la naturaleza de los problemas que enfrentan, los objetivos y las tácticas de los enemigos y los caminos y las políticas que les permiten ganar fuerzas y derrotar a la clase dominante, estarán realmente en condiciones de ponerse a la cabeza del proceso, de convertirse en protagonistas de la historia y de movilizarse combativamente tras los objetivos revolucionarios del programa y de la política de la UP.

Nuestro partido está resuelto a combatir estos errores, por lo menos en cuanto al MAPU corresponde.

Estamos por desarrollar una intensa discusión ideológica y política en torno a estas posiciones, tanto en el seno de la UP como dentro de la clase obrera y el pueblo, como una manera de aportar en la medida de nuestras responsabilidades a la dirección del proceso, en el marco de la unidad.

En la actual discusión en el seno de la Unidad Popular y de la izquierda en general está planteado a nuestro juicio un problema de fondo, una cuestión de carácter estratégico.

Como ya se ha visto en este informe, a partir de las elecciones de O'Higgins y Colchagua y de Linares, ha quedado de manifiesto la dificultad que tiene la UP para convertirse en la mayoría electoral del país. Algunas consultas electorales posteriores –aunque de carácter muy local– como la elección del Rector de la Universidad de Chile, han manifestado una tendencia similar. Muchos son los factores que explican esta situación, los principales ya han sido analizados.

Sin embargo, lo que interesa destacar aquí es que a 9 meses de una elección de carácter nacional, como es la parlamentaria de 1973, donde se va a resolver la composición política del Congreso, resulta evidente que ese enfrentamiento tiene

el carácter de una batalla de importancia estratégica para la lucha por el poder que está planteada a Chile. Nosotros hemos afirmado desde diciembre de 1971 que la próxima gran batalla por el poder es esa elección general. El triunfo de la UP en ese enfrentamiento es un avance de la mayor importancia en el curso de la revolución chilena. No es ésta por cierto la batalla final; vencer allí no resuelve definitivamente la lucha por el poder en favor de la clase obrera y el pueblo. Pero, no cabe duda, que significa un avance fundamental. Un Congreso ganado por la UP permite enfrentar la transformación del Estado con una correlación de fuerzas muy favorables. Posibilita enfrentar la transformación revolucionaria del Estado burgués, utilizando los centros fundamentales del actual Estado: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Siempre hemos afirmado que el carácter constitucional del Gobierno Popular es un punto importante de apoyo para el proceso revolucionario. Conquistar la mayoría parlamentaria y transformar el carácter de clase del Estado chileno a partir de la institucionalidad democrático-burguesa vigente permite contar, para esta tarea decisiva en el desarrollo de la Revolución, con el peso de la legalidad en favor del pueblo, con todo lo que este factor significa desde el punto de vista de alinear junto a la clase obrera a importantes capas de la población. Nadie duda, por otra parte, que emprender la transformación del Estado a partir de la legalidad vigente condicionará decisivamente la actitud de las FF.AA. hacia ese proceso, como ya se ha demostrado durante todo el período de Gobierno Popular.

Así como la victoria del pueblo en marzo del 73 abre amplias perspectivas al desarrollo de la Revolución, una derrota constituiría un revés de carácter estratégico. Disminuiría la legitimidad del Gobierno Popular, la derecha utilizaría el Congreso como verdadero bastión de la contrarrevolución en un grado mucho mayor de lo que ha podido usar hasta ahora. Se darían las condiciones para detener el programa de Gobierno a través de la acción del Congreso, se agravarían las contradicciones entre los objetivos del Gobierno Popular y el aparato legal e institucional del país.

En fin, las clases dominantes se pondrían en condiciones de recuperar la iniciativa estratégica y de plantearse el objetivo de derribar el Gobierno o de paralizar el desarrollo del programa, utilizando las fuerzas de la legalidad y con perspectivas de éxito. Para la UP una situación como la descrita significaría una derrota de proporciones, estaría amenazada la conquista principal de la clase obrera y del pueblo en su larga lucha: el Gobierno Popular, y por tanto la posibilidad de desarrollar el programa revolucionario que el pueblo y su Gobierno están llevando a cabo.

La validez de la Unidad Popular

El desarrollo de los acontecimientos durante el último período obliga a plantearse hoy día como cuestión fundamental si es posible o no que la UP logre acumular fuerzas suficientes para enfrentar con éxito la batalla por el Parlamento en 1973. En el centro de la actual discusión de la izquierda debe estar presente este problema; la capacidad que tiene la UP, sobre la base del

desarrollo irrestricto de su programa y de la alianza de partidos y de clases que la constituyen, de invertir la tendencia progresiva al deterioro de sus apoyos de masas y acumular fuerzas para convertirse en la mayoría del país en marzo de 1973.

Resolver adecuadamente este problema supone un análisis científico, marxista-leninista, de la actual correlación de fuerzas y de sus tendencias posibles y, al mismo tiempo, diseñar una línea política que permita enfrentar con éxito los problemas centrales que hoy día están planteados al Gobierno y a la UP.

Nuestra política, la política del partido, parte de la base de que existen fuerzas suficientes para invertir el proceso de deterioro de la UP y del Gobierno y lograr un apoyo mayoritario en 1973.

Ello requiere, sin duda, rectificar profundamente ciertos aspectos de la conducción por parte de la UP, tanto del Gobierno como de la movilización de masas. No pensamos que por un puro acto de voluntad la UP pueda superar todas sus deficiencias como dirección del proceso revolucionario, pero existe capacidad suficiente en los partidos, esencialmente en los partidos proletarios del frente, para lograr un nivel mínimo de mayor unidad y eficacia en la dirección.

Las fuerzas del pueblo

Las cuestión de un análisis certero de la correlación de fuerzas, vale decir, de la capacidad de acción de cada una de las clases en conflicto, de su capacidad para neutralizar las armas del adversario, de generar alianzas, de utilizar los instrumentos de poder de que dispone, tiene hoy día una importancia decisiva para definir la política de la UP.

Una sobrestimación de las fuerzas propias llevará normalmente las políticas aventureras, que aíslan a la clase obrera, al proponerle objetivos políticos imposibles.

Detrás de muchas posiciones “izquierdistas” se da una apreciación exagerada de las fuerzas propias.

Sin embargo no es ésta la única, ni siempre la principal desviación.

Existe hoy día en el seno de la izquierda –incluso en nuestro partido– la tendencia a subestimar las fuerzas de la clase obrera y del pueblo, a impresionarse excesivamente por algunos reveses electorales, a no evaluar con rigor los grandes avances que el pueblo ha logrado en estos años. Esta evaluación subjetiva de la correlación de fuerzas se manifiesta o en el desánimo y la frustración pequeño burguesa o en una política de conciliación de derecha, que al sobrestimar la fuerza del enemigo desaprovecha las condiciones objetivas que existen para avanzar.

La UP mantiene una influencia decisiva en el seno de la clase obrera y del campesinado. La elección de la CUT demuestra que más del 70% de la clase obrera organizada reconoce filas en la UP. El peso en ella de los partidos proletarios es incontrarrestable.

No cabe duda de que el enemigo ha logrado mantener su penetración en los diversos sectores de la burguesía media y pequeña, en la pequeña burguesía y ciertas capas de trabajadores. A pesar de ello, desde el punto de vista electoral la UP avanza del 36%, que tenía en 1970, a poco menos del 50%.

La UP cuenta con el apoyo abrumador de los sectores más decisivos, más organizados, con mayor desarrollo político de la sociedad chilena.

Desde el punto de vista de las condiciones subjetivas, desnivel de conciencia política, del potencial de movilización, existen demostraciones concretas, reales, de que cuando el Gobierno y la UP de una manera coherente, unitaria y con objetivos políticos claros han apelado a la movilización popular, ésta ha superado todas las expectativas. La Marcha de la Patria es una prueba fehaciente de lo que afirmamos. La clara disminución de las tomas, por la confianza creciente de las masas en el Gobierno Popular, es otra prueba.

Otra cosa es que no seamos siempre capaces de convertir esa adhesión al Gobierno Popular en movilización permanente, diaria, ligada a los objetivos concretos que plantea el desarrollo del programa.

Hemos dicho que la lucha ideológica ha sido uno de los terrenos en los cuales el enemigo ha podido operar con mayor éxito y ello es enteramente cierto. Sin embargo, incluso en este campo, el avance de las ideas progresistas, del pensamiento revolucionario, de la conciencia de clase en definitiva, es lo suficientemente extendido como para obligar a los adversarios de la UP, especialmente a la DC, a aceptar medidas programáticas y revolucionarias tan importantes como la nacionalización del cobre, la formación del APS, la profundización de la Reforma Agraria, y en fin, muchas otras.

El Gobierno Popular constituye, sin duda, el más poderoso instrumento con que el pueblo cuenta en su lucha por el poder. Las atribuciones que la ordenación jurídica de Chile entrega al Poder Ejecutivo han permitido avanzar decisivamente en el cumplimiento del programa: a un año y medio del Gobierno Popular, el cobre es chileno, el latifundio mayor de 80 hectáreas está en vías de desaparecer, han sido incorporados al APS un conjunto de monopolios que sumados a las empresas que ya controlaba el Estado, permiten a éste controlar lo fundamental de la capacidad industrial. Toda la Banca Privada se encuentra ya estatizada. El hecho es que en sólo 19 meses, en lo fundamental, el imperialismo, la burguesía monopólica y latifundista han sido expropiadas. Las bases materiales sobre la que éstas clases han sostenido su poder ya no les pertenecen. Durante este año, con la culminación de la Reforma Agraria y la incorporación de lo que resta de las 91 empresas, terminará en lo principal, la expropiación de las clases enemigas. Esta gigantesca transformación en las relaciones de propiedad es, la mayoría de las veces, subvalorada desde el punto de vista del análisis de la correlación de fuerzas.

Significa que la fuerza material de la clase obrera y del pueblo se ha elevado significativamente, que las clases enemigas internas están heridas de muerte y que su subsistencia como clases y su capacidad de acción contrarrevolucionaria se asientan cada vez más en los recursos institucionales, ideológicos, en suma políticos, de que aún disponen y que son poderosos. Por otra parte, la capacidad política de las clases enemigas tiende a ser cada vez más

dependiente –incluso desde el punto de vista material– del apoyo directo e indirecto del imperialismo yanqui.

Todo lo anterior avala nuestra afirmación táctica y estratégica fundamental de que la UP tiene condiciones objetivas suficientes para seguir acumulando fuerzas sobre la base de la aplicación de su programa.

No es ésta una afirmación voluntarista hecha en el vacío, sino que corresponde al análisis objetivo de la fuerza de las clases en conflicto.

¿Qué es lo que impide entonces que la UP mantenga una tendencia sostenida a ampliar su base social de sustentación? Son muchos los factores que explican esta situación, pero sin duda los mayores obstáculos se encuentran en el nivel estrictamente político.

Los cambios en las relaciones de propiedad en el Área de Propiedad Social de la Economía, en el Sector Agrario, no han sido acompañados de cambios sustanciales en las relaciones de producción. Se tiende entonces a desarrollar una especie de capitalismo de estado en el sector industrial y bancario y un modo burocrático y anárquico de organizar y dirigir la producción agrícola, que dificultan la comprensión de vastos sectores obreros y campesinos de la magnitud de las transformaciones en la base material de la economía. Ello dificulta que la hegemonía proletaria se exprese en el nivel de la producción, en la dirección de cada una de las empresas y en el sector socializado de la economía en su conjunto. Si las masas trabajadoras ven que la estatización sólo significa el cambio del capitalista por un burócrata de izquierda su adhesión al Gobierno Popular, su capacidad de movilización disminuye.

Una situación análoga se ha producido con importantes sectores de la burguesía media y pequeña. Este Gobierno, como ningún otro, ha beneficiado, desde el punto de vista material, a los pequeños y medianos empresarios.

Todas las características así lo demuestran. Se ha abaratado el crédito, ha aumentado enormemente la demanda, los niveles de actividad industrial y comercial son los más altos en los últimos años. La suma de estos factores ha significado que la tasa de ganancia de los capitalistas medios y pequeños ha aumentado. Sin embargo, estos beneficios materiales no se han traducido en un apoyo político importante de esas capas al Gobierno Popular. Por el contrario, la burguesía monopólica, sus partidos y sus organizaciones han tenido éxito en atraer a estos sectores hacia su política y enfrentarlos al Gobierno.

Podemos concluir que las enormes transformaciones materiales que el Gobierno Popular ha llevado a cabo en un plazo tan breve de tiempo no han logrado producir un cambio equivalente en la conciencia social de las clases y capas interesadas en el programa revolucionario que desarrolla la UP y que han sido objetivamente beneficiadas con su cumplimiento.

Esto no es extraño. La historia enseña que los cambios en la conciencia y el comportamiento político son más lentos y complejos que las transformaciones en la base material. Sin embargo nuestra situación exige perentoriamente acelerar este proceso, sobre todo teniendo en cuenta que existen enfrentamientos políticos con fecha fija, que constituyen un dato desde el punto de vista de la táctica de la UP.

En resumen, lo que nos interesa demostrar es que a pesar de los retrocesos tácticos que la UP ha sufrido por un corto período, existen fuerzas po-

tenciales suficientes como para volcar en nuestro favor la correlación de fuerzas, recuperar la iniciativa táctica y poner a la UP en situación de ganar los próximos enfrentamientos en la lucha por el poder. Ello requiere, sin duda, corregir con firmeza y prontitud los errores más graves de la dirección de la UP.

El trabajo político de agitación, la lucha ideológica en el seno de las masas, la movilización del pueblo tras sus intereses concretos ligados al desarrollo del programa, se constituyen en esta situación en las tareas centrales de la UP para enfrentar el período que viene.

Sobre la base de que el próximo enfrentamiento decisivo es la elección parlamentaria y de que existe una correlación de fuerzas tal que permite a la UP obtener en ella una victoria de significación estratégica, la UP debe definir una línea táctica coherente con dicho objetivo. En las discusiones iniciales en "Lo Curro" han estado planteados estos problemas; no todos han sido resueltos.

A nuestro juicio, ellos dicen relación con cuatro cuestiones fundamentales:

- la política antiimperialista;
- la política económica;
- el tratamiento a la DC, y
- las tareas de la lucha ideológica.

Definir adecuadamente estas políticas y llevarlas a cabo supone obviamente corregir los errores más gruesos en la dirección de la UP, logrando un nivel mínimo de unidad y eficacia.

La política económica y el enfrentamiento al imperialismo

La orientación de la política económica de la UP constituye uno de los aspectos fundamentales de la acción del Gobierno.

Según cual sea esa política será mayor o menor el apoyo de masas al Gobierno Popular, será también mayor o menor el grado de profundidad de las transformaciones estructurales y el nivel de enfrentamientos con el imperialismo.

No estamos, pues, frente a una discusión tecnocrática, sino frente a uno de los problemas más decisivos para el desarrollo revolucionario del proceso.

Nosotros siempre hemos sostenido que la política económica es un arma más del pueblo en la lucha del poder.

Por estar planteada en torno a esta política una de las más importantes discusiones en el seno de la UP, hemos querido desarrollar nuestras posiciones en esta materia con mucha profundidad y extensión en el informe que el compañero José Olavarría rendirá a este Pleno.

Los objetivos que han orientado la política económica del Gobierno han sido la nacionalización de los intereses fundamentales del imperialismo en nuestro país, la liquidación de los monopolios y la construcción del APS, la realización de una profunda Reforma Agraria, y la elevación de los niveles de vida de las masas que enfrentaban una situación de explotación extrema.

Hoy día, los grandes objetivos políticos que tenemos por delante son similares a los que ya nos han guiado y a las condiciones materiales de las ma-

sas, si bien notablemente aliviadas, continúan muy precarias. Por lo tanto, los objetivos básicos de la política económica se mantienen. Sin embargo, los marcos dentro de los cuales se implementa, han cambiado en forma importante, por lo que las políticas específicas deben ser diferentes.

Durante 1971 la política económica buscó aumentar el consumo de las masas por la vía de la redistribución de los ingresos, el aumento del gasto público y basado en el bajo nivel de aprovechamiento de las fuerzas productivas que las propias contradicciones del sistema nos había entregado: desocupación de fuerza de trabajo, desocupación de los equipos, volúmenes ociosos de divisas. Esta política fue exitosa: se aumentó apreciablemente la participación de los asalariados en el producto, se redujo apreciablemente la desocupación, el ingreso nacional creció en forma notable. Sin embargo, su propio éxito la agota. No disponemos hoy de recursos ociosos en la medida y con el carácter generalizado que teníamos en 1971.

Nuestros enemigos, por su parte, no se han quedado quietos. El imperialismo nos restringe las divisas, la burguesía boicotea la producción industrial y agrícola. Juntos, nos han negado el financiamiento que requeríamos para el gasto fiscal y han desatado una violenta campaña ideológica contra el Gobierno.

La situación económica que hoy enfrentamos es un reflejo de todos estos factores. La mayor capacidad de compra de las masas, unida a los problemas de recursos materiales, han puesto al aparato productivo y de circulación en gran tensión. Surgen así una gran cantidad de pequeños problemas, pequeños desbalances en forma muy basta y generalizada. En la producción: pequeños cuellos de botella en algunos procesos de producción que impiden aumentar en forma importante la producción, problemas de divisas. En la circulación: problemas de liquidez y especulación, problemas de acaparamientos, problemas de mercado negro.

Esta situación marca de por sí las características y requisitos básicos que debe cumplir la política económica en los próximos meses.

Necesitamos implementar un aparato de dirección económica efectiva. Cuando tuvimos desahogo de recursos, la dirección no aparecía tan evidentemente necesaria. Hoy, que enfrentamos restricciones claras requerimos compatibilizar, dosificar, dirigir. Pero dirigir no significa construir un plan abstracto. Para dirigir es necesario en primer lugar controlar las partes decisivas del proceso económico. Por eso, la terminación rápida de la constitución del APS no aparece hoy sólo como un punto del programa sino como una necesidad ineludible. El APS debe organizarse como centro de dirección efectiva de toda la economía. Sin la terminación del APS no podremos tener un aparato de dirección efectivo.

Necesitamos implementar una política económica de masas. El aparato productivo está en tal tensión y los problemas que surgen son tan generalizados que el aparato burocrático estatal de dirección y control es incapaz de detectarlos y resolverlos. Por tanto, hoy día no hay dirección sin las masas. Por eso, hoy día, el poder de las masas no es sólo un requisito de la estrategia política sino una necesidad económica ineludible.

Las tareas para los próximos meses son: defensa de las divisas, batalla de la producción y defensa del consumo material de las masas.

Las tareas de las masas en la producción son las siguientes. En el APS, el cambio de las relaciones sociales: el control de los trabajadores. En el APP, control de los sindicatos y vigilancia; control de los stocks, de los precios, cuidado de los equipos, control de las importaciones, vigilancia al acaparamiento, control de los impuestos y las finanzas.

En la circulación las masas enfrentan también tareas. Control de las empresas distribuidoras nacionales, creación de las empresas distribuidoras del APS, control de la distribución detallista a través de las JAP, lucha contra la especulación y el mercado negro.

Estas tareas de las masas no son sólo tareas económicas. Son tareas políticas, porque en cada una de ellas se enfrentan a sus enemigos. En el cuidado de las divisas, al imperialismo. En el cuidado de los equipos, al gran capitalista boicoteador. En la vigilancia financiera y en la distribución, a los que hoy aún concentran porciones excesivas del consumo y el ingreso.

La política económica y financiera global debe ordenarse sobre estas bases. No podemos permitir que ganen fuerzas las tendencias que hoy, confundidas por la magnitud de algunos problemas, pierden la brújula de clase, y pretenden implementar programas restrictivos ya fracasados. Esos son los programas de los que analizan tecnocráticamente los problemas, de los que no advierten con claridad la enorme concentración del consumo y de los ingresos que aún subsisten en nuestro país. De los que no entienden que si hoy enfrentamos problemas de abastecimiento y de liquidez es porque aún hay unos pocos que consumen demasiado.

Se trata hoy día de hacer pagar a los más poderosos el costo de las mejores disponibilidades materiales de las masas. Para ello es necesario, con una dirección económica basada en las masas, avanzar en la redistribución y mantener y superar los actuales niveles de actividad económica.

El enfrentamiento de masas y político al imperialismo, se traduce en el plano económico en la máxima restricción de nuestras adquisiciones en USA, en la necesidad de establecer nuevas corrientes comerciales con los países capitalistas de Europa y el Japón, que nos permita resolver, al menos en parte, la aguda estrechez de nuestras disponibilidades de divisas y, por último, en un aumento sustancial de las relaciones comerciales y de la solidaridad de los países socialistas, particularmente de la U.R.S.S. y China Popular.

El impulso de las tareas democráticas

En el contexto de una política como la definida, adquiere importancia decisiva la ampliación de las tareas democráticas, en el campo de la vivienda, de la extensión de los servicios de salud, la solución del grave problema de la movilización colectiva, en fin, de todas aquellas medidas que elevan el nivel de vida del pueblo.

Desarrollar estas medidas con una perspectiva de masas, no burocrática ni paternalista, constituye una orientación a la que debemos dar cada vez mayor impulso.

Nuestro partido ha dado una gran importancia a las medidas de Gobierno y de masas que permitan ir definiendo e implementando una política hacia las mujeres.

Estamos impulsando diversos proyectos concretos de la mayor importancia: un programa nacional de jardines infantiles que modifica sustancialmente los anteriores hasta ahora existentes sobre esta materia, al incorporar masivamente a los vecinos y sus organizaciones y a los jóvenes pobladores a la dirección y manejo de ellos y que abarate sustancialmente los costos de construcción; el proyecto que destina a las mujeres y a los niños la torre de la UNCTAD, y un programa de trabajo voluntario masivo de los jóvenes. Apoyemos estas proposiciones con todas nuestras energías.

La política con la DC

El tratamiento político hacia la DC ha sido en este período uno de los problemas tácticos que a la UP más le ha costado definir adecuadamente.

La incomprensión por parte de algunos, de las contradicciones de clase que aún subsisten en la DC y de sus contradicciones con el resto de la derecha, los ha llevado a una política de enfrentamiento a la oposición como un todo coherente, sin distinguir allí las diferencias que objetivamente existen, rechazando toda posibilidad de acuerdos tácticos con la DC, ya que “confundirían” al pueblo o “significaría entrar en el camino de las componendas y transacciones que desmovilizan a las masas”.

Cuando existen serias posibilidades de concretar acuerdos muy favorables con la DC en torno de la Reforma Constitucional en curso, aparece también en el seno de la UP la tendencia, de derecha, a buscar la ampliación de la base de sustentación social, política e institucional del Gobierno, con una política hacia la DC que busque, más allá de entendimientos tácticos, acuerdos estratégicos. Pensamos que ésta es una política imposible, salvo que se renuncie al programa y a la alianza.

Nuestra política hacia la DC la definíamos con mucha precisión en la Dirección Nacional del 25 de enero, pocos días después de las elecciones complementarias. Nuestras principales afirmaciones en esa oportunidad, y que siguen teniendo plena vigencia eran:

“Para los enemigos del pueblo de Chile, el imperialismo, la burguesía monopólica y latifundista, constituye un objetivo estratégico fundamental lograr la unidad de todas las expresiones políticas de la burguesía. En esa perspectiva la unidad de la Democracia Radical y el Partido Nacional con la Democracia Cristiana adquiere una importancia de primer orden. Sólo la Democracia Cristiana puede dar a la contrarrevolución el respaldo de masas que necesita. La unidad del conjunto de la derecha se ve favorecida por el peso que el freísmo tiene en la Democracia Cristiana.

“La DC expresa múltiples intereses de clase y tiene una base principalmente popular. En general se puede afirmar que la DC expresa en lo fundamental los intereses de la burguesía no monopólica (mediana y pequeña), aunque como hemos dicho, no está libre de la influencia del imperialismo y

de la burguesía monopólica. En todo caso su vinculación con los enemigos principales no es de idéntica naturaleza a la del Partido Nacional o a la de la Democracia Radical.

“Constituye un gravísimo error táctico, por tanto, considerar que la unidad de la DC con el PN y la DR es un proceso concluido, irreversible, que se desarrolla sin contradicciones importantes. Al contrario, la Unidad Popular debe valorar objetivamente esas contradicciones y explotarlas en función de su política.

“El objetivo principal de nuestra política hacia la DC consiste en impedir o dificultar la formación de un bloque opositor compacto en torno al Partido Nacional y al freísmo.

“Para ello debemos desarrollar una táctica audaz que enfrente al PDC con sus propios planteamientos y con los intereses objetivos de la mayoría de las bases que representa, y busque lograr entendimientos concretos y puntuales sobre la base del Programa de la Unidad Popular. Ello permitirá aislar a la derecha; crearle problemas al freísmo en el interior del PDC, y generar en la base DC un ambiente favorable para su movilización en torno a las tareas que el Gobierno y la Unidad Popular están planteando.

“No se trata de buscar una alianza estratégica con el PDC, sino una política abierta para entenderse en cuestiones concretas y dura para denunciar sus vacilaciones y su maridaje con la derecha nacional y radical, cuando se produzca.

“Resulta radicalmente falsa y mecánica la opinión –común en algunos sectores de la izquierda– que una política como la que proponemos es una política “conciliadora” que “confunde a nuestras bases”. Es un principio táctico elemental que todo acuerdo en torno a nuestros objetivos, a nuestra política, nos favorece, nos permite acumular fuerzas, avanzar en el cumplimiento del Programa y atraer nuevos sectores hacia la Unidad Popular”.

Hoy día la política hacia la DC se define en torno a la discusión en curso sobre la Reforma Constitucional y los vetos que el Presidente ha enviado al Congreso. Consecuentemente con su política el MAPU ha sido resuelto partidario de abrir camino a un entendimiento con la DC sobre esta materia. A nuestro juicio, el acuerdo debe permitir la incorporación de las 90 empresas al Área de Propiedad Social, reglamentar las atribuciones que el Estado tiene en materia de requisiciones, intervenciones y facultades de CORFO para adquirir acciones y empresas, y establecer que las expropiaciones que vayan más allá de las 90, sean hechas mediante leyes generales o particulares.

La DC ha puesto mucho énfasis en la creación de un Área de Empresa de Trabajadores. En la Reforma Constitucional presentada por Hamilton y Fuentealba a la empresa de trabajadores se la definía como aquella en la que el colectivo de trabajadores tenía el uso y el goce de ella, vale decir, la propiedad. Es claro que sobre esa base se hacía imposible llegar a acuerdo en este punto. En las conversaciones posteriores se ha llegado a una definición de estas empresas sobre la base de que sean empresas de propiedad estatal, donde la administración sea delegada al colectivo de trabajadores, en la que no se distribuyen las utilidades de cada empresa; sino que una parte del excedente que produzca el conjunto de estas unidades en una determinada rama de la economía sean distribuidos entre todos esos trabajadores, y en fin, don-

de se establezcan mecanismos que vinculen a estas empresas a la dirección del sector social de la economía. Sobre estas bases pensamos que es positivo crear una área de empresas de administración delegada, autogestionadas, vinculadas orgánicamente al área social. Nuestro partido propuso que esta modalidad se estableciera en aquellas grandes empresas cuyo capital es mayor a los E° 14.000.000 y que no estén comprendidas entre las 90. La DC ha aceptado en principio este criterio, pero ha insistido en que se constituyan en empresas de administración delegada en determinadas ramas de la economía. Hemos aceptado que ello se haga en la industria del calzado y en la textil, siempre que se someta esta alternativa a la decisión de los trabajadores.

En las bases del posible acuerdo se ha planteado, además, la cuestión de la organización de la banca, donde, al fin, la DC aceptó nuestro criterio de establecer allí la participación de los trabajadores aplicando las normas generales del acuerdo CUT-Gobierno. El Gobierno ha manifestado por último, su voluntad de apoyar la creación de un organismo que asegure la distribución equitativa del papel de diario y establecer que una parte del presupuesto de publicidad de las grandes empresas, tanto estatales como privadas, sea asignado a todos los medios de difusión.

Nosotros pensamos que estas bases principales de acuerdo son positivas.

El obtenerlas ha sido fruto principalmente de la movilización de los trabajadores por la defensa de las empresas estatizadas y de la decisión del Gobierno de impulsar a toda costa la creación del APS. Se ha creado en el país un amplio apoyo a la lucha antimonopólica. De consumarse un acuerdo de esta naturaleza quedarían incorporadas al APS las 90 empresas, los trabajadores controlarían otras grandes empresas más allá de ese número y se abriría una brecha muy grande entre el PN y las organizaciones empresariales de la burguesía monopólica y la DC. En suma, los enemigos de nuestro pueblo recibirían una derrota táctica de proporciones. Ellos lo perciben así muy claramente y hacen en estos días los más grotescos, torpes y desesperados esfuerzos por hacer que la DC no concluya el acuerdo logrado en principio. Pensamos que la Directiva de la DC sabrá ponerse los pantalones, y cumplir sus compromisos.

En torno a esta cuestión nuestro partido debe desarrollar una intensa discusión en las masas, particularmente entre la clase obrera del sector monopólico, para movilizarse en torno a esta importante victoria del pueblo.

Sobre la lucha ideológica

El MAPU entiende que es principalmente en la lucha ideológica en donde debe centrarse nuestro esfuerzo, el esfuerzo de la Unidad Popular. La lucha ideológica en contra de nuestros enemigos, para combatir la ideología de la burguesía, y rescatar a todas las capas del pueblo de su influencia. El adversario está perdiendo en forma sustancial su poder material, pero conserva intacto su poder ideológico y los medios de comunicación directa y de masas suficientes como para estar permanentemente recreándolo.

Constatamos que estamos perdiendo esta batalla decisiva; que no hay una estrategia de la Unidad Popular en ese campo; que los instrumentos que poseen los partidos de la alianza, e incluso los partidos proletarios, son ocupados sectariamente y por tanto débiles en la lucha; que no hay contenidos claros, coordinación mínima; muy al contrario de lo que sucede en el campo enemigo, donde recién en estos días se ha producido una trizadura de consideración, a raíz de las conversaciones entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, y que incluso los poderosos medios que han pasado a manos del pueblo con la conquista del Gobierno, como el Canal Estatal por ejemplo, son utilizados con políticas claramente equivocadas con respecto a la política de la Unidad Popular.

Trabajar en esta materia con la verdad como instrumento permanente de relación entre los destacamentos políticos del pueblo y las masas, entre el Gobierno Popular y las masas, nos parece una cuestión esencial. Las masas deben saberlo todo; los avances y los repliegues; los aciertos y los desaciertos; los triunfos y las derrotas, para poder realmente comprometerse con el proceso. Deben estar al día y conocer con absoluta claridad, por ejemplo, la política internacional y las relaciones con el imperialismo. No se avanza nada al engañar a las masas con falsas victorias, con inventados avances; por el contrario, se crean las condiciones para el retroceso al demovilizarlas, confiadas como están en que la cosa marcha miel sobre hojuelas.

En segundo lugar, no cabe duda que este combate ideológico debe hacerse contra quienes hoy son nuestros enemigos y no tirar de chincol a jote; el combate ideológico se funda indisolublemente con la táctica de la Unidad Popular y a ella obedece.

Por lo que toca a nuestro partido, hemos tenido en este terreno algunos avances, pero ellos son aún extraordinariamente insuficientes. Pensamos que en esta materia debemos realizar un gran esfuerzo teórico y orgánico que nos permita influir con eficiencia en la lucha ideológica que se da directamente en el seno de las masas, siendo ésta la principal, y en aquella que debe darse utilizando los grandes medios de comunicación de masas.

Los problemas de la Dirección de la Unidad Popular no son formales

Como se desprende de este informe, los problemas de dirección y las insuficiencias tácticas de la Unidad Popular se han agravado en estos meses. Continuamos sin definir a fondo muchas cuestiones centrales.

Si bien con respecto al MIR las cosas están más claras, no existe todavía una opinión unánime en cuanto al tratamiento que debe dársele a temas como las relaciones con la Democracia Cristiana y la política económica.

Las fallas en la dirección han continuado: Lo Curro verificó que ninguna de las medidas acordadas en El Arrayán habían sido puestas en práctica.

A esta altura, nuestro partido piensa que, sin lugar a dudas, aquí hay una cuestión de fondo: los problemas de dirección en la UP no son puramente formales.

Está claro para nosotros que ellos obedecen, no a éste o a ese otro asunto más o menos superficial, sino a las insuficiencias que los partidos obreros tienen para asegurar la hegemonía proletaria y una consecuente línea de clase.

Esta constatación, por hoy, nos afirma al menos en dos conclusiones que estimamos positivas:

Por un lado, nuestro partido no caerá más en la esperanza idealista, desprendida de una base real, de que los problemas de dirección en el frente político de la UP se van a solucionar mañana, a la vuelta de la esquina, en el próximo conclave.

Por otro lado, reafirmamos nuestra convicción en la validez y vigencia de nuestro propio y nuevo partido proletario, en la necesidad que el proceso tiene de su desarrollo, en el desenvolvimiento de sus políticas, dentro del principio de unidad y lucha.

Pero que nadie se engañe en el análisis. Los partidos proletarios del frente son, por sus limitaciones, los principales responsables de la carencia de dirección, pero son también, por sus condiciones, los principales artífices de las victorias que el pueblo, y concretamente el proletariado, se han dado.

Si existe el avance que todos comprobamos en el proceso revolucionario chileno, si hemos alcanzado los éxitos que hemos logrado en la liquidación de nuestros enemigos fundamentales, es porque aquí ha existido una dirección proletaria, una dirección de los partidos proletarios.

De allí que entendamos que para nosotros existe el principio fundamental de que para seguir avanzando es necesario afirmar la dirección revolucionaria y que no hay dirección revolucionaria en este país al margen del entendimiento posible entre el PC, el PS y el MAPU.

Pensamos que hoy día se dan condiciones para impulsar la organización de la UP en todos los niveles. Tomamos como un compromiso del partido, para el que no escatimaremos esfuerzos, hacer realidad esta vez el acuerdo adoptado en Lo Curro, de realizar asambleas comunales y provinciales que culminen con la Asamblea Nacional de la UP en septiembre de este año. No cabe duda que poner de nuevo en pie la organización de la UP es un factor importantísimo para mejorar la capacidad de dirección.

Nuevas y mayores obligaciones para nuestro partido

En este período que va del IV al V Pleno, nuestro partido continúa su permanente desarrollo entre las masas; el MAPU crece en militantes y adherentes y en la influencia que sus planteamientos tienen entre la clase obrera y el pueblo. Comprobamos, con nuestra propia experiencia, que el ejercicio del Gobierno Popular no sólo no limita nuestro crecimiento sino que lo desarrolla y acrecienta. La estrategia de la Unidad Popular, que es seguida con fidelidad por nuestro partido, prueba su corrección incluso en esto; las masas están puestas en la misma perspectiva que la Unidad Popular y entregan su confianza a quienes interpretan adecuadamente esa línea.

Por otro lado, se afirma definitivamente, a los ojos de todo el mundo, el desarrollo obrero del partido. Lo que para nosotros estaba claro desde hace

mucho tiempo, ahora está claro para todos. La clase reconoce al MAPU como su nuevo partido proletario. La elección de la CUT, que coloca al partido como la tercera fuerza de la izquierda, lo comprueba.

En estos meses, el partido, además, profundiza su capacidad de dirección de masas, resolviendo correctamente lo que para otros es un problema: movilizar a las masas tras objetivos y con métodos que no se contraponen con el Gobierno Popular, sino que, muy por el contrario, lo afirman, lo fortalecen, respaldan el programa. Es el caso de las movilizaciones en torno a la confiscación de la ITT y la lucha de los campesinos de Melipilla y de toda la provincia de Santiago.

En este período además, el partido sufre el golpe más fuerte que haya recibido, la pérdida más importante y dolorosa: muere en campaña nuestro Secretario General y primer constructor del partido, compañero Rodrigo Ambrosio.

Su muerte remece hasta lo más profundo nuestra vida militante y es sentida por todo el pueblo y por todos sus partidos; recibimos la condolencia de partidos obreros de todo el mundo y de las delegaciones de los países socialistas. Incluso allí, Rodrigo entrega un nuevo servicio al partido: a su muerte se produce un reconocimiento, no emocional, sino claramente racional, de nuestro carácter de partido proletario.

El partido que deja a su muerte, lo hemos dicho, está de pie dispuesto y preparado para las mil batallas.

Entre las exigencias inmediatas, a todos los niveles, están, en el plano interno, aquellas que tienen que ver con el gran esfuerzo orgánico y teórico que desde la base hasta la máxima dirección debe hacerse en la perspectiva de nuestro Segundo Congreso Nacional, y en el plano político y de masas, el de desarrollar hoy día con muchas fuerzas una política autónoma que perfile con nitidez un estilo de masas propio, en el marco de la unidad de los partidos obreros y de la unidad popular. Tenemos ahora, sin duda, mayores obligaciones de dirección en la clase y en el frente, dado el reconocimiento cada vez mayor que el proletariado de la ciudad y el campo ha hecho de nosotros.

“CHILE CONTRA LOS MONOPOLIOS”

“A COMBATIR AL IMPERIALISMO CON LAS MASAS DE PIE”

“SOLO AVANZANDO CONSOLIDAMOS LA VICTORIA”

I. Las orientaciones fundamentales de la política económica

Nuestra lucha se centra en la consigna de “convertir la victoria en poder y el poder en construcción socialista”. Hoy esta consigna adquiere características definidas para la etapa que estamos viviendo, a través de tres orientaciones fundamentales:

– disminución cualitativa de la tasa de explotación a que históricamente han estado sometidos el proletariado y las capas pobres de la ciudad y el campo;

- quiebre de las relaciones de propiedad en los sectores monopólicos de la industria, la banca y la distribución mediante la constitución del área de propiedad social y el surgimiento en ella de nuevas relaciones de producción; y

- quiebre de la relación de explotación y dependencia con el imperialismo norteamericano a través de la recuperación de nuestras riquezas básicas y de la libre disponibilidad de nuestros recursos en el comercio internacional, fortaleciendo la independencia y soberanía de la patria.

Sólo el desarrollo de estas orientaciones nos permite seguir acumulando fuerzas para conquistar el poder en su conjunto. Las tres se requieren; no podemos pensar en que acumularemos fuerzas, que grandes sectores de la ciudad y el campo vendrán a nuestras filas, si nuestra política no implica elevar sustancialmente el nivel de vida de las grandes masas; si no les aseguramos trabajo estable y acceso a la vivienda, la educación, la salud. Pero no basta lo anterior para asegurar el triunfo de nuestra lucha. Requerimos destruir a nuestros enemigos fundamentales: la burguesía monopólica y latifundista; en la medida que ellos permanecen, en la medida que nosotros descuidamos este enfrentamiento, más difícil se nos hace el primer objetivo. Es necesario el control por parte de los trabajadores y de su vanguardia, el proletariado de las grandes industrias que producen los bienes que las masas necesitan consumir; de la banca para que el crédito esté al servicio de los grandes objetivos de la revolución chilena, de los latifundios para hacerlos producir más alimentos.

Nuestros enemigos internos no actúan solos, ellos son la “manos del gato” con la cual el imperialismo norteamericano a través de sus grandes consorcios industriales, mineros y financieros, nos ha explotado históricamente. Este es el enemigo principal. La destrucción interna de su poderío, en el cobre, la banca, las grandes industrias monopólicas, nos permiten enfrentarlo de mejor manera en la lucha por nuestra soberanía y en la destrucción de nuestros enemigos internos.

En la consecución de estos tres objetivos la alianza estructurada por la Unidad Popular adquiere más sentido que nunca. Sólo un proletariado organizado fuertemente; con claridad en los objetivos de la etapa, participando activamente en su conducción; nos asegura el triunfo. El proletariado, sus organizaciones y los partidos de la clase, saben hoy día con claridad que el fortalecimiento de la alianza con los sectores de la pequeña burguesía y de la burguesía mediana y pequeña es requisito necesario para el logro de los tres objetivos. Sólo la alianza y su fortalecimiento nos aseguran la destrucción de los enemigos internos y externos y la construcción de la nueva sociedad socialista.

II. Los grandes avances del Gobierno Popular

1. El Gobierno de la Unidad Popular ha disminuido considerablemente la tasa de explotación a que han sido históricamente sometidas las grandes masas.

Los asalariados aumentaron su participación en el producto nacional de un 53,7% durante 1970, a un 59,6% durante 1971. Esta mayor disponibilidad de

bienes materiales y servicios de las masas se consiguió con una política consecuente de salarios (más de 50% de aumento en 1971) y con la reactivación económica (el crecimiento del producto social superó el 8% en 1971, una de las tasas más altas de las últimas décadas). La reactivación redujo a su vez la desocupación en un 55%, llevándola a los niveles más bajo que se tenga memoria.

Las políticas sociales tuvieron éxitos resonantes. La tasa de mortalidad infantil se redujo en 1971 en 10,5%. Las consultas médicas crecieron en 18,2% contra un 2% de crecimiento histórico. El programa del medio litro de leche hizo aumentar el consumo de este alimento esencial en 300%. Por otra parte, se iniciaron durante 1971 más de 73.000 viviendas, superando en más de 10 veces las viviendas construidas en 1970.

Hoy, las masas ganan más, se alimentan mejor, tienen mejor atención médica y tienen más habitaciones.

2. Las relaciones de propiedad se han modificado en forma considerable, tanto en los monopolios industriales, bancarios y de distribución como en la tenencia de la tierra.

La banca está prácticamente en el área social; el Banco de Chile, hasta hace poco tiempo bastión de los grupos monopólicos está controlado mayoritariamente por el Estado, igualmente lo están el Banco Continental, sede del grupo Yarur Lolas; el Banco Español de los García Vela y Picó Cañas; el Israelita de la familia Litvak; el Nacional del Trabajo y el Panamericano de los Said Kattan; el Banco de Concepción de la familia Massera; el Osorno y La Unión del grupo Sotta, Jara Mery. Intervenidos por irregularidades en su manejo se encuentran los Bancos Edwards, perteneciente al clan Edwards, y el de Crédito e Inversiones, del grupo Yarur Banna.

En el sector industrial los avances han sido considerables durante el año 1971, pero han disminuido su ritmo durante el año 1972. Entre los sectores más importantes que hoy son controlados por el Estado están los de materiales para la construcción, con Cemento Melón y Cemento Polpaico, Volcán, Fanaloza; el sector textil: con Sumar, Hirmas, Yarur, Caupolicán, Rayón Said, Textil Progreso, Oveja Tomé, Rayonhil, Lanera Austral, Banvarte, Fiap y Bellavista Tomé, Fabrilana; en el sector transporte marítimo: Interoceánica; Abastible y otras que han pasado a formar ENADI en la distribución del gas licuado; en el sector agroindustrial algunas como CCU; Madeco en las industrias del cobre; últimamente Mademsa y Fensa en la línea blanca: INDURA, SINDELEN y otras en el sector metal-mecánico. En las pesqueras ha habido un avance también considerable. Empresas monopólicas de la distribución han pasado al APS; Gildemeister de materiales para la construcción, Weir Scott, Duncan Fox, Gibbs y otras de bienes no perecibles que han pasado a integrar la DINAC.

El proceso de reforma agraria ha logrado metas importantísimas en lo que a expropiaciones se refiere. Es así como durante el período 1965-70 se expropiaron 1.408 predios con una superficie total de 3.564.553 hás; en el período que va corrido de 1971 hasta mayo de 1972 se han expropiado 2.800

predios con una superficie total de 4.483.054 hás, esto significa que durante el año y medio de Gobierno Popular se ha expropiado más que durante la administración demócratacristiana. Prácticamente ha desaparecido la burguesía latifundista del país. Para terminar con el latifundio (predios superiores a 80 hás de RB) resta expropiar 780 unidades. Con el desaparecimiento del latifundio el sector reformado de la agricultura llegará a controlar aproximadamente el 40% de la tierra del país.

3. El Gobierno de la Unidad Popular ha cercado al imperialismo en el interior y lo ha enfrentado el exterior.

La recuperación de las riquezas básicas del país controladas por los grandes consorcios imperialistas con base en Estados Unidos, ha sido otra de las grandes victorias del pueblo.

El cobre hoy es realmente de los chilenos. La recuperación de Chuquibambilla, El Salvador, El Teniente, la Exótica y Andina ha permitido que el país pueda disponer libremente de los recursos que de ellas se extraen.

El salitre, centro de explotación histórica donde el proletariado chileno ha dado sus grandes luchas, es por fin de los chilenos; su producción ya no fortalece los intereses foráneos, sino los nuestros. La recuperación del hierro y las inversiones que se realizan para poner en proceso de explotación nuevas minas nos abren perspectivas hasta ahora impensadas.

La banca es hoy chilena. La recuperación de la banca privada, que durante el Gobierno de Frei fue fuertemente penetrada por la banca norteamericana, es otra victoria del Gobierno. El control por parte del Estado del Bank of America, del First National City Bank, del Banco Francés e Italiano, del Banco de Londres, ha permitido que se corte uno de los flujos importantes a través de los cuales las empresas monopólicas controladas por el imperialismo sacaban divisas del país; que se dejara de utilizar el ahorro de los depositantes chilenos para expandir y aumentar su poderío interno.

La Compañía de Teléfonos de Chile, centro de la conspiración internacional contra el Gobierno Popular, está administrada por los trabajadores.

Otro gran golpe para el imperialismo ha sido, por un lado, la reanudación y establecimiento de relaciones diplomáticas y el surgimiento de intercambio comercial con países hermanos como Cuba, China Popular, la República Democrática de Vietnam, la República Democrática de Corea; y por otro lado, el estrechamiento de relaciones con la Unión Soviética y los países Socialistas de Europa.

Los resultados de la renegociación de la deuda externa, así como la apertura de nuevos mercados en Europa Occidental, Japón y los Países del Tercer Mundo inquietan al gobierno norteamericano.

La evaluación que hacemos del año y medio de Gobierno en la elevación del nivel de vida de las grandes masas, la destrucción de la burguesía monopólica y latifundista y el desarrollo de nuestra soberanía, nos parecen muy positivos.

III. Las luchas que ha tenido que dar el proletariado y sus aliados, los partidos de la UP y el Gobierno para avanzar

El logro de las metas alcanzadas no ha sido “un regalo del cielo”, sino que es el resultado de la lucha del proletariado, de los partidos de la clase y de sus aliados. La lucha no ha sido fácil. Es en ella donde debe estar la enseñanza para las próximas etapas. Debemos revisar cómo se han obtenido las victorias antes señaladas y los costos que han tenido.

1. El imperialismo no ha permanecido quieto: el “bloqueo invisible”.

Dos consideraciones económicas fundamentales orientaron al primer año de Gobierno la enorme capacidad productiva ociosa disponible en el país y la disponibilidad de divisas. Ambos aspectos desarrollados con gran precisión en el informe sobre política económica de la Comisión Política, presentado por el compañero Jaime Gazmuri, nos muestran cómo el Gobierno Popular logra avances significativos debido al éxito que tuvo la política el primer año. Para enfrentar el segundo año ya el partido hacía ver las serias dificultades que se vislumbraban: la suspensión de algunas líneas de crédito a corto, mediano y largo plazo por parte de Estados Unidos; el no cumplimiento por las compañías del cobre norteamericano de la ampliación de la capacidad productiva de las minas; la disminución del precio del cobre. Se indicaba además que el éxito de la política económica implicaba la utilización de la capacidad ociosa anterior, el surgimiento de ciertos puntos de desabastecimiento y los requerimientos de inversiones adicionales para superar los cuellos de botella que comenzaban a presentarse.

Las dificultades anunciadas en noviembre de 1971 se comprobaron. Los publicitados planes de expansión de las compañías del cobre no eran tales, las inversiones no se habían realizado, el incremento de la producción de los minerales en los porcentajes estimados por el Gobierno no se pudieron cumplir. La baja del precio del cobre redujo la cantidad de divisas que se esperaba obtener. El país tomó conocimiento preciso del endeudamiento que dejaron los gobiernos de Alessandri y Frei: US\$ 3.600.000.000; los plazos para pagar se comenzaron a cumplir y el Gobierno Popular debió responder a las exigencias contraídas por las administraciones reaccionarias anteriores. La devaluación unilateral del dólar por el gobierno norteamericano, con el objeto de descargar en otros países el costo de la guerra de Vietnam y de su crisis interna, implicó que las importaciones que el país realizaba le costaran más caras.

Los ingresos han sido menores a los esperados y los requerimientos de importación aumentaron por el éxito de la política económica. Se incrementaron las importaciones de alimentos, algodón, cueros y otros bienes de consumo popular; la utilización generalizada de la capacidad productiva obligó a incrementar las importaciones de combustibles, materias primas y repuestos.

Esta situación confundió a los responsables del comercio exterior quienes, creyendo en una producción considerablemente mayor de cobre y no antepo-

niéndose a las condiciones creadas externa e internamente por la política económica, no pensaron en la resolución de este problema en el mediano plazo, no plantearon a tiempo la necesidad de inversiones para exportación, no plantearon a tiempo la necesidad de inversiones para sustituir importaciones.

El imperialismo supo comprender el momento y aplicó toda su astucia para intentar destruir lo que el Gobierno Popular había logrado. Así lo denunciaba hace algunas semanas atrás el Secretario General del partido, compañero Rodrigo Ambrosio:

“Estamos hoy día en condiciones de afirmar categóricamente que el afiebrado plan que la ITT quiso poner en marcha para interrumpir a cualquier precio nuestro régimen democrático se ha transformado en el plan de todas las empresas imperialistas afectadas por el Gobierno Popular, en el plan del conjunto de la banca norteamericana, incluso en el plan del Gobierno de Nixon, que en las sombras coordina su ejecución.

En efecto, a esta altura es posible constatar de manera incontrovertible los siguientes hechos:

1º Los bancos norteamericanos han prácticamente cerrado para Chile las líneas de crédito de corto plazo, operación bancaria casi de rutina, y que puede incidir gravemente en la normal operación de importación. De un flujo mensual de alrededor de US\$ 220.000.000 inmediatamente antes del 4 de septiembre de 1970, hemos pasado a comienzos de este año, a un monto decreciente de apenas US\$ 20.000.000.

2º Los embargos ordenados por los tribunales de Nueva York sobre los bienes de la Corporación del Cobre, la CORFO y otras muchas empresas del Estado chileno, hacen hoy día prácticamente imposible para Chile comprar o vender mercaderías en el estado de Nueva York, y lo hacen extremadamente riesgoso en los demás estados de ese país. Eso significa que el abastecimiento normal de repuestos para la gran minería del cobre, y en general para los equipos y maquinarias de marca norteamericana, pueden hacerse cada vez más indirectos, más riesgosos y caros.

3º Ningún crédito de largo plazo ha sido acordado a Chile desde la instalación del Gobierno Popular en los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en los cuales el gobierno norteamericano tiene una influencia preponderante.

4º Se acaba de terminar la renegociación de la deuda externa acumulada por los gobiernos anteriores. Los imperialistas dilataron su desarrollo mientras pudieron y quisieron condicionar la renegociación a cuestiones que atingen exclusivamente a nuestra soberanía. Cada dólar renegociado fue una victoria sobre las presiones americanas. En este sentido, la renegociación ha sido claro para decir que ella, aun aliviando nuestros problemas, no los resuelve. Debemos pagar este año 220 millones de dólares, deben negociarse bilateralmente ahora los intereses con cada uno de los acreedores, y a fines del próximo año debemos volver a negociar la deuda pendiente. Los imperialistas también en este terreno ha preferido una táctica sutil, que evita la agresión abierta, pero que dejando sin solución de fondo nuestro problema de divisas, nos deja en buena medida en manos de los acreedores”.

Para el Gobierno de la Unidad Popular, para el proletariado y sus aliados, el bloqueo se ha hecho visible. Desde el descubrimiento de los documentos de la ITT todos los chilenos hemos comprendido la grave amenaza que afecta a la patria. El plan concertado por el gobierno imperialista de los Estados Unidos, desde que la UP asumió el Gobierno, sus consorcios monopolísticos principales y de sus aliados internos se han puesto en marcha. Su principal exponente, John Connally, el hasta hace poco secretario del tesoro, equivalente al Ministro de Hacienda del gobierno yanqui, ya no se conforma con conspirar contra Chile desde sus oficinas de Washington, sino que ahora sale a recorrer América Latina como representante personal de Nixon. Las andanzas hasta ahora no les han dado resultados. Nixon y su adlátere Connally necesitan encontrarse nuevos puntos de apoyo para bloquear aún más a nuestro país.

2. El imperialismo y sus aliados internos, la burguesía monopolística y latifundista, tratan de detener la constitución del Area de Propiedad Social.

El Area de Propiedad Social permite al proletariado y sus aliados controlar los aspectos más significativos del aparato productivo, distributivo y bancario para orientarlos a: superar los niveles de explotación y consolidar las bases de las nuevas relaciones sociales de producción.

El Area de Propiedad Social ha avanzado considerablemente. Su avance ha creado situaciones nuevas que el Gobierno y los trabajadores han debido afrontar. El cambio fundamental se ha dado en la relación de propiedad de las empresas o en el control de su administración a través de mecanismos legales como la requisición, intervención con administración o expropiación.

La tendencia de muchas de las administraciones ha sido la de mantener la forma de gestión a la cual las empresas tradicionalmente se sometían. El cambio en las relaciones sociales de producción prácticamente no se ha realizado. En este sentido, los trabajadores en las diferentes empresas no han comprobado objetiva y subjetivamente que las condiciones de trabajo hayan cambiado radicalmente. De esto se han aprovechado los enemigos. Hoy la derecha enarbola como suya la bandera de la participación de los trabajadores, cuando siempre ha sido de los partidos de la clase. Hoy día incitan a los trabajadores a pedir la propiedad de las empresas para sí y así controlarlas nuevamente a través de sus tecnocracias sirvientes. El oportunismo de ultraizquierda, que reivindica lo imposible, ayuda así objetivamente a los enemigos principales. En la medida que estas distorsiones se entronizan se debilitan las posiciones que el proletariado ha adquirido.

La producción de las empresas monopolísticas que han pasado al Area de Propiedad Social no ha sufrido deterioros. Los niveles de producción no sólo se han mantenido, sino que muchas veces han llegado a los niveles máximos de capacidad de las empresas. El tan cacareado fracaso que anunciaban los grupos más reaccionarios de nuestro país y los conspiradores de la ITT, no se ha producido. Esta ha sido una gran victoria del Gobierno y los trabajadores.

Las empresas en su generalidad han seguido manteniendo las líneas de producción que tenían cuando eran manejadas por los sectores monopólicos; las taras de dicha organización y la irracionalidad de su funcionamiento se han ido haciendo cada vez más insostenibles. La competencia intersectorial se ha continuado desarrollando en sectores ampliamente controlados por los trabajadores. Surge la necesidad de un plan y una dirección clara como requisitos indispensables para responder a las demandas de las grandes masas con la elevación de su nivel de vida y a la participación de los trabajadores en la producción y conducción del proceso.

Sólo la presencia de un plan que oriente y dé una dirección que controle, hacen posible la participación real de los trabajadores en cada empresa. Plan, dirección y control de los trabajadores son tres aspectos que se requieren mutuamente. No hay participación real de los trabajadores si no hay metas definidas para cada uno de los procesos en que interviene, si no han sido parte en la discusión y elaboración de dichas metas; no hay plan ni participación sin una clara línea de dirección aceptada para ponerlas en marcha. Por eso, hoy día no hay plan ni dirección sin una clara línea de masas.

El cumplimiento de los objetivos propuestos por el Gobierno Popular para la elevación del nivel de vida de las grandes masas requiere, por lo tanto, no sólo de un cambio en las relaciones de propiedad, sino de un cambio en las relaciones de propiedad, sino de un área de propiedad social. Se engañan aquellos que hoy creen que es el momento del capitalismo de Estado en nuestro país. Sólo el control del proletariado y sus aliados en la producción, con un plan y una dirección clara, nos permiten seguir ganando fuerzas para derrotar a nuestros enemigos.

3. El imperialismo y sus aliados internos, la burguesía monopólica y latifundista, tratan de detener los nuevos niveles de vida que las grandes masas han alcanzado.

El Gobierno de la Unidad Popular ha elevado sustancialmente los niveles de vida de las masas. Esto se consiguió básicamente con la distribución del ingreso y la elevación del gasto público, por el lado de la demanda, y con el aumento del producto, por el lado de la producción.

Estos éxitos se han conseguido, sin embargo, en medio de un fuerte enfrentamiento con el imperialismo y sus aliados.

El imperialismo nos ha enfrentado en la producción. Esto ya lo hemos analizado en el punto anterior.

La burguesía monopólica nos ha enfrentado también en la producción. Ha limitado cuanto ha podido los aumentos de producción de las grandes fábricas. Ha acaparado y especulado; ha llegado al extremo de destruir producción ya terminada. Ha contrabandeado en gran escala.

El elevado índice de crecimiento del producto industrial (más del 14%) demuestra la derrota que los partidos populares y el pueblo infringieron al imperialismo y los monopolios.

El latifundio, destrozadas ya casi por completo las bases materiales que le daban vida, nos ha enfrentado también en la producción. Ha boicoteado

directamente la producción agraria, ha contrabandeado enormes cantidades de ganado a los países limítrofes. La SNA, que hoy no representa a nadie, procura ganar terreno dentro de la burguesía agraria mediana y pequeña agrícola en su campaña del terror. Busca que tengamos que importar más alimentos que dependamos cada día más del imperialismo.

Juntos, el imperialismo y sus aliados han desatado la campaña ideológica que busca penetrar las capas medias, basada en la pretendida ineficiencia y burocracia del Gobierno, sobre todo en las empresas del APS.

El imperialismo y sus aliados nos han enfrentado en nuestra política de gastos público y en la redistribución. Han hecho un escándalo de los niveles que ha alcanzado el gasto fiscal. Saben que si el Gobierno gasta menos, ellos tienen más control de la economía, que los niveles que alcance la producción dependen más de sus decisiones. Sabe que si el Gobierno no compra determinados recursos materiales, éstos quedan a su disposición. Al mismo tiempo, en forma contradictoria han rechazado en el Congreso nuestros proyectos para obtener mayores recursos tributarios y evitar de ese modo que el déficit alcance niveles inconvenientes. Saben que si la liquidez pasa más allá de ciertos marcos, ellos, a través del mercado, podrán afianzar un mayor control sobre la producción y la circulación.

En nuestra política redistributiva nos han enfrentado exigiendo demagógicamente que se aprueben pliegos imposibles. Se han aprovechado de las justas aspiraciones de los trabajadores de más bajos ingresos para plantear tras de ellos beneficios semejantes a los más altos de funcionarios y profesionales. Nos han enfrentado, además, con el juego de la especulación y los precios del mercado negro.

Los resultados económicos alcanzados en el primer año de Gobierno demuestran la derrota que el pueblo, los partidos populares y el Gobierno han infringido a sus enemigos.

Sin embargo, aún hoy nos enfrentamos con nuestros enemigos por el control de la economía, la producción y la circulación.

Aunque la redistribución del ingreso fue significativa durante 1971, la tasa de explotación sigue siendo muy elevada. Una manifestación de esto último es la concentración del ingreso de la población ocupada: a fines de 1971 el 6,6% de la población ocupada se apropiaba del 48,4% del ingreso total, y, en el otro extremo, el 67,5% captaba el 25,4% del ingreso. Este 67,5% (dos millones de trabajadores), ganaba menos de dos vitales.

Con esta pauta de ingresos, el consumo se mantiene muy concentrado. Con esta pauta del ingreso los aumentos de liquidez resultantes de los gastos públicos sin financiamiento, van a parar donde nuestros enemigos. Esto les da las condiciones necesarias para desatar la especulación. La especulación les permite sobrepasar los aparatos de distribución que hemos creado, lucrar en el mercado negro, sacar partido del desabastecimiento y agudizárselo a las masas. La especulación, en definitiva, les entrega mayor control sobre la economía.

En este campo, los enemigos han ganado algunas posiciones en algunos funcionarios de Gobierno, inclusive en algunos compañeros nuestros. Son los que asustados por los problemas del abastecimiento y la liquidez adoptan po-

siciones restrictivas: buscan reducir el gasto público, buscan atenuar las políticas redistributivas. Son los que piensan que en este país ya no hay grandes diferencias en los ingresos. No se dan cuenta que le entregan a nuestros enemigos mayor control sobre la economía. No entienden que si tenemos problemas de abastecimiento es porque aún hay muy pocos que consumen demasiado.

Hoy, aproximadamente el 7% de la población controla un 50% del consumo total. Hoy, una familia de ingresos superiores a 8 vitales consume casi 10 veces más carne y casi 15 veces más vestuario que una familia de ingresos inferiores a dos vitales. Por eso, la consideración central que debe guiar nuestra política es la pregunta ¿quién consume? Al mismo tiempo, su objetivo fundamental es hacer pagar a nuestros enemigos el costo de los mayores niveles de vida que ha alcanzado el pueblo.

4. Las capas medias: centro del enfrentamiento

Los logros del proletariado y sus partidos durante el año y medio de Gobierno en la conquista del poder han sido significativos. Las capas medias han sido directamente favorecidas por el Gobierno Popular. Sus ingresos se han aumentado cualitativamente. La reactivación económica del año 71 implicó un aumento considerable en la demanda de productos manufacturados y agrícolas y un incremento significativo en las ventas del comercio. Las remuneraciones de los sectores profesionales y técnicos se han elevado sustancialmente. Pero estas medidas, que indudablemente han favorecido a los sectores medios, no se han transformado en un apoyo masivo al Gobierno ni a sus medidas. En este sentido se han cometido errores lamentables donde la lucha ideológica ha jugado un papel fundamental, lucha que el Gobierno no ha sabido enfrentar con claridad y decisión: la clara decisión del Gobierno al indicar que las empresas que pasarían al área social eran un grupo reducido, no fue dada a conocer en la forma que era necesario a las capas medias; el no haber sabido discriminar que los sectores medios no son un grupo compacto, sino diversos grupos con orientaciones no siempre similares; la forma de actuar de grupos y tendencias de ultraizquierda que indiscriminadamente planteaban la estatización de un monopolio y de una pequeña industria. Estas acciones y muchas otras han llevado a que este sector definido como aliado no siempre haya estado en las luchas de los trabajadores.

Nuestros enemigos se han ido destruyendo, pero por lo mismo, cada vez actúan más agresivamente. Los grupos monopólicos se refugian en aquellos sectores que hasta ahora no han sido tocados por el proletariado, sus partidos y el Gobierno Popular. Han hecho surgir diferentes organizaciones, para todos los gustos, con tal de atraer a su lado a los sectores medios, se refugian en El Mercurio, la Radio Agricultura, el Partido Nacional, la SOFOFA, la Confederación de la Producción y el Comercio. Ellos saben que si somos capaces de atraer a nuestro lado a los sectores medios, están destruidos, aquí se centra hoy la lucha con ellos.

IV. Las tareas de los próximos meses

La consigna que ha orientado nuestra lucha después de la victoria de septiembre de 1970: “Convertir la victoria en poder y el poder en construcción socialista”, sigue teniendo más vigencia que nunca. El proletariado, sus partidos y el Gobierno Popular tienen cabal conciencia de que las tareas fundamentales de la política económica deben ser acentuadas. Dos consideraciones básicas deben orientarlos: que la política económica sea una política de masas, donde su vanguardia, el proletariado, tenga un papel preponderante en su conducción y que se establezca un plan y una dirección eficiente que permitan avanzar en los objetivos señalados.

Los enfrentamientos del futuro próximo deben estar centrados en tres tareas fundamentales:

1. la defensa de las divisas;
2. la batalla de la producción;
3. la defensa del consumo material de las masas.

1. La defensa de las divisas

Uno de los principales cuellos de botella en la producción son las importaciones, no en el sentido obvio de importar todo lo que hace falta para cerrar la brecha entre demanda y oferta interna, sino en que la capacidad instalada industrial aún conserva márgenes apreciables de subutilización y lo que se requiere fundamentalmente es importar materias primas, algunos bienes finales y equipos menores para despejar algunos cuellos de botella muy localizados que permitirían incrementar sustancialmente las capacidades de producción. Existe así capacidad productiva utilizable y el problema fundamental es la disponibilidad de divisas. Requerimos además de divisas para iniciar inversiones de mediano y largo plazo que vengan a resolver en definitiva el problema de nuestra balanza comercial. Estas inversiones deberán estar orientadas principalmente a la producción de bienes de consumo popular y a la producción de bienes de exportación que nos permitan obtener divisas.

De ahí que, como lo planteara en el mes de abril pasado el Secretario General del partido, compañero Rodrigo Ambrosio:

“Las divisas deben convertirse en un problema nacional, en un problema de masas. Todo el pueblo en sus sindicatos, en sus comités de producción, en sus comités de vigilancia, en sus consejos campesinos, en sus juntas de abastecimiento y precios, deben discutir sobre cómo ahorrar divisas y sobre cómo producir divisas”.

Y enunciaba las siguientes tareas:

“1. Consumir preferentemente lo que producimos. Mientras desarrollamos suficientemente nuestra ganadería vacuna, promover el consumo de merluza, ave o cerdo, constituye un deber patriótico en el que las JAP, las Juntas de Vecinos, los Centros de Madres o las Escuelas, sus profesores y sus apoderados, tienen una gran tarea que cumplir. ¡Con sólo un cuarto de carne de vacuno que importamos en el año, podríamos comprar plantas industriales equivalentes a

Hirmas, Hilos Cadena, Sumar y Yarur juntas! Esas mismas organizaciones deben vigilar la distribución eficiente del medio litro de leche que cuesta al país 46 millones de dólares y que con grandes sacrificios el pueblo está dispuesto a pagar, siempre que llegue a sus niños y puedan así crecer más sanos.

2. Combatir el mal uso, el derroche y el acaparamiento de elementos importados. Tanto en el área de propiedad social como en el área de propiedad privada hay que promover una gran campaña contra el mal uso y el derroche de combustible y materias primas importadas. En el área privada el Banco Central debiera, a juicio nuestro, apoyarse en los Comités de Vigilancia para controlar los registros de importación y evitar el acaparamiento. A nivel de los comités sectoriales por rama debieran formarse comisiones, con representación de todas las áreas y de todos los trabajadores de la rama, encargados de la asignación racional y controlada de los principales insumos importados, como lo comienzan a poner en práctica los trabajadores de FETECO, de las fábricas de envases con la hojalata que, en buena parte, se importa.

3. Un plan de fabricación nacional de repuestos. Hay que impulsar un gran plan de fabricación de repuestos y herramientas en el país. Existen en el área de propiedad social maestranzas que no trabajan a toda su capacidad y que deben ser puestas al servicio de otras empresas, como ha empezado a ocurrir en algunas. Se deben establecer convenios con los miles de pequeños industriales metal-mecánicos que hay en el país. Los astilleros, fábricas, maestranzas de nuestras FF.AA., que constituyen grandes reservas de instalaciones y capacidad técnica, deben también ser incorporados a la fabricación de partes y piezas.

4. La batalla decisiva: la de la producción. La batalla de la producción en estas circunstancias adquiere una importancia singular, particularmente en aquellos sectores que producen divisas, como el cobre, la minería en general, la celulosa y la industria pesquera. La agricultura se transforma en un punto clave para el alivio de divisas en los próximos años. El Área de Propiedad Social puede también hacer aportes muy importantes a la mejor solución de nuestros problemas”.

A las tareas enunciadas por el compañero Ambrosio es necesario hoy día agregar dos, que adquieren especial importancia:

5. Centralizar y dirigir el comercio exterior. En el anterior informe de la Comisión Política sobre política económica ya se hacía ver la importancia de estatizar el comercio exterior. En el último tiempo se ha visto con claridad cómo esta tarea era necesaria al observar la situación especulativa en las importaciones. Los registros de importación de materias primas industriales crecieron el año pasado en 31% respecto de 1970. En el segundo semestre de 1971 en un 58% respecto del primero. Esta demanda de importaciones no corresponde al 14% de crecimiento del producto industrial durante 1971. Si no hay control social en la asignación de divisas la especulación desbordará cualquier programa de importaciones. Un ejemplo revelador de los últimos días ha sido el escándalo que se ha descubierto en Iquique y Arica con los productos farmacéuticos.

6. El Gobierno debe redefinir las relaciones con los países socialistas, los países de Europa Occidental y Japón y los países del Tercer Mundo. La acción realizada en este campo no se ha planteado hasta ahora sobre la base de las condicionantes fundamentales de nuestras relaciones económicas externas. Esto es, el cerco imperialista que no por ser solapado es menos duro.

Las negociaciones con la URSS y con los países socialistas de Europa han marchado muy lentamente. Es necesario mostrar a estos países que el cerco imperialista es una realidad para nuestro pueblo. Ellos lo han sufrido en algún momento de su historia. Muchos de los productos que consume la gran masa de nuestra población, como el té, el algodón, los plátanos, el café, etc., provienen o pueden provenir de los países del Tercer Mundo. Debemos aprovechar mucho mejor todas las oportunidades de estrechar nuestras relaciones comerciales y financieras con Asia, Africa y América Latina. Debemos estrechar más nuestros lazos con Europa y Japón. Esto es especialmente importante cuando las fuentes de abastecimientos norteamericanos están siendo cerradas. Las medidas adoptadas por EE.UU. el año pasado (devaluación, impuestos a las importaciones) han creado la necesidad que los países europeos y Japón abran cada vez más sus puertas a las exportaciones y el financiamiento para países como el nuestro.

Planteado el problema de restringir nuestras importaciones, la cuestión es, como en todo lo económico, ¿quién paga?, ¿qué se restringe? Mantener una política que sostenga el consumo popular supone restringir dando prioridad a lo menos suntuario.

2. La Batalla de la Producción

Los enemigos internos se refugian hoy en los últimos enclaves monopólicos que subsisten en el país. Ellos han tomado plena conciencia de que su base de sustentación material les ha sido quitada en gran medida, que deben aprovechar los últimos recursos que les quedan para atraer hacia sí las capas medias, que por lo tanto, la lucha ideológica es lo que les puede asegurar un triunfo en 1973. Tienen claridad que la conciencia de las grandes masas va a la zaga de los hechos producidos en la base material, por lo tanto tienen en este frente, especialmente el político, ciertas ventajas relativas.

Un imperativo fundamental que orienta la batalla de la producción es el cambio de las relaciones sociales de producción en el Area de Propiedad Social.

Las tareas concretas que hoy día plantea la batalla de la producción son fundamentalmente las siguientes:

1. Incorporación rápida al Area de Propiedad Social de los enclaves monopólicos que forman las 91 empresas: que el proletariado y sus aliados puedan controlar definitivamente el aparato productivo. Rápida incorporación al área reformada de los latifundios que aún subsisten. Estas son tareas que se deben cumplir durante el año 72. Ellas sólo se podrán cumplir en la medida que los trabajadores actúen decididamente en su incorporación. Es necesaria la discusión sindicato por sindicato en aquellas empresas no incorporadas para buscar el máximo de adhesión a esta meta.

2. Requerimiento de una Dirección y un Plan que implique redefinir las líneas de producción existentes en el área social, teniendo como referencia básica los requerimientos del consumo de las grandes masas; la ubicación de los cuellos de botella que surgen en la producción para resolverlos; la realización de las microinversiones; de las inversiones de mediano y largo plazo que nos permitan responder a las nuevas demandas de las masas en la superación de su nivel de vida; así como ahorrar las divisas necesarias para pagar las importaciones que el país vaya requiriendo.

3. Hoy más que nunca surge la necesidad de que el proletariado se incorpore a la conducción de la batalla de la producción. Es iluso pensar que la Dirección y el Plan se puedan desarrollar sin participación activa del proletariado y los trabajadores en general en la presente etapa de la revolución chilena. Esto significa que los organismos de participación adquieren una real significación a partir de los Comités de Producción, Consejos de Administración y Consejos de los Comités Sectoriales. Los trabajadores deben discutir las orientaciones de la producción, de las inversiones, de los precios y de la situación financiera de las respectivas empresas o sectores. Las actitudes burocráticas y de desconfianza hacia los trabajadores de algunos funcionarios públicos, especialmente de algunos interventores, sirve a los propósitos del enemigo. Quienes persistan en esta actitud deben ser criticados por los trabajadores y, si es necesario, removidos. La producción y la productividad son fundamentalmente tareas de las masas y de sus organizaciones.

4. Deben acentuarse los mecanismos de incentivo a la producción en las empresas medianas y el control de los trabajadores de esta producción. Los convenios y contingentes de producción son instrumentos muy fuertes que el Gobierno posee y todavía no ha utilizado con plenitud. Permiten fijar una composición de la producción que sirva al pueblo. Convenios y contingentes de producción combinados con la acción de los sindicatos y los Comités de Vigilancia, constituyen un arma de gran poder para el pueblo. En estas empresas los trabajadores deben extender su control: control sobre la producción y los stocks, sobre los costos y los precios, sobre las inversiones y la mantención de los equipos, sobre las finanzas, el pago de los impuestos y aportes para la previsión, además del ya mencionado control sobre las importaciones. En cada uno de estos rubros existen instituciones gubernamentales sobre las que cae la responsabilidad legal del control. Hay que vincular su trabajo con el de los sindicatos y Comité de Vigilancia.

5. El Gobierno y las organizaciones de los trabajadores deben dar gran apoyo a la pequeña empresa y al artesanado. Esto se manifiesta en asistencia técnica que permita aumentar la productividad, mejorar los modelos y disminuir los costos, la apertura de líneas de abastecimiento directas y en el incremento significativo de las líneas de crédito. Para los pequeños industriales agrupados en asociaciones es posible establecer convenios de abastecimiento por ramas que resuelvan sus problemas y les permitan trabajar. Una experiencia sobre este punto son los convenios que se están preparando con la AMPICH en los rubros textil, sidero-metalúrgico y forestal. Es necesario organizar asimismo, a los pequeños productores que no es posible alcanzar por

la vía de la acción centralizada; talleres de reparación mecánica, eléctrico, zapateros, etc.

6. El aparato bancario debe ser un servidor en la batalla de la producción. Esto implica que cambia el carácter que ha tenido cuando servía a los monopolios, como centro de control del sistema productivos y generador de inversiones para aumentar sus ganancias. Hoy el aparato bancario debe ser fundamentalmente el organismo de contabilidad e información de la producción, poniendo a su disposición el crédito. Los que hoy piensan que el Plan y la Dirección se realizan y controlan mediante el aparato bancario no perciben el cambio objetivo que ha habido en la base material de la economía; desprecian la fuerza de conducción del proletariado y los trabajadores en general caen en la concepción más vulgar y burocrática de dirección. La participación de los trabajadores bancarios en los diversos bancos debe implementarse de inmediato.

7. Participación activa de los pobladores en las instituciones del Estado responsables de las tareas democráticas: vivienda, salud, educación. Las masas populares a través de sus organizaciones deben ser incorporadas. Deben estudiarse e implementarse formas de participación de los trabajadores de la vivienda, salud y educación. Una acción ejemplificante es la realizada por el Ministerio de Salud, tanto en la participación de los pobladores en los Comités de Salud como en la participación de los trabajadores de la Salud en el Servicio Nacional de Salud.

8. El sector agrario debe terminar e implementar a la brevedad su discusión sobre la reorganización del sector. Con más fuerza que nunca surge la necesidad de una dirección clara para implementar la participación de los trabajadores y la producción en el sector. Es indispensable aumentar considerablemente e incluso superar el cumplimiento de los planes de explotación.

9. En esta etapa del desarrollo de la revolución chilena insistimos con nuestra proposición de constituir cuarteles generales para la dirección del aparato productivo. Es necesario constituir centros de decisión en los niveles macroglobales donde los partidos, las organizaciones populares y el Gobierno pueden definir e implementar las líneas fundamentales del plan y el control. Estos centros requieren de ámbitos que puedan superar las limitaciones que el Estado burgués ha dado al aparato administrativo.

3. La defensa del consumo material de las masas

La defensa del consumo material de las masas es la tarea mediante la cual el proletariado y los trabajadores en general, afianzan los niveles de vida alcanzados durante el año y medio de Gobierno Popular y los superan.

En esta lucha, las masas se enfrentan de plano con sus enemigos. Con el imperialismo, porque en su afán de reducir nuestra capacidad para importar, sabe que golpea el punto más crítico de nuestra producción y del abastecimiento de alimentos. Con los monopolios, porque siguen saboteando la producción, produciendo lo que les da más utilidades, no lo que el pueblo necesita. El imperialismo y sus aliados internos actúan con claridad y decisión; saben que el aumento del nivel de vida de las masas es condición ne-

cesaria para ensanchar la base del Gobierno. Su preocupación fundamental, por lo tanto, es impedirlo. Actúan en forma solapada, escondiendo su responsabilidad y acusando al Gobierno de incapacidad e ineficiencia.

En esta lucha, las masas se enfrentan también con las tendencias de derecha que surgen en algunos funcionarios. Las recetas de los gobiernos reaccionarios para superar los problemas económicos que enfrentamos están demasiado metidas en las cabezas de muchos tecnócratas que pierden el sentido de la lucha y confunden el enemigo. No se deben seguir recomendaciones ya fracasadas, como alzas indiscriminadas de precios, como salarios que se mantengan por debajo del alza del costo de la vida, como reducción del gasto público que produzca desocupación.

La falta de algunos bienes que hoy día enfrentamos es una manifestación del éxito de la política económica del Gobierno: se elevó sustancialmente el poder de compra de las masas, lo que provoca una gran tensión en el abastecimiento. Las tareas que estos problemas entregan al pueblo, a los Partidos Populares y al Gobierno, nos obligan a fortalecer la defensa de las divisas, la batalla de la producción; nos obligan a enfrentar los problemas de la liquidez de los precios y de los salarios y a fortalecer el aparato de distribución. Las tareas que surgen son las siguientes:

1° La defensa de las divisas y la lucha antiimperialista es una de las tareas centrales que debemos desarrollar. Nuestra capacidad para importar es tal vez el punto más débil que tenemos para avanzar en la elevación de los niveles materiales de las masas. A estas tareas nos hemos referido anteriormente.

2. La batalla de la producción es una tarea central para elevar la disponibilidad de bienes materiales. Hemos tratado este tema en el punto anterior.

3. El problema de la liquidez debe ser enfrentado dentro del contexto de la política que hemos enunciado. Las fuentes fundamentales de generación de dinero son los gastos del complejo económico estatal que no tienen contrapartida en ingresos correspondientes. Hoy día pueden señalarse cuatro puntos importantes de generación de liquidez:

- el déficit público, donde se incluyen los gastos correspondientes al funcionamiento del aparato administrativo del Estado, cuyos rubros más significativos corresponden a remuneraciones y al desarrollo de las tareas democráticas: vivienda, salud, educación, y a la defensa nacional;

- el déficit de las operaciones de las empresas del área de propiedad social. Este déficit es producido especialmente por un problema de precios. La política del Gobierno ha tendido a controlar los precios de los bienes de consumo masivo o de aquellos que tienen incidencia en ellos:

- requerimientos de inversión del área de propiedad social de corto como de mediano y largo plazo para acrecentar la capacidad productiva del país;

- créditos para el sector agrícola reformado.

Para cada uno de estos aspectos surgen tareas concretas para la próxima etapa:

a) La forma en que tradicionalmente se han resuelto las situaciones que provocan un déficit público considerable tienden a reducir los gastos y por lo tanto las remuneraciones de los funcionarios fiscales, los planes movilizad-

res que producen para demanda de mano de obra, como la construcción y las obras públicas. Creemos que esta no es la solución de los problemas. El Gobierno tiene programas sociales que debe cumplir. A través de ellos el Gobierno controla recursos materiales (cemento, acero, leche, medicamentos) que orienta hacia el proletariado y los trabajadores. Si estos programas no se llevan a cabo esos recursos quedarían a disposición de la burguesía para sus fines suntuarios. Lo anterior no implica descuidar el gasto; por el contrario, se debe tener un severo control de él. Se deben establecer programaciones de gastos de acuerdo a la disponibilidad de bienes que exista; es así como en la construcción de viviendas de programación debe hacerse en base a la disponibilidad real de cemento, fierro o madera. Que no suceda como ha sucedido, que, no habiendo disponibilidad de cemento para el cumplimiento de ciertos programas, se adquiere el resto de los materiales como si el cemento alcanzase para la totalidad. Esto no sólo produce aumentos inútiles en el gasto sino también distorsiones en el abastecimiento de aquellos materiales que se acumulan.

b) El déficit que surge por las operaciones del APS se debe hoy, por una parte, a situaciones de precios. Para resolverlos debemos considerar en forma conjunta el problema de las compensaciones que es necesario realizar en el ingreso de los trabajadores. Por otra parte, las empresas que han pasado al APS lo han hecho en general, en una situación financiera delicada. Los capitalistas las han dejado sin capital de explotación, sin stocks mínimos y con grandes volúmenes de deudas. Ello ha llevado con generalidad a entregar fuertes inyecciones de capital financiero a estas empresas para que puedan trabajar.

c) Una detallada revisión del crédito agrícola se hace necesaria, no tanto para reducir los aportes sino para establecer formas de control en los compromisos de pago y garantizar las recuperaciones.

d) Las inversiones de las empresas del APS son indispensables para garantizar el crecimiento orientado de la economía. Si el Gobierno no realiza estos programas entrega el control de recursos materiales a la burguesía, que no los utilizará precisamente para inversiones productivas sino para especular y consumir bienes suntuarios.

Es necesario considerar los balances materiales, que se deben respetar. La suma de todos los programas de inversión pueden significar requerimientos de recursos más allá de las disponibilidades que existan. Surge aquí con claridad la necesidad de contar con una Dirección y un Plan que compatibilice. La principal restricción que hoy enfrentamos es la disponibilidad de divisas. Por lo tanto, éste debe ser el criterio básico de compatibilización y balance.

Las tareas fundamentales para superar la situación de liquidez se centran por lo tanto, en el aumento de los ingresos y no en la reducción de los gastos. Se centra en la necesidad de obtener ingresos financieros por el Estado. Ingresos líquidos que deben provenir de los grupos que concentran cuotas importantes del ingreso y del consumo material: los capitalistas, los comerciantes, los especuladores y algunas capas profesionales y burocráticas altamente rentadas.

a) La fuente principal de ingresos públicos, el sistema tributario, es extraordinariamente regresivo. El grueso de los impuestos provienen de la com-

praventa y de otras formas de tributos indirectos que afectan principalmente el consumo de los trabajadores. Los impuestos directos también gravan más a los asalariados que a los capitalistas. En el impuesto a la renta, los primeros pagan más en valor absoluto que los segundos.

La gran tarea que se nos presenta aquí es entonces, la lucha por la reforma tributaria. Debemos imponer un sistema tributario que sea coherente con las políticas redistributivas que sostenemos: que paguen más los que tienen más.

b) La evasión tributaria es hoy día extraordinariamente elevada. Ella superó en 1971 al total del déficit fiscal. La gran tarea que enfrentamos aquí es la reducción drástica de la evasión. Esta lucha no puede ser dada en buen pie exclusivamente por los organismos burocráticos del Gobierno. Debe ser fundamentalmente una batalla de las masas centrada en dos objetivos básicos:

- control de la evasión de impuestos a la compraventa, exigiendo las boletas en los almacenes, en las consultas médicas, en las oficinas de los abogados;

- control de los sindicatos en las empresas medianas que permitirán vigilar las rentas y los aportes patronales a la previsión.

c) Debemos trabajar con decisión para elevar sustancialmente el ahorro y captar de esta manera volúmenes mayores de liquidez:

- debemos mejorar las campañas vigentes de ahorro: Car, bonos de la reconstrucción, depósitos de ahorro del Banco del Estado;

- debemos crear nuevas formas de ahorro ligadas a proyectos regionales, al turismo, a la educación, al deporte;

- debemos desarrollar con velocidad formas de ahorro ligadas al consumo de bienes durables, sobre la base de estancos. El estanco automotriz es un buen ejemplo; ha mejorado la distribución y ha permitido captar grandes volúmenes de liquidez.

d) Por último, debemos mejorar la recuperación de algunos préstamos, como los de vivienda, entregando responsabilidades a las organizaciones populares en su cobro, y préstamos del sector agrario.

4. La necesidad de que las empresas del APS obtengan excedentes que les permitan desarrollar los planes de expansión, así como el alza de los precios en el mercado internacional obligan y obligarán al alza de algunos precios de bienes de consumo masivo. La cuarta tarea que surge, por lo tanto, es que las alzas de precios no sean pagadas por los trabajadores, sino por los sectores que hoy concentran mayoritariamente los ingresos nacionales. Esta es una tarea que la clase, sus partidos, las organizaciones de los trabajadores y el Gobierno deben tener muy clara. Toda alza que afecte el nivel de ingresos de los trabajadores debe estar compensada para aquellos estratos más bajos. Las alzas de precios deben ser por lo tanto, discriminadas fundamentalmente en aquellos productos que favorezcan la acumulación por parte del APS y mantengan la rentabilidad del sector privado.

5. El aparato de distribución debe incrementar cualitativamente su eficiencia. La eficiencia sólo la lograrán con una relación intensa con las masas, el área social de las grandes distribuidoras está casi consolidada. Ahora su tarea es la de incrementar los niveles de eficiencia, relacionarse estrechamente con las organizaciones vecinales, sindicatos, Comités de Vigilancia y funda-

mentalmente con las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP). De esta relación debe surgir el tipo de producto que se distribuya y las formas de distribución: a través de centrales de abastecimiento, supermercados en barrios populares y el apoyo masivo al pequeño comercio. En este sentido creemos que DINAC no ha hecho todo lo que debía haber realizado; debe superar problemas administrativos que la llevan a actuar con cierta lentitud en algunas ocasiones; debe ir más al contacto con las organizaciones para orientar su accionar.

Tarea para los próximos meses es que todo lo que es producido por el APS sea mayoritariamente distribuido por empresas distribuidoras del APS, ejemplos como la Distribuidora Nacional de Cemento (DINACEM) deben repetirse. Asimismo, es necesario establecer con los pequeños comerciantes convenios de distribución e incorporarlos a esta batalla.

Sólo en la medida que seamos capaces de trabajar duramente estas tres tareas fundamentales: defensa de las divisas, batalla de la producción y defensa del consumo material de las masas, podremos derrotar al imperialismo y a nuestros enemigos internos. Toda flaqueza o dudas acerca de ellas es un paso que avanza el enemigo. No debemos cejar en el enfrentamiento. No debemos darle un respiro a la burguesía monopólica y latifundista y tampoco al imperialismo.

¡A CONVERTIR LA VICTORIA EN PODER Y EL PODER EN CONSTRUCCION SOCIALISTA!

Santiago, 23-24 y 25 de junio de 1972

Sobre las desviaciones de derecha en el seno de la UP

Tanto en el informe de la Comisión Política como en la discusión del V Pleno de la Dirección Nacional mereció particular atención el análisis de ciertas tendencias de derecha que se dan en el interior de la UP y en especial en la posición del PC respecto de algunos problemas determinados.

La Dirección Nacional ha estimado necesario puntualizar su posición sobre este asunto, a través de este anexo al informe del V Pleno.

A nuestro juicio las principales desviaciones de derecha de la Unidad Popular se expresan en:

1. Una identificación inexacta de los enemigos principales

A partir de los sucesos de Concepción, el PC ha insistido en que los principales enemigos en este período son los "extremistas de izquierda y de derecha". Tal caracterización de los enemigos es inexacta. En primer lugar, porque sobrestima el papel de la ultraizquierda y particularmente del MIR, constituye un obstáculo para el desarrollo del proceso revolucionario y que por tanto se impone la lucha ideológica más intransigente con esos sectores. Los trabajadores por otra parte han puesto en su lugar a la ultraizquierda: constitu-

ye una ínfima minoría de la clase obrera organizada. Pero de allí a considerarla como el obstáculo fundamental hay bastante diferencia. Con ello no se logra otra cosa que exagerar su dimensión, su influencia y dar alas por tanto a su más cara ambición: constituir una alternativa “revolucionaria” a la UP, a la alianza revolucionaria que encabeza la clase obrera.

El “extremismo de derecha” no es hoy día el único ni el más importante enemigo del Gobierno Popular ni del proceso revolucionario. Sobre todo en circunstancias en que los sectores ultras de la reacción se encuentran en una fase de relativo repliegue. Los enemigos principales son el imperialismo, la burguesía monopólica y latifundista, así como sus expresiones políticas más poderosas: el PN, la DR y el freísmo. Contra ellos es la lucha fundamental, sea que hoy día jueguen a la sucesión “constitucional y democrática” del Gobierno Popular, sea que mañana estén por el golpe de estado.

2. Un énfasis en la consolidación de los avances revolucionarios

Este énfasis se da fundamentalmente en la política económica y lo expresa respecto de dos problemas. Por una parte en la tendencia a consolidar el APS, insistiendo en la urgencia de resolver los problemas que existen en su organización, en la ausencia de los trabajadores en la dirección del área, en la falta absoluta de planificación, etc. El MAPU ha planteado desde hace mucho tiempo la gravedad de esta situación. Es este un problema que se hace indispensable encarar, pero al mismo tiempo deben incorporarse con la máxima celeridad al Área de Propiedad Social aquellas de las 91 empresas que permanecen en manos de los capitalistas. Es falsa la alternativa de consolidar o avanzar, se trata de consolidar avanzando.

En segundo lugar, se ve surgir una política en extremo restrictiva en materia de gasto público y de importaciones, pretendiendo resolver por esta vía los agudos problemas monetarios y de exceso de dinero.

Una política de este tipo afecta al nivel de actividad industrial y por tanto tiene efectos negativos en la tasa de empleo y amenaza con retroceder en materia de redistribución del ingreso. La posición del MAPU en esta materia está ampliamente desarrollada en el informe del V Pleno, en el informe económico de la Comisión Política del Pleno, rendido por el compañero José Olavarría, y en la intervención en el Teatro Caupolicán del compañero Secretario General.

Estas posiciones incorrectas en materia económica han sido sustentadas por compañeros del PC y por otros sectores de la UP (PS).

3. El tratamiento a la DC

Durante el período de conversaciones con la DC se ha dado la tendencia a atribuirle a los posibles entendimientos un carácter más permanente, más sólido, de mayores proyecciones, de los que objetivamente podrían alcanzar.

Se abrió paso a buscar entendimientos más que tácticos, estratégicos.

En sectores del PR esa tendencia se observó con mucha claridad. Hubo también expresiones de dirigentes del PC en el mismo sentido.

En todo caso, el desarrollo de los acontecimientos en las últimas semanas han hecho retroceder esas posiciones.

4. La política internacional

Esta cuestión es tratada en detalle en el informe del Pleno.

El PC y sectores influyentes del PS no han ubicado en el imperialismo al enemigo principal, ni han impulsado una política antiimperialista de masas.

5. Una práctica burocrática de masas

Cuestión también analizada con mucho énfasis en el informe del Pleno, como uno de los mayores problemas en la dirección de la UP. Es evidente que la responsabilidad del PC en esta materia es la mayor, tanto en su influencia de masas como por su influencia decisiva en el frente.

Estas son, a juicio de la Dirección del partido, las principales desviaciones de derecha en el seno de la UP.

En la política del PC se observa la presencia de ellas, en menos o mayor grado.

Ha surgido la idea de que las diferencias entre la línea política del MAPU y del PC que hemos anotado tienen en lo fundamental, el carácter de diferencias estratégicas. Se afirma que el PC pretende redefinir el programa de la UP y preparar un giro estratégico. No es esa la posición de la Dirección Nacional. Las diferencias que hemos anotado tienen, en lo fundamental, un carácter táctico. No puede afirmarse que el PC siga una política de corte reformista. Lo que corresponde es anotar esas diferencias, luchar en la UP y en las masas por nuestras posiciones, desarrollar la lucha ideológica en el marco de la UP y garantizar, como lo expresa el informe, la dirección proletaria del frente que pasa por la unidad y el entendimiento de comunistas, socialistas y MAPU. Para el partido, en todo caso, la lucha contra las desviaciones de derecha, que se dan en el seno de la UP, es una condición para asegurar el desarrollo de su línea política.

Dirección Nacional.

Víctor Díaz en la inauguración del Pleno del PC: A cumplir el programa y corregir los errores

(*El Siglo*, 23 de junio de 1972)

Camaradas:

Desde la realización de la última sesión plenaria de nuestro Comité Central, los comunistas chilenos hemos sufrido pérdidas irreparables. Ya no están con nosotros Héctor Corvalán, miembro de la Comisión Política; Cipriano Pontigo, antiguo miembro del Comité Central y diputado por muchos años; Elisa Gayán, Decano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales; y sólo hace unas horas hemos sepultado a Antonio Quintana, artista de la fotografía y comunista de siempre.

Ello vivirán eternamente en los corazones de los comunistas y de todo el pueblo.

Rindámosle homenaje guardando un minuto de silencio en su recuerdo.

Camaradas:

En los últimos días, el sector más reaccionario del país capitaneado por *El Mercurio* y el Partido Nacional se han revolcado de rabia, han destilado su odio ya no sólo contra la Unidad Popular, sino también contra la Democracia Cristiana. Todo esto porque se abre una posibilidad para aislar a la oligarquía y al imperialismo y avanzar en el proceso de cambios revolucionarios.

Queremos colocar las cosas en su verdadero lugar. Hemos tomado nota, y comprendemos perfectamente, que la Democracia Cristiana sigue siendo un partido de oposición y se orienta a seguir siéndolo. Así por ejemplo, aparece unida a la Derecha y a otros opositores en la elección de Coquimbo. Además, está claro que no hay todavía un acuerdo definitivo en materia de vetos a las reformas constitucionales; pero el hecho concreto de que se haya abierto el diálogo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana saca de quicio a los enemigos fundamentales.

Y si no hubiera otros argumentos –que los hay–, esta desesperación muestra la justeza del camino emprendido por la Unidad Popular.

Por otra parte, los grupos de ultraizquierda que le avivan la cueca a los reaccionarios, aparecen un tanto apanuncados después de las elecciones en la Universidad de Chile y en la Central Unica de Trabajadores, cuyos resultados demuestran que eran más ruido que nueces y porque sus maniobras para meterse de contrabando en el movimiento popular les tienden a fracasar.

En los últimos días se ha logrado detener y, más todavía, hacer retroceder, las maniobras dirigidas a modificar la línea de la Unidad Popular, que se expresaron, por ejemplo, en Concepción.

Reafirmar validez del Programa de la UP

En las reuniones del Comité Político Nacional de la Unidad Popular, con la participación del Jefe del Estado, se ha llegado a la conclusión –y no podía ser de otra manera– de reafirmar y confirmar la validez del Programa y de la línea de la Unidad Popular. Se ha producido una significativa modificación en el Gabinete. La prensa reaccionaria se ha esmerado en hacer creer que no habrá cambio de política. Sí señores, no habrá cambio de política en lo que se refiere a llevar adelante el cumplimiento del Programa de la Unidad Popular. Pero habrá, sí, cambios en cuanto a corregir errores propios del curso de un proceso revolucionario. Hemos resuelto en común crear condiciones para incrementar decisivamente la participación de los trabajadores, para enfrentar los riesgos de la inflación, para superar el problema de divisas, para afincar las relaciones del Gobierno Popular con los sectores medios.

Todo lo dicho abre la posibilidad de un golpe de timón, de iniciar una nueva etapa.

En todo esto nuestro partido ha desempeñado su papel. Ha tenido importancia en el surgimiento de estas perspectivas nuestra participación en el debate interno así como el planteamiento público de nuestra línea. En ocasiones surgieron diferencias, pero fuimos capaces de encontrar acuerdos. Es claro, y lo decimos con franqueza y convicción, que todos los partidos de la Unidad Popular han dado su aporte y un rol destacado ha jugado el Presidente de la República.

Los reaccionarios presentan las cosas como si en el seno de la Unidad Popular hubieran chocado dos tendencias, una, encabezada por nuestro partido, que sería partidario de consolidar y paralizar el proceso, de entrar por el camino de la conciliación y otra, encabezada por el Partido Socialista, de carácter extremista.

Esta es una burda caricatura, porque ni nosotros somos partidarios de consolidar paralizando el proceso, ni el Partido Socialista de trasgredir el programa o de adoptar posiciones aventureras.

Consolidar y avanzar

Cuando los comunistas hablamos de consolidar nos referimos por ejemplo, al hecho que en el área social, junto a empresas cuya situación está definitivamente determinada como el cobre, el carbón, el salitre, los Bancos, etc., hay otras allí integradas por la vía de la intervención o requisición y que de hecho se encuentran en una situación jurídica transitoria. Consolidar esto es avanzar y, por tanto, el acuerdo con la Democracia Cristiana que se ha abierto como posibilidad es positivo. Nosotros, comunistas, estamos por echar ade-

lante el proceso. Y consolidando lo ya conquistado, se crean mejores condiciones para avanzar.

El Gobierno de la Unidad Popular es un gobierno revolucionario, que está aplicando de modo consecuente un programa antimonopolista, antimonopolista y antioligárquico.

El cumplimiento integral del Programa Básico de la Unidad Popular, y sólo eso, abre para Chile la perspectiva cierta de su ulterior avance a la construcción del socialismo.

Nuestro Gobierno, que hace sólo 18 meses tomó en sus manos la dirección del país, ha hecho por Chile y los chilenos más, pero muchísimo más que cualquier otro gobierno de la República.

Chile puede levantar hoy su cabeza con mayor altivez. Puede mirar al mundo con mayor dignidad.

El nombre de nuestra patria –la patria de Lautaro, O’Higgins, Balmaceda y Recabarren– figura desde hace año y medio, día a día, en los titulares de la prensa mundial. Chile es hoy noticia, y noticia a 8 columnas.

En este Gobierno está presente, con su sólida estatura, las mil veces heroica clase obrera chilena. Este Gobierno está al servicio del pueblo, al servicio de la inmensa mayoría del país. Y, obviamente, no puede ni debe ser víctima de los vicios que minaron la acción de los gobiernos del pasado. Este Gobierno es diferente y lo ha demostrado.

Encarar los errores

Como señaló el Presidente Allende en su mensaje ante el Congreso Pleno, el pasado 21 de mayo, “el proceso revolucionario que se venía gestando en nuestro país ha irrumpido en todas las esferas, ha penetrado todos los resquicios de la vida nacional”. Y agregaba: “Se ha abierto para Chile una etapa superior de su historia. Más allá de las conmociones del diario acontecer, se vislumbra nuestra nueva sociedad. Yo tengo absoluta confianza en la capacidad del pueblo para construirla”.

No obstante, subsisten deficiencias, errores y debilidades que se han traducido en un relativo deterioro del Gobierno y de la Unidad Popular.

Tales errores o debilidades hay que encararlos teniendo en cuenta la actividad del enemigo. La resistencia de parte del imperialismo y de las minorías privilegiadas es cada vez más dura, desesperada. Se cierra sobre Chile el cerco del capital monopolista. Se bloquean líneas de créditos; se intentó boicotear la renegociación de la deuda externa; se dificulta nuestro comercio exterior impidiendo el acceso a puertos chilenos de flotas mercantes completas; se urden intrigas con los países vecinos; de mil maneras se trata de sembrar la desconfianza respecto de Chile. Y mientras esto ocurre en el exterior, en nuestro país se intenta la defensa de los privilegios recurriendo a las armas deleznable del boicot de la producción, del desabastecimiento artificial, de la especulación desenfrenada, del contrabando antipatriótico.

Quieren crear el caos económico

En sus afanes de provocar el caos económico, por ejemplo, la oposición lanza inescrupulosamente anuncios irresponsables sobre la falta en el futuro de un determinado producto. Crean con esto un clima de incertidumbre, alienan el acaparamiento doméstico, rompen los sistemas de distribución normales, facilitan la especulación y, de hecho, distorsionan el mercado provocando el desabastecimiento real. Así ocurrió con los cigarrillos, cuyo nivel de producción ha aumentado de acuerdo con el crecimiento normal del consumo. Cosa parecida han hecho con el azúcar, producto que ha tenido una existencia en el comercio sensiblemente superior a la de años anteriores. Pero si a decenas de miles de personas se las induce fraudulentamente a comprar en exceso, se hace imposible un abastecimiento normal.

El odio desenfrenado no se detiene ni ante la honra de las personas. El ataque al Presidente de la República y a sus Ministros se ha llevado adelante con una procacidad como jamás se había hecho en el país.

Los reaccionarios defienden sus privilegios. Y como les resulta burdo defenderlos de modo abierto y directo, recurren al expediente de disfrazar la defensa de esos intereses bastardos con los alegatos en pro de una libertad supuestamente amenazada. Eso ha ocurrido con el monopolio del papel. Dijeron que se oponían a esa nacionalización en aras de la libertad de prensa, de los riesgos que implicaría el control social sobre la producción de papel para diarios. Cuando el Gobierno Popular propuso garantías plenas para asegurar un abastecimiento normal a todo tipo de órganos de prensa estableciendo el Instituto Nacional del Papel Periodístico con control sobre la distribución por parte de los propios usuarios, la mayoría parlamentaria rechazó en bloque el proyecto, negó la posibilidad de discutir, con lo que mostró ante el país la baja de la politiquería que los sectores más reaccionarios imponían en la mayoría de los actos de la oposición al Gobierno

Denuncias válidas

En la misma medida en que el carácter de la oposición era determinado por la acción de los grupos fascistas, de los representantes directos de la oligarquía, de los que tienen connivencias permanentes con el imperialismo, este tipo de actitudes se transformó en rasgo común de toda la oposición. Sin embargo –y los hechos nos han dado la razón–, allí coexistían dos tendencias. Por una parte, los que están por echar abajo el Gobierno que encabeza el compañero Allende aún a costa de la guerra civil. Por otra parte, los que enmarcan su acción en la Constitución y la ley. En los hechos, estos últimos ayudaban a los primeros a crear las condiciones del enfrentamiento suicida, mientras permanecían sometidos a su férula. En cambio, cuando aplican –como hoy– una política abierta al diálogo, reciben el ataque y la injuria con virulencia parecida a la que nosotros hemos resistido.

La huida de Marshall a Bolivia y el desparpajo de sus declaraciones, que han servido para poner en evidencia la validez de las denuncias de nuestro

Gobierno sobre los complots que han sido preparados sucesivamente para derrocarlo, han contribuido sin duda a que los sectores democráticos de la oposición recapaciten sobre su rol político, sobre la contribución que objetivamente hacían a la maduración del golpe y sobre la necesidad, entonces, de diferenciarse del fascismo y de los sectores más recalcitrantes de la reacción exterior e interior.

Las fuerzas del pueblo son potentes

Pese a cierto deterioro de la imagen del Gobierno, pese a que temporalmente una parte de la gente que se acercó a nuestras posiciones luego de las primeras medidas del Gobierno Popular haya podido retornar a viejas concepciones, las fuerzas del pueblo son potentes, hay reservas más que suficientes para avanzar. La marcha del 18 de abril en las calles de Santiago fue una prueba de ello. Hizo impacto en los reaccionarios, les bajó el moño a los más enardecidos, hizo pisar tierra a los que sueñan con el derrocamiento del Gobierno.

Cuando las papas quemaban, los obreros de las empresas estatizadas manifestaron abiertamente que no devolverían las usinas, cuando se desencadena la especulación, miles de hombres, mujeres y jóvenes se integran en las JAP, cuando se agudiza la embestida del enemigo, cientos de miles participan en el trabajo voluntario. Todo eso muestra la fuerza y la decisión de combate del pueblo de Chile.

Queda en evidencia que más allá de la Unidad Popular hay gente que está por los cambios, que por sobre la línea divisoria entre oposición y Gobierno hay posibilidades de desarrollar la acción común por el avance del proceso revolucionario.

Es esta situación la que exigía imperativamente superar la crisis en la Unidad Popular y actuar cohesionadamente en base a una línea única, a la línea que se ha mostrado justa en sucesivas victorias.

Desde que verificamos este hecho hemos venido planteando nosotros, el Presidente Allende y los demás partidos de la Unidad Popular, la necesidad de dar un golpe de timón, la necesidad de darles al país y al proceso revolucionario en marcha una conducción económica más adecuada.

Derrotar concepciones estrechas

¿En qué ha consistido el fondo de la crisis?

En nuestra opinión, se trataba del intento de echar abajo la línea que permitió construir la Unidad Popular. Esta línea, que es la que ha abierto paso al proceso revolucionario chileno, hubo de resistir ya antes de 1970 la embestida de las posiciones de la ultraizquierda combinadas con las presiones reaccionarias. Para imponerse, la Unidad Popular tuvo que derrotar concepciones estrechas que limitaban las posibilidades de alianzas de la clase obrera apenas a grupos revolucionaristas de la pequeña burguesía. Esa línea se

abrió paso en los difíciles días de septiembre-octubre de 1970 para obtener el apoyo de la Democracia Cristiana al compañero Allende en el Congreso Pleno, creando así las condiciones para frustrar el golpe de Estado alentado por los círculos más cavernarios del imperialismo norteamericano, que actuaba en connivencia con la reacción chilena.

La esencia de esta línea consiste en la capacidad de definir adecuadamente los enemigos principales y dirigir contra ellos el golpe más duro transformando a la clase obrera, en base a la unidad socialista-comunista, en una fuerza capaz de hacer y conducir alianzas, en una fuerza capaz de tomar en sus manos las reivindicaciones legítimas de todo el pueblo.

Sólo así es posible ganar aliados, o al menos neutralizar a los sectores del pueblo que no es posible unir y generar una correlación de fuerzas favorables al pueblo, crear las condiciones para que éste reúna más fuerzas que sus enemigos.

Esta línea es la que está condensada, desde el punto de vista de la estrategia como de la táctica adecuada a la situación histórica chilena, en el Programa Básico de la Unidad Popular.

Y contra ella se embiste desde la Derecha y desde la ultraizquierda.

Así por ejemplo, en lo ocurrido en Concepción estaba en juego la vigencia misma de los postulados programáticos de la Unidad Popular.

El Programa establece de modo taxativo el reconocimiento de los derechos de la oposición que se ejercen en los marcos de la ley. Esta no es una concesión graciosa. Digamos francamente que el país no nos entendería si actuáramos de otra manera, y en vez de ser mayoría nos transformaríamos en minoría. No cabe duda de que el respeto de los derechos de la oposición que se ejerzan dentro de la ley, da mayores fuerzas al Gobierno para golpear firme, para impedir que se siga sobrepasando la legalidad. Y se conoce bien nuestra opinión de que el Gobierno Popular no actúa con suficiente firmeza cuando la oposición pasa a este terreno.

Contra los calumniadores, contra los que día a día alientan la sedición y el golpe, se debe actuar de modo ejemplarizador. Se debe actuar como se hizo anteayer con Mario Carneyro, Director de "La Segunda". Hay que procesarlos y enviarlos a la cárcel. Por mucho menos en el pasado, periodistas de izquierda fueron encarcelados sin proceso. No se debe andar con paños tibios. La autoridad debe ser ejercida con energía en resguardo de los superiores intereses de la patria. Y repugna a la conciencia democrática de los chilenos que los jueces hayan dejado en libertad a Carneyro.

Política aventurera

Pero, en Concepción, el MIR arrastró a sectores de la Unidad Popular a negar derechos que se ejercen dentro de la ley, pretendiendo que esto sería lo revolucionario. Peor aún. Allí los ultraizquierdistas del MIR junto con imponer al movimiento revolucionario su política aventurera y provocadora, intentaron dividir la Unidad Popular. Para que no quede duda alguna acerca de

esta afirmación, citaré planteamientos contenidos en documentos internos del grupo ultraizquierdista.

Los miristas confiesan sus propósitos diciendo que sus objetivos inmediatos incluyen: “hacer evidente el fracaso de la política de la Unidad Popular a los ojos del conjunto de la Izquierda y de las masas”. Agregan: “que debe vencerse a los trabajadores que bajo la conducción de la Unidad Popular no existe para el pueblo más salida que el estancamiento, el retroceso, la conciliación abierta y, finalmente, la derrota”.

Sostienen que: “la única alternativa es levantar un polo de reagrupación política, ideológica y de masas”. Y se solazan expresando que “nuestro aislamiento anterior ha sido roto y superado en una medida importante. La Izquierda Cristiana ha asumido posiciones radicalizadas, acercándose bastante a nosotros. El Partido Socialista ha manifestado signos de endurecimiento y radicalización significativa”.

Esta es la esencia de la política que se trató de llevar adelante en Concepción. Y es también el contenido esencial de los documentos suscritos en esa provincia por algunos partidos de la Unidad Popular con el MIR.

Las directivas nacionales de los partidos que en Concepción actuaron en consuno con el MIR en contra de los comunistas y, en los hechos, contra el Gobierno del Presidente Allende, desautorizaron públicamente la actuación de sus dirigentes regionales de Concepción. Este es un hecho positivo. Lo hemos valorizado en la forma debida.

Nos oponemos a todo intento de división

Ahora bien, fue a ese intento suicida para el proceso revolucionario chileno, al que los comunistas nos opusimos y nos oponemos tenazmente.

A ese intento de dar por liquidado el Programa de la Unidad Popular y por fracasado el Gobierno del Presidente Allende, es al que los comunistas nos oponemos tenazmente.

Es al intento de división de las filas populares al que los comunistas nos oponemos tenazmente.

Es a la pretensión de reemplazar la dirección política de la Unidad Popular a lo que los comunistas nos oponemos tenazmente.

Todas las fuerzas de la Unidad Popular han sacado sus propias experiencias de lo ocurrido en Concepción.

Para nosotros, comunistas, se trata ante todo y sobre todo, de reafirmar la unidad socialista-comunista así como de toda la Unidad Popular en torno al Programa comprometido ante el pueblo y al Gobierno del Presidente Allende.

Y en función de ello valorizamos altamente la declaración de la Comisión Política del Partido Socialista en relación con los acontecimientos de Concepción. Señalaron los camaradas del Partido Socialista: “Por encima de cualquier consideración, es la unidad de la clase obrera expresada en el entendimiento leal y permanente de socialistas y comunistas, la mejor barrera contra la sedición derechista y el mayor impulso a la revolución chilena”.

Unidad socialista-comunista, piedra angular

Por nuestra parte, los comunistas consideramos como piedra angular de nuestra política la unidad socialista-comunista y, partiendo de ella, el entendimiento leal y fraterno con todos nuestros aliados de la Unidad Popular.

La unidad de las fuerzas antimperialistas y antioligárquicas no hubiera sido posible si socialistas y comunistas hubiésemos marchado por camino divergentes. Y la necesidad de atraer nuevas fuerzas al cauce del pueblo para hacerlo cada día más ancho y caudaloso, más fuerte y capaz de sortear los escollos, de derrotar al enemigo y de realizar el Programa sólo puede materializarse si la unidad socialista-comunista se consolida y desarrolla sobre una base de clase y de principios. Desde este punto de vista declaramos enfáticamente que no haremos nada sin los socialistas y, mucho menos, contra los socialistas.

Con el Partido Socialista hemos sostenido conversaciones acerca del estado de nuestras relaciones. Y hemos constatado el interés común por desarrollarlas. En general son buenas, y en la cúspide mejores. Pero, ciertamente, surgen problemas en uno o en otro lugar que dificultan el proceso. Hemos resuelto que dirigentes nacionales bajen conjuntamente para superar las dificultades donde aparezcan.

Estamos convencidos que una política de unidad presupone la línea independiente del proletariado como un factor unitario, y la lucha contra toda concepción errónea dentro de la coalición. Precisamente por ello es que hemos llamado la atención sobre lo que ha dificultado el proceso y consecuentes con esta posición de clase hemos sido francos y categóricos al señalar con alarma que se había producido una crisis en la Unidad Popular.

En este proceso revolucionario están permanentemente presentes dos tipos de riesgos: el del aventurerismo y el del reformismo. Uno u otro pueden ser alternativamente el principal.

En todo caso es claro que para enfrentarlos y derrotarlos, lo decisivo es la acción de la clase obrera y por ello su unidad política que en nuestro país se expresa esencialmente en la unidad socialista-comunista.

Responsabilidad ante el pueblo

Valoramos el hecho que con honestidad política y consciente de su responsabilidad ante el pueblo y la historia, la Unidad Popular al debatir los problemas atingentes a la conducción revolucionaria, haya dejado constancia de su especial preocupación por la existencia de abiertas manifestaciones de actuaciones espontaneístas, de indisciplina laboral, administrativa y política.

En estos aspectos se expresa el reformismo traducido en la tendencia al acomodo al aparato estatal burgués, a la mantención de normas de funcionamiento de los servicios públicos impuestas por los reaccionarios que reflejan desprecio por las masas populares y sus necesidades, a la ausencia de un espíritu de sacrificio verdaderamente revolucionario de muchos cuadros de mandos medios, a una insuficiente perseverancia en el combate por una mo-

ral de nuevo tipo que termine definitivamente con los vicios que caracterizaron las administraciones del pasado.

Todo esto influye en la lentitud para aplicar el Programa de la Unidad Popular.

En el pacto de la Unidad Popular todos los partidos suscribimos que “las fuerzas populares declaran su decisión de evitar absolutamente la parcelación y el establecimiento de zonas de influencia en las diversas reparticiones de la administración pública”. Y comprometimos un trabajo conjunto y “con las organizaciones sociales de los trabajadores y del pueblo interesados en el área respectiva. Esta forma de funcionamiento –dijimos– garantizará la adecuada y oportuna atención a los problemas, la eficiencia de la administración y la prontitud de las decisiones”. Pero esto no ocurre suficientemente en la práctica.

Todos los partidos de la Unidad Popular han estado conscientes en esforzarse por superar estos hechos, homogeneizar su acción común y resolver unitariamente los problemas que surgen en la marcha del proceso revolucionario.

Impulsar asambleas comunales de la UP

El reforzamiento de la Unidad Popular es un deber de esta hora. Nuestro partido toma en esta Sesión Plenaria el compromiso de impulsar con toda energía la realización de las asambleas comunales de la Unidad Popular en el curso del mes de julio para cumplir, enseguida, el itinerario de asambleas provinciales para culminar en la Asamblea Nacional de la Unidad Popular que se debe realizar a fines de septiembre como lo ha resuelto su Comité Político.

Una de las tareas planteadas en la Declaración de “El Arrayán”, a comienzos de este año, es completar la formación del área social y integrar en correlación con ella el área mixta de la economía.

Los comunistas consideramos que el establecimiento del área social de la economía surge en razón del conjunto de las luchas de la clase obrera y del pueblo, como un asunto suficientemente maduro para que lo aborde y lo solucione nuestra patria.

La contradicción antagónica de los imperios de los Edwards, Yarur, Sumar y otros clanes financieros con los intereses nacionales no tiene otra salida en favor de nuestro pueblo que la supresión desde las raíces de la dominación industrial y bancaria de esos monopolistas.

Supresión de la dominación de los monopolistas

Los comunistas no desalojamos la posibilidad de que, al producirse un consenso abrumadoramente mayoritario en favor del área social de la economía y en contra de la dominación de los monopolistas, se esté en condiciones de aprobar una legislación al respecto, incluso en un Parlamento en

que la Unidad Popular no cuenta con mayoría. Tenemos presente las experiencias de la derogación de la Ley Maldita, de la Ley de Reforma Agraria y de la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre. Ellas nos indican que lo primero y lo principal es el movimiento popular, la batalla de las masas, la definición combativa de la clase obrera y de grandes contingentes democráticos y, cuando se hace evidente el pronunciamiento mayoritario, no faltan los mecanismos políticos para traducirlos en normas legales.

Para despachar la nacionalización de la Gran Minería del Cobre, el Gobierno del Presidente Allende debió atender las indicaciones formuladas en el Senado por el Partido Demócrata Cristiano. Muchas de ellas diferían substancialmente del texto original y algunas se incorporaron a él, modificándolo. Otras se consideraron para fórmulas jurídicas nuevas, que tenían en cuenta los criterios diferentes. Lo importante era que se coincidía en hacer efectiva la nacionalización y en los propósitos de abordar el cálculo de las presuntas indemnizaciones. Se obtuvo acuerdo, y los derrotados fueron los imperialistas norteamericanos.

¿Por qué no puede llegarse con dignidad y actuando responsablemente, a una solución parecida en lo tocante a que Chile cuente con un área social de la economía?

Los comunistas consideramos que es posible. Y consideramos que se puede evitar que los reaccionarios que quieren un enfrentamiento con el Gobierno Popular sumiendo a Chile en un baño de sangre para defender los intereses de los potentados textiles, los banqueros, y los de su catadura, saquen la castaña con la mano demócratacristiana. Por ello, combinando la acción de masas y el diálogo nos esforzamos por hacer realidad un posible acuerdo.

La táctica de la reacción

Una de las tácticas a que recurren los defensores de los monopolios es la de tejer intrigas, especulando con supuestos detalles de un acuerdo que aún no está elaborado, con vistas a hacerlo imposible al magnificar diferencias y desatar querellas prematuras. Sin embargo, su juego es demasiado grosero y se desenmascara por sí mismo.

Por ejemplo, se hace cuestión sobre el planteamiento demócratacristiano de la denominada "empresa de trabajadores". ¿Qué hay sobre esto? Hasta hoy día, el Partido Demócrata Cristiano no ha definido con precisión lo que entiende por empresas de trabajadores, así como tampoco los alcances exactos de lo que califica como socialismo comunitario. Los comunistas no estamos en contra de los términos, no peleamos por palabras. Pero por lo mismo que están involucrados en estos asuntos los intereses vitales de la clase obrera y del pueblo, esclarecemos posiciones y defendemos las cuestiones de principios.

Y si es posible, como todo lo indica, que se cautelen los intereses de la clase obrera y que a través de las llamadas empresas de trabajadores no se pretenda transformar a los trabajadores en capitalistas, ni negar el concurso de esas empresas al desarrollo del país, podemos llegar a acuerdo.

Aplicando una política correcta

No sabemos si fructificará el acuerdo para aprobar los vetos del Presidente Allende a las disposiciones transitorias de la reforma constitucional y, legalizar el establecimiento del área social de la economía. Muchos obstáculos son los que todavía deberán vencerse. A la presión reaccionaria se ha sumado la acción de zapa del sector de derecha de la Democracia Cristiana que, a través del señor Moreno o del señor Zaldívar, pretende crear un clima irrespirable que frustre el diálogo, usando el diario *El Mercurio* como tribuna o presentando un proyecto de reforma constitucional que enfrente a la Democracia Cristiana y a la Unidad Popular.

Pero si bien no podemos estar seguros de que cristalice el acuerdo, de lo que sí estamos seguros es de que estamos aplicando una política correcta, una política leninista, que entiende la necesidad de los compromisos que ayudan al avance del movimiento obrero y popular. Decía Lenin: “rechazar los compromisos “por principio”, negar la legitimidad de todo compromiso en general, cualquiera que sea, constituye una puerilidad que incluso es difícil tomar en serio. . . Hay compromisos y compromisos. Es preciso saber analizar la situación y las circunstancias concretas de cada compromiso o de cada variedad de compromiso. . . Todo proletario gracias al ambiente de lucha de masas y de acentuada agudización de los antagonismos de clase en que vive, observa la diferencia existente entre un compromiso impuesto por condiciones objetivas, compromiso que en nada disminuye la abnegación revolucionaria”. Y este criterio leninista es compartido por socialistas y comunistas y si, en ocasiones, surgen o pudieran surgir diferencias al respecto, ellas se referirán al carácter del compromiso.

Además, de lo que también estamos seguros es de que fructifique o no el acuerdo, el pueblo de Chile cumplirá con el anhelo de constituir el área social, no aceptando de ninguna manera que los Edwards, Yarur, Sumar y otros pulpos vuelvan a aposentarse en sus monopolios.

Y eso se conseguirá tanto o más rápidamente si somos capaces de perseverar en los esfuerzos por aislar a los enemigos fundamentales, por conseguir alianzas aunque sean temporales y hasta parciales en favor de los objetivos patrióticos que se ha propuesto el pueblo.

Dentro de los cambios que se abren paso, figura la necesidad de darles al aparato estatal, al Gabinete y al Comité Económico las responsabilidades principales en la conducción política, económica y financiera del Gobierno.

Como se sabe, nosotros propusimos al Presidente el reemplazo de los camaradas Américo Zorrilla y José Oyarce, que pusieron lo mejor de sí durante dieciocho meses en las tareas del Gobierno Popular. Los reemplazan los camaradas Orlando Millas y Mireya Baltra, que actuarán con la misma dedicación y afán patriótico y revolucionario. Junto a ellos continuará en el gabinete nuestro camarada Pascual Barraza. Los camaradas Zorrilla y Oyarce han reasumido tareas de la Dirección del partido.

El cambio de Gabinete no es simplemente el cambio de cinco o seis hombres, sino parte integrante del esfuerzo por resolver de una vez por todas los

problemas de conducción política y de conducción económica únicas, cuya ausencia ha dificultado la aplicación del Programa, ha puesto al Gobierno en situaciones complejas que han facilitado las maniobras del enemigo por debilitar las posiciones de la Unidad Popular.

Más responsabilidades para la clase obrera

En este sentido es indispensable que se establezcan claramente compromisos de respeto a la línea jerárquica en la administración, lo que no es en absoluto antagónico con la elaboración colectiva y la participación democrática de los trabajadores.

El cambio de Gabinete está llamado a generar las condiciones prácticas para poner en marcha una política única de base a la línea común definida por el Programa y, al mismo tiempo, a elevar decisivamente la participación de las masas populares en el ejercicio real del poder.

Como ha señalado el camarada Orlando Millas en el medular artículo publicado en *El Siglo* el lunes 5 de este mes, “el asunto primordial en el proceso revolucionario chileno consiste, en la actual coyuntura, en que la clase obrera asuma, en él, el papel que históricamente le corresponde. No se trata de que la clase obrera desarrolle una acción que la encierre en sí misma y la constituya en un estamento con criterios egoístas, sino de que reagrupe junto a ella a todas las fuerzas interesadas en el progreso, lo cual exige que apoye resueltamente las reivindicaciones legítimas y los derechos democráticos de cada una de las clases y capas sociales susceptibles de interesarse en la lucha antimperialista y antioligárquica”.

La clase obrera ha probado en las elecciones de la CUT sus capacidades revolucionarias. Más del 70% de los trabajadores organizados en la Central Unica votaron por los Partidos de la Unidad Popular. Y si nos referimos al proletariado, a los trabajadores vinculados directamente al proceso productivo, ese porcentaje es superior al 90%. En esas elecciones nuestro partido recibió un respaldo mayoritario que hoy reconocen todos los sectores. Continuará dirigiendo la Central Unica de Trabajadores nuestro compañero Luis Figueroa, quien hoy, por feliz coincidencia, cumple 50 años de vida. Lo saludamos cariñosamente en nombre de sus compañeros del Comité Central del partido.

La mayor parte de los Consejos Provinciales de la Central Unica serán encabezados y prácticamente todos serán dirigidos por integrantes de la Unidad Popular. En la totalidad, la Unidad Popular es sólida y abrumadora mayoría.

Con todo, en algunos sectores provoca inquietudes el hecho de que la corriente demócratacristiana haya alcanzado un porcentaje significativo acumulando en su lista la votación de toda la oposición. No obstante, si esta corriente actúa, como es de esperar, de modo unitario y de acuerdo con los intereses de los trabajadores, su presencia será positiva. No cabe duda que mucho más serio sería si hubiera en nuestro país centrales paralelas como ocurre prácticamente en todos los países capitalistas, inclusive en aquellos que tienen un movimiento obrero desarrollado, como los de Francia e Italia. Estamos convencidos de que por encima de todo se abren condiciones para una

unidad mayor de los trabajadores en el seno de la Central Unica, lo que acrecienta las posibilidades revolucionarias de la clase obrera.

En efecto, el país necesita que la clase obrera asuma mayores responsabilidades de poder, mayores responsabilidad en la conducción de todo el proceso. La suerte del Gobierno Popular está indisolublemente ligada a la decisión que sea capaz de generar en la clase obrera y el pueblo de jugarse a fondo por los grandes objetivos revolucionarios.

Del predominio oligárquico e imperialista del pasado hemos heredado duras insuficiencias y gravísimos problemas. Estas son las causas de la revolución y darles soluciones reales es la obligación de la revolución. Los reaccionarios, por una parte, los ultraizquierdistas, por otra parte, cogen estos problemas y proponen, y a veces arrastran a ciertos sectores del pueblo detrás de soluciones falsas. La obligación de los comunistas y de toda la Unidad Popular es tomar en sus manos esos problemas para darles soluciones reales en base a la acción de las masas, abriendo camino para que el propio pueblo resuelva y construya.

Camaradas:

Hay que pasar del dicho al hecho y buscar el entendimiento de todas las tendencias para materializar la participación sin enmarcarse de manera dogmática al convenio CUT-Gobierno.

La batalla de la producción

En el curso del Gobierno Popular grandes grupos de trabajadores se han empeñado en el aumento de la producción, en la proposición de iniciativas que contribuyen a elevar la productividad del trabajo y todo esto ha sido sin duda un gran aporte al desarrollo y a la consolidación del proceso. Pero no cabe duda de que todo lo hecho es aún insuficiente, que las iniciativas valiosas que nacen en una u otra empresa no se popularizan, no se desarrollan con vistas a generar una nueva situación de la clase obrera en el proceso de trabajo, y al cabo de un tiempo mueren y se vuelve a la vieja situación, donde el obrero se siente explotado.

En esto influyen muchos factores. Entre otros, el hecho de que pese a nuestra insistencia reiterada los medios de comunicación de masas no juegan aún su papel de contribuir a ganar la conciencia de los trabajadores, a elevar la moral de la clase obrera y del pueblo, a reconocer, más que en líderes o caudillos, en los trabajadores a los verdaderos protagonistas de la historia. A este respecto, hay que decir que en esta faceta de la lucha ideológica el enemigo nos lleva mucha ventaja.

Pesa también, sin duda, el que ciertos interventores de empresas, hasta podríamos decir la mayoría, se comportan como los anteriores gerentes capitalistas, se adaptan a los viejos procedimientos que han tenido su origen en la dictadura burguesa y se muestran incapaces de generar una nueva disciplina que debe ser rigurosa, pero consciente.

Consideramos que este Pleno debe resolver que los interventores que militan en nuestro partido y cada célula de empresa del área social inicien, con su ejemplo, la generación de un modo de conducirse diametralmente opuesto. Debe informarse a la asamblea de los trabajadores sobre la situación real de la empresa, las cifras concretas de producción, las verdaderas condiciones financieras para elaborar en conjunto con la clase obrera planes y metas estudiados científicamente, de modo que en el cumplimiento del plan cada obrero se sienta partícipe de la tarea común.

Sobre la base de estas condiciones nuevas será posible ganar a la clase obrera, en su conjunto, para superar el reivindicacionismo, el economicismo y otras manifestaciones de desproletarización que hoy se manifiestan y que surgen de las condiciones objetivas en que se desarrolla el trabajo en las empresas del área social.

Sería ingenuo pensar que las contradicciones entre la administración y los trabajadores desaparecen por el solo hecho de traspasar la propiedad de manos de los monopolistas a manos del Estado. De hecho, los sindicatos deberán continuar asumiendo la responsabilidad de representar a sus asociados ante la administración. Si ésta se ejerce de manera burocrática, como hoy ocurre a menudo, tales contradicciones se agudizarán, se harán antagónicas, tenderán a hacerse insolubles. Si, por el contrario, la administración se ejerce democráticamente, todos los problemas serán superables en base a acuerdos y en estas condiciones el sector de obreros de una empresa determinada se sentirá integrante de la clase en su conjunto y planteará sus reivindicaciones teniendo en cuenta no sólo sus intereses particulares sino los de todo el proceso revolucionario.

Si sobre la base de los cambios de estructura no se aborda la solución de viejos problemas como el de las alzas de precios, el de la inflación o el de la cesantía, que han martirizado a nuestro pueblo en las condiciones del capitalismo y contra los cuales sostuvimos una larga lucha como partido de clase obrera, no podemos exigir plena comprensión de la clase obrera y del pueblo de nuestra política.

La participación

La batalla por la producción sigue a la orden del día y en particular allí donde ha cambiado la estructura de la propiedad. En este terreno todo es importante, pero hay tareas centrales, grandes tareas nacionales que deben conmover a todo el pueblo, en las que los comunistas debemos empeñarnos de preferencia.

Se trata, en primer lugar, de la batalla por la producción del cobre. Para nacionalizarlo nos enfrentamos abiertamente con el imperialismo norteamericano. Este enfrentamiento no ha terminado. La dependencia política y económica del pasado generó una dependencia tecnológica que hoy pretende ser usada por los monopolistas para perjudicar el proceso revolucionario chileno, cortando suministros de máquinas y equipos, de diversos productos necesarios para la marcha normal de las empresas. El imperialismo ha pretendido,

por ejemplo, impedir la adquisición de palas mecánicas indispensables para la explotación de Chuquicamata. De modo parecido ha actuado cuando hemos tratado de obtener camiones pesados. En materia de repuestos, se desarrolla un boicot sordo de parte de las empresas norteamericanas que intentan provocar el daño pero ocultar su responsabilidad, para evitar la indignada reacción patriótica de nuestro pueblo.

Para abrir paso a soluciones se requiere de un estilo diferente de la dirección de las empresas y de los organismos estatales vinculados al cobre. Hay que erradicar toda manifestación de tecnocratismo que es, a la postre, una manifestación de reformismo, un reflejo de desconfianza en el proletariado. Si los problemas reales se plantean a las masas, serán centenares los trabajadores que harán sugerencias, que tomarán en sus manos la solución concreta de problemas también concretos. Si tales problemas se plantean abiertamente al país, de nuevo serán miles los que se sentirán comprometidos y aportarán con su esfuerzo.

En las minas de cobre han surgido manifestaciones graves de indisciplina social. Paros sucesivos han perjudicado la producción en Chuquicamata. Un grupo de provocadores paralizó durante diez días el Departamento de Mina en Sewell. En uno y en otro caso nosotros, comunistas, fuimos contrarios a cualquier forma de coerción contra los trabajadores, porque estamos convencidos de que estas manifestaciones de indisciplina tienen sobre todo sus orígenes en la insuficiente participación de los trabajadores en la dirección de la empresa, en el insuficiente trabajo de los partidos revolucionarios en el seno de las masas, más que en el peso de las deformaciones que el capitalismo ha logrado introducir en esos destacamentos obreros.

El lastre de la oligarquía

El país enfrenta dificultades de divisas que los reaccionarios internos y del exterior se esfuerzan por agudizar. Se sabe que recibimos el país con un endeudamiento cercano a los cuatro mil millones de dólares con obligaciones de pago recargadas en los años 1971, 1972 y 1973. A esto se suma el boicot a los créditos a Chile que lleva adelante el imperialismo norteamericano. Ha influido, sin duda, en la agudización del problema la baja del precio del cobre y la devaluación del dólar. Pesa en el agravamiento de esta situación el estado de dependencia en que dejaron al país los gobiernos oligárquicos y burgueses. El sentido antinacional de la oligarquía significó un pesado lastre. Un solo ejemplo: cada año estábamos obligados a importar más de siete millones de dólares en aceites básicos, cuando la planta para reemplazar el producto importado significa una inversión de sólo catorce millones de dólares, vale decir, se paga totalmente en dos años. Pero para la oligarquía importaba más el interés de los monopolios como Shell, Esso o Copec que el interés de nuestro pueblo.

Pero los revolucionarios hemos llegado al Gobierno precisamente para superar estos problemas y aunque es nuestro deber denunciar con energía la responsabilidad de las viejas clases dominantes, más importante es que seamos

capaces de desarrollar un gran movimiento de masas para enfrentar estos problemas.

Se impone una batalla de todo el pueblo para desarrollar la producción exportable y, a la vez, para producir en Chile parte de lo que ahora se trae desde el extranjero.

Hay que desarrollar toda suerte de iniciativas para evitar que se malgaste hasta en la mínima proporción cualquier producto que estemos obligados a importar.

Si hemos de hablar con franqueza, debemos decir que ante estas tareas hay la tendencia a pensar de modo antiguo, a asumir una actitud burocrática, a soñar con préstamos del exterior, en vez de poner el acento, primero, en nuestras responsabilidades. Es claro que no estamos solos. Que el imperialismo no puede ahogarnos o hacer lo que se le antoje. Junto a nosotros está la Unión Soviética y demás países socialistas. Pero nuestro proceso revolucionario no se consolidará sino a condición de integrar a nuestro pueblo en la lucha por la solución de sus problemas y la ayuda de los países amigos rendirá frutos sobre esa base y sólo sobre esa base.

Desde hace muchos años la compra obligada de productos agropecuarios en el extranjero se ha traducido en una pérdida de divisas muy grande. La responsabilidad de esto recae sobre los hombros de los terratenientes que hicieron del campo chileno una zona atrasada y miserable. Una sola cifra muestra el daño que hicieron a Chile. En 1945 el consumo de carne per cápita era en nuestro país de 52,7 kilos anuales. En 1970 había bajado a 29,2 kilos. Vale decir se trata de un problema de muy larga data que sólo la Unidad Popular ha empezado a resolver.

Hacer rendir la tierra

Hoy el gran latifundio ha sido prácticamente erradicado y en las actuales circunstancias la acción de masas que se pone a la orden del día es, antes que contra el antiguo propietario, por la producción, por la toma de posesión rápida de los fundos expropiados y por la puesta en marcha de esos predios.

El Gobierno Popular ha decidido la importación de más de 5.000 tractores. Sólo una política de masas podrá garantizar que esos equipos y esa inversión le rindan al país.

Esto no lo puede resolver un equipo administrativo eficiente y, mucho menos, uno burocrático. Sólo tiene solución si participan miles de trabajadores, si se empeñan centenares de jóvenes, si también centenares de obreros enviados por sus sindicatos apoyan con su experiencia a los campesinos y materializan en los hechos la unidad obrero-campesina como factor revolucionario.

El papel del sector privado

En la batalla por la producción juega ciertamente un rol importante la clase obrera que permanecerá en el sector de propiedad privada. Las condiciones de

nuestro país, donde existe un número tan elevado de pequeños y medianos productores capitalistas, necesitan la mantención de la operación del sector privado de la economía en las condiciones del Gobierno Popular. Aunque parezca lo contrario es contrarrevolucionario pretender reemplazar por empresas socializadas –que requieren cuadros técnicos y nueva organización de la producción– la producción que realizan tales empresas porque el desarrollo del proceso productivo en ellas es suficiente para garantizar una socialización efectiva.

El Gobierno Popular por tanto debe dar plena garantía a ese sector de propietarios, transformarlos en aliados del movimiento popular y convencerlos, en base a medidas prácticas, de la necesidad de colaborar a la solución de los problemas del país, haciéndoles patente las ventajas que implica la eliminación de la concentración monopólica privada y su reemplazo por el área social de producción, que no ve contradicciones entre el desarrollo de su producción y la de sectores de propietarios pequeños y medianos, porque hoy la medida no es el afán de lucro sino la atención de los problemas del pueblo, para lo cual todo es necesario.

Aclarados estos criterios, interesa a todo el pueblo que los obreros y empleados del sector privado tengan acceso a los estudios de costos, de gastos generales, de proyectos de inversión, de planes de producción para firmar sobre estas bases convenios de producción y salarios, de modo tal que el esfuerzo de los trabajadores y el aumento de la producción beneficie al país entero, a los obreros interesados, y no sólo al capitalista.

Los adversarios del Gobierno han ganado terreno en estos sectores de propietarios pequeños y medianos por la política errónea de tomas de pequeñas y medianas industrias, tras el planteamiento de estatización. Nosotros planteamos que somos partidarios de regularizar la situación de estas empresas intervenidas, incluso devolverlas a sus propietarios, salvo casos especiales, o decidir, cuando corresponda, su traspaso al área mixta. Estimamos también que debe desenvolverse ampliamente la ayuda técnica y crediticia a este sector en base a convenios de precios, conocidos por los obreros, garantizados por su trabajo y por su actitud vigilante.

Abordar los problemas del país con este estilo es parte indispensable del golpe de timón que la Unidad Popular se propone dar. Se trata de un estilo que ha probado en la práctica su eficiencia. Es la concepción de masas que se ha materializado en las Juntas de Abastecimiento y Precios y que ya ha rendido sus frutos.

Nuestros enemigos, inspirados tan sólo por el odio al Gobierno Popular, pretendieron boicotear el consumo de merluza usando toda suerte de argumentos anticomunistas. Todos los Centros de Madres, las Juntas de Vecinos se movilizaron y se hizo trizas la campañas de los antipatriotas.

No obstante, siguen presionando sobre el país problemas de abastecimiento. Los gobiernos burgueses los resolvían con cesantía, bajando los salarios, generando así una forma de racionamiento en perjuicio directo de los pobres. Hoy, cuando el Gobierno Popular quiere enfrentarlos de distinta manera, los reaccionarios desatan la especulación, el acaparamiento, el contrabando. Y para dejar impunes estos delitos y arbitrariedades, combaten las Juntas de Abaste-

cimiento y Precios. Pero las JAP se desarrollarán y nuestro partido debe seguir poniendo en ello el máximo empeño. Las JAP surgieron como forma natural de defensa del pueblo y de los comerciantes minoristas para resolver los problemas de la distribución. Deben cumplir con su papel actuando de consuno con los comerciantes, sin pretender reemplazarlos, y el griterío de los reaccionarios quedará en eso.

Aplicar una línea de masas

Si todos los partidos de la Unidad Popular actuamos unidos en la aplicación de la línea de masas que nos ha dado victorias, si somos capaces de erradicar las trasgresiones al Programa o las vacilaciones en su cumplimiento, haremos de veras irreversible el proceso revolucionario chileno. Apuntando contra los enemigos principales, actuando con flexibilidad para desarrollar la acción común con los que están por los cambios aunque difieran de nosotros, podremos reinvertir la tendencia a cierto deterioro que veníamos observando.

Esta línea asegura el avance de la revolución chilena, algunos sectores se empeñan por presentar nuestros esfuerzos de consolidar el proceso sobre la base de medidas como las propuestas como contradictorio con el desarrollo de la revolución. Nada más falso que una apreciación como esta. Es claro que no hay revolución sin avanzar, pero no se puede avanzar sin consolidar.

Este Pleno del Comité Central ha sido convocado para poner en tensión todas las fuerzas del partido, para actuar más decididamente desde posiciones de principios en la lucha por la línea de la Unidad Popular, en la lucha por el cumplimiento del Programa, en el respaldo combatiente al Gobierno Popular.

Cumplir cada tarea para salir adelante

Cada militante de nuestro partido, cualesquiera sean su ubicación y la magnitud de sus responsabilidades, debe cumplir con sus deberes revolucionarios más y mejor que antes, para superar en definitiva el período crítico por el que atravesamos.

Está en plena preparación el 7° Congreso de las Juventudes Comunistas, que debe contar con todo el apoyo del partido. Vemos con satisfacción que la querida Jota realiza su torneo con el espíritu que exige la situación presente. Lo expresan así en su Convocatoria: “la gigantesca tarea que cumple el pueblo plantea un gran desafío y nuevas responsabilidades a la juventud chilena. Se trata de un compromiso con la Patria, con la liberación, con el avance hacia el socialismo”. Los jóvenes comunistas trabajan consecuentemente con la línea unitaria que ha elaborado el partido. Por eso, son capaces de ver que “la juventud en su gran mayoría no tiene ataduras con la vieja sociedad, no se siente identificada con el régimen capitalista, aspira a un orden más justo y humano, quiere una sociedad verdaderamente democrática y está dispuesta a contribuir a conquistarla”.

Y haciendo pie en estos valores de la juventud, generan un gran movimiento de masas que se vuelca en el trabajo voluntario, que los impulsa a cumplir las tareas más difíciles, los trabajos de mayor sacrificio, las acciones más esforzadas que demanden la Patria y nuestra revolución.

Llamamos al Comité Central, a los cuadros experimentados del partido, a los viejos militantes, a identificarse con el torneo de los jóvenes, a verter en asambleas y congresos su experiencia para contribuir a la significación que el Séptimo Congreso tendrá en la vida política de nuestro país.

En las próximas semanas corresponderá enfrentar tres elecciones de distinta naturaleza: en la Universidad Técnica, en la Federación de Estudiantes de Chile y en la provincia de Coquimbo, en este último lugar para cubrir la vacante dejada por el sensible deceso de nuestro querido camarada Cipriano Pontigo. Confiamos en que el partido y la juventud enfrentarán estos combates con toda decisión y que, en unión de nuestros aliados, venceremos. Estas victorias, posibles de conquistar con esfuerzo y responsabilidad, ayudarán a subrayar la eficacia de la línea correcta de la Unidad Popular.

VIVA EL PARTIDO COMUNISTA
VIVA LA UNIDAD SOCIALISTA-COMUNISTA
VIVA LA UNIDAD POPULAR
VIVA EL GOBIERNO POPULAR.

Mario Zamorano:
“Unir a la mayoría absoluta que quiere cambios”
Intervención de Resumen en el Pleno del Comité Central
del Partido Comunista

(El Siglo, 26 de junio de 1972)

El siguiente es el texto completo de la intervención de resumen de Mario Zamorano, Encargado Nacional de Organización y miembro de la Comisión Política, al Pleno del Comité Central del Partido Comunista, realizado los días 22, 23 y 24 del presente mes.

“Como ha señalado el Informe presentado por el camarada Víctor Díaz, y reiterado en las intervenciones de los miembros del Comité Central y de los Secretarios de los Comités Regionales, “el objetivo principal de la presente Sesión Plenaria ha sido poner en tensión todas las fuerzas del partido, actuar más decididamente desde posiciones de principio en la lucha por la línea de la Unidad Popular, en la lucha por el cumplimiento del Programa, en el respaldo combatiente al Gobierno Popular que preside el compañero Salvador Allende”.

Precisamente, de eso se trata. Una vez más se requiere de un esfuerzo superior del partido para contribuir con toda decisión a la tarea de hacer más respirable la atmósfera. Estamos convencidos que para producir una mayor apertura en la realización de los cambios que Chile necesita, se requiere la más amplia movilización del pueblo, la presencia de las organizaciones en que se agrupa y lucha la mayoría de los chilenos, particularmente de los trabajadores.

En la discusión realizada por nuestro Comité Central ha existido absoluta unanimidad para apreciar la situación y el pleno respaldo a las actuaciones de la Comisión Política en el período tan rico en acontecimientos políticos que hemos vivido en las últimas semanas.

En el conjunto del partido existe claridad y comprensión en lo fundamental, pero, como se ha expresado en varias intervenciones de este Pleno, es preciso enriquecer más aún el conocimiento de nuestras células y de todos los organismos del partido de los asuntos que han ocupado la atención de esta reunión del Comité Central. Constituye un precioso material para la comprensión por parte de todos nuestros militantes de la hora política que vivimos, los planteamientos hechos por el Secretario General del partido, camarada Luis Corvalán, en la conferencia de prensa efectuada el 24 de mayo pasado, el artículo publicado por el camarada Orlando Millas el 5 de junio en *El Siglo* y el informe rentido a este Pleno por nuestro Subsecretario General, camarada Víctor Dáz. Todos estos materiales han sido editados en folletos para facilitar su estudio y como una forma concreta de contribuir a que

todo el partido golpee en una misma dirección y con toda su capacidad de combate.

Acometer nuevas tareas

En el año y medio transcurrido desde noviembre de 1970 nuestro Gobierno ha emprendido tareas de histórica significación revolucionaria. Como en todo proceso de cambios, se han cometido errores, han existido debilidades e insuficiencias. Ahora, se trata de acometer nuevas tareas, de superar los defectos del pasado y de seguir avanzando, continuar ensanchando el cauce del proceso revolucionario en marcha.

Dentro de un firme proceso de rectificación, de no equivocar el rumbo, la aplicación de una certera política revolucionaria, como se expresa en el informe central, “exige la capacidad de definir adecuadamente los enemigos principales y dirigir contra ellos el fuego concentrado de todas las baterías del pueblo, transformando a la clase obrera, en base a la unidad socialista-comunista, en una fuerza capaz de hacer y conducir alianzas, en una fuerza capaz de tomar en sus manos las reivindicaciones legítimas de todos los sectores del pueblo”.

La clase obrera necesita ganar aliados, o al menos neutralizar a los sectores que no es posible unir, y generar una correlación de fuerzas favorables al pueblo, crear las condiciones para que éste reúna más fuerzas que sus enemigos.

En Chile, las fuerzas partidarias de los cambios se encuentran también más allá de las filas de la Unidad Popular. Los comunistas hemos señalado esta realidad en reiteradas ocasiones y, si a veces, no ha existido comprensión suficiente por parte de todos los revolucionarios, es porque nosotros no hemos librado con la fuerza y perseverancia necesaria el combate ideológico en relación con estos asuntos.

Odio encarnizado de la reacción

En estos días, la pesada atmósfera de odiosidades que amenazaba con envenenar seriamente la política nacional tiende a corregirse. Se ha abierto paso al diálogo y a la posibilidad de conjugar un lenguaje, si no común, por lo menos convergente, entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana para sentar las bases del área social de la economía. Este solo hecho ha despertado las furias de los reaccionarios. Destempladas voces de odio indisimulado surgen desde el Partido Nacional y de los sectores tanto o más cavernarios que él. Todavía no se concreta un acuerdo con la Democracia Cristiana y ya los enemigos del progreso de Chile caen en la historia y muestran su tenebroso juego.

Juegan diversas cartas cada día. No respetan nada. No vacilan ante nada y se lanzan con furia zoológica contra todo lo que hace el pueblo, contra toda la obra del Gobierno Popular y contra sus personeros más representativos.

Hoy día la fama del blanco de este odio encarnizado es, sobre todo, el Ministro del Interior, compañero Hernán del Canto. El Partido Nacional dirigido por fascistas como Sergio Onofre Jarpa y Mario Arnello deduce una acusación constitucional contra él, como prólogo del enjuiciamiento al Presidente de la República conforme a su viejo plan de crear una crisis institucional que lleve al golpe de Estado.

La prensa reaccionaria y el vespertino sedicioso “La Segunda”, calificado por el senador demócratacristiano Narciso Irureta como vocero del golpismo, ha llevado tan lejos su resentimiento y la defensa de los intereses de su propietario prófugo del país, Agustín Edwards, que no ha vacilado en lanzar contra el compañero Del Canto las peores calumnias y dicerios, que a la luz de la legislación configuran un delito que debe ser penado por la ley. A pesar que los Tribunales de Justicia, una vez más, han demostrado que aplican una justicia de clase dejando libre de polvo y paja al insultador profesional Mario Carneyro, creemos que el Gobierno debe insistir en aplicar el marco de la ley a los difamadores que abusando de la libertad irrestricta que existe en Chile la convierten en licencia, libertinaje y en caldo de cultivo de la sedición.

El Pleno del Comité Central del Partido Comunista expresa su más absoluta y decidida solidaridad con el compañero Hernán del Canto.

¿Por qué se desesperan tanto los defensores de la oligarquía financiera? La razón es simple. Ven, con pavor, que se abre paso la posibilidad real de aislar al imperialismo y la oligarquía, de consolidar la formación del área social y de avanzar en el cumplimiento del Programa de la Unidad Popular. Se dan cuenta de que están siendo acorralados, de que tienden a quedar aislados, y que fracasen sus intentos de arrastrar al país a un enfrentamiento criminal, a la guerra civil.

Los hechos prueban que a ellos no les convenía el diálogo y el entendimiento entre todos los partidarios de los cambios, sino que preferían y alentaban la acción aventurera de los que le hacían el juego desde la ultraizquierda.

Lo más grave de la ultraizquierda es que a través de cada una de sus acciones contribuye a dar mayoría a la ultraderecha y a dejar en minoría a los que apoyan al Gobierno. Todas las acciones de la ultraizquierda arrojan a los sectores medios, que en Chile son considerables, y que dan la victoria al lado que se carguen, en este caso, a la derecha.

Delimitar el verdadero dilema

Con esta forma artificial de trastocar la correlación de fuerzas se divide a los enemigos de los cambios, se debilita el campo de la revolución, se tiende una cortina de humo sobre lo que es la tarea principal. Se debilita el sentimiento abrumadoramente mayoritario en el país que quiere la nacionalización y la recuperación de las riquezas básicas, que respalda la liquidación del capital financiero, de los monopolios industriales y comerciales, y que se propone terminar en el curso de este año la expropiación del gran latifundio.

Hacen todo lo posible por evitar la ampliación de la democracia, sin la cual no hay revolución. Tratan de oponer mil barreras a una mayor participación del pueblo y de sus organizaciones en todos los asuntos de la vida nacional, lo cual, por cierto, es una ley indispensable en un proceso de transformación tan profundo como el chileno. A los reaccionarios les conviene enturbiar las aguas, a fin de que el imperialismo, el monopolio y los grandes terratenientes, que son los únicos que deben ser afectados en este proceso revolucionario, puedan envolver en la confusión y servirse como parapeto y trinchera defensiva de sectores de medianos y pequeños productores y comerciantes del campo y la ciudad. En suma, las capas medias tienen un puesto por derecho propio dentro del movimiento popular y no puede aceptarse que se las empuje por la ultraizquierda a subirse al carro de la ultraderecha.

Por eso es vitalmente importante que el Partido Comunista, la Unidad Popular delimiten con la máxima claridad el verdadero dilema que vive Chile. Quienes están en el bando enemigo y, quienes, la mayoría inmensa de la población, todos los trabajadores, las capas medias, todos los elementos patrióticos y todos los que estén por los cambios aunque no militen en las filas de la Unidad Popular.

De esto se trata. Tal es el espíritu del Pleno: evitar la falsificación del cuadro político, restablecerlo en sus verdaderas líneas, unir a la mayoría absoluta que quiere cambios, que no acepta la vuelta atrás ni mucho menos avivarle la cueca al fascismo, al golpe de Estado y a la constante conspiración reaccionaria.

Amplio consenso para los cambios

De algún modo elocuente esto lo ilustra la elección en la CUT. Allí la Unidad Popular alcanzó un setenta por ciento de la votación y el Partido Comunista la primera mayoría. La apreciable votación alcanzada por la Democracia Cristiana interpreta también un anhelo favorable al cambio de parte de los obreros que sufragaron por ella y nunca un voto favorable al retorno de los yanquis a las minas o a la devolución de las grandes empresas a los magnates. Tampoco votaron los campesinos demócratacristianos para que los fundos fueran devueltos a los latifundistas.

O sea, existe un amplio consenso en favor de los cambios aunque éste se exprese en lenguajes distintos y a veces contradictorios y revista formas y matices que en el fondo no son tan discrepantes y que permiten en el trabajo conjunto, en la lucha de masas, a través de la discusión ideológica llevada en forma fraternal, buscar puntos de contacto y de acuerdo.

Hay ejemplos que confirman este aserto. En muchas partes el trabajo voluntario ha arrastrado a participantes que no sólo militan en la Unidad Popular. En su última jornada participaron también jóvenes y adultos demócratacristianos, entre ellos el Presidente de la Cámara, sacerdotes, militares. Creemos perfectamente posible llevar este precedente de trabajo conjunto a otros campos. Por cierto, la acción organizada de masas en todos los terrenos, la cual en este Pleno ha sido ratificada y subrayada cien veces como el

camino revolucionario y el método más fructífero para la solución de los problemas que afrontamos, presupone la unión y la participación de todos los interesados en esa lucha específica y, claro está, no excluye sino que presupone también la participación de las masas de obreros, campesinos, pobladores, mujeres, estudiantes democratacristianos o independientes que estén por los cambios.

Los mismos errores denunciados y los mismos caminos de rectificación se aplican, sobre todo, al terreno vital, decisivo de la producción que ha sido afectada por una política sectaria, subjetivista, de gente que deroga por sí y ante sí las leyes de la economía política e impone esquemas voluntaristas que no sólo no tienen nada que ver con la realidad, sino que arruinan la producción y crean al Gobierno Popular una gravísima situación en el campo económico. Los medianos y pequeños productores, insistimos, deben ser regañados sobre la base de una delimitación clara de sus deberes y de sus derechos, para el proceso que está viviendo Chile y que los contempla como una de sus fuerzas y elementos activos.

Por otra parte, en el área social es menester terminar con la irresponsabilidad, la falta de planes cuidadosos insertados dentro del contexto de una planificación general, con las actitudes irreflexivas del tejo pasado, del ausentismo laboral. Por cierto, es claro que cierta demagogia de viejo corte economicista se da la mano o están alimentadas con concepciones gerenciales de algunos compañeros que le hacen al obrero difícil distinguir su conducta de la que tenía el antiguo patrón. La participación del obrero en el área social no es una actitud dócil, pasiva, simplemente receptiva, sino que tiene que transformarse realmente en una dirección colectiva de todos los trabajadores, racional antiburocrática, con compenetración plena en todos los problemas y necesidades de la empresa, de tal modo que cada uno de los trabajadores tenga una conciencia nítida acerca de sus derechos y de sus responsabilidades.

Lo que se dice de la producción industrial vale también para la producción agraria, donde las interferencias ultras, incluso a través de ciertos funcionarios de los organismos del agro, han sembrado una gran anarquía. Además, cierto burocratismo y la falta de un sentido preciso de las responsabilidades concretas ha significado que en muchos casos se demore la toma de posesión de los fundos expropiados, que se retrase o disminuya el proceso de producción, especialmente las siembras, determinando una baja en las cifras de la producción agrícola del país, con todas sus consecuencias.

Apelar a las organizaciones populares

El partido ha insistido repetida y vigorosamente ante los más diversos niveles de la Unidad Popular y del Gobierno en la necesidad de una rectificación de estos errores suicidas en el terreno agrario. Y sin duda no pueden demorarse ciertos cambios de mandos medios y una erradicación severa de las actitudes contrarias al Programa que se advierten en diversos órdenes de dicha labor. Sin duda estas correcciones tienen que hacerse apelando a las mismas organizaciones populares, a través de la discusión y recurriendo a la

movilización de las masas afectadas aunque a veces esta movilización choque o pueda chocar con la resistencia de más de algún burócrata o con algún funcionario de mentalidad no adaptada aún a las nuevas condiciones.

Este Pleno, a través del Informe y a través de su espíritu, que es la línea del partido, hace un llamado para que este método de la lucha de masas sea planteado en todos los terrenos como el mejor y definitivo remedio contra los males que vivimos, para enfrentar de verdad los problemas que se plantean.

Por vía de ejemplo, la lucha contra la especulación, el agio, por la normalización del abastecimiento, ha sido tomada por las JAP, que son una verdadera y legítima creación del pueblo, un auténtico instrumento de unidad y de lucha, una forma concreta de participación popular. Es muy importante no caer en errores, cuidándose de toda forma de sectarismo y de discriminación, atrayendo a sectores de mujeres, de consumidores, que no pertenecen a la Unidad Popular y cuidando de no convertirlas en un cuchillo para el comerciante modesto o mediano. Justamente porque su papel es tan importante, el odio de los grandes especuladores y de los reaccionarios se ha descargado sobre ellas, tratando de presentarlas como lo que no son ni deben ser: organismos sectarios y terroristas contra el comerciante y el consumidor que no pertenece a la Unidad Popular. Las asambleas de las JAP realizadas en Santiago y la que se celebrará mañana en Valparaíso deben ser seguidas por reuniones similares en todo el país.

Este método de trabajo con las masas por la solución de sus problemas debe aplicarse respecto de todas las necesidades de la población. Problemas como el de la movilización, la salud, la educación, etc., deben ser tomados por los inmensos sectores interesados.

Una iniciativa interesante dentro del campo juvenil es aquella que recién comienza llamada “Yo hago deporte”, que puede ser el núcleo inicial de un inmenso desarrollo del deporte de masas, que se ha desarrollado en los diversos países que han hecho la revolución.

En las últimas discusiones dentro de las fuerzas populares se ha resuelto dar una nueva estructura al movimiento. Como tarea inmediata, según lo acordó el Comité Político de la UP, se plantean las asambleas comunales y provinciales que deben culminar en una gran reunión nacional de la Unidad Popular.

El informe decía que estamos frente a tres elecciones próximas: para elegir Rector, Secretario General y autoridades de la Universidad Técnica del Estado; para elegir la directiva de la Federación de Estudiantes de Chile y un diputado por la provincia de Coquimbo a fin de llenar la vacante de nuestro querido compañero Cipriano Pontigo. Estas tres elecciones son importantes. Tienen alcance nacional, incluso internacional. Serán usadas como metros o barómetros para medir la situación del Gobierno y de la Unidad Popular ante la ciudadanía. Por lo tanto, hay que esforzarse al máximo por la victoria en todas ellas. La elección de Coquimbo adquiere una importancia muy grande porque da la posibilidad de invertir los resultados desfavorables que se produjeron en las elecciones de Valparaíso, O’Higgins y Colchagua y Li-

nares. Allí el abanderado de la Unidad Popular es una compañera comunista, Amanda Altamirano. Y una victoria popular sería un gran aliciente moral para todo el pueblo y asestaría un contundente golpe a los intentos de una alianza electoral de toda la oposición. De allí que el acertado trabajo político, propagandístico y organizativo, evitando los errores cometidos en elecciones anteriores, es indispensable, especialmente en relación a las capas medias.

Pieza vital: unidad PS-PC

No es ninguna exageración afirmar que el Partido Comunista es una de las garantías esenciales de que el proceso chileno salga adelante librándose de los errores y abriéndose hacia las grandes masas, atrayendo a la mayoría de la nación.

Nunca podemos olvidar, tampoco, que una pieza vital de todo el trabajo revolucionario es la unidad socialista-comunista. Hay muchos tropiezos en ella a muy diversos niveles. Surgen a menudo profundas incomprensiones. Esto lleva a muchos socialistas y a no pocos comunistas a desesperarse a ratos y a dejarse llevar por sentimientos de mutuo rechazo que si prosperaran y los dejáramos correr serían políticamente fatales. Reiteramos la necesidad de convertir cada vez más la unidad socialista-comunista en la piedra angular del movimiento. Pero sería enormemente dañino concluir que allí pudiera terminar nuestro esfuerzo unitario. El entendimiento con todas las fuerzas y partidos de la Unidad Popular es también indispensable, como lo es la necesidad de considerar el movimiento popular como un mundo abierto a todos los elementos y capas del pueblo interesadas en los cambios. Este es un deber ineludible, tanto del partido como de las Juventudes Comunistas, que viven hoy el proceso activo y combatiente de preparación de su Séptimo Congreso Nacional, responsabilidad no sólo para la nueva generación comunista, sino de todo el partido.

El espíritu de este Pleno lo han caracterizado diferentes compañeros a través de sus intervenciones. Se advierte en muchas de las intervenciones que aquello que reclamaron Plenos anteriores en el sentido de que el Partido Comunista asumiera a cabalidad su nuevo papel de partido integrantes de un Gobierno revolucionario se va abriendo paso porque ya son más los camaradas que toman los problemas con un conocimiento más cabal y con mucho más conocimiento de causa.

Organizadores de soluciones

Pero no podemos esperar otro Pleno para remediar las fallas que todavía tenemos, para venir a lamentarnos de errores, insuficiencias y vicios que ya han sido constatados en reuniones anteriores. Como lo dijo muy gráficamente el compañero Víctor Contreras, los comunistas no somos Jeremías dedicados a llorar eternamente los mismos males. No, los comunistas no somos

meros constatadores de problemas, ni siquiera simplemente críticos de deficiencias o transgresiones al Programa, sino que además y por sobre todo, organizadores de sus soluciones con las masas de principio a fin y con una perseverancia que no puede darse un momento de respiro mientras la solución permanezca atascada en cualquier nivel. En este sentido tenemos la sensación de que en muchas ocasiones hay organismos y militantes del partido que se quedan a medio camino y no cumplen su deber entero.

Por eso confiamos que en un próximo Pleno podamos registrar un balance rico de realizaciones del movimiento popular y de un Partido Comunista que se ha puesto junto a todos sus aliados a la cabeza de la solución real y específica de los problemas pequeños, medianos y grandes que están planteados, abriendo camino a un ensanchamiento del movimiento popular que permita agrupar tras el cumplimiento del Programa a la gran mayoría del pueblo y la nación.

Hablando de elecciones, adquieren la más alta significación política las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. El Partido Comunista hace particular hincapié en la trascendencia de dicha confrontación para el avance del proceso revolucionario. Lograr un amplio respaldo ciudadano en dichas elecciones se transforma hoy en una de las tareas del movimiento revolucionario. Los resultados de dichas elecciones dependerán, fundamentalmente, de lo que seamos capaces de hacer hoy, de lo que podamos corregir, mejorar y realizar en favor del pueblo en lo que resta de 1972. El adversario se empleará a fondo. Es deber irrenunciable de las fuerzas revolucionarias hacer todo por lograr para la Unidad Popular un respaldo mayoritario de los chilenos en esas elecciones.

Partido Comunista: “Aislar al pueblo es criminal”

(Editorial de *El Siglo* del 27 de junio de 1972)

Es vitalmente importante que el Partido Comunista y la Unidad Popular delimiten con la máxima claridad el verdadero dilema que vive Chile, se dijo en la Intervención de Resumen del Pleno del Comité Central del Partido Comunista, rendida por Mario Zamorano, Encargado Nacional de Organización y miembro de la Comisión Política. Y se agregaba que era necesario “saber a ciencia cierta quiénes están en el bando enemigo y quiénes en el del pueblo”. Y sitúa Zamorano, entre éstos, a todos los que están por los cambios, aunque no militen en las filas de la Unidad Popular.

Todos los que están por los cambios, aunque no militen en las filas de la Unidad Popular. Es decir, se impone de nuevo la obligación histórica de actuar despojándose del sectarismo, ampliando y profundizando el cauce de las fuerzas populares, que deben agrupar a todos los que se sienten realmente comprometidos con el futuro del país y, por tanto, aspiran a que en él se realicen cambios fundamentales.

Por eso tienen la más estricta actualidad y el más positivo rigor revolucionario los llamados que ha formulado el Pleno del Comité Central del Partido Comunista a revisar lo hecho, a estudiar lo realizado, a aplicar estrictamente las armas de la crítica y de la autocrítica, para que los errores cometidos queden bien definidos, para que las deficiencias queden establecidas con claridad, para que los errores se perciban sin distorsiones, en su justa medida. Sólo eso permitirá seguir avanzando mediante, como lo dijo Zamorano, “la aplicación de una certera política revolucionaria” que, como se expresa en el Informe Central, “exige la capacidad de definir adecuadamente los enemigos principales y dirigir contra ellos el fuego concentrado de todas las baterías del pueblo, transformando a la clase obrera, en base a la unidad socialista-comunista, en una fuerza capaz de hacer y conducir alianzas, en una fuerza capaz de tomar en sus manos las reivindicaciones legítimas de todos los sectores del pueblo”.

Un movimiento popular fuerte, disciplinado, que camina con los ojos abiertos y vigilantes, con todos sus sentidos en tensión, no puede temerles al diálogo ni a las alianzas, mientras sea capaz de jugar el papel que le corresponde: el de rector del momento histórico en que se desenvuelve. No puede olvidar que él es el que hace, en lo fundamental, la historia en que está inmerso.

Por eso el diálogo, planteado en estos términos, resulta constructivo y constituye una política justa. Así lo reconoce en su Intervención de Resumen:

“En estos días –dijo– la pesada atmósfera de odiosidades que amenazaba con envenenar seriamente la política nacional tiende a corregirse. Se ha abierto paso al diálogo y a la posibilidad de conjugar un lenguaje, si no común, por lo menos convergente, entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana para sentar las bases del área social de la economía. Este solo hecho ha despertado la furia de los reaccionarios. Destempladas voces de odio indisimulado surgen desde el Partido Nacional y de los sectores tanto o más cavernarios que él. Todavía no se concreta un acuerdo con la Democracia Cristiana, y ya los enemigos del progreso de Chile caen en la histeria y muestran su tenebroso juego”.

“Hacerle el juego” a ese juego es, en el mejor de los casos, un error. Con frecuencia es una complicidad. Toda actitud que contribuya a echar el agua hacia el molino de la Derecha, es contrarrevolucionaria y atenta contra el pueblo de Chile. Y, como también lo dijo Zamorano, “lo más grave de la ultraizquierda es que a través de cada una de sus acciones contribuye a dar mayoría a la ultraderecha y a dejar en minoría a los que apoyan al Gobierno”. Para que éste pueda realizar el programa, necesita, también, de la adhesión y el trabajo de las capas medias de la ciudad y del campo. Empujar a éstas a posiciones contrarias al Gobierno, es aislar y debilitar al pueblo en medio del combate.

Carlos Cerda (Partido Comunista): La revolución chilena y la propiedad no monopolista

(El Siglo, 29 de junio de 1972)

Se ha situado en el centro del debate político, económico e ideológico la cuestión del carácter del Gobierno Popular y de las transformaciones revolucionarias que impulsa con decisión. Tanto el llamado cónclave de la Unidad Popular como las bases de conversación con la Democracia Cristiana, tienen que ver fundamentalmente con esta cuestión.

La Unidad Popular es una alianza de partidos de la clase obrera con partidos de la pequeña burguesía y el programa que sirve de punto de convergencia a esta alianza cautela los intereses inmediatos y mediatos del proletariado y de amplios sectores de las capas medias.

El proletariado aspira como clase a la transformación revolucionaria de la sociedad chilena, a la construcción del socialismo en nuestro país. Un sector de las capas medias hace también suya esta aspiración, pero el grueso de estas capas entiende como su interés principal la mantención de su condición de propietarios de medios de producción, ya sean pequeños o medianos. En atención a este hecho es que el Programa de la Unidad Popular establece la existencia de tres áreas en nuestra economía.

Sin embargo, transcurridos un año y medio de Gobierno Popular, está claro que en estos sectores de pequeños y medianos empresarios ha cundido la desconfianza y el temor, y hoy, más que ayer, o al menos de manera más clara, hacen de la conservación de su propiedad su principal bandera. Este es un hecho objetivo.

Una correcta política de alianzas

En estas condiciones, la clase obrera no podrá elaborar una política correcta, sino partiendo de la consideración de esta realidad.

La clave de la cuestión radica en que en las actuales circunstancias, ninguna clase por sí sola, en nuestro país, está en condiciones de imponer a las otras sus objetivos específicos. Tanto el proletariado como la pequeña y mediana burguesía, como los monopolios y el imperialismo, buscan construir el tipo de alianzas que les permita dar a los acontecimientos un curso favorable a sus propios intereses.

En este cuadro, la burguesía monopolista, asumiendo la defensa de la propiedad privada en general, gana a las capas medias para la defensa, en los hechos, de la propiedad de tipo monopolista, pero es evidente que lo logra

porque la defensa de la propiedad privada en general, es también la defensa de la pequeña y mediana propiedad.

Para enfrentar esta situación, la clase obrera tiene un Programa que no es otro que el de la Unidad Popular. En él se plantea la liquidación de toda forma de gran propiedad, tanto la del imperialismo sobre nuestras riquezas básicas, la de los latifundistas y la de los industriales monopolistas, pero conjuntamente se salvaguardan los intereses inmediatos de los pequeños y medianos propietarios.

Situados en medio del enfrentamiento entre los grandes capitalistas y la clase obrera, los pequeños productores se sienten fuertemente inclinados a identificar sus intereses con los del gran capital, a ver en la clase obrera su principal enemigo y no una fuerza poderosa con la cual es posible establecer una alianza que cautele sus intereses específicos.

¿Qué significado tiene en medio de este cuadro la reafirmación de los objetivos programáticos resuelta en el cónclave de la UP y las bases de conversación con la Democracia Cristiana?

Tiene el significado de quebrar la alianza del gran capital con los sectores ligados a la pequeña propiedad. Se abre la posibilidad de que las capas medias de productores no monopolistas entiendan que para defender su condición de propietarios es posible una alianza con la clase obrera. En esta alianza, que constituye un compromiso leninista para el proletariado, éste renuncia temporalmente a una parte de su objetivo final: la erradicación de toda forma de propiedad privada sobre los medios de producción, y se compromete a constituir, en el seno de la nueva sociedad en transición, un área privada que existirá sin limitaciones, y con ayuda estatal. Paralelamente, estos sectores medios rompen su alianza con el capital monopolista, permitiendo con ello a la clase obrera cumplir con una parte medular de sus objetivos: liquidar toda forma de gran propiedad, llevar a término la revolución antiimperialista y antioligárquica.

Elementos que oscurecen la realidad

Esta concepción leninista, que consiste en unir a distintos sectores del pueblo para dirigir el golpe principal contra los enemigos fundamentales constituye la médula del Programa de la Unidad Popular y la condición básica para su aplicación. Es por esto que las conversaciones con el PDC, cuyo resultado, en el caso de fructificar, no sería otro que la erradicación del monopolio de nuestro país, se sitúan por entero dentro del Programa.

Lo que ocurre es que esta clara definición programática ha sido oscurecida por la tendencia a la fraseología revolucionarista de los grupos ultras, por la demagogia vacía de contenido científico, por la terminología periodística que penetra en nuestras propias filas, y también por debilidades en la propia Unidad Popular para aclarar no sólo en las palabras, sino también en los hechos, la cuestión del carácter de la revolución chilena a la mayoría de nuestro pueblo y en especial a los sectores medios.

El posible acuerdo con la DC en torno a los vetos de la Reforma Constitucional pone nuevamente esto en el centro de la discusión. Lo negativo del asunto es que debido a nuestros propios errores se corre el riesgo de que sea la DC la que aparezca ante los pequeños y medianos industriales como fuerza política gracias a la cual sus intereses fueron considerados. Y el hecho de que un sector importante de las capas medias vea en la DC la expresión de sus intereses es algo que no contribuye al propósito de la UP de transformarse en la expresión política de la inmensa mayoría del pueblo, ni al objetivo de la clase obrera de constituirse en la fuerza dirigente de un amplio conglomerado social.

Una actitud sin complejos

Cualquier actitud vergonzante, cualquier tendencia a explicar los puntos de entendimiento con el PDC como un compromiso necesario al margen del Programa o de los objetivos actuales del proletariado, reforzará la influencia de la Democracia Cristiana en los sectores medios y no la nuestra.

Para encarar esta situación es preciso adoptar frente a los acuerdos una actitud sin complejos, una actitud de fuerza gobernante que se sabe legítima defensora de los intereses de la inmensa mayoría de los chilenos. Sería conveniente en estos días destacar en nuestra propaganda los párrafos del Programa en que se plantean los puntos que interesan a los pequeños y medianos empresarios y todo lo relativo a las tres áreas de la economía.

Por otra parte, en las proposiciones de la DC se plantea la creación de las empresas de trabajadores. Si éstas quedan integradas al área social, cualquier consideración que nos merezca ese tipo de experiencia debe subordinarse al hecho de que, para que tales empresas se constituyan, deben ser arrebatadas a los grandes capitalistas, y esto es lo principal. Sería lamentable que en el seno de la clase obrera se repitiera la experiencia vivida por el campesinado en el último tiempo; esto es, la división entre los partidarios del asentamiento y los de la CERA, y no la unidad activa y combatiente frente a los terratenientes. Lo relativo a las empresas de trabajadores es algo que en último tiempo será resuelto por los propios trabajadores y lo principal es llevar adelante la lucha ideológica en el seno de la clase obrera, teniendo claro que lo principal es su unidad.

El presente Pleno de nuestro Comité Central se realizó en los momentos en que se abre una nueva posibilidad de modificar en favor de la clase obrera la correlación de fuerzas. Una vez más se demuestra que la aplicación decidida de nuestra política leninista es un latigazo para los enemigos principales de nuestro pueblo y el mejor remedio para la enfermedad ultraizquierdista. La ofensiva ideológica sólo puede desarrollarse con plenitud cuando se está políticamente a la ofensiva. Y el proletariado está a la ofensiva cuando es capaz de golpear a los enemigos principales, cuando está luchando por ganar aliados, cuando consolida la tarea revolucionaria iniciada y cuando logra que sus intereses específicos se confundan con los intereses también particulares de las demás fuerzas con las que es preciso avanzar.

2610 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

Si durante el gobierno de Frei dijimos con razón que era posible y necesaria la acción conjunta entre las fuerzas avanzadas del gobierno y las fuerzas avanzadas de la oposición para propinar derrotas, aunque fueran pequeñas y parciales, al imperialismo y a la oligarquía, con mayor razón hoy, siendo el pueblo gobierno, se requiere de la acción conjunta con los sectores de la oposición que estén dispuestos en alguna medida a enfrentar a los enemigos principales de nuestro pueblo. Sólo así se los derrotará definitivamente.

www.cepchile.cl

Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR/MIR): Concepción, organización, funcionamiento y desarrollo orgánico del Frente

(Junio de 1972)

I. Desarrollo histórico

Los orígenes del FTR están vinculados estrechamente con el desarrollo e impulso del trabajo sindical del partido y esto fundamentalmente en el período posterior a las elecciones presidenciales de 1970. En sus inicios este trabajo sindical se desarrolla en Santiago en torno a los trabajadores de la pequeña y mediana industria circunscritos al cordón industrial de Macul y Santa Rosa, la penetración en este sector se hace con relativa facilidad para las corrientes revolucionarias, debido a las condiciones de explotación a que están sometidos los trabajadores de este sector de la actividad industrial, al abandono de parte de las direcciones sindicales reformistas, a la carencia de organización sindical de estos trabajadores y a su alto espíritu de lucha. Sin embargo es difícil trabajar políticamente este sector debido a la dispersión de la pequeña y mediana industria, a la escasez de recursos orgánicos y de cuadros para mantener un trabajo que en el mediano plazo rindieron frutos importantes. Paralelamente, y aún desde antes, el partido en la provincia de Concepción desarrolla un trabajo de agitación entre los mineros del carbón donde a pesar de la burocracia sindical reformista se logra un cierto nivel de penetración alrededor de las reivindicaciones de estos mineros; no se perfilaba aún una política definida para este sector. Se desarrolla en la zona un trabajo sindical difuso. Vienen las elecciones presidenciales y el ascenso al Gobierno de la UP, hecho que amplía el cauce de las aspiraciones populares y establece mejores condiciones políticas para que amplios sectores de trabajadores se incorporen a la lucha por la solución de sus problemas más inmediatos. El primer FTR surge en la industria textil de Tomé, en medio de un conflicto que se venía arrastrando por mucho tiempo chocando contra la intransigencia patronal y las debilidades del reformismo. El conflicto pone en evidencia el alto nivel de combatividad y decisión que se anidaba en estos trabajadores y las potencialidades de desarrollo del partido en el seno de la clase obrera.

Esta experiencia de los textiles de Tomé, que hemos enfatizado por la trascendencia que esta lucha en sí llevaba, se extiende a sectores de la gran industria del resto de la provincia, profundizándose y desarrollándose entre los mineros del carbón. Después comienzan a surgir los FTR en la provincia de Santiago, en Hirmas, Sumar, Yarur, el resto de la gran industria y puntualmente la mediana. También se extiende a la provincia de Valparaíso, fundamental-

mente a la gran industria textil. Surge un FTR en la gran minería del cobre en Chuquicamata, cuya concepción y funcionamiento más correspondía a las de un partido que a las de un organismo intermedio de masas o frente político.

Entre la etapa previa al triunfo de la UP y el período posterior hasta aquí reseñado, podemos extraer algunas conclusiones generales que nos van a permitir establecer los lineamientos de su desarrollo en el curso posterior. También es preciso tener en cuenta que todavía el FTR no contaba con un programa nacional y su declaración de principios.

En primer lugar se concluye que el trabajo sindical del partido estaba marcado por el sello del espontaneísmo derivado de la inquietud de nuestros militantes de penetrar y agitar el frente sindical, con un matiz mayor en el período previo a septiembre de 1970. En segundo lugar, el trabajo de penetración de la ideología revolucionaria encuentra mayor receptividad en las grandes ciudades industriales de este país, Santiago, Concepción, Valparaíso.

En tercer lugar, en estas grandes ciudades el FTR se desarrolla y organiza en los sectores de la gran industria, donde hay mayor cantidad de fuerza de trabajo agrupado. 4° Surgen los FTR en aquellas industrias donde el peso del reformismo a través de las burocracias sindicales es mayor y actúa como una limitante aparente al desarrollo de las ideas revolucionarias. En quinto lugar se aprecia un alto grado de decisión y combatividad de las masas de los frentes en los cuales surge el FTR. Por último, el FTR se constituye en perspectiva en la forma de expresión de una política revolucionaria por la clase obrera. Todo esto corresponde a un ciclo que va hasta los primeros meses de 1970, donde las condiciones políticas antes del triunfo de la UP y el período posterior son radicalmente distintas.

La necesidad de una política revolucionaria para otros sectores de la clase trabajadora y para los sectores de la pequeña burguesía asalariada permiten el surgimiento del FTR en los llamados sectores medios y su extensión lenta pero progresiva a los trabajadores del resto de las provincias del país, principalmente en la grande y mediana industrial: son los FTR de la industria electrónica, de la automotriz, de la gran minería del cobre, del salitre y del hierro, de la industria maderera, de la construcción, de la petroquímica, de la agroindustria, etc.

Desde sus inicios los FTR que surgen en los diferentes frentes logran agrupar siempre a un número limitado de trabajadores, hecho que no guarda correspondencia con el propósito asignado al frente político; estos se constituyen al núcleo de agitación y propaganda en torno a las reivindicaciones específicas del frente y ante las cuales el reformismo no muestra formas de canalización, de conducción ni de solución. Luego se definen explícitamente los postulados ideológicos del frente a través de su declaración de principios y su definición programática a nivel nacional: el programa del FTR. Entre tanto el FTR se da una forma de organización nacional y en algunos puntos del país provincial y local. El programa del FTR se convierte en el instrumento político e ideológico general y cada FTR trata de implementar un propio programa en su frente respectivo.

A la luz de la experiencia pensamos que el programa nacional del FTR, que no es el programa sindical del partido, no enfatiza acerca del papel que como clase debe cumplir el movimiento obrero en este período, el programa no define claramente los objetivos políticos de la clase obrera en este período, se queda mucho en el nivel de la lucha económica, en la aplicación del programa muchas veces se hacen una serie de formulaciones que desconocen los niveles de conciencia y organización del movimiento obrero.

Formulaciones que llevadas a un terreno más concreto podrían convertirse en magníficas herramientas movilizadoras que permitan dejar al movimiento obrero en condiciones de plantearse objetivos de mayor profundidad. Es reivindicativo; considerado el desigual grado que ha alcanzado la lucha de clases a nivel nacional deja desarmados a aquellos sectores que alcanzan las reivindicaciones formuladas en el programa. Dicho de otro modo, deja un vacío entre la formulación reivindicativa y el objetivo político a alcanzar por la clase en el período. Hacemos esta connotación porque los programas por frente que elaboran posteriormente llevan el sello de esta debilidad, ya que en algunos casos toman las reivindicaciones inmediatas del frente vinculándolas al programa nacional, otros toman fundamentalmente el aspecto reivindicativo y, en otros casos, estos plantean términos ideales a lo que la masa debiera hacer o aspirar.

La organización que el FTR se ha dado en todos los niveles después del congreso nacional establece el funcionamiento y organización de los miembros en asambleas de frente, niveles de dirección local, regional y nacional, conferencias nacionales y congreso nacional; la dirección nacional ha funcionado relativamente bien. Los niveles provinciales de organización se logran implementar regularmente en dos provincias, los niveles locales no funcionan con regularidad a excepción de la provincia de Santiago y Concepción, puntualmente en otras provincias; los niveles de frente funcionan con relativa normalidad casi en todo el país. Las conferencias nacionales no han sido nunca representativas de todos los FTR del país, del mismo modo los acuerdos adoptados a nivel nacional o regional no han sido implementados correctamente en casi todo el país. Aquí es necesario destacar el esfuerzo insuficiente históricamente, que el partido en todos sus niveles le ha dado al trabajo sindical.

La lucha de los FTR se ha caracterizado por tomar en cada uno de los frentes de las reivindicaciones fundamentales para la masa, llevándolas al primer plano de la conflictividad, encabezando la lucha y sobrepasando los obstáculos tanto de la burguesía, la burocracia sindical como del reformismo gobernante. Pero, a su vez, ha conllevado la debilidad de plantearse objetivos o métodos de lucha independientemente de los niveles de conciencia o combatividad de las masas en un determinado momento. A partir de esto, la burguesía y el reformismo han introducido la confusión entre el FTR y el MIR, haciéndolos aparecer –al frente político y al MIR– como si fuera una misma cosa, ha ayudado a esto la poca autonomía que el partido le ha dado al FTR; lo que conspira constantemente en contra de su crecimiento y desarrollo, a la vez, que ha traído confusión en los militantes del partido.

En estas condiciones el FTR enfrenta la campaña electoral de la CUT, la que compulsiona al conjunto de los FTR a desarrollarse y fortalecerse a nivel nacional.

Para terminar señalaremos que la corta trayectoria del FTR ha confirmado su vigencia y nos está demostrando que existen condiciones para eclosionar en todos los frentes de la actividad productiva; la experiencia nos señala que las ideas revolucionarias tienen gran receptividad en los sectores más avanzados de la clase trabajadora: Que el reformismo no es un obstáculo insalvable para el desarrollo de las ideas revolucionarias, por el contrario, comienza a producirse una crisis del reformismo en el seno de la clase obrera. Que existe energía, decisión y combatividad anidada en el seno del movimiento obrero. Que urge una conducción revolucionaria para el conjunto del movimiento de masas que se exprese en una política que entregue tareas concretas para la clase en el período. Que la limitante en el desarrollo y crecimiento del FTR está en las debilidades del programa, que convierte al frente político en alternativa reivindicativa y local y no en alternativa política para el conjunto del movimiento obrero; otra limitante la encontramos en la desatención del partido hacia el trabajo sindical, en las relaciones de excesiva dependencia entre el frente político y el partido.

Se abre un ancho cauce en el frente sindical, el cual los revolucionarios tenemos el deber de llenar en el más breve plazo.

II. Concepción del FTR

Definiremos los niveles de partido, organismos de masa y frente político.

El partido revolucionario

El partido es una organización de revolucionarios, es decir, de los elementos más conscientes de la clase obrera y de todos aquellos que sustentan la ideología del proletariado. Desaparece aquí, absolutamente, la diferencia entre trabajador manual y trabajador intelectual. Es una organización de cuadros políticos, es decir, de militantes con un alto nivel ideológico, de manejo político y especial; que no pretende incorporar al conjunto de la masa a sus filas, sino a sus elementos más conscientes y combativos.

El partido no tiene como misión hacer la revolución en nombre de las masas, sino el conducir correctamente al proletariado y sus aliados de batalla en batalla, hasta la victoria final.

El partido debe ser la vanguardia revolucionaria del proletariado, el destacamento de avanzada de la clase obrera, lo que implica que debe vincularse estrechamente con las masas. Sus militantes –cuadros revolucionarios– deben actuar en el seno de las masas, “como el pez en el agua”, conduciendo a las masas en su batalla contra la explotación. El partido en su conjunto conduce al proletariado y sus aliados en la batalla por la toma del poder, la destrucción del sistema capitalista y la construcción de la nueva sociedad.

El papel del partido no puede ser el conducir a las masas en función de lo que las masas dispongan, sino que éste debe de imprimir a cada uno de los combates que la masa se proponga, el sello de la clase, el contenido político en las perspectivas de los objetivos del conjunto de los explotados, es decir, el partido debe adelantarse siempre un paso más a la masa, sin aislarse jamás de ella, elevando su nivel de conciencia a través de la lucha, la denuncia política.

El partido debe actuar sobre el conjunto de la lucha de clases, sobre la totalidad de las clases y capas oprimidas de la sociedad que forman la alianza de clases que constituyen el pueblo, otorgándole una conducción revolucionaria a la lucha ideológica, política, económica y militar.

El partido es, por lo tanto, un partido de cuadros donde opera el centralismo democrático, además, que se da una estructura político-militar clandestina.

Los organismos de masas del movimiento obrero

Los sindicatos son organismos de masas del movimiento obrero; organismos amplios que tratan de abarcar y representar los intereses del mayor número de trabajadores posibles. Así, los sindicatos no deben ser partidarios, no deben ser de un partido; en el sindicato deben estar y sentirse representados los trabajadores de distintos partidos y las masas trabajadoras sin partido; esto no significa que los sindicatos no deban tener una clara orientación política, muy por el contrario. Los sindicatos sin una conducción revolucionaria son reivindicacionistas y, a lo más, se plantean modificaciones al sistema capitalista que les permitan a los trabajadores mejores condiciones de vida y obtener que la explotación capitalista sea menos odiosa.

Los sindicatos sugieron como organismos de defensa de los trabajadores de la explotación capitalista. El proletariado tiene sólo un arma para enfrentar a los capitalistas, su gran número y su interés común se clase, los obreros no pueden luchar desunidos.

Por eso los sindicatos deben cumplir la función de unir, organizar, disciplinar y multiplicar la fuerza de clase obrera. Pero los sindicatos pueden caer en una política equivocada cuando sólo reducen sus luchas a conseguir mejoras económicas y no conectan la lucha económica con la lucha política por la destrucción del capitalismo. En la concepción revolucionaria-leninista los sindicatos deben cumplir el papel de primera escuela de organización, disciplina y solidaridad de los trabajadores.

Los sindicatos no pueden limitarse a la lucha por las mejoras económicas inmediatas, deben conectar permanentemente esas luchas con las tareas de educación y propaganda revolucionaria de las bases socialistas y con el apoyo de los partidos revolucionarios.

La lucha sindical debe conectar la lucha económica con la lucha política, ya sea:

a) Mediante el desarrollo de la lucha económica utilizando métodos revolucionarios, recurriendo a la iniciativa directa de las masas, sobrepasando en la lucha a la legalidad hecha por la burguesía.

b) Mediante la denuncia permanente de la explotación capitalista impulsando constantemente la lucha contra la burguesía el sistema en cada fábrica, en cada industria, elevando los niveles de conciencia y organización de las masas.

c) Incorporando a las más amplias masas a la lucha revolucionaria, utilizando el arma de la huelga de masas, la ocupación de fábricas en la lucha política; el paro nacional político, la huelga de masas y la insurrección. El 4 de abril de 1957 es un ejemplo de esta lucha.

Una línea sindical revolucionaria busca unir y movilizar al conjunto del proletariado, de los trabajadores y no sólo a sus fracciones más fuertes y organizadas.

El frente político: el FTR

Los frentes políticos surgen como una necesidad del trabajo revolucionario en los frentes de masas. En este sentido, afirmamos lo que dijéramos en la Conferencia Nacional Sindical del partido en enero de 1972, pensamos que los errores y debilidades que apreciamos en el desarrollo y funcionamiento del FTR se deben, básicamente, a la confusión existente en las filas del partido en cuanto a la concepción de los frentes políticos.

La necesidad y vigencia de los frentes políticos está determinada por la definición que hemos hecho del partido revolucionario, la rigurosidad en su reclutamiento, que establece que sólo los elementos más conscientes, disciplinados y combativos, con mayor espíritu de sacrificio y entrega sean miembros del partido. Por la existencia de otras corrientes revolucionarias existentes en el seno del movimiento obrero la necesidad de su aglutinación en un frente político, por la existencia de trabajadores revolucionarios, sin partido que buscan en los distintos sectores del movimiento de masas no sólo de una dirección revolucionaria sino que, además, de formas orgánicas de participación e integración. Todos estos factores hacen necesaria la existencia de un organismo intermedio de masas, de un frente político en cada uno de los sectores del movimiento de masas: sindical, campesino, poblador, estudiantil, etc., organismo de agrupación de las más amplias masas revolucionarias que le otorgue a ese sector social una conducción revolucionaria en sus luchas específicas y en la lucha por el poder político.

Los frentes políticos están referidos a un sector social específico, el frente político es distinto del partido, es un nivel diferente de la organización. El frente político es un organismo intermedio entre la masa y el partido, es a través del cual el partido se vincula con la masa e imprime la conducción política al conjunto de los trabajadores del frente. En este caso, del frente sindical.

El FTR tiene un nivel de existencia organizativa y político independiente del partido, tiene autonomía organizativa y de funcionamiento. El FTR no reemplaza al sindicato, tampoco es el partido, es una corriente de opinión revolucionaria que opera dentro del movimiento obrero, actuando sobre la clase motriz de la revolución, aspirando a unificar a todos los trabajadores

tras un programa sindical con claro contenido clasista y revolucionario, a una línea revolucionaria en la lucha de clases a nivel nacional.

La conducción política e ideológica del FTR debe ganársela el partido en el terreno de la lucha ideológica, lo que dependerá de lo acertado de la línea política y del trabajo del partido en el frente.

El FTR, entonces, es un frente político que agrupa en su seno a los trabajadores avanzados con partido o sin partido. Cumple una función política en el interior del frente de masas y del sindicato y es un organismo público.

El FTR debe tener vida propia e independiente del partido, esto significa:

1. Debe tener un programa político mínimo que debe coincidir en sus líneas centrales con el programa del partido.

2. Debe contar con un programa sindical nacional, por sectores y ramas de actividad económica y por frentes, que debe coincidir en lo central con el programa sindical del partido.

3. Debe tener una forma de organización propia a nivel nacional, provincial, local y de frentes.

4. Debe contar con sus propios dirigentes, surgidos de la lucha misma que conduce el FTR.

5. Debe tener órganos propios de propaganda.

6. Debe contar con sus propias fuentes de financiamiento.

7. Tendrá sus propias formas de educación política.

8. Contará con sus propios afiliados, los miembros del FTR, cuyo nivel de tareas y compromiso será menor que las de cualquier miembro del partido.

9. El FTR debe tener existencia pública y abierta, sólo en aquellos lugares donde la represión patronal o de la burocracia sindical y del reformismo sea muy fuerte, el FTR tendrá en sus inicios y sólo hasta que gane fuerza suficiente, una existencia clandestina o semiclandestina.

Pensamos que estas deben ser las concepciones básicas que deben orientar la organización, funcionamiento y desarrollo del FTR.

IV. Organización del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR)

Los lineamientos orgánicos generales establecidos por el congreso nacional del FTR creemos que son correctos y los postulamos con algunas pocas modificaciones, casi formales, para hacerlo más eficiente.

Nivel Nacional

Congreso Nacional FTR:

1. Es el organismo máximo del frente político.

2. Se reúne una vez al año, en forma ordinaria.

3. Asisten delegados elegidos en las bases en forma proporcional y representativa.

Conferencia Nacional

Formada por el Comité Ejecutivo Nacional más los presidentes provinciales FTR.

Comité Ejecutivo Nacional:

1. Estará radicado en Santiago y se reunirá una vez por semana.
2. Constará de 9 miembros elegidos en el Congreso Nacional.

Nivel Provincial

Congreso Provincial FTR:

1. Es el máximo organismo de decisión a nivel provincial.
2. Se reúne una vez al año, en forma ordinaria.
3. Asisten delegados elegidos por las bases en forma provincial y representativa.

Conferencia Provincial

Formada por el Comité Ejecutivo Provincial más los presidentes departamentales o locales.

Comité Ejecutivo Provincial:

Se reunirá, a lo menos, una vez por semana.

Nivel Comunal o Departamental

Conferencias Comunales o Departamentales:

Formada por los presidentes y secretarios de los FTR de frente.

Consejo de Delegados:

Estará formado por el presidente y secretario más los delegados de los FTR de frentes.

Nivel de Frente (Base):

Comité Directivo

1. Formado por presidente, secretario de agitación y propaganda, secretario de organización y finanzas.
2. Se reúne una o dos veces por semana.
3. Brigadas para el cumplimiento de tareas específicas.

Asamblea de Frente:

Asamblea del FTR de fábrica o industria, en aquellos casos en que la industria sea muy grande se reunirán en asamblea por sección o departamento.

V. Programa, desarrollo y fortalecimiento orgánico

Hasta las elecciones de la CUT, el FTR con un programa nacional ya elaborado y los siguientes programas sectoriales o por ramas de actividad: el carbón, salitre, salud, un esbozo de programa para la construcción y la pequeña y mediana minería, con políticas para la pequeña y mediana industria y comercio, políticas para las industrias del área social, para el campesinado, políticas que el partido viene levantando en el período.

En cuanto al grado de desarrollo orgánico, el FTR está organizado a niveles provinciales sólo en Santiago, Concepción y Valparaíso, con un nivel de funcionamiento regular o más que regular, los niveles comunales o departamentales no han sido implementados, en el nivel de frente ha alcanzado buenos grados de desarrollo en Arica, Santiago, Concepción, Llanquihue y Valdivia. Grados menores se aprecian en el salitre, Coquimbo, Valparaíso, Cautín. Las mayores debilidades por provincias, en función de la fuerza de trabajo concentrada, está en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble y Valdivia, y por frente el más débil corresponde a la gran minería del cobre. Dejamos constancia que los buenos grados de desarrollo están muy lejos de ser óptimos esperados para el período, en cuanto a la extensión territorial del FTR existe en casi todo el país.

Tres conferencias nacionales convocadas para tratar la Campaña CUT, ninguna tuvo la representatividad de todos los FTR del país, las decisiones allí tomadas no tuvieron la implementación adecuada, no se elaboraron los programas por frentes que se habían acordado, los programas provinciales, la agitación y la propaganda en los frentes, la coordinación a nivel nacional, etc.

Este es el nivel orgánico del FTR al momento de las elecciones CUT. Aquí estimamos necesario señalar algunos errores de concepción y funcionamiento del frente político: en primer lugar, destacamos el grado de subordinación del FTR al partido en cuanto a las decisiones políticas, la política de alianza y a las definiciones programáticas. En segundo lugar, el programa del FTR además de la debilidad señalada de ser a la vez abstracto y reivindicativo, es en sí sectario, está muy marcado con nuestras posiciones, nuestro análisis, lenguaje, carece de flexibilidad de tal forma que obliga a los miembros del frente político a casarse con nuestras posiciones. En tercer lugar, aun cuando el FTR pretende agrupar en su seno a las diversas tendencias revolucionarias que se dan en el movimiento obrero, éste propósito no se ha logrado plenamente. En cuarto lugar, al no tener el partido sindical, nos vemos obligados a levantar el programa FTR como nuestro, lo que lleva a marcarlo más aún con nuestro sello. Es necesario que el partido se dé un programa sindical, el que no debe ser tan extenso y pormenorizado como el del FTR. En quinto lugar, los programas por frentes y sectores o ramas de actividad, excepcionalmente, recurren al análisis concreto del frente sino que tratan de insertar el programa nacional al frente de masas respectivo, no tomando en cuenta las particularidades regionales o sectoriales. En sexto lugar, existe confusión en la militancia del partido respecto de lo que es un frente político y el nivel de partido, con todas sus implicancias prácticas. En séptimo lugar,

existe confusión en la militancia del partido entre lo que son los objetivos de la lucha en un determinado momento y las formas de lucha, lo que lleva al FTR a colocar en el primer plano del combate en un frente las formas de lucha (la toma). Por último, como ya lo señalábamos hay descoordinación entre base y niveles superiores de FTR a niveles provinciales (donde existe) y nacional.

Creemos que estas deficiencias han impedido en un grado importante el crecimiento, desarrollo, funcionamiento y fortalecimiento orgánico del FTR.

Ahora en otro plano, creemos que corregidas las deficiencias se hace necesario poner énfasis en la adecuación y revisión del programa nacional, en la necesidad de levantar programas por sectores o ramas de actividad económicas y por frentes, siendo muy precisos en las reivindicaciones a levantar, proponiéndonos medidas que sean alcanzables por la masa en cuanto a sus niveles de conciencia y organización, que le vayan permitiendo éxitos sucesivos, dándole confianza y vigor para proponerse tareas de mayor envergadura que también deben estar planteadas en el programa, en otras palabras, estos programas deben ir fijando los objetivos sucesivos que nos proponemos en el entendido qué coyunturas pueden colocar en vigencia el conjunto del programa. Es necesario enfatizar en los métodos de lucha que permitan ir transformando en éxito cada uno de los objetivos que nos proponemos.

Respecto al desarrollo y fortalecimiento orgánico del FTR, creemos que éste pasa fundamentalmente, no siempre, por la existencia y desarrollo orgánico del partido en cualquier parte del país. De aquí que cualquier clase de desarrollo y fortalecimiento orgánico del FTR requiere del fortalecimiento orgánico del partido en aquellas zonas que establezcamos como prioritarias para el trabajo sindical. Las prioridades partidarias deben basarse en la importancia de los frentes a desarrollar en función de la cantidad de fuerza concentrada, de su gravitación en la economía nacional y, por sobre todo, de su importancia en el conjunto de la clase, en su incidencia en la lucha política nacional.

Estimamos que una definición de tareas y objetivos orgánicos para el FTR a todos los niveles debe hacerse en un Congreso Nacional del FTR, donde los siguientes lineamientos generales deben orientar el análisis, la discusión y la definición de tareas:

1. Elaboración de programas por sectores o ramas de actividad en un plazo no superior a tres meses, para: cobre (gran minería), textil, construcción, madera, pesqueras, metalúrgico, petróleo y petroquímica, educación, automotriz, pequeña y mediana minería.

2. Elaboración de un programa mínimo para cada uno de los frentes donde exista FTR, esto en todo el país y en un plazo no superior a 3 meses.

3. Desarrollo y fortalecimiento del FTR en las siguientes provincias: Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Valdivia, O'Higgins y Tarapacá. En estas provincias, el FTR deberá desarrollarse en todos los frentes y con todos los niveles orgánicos ya señalados, en un plazo no superior a tres meses.

4. Constitución y/o fortalecimiento de los FTR comunales o departamentales en el resto del país, en un plazo similar.

5. Desarrollo de escuelas de cuadros FTR, poniendo énfasis en el desarrollo de las provincias más atrasadas en el plano sindical.

6. Publicación de periódicos provinciales en las provincias señaladas, en un plazo no superior a 3 meses, periódicos y volantes por frentes en todo el país en el mismo plazo.

El rayado debe ser una tarea permanente.

7. La cotización debe ser rigurosamente controlada a través de las direcciones de frentes, del mismo modo debe llevarse un catastro nacional de miembros del FTR.

8. Deben establecerse niveles de coordinación e intercambios de experiencias con los MCR de cada comuna o provincia.

Comisión Nacional Sindical.

Junio de 1972.

Jorge Tapia (Ministro de Justicia, Partido Radical): Informe al pueblo sobre las conversaciones con la Democracia Cristiana

(7 de julio de 1972)

“A fin de que el país se informe cabalmente del contenido de las conversaciones producidas entre personeros de la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano acerca de las observaciones o vetos al Proyecto de Reforma Constitucional sobre áreas de la economía, y que pueda con ello valorizar en su integridad el alto propósito que en todo momento guió al Gobierno al pretender alcanzar una solución dentro de los márgenes parlamentarios, veníamos a formular la siguiente declaración:

A través del proceso de discusión del Proyecto de Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía, en reiteradas oportunidades, tanto el Presidente de la República como Ministros del Estado, subsecretarios, parlamentarios de la Unidad Popular y reconocidos juristas de nuestro país, han refutado públicamente el antojadizo planteamiento de la oposición en cuanto a que, tratándose de un proyecto de ley que reforma la Constitución Política, no procedería el trámite de la insistencia del Congreso ante observaciones o vetos supresivos o substitutivos presentados por el Ejecutivo, y además, frente también a negar competencia al Tribunal Constitucional para resolver acerca de la justa interpretación que debe darse en esta parte a nuestra Carta Fundamental.

Para el Gobierno es y ha sido de suma gravedad que un sector político pretenda colocarse en una posición de franca violación de normas fundamentales que rigen la organización del Estado, violando con ello el régimen institucional imperante cuyo respeto irrestricto ha mantenido en todo momento nuestro Gobierno”.

Las conversaciones

“Fue por ello que una vez aprobado este proyecto de Reforma Constitucional por el Parlamento, el Presidente de la República junto con observar o vetar algunas de sus disposiciones proponiendo rechazos, substituciones y adiciones a las mismas autorizó al Ministro de Justicia para entrar en conversaciones con personeros de la Democracia Cristiana, a fin de considerar la posibilidad de que se llegase a un entendimiento acerca de la manera cómo despachar dichas observaciones y un conjunto de leyes paralelas a las nuevas disposiciones de la Constitución.

Designadas comisiones representativas de la Unidad Popular y del Partido Demócrata Cristiano para este estudio en conjunto, se fijó en una etapa de

las mismas un plazo de 15 días para contar todo lo necesario al respecto. Llegado el vencimiento de este término –el jueves 29 de junio– los miembros de la comisión de la Unidad Popular solicitaron al senador Renán Fuentealba una prórroga de estas conversaciones, aduciendo que dado el grado de acuerdo a que se había llegado, aparecía injustificable no disponer de unos pocos días más para consvir de estudios de algunas materias que aún quedaban pendientes.

La respuesta a este planteamiento nos fue dada indirectamente a través del acuerdo del Consejo del Partido Demócrata Cristiano, quien, junto con ratificar las determinaciones del presidente y de la Directiva Nacional del partido, en el sentido de que las conversaciones debían darse por terminadas y reanudarse la tramitación del proyecto y los vetos en el Congreso Nacional, trasladaba a este organismo la posibilidad de que en dicha instancia se produjera que permitieran superar el conflicto existente, lo que para el Consejo dependería fundamentalmente de la actitud que asumiera el Poder Ejecutivo.

Consecuente con el citado acuerdo del Consejo del Partido Demócrata Cristiano, los miembros de la Comisión de la Unidad Popular, nos dirigimos nuevamente al senador Renán Fuentealba, con fecha 4 del presente mes de julio, exponiéndole que dentro del propósito anunciado por el Consejo de su partido en el sentido de ser posible que en el Congreso Nacional se produjera la solución de estos problemas nos parecía necesario sintetizar el grado de acuerdo que se había alcanzado hasta esta fecha.

Nos referimos en aquella oportunidad a cada una de las materias tratadas en las comisiones conjuntas, puntualizando el grado de acuerdo alcanzado a fin de dar relevancia a las escasas diferencias que aún existían. Estas materias fueron las siguientes:

1. Facultad para nacionalizar o expropiar 90 empresas

Se puntualiza en la carta las tres empresas respecto de las cuales hubo consenso de las comisiones negociadoras para retirarlas de la lista de nacionalizaciones o expropiaciones; la conformidad de incorporar otras cuatro en que el Estado había adquirido derechos en forma mayoritaria, y, por último, la agregación de la lista de las instituciones bancarias particulares, de conformidad con el entendimiento a que se había llegado respecto de la nacionalización de esta actividad. Se llegaba así a una enumeración explícita y nominativa de 100 empresas y bancos que serían nacionalizadas o expropiadas. Dado que en dicha lista no figuraba la Empresa Manufacturera de Papeles y Cartones, se hacía la salvedad y se dejaba constancia por nosotros, que esta circunstancia no involucraba compromiso alguno al respecto para que el gobierno de la Unidad Popular, especialmente en cuanto a su libertad para obtener la incorporación de dicha empresa al área social de la economía, sin perjuicio de mantener su criterio, reiteradamente expuesto a los negociadores de la Democracia Cristiana en el sentido de facilitar la creación de un organismo autónomo encargado de administrar todo cuanto concierne a la producción de papel para diarios e imprentas y a la asignación de las cuotas respectivas.

2. Bancos

En cuanto a las instituciones bancarias, actualmente la proposición del Gobierno de derogar las disposiciones que prohíben la participación de los trabajadores bancarios en los directorios, planteando en su reemplazo el establecimiento de un sistema de plena participación, basado en que cada directorio quede constituido por cinco representantes del capital, un gerente designado por el Estado y cinco representantes de los trabajadores del respectivo banco, elegidos en votación directa, impersonal y secreta. Puntualizábamos la coincidencia con los representantes de la Democracia Cristiana, en que, para abrir paso a una tan amplia participación, correspondía autorizar por ley la expropiación de los saldos de acciones en manos de particulares, completando el establecimiento de la propiedad estatal sobre todo el capital bancario; pero que dichos negociadores habían reclamado que cuatro instituciones bancarias –los Bancos de Chile, Sudamericano, Edwards y Crédito e Inversiones– tuviesen un directorio diferente, formado por siete representantes de sus respectivos trabajadores, y tres del Estado –con ciertas facultades decisorias en materias determinadas– y la elección del gerente por tal directorio, debiendo contar con el voto favorable de los personeros estatales. Añadíamos que se había aclarado a satisfacción de la comisión negociadora de la DC, que circunstancias de hecho impedían incluir en esta modalidad al Banco Edwards. Respecto de los otros tres bancos, expresábamos la aceptación de la proposición de la DC, quedando por aclarar sólo quién sería el presidente de cada uno de ellos y que a nuestro juicio debería ser un representante estatal con derecho a voz y voto en el directorio. Concluíamos, respecto de materias bancarias, que estimábamos así en lo substancial con incidentes la posición aceptada por ambas partes, puntualizando que en relación con esta actividad no se había discutido, por obvio, que las tres instituciones mencionadas quedarían encuadradas dentro del sistema bancario general del país, ya que sería inconcebible imaginarlos al margen de la tuición y conducción que al Banco Central y a la Superintendencia respectiva corresponde en esta materia.

3. Normas de indemnización de las empresas nacionalizadas, expropiadas o reservas al Estado

Expresamos sobre esta materia al senador Fuentealba en la mencionada carta, que el régimen de indemnización de estas empresas sería, en principio, el mismo establecido en el proyecto de ley de las tres áreas de la economía, despachado por la Cámara de Diputados, que contiene los criterios sustentados al respecto por el PDC, y agregábamos que quedaba pendiente al respecto de la remisión en común de las siguientes materias: plazo, naturaleza y forma de liquidación y pago de los bonos, integración del Tribunal de reclamos y recursos contra sus resoluciones.

4. Empresas mixtas

Manifestábamos sobre empresas mixtas que nosotros habíamos entregado un proyecto redactado de acuerdo con los criterios generales de ambas comisiones y que hasta la fecha del envío de la carta, no había habido observaciones de parte de la comisión de la DC.

5. Definición de pequeña y mediana propiedad y del grupo familiar

Decíamos que estaba aprobado de común acuerdo el texto del proyecto de ley sobre estas materias.

6. Actividades reservadas al Estado

Aludíamos a un documento emanado del Departamento Técnico de la DC entregado con posterioridad a la redacción conjunta del proyecto, conteniendo criterios que se estaba de acuerdo en desestimar; y que subsistía, en consecuencia, el temor del proyecto aprobado conjuntamente sobre el particular.

7. Atribuciones CORFO y otros organismos estatales

Expresábamos que el proyecto referente a estas atribuciones estaba aprobado por ambas comisiones.

8. Régimen de participación

Afirmábamos que el criterio de la Unidad Popular había quedado fijado en la observación (veto) referente a esta materia y que dicho criterio había sido aprobado en sus líneas generales por la DC al vetarse tal observación en la Comisión de Legislación y Justicia del Senado. Se recordaba que las comisiones negociadoras habían acordado que este mismo sería el criterio base para la redacción del proyecto conjunto.

9. Empresa de trabajadores

Enunciábamos que ambas comisiones habían concordado en que las empresas de trabajadores no se establecerían en áreas estratégicas de la economía o monopólicas, y que por nuestra parte habíamos aclarado que cuando una empresa pasa a ser de “trabajadores”, debe de dejar de intervenir en su propiedad el capital privado, como asimismo que los derechos de participación

2626 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

en la empresa de trabajadores tienen que corresponder a todos ellos, inclusive aquellos que se desempeñan en un momento dado como trabajadores temporales. Agregamos que, previa consulta a los trabajadores respectivos, habíamos aceptado que podían constituirse como empresa de trabajadores la totalidad de las correspondientes a los sectores textil y del calzado, cuyo capital hubiese sido al 31 de diciembre de 1969 de 14 millones de escudos o más, figurasen o no en la lista de las 90 empresas. Reproducimos, a fin de sintetizar nuestro criterio, lo expuesto por el Ejecutivo en las observaciones al proyecto de reforma constitucional, donde se expresa lo siguiente:

“En efecto, el Gobierno propicia el más amplio sistema de participación de los trabajadores en la administración de las empresas del área social y en las del área mixta controladas por el Estado. Se acepta también que los trabajadores administren por cuenta propia, ciertas empresas que no operen en actividades económicas esenciales que deben reservarse al Estado; que los trabajadores no posean la propiedad individual de los medios de producción de la empresa, y que no haya reparto de utilidades entre los trabajadores, sino que los excedentes –estimados en el conjunto de la rama de producción respectiva– no accedan en beneficio individual, sino que sean capitalizados socialmente o repartidos en beneficio social”. Por último decíamos respecto de las empresas de trabajadores, que habíamos coincidido en que a fin de hacer factible la experiencia era preciso establecer un sistema nacional que permita acrecentar el control de los trabajadores sobre el aparato productivo, como asimismo capitalizar socialmente el excedente. Dicho sistema debería contener normas sobre el grado de autonomía de cada empresa a fin de evitar desviaciones particularistas.

10. Publicidad

En nuestra carta expresábamos que ya se había llegado a un acuerdo para establecer un sistema de distribución equitativo de todos los recursos para la publicidad estatal que aborde campañas de interés general, y del 50 por ciento de los recursos publicitarios de las grandes empresas de las 3 áreas de la economía.

11. Regulación de precios

Expresábamos que había habido acuerdo para constituir una Comisión Administrativa para conocer de los reclamos sobre regulación de precios y que sólo restaba precisar la integración de dicha comisión.

12. Requisiciones e intervenciones

Puntualizábamos en nuestra carta que existía acuerdo en el texto del proyecto sobre reglamentación de las requisiciones e intervenciones, quedando

pendiente sólo la decisión de quién o quiénes actuarían como Tribunal Administrativo Provisional en tanto se creara una Corte Administrativa.

A nuestra carta –sintetizada en los párrafos anteriores– dio respuesta el senador Fuentealba puntualizando algunos detalles de apreciación que en sí mismo no desvirtúan la conclusión del alto grado de acuerdo a que se había llegado en las conversaciones con los representantes del PDC, siendo las materias aún en discusión de escasa relevancia si se atiende a la magnitud general del asunto y a los aspectos en que ya existía entendimiento.

Este grado de acuerdo y la recordada decisión del Consejo del PDC de que se situara en el Parlamento la posibilidad de producir soluciones definitivas, indujo al Ministro de Justicia a tomar contacto directo en el Senado con dirigentes de ese partido. Fruto de estas conversaciones fue el acuerdo alcanzado en la tarde de ayer, después del Consejo Extraordinario del PDC celebrado en el mediodía en el cual aprobó la gestión de sus mandatarios. Este acuerdo se refería a los siguientes puntos:

Acuerdo proyectado

a) El Ejecutivo retiraba de inmediato alguna de las observaciones o vetos al proyecto de Reforma Constitucional sobre áreas de las economía, referentes especialmente a la exigencia de ley especial para el establecimiento de dichas áreas, a la vez que presentaba, también de inmediato, un proyecto de ley referente a definiciones de la pequeña y la mediana propiedad rústica, la pequeña y mediana empresa industrial, extractiva y comercial y de familia, todo para los efectos de la garantía constitucional respectiva; sobre el régimen de las actividades reservadas al Estado; la reglamentación de las facultades sobre requisiciones e intervenciones, y, por último, sobre adquisición por los organismos de Estado de empresas privadas o derechos en ellas;

b) Por su parte, el PDC se comprometía a aceptar y apoyar en el Congreso el proyecto de ley a que se ha hecho mención, sin perjuicio de reservarse su parecer respecto a algunas materias no substanciales contenidas en el mismo proyecto, las cuales serían objeto de examen por las comisiones de la DC y de la UP que habían participado en las discusiones, a fin de llegar a un pronto entendimiento que se materializaría en indicaciones al proyecto.

c) En el proyecto, además, se definiría el concepto de “trabajadores permanentes” para los efectos de la Reforma Constitucional en cuanto agrega un nuevo inciso al N° 10 del art. 10 de la Constitución;

d) El citado proyecto de ley sería tramitado con urgencia y el apoyo a él de la DC –en las materias señaladas– se mantendría en cualquiera que fuera la suerte que corrieran las conversaciones sobre las observaciones al proceso de Reforma Constitucional no afectadas por el compromiso;

e) En todo caso, y siendo las disposiciones vigésima y vigésimoprimeras transitorias del proyecto de Reforma Constitucional, normas que reglamentan algunas de las materias sostenidas en el proyecto de ley en referencia, la DC votaría favorablemente las observaciones supresivas de las mismas, y;

f) Por último, la discusión de las observaciones o vetos al proyecto de Reforma Constitucional no se reanudaría antes del 16 del presente mes de julio, esto es, después de la elección extraordinaria de un diputado por Coquimbo.

Boicot del PIR

El Ministro de Justicia, una vez convenido este compromiso, obtuvo del Presidente de la República la firma tanto de oficio de retiro parcial de los vetos como el proyecto de ley mencionado. Sin embargo, al llegar con ambos instrumentos a la Vicepresidencia del Senado para ultimar los trámites que materializaban la gestión, fue informado por el senador Fuentealba que todo había fracasado en razón de que el Partido de Izquierda Radical se negaba a retirarse de la sala del Senado a fin de no dar quórum para la sesión en que empezaría minutos más tarde, la votación de las observaciones, ya que los senadores de dicho partido junto a los nacionales y los radicales democráticos daban número necesario para reunirse y votar las observaciones.

Inconstitucional

Puestas en votación las observaciones en la sesión del Senado, la mesa de esa corporación, frente a los requerimientos de los senadores de la Unidad Popular de que, acerca de que si el Senado insistía o no, por los dos tercios declaró que a su juicio no correspondía, de acuerdo a la Constitución, votar sobre la insistencia.

En esa forma, se consumó la infracción a la Carta Fundamental, que da origen a un conflicto Constitucional y político cuya gravedad y efecto no es posible prever pero que sin duda dañará el estilo de convivencia de los chilenos.

En este evento el Gobierno de la Unidad Popular usará todos los mecanismos que la Constitución prevé para dar solución institucional al conflicto, consciente de que ella será obstaculizada por la oposición, que ha anticipado que no acatará las decisiones del Tribunal Constitucional. El conflicto se produce no sólo por diferencias sobre las materias que abarcan la Reforma Constitucional y las observaciones, sino también por otras razones de mayor gravedad. En primer lugar, se busca un desplazamiento del centro del poder político del Estado desde el Presidente de la República al Congreso Nacional, por efecto de las tesis de que en la tramitación de la Reforma Constitucional la simple mayoría en ejercicio del Congreso puede imponer su criterio sobre el del Primer Mandatario. En segundo lugar, se busca cerrar el camino a la legalidad del proceso revolucionario de la Unidad Popular derogando facultades actuales e impidiendo el establecimiento de una nueva legalidad, más adecuada a la dinámica del proceso político chileno.

Lo anterior es la resultante de la desembozada defensa de los intereses y privilegios de los monopolios y de la derecha, y representa una actitud no sólo conservadora, sino reaccionaria. Desde ese punto se perfila claramente que la lucha política entre la Unidad Popular y la oposición es la lucha entre bur-

guesía reaccionaria y el pueblo trabajador, cosa que tienen que comprender los sectores de trabajadores engañados por la oposición. Hemos asegurado que el cauce democrático y constitucional del proceso revolucionario, de manera que cuando se pretende por la oposición defender lo que llaman la libertad de prensa, la democracia y la libertad política, lo que realmente defienden es el monopolio, el fundo y el poder que ejerce el dinero.

El Gobierno está en la razón y defiende la Constitución y la ley, porque ello es defender los intereses del pueblo. Sostenemos que la Constitución exige al Congreso que insista por los dos tercios de sus miembros presentes en un proyecto de Reforma Constitucional para que éste pueda subsistir y sostenemos que el Tribunal Constitucional es competente para conocer de las infracciones a la Carta Fundamental que se produzca en la tramitación de una Reforma Constitucional, por las siguientes razones.

Razones políticas

En Mensaje con que el Presidente Frei envió al Congreso el proyecto de Reforma Constitucional que comenzó a regir en 1970, expresa claramente que se quiso establecer otra posibilidad, paralela a la existente, para llegar a plebiscito en materia de Reforma Constitucional, debido a que era muy difícil reunir el quórum de la mayoría en ejercicio para aprobarla y eso impedía reformar la Carta Fundamental.

Hasta ese momento la consulta prebiscitaria sólo era posible respecto de los textos observados por el Presidente de la República en que el Congreso insistiere por los dos tercios de ambas Cámaras. Sin modificar esta situación se agregó a ella el caso de rechazo total del proyecto. En este evento la base del plebiscito es la negativa del Congreso a reformar la Constitución, en circunstancias que el Presidente de la República cree necesario una Reforma. El problema puede ser resuelto a través de una consulta a la ciudadanía. En cambio, cuando el plebiscito se refiere a las materias vetadas por el Presidente de la República, se parte de la base de que hay acuerdo general para reformar la Constitución, pero existen discrepancias sobre la forma de hacerlo. En principio, esta discrepancia puede ser resuelta a través del procedimiento usual de formación de la Ley, dentro del cual la facultad de vetar el proyecto aprobado por el Congreso significa que el Presidente puede impedir que se dicte una norma o que ella sea establecida en forma distinta a la que él estima conveniente, y su criterio se impondrá a menos que una mayoría del Congreso tan alta como los dos tercios prime sobre su voluntad. En caso contrario no habrá ley sobre la materia, porque la esencia del veto es impedir la dictación de una nueva norma.

Desde el punto de vista político y como resulta claramente de la historia y contenido de la Reforma Constitucional de 1970, ésta tuvo por objeto dotar de mayores atribuciones al Presidente de la República, en claro desmedro del Congreso, de manera que sería absurdo suponer en un aspecto tan importante que la reforma pudiese debilitar hasta tal punto al Poder Ejecutivo que lo dejare sometido, atado de pies y manos, a la mayoría del Congreso.

Razones históricas

En ninguna acta, informe o debate de los numerosos producidos durante la discusión de la Reforma Constitucional de 1970 se contiene la menor constancia de que el propósito del constituyente hubiere sido el de variar los quórum de votación relativos a las observaciones. Las constancias que existen indican todo lo contrario. En informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, se dijo expresamente que no había otra excepción en la materia que la contenida en el actual inciso final del Artículo 108 de la Constitución. Esa excepción consiste en que para aprobar las observaciones es necesaria mayoría de los miembros en ejercicio en ambas Cámaras. En todo lo demás seguía aplicándose la regla contenida en el Artículo 54 de la Constitución, por efecto de la referencia que a ella hace el inciso 1° del Artículo 108. En consecuencia, es irrefutable, a la luz de este antecedente histórico, que el Congreso, cuando vota sobre una observación supresiva o sustitutiva y en caso que la rechace, debe proceder a votar por segunda vez sobre si insiste o no en mantener el texto que originalmente aprobó, y que para ello necesita de los dos tercios de los miembros presentes.

Razones jurídicas

La interpretación recién afirmada se desprende con absoluta claridad del tenor del Artículo 108. De acuerdo con el inciso 1° de esta disposición, el Proyecto de Reforma Constitucional se somete a la misma tramitación que el proyecto de ley, sin otras excepciones que las que el mismo Artículo y el Artículo 109 establecen. Ahora bien, en lo relativo a las observaciones o vetos hay sólo dos excepciones: la primera, relativa al contenido de las observaciones y la segunda, referente al quórum para aprobarlas. En Derecho, toda excepción a una regla general debe ser expresa y clara y, según se comprueba, no existe tal excepción en lo relativo a la votación de insistencia en los textos vetados y al quórum para mantenerlos.

Es efectivo que el simple rechazo de la observación otorga al Presidente de la República la facultad de llamar a plebiscito sobre el particular, si lo estima necesario. En otras palabras, no es indispensable que el Congreso insista por los dos tercios de sus miembros presentes en el texto originalmente aprobado por él para llamar a plebiscito. Pero de ello no puede deducirse que, a falta de plebiscito, se imponga el criterio del Congreso. Lo que simplemente acontece es que no hay ley sobre la materia, y si no la hay, el Presidente no tendrá necesidad de llamar a plebiscito cuando se trata de vetos sustitutivos o supresivos.

Por otra parte y desde un punto de vista lógico y formal, resulta absurdo sostener que el Congreso está en condiciones de mantener su criterio frente a un veto supresivo y sustitutivo, con una mayoría inferior a la que debió reunir para aprobar el artículo vetado. Sería absolutamente inútil que el Presidente reiterase sus planteamientos sobre el particular en forma de observaciones supresivas o sustitutivas, sabiendo de partida que un número inferior de parlamentarios

que el que antes fue necesario para rechazar su criterio, va a poder rechazarlo nuevamente al momento de observar el proyecto.

Es obvio entonces que la absurda y forzada interpretación constitucional que sustenta la oposición no tiene el menor asidero jurídico, siendo, por el contrario, de fundamento e intencionalidad netamente político. Lo que se quiere es hacer de la reforma constitucional un mecanismo de Gobierno, más flexible de manejar que la propia ley, y cuyo efecto práctico es entregar a la mayoría del Congreso la conducción política, gubernamental y administrativa que la Constitución confía claramente al Presidente de la República. La derecha reaccionaria, al comprobar que ha perdido toda influencia en el Poder Ejecutivo, vuelve a refugiarse en el Congreso y pretendiendo hacer retroceder la historia, quiere volver a cambiar el régimen presidencial de gobierno que ella creó y fortaleció, por un régimen parlamentario de gobierno.

Defensa prerrogativas

La gravedad política y jurídica de este ataque a la Constitución y al régimen de gobierno chileno, obliga al Poder Ejecutivo a recurrir al Tribunal Constitucional, instancia superior establecida por la Carta Fundamental para resolver de este tipo de discrepancias. La oposición, que no trepida en quebrantar la Constitución al alterar los quórum para votar las observaciones a la Reforma Constitucional, vuelve a quebrantarla en este punto, anticipando que no acatará la decisión del Tribunal Constitucional, cuya competencia niega. Mientras se acusa al Poder Ejecutivo, infundadamente, de no respetar las decisiones judiciales, no se tiene el menor escrúpulo para desacatar pública y anticipadamente el fallo del más alto Tribunal de la República. Es esta actitud de la oposición la que da mayor permanencia al conflicto institucional producido. Mientras el Ejecutivo ha declarado que se atenderá a lo que resuelve el Tribunal Constitucional, la oposición anticipa su rebeldía. Profesores de Derecho Constitucional de filiación derechista, como los señores Alejandro Silva Bascuñán y Jorge Ovalle, reconocieron durante el debate de la reforma que nacionalizó la Gran Minería del Cobre, que la competencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, la que por lo demás se desprende en forma irrefutable del inciso primero del artículo 108 en cuanto, siendo el reclamo al Tribunal Constitucional una instancia propia de la tramitación de un proyecto de ley, ella es también procedente en la de una Reforma Constitucional, en cuanto no se ha hecho excepción expresa al respecto.

Agotados los posibles caminos del diálogo, sólo resta esperar que el normal funcionamiento del sistema institucional resuelva el conflicto planteado, sistema dentro del cual la última palabra corresponde al pueblo”.

Salvador Allende: Discurso al país por radio y televisión

(10 de julio de 1972)

“Conciudadanos:

Hace algunos meses, al dirigirme al país, como lo he venido haciendo periódicamente, informé acerca de los acontecimientos políticos más trascendentes del momento, adelanté algunas consideraciones sobre otros, entonces en gestación, y advertí que, de concretarse éstos, tendrían graves consecuencias en la vida democrática nacional. En efecto, en las últimas semanas se han sucedido acontecimientos de relevancia para Chile. Han sido la culminación de hechos anteriores y, a su vez, van a influir en el futuro de nuestra convivencia.

Frente a las profundas transformaciones que están siendo llevadas a cabo por el Gobierno Popular, los poderosos intereses económicos capitalistas afectados no han cesado en su propósito de preservar su dominio y detener la acción revolucionaria de los trabajadores. Las grandes empresas del imperialismo, cuyas pertenencias en Chile hemos recuperado para la Patria, han ensayado, están buscando y continuarán intentando minar las bases de nuestro Gobierno por diferentes medios, incluida la provocación de una crisis económica y sin importarles el derramamiento de sangre de nuestros compatriotas. Esto, hasta hoy, demostrado plenamente y comprobado con documentos para escándalo del mundo entero.

Nuestra experiencia revolucionaria concentra sobre Chile las esperanzas de muchos pueblos, pero, también, concita los temores del capitalismo mundial. Múltiples medidas han sido adoptadas para perjudicarnos. Algunas las conocemos, como la presión ininterrumpida sobre el Gobierno norteamericano, para que se emplee a fondo en aniquilar nuestra democracia o para que suprima bruscamente los créditos necesarios para importar tantos y tantos bienes indispensables para nuestra economía. Desde materia prima para telas, hasta respuestas y autobuses para el transporte colectivo. Pero, ¿qué duda cabe que sólo hemos identificado una mínima parte de los hechos?

Cada cierto tiempo, es la propia prensa de los EE.UU. la que se encarga de demostrarnos a nosotros los chilenos que el tal plan de intervención contra la Patria fue organizado en 1970, 1971, o en el presente año.

A medida que pase el tiempo, aparecerá más evidente la temible maquinaria internacional que nuestro pueblo tiene que vencer. Hora tras hora, debemos continuar avanzando por el duro camino de recuperar nuestros recursos básicos y establecer la democracia económica.

Si bien los documentos de la conspiración del capitalismo internacional son publicados en el exterior, sus efectos los estamos sintiendo aquí todos los días.

Hace apenas una semana, uno de los más importantes periódicos de los EE.UU., el "New York Times", reveló el programa entregado en octubre pasado por la I.T.T. al Gobierno de ese país, para crear las condiciones que desencadenaran un golpe de Estado antes de abril. Comprendía diversas medidas: desde provocar crisis económica, hasta retardar el suministro de combustible para las Fuerzas Armadas, y precipitar un enfrentamiento violento entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

El plan lo conoceremos ahora. Pero el intento frustrado de golpe tuvo lugar el pasado mes de marzo, como el Gobierno oportunamente denunció. Hace poco, uno de los conspiradores, así lo reconoció públicamente tras su fuga a Bolivia, develando lo que tercamente negaron políticos de oposición y la prensa adicta a ellos, después de nuestra denuncia.

Es mi deber rechazar, interpretando el sentido patriótico de la gran mayoría de los chilenos, todo intento de ingerencia foránea en los asuntos internos. Pero, es también mi obligación preservar la convivencia y el régimen democrático así como prevenir acerca de los conflictos artificialmente provocados que los pueden afectar.

Recordemos que entre diciembre y enero, la mayoría de oposición en el Parlamento llegó a violar hasta cuatro veces la Constitución, negando las facultades más importantes con que cuenta el Presidente de la República para poder gobernar. Se llegó hasta el extremo de exigir a los ministros responsabilidad política ante el Congreso, cuando constitucionalmente sólo responden ante el Presidente. Se cuestionó el derecho del Jefe del Estado de designar discrecionalmente a los ministros. Se quiso negar al Gobierno parte de la libertad de acción para elaborar el presupuesto nacional. Por último, se pretendió desconocer la calidad de legislador del Ejecutivo al calificar sus vetos a la Ley de Arrendamientos.

De esta manera, durante los meses de enero y febrero nuestra Constitución, de estructura presidencialista, experimentó el grave peligro de ser demolida en su esencia y transformada en parlamentaria.

El Gobierno defendió la Carta Fundamental.

La oposición se obstinó en atropellarla imponiendo su mayoría de votos en el Congreso. Tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional para resolver el conflicto, dando plena razón al Gobierno y tuvieron que intervenir los Tribunales de Justicia para absolver a José Tohá, Ministro del Interior, demostrando así el acto ilegítimo y político en que había incurrido la oposición al aprobar la acusación constitucional en su contra.

Durante este artificial enfrentamiento entre el Congreso y el Gobierno, el sistema político de nuestro país se vio amenazado en sus pilares fundamentales. Aquellos acontecimientos encerraban una extraordinaria gravedad para la plena vigencia del sistema democrático.

Como primer responsable del buen funcionamiento de nuestras instituciones, garantía de paz y orden entre los chilenos, me entregué a fondo en

la defensa de la Constitución, requisito para que el proceso revolucionario avance por el camino pluralista y democrático que nos hemos trazado.

¿Qué está pasando en nuestro país? Algo fácil de entender: quienes nunca han abandonado la ilusión de un golpe y ansían la lucha fratricida como medio de preservar la propiedad privada de las grandes empresas, de bancos y latifundios, de mantener sus privilegios de clase, han sacado experiencia de sus fracasos, e intentan, ahora, alcanzar el mismo objetivo destruyendo las instituciones democráticas.

Para ello han querido atar al Gobierno de pies y manos bajo la máscara protectora de los votos en el Congreso. En cinco oportunidades ha ensayado la derecha reaccionaria destituir a Ministros de Estado. Una sola vez llegaron a la destitución, para encontrarse con que los tribunales la desautorizaban y se pronunciaban en favor del Gobierno.

De nuevo ahora, en forma abusiva, usan de la mayoría de votos en el Congreso para dificultar que un trabajador, Hernán del Canto, continúe siendo Ministro del Interior. Y, simultáneamente, desaforan al Intendente de Santiago, Alfredo Joignant.

Ministro del Interior e Intendente de Santiago, eficientes, correctos e ideóneos funcionarios, son atacados por negarse a usar la fuerza pública para reprimir a obreros y campesinos, a aquellos de nuestros conciudadanos en situación más postergada y explotada.

Pues bien, que lo sepan de una vez por todas quienes siempre han reprimido a los trabajadores: Por más votaciones que haya en el Congreso mi Gobierno continuará protegiendo a los pobres y castigando la insolencia prepotente de los poderosos, cumpliendo con la ley y nuestra conciencia revolucionaria.

Debo, sin embargo, manifestar que más allá de las confrontaciones en torno de cada uno de los conflictos que se vienen sucediendo, se desarrolla un fenómeno de mucha mayor significación. Un régimen institucional es sólo en la medida que la mayoría de los ciudadanos crea en él.

La utilización que la oposición hace del Congreso para acusar a miembros del Gobierno, no sólo viola abiertamente la Constitución, sino que desvirtúa las tareas que son propias del Parlamento, llevándolo al desprestigio, por los mismos que dicen enaltecerlo.

En estos momentos, cuando tantos y tantos problemas urgentes tenemos que resolver, jugar a derribar ministros, sabiendo que legalmente yo los puedo volver a nombrar mañana, es distraernos de lo fundamental para caer en la irresponsabilidad ciega, aunque me asalta el temor de que no sea tan ciega esta irresponsabilidad.

Baste recordar el plan diseñado por un político tenebroso y aceptado por otros, de querer acusar al propio Presidente de la República.

Unos conspiran y otros quieren dar ropaje constitucional a la sedición.

La escalada ha sido clara: en primera instancia, paralizar la acción del Gobierno. Detener el proceso de cambios, en segunda. En tercera instancia, cuestionar la misma naturaleza del poder que ejerce el Jefe del Estado.

Yo invito a todos los chilenos a reflexionar sobre la dinámica en que están moviéndose los privilegiados de ayer, los capitalistas de dentro y de fuera.

La crisis política que quisieron provocar el pasado mes de enero, habría sido insoluble si el Tribunal Constitucional no hubiera arbitrado, de acuerdo con el mandato que el impone la Ley Suprema de la República.

En febrero al aprobar el Congreso un Proyecto de Reforma Constitucional, quiso de nuevo la oposición negar las facultades legales del Presidente de la República.

Pero, para que el conflicto de poderes no tuviera esta vez solución conforme a la Carta Fundamental, personeros de la mayoría del Congreso se han anticipado a negar la competencia del Tribunal Constitucional.

¿Qué buscan por este camino? No otra cosa, sino desconocer la fuerza del derecho y de la ley.

Pero esto deja al país al borde del enfrentamiento.

¿Es esto lo que buscan? Que el Congreso quiera inhabilitar a un tribunal independiente, único capaz de decidir si es competente o no, es exactamente equivalente a que el Gobierno inhabilite a otro tribunal independiente como es la Corte Suprema.

Si hoy el Congreso desconoce al Tribunal Constitucional, porque no quiere someterse a su arbitraje, conforme a su derecho; y si mañana el Gobierno tomase pie en este precedente y desconociera a la Corte Suprema. ¿Qué quedaría en Chile del régimen de derecho. Nada, absolutamente nada.

Con los tribunales inhabilitados, cada cual tendría que verse sometido al solo límite de la fuerza que los demás podrían imponerle. Significaría, sencillamente, acabar con la organización cívica de nuestra República, mientras se consolidaba quien más capacidad de violencia demostrase.

Con su actitud, cierto sector de la oposición está buscando un enfrentamiento entre Gobierno y Parlamento, así como provocar una situación semejante entre Gobierno y Poder Judicial.

Desean llevar al país a una crisis total.

Pero no es esto lo que la gran mayoría de los chilenos quiere. Yo he sido elegido Presidente de la República para dirigir la revolución, no para dejar resbalar el país en la anarquía. Yo soy Presidente, porque el pueblo y la Constitución así lo imponen.

Por eso, mi deber es defender la Constitución, para que el pueblo chileno continúe adelante su esfuerzo de liberación y progrese en paz.

Pero no basta con tener la razón del derecho y la fuerza del Gobierno. Para asegurar las condiciones de la convivencia entre nuestros compatriotas se requiere la suma de voluntades coincidentes de todos aquellos que juntos significan la inmensa mayoría de la nación.

Se bien que los interesados en acumular hechos que progresivamente vayan dividiendo a nuestro país en dos bandos irreconciliables, son una despreciable minoría. Despreciable en su número y, sobre todo, en la mezquindad de su egoísmo.

Tras los partidos de oposición, más allá de ellos, hay muchos campesinos, obreros, trabajadores independientes, empresarios o medianos propietarios absolutamente contrarios a que se impongan los torvos designios foráneos o criollos. Por esta razón, aunque legalmente el Gobierno dispone

de las facultades para no promulgar y, por consiguiente, no dar validez jurídica a una reforma que la oposición en el Congreso despacharía indebidamente –al desconocer normas constitucionales sobre tramitación parlamentaria de los vetos– no quise limitarme a esperar la oportunidad de ejercer las atribuciones que la Constitución otorga al Presidente de la República.

Por iniciativa personal invité al diálogo sobre la materia en litigio y busqué un acuerdo que hiciera innecesaria la imposición del respeto a la Constitución por las vía de autoridad. En las presentes circunstancias del desarrollo del proceso revolucionario, pocos hechos encierran mayor riesgo para la estabilidad de las instituciones democráticas en Chile, que el desajuste entre la realidad socioeconómica, por un lado, y las formas jurídicas, por otro.

Como manifestara en mi segundo mensaje al Congreso el pasado veintuno de mayo:

“No es realista pensar que el principio de legalidad y el estado de Derecho, puedan dejar de cumplir la función ordenadora y dinámica que les debe ser propia, para convertirse en una barrera al desarrollo social. Si tal cosa ocurriera, las fuerzas del cambio se impondrán”.

“Pocos peligros más graves acechan a nuestro régimen institucional, que la rigidez o lentitud de los cambios jurídicos, en medio del actual período de transformaciones aceleradas. Por eso el Gobierno no cesará en impulsar la actividad legislativa, de modo correspondiente a las exigencias de la realidad”.

Conscientemente para algunos, o inconscientemente para otros, la Reforma Constitucional que intenta imponer la oposición en el Congreso, es una carga explosiva de alcance ilimitado para nuestra convivencia ciudadana y nuestro desarrollo económico-social.

Compatriotas:

Les pido tengan la ecuanimidad de considerar fríamente lo que les expongo: La Reforma no sólo procura negar el hecho irreversible de que las más importantes empresas han alcanzado el nivel histórico de ser propiedad de todos los chilenos, y no de unas personas individuales. Por eso, su dirección está en manos de los trabajadores de cada empresa y del Estado, y no de domésticos del capital.

La Reforma no sólo intenta fijar, inmovilizar, la marcha de los trabajadores, contra los mecanismos capitalistas del actual régimen económico.

En otros términos, no sólo quiere negar el presente y cerrar el futuro socialista para nuestra economía, sino que, lo que es más temerario, el texto aprobado por la oposición es víctima del espejismo de querer hacer retroceder el reloj del tiempo.

Vana ilusión, en la que siempre han incurrido los sectores superados por la Historia.

En este caso, sin embargo, sostengo que es una pretensión temeraria, porque la oposición llega hasta el absurdo de querer suprimir las facultades que las exigencias de nuestra economía han confiado al Estado.

Valga un solo ejemplo: La CORFO, espina dorsal de la industrialización de Chile, –legado del Presidente Aguirre Cerda–, debería tener, según ese texto, menos facultades ahora que en mil novecientos treinta y nueve.

Vana pretensión, la de negar las leyes básicas de la economía. No es el Gobierno quien se ha dado las atribuciones de la CORFO, sino que es la estructura y la dinámica de la economía de Chile la que ha generado las diversas atribuciones legales encomendadas al Estado, y que la Reforma quisiera suprimir.

Los capitalistas llegan, en su afán, hasta querer negar lo que la realidad impone.

El modelo económico subyacente en la Reforma aprobada por el Congreso, estaría, en los hechos, irremediablemente condenado a fracasar. Pero este fracaso implicaría una perturbación en el funcionamiento de nuestra economía, que sumiría al país en la más incontrolable de las catástrofes.

No estamos dispuestos a que los propietarios privados de 91 empresas, y que representantes políticos, arrastren nuestra economía a situaciones objetivamente desastrosas, para impedir que la clase trabajadora adquiera la propiedad de los medios de producción fundamentales.

Tampoco estamos dispuestos a tolerar que la Constitución sea negada para dar gusto a los empresarios. Y no estamos dispuestos a ello porque el desconocimiento de la Constitución significaría empujar al país por una pendiente, que empieza en la crisis política del enfrentamiento de poderes y no sabemos dónde termina.

Los trabajadores y todos los chilenos pueden estar tranquilos. El Gobierno mide en su real alcance el juego de los capitalistas y hará uso de todo su poder para impedirlo.

Puedo afirmar que, en mi esfuerzo por dialogar con aquellos que estando en la oposición sostienen ser partidarios de los cambios y hasta del socialismo, el Gobierno hizo todo lo posible para llegar a un entendimiento, sin otra condición que preservar el respeto a las exigencias del desarrollo del país y a la Constitución.

El Ministro de Justicia ha hecho públicos los pormenores de la negociación. Por mi parte, puedo asegurar a los trabajadores simpatizantes de la Democracia Cristiana, que cuando este partido concretó lo que entendía por "Empresa de Trabajadores", el Gobierno mostró su conformidad con ella. Que la clase trabajadora sea dueña de los medios de producción y no servidora del capital es lo que define al socialismo.

Tras varias semanas de conversaciones, llevadas con toda responsabilidad y consecuencia programática por los personeros del Gobierno, me es posible afirmar que se llegó virtualmente a un acuerdo general con la directiva máxima del Partido Demócrata Cristiano, hasta el punto de que, en la tarde del día cinco, acepté el retiro de algunos vetos y el envío de un Proyecto de Ley sobre el cual existía un principio de acuerdo.

En ese momento, ciertos parlamentarios opositores impidieron la concreción de este acuerdo.

No corresponde al Gobierno, entrar en los problemas internos de definición del Partido Demócrata Cristiano: Si está porque las empresas sean de los trabajadores, como su directiva acordó con el Gobierno, o porque los monopolios textiles sean propiedad de empresarios privados, como sostuvo en

el Senado uno de sus parlamentarios, tras el quebrantamiento del acuerdo con el Gobierno, cuando afirmó que no podría haber empresas de trabajadores en el área textil, ya que éstas nunca habían dejado de ser propiedad de sus patrones.

Lo que sí compete al Gobierno es asegurar el normal funcionamiento del régimen democrático, que empieza por la plena vigencia de la Constitución, así como tomar las medidas para que el desequilibrio entre la realidad revolucionaria en desarrollo.

Y lo que la oposición capitalista pretende imponer en el Congreso, lleve al país a una situación de caos incontrolable.

La Constitución ha previsto los mecanismos para dirimir estos diferendos y darles solución. Cuando el Congreso aprueba un proyecto de ley, el Presidente puede interponer su derecho de veto y pedir la supresión o sustitución del texto. El Congreso sólo puede imponer su voluntad, sobre el Presidente, si dos tercios de los parlamentarios insisten en su posición. En caso contrario, prevalece el veto del Jefe del Estado, y desaparece el texto aprobado por el Congreso.

Este mecanismo, se aplica cada día en la elaboración de todas las leyes.

De imponerse el criterio sustentado por la mayoría opositora, resultaría el absurdo que para impedir la posibilidad del veto presidencial se legislará sobre cualquier materia, aún la más nimia, como sería cambiar el nombre a una calle a través de la Reforma Constitucional. En tal caso, y de acuerdo con este mismo criterio, el Jefe del Estado se vería obligado a la grotesca solución de llevar a plebiscito, si se cambia o no, el nombre de esa calle.

Resulta, pues, obvio, que el mecanismo de los dos tercios, vigente para toda Ley Ordinaria, con mayor motivo, rige en los proyectos que afectan a la Constitución, la Ley Suprema del país.

El Gobierno impondrá el acatamiento a la Carta Fundamental y en esta oportunidad, como siempre, observará sus normas.

Cuando llegue el caso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuestión técnico-jurídica de interpretación de la Constitución, impondré el respeto a lo que resuelva, sea cual fuere su fallo.

Quien pretenda que yo desconozca la procedencia de recurrir al Tribunal Constitucional, desea que yo viole la Constitución. Lo que no haré, pues ésta tiene en el Presidente de la República a su más alto garante y defensor, lo que me exige permanente vigilancia e intransigencia en su aplicación.

De acuerdo con la Carta Fundamental, la convocatoria a plebiscito es atributo exclusivo del Jefe del Estado.

Siempre he dicho que llamaré a plebiscito, pero cuando, siendo procedente, lo estime oportuno, y sobre la materia que considere pertinente consultar al país.

Es ilusión pensar que vaya a ceder ante cualquier presión que suponga infringir, aunque sólo sea por omisión, las disposiciones constitucionales. La paz y el progreso de los chilenos, la continuidad, desarrollo del régimen democrático, la garantía del proceso revolucionario nacional están por encima de los intereses de los propietarios de bancos, latifundios y grandes empre-

sas, así como de sus portavoces en la política y también, por cierto, muy por encima de las insidias del poder capitalista extranjero.

En el momento de las definiciones es cuando cada cual demuestra quién es y dónde está.

Cuando la oposición usa al Congreso para defender a los patrones, los trabajadores en el Gobierno saben actuar como corresponde.

Siempre he sostenido que mi Gobierno, el de la Unidad Popular, es el Gobierno de los trabajadores, no el de los empresarios.

Es ahora, cuando mi Gobierno demuestra con qué clase social se identifica, cuando hay que pronunciarse a favor o en contra de que la clase trabajadora sea dueña de las empresas fundamentales del país.

La mayoría opositora está convirtiendo al Parlamento en una barrera contra los cambios; ha frustrado el diálogo sobre el modo de realizarlos y ha dicho simplemente: “Basta de acuerdos; las empresas son de propiedad de los patrones, no de los trabajadores”.

Pues bien, el Gobierno dice: “No. Las empresas monopólicas y estratégicas que hemos individualizado han pasado ya o pasarán en un futuro inmediato, a manos de los trabajadores”. Este es el dilema fundamental dentro de la cual gira nuestra vida pública.

En pocos meses más, en marzo del año próximo, todos los chilenos están llamados a designar qué fuerza debe ser mayoritaria en el Parlamento, si la de los trabajadores o la de los capitalistas.

Yo tengo la confianza de que la voluntad popular logrará, entonces, que el Congreso, junto al Gobierno, defienda sin ambigüedad los intereses del pueblo trabajador.

Para la etapa que estamos iniciando, el Gobierno ha emprendido la preparación de un nuevo código del trabajo; de una nueva ordenación de la seguridad social; de una nueva Ley de la Reforma Agraria; de un nuevo Código Tributario; el establecimiento de un Servicio Nacional de Salud Único; la concreción de una profunda Reforma Educacional.

Estamos estudiando, por cierto, la elaboración de una nueva Constitución que rija y ordene el funcionamiento de nuestra sociedad en el período de transición al socialismo.

Oportunamente, todos estos proyectos de cambio fundamental, serán sometidos al conocimiento, discusión y crítica del pueblo, para que tome conciencia de la importancia de la elección de 1973 y el contenido material del proceso revolucionario.

En muy pocos días más enviaremos al Congreso, proyectos como los de probidad administrativa y contra el delito económico. También, el que reajusta los sueldos y salarios; y el que autoriza el conocimiento de las cuentas corrientes bancarias.

Ya está en el Parlamento el que hace pública la declaración de la renta. Además, serán enviados, asimismo, los proyectos que delimitan las áreas de pequeña y mediana industria, y la pequeña y mediana propiedad agrícola e industrial, y el que define el concepto de familia para los efectos de la protección de la propiedad familiar, así como el que establece los Tribunales Administrativos.

En el aspecto social, vamos a enviar proyectos para crear el Fondo Único de Pensiones, el Instituto Nacional de la Cultura y la Editorial del Estado; y el proyecto para impulsar la educación física y el deporte popular. Vamos a modificar, igualmente, la Ley del Fondo de Auxilio Escolar y Becas.

En otro orden de cuestiones, antes de Navidad, habremos terminado de organizar un nuevo servicio de patrullaje, realizado conjuntamente por Carabineros e Investigaciones, destinado a proteger a los ciudadanos contra los delincuentes comunes, particularmente en las poblaciones marginales. Técnicamente, será sin duda, uno de los mejores servicios de patrullaje de América latina, y uno de los más perfeccionados del mundo.

Pediré urgencia para que el Congreso se pronuncie sobre la nacionalización de la ITT. *La dignidad de Chile exige el pronto despacho de la iniciativa de mi Gobierno.*

Tomaré, además, todas las medidas administrativas para impedir la participación directa o indirecta de esa empresa transnacional en los asuntos internos del país.

Dentro de poco solicitaremos del Congreso facultades para organizar la Administración Pública; necesitamos crear los Ministerios de Industria, de Transporte, de Comercio de Importación y Exportación y de Planificación, como asimismo la Subsecretaría de Deportes, Educación Física y Recreación.

Pediremos esa facultad, ya que tenemos la dura experiencia de la larga tramitación de los proyectos que crean el Ministerio de la Familia y el del Mar, que llevan más de 18 meses de tramitación en el Congreso.

Finalmente, debo reafirmar una vez más, cómo se está viviendo la democracia política y cómo se respeta su ejercicio. Nunca hemos negado el significado de las consultas electorales, desfavorables o favorables, y sólo nos limitaremos a señalar, ahora, que dígame lo que se quiera, el hecho es que en las últimas elecciones ha quedado bien evidente que en la CUT, dos tercios de los trabajadores organizados del país se identifican con la política del Gobierno y es lógico pensar que por sentido de clase el otro tercio está también por los cambios que impulsa el Ejecutivo.

Asimismo, el éxito de las candidaturas de izquierda en la Universidad Técnica del Estado y el triunfo de la lista de izquierda en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, están demostrando la amplitud del respaldo de nuestra juventud estudiosa al proceso de transformaciones que está llevando a cabo el Gobierno de nuestro país.

Las horas duras que vivimos y viviremos en el terreno económico, como consecuencia del descenso extraordinario del precio del cobre, del alza del precio de las materias primas y de los repuestos, y ello ligado a la crisis monetaria del capitalismo, precipitada por la devaluación del dólar, y la gran carga de la deuda externa no renegociada, a lo que se agrega el impacto de los terremotos y temporales en la producción agrícola e industrial y las evidentes deficiencias de nuestra infraestructura, especialmente en los transportes, en todos los niveles, nos llevará a drásticas medidas de orden económico, a una verdadera política de guerra para derrotar al subdesarrollo.

El Gobierno no vacilará en patrocinar estas medidas pero para que ellas den resultado se requiere una compacta orientación política y una centralizada conducción económica.

Las medidas económicas estudiadas tienden a velar por los intereses de los sectores necesitados; a garantizar los derechos y expectativas de los medianos empresarios y, por sobre todo, a cautelar el desarrollo económico de Chile.

Debemos hacer más y más integral la Unidad Popular, instrumento de los trabajadores. Esta mayor cohesión y la constitución del partido federado, son pasos muy positivos en el proceso revolucionario.

Debo destacar que la dirección de la Unidad Popular ha demostrado una amplia comprensión y apoyo a las concepciones estratégicas y tácticas que debemos desarrollar. Del mismo modo, los hemos hallado en la CUT y en las organizaciones juveniles.

De acuerdo con mi propósito de incorporar a la tarea por Chile, a todos los chilenos que miran por la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria, estamos patrocinando un compromiso con la mujer y con la juventud chilena: ésto quedará plasmado en la carta que establece los derechos de la mujer y del anciano, y la que fija los deberes y derechos de la juventud.

Debo insistir en lo que tantas veces he dicho: sólo un pueblo disciplinado, organizado y consciente, afianzará la revolución y la hará progresar. Debo insistir en que hay que estudiar más, en que hay que trabajar más y producir más, para lo cual es fundamental la disciplina.

Los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular no pueden prestarse a participar en tomas de edificios, oficinas, caminos, casas o predios agrícolas. No puede aceptarse la interrupción del trabajo, ni realizar tareas políticas en las horas de labor.

Como en otro orden de cosas, tampoco puede tolerarse ninguna ingerencia política o partidaria que contradiga la línea jerárquica organizada de los ministros, subsecretarios y jefes de servicios. Son los ministros los responsables de la marcha administrativa de sus dependencias, y deben ejercer a plenitud sus facultades.

Estoy exigiendo públicamente la máxima acuciosidad de todos los funcionarios en el correcto desempeño de sus labores y tareas.

He pedido declaración jurada de sus bienes a los ministros y demás funcionarios de la confianza del Presidente.

Ordené un sumario a la Contraloría acerca de los incidentes acaecidos en la aduana de Arica y he puesto en ejecución las medidas recomendadas por esas instituciones: Exoneración de tres funcionarios, petición de renuncia a uno y traslado para otros.

He designado nuevo Gobernador de Arica y nuevo Superintendente de Aduanas, no por razones morales, sino de orden administrativo, en relación con esos incidentes.

He ordenado dos sumarios en LAN-Chile y en esta semana serán conocidos por el consejo de la empresa, a fin de que se adopten las medidas pertinentes.

El Ministro de Economía ha dispuesto dos sumarios en SOCOAGRO, atendiendo la denuncia pública hecha por un militante de la Unidad Popular, lo que merece respeto porque asume la responsabilidad de haberla hecho.

Pero no quiero limitarme a cautelar la honestidad de la Administración Pública, sino que dando ejemplo, como corresponde a un Presidente de los trabajadores, seré el primer Jefe de Estado que entregará al conocimiento del país y de una Comisión Especial de la Cámara, el resultado de la investigación que yo mismo solicité a la Contraloría General de la República, acerca del origen y naturaleza de mis bienes, de los de mi cónyuge, de mis hijas y de mis hermanas, así como de las del personal de mi Secretaría.

Han sido reemplazados más de 15 funcionarios entre los mandos medios, y, de acuerdo con los ministros respectivos, se reemplazará a otros para hacer más eficaz la administración del Estado.

De la misma manera que sancionamos o tomamos medidas para el mejor desarrollo de las tareas administrativas, no dejaremos en la indefensión a los funcionarios que son atacados en forma injusta y soez.

Hago un llamado a los partidos y movimientos sociales para que se impongan erradicar la violencia como instrumento político.

El Gobierno ha presentado un conjunto de indicaciones, orgánicamente integradas, al proyecto de iniciativa parlamentaria destinado a impedir la tenencia y el uso ilegal de armas. Ellas tienden a perfeccionar la legislación vigente sobre la materia, a dar una mayor participación a las Fuerzas Armadas y a la Justicia Militar en el control de su cumplimiento, y a evitar que se comprometa a las instituciones castrenses en aspectos de política contingente, como sucedía con el proyecto original.

Advertimos que ha habido, y hay, grupos antidemocráticos y fascistas que han conspirado y continúan haciéndolo, y ahora ensayan recurrir a la acción directa. El enfrentamiento de hace veinticuatro horas entre jóvenes del Partido Demócrata Cristiano y esos elementos, confirma lo que he dicho.

No toleraré la repetición de semejantes procedimientos.

Los chilenos debemos esforzarnos en preservar derechos y conquistas cívicas, que a todos nos pertenecen.

Me he comprometido a hacer los cambios estructurales que Chile exige; a abrir el camino al socialismo en libertad, democracia y pluralismo. Lo vengo cumpliendo, y lo seguiré cumpliendo.

Los chilenos tenemos que entender que nuestros problemas los solucionamos nosotros mismos.

El patriotismo y la dignidad nos exigen, por lo tanto, rechazar toda ingerencia foránea.

El dilema de Chile está ya claro que no es entre democracia y totalitarismo.

El dilema de Chile es entre los intereses chilenos y los del capital extranjero; es entre patriotas y antipatriotas; entre hegemonía de los patrones o de los trabajadores.

Junto con la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, reafirmo hoy mi fe en el pueblo y en nuestro futuro como nación independiente, digna y soberana”.

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Comisión Política): El reformismo y el MIR

(11 de julio de 1972)

Declaración de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) a todo el pueblo:

1. Dos hechos de gran importancia han ocurrido durante las últimas semanas: el llamado cónclave UP y las conversaciones DC-UP. Ambos hechos están íntimamente vinculados; se complementan recíprocamente.

Concretadas las principales consecuencias a que, necesariamente, debían conducir las acciones de los que confunden la realidad con sus propias ilusiones, los trabajadores están en óptimas condiciones para sacar las conclusiones debidas.

Ha llegado el momento de que los dirigentes reformistas del PC y de algunos sectores de la UP, le den las correspondientes explicaciones al pueblo. Aquellos que hicieron todo lo posible por delegar en los sirvientes políticos de los patrones y del imperialismo, la determinación respecto de cuánto deben hoy avanzar los trabajadores, le deben una explicación a los trabajadores.

Los que con su gestión han fortalecido la institucionalidad de los patrones, delegando la decisión fundamental del momento en el Parlamento que constituye el principal freno del avance, deben dar las explicaciones de esto y de su fracaso.

Sñaron estos reformistas con obtener de los patrones, de su Parlamento, el consentimiento para que los trabajadores continuaran avanzando sobre las fábricas y los bancos de los propios patrones.

En aras de esa ilusión, los “maduros” dirigentes reformistas del PC y de sectores de la UP desmovilizaron, una vez más, a las masas, manteniéndolas desinformadas del contenido real de las negociaciones y sumidas en la pasividad.

En su grave confusión respecto de la naturaleza de clase del Parlamento, de la DC y del PIR desarmaron ideológicamente una vez más a los trabajadores, presentando publicitariamente a la DC, al PIR y al Parlamento como demócratas partidarios del cambio.

Los vendedores de ilusiones, los que sueñan con el entendimiento con los dueños de las fábricas y de los fundos han cosechado, una vez más, sólo reveses: ha sido desaforado el Intendente de Santiago, acusado constitucionalmente el segundo Ministro del Interior y han sido rechazados los vetos. . . Se han cubierto de oprobio los reformistas, corriendo por los pasillos del

Congreso en busca de inexistentes partidarios de los cambios, mientras en la sala de sesiones de la Cámara los Diputados de la DC, del PN, de la DR y del PIR desaforaban a Joignant y acusaban constitucionalmente a Del Canto, mientras en el Senado los parlamentarios de esos mismos partidos rechazaban alegremente, entre risas y pantomimas vergonzosas cada uno de los vetos del Presidente de la República a la Reforma Constitucional fraguada por Fuentealba y por Hamilton.

2. ¿Pueden sorprender estos resultados a los trabajadores? Nosotros pensamos que no.

La UP no llegó a estas conversaciones –por haber renunciado a ello–, en la cima de un incontenible avance de las masas, a la cabeza de un movimiento trabajador fuerte, organizado, unido nacionalmente y con un gran desarrollo de su conciencia política. Este renunciamiento ha sido su más grave error, más aún si se considera que todavía subsisten intactas las condiciones para lograrlo.

No llegó la UP a imponer sus condiciones a un adversario a la defensiva, debilitado y desmoralizado, que sólo tuviera como alternativa aceptar las condiciones que el proletariado, a la vanguardia de las fuerzas de todo el pueblo, le imponía o, bien, a resignarse a ser derrotado sin contemplaciones.

Por el contrario. Producto de una conducción que se ha caracterizado por su renuencia a golpear al conjunto de la gran burguesía, limitándose a herir ciertos intereses, que se ha caracterizado por su persistencia en tratar de proteger a inmensos sectores de los dueños de las fábricas y de los fundos, la UP y el Gobierno se han puesto en contradicción con importantes sectores de las masas y han provocado la dispersión del movimiento obrero y campesino.

Por otra parte, la insistencia en permanecer en el camino único del acuerdo parlamentario con la DC, ha llevado a la desmoralización de las masas, a la pérdida de la visión y la confianza de éstas en sus propias y enormes fuerzas.

Esta misma estrategia de avance, a través de acuerdos parlamentarios, le ha impedido a la conducción reformista desenmascarar ante los ojos de pueblo a los irreconciliables enemigos de éste: la DC y el PIR, y no sólo el PN, la institucionalidad de los patrones, el Parlamento y la legalidad que les sirven.

Frutos de estos errores han sido todos los anteriores reveses, en el terreno electoral y político. Frutos de estas concepciones profundamente equivocadas son los actuales fracasos.

En estos errores, los dueños de fábricas y fundos, y el imperialismo que les apoya, han encontrado el terreno abonado que les ha permitido, como cuestión más importante, conservar intacto su dominio sobre la justicia, el aparato estatal-burocrático y el Parlamento, a pesar de haber sido golpeados, principalmente en el terreno económico.

Desde allí, han ido acumulando importante fuerza de masas, con la que hoy son capaces de amenazar seriamente la estabilidad del Gobierno y, aún, la continuidad del proceso.

Este es el marco político general, el estado de la correlación de fuerzas entre la UP y la Derecha, que condicionaría el inicio, el desarrollo y las conclusiones del entendimiento UP-DC.

3. Por lo demás y como lo saben los trabajadores, no fue la clase dominante la que buscara anhelante estas conversaciones.

Fue necesario para que se produjeran, que la dirección del PC y algunos otros dirigentes de la UP buscaran imponer dentro de esta última un viraje hacia la derecha, un golpe de timón en la conducción económica y política que permitiera, a los “negociadores” de la DC poder venir a cumplir dignamente su papel de amarre y de freno.

Volodia Teitelboim y luego Orlando Millas, fueron los encargados de crear el marco adecuado. El primero, en el terreno político, creó la ficción, profundamente mentirosa, de dos extremos buscando la guerra civil y el baño de sangre y, por otra parte, un amplio frente del centro y de izquierda, partidario del mantenimiento de la democracia y de los cambios sociales y económicos. Había entonces, según esta descripción burda y falsa de la realidad política, condiciones más que suficientes para un entendimiento entre la DC y la UP.

El antagonismo real, que atraviesa este país de arriba a abajo, es el que existe entre el conjunto del proletariado y todo el pueblo, que lucha por conquistar sus reivindicaciones de décadas, y la resistencia implacable de una minoría explotadora, que se resiste por todos los medios a su alcance a abandonar sus mezquinos privilegios. Esta, que es la verdadera y única línea demarcatoria fue mañosamente ocultada.

Orlando Millas se encargó de la parte material, concreta, ofreciendo en su artículo del 5 de junio garantías a la burguesía agraria e industrial, no sólo de permanencia sino, de progreso económico, de enriquecimiento, para que acumulara sus ganancias en paz y tranquilidad. El combate al “mirismo” fuera y en el interior de la Unidad Popular, la lucha por impedir que continuaran produciéndose “trasgresiones al programa de la Unidad Popular” era el complemento, en lo político, de las garantías económicas ofrecidas.

El empuje de los sectores de las masas abandonados progresivamente por las concesiones anteriores, cuyo aprovechamiento para fortalecer las propias fuerzas es imprescindible, es así deslegitimado y recibe el tratamiento de “ultra”, “termocéfalo”, acompañante de la derecha.

Millas además establecía que la reforma agraria debía finalizar ahora mismo y, pasadas algunas empresas al área social y devueltas a sus “legítimos dueños”, las que habían sido requisadas o intervenidas indebidamente, el grueso de la burguesía agraria y la inmensa mayoría de la gran burguesía industrial podrían dedicarse a cumplir, sin sobresaltos, su rol histórico de explotadores de la clase obrera.

Ambos planteamientos pavimentaron el camino del inicio de las conversaciones, a pesar que dentro de la propia UP no estaba resuelta, y aún no lo está, la controversia entre esta línea reformista y otra que, apoyándose en las corrientes revolucionarias de dentro y fuera de la UP, busca desatar la energía de las masas para profundizar y empujar hacia adelante el proceso.

La favorable acogida que este modelo de concesión y freno encontrara inicialmente en el ala reformista burguesa de la DC, zanjó transitoriamente la controversia dentro de la UP en favor de los reformistas. Estos encontra-

ron en el sector burgués reformista de la DC la fuerza de que habían carecido hasta ese momento, para lograr imponer temporalmente la conciliación y el freno al conjunto de la UP.

La debilidad permanente e insuperable del ala reformista burguesa de la DC impidió, igual que en innumerables ocasiones anteriores, que el entendimiento UP-DC se concretizara. El sector mayoritario de la DC hizo valer, una vez más y con la oportunidad de siempre, los intereses de la gran burguesía y del imperialismo que representa y sirve, provocando el fracaso del entendimiento UP-DC.

Los grandes derrotados de esta jornada son el reformismo pequeñoburgués de la UP (Teitelboim, Millas, etc.), y el ala reformista burguesa de la DC (Fuentelba, Leighton, etc.).

Su éxito habría significado, en todo caso, peores retrocesos, pues se habría impuesto el freno a la reforma agraria, las garantías e impunidad a la mayoría de los dueños de las industrias, la concreción de una política de salarios y precios contraria al interés de las grandes masas, a la vez que se habrían hecho irresistibles las tentaciones de renunciar a la estatización completa de los bancos, de la Papelera y un número no conocido aún de grandes monopolios, al mismo tiempo que se habría impuesto el financiamiento, con el dinero de los trabajadores, a la prensa y radio desde los que se les calumnia y ataca diariamente. En suma: el cogobierno desde el Parlamento de los patrones nacionales y extranjeros.

Se habría legitimado, además, una forma y estilo de conducción que se funda en las negociaciones a espaldas de la masa, en el combate a sus movilizaciones, en la represión política y puntualmente física a los sectores de las masas que no se resignan al inmovilismo y la pasividad.

Se habría legitimado una política de *concesiones* a la burguesía y al imperialismo, de *freno* al avance de los trabajadores sobre las fábricas y fundos y sobre la institucionalidad de los patrones, de *represión* al movimiento de masas y a los revolucionarios; política que se habría disfrazado de avance, de consolidación, de revolución.

Sin embargo, pese a este fracaso, el capítulo de la conciliación, el freno y la represión no se ha cerrado definitivamente. Aún los Millas y los Fuentelba, cada uno desde su propia posición, insisten y reiteran que el entendimiento UP-DC no ha fracasado.

Detrás de la insistencia de Fuentelba está el intento del amarre definitivo, del debilitamiento máximo del Gobierno de la Unidad Popular. El intento de perseverar en la táctica doble que la DC ha empleado con pleno éxito hasta hoy; mientras unos amarran, los otros golpean, acumulando fuerzas de derecha en su conjunto.

Detrás de la insistencia de Millas, está el propósito de conseguir a cualquier precio, aunque sea claudicando, el triunfo de la política que se disfraza de avance, de consolidación y de revolución.

4. Por todo lo anterior, el MIR reitera que la alternativa reformismo o revolución en el seno de la izquierda persiste como la disyuntiva fundamental del periodo.

El combate en el seno de la izquierda por aislar y derrotar al reformismo encuentra, en este momento, su mejor terreno, su mejor oportunidad y su mayor urgencia.

Los enormes sectores de la UP –cuadros medios, militantes y dirigentes– que rechazaron el entendimiento con la DC, que se marginaron de las conversaciones y que descartan hoy todo intento de proseguirlas, junto a los que han denunciado permanentemente el entendimiento con los sirvientes DC de los patrones nacionales y extranjeros, encontrarán en esta lucha las mejores condiciones sociales y políticas para alcanzar sus objetivos.

Es que no sólo las corrientes revolucionistas, de dentro y fuera de la UP, han combatido en esta jornada los intentos del reformismo de los dirigentes del PC y de algunos dirigentes de la UP.

Los trabajadores de Santiago y Concepción, los mineros, los campesinos y los obreros del campo y la ciudad continuaron sus luchas y movilizaciones en defensa de su salario, de la salud, contra la burocracia y la justicia de los patrones.

En el transcurso de estos combates, formas superiores de organización de masas y nuevas alianzas políticas que cuentan con el apoyo mayoritario de los trabajadores, han aparecido. Elementos componentes primarios de los Consejos Comunales de Trabajadores, como fórmula alternativa al Parlamento, a la Justicia y a todas las restantes instituciones de los patrones comienzan a aparecer.

Sin duda, las vanguardias de la clase obrera rural y urbana, de los pobladores, de los campesinos y de los estudiantes, han hecho caso omiso de la política de la conciliación, del freno y la represión que, a espaldas del conjunto de pueblo, algunos pretenden imponer.

5. Las enseñanzas que de todo esto debemos recoger son claras. Sólo la fortaleza de un movimiento de masas vertebrado orgánicamente, que golpee nacionalmente a los grandes patrones del campo y la ciudad, que sea conducido por un programa revolucionario, puede garantizar el curso del proceso hacia el socialismo.

Sólo una nueva alianza política que una a todos los revolucionarios, de dentro y fuera de la UP, puede formular un programa que, por reflejar nítida y precisamente los intereses de los pobres del campo y la ciudad y los de la pequeña burguesía propietaria y asalariada, sea capaz de proporcionar la fuerza suficiente para continuar el avance en el terreno económico y comenzar a golpear la institucionalidad de los patrones, principal freno del momento actual.

Una nueva institucionalidad debe comenzar a crearse, simultáneamente. Las masas deben comenzar a dotarse, ellas mismas, de formas orgánicas propias que les posibiliten el ejercicio directo y creciente del poder político, en todos sus aspectos. Ellas son los Consejos Comunales de Trabajadores, en la ciudad y el campo.

Si la energía de las masas, movilizadas tras sus intereses inmediatos, debe encauzarse y adquirir la perspectiva de transformación revolucionaria de la sociedad, al mismo tiempo, en el combate contra el actual orden de los pa-

trones, las masas deben poder resolver, ahora mismo, sus problemas de salarios, salud, justicia y defensa general de sus intereses.

La única alternativa posible y concreta capaz de realizar esa síntesis son los Consejos Comunales de Trabajadores.

Toda expresión de lucha de las masas contra el Parlamento, la Justicia de los patrones o la burocracia, debe darse unida a la perspectiva de crear y fortalecer éstos, sus propios órganos de poder.

Toda lucha de masas de carácter reivindicativo debe vincularse a la creación y fortalecimiento de éstos, sus propios órganos de poder económico.

6. El programa revolucionario que se levante debe contener, a lo menos, los siguientes puntos:

- Expropiación de todas las empresas de la gran burguesía industrial, comercial y financiera. Inmediato traspaso al área social de todas las empresas con un capital igual o mayor de 14 millones de escudos. Defensa irrestricta de las industrias requisadas, intervenidas o pasadas al área social.

- Expropiación sin indemnización, al más corto plazo, del capital norteamericano en la industria, las finanzas y el comercio.

- Expropiación sin indemnización de la tierra, sin reserva y a puertas cerradas de todos los fundos de la gran burguesía agraria.

- Establecimiento del control obrero en la gran industria privada, en la mediana y pequeña industria y en los fundos de la mediana y pequeña burguesía agraria.

- Dirección y control obrero en las empresas estatales, servicios públicos y en el conjunto de la economía.

- Apoyo de todo tipo, bajo condiciones de control obrero, a la pequeña y mediana burguesía del campo y la ciudad, y del comercio.

- Creación de los Consejos Comunales de Trabajadores en el campo y en la ciudad.

- Disolución del Parlamento y creación, en su lugar, de una Asamblea del Pueblo.

- Reajuste automático de los sueldos y salarios, semestralmente o cada vez que el costo de la vida sube más de un 5%, a través de un bono compensatorio. Pago inmediato del reajuste hasta hoy acumulado.

- Adopción de las medidas que permitan eliminar de inmediato la cesantía y la desocupación disfrazada en el campo y la ciudad.

7. El rechazo de los vetos a la Reforma Constitucional de Fuentealba y Hamilton y el ataque iniciado en contra de los más altos funcionarios del Gobierno UP son indicativos de la escalada con que la gran burguesía inicia y prepara sus futuras agresiones al movimiento de masas y al Gobierno.

Sus sirvientes políticos, la DC, el PN, el PIR y la DR persisten en la utilización de su estrategia combinada que busca la devolución de las fábricas y fundos de los antiguos explotadores y del cobre y otras riquezas básicas al imperialismo norteamericano, la represión brutal del movimiento de masas, la aniquilación de sus organizaciones gremiales y políticas y el derrocamiento del Gobierno.

La defensa de la estabilidad del Gobierno constituye una tarea fundamental en la medida en que su mantenimiento posibilita el más amplio desarrollo de las luchas de las masas, su organización y su conciencia política.

Al mismo tiempo, en función de asegurar la victoria definitiva de los trabajadores, la lucha por aislar y derrotar el reformismo no puede sufrir, bajo ningún concepto ni condiciones, menoscabos que signifiquen la menor confusión entre las masas respecto de los objetivos de la revolución, del carácter de las alianzas de clase y de los métodos de lucha que permiten lograrlos.

Comisión Política.

Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Santiago, 11 de junio de 1972.

Informe sobre la situación chilena elaborado por el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la URSS

(1972, probablemente de comienzos de julio)

*Academia de Ciencias de la URSS
Instituto de América Latina
Reg. N° 04.*

*Confidencial
ej. N° 35*

Situación en Chile y perspectivas de colaboración económica soviético-chilena¹

Moscú, 1972

1. Situación política

En octubre del año 1970, en Chile, por primera vez en América Latina, el bloque de fuerzas revolucionarias, unidas alrededor de un programa de profundas transformaciones económico-sociales, llegó al poder. El objetivo principal del gobierno de la Unidad Popular, de acuerdo a su programa, es “acabar con el dominio del imperialismo, con monopolios y con la oligarquía latifundista y empezar la construcción del socialismo en Chile”.

En perspectiva, la exitosa realización del programa del bloque de la Unidad Popular tiene que conducir a la construcción de una sociedad socialista. Sin embargo, los modos para alcanzar este objetivo no están claros todavía. En su primer mensaje al Congreso (mayo de 1971), S. Allende declaró: “No podemos repetir la experiencia de Cuba, la Unión Soviética y China. Tenemos nuestro propio camino, tenemos que construir la nueva sociedad, partiendo de las condiciones chilenas reales, tomando en cuenta la historia de Chile”. Además, el gobierno de Allende tiene problemas bastante serios en las esferas tanto política como económica.

Los comunistas chilenos tienen que resolver complejos problemas de carácter teórico y práctico. Hasta ahora el movimiento revolucionario chileno e internacional no se había enfrentado con algunos de estos problemas, y las respuestas a ellos están aún por encontrarse.

¹ Una de las obligaciones de los institutos de la Academia de Ciencias del área de ciencias sociales y de política internacional era presentar informes analíticos a solicitud de los organismos de toma de decisión (Comité Central del PCUS, Ministerio de RR. EE., KGB). Publicado originalmente en *Estudios Públicos*, 72 (primavera 1998). Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile.

La situación política de Chile se destaca por una serie de importantes particularidades.

1. Los partidos políticos de izquierda que llegaron al poder pacíficamente, disponen sólo de una parte del poder político, más precisamente, del ejecutivo. El poder legislativo y el judicial (la Corte Suprema) están en las manos de la oposición de derecha. De esta manera, el problema clave de cualquier revolución, el problema del poder estatal, hasta ahora no ha encontrado y, en una perspectiva más cercana, no va a encontrar su resolución definitiva.

2. Después de llegar al poder, Allende prometió conservar la libertad absoluta de prensa, respetar los derechos de oposición y mantener lealtad a la Constitución. En la práctica, esto significa el compromiso de conservar todas las instituciones democrático-burgueses estatales existentes, es decir, rechazar el quiebre revolucionario del antiguo aparato estatal, incluyendo el Ejército, los servicios de seguridad, etc.

3. Una característica particular del proceso revolucionario chileno consiste en que está dirigido por un bloque multipartidista que incluye elementos socialdemócratas y cristianos de izquierda, como también representantes de las corrientes ultraizquierdistas e izquierdizantes. La unidad de los partidos Comunista y Socialista, que constituye la base del bloque, tampoco es plenamente sólida. Entre los comunistas y socialistas existen discrepancias y contradicciones por problemas tan importantes como el agrario, la actitud hacia las agrupaciones de la izquierda extremista, las relaciones con la oposición de derecha, entre otros.

4. El gobierno de la Unidad Popular realiza su política contando con un estrecho contacto y apoyo de la Central Unica de Trabajadores (CUT). La CUT tiene una gran influencia entre los trabajadores de Chile. Actualmente se está realizando una profunda reestructuración de los órganos directivos de los sindicatos; por ejemplo, el consejo directivo (el órgano superior) va a elegirse mediante la votación directa de todos los miembros del sindicato (por listas de partido). En estas condiciones, las tendencias sindicalistas y la influencia del "economicismo" en los sindicatos chilenos pueden llegar a ser aún más fuertes.

5. Ultimamente, en los círculos gubernamentales chilenos surgió la tendencia a utilizar el Ejército y Carabineros para solucionar problemas políticos y sociales (declaración de estado de sitio, nombramiento de los militares en cargos superiores administrativos civiles, etc.). Al parecer, es un índice de que en el sistema de poder existente Allende no tiene intenciones o no puede resolver problemas sociales apoyándose exclusivamente en la directiva sindical, y solucionar los problemas políticos contando sólo con el apoyo de los partidos de la Unidad Popular.

6. La polarización de las fuerzas políticas en Chile alcanzó un nivel tan alto que en la perspectiva más cercana no puede estar excluida la posibilidad de confrontaciones abiertas (probablemente, con uso de armas) entre la ultraderecha y la ultraizquierda.

Éstas son las particularidades más significativas de la situación política interna de Chile. La creciente agudización de la lucha política interna será un fac-

tor importante que en muchos aspectos determinará las perspectivas del desarrollo posterior de los acontecimientos.

Durante el primer período después de la llegada de la Unidad Popular al poder, se pudo hablar de la existencia de tres fuerzas en pugna en el país: los partidos de izquierda (a los cuales en una u otra medida apoyaban las organizaciones sectarias de izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR), el Partido Demócrata Cristiano (donde las discrepancias entre las alas izquierda y derecha han creado una situación de incertidumbre e inestabilidad) y la derecha encabezada por el Partido Nacional. El PDC apoyó a la Unidad Popular durante la confirmación de S. Allende como Presidente de la República en la sesión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado el 24 de octubre de 1970, durante la discusión en el parlamento de las enmiendas constitucionales que han permitido nacionalizar las minas de cobre. Los demócratacristianos de izquierda participaron en la campaña nacional de los "días de trabajo voluntario", en la lucha contra el analfabetismo y otras. En el aspecto político, durante este período el PDC actuó independientemente. Después de las elecciones municipales de 1971, cuando se hizo claro que en esta situación (es decir, existiendo tres fuerzas políticas independientes) la Unidad Popular va a derrotar casi siempre tanto a la derecha como a los centristas, el ala derecha del PDC optó por el acercamiento al Partido Nacional.

En las elecciones complementarias de diputado en Valparaíso, el segundo centro industrial y cultural del país por su importancia, el PDC, el Partido Nacional y el Partido del Radicalismo Democrático actuaron en un frente unido contra la Unidad Popular y lograron hacer ganar a su candidato (julio de 1971). Una situación similar tuvo lugar en enero de 1972, en las elecciones complementarias al senado por las provincias de O'Higgins y Colchagua y a la Cámara de Diputados por la provincia de Linares.

De esta manera, actualmente se han formado dos fuerzas que determinan la situación política en el país: la Unidad Popular por un lado, y el bloque entre el PDC, el Partido Nacional y el Partido de Democracia Radical, por el otro. Este último tiene en sus manos el poder legislativo (la mayoría en el parlamento) y el judicial (incluyendo la Corte Suprema). Esta situación pone de manifiesto el proceso de la polarización política e ideológica que tiene lugar dentro de la sociedad chilena.

La polarización de las masas en la sociedad chilena se manifestó en la división del PDC que se produjo después de las elecciones adicionales de 1971 (Valparaíso). El Partido Demócrata Cristiano de Izquierda, formado después de la división, se integró a la Unidad Popular y al gobierno. Sin embargo, la lucha dentro del partido ni siquiera terminó después de esta división. Eso se comprueba con la salida masiva de los miembros del PDC del partido después de la campaña electoral de enero de 1972 en las provincias de O'Higgins, Colchagua y Linares. Durante el mismo período, cuando las relaciones entre el gobierno y el Congreso llegaron al punto álgido de tensión (acusación constitucional contra J. Tohá), las opiniones se dividieron incluso entre los miembros de la bancada parlamentaria del PDC. Mientras que una parte de los diputados del PDC protestó contra el nombramiento de J. Tohá como Mi-

nistro de Defensa, el presidente de la Cámara de Diputados, el demócrata cristiano Fernando Suárez, confirmó la legalidad de este acto presidencial. Si una parte del PDC, encabezada por E. Frei, promueve una línea dura respecto al gobierno y busca una alianza directa con la derecha, la otra parte del partido, cercana a Tomic, trata de no desprestigiarse con una colaboración abierta con el Partido Nacional. Pero estas discrepancias internas pasan a segundo plano cuando se trata de la oposición al gobierno. Esta tendencia se expresó más claramente durante la discusión en el Congreso del proyecto sobre las reformas constitucionales que proponían crear “tres sectores” de la economía: el público, el mixto y el privado. Los partidos de oposición propusieron una serie de enmiendas a este proyecto legislativo que, de hecho, impidieron continuar las nacionalizaciones de grandes empresas. Al mismo tiempo, se suspendieron todas las acciones de este tipo emprendidas por el gobierno después del 14 de octubre de 1971. De ahí en adelante todas las expropiaciones y la creación de las empresas públicas deberían realizarse sólo después de su aprobación en el Congreso.

En el Partido Nacional tampoco hay unidad. Su ala extremista, en cuyas manos está el aparato del partido, insiste en una línea dura hacia la Democracia Cristiana. Su argumento principal se basa en que en las elecciones presidenciales de 1970 el líder de la derecha J. Alessandri recibió un mayor apoyo electoral que Tomic. Los “moderados” del Partido Nacional prefieren dejar al PDC una mayor libertad de maniobra, sin insistir en la necesidad de poner énfasis en la alianza entre el PDC y el Partido Nacional.

En general, observando la oposición de derecha, da la impresión de que dentro de ella se podría destacar la presencia de dos tendencias, unidas en su rechazo a la política de la Unidad Popular, pero diferentes en su visión de los métodos de la lucha contra el gobierno. Los extremistas de derecha de la oposición se unen con el movimiento “Patria y Libertad” que realiza acciones ilegales contra el gobierno. Como declaró hace poco el líder de esta agrupación, P. Rodríguez, “Patria y Libertad” está segura de que el gobierno tarde o temprano va a romper la Constitución; entonces el Ejército saldrá a actuar, y esta organización de derecha tiene que estar preparada para apoyar a las Fuerzas Armadas con una acción civil. Es decir, la ultraderecha apuesta al desencadenamiento de la guerra civil.

La otra tendencia de la oposición aspira utilizar aquellos atributos del poder que actualmente se encuentran bajo su control: el parlamento, la Corte Suprema, los medios de comunicación. Con este objetivo, se subrayan las deficiencias y errores de la actual administración, se ponen obstáculos para la aprobación de las leyes y los decretos por el parlamento, incluso si no existen objeciones objetivas, lo que crea la imagen de un gobierno que no es capaz de gobernar el país.

Desde julio de 1971, la oposición, habiendo recobrado fuerzas después del choque temporal provocado por el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales y por el ambiente de alta activización política de las masas, comenzó una fuerte ofensiva contra el gobierno. Es interesante que, tal vez por primera vez en la historia de Chile, la oposición de derecha aplicó

la táctica de traslado del centro de gravedad de su lucha a las acciones callejeras masivas. Sin embargo, en este escenario la derecha fracasó (es cierto que la manifestación de mujeres a fines del 1971 tuvo cierto efecto, pero más en el extranjero que dentro del país). Entonces la oposición volvió a las formas más aprobadas y tradicionales de lucha en el parlamento. Aquí, durante los primeros meses del 1972 la oposición pudo lograr éxitos evidentes. De hecho, actualmente el gobierno se encuentra paralizado en cuanto a su capacidad de continuar la política de consolidación del sector público.

La aprobación de las enmiendas a la Constitución por el parlamento tendrá, sin duda, consecuencias importantes que llevarán a una agudización aún mayor de la lucha en el país. Está claro que la CUT nunca apoyará la devolución de las empresas expropiadas a sus antiguos dueños. El gobierno ya ha expresado su punto de vista sobre este problema, con las palabras de Allende en el sentido de que el destino de las empresas expropiadas lo van a decidir los mismos obreros. Es el momento clave que determina el grado de tensión de la lucha política en Chile.

En la perspectiva más próxima también hay que esperar el fortalecimiento de la actividad de las agrupaciones extremistas de izquierda, en primer lugar, de la más influyente de ésta, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Los vínculos de la Unidad Popular con el MIR son más estrechos y complicados que lo parecen a primera vista. Especialmente esto se refiere al Partido Socialista y su secretario general, Carlos Altamirano. Durante el período de las elecciones presidenciales y después de éstas, el aparato del MIR ejercía las funciones de una especie de órgano de contrainteligencia en la Unidad Popular, y efectivamente ayudó a la Unidad Popular a descubrir varias organizaciones conspiradoras. Por una parte, esto demuestra capacidades y vinculaciones aún no esclarecidas del MIR, pero, por otra parte, demuestra sus contactos con los líderes socialistas. Es sabido que dos parientes cercanos de Allende son integrantes del MIR.

Nos parece probable que Allende, a pesar de algunas de sus declaraciones respecto al MIR, donde los amenaza con represalias, aspira más bien a poner bajo su control a esta organización que a debilitarla o destruirla. De hecho, los grupos miristas pueden ser comparados con los grupos activos de extremistas de derecha que en febrero de 1972 realizaron una serie de actos vandálicos.

Desde los primeros meses de 1972, el MIR se activó, tratando de dividir la Unidad Popular y aislar al Partido Comunista. En la provincia de Concepción los miristas lograron ciertos éxitos en este sentido. En mayo de 1972, el MIR, MAPU, la Izquierda Cristiana y la organización local del Partido Socialista organizaron el frente único contra los comunistas y exigieron la dimisión del Intendente de la ciudad de Concepción (comunista). En la asamblea de los dirigentes de partidos de la Unidad Popular, dedicada a este asunto, las discrepancias alcanzaron un nivel muy alto. Apoyando a los extremistas de izquierda, el secretario general del PSCh, Carlos Altamirano, exigió a Allende acelerar las transformaciones revolucionarias en forma de un ultimátum. No obstante, en las declaraciones oficiales de las directivas nacionales de todos los partidos que

forman parte de la Unidad Popular, el incidente en Concepción fue condenado y se declaró que si el MIR no renunciaba a su política divisionista, no habría ningún tipo de contactos con él (una declaración más vaga hizo al respecto C. Altamirano).

Todos estos acontecimientos provocaron la crisis gubernamental. El gabinete de ministros dimitió. En el nuevo gabinete cambiaron seis ministros (de los quince). Ahora en el gobierno hay tres ministros comunistas, cinco ministros socialistas, los demás son miembros de Partido Radical, Izquierda Cristiana, MAPU y API. La reorganización del gabinete de ministros tiene un carácter ambiguo: por un lado, fortalece las posiciones de los comunistas y socialistas (los radicales perdieron un cargo ministerial), por otro, esto ya no es una representación netamente política de los partidos de la Unidad Popular en un órgano ejecutivo, sino, en gran medida, es un gobierno de especialistas. Así, en vez de P. Vuskovic, el ministro de Economía ahora es C. Matus (socialista), ex presidente de la compañía estatal de acero, de formación ingeniero, egresado de la Universidad de Harvard, funcionario de la ONU para América Latina. P. Vuskovic, también un economista conocido, fue nombrado vicepresidente de la Comisión Económica Coordinadora, encabezada por el propio Allende. Integrantes de esta Comisión son, además, los ministros de Economía y de Hacienda.

En la cartera de Vivienda y Urbanismo, el radical O. Cantuarias fue reemplazado por L. Matte Valdés (independiente), ingeniero, egresado de la Universidad Notre Dame (Indiana), con gran experiencia de trabajo práctico.

De esta forma, Allende consciente o inconscientemente, pero de manera inevitable, va hacia la creación de un gabinete de ministros especialistas en sus áreas respectivas. La etapa actual es solamente el primer paso. Al parecer, antes de marzo del 1973 se va a producir por lo menos una transformación más en el gabinete, y una tercera será insoslayable, después de las elecciones parlamentarias.

En general, en el gobierno y en la Unidad Popular llegó a predominar, al parecer, la idea de la necesidad de transformar al máximo la economía antes de 1976, para cerrar el camino atrás, independientemente de quién llegue al poder en las nuevas elecciones presidenciales. Los promotores de esta idea (en eso casi no hay lugar a dudas) son los comunistas. Los socialistas (más que otros partidos) esperan quedarse en el poder después de 1976, pero no saben cómo hacerlo. De ahí sus vacilaciones y discrepancias internas.

En lo político, la actual reestructuración del gobierno sólo aparece como una concesión a los elementos izquierdizantes, en realidad es un triunfo de la línea del PCCh.

Por otra parte, refleja el proceso de reducción de la base social de la Unidad Popular y del gobierno. Este hecho evidencia un fracaso parcial de la línea de los comunistas que a toda costa intentaban ampliar esta base, haciendo a veces demasiadas concesiones al ala socialdemócrata del bloque. Lo confirma la salida de la Unidad Popular del Partido de Izquierda Radical (L. Bossay, A. Baltra y otros). Con la salida de este partido, el gobierno perdió el apoyo de 12 miembros del Congreso Nacional. El número total de senadores y di-

putados de los partidos de la Unidad Popular se redujo de 87 hasta 75 (de los 200).

Inmediatamente después de la salida del Partido de Izquierda Radical había una esperanza de que ese partido podría asumir una actitud de oposición constructiva respecto a la Unidad Popular. Esto podría ser prometedor para los propios radicales, pues atraería hacia ellos a una parte de electores reformistas que se habían unido a la derecha. Además, la aparición de una “tercera fuerza” (radicales) que estarían en una oposición constructiva respecto al gobierno de Allende, habría aumentado las posibilidades de maniobra de Allende e incluso podría producir después de las elecciones parlamentarias la situación que permitiría a la Unidad Popular efectuar los cambios de la Constitución de acuerdo con sus planes. Todavía no hay que rechazar definitivamente la posibilidad de ese desarrollo de los acontecimientos. Pero ciertas actitudes de los radicales despertaban preocupación. Así, crearon un Comité Coordinador junto con la Democracia Radical (J. Durán). En las elecciones complementarias en julio de 1972, los radicales de derecha, el PDC y el Partido Nacional tienen las intenciones de presentar un candidato único.

Los meses restantes de 1972 y comienzos de 1973 (hasta las elecciones al parlamento que tendrán lugar en marzo de 1973) serán extremadamente tensos y agitados. Al parecer, se puede esperar confrontaciones bastante agudas entre la ultraderecha y la ultraizquierda. Tomando en cuenta la cercanía de las elecciones parlamentarias, hay poca probabilidad de que el gobierno aplique una política de represalias contra ellos. Al mismo tiempo, en esta situación el gobierno no aceptará un plebiscito.

El plebiscito podría cambiar rotundamente la situación en el país. Sin embargo, las posibilidades de la Unidad Popular de triunfar son dudosas. El gobierno de Allende, al parecer, parte del hecho que, desde el punto de vista político, una decisión sobre el plebiscito, que cuestionaría la permanencia del bloque de la Unidad Popular en el poder, sería poco razonable pocos meses antes de un acto constitucional normal, como son las elecciones parlamentarias. Los líderes del bloque lo saben muy bien. Por esta razón, si en 1971 Allende más de una vez amenazó a la derecha con un plebiscito, ahora la derecha es la que se lo exige a Allende. Al parecer, se harán más frecuentes las declaraciones de estado de sitio con la entrega de control a los militares en todo el país y en algunas provincias. Allende ya aplicó esta medida más de una vez, demostrando su confianza en el Ejército. Pero eso, sin lugar a dudas, tiene un aspecto muy peligroso: los oficiales del Ejército aprenden a gobernar el país (los militares chilenos tienen en eso menos experiencia que sus colegas de otros países de América Latina), y tal experiencia crea antecedentes para un golpe de Estado.

Pero en general el golpe de Estado en Chile actualmente es poco probable. En sus últimas declaraciones el Comandante en Jefe del Ejército chileno, general C. Prats, destacó la lealtad de los militares a la Constitución. Respondiendo a los llamados de la prensa derechista que instiga a los militares a intervenir y acabar con los grupos armados de izquierda, Prats declaró: “En nuestro país no existen grupos armados que amenazarían con la intervención

militar en la vida política nacional”². En Chile, según Prats, la situación es muy diferente a la de Colombia o Venezuela: aquí nadie se pronuncia contra el Ejército. En cuanto a poner orden en las calles, es el trabajo de la policía. Los objetivos de las Fuerzas Armadas están definidos por la Constitución, y las FF. AA. deben cumplir con ellos estrictamente. Las Fuerzas Armadas no intervienen, no intervienen y no intervendrán en la vida política del país.

El Ejército chileno apoyó decididamente al gobierno en el tema de la nacionalización de las minas de cobre de propiedad de las compañías norteamericanas.

Entre las causas más importantes que explican el apoyo real del Ejército al gobierno de Allende, se podrían mencionar las siguientes:

1) Cambios en la composición social del cuerpo de oficiales. De hecho, desde la época de la Constitución de 1925, los representantes de las capas medias urbanas adquieren cada vez más mayor importancia en todos los eslabones de mando. El nivel de vida de los oficiales venía bajando constantemente, así que en la década de los 60 se igualó con el nivel medio de vida de los empleados públicos. E. Frei prestó poca atención a la situación económica de los militares: se atrasaba el pago de sueldos, no se reajustaban a tiempo las remuneraciones según el IPC (esto afectaba a los oficiales en mayor medida que a los obreros y empleados públicos). Aprovechando las condiciones especiales de los militares, el gobierno de Frei les pagaba parte de sus salarios y sueldos en especies. Solamente el motín de octubre de 1969 lo hizo reconsiderar su actitud frente al Ejército y mejorar algo la situación económica de los militares. En este sentido el suelo resultó fértil para el gobierno de Allende, pero el cultivo de buenas relaciones con los militares cuesta caro.

2) Fortalecimiento de la influencia de la izquierda no solamente entre los oficiales, sino también entre la tropa. Lo demuestra la aparición de organizaciones de izquierda entre los militares en retiro, de carácter tanto político como profesional. El Movimiento de la Acción Popular Independiente encabezado por el senador R. Tarud tiene muy buenos contactos entre los militares, especialmente entre aquéllos en retiro. Después de la llegada de Allende al poder fueron realizadas purgas de envergadura entre los oficiales, lo que fue facilitado por la investigación del motín de 1969 y, especialmente, del asesinato de general Schneider. Se puede suponer que la parte reaccionaria del cuerpo de oficiales, en su mayoría, se vio obligada a renunciar por una u otra razón.

Una prueba indirecta del fortalecimiento del apoyo a la izquierda entre la tropa la constituyen algunos datos de la estadística electoral. Por los partidos Comunista y Socialista a principios de los 60 votaban más del 60% de los hombres. En las elecciones municipales de 1971, por primera vez participaron los jóvenes entre 18 y 21 años. Más del 70% de ellos votaron por la Unidad Popular. Es natural suponer que los conscriptos del Ejército, de la misma edad, tienen una postura más o menos semejante. En consecuencia, es difícil suponer la posibilidad de una acción del Ejército chileno como una fuerza unida al margen de partidos y del gobierno.

² [La cita no es textual por provenir de una doble traducción: del español al ruso y viceversa.]

3) El Ejército chileno no tiene una experiencia práctica suficiente de gobierno.

Un papel importante en la actual situación política del país juega el cuerpo de Carabineros. De las 70 mil personas en armas en Chile, 20 mil son carabineros. A ellos en gran medida se puede referir todo lo dicho anteriormente sobre el Ejército. Pero hay también ciertas particularidades. Carabineros fue creado en 1927 por el general Ibáñez, tras la pérdida del apoyo del ala progresista del cuerpo de oficiales, dirigido por el futuro fundador del Partido Socialista, Marmaduke Grove. Carabineros fue creado como contrapeso a esta parte del Ejército. Posteriormente los gobiernos burgueses del país, actuando, según el principio *divide et impera*, apoyaban las discrepancias entre el Ejército y Carabineros. En 1964, el 80% de los carabineros en retiro y de los de servicio activo con derecho a voto, votaron por Frei. Sin embargo, bajo el gobierno demócrata cristiano las relaciones entre el gobierno y el cuerpo de Carabineros se deterioraron significativamente. Una de las razones principales fue el empeoramiento de la situación económica de los carabineros, el aumento de los años de servicio necesarios para obtener jubilación, de 10 hasta 20 años (en la práctica, hasta 25-30 años), la reducción de personal, etc.

Después de la llegada al poder, Allende designó un nuevo General Director del cuerpo, subió las remuneraciones de los carabineros y oficiales, presentó ante el parlamento un proyecto de ley que proponía aumentar la dotación de la institución (este proyecto fue rechazado por los votos de PDC y Partido Nacional, lo que, naturalmente, provocó descontento entre los carabineros con las acciones de la oposición). Durante su viaje al Perú el Presidente ofreció al General Director de Carabineros y a su esposa que lo acompañaran. Ocurrió por primera vez en la historia de la institución y recibió una gran y positiva repercusión entre sus miembros. Durante la visita a Cuba del Ministro de Relaciones Exteriores, éste fue acompañado por otro alto oficial del cuerpo de Carabineros. Los dirigentes de la institución más de una vez destacaron su satisfacción por no tener que realizar ahora las humillantes funciones de un órgano represivo antipopular.

Resulta conveniente analizar otro aspecto más de la situación política del país.

Dentro del bloque de la Unidad Popular se vislumbran ciertos cambios. En primer lugar, llama la atención el cambio de la política de Allende hacia la Unidad Popular. Hace poco el Presidente propuso promover candidatos comunes para las elecciones de 1973. Según la Constitución chilena, se prohíbe crear coaliciones políticas para las elecciones parlamentarias. Sin embargo, los partidos hace mucho tiempo encontraron formas de evadir esta prohibición mediante acuerdos entre los dirigentes de distintos partidos sin necesidad de fusionarlos. Como consecuencia de la mencionada propuesta de Allende, aparecieron varios proyectos de crear un llamado Partido Federado, en el cual cada partido podría conservar su identidad y características particulares. Todo eso agudiza las tensiones dentro de la Unidad Popular. Cabe suponer que Allende necesita la unidad dentro del bloque, pero sólo para asegurarse que todos los senadores y diputados de los partidos integrantes de la coalición voten en el parlamento por los proyectos propuestos por el gobierno. Por otro

lado, las discrepancias dentro del bloque le permiten desempeñar el papel de un árbitro entre los partidos.

Vale destacar que el filo de la propuesta sobre los candidatos comunes, en las actuales circunstancias, está dirigido contra el Partido Comunista. El problema radica en el hecho de que antes de las elecciones municipales el Partido Comunista fue el partido más grande y más influyente dentro de la Unidad Popular. En las elecciones municipales los socialistas adelantaron considerablemente a los comunistas. Si en estas condiciones se van a ofrecer candidatos comunes, los socialistas pueden pretender recibir la mayoría absoluta. En general, la realización de este plan debilitará las posiciones de comunistas dentro del bloque, fortaleciendo al mismo tiempo las posiciones de los socialistas de los partidos pequeños. Es poco probable que los comunistas no lo comprendan. Habría que pensar que viene el empeoramiento de las relaciones entre los partidos principales de la Unidad Popular.

En el movimiento sindical también surgieron importantes complicaciones. Una muestra de ello es el hecho de que en el VI Congreso de la CUT, celebrado a fines del 1971, no se procedió con la elección de una nueva directiva. Las elecciones fueron postergadas, primero, para abril, y posteriormente para fines de mayo. Los resultados de las elecciones del Consejo Directivo de la CUT fueron publicados a mediados de julio de 1972. Como presidente de la CUT fue elegido por tercera vez el comunista L. Figueroa. Como secretario general de la CUT fue elegido el socialista R. Calderón, y como vicepresidente el demócrata cristiano E. Vogel. Las elecciones demostraron un notorio fortalecimiento de la influencia de la Democracia Cristiana dentro de la CUT.

La Democracia Cristiana realiza dentro del movimiento obrero una política que fortalece las posturas puramente sindicalistas entre los líderes de las organizaciones de trabajadores. El PDC promueve la idea de que no es necesario centralizar la economía ni traspasar grandes empresas al Estado. Según su opinión, basta con establecer la autogestión obrera en la fábricas y usinas. Los trabajadores solos resolverán los problemas de la producción, y en eso precisamente consiste el socialismo verdadero y una democracia real. El papel del Estado tiene que reducirse a la realización de funciones consultativas y consejeras. Consideramos que una política de este tipo puede contribuir a la consolidación de la posición privilegiada de los trabajadores de ciertas ramas de producción, por ejemplo, de la industria cuprífera, lo que, por lo tanto, reforzaría la división dentro de la clase obrera. Sin lugar a dudas, tal situación complicaría los objetivos del Estado en el ámbito de la regulación de precios en el mercado interno y de la planificación de la economía. Los eslógans del PDC, por lo visto, tienen un carácter demagógico y sirven a los intereses netamente políticos de atraer hacia la oposición a una parte de la clase obrera. No se puede subestimar su impacto emocional en los obreros. En realidad, este planteamiento del problema evoca una variante del capitalismo popular.

Durante la última Junta Nacional del PDC, que culminó en marzo de 1972, los demócrata cristianos, junto con criticar a la Unidad Popular, destacaron una serie de éxitos de la coalición (crecimiento de la producción). Declararon que el PDC no estaba en contra de la expropiación de grandes

compañías, pero objetaba algunas de éstas, que, desde su punto de vista, fueron realizadas sin el acuerdo democrático de los trabajadores. Es probable que eso insinúe ciertos cambios en la política de rígida oposición aplicada por el PDC durante los últimos meses.

Aunque la situación política general en Chile es bastante incierta e inestable, se podrían formular ciertas reflexiones en cuanto a su futura evolución y, particularmente, en torno al problema de las perspectivas de la permanencia del gobierno de Allende en el poder:

Los últimos meses de 1972 y el inicio de 1973 (hasta las elecciones parlamentarias) serán en Chile extremadamente agitados y tensos.

El golpe de Estado en Chile actualmente es poco probable, y la ultraderecha y la ultraizquierda no disponen de fuerzas suficientes para eso. Además, Allende tiene grandes posibilidades para utilizar, en el caso de necesidad, el Ejército contra las acciones abiertas de ultraizquierda y la ultraderecha.

Todo eso hace pensar que el gobierno de Allende permanecería en el poder hasta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

En cuanto a las elecciones de 1973, es poco probable que el bloque de la Unidad Popular logre la mayoría absoluta en el parlamento y conquiste el poder legislativo. Cierta posibilidad hipotética de obtener la mayoría de los votos existía, pero ahora ha desaparecido casi en absoluto, producto de la salida de la Izquierda Radical de la Unidad Popular.

Es muy probable que después de las elecciones de 1973 el gobierno de Allende tenga la posibilidad de seguir consolidando el sector público de la economía ya existente. En el campo se terminaría definitivamente con el latifundismo. Al mismo tiempo, las empresas de los pequeños y medianos propietarios, por lo general, no serían nacionalizadas. La política interior y exterior del gobierno de Allende obtiene el carácter cada vez más moderado y reformista. Es así que es poco probable que Allende quiera y pueda realizar serias transformaciones de carácter socialista. Sin embargo, se puede afirmar que a pesar de la tensión e inestabilidad de la situación política interior de Chile, Allende lograría conservar el poder hasta cumplir el mandato presidencial, es decir, hasta el año 1976.

[...]

4. Estado de relaciones económicas con la URSS y perspectivas de su desarrollo

Ciertas premisas para el desarrollo del comercio y la colaboración técnico-científica con Chile se remontan a mediados de los años 60. En 1964, la URSS y Chile acordaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, mientras que una pequeña agencia comercial soviética ya había sido inaugurada en Santiago en 1962. En enero de 1967 fue firmado un acuerdo comercial y formas de pago, y dos acuerdos de créditos a largo plazo que suponían la adquisición por parte de Chile de maquinaria soviética y la prestación de asistencia técnica en la construcción de empresas industriales y afines, por una suma total de 57 millones de dólares.

Sin embargo, el acuerdo sobre el desarrollo de los vínculos comerciales y económicos prácticamente no se había puesto en marcha hasta octubre de 1970. El intercambio comercial anual entre Chile y la URSS alcanzaba apenas varios centenares de miles de rublos. Un cuadro semejante presentaban las relaciones económicas y comerciales entre Chile y otros países socialistas.

Tal estado de los vínculos económico-comerciales chileno-soviéticos se explicaba, en primer lugar, por la orientación históricamente determinada de la economía y del comercio exterior chilenos a los mercados de un reducido número de países de Occidente y, en particular, por la fuerte dependencia de los créditos extranjeros, de su ayuda económica y financiera, de sus mercados, de los estándares técnicos occidentales, etc., y también por una actitud cautelosa (y escéptica) de los gobiernos burgueses de Chile frente al desarrollo de las relaciones económicas con la URSS y otros países socialistas.

Por otra parte, la ampliación de la colaboración económica se ha visto seriamente obstaculizada tanto por la nomenclatura tradicionalmente reducida de las exportaciones chilenas (80% de su valor proviene del cobre), como por las capacidades limitadas de la URSS de suministrar ciertos productos que necesita Chile (trigo y todos los tipos de alimentos, petróleo y sus derivados, fertilizantes, etc.)

El gobierno de Allende promueve el desarrollo de las relaciones económicas con todos los países socialistas. Al mismo tiempo, este gobierno se caracteriza por la tendencia de enfocar este problema, en primer lugar, desde el punto de vista de la obtención de la ayuda económica, técnica y financiera de la Unión Soviética y de otros países socialistas. El futuro desarrollo de las relaciones económicas con Chile dependerá, en primer lugar, de las decisiones que ya han sido tomadas o se tomarán en el futuro próximo respecto a este problema.

Con la llegada al poder del gobierno de Allende las relaciones económicas entre la URSS y Chile se han ampliado notoriamente. Si en el año 1970 el valor total de intercambio comercial entre los dos países era 0,8 millones de rublos, y en 1969, apenas alcanzaba 0,3 millones, en el año 1971 el valor total del intercambio creció hasta 7,8 millones de rublos, principalmente, gracias a las exportaciones soviéticas. Por la petición del gobierno de Chile en 1971, la Unión Soviética suministró a este país una gran partida de trigo (100 mil toneladas). Además, fueron firmados contratos para el suministro de 5 mil tractores soviéticos y maquinaria para la construcción de caminos (por la suma de 6,5 millones de rublos).

Entre el 17 y el 29 de mayo de 1971 se celebraron en Moscú negociaciones con la delegación económica chilena, encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeyda. Los participantes de las negociaciones se manifestaron partidarios de ampliar la colaboración económica y técnica en base a condiciones mutuamente ventajosas. Fue especialmente destacado el interés recíproco de ampliar el intercambio comercial. Las partes intercambiaron las listas de productos que podrían ser de interés de cada uno de ellos y para ambos.

En las negociaciones se acordó la construcción en Chile de una planta industrial para la producción de bloques prefabricados para la construcción ha-

bitacional y de una fábrica de aceites y lubricantes con capacidad de 70 mil toneladas al año, con la asistencia técnica y financiera de la Unión Soviética. Para garantizar el financiamiento de estos y otros proyectos que serían definidos en el futuro, el 28 de mayo de 1971 en el Ministerio del Comercio Exterior de la URSS se firmó el Protocolo sobre la ampliación del crédito otorgado anteriormente por la Unión Soviética a Chile para la compra de maquinaria y equipamiento, vía el Ministerio del Comercio Exterior, de 15 a 55 millones de dólares, y sobre la reprogramación de los plazos de pago de este crédito.

En septiembre de 1971 fue firmado el acuerdo intergubernamental soviético-chileno de colaboración para el desarrollo de la pesca industrial. Éste establece la participación de la Unión Soviética en la elaboración de proyectos, construcción y reconstrucción de uno o más puertos pesqueros en Chile, la participación de la URSS en la formación de especialistas para la industria pesquera. Se establece también la posibilidad de arriendo de los barcos pesqueros soviéticos a *condiciones comerciales*. Actualmente varias traineras pesqueras soviéticas realizan la pesca en aguas profundas de las aguas territoriales chilenas, entregando la pesca a la compañía estatal chilena "Arauco". Los barcos de investigación científica soviéticos participan en la prospección de los recursos pesqueros de Chile.

En enero-febrero de 1972, estuvo de visita en Chile la delegación económica soviética, dirigida por el vicepresidente del Comité Estatal de Planificación de la URSS, camarada M. A. Pertzev. Durante las negociaciones con la delegación soviética, la parte chilena expresó su visión de las perspectivas de la colaboración económico-comercial para los años 1972-1975.

La parte chilena expresó sus expectativas en el sentido de que en 1972-1975 el intercambio promedio comercial entre la URSS y Chile podría alcanzar aproximadamente 300 millones de dólares anuales. Se destacó el interés especial de Chile de importar desde la URSS trigo, carne, mantequilla y algunos otros productos alimenticios, así como algodón, petróleo crudo, etc., por un total de 100-120 millones de dólares anuales. Además la parte chilena informó de su interés en importar maquinaria y equipos varios (para la construcción de carreteras, el sector energético, instalaciones de perforación, además de tractores, trolebuses, etc.) por un total de 30 millones de dólares anuales, aproximadamente. Sin embargo, la parte chilena quisiera empezar los primeros pagos por los suministros respectivos sólo a partir del año 1976. Esto implica que los productos soviéticos, principalmente alimentos y materias primas, se importarían en las condiciones de un crédito a largo plazo, que sería pagado después de las elecciones presidenciales de 1976, es decir, por la siguiente administración chilena, mientras que las transacciones con estos productos en la práctica internacional se realizan normalmente en efectivo sobre la base de crédito de corto plazo (hasta un año),

Al mismo tiempo, la parte chilena dio a conocer su lista de productos para exportar a la URSS, que incluía concentrados de cobre, cobre no elaborado y refinado, salitre, yodo, pescado, harina de pescado y también varios productos manufactureros industriales (calzado, productos de lana, etc.). A juzgar por la suma del intercambio anual (alrededor de 300 millones de dólares) pro-

puesta por la parte chilena, el volumen de las compras soviéticas en Chile debería equivaler a 150 millones de dólares anuales, aproximadamente. Además, el pago por las exportaciones chilenas se realizaría en efectivo y en divisa convertible.

La parte chilena fundamentó su posición en el tema de las relaciones económicas entre la URSS y Chile aludiendo, por un lado, a grandes restricciones de carácter monetario y financiero y, por otro lado, a razones políticas.

En marzo de 1973 se celebrarán en Chile las elecciones al Congreso Nacional, de cuyos resultados dependen muchas cosas. Así, en el transcurso de las negociaciones la parte chilena hizo hincapié en que el triunfo de la derecha en estas elecciones puede conducir a la caída del gobierno de la Unidad Popular. Por esta razón, la parte chilena solicitó, con especial insistencia, ayuda económica para los próximos meses, es decir, antes de las elecciones parlamentarias.

De esta manera, el plan de desarrollo del comercio soviético-chileno propuesto por la parte chilena implica que la Unión Soviética tendría que aceptar condiciones que jamás se han contemplado en las relaciones de la URSS con los países en vías de desarrollo. Los chilenos esperan que la URSS les suministre anualmente grandes partidas de productos de primera necesidad, y escasos en la URSS, como trigo, carne, mantequilla, algodón, etc., sobre la base de un crédito a largo plazo. A su vez, se supone que la Unión Soviética tendría que importar productos, de los cuales no tiene mayor necesidad, y pagarlos de inmediato en moneda firme [...].

Alejandro Montesinos (Juventud Radical Revolucionaria): Crítica a las negociaciones Democracia Cristiana-Unidad Popular

(Punto Final N° 162 de 18 de junio de 1972)

¿Qué opina sobre las conversaciones UP-DC?

“Aunque pudiera parecer un acto de oportunismo decir ahora cuáles fueron nuestras actitudes al plantearse el inicio de tales conversaciones, vamos a señalar lo que fue nuestra posición en aquella oportunidad. Además, fue un interesante tema de debate en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical, pues el Ministro encargado por el Ejecutivo es militante del Partido Radical, en la cartera de Justicia.

Esquematizar con meros slogans las conversaciones como “conciliación” o “traición” no es lo que debe marcar las posiciones que queremos detallar. Tras estas actitudes del gobierno de la Unidad Popular, está presente toda una concepción acerca de lo que debe y puede ser el proceso de lucha de clases, así como su dirección y desarrollo en nuestro país.

En esa oportunidad señalamos que: 1° los representantes del imperialismo y la derecha nacional, jamás conversan si tales actos no tienen al menos la perspectiva de resultar convenientes para sus posiciones; 2° en situaciones de definición política no es posible anteponer concepciones armonizantes a lo que la propia teoría nos entrega como una realidad del proceso de clases, vale decir, su carácter antagónico y conflictivo; esto último alcanza y afecta al conjunto de la sociedad, por cierto incluida la base trabajadora que compone una buena parte de la DC.

A partir de estas dos consideraciones centrales, afirmamos nuestra oposición a tales conversaciones.

¿Qué elementos sociopolíticos estaban presentes en este fenómeno? De una parte, el grueso de las fuerzas políticas que representan el interés de la clase de los trabajadores (UP) y de otra, los sectores reformistas que tras un período de gobierno dieron claro testimonio de su compromiso con las fuerzas económicas más reaccionarias y con el imperialismo norteamericano. ¿Qué perspectivas tenían entonces estas conversaciones? Para los primeros se trataba de evitar un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo y para los segundos se trataba de seguir una táctica “gatopardesca” que les permitiera fijar un marco estático a un proceso que, por su dinamismo, terminará por aplastarlos como clases dominantes. Para ellos está claro que las fuerzas que luchan en nuestro país por el socialismo, en una perspectiva estratégica, luchan por una socialización progresiva y creciente de los medios de producción; no sólo para terminar con los monopolios y las contradicciones más flagrantes del sistema sino para terminar con “la explotación del hombre por el hombre”. La

habilidad política de la DC tenía como limitación, su propio compromiso con los sectores oligárquicos y monopólicos que han sido afectados por la aplicación del Programa popular y fue este último lo que hizo estériles estos contactos que ingenuamente la izquierda chilena había emprendido.

Pensamos que de ello pueden obtenerse importantes conclusiones y enseñanzas: habremos de entender con mayor claridad que las fuerzas revolucionarias caen en el subjetivismo y la ingenuidad cuando remiten a factores externos a ellas mismas, las posibilidad de éxito o fracaso de tal o cual misión. Es un poco como hipotecar nuestras propias responsabilidades en el proceso. De otra parte, vinculado a lo anterior, hay que recuperar la confianza de y en las masas trabajadoras, comprendiendo y aceptando que habrán de ser ellas el motor del proceso revolucionario”.

¿Cuál será la tarea fundamental de la J.R.R.?

“Nuestra organización ha llamado a un Congreso Nacional extraordinario a celebrarse en Valparaíso del 12 al 15 de agosto próximo.

En líneas generales el propósito de tal Congreso es el de revisar, revitalizar el conjunto de lo que podríamos llamar las tácticas de hoy.

Como es sabido la J.R.R. nació en el seno partidario teniendo como meta principal depurar humana e ideológicamente al radicalismo de todo el lastre derechista que arrastraba tras años de vacilante conducta política. Nuestra meta era recuperar una actitud popular, vinculando estas fuerzas al resto de las fuerzas revolucionarias y progresistas de nuestro país.

Recordamos 1969, incluso 1971, en que hubo que vencer incluso sentimientos espontáneos de militantes engañados por largos años de maquiavélicas direcciones políticas que había mellado la combatividad de fuertes contingentes del PR.

La formación de los auténticos golpistas representados por la Democracia Radical, así como del oportunismo más descarado agrupados hoy en el PIR, representan en nuestro concepto claros indicios de que el radicalismo de hoy es una versión no sólo renovada, sino que también profundamente diferenciada de lo que fue la expresión radical de hace algunos años.

No todo está completado, pues subsisten aún elementos que por mera conveniencia política han adoptado una perspectiva “izquierdizante”, que se expresa incluso en niveles que calificamos de “social oportunistas”. Desgraciadamente no están solos, en un esquema más amplio, pues también este fenómeno es detectable en sectores de la izquierda, lo que nos lleva a pensar que nuestra tarea de vigilancia revolucionaria no habrá de estar circunscrita a lo interno, sino al conjunto de aquellos sectores que tienen incidencia en la marcha general del proceso.

Sin embargo esto, que yo llamaría la táctica de 1968, año de nuestro nacimiento como organización, requiere algunas revisiones que la complementen y la enriquezcan, pues las propias condiciones internas y externas han cambiado lo suficiente como para exigir que en 1972 se apliquen tácticas acordes con nuestra realidad. De lo contrario se estarían confundiendo los deseos con la realidad en un acto de subjetivismo voluntarioso.

En líneas generales podríamos resumir señalando que se trata de pasar de la época del decir a la época del hacer.

En nuestro concepto no se puede seguir pensando en “propugnar” o “luchar” por tales o cuales “ideas”, sino fundamentalmente aplicarlas en la realidad, en contra del enemigo de clase interno y externo, mediante una real vinculación con los frentes de masas. En cada presencia revolucionaria se hace necesaria esa vinculación entendiendo que nuestra aportación del proceso se trunca si la entendemos sólo en la perspectiva del trabajo interno, partidario.

Aún más, pensamos con Lenin que el verdadero revolucionario se forma y forja al calor del trabajo en las masas. Entonces es necesario que cada uno de nosotros pruebe en la realidad su propósito sincero de ser, en cada lugar y a cada momento, un revolucionario de verdad.

Por ello, nuestro Congreso de agosto, tendrá una importancia y proyección extraordinariamente amplia para el futuro de la J.R.R.”.

—¿Cómo vieron ustedes el enfrentamiento electoral de Coquimbo?

“Desde el punto de vista formal no fue ni mucho menos un acto revolucionario, pues constituyó una repetición de los ya conocidos actos electorales; claro que tras esta cuestión formal hay elementos que deben ser analizados, ya que juegan importante rol en la marcha general del proceso que se vive en Chile.

Nos parece de suma importancia destacar que el enfrentamiento de clase que se viene produciendo en Chile tuvo una nueva expresión en este evento electoral. Por una parte se mantuvo la unidad revolucionaria, expresada por los partidos que integran la Unidad Popular, y por otra los reaccionarios de siempre, cuyo único propósito es evitar el avance torrentoso del pueblo para lograr transformaciones que permitan consolidar una nueva sociedad. En estos debemos reiterar lo que señalamos cuando se produjo la escisión de siete diputados y cinco senadores para crear el llamado PIR. La misma dinámica de los acontecimientos sociales y económicos demostró que este grupúsculo no es otra cosa que un factor más de la reacción, de ahí que no extraña a la opinión pública que las fuerzas reaccionarias hayan expresado sus lineamientos políticos en la elección de Coquimbo por intermedio de un candidato del PIR. Ayer sostuvimos que la conducta de Bossay y su camarilla tendría que irse plasmando en acciones comunes de éstos con la derecha. Hoy sostenemos que los hechos, como por ejemplo la elección de Coquimbo, demuestran la identidad que el PIR tiene con los intereses económicos de los que pretenden una salida golpista en contra del pueblo”.

—Recientemente el Departamento Nacional Campesino Radical celebró un Congreso. ¿Qué participación le ha cabido en él a la J.R.R.?

“Hace poco más de un año un grupo de militantes y dirigentes adultos y juveniles con la participación de elementos campesinos se propusieron dar vida a la Comisión Agraria Radical. Este organismo incipiente tuvo en sus comienzos una orientación más bien funcionaria-campesina que lo llevó a distorsionar su acción. Sin embargo hoy al cerrarse el Congreso Campesino Radical

entendemos el papel extraordinario que muchos militantes adultos y juveniles cumplieron en el frente del agro.

La composición de clase de este último Congreso nos indica que era necesario generar desde el propio seno de los campesinos radicales una dirección nacional auténtica y revolucionaria que la oriente, duplicando nuestro esfuerzo en el sector campesino chileno.

Nuestro papel fundamental es apoyar las iniciativas campesinas, pues ellas tuvieron un sentido claramente revolucionario, rechazando las orientaciones reformistas y “modernizantes” que a veces se han querido imprimir al proceso de reforma agraria.

Por vía del ejemplo, para evitar toda tramitación que se da entre el momento de la expropiación de un predio y su toma de posesión, los campesinos radicales acordaron impulsar tomas organizadas y responsables para poner en marcha la producción del predio de que se trate.

Esta iniciativa permite una contribución efectivamente revolucionaria por parte de los propios campesinos en la aplicación del programa de la UP.

Impulsar en todos los niveles el crecimiento y desarrollo de los CERA (Centros de Reforma Agraria), será una tarea que emprendamos para erradicar todos los brotes de individualismo y oportunismo o capitalismo que pudieran surgir del lastimoso ejercicio de la Democracia Cristiana en el gobierno pasado.

Ximena Solís V.

Presidencia de la República: Proyecto de Ley sobre la participación de Trabajadores en Empresas del Area Social y Mixta

(18 de julio de 1972)

El siguiente es el texto de proyecto que crea un mecanismo de participación de los trabajadores en la administración de las empresas del área social y mixta de la economía:

Artículo 1°.- Los trabajadores participarán en la gestión de las empresas de las áreas de propiedad social y mixta en que el Estado sea socio mayoritario o tenga la mayoría dentro del directorio respectivo.

Los organismos básicos de participación en estas empresas son la asamblea de los trabajadores de la empresa, las asambleas de las unidades productivas, los comités de producción de las unidades productivas y el Consejo de Administración.

Artículo 2°.- La asamblea de los trabajadores de la empresa es el organismo máximo de participación a nivel de base. Está compuesta por la totalidad de los trabajadores de la empresa con contrato definitivo. No obstante, los trabajadores temporales podrán participar en la administración de la empresa conforme lo establecido en el reglamento interno de la empresa.

1.- Se entenderá por trabajadores temporales aquellos que tienen contrato de trabajo por un tiempo inferior a tres meses. Sus funciones, entre otras, son:

a) Discutir los planes y política de la empresa, de acuerdo con los lineamientos generales establecidos para la rama respectiva por los organismos de planificación nacional y sectorial, y fijar la posición de sus representantes en el Consejo de Administración;

b) Elegir a sus representantes ante el Consejo de Administración; y

c) Votar las censuras planteadas a sus representantes ante el Consejo de Administración.

La asamblea de los trabajadores será presidida por la directiva del sindicato único, o por una comisión de los representantes de los sindicatos, si no lo hubiere.

Artículo 3°.- Las Asambleas de las Unidades Productivas están compuestas por todos los trabajadores de una sección, departamento, división o unidad productiva, según corresponda.

Sus funciones entre otras, son:

a) Conocer y discutir el plan y la política de la empresa para su unidad productiva;

b) Elegir los integrantes del Comité de Producción de su unidad y fijar su política;

c) Votar las censuras planteadas a sus representantes ante el Comité de Producción.

Artículo 4°.- Los comités de producción de las unidades productivas son los organismos asesores del jefe de la unidad y contralores de la aplicación del plan y política de la empresa para dicha unidad.

Artículo 5°.- El Consejo de Administración es el único organismo con poder para adoptar resoluciones de carácter obligatorio para el funcionamiento de la empresa, conforme a las normas que a continuación se establecen:

- El Consejo de Administración podrá delegar parte de sus atribuciones en organismos inferiores de participación.

- El Consejo de Administración determinará la política de la empresa de acuerdo a las normas e indicaciones de la planificación nacional y sectorial.

- En las empresas del área social el Consejo de Administración estará compuesto paritariamente por representantes del Estado y de los trabajadores. La presidencia corresponderá a uno de los representantes del Estado, quien dirimirá con su voto los empates que se produjeran.

- El gerente o administrador general será nominado por el organismo estatal que guarde relación con la empresa, en base a una terna propuesta por el Consejo de Administración, y se mantendrá en el cargo mientras cuente con la confianza del organismo estatal respectivo y del Consejo de Administración.

2.- El personal de las empresas será dirigido por el Consejo de Administración y gozará de todos los derechos y garantías respecto al cargo que establece la legislación vigente.

Los Consejos de Administración de las empresas del área social, una vez constituidos, reemplazarán a los directorios de las mismas, sin necesidad de reforma legal o estatutaria. Los representantes de los trabajadores en los Consejos de Administración o en los organismos de dirección de la empresa, según el caso, serán elegidos en votación secreta y directa, unipersonal y proporcional, de manera que se encuentren representados los trabajadores de producción, los administrativos y los técnicos profesionales.

Es incompatible la función de dirigente sindical y de representante de los trabajadores ante los organismos de participación en la respectiva empresa.

Los cargos de representantes del Estado y de los trabajadores ante el Consejo de Administración o los correspondientes organismos de dirección de las empresas mixtas, serán gratuitas siendo de cargo de las empresas respectivas los gastos de viáticos y de traslados en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 6°.- En cada empresa el reglamento determinará la aplicación de estas normas generales, atendiendo a las características propias de cada unidad productiva. Este reglamento interno de participación será elaborado por un Comité paritario constituido por representantes del o de los sindicatos y de la administración superior de la empresa. El reglamento deberá ser aprobado por la Asamblea de Trabajadores de cada empresa y por la Comisión Ejecutiva Nacional de Participación.

Artículo 7°.- En todos los organismos máximos de la Planificación Nacional tendrá representación la Central Unica de Trabajadores en un número no inferior a 13 de los miembros de esos organismos.

En los organismos sectoriales de planificación existirá representación de los trabajadores a través de las Federaciones, Confederaciones o Sindicatos Unicos Nacionales respectivo, en un número no inferior a 13 de los miembros de esos organismos.

Artículo 8°.- Existirá una Comisión Ejecutiva Nacional de Participación compuesta paritariamente por representantes de la Central Unica de Trabajadores y del Gobierno, y que será presidida por uno de los representantes del Gobierno. Esta comisión tendrá bajo su responsabilidad la planificación y supervisión del desarrollo del proceso de participación, conforme a las normas de esta ley.

Será también de su responsabilidad la aprobación de los reglamentos internos de participación que se elaboren en las empresas de acuerdo a estas normas generales.

Realizará estudios y propondrá las modificaciones a las normas citadas, de acuerdo a lo que el desarrollo del proceso recomiende.

Artículo 9°.- En las empresas del área de propiedad privada y en las áreas de propiedad mixta con participación minoritaria del Estado en la gestión, los sindicatos deberán ser informados especialmente de los balances, de la política de la empresa sobre organización del trabajo, empleo, inversiones y formación profesional, y de los convenios que se suscriban.

Presidencia de la República: Proyecto de Ley sobre Garantías Propuestas para Pequeña y Mediana Empresas

(15 de julio de 1972)

A continuación se transcribe el proyecto que establece garantías a la pequeña y mediana empresa industrial, extractiva y comercial:

Art. 1°.- Para los efectos del Art. 10° N° 10, inciso 20, de la Constitución Política del Estado se entiende:

a) Por familia la formada por los cónyuges; los ascendientes hasta el primer grado, cuando fueren inválidos; los descendientes hasta el segundo grado inclusive cuando fueren huérfanos menores de 18 años; y los colaterales hasta el segundo grado inclusive cuando fueren inválidos o huérfanos menores de 18 años de edad.

b) Por pequeña industria aquella que mantiene en uso maquinarias y equipos por un valor de 70 sueldos vitales anuales Escala A del Departamento de Santiago y ocupa hasta un máximo de 50 trabajadores (840.000).

c) Por mediana industria aquella que careciendo de alguno de los requisitos señalados en la letra anterior, tenga un capital y reservas que no exceda de 1.000 sueldos vitales anuales Escala A del Departamento de Santiago (9.600.000).

d) Por pequeña empresa comercial aquella cuyo capital de explotación no exceda de 200 sueldos vitales anuales, Escala A del Departamento de Santiago (E° 2.400.000).

e) Por mediana empresa comercial aquella cuyo capital de explotación excede del límite señalado en la letra anterior y no sobrepasa los 400 sueldos vitales anuales Escala A del Departamento de Santiago (E° 4.800.000).

f) Por pequeña industria extractiva la actividad productora que se realiza en minas o en plantas de beneficios minerales, cuyos dueños o explotadores sean personas naturales o sociedades mineras que no adopten la forma de sociedades anónimas y siempre que su activo líquido no exceda de 70 sueldos vitales anuales Escala A del Departamento de Santiago con exclusión del yacimiento. Cuando la actividad extractiva tenga plantas de beneficios anexos su capital o activo líquido se considerará como un solo todo.

g) Por mediana empresa extractiva la actividad productora que se realiza en minas o plantas de beneficios de minerales, siempre que su activo líquido sea superior al límite señalado en la letra anterior y no exceda de 1.000 sueldos vitales anuales Escala A del Departamento de Santiago.

Las sociedades anónimas cuyo objeto esencial sea la explotación minera se considerarán medianas aun cuando su capital no exceda de 70 sueldos vitales anuales Escala A del Departamento de Santiago.

h) Por pequeña propiedad rústica aquella cuya cabida no exceda de cinco hectáreas de riego básico.

i) Por mediana propiedad rústica aquella cuya cabida máxima sea superior al límite señalado en la letra anterior y no exceda de veinte hectáreas de riego básico.

Por lo tanto, las propiedades o empresas señaladas en las letras anteriores no podrán ser nacionalizadas y en caso de expropiación, la indemnización deberá pagarse previamente, al contado y en dinero y deberá ser equivalente a los perjuicios que tal medida irroque a los afectados.

Art. 2°.- No podrán expropiarse conforme a lo dispuesto por la Ley N° 16.640 y sus modificaciones posteriores, ningún predio rústico o propiedad agrícola cuya cabida sea inferior o igual a 40 hectáreas de riego básico, salvo que se encuentre abandonado o clara o notoriamente mal explotado. En este último caso no podrá ser expropiado si trabajado directamente por su dueño o su familia. El alcance del concepto de familia será el mismo que determina la letra a) del Art. 1°.

Art. 3°.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro del plazo de un año, el estatuto de derechos y garantías de la pequeña y mediana empresas, de común acuerdo con todas las organizaciones gremiales de carácter nacional que representen los intereses de estos empresarios.

Presidencia de la República: Proyecto de Ley sobre el Sistema Nacional de Autogestión

(15 de julio de 1972)

TITULO I DEL SISTEMA NACIONAL DE AUTOGESTION

ARTICULO 1º.- Créase un Sistema Nacional de Autogestión, que estará constituido por las empresas que se señalan en virtud de la presente ley, y cuyo objetivo será acentuar el proceso de control de la economía por los trabajadores y colaborar en el desarrollo nacional. Este sistema integrará el área social de la economía con las modalidades que establece la presente ley.

ARTICULO 2º.- Podrán ser empresas de autogestión laboral:

1.- Aquellas cuyo patrimonio era superior a 14.000.000 de escudos al 31 de diciembre de 1969 siempre que no se encuentren ubicadas en actividades que la Constitución o la Ley reserva al Estado o en rubros esenciales para el desarrollo de la economía nacional, según lo establecido en el artículo 48 de la presente ley;

2.- Las que se creen o adquieran por la Corporación de Fomento de la Producción;

3.- Las que sean transferidas por ley del área privada o mixta al área social, siempre que la ley así lo determine;

4.- Las que hayan sido declaradas en quiebra o se encuentren en receso debido a una causa imputable a su propietario o cuya paralización, cierre o liquidación provoque cesantía en grupos importantes de trabajadores, siempre que la Corporación de Fomento de la Producción a través de sus Comités Sectoriales respectivos así lo determine atendidas las condiciones de la empresa;

5.- Las que en la actualidad y en el futuro sean administradas íntegramente por sus trabajadores, cualquiera que sea su forma jurídica, cuando éstos lo acuerden en forma mayoritaria y su integración al sistema sea aprobada por la Corporación de Fomento de la Producción a través de sus Comités Sectoriales.

En este caso la empresa deberá adoptar el sistema de propiedad y de gestión establecido en el artículo 8º, y

6.- Las cooperativas, según lo establecido en el Título VI de la presente ley.

ARTICULO 3º.- Las empresas de Autogestión Laboral dependerán del Comité Sectorial respectivo. En dicho organismo las empresas de Autogestión Laboral tendrán dos representantes elegidos en votación directa, proporcional, unipersonal y secreta por los trabajadores de dichas empresas. Los repre-

sentantes provendrán de los miembros de los Consejos de Administración de tales empresas.

ARTICULO 4°.- Para estos efectos, los Comités Sectoriales de la Corporación de Fomento de la Producción tendrán facultad para adquirir y vender bienes, valores, emitir y colocar bonos en el mercado, conceder préstamos a las empresas en moneda nacional, o el equivalente en moneda extranjera. Estarán facultados también para negociar y obtener créditos en el exterior con arreglo a las disposiciones legales vigentes y en general, para negociar operaciones comerciales de exportación e importación.

Podrán, asimismo, recibir a cualquier título aportes de capital del Estado, de las Corporaciones o Juntas Regionales de Desarrollo, de las Municipalidades, de los particulares, y en general de cualquier persona natural o jurídica. Los aportantes no tendrán derecho a intervenir en la dirección o administración de los Comités o las empresas.

En general los Comités Sectoriales de la Corporación de Fomento de la Producción tendrán todas las facultades necesarias para el cumplimiento de sus fines y, por tanto, realizar actos y celebrar todo tipo de contratos.

ARTICULO 5°.- Formarán parte del patrimonio de la Corporación de Fomento de la Producción los bienes raíces y muebles de las empresas de autogestión laboral, los que estarán asignados a cada empresa y sus trabajadores tendrá el uso de los mismos. Para estos efectos el uso se entenderá como la facultad de administrar y no como lo disponen los artículos 311 y siguientes del Código Civil.

ARTICULO 6°.- Los Comités Sectoriales de la Corporación de Fomento de la Producción podrán crear un sistema nacional de fondos destinado a realizar inversiones en las empresas autogestionadas, y asegurar el buen funcionamiento del sistema.

ARTICULO 7°.- Anualmente los Comités Sectoriales de la Corporación de Fomento de la Producción en coordinación con la Oficina de Planificación Nacional y la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción fijarán las bases anuales de la política de producción esperada por sector y rama industrial, y la política de precios respectiva.

Esta información servirá como criterio básico para fijar el excedente o retorno obligado de las empresas y para analizar la factibilidad de nuevos proyectos de empresas.

TITULO II DE LAS EMPRESAS DE AUTOGESTION

ARTICULO 8°.- Se denominará empresa de autogestión aquella unidad productiva de carácter industrial, minero y de prestación de servicios, cuya dirección y administración serán ejercidas íntegramente por los trabajadores de la respectiva empresa, de acuerdo a las modalidades de la presente ley.

Sólo podrán integrar estas empresas las personas naturales.

En estas empresas existirá una separación entre la gestión y la propiedad del capital. En efecto, el capital de las empresas será de la Corporación

de Fomento de la Producción y la gestión corresponderá al colectivo laboral de cada empresa de autogestión.

ARTICULO 9º.- Las empresas de autogestión podrán recibir directamente aporte de terceros, pero ellos no darán ningún derecho en su administración. Estos aportes formarán parte del patrimonio de la Corporación de Fomento de la Producción, pero deberán destinarse a la empresa a la cual fueron hechos, mientras ésta subsista. A la disolución de la empresa, estos aportes deberán ser retornados a su propietario.

Los aportes de capital que efectúen personas naturales o jurídicas a una empresa de autogestión tendrán el carácter de títulos de plazo indefinido y se reajustarán semestralmente de acuerdo con una tasa que será fijada por el Consejo General de la Corporación de Fomento de la Producción, previo acuerdo del Directorio del Banco Central.

Asimismo recibirán un interés, que se calculará sobre el capital reajustado y cuya tasa será fijada en la forma señalada en el inciso anterior. El interés se devengará al término de cada ejercicio.

En todo caso la Corporación de Fomento de la Producción no podrá, al fijar el reajuste y la tasa de interés, establecer tasas menores o superiores a las existentes para el resto de los instrumentos de ahorro reajustables.

El reajuste que devenguen los aportes de capital se imputará a la revalorización del capital propio de la respectiva empresa.

Se definirá como Patrimonio de la empresa, para efectos contables, la suma del total de aportes y de los acumulados en los fondos de eventualidades y revalorización del capital propio. Se permitirá imputar a pérdidas el total de la diferencia que resulte de aplicar los porcentajes de revalorización sobre el Patrimonio y los activos pertinentes.

ARTICULO 10.- Las relaciones patrimoniales que se produzcan entre la Corporación de Fomento de la Producción y las Empresas de Autogestión se formalizarán jurídicamente mediante el o los contratos respectivos.

ARTICULO 11.- Las Empresas de Autogestión tendrán personalidad jurídica de derecho privado y su representante legal será el Consejo de Administración.

Corresponderá al Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción aprobar los estatutos de las diferentes unidades que se constituyan. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la República deberá dictar dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta ley, y a proposición de la Corporación de Fomento de la Producción, un reglamento que contenga las normas sobre la constitución y funcionamiento de las empresas y demás materias que en esta ley se indican.

ARTICULO 12.- Formarán parte de las Empresas de Autogestión todos los trabajadores que se encuentren laborando en ellas, en cualquier instante de su operación y en cualquiera de los rubros de producción o actividad habitual o nueva de la unidad, con un contrato permanente o temporal. En el caso de los técnicos o profesionales que sean contratados para cumplir con tareas específicas el reglamento determinará su participación en la empresa.

ARTICULO 13.- La Corporación de Fomento de la Producción, a través de sus Comités Sectoriales, determinará la política de remuneraciones de las empresas que integran el sistema, en relación al esfuerzo productivo y conforme a la política general del Gobierno.

La Corporación de Fomento de la Producción propenderá a que exista la mayor homogeneidad entre rentas para iguales categorías en diferentes empresas, como asimismo en la gradualidad para obtener una distribución del ingreso más justa en cada una de ellas. La Corporación de Fomento de la Producción tendrá, asimismo, facultad para fijar las condiciones mínimas de contratación de los trabajadores temporales o transitorios. Se entenderá por tales aquéllos cuyo contrato de trabajo sea inferior a tres meses.

ARTICULO 14.- La dirección, administración y operación de las empresas de autogestión estarán a cargo de la Asamblea de los Trabajadores y el Consejo de Administración, sin perjuicio de las delegaciones que más adelante se señalan y de los Comités que se constituyan.

ARTICULO 15.- La Asamblea de los Trabajadores es la máxima autoridad de la empresa y estará integrada por todos los trabajadores que tengan el carácter de permanentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de esta ley; y, los acuerdos que adopte, con sujeción a la ley, el Reglamento y los Estatutos internos de la empresa, serán obligatorios para todos los miembros de ella.

ARTICULO 16.- La Asamblea de Trabajadores se regirá en lo que a sus atribuciones y organización se refiere por lo que dispongan los estatutos internos de la empresa.

ARTICULO 17.- En la Asamblea de Trabajadores cada trabajador tendrá derecho a voto. En ningún caso se admitirá el voto por poder.

ARTICULO 18.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores, entre otras, las siguientes:

a) Discutir y aprobar los planes y políticas de la empresa, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación de Fomento de la Producción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de esta ley;

b) Elegir y remover a miembros del Consejo de Administración en elecciones generales; democráticas, secretas, unipersonales y proporcionales;

c) Crear los Comités que fueren necesarios y establecer la forma de elección de sus miembros, y

d) Aprobar los Reglamentos internos de la empresa, tales como los de disciplina, bienestar y otros.

ARTICULO 19.- El Consejo de Administración estará integrado por 5 trabajadores elegidos por la asamblea de acuerdo al artículo anterior y tendrá a su cargo la administración superior de la empresa, siendo el ejecutor de los acuerdos adoptados en la Asamblea de Trabajadores.

Sus integrantes durarán dos años en sus cargos; se renovarán por parcialidades y podrán ser reelegidos sólo por una vez. El Consejo tendrá la representación judicial y extrajudicial de la empresa, pudiendo delegarla de acuerdo a lo que establezca en el Reglamento y en los estatutos internos de la empresa.

ARTICULO 20.- Los Consejeros responderán solidariamente de los acuerdos que adopten. Asimismo, de los actos que ejecuten en el desempeño de sus cargos y de los perjuicios que ocasionen por negligencia grave en el cumplimiento de sus deberes.

ARTICULO 21.- El cargo de Consejero no significará remuneraciones o beneficios adicionales para el que lo desempeñe, ni abandono del trabajo normal que desarrolla en la empresa, salvo las excepciones que se contemplen en el Reglamento y estatutos internos.

ARTICULO 22.- El Consejo de Administración designará el gerente, quien será el responsable de efectuar todas las tareas que el Consejo le encomiende y tendrá a su cargo el sistema de producción. Podrá participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo de Administración y la Asamblea de Trabajadores.

El gerente será de la exclusiva confianza del Consejo de Administración y podrá ser removido por éste, previa ratificación de la asamblea. En todo caso, la Asamblea de Trabajadores podrá pedir al Consejo de Administración la remoción del gerente. El procedimiento para ello será el mismo que el establecido para el caso de remoción de los miembros del Consejo de Administración.

TITULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION Y DE SUS COMITES SECTORIALES

ARTICULO 23.- La Corporación de Fomento de la Producción y sus Comités Sectoriales tendrán con respecto a las empresas de autogestión las siguientes facultades:

a) Crear nuevas empresas de autogestión y aprobar la incorporación al Sistema de una empresa existente. Cuando los Comités Sectoriales acepten la incorporación al Sistema de alguna empresa cuya propiedad pertenezca a los trabajadores, esta decisión también afectará a los aportes de capital privado que en ellas existan, debiendo la Corporación de Fomento de la Producción entregar en un plazo no mayor de seis meses Bonos de Autogestión emitidos por la Corporación de Fomento de la Producción, en cantidad y monto equivalente al valor tributario o de libros de dicho capital a nombre de sus propietarios. Los aportes del sector estatal se traspasan automáticamente al Sistema;

b) Emitir Bonos de Autogestión los que serán reajustables de acuerdo al índice de precios al consumidor y devengarán un interés sobre su valor reajustado anualmente. Estos valores serán colocados entre el público ahorrante y sus características y modalidad de operación serán en todas sus formas equivalentes a los Certificados de Ahorro Reajustables del Banco Central de Chile. En todo caso, y en relación a lo dispuesto por el inciso anterior, la Corporación de Fomento de la Producción dispondrá de la facultad de fijar plazos especiales de liquidación o convertibilidad a los bonos emitidos.

Estos plazos especiales no podrán ser en ningún caso superiores a 20 años.

c) Hacerse cargo de la administración de las empresas en los siguientes casos:

1.- Cuando durante tres ejercicios consecutivos de seis meses cada uno, las empresas arrojen pérdidas en sus balances;

2.- Cuando así lo determine la Corporación con acuerdo de la mayoría de los trabajadores de una empresa, expresado en una Asamblea de Trabajadores convocada especialmente al efecto;

3.- Cuando las pérdidas que arroje en un ejercicio financiero sean tan significativas que afectaren el futuro de la empresa en términos tales que se comprometa gravemente su capital asignado;

4.- En el caso establecido en el artículo 28 inciso 2° de la presente ley, y

5.- En caso de conflicto laboral o paralización de faenas se aplicará la legislación vigente, con la salvedad de que el interventor designado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social deberá serlo a propuesta de la Corporación de Fomento de la Producción.

Salvo lo dispuesto en el N° 5 de esta letra, la empresa será administrada por la Corporación de Fomento de la Producción, la cual deberá en el plazo máximo de dos años decidir sobre su normalización, reorganización o disolución.

Corresponderán exclusivamente a los Comités Sectoriales de la Corporación de Fomento de la Producción las facultades de administración propia del giro ordinario de la empresa y deberá delegarlas en él o los funcionarios que al efecto designe. El Interventor no podrá contratar nuevos créditos sin previo informe técnico favorable del Consejo General de la Corporación de Fomento de la Producción.

El Comité Sectorial respectivo designará al Interventor y podrá removerlo, salvo lo dispuesto en el N° 5 de esta letra.

Al término de su gestión, el interventor deberá rendir cuenta documentada ante el Comité Sectorial respectivo de la Corporación de Fomento de la Producción y ante la Asamblea de Trabajadores de la empresa.

Cualquier reclamo sobre la intervención será conocido por el Tribunal especial establecido por el artículo 46 de esta ley;

d) Fijará anualmente los retornos obligados o excedentes que cada empresa deberá entregar, a lo menos semestralmente, a la Corporación de Fomento de la Producción.

El monto del excedente se fijará por cada rama de producción. No obstante, podrá determinar montos diferenciados dentro de cada rubro atendiendo a las circunstancias de los diversos tipos de empresas que en ellos laboran, a las necesidades regionales y a la viabilidad económica de cada unidad productiva. Las empresas contabilizarán este cargo entre sus costos de producción.

e) Inspeccionar y evaluar técnicamente las Empresas de Autogestión, certificar su capital y su adecuada utilización y, en general, en todo lo que se refiere a su normal funcionamiento, para lo cual las empresas facilitarán todos los antecedentes necesarios, de acuerdo al Reglamento;

f) Fijar la política de remuneraciones conforme a lo establecido en el artículo 13;

g) Aprobar anualmente los planes de producción de cada empresa, como asimismo sus programas financieros;

h) Destinar los aportes de capital privado que se hagan directamente a la Corporación de Fomento de la Producción a cada unidad productiva;

i) Conceder directamente créditos a las empresas, establecer el sistema conforme al cual podrán otorgarse créditos para inversiones o capital de trabajo a las empresas por parte de los bancos o terceros y servir de aval a las mismas;

j) Coordinar a las empresas con los organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros;

k) Propender a la descentralización del Sistema y a su coordinación con los organismos regionales;

l) Propender a la integración de empresas del Sistema, de acuerdo a la racionalidad del proceso de producción;

m) En el caso de una nueva Empresa de Autogestión, el Comité Sectorial respectivo podrá por sí o delegando en una empresa existente, administrarla inicialmente por un período de hasta seis meses, con el objeto de resolver todos los problemas normales de la iniciación de actividades. Este plazo podrá extenderse por una vez, a seis meses adicionales, a petición expresa de la mayoría de los trabajadores de la nueva empresa creada;

n) Constituir toda clase de cauciones a garantías en favor de las empresas, integrante del Sistema, en especial con los bienes asignados a ella, para responder por las obligaciones que sean generadas por el giro de los negocios de las empresas y,

o) En general, ejercer todas las atribuciones establecidas en la presente ley.

ARTICULO 24.- La suma de los siguientes elementos determinará el excedente o retorno obligado que cada empresa remitirá a la Corporación de Fomento de la Producción:

a) Los costos de depreciación de los bienes de capital y en general de todo el activo fijo de la unidad;

b) Una tasa de interés fija u homogénea del 8% para todas las empresas sobre capital reajustado y no depreciado, y

c) Un cargo variable compensatorio cuya finalidad será corregir las diferencias surgidas entre las empresas por distintos niveles de densidad de capital, de empleo, de remuneraciones y productividad.

ARTICULO 25.- La Corporación de Fomento de la Producción abonará semestralmente en la cuenta corriente de cada empresa el monto correspondiente a la renovación de equipos que haya sido adecuadamente depreciado. Los trámites de adquisición o importación de maquinaria serán de exclusiva responsabilidad de cada empresa.

ARTICULO 26.- El excedente o retorno obligado irá al sistema de fondos para nuevas inversiones o ampliaciones de capital instalado a fin de crear nuevas ocupaciones y producir los bienes que la sociedad requiere.

ARTICULO 27.- Con el objeto de velar por la conservación de los equipos y proporcionar la información necesaria a los trabajadores, la Corpora-

ción de Fomento de la Producción constituirá un registro de bienes de capital del Sistema de Autogestión en el cual se inscribirán todos los medios productivos y activos fijos de las empresas que lo integran.

TITULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CON LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

ARTICULO 28.- Por la fundamental importancia que tiene para el resto de la Comunidad Nacional, las empresas de autogestión deberán efectuar adecuada y oportunamente a la Corporación de Fomento de la Producción el pago del retorno obligado o excedente. La cancelación oportuna significará intereses para las empresas y el no pago de cuatro trimestres consecutivos la intervención por la Corporación de Fomento de la Producción según lo dispone esta ley.

ARTICULO 29.- Las empresas de autogestión serán de duración indefinida y podrán disolverse por decisión de la Corporación de Fomento de la Producción con acuerdo de la mayoría de sus trabajadores.

No obstante, no será necesario el acuerdo de los trabajadores si el estado financiero de la empresa fuere negativo durante a lo menos tres años y medio; sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del artículo 23.

ARTICULO 30.- Con el objeto de prever cualquier pérdida a la economía nacional las empresas estarán obligadas a contratar con el Instituto de Seguros del Estado un seguro que cubra el riesgo de disolución o abandono de la empresa, de destrucción o daños del capital o activo inmovilizado y en general cualquier otra situación que pueda significar una pérdida para la propiedad social. Las cantidades que se paguen por concepto de primas al Instituto de Seguros de Estado, deberán ser invertidas por éste en Bonos de Autogestión.

ARTICULO 31.- Las empresas de autogestión no podrán repartir entre los trabajadores, bajo ningún pretexto, parte alguna de los capitales de las empresas o de sus reservas sociales.

En los casos de disolución, una vez pagados los créditos, destinados los aportes y cubiertos los gastos de liquidación, el remanente irá a incrementar el patrimonio del sistema, sin perjuicio de la cantidad que la Corporación de Fomento de la Producción acuerde entregar a cada trabajador como subsidio de desempleo.

Los recursos que se otorguen por liquidación de la empresa, en virtud de los seguros contratados para resguardarse de eventuales pérdidas, accederán a la Corporación de Fomento de la Producción.

Si los bienes asegurados de la empresa disuelta no fueren suficientes para devolver los aportes de capital y, en general, para cubrir las obligaciones responderá el patrimonio de la Corporación de Fomento de la Producción.

ARTICULO 32.- El saldo disponible para los trabajadores, después de cancelar todos los gastos incurridos en la producción, incluidos el excedente o retorno obligado y las remuneraciones de los trabajadores, será destinado en la proporción que establezca el Reglamento, a:

a) Beneficio colectivo de los miembros de la empresa, lo que deberá traducirse en solución de problemas básicos de los trabajadores, tales como salud, vivienda, educación, recreación, bienestar social y otros, principalmente de la madre trabajadora y del niño;

b) Aportes directos a la comunidad que constituirán la expresión concreta de la Nación. Estos aportes serán la única cifra del saldo disponible que se considerará como rebaja del excedente o retorno obligado según una tabla de proporcionalidad, y conforme se señala los destinos en el artículo 23 letra d) de esta ley. El Reglamento señalará los destinos posibles y forma de acreditar ante la Corporación de Fomento de la Producción los aportes que las unidades del Sistema realicen.

El saldo disponible calculado en la forma establecida en el inciso anterior no estará afecto a imposiciones u otros recargos o descuentos previsionales.

TITULO V DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE AUTOGESTION

ARTICULO 33.- Los trabajadores de las empresas de autogestión en lo relativo a sus derechos laborales, sindicales y previsionales estarán regidos, al igual que los empleados y obreros, por todas las disposiciones del Código del Trabajo, leyes complementarias y reglamentos, como asimismo por la Ley N° 10.383 y sus modificaciones y demás disposiciones previsionales que afectaren a empleados y obreros.

Por su parte la empresa de autogestión tendrá en su relación con los trabajadores los mismos derechos y obligaciones que la ley franquea a patrones y empleadores, de acuerdo con la legislación del trabajo vigente.

ARTICULO 34.- El trabajador de la empresa de autogestión que se retire voluntariamente, o la sucesión del fallecido, no tendrá más derechos que los que se deriven del contrato de trabajo y del último balance de la empresa, en lo relativo a beneficios de carácter colectivo, por un plazo no superior a seis meses contados desde el último día en que efectivamente el trabajador prestó servicios.

ARTICULO 35.- No obstante que todos los trabajadores de estas empresas forman parte de ellas con iguales derechos, los trabajadores en su calidad de tales tendrán facultad para sindicalizarse conforme a las normas que prevé la legislación del trabajo; y, el o los sindicatos que formen tendrán los derechos y obligaciones que establecen esas mismas disposiciones legales.

TITULO VI DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJADORES

ARTICULO 36.- Se entenderán como Cooperativas de Trabajadores para los efectos de esta ley: las Cooperativas de Trabajo; las de Producción; las de Trabajo y/o Producción; las de Trabajo y Transportes y las de Trabajo y Ser-

2682 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

vicios, y que estén constituidas por trabajadores de ella, no pudiendo existir en ellas, por lo tanto, ni trabajadores no socios, ni socios no trabajadores, salvo el caso de aquellos que tienen el carácter de transitorios o temporales y de aquellas personas jurídicas que no persiguen fines de lucro, todo de conformidad a lo establecido en la Ley General de Cooperativas (Decreto RRA N° 20 de 1963).

ARTICULO 37.- Estas cooperativas podrán formar parte del Sistema Nacional de Empresas de Autogestión sin necesidad de otro requisito que presentar la solicitud correspondiente y ser ésta aprobada por el Consejo General de la Corporación de Fomento de la Producción.

ARTICULO 38.- Desde el mismo momento de su ingreso, estas cooperativas estarán sujetas a la fiscalización de la Corporación de Empresas de Autogestión y tendrán el plazo de dos años, a contar de la vigencia de esa ley, para adecuar su constitución legal y sus estatutos a las disposiciones de la presente ley. Por lo tanto la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción cesará en sus funciones fiscalizadoras, respecto de las Cooperativas cuyo ingreso al Sistema haya sido aprobado por la Corporación de Fomento de la Producción, y deberá remitir a ésta los antecedentes pertinentes.

ARTICULO 39.- El traspaso de los bienes de las Cooperativas a la Corporación de Fomento de la Producción se hará mediante:

a) La devolución de los aportes individuales iniciales de los socios revalorizados de acuerdo al alza del costo de la vida, conforme al índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta devolución se hará en un plazo no superior a cinco años; y

b) La cesión a título gratuito del resto del patrimonio de carácter colectivo e irrepartible. Esta cesión gozará de la exención absoluta de impuestos.

TITULO VII DEL TRASPASO DE LAS EMPRESAS EXISTENTES AL SISTEMA NACIONAL DE AUTOGESTION

ARTICULO 40.- El Consejo General de la Corporación de Fomento de la Producción podrá decretar, por los dos tercios de sus miembros, la expropiación del todo o parte de las empresas, de sus acciones o bienes, comprendidos en los números 1° y 4° del artículo 2°.

ARTICULO 41.- Los propietarios afectados por la expropiación tendrán como único derecho una indemnización fijada por el mismo Consejo General y que corresponderá a uno de los siguientes valores, según lo acuerde el Consejo:

1.- El valor total de sus acciones, según haya sido su cotización bursátil promedio en el año anterior a la fecha del acuerdo de expropiación;

2.- El valor de libros al 31 de diciembre del año anterior a su expropiación, y

3.- El promedio de los valores determinados conforme con los números 1 y 2 que anteceden.

ARTICULO 42.- La indemnización se pagará con un 20 por ciento al contado y el resto en Bonos de Autogestión, establecidos en el artículo 23 letra b). No obstante estos bonos podrá ser liquidados en plazos inferiores a los determinados por el Consejo General, cuando sean invertidos en el Sistema Nacional de Autogestión, y en tal caso, adquirirán la calidad de aportes de capital, sea directamente a la Corporación de Fomento de la Producción, sea a ésta para que los asigne a una o más empresas determinadas.

ARTICULO 43.- La toma de posesión material de los bienes expropiados podrá efectuarse desde el momento mismo en que se tome el acuerdo respectivo, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial.

ARTICULO 44.- Dentro del plazo de quince días contados desde la publicación en el Diario Oficial del acuerdo de expropiación del Consejo General en que se determina, asimismo, el monto y forma de pago de la indemnización, los afectados podrán reclamar de estas materias ante el Tribunal establecido en el artículo 46.

ARTICULO 45.- La Corporación de Fomento de la Producción podrá además adquirir acciones o derechos en las empresas comprendidas en el artículo 2°, siempre que así lo acuerden los dos tercios de los miembros de su Consejo General y que la compra abarque, por lo menos, el 70 por ciento del capital de la empresa. En este caso, el porcentaje restante del capital que permanezca en el sector privado, adquirirá la forma de aportes a la Corporación de Fomento de la Producción, sea para sí misma, sea para una o más de las empresas del Sistema.

TITULO VIII DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 46.- Créanse los Tribunales Especiales del Sistema de Autogestión, que tendrán competencia para conocer de todos los conflictos que se puedan producir entre la Corporación de Fomento de la Producción y las empresas de autogestión y, especialmente, en lo referente a la determinación del monto de los excedentes o retornos obligados de éstos a la Corporación de Fomento de la Producción.

Estos tribunales conocerán, en única instancia, de las materias que se sometan a su conocimiento.

Los tribunales serán colegiados y estarán formados por:

a) El Fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción o sus representantes;

b) El Juez de Letras del Departamento respectivo; y

c) Un representante de las empresas, que será elegido en la misma forma que los representantes ante el Comité Sectorial respectivo, según lo establecido en el artículo 3° de esta ley.

Estos tribunales podrán crearse en cada provincia o departamento, según lo requieran las necesidades del sistema. Cuando hubiera más de un Juez de Letras, el integrante del tribunal será designado por la Corte de Apelaciones respectiva.

El tribunal, que tendrá su asiento en Santiago, fijará mediante autoacordado el sistema de procedimiento a que deberán sujetarse las distintas causas que son de la competencia de estos tribunales.

ARTICULO 47.- Facúltase al Presidente de la República para que en un plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de promulgación de esta ley, fije por Decreto Supremo el sistema tributario a que estarán afectas las empresas que integren el Sistema de Autogestión.

ARTICULO 48.- Para los efectos del artículo 2° N° 1 se considerarán rubros especiales para el desarrollo nacional las siguientes actividades económicas:

- 1.- Industria de la madera y del corcho;
- 2.- Industria del plástico;
- 3.- Fabricación de aparatos eléctricos;
- 4.- Actividad bancaria; 5.- Industria del vidrio;
- 6.- Distribución mayorista de productos esenciales para la vida económica nacional;
- 7.- Fabricación de materiales de construcción;
- 8.- Fabricación de pulpa de madera, celulosa, papel y productos del papel;
- 9.- Fabricación de fósforo;
- 10.- Fabricación y refinación de azúcar;
- 11.- Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas;
- 12.- Industria del tabaco;
- 13.- Envasado y conservación de frutas, hortalizas y legumbres;
- 14.- Fabricación de alambrón, alambre y cable;
- 15.- Fabricación de equipos telefónicos;
- 16.- Fabricación de ampolletas incandescentes y tubos fluorescentes;
- 17.- Fabricación de maquinarias y equipos para usos domésticos;
- 18.- Fabricación de equipos y repuestos ferroviarios;
- 19.- Industria metalúrgica ferrosa;
- 20.- Fabricación de explosivos y sus insumos químicos básicos;
- 21.- Industria química orgánica;
- 22.- Industria de la pesca y la elaboración del pescado, crustáceo y otros productos del mar;
- 23.- Extracción y procesamiento de piedra, arcilla y arenas;
- 24.- Extracción de minerales no metálicos;
- 25.- Industrias manufactureras de productos lácteos y alimenticios;
- 26.- Fabricación de productos de caucho, y
- 27.- construcción de maquinarias, aparatos y utensilios eléctricos.

No obstante, podrán existir empresas de autogestión en alguna de las actividades enumeradas en este artículo cuando así lo determine el Consejo General de la Corporación de Fomento de la Producción por el voto favorable de los dos tercios de sus miembros. La autorización del Consejo no podrá ser de carácter general, sino que deberá referirse a cada caso en forma específica y determinada.

**Julio López (Instituto de Economía y Planificación,
Universidad de Chile):
Sobre la construcción de la nueva economía***

(Julio de 1972)

En términos sintéticos, puede decirse que la singularidad histórica de la experiencia revolucionaria chilena consiste, en lo esencial, en la dualidad de poderes en el interior del aparato de Estado, resultado de la victoria electoral de la UP. Consecuentemente, en la lucha por la conquista del poder se plantea aquí la posibilidad de utilizar, dentro de ciertos límites, el propio aparato de Gobierno, la legalidad burguesa, así como las instituciones y el cuerpo burocrático preexistente –cambiando evidentemente su contenido, que está dado por el interés de clase que representan– en función de una estrategia que persigue su transformación revolucionaria.

El proceso de lucha de clases a través del cual esta tarea debe cumplirse constituye, obviamente, una totalidad. Pero se trata, también, de una totalidad compuesta de diversos aspectos, que pueden considerarse en forma aislada a objeto de simplificar el estudio de dicho proceso. En virtud de ello, este trabajo se centrará en el aspecto económico de la estrategia de lucha por el poder, partiendo de la premisa de que lo económico se debe subordinar a lo político. Pero aceptando también la idea de que no necesita mayor demostración que una estrategia económica, unida a una línea política revolucionaria, puede ayudar a la tarea central del momento, la tarea del poder.

Aquí entonces lo que se enfatiza es la estrategia económica, partiendo de la premisa anteriormente señalada, y aceptando el principio de que una definición, más o menos clara, de la estrategia, constituye un requisito indispensable para su implementación y también para una evaluación del camino recorrido desde la fecha en que la UP llegó al Gobierno

Con todo, antes de entrar directamente al tema de este artículo, y para delimitar el ámbito que cubre, es conveniente señalar los diversos aspectos que contempla una estrategia económica que apunte a la transformación revolucionaria de la sociedad. Se trata, claro está, de aspectos vinculados entre sí y que

* Para el análisis que aquí se efectúa han sido de gran utilidad las siguientes obras: *Transformación Socialista de la Economía Nacional de China*, de Sue Mu-Chaio, Su Sing y Lin Tsi; *La Nueva Economía*, de E. Preobrazhenski; y *Algunos problemas de la Economía Política del Socialismo*, de W. Brus –libro próximo a publicarse dentro de la serie docente del Instituto–. Una primera versión de este artículo fue discutida en un seminario del Instituto de Economía y Planificación. Agradezco a todos los compañeros que con sus sugerencias y críticas, hicieron posible corregir algunas de las ideas que se expusieron en esa oportunidad.

se complementan, en tanto los unos son condición necesaria para el cumplimiento de los otros. Empero, son también susceptibles de distinguirse para fines analíticos.

i) En primer lugar, la estrategia de desarrollo y aprovechamiento de las fuerzas productivas. Trátase aquí de orientar la utilización y desarrollo de estas fuerzas, de tal modo que el objetivo de satisfacer en forma rápida y sustancial las necesidades materiales y culturales de las masas –que reemplaza la valorización del capital como objetivo impulsor del desarrollo de las fuerzas productivas– se logre de la manera más eficiente posible.

En el caso chileno, en un primer momento el énfasis se puso en el aprovechamiento, con un costo reducido, de algunas de las irracionalidades más evidentes del sistema capitalista. Estas irracionalidades se manifestaban en la existencia de recursos ociosos y capacidades productivas no utilizadas en particular, con su correspondiente desocupación de fuerzas de trabajo. Más adelante, a medida que los medios de producción pasaron a utilizarse en forma plena (dentro de las modalidades tradicionales de uso), el problema pasa a vincularse especialmente a dos cuestiones básicas: en primer término, el cambio de dichas modalidades de uso, y en segundo, la expansión de estos medios y, por consiguiente, la acumulación: su financiamiento, su dirección y su modalidad.

ii) En segundo lugar, la estrategia de dirección económica y planificación. El problema aquí consiste en examinar los principios orgánicos mediante los cuales se busca implementar la estrategia global; los canales concretos a través de los cuales las directivas de planificación económica provenientes de las autoridades respectivas son llevadas a la práctica por los organismos intermedios e inferiores, y la eficiencia –en cuanto a los resultados concretos, económicos y políticos, y a la oportunidad temporal– con que estas directivas se hacen efectivas en las instancias correspondientes. El problema central estaría aquí en las normas de funcionamiento que se establecen para las distintas áreas; la estructura administrativa-organizativa del sector Público en el sentido amplio del término, y asimismo la vinculación de éste con las organizaciones de masas –y de poder popular– ya existentes, o que se crean en virtud de las nuevas condiciones y exigencias.

iii) En tercer lugar, la estrategia de transformación de las relaciones de producción, y la redefinición de las vinculaciones existentes entre las diversas estructuras económicas sociales. Vale decir, entre el Área de Propiedad Social, de una parte, y el Área de Propiedad privada, de otra, aunque esta última a su vez no es enteramente homogénea, por cuanto en su interior coexisten varias de estas estructuras.

El problema consiste aquí en examinar las formas a través de las cuales se crean las condiciones objetivas para el surgimiento de relaciones socialistas de producción, y los principios y mecanismos mediante los cuales la estructura en cuyo seno éstas se encuentran (en términos potenciales al menos) asegura su dominación sobre las restantes.

Fundamentalmente se hará referencia en el presente trabajo a este tercer aspecto, aunque debe señalarse que se mencionará solamente a los secto-

res no agrícolas, por cuanto el tratamiento de la agricultura presenta complejidades específicas que aquí no se abordan.

Este artículo se ha dividido en cuatro secciones, siendo el orden de exposición el siguiente: las dos primeras secciones hacen referencia a las características y consecuencias esenciales del Área de Propiedad Social y el Área de Propiedad Privada, respectivamente. La tercera examina el significado del dominio del APS sobre el APP y los mecanismos a través de los cuales éste se concreta. La última sección hace alusión a la transición al socialismo en el sector privado de la economía.

I

Como se señaló, el germen a partir del cual podrán desarrollarse las relaciones socialistas de producción en Chile se encuentra en la recientemente constituida APS. Las razones políticas para constituir un sector socializado –o, más rigurosamente estatizado– inmediatamente después de la llegada al Gobierno de una coalición revolucionaria, se examinan más adelante. Respecto de las razones económicas, ellas pueden resumirse en los siguientes términos: en primer lugar, la formación de APS permitirá una mayor captación de excedentes por parte del Estado. En segundo lugar, hará posible orientar la producción de acuerdo a los requerimientos reales de los sectores populares. En tercer lugar, dado el carácter social de la producción y las interrelaciones entre las empresas, permitirá integrar al sector no estatizado el desarrollo planificado de la economía. Finalmente, la eliminación de la clase capitalista de este sector encierra la posibilidad objetiva de que se transformen las relaciones de trabajo en el interior de esas unidades.

En una economía capitalista como la chilena, en que la concentración sectorial y patrimonial del capital es sumamente elevada y la vinculación entre el capital nacional y el imperialista muy estrecha, la definición de los sectores claves a partir de los cuales se deberá iniciar la constitución del APS, y de los enemigos estratégicos con quienes se deberá luchar para esto, no resulta extremadamente difícil. Además, la fuerte interdependencia entre el sector monopólico y el Estado –la existencia de un capitalismo monopolista de Estado– y entre el capital industrial con el financiero y el comercial, posibilitan el uso de maniobras envolventes, de gran ampliación, para efectuar el traspaso de propiedad que implica la expropiación de estas unidades.

En el sector estatizado que así se crea, el rasgo distintivo debe ser el inicio de un proceso de socialización de los medios de producción allí comprendidos. Esta socialización, a su vez, implica dos aspectos: el primero hace referencia a las relaciones de trabajo que imperan en esas unidades; el segundo, el carácter que asume la gestión de las distintas empresas que componen el sector.

En relación al primer aspecto, el punto que conviene precisar es que, para la economía política marxista, no existe identidad entre propiedad estatal (o pública) y propiedad social de los medios de producción. El primer tér-

mino indica solamente un rasgo jurídico formal; el segundo, en cambio, señala una cuestión de contenido, más específicamente, apunta al carácter de clase de la propiedad de dichos medios. Ahora, por cuanto se trata de medios que pertenecen a la sociedad por intermedio de un agente, el Estado, lo que verdaderamente define su real carácter de clase es el carácter de clase del Estado mismo.

No es necesario entrar a examinar aquí las posibilidades –y dificultades– para medir el contenido real de este carácter en términos teóricos, ni explicar la evolución que éste ha sufrido en las distintas experiencias revolucionarias conocidas. Basta señalar que no son los principios jurídicos u organizativos aquellos donde se podrá encontrar una respuesta al problema. Esta se hallará más bien al investigar algunas cuestiones de carácter general referentes a la naturaleza de la producción y de las relaciones de trabajo allí existentes.

El primer punto considera la finalidad de clase mediante la cual se utilizan los medios de producción en cuestión. Y aquí no se trata tan sólo –ni fundamentalmente– del carácter material de ésta; de que se produzcan, por ejemplo, exclusivamente aquellos bienes que la clase trabajadora demanda (directa e indirectamente), pues bien puede darse el caso de que en aras de un interés político (alianzas) se elaboren bienes cuya finalidad es distinta. Se trata más bien de que el objetivo de la producción sea realmente decidido por la clase trabajadora, y esto no solamente al nivel de industrias específicas, sino al nivel de la economía en su conjunto.

En cuanto a las relaciones de trabajo que deben imperar en aquellas unidades donde los medios de producción están en vías de socialización, aquí no caben tampoco los criterios jurídico-formales mediante los cuales éstas podrían evaluarse. Porque, si bien el marxismo es claro al postular que, en tanto en el capitalismo éstas son relaciones de explotación, las relaciones de trabajo en el socialismo son de cooperación, no existe un criterio preciso y definitivo que permita distinguir las unas de las otras. Tal vez el más indicado y exacto sea aquel enunciado por Lenin en diversas oportunidades, referido al carácter electivo de todos los cargos, y la posibilidad de veto y remoción de parte de los subordinados, dentro de los marcos establecidos por el principio de autoridad, por cierto.¹

Un segundo aspecto que implica la socialización de los medios de producción, se vincula al carácter que toma la gestión de las distintas unidades de la economía o el sector estatizado. Aquí lo que interesa destacar es que, una vez

¹ Desde esta perspectiva, las normas básicas de participación del Convenio CUT-Gobierno, con todas sus insuficiencias y limitaciones, constituyen un punto de partida para enfrentar el problema. En relación a estas últimas –dicho sea incidentalmente– tal vez su deficiencia más grave sea el que no se contempla en ellas el principio de responsabilidad del administrador frente a los trabajadores de la empresa. Estos últimos no tendrían derecho a vetar, ni tampoco a remover, al administrador de su cargo, al menos desde el punto de vista formal; es claro que una presión de la base –como ha sucedido– puede llevar a situaciones de hecho en que este principio se aplique.

eliminada la propiedad privada de los medios de producción y la consecuente atomización de las unidades de decisión, se crean las bases materiales para que la sociedad intervenga en forma planificada en los procesos que, hasta entonces, habían transcurrido a sus espaldas en forma espontánea, objetivados a través de la mediación del mercado, el que adquiriría así las dimensiones de un fetiche ante sus propios creadores inconscientes². Por ser ahora el propietario uno solo, surge así la posibilidad objetiva de que los medios de producción estatizados sean considerados como un todo. Se crean entonces las premisas para darle una mucho mayor racionalidad a la gestión de dichos medios.

En concreto, ello permite un aprovechamiento intensivo de aquello que los economistas tradicionales denominan economías externas (reforzadas en este caso por la facilidad para trasladar equipos de una unidad a otra) y una planificación adecuada del proceso de acumulación, al nivel de sectores y unidades específicas. Es claro que esto tiende a reducir el despilfarro de recursos que significa la desocupación de medios de producción y de fuerza de trabajo, y contribuye, por lo mismo, al desarrollo y aprovechamiento de las fuerzas productivas de que dispone la sociedad.

Con todo, no es solamente en sus resultados económicos en donde reside la importancia del APS. Su creación acarrea –o más precisamente puede acarrear– también consecuencias políticas de singular relevancia. En particular, ella se traduce en un debilitamiento del poder de la burguesía monopólica –enemigo estratégico– en la medida en que la despoja de su base de sustentación material y, consecuentemente, posibilita un fortalecimiento de la fuerza dirigente del proceso revolucionario, del proletariado.

El fortalecimiento del proletariado no es una mera cuestión cuantitativa, sino que apunta más bien el grado de conciencia y organización que éste posee, y su capacidad técnica y política para dirigir también los procesos económicos. Desde este punto de vista, la creación efectiva de órganos de dirección económica al nivel de las masas –creación que la eliminación de la propiedad privada hace posible– significa un fuerte estímulo a dicho fortalecimiento, y constituye, en definitiva, la única garantía de que el proceso revolucionario no tan sólo permitirá la eliminación de los enemigos estratégicos, sino que además proseguirá su curso en forma ininterrumpida hacia el socialismo. A través de ellos, en efecto, se crea una nueva organización económica y de poder popular, en manos del proletariado, que opone la fuerza del trabajo al poderío del capital, y se inicia el largo proceso que debe llevar a la destrucción del aparato de Estado.

² No está de más señalar que, en función del desarrollo de las fuerzas productivas, el modelo de dirección económico que permitirá hacer viable este objetivo, no necesita ser uno solo. Los grados de autonomía relativa de las diversas unidades económicas, y el grado de utilización del mecanismo de mercado como elemento de orientación, pueden variar sensiblemente en función de dicho desarrollo. En otros términos, el nivel de centralización del modelo de planificación que se adopte (la forma) no prejuzga en cuanto al carácter de clase de ésta (contenido).

Es claro que en el APS, tan como ella funciona en la actualidad en Chile, incluso haciendo abstracción del hecho fundamental de que la batalla por el poder aún no está decidida, falta un gran trecho para que las relaciones de trabajo sean realmente socialistas; para que el proletariado sea efectivamente el que posea el control del proceso; para que pueda hablarse con propiedad del embrión de una “asociación de productores libres”. Con todo, la eliminación de la clase capitalista allí encierra la posibilidad objetiva de que esa situación se alcance.

Por estas razones, posibilitar el surgimiento, dominio y reproducción ampliada de las relaciones socialistas de producción, implica asegurar el dominio de una APS sobre las restantes áreas de la economía. En la sección subsiguiente se precisará el significado de dicho dominio y los mecanismos concretos mediante los cuales éste se implementa. Antes, sin embargo, es necesario examinar en detalle algunos aspectos fundamentales referentes al Área de Propiedad Privada.

II

Corresponde referirse ahora a las otras estructuras económico-sociales existentes en Chile. Para esto es conveniente partir considerando el programa básico de la UP. Allí se contempla la existencia de tres áreas: un Área de Propiedad Social (APS), que concentrará las empresas monopólicas que ocupan un lugar estratégico en la estructura de producción, comercial y financiera, y que serán propiedad de todo el pueblo; un Área Mixta, en que estarán incluidas empresas en que coexistirán capitales privados y sociales, y un Área de Propiedad Privada (APP), que estará constituida por aquellas empresas no monopólicas, las cuales representan a la mayoría de los establecimientos existentes en el país.

Genéricamente, estas áreas pueden englobarse dentro de la denominación de Área de Propiedad Privada, que es lo que se hace en lo que sigue. Empero, como ya se destacó, es preciso tener en cuenta que el APP no es homogénea, en el sentido de que en su interior coexisten diversas estructuras económico-sociales (aun cuando lo que las unifica es la propiedad privada –no necesariamente individual– sobre los medios de producción). Así, podrían distinguirse a lo menos cuatro de estas estructuras:

- a) Capitalismo de economía privada
- b) Capitalismo de Estado
- c) Pequeña producción mercantil
- d) Sector cooperativo.

La diferencia específica entre el capitalismo de economía privada y el capitalismo de Estado reside en que en tanto el funcionamiento y desarrollo de primero es influenciado por el Estado solamente de manera indirecta (precios, tasa de interés, principios legales, etc.), en el segundo, el Estado interviene directamente, sea mediante acuerdos formales, tales como concesiones, contratos de producción y ventas (forma elemental de capitalismo de Estado), sea en virtud de la participación del Estado en el capital global de la empresa (forma

avanzada de capitalismo de Estado o Área Mixta, como se denomina en el programa básico de la UP).

Por su parte, lo que caracteriza la pequeña producción mercantil es que en ella el productor directo es propietario de los medios de producción con que trabaja, sin comprar (o comprando en forma limitada) fuerza de trabajo ajena a la de él y su familia. Los ejemplos típicos en el sector que aquí interesa son los del artesano, y en cierto grado también el del trabajador a dominio, aunque en el caso de este último las materias primas (al menos) le son proporcionadas por el capitalista.

Finalmente, el rasgo distintivo del sector cooperativo es que en él los medios de producción son propiedad del colectivo que los utiliza. Empero, en la práctica se da el caso de que la propiedad recaiga tan sólo en parte de dicho colectivo, con lo cual en su interior se establecen también relaciones salariales y, por lo tanto, relaciones de explotación.

Lo anterior implica que en el interior del APP, aparte de las clases específicas del modo de producción capitalista, burguesía (más precisamente, burguesías mediana y pequeña) y proletariado, se encuentra también la denominada pequeña burguesía, cuya alianza con el proletariado es más estrecha que la que éste establece con la primera.

Ahora bien, desde el punto de vista económico, la importancia cuantitativa que posee el APP aparece como uno de los elementos más novedosos de la experiencia chilena. Así, por ejemplo, como se ha señalado públicamente, no menos de 34 mil de las 35 mil empresas industriales del país caen dentro de esta categoría. Además, si se toma el volumen del empleo como el indicador que permitirá diferenciar aquellas empresas no expropiables, de las que si lo serán, puede observarse que los establecimientos industriales con menos de cincuenta trabajadores representan un 40% del total de la ocupación industrial; aquellos con menos de 100 trabajadores, un 50%, y aquellos con menos de 200 trabajadores, un 63% de dicho total.

Su importancia cualitativa no es, por cierto, menor. De partida, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es aquí sensiblemente inferior al prevaleciente en los grandes monopolios; esto se manifiesta, en términos sintéticos, en una composición orgánica del capital relativamente baja. Por otra parte, el proletariado que comprende esta área carece de una conciencia y organización de clase suficientes. De allí que, si bien mayoritario, no posea en sus organismos de clase un grado de representatividad elevado, su capacidad reivindicativa sea limitada y sus niveles de explotación bastante altos. Finalmente, la burguesía de estas empresas (la burguesía mediana y pequeña) es también diferente de aquella monopólica y, como se ha destacado en diversas oportunidades, y se enfatizará en este trabajo, tiene con respecto de esta última, contradicciones de importancia.

Ahora bien, un primer punto en relación a la existencia de un APP capitalista y una de tal magnitud, consiste precisamente en explicar la razón por la cual ésta es aceptada en el caso chileno, y para muchos incluso parecería ser aceptada como un rasgo permanente de la sociedad que se piensa construir.

Un punto de partida básico para examinar este problema es establecer con claridad las tareas que persigue el proletariado (y sus aliados) en la pre-

sente etapa. Al respecto, estas tareas son básicamente: completar la independencia nacional, profundizar la democracia y preparar la base material y cultural del socialismo. A partir de allí se determinan los enemigos estratégicos que se debe enfrentar: la burguesía imperialista, la burguesía grande y monopólica chilena, y los terratenientes y la burguesía agraria.

El logro de estos objetivos –lo que implica precisamente el triunfo en la lucha en contra de estos enemigos estratégicos y la consecuente toma de poder– requiere de un fortalecimiento y una ampliación de la base de apoyo de la UP atrayendo hacia sus filas (o, por lo menos, neutralizando) a clases y capas que también tienen contradicciones con los enemigos estratégicos del proletariado. En la lucha de clases, como en toda lucha, el principio de identificar correctamente al enemigo y aislarlo, desempeña un papel fundamental.

Es en este contexto que debe entenderse el papel de aliado que se le asigna a la burguesía mediana y pequeña durante toda esta etapa, y es desde la perspectiva de esta alianza que se plantea tratar con ella. Es claro que por tratarse de capas inestables desde el punto de vista político, el elemento fundamental que decidirá en cuanto a su alianza (o neutralidad) en una situación de una lucha de clases, deriva de la fuerza relativa de los contendientes; ésta constituye la base subjetiva de una política de alianza. Por tanto, ella se aliará con el proletariado (o al menos no luchará en su contra) tan sólo si éste es el que aparece como el más fuerte en una coyuntura específica.

Pero, por otra parte, toda política de alianzas tiene su base objetiva, que está dada por la convergencia de intereses frente a determinadas cuestiones que se resuelven en momentos también determinados.

Desde este punto de vista, parecería, aparentemente, que toda alianza con la burguesía –por más que ésta sea mediana o pequeña– sería totalmente imposible. El interés fundamental de la burguesía consiste en la propiedad sobre sus medios de producción, que constituye el origen de su existencia como clase. El interés estratégico del proletariado, en cambio, consiste en la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción y, consecuentemente, del régimen de trabajo asalariado.

Empero, la anterior sería evidentemente una conclusión apresurada y, por tanto, errónea. Porque lo que realmente importa no es solamente el objetivo final que persigue el proletariado, sino la secuencia de pasos, o etapas, a través de los cuales aspira a alcanzar aquel objetivo.

Es aquí donde cobra importancia la cuestión de las etapas –cuestión que por lo demás, es consustancial al marxismo– y es por esto que se hacía referencia a ella precedentemente, al destacar las tareas que persigue el proletariado en la presente etapa: completar la independencia nacional, profundizar la democracia, y preparar la base material y cultural del socialismo. No es una tarea de la presente etapa, por tanto, la de abolir, en forma inmediata y definitiva, la propiedad privada sobre *todos* los medios de producción.

De allí, en consecuencia, la posibilidad objetiva de implementar una alianza con determinadas fracciones o capas de la burguesía sobre la base de garantizarles, durante un cierto tiempo, la propiedad sobre sus medios de

producción –en la medida en que éstos no ocupen lugares estratégicos en la estructura económica del país– y garantizar, por lo tanto, la existencia de un sector capitalista en Chile.

Sobre la base de lo anterior, cabe examinar ahora el otro elemento decisivo para implementar una alianza con la burguesía mediana y pequeña, esto es, la existencia de contradicciones entre estas capas de la burguesía y la fracción monopólica de ella, fracción ésta que constituye un enemigo estratégico del proletariado.

Para visualizar estas contradicciones deben analizarse las relaciones existentes entre las empresas medianas y pequeñas, y aquellas monopólicas. Estas relaciones se establecen en el plano mercantil y el financiero; por una parte, las primeras aparecen como compradoras de productos elaborados por los monopolios o como vendedoras de productos a estos últimos. Por otra parte, las empresas medianas y pequeñas deben recurrir al crédito para poder funcionar, lo que las hace establecer vinculaciones financieras con los monopolios industriales, comerciales y de la banca.

Como ocurre siempre que existen relaciones de carácter capitalista entre empresas que no poseen el mismo poderío económico, los más fuertes explotan a los más débiles. Para el caso que aquí interesa, se establece una relación de explotación (o, más propiamente, de transferencia de excedentes) entre las empresas medianas y pequeñas, de una parte, y aquellas monopólicas, de otra. Los mecanismos básicos de esta transferencia son, por una parte, los precios de monopolio y el intercambio desigual que de ellos resulta, y, por otra, el instrumento impositivo, en la medida en que éste provoca una transferencia (neta) a los monopolios, dado el carácter de clase del Estado capitalista³. Son éstos los mecanismos que posibilitan una superganancia a estos últimos. En la medida, ahora, en que las condiciones de la lucha de clases en las empresas medianas y pequeñas lo permiten –y éste es comúnmente el caso, dada la poca capacidad de lucha de este sector del proletariado–, parte, al menos, de este intercambio desigual se hace recaer sobre estos trabajadores, mediante el mecanismo de la plusvalía absoluta.

Resumiendo lo anterior, puede decirse que la necesidad de aislar a los enemigos principales, entonces, constituye un primer argumento en favor de una alianza con la burguesía mediana y pequeña, garantizando la mantención de un área de propiedad privada capitalista en la presente etapa. Pero este no es, sin embargo, el único argumento en este sentido: por razones estrictamente económicas estos capitalistas son también necesarios en esta etapa del proceso chileno, desde el punto de vista técnico, en virtud del carácter de los bienes que elaboran y las funciones que en muchos de los casos ellos desempeñan.

En efecto, la mayoría de las empresas medianas y pequeñas elaboran bienes que son necesarios para el bienestar material de la población y muchos de estos capitalistas trabajan en sus propias empresas cumpliendo labores que son imprescindibles para que éstas puedan funcionar normal y eficientemente. Sería

³ Este punto se analiza con mayor detalle en la sección siguiente.

por cierto muy difícil reemplazarlos, ya que el proletariado chileno carece de la suficiente capacitación técnica y profesional, debido a las condiciones de explotación a que ha estado sometido. Los pocos especialistas con que se cuentan deben destinarse a las empresas que son realmente claves, estratégicas para el funcionamiento de la economía, que son aquellas que deberán pasar al APS.

La importancia económica de las funciones que en la mayoría de los casos cumplen las empresas medianas y pequeñas, y sus capitalistas, entonces, constituyen un segundo argumento en favor de la mantención de un sector capitalista en Chile durante el futuro cercano. Corresponde examinar ahora el tratamiento concreto que debería darse a esta área.

En términos muy generales, puede decirse que este tratamiento deberá orientarse a desarrollar los elementos positivos que el APP posee –que acaban de mencionarse– y a limitar al máximo sus aspectos negativos, que se destacan más adelante.

Respecto de lo primero, lo que puede plantearse es la necesidad de que se modifique el carácter de las vinculaciones existentes entre las empresas grandes y las restantes, a fin de proporcionar algunos beneficios económicos concretos a las unidades del APP, tales como mejores precios, créditos baratos, abastecimiento adecuado de materias primas, etc. Por cierto todo esto plantea como prerrequisito que los monopolios desaparezcan y pasen a formar parte del APS. En la medida, ahora, en que las nuevas condiciones existentes en la economía permitirán un desarrollo acelerado de las fuerzas productivas, también en el APP aquellos beneficios económicos no tendrán que significar necesariamente una disminución de los excedentes que capta de ella el APS o el Estado.

¿Cuáles son, ahora, desde el punto de vista de los intereses del proletariado, los aspectos negativos que posee la supervivencia de un APP capitalista? Al respecto, cabe mencionar aquí dos, que aparecen como los más importantes. En primer lugar, se conservará la existencia de la plusvalía como fuente de ingreso de una clase, la clase capitalista, lo que implica que la explotación del hombre por el hombre no desaparecerá completamente de la sociedad chilena. En segundo lugar, se mantendrá un sector cuyo funcionamiento y evolución se guía, en forma espontánea, por los estímulos que provienen del mercado, y no por las necesidades del pueblo, concretadas en un plan de desarrollo. Es preciso, en consecuencia, examinar las posibilidades que existen de minimizar estos aspectos negativos del APP.

En cuanto a la subsistencia de plusvalía en la sociedad chilena cabe, antes que nada, una observación de carácter general. La aceptación de la existencia de un APP conlleva a la aceptación de la existencia de la plusvalía, ya que ésta es el estímulo y el objetivo que mueve la producción de las empresas capitalistas. Sería, entonces, una posición absolutamente inconsecuente, o un simple aventurismo de izquierda, negarse a reconocer la necesidad objetiva de las ganancias capitalistas. Ello implicaría lisa y llanamente un reconocimiento meramente formal y no real al APP y la alianza que ésta implica.

Empero sería, por otra parte, una posición oportunista el postular la mantención de las ganancias a un nivel muy elevado, permitiendo que éstas se ob-

tengan mediante procedimientos inescrupulosos o que resulten de una superexplotación de la clase obrera. Desde el punto de vista de los intereses del proletariado en su conjunto, lo que debe buscarse es, reconociendo la existencia de las ganancias, en tanto motor y orientador de las empresas capitalistas, adecuarlas de tal modo que ellas conformen un ingreso suficiente para los capitalistas de estas empresas. Ello significa, de una parte, un estricto control, establecido mediante procedimientos administrativos y por la vigilancia obrera, sobre la forma en que la plusvalía se obtiene. De otra, que la lucha económica de clases dentro del APP, expresada en las reivindicaciones de sus trabajadores, no desaparece. Así, la unidad que la alianza del proletariado con la burguesía mediana y pequeña establecen, es una unidad con lucha, única forma correcta en que este último concerta alianzas de clases.

Por otra parte, aun cuando las empresas del APP seguirán orientando su producción y crecimiento de acuerdo a los estímulos provenientes del mercado, existe la posibilidad real de controlar dicho mercado, mediante mecanismos tales como fijación de precios y márgenes de utilidad, contratos de producción (en cuya decisión deberán estar presentes los trabajadores de las empresas), control sobre el uso de las materias primas escasas, créditos selectivos, control sobre las inversiones, etc. Así será posible adecuar el funcionamiento y la dinámica de dichas empresas de acuerdo a los intereses y necesidades de las masas populares, e incorporarlas efectivamente al desarrollo planificado de la economía.

El control efectivo sobre las ganancias, y la planificación del APP plantean tareas de gran complejidad, que conviene desde ya destacar. En primer lugar, constituye un requisito indispensable que el APS crezca con fuerza, de modo tal que incluya los sectores de la economía en las esferas productivas, comercial y financiera. De esta forma será posible que se establezcan vínculos estrechos entre el APP y el APS, única manera de asegurar dicho control y planificación. Asimismo, resulta también necesario que los organismos de planificación de la economía, con una real participación de las clases trabajadoras, elaboren las directivas que permitirán encauzar en una línea adecuada el APP y, por cierto, toda la economía en su conjunto, establezcan los instrumentos concretos a través de los cuales dichas directivas se lleven a la práctica, y fijen acertadamente los parámetros de decisión para las empresas.

En segundo lugar, es importante destacar que el control mercantil y financiero ejercido por el APS y el control centralizado ejercido por el Estado, deben complementarse necesariamente mediante una vigilancia por parte de la clase trabajadora de las propias empresas; ésta deberá controlar el cumplimiento de las disposiciones administrativas existentes y la eficiencia con que se conduce el manejo de las unidades en que labora. Este control, entonces, se ejerce desde arriba, desde el Gobierno, y desde abajo, al nivel de los trabajadores mismos. Se trata así de otra de las manifestaciones concretas del principio de unidad con lucha a que se hacía referencia anteriormente. Como se señalara, este último implica que la existencia de un APP no significa que allí desaparecerá por completo la lucha de clases, o que se abandonarán las reivindicaciones tradicionales de sus trabajadores. Todo lo contrario, a aque-

llas reivindicaciones se incorporarán otras nuevas, que aparecen necesarias en esta etapa desde el punto de vista de los intereses globales del proletariado. Entre éstas conviene mencionar la fiscalización, por parte de los trabajadores, de toda la información económica y financiera de las empresas, del tipo de producción y la orientación de las inversiones, y de la gestación y cumplimiento de los contratos de producción que éstas establezcan con el Estado, en cuya suscripción los trabajadores directamente interesados deberán, necesariamente, participar.

III

Corresponde examinar ahora la forma en que el APS concreta su dominio sobre las estructuras restantes. En términos muy sintéticos éste significa dos cosas: en primer lugar, que la primera crezca más rápidamente que la segunda; en segundo término, que el APS ocupe –y esto en forma creciente– los puntos estratégicos de la economía (en sus distintas esferas: productiva, comercial y financiera), de tal modo que pueda orientar el desarrollo y la transición de las otras estructuras en virtud de la dependencia objetiva en que estas últimas se sitúan respecto de ella. Más precisamente, de modo que este desarrollo conduzca, gradualmente, pero en forma ineludible también allí al socialismo.

Este dominio establece, a través de dos mecanismos concretos: las normas de funcionamiento y jurídicas (administrativas) a que ambas áreas están sometidas, y el carácter de las relaciones que se establecen entre ellas. En lo que sigue se hace referencia solamente a este segundo aspecto.

El crecimiento del APS se basa, en primer lugar, en el excedente que ella es capaz de generar y utilizar para fines productivos, y la eficiencia con que éste se emplea. Desde esta perspectiva, es de particular importancia el incremento de la productividad que allí se verifica, la forma en que este incremento se distribuye entre sus usos alternativos (mayores salarios, aumento de los usos improductivos del excedente, mayor acumulación) y las modalidades específicas que pueda asumir la acumulación. En términos generales, puede plantearse que esta fuente de excedente es la de mayor importancia cuantitativa y cualitativa.

Pero, por otra parte, este crecimiento del APS se basa también en el excedente que ella capta del APP. Esta captación se verifica a través de dos mecanismos fundamentales: uno directo, que resulta de las vinculaciones que existen entre ellas, y uno indirecto, en que el Estado aparece como mediador.

En este último caso, se trata de diversas imposiciones (netas en el sentido que se indica más adelante) que se hacen recaer sobre las otras estructuras. Los casos más evidentes son aquí los tributos en sus distintas formas, y los tipos de cambios en que se basan sus relaciones con el resto del mundo; sea que éstos sobrevalúan el precio de sus insumos importados, sea que subvalúan el precio de sus exportaciones. Estas transferencias netas se verificarán siempre y cuando exista una diferencia positiva entre estas diversas formas de imposición y los subsidios directos percibidos por esas empresas, y esa

diferencia sea realmente traspasada al APS (ya que también podría transferirse al consumo). En este caso, entonces, el Estado aparece como un mero agente de transferencias, siendo el APS el receptor final.

Como se dijo, la captación directa de excedentes resulta de las vinculaciones existentes entre las estructuras, vinculaciones que se establecen en las esferas comercial y financiera. En la primera de ellas lo decisivo son las relaciones de precios sobre la base de los cuales se verifica el intercambio de mercancías y que pueden dar lugar a una equivalencia o desigualdad en él.

De acuerdo a la teoría marxista, una primera forma de intercambio desigual surge cuando ésta se basa, no en los valores (trabajo vivo más trabajo materializado contenido en las mercancías), sino en los precios de producción. Allí se produce una transferencia de valores desde los sectores de baja composición orgánica del capital, hacia aquellos en que ésta es más elevada, dada una tasa de ganancia única para todos los sectores.

Pero resulta claro también que esta desigualdad tenderá a limitarse o ampliarse, en la medida en que exista una tasa de ganancia diferencial para los distintos sectores (como sucede, de hecho, en la etapa monopólica del capitalismo, en que los grandes monopolios perciben superganancias)⁴. En las condiciones chilenas, resulta una hipótesis plausible que para las empresas públicas existentes (como tales) antes del 4 de noviembre, la desigualdad que hubiera resultado de su composición orgánica superior al promedio, y la transferencia en favor del APS que ello hubiera implicado, se veía limitada por la menor tasa de ganancia que percibían (su menor tasa de ganancia permitía una mayor tasa de ganancia en las empresas privadas). Con la incorporación de nuevas empresas de carácter monopólico al APS esta situación tendería a invertirse: cabe suponer que en ellas, tanto la composición orgánica como la tasa de ganancia son mayores que el promedio.

Sobre este último punto cabe una observación, marginal, pero de cierta importancia. La elevada concentración patrimonial existente en la economía chilena ha permitido a la burguesía monopólica localizar estas superganancias en ciertos sectores o empresas muy específicos (muchas veces en la esfera comercial y no en la productiva), en virtud de consideraciones ligadas a franquicias tributarias, riesgos de expropiación, etc. . . Es dable suponer que con posterioridad al 4 de septiembre (e incluso antes de esa fecha) dichas superganancias tendieron a localizarse en las empresas medianas, no sujetas a expropiación. En la medida, entonces, en que no pase al APS todo el conjunto de empresas que componen el grupo monopólico, parte al menos de las su-

⁴ La transferencia se ampliará en la medida en que la mayor composición orgánica del capital vaya asociada con una tasa de ganancias también mayor. En términos generales, esto es lo que sucede en la práctica, dado que, en tanto mayor sea la composición orgánica, mayor tenderá a ser la dotación de capital fijo necesario para instalar una planta, y menor tenderá a ser, entonces, el peligro de la competencia, real o potencial. Ello contribuirá a que allí la tasa de ganancia sea superior al promedio (en la medida en que las tasas de ganancias relativas dependen de la competencia).

perganancias permanecerán en el sector privado, lo que limitará la transferencia que de otro modo habrían ido al APS.

Las vinculaciones entre el APS y el resto de la economía en la esfera financiera pueden dar lugar también a transferencias en uno u otro sentido. Si se consolida el APP (tomando las esferas productivas, comercial y financiera), su transferencia o captación de excedentes resultará del signo del siguiente balance:

- + Ahorro del APP
- Intereses percibidos por sus ahorros
- Préstamos recibidos por el APP
- + Pago de intereses sobre sus préstamos
- Saldo

En la medida en que el saldo sea positivo, el APP estará transfiriendo ingresos al APS. Como se aprecia, si el ahorro o los intereses pagados aumentan, dicha transferencia aumentará. La inversa se verificará si crecen los préstamos en el APP o los intereses que se les paga por sus ahorros⁵.

La argumentación de los párrafos precedentes señala, en términos generales, los canales a través de los cuales el APS puede captar excedentes generados por el APP. En síntesis, ello se verificará mediante tres mecanismos: el mecanismo impositivo (en el sentido amplio del término); el mecanismo de los precios (y las tasas de ganancia que ellos reflejan), y el mecanismo de captación de ahorros (sean éstos voluntarios o forzosos) a través del sistema financiero.

Empero, al utilizar estos mecanismos, es preciso tener en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, supóngase que a objeto de captar mayores ingresos del APP, aumentan los tributos a que está sujeta, o aumentan los precios de los bienes que ella debe comprar del APS. Es claro que esto implica un aumento de sus costos, que las empresas tenderán a traspasar a los precios. Si esto último se verifica, esas empresas serán un mero intermediario en la transferencia de ingresos al APS, ya que en el fondo ellos provenirán de los consumidores de los bienes que ellas elaboran⁶. Esto señala la necesidad de estudiar los efectos indirectos, sobre los precios de los distintos bienes, de este tipo de medida de captación de ingreso para el APS a fin de, eventualmente, acompañarlas con medidas de fijación y control de precios (especialmente en lo referente a bienes de consumo popular).

⁵ En la actualidad el control mayoritario del sistema bancario que posee el Estado, constituye una fuente importante de captación de excedentes del APP, al menos potencialmente. La incorporación de las Compañías de Seguros en el futuro jugaría también un papel relevante, ya que éstas pueden significar un mecanismo adicional de captación (v. gr., seguros obligatorios para las empresas del APP).

⁶ Si se trata de bienes que no forman parte del consumo de la clase trabajadora, entonces el impuesto será enteramente financiado por una disminución de la riqueza de los grupos no asalariados. Empero, si se trata de bienes de consumo difundido, los asalariados experimentarán una disminución de sus salarios y consumo (en términos reales), en tanto que se verificará una disminución de la riqueza de los grupos asalariados.

En segundo lugar, es claro que el incremento de costo que estas medidas provocan, no será equivalente para todas las empresas, sino que será función de la importancia relativa que como componentes de costos tienen los elementos que se utilizan para la transferencia –importancia relativa que por lo común está ligada al nivel de desarrollo tecnológico de las empresas. Esta es una consecuencia de cierta relevancia, ya que en ciertos casos puede ser necesario diversificar, en cuanto a los aumentos de impuestos a esas estructuras y de precios de los insumos generados por APS y que son vendidos a ellas. Finalmente, cabe referirse al segundo criterio de dominación del APS sobre el resto de la economía que corresponde, como se señaló, a la ubicación de la primera en los lugares estratégicos de la economía.

En términos de un modelo ideal, puede decirse que la ubicación estratégica del APS estaría asegurada en la medida en que:

- a) Las empresas del APS elaboran el grueso de la producción de bienes esenciales, así como los medios de producción que éstos requieren;
- b) Las empresas del APS no compran medios de producción generados por las otras áreas. El sector está totalmente integrado en un sentido vertical;
- c) Las empresas del APP no intercambian productos entre sí, sea debido a que no produce insumos, sea debido a que la comercialización de los insumos que utilizan está en manos del APS.

En estas condiciones ideales el APS es el que determina el carácter de la oferta interna, directamente a través de su producción, e indirectamente, porque puede fácilmente orientar, o ayudar a orientar, al resto de la economía. Para ello se puede utilizar sea mecanismos indirectos, tales como fijación de precios de compra para cada uno de los productos del APP, fijación de los precios de sus insumos, etc. . . De este modo se fija la tasa de ganancia para cada producto, orientando la producción de las empresas. Alternativamente, se pueden emplear mecanismos directos; por ejemplo, entrega de insumos solamente para usos específicos, tales como bienes de consumo popular, etc.

Por cierto, esta situación ideal, en los términos aquí planteados, es muy difícil de alcanzar, y se logra en forma gradual. Por ello, la dominación del APS en una primera etapa está condicionada por su control (debido a que los produce, o los comercializa) sobre ciertos medios de producción estratégicos, entendiendo por tales aquellos de utilización más difundida (que se utilizan para elaborar una vasta gama de bienes, que pueden usarse alternativamente para esenciales y suntuarios), y que son más difíciles de reemplazar por otros insumos susceptibles de ser producidos en el país. Asimismo, está condicionada por su importancia cuantitativa como productor de bienes de consumo esencial.

IV

Finalmente, a modo de conclusión, es preciso enfatizar que la existencia de un Área de Propiedad Privada, y la aceptación de ella, no significa en modo alguno que se postule una perpetuación de las relaciones de producción capitalista en un determinado sector de la sociedad chilena. El capitalismo implica la plusvalía, cuyo origen se encuentra en la explotación del

hombre por el hombre, y esa explotación debe desaparecer por completo en la sociedad socialista que se pretende alcanzar.

Lo que significa esa aceptación es que la transición hacia el socialismo en dicha área sería un proceso gradual, y no un choque único, definitivo y violento como en los grandes monopolios. Resultará más bien de todo un proceso, más o menos lento, de persuasión económica y cultural, en que se modifica la correlación de clases en favor del proletariado, en que la capacidad de éste para controlar también la esfera económica a través del APS, se amplía, y se elevan también los niveles de calificación de la fuerza de trabajo, lo que permite que la dirección de las empresas pase a manos del proletariado.

Por otra parte, resulta claro que, de las diferentes relaciones de producción existentes en el interior del APP, la forma concreta de transición al socialismo –en cuanto a su inicio, su evolución, y su modalidad– no será idéntica para toda el área. En términos generales, puede postularse que el capitalismo de Estado (de su forma elemental a su forma avanzada) que implica la transformación del capitalista en un simple rentista, constituye la modalidad de transición para el capitalismo de economía privada. En cambio, para la pequeña producción mercantil, dicha transición se verifica mediante las formas cooperativas de organización. Desde ya, esto señala que la oposición a las “empresas de trabajadores” cuyas modalidades han sido recientemente publicitadas e impulsadas por la DC –oposición que es correcta en relación a las estructuras capitalistas– no puede absolutizarse, por cuanto para el caso de la pequeña producción mercantil esa modalidad contribuye a una mayor socialización del proceso de producción. De allí que contribuya al desarrollo de las fuerzas productivas y también, dentro de un marco adecuado, puede significar un verdadero avance hacia el socialismo.

Pedro Felipe Ramírez (Izquierda Cristiana): “Indefinición de la UP confunde a las masas”

(Punto Final N° 162 del 18 de julio de 1972).

La DC: Partido contrarrevolucionario

PF: ¿Cuál es la experiencia que ha dejado a su partido, como integrante de la UP, el fracaso de las conversaciones con la Democracia Cristiana?

“Nosotros conocemos bien a la DC. Venimos muchos desde allá. Conocemos a sus dirigentes, a sus bases. Sabemos lo que piensan, lo que quieren, como actúan. El hecho de habernos salido no ha generado en nosotros ningún rencor que pudiera hacernos perder objetividad al pronunciarnos acerca de la DC. Vivimos fraternalmente allí y nos fuimos tranquilos de ella, convencidos de que ese partido había perdido toda chance de ser un partido revolucionario, un partido de ultraizquierda, un partido que luche por el socialismo. La última oportunidad que tuvo la vivió con la candidatura Tomic. Su triunfo habría provocado dinamismos poderosos para hacer de ese partido un instrumento revolucionario. Otros son los que se habrían ido. Por esa razón es que trabajamos a fondo en favor de esa candidatura. Pero la ocasión se perdió y no volverá a repetirse. Lo que hay ahora en la DC es gente de centro y gente de derecha. Gente que se debate en las contradicciones del reformismo y gente coherente y firmemente procapitalista. Todos, sin embargo, unidos en la pasión por el poder, por la hegemonía del poder. Pasión de dirigentes y, sobre todo, pasión de bases. Lo que buscan hoy es el fracaso de la UP. Algunos por la vía rápida, otros esperando el 76. Pero el denominador común es la búsqueda del fracaso de la UP. Todo esto hace que la DC sea un partido que trabajará en contra del proceso revolucionario, cualquiera sea su presidente. Lo hará tratando de mantener a los sectores del pueblo que votan por ella, para lo cual resulta indispensable sostener una imagen populista, hablar de socialismo, hablar de participación, hablar de empresas de trabajadores. Pero en nada de eso creen realmente. El fracaso de las conversaciones no hace otra cosa que confirmarnos lo que ya sabíamos y que oportunamente dijimos a nuestros aliados de la UP.

Cómo se confunde a las masas

PF: ¿Podría interpretarse este fracaso como un error táctico (o estratégico) de la línea seguida por la UP hasta el momento?

“La UP se ha debatido hasta ahora entre las masas y la superestructura para buscar la fuerza política que se requiere para llevar adelante el proceso

de cambios. Gran parte de las empresas que hoy están en manos de los trabajadores han sido obtenidas apelando, en lo fundamental, al apoyo de las masas. Los conflictos institucionales con el Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría, se ha tendido, sin embargo, a enfrentarlos sin sustentarse en las masas, buscando en cambio la salida superestructural. En general, esto confunde a las masas. Les hace perder de vista; el PIR aparece como amigo y al día siguiente como enemigo. Un día hay que atacar a la DC y al día siguiente hay que alabarla. Un día se dice que la justicia chilena es una justicia que defiende los intereses de la clase dominante y al otro día se condena a campesinos que se rebelan contra un juez derechista y provocador. ¿Qué puede entender entonces el pueblo sobre cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos? Y si se confunde a las masas más conscientes ¿qué queda para los campesinos, pobladores y obreros que, víctimas de su alienación, apoyan a la DC e incluso al Partido Nacional?

Lo que nos preocupaba de las conversaciones con la DC era que la UP no tuviera claro si se trataba de un paso táctico o de una estrategia permanente para la obtención de la fuerza política necesaria. Y si los partidos no lo tenían claro, tampoco lo tendría claro la mesa. En todo caso, queda en pie algo fundamental: el hecho del fracaso de las conversaciones demuestra que el Gobierno y la UP no aceptaron transar aspectos básicos del programa”.

Un proceso revolucionario o avanza o es derrotado

PF: ¿La posición sustentada por partidos de la UP en el sentido de que es necesario consolidar lo logrado, la considera ajustada al actual momento político?

“El actual momento político no es el mismo que al inicio del Cónclave y es previsible una readecuación de las posiciones de cada partido. Nosotros, en todo caso, antes y ahora hemos dicho que un proceso revolucionario o avanza o es derrotado. Y avanzar significa recoger, de manera adecuada, los factores de radicalización presentes en la sociedad chilena. Y el factor fundamental de radicalización es la existencia de contradicciones sociales que el pueblo vive y siente día a día. En general, entre los pobres y los ricos. Entre el campesino y la burguesía agraria. Entre los asalariados de la mediana y pequeña industria y sus patrones. Entre los sin casa y los dueños de los sitios y de las empresas constructoras. Entre los que pueden comprar auto y los que tienen que resignarse a esperar micro. Entre los médicos que se dedican a la atención particular y del Sermena y las familias de los imponentes del SNS o de aquellos que ni siquiera tienen previsión. Otro factor de radicalización es el conflicto que existe entre la masa y la burocracia. Sólo recogiendo estas contradicciones, levantando en relación a ellas las banderas de los oprimidos, con un sentido de clase, será posible encontrar la fuerza necesaria para derrotar a los enemigos. De allí también nacerá la cohesión de las fuerzas populares, su sentido solidario y su disciplina. De otra forma nos quedaremos sin nada. Sin capacidad para derrotar a los enemigos y con una masa que no verá en el éxito del proceso la solución de sus problemas. Y esta tratará de encontrarla en el reivindicacionismo individual o grupal.

Diferencias en la UP

PF: A su juicio, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales que habría entre este planteamiento y el que sostienen otras fuerzas de la UP?

“Nosotros hemos sostenido que es correcto decir que los enemigos son el imperialismo, los monopolios y el latifundio, pero lo incorrecto es tomarlos como los enemigos únicos. Primero, porque afectan las relaciones de producción de una minoría del proletariado y no afectan para nada las condiciones de vida del subproletariado. Segundo, porque existen contradicciones sociales como las señaladas anteriormente que no son recogidas en la lucha contra estos enemigos principales. Tercero, porque la burguesía chilena tiene capacidad suficiente para desplazar sus centros de poder económicos en la medida que sigue teniendo a su favor la estructura social, política y cultural creada por ella. Una demostración clara de esto lo constituye lo sucedido en el agro. Ya casi liquidado el latifundio, la burguesía agraria sigue roncando en el campo chileno. La lucha contra el imperialismo, los monopolios y el latifundio debe darse en un marco general de lucha contra la burguesía.

Es indispensable desatar una política de clase

PF: ¿Cuál es, a juicio de la IC, el contenido que tiene el llamado que hacen ciertos sectores de la UP a la Democracia Cristiana? ¿Es correcto hacer una diferencia entre las bases del PDC y sus dirigentes?

“Las bases militantes del PDC no son distintas de sus dirigentes. Incluso es posible percibir que ciertos dirigentes son más “razonables” que las bases. Por ejemplo, las bases en su mayoría estaban en contra de las conversaciones UP-DC. Y esto ha hecho que muchos sectores de izquierda creen posible debilitar a la DC sobre la base de agudizar las contradicciones entre sus dirigentes. Un buen ejemplo de esto es que cuando nosotros nos fuimos diciendo que las “bases estaban rechazadas”, tales sectores de izquierda, con sus declaraciones y su prensa, inflaron desmesuradamente la significación numérica de la gente que se venía con nosotros. Siempre les dijimos que estaban equivocados. Que los que partíamos éramos pocos. Que lo hacíamos no para “dividir” al PDC sino para crear afuera un instrumento revolucionario para los cristianos. Y que la única manera de debilitar al PDC es sustrayéndole los sectores populares adherentes. Pero esos sectores no los conquistaremos apelando a su condición de democratacristianos, sino a su condición de oprimidos. Para lo primero se requiere pasar por el tamiz de un partido rechazado. Para lo segundo, se requiere desatar una política de clase”.

Un vuelco revolucionario

PF: ¿La escalada obstaculizadora de la oposición (rechazo de los vetos, acusación contra Del Canto) deben significar, a juicio de la IC, un cambio en la actitud del Gobierno?

“Lo dijimos antes y con mayor razón ahora. Lo que corresponde es lanzar una segunda etapa de ofensivas revolucionarias. Constituir el área social

de la economía como sea. Ir a una segunda ley de reforma agraria que nazca de los propios Consejos Campesinos. Levantar banderas para los trabajadores de la mediana y pequeña industria. Ir a una drástica limitación de los ingresos (no sólo sueldos) a no más de 20 sueldos vitales, como lo hemos propuesto en una reforma constitucional. Trabajar la línea de igualitarismo como forma de satisfacer las necesidades básicas de los desposeídos en materia de vivienda, salud, trabajo, transporte, previsión. Crear nuevas formas de redistribución de la riqueza que complementen el muy insuficiente mecanismo de los reajustes de sueldos y salarios: entre ellos, creando mecanismos de distribución directa e igualitaria de bienes esenciales. Este es el sentido de nuestro proyecto del Fondo de Igualdad de los Niños. Ir a fondo en la creación de instrumentos de participación del pueblo y los trabajadores. Y todo esto sustentado en el apoyo de las masas y en la unidad de todos los revolucionarios. Elevando nuestra cohesión, nuestro espíritu de responsabilidad y nuestro nivel de renunciamento a ventajas personales”.

Wilson Tapia.

Arnoldo Camú (Partido Socialista): Respuesta al Partido Comunista

(Punto Final N° 162 del 18 de julio de 1972)

En PF N° 160 reproducimos el artículo de Orlando Millas, aparecido en “El Siglo” del 5 de junio, donde adelanta la posición comunista sobre el rumbo que debe seguir el Gobierno. Ahora resumimos la respuesta a Millas escrita por Arnoldo Camú, de la Comisión Política del PS, publicada en la revista “Posición”, N° 12, del 4 de julio.

Ambos documentos tienen la virtud de fijar públicamente las posiciones de esos partidos, después de un debate interno que no alcanzó un acuerdo o conclusión final. Inclusive, las conversaciones con la Democracia Cristiana propiciadas por el PC, se llevaron adelante en medio de estas discrepancias.

El artículo de Arnoldo Camú coloca las cosas en su lugar, cuando los tres ministros comunistas se esfuerzan de hecho y palabra por presentar sus criterios partidistas como “política de toda la UP” (caso Perlack, conversaciones con la DC, etc.). Esta actitud de una de las partes en un debate todavía no resuelto, lleva confusión y desaliento a la clase obrera y a los trabajadores en general. El artículo de Camú servirá para que se vea con claridad que algunas de las posiciones calificadas por el PC como “ultraizquierdistas” y “provocativas” también forman parte del pensamiento actual del Partido Socialista.

Marcha atrás

El artículo de Camú comienza destacando las coincidencias con el PC. Señala así “el vigor con que Millas desarrolla el principio de que ninguna revolución es tal si no se propone y no consigue alterar las condiciones en que la clase obrera participa en la actividad económica”. Y en tal sentido coincide en advertir los peligros de limitarse al “capitalismo de estado” si no cambia la actitud cualitativa en la administración de las empresas expropiadas. Camú expresa que las “gigantescas transferencias de propiedad sobre los bienes de producción” deben implicar “cambios en las relaciones de producción”.

Igualmente, Camú coincide con Millas en plantear la necesidad de una conducción obrera real de la economía, a través de la participación, y destaca los aspectos desarrollados por Millas sobre esta materia, tanto en lo que se refiere a “la utilización de métodos científicos y renovados en la dirección del área social” (planes científicos de producción), como la formación de un sistema de administración nuevo “que funcione sobre la base de la participación democrática”. Ambos elementos, junto a otros factores, son señalados por Camú al igual que Millas como fundamentales para “dar realidad a un

cambio de relaciones de producción (término de la relación explotador-explotado de la empresa capitalista)".

Pero Camú agrega que el tratamiento de estas materias no son "lo medular" en el documento de Millas. "Lo más importante en este documento y en todos los documentos e intervenciones del Partido Comunista de las últimas semanas (conferencia de prensa de Luis Corvalán, informe de Víctor Díaz al Pleno del C. Central de 23 de junio, etc.), es el planteamiento de una reorientación táctica en la política económica del Gobierno y en la línea de conducción de las masas, que por los efectos prácticos que implica debe preocupar e interesar a todo el movimiento popular".

Según Millas, "lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que *la correlación de fuerzas* ha sido afectada en contra de la clase obrera y del Gobierno Popular" (. . .) "por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen transgresiones al programa de la UP". (Subrayado de Camú).

Por transgresiones, Millas entiende las tomas de tierras e industrias, los incidentes en Concepción e incluso la acción radical de algunos miembros del Gobierno en el plano de las expropiaciones fabriles y de la Reforma Agraria, acciones en la mayoría de las cuales ha estado comprometida la militancia y dirigencia socialista. En su criterio, estas "transgresiones" significaron la pérdida de los sectores medios como aliados y así el fracaso de la posibilidad de aislar a los sediciosos.

Se hace necesario, entonces, por sobre cualquier otro objetivo, defender la estabilidad del Gobierno, y agrega Millas en el párrafo citado por Camú: "Sería funesto seguir ampliando el número de los enemigos, y, por el contrario, deberán hacerse algunas concesiones. . . En estas condiciones, *en nada ayuda al proceso revolucionario* poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro cuando haya condiciones más desarrolladas" (subrayado de Camú), puesto que "pueden contribuir a que *despierten suspicacias, incomprendiones y resistencias innecesarias*" (subrayado de Camú). Así, esta reorientación "requiere aislar a los sediciosos, afianzar el Gobierno, consolidar su obra y modificar en su favor la correlación de fuerzas".

"Dónde empiezan las diferencias"

Entrando de lleno a su respuesta a Millas, Camú señala: "Enfocar el problema de la correlación de fuerzas exclusivamente desde la perspectiva de la eficacia o debilidad para dividir al enemigo y neutralizar a los sectores influenciados y desde allí auspiciar una nueva táctica para el movimiento popular, es una posición equivocada que, unida a otros planteamientos ya publicitados por el PC va configurando un claro cambio en la estrategia de la UP para la conquista del poder político".

Camú señala que este error comunista proviene de su "unilateralidad" en el análisis, pues no aborda el problema de la correlación de fuerzas "en todas sus partes", y en cambio considera sólo un aspecto de él. Se apoya en Lenin, quien refiriéndose a la unilateralidad, dijo: "La lógica dialéctica requie-

re que sigamos más allá. Para conocer verdaderamente el objeto hay que abarcar todos sus aspectos, todas sus vinculaciones e intermediaciones. Jamás lo conseguiremos por completo, pero la exigencia de la multilateralidad nos prevendrá contra los errores y el anquilosamiento”.

Contrariamente a Millas, que mide la correlación de fuerzas sólo por el grado de división del enemigo, Camú estima que en el caso chileno ésta debe apreciarse según “la capacidad de combate nuestra y del enemigo en relación a un objetivo determinado: la conquista del poder”. Y en este punto, definitorio para el análisis, hay “muchos aspectos más preeminentes que el grado de cohesión o división del enemigo o la actitud de los neutrales para apreciar lo desfavorable o no de la correlación de fuerzas en una situación dada para el proletariado”. Entre esos aspectos –que Camú define como “grado, calidad y cantidad” de las fuerzas proletarias– menciona, además del número de los combatientes, su organización, su experiencia y tradición de lucha, su moral y mística, la decisión y audacia de los líderes, la justeza estratégica, la adecuada utilización de los elementos de combate (medios de comunicación), el terreno del enfrentamiento, los aliados, etc.

Camú refuerza su argumentación citando al primer secretario del Partido de los Trabajadores de Vietnam, Le Duan (“la Revolución Vietnamita”): “Lejos de quedarnos cruzados de brazos y cifrar nuestras esperanzas en las contradicciones de las filas enemigas, sabemos muy bien que el desarrollo de esas contradicciones, así como hasta dónde es posible aprovecharlas *lo decide la fortaleza real de la revolución*. Las experiencias de todas las revoluciones verdaderamente populares han enseñado que mientras más grande es la fuerza de la revolución, es más impetuoso el movimiento revolucionario, más se desarrollan las contradicciones internas del enemigo y mayor posibilidad hay de profundizar la diferenciación en sus filas”.

Ganar las fuerzas revolucionarias

A la política comunista de alianza con la burguesía media y pequeña, Camú responde que en esta correlación lo decisivo es “la propia fuerza de la revolución”, la que se logra “esencialmente por la firmeza y resolución de las vanguardias proletarias de conquistar, en primer lugar, a la mayoría del proletariado, de unir tras sí a las grandes masas de trabajadores, a los mejores hombres de la clase obrera”. Y agrega: “Defícilmente se podría afirmar que esta tarea está cumplida en Chile, como para poner por encima de esta tarea y contradictoriamente a ella otras tácticas conducentes a la captación o neutralización de la pequeña, mediana burguesía y otros sectores medios y pequeño burgueses”.

Camú especifica que la tesis del PC de hacer concesiones para ganar determinadas capas sociales es antagónica al camino de acrecentar las fuerzas proletarias, semiproletarias del campo y la ciudad, y otras capas populares. “Ciertamente no se ganan estas fuerzas (sobre todo en medio de las dificultades económicas, financieras y de cerco imperialista en que nos encontramos) aceptando la premisa de Orlando Millas de que “*en nada ayuda* al proceso re-

volucionario poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro, cuando haya condiciones más desarrolladas". (Subrayado de Camú).

Por el contrario, Camú estima, junto con Rosa Luxemburgo, que la ley vital de toda revolución "es la de avanzar con extrema celeridad y decisión (. . .) y *planteándose siempre metas ulteriores*", de lo contrario será empujada más atrás "de las débiles posiciones de partida", hasta ser aplastada. (Subrayado de Camú).

Más adelante, Camú se refiere a los peligros de perder fuerzas entre los propios trabajadores "al optar por políticas de quietismo, atrayentes a la pequeña burguesía". Da como ejemplo el planteamiento de Millas sobre la cuestión agraria, quien dice "en cuanto a *los sectores no afectados* por la actual etapa de la Reforma Agraria, debe llegarse con ellos a acuerdos concretos de producción, *asegurando su estabilidad y ascenso económico*". Consejo con el cual pretende evitar el efecto de la lucha campesina que, a juicio de Millas, ha enajenado el apoyo de grandes masas de agricultores medios.

Camú señala que un acuerdo con los sectores no afectados por la Reforma Agraria significa concretamente "que no habrá para ellos Reforma Agraria". Y agrega "esta seguridad brindada a estas clases sociales 'permitiría' ganar o neutralizar aproximadamente a treinta y dos mil propietarios de predios entre 20 y 80 hectáreas de riego básico y a setenta y dos mil propietarios de predios entre cinco y veinte hás. de riego básico. Esta política, que es correcta sin discusión de nadie con respecto por lo menos a la pequeña propiedad (hasta veinte hectáreas de riego básico y quizás hasta cuarenta) conduce derechamente a la conclusión de que 120 mil obreros agrícolas ...que laboran en propiedades de entre 40 y ochenta hectáreas *quedan marginados de su derecho histórico a la tierra, al no impulsarse una nueva Reforma Agraria*". (Subrayado de Camú).

Camú pregunta si al ofrecerse en cambio a esos 120 mil obreros agrícolas solamente salarios mínimos, beneficios contractuales y otros "¿sería posible incorporarlos vitalmente al carro de la revolución para aumentar las fuerzas del proletariado?" Por otra parte, señala Camú que el criterio comunista representa una falta al programa de la UP, el cual asegura que "la Reforma Agraria implicará la expropiación de todos los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos".

A la vez, el dirigente socialista recuerda que el 7 de marzo de 1971, un informe agrario del PC planteaba como tarea fundamental "la liquidación de la tenencia de la tierra, en la cual el dominio de la propiedad es desigual", y agregaba que en lo referente "a la lucha por una verdadera Reforma Agraria, necesitamos que el sector más consciente del campesinado, en alianza con la clase obrera, se fortalezca ganando nuevas fuerzas sociales del campo".

En consecuencia, Camú afirma que debe ponerse el acento ante los campesinos explotados en que una verdadera Reforma Agraria dependerá de su organización y capacidad de lucha "para apoyar al Gobierno y la Unidad Popular a arrancar a las fuerzas reaccionarias los mecanismos de aplicación de una nueva ley".

Detener aun temporalmente la formación del área social, a juicio de Camú, por otra parte, significa paralizar el "más potente caudal de acumu-

lación de fuerzas en favor del Gobierno”, pues “el efecto dominante de la incorporación al área social o mixta de una cantidad importante de empresas monopólicas o estratégicas ha sido el acrecentamiento neto de las fuerzas del proletariado, con que antes no se contaba, y con las cuales quizás ahora se cuenta para todo. ¿Cuál es la naturaleza y la magnitud de los obstáculos que aconsejarían debilitar una política económica que arroja estos incuestionables resultados y en su lugar, consolidar solamente lo alcanzado o avanzar a menos ritmo?”

Millas ha criticado como desenvolvimiento negativo de la economía la acción indisciplinada, el voluntarismo y la ineficiencia en las nuevas áreas económicas, para justificar una revisión del programa de expropiaciones. Tras revisar las ventajas de colocar las empresas monopólicas y estratégicas en las áreas social y mixta, al tiempo de reconocer determinados errores de administración Camú se muestra de acuerdo con el economista Julio López, quien en un extenso análisis sobre la economía política de la UP señala que “la condición política para la consolidación del Gobierno Popular, el fortalecimiento y ampliación de su base de apoyo y el debilitamiento de sus enemigos estratégicos, también imponen como requerimiento ineludible *la aceleración y el avance coordinado de su programa económico*”. (Subrayado de Camú).

Finalmente, sería un riesgo ineludible, según el juego natural de la burguesía, que ésta arrastre consigo a sectores medios –dice Camú– tras la defensa general de la propiedad privada.

Se hace necesario “neutralizar y atajar a esos mecanismos de dominación ideológica. . . para desgajar la alianza de todos los sectores de la burguesía”, pero en el bien entendido que esa táctica “en caso alguno debe obstaculizar la gran táctica para abatir el poder de los enemigos principales de dentro y fuera, y no puede conducir al abandono del camino de preparación de las condiciones óptimas de conciencia y organización de las masas de los sectores industriales monopólicos, para su lucha por su ingreso a las nuevas áreas de la economía. Creemos que esas masas deben saber que el paso firme hacia el socialismo cruzará más temprano que tarde los umbrales de sus fábricas y empresas y abatirá para siempre, irreversiblemente, la explotación capitalista. Y para que lo sepan hay que poner los acentos del caso”.

Senado de la República: Actas de la dictación sobre el veto del Ejecutivo al Proyecto de Reforma Constitucional relativo al Área de Propiedad Social

Discursos de los senadores Valente (PC) y Hamilton (DC)

(Julio de 1972)

Incorporación de bienes de producción a área social de la economía nacional. Reforma Constitucional. Veto.

(Publicación in extenso por acuerdo de la Sala).

El señor Figueroa (Secretario).— Corresponde continuar la discusión general y particular de las observaciones del Presidente de la República, en primer trámite, al proyecto de reforma constitucional que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en lo relativo a la incorporación de diversos bienes de producción al área social de la economía nacional.

El señor Papic (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Valente.

El señor Valente.— El área social: recuperación por el Estado de las empresas estatales apropiadas por los monopolios privados.

Desde el mismo momento en que se dio a conocer a todo el país el programa básico de la Unidad Popular, los distintos sectores de la ciudadanía tomaron debida conciencia de las medidas que se aplicarían, especialmente para realizar los profundos cambios de la estructura económica capitalista y dependiente que paralizaba el desarrollo de la nación.

Se señalaba en el documento, por ejemplo, que en Chile se gobernaba y se legislaba para unos pocos, a favor “de los grandes capitalistas y sus secueces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas”, cuyo poder, hasta que asumió el Gobierno de la Unidad Popular, mantenía la hegemonía del proceso económico en su exclusivo provecho.

“El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos”, se expresaba en el documento. Y se agregaba: “Para que ellos se dignen seguir “trabajando” es preciso darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza de que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan; exigen que se les permita producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de fabricar y elaborar lo que necesita la gran masa de consumidores del país; presionan para que se les deje trasladar sus utilidades a las cuentas bancarias en dólares que mantienen en el extranjero; reclaman el derecho a despedir y desahuciar a los obreros y empleados si éstos reclaman mejores salarios; manipulan la distribución de mercaderías, especialmente de alimentos, para

acapararlos y provocar la escasez que les permita alzar los precios para continuar enriqueciéndose a costa del pueblo”.

“El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10 por ciento de la población acaparan y disfrutan de la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada 100 escudos que los chilenos producen, 50 se reparten entre 10 grupos de jerarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos que forman la clase trabajadora.

Esto ocurrió hasta 1970.

El subdesarrollo y el atraso de nuestro país se deben, en gran medida, a la acción de estos grupos monopólicos y a la voracidad del capital monopolista extranjera. Por eso, las fuerzas populares encabezadas por la Unidad Popular, buscan como objetivo central de la política de Gobierno reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.

El Programa establece, en consecuencia, la constitución de tres áreas económicas para lograr estos objetivos: a) el área de propiedad social, dominante en la economía del país, integrada por las empresas que actualmente posee el Estado, más las que se nacionalicen. Como primera medida se planteaba la nacionalización de las riquezas básicas, como la gran minería del cobre, del salitre, yodo, hierro y carbón mineral; del sistema financiero del país, en especial la banca privada y los seguros; del comercio exterior; de las grandes empresas y monopolios de distribución de energía eléctrica; del transporte ferroviario, marítimo y aéreo; de las comunicaciones, de la producción, refinación y comercialización del petróleo y sus derivados; de la siderurgia; del cemento; de la petroquímica; de la química pesada; de la celulosa y el papel, etcétera; b) el área mixta, integrada por empresas con capitales aportados por particulares y el Estado; y c) el área privada, que comprende aquellos sectores de la industria, la agricultura, la minería y los servicios, y en los que la propiedad privada sobre los medios de producción permanecerá vigente. Esta área será la que cobije a la mayoría de las empresas. De las 35 mil empresas privadas que existen en Chile, a lo sumo 150 pasarán al área social de la economía, todas ellas monopólicas y vitales para el desarrollo planificado del país. El resto se mantendrá como empresas privadas.

Las cartas sobre la mesa

Desde la campaña presidencial misma, se divulgaron y popularizaron los planes económicos de la Unidad Popular. Los propios grupos monopólicos y los oligarcas de todos los pelajes conocieron sobradamente estas intenciones, de modo que mal pueden alegar desconocimiento ni acusar al Gobierno de engaño. La Unidad Popular ha actuado clara y públicamente, con las cartas sobre la mesa. No valen, en consecuencia, los argumentos que expresan sorpresa o desprevención. Jamás la Unidad Popular ocultó sus propósitos. Al contrario; la exposición contenida en el programa es la razón básica de la lucha por la conquista del poder enarbolada por las fuerzas progresistas desde hace décadas. Lo que ocurre, quizás, es que la Derecha creyó que

la Unidad Popular, llegada al Gobierno, capitularía y echaría el programa al canasto de los papeles inservibles, como había sido común hasta entonces. O que caería en las garras sutiles de una oligarquía insaciable y traicionaría al pueblo y al país. ¡Se equivocó medio a medio! Y al comprobar que el Gobierno Popular hacía irreversible el proceso de cambios estructurales, inició la ofensiva propagandística, organizó a todo costo el desprestigio del Gobierno, impulsó la campaña del rumor infundado, incitó y participó en el sabotaje industrial, intensificó el acaparamiento, la destrucción de mercaderías, el contrabando de productos en gran escala hacia el exterior, especialmente de comestibles y medicamentos, con vistas a crear la bolsa negra para acrecentar la especulación, el agio y el desabastecimiento.

El proceso revolucionario camina a paso firme

El primer año de Gobierno exasperó a la Derecha monopólica y concitó las iras y la desesperación de las compañías extranjeras que explotaban nuestras principales riquezas. En el curso de 1971, Chile recuperó, por la vía de la nacionalización, la gran minería del cobre, el salitre, el hierro, el acero, el carbón, el cemento, pasando estas actividades al control estatal y sumándose a las empresas básicas de propiedad social existentes, como la Empresa Nacional de Petróleo, ENDESA, Industria Azucarera Nacional (IANSA) y otras. Fueron estatificados 16 bancos comerciales nacionales y extranjeros, pasando el Estado a controlar casi el 90 por ciento del crédito, orientando estos recursos, verdaderamente, al proceso productivo y favoreciendo especialmente a los pequeños y medianos empresarios hasta entonces ausentes de ellos; se abarató el crédito rebajando las tasas de interés, permitiendo disminuir los costos de producción por la incidencia que, sobre ellos, ejercen los gastos financieros. Numerosos monopolios industriales fueron puestos bajo control estatal, especialmente los textiles, cobre manufacturado, parte de la industria electrónica, cerveceras, alimenticias y otros. En resumen, alrededor de 70 grandes empresas fueron expropiadas, requisadas o intervenidas, iniciándose la estructuración del área económica de propiedad social, comenzando la batida contra los monopolios nacionales y extranjeros y concretando la transferencia al pueblo de los medios básicos y fundamentales de la producción. Tales medidas están permitiendo ampliar considerablemente el desarrollo económico del país y consolidar una política de franco beneficio popular. La participación de los trabajadores en la dirección de estas empresas va en aumento y cada día es más decisiva su influencia en la administración y planificación de la producción, en el cumplimiento de las metas y en las decisiones fundamentales, especialmente en los programas de inversión, reinversión, expansión, modernización y renovación de las maquinarias e instalaciones. Toda la iniciativa y la rica experiencia de la clase trabajadora está volcada en esta tarea vital para el éxito del programa de Gobierno de la Unidad Popular.

El año 1971 marcó aumentos considerables de la producción, de las ventas, de la ocupación; se hizo mayor, en favor de los trabajadores, su participación en la renta nacional y se logró avanzar en la lucha antinflacionaria con éxito relativo.

La oligarquía organiza la defensa de sus intereses

Estos éxitos y la firme decisión del Gobierno de dar cumplimiento estricto al programa popular instaron a los poderosos negociantes a estrechar sus filas. Organizaciones como la Sociedad de Fomento Fabril, la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y otras son la expresión “gremial” de la Derecha. La expresión política más concentrada de estos grupos es el Partido Nacional. Fundamentalmente, la acción de esas agrupaciones está guiada y orientada hacia una meta: impedir que se acelere el proceso revolucionario chileno, defender los intereses de los financistas y de los banqueros que desean recuperar el poder supremo para que el proceso económico dependa de su arbitrio y se ejerza en su exclusivo beneficio; intentan el retorno de las empresas imperialistas para que tomen de nuevo el control sobre nuestras principales riquezas naturales y para que sigan construyendo sus imperios económicos a costa del empobrecimiento de Chile y la explotación de sus trabajadores.

La incesante, metódica, alienante, persistente y aplastante máquina publicitaria de desprestigio que maneja la derecha económica, está por supuesto, bien aceiteada desde el exterior. La Central de Inteligencia Norteamericana (CIA), la ANACONDA, la ITT y el Gobierno de Nixon, comprometido hasta la médula con estos consorcios piratas, proporcionan el oxígeno de esta campaña, traducido en dólares. Las revelaciones de la propia prensa norteamericana han causado expectación en todo el mundo por los sórdidos métodos empleados por los grupos financieros nacionales e internacionales contra Chile y su Gobierno. La lucha por la defensa de sus privilegios económicos se aprecia en estas actuaciones bandidescas y en su afán de derribar al Gobierno legítimo de Chile; constituye, además, una prueba flagrante del odio ancestral que un pequeño grupo de banqueros y capitalistas criollos y extranjeros profesa por Chile y su pueblo.

El Frente Nacional de Area Privilegiada

Los sectores reaccionarios, cobijados en el Partido Nacional, Patria y Libertad, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Central de Comercio y otras organizaciones “gremialistas” no pierden ocasión para desacreditar la acción del Estado cuando éste orienta su política a favorecer a los sectores desposeídos de la población.

Expresiones como “el Estado no es buen empresario” y “no queremos un Estado patrón”, por ejemplo, resultan verdaderos caballos de Troya dentro de las capas de empresarios pequeños y medianos. El desprestigio del Estado como dirigente del proceso económico es una de las más efectivas formas de sembrar el desconcierto entre estos sectores empresariales modestos. La oligarquía actúa con gran perspicacia buscando aliados para la política de protección de sus insólitas prerrogativas, aún en los sectores económicos de intereses antagónicos.

La plutocracia no encontró nada mejor, para uniformar los planteamientos y mantener una dirección única de toda la beligerante acción en contra del Gobierno Popular, que la constitución del llamado Frente Nacional del Área Privada, que es la suma, la confederación de los grupos oligárquicos político-financieros que actúan mimetizados, para defender sus prebendas y sus ilimitados privilegios. Bien podría decirse, sin exagerar, que este organismo es un frente nacional de los empresarios del área privilegiada.

Amnesia premeditada y fraude publicitario.

“El Estado no es un buen empresario”, repiten los monopolistas y la reacción, a sabiendas de que faltan a la verdad. Necesitan confundir por cualquier medio al país, confiando en sorprender desprevenida a la opinión pública.

El señor Hamilton.- ¿Por qué no se refiere a la materia en discusión, señor Senador?

El señor Valente.- Estoy haciendo un análisis previo para luego referirme concretamente al proyecto en debate. Tenga un poco de paciencia, señor Senador.

Continúo, señor Presidente.

Para lograrlo, ponen en marcha su poderosa y eficiente red de comunicaciones, económicamente bien protegida, al expedito equipo de periodistas venales de que disponen y comienza el martilleo diario destinado a sembrar la confusión, la desconfianza y la duda.

Sin embargo, ocultan al país que en Chile el Estado ha sido y es, empresario exitoso desde hace décadas, y que el primer intento, frustrado por la obligarquía y por la rapacidad imperialista, destinado a crear un área social de la economía se hizo en 1939 con la creación de la Corporación de Fomento de la Producción. Los chilenos recuerdan cómo entonces, al igual que ahora, la Derecha se jugó entera para impedir el nacimiento de la CORFO. Fueron derrotados, como lo serán también en esta ocasión.

Es interesante e ilustrativa la opinión que sobre esta materia da el profesor Sergio Bitar, que sirve la Cátedra de Política Industrial en la Universidad de Chile, expresada en el artículo “La Estructura Económica Chilena y la Transición al Socialismo”, publicado en la Revista Mensaje N° 202-203, de septiembre-octubre de 1971. Dice el profesor Bitar:

“El papel del Estado es uno de los rasgos más peculiares de la economía chilena. Ya en 1970, Chile era el país de América Latina (excluido Cuba) donde el Estado tenía la mayor participación en la actividad económica. En 1969, la participación del Sector Público en la inversión fija alcanzó a 58,6%, muy por encima del resto de los países latinoamericanos. Si la influencia del Estado se midiera por los gastos totales del Gobierno Central en relación al producto interno, Chile también aparecería en primer lugar durante toda la década del 60. En los últimos 10 o 20 años estos porcentajes fueron aumentando permanentemente en Chile”.

“A diferencia de los otros países latinoamericanos, el Estado ha actuado desde temprano como empresario. Desde la creación de la CORFO el Estado Empresario se ha venido expandiendo progresivamente. Durante ciertos gobiernos su avance fue más lento que en otros, pero siempre creció. Antes de

iniciarse la construcción del área social de la economía por el actual Gobierno, el Estado ya estaba presente en numerosos sectores estratégicos, tales como la energía, petróleo, telecomunicaciones, acero, azúcar y había penetrado recientemente en actividades más modernas como petroquímica, química y computación a través de nuevas empresas públicas”.

“Este hecho creó en el Estado una capacidad de gestión empresarial y un control sobre el mismo sistema de empresas”.

“Este poder del Estado es, sin duda, un factor esencial para explicar una tradición gradual al socialismo. El Estado dispone de número elevado de mecanismos de conducción, control y gestión del aparato económico, es capaz de generar un excedente importante y de manejar un número importante de empresas. Tiene un poder persuasivo sobre el sector privado. Este último, si bien ha utilizado el Estado como un elemento de apoyo para su propio desarrollo también ha ido creando una suerte de acostumbramiento y de dependencia frente a él. Particularmente en los últimos años, todo proyecto privado de cierta envergadura, sólo podía materializarse con créditos públicos y franquicias diversas”.

“En el sector agrícola, en los últimos años, el Estado logró operar cambios importantes en la estructura de la propiedad, enfrentándose a los grupos propietarios y consolidándose la acción sindical. Concentró su poder técnico y financiero para reemplazar al propietario y apoyar a los campesinos, evitando el deterioro en la producción que se ha observado siempre en este tipo de procesos. En estas circunstancias, obviamente, la etapa siguiente se facilita”.

“Con este poder, el Estado es capaz de sostener la economía y de evitar un dislocamiento del sistema. Le es posible reactivar el proceso empleando su capacidad para expandir la demanda (gasto público y remuneraciones) y, además, puede pasar a controlar un mayor número de empresas aprovechando para ello su organización empresarial ya existente (sistema CORFO y filiales)”.

Hasta aquí el artículo del profesor Bitar.

Contenido del proyecto de Reforma Constitucional

La reforma constitucional en estudio revive las esperanzas de los clanes financieros interesados en paralizar el proceso de cambios y la configuración de las distintas áreas económicas.

En resumen, la reforma persigue:

a) Derogar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en nuestro país, desde hace 30 años. Estas disposiciones constituyen herramientas eficaces del Poder Ejecutivo para orientar y dirigir el proceso económico.

Es bueno repetir que estas disposiciones que la reforma pretende derogar han sido el fruto de numerosas y heroicas batallas del movimiento popular a lo largo de las últimas tres décadas. Ninguna de ellas ha sido dictada durante la Administración del Presidente Allende, y todos los Gobiernos anteriores las han utilizado.

b) Declarar nulas las actuaciones del actual Gobierno en el campo del derecho privado, con lo que se trata de impedir que ciertos monopolios sean

incorporados al área social no obstante que el Estado abrió poder comprador para sus acciones, pactándose una transacción comercial usual y ordinaria. La aprobación de esta disposición produce una situación jurídica de dudosos efectos prácticos, a la vez que introduce gran incertidumbre en la actividad económica, pues, numerosas empresas han llegado a acuerdos con el Gobierno, en el sentido de acogerse a un régimen mixto de propiedad. Lo propio ocurriría a miles de pequeños accionistas que han vendido voluntariamente sus acciones al Gobierno.

c) Obligar al Ejecutivo a comprar acciones de determinadas empresas, sólo mediante la dictación de nuevas leyes, despojándose así al Poder que administra el Estado de sus facultades constitucionales, hasta el punto de impedirle efectuar las más simples operaciones de compraventa;

En cambio, no se prohíbe, en parte alguna, que los empresarios y monopolistas se compren o vendan entre sí sus acciones, acumulando poder financiero ilimitadamente;

d) Derogar todas las facultades que tiene el Ejecutivo para el requisamiento, dejando, en esta forma, el campo libre a los acaparadores, agiotistas y especuladores tan activos en los últimos tiempos;

e) Despojar al Poder Ejecutivo de todos los medios legales que posee, a fin de impedir la transformación estructural de la economía y avanzar hacia el socialismo a través de la legalidad.

La reforma Fuentealba-Hamilton es, pues, un grave intento para proscribir al Poder Ejecutivo y ponerlo prácticamente en interdicción.

Nacionalización por ley

Algunos sectores de la oposición se han manifestado partidarios de la constitución de estas áreas en el proceso económico que estamos viviendo. Objetaron: el procedimiento seguido por el Gobierno, pues estiman que toda nacionalización de las empresas monopolistas debería hacerse cumpliendo los trámites legislativos usuales.

El Poder Ejecutivo, sin desandar lo ya avanzado, acogió esta sugerencia y envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre la materia. En esa rama del Congreso el proyecto sufrió tal cantidad de modificaciones, que desvirtuaron la iniciativa original, despachando un proyecto a gusto de los sectores oligárquicos.

El Gobierno reformuló su proposición incluyendo en el veto a esta reforma constitucional las disposiciones que faciliten la estatificación de algunos monopolios estratégicos, individualizándolos por su nombre. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó estos planteamientos –que no son otra cosa que la nacionalización por ley– con el argumento de que el Ejecutivo había repetido ideas rechazadas por la Cámara de Diputados, además de calificar de inconstitucionales estas disposiciones por estimar que la idea incluida en el veto es distinta a la propuesta por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados. La del veto incorpora al área social empresas determinadas específicamente. La enviada a la Cámara concedía al Presidente de la República una

facultad genérica para incorporar al área social empresas de determinado capital.

Es decir, las vías que ha buscado el Gobierno para satisfacer algunos planteamientos de sectores opositores, sin que ello signifique por supuesto transar el objetivo central de la política económica, han sido eliminadas con argumentaciones contradictorias e insustanciales, que se vuelven contra sus propios autores, quienes aparecen como capitulando en sus recientes posiciones doctrinarias.

Coincidencias e inconsecuencias

Es útil transcribir el pensamiento que sobre la acción del Estado y de la empresa privada tenía el Gobierno anterior, según consta en la publicación de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, sobre la Política General de Desarrollo, correspondiente al año 1968, página 18. En ella se señala:

“La delimitación de los campos de acción del Estado y de la empresa privada en la economía, generalmente se ha hecho en virtud de criterios ideológicos sobre la estructura más deseable del sistema productivo. Dado el nivel actual de desarrollo económico del país y los objetivos programáticos enunciados, la asignación de tareas entre el Estado y la empresa privada se hará de acuerdo con la mayor eficacia con que en uno u otro caso se cumplan dichos objetivos”.

“De acuerdo con este principio, corresponderá a la empresa privada jugar un papel preponderante en el desarrollo económico futuro del país, particularmente en aquellos sectores económicos en que la actividad privada puede hacer su aporte al desarrollo nacional, sin crear poderes monopólicos atentatorios al bien común y una concentración excesiva de la propiedad de los medios productivos”.

La empresa privada subordinada a la política estatal

El documento citado precisaba con mucha claridad el papel de la empresa privada en los siguientes términos:

“El desarrollo de la empresa privada deberá atenerse a las reglas del juego definidas por el Estado en materia de política económica, y orientará su acción por los planes de desarrollo y por la labor promocional y financiera de las entidades de crédito y fomento del Estado”.

“Por otra parte” –continúa ODEPLAN– “será de competencia del Estado el desarrollo de los siguientes sectores:

“a) Aquellos sectores que produzcan bienes o servicios de vital importancia para el normal desarrollo del país, tales como la energía eléctrica, la explotación y refinación del petróleo, los transportes y las comunicaciones. En estas actividades, la empresa privada podrá desarrollar actividades paralelas o complementarias sujetas al control de los organismos pertinentes del Estado, que garantice un servicio regular y una tasa normal de rentabilidad.

“b) Aquellos sectores que produzcan bienes o servicios que por razones tecnológicas requieren de la concentración de capital de tal magnitud en re-

lación al mercado interno, que se transforman en actividades monopólicas conducentes a una concentración de propiedad excesiva en el sector privado.

“En estos sectores y en aquellas industrias de gran escala y de alta tecnología, destinada a producir una exportación, especialmente al área latinoamericana, se podrá establecer asimismo un régimen de empresa mixta, con poder decisivo del Estado en aquellos aspectos vitales, como la política de precios, remuneraciones, utilidades e inversiones.

“Finalmente, con la ayuda del Estado, la política de desarrollo contempla la promoción de empresas privadas de tipo comparativo, en aquellos sectores donde tradicionalmente han existido extensos grupos de trabajadores por cuenta propia o grupos cooperativos, que han operado con escasa organización y asistencia técnica crediticia, como es el caso del sector agrario, la pequeña industria y el artesanado y la pequeña minería. En general, estas empresas deben desarrollarse donde existan condiciones tecnológicas favorables y donde el efecto ocupacional sea importante”.

Este es el pensamiento del Gobierno anterior, expresado a través de ODEPLAN, en relación a la acción del Estado y de la empresa privada en la economía. Una posición diametralmente distinta a la contenida en la reforma constitucional que debatimos en esta sesión.

Los monopolios destruyen a las pequeñas y medianas industrias

En su afán por encontrar aliados que se sumen a la defensa de sus intereses, los monopolistas recurren a todos los medios para engrosar sus filas. Sus esfuerzos se encaminan también a ganar al importante sector de los pequeños y medianos empresarios.

A través de numerosas organizaciones aparentemente “gremialistas”, los grupos financieros trabajan sostenidamente para incorporar a esos pequeños y medianos empresarios a una alianza que combata la política económica de la Unidad Popular. Desfigurando la verdad, mixtificando e inventando actitudes jamás asumidas por el Gobierno, los monopolios golpean incesantemente, y con éxito, la conciencia de los empresarios medianos y pequeños.

En la concentración realizada por los integrantes del Frente Nacional del Area Privilegiada en el Teatro Caupolicán, Jorge Fontaine, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio y alto empleado de “El Mercurio”, dijo: “Los trabajadores del área privada no desean quedar relegados a un segundo plano. Si el Estado toma control, como pretende hacerlo, de todas las actividades importantes –producción, distribución, comercio exterior, finanzas, etc.–, queda en claro que el papel de los que trabajan en el área privada se reduce a un dócil dependiente del Estado. La suerte de cada comerciante pequeño o grande, cada industrial, transportista, minero o constructor, y la de sus colaboradores quedará irremediabilmente ligada a la voluntad del funcionario respectivo”.

El señor Durán.– Jorge Fontaine no es empleado de “El Mercurio”. Sería conveniente que el señor Senador corrigiera la parte pertinente de su discurso.

El señor Valente.– Con la aclaración de Su Señoría, queda hecha la enmienda.

El señor Durán.– Lo es su hermano.

El señor Valente.– “No nos sentimos identificados” –agrega– “en ninguna fracción política ni sector económico determinado...”

“No nos unimos para defender intereses económicos, sino para apoyar un sistema de vida basado en la creciente participación de todos los chilenos en las grandes tareas nacionales”, añadió el señor Fontaine.

¡Flor de demagogo!

Primero, aparenta defender a los pequeños comerciantes, pequeños industriales, transportistas y otros grupos empresariales medianos y pequeños, olvidando que estos sectores han vivido sometidos permanentemente a la explotación y dominación de los grandes monopolios.

Segundo, confiesa apoliticismo en circunstancias de que la totalidad de los dirigentes de ese Frente del Área “Privilegiada” reconoce filas en el Partido Nacional, en Patria y Libertad y en otros grupos sediciosos.

Por otra parte, sabe perfectamente el señor Fontaine que el Ejecutivo no ha adoptado ni adoptará ninguna de las medidas agoreras que sostiene. Toda la acción del Gobierno Popular está encaminada a liquidar a la empresa monopolista y a los grupos político-financieros que han vivido como sanguijuelas y engordado a costa de trabajo ajeno. No puede confundirse a los pequeños comerciantes, al pequeño o mediano industrial, al transportista, al minero o al constructor, con los diez grupos familiares que detentan el 70 por ciento del poder económico industrial del país.

El verdadero enemigo es el monopolio

“Las grandes empresas tienden a apoderarse de los mercados, a destruir a los competidores o ponerse de acuerdo con ellos, y a dictar los precios. El monopolio es una asociación o alianza de capitales que reúne en sus manos la producción y venta de una parte considerable, a veces fundamental, de los artículos de una o varias ramas de la economía. El monopolio posee una enorme potencia económica, un gran peso en determinada esfera de la producción y del comercio, lo cual le asegura una posición dominante, es decir, la posibilidad de establecer unos precios elevados y, por consiguiente, de obtener grandes ganancias. Esta situación monopolista les permite multiplicar los beneficios sin incrementar la producción, simplemente, aumentando los precios, exprimiendo al comprador mediante un verdadero robo organizado. El monopolio es una agrupación de capitalistas que va dirigida contra los obreros a los que ellos explotan”.

Lenin señalaba con mucha propiedad y precisión que “el capitalismo ha sustituido ya hace mucho tiempo la pequeña producción independiente de mercancías, en que la competencia podía, en proporciones más o menos amplias, desarrollar el espíritu emprendedor, la energía, la iniciativa audaz, por la producción industrial en grande y en grandísima escala, por las sociedades anónimas, por los consorcios y demás monopolios. La competencia significa, en este

tipo de capitalismo, el aplastamiento inauditamente feroz del espíritu emprendedor, de la energía, de la iniciativa audaz de la masa de la población: significa, también, la sustitución de la emulación por la pillería financiera, el despotismo, el servilismo en los peldaños más elevados de la escala social”.

“La formación de los monopolios –agrega– hace que el lugar del pequeño productor sea ocupado por el grande; las fábricas enormes desplazan al pequeño productor. Las grandes empresas siguen siendo propiedad privada de determinados individuos o grupos capitalistas cuyo único móvil es la obtención de grandes beneficios”.

“Por otra parte” –añadía– “la concentración de la producción va acompañada de la concentración y centralización del capital bancario. Ello trae consigo la aparición de monopolios bancarios y modifica radicalmente el papel de los bancos”.

“A medida que la banca se desarrolla y se concentra” –decía Lenin– “los bancos se convierten, de modestos intermediarios que eran, en todopoderosos monopolistas, que disponen de casi todo el capital monetario del conjunto de capitalistas y pequeños empresarios, y también de gran parte de los medios de producción y fuentes de materias primas dentro de su propio país”. “Los bancos pasan a ser copropietarios de las empresas industriales. A su vez, el capital industrial monopolista se incrusta en la banca. Se produce la fusión del capital monopolista de la banca y la industria, dando así origen al capital financiero”.

“El reducido grupo de grandes magnates del capital financiero se convierte en la oligarquía financiera y se apodera de las posiciones claves dentro de la economía de los países capitalistas. El poder de la oligarquía financiera se ve extraordinariamente incrementado por el hecho de que a través del sistema de sociedades anónimas dispone de capitales ajenos. El sistema de sociedades anónimas subordinadas permite a la oligarquía financiera entregarse a toda clase de maquinaciones altamente provechosas. Proporcionan enormes beneficios la fundación de nuevas compañías, las nuevas emisiones de acciones, la realización de empréstitos públicos, la especulación con tierras, etc. Esto significa un tributo que la sociedad satisface a los monopolistas”.

“La naturaleza social del pequeño productor propietario está claramente precisada en la teoría científica del socialismo y establece las vías y las posibilidades de desarrollar esta capa de la pequeña burguesía. En el capitalismo, los impuestos y la competencia monopólica de los grandes industriales ahogan a los artesanos y a los pequeños productores. Estos pequeños empresarios son víctimas de la opresión y explotación económica; desarrollan sus actividades en condiciones de inseguridad y son, generalmente, oprimidos y explotados. En ellos, está vivo un sentimiento de rebeldía contra la discriminación económica y están dispuestos a incorporarse a la lucha liberadora de la clase obrera”.

El Gobierno Popular defiende al pequeño y mediano empresario

La Unidad Popular y el Ejecutivo reconocen el derecho legítimo de existencia y desarrollo de las amplias capas de pequeños y medianos empresarios.

El programa de Gobierno no es contradictorio con los intereses del sector privado no monopolístico, cuyas contradicciones efectivas se han dado y siguen dándose con las grandes empresas monopolísticas de la producción y la distribución. El Gobierno ha señalado repetidamente que de las 35 mil empresas privadas existentes en Chile pasarán al área social de la economía menos del 5% y que la estatificación incorporará al área social los monopolios de la distribución, los monopolios industriales estratégicos y, en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país. En suma, se estatificarán alrededor de 100 empresas monopolísticas.

Las empresas que integran el área privada serán beneficiadas con la planificación de la economía nacional; el Estado les procurará la asistencia técnica y financiera necesaria para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional.

El Gobierno ha dado pasos significativos para favorecer a estos pequeños y medianos sectores empresariales. El estatuto de la Pequeña Industria y Artesanía suscrito con la AMPICH resuelve viejas aspiraciones y establece formas efectivas de apoyo y fomento de estas actividades.

En la reestructuración del Consejo Nacional de Desarrollo se ha incorporado a la AMPICH y a CONPIA, en sustitución de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Confederación de la Producción y del Comercio, que responden –estas últimas– a los intereses de los grandes monopolios. El Ejecutivo tiene mucho interés en dar a los pequeños y medianos empresarios plena participación en los asuntos de Gobierno y en el desarrollo del país.

Importantes sectores de pequeños y medianos industriales, comerciantes y agricultores han experimentado, ahora, un trato sustancialmente diferente de parte del Gobierno de la Unidad Popular, comparado con el que recibieron cuando gobernaba la oligarquía financiera. La administración ha dispensado a estos modestos empresarios un trato nuevo y especial: les ha abierto el crédito a bajo interés; les ha otorgado convenios tributarios muy beneficiosos; establecido amplios poderes de compra para sus productos; los ha incorporado a la seguridad social, de la que estaban marginados hasta ahora.

Los pequeños y medianos empresarios nada deben temer del Gobierno Popular. La acción de éste en el proceso industrial chileno tiende a erradicar la influencia de los monopolios, a poner fin a la concentración del capital en manos de un reducido grupo de clanes familiares y a terminar con la gravitación política que ellos ejercen en nuestro país. La acción de la burguesía monopolista y su alianza y vinculación a todos los chilenos patriotas frente a un enemigo poderoso y sin escrúpulos, que socava desde adentro nuestra economía, tratando de paralizar su desarrollo y acrecentar su dominio financiero.

Identificación de los grupos político-económicos

Las siguientes expresiones del señor Orlando Sáenz, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, demuestran hasta qué punto llega la impudicia de la burguesía monopolista. Dijo Sáenz en el acto de constitución del Frente del Área “Privilegiada”: “He aquí el área privada que hoy se reúne en el acto más

trascendental de su historia para hablarle a Chile y decirle de sus temores y esperanzas". "Porque en verdad, hoy nos reunimos bajo la presión de un dificultado presente y de un inquietante porvenir. No es posible que los responsables de la conducción económica de un país vivan pensando qué estatizar y cómo hacerlo en la forma más rápida y agresiva posible".

"¿Dónde están las inversiones creadoras del Estado y de los particulares? ¿No sería mejor para Chile que en lugar de desvivirse para arrebatar más y más actividades al sector privado se le ayudara a desempeñarla mejor y repartir equitativamente los excedentes de producción?"

¡Nada más quieren los "perlas" aumentando su poderío económico a costa del Estado, de la inversión pública y del trabajo de los chilenos!

Precisamente, la orientación económica del Gobierno de la Unidad Popular está orientada a terminar con los grupos monopolícos dominantes y estatificarlos en la forma más rápida posible. Así desbarataremos una de las causas del empobrecimiento paulatino del país y del subdesarrollo que agobia a las mayorías nacionales.

Pero ¿quiénes están detrás de esta campaña, moviendo los hilos desde las sombras y disparando desde todos los ángulos contra la política económica del Gobierno? Los conocidos de siempre. Un puñado de financistas y banqueros cuyos tentáculos llegan hasta las más simples y recónditas actividades. Forman no más de diez grupos político-financieros familiares vinculados entre sí a través de múltiples empresas, ligados por intereses económicos y políticos, impermeables a todo cambio estructural y opositor intransigentes a la pérdida de sus irritantes privilegios.

La relación siguiente demuestra el grado de intereses que ata a estos grupos y el dominio que mantienen o pretenden continuar manteniendo las principales actividades industriales, comerciales y financieras del país. Muestra, además, la interrelación existente entre banqueros y monopolistas como también la magnitud de la concentración del capital monopolíco en pocas manos.

Grupo I: Banco Sudamericano

Domina en este grupo el clan familiar Matte-Alessandri. Mantiene vinculaciones con los grupos Agustín Edwards, Yarur, Hirmas, Bulnes, Grace. Controlaba más de 130 empresas, que cubrían las actividades más disímiles, tales como agrícolas, forestales, seguros, químico-farmacéuticas, mineras, textiles, madereras, plásticos, cobre manufacturado, avícolas, frutícolas, cemento, fertilizantes, carboníferas, metalúrgicas, navegación marítima, gráficas, inversiones y rentas mobiliarias, distribuidoras de mercancías, celulosa y papel, electro-metalúrgicas, embotelladoras, importación de vehículos y repuestos, ganaderas, construcción, cupreras, etcétera. Entre las empresas de este grupo pueden destacarse las siguientes, varias de ellas incluidas entre las que integraran el área de propiedad social: Manufacturas Sumar, Algodones Hirmas, Manufacturas Chilenas de Algodón Yarur, Tejidos Caupolicán, Rayón Said, Industrias Químicas, Paños Oveja Tomé, Grace y Cía., Compañía General de Electricidad Industrial, Cemento Bío-Bío, Cemento Melón, Pesquera

Guanaye, Compañía Industrial Metalúrgica (CIMET), Fábrica Nacional de Aceites, Compañía Chilena de Productos Alimenticios (CHIPRODAL), Compañía de Acero del Pacífico (CAP), Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, Manufacturera de Cobre (MADECO), Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), Manufacturera de Metales (MADEMSA), Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, Embotelladora Andina, Sociedad Industrial Pizarreño, Dos Alamos Sociedad Anónima Industrial y Comercial, Saavedra Bernard, Laja Crown S.A., Industria Chilena de Alambres (INCHALAM), Nieto Hnos., Empresa Pesquera (EPERVAL), OXIQUM Ltda., Compañía Sudamericana de Vapores, Cristalerías Chile, Compañía Productos de Acero (COMPAC) y otras.

Grupo II: Banco de Chile

Los clanes predominantes en este grupo eran Agustín Edwards, Matte-Alessandri, Campos Menéndez-Braun, Yarur, con vinculaciones muy amplias entre sí.

Influía en más de 80 empresas monopólicas y controlaba numerosas actividades, como vitivinícolas, licorerías, cervecerías, abonos y fertilizantes, agrícolas, ganaderas, carboníferas, textiles, forestales, impresoras, periodísticas, tabacos, azucareras, lozas y refractarios, distribuidoras, manufactureras de cobre, metalúrgicas, petróleo, mineras, frutícolas, aceros, navieras y otras. Entre las empresas del grupo figuran: Compañía Cervecerías Unidas, Manufacturas Chilenas de Algodones Yarur, Textil Progreso, Industrial Nacional de Rayón (RAYONHIL), Fábrica Nacional de Loza (FANALOZA), Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), Agencias Graham, Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, Compañía de Teléfonos de Chile, Compañía Industrial, Cristalerías Chile, Interoceánica de Navegación, INDUS LEVER, Refractarios Lota Green, Licores Mitjans, FERRILOZA, Industria de Metales, Industria Nacional de Neumáticos (INSA), Manufacturas de Cobre (MADECO), Compañía Industrial Hilos Cadena, Compañía Chilena de Tabacos, Fábrica de Envases (RESA), Dos Alamos S.A.I.C., Saavedra y Benard, Farmoquímica del Pacífico, OXIQUM Ltda., Naviera Interoceangas. Este grupo estaba vinculado, además, con los imperios financieros norteamericanos International Telephone and Telegraph (ITT), por intermedio de la Compañía "Chilena" de Teléfonos, y con la South American Power, a través de la Compañía "Chilena" de Electricidad.

Grupo III: Banco de Agustín Edwards

Controlaba e influía en más de 70 empresas. Sus actividades más importantes son las periodísticas, cerveceras, textiles, vitivinícolas, navegación, carboníferas, minería aurífera, rentas e inversiones, químicas y farmacéuticas, electricidad y combustibles, aceites, pesqueras, jabones y detergentes, salitre-ras, conserveras, ganaderas, agrícolas, maquinarias, aeronavegación, etcétera. Las empresas más importantes que estaban bajo su dominio son: Compañía Cervecerías Unidas, Manufacturas Sumar, Tejidos Caupolicán, Grace y Cía.,

Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, Compañía de Consumidores de Gas (GASCO), Cristalerías Chile, Interoceánica de Navegación, Aceites y Alcoholes Patria, Compañía de Aceros del Pacífico, Pesquera INDO, Farmoquímica del Pacífico, Interoceangas, Compañía Naviera, Compañía General de Electricidad Industrial, Industrias Chilenas de Alambre (INCHALAM), Cemento Melón, Manufacturas de Metales (MADEMSA).

El clan dominante es el Edwards, manteniendo vinculaciones con los grupos Matte-Alessandri, Campos-Menéndez-Braun, Yarur, Bulnes, Grace.

Grupo IV: Banco de Crédito e Inversiones

El grupo familiar dominante era Yarur. Mantenía vinculaciones con Matte-Alessandri, Edwards, De Castro. Influyó en más de 40 empresas y controlaba, fundamentalmente, la industria textil y derivados. Otras actividades del grupo son: salitreras, salineras, mineras e importación de autos. Entre las empresas de este grupo podemos mencionar: Manufacturas Chilenas de Algodón Yarur, Textil Progreso, Nieto Hermanos, Compañía de Tejidos Salvador (COTESA), Compañía Salinas Yarur.

Grupo V: Banco Nacional del Trabajo

El grupo dominante era Said-Kattan, vinculado a Matte-Alessandri, Edwards, Campos-Menéndez-Braun. Influyó en alrededor de 40 empresas, entre las que destacamos: Algodones Hirmas, Rayón Said Industrias Químicas, Industria Nacional de Rayón (RAYONHIL), Lanera Austral, Agencias Graham, Industria Chile de Soldadura (INDURA), Pesquera Guanaye, Licores Mitjans, Compañía Productora de Aceites, Manufacturas de Cobre (MADECO), Cobre Cerrillos, Compañía Industrial Hilos Cadena, Fábrica de Envases (FESA), Pollak Hnos., Saavedra Benard, Fábrica de Paños Continental, Compañía Chilena de Fósforos.

Grupo VI: Banco Español-Chile

En este grupo tienen primacía los clanes Bulnes-Grace, Matte-Alessandri, Edwards. Controlaba e influía en más de 50 empresas relacionadas con petróleo, combustibles, textiles, seguros, electrometalúrgicas, ganaderas, curtiembres, inversiones y rentas, metal, mecánicas, caucho y plásticos, pequeras, enlozados, vinos y licores, químicas, farmacéuticas, aceites, aguas minerales, etcétera. Entre las empresas del grupo citaremos: Paños de Oveja Tomé, Grace y Cía., Fábrica de Enlozados FENSA, Fábrica Nacional de Aceites, Textil Pollak Hnos., Pesquera EPERVA, OXIQUIM Ltda., Sociedad Industrial de Calzado (SOINCA).

Decisivo poder económico en manos monopólicas

La propia Sociedad de Fomento Fabril ha dicho que las 91 empresas incluidas en el área social representan nada menos que el 60 por ciento de la pro-

ducción industrial del país. Esto quiere decir que tan sólo 91 empresas privadas de las 35 mil que existen en el país, es decir, menos del 3 por ciento, dominan casi los dos tercios de la producción nacional. Esta producción está en manos de los seis grupos financieros que hemos individualizado hace un momento.

Este hecho es una revelación de la enorme concentración monopolística capitalista, los cuantiosos intereses privados en juego y la intensidad de la campaña financiero-política que está en marcha para proteger los intereses de un puñado de capitalistas. Por cierto que estos intereses no son los del país; por el contrario, afectan al desarrollo planificado de la economía, distorsionan nuestra realidad financiera, afectan grandemente los intereses de la inmensa mayoría nacional.

La empresa privada monopolista le cuesta un ojo de la cara al país

Los esfuerzos publicitarios de los grupos monopolísticos se orientan a crear conciencia de que la empresa privada es insustituible para promover el desarrollo económico de la nación.

Reconocemos la importancia de la iniciativa privada cuando se trata de actividades no monopolísticas.

El Programa de la Unidad Popular no es contradictorio con los intereses de los sectores privados de pequeños y medianos empresarios. Si es profundamente antagónico con la existencia de grupos financieros monopolistas y oligarcas.

Estos grupos o clanes familiares, constituidos por un reducido número de capitalistas, son, precisamente, los que frenan todo el desarrollo del país y profundizan las diferencias de clases y la explotación de los trabajadores.

La actividad privada monopolística ha crecido y se ha hecho poderosa casi exclusivamente por el aporte financiero que le ha dado el Estado. Hasta 1970, gran parte de los recursos financieros estaban destinados a fortalecer la actividad de los grandes empresarios privados. Cuando la oligarquía fue Gobierno, se alentó considerablemente la concentración del capital financiero en manos de los grupos político-familiares. El crédito estaba destinado a satisfacer las necesidades de estos grupos; los organismos estatales encargados del desarrollo económico cumplían sus actividades en función de los intereses de estos grupos; la Corporación de Fomento, el Banco del Estado, la Caja Central de Ahorros y Préstamos y otros organismos comprometían sus recursos para incrementar el poderío económico de los clanes empresariales privados.

El siguiente dato es fiel reflejo del contenido y orientación de la política financiera aplicada entre 1940-1960. La distribución porcentual de todas las colocaciones bancarias, incluidas las asociaciones de ahorro y préstamo y la CORVI, son las siguientes:

Período	Empresa Privada	Sector Estatal
1941-1945	91,0%	9,0%
1946-1950	91,6%	8,4%
1951-1955	85,3%	14,7%
1956-1960	71,5%	28,5%
1961-1965	54,0%	46,0%

La misma fuente de información señala que “desde su fundación la Corporación de Fomento actuó en muchas circunstancias como institución crediticia, ya sea otorgando avales y garantías, traspasando créditos externos o dando créditos con cargo a sus propios recursos”. En el período 1940-1960 el papel de la Corporación de Fomento como institución crediticia, para el sector privado, se realizó sin una pauta preestablecida y sin que se crearan los mecanismos adecuados para ello. La política crediticia de la Corporación se fue adecuando de acuerdo a la política general del Gobierno y las circunstancias económicas imperantes. Durante ese lapso no hubo obstáculo para que la CORFO realizara una importante labor financiera, otorgando créditos y participando directamente como inversionista asociado al capital privado.

Por décadas, la Corporación de Fomento se constituyó, de acuerdo a la orientación de los Gobiernos, en la principal sostenedora y protectora de la empresa privada monopolista.

Al mismo tiempo, las breves permanencias de los partidos políticos progresistas en las tareas de Gobierno y la constante lucha de los trabajadores permitieron echar las bases para la creación de industrias estatales como la Empresa Nacional de Petróleo, Industria Azucarera Nacional, Empresa Nacional de Electricidad, Compañía de Aceros del Pacífico y otras. También se crearon industrias mixtas con capitales de la Corporación de Fomento y privados, dando nacimiento a la Empresa Manufacturera de Metales, Farmoquímica del Pacífico, Manufacturas de Cobre, Industrias Forestales, Industria Nacional de Neumáticos, un complejo pesquero en el norte del país, empresas carboníferas y muchas otras.

En los primeros años de su existencia, la Corporación de Fomento no sólo fue un factor decisivo en la planificación económica, sino que, además, contribuyó eficazmente a la creación de las más importantes empresas industriales que aún existen en el país.

A medida que se sucedían los gobiernos en los que la burguesía monopolista ganaba más y más influencia, especialmente en el campo financiero y político, el capital privado desplazaba a la CORFO de su calidad de socio y asumía la propiedad integral de las empresas. La Corporación de Fomento pasó a constituirse solamente en el organismo financiero de las grandes operaciones industriales y comerciales de la empresa privada.

Los capitalistas monopolistas nacionales y extranjeros empezaron a adueñarse de las empresas estatales o semiestatales y a configurar una poderosa área privada en la que el factor preponderante y característico fue la alianza político-financiera-familiar que dio nacimiento a los clanes económicos e impulsó, de manera decisiva, la concentración de capital financiero en pequeños grupos.

El Gobierno Popular está recuperando las empresas estatales o mixtas creadas por CORFO

La constitución del área social de la economía tiene por objeto –y lo repetimos una vez más– incorporar a la propiedad del Estado, de todos los chilenos, de la sociedad en su conjunto, las industrias básicas, como el cobre, el salitre, el hierro, el carbón y otras ya recuperadas; las grandes empresas monopólicas de la distribución, los seguros, la banca privada, los monopolios industriales estratégicos y, en general, todas aquellas actividades condicionantes del desarrollo económico y social del país.

Lo que el Gobierno Popular está haciendo no es sino recuperar aquellas empresas estatales o mixtas creadas y financiadas por la Corporación de Fomento de que fue despojado indebidamente el Estado por los monopolios privados.

De esta manera, el Gobierno Popular reivindica la razón de existir de la Corporación de Fomento, cuya creación fue el primer intento serio y responsable para la constitución de empresas estatales y mixtas.

En las observaciones al proyecto de reforma constitucional en debate, el Gobierno ha incorporado la nómina de las empresas que integrarán las áreas social y mixta de la economía. Pido al señor Presidente que recabe el acuerdo de la Sala para insertar dicha lista en esta parte de mi intervención, cuando haya quórum en la Sala.

El señor Papic (Vicepresidente).– Oportunamente se recabará el asentimiento de la Sala, señor Senador.

La lista mencionada, que se acuerda insertar más adelante, es la siguiente: “Sociedad Pesquera Guanaye S.A., Compañía de Teléfonos de Chile, Manufacturas Sumar S.A., Compañía de Cervecerías Unidas, Aldogones Hirmas S.A., S.A. Yarur Manufacturas Chilenas de Algodón, Tejidos Caupolicán S.A., Rayón Said Industrias Químicas S.A., Textil Progreso S.A., Paños Oveja Tomé S.A., Rahonhil Industria Nacional de Rayón S.A., Lanera Austral S.A., Textiles Banvarte S.A., Compañía Industrial El Volcán S.A., Fábrica Nacional de Loza de Penco, Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A., Compañía Sudamericana de Vapores S.A., Compañía General de Electricidad Industrial, Compañía de Petróleos de Chile, Compañía Industrial, Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, Compañía Consumidores de Gas de Santiago, Manufacturera de Metales S.A. (MADEMSA), Fábrica de Enlozados S.A., Compañía Industrias Chilenas CIC S.A., Cristalerías de Chile Sociedad Anónima, Compañía Molinos y Fideos Carozzi, Aceros Andes S.A., Carburo y Metalurgia S.A., Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, Sindelen S.A.I.C. Sociedad de Industrias Eléctricas Nacionales, Cementos Bio-Bio S.A., Gildemeister S.A.C., Industrias Químicas Du

Pont S.A., Pesquera Indo S.A., Aceites y Alcoholes Patria S.A., Industria Chilena de Soldadura S.A. (INDURA), Refractarios Lota Green S.A., Compañía Industrial Metalúrgica S.A., Compañía Nacional de Teléfonos Sociedad Anónima, Ferrilozza S.A., Industria de Metales, Compañía de Gas de Concepción, Manufacturera de Cobre S.A. (MADECO), Industria Chilena de Alambres (INCHALAM) S.A., Vidrios Planos Lirquén S.A., Fábrica de Pernos y Tornillos American Screw Chile S.A.; Compañía Standard Electric S.A.C., Naviera Interoceangas S.A., Aga Chile S.A. Representaciones, Indus Lever S.A.C.I., Compañía Industrial Hilos Cadena S.A., Phillips Chilena S.A. de Productos Eléctricos, Embotelladora Andina S.A., Coresa S.A. Unidades y Complementos de Refrig., S.A. de Navegación Petrolera, CHIPRODAL S.A.I., Cía. Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., Agencias Graham S.A.C., Fca. Nacional de Aceites S.A., Grace y Co. (Chile) S.A., Cía. Productora Nacional de Aceites S.A., Licores Mitjans S.A., Compañía Chilena de Tabacos S.A., Sociedad Industrial Pizarreño S.A., Bata Sociedad Anónima Comercial, Sociedad Industrial de Calzado (SOINCA), Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros (CATECU) S.A., Compañía Chilena de Fósforos, Cobre Cerrillos Sociedad Anónima, Fábrica de Envases S.A., Nieto Hnos. S.A.C.I. Consorcio, Confecciones Burger Sociedad Anónima Comercial e Industrial, Calderón Confecciones S.A.C., Confecciones Oxford S.A., Dos Alamos S.A.I. y C., Lechera del Sur Sociedad Anónima Llanquihue, ELECTROMAT S.A. Fca. de Materiales Eléctricos, Industrias Textiles Pollak Hnos. y Cía. S.A., Fca. de Paños Continental S.A., Comandari S.A. Hilos y Paños de Lana, Cía. de Tejidos El Salvador, Sociedad Anónima Comercial Saavedra Benard., Laja Crown S.A. Papeles Especiales, Elaboradora de Productos Químicos Sintex S.A., OXIQUM Ltda., Farmoquímica del Pacífico S.A., Empresa Pesquera EPERVA S.A., Maderas y Sintéticos S.A. (MASISA), Maderas Prensadas y Pinos de Cholguan S.A., Sociedad Productores de Leche S.A.”.

El señor Valente.— ¿Por qué se nacionaliza la Compañía de Teléfonos?

Uno de los monopolios extranjeros más tenebrosos que operan en nuestro país es el de la International Telephone and Telegraph, por intermedio de su filial la Compañía “Chilena” de Teléfonos, actualmente intervenida.

Conozcamos las razones que tiene el Gobierno Popular para estatificar esta empresa, dadas a conocer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el Interventor don Jaime Schatz, en la sesión octava, de 11 de mayo de 1972.

Escasa inversión y ganancias colosales

“El total de la internación de capital hecha al país por la ITT para la Compañía de Teléfonos desde la fundación de esta empresa, en 1930, hasta ahora, es de únicamente unos 30 millones de dólares. El último aporte se hizo en marzo de 1970.

“En cambio, la Compañía de Teléfonos, en el solo decenio 1961-1970, ha declarado utilidades de 118 millones de dólares y ha remesado al extranjero, por dividendos, por intereses pagados a la propia ITT de Nueva York, por intereses pagados a compañías asociadas a la ITT, por intereses pagados a

bancos extranjeros, por honorarios técnicos, y otros conceptos, la suma de 80 millones de dólares.

“No obstante ser estas cifras bastante elocuentes, lo que la ITT esperaba conseguir en Chile, a partir de 1972, era mucho más.

“Hasta 1957, las utilidades anuales de la Compañía de Teléfonos, expresadas en su equivalencia en moneda norteamericana, fueron, en promedio, inferiores al millón y medio de dólares. En ese período se aplicó una cláusula del contrato-concesión que señalaba que la utilidad líquida que la Compañía tenía derecho a percibir sería hasta un 10 por ciento de la inversión neta. En el convenio que se celebró en 1958 y que modificó ese contrato-concesión, se estableció que el nivel de esta utilidad anual sería en lo sucesivo de un 10 por ciento sobre la inversión. Es decir, la frase que señalaba un límite de hasta un 10 por ciento, se puso imperativa en un sentido de obtener un 10 por ciento sobre la inversión neta.

“En los hechos, este cambio, aparentemente insignificante, se tradujo en una rápida elevación del monto de las utilidades anuales de la empresa. En 1959 fueron superiores a los 5 millones de dólares; en 1965 subieron a 12 millones de dólares y en 1970 alcanzaron a más de 16 millones de dólares. Estas cifras son las que ha proporcionado la propia Compañía en los balances, y que han sido objetadas por Impuestos Internos y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, por lo que están siendo materia de una investigación”.

La parte del león

“Posteriormente, en el año 1967, se celebró un nuevo convenio del Estado chileno con la CORFO para la ampliación del servicio telefónico, con la participación de CORFO en el capital social de la empresa y con la capitalización de la mayor parte de las utilidades hasta el año 1971. De acuerdo con el aumento de la inversión neta y con esta cláusula absurda de garantizar una utilidad anual del 10 por ciento sobre esa inversión, a partir de 1971, la Compañía habría tenido asegurada una ganancia líquida del orden de los 20 millones de dólares, si se hubiera mantenido la política ya tradicional de aplicar a los servicios telefónicos tarifas elevadísimas que hicieran posible tal volumen de utilidades, por más deficiente que fuese el manejo de la empresa”.

“Proyectando las utilidades hasta el final del plazo estipulado en el contrato-concesión, es decir, hasta el ejercicio correspondiente a 1979, con un crecimiento de la inversión neta igual al de los últimos años, de un 3% anual, la utilidad total de la empresa en el período 1971-1979 habría sido del orden de los 270 millones de dólares.

“Como la ITT tiene, en la actualidad, una participación del 63% en el patrimonio de la Compañía, sus expectativas de ganancias, por este solo concepto, para el período 1971-1979, ascendían a 170 millones de dólares. Esto es casi seis veces el total del capital fresco internado al país en toda la historia de la Compañía.

“Estas cifras no incluyen otros ítem que también han significado utilidades para la ITT por su participación en la Compañía de Teléfonos de Chile”.

“Señor Presidente, la información del interventor se extiende aún una página más. Para no tener que leerla, solicito que se inserte en el texto de mi discurso.

El señor Papic (Vicepresidente).— Oportunamente, cuando haya quórum en la Sala, la someteré a votación, señor Senador.

—El texto de dicho documento, que se acuerda insertar con posterioridad, es el siguiente:

“Pongo, por ejemplo, el significado de los gastos financieros.

“La Compañía, a pesar de la obligación establecida en el contrato, no estableció nunca el capital suficiente de explotación. Esta situación fue perfectamente calculada por la propia ITT, ya que en esta forma la empresa ha debido recurrir a un creciente endeudamiento en el extranjero”.

La ITT golpista y estafadora

“Y los beneficiados con esta política han sido la propia ITT y otras empresas vinculadas a ella, más un grupo de bancos de los Estados Unidos, los que han percibido intereses con tasas superiores a las normales en el mercado financiero norteamericano, que en algunos casos llegaban al 12% anual.

“Por esta vía, la ITT y otras empresas se han llevado del país, como ya señalé anteriormente, aproximadamente 54 millones de dólares. Como en 1971 los gastos financieros de la Compañía fueron de más de 7 millones de dólares, puede deducirse la importancia de este rubro hasta el término pactado del contrato-concesión, de haberse mantenido esa política. Las proyecciones de este rubro para 1972-1979, aplicando la tasa media de incremento registrada en los últimos años, habría permitido un gasto financiero total de unos 140 millones de dólares, el cual habría ido a favorecer fundamentalmente a la ITT y a sus asociados.

“Es por este camino por donde llegamos a establecer con meridiana claridad el móvil que impulsaba e impulsó a la ITT a fraguar toda clase de complot contra nuestro país y el Gobierno Popular.

“Evidentemente, no hemos tomado todas las cifras relativas a las ganancias que obtenía la ITT en la Compañía de Teléfonos de Chile; tampoco me detendré, en esta ocasión, en todas las verdaderas trampas que existen en los métodos de contabilidad impuestos en la Compañía, ni a la fabulosa estafa perpetrada por la ITT en perjuicio de Chile, al elevar descaradamente los precios de los equipos que ella misma y sus filiales vendían a la empresa local.

“La ITT en toda su vasta y compleja estructura mundial es, a la vez, fabricante de equipos telefónicos, vendedora de ellos, compradora y usuaria de los mismos. Esto le permitía, y así lo hizo, ciertamente, fijar a estos equipos precios muy superiores a los cotizados por otros fabricantes”.

Tentáculos para dominar nuestra economía

“He puesto a disposición de la Comisión varios documentos de los archivos de la Compañía de Teléfonos que prueban que la ITT la utilizaba abiertamente como una agencia suya para detectar, materializar y manejar nuevos

negocios en nuestro país, para aumentar su grado de penetración y dominio dentro de la economía chilena. Claro es que todo esto lo hacía sin gastar un centavo, pues en tales gestiones se utilizaba personal, instalaciones, materiales y dinero de la Compañía de Teléfonos de Chile; es decir, toda esa labor era financiada por nuestro país a través de las tarifas aplicadas a los servicios telefónicos.

“La nueva serie de documentos que obran en poder de la Comisión constituyen categóricos testimonios de que la ITT consideraba la posibilidad de introducirse en nuevos negocios en este país, como por ejemplo, en las industrias de la celulosa, equipos electrónicos y eléctricos, de la manufactura del cobre (MADECO y Cobre Cerrillos), de la fabricación de neumáticos, del salitre y hasta de la construcción de viviendas económicas y en la industria de la sal.

A mejores garantías, peor atención

“A pesar de los irritantes privilegios de que gozaba la ITT en Chile y de los increíbles abusos cometidos por ella, la Compañía de Teléfonos estuvo muy lejos de proporcionar un servicio eficiente. A todo el país le consta la escasez de aparatos telefónicos, la larga demora, demora a veces indefinida, para obtener la instalación de un teléfono en una residencia, en una fábrica y hasta en una población o clínica y, frecuentemente, la mala calidad de los servicios.

“Baste señalar, por ejemplo, que en Chile hay 3,7 teléfonos por cada 100 habitantes, mientras que en Estados Unidos hay 56,4; en Suecia, 53,7; en Australia, 29,3; en Uruguay, 7,2; en Argentina, 6,9. El promedio mundial es 7,1 por cada 100 habitantes. Es decir, estamos en la mitad del promedio mundial”.

El señor Valente.- El Gobierno Popular puso fin a este vergonzoso despojo, interviniendo la Compañía y proponiendo al Congreso Nacional la expropiación de los bienes de la ITT en nuestro país.

La empresa tiene 1.825 accionistas, pero 10 de ellos controlan el 93% del capital.

Empresas creadas por CORFO que integrarán el área social y mixta

Analizamos, a continuación, la situación de las empresas creadas por la Corporación de Fomento con sus recursos propios, incautadas por los capitalistas privados monopolistas, que el Gobierno Popular está recuperando para constituir la propiedad social.

Compañía de Aceros del Pacífico

Fue organizada por la Corporación de Fomento en 1946. El costo de las instalaciones iniciales fue de 80 millones de dólares. Los accionistas privados aportaron sólo 15 millones de dólares (18,75%); la CORFO, 65 millones (81,25%) en capital fresco y préstamos externos con su aval y garantía.

2732 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

Es una actividad industrial fundamental para el desarrollo de la siderurgia y el aprovechamiento de nuestra riqueza fierrera.

Estando en pleno y exitoso funcionamiento, se apropiaron de esta empresa estatal los grupos financieros Banco de Chile, Banco Sudamericano, Banco del Trabajo, Banco Edwards, el grupo Matte-Alessandri y la empresa imperialista Kennecott Corporation, que se constituyó en poderosa accionista de la CAP.

El Gobierno de la Unidad Popular recuperó esta empresa estatal de manos de los monopolistas privados nacionales y extranjeros, abriendo poder comprador para sus acciones e incorporándola al área social de la economía.

Papel y celulosa

a) Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones

Es uno de los monopolios más grandes y poderosos de Chile.

Está formada por 14.834 accionistas. Diez de ellos detentan el 30% del capital. Sin embargo, nueve de estos diez accionistas son otras sociedades que pertenecen al mismo grupo financiero que domina sin contrapeso la empresa: el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri. Es decir, un pequeño grupo de empresarios con poco capital o con pequeños aportes maneja gran cantidad de dinero aportado por pequeños y medianos accionistas que no tienen ingerencia alguna en la administración de la sociedad.

CORFO ha garantizado en el exterior operaciones financieras de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones por 26 millones 630 mil dólares.

La Compañía depende tecnológicamente de la empresa norteamericana Crown.

También estuvo en la mira de la ITT que intentó apoderarse de esta industria y de toda la actividad relacionada con la celulosa y el papel.

El Gobierno Popular incorporará esta empresa al área social por ser de importancia decisiva para el desarrollo industrial del país.

b) Laja Crown, papeles especiales

CORFO otorgó créditos y cauciones por 5 millones 470 mil dólares para ampliaciones industriales.

Sólo dos accionistas controlan el 100% del capital.

Está controlada por el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

Integrará el área social.

Industria de la construcción

a) Galerías e Industrias Polpaico

Organizada en 1947 por CORFO, con un aporte de 25 mil dólares que aumentó hasta 355 mil en 1954.

En 1960 se apodera de esta industria el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

El Gobierno ha incorporado esta empresa al complejo cementero.

b) Fábrica de Cemento Melón

Organizada en 1948 con un aporte de CORFO ascendente a 700 mil dólares.

En 1951 se apoderó de ella el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri. El Gobierno Popular recuperó esta industria para el Estado.

c) Cemento Bío-Bío

Autorizada en 1958, inició su producción industrial en 1962. CORFO avaló la adquisición de maquinarias comprometiendo créditos por 1.500.000 dólares. Es de propiedad de la empresa H. Briones y Cía. Está ligada al grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

Se incorpora al área social.

d) Sociedad Industrial Pizarreño

CORFO concedió créditos y cauciones por 630 mil dólares.

Está integrada por 1.764 accionistas, 10 de los cuales controlan el 53% del capital.

Domina esta empresa el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri. Incorporada al área social

Sociedad de Lino La Unión

Fue la primera hilandería de lino del país, organizada por CORFO en 1939, con un aporte inicial de dos millones de pesos, equivalente a 103 mil dólares de la época. Sirvió, además, como poder comprador permanente para las cosechas de lino de las provincias de Valdivia y Llanquihue.

La CORFO continuó entregando aportes equivalentes a 212 mil 500 dólares más.

En 1952 esta empresa estatal fue transferida al sector privado.

El Gobierno no la incluye entre las empresas del área social.

Industria Nacional de Neumáticos, INSA

En 1941 fue organizada por CORFO, aportando ésta 10 millones de pesos, equivalentes a 500 mil dólares de ese año. Los aportes de CORFO llegaron al millón de dólares.

Los empresarios privados, concretamente los grupos financieros Banco de Chile, Banco Sudamericano, Matte-Alessandri y Edwards, se apropiaron de esta

empresa estatal. El Gobierno Popular recupera esta industria para la economía del país.

Manufacturas de Metales S.A. (MADEMSA)

En 1937 fue organizada por un grupo de empresarios privados. En 1941, CORFO debió iniciar aportes para evitar la quiebra de la empresa por desfianciamiento.

Las entregas de capital por CORFO alcanzaron a 200 mil dólares de la época, que permitieron vitalizar económicamente la empresa y ampliar la planta industrial.

En 1946, los aportes de CORFO fueron transferidos a los empresarios privados del grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

Actualmente, la empresa tiene 1.487 accionistas, diez de los cuales controlan el 53 por ciento del capital.

El Gobierno recupera esta empresa y la incorpora al área social.

Farmo-Química del Pacífico

Se constituyó en 1942 con un aporte de CORFO de 20 millones de pesos, equivalentes a un millón 200 mil dólares de la fecha.

En 1954, se apoderaron de la empresa estatal los grupos económicos Banco de Chile, Banco Edwards, Matte-Alessandri.

Tiene 929 accionistas, 10 de los cuales controlan el 70 por ciento del capital.

El Gobierno ha dispuesto recuperar esta empresa para la economía del país, incorporándola al área social.

Vinos Chile

Fue organizada en 1942 con un aporte inicial de CORFO de 380 mil dólares. En 1959, el aporte de CORFO alcanzó a dos millones de dólares, y ese mismo año esta empresa estatal cayó en poder del grupo económico privado de Agustín Edwards.

No pasa al área social.

Fábrica de Materiales Eléctricos ELECTROMAT

En 1943 CORFO organizó esta empresa con un capital de cinco millones de pesos (alrededor de 250 mil dólares en esa época).

Produce ampolletas, enchufes, interruptores, cajas de derivación, aisladores y toda línea de artefactos y conductores eléctricos.

En 1953 se apoderó de esta empresa estatal la empresa privada con capitales nacionales y extranjeros.

Está vinculada al grupo Matte-Alessandri.

Tiene 241 accionistas, diez de los cuales dominan el 87 por ciento del capital. El Gobierno recupera esta industria para el Estado.

Compañía Minera Cerro Negro

CORFO aportó en 1948, la suma de 13 millones 500 mil pesos equivalentes entonces a 675 mil dólares. Hasta 1958 los aportes de CORFO alcanzaron a cuatro millones 125 mil dólares; logrando con ello controlar el 51,5 por ciento del capital.

En 1960 se apoderó de esta empresa estatal, el grupo económico del Banco de Crédito e Inversiones-Yarur.

El Gobierno ha decidido recuperar esta empresa minera, que ya está intervenida.

Manufactura de Cobre (MADECO)

Fue organizada en 1944 por la Corporación de Fomento y capitalistas privados. El aporte inicial de CORFO fue de 14 millones de pesos (700 mil dólares), financiando también los estudios y aplicación de nuevas tecnologías. En 1958 el aporte de CORFO alcanzó a tres millones de dólares.

Ese mismo año, se apoderaron de esta empresa los grupos financieros privados Banco Sudamericano-Matte-Alessandri; Banco de Chile y Banco Nacional del Trabajo.

Se recupera esta industria para el área social.

Mecánica Industrial

CORFO contribuyó a su organización en 1941, aportando 120 mil dólares, hasta llegar a 160 mil en 1944.

En 1946 se transfirió a los capitalistas privados.

Controla la industria el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

No se incorpora al área social.

Corporación de Radio de Chile

CORFO organizó esta empresa en 1941 sobre la base a la ex R.C.A. Víctor. El aporte inicial de CORFO alcanzó a 500 mil dólares ese año; en 1949 aumentó el capital en un millón de dólares más y en 1958 en otro millón de dólares.

Ese mismo año se apoderó de la industria la empresa privada, quedando en manos del grupo Banco Sud Americano-Banco Edwards; Matte-Alessandri.

El Gobierno Popular estatificó esta empresa, constituyendo la I.R.T., incorporada al área estatal.

Industria Nacional Rayón, Rayonhill

Entre 1946 y 1948, etapa de su instalación, CORFO obtuvo del EXIMBANK un crédito por 1 millón 200 mil dólares para iniciar las actividades industriales.

La empresa fue controlada por los grupos económicos Banco de Chile y Banco del Trabajo.

Tiene 1.732 accionistas, 10 de los cuales controlan el 65 por ciento del capital.

La empresa se recuperará para la propiedad social.

Siam di Tella S.A.

En 1941 CORFO hizo un aporte inicial de 4 millones 50 mil pesos (equivalentes a 204 mil dólares). En 1953 los aportes de CORFO alcanzaron a 686 mil dólares.

En 1960 se apropió de esta empresa el capital privado.

No pasa al área social.

Complejo Pesquero

Quizá si la demostración más tétrica del asalto que la empresa privada monopolista efectuó a los recursos y al presupuesto de la CORFO lo constituya la formación del Complejo Pesquero en el norte del país; ello es, también, una evidencia de la incapacidad empresarial de los capitalistas privados monopolicos.

El aporte de CORFO para habilitar y urbanizar los terrenos, para financiar estudios, habilitar caletas, otorgar créditos, cauciones y avales para la adquisición de las maquinarias, implementos y su instalación, ascendió a 80 millones de dólares entre 1960 y 1963.

Esta actividad industrial alcanzó gran auge hasta 1965. Los empresarios privados, a costa de los recursos de la CORFO obtuvieron ganancias súbitas e increíbles. La mayoría de ellos sin siquiera aportar capital. En el norte se calificó esta irritante formación de fortunas como el nacimiento de la oligarquía pesquera.

La industria entró en crisis en 1965-1966. Los empresarios privados recurrieron a la CORFO, obteniendo más préstamos y mayores recursos para "integrar" industrias concentrando ahora, en pocas manos, casi todo el poder industrial pesquero.

Cada vez que la actividad florecía, las ganancias engrosaban las fortunas de los empresarios privados. En los años o en los ciclos críticos, las pérdidas eran absorbidas por la CORFO.

La concentración de la industria en 5 ó 6 grupos económicos integrados, favoreció a los siguientes empresarios privados:

1. Grupo Guanaye, con 87 accionistas. Diez de ellos controlaban el 74,5 por ciento del capital.

Dominaban el grupo los clanes financieros Banco Sudamericano, Matte-Alessandri, Banco del Trabajo.

Se constituyó en 1962, con un capital de 324 mil escudos, recibiendo de CORFO, ese mismo año, aportes por 516 mil escudos.

Hasta 1969 este grupo había recibido de CORFO, en préstamos, aportes y bonificaciones, 12 millones de escudos.

2. Grupo Industone. Formado por capitales sudafricanos y el grupo Edwards. Aparte de las elevadas utilidades logradas, recibió aportes y bonificaciones de CORFO, superiores a los 10 millones de escudos.

3. Grupo Indo. Declaró –no enteró– un capital de 4 millones de escudos en 1962. El mismo año CORFO le otorgó préstamos por 530 mil escudos más 1 millón de dólares.

Hasta 1969, había recibido de CORFO ayuda en bonificaciones y aportes por 18 millones de escudos.

Controlaban la empresa el grupo Edwards y los hermanos Pubill.

Diez de los 130 accionistas dominaban el 99,3% de capital.

4. Empresa Pesquera Eperva.

Es tal vez la más poderosa empresa del sector pesquero. Tiene 1.205 accionistas; diez de ellos controlan el 66% del capital.

Entre 1962 y 1966, las ganancias líquidas de esa empresa alcanzaron a 13 millones de escudos. No obstante ello, sólo por bonificaciones Eperva había recibido, hasta 1969, más de 12 millones de escudos.

Dominan la industria los grupos Banco Sud Americano, Matte-Alessandri, Banco Español-Chile, Grace y Compañía.

5. Alimar Norte. En 1962 declaró un capital de 525 mil escudos, recibiendo ese mismo año, aportes de CORFO por 400 mil escudos y 75 mil dólares.

Por concepto de bonificaciones había recibido hasta 1969, más de 9 millones de escudos.

Pertenecía a capitales norteamericanos y canadienses.

Por una muy deficiente administración de esas empresas, y por la escandalosa repartición de los recursos estatales en favor de los capitalistas privados, CORFO debió intervenirlas, revitalizarlas económicamente, elevando en forma eficiente y con buen éxito su capacidad productora.

La oligarquía pesquera cuesta a la economía del país, en aportes, créditos, bonificaciones y otros valores, más de 800 millones de escudos.

Todas las empresas pesqueras se incorporan al área social.

Fábrica de Pernos American Screw

El crédito de CORFO ascendió a 170 mil dólares. Está dominada sólo por tres accionistas.

Es del grupo Banco Sud Americano-Matte-Alessandri.

Se incorpora al área social.

Laboratorio Bayer y Merck S.A.

Al ser disueltas estas empresas durante la Segunda Guerra Mundial, CORFO adquirió sus bienes e instalaciones formando la empresa Industrial Químico-Farmacéuticas-CORFO, mejorándose con notable auge la línea de producción de medicamentos y productos químicos.

Hasta 1954 el aporte de CORFO llegó a 2 millones de dólares.

Ese mismo año los capitalistas privados extranjeros recuperaron esta industria.

Se estudia con sus dueños la estatificación de la empresa para que integre el complejo farmacéutico estatal.

Sociedad Industrial de Colorantes

Se formó con un aporte de CORFO que equivalía al 25% del capital. En 1942 CORFO aumentó su aporte a 7 millones de pesos (350 mil dólares).

Posteriormente, capitalistas norteamericanos reorganizaron la industria apoderándose de ella.

No se considera su incorporación al área social.

Complejo textil

Está integrado por:

1.- Manufacturas Sumar. Tiene 109 accionistas. Los 10 mayores controlan el 99,1% del capital. Grupos dominantes: Banco Sud Americano, Banco Edwards, Matte-Alessandri.

2.- Algodones Hirmas. Tiene 16 accionistas; 10 de ellos controlan el 99,9% del capital. Grupo dominante: Banco Sud Americano, Matte-Alessandri, Banco del Trabajo.

3. Textil Progreso. Con 627 accionistas. El 81% del capital está en manos de 10 accionistas. Controlada por el grupo Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Yarur.

4.- Paños Oveja Tomé. Sus accionistas son 2.475. Los diez mayores dominan el 66,5% del capital. Dominada por el grupo Banco Sud Americano-Matte-Alessandri, Banco Español-Chile.

5.- Lanera Austral. Sólo 5 accionistas dominan el total de su capital.

Controlada por el grupo Banco del Trabajo.

6.- Textiles Banvarte. Seis socios controlaban todo el capital de la empresa. Empresa familiar vinculada al grupo Banco Sud Americano-Matte-Alessandri. Al 31 de diciembre de 1970, el balance general acusaba una deuda de E° 1.436.500 con la Banca Alemana, con el aval y garantía de CORFO.

Todas esas industrias están intervenidas y pasan al área social de la economía integrando el gran complejo textil estatal.

Y lo mismo sucede en la Compañía de Tejidos el Salvador COTESA, Fábrica de Paños Continental, Compañía Industrial Hilos Cadena y la Sociedad Rayon-Said Industrias Químicas.

Industrias Mecánicas Reunidas

Formada por CORFO en 1947 con aporte de 10 millones 522 mil pesos iguales a 525 mil dólares de entonces.

En 1950 pasó a poder de empresarios privados.

No está considerada su inclusión en el área privada.

Compañía Industrial El Volcán

CORFO concedió a esta empresa diversos préstamos a largo plazo en moneda nacional y extranjera para ampliaciones industriales. El saldo de los préstamos al 30 de junio de 1971 alcanzaba a E° 2.544.400 igual a un tercio del capital pagado.

Tiene 428 accionistas. El 53,3% de capital está controlado por 10 accionistas.

Es del grupo Banco Sud Americano-Matte-Alessandri.

Se incorpora al área social.

Compañía Industrias Chilenas CIC

CORFO aportó créditos en moneda nacional y otorgó caución solidaria para préstamos externos. El saldo de éstos préstamos en dólares y francos, alcanzaba, en moneda nacional al 30 de junio de 1971, a E° 1.336.600. Tiene 2.456 accionistas. Diez de ellos controlan el 47,2% del capital. Pasó al área social.

Y lo mismo ocurre con la Compañía de Consumidores de Gas (GASCO), Compañía Nacional de Teléfonos, Compañía Standard Electric, Philips Chilena S.A., todas las empresas del área forestal, la Sociedad Lechera Nacional (SOLECHE), otras empresas lecheras, la Compañía de Productos Alimenticios (CHIPRODAL), agencias distribuidoras, Indus Lever S.A., Fábrica Nacional de Loza (FANALOZA), Empresas Carboníferas, Empresas Navieras, etcétera.

Ruego que el detalle de estas páginas de mi intervención se incluya también en la versión, a fin de mantener el orden de ella.

El señor PAPIC (Vicepresidente).— En el momento oportuno, se requerirá acuerdo de la Sala en tal sentido.

El documento cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente:

Compañía de Consumidores de Gas GASCO

CORFO tiene el 18% del capital. El 82% está controlado por capitalistas privados.

El 10% de los accionistas controla el 52% del capital.

2740 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

GASCO mantiene una deuda con ENAP cercana a los 30 millones de escudos.

Controla esta empresa el grupo Banco Edwards.

Se incorpora la empresa al área estatal.

Compañía Nacional de Teléfonos

La CORFO otorgó préstamos y avales para financiar esta empresa controlada por el grupo Matte-Alessandri.

Al 31 de diciembre de 1971 la deuda en moneda nacional y extranjera alcanzaba a E° 2.800.000 que es casi un tercio del capital.

Tiene 1.632 accionistas y 10 de ellos controlan el 41,3%.

Esta empresa se estatiza.

Compañía Standard Electric

Diez accionistas controlan el 100% del capital de la empresa que alcanzaba a E° 1.500.000 al 31 de diciembre de 1970. El capital más reservas era, en igual fecha, de 24 millones 580 mil escudos.

Tiene aval de CORFO para una deuda exterior de 1 millón 105 mil dólares. Convertido a moneda nacional esta cantidad equivale al 52% de su capital más reservas.

Se incorpora al área social.

Philips Chilena S.A.

Los aportes de CORFO llegan a 590 mil dólares. Cinco accionistas controlan todo su capital.

Pasa a formar parte del área social.

Area Forestal

Por administración deficiente se dispuso que CORFO recuperara las empresas privadas forestales.

La situación de algunas de ellas era la siguiente:

a) Sociedad Maderera del Sur.- Fue formada por CORFO en 1941 para la elaboración de diversos tipos de madera terciada. El aporte fue de 5 millones de pesos (250 mil dólares). Completada su instalación y asegurada su estabilidad económica se apoderan de ella, en 1954, los inversionistas del sector privado.

b) Industrias Forestales.- Organizada y financiada por CORFO pasó al control de empresarios privados. No obstante CORFO continuó entregando aportes y vitalizando sus finanzas.

La deficiente administración llevó a esta empresa al colapso financiero.

CORFO debió hacerse cargo de ella y responder por deudas contraídas por INFORSA que ascienden a 62 millones de escudos (acuerdo 9370 del 2 de diciembre de 1969).

Dominaba esta empresa el grupo Banco Edwards.

c) Bosques e Industrias Madereras BIMA.- Al igual que INFORSA, fue organizada por CORFO con importantes aportes para ser entregada, posteriormente, a los empresarios privados. Por graves deficiencias en su funcionamiento debió ser recuperada por CORFO previa inversión de 41 millones 490 mil escudos, haciéndose cargo de una deuda con el Export Import Bank y con Morgan Guaranty Trust Company (acuerdo 9861 de 21 de agosto de 1970).

Controlaba esta industria el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

d) Impregnadora de Maderas.- En 1947 fue organizada esta empresa con aportes de CORFO y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Entre 1947 y 1958 los aportes de CORFO alcanzaron a 1 millón 200 mil escudos del año 1960.

Capitalistas del área privada se hicieron dueños de esta empresa que ahora se recupera para el Estado.

e) Explotadora de Maderas de Chile.- Se organizó en 1941 por CORFO para fomentar el comercio de exportación de maderas chilenas. Participaron en esta sociedad 17 empresas productoras de maderas. CORFO aportó el 50% del capital el que transfirió en 1951 a los capitalistas privados.

f) Maderas Prensadas Cholguan.- CORFO aportó créditos por 870 mil dólares. En manos de empresarios privados sufrió un colapso financiero que la llevó prácticamente a la quiebra.

Diez de sus 11.902 accionistas controlaban el 32% del capital. La mayoría son pequeños accionistas que perdieron o estuvieron a punto de perder sus aportes por la deficiente administración del capital privado.

Estaba controlada por el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

g) Maderas y Sintéticos MASISA.- Los aportes crediticios de CORFO alcanzan a 650 mil dólares: Tiene 3.465 accionistas; diez de ellos dominan el 61% del capital.

Todas estas empresas han sido incorporadas al complejo maderero estatal recuperándolas CORFO para el área social de la economía.

Sociedad Lechera Nacional, SOLECHE

La difícil situación financiera de la Planta Lechera Suprema y la necesidad de asegurar la producción y abastecimiento de este producto hizo que CORFO formara la Sociedad Lechera Nacional con la Empresa de Comercio Agrícola. El aporte de CORFO fue de 900 mil escudos.

Otras empresas productoras de leche también se incorporan al área social. Entre ellas:

a) Sociedad Productora de Leche.- Con 264 accionistas, 10 de ellos dominaban el 82,4 por ciento del capital.

b) Lechera del Sur.- Con 1.729 accionistas, de los cuales 10 controlaban el 35 por ciento de su capital.

Compañía Chilena de Productos Alimenticios, CHIPRODAL

Los aportes, créditos y cauciones de CORFO a esta empresa alcanzan al millón 730 mil dólares.

Está formada por 17 accionistas; el 95,5 por ciento del capital está en poder de 10 de ellos.

Es la más importante industria productora de alimentos.

Se incorpora al área social.

Estaba en manos del grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

Agencias Distribuidoras

La necesidad de asegurar un abastecimiento normal para los consumidores, evitando la especulación y el acaparamiento dio origen a la Empresa Distribuidora Nacional (DINAC).

DINAC se organizó en base a Weir Scott llevada a la quiebra por los capitalistas privados.

A ella se están incorporando otras empresas privadas en la distribución como:

a) Agencia Graham, con 283 accionistas. El 49 por ciento de su capital está dominado por 10 de ellos.

b) Saavedra Benard, con 656 accionistas. Los 10 mayores controlan el 59,4 por ciento del capital.

c) Gildemeister S.A.C., con 93 accionistas. El 99 por ciento de su capital está en manos de 10 de ellos.

Indus Lever S.A.

CORFO aportó créditos por 1 millón 200 mil escudos más 660 mil dólares para la ampliación de sus plantas industriales.

Sus seis accionistas dominan todo el capital social.

Domina la empresa el grupo Banco Edwards.

Ingresa al área social.

Fábrica Nacional de Loza (FANALOZA)

Los aportes de CORFO llegaron en 1966 a 2 millones 200 mil escudos.

Está formada por 2.629 accionistas. El 40 por ciento del capital está controlado por 10 de ellos.

Es una empresa vinculada al grupo Banco de Chile.

Se incorpora al área social.

Empresas carboníferas

La CORFO ha debido intervenir para vitalizar las empresas privadas explotadoras de carbón y evitar su quiebra o paralización.

Es el caso, por ejemplo, de la:

1.- Compañía Carbonífera de Pilpilco.- Sucedió en 1941 a la Sociedad Legal Carbonera de Pilpilco, empresa privada, CORFO aportó el 58,5 por ciento del capital.

2.- Compañía Carbonera de Colico Sur.- Para salvar de la quiebra a la empresa privada Sucesión Eugenio García la CORFO, junto con la ex Caja de Crédito Minero (ENAMI) formaron esta sociedad. El aporte de CORFO correspondió al 75 por ciento del capital social.

3.- Compañía Carbonera Victoria de Lebu.- Reemplazó a la empresa privada Sucesión B. Naino Talavera en 1947. Se constituyó con aportes de CORFO, ex Caja de Crédito Minero y Sucesión Naino Talavera.

CORFO aportó el 80 por ciento del capital.

4.- Compañía Carbonífera de Lota y Schwager.- CORFO proporcionó capitales para su desarrollo y funcionamiento y garantizó créditos en el exterior para modernizar la maquinaria, instalaciones y racionalizar la producción por agotamiento de las reservas económicamente explotables. Esta inversión, avallada por CORFO, alcanzó en 1960 a 27 millones de escudos y 21 millones 800 mil dólares.

Todas estas empresas están en el área social.

Empresas navieras

Para formar la flota mercante nacional se necesita multiplicar el número de naves y el tonelaje de transporte.

Los capitalistas privados que controlaron esta vital actividad económica recibieron del Estado toda clase de apoyo legal y de ayuda extranjera con el compromiso de impulsar el desarrollo naviero y de atender el cabotaje y tráfico de pasajeros en nuestro litoral.

En 20 años de actividad de estas empresas el número de barcos decreció en 39 por ciento. El trabajo aumentó levemente, tan sólo en 1,25 por ciento por año. El transporte de pasajeros por la vía marítima se redujo, en igual lapso, en 62 por ciento.

A la inversa, las empresas de navegación han logrado importantes ganancias a costa de la pérdida física, de tan vital actividad económica.

1.- Compañía Chilena de Navegación Interoceánica.- Se inició con un capital equivalente a 16 mil escudos. Entre 1962 y 1966 las ganancias alcanzaron a 2 millones 616 mil escudos. Está formada por 1.143 accionistas. Diez de ellos controlan el 60 por ciento del capital.

Domina la empresa el grupo Banco de Chile y Banco Edwards.

2.- Compañía Sudamericana de Vapores.- Se inició con un capital equivalente a 500 mil escudos. Entre 1962 y 1966 las ganancias alcanzaron a más de 34 millones de escudos.

Está formada por 5.795 accionistas. Los 10 mayores dominan el 45 por ciento del capital.

Está controlada por el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

3.- Naviera Interoceangas.- También se incorpora al área social de la economía.

Tres accionistas dominan todo el capital de la empresa.

Está controlada por los grupos Banco de Chile, Banco Edwards.

Y así, la mayoría de las empresas que se integrarán al área social, tienen las mismas características: han recibido de CORFO préstamos, aportes y ayuda financiera masiva para su funcionamiento y existencia.

El Estado subvenciona a la empresa privada

El señor Valente.- Los capitalistas privados y extranjeros siempre se ingeniaron para dictar leyes que les concedieran toda clase de privilegios tributarios. Los gobiernos empresariales y reformistas crearon, de esta manera, una eficaz forma de subvencionar a las empresas privadas, a costa de los recursos estatales.

Una breve reseña de la prolífica legislación tributaria promonopólica da una idea de la envergadura de esta "ayuda" estatal para un grupo reducido de hombres de negocios, que prosperan y se enriquecen con el sacrificio de todos los chilenos.

1.- Industrias manufactureras. No pagan o no pagaban impuestos por los dividendos que reparte la sociedad a los socios, ni por las utilidades que obtenía una sociedad de la que formaban parte; tampoco pagaban los derechos e impuestos percibidos por las aduanas y los impuestos a la renta los pagaban disminuidos en proporción inversa al porcentaje de aumento de la producción.

Estas franquicias benefician a la mayoría de las industrias manufactureras.

2.- Empresas explotadoras de carbón. Estaban liberadas de pagar impuestos a la renta sobre las utilidades destinadas a estudios, prospecciones, etcétera, como también del pago de derechos aduaneros por la importación de maquinarias, repuestos, implementos, etcétera.

3.- Empresas navieras. No pagaban o no pagan impuestos a la renta y están liberadas de derechos de internación por los elementos, maquinarias y materiales que aportan para sus actividades; gozan de un sistema especial de amortizaciones, y simultáneamente les está permitido revalorizar sus bienes, naves y material a flote sin que a esta revalorización le afecten impuestos.

4.- Empresas exportadoras. Están liberadas del pago de impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos por los productos originarios de Chile que exporten. Esta liberación de impuestos alcanza también a los combustibles, energía eléctrica, lubricantes empleados en la producción y transporte de los productos hasta los puertos de embarque.

Por otra parte, el Fisco devuelve los impuestos, contribuciones y gravámenes que pagan las empresas exportadoras mediante el "draw-back".

5.- Empresas que elaboran cobre, hierro o acero. Están liberadas de pagar los impuestos y derechos de aduana, las contribuciones de bienes raíces, el impuesto a la producción y compraventa, impuesto a la renta que afecte a los dividendos, utilidades e intereses que paguen en Chile y en el extranjero.

6.- Empresas de la construcción. No pagan impuesto a las compraventas y prestaciones por los materiales y elementos destinados a la construcción de

viviendas que no excedan de 70m² de superficie; las remuneraciones pagadas a los constructores o empresas constructoras tampoco pagan impuestos. Aquellas empresas dedicadas exclusivamente, por cuenta propia o ajena, a construir viviendas económicas, no pagan impuestos a la renta; los socios o accionistas de estas empresas no pagan ninguna clase de tributos por las rentas, dividendos, beneficios, utilidades o participación que perciban. Tampoco pagan impuesto global complementario ni adicional.

7.- Empresas periodísticas. No pagan impuestos a la renta, a las prestaciones, de compraventa, cifra de negocios, ni derechos de aduana por la internación de maquinarias y elementos industriales.

8.- Empresas aeronavegación, comercial privada. No pagan derechos o impuestos de internación por la importación de aeronaves, sus partes, repuestos y equipos. Tampoco pagan impuesto sobre las utilidades y están exentas del pago de cualquier otro impuesto fiscal o municipal.

9.- Empresas pesqueras. No pagan impuestos, derechos y gravámenes aduaneros por la importación de maquinaria y elementos industriales, tampoco pagan impuestos a la compraventa, servicios o transferencias, ni el impuesto de timbres, estampillas y papel sellado. El impuesto a la renta lo pagan con una rebaja del 90%. Las utilidades que los socios reinviertan o reinvertían en la actividad pesquera no pagan impuesto global complementario. Las contribuciones de bienes raíces también las pagan rebajadas en 90%.

10.- Empresas distribuidoras de energía y combustibles. No pagan impuesto a la compraventa por el gas combustible que la empresa productora entrega a las distribuidoras.

11.- Empresas de transportes. También están favorecidas por diversas franquicias tributarias que las liberan de pagar determinados impuestos.

12.- Sociedades anónimas de inversiones mobiliarias. Son empresas que se forman para administrar, por cuenta de terceros, capitales para su inversión en valores mobiliarios. Los dividendos, intereses, utilidades y beneficios que distribuyen no pagan impuesto a la renta.

13.- Empresas forestales. No pagan impuesto a la renta, tampoco global complementario, por las rentas o participación de los socios o personas dedicados a esta actividad. Tampoco pagan impuesto sucesorio y los aumentos de avalúo de sus bienes raíces, terrenos, plantíos, instalaciones y construcciones no pagan impuesto de bienes raíces.

14.- Empresas agrícolas. Gozan de un sistema de tributación especial, a base de presunción de renta, según el avalúo del predio. En todo caso, la tributación es muy inferior a la que pagan los contribuyentes medianos y pequeños.

Y muchas otras franquicias para la gran mayoría de la actividad comercial e industrial monopólica.

El sistema de franquicia, constituye, como lo hemos adelantado, una subvención fiscal, con cargo al erario y, consecuentemente, gravoso para la inmensa mayoría de los contribuyentes.

Hay franquicias que son necesarias y convenientes para incentivar el desarrollo de determinada actividad. Hay franquicias que son injustas, abusivas y perniciosas. Su vigencia y aplicación sólo persiguen fortalecer la actividad mo-

nopólica y hacer de los grupos financiero-políticos poderosos bastiones opositores a toda forma de cambios revolucionarios que rompan las arcaicas estructuras económicas que hacen del nuestro un país dependiente, atrasado y subdesarrollado.

Sin la ayuda estatal no existiría el dominio del capital privado en nuestra economía.

Los gobiernos oligárquicos y reformistas que orientaron el proceso económico nacional dispusieron de todo el poder político y financiero del Estado para trabajar en beneficio de un puñado de capitalistas privados y de los poderosos monopolios extranjeros.

Esta confluencia de intereses hizo de los grupos familiares financiero-políticos una fuerza dominante en todas las actividades nacionales. No es exageración decir que, por décadas, casi todo el país trabajó para esos grupos. Los recursos del Estado, a través de la Corporación de Fomento, del Banco del Estado, del sistema crediticio, de los préstamos externos, de las rebajas o exenciones de impuestos, corrían por un solo y ancho cauce: el desarrollo apreciable de la empresa privada, la concentración del capital monopolista nacional, la creciente penetración del capital imperialista en nuestras fundamentales riquezas, la pauperización y el empobrecimiento cada vez mayor de los chilenos.

La “capacidad” industrial de creación de riqueza, de desinterés personal de los grandes empresarios privados en que tanto se insiste no pasa de ser un mito. Sin el cuantioso aporte estatal, la poderosa empresa privada actual no habría existido en Chile con el poderío que hoy sustenta. Más aún, las principales y mayores empresas monopólicas privadas actuales nacieron, como lo hemos demostrado, como empresas estatales en un primer intento de la Corporación de Fomento de crear un área social económica, frustrado –lamentablemente– por la coordinada y comprometida actitud antipatriótica de capitalistas, gobernantes reaccionarios y políticos aprovechadores.

A derrotar las causas de la miseria

Por eso las palabras del Presidente Allende, en su reciente Mensaje ante el Congreso Nacional, golpean con precisión en la conciencia ciudadana:

“Una estructura económica caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción fundamentales, concentrados en un grupo reducido de empresas en manos extranjeras, y de un número ínfimo de capitalistas nacionales, es la negación misma de la democracia. Un régimen social es auténticamente democrático en la medida que proporciona a todos los ciudadanos posibilidades equivalentes, lo que es incompatible con la apropiación, por una pequeña minoría, de los recursos económicos del país. Avanzar por el camino de la democracia exige superar el sistema capitalista, consubstancial a la desigualdad económica”.

Y reafirmaba el compañero Presidente sus conceptos con las siguientes expresiones:

“El Gobierno de los trabajadores está en dura lucha contra el poderío del capital extranjero y contra los grandes capitalistas internos que actuaban en

simbiosis con aquél. Esta lucha, hasta ahora, ha sido incruenta; son sus armas la unidad organizada de los trabajadores, la conciencia de su papel en la sociedad, y el control de los recursos económicos fundamentales del país. Por eso, cada empresa monopólica o estratégica que pasa a manos de la clase trabajadora es una posición ocupada al capitalismo, un nuevo baluarte de la independencia de Chile y su liberación nacional.

“Concebimos el área social, en su estructura y orientación, como el embrión de la futura economía socialista”.

Esa es la lucha de la hora presente: los 10 millones de chilenos contra la opresión de 10 familias político-financieras que recurren a todos los medios de ataque y defensa para mantener y defender sus privilegios.

He dicho.

El señor Hamilton.— Señor Presidente, lamento que en esta larga sesión que hemos tenido en la tarde, en que se están analizando los vetos formulados por el Presidente de la República al proyecto de reforma constitucional que delimita las áreas de propiedad, sólo hayamos contado por breves minutos con la presencia del señor Ministro de Justicia —cuya opinión habríamos querido escuchar en la Sala—, a fin de que recogiera nuestras observaciones y formulara sus planteamientos sobre el particular.

Quisiera en esta oportunidad tratar de hacer un resumen de lo que es el proyecto de reforma constitucional; de los motivos que lo originaron y de la situación por la cual nos vimos impelidos a presentarlo; de la tramitación de que ha sido objeto hasta su situación actual; y, sobre todo, contestar y hacerme cargo de las observaciones formuladas a esta iniciativa, particularmente por los partidos de la Unidad Popular y por el Gobierno a través de los medios de comunicación oficialistas, que han tratado inútilmente de desvirtuar su contenido y su alcance.

Legislación indispensable

En primer lugar, me referiré a la necesidad de modificar la Constitución Política del Estado, mediante el proyecto que presentamos con el Honorable señor Fuentealba el 14 de octubre del año pasado.

Es un hecho —en Chile nadie puede desconocerlo—, que incluso desde antes que asumiera el señor Allende el país está viviendo un proceso de cambios profundos, que son necesarios para el desarrollo político, social, cultural y económico de la nación.

Lo que ocurre con el actual Gobierno es que se trata de un Gobierno minoritario, que no fue elegido por voluntad popular mayoritaria, sino en una segunda vuelta mediante el Congreso Pleno. Y este Gobierno, cuya base de sustentación popular siempre ha sido minoritaria, en vez de haber ido captando a su alrededor cada vez más apoyo popular, lo ha ido disminuyendo hasta el punto de que hoy día los partidos que lo sostienen ni siquiera representan los sufragios que obtuvieron en la primera elección popular que la actual Administración debió afrontar. Si a esta situación se une la circunstancia de que este Gobierno pretende realizar cambios o transformaciones profundas, cual-

quiera que sea el sentido que tengan o la posición con que uno los enfrenta, se advierte que es extraordinariamente peligrosa la forma cómo está realizando este proceso y la dirección que le está dando.

Uno de los principales compromisos que tomó el Presidente Allende para asumir la Presidencia de Chile, no sólo ante la Democracia Cristiana y los partidos de Oposición, sino ante el país entero, fue precisamente el de realizar las transformaciones que a su juicio eran necesarias y que consignaba el Programa de la Unidad Popular, dentro de las normas democráticas, a partir de la legalidad vigente y respetando las normas que esa misma institucionalidad y legalidad establecía para su propia modificación.

Así comenzó y así pensamos que iba a continuar. Así empezó cuando presentó el proyecto de reforma constitucional para completar el proceso de nacionalización del cobre iniciado por el Gobierno anterior, para hacer que Chile y los chilenos fuéramos dueños absolutos de esta riqueza básica. Sin embargo, posteriormente, la actual Administración no siguió por esa senda.

Mediante las estatificaciones, las requisiciones, las intervenciones, los poderes compradores o las simples tomas de hecho, el Estado, sin lograr las más de las veces un traspaso del dominio de la propiedad de manos particulares a sus manos para configurar el área social, fue controlando paulatinamente importantes actividades económicas y empresas productoras de bienes o servicios. Y esto lo hacía sin ley, por encima de ella, o torciéndole la nariz, a espaldas del Congreso Nacional, al que, al evitar la ley, deliberadamente quería impedir que interviniera en la dirección y regulación de este proceso; sin participación alguna de los trabajadores y violando reiterados compromisos del Presidente de la República. Ya recordé el de la reforma constitucional que estableció el Estatuto de Garantías Democráticas. Posteriormente, el señor Allende hizo diversos anuncios. Por ejemplo, el primero de ellos lo formuló a fines del mes de diciembre de 1970. Ofreció al país entero enviar un proyecto de ley para someter la banca privada comercial al control del Estado. Ha transcurrido un año y medio, y esa iniciativa no ha llegado al Congreso Nacional, lo que no ha sido inconveniente para que el Gobierno, por distintos procedimientos y actuando como un comerciante particular y con herramientas y presiones de dudosa moralidad y legalidad, haya sometido a su control la mayor parte de la banca privada comercial.

No hace muchos meses –durante la tramitación del proyecto que ahora debatimos– el señor Allende también hizo un anuncio que importa un compromiso cuando se está ejerciendo la autoridad. Dijo que iba a someter a la consideración del Congreso una iniciativa para pasar a control o propiedad del Estado 91 de las más importantes empresas nacionales.

Por último, quiero recordar el compromiso que tomó en forma pública y solemne ante la directiva de la Democracia Cristiana, cuando en el Congreso Nacional se debatió la acusación que en contra del Ministro de Economía había deducido uno de los partidos de Oposición. Entre los varios compromisos sin cumplir figura el que en esa oportunidad el Presidente de la República contrajo en cuanto a no continuar las estatificaciones sin ley, con la sola excepción de la ITT y de MADECO, cuya estatificación a su juicio se justificaba, de modo que la continuaria y llevaría adelante.

Chile entero es testigo de cómo estos reiterados acuerdos se han estado violando y de cómo se ha seguido adelante un proceso con métodos de discutible legalidad y moralidad. Incluso, no han tenido éxito intentos del propio Presidente de la República y de los partidos que conforman la Unidad Popular frente al andar avasallador del sector económico y muy particularmente del Ministro Vuskovic y del equipo con que labora en el Ejecutivo.

En consecuencia, presentamos este proyecto de reforma constitucional no con el propósito de detener este proceso de socialización, no para desvirtuarlo, sino para que fuera conocido por el legislador y regulado por ley y para orientarlo de acuerdo con los intereses, el pensar y el sentir de la mayoría de los chilenos.

Qué pretende la reforma

Recordemos ahora cuáles son las ideas fundamentales del proyecto de reforma constitucional.

En primer lugar, definir las áreas de la economía nacional según la propiedad, y establecer que su formulación corresponde a la ley.

En segundo término regular, modificar o derogar aquellos instrumentos, para nosotros de discutible legalidad, aplicabilidad o moralidad, que en el hecho el Gobierno ha estado usando para conseguir el propósito de la estatificación sin ley.

En tercer lugar, reservar al Estado importantes actividades económicas, tales como la gran minería del cobre, del hierro, del salitre, del carbón; los seguros y reseguros, con exclusión de las cooperativas, las actividades de transporte ferroviario, en trenes urbanos e interurbanos; las de transporte aéreo y marítimo, de pasajeros y de carga, por redes de servicio regular que cubran la mayor parte del territorio nacional; las destinadas a proporcionar servicio público de comunicaciones por correo y telégrafo; las destinadas a la generación, transmisión y distribución de la electricidad, salvo el caso de las cooperativas y otros que exceptúe la ley; las relativas a la producción y distribución de gas natural o licuado para uso combustible; las destinadas a la extracción, producción y refinación de petróleo crudo o al tratamiento de gas natural, y a la producción de materias primas básicas derivadas directamente del petróleo, del gas natural y del carbón; las destinadas a la producción de cemento, acero, salitre y yodo y la industria química pesada y la producción de armamentos y explosivos, y otras que la ley considere esenciales para la defensa nacional.

En el proyecto de reforma constitucional todas estas actividades configuran, por decirlo así, las bases fundamentales sobre las cuales debe construirse el área social administrada por el Estado.

En cuarto lugar, se amplía y extiende la protección que actualmente la Constitución Política del Estado establece en beneficio del pequeño y mediano propietario o productor.

Para esos casos, la garantía consiste en que nadie podrá ser privado de su propiedad o de sus negocios por la vía de la nacionalización, y si una ley,

por razones de utilidad pública, autoriza la expropiación, el afectado deberá recibir previamente la indemnización en dinero y por el valor justo.

Esta protección, al menos parcialmente, se encuentra consignada en el actual texto constitucional para la pequeña propiedad rústica. Ahora la extendemos a la mediana propiedad rústica. En la actualidad, la pequeña y mediana empresa industrial extractiva o comercial no está protegida en la Constitución. Nuestro proyecto de ley hace extensiva la protección a estos sectores. La Constitución establece la protección para la vivienda habitada por su propietario, nosotros la extendemos también a la habitada por la familia del propietario.

En el programa de la Unidad Popular, en declaraciones de muchos de los partidos de Gobierno, en muchos discursos se ofrece al pequeño y mediano productor y propietario una seguridad que en los hechos se les está negando a diario. Y esto no sólo ocurre por circunstancias ajenas a la acción del Gobierno o que están fuera de su control. Muchas veces son los propios agentes del Ejecutivo los que actúan en forma deliberada para privar o amenazar al pequeño o mediano productor o propietario.

En consecuencia, debido a la incertidumbre en que viven estos modestos, pequeños y medianos campesinos, propietarios, industriales, comerciantes, mineros, queremos entregarles mediante el texto de la Constitución, una garantía eficiente que, más allá de las acciones de hecho, les asegure; que no podrán legalizarse y que ellos conservarán sus propiedades y que en caso de que, por vía de la ley, por razones de bien común, de interés general, que debe prevalecer sobre el legítimo interés privado, sea el Estado quien las tome en dominio o disponga de ellas, recibirán previamente la adecuada y justa indemnización en dinero.

La quinta idea es la referente al establecimiento de formas auténticas y reales de participación de los trabajadores organizados en todas las empresas productoras de bienes y servicios, cualesquiera que sean sus propietarios y sea que pertenezcan al área privada, a la mixta o a la social; y al establecimiento de las empresas de trabajadores, que son aquéllas en que, independientemente de quien sea el dueño –el capitalista particular o el Estado– los trabajadores permanentes y organizados de la respectiva industria ejerzan la administración y se queden con los excedentes, que son el fruto de su gestión y de su esfuerzo.

Algunas de estas ideas esenciales del proyecto de reforma constitucional en estudio –como la definición por ley de las áreas de la economía, la reserva al Estado de determinadas actividades, la protección al pequeño y al mediano propietario o productor– fueron aprobadas por la unanimidad del Senado y por todos los votos de la Cámara, y se ratificaron en el Congreso Pleno sin oposición alguna. Lamentablemente, la totalidad de los preceptos que expresan esas ideas fueron objeto de observaciones por parte del Gobierno, en las que me ocuparé a continuación.

Area social por ley y no por decreto

En este momento quiero justificar sólo dos de las ideas esenciales, precisamente las más controvertidas en esta Sala durante la tramitación de la ini-

ciativa, y en que discrepan el pensamiento de la Democracia Cristiana y la Oposición, de los planteamientos del Gobierno y de los partidos de la Unidad Popular. Ellas se refieren, en primer lugar a la forma cómo se está realizando el proceso de socialización del país.

Ese proceso adolece de dos defectos de fondo: se está llevando a cabo al margen de la ley y está amenazando la convivencia pacífica entre los chilenos. El primero de ellos lo aborda la reforma constitucional en estudio cuando, al configurar las áreas social y mixta de la economía, dispone que el traspaso de una empresa del área privada a la mixta o a la social debe hacerse por ley, sujetarse a la ley, regularse por ley. ¿Por qué? Porque la ley ha sido en Chile el instrumento del camino social que ha demostrado en nuestro país ser un medio eficaz y seguro para realizar la transformación social sin arbitrariedad, sin romper la convivencia pacífica entre los chilenos.

Durante nuestro Gobierno nacionalizamos la Compañía Chilena de Electricidad, y lo hicimos por ley. Inclusive, cuando durante el primer trámite del proyecto en estudio cité ese mismo ejemplo en una de mis primeras intervenciones acerca de esta materia, el Honorable señor Silva Ulloa tuvo a bien recordar que los Senadores de Gobierno de entonces –los democratacristianos– y los de Oposición, que ahora son Gobierno, participaron activamente en el estudio de la iniciativa pertinente, y que su participación fue tan determinante, que el proyecto se mejoró de manera ostensible en beneficio de los intereses chilenos comprometidos en esa negociación, a través precisamente del debate parlamentario, que permitió efectuar la referida nacionalización mediante el mecanismo de la ley y no usando los instrumentos de que el Estado podía disponer en ese instante.

Así se hizo también la reforma agraria. Y esta transformación tan importante de las estructuras de tenencia de la tierra y de las aguas que el país había mantenido por 150 años, Chile fue capaz de realizarla por medio de la ley, con tribunales, con opinión informada, con oposición crítica, libre, respetada y respetable.

Yo diría que una de las características de Chile como nación es la de que, a lo largo de su historia, salvo algunas excepciones, en todos los momentos difíciles ha tenido una salida democrática, legal y pacífica para resolver los problemas que la coyuntura histórica le ha ido planteando. Y no veo por qué ésta sea la oportunidad de despreciar la manera chilena de realizar las cosas: mediante la ley.

Así también, en el Gobierno anterior, por el sistema de la ley, se inició la recuperación de la riqueza fundamental de Chile –y se recuperó la mayor parte–, en virtud de la aplicación de los Convenios del Cobre, entre 1965 y 1969.

Pues bien, nosotros creemos que, aparte ser la ley el instrumento tradicional, democrático por excelencia y eficaz para realizar el cambio social, hay ciertos problemas que nadie sino el legislador –el Congreso y el Gobierno– mediante la formación de la ley, puede resolver.

¿Cuáles son esos problemas?

En primer lugar, yo señalaría la extensión de la inversión. Hoy día en Chile, más allá de los índices parciales que en el orden económico nos pue-

dan presentar como positivos –para los efectos de discurrir, quisiera aceptarlos todos: los buenos y los malos–, hay un hecho que nadie puede discutir, que es el más grave desde el punto de vista del desarrollo económico del país durante el año recién pasado, la inversión en nuestro país fue negativa en menos 16%, según datos oficiales que nos han proporcionado. Por primera vez desde el año 1931, época de la gran crisis mundial, la inversión en Chile no se realiza en términos positivos, sino en términos negativos.

¿Qué significa esto? Que Chile no está invirtiendo para dar más trabajo, crear más riquezas, satisfacer las necesidades esencial de la población en el futuro.

Cualquier indicador económico positivo que pudiera mostrarse carecería de valor frente a ese índice, que es, por decirlo así, el que puede medir el desarrollo económico futuro del país. Y en una nación en que no están invirtiendo los particulares modestos, ni los medianos ni los grandes capitalistas, porque no tienen confianza ni seguridad, y en vez de invertir prefieren consumir; en que no hay seguridad para el capital extranjero, al que se da un trato muy despectivo, lo que no sucede hoy día ni siquiera en los países socialistas, por lo cual no desea llegar a Chile; en que toda la inversión pública, que es la mayor parte de la inversión realizada en el país, no está destinada a crear nuevas industrias, a abrir nuevas fuentes de trabajo, a producir más riqueza, a dar más empleo ni a distribuir mayor cantidad de bienes, sino simplemente a comprar lo que ya existe –a adquirir bancos, más empresas, a tomar todas las tierras bajo el control del Estado–, ¿quién va a fijar el límite de este proceso –porque no se trata de congelarlo, sino de ordenarlo por ley–, y adónde llegarán los compromisos que en el orden económico, al margen del legislador, están contrayendo la CORFO y el Banco Central, que emite bonos CAR? Al respecto, no sólo se está gravando a futuros gobiernos, lo que en alguna medida siempre ocurre cuando una Administración, al contraer obligaciones económicas en virtud de proyectos a largo plazo, en cierto modo compromete a regímenes venideros, sino que se están contrayendo compromisos para generaciones futuras. Y en un país que el uso de los recursos, el empleo del capital, por el mismo hecho de tener recursos económicos y capitales limitados –que lo están más ahora, por la falta de inversión privada y extranjera–, constituye uno de los problemas principales, en el que deben ocuparse los Poderes del Estado –naturalmente, no se puede marginar al Legislativo de esa preocupación–, la atingente a la extensión de la inversión, es decir, los recursos que el Estado destine a la creación del área social para adquirir todas las actividades privadas y pasarlas a su dominio, debe constituir esencialmente una decisión del legislador.

En segundo lugar, tenemos el problema de la indemnización. Salvo algunos grupos extremistas y violentistas, y algunos cabezas calientes que a veces también los acompañan desde estas mismas Corporaciones que son parte de la institucionalidad del país, hasta ahora nadie ha propuesto responsablemente en Chile que el Gobierno se transforme en un salteador que quite a los chilenos su derecho de propiedad respecto de viviendas, campos, fábricas, acciones, y no les pague. Se podrá discutir el precio o el valor justo; pero

nadie objeta que el afectado debe recibir una compensación en reemplazo de la propiedad de que se lo priva.

¿Quién va a fijar la forma de pago?

Cuando discutimos este mismo proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, durante el primer trámite, di a conocer, en presencia de los Subsecretarios de Justicia y de Economía y sin ser desmentido por ninguno de ellos, las irregularidades cometidas y las injusticias en que se había incurrido en la adquisición de acciones a través de poderes compradores abiertos para estatificar y pasar a control del Estado la banca privada.

En esa operación, y –repito– operando el Estado como comerciante particular, pagó a los inversionistas extranjeros, por acción, más de lo que entregó a los chilenos; y entre estos últimos, recibieron mayor valor por acción los accionistas grandes, con lo cual, aparte cometerse una injusticia y discriminar-se en contra de los accionistas chicos, se contradijo el programa de la Unidad Popular, que sobre el particular habla de respeto al pequeño y modesto inversionista, sosteniendo que si se cometiere alguna discriminación o injusticia, sería precisamente para favorecer a los inversionistas pequeños y medianos.

¿Quién es el único que puede proteger al propietario para que reciba ni más ni menos de lo que estime justo como compensación por la propiedad de que se lo priva? A nuestro juicio, la ley, y no la voluntad arbitraria del burócrata, del político o del funcionario de turno.

En tercer lugar, sobre la base de la experiencia que hemos recogido hasta el momento en cuanto al manejo, administración y control de empresas, haciendas y bancos por el Gobierno de la Unidad Popular, consideramos indispensable establecer ciertas garantías. Porque el país, al traspasar del área privada a la social determinadas actividades económicas, está haciendo un sacrificio, distrayendo recursos; y lo hace, entre otras razones, para que los excedentes queden en poder y beneficio de la comunidad, y no en manos de unos cuantos particulares.

Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasó en el cobre cuando fue estatificado? Que ese metal –el sueldo de Chile, como dice el Presidente de la República– a cuya nacionalización dimos apoyo todos los sectores políticos –se contó con la solidaridad de todos los chilenos–, se está administrando en forma sectaria; despreciamos la técnica; en forma politizada; mediante un procedimiento que se está traduciendo en baja de la producción, en indisciplina laboral, en persecución de la técnica y, en definitiva, en perjuicios económicos para el país, porque en los grandes minerales, aun hoy día y desde que la Unidad Popular tomó el control total de su administración, cualesquiera que sean las excusas que se den, el precio de costo de producción es superior al de venta. Vale decir, “Chile se está farreando” su mayor riqueza, el sueldo del país.

¿Y qué ocurre con las 21 más grandes empresas estatificadas? Han perdido decenas de millones de escudos, de acuerdo con los últimos balances y según una muestra que apareció hace muy poco tiempo en todos los diarios, y que se ha comentado en este recinto y en otras tribunas.

Es necesario, entonces, para que realmente haya excedentes y no pérdidas en las empresas estatificadas, que esos excedentes pasen a la nación, a la

comunidad toda y puedan revertir a ella, para ampliar esas empresas y crear otras nuevas, para impulsar el desarrollo. Es necesario que la ley –y nadie sino la ley en tales circunstancias– dé la garantía de que esas empresas se van a perfeccionar o a mejorar como entidades productivas eficientes. Porque aquí no estamos haciendo ese gran sacrificio –o, al menos, no estamos dispuestos a hacerlo– para que determinados sectores se den gustos doctrinarios o ideológicos ni para arruinar económicamente al país y a los trabajadores.

Por último, es la ley y no la voluntad, promesa o compromiso de la autoridad, del político o del interventor de turno, quien debe garantizar los derechos de los trabajadores, a fin de que el cambio de propiedad o de administración de una empresa no signifique que las conquistas, derechos y bienestar ganados por los trabajadores, muchas veces con gran sacrificio y después de largos años de lucha, sean desconocidos o menoscabados por sus nuevos amos. Y no se diga que por el hecho cierto de que, en general, los partidos que hoy son Gobierno siempre lucharon en el pasado por los derechos de los trabajadores, la circunstancia de que sean ellos o pasen a ser los administradores de las empresas estatificadas constituye una garantía; porque sabemos que ha habido no sólo persecución y sectarismo respecto de los trabajadores, empleados y obreros, sino incluso de dirigentes sindicales, como es el caso de los 36 empleados y obreros de Sumar, despedidos por razones políticas, vale decir sin razón, y respecto de quienes el Presidente de la República adquirió el público y solemne compromiso –hace ya no sé cuantos meses– de que serían reincorporados físicamente a sus trabajos, y de que en caso de que ese compromiso no se pudiera cumplir o existieran riesgos en su cumplimiento, de acuerdo con los propios empleados, ellos serían al menos legalmente reincorporados, lo que significaba en la práctica que, aunque no pudieran ser físicamente reintegrados al trabajo, se les pagarían sus sueldos y salarios. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Que hasta el día de hoy esos trabajadores están embarcados en un juicio en contra de la empresa y del interventor, y mientras tanto viven de la caridad pública. Yo no sé si el Presidente Allende no cumple sus compromisos o no tiene autoridad para imponerlos; pero cada vez que contrae un compromiso, el resultado es el mismo: en el hecho no se cumple.

En seguida, nosotros pensamos que la ley es el instrumento democrático. En su generación y perfeccionamiento tiene conocimiento todo el país, porque se trata de un proceso público que no se realiza entre cuatro paredes. La participación que en cada una de sus normas tienen participación responsable los legisladores la conoce el país entero. En cambio, en el otro sistema, ni siquiera se sabe muchas veces quién es el responsable; y en el anonimato se pueden cometer y se cometen las peores atrocidades, sin que nadie responda por ellas.

Los demócratacristianos tenemos una responsabilidad que asumir en este proceso. Sin embargo, cómo la vamos asumir si, pese a tener la representación popular mayoritaria del país el proceso no pasa por esta Sala ni por la Cámara de Diputados, sino que va en línea directa por el Ministro de Economía y, a veces –presumo–, por La Moneda.

Es en este recinto donde todos los sectores tienen representación. Es aquí en el Parlamento donde las mayorías corresponden a las mayorías naciona-

les. Es aquí donde debe realizarse el debate democrático y donde puede tener oportunidad de participar todo el pueblo de Chile en las decisiones importantes que deban tomarse. Me parece realmente ridículo y grotesco que el Senado y la Cámara gasten a veces su tiempo en el despacho de proyectos que pueden tener importancia regional o cierta trascendencia en relación con intereses respetables. En algunas oportunidades les cambiamos el nombre a las calles, autorizamos la erección de un monumento y aprobamos ascensos militares o pensiones de gracia. Pero el proceso de socialización del país, el de formación del área social o el de traspaso del área privada a la social se hace al margen de esta Corporación, sin siquiera el conocimiento del Parlamento. Eso no es respetar y cumplir el compromiso de realizar dentro de la legalidad, de la democracia y de la convivencia pacífica los cambios que el país requiere y que la mayoría de los chilenos anhela.

Poder para los trabajadores

La quinta idea, de entre las más importantes del proyecto, es la que establece la participación de los trabajadores en las empresas productoras de bienes o servicios, sean del área privada, mixta o social. Pensamos, lógicamente, que hay dos tipos de participación. Por dar alguna denominación, hay empresas en el área privada, social y mixta en que la participación de los trabajadores debe o puede quedar limitada, sea un particular o el Estado, al dueño del capital. Sin embargo, deben establecerse los mecanismos que en estos casos hagan real, eficiente y auténtica la participación de los trabajadores, tanto en la administración como en las utilidades o excedentes.

Pensamos que debe haber otra forma de participación, la autogestión, la que nosotros denominamos “empresa de los trabajadores”. En ella al margen de quien sea el propietario, de quien ostente el dominio de la empresa, de quien sea el dueño de los bienes que conforman su capital, los trabajadores que laboran en ella en forma permanente deben asumir la administración y disfrutar del resultado de su gestión, vale decir de las utilidades o excedentes. Para nosotros empresas de esta índole deberían constituir el área dominante de la economía nacional. Comprendemos que esto no se obtiene mediante una reforma constitucional y que no basta la dictación de una sola ley, sino que es necesaria también la voluntad decidida de las autoridades y el respaldo masivo de los trabajadores.

Pero estamos consagrando, en este momento, los principios que informan nuestra visión del problema.

Yo diría que aquí hay en juego tres esquemas. El primero de ellos es el capitalista, el cual en su expresión más simple, consiste en que todos los medios de producción, fundamentalmente los más importantes, están en manos de unos pocos, de una minoría que detenta la propiedad o el capital. Y la gran mayoría de los trabajadores de la empresa no tiene otra participación que entregar su trabajo, que se les valoriza y paga como una mercancía mediante un sueldo o salario.

Pero, ¿qué ocurre? Que el otro esquema, el que se está aplicando en Chile en los hechos y no en las palabras, no es el del modelo socialista democrático, humanista; no es socialismo “a la chilena”, “con sabor a vino tinto y gusto a empanadas” sino el dogmático modelo del socialismo estatista, calcado de las primeras experiencias socialistas o de los primeros tiempos de otras experiencias socialistas, como la soviética, la checa, la china o la cubana. En este aspecto es tal el dogmatismo dominante, que algunos sectores del Gobierno se han negado a reconocer los defectos señalados por muchos dirigentes socialistas marxistas al valorizar su propia experiencia, como también las rectificaciones hechas en los países socialistas. Ni siquiera han tenido la visión de reconocer las diferencias objetivas existentes entre la realidad chilena y la que vivían aquellos países socialistas, al comenzar su experiencia. Ninguno de esos países, por ejemplo, tenía un ingreso por habitante superior a 150 ó 200 dólares. Cuando el señor Allende asume el Poder, Chile era un país con más de 640 dólares por habitantes. Y no sé si en este año y medio o año ocho meses de Gobierno a cuántos los habrán reducido. No hay estadísticas al respecto. Pero este país parte con una tasa de ingreso varias veces superior a la de cualquier otra nación. Desde el punto de vista de la población, eso significa, lógicamente, exigencias que es necesario satisfacer por parte del Estado, muy superiores a la de otros países.

Hay otra diferencia fundamental: todos esos países o la gran mayoría de ellos tienen economías simples, economías de estructura agraria. La nuestra es una economía diversificada, y en algunos casos, como en el petróleo y el cobre, altamente tecnificada, donde el proceso de concentración burocrática que caracteriza al socialismo estatista conduce a la ruina a la ineficiencia para esas industrias.

En tercer lugar, todos esos países, o casi todos, vivían en dictaduras, o el marxismo les fue impuesto por la fuerza. Nosotros no hemos vivido ni aceptamos tal experiencia. Integramos un pueblo con formación cívica y política y en progreso incesante y creciente. Sería desconocer la historia de nuestro país y el alma nacional pretender aplicar rígida y dogmáticamente, con papel de calco, esas experiencias extranjeras en Chile. Ni la fuerza que da la mayoría nacional, ni la fuerza física, ni las fuerzas exteriores están dispuestas a acompañar al Gobierno de la Unidad Popular en esta aventura de imponer a la fuerza, contra la mayoría nacional, un esquema estatista que conduce, en lo político, a la dictadura, y en lo económico a la ineficiencia.

¿Cuál es el tercer modelo? El que nosotros estamos auspiciando: uno democrático, humanista, comunitario, en que, reconociendo en los hechos que existe un área privada, y no sólo en teoría o en las palabras; en que se den garantías reales al pequeño y mediano productor, empresario o propietario, y en que existiendo también en las grandes empresas o rubros de la economía nacional un manejo estatal, en ambos casos tengan participación los trabajadores. Es necesario ir creando un área social dominante, donde los propios trabajadores permanentes de las empresas, en forma descentralizada, libre y responsable, tengan la administración y se queden con los excedentes, fruto de su trabajo y sus esfuerzos. En esta forma se habrá terminado, entonces, lo

que los marxistas llaman “explotación del hombre por el hombre”, que se produce tanto en el modelo capitalista o neocapitalista, que en el esquema estatista totalitario, y peor aun, en este último, porque el mero cambio del patrón privado por el interventor político no mejora, sino que deteriora la situación en que se encuentran los trabajadores.

Voy a omitir referirme en esta ocasión a los muchos casos que podría citar acerca de abusos, discrepancias, discriminaciones de que se ha hecho víctimas a los trabajadores de las industrias estatificadas, y no siempre porque sean miembros de la Oposición, trabajadores demócratacristianos o que estén en contra del Gobierno: muchas veces, como ha pasado en Hirmas y otras industrias, tal situación se produce por problemas que surgen entre ellos. Son los del F.T.R. contra los comunistas; son los socialistas contra los comunistas; son problemas políticos existentes entre ellos mismos, en que un grupo trata de imponerse a los otros, y dejan paralizada la industria, fábrica o empresa de que se trata, con perjuicios para la producción nacional. Estas confesiones que hace a menudo el señor Ministro de Economía, y que él llama “críticas” o “autocríticas”, me recuerdan a esas personas que se van a confesar para poder seguir pecando, porque no hay rectificación en los hechos: se confiesan y vuelven a lo mismo; se vuelve a confesar...

El señor Valente.- Como los beatos.

El señor Hamilton.- Sí, porque son beatos. Son beatos los dirigentes del Gobierno, sólo que la doctrina que los anima es la marxista.

En su última autocrítica, el Ministro señor Vuskovic -no sé si en carácter de despedida a la opinión pública o, al revés, como señal de que seguirá dirigiendo los destinos económicos del país- dice, entre otras cosas, que estos problemas están paralizando la producción de las empresas y reconoce que son una causa fundamental del desabastecimiento. Hasta aquí no habíamos escuchado sino las explicaciones sobre los refrigeradores del barrio alto, a raíz de las cuales uno se preguntaba cómo se las arreglaba la gente para meter en esos aparatos sacos de cemento, neumáticos, remedios, etc. Bien, ahora sabemos que cuanto entonces sostenía la Oposición tenía una base de verdad, pues así lo ha reconocido el Ministro de Economía en su última autocrítica.

Nosotros queremos realmente que se termine con la explotación, que cambie de condición el trabajador cuando se produce una modificación en su empresa; que entre a participar en ella, y que tal participación sea efectiva y auténtica. Eso ocurrirá en el esquema de la autogestión, de la empresa de trabajadores, de su participación determinante.

Los cambios, para nosotros, deben hacer en beneficio del trabajador, y no del Estado. Todo este proceso no debe destinarse a acumular mayor poder en el Estado, sino a radicalarlo en forma plural y descentralizada en los trabajadores organizados de las empresas. De esta manera evitaremos ese gran monopolio de un Estado dueño y señor de la hacienda y la vida de todos los chilenos.

Estas son las ideas fundamentales del proyecto, que he tratado de resumir desde el punto de vista de su contenido político, más que desde el jurídico, aspecto en que nos ocuparemos más adelante. Pero estas ideas no son, precisamente, aquellas por las cuales se combate a esta iniciativa. No son las

que se exponen en los foros, en las intervenciones públicas, ni en los medios de comunicación social que emplea el oficialismo.

El oficialismo engaña a los trabajadores

Por eso, quisiera hacerme cargo, aunque sea brevemente, de las críticas que se formulan al proyecto.

¿Cuáles son tales críticas? ¿Qué se dice de esta iniciativa?

Parten todas ellas de un punto común: se refieren a lo que el proyecto no es, o a lo que se dice que es, pero no a lo que verdaderamente significa.

En efecto, en primer lugar se dice que su objetivo es defender a los monopolios. Esta sería la razón que justificaría su presentación y la voluntad política demostrada por la Democracia Cristiana y los demás partidos de Oposición de transformarlo en una modificación a nuestra Carta Fundamental.

Ya he explicado –creo que se necesitaría mala fe para sostener lo contrario– que esta iniciativa no tiene por objeto impedir o detener el inevitable proceso de socialización de los medios de producción, sino orientarlo o regularlo dentro de la ley, y dirigirlo en beneficio de los trabajadores y no del Estado.

La reforma propuesta impide la formación de un único y gran monopolio: el del Estado dueño de toda la tierra, dueño de toda la banca, dueño de todo el comercio, dueño de todas las minas, dueño de todas las fábricas del país, ante el cual los ciudadanos tendrían que inclinarse en forma obsecuente si no quisieran ser arrasados.

Luego se dice que pretendemos devolver las fábricas a sus antiguos dueños. Así, uno ve letreros en los frontispicios de las fábricas estatificadas, a veces, con algunas pintorescas alusiones personales al Senador que habla o al Senador Fuentelba –incluso se leen en algunas publicaciones como “El Siglo” o “Última Hora”– y con advertencias señalando que “los trabajadores de tal empresa no devolverán la fábrica”.

Esta afirmación –la de que se trata de devolver a sus antiguos dueños las empresas expropiadas– contiene una doble falsedad. Lo digo responsablemente.

En efecto, en primer término el proyecto no tiene efecto retroactivo, al menos en el caso de las intervenciones y requisiciones, y ni siquiera en el caso de la compra de acciones por CORFO con anterioridad a la fecha de presentación de la iniciativa. Por el contrario, dicta normas legales o modifica la legislación vigente para lo futuro. O sea, de manera alguna se interfiere en la actual condición jurídica en que se encuentran las industrias requisadas o estatificadas por cualquier medio. Su promulgación como reforma constitucional no implica la devolución de las empresas a los antiguos dueños.

¿Por qué se falsea la realidad? ¿Por qué se habla de “los antiguos dueños”? ¿Acaso los señores Yarur, Sumar u otros, que suelen citarse como ejemplos, dejaron de ser los propietarios legales o legítimos de sus fábricas, industrias o bancos? Lo son, lo eran y lo seguirán siendo mientras no se dicte una ley que permita al Estado transferir la propiedad de los particulares a su patrimonio. Tan así es, por ejemplo, que hemos visto al señor Yarur objetar el balance del Banco de Crédito e Inversiones. Lo hace porque se trata de su

banco. El es su dueño, el accionista principal. De lo contrario, no podría ejercer ese derecho de objeción al balance.

También hemos visto que otra persona en similar situación ganó un juicio, o que determinado tribunal aplicó la ley en forma que la favorecía. ¿Por qué? Porque tenía derechos que la ley le reconoce en su calidad de propietaria.

Pues bien, nosotros no estamos alterando esa situación jurídica, ni a favor ni en contra de los propietarios, ni a favor ni en contra del Estado. La reforma constitucional, en estas materias, rige para lo futuro; de modo que los propietarios siguen siendo dueños mientras no se dicte una ley que permita, por medio de expropiación u otra forma legal, transferir el dominio de sus bienes al Estado. La requisición, la intervención y, para qué decir, la toma de hecho, que son los instrumentos que normalmente se están usando para lograr el control de estas empresas, no son manera en Chile –país organizado, Estado de derecho– de transferir el dominio o la propiedad.

Luego se critica esta iniciativa aduciendo que, como se exige ley para el traspaso de los bienes al área social o mixta, el proceso expropiatorio sería muy lento, pues se debería dictar una ley para cada empresa, banco o industria. Creo que nadie de buena fe puede hacer tal afirmación. Seguramente, la crítica está destinada a cazar incautos. Es tan torpe como sostener que la Ley de Reforma Agraria no se dictó para facilitar, sino para impedir la expropiación de los predios o parte de ellos y que para entregarlos a los campesinos, sería necesario dictar una ley para cada fundo.

El texto de la disposición en referencia señala expresamente que serán leyes generales o especiales las que determinarán la forma del traspaso del área privada al área mixta o social.

Por otra parte, la ley no sólo es más eficiente, sino que, también, es menos lenta cuando hay voluntad política, cuando hay consenso. Si no hay ni la una ni el otro, quiere decir que el país no quiere hacer determinadas cosas. Por eso, hay proyectos de ley que se empantanar por decenios: porque no existe interés en ellos. Muchas veces los echan al olvido los propios autores, como ocurrió con la iniciativa del Gobierno destinada a combatir el terrorismo, que se presentó en un momento determinado de la vida nacional, cuando se asesinó a un importante y destacado hombre público, como fue el ex Vicepresidente de la República, Edmundo Pérez. Vino entonces a esta Sala el Ministro señor Tohá, quien, con escándalo, anunció el envío del proyecto contra el terrorismo. Incluso, en él se establecía la pena de muerte para los violentistas. Pero fue el mismo Gobierno el que, en un momento dado, se desinteresó en el proyecto impidiendo que el Congreso lo tratara al sacarlo de la convocatoria a la legislatura extraordinaria.

Entonces, la ley es lenta o rápida, según la voluntad política que haya para impulsar los proyectos respectivos, y según el consenso de aprobarlos o rechazarlos.

Quisiera ilustrar esta idea con dos ejemplos.

En primer término, me referiré al caso de la estatificación de la banca.

En diciembre de 1970 el señor Allende ofreció hacerla por ley. Estamos en junio de 1972, y el proyecto anunciado aún no llega.

Si bien el Gobierno ha estatificado la mayor parte de la banca privada, que yo sepa hasta ahora no ha logrado estatificar al Banco de Chile, que constituye el 70 por ciento de la actividad bancaria privada del país. No ha podido el Estado actuando como comerciante particular, al margen de la ley y con los recursos de que dispone –cuyo uso por los particulares es absolutamente legítimo, no así si se trata del Estado o las autoridades–, lograr la estatificación de la banca privada. ¿Cuántos proyectos de ley sobre la materia se habría dado el lujo el Gobierno de pasar en el año y medio que lleva en el poder? Los que quisiera, si hubiera habido la voluntad política de hacerlo así, y no de escamotear el conocimiento de estas materias al Congreso Nacional; si hubiera habido –como en lo esencial existía– voluntad de parte de la mayoría del Parlamento para despachar esas iniciativas.

También se critica esta reforma expresando que las empresas de trabajadores que nosotros patrocinamos implican una forma de discriminación entre los trabajadores y una manera de transformar a éstos en capitalistas. Esta última idea la vendió en el país don Fidel Castro, cuando vino en visita de inspección. Desde entonces hasta ahora la ha repetido casi invariablemente en sus intervenciones el Presidente de la República.

Hoy he escuchado decir al señor Ministro de Justicia que para el Presidente de la República “la película ya estaba aclarada totalmente”; que ya había entendido, después de los meses en que se ha estado debatiendo este asunto en la Cámara, el Senado y ante la opinión pública, que no se trataba del traspaso de la propiedad, sino del traspaso del poder, de la administración y de los excedentes a los trabajadores. Entendió, al fin, que esto es lo que estamos auspiciando, lo que significa la empresa de trabajadores.

Aclarado este punto, queda en pie la afirmación de que se produciría discriminación entre los trabajadores. Se dice, al efecto, que hay empresas ricas, de gran productividad y con grandes excedentes, como es el caso de las del cobre, en tanto que otras son de muy baja productividad, como las del carbón. Entonces, esta medida provocaría, a juicio de quienes critican esta iniciativa, una discriminación entre las personas que laboran en unas y otras empresas.

Sobre el particular, en primer término quisiera aclarar que ni el carbón ni el cobre serían empresas de trabajadores, según el proyecto que proponemos. Ambas actividades, como ya lo expliqué, se reservan, en virtud de esta misma iniciativa, para el dominio y la administración por el Estado.

Tomemos el mismo ejemplo, el de las empresas del cobre y del carbón. Ambas eran privadas, si bien las primeras estaban en manos de los norteamericanos y las segundas en poder de chilenos. Pero lo cierto es que ambas eran empresas tradicionales, en manos de capitalistas particulares. Pues bien, en ese esquema capitalista, ya existían tales desigualdades: eran más pobres, recibían menos, ganaban menos los trabajadores del carbón, en tanto que eran más ricos, recibían más o ganaban más los del cobre. ¿Qué sucede ahora, cuando ambas actividades están estatificadas? ¿Ganan acaso más los trabajadores del carbón que los del cobre? ¿Tienen mayores ingresos por el hecho de haber sido estatificada la empresa carbonífera? No. Las mismas irritantes discriminaciones o diferencias e injusticias se mantienen, porque son ajenas al sistema capitalis-

ta, al estatista o al de participación. En cualquiera de tales esquemas, la ley puede hacer justicia y regular la situación. Lo que si es justo es que los trabajadores “vayan en la parada”, que tengan participación real en lo que fundamentalmente, es el fruto de su esfuerzo. El capital debe estar al servicio del trabajo, y no como ocurre en el sistema capitalista o en el del estatismo, en que el trabajador está al servicio del capital. Y es lógico que quien trabaja más, produce más o rinde más en beneficio del país, tenga un premio por su mayor esfuerzo o mejor rendimiento.

Por último entre las críticas que hemos escuchado hay una que al menos en apariencia impresiona.

Se dice: “Muy bien, todo esto es muy bonito, pero ustedes fueron Gobierno durante seis años. La Democracia Cristiana tuvo la Presidencia de la República. Todos sus Ministros eran demócratacristianos al igual que los Subsecretarios y los altos funcionarios de esa Administración. Contó con 32 Diputados y un buen número, si bien no la mayoría de los Senadores. ¿Por qué no concretaron entonces la participación popular, la empresa de trabajadores?”

Quisiera recoger esta afirmación, que se repite invariablemente en todos los foros, en todas las tribunas y en todas las expresiones del oficialismo.

Los partidos que hoy están el Gobierno, como se ha recordado en la Sala, también tuvieron el Poder durante 14 y más años; los radicales y los socialistas; los socialistas durante el Gobierno de Ibáñez, y radicales, socialistas y comunistas, durante el Gobierno de González Videla, aunque eso fue como un veranito de San Juan, porque estos últimos no permanecieron mucho tiempo en el Gobierno. ¿Por qué no hicieron entonces la reforma agraria? ¿Por qué no hicieron entonces la estatificación de las empresas y crearon el área social? Seguramente, ellos me contestarían, y con razón, que, como lo dicen las Escrituras, cada “día tiene su propio afán”. Y su afán fue crear la CORFO, y lo hicieron. Y desarrollaron el programa del acero y de la electricidad y del petróleo. Y lo hicieron bien. Ese fue el afán de ese día y lo que constituía la tarea del país en esos años. Y lo cumplieron, lo cual está bien.

Por nuestra parte, ¿ofrecimos al país organizar las empresas de trabajadores en el programa de la Democracia Cristiana para su primer gobierno, que fue el del Presidente Frei? ¿Propusimos entonces la participación popular y la modificación de la estructura de las empresas? No, señor Presidente. En esa oportunidad, patrocinamos otra cosa: la organización popular. ¿Y quien, de buena fe, cualquiera que sea la posición política que tenga o la crítica que le merezca el Gobierno demócratacristiano, podría desconocer que organizamos a los campesinos mediante su sindicación, que organizamos a los pobladores y a los vecinos mediante la dictación de la ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, que apoyamos la organización sindical y la organización social de base?

Esa fue la tarea que ofrecimos en ese Gobierno. Ese fue el afán de aquellos días, y lo cumplimos. ¿Y por qué cito este aspecto, y no otros, como la reforma agraria, la iniciación del proceso de recuperación de las riquezas básicas u otras tareas que se cumplieron durante ese Gobierno? Porque la participa-

ción popular supone necesariamente la organización del pueblo. Este no puede participar sino a través de su organización y de los representantes que legal y democráticamente se da. Nadie asume la participación a través de las grandes asambleas de masas en que habla el dictador, y la muchedumbre grita, entusiasmada y frenética, ¡sí! o ¡no! Eso no es un sistema democrático. No es un sistema de participación, sino la negación de la participación responsable de los trabajadores.

Ese fue el afán de los años del Gobierno del Presidente Frei, y lo cumplimos. Más aún: en materia de política agraria llegamos más lejos, y no sólo organizamos a los campesinos, sino que en toda el área reformada establecimos la participación, que es la expresión de la participación popular de los trabajadores, de la empresa de trabajadores. ¿Qué otra cosa es el asentamiento campesino, en términos provisionales, y la cooperativa de campesinos, en términos de propiedad definitiva, sino una empresa de trabajadores, amoldada a las condiciones, requisitos y necesidades de la producción agropecuaria y al sistema de vida y promoción de los trabajadores de la tierra? Eso es lo que hicimos.

¿Qué propusimos para el segundo Gobierno que pensábamos debía realizar la Democracia Cristiana? Precisamente, sobre la base del afán cumplido en la Administración del Presidente Frei en materia de organización popular, ofrecíamos dar el segundo paso y cumplir el segundo afán: establecer la participación de los trabajadores y las empresas de trabajadores. Eso es lo que estamos haciendo ahora, en virtud de la representación popular de que estamos investidos, con la herramienta que el pueblo ha puesto en nuestras manos: la posibilidad de participar en la formación de la ley y de modificar la Constitución Política. ¿Quién podría, entonces, con razón y en justicia, tacharnos de inconsecuentes y formularnos el cargo de no haber hecho en nuestro Gobierno lo que no prometimos hacer y de ser inconsecuentes entre posiciones que ahora tenemos y que ofrecimos realizar si hubiéramos tenido, como lo esperábamos, la oportunidad de un segundo Gobierno de la Democracia Cristiana?

Observaciones o vetos del Presidente

El proyecto de reforma constitucional en debate fue presentado el 14 de octubre del año pasado. Lo aprobó el Senado. Luego le dio su aprobación mayoritaria la Cámara de Diputados, y, posteriormente, lo ratificó el Congreso Pleno. Por lo tanto, fue enviado, como corresponde en su tramitación legal, al conocimiento y decisión del Presidente de la República, quien, en uso de sus facultades privativas, de acuerdo con la Constitución, puede formular observaciones o vetos. En conformidad al artículo 108 de la Constitución Política, el Jefe del Estado, frente a un proyecto de reforma constitucional, como se ha señalado en esta Sala, no tiene las mismas atribuciones y facultades que en el caso de un proyecto de ley en materia de observaciones. La diferencia se encuentra establecida en la Carta Fundamental y emana de que, en el caso de la Constitución, el Congreso está ejerciendo la facultad de constituyente, y el Poder Constituyente radica fundamentalmente en el Parlamento. Por eso, en lo

atinente a estas observaciones, la Constitución limita las posibilidades del Primer Mandatario, al revés de lo que sucede respecto de la ley, donde el Congreso es colegislador, y el Poder Legislativo reside no sólo en el Congreso Nacional, sino que también en el Presidente de la República; de modo que ambos, en conjunto, concurren a la formación de la ley, y aquí, de acuerdo con la propia Constitución, es mucho más amplia, es menos limitada, la facultad del Jefe del Estado que formular observaciones o vetos a los proyectos de ley que apruebe el Congreso Nacional.

Pues bien, de acuerdo con la Constitución Política, ¿qué puede hacer el Presidente de la República en materia de vetos a un proyecto de reforma constitucional? Sólo puede, según la Carta Fundamental, formular correcciones, introducir modificaciones o reponer ideas válidamente contenidas en indicaciones formuladas durante la tramitación del proyecto de ley. En buenas cuentas, no tiene el Primer Mandatario más autoridad, en esta materia. En consecuencia, no puede llegar más lejos que modificar, corregir o reponer.

No deseo analizar en este momento, porque me reservaré para la fundación de mi voto en cada una de las observaciones, de qué manera, en la mayoría de los vetos, el Presidente de la República se ha excedido, a mi juicio, groseramente, de la facultad constitucional. ha llegado mucho más allá en lo que ha llamado –no sé si él o los agentes de su Gobierno– el “veto duro”. Ha llegado mucho más allá de lo que la Constitución le permite, porque habiéndose ya fijado el campo de la competencia restrictiva que tiene en esta materia el Presidente de la República, sabiendo que, según el artículo 4° de la Constitución Política, ninguna autoridad puede arrogarse otras atribuciones que las que expresamente les confiere la Constitución o las leyes, ha pretendido destruir el proyecto de reforma constitucional aprobado después de la tramitación legal, con los quórum constitucionales por el Congreso Pleno, y reemplazarlo por el llamado “proyecto Vuskovic”. Este contiene ideas que nunca fueron formuladas válidamente durante la tramitación del proyecto, y que tampoco fue discutida en esta forma en el acuerdo CUT-Gobierno sobre participación de los trabajadores.

Sin entrar en el análisis jurídico que han hecho otros señores Senadores y que tendremos oportunidad de expresar al examinar cada una de las disposiciones, deseo recordar al respecto que si bien el Presidente de la República ha usado una facultad que nadie le desconoce, la de vetar, ha hecho un ejercicio abusivo de ella, ha llegado más allá, ha sobrepasado y excedido el límite. Esa inconstitucionalidad deberá ser declarada en el Senado.

El ex Presidente del Senado, Honorable señor Patricio Aylwin, nos envió una comunicación a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, la cual se hizo pública. La unanimidad de sus integrantes y también el Ministro de Justicia, convinimos en que, por la importancia de la reforma constitucional –que se la damos no sólo quienes la patrocinamos, sino que también la reconocen los que están en contra de ella–, la inconstitucionalidad no debía ser resuelta en ella, sino que debía ser conocida por la Sala, de modo que fuera la más alta autoridad, la voluntad mayoritaria del Senado, y no sólo una de sus Comisiones o uno de sus Presidentes, quien resolviera en esta materia,

sobre todo pensando en los efectos que produce declaración, de improcedencia por inconstitucionalidad, que mata la iniciativa.

Salida democrática al conflicto de poderes

Pues bien, al margen de la tramitación normal del proyecto, del pronunciamiento que el Senado, primero, y la Cámara de Diputados, después, adopten respecto de cada una de las observaciones, ya sea para aprobarlas, rechazarlas o declararlas inconstitucionales, se genera una diferencia de criterios entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República.

Hay dos formas de resolver tal diferencia. Una, por vías democráticas, constitucionales y honestas; y otra, por vías que no quiero calificar, pero que significan salirse de la Constitución, atropellar la ley, desconocer la voluntad mayoritaria de los chilenos y, lo que es más grave, hacer todo esto en forma hipócrita, revistiéndolo de formas legales a sabiendas de que se está faltando a la legalidad. No me referiré a esta última materia, porque espero que, en definitiva, el Gobierno no arrastre al Parlamento y al país a un enfrentamiento de Poderes, cuyas consecuencias nadie puede prever, y cualquiera persona responsable debe tratar de impedir. Deseo referirme a aquellos otros medios que son los honestos, democráticos y constitucionales. En primer lugar, está el acuerdo, fruto de la negociación política, que lo viene usando no sólo la Democracia Cristiana, sino todos los partidos, y no sólo ahora, sino desde que existe el Parlamento. A veces, para bien, y en oportunidad, para mal. A veces, en un sentido, otras en otro. Pero es parte del ejercicio de la función parlamentaria y en parte está incorporando a nuestra tradición democrática. Y aquí quiero recordar que, con conocimiento del resto de los partidos de Oposición –el Partido Nacional y la Democracia Radical–, hicimos gestiones con el Gobierno del señor Allende, a pedido de quien en esa época desempeñaba la Cartera de Justicia, don Manuel Sanhueza, precisamente para buscar solución que, salvando ciertos aspectos importantes para el Gobierno y respetando los fundamentos básicos de la reforma, superara el conflicto y facilitara la aprobación de la reforma. Esas gestiones, que posteriormente se hicieron públicas, lamentablemente no fructificaron. El Ministro de Justicia actuó con el respaldo del Presidente de la República y el conocimiento de los partidos de la Unidad Popular. Logramos un acuerdo completo detallado y escrito que tengo en mi poder, y que haré valer respecto de cada una de las observaciones. No obstante el veto que envié posteriormente no respetó ese acuerdo el Gobierno.

Repito que llegamos a un completo acuerdo, que evidentemente no significaba que otras materias no incluidas dentro del proyecto de reforma despachado por el Congreso no pudieran dentro de las limitaciones constitucionales y el ejercicio del derecho que le concede la Constitución, ser objeto de observación por el Presidente de la República, sin acuerdo con la Oposición, por ejemplo, alguna de aquellas materias que, habiéndolas propuesto oportunamente y válidamente, quisiera reponerlas por la vía del veto.

Quiero destacar la absoluta identidad de propósitos y la consecuencia política con que actuó en ese momento, no sólo el Ministro de Justicia de enton-

ces, don Manuel Sanhueza, sino también el Partido Izquierda Radical, al cual representaba en el Gobierno. Es también digno de destacar la actitud, firmeza de propósitos y consecuencia política de esa colectividad cuando, como recordó ayer el Honorable señor Juliet, abandonó las responsabilidades que le había entregado el Gobierno, al no prosperar el acuerdo entre éste y la Democracia Cristiana que permitía resolver un eventual conflicto de Poderes y, al mismo tiempo, hacer más eficiente y lograr incluso hasta la promulgación de la reforma constitucional que auspiciábamos.

En nombre de la Democracia Cristiana, al recordar estas conversaciones y ese acuerdo, quiero destacar una actitud política que muy pocas veces hemos observado en un partido que estuvo en el Gobierno, que fue llamado a él por Su Excelencia el Presidente de la República para cumplir determinadas tareas muy específicas, con un propósito muy claro, que no ocultó sino que hizo público, y que, al verse en la imposibilidad de cumplir, tuvo la honestidad y la decisión de abandonar el Gobierno y no sus principios.

Ahora bien, aparte el acuerdo, que lamentablemente entonces no prosperó y que hasta ahora que yo sepa, tampoco se ha logrado, hay otras maneras de proceder en forma honesta, democrática y constitucional. Por ejemplo, promulgando la reforma constitucional que en definitiva y después de conocer los vetos u observaciones, apruebe el Congreso Nacional.

Consulta popular: solución democrática

En tercer lugar, si se mantuvieran las discrepancias entre Gobierno y Oposición –repito– fundamentalmente en cuanto a la forma como se está realizando el proceso –por decreto y no por ley– y en cuanto a la dirección que lleva el traspaso del poder para el Estado, y no para los trabajadores–; si se mantuvieran dichas discrepancias al término del proceso normal y constitucional, el Presidente de la República tiene en sus manos el derecho que le reconoce la Carta Fundamental y cuyo ejercicio, en las actuales condiciones y coyuntura histórica, personalmente me parece una obligación moral política: Consultar al pueblo. Ese es el plebiscito. No a un tribunal, no a tres, cuatro o cinco ministros, sino a los tres o cuatro millones de electores, a los jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores y productores que constituyen el electorado nacional, que son los depositarios del poder de donde emana nuestra representación, y también, aunque indirectamente en este caso, la del Presidente de la República. Ellos son los llamados a resolver las diferencias entre el Ejecutivo y el Parlamento en materia de reforma de la Constitución.

¿Qué razón legítima podría existir en una materia tan importante para que al titular del poder se le impidiera el pronunciamiento? ¿Qué razón podría invocarse para que, habiendo diferencias graves entre Ejecutivo y Congreso en materias de reforma constitucional, y existiendo el expediente de la consulta popular, se omitiera este trámite? ¿Qué razón podría existir para que, habiendo una manera honesta, legal y constitucional de zanjar el problema, se produjera el enfrentamiento, se arrastrara al país a un conflicto de Poderes?

Recuerdo que hace algún tiempo, en todos los diarios –no sé si también en los otros medios de comunicación– apareció un cartel, pagado naturalmente por el Gobierno, que decía: “Igual que el 91”. En 1891 el país cometió un grave error, que llevó a un enfrentamiento cuyas consecuencias no sólo se pagaron en vidas, sino también en términos de progreso y desarrollo. No sólo murieron muchos chilenos; no sólo se creó un odio de generaciones entre compatriotas, sino que también la estrella de Chile comenzó a apagarse en nuestro país, que después de ser una de las colonias más pobres de España pasó a ser cabeza del continente; como nación independiente, empezó a conocer días mucho más oscuros en su historia. Pero entre entonces y ahora no sólo las circunstancias, los hombres y los partidos son diferentes; no sólo existe hoy día, como no existía entonces, entre los que no estamos en el Gobierno, la voluntad de producir y de llevar adelante los cambios, las transformaciones y la revolución que el país requiere para progresar y desarrollarse, sino que hay además, para resolver las diferencias entre los Poderes, una herramienta de que en aquel entonces no disponía. Y si hubiera existido, ¡caramba que habría sido distinta la historia de nuestro país! Esa herramienta se llama plebiscito. Y ahora este Gobierno, que se dice popular, y que se autocalifica como “Gobierno de los trabajadores”, tiene temor, y justificado, de consultar al pueblo. Y no lo quiere consultar porque se sabe minoría; porque sabe que el pueblo, si le preguntan si desea que el proceso se continúe o se lleve adelante por decreto o por ley, favorecerá la posición de la ley. Si le consultan si el Poder debe ser para los trabajadores o para el Estado, sin duda alguna que la gran mayoría de los chilenos, sobre todo los sectores popular, los trabajadores, votarán porque sea para los trabajadores. Pero entonces, si no quieren reconocer la voluntad popular mayoritaria y hasta incluso temen consultarla, ¿qué derecho, qué autoridad moral, desde el punto de vista democrático, puede tener el Gobierno para insistir, en el hecho, en las estatificaciones, requisiciones y tomas? ¿Cómo puede continuar imponiendo o tratando de imponer al país un esquema que la gran mayoría de los chilenos rechaza? Eso es llevar al enfrentamiento; eso es sembrar la violencia; eso es dividir a la ciudadanía; eso es crear odio que está separando a los chilenos y que puede durar por generaciones.

Quiero terminar estas palabras porque otros colegas de mi partido también desean intervenir. Me he permitido, una vez más en esta Corporación, expresar lo que es la esencia del proyecto, lo que nosotros queremos, y recoger también las críticas formuladas, porque no tememos al debate. Al revés, tenemos confianza en el debate, en el pluralismo de las opiniones. Creemos que ésa es parte de la riqueza de la democracia. Pero no aceptamos que se nos supongan intenciones o intereses personales. Aceptamos la crítica política, por dura que sea, pero rechazamos de plano los ataques personales que se lanzan para desvirtuar la esencia de lo que hemos propuesto.

Estamos proponiendo al país un camino para realizar los cambios; un medio para construir una sociedad donde realmente, en forma libre, organizada y responsable, los trabajadores ejerzan el Poder. Estamos proponiendo una vía que es la que tradicionalmente hemos seguido los chilenos: la de la Ley, la democracia y la convivencia pacífica.

Creemos que los cambios pueden y deben realizarse. Pero deben realizarse por la vía democrática, dentro del respeto a la Ley y a la Constitución, y sin crear esos factores negativos de odio y de violencia que lamentablemente, más allá de las palabras de nuestros gobernantes –probablemente, muchas veces, más allá de sus sanas intenciones– se están generando en el país.

Vengo llegando de una de las provincias que represento: Aisén. En estos momentos, no sé si los problemas que vive esa provincia están siendo solucionados por las autoridades competentes, como espero, o, al revés, si se está echando más leña a la hoguera de la violencia y el odio que algunos están desatando. En el fondo, la solución del grave problema de convivencia que amenaza turbar la paz en esa importante, aislada y alejada provincia de Chile, depende de que se cumpla la ley en el campo. Si ella se cumple, incluso los afectados, como sería el caso de muchos colonos –que por muchos títulos tendrían razón para protestar, pues otros Gobiernos los llevaron a esas lejanías, a esas tierras inhóspitas, para crear soberanía, para extraer de la tierra una posibilidad de cultivo y de riqueza, y que han prosperado a pesar de las grandes dificultades que han debido enfrentar– están dispuestos a aceptar el sacrificio que para sus intereses legítimos significa la aplicación de la reforma agraria. Pero esos colonos piden que se respeten los derechos que la ley les reconoce. Lo mismo pasa con los pequeños y medianos campesinos, los cuales están inquietos e inseguros frente a la acción de las autoridades que manejan la ley y que amenazan con desconocerles sus derechos. Igual piensa la gran mayoría de los campesinos, que desean que la ley se aplique rectamente, en forma auténtica, con la intención con que se dictó, o sea, para favorecerlos a ellos y para entregarles la tierra a través de sus cooperativas u organizaciones comunitarias.

La ley de reforma agraria recogió una prédica de muchos años: “La tierra es para el que la trabaja”. Si esta ley se aplica con autenticidad, como todavía –lo digo honestamente– espero que lo haga en esa provincia el propio Ministro de Agricultura, el problema en Aisén se soluciona. Si no es así, puede preverse lo peor.

En Chile, la ley ha sido el instrumento del cambio. La desconfianza que muchas de nuestras autoridades tienen en la ley, o esa cosa mañosa no de “aplicar la ley”, sino, como dicen, de usar “la ley”, que es muy distinto, es lo que precisamente puede llevarnos a quebrar nuestra tradición, nuestra convivencia; a romper el diálogo democrático entre todos los chilenos. Y nosotros queremos realizar cualquier esfuerzo para evitar que así ocurra. Por eso hemos presentado y estamos tramitando y defendiendo este proyecto de reforma constitucional.

Carlos Altamirano: Entrevista a *Chile Hoy*

(*Chile Hoy*, N° 5, 14-20 de julio de 1972)

CH. H.: Usted acaba de hacer un viaje a la Unión Soviética, con el fin de firmar convenios comerciales y financieros. ¿Qué juicio le merece el resultado de esta gestión, comparándolo además con la gira por China que realizó Gonzalo Martner (Chile Hoy 4), que fue calificada de muy positiva?

C. A.: Las comparaciones son siempre antipáticas, negativas. Más en este caso, en que es sabido que existen contradicciones serias entre la Unión Soviética y China. Por eso, voy a referirme exclusivamente al resultado de la gestión ante Unión Soviética, que podemos calificar de exitosa, sobre todo si nos atenemos a las condiciones en que ese país firmó los convenios comerciales, financieros y económicos con Chile. Hemos firmado tres tipos de convenios: uno de financiamiento de equipo y maquinarias industriales, agrícolas y mineras, que asciende a un monto de unos 115 millones de dólares a un plazo de doce años, con un interés del 2 y medio por ciento. Normalmente, estos créditos se conceden a ocho años y con una tasa de interés notoriamente superior: un 6, un 8 por ciento e incluso más.

El segundo convenio incluye créditos por alrededor de 105 millones de dólares, para financiar la construcción de varias plantas industriales, pesqueras, mineras, a un plazo de doce años, con un interés del 2 y medio por ciento y sin cuota al contado. Incluye también el correspondiente asesoramiento técnico.

Algunas de estas plantas ya están en condiciones de construirse.

Por ejemplo, el puerto pesquero; una planta de aceites básicos, que significará una economía de aproximadamente 8 millones de dólares anuales; una fábrica de paneles prefabricados de construcción; la ampliación de la planta eléctrica de Tocopilla, que abastece de electricidad a Chuquicamata.

Además, se firmó un tercer convenio, de intercambio comercial; esto es, de exportación de productos industriales, materias primas y minerales por un monto de alrededor de 170 millones de dólares anuales. Chile exportará a la Unión Soviética entre 80 y 100 millones de dólares, e importará de la URSS de 60 a 70 millones de dólares anuales. Con todo esto queda demostrado cómo es posible establecer un intercambio sustancial de productos entre Chile y la Unión Soviética, y los demás países socialistas, contrariando la afirmación de los reaccionarios. En síntesis, se han firmado convenios de financiamiento e intercambio comercial por una cifra aproximada a los 380 millones de dólares. Además, la Unión Soviética facilitó soluciones financieras extraordinariamente favorables para nuestro país. El conjunto de estos convenios nos lleva a calificar la gestión de exitosa.

CH. H.: Entendemos que los créditos permitirán importar bienes y equipos de la URSS. ¿Son estos equipos de peor calidad que los occidentales, como sostiene la prensa derechista?

C. A.: No se pueden hacer afirmaciones de carácter general en este terreno. Hay que atender al tipo de plantas o maquinarias. Las hay que tienen una tecnología más retrasada que la de los países capitalistas. Otras en cambio tienen el mismo nivel e incluso las hay de calidad superior. En materia de tecnología nuclear, por ejemplo, están a un mismo nivel, o incluso, a un nivel superior del de los países socialistas. Los barcos soviéticos son tan buenos como los españoles o yugoslavos y lo mismo ocurre con los aviones. Por eso, hay que analizar cada rubro en particular.

CH. H.: ¿Hubo alguna razón especial para que fuera usted precisamente quien presidiera la delegación a la URSS?

C. A.: La verdad es que desde un comienzo se había hablado de la necesidad de enviar a la Unión Soviética una misión del más alto nivel político. El Presidente de la República planteó que fuera presidida por el compañero Secretario General del Partido Comunista, Luis Corvalán, y por mí. Lamentablemente, el compañero Corvalán se enfermó. En su reemplazo fue designado José Cademartori.

Es necesario aclarar que en la Unión Soviética, ese alto nivel lo dan, más que los cargos de gobierno, las responsabilidades dentro de los partidos políticos. Por ello, en la URSS, el primer rango lo tiene Brezhnev, que es el Secretario General del Partido Comunista. La escala de valores políticos es distinta. En las democracias burguesas, valen las jerarquías burocráticas o parlamentarias. Incluso en el propio Partido Socialista, cuando se envía un miembro del Comité Central a un determinado acto no se le presta la consideración que corresponde. En cambio, si se manda a un parlamentario que no tiene una función dentro de la dirección del partido, a éste sí que se le da un trato especial.

CH. H.: En una entrevista a la revista de su partido, "Posición", usted manifestó dudas acerca del éxito de las conversaciones con la DC. ¿Cuál es su criterio en este momento?

C. A.: El mismo que tuvimos durante las conversaciones y cuando ellas se promovieron. El PS pensaba que estas conversaciones estaban inevitablemente destinadas al fracaso, debido a que dentro de la DC prevalecen los sectores reaccionarios, freístas, vinculados a los grandes monopolios.

La idea del PS era no sumergirse en una serie de cábalas, arreglos de pasillo, entendimientos dudosos, discutibles, sino plantear derechamente, ante el Congreso, la opinión del Ejecutivo y, si esta opinión era rechazada por la mayoría parlamentaria reaccionaria, acudir al Tribunal Constitucional y, en último término, ante el propio pueblo, a través del mecanismo del plebiscito. En relación con esto, hay tres temas que para nosotros son fundamentales: que toda empresa de un capital y reservas superior a 14 millones de escudos debiera ser nacionalizada, en condiciones ventajosas para Chile; que

la cabida máxima para efectos de la reforma agraria debiera ser reducida de 80 hectáreas del riego básico a 40 hectáreas y que debiera introducirse en la Carta Fundamental, como garantía constitucional, la participación de los trabajadores en todos los niveles de la vida nacional. De esta manera a la DC no le quedaba sino una alternativa honesta: o aprobar el proyecto que contiene medidas que ellos dicen defender o rechazarlo, en cuyo caso podría convocarse a un plebiscito nacional.

Nuestra concepción fue rechazada y aprobada en cambio la del resto de los partidos de la UP, que prefirieron el entendimiento con la DC. Sin embargo, los hechos nos han dado la razón.

CH. H.: ¿Por qué le parecía previsible ese fracaso?

C. A.: Porque, dado el cambio cualitativo en la correlación de fuerzas que se produjo en el país a contar del 4 de septiembre de 1970, la unión entre el PN y la DC pasó a ser un hecho irreversible. A nuestro juicio, es imposible que el PN pretenda tener una política propia e independiente de la DC. Al igual que nos parece imposible que la DC pretenda liderizar una política autónoma de la derecha. Ambas fuerzas se necesitan, y aunque tengan diferencias, aunque en ciertas circunstancias aparezcan en posiciones opuestas, en definitiva no pueden prescindir la una de la otra. También pudimos prever que, frente a la federación de partidos de la UP, la DC, pese a las declaraciones hechas contra la derecha tradicional, se vio obligada a unirse con ella en una federación de partidos. Los hechos, una vez más, nos dieron la razón. Hasta la elección de 1970, las fuerzas políticas chilenas estaban divididas: un tercio seguía a la derecha tradicional; otro a las tendencias reformistas de la DC y otro a las posiciones revolucionarias, expresadas fundamentalmente por los partidos socialistas y comunistas. Esto se dio en las elecciones presidenciales de 1958.

En 1964, Frei y la derecha unidos consiguieron el 54 por ciento de los votos, y con los de Julio Durán se llegó a un 60 por ciento, cifra un poco inferior a los dos tercios del electorado. El tercer restante lo obtuvo Salvador Allende. Igual ocurrió en las posteriores elecciones complementarias de parlamentarios. En las elecciones presidenciales de 1970, los resultados fueron también, en mayor o menor medida, de un tercio para la izquierda, un tercio para la derecha y un tercio para la DC. Pero a contar de 1970, el electorado tiende a polarizarse en dos grandes conglomerados: uno de izquierda y otro de derecha.

Con esta polarización de fuerzas la UP logró en la última elección municipal aproximadamente el 50 por ciento de los votos; en la complementaria de Valparaíso, el 49,5 por ciento; en las de O'Higgins y Colchagua, y Linares, cerca del 46 por ciento; en la Universidad, el 49 por ciento. Lo mismo ocurrió en la reciente elección de la FECH, en que la UP más el FER y otros sectores de la izquierda obtuvieron alrededor del 50 por ciento y en la Universidad Técnica más del 60 por ciento de los votos. Estoy seguro de que en la complementaria de Coquimbo también obtendremos más del 50 por ciento. La derecha ya no se puede permitir el lujo de dar una batalla dividi-

da frente a la UP, a las fuerzas revolucionarias. Por eso, no hay ninguna posibilidad de que la DC, que pretende ser una alternativa civilista el año 76, abandone como partido sus vínculos con la derecha. A lo sumo podrá sufrir nuevas escisiones de grupos honestamente revolucionarios que se sumarán a la izquierda.

CH. H.: Utilizando sus mismos argumentos, ¿no hay un riesgo muy grande en citar a plebiscito, sabiendo que se cuenta sólo con un 49 por ciento?

C. A.: Evidentemente, hay un riesgo, pero creemos que todo proceso revolucionario debe asumir ciertos riesgos. Tanto el proceso soviético, como el chino, el cubano, o la propia guerra de liberación que está librando el pueblo vietnamita, han enfrentado, día a día, riesgos extraordinariamente graves. Los procesos revolucionarios necesitan correr ciertos riesgos, afrontar situaciones dramáticas. Son ellos los que contribuyen a crear conciencia. Pensamos además, que, si el plebiscito se plantea en torno de temas tan concretos y reales como la ampliación del área social, la ampliación y profundización de la reforma agraria y el establecimiento, en forma concreta y constitucional, de la participación de los trabajadores en todos los niveles de la vida nacional, se motivaría a obreros, campesinos y a importantes sectores que no son propiamente de trabajadores.

Este 40 ó 50 por ciento que tiene actualmente la UP podría transformarse, en un porcentaje mayor. Tanto es así, que la DC y el PN han eludido permanentemente los emplazamientos que el Partido Socialista les ha hecho. Han evitado que el plebiscito se produzca en torno de estos temas que hemos señalado. Por otra parte, es necesario decir que si nuestras fuerzas son cuantitativamente semejantes, cualitativamente nuestro potencial revolucionario es enorme: las elecciones de la CUT han demostrado que contamos con el apoyo de dos tercios de los trabajadores chilenos. Este potencial revolucionario fue revelado también por la marcha popular efectuada en respuesta a la marcha reaccionaria en Santiago. Contra lo que muchos prevenimos, el extraordinario número de asistentes, sobre medio millón de personas, su actitud combativa, su clara conciencia de clase, prueban cómo cuando se apela a las masas, al pueblo, éste sabe responder.

CH. H.: ¿No hay una contradicción entre el estilo con que se han realizado las conversaciones con la DC y el mismo cónclave de la UP y el continuo llamado a una mayor participación de las masas, que hacen los dirigentes de izquierda?

C. A.: No quisiéramos aparecer criticando lo hecho por la UP a posteriori, a pesar de que, como es de conocimiento público, nosotros estuvimos en contra de este tipo de conversación.

Ellas obedecen a un estilo convencional, tradicional, para manejar la política. No es en los pasillos del Parlamento, ni en lugares privados donde deben materializarse acuerdos frente a situaciones concretas. Concebimos estas conversaciones, como se ha dicho muchas veces, de cara al pueblo. El Gobierno expresó su opinión a través de los vetos. Correspondía a la DC, públicamente, en una declaración, manifestar en qué condiciones podría aprobarlos

o rechazarlos y así se evitarían situaciones confusas como las que estamos presenciando. La DC alega que no ha transigido, ni renunciado a principios que le son fundamentales; que no habría llegado a ningún compromiso. Por otra parte, la UP argumenta que sí hubo acuerdo con la DC, que ésta efectivamente hizo concesiones importantes, como la nacionalización de las 90 empresas, y la mantención de las facultades de la CORFO para adquirir empresas. Todas estas situaciones ambiguas, que se prestan a interpretaciones diferentes, podrían haber sido obviadas si la discusión se hubiera realizado públicamente ante la faz del país.

A nuestro juicio, en el pasado, cuando los problemas que se debatían eran relativamente adjetivos y accesorios, y correspondían sólo a los intereses subalternos de las clases dominantes, era posible que esta política parlamentaria de pasillo rindiera frutos. Pero ahora, cuando la lucha de clases arrecia, cuando existen intereses que entran frontalmente en pugna, cuando se trata de cuestionar la propiedad privada, el monopolio, el latifundio, los derechos de grandes consorcios extranjeros en nuestro país, es utópico, y a nuestro juicio un tanto infantil, suponer que puede tener éxito este estilo tradicional y anacrónico, aun contando con la buena intención de algunos personeros de la DC.

CH. H.: ¿Cree usted que el propio PS tiene un estilo distinto?

C. A.: El PS forma parte y es producto de la sociedad chilena. En consecuencia, en alguna medida tiene los mismos vicios y virtudes de nuestra sociedad. No somos ajenos a este estilo de entenderse burocrática, superestructuralmente; pero el partido está consciente, desea superar esto, aun cuando tomará tiempo hacerlo porque no es fácil superar viejas costumbres, erradicar hábitos viciados, suprimir estilos convencionales que secularmente han dominado la vida política nacional.

Ha sido un afán nuestro modificar, dentro del partido y en la UP, estos viejos vicios, tan consustanciales a la vida chilena. Pero la tarea es difícil. Nos encontramos con militantes que imponen sus conveniencias políticas y personales sobre los intereses de la revolución; incluyendo militantes de nuestro propio partido que en lugar de interesarse por el proceso revolucionario aparecen afanosos por adquirir ciertas situaciones hegemónicas en la administración pública. Lo que debe preocuparnos, en cambio, es realizar nuestro compromiso con el proceso revolucionario. Afortunadamente, y es muy positivo, dentro del PS y de la UP, hay conciencia de ello. Es un tema que permanentemente está aflorando, aunque en forma un tanto teórica todavía, pero esto es ya el primer paso, y es fundamental superar este problema si realmente queremos darle un carácter auténticamente revolucionario al proceso de cambios sustanciales que vive nuestro país, que para mí no es todavía un proceso revolucionario.

CH. H.: Pero usted habla de un proceso "sustancial" de cambios, no de un proceso "revolucionario". . .

C. A.: No es revolucionario porque falta una participación más efectiva de la clase obrera y de los campesinos, un cambio de la mentalidad. Son éstos

los elementos que modificarían cualitativamente el proceso. No basta nacionalizar el cobre o estatizar los bancos. Es la forma, el estilo, el contexto en que se dan las medidas, el marco del que se rodean, lo que confiere un carácter propiamente revolucionario a tales medidas.

CH. H.: El Presidente de la República y Fidel Castro han definido este proceso como revolucionario. ¿Usted discrepa con ellos?

C. A.: No creo que deba hablarle de discrepancias. Son tonalidades, énfasis, matices distintos. Evidentemente, si uno mide este proceso por lo que se ha hecho, debería hablarse de un proceso revolucionario. Sólo la recuperación de nuestra riqueza básica, al margen de lo que significa para Chile, tiene una repercusión mundial y un efecto ejemplarizante, incalculable para el resto de los países subdesarrollados. El problema está en la forma en que se ha hecho y esto no quiere decir, como sostienen algunos ultristas, que si no hay violencia física no hay revolución. No participo de ese criterio. Es posible, dentro de las infinitas variantes que abre la historia, que se den procesos con carácter revolucionario sin que haya violencia física. No es el carácter armado de un proceso lo que esencialmente lo define como revolucionario. Hay múltiples ejemplos de procesos armados que no han tenido nada de revolucionarios.

CH. H.: Pero el caso inverso ¿se ha dado?

C. A.: Hasta el momento no. No ha existido un proceso que sea a la vez auténticamente revolucionario y pacífico. Pero esto no podría descartarse en forma absoluta, aun cuando no sea lo más probable.

CH. H.: Y usted, como dirigente de un partido obrero, ¿cree que está dentro de ese estilo que reclama? ¿Por qué no va más a las fábricas, a los campos?

C. A.: Justamente por la maraña política en que estamos atrapados, que significa estar 17 a 18 horas diarias participando en reuniones de distinta naturaleza. Lo lógico y consecuente con lo que he dicho sería que yo, como secretario general del PS, y los demás dirigentes, tuviéramos un contacto mucho mayor con los obreros, los campesinos, los trabajadores. El engranaje en que nos hemos metido nos tritura. Pero espero que podamos superar estas deficiencias.

*CH. H.: ¿Se abre a su juicio una nueva etapa para la UP?
¿En qué debería consistir?*

C. A.: Sí, precisamente durante el cónclave de Lo Curro señalamos que era necesario entrar a una nueva etapa, de profundización del proceso y que ella debería caracterizarse por cambios en el estilo, en las medidas por adoptar y en los hombres que encabezaran esta nueva fase del proceso. Planteamos la necesidad de reestructurar la forma amplia el gabinete y los mandos medios de la administración pública. También planteamos la necesidad de enviar al Parlamento proyectos de ley de probidad administrativa, facultades económicas extraordinarias, delito económico. También sostuvimos que era

necesario un readecuamiento de la política económica; que ella había sido justa y sus objetivos (absorber la cesantía, reactivar la economía, redistribuir el ingreso) se habían logrado; ahora había que ir a un aumento de la inversión, un reordenamiento en el comercio exterior, desde el mercado norteamericano al de los países socialistas y del resto del mundo capitalista, tarea que se está cumpliendo en estos momentos, especialmente con los convenios de que hablamos. En suma, es necesario entrar a una nueva etapa, no de consolidación, sino de profundización y desarrollo del proceso. Creemos que ambas posiciones no son contradictorias. Es perfectamente posible avanzar, pero sin descuidar el manejo eficiente de las empresas del área social, la capacidad de los funcionarios y la planificación de la economía.

CH. H.: El Partido Socialista acaba de aceptar la idea de la federación de partidos, pese a que antes hubo resistencias. ¿Cómo debe interpretarse esto?

C. A.: Es cierto que el partido no miraba con buenos ojos la constitución tan rápida de un partido federado, sobre todo cuando existía la posibilidad de establecer pactos electorales que, en medida importante, venían a resolver el problema de la pérdida de votos de los distintos partidos al ir separados. Sin embargo, en definitiva cambiamos nuestra posición, considerando entre otros, el hecho de que siempre hemos sido partidarios de que los intereses de clase en pugna se expresen a través de grandes fuerzas políticas unidas en torno de programas y concepciones comunes. No creemos conveniente, para el desarrollo político nacional, la atomización de los partidos, grupos o grupúsculos. Por eso, desde hace tiempo sostuvimos la idea de que los partidos más afines dentro de la UP se aglutinaran en organizaciones comunes, para ir así lentamente a la estructuración del gran partido de la revolución chilena. Es una tarea difícil. Todavía no están dadas las condiciones objetivas. Pero debemos iniciar el camino hacia esa meta: la creación del partido único es la mejor forma de lograr una conducción política revolucionaria, efectiva y orgánica para llevar a cabo la gran tarea histórica de construir el socialismo en nuestro país.

CH. H.: ¿Cuál es el más grande error cometido por el Gobierno desde el 4 de noviembre de 1970?

C. A.: Es difícil señalar el error básico. Fue un error no haber negociado de inmediato, al día siguiente de asumir, la deuda externa, para que el país tuviera conciencia del grado de endeudamiento al que le habían dejado sometido las fuerzas reaccionarias y para evitar que se gastara parte importante de la reserva en servir la deuda externa. La reacción se ha encargado de crear la imagen de que este Gobierno ha despilfarrado las reservas, cuando no ha hecho otra cosa que pagar las deudas que ellos dejaron. Dicen que entregaron el país con 400 millones de dólares de reservas, pero callan que también lo entregaron con 4.200 millones de deudas. Es decir, hablan del activo pero olvidan el pasivo.

El error político mayor fue no haber llamado a plebiscito, planteando la disolución del Congreso, al día siguiente de la elección municipal, lo que ha-

bría permitido un cambio cualitativo en las fuerzas que se expresan a través del Congreso. Esta debilidad ha venido expresándose hasta hoy, lo que revela cierta desconfianza en las masas.

CH. H.: Con respecto al imperialismo, ¿cree usted que hemos desarrollado la mejor política?

C. A.: No, creo que se ha adolecido de algunos defectos que son propios del carácter del proceso, y que se manifiestan en cierta debilidad para denunciar la conducta del imperialismo frente a Chile. Este ha cambiado sus métodos, no aparece agrediendo, pero de hecho lo está haciendo. Estados Unidos ha negado totalmente los créditos a nuestro país; ha adoptado una serie de actitudes, tanto en la negociación de la deuda externa como en otras ocasiones, que nos colocan en situación difícil. Y no hemos tenido la suficiente dureza y claridad para responder a esos ataques. Los hechos relativos a la ITT fueron menos conocidos en Chile que en el extranjero. Y en el propio Estados Unidos, la conducta de la ITT fue condenada de manera mucho más enérgica que aquí. No se lanzó una campaña para crear una conciencia nacional contra la intervención flagrante de un monopolio internacional en la política interna chilena y la complicidad de ciertos chilenos con esos manejos. La conducta ha sido débil y ahora mismo, en la propia prensa de izquierda no se ha denunciado suficientemente el nuevo plan que había urdido la ITT contra este Gobierno. Por eso, en el Partido Socialista estamos planteando la idea de reivindicar el primitivo proyecto del MAPU de confiscar los bienes de la ITT y no expropiarlos; vale decir, privarles de indemnización, como medida punitiva por la intervención flagrante en la vida nacional.

Lo mismo ocurre en el plano nacional: tanta conciliación y cada día están más insolentes: la Corte Suprema dicta fallos increíbles todos los días; nos acusan al Ministro Tohá, a Del Canto, a Joignant; actúan inconstitucionalmente frente a los vetos; forman el partido único de la reacción. Y mientras tanto, seguimos conversando, buscando un entendimiento con la gente de la DC que puede tener más o menos buena voluntad, que sin duda la tiene, pero que carece de una concepción marxista-leninista. Para el marxista es fundamental la existencia de la lucha de clases, que no se resuelve en actitudes versallescas, de estilo convencional. Aquí hay que acudir a las masas, apoyarse en ellas, pero no en forma irresponsable sino organizada.

CH. H.: La crisis política actual parece afectar de manera especial al Partido Socialista. ¿Se debió a eso la convocatoria al pleno extraordinario?

C. A.: La convocatoria no se debió a la crisis política, porque en primer lugar, esa crisis no existe dentro del partido. El objeto fue informar sobre el cónclave y el contenido de las conversaciones con la DC. Claro que, evidentemente, en el partido hay tendencias distintas que enfocan de manera diferente los acontecimientos políticos. Sería una falsedad sostener que en el Partido Socialista existe una unidad de criterio absoluta. Hay diferentes posiciones y yo creo positivo este hecho: demuestra que hay vida interna, que hay lucha ideológica. En un momento tan crítico para la vida chilena, tan tras-

cedente, no puede existir un solo criterio, una sola opinión para enfocar el proceso. La prensa reaccionaria supone que estas diferencias se expresarían entre los seguidores de Aniceto Rodríguez y los seguidos de Carlos Altamirano. Está total y absolutamente equivocada. Las diferencias se están dando en un plano legítimo, en un plano ideológico, para apreciar la situación política y buscar soluciones. Esto no es grave. En nuestra colectividad existe un profundo sentido partidario y los militantes están conscientes de la trascendencia del momento político que vive Chile.

Ahora bien, al margen de estas legítimas diferencias, sólo me preocupa la aparición de un cierto espíritu que calificaría de irresponsable. Me refiero a ese militante que ante la primera dificultad dice: “las cosas están difíciles, nos vamos”; si hay discrepancias con el Partido Comunista, entonces “rompemos la unidad con los comunistas”; si surgen diferencias dentro de la Unidad Popular, “rompemos la Unidad Popular” y esos militantes no se dan cuenta de lo que está en juego. ¿Qué hubiera pasado si Lenin, si Mao, si Fidel Castro, ante la primera dificultad hubieran abandonado la pelea? Pienso que el espíritu que debe dominar en la Unidad Popular es el de que aquí debemos y tenemos que vencer.

Recuerden ustedes el lema de la revolución cubana: “Patria o muerte, venceremos”. De eso se trata en este momento.

CH. H.: En cuanto al futuro de este proceso, ¿cómo lo ve usted?

C. A.: Soy optimista, en la medida en que podamos realizar un cambio sustantivo en el estilo, en la mentalidad, en los métodos. . . No lo veo fácil. Pero si eso se logra, las reservas que hay en la masa son inmensas. No debemos dejarnos arrastrar al terreno de la derecha, a la lucha parlamentaria; que si nos dan esta ley o no la dan; que si autorizan esta expropiación o no la autorizan; que si la Corte Suprema dictamina esto o esto otro.

”Lo que importa es una efectiva movilización de la masa, pero de manera organizada y responsable, porque no se trata aquí, por otra parte, de caer en el espontaneísmo. El espontaneísmo es muy fácil, pero también muy irresponsable.

En la medida que el proletariado asuma su tarea de conducir efectivamente este proceso, las posibilidades de continuar avanzando son muy grandes”.

Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR/MIR): Acta de creación del Consejo de Pobladores de Lo Hermida

(24 de julio de 1972)

A los obreros, campesinos y pobladores:

1. Los pobladores de los campamentos Vietnam Heroico, Lulo Pinochet, Los Lagos y del Comité Sin Casa “Trabajadores al Poder”, nos hemos movilizado hoy, para desenmascarar a la opinión pública y en especial a nuestros hermanos de clase, la situación por la cual atravesamos.

2. Señalamos que los responsables de esta situación son los dueños de las fábricas y fundos que por años han explotado obreros, campesinos y pobladores. Estos señores son los que hoy viven en lujosas viviendas, mientras nosotros nos debatimos en la miseria. Estos señores son los que crearon todo un sistema de dominación compuesto por el Parlamento, el Poder Judicial, la Contraloría y la burocracia de los ministerios, desde donde atrincherados atacan a obreros campesinos y pobladores.

3. Señalamos también que los burócratas y malos funcionarios del Gobierno aparnados en el Ministerio de la Vivienda, no han sido capaces de solucionar estos problemas.

Hoy día 2.000 familias del sector Lo Hermida no tenemos una solución definitiva, por la ineptitud de estos organismos que, sin conocer nuestra realidad, dictan una orden burocrática que obliga salir a 700 familias de sus actuales terrenos y dejan sin solución a 1.300 pobladores de Lo Hermida.

4. Pero nosotros, los pobladores, ya nos cansamos de las tramitaciones y de las mentiras de los burócratas y lucharemos combativamente hasta el final para conseguir nuestros objetivos.

5. Por lo tanto exigimos:

- Expropiación inmediata de los terrenos que hoy se ocupan y el paso de las viñas (hoy inservibles) para la construcción de viviendas.

- Exigimos la discusión en el terreno mismo, con los pobladores y organismos directivos, responsables de la solución de las 700 familias afectadas y la descentralización de los organismos de la vivienda por comunas.

- Aplicación inmediata de la Operación Invierno.

- Empalmes eléctricos populares y mínimo de urbanización.

- Policlínicos.

6. Señalamos que nuestra lucha no termina aquí, sino cuando los obreros, campesinos, pobladores, estudiantes y soldados destruyan al sistema burgués y se generen los organismos de poder proletario.

2778 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

Hoy nos proponemos la creación del Consejo Local de Pobladores de Lo Hermida, teniendo como organismo máximo de dirección, la Asamblea de Pobladores.

CASA O MUERTE!

24 de julio de 1972.

Campamento Vietman Heroico

Campamento Lulo Pinochet

Campamento Los Lagos

Comité Sin Casa "Trabajadores al Poder".

www.cepchile.cl

Kalki Glauser (MAPU):
Unidad en lo táctico, lucha en lo estratégico
Documento de discusión interna de la Comisión de Propaganda
del Segundo Congreso

(Julio de 1972)

Introducción

El folleto “Unidad en lo táctico, lucha en lo estratégico” fue escrito a principio de julio último y entregado entonces a la Comisión de Programa, la cual aprobó su publicación interna en el partido. Desde entonces hasta este momento –en que efectivamente se publica– han transcurrido ya cuatro meses, ricos en acontecimientos. Resulta pues imprescindible recoger, aunque sea muy brevemente, lo que estos meses agregan a la perspectiva planteada.

No parece exagerado afirmar que las tesis centrales que “Unidad en lo táctico, lucha en lo estratégico” plantea, se han visto, o bien confirmadas o bien fortalecidas por los hechos. Ya nadie pondría en dudas después de las alzas de agosto y de septiembre, que el cambio de los ministros Vuskovic y Zorrilla, por Millas y Matus, no fue un mero cambio de hombres, sino un vuelco radical en la política económica del Gobierno (ver párrafo 34). Ni nadie podrá negar que las corrientes centristas en el interior de la Unidad Popular han vuelto de nuevo a imponerse durante la “crisis de octubre”, desembocando en un “gabinete cívico-militar” que prefigura un régimen de “democracia avanzada” susceptible de cristalizar después de las elecciones de marzo de 1973 (ver párrafos 48 y 49). La imagen misma del régimen egipcio como fuente de inspiración y reflexión parece cobrar hoy más validez que nunca (ver párrafo 44).

Pero lo realmente importante es esbozar las líneas explicativas del curso que han seguido los acontecimientos en estos cuatro meses:

a) La política de Millas logró imponerse, en Lo Curro, en el plano económico. Su eje central no era, como muchos creyeron al comienzo un estancamiento del avance del área social (ver párrafos 17 al 22). Consecuencia necesaria de una política de esta especie –política que se concretó en las espectaculares alzas de los últimos meses y en la ley de reajustes– es la disminución de la capacidad de consumo de los sectores de más bajos ingresos, pero no así de la demanda de los sectores de ingresos altos, que disponen de una gran cantidad de dinero acumulado. A raíz de ello, el Gobierno Popular perdió considerablemente respaldo entre las masas populares más pobres, debilitándose por ese lado su base de apoyo social y generándose un amplio descontento (ver párrafo 28).

b) Pero si la línea centrista pudo imponerse en el terreno económico durante el período de Matus y Millas, ello no significa que triunfase en todos sus aspectos. En particular, los intentos de llegar a un entendimiento con la Democracia Cristiana fracasaron, y con ello falló también el aval político que podía realmente “dar

garantías” a los “sectores medios”, en el sentido de que lo que para ellos es esencial seguiría existiendo: en el sentido de que el carácter burgués del Estado no sería roto, por el contrario, las corrientes socialistas siguieron expresándose con fuerza en el seno de la UP y en la labor concreta de masas. Todo lo cual, lejos de cimentar la soñada alianza con la pequeñaburguesía, pequeños y medianos capitalistas y otras “capas medias”, llevaron el escontento de estos sectores a su máxima expresión (ver párrafo 24).

c) Por otra parte, en el campo de la Oposición, la alianza electoral entre el PN y la DC, al interior de la Confederación Democrática, condujo a una situación en que los sectores reformistas se vieron cada vez más arrastrados por la Derecha monopólica, forzados a una competencia constante por obtener el galardón del “más duro” frente al Gobierno. Al mismo tiempo, los sectores que representan la burguesía monopólica, viéndose de todas maneras perdidos después de marzo, ya de obtener un 67% de la votación resulta casi imposible para la Oposición, y ya que de obtener menos pueden abrirse paso las perspectivas de democracia avanzada o de socialismo, que envuelven ambas una liquidación de los monopolios privados, estos sectores se orientaron cada vez más hacia una salida de derribamiento violento del Gobierno antes de marzo (ver párrafos 39, 44, 45). Por otra parte, la ambigüedad estratégica de la UP, incapaz de implementar con eficiencia ni una política definitivamente centrista, ni una política definitivamente socialista, llegó a un climax después de las alzas de agosto y septiembre, urgiendo una opción entre ambas. Los sectores reformistas o “progresistas” del PDC hallaban, pues, también, una ocasión propicia para forzar un camino centrista antes de marzo y fortalecer así sus perspectivas electorales y postelectorales (ver párrafos 38 y 39). Las dos líneas fundamentales de oposición –la reaccionaria y la reformista– encontraron así, en octubre, un punto de coincidencia táctica.

d) Todos los fenómenos anteriores son los que desencadenaron la llamada “crisis de octubre”. La Derecha monopólica e imperialista desplegó una ofensiva a fondo orientada a derribar al Gobierno, utilizando como batallón de asalto a los gremios de la pequeñaburguesía camionera y comercial y arrastrando tras de sí a la Democracia Cristiana. La crisis derivó pronto en una situación revolucionaria. En efecto, el plan de la burguesía monopólica era crear un caos social en que el desborde incontrolado de las masas y la incapacidad del Gobierno para mantener el orden público y hacer funcionar la economía, obligasen a las Fuerzas Armadas a intervenir; posteriormente, ellos podrían presentarse como los únicos “garantes del orden”. Pero la organización popular de base, las masas populares organizadas, frustraban esa expectativa, puesto que lograron impedir la paralización de la economía y demostraron una disciplina que no dio pretexto a ningún desborde. Todo ello llevó a una situación en que las Fuerzas Armadas aparecieron al lado del pueblo y del Gobierno y en que la burguesía parecía no poder salir airosa de la crisis sin un cambio radical en su forma de dominación, es decir, sin sacrificar definitivamente a su fracción monopólica. A la vez, el poder popular que las masas gestaron durante la crisis y la desarticulación de hecho del funcionamiento “institucional” del Gobierno, creaban la posibilidad de dar un gran salto adelante, de avanzar con

decisión en la destrucción del carácter burgués del Estado y en la edificación de un Estado proletario en ciernes. Dos salidas se abrían así ante la crisis: o avanzar con fuerza en un sentido antemano en esa perspectiva estratégica y que tuviese la suficiente madurez y fuerza para dirigir a las masas. Ahora bien, tal conducción no socialista, impulsando y apoyándose en el poder popular de masas (que no tiene por qué excluir a las Fuerzas Armadas), o buscar algún tipo de transacción indirecta con el sector no monopolístico de la Oposición, mediante la incorporación de las Fuerzas Armadas al Gobierno Popular, como garantía de que “los cambios” seguirían desarrollándose dentro de los marcos del “Estado de Derecho” burgués.

e) Avanzar en un sentido socialista envolvía, por cierto, todos los riesgos de una definición de fondo. En particular, amenazaba con desatar una guerra civil en que era posible triunfar definitivamente, pero también perderlo todo. Lo fundamental, sin embargo, es que requería una conducción política revolucionaria, socialista, que se hubiese planteado de existía, estaba y está en un estado incipiente. De allí que terminase imponiéndose la salida de la transacción, buscada dentro de la UP por el centrismo y fuera de la UP por la Democracia Cristiana. Pero esa transacción no podía hacerse directamente, pues habría roto tanto a la DC como a la UP. La única fuerza capaz de garantizar una transacción eran las Fuerzas Armadas. Sólo ellas podían, a la vez, garantizar a la UP que seguiría el avance contra los monopolios y contra el imperialismo, y garantizar a la DC la subsistencia del Estado burgués. Sólo las Fuerzas Armadas podían nuclear en torno suyo una solución de centro, que rechazase a la vez el “extremismo monopolístico” y el “exterminio socialista”, y evitase una guerra civil, cosa en la que, por lo demás, están más interesadas que nadie, allanando el camino de la paz social, del “consenso” mayoritario de los que están por “los cambios”, dentro y fuera del Gobierno, pero de unos cambios que respeten “la ley, el pluralismo y la democracia”, vale decir, que no amenacen la estabilidad del aparato del Estado burgués y de su sistema institucional (ver párrafos 37, 42, 43, 48, 49, 52).

f) La crisis de octubre tuvo pues un desenlace “cívico-militar”: la incorporación de las Fuerzas Armadas, como tales, al Gobierno Popular. No cabe duda de que este hecho marca un quiebre importante en la marcha de la UP. Por un lado, fortalece al Gobierno en un sentido antimonopolista y antiimperialista. Pero, por otro lado, frena sus posibilidades de avance socialista, afirma el carácter burgués del Estado. Con estas características, el nuevo Gabinete cívico-militar favorece, dentro de la UP, las tendencias centristas, y tiende, más allá de la UP, un puente de plata a través del cual puede ejercerse la constructiva “oposición” de una DC colaboracionista después de marzo de 1973. El gabinete cívico-militar pareciera pues pavimentar el camino de la “democracia avanzada”, bloqueando las perspectivas socialistas tanto como las reaccionarias. Pero no todo está tan claro sin embargo. La derecha monopolística no se ha dado por vencida, y juega ahora a agudizar las contradicciones entre las Fuerzas Armadas y la UP, al mismo tiempo que aprovecha el descontento de la aún no enfrentada crisis económica y trabaja subterráneamente para introducir cuñas en la disciplina de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la Democracia Cristiana no

puede darse por satisfecha hasta conseguir una “depuración definitiva de la UP de todos sus elementos socialistas”; la consolidación de un capitalismo de Estado de nuevo tipo exige para ella la opción definitiva de la UP por una línea centrista, lo cual pasa por agudizar las contradicciones entre los sectores socialistas y los sectores centristas de la coalición de Gobierno, buscando su radical separación. Los sectores socialistas, por su parte, han salido, de todos modos, fortalecidos de esta crisis, y cuentan todavía con una considerable capacidad de maniobra, en especial en el terreno económico y en el incipiente poder popular de masas, como para intentar todavía, desde dentro del Gobierno, impulsar una perspectiva revolucionaria. En cuanto a nosotros, el MAPU, nuestra tarea ha de ser ahora:

HOY MAS QUE NUNCA:

- DESARROLLAR EL PODER POPULAR DE MASAS.
- APLICAR, DESDE LAS MASAS Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA LA POLITICA QUE DEFENDIMOS EN LO CURRO
- FORJAR EL PARTIDO PROLETARIO.

Kalki Glauser R.

15 de noviembre de 1972

A. De la victoria de septiembre al Cónclave de Lo Curro: avance en lo económico, estancamiento en lo político

1.- En 18 meses de Gobierno Popular hemos avanzado hacia el socialismo. La nacionalización del cobre, el surgimiento de un área social de la economía, los progresos de la reforma agraria, el hecho mismo de que un Gobierno con declarados propósitos revolucionarios haya podido sostenerse – a pesar de las maniobras sediciosas, de la oposición de otros poderes del Estado y del encubierto bloqueo imperialista– son prueba elocuente de ello. Prueba de que, efectivamente, “el Gobierno de la Unidad Popular *puede y debe* convertirse en la etapa inicial de una revolución *socialista*”¹ en nuestra patria. Prueba de que la meta revolucionaria socialista no es, hoy en Chile, ninguna lejana utopía inalcanzable.

2.- Hemos avanzado, pues, hacia el socialismo. Pero, ¿qué significa avanzar hacia el socialismo? Nada menos que ir *destruyendo*, desarticulando *la forma capitalista* de funcionamiento de la economía, del Estado, y del resto de la vida del país. Nada menos que ir terminando con la “normalidad” capitalista, o lo que es igual, dicho en el lenguaje de la burguesía, “anarquizando el sistema vigente”². Y en nuestro caso, este proceso de descomposición del andamia-

¹ MAPU, “El carácter de la Revolución Chilena”, 2ª Edición, pág. 91.

² Así lo llama el demócratacristiano Jaime Castillo Velasco, en un artículo aparecido en “La Prensa” del 13 de junio de 1972, y firmado como “Roger”.

je capitalista, se ha venido realizando, hasta ahora, *sin* que las fuerzas del proletariado hayan conseguido conquistar el Poder, es decir, sin que hayan conseguido, todavía destruir el carácter burgués del Estado, dando paso a un Estado Proletario; a pesar de tener en sus manos el Gobierno, pieza fundamental del Estado Burgués en nuestro país. Esta es la particularidad del camino revolucionario chileno. Y este es también el lugar donde aparecen sus dificultades: porque el proceso de desarticulación del funcionamiento capitalista chileno comenzó por el lado económico; pero casi *no ha salido de allí*.

3.- La “normalidad” capitalista que nos legó el gobierno de Frei consistía, en el plano económico, en un *estancamiento*, que se manifestaba en la existencia de un conjunto de recursos económicos incapaces de ser utilizados: mano de obra cesante, capacidad industrial instalada desaprovechada, stocks de mercaderías que no encontraban comprador, reserva de divisas no movilizadas. La política económica del Gobierno Popular, conducida desde el Ministerio de Economía por los compañeros Vuskovic y Garretón, *destruyó* ese estancamiento en el transcurso de los primeros meses de 1971. Como es sabido³, ello se logró mediante una política de precios y salarios que, durante 1971, elevó en un 50% los ingresos de los asalariados, mientras los precios subían en sólo un 22%, al mismo tiempo que no se temía gastar dinero fiscal, incluso con cargo al déficit, en programas de beneficio popular y en el traspaso de empresas al área social. Esa política, unida al mejoramiento de la situación de los campesinos por efecto de la Reforma Agraria, se tradujo en un aumento de dinero en manos de particulares, aumento que llegó al 113% en 1971. Esto a su vez significó un incremento de *la demanda*, que *forzó* la utilización de las reservas inactivas e impulsó un aumento considerable de la producción, acrecentado más, aún, por los esfuerzos conscientes en ese sentido del pueblo.

4.- Sin embargo, la reactivación de la economía conseguida en 1971 por el Gobierno Popular *no fue* una reactivación capitalista, se hizo *contra* el normal funcionamiento del capitalismo, *a pesar* suyo. De allí que esa política económica, precisamente porque significaba un paso *en dirección* al socialismo, “anarquizaba el sistema vigente”. Y ello se hizo manifiesto *primero* en el plano político. En efecto, el mejoramiento del nivel de vida de las masas populares más pobres, la disminución de la cesantía y la decisión revolucionaria que evidenciaba el Gobierno, se tradujeron –por una parte– en un *aumento del respaldo de masas*, que pudo constatar en el incremento de la votación de la UP, desde el 36% en septiembre de 1970, a un 50% en abril de 1971. Pero, por otra parte, *ese fortalecimiento*, en una perspectiva socialista, del Gobierno, endurecía también las posiciones opositoras, agudizaba la lucha de clases, polarizaba al país entre revolucionarios y reaccionarios, dejando poco espacio a las posicio-

³ Ver al respecto los documentos sobre política económica del MAPU en 1971, y también “La Estrategia Económica del Gobierno de la Unidad Popular”, de Julio López, en “Cuadernos de la Realidad Nacional” N° 9, septiembre de 1971, págs. 69 y 86.

nes centristas⁴; creaba, en una palabra, un *conflicto político*, una atmósfera de lucha que traía a primer plano el problema pendiente del poder. Sin embargo, creaba también las herramientas para *comenzar* a enfrentar ese problema: el respaldo mayoritario al Gobierno permitía, *entonces*, dar pasos decisivos hacia la conquista del resto del aparato estatal. Así lo planteó el MAPU con mucha claridad, desde febrero de 1971: “Nosotros pensamos que es preciso. . . *buscar un enfrentamiento global y decisivo* durante el transcurso de *este año* que, bajo la forma de un *plebiscito*, no solamente evite el embotellamiento institucional del Gobierno, sino que le permita adquirir *nuevos instrumentos de poder*. . . y en general pasar la lucha a otro nivel”⁵. Lo mismo se ratificó en mayo 1971: “La renovación normal del Poder Legislativo debe realizarse en marzo de 1973, pero *la actual correlación de fuerzas permite adelantar esa fecha*. . . El mecanismo para lograrlo es una reforma constitucional que cambie la estructura actual del Parlamento, estableciendo la *Cámara Unica*”⁶. Planteamientos similares fueron hechos por el Partido Socialista. Se trataba, en esencia, de resolver en un terreno *político* los problemas que ya dejaba entrever el avance en el terreno *económico*, aprovechando para ello las condiciones creadas por ese mismo avance. Pero otras fuerzas dentro de la Unidad Popular no opinaron lo mismo que el MAPU y que el PS. No se decidieron a dar tal paso. Y como esas otras fuerzas resultaran predominantes, no hubo plebiscito ni Cámara Unica, ni ninguna otra iniciativa de ese tenor. Más bien hubo, de parte de algunos sectores de la UP, tendencia a frenar un poco la marcha, incluso en el terreno económico (especialmente en lo que se refiere al APS), lo que a poco andar condujo a que el PDC tomara allí la iniciativa (proyecto sobre áreas de propiedad de Hamilton-Fuentealba), mientras la oposición en su conjunto recuperaba la confianza en sí misma e iniciaba lo que el MAPU llamó una “ofensiva táctica”.

5.- No obstante, el avance del proceso revolucionario chileno en dirección al socialismo no se detuvo. Sólo que, no habiendo podido pasar “a otro nivel de lucha” (a saber, a un nivel político)⁷ y habiendo llegado en el terreno eco-

⁴ El fortalecimiento en un sentido socialista del Gobierno, trajo como consecuencias:

- a) el fortalecimiento de los sectores más reaccionarios y hasta sediciosos en la oposición (liderazgo del PN y de Patria y Libertad con respecto al PDC),
- b) el debilitamiento de los sectores progresistas dentro del PDC y el éxodo de sus sectores más avanzados (Izquierda Cristiana),
- c) un debilitamiento de las tendencias reformistas dentro de la UP,
- d) un debilitamiento de las tendencias de ultraizquierda (recuérdese que esa es la época en que las relaciones del MIR con la UP, y particularmente con el PC, son las mejores de que se tenga noticia).

⁵ Informe de la Comisión Política al Segundo Pleno Nacional del MAPU; en “El Primer Año del Gobierno Popular”, pág. 83.

⁶ Informe de la Comisión Política al Tercer Pleno Nacional del MAPU; en “El Primer Año del Gobierno Popular”, pág. 144.

⁷ Avanzar en lo político significaba entonces –principios de 1971– afrontar un plebiscito u otro procedimiento similar que diera paso a una reforma constitucional o, en general, a medidas destinadas a aumentar el poder institucional de la UP al interior del Estado.

nómico al tope de las posibilidades legadas por el estancamiento capitalista en lo que se refiere a disponibilidad de recursos, y en especial, de divisas, los problemas generados por este avance empezaron a manifestarse, desde septiembre del año pasado, en un nivel directamente económico. Porque, privado de los instrumentos de control político necesarios, el proceso de avance hacia el socialismo, o sea, de desarticulación del funcionamiento capitalista, tuvo que continuar su marcha sometándose a las reglas del juego que ese mismo funcionamiento imponía. Y esto se tradujo en la gestación de una serie de fenómenos cuya dinámica interna no es del caso explicar aquí⁸, pero que podemos sintetizar como sigue:

a) tendencia semiespontánea a la continuación del incremento de los salarios, debido a la pérdida de la llamada “disciplina laboral” (o sea, del miedo a los patrones) y a los impulsos generados por la política general del Gobierno; todo lo cual se refleja en huelgas, tomas, pliegos con “tejo pasado”, etc.;

b) surgimiento del denominado “capitalismo especulativo”, o sea, el hecho de que las empresas, tanto grandes como chicas –cuyas utilidades no han disminuido– (porque si bien pagan más salarios, venden también más), prefieren invertir en comercio que deje grandes ganancias a corto plazo, en vez de invertir en medios de producción, a raíz de la famosa “incertidumbre” en que se encuentran acerca del futuro del régimen capitalista en este país;

c) aumento de los gastos fiscales más allá de las entradas que el Estado tiene, debido en parte a la constitución del área de propiedad social dentro de las leyes vigentes (o sea, pagando), y en general a la política de impulsar transformaciones de fondo y de hacer inversiones públicas de beneficio popular (vivienda, programas sociales, etc.), todo ello unido a que el Parlamento no autorizó impuestos que afectaban a los ricos; cuestión que, en resumen, significa que el Fisco debe lanzar más dinero a la circulación;

d) dificultades para conseguir crédito en el extranjero, a lo cual se agrega una deliberada política antichilena de cerco económico por parte del imperialismo;

e) fenómenos todos que tienen su expresión palpable en una *inflación y desabastecimiento crecientes*, y que generan un clima de *descontento* e intranquilidad en las masas.

6.– Pero lo esencial es entender que estos *problemas reales*, que se agudizan a medida que van pasando los meses de 1972, tienen su origen en un *éxito*, en un *avance también real*, en dirección a nuestros objetivos socialistas. En síntesis, puede decirse que este avance hacia el socialismo, realizado principalmente hasta ahora en un plano económico, ha sido lo suficientemente *grande* como para que el capitalismo no pueda ya funcionar medianamente bien en ese plano. Pero debido a que no se ha enfrentado con decisión la necesidad de avanzar también en un terreno político, tal avance ha sido demasiado peque-

⁸ Para una explicación detallada véase el Informe preparado por la Comisión de Política Económica del MAPU en abril de 1972 y publicado en el N° 11 de la revista “Chile Nuevo” (julio de 1972), que editan los compañeros del Ministerio de Economía, págs. 29 a la 44.

ño como para que ese deficiente funcionamiento capitalista pueda ser reemplazado por otro, por uno socialista, lo que crea, ya a comienzos de este año, una situación de más en más conflictiva para la UP, ya que la destrucción de la normalidad *capitalista* se manifiesta en estas condiciones, en los fenómenos antes indicados de desabastecimiento, carestía, etc., que afectan seriamente a las masas populares, en especial a las más pobres, las cuales se sienten, así, defraudadas del Gobierno y comienzan a *restarle su apoyo*; fenómeno que a su vez crea un clima de fracaso que hace que la UP pierda respaldo también en otros sectores. Esto puede constatarse en la *baja* de la votación de la UP en elección tras elección, desde Linares, O'Higgins y Colchagua hasta Coquimbo (respecto a abril de 1971). Situación que es bien comprendida por los sectores más lúcidos de la Oposición, en especial de la Democracia Cristiana: "la correlación de fuerzas es adversa a la Unidad Popular, como reacción legítima y comprensible de la colectividad frente a un Gobierno que ha anarquizado el sistema vigente sin ser capaz de dar forma a una solución de reemplazo"⁹.

7.- Ahora bien, esta "correlación de fuerzas adversas a la Unidad Popular" a nivel de masas, que podía tener al comienzo una importancia puramente táctica, adquiere un valor estratégico a medida que nos acercamos a marzo de 1973. Esto se debe a que la peculiaridad del camino revolucionario chileno consiste en que el problema de la conquista del poder se plantea, para el proletariado y sus aliados, a partir de haber ya ganado el Gobierno, o sea, en parte importante *desde dentro* del ordenamiento jurídico e institucional preexistente. Y las reglas del juego de ese ordenamiento, que son esencialmente burguesas, no pueden ser destruidas y reemplazadas por otras, en las actuales circunstancias –salvo a riesgo de provocar una situación política en extremo peligrosa– sino a condición de poder contar con un Parlamento favorable, ya sea en su forma actual o en otra modificada¹⁰. Pero poder ganar el control del Parlamento exige, para el Gobierno de la UP, contar con una correlación de fuerzas favorable a nivel de masas, capaz de traducirse en una votación cercana al 50%

⁹ Roger (Jaime Castillo Velasco), "Reflexión Comunista ante el Fracaso"; en "La Prensa" del 13 de junio de 1972, pág. 3.

¹⁰ Naturalmente, esa *no es la única* condición, ni implica prejuzgar nada acerca de las formas de lucha posteriores. La condición *decisiva* en cuanto a la destrucción del carácter burgués del Estado es siempre el surgimiento, al margen de las viejas instituciones del Estado, de Organos de Poder Popular y Proletario de base, a través de los cuales pueda organizarse, coordinarse y centralizar la voluntad de las masas. Pero si se quiere evitar una situación crítica para la cual, hoy día, no nos hallamos preparados, la *seguridad de poder controlar* el Parlamento, es *hoy* una condición indispensable para que la UP pueda seguir avanzando en dirección socialista. Y "controlar" no significa "mantener el tercio" que tenemos, sino contar con mayoría en ambas cámaras para poder reformar la Constitución en el sentido de constituir un Estado Popular como el que el Programa plantea. Claro que la *seguridad del poder controlar* el Parlamento no es suficiente. De allí a *controlarlo realmente*, hay mucho trecho. Pero no siendo *suficiente*, esa seguridad es *indispensable* para poder seguir avanzando, sea por ese camino, sea por otro.

en las elecciones de marzo de 1973¹¹. Y ocurre que es justamente ese respaldo mayoritario de masas lo que el Gobierno ha ido perdiendo desde fines del año pasado; cosa que *tiende* a acentuarse.

8.- Así *aparece*, pues, el problema: la UP *retrocede* en las masas; y si tal proceso continúa, marzo de 1973 puede convertirse en la fecha de un fracaso histórico para la presente experiencia revolucionaria chilena. ¿A qué se debe el retroceso?

a) primero, y fundamentalmente, a los efectos de *los éxitos* en el terreno económico dentro del marco de una *incapacidad* para abordar el problema del poder, es decir, a los efectos de la descomposición del funcionamiento normal *capitalista* de la economía, que al no encontrar una solución de reemplazo en otro funcionamiento (socialista), redundaba en desabastecimiento, inflación, y en general, descontento;

b) segundo, y *secundariamente*, a errores de implementación, vicios y deficiencias de la UP misma, aprovechados, magnificados y amplificados por la propaganda reaccionaria: imagen de corrupción en ciertos organismos y personajes de todos los partidos, ruptura de toda línea coherente de decisiones en el sector público debido al cuoteo (cada funcionario obedece a su partido, no a su jefe), burocratismo, sectarismo, torpeza y hasta imbecilidad en el uso de los medios de comunicación de masas, etc., pero, siendo todo esto importante, tomado en su conjunto sólo *ayuda* a incrementar el descontento, pero *no* es su explicación esencial.

9.- En “el Arrayán” –febrero de 1972– la Unidad Popular tomó conciencia de sus deficiencias y errores organizativos como causas de descontento popular; pero aún no tomó conciencia de lo principal: del papel que el exclusivo avance en lo económico jugaba en ese descontento. Además, las soluciones respecto a sus vicios y deficiencias que los partidos de la UP expusieron en la “Declaración del Arrayán”, no pasaron de ser buenos propósitos. Quedaron en el papel. Y, entre tanto, el tiempo siguió pasando y el Gobierno debilitándose.

10.- Ahora bien, así como el fortalecimiento del Gobierno de la UP generó a principios de 1971 ciertos fenómenos políticos (ver párrafo 4 y nota 5), así también el debilitamiento del Gobierno UP trajo como consecuencia, desde principios de 1972 hasta la fecha, estos otros:

a) la posibilidad, desde el punto de vista de la Oposición, de impedir el cumplimiento de un programa socialista sin recurrir a la violencia, o sea, por la vía de negociaciones y transacciones que limen sus aristas; en una palabra, el fortalecimiento de los sectores “progresistas” de la Oposición, expresado en el triunfo de esos sectores dentro del PDC (directiva Fuentealba) y en el cambio de las relaciones PN-PDC en favor de la DC;

¹¹ El “Partido Federado” de la Unidad Popular se pensó principalmente como un medio de lograr mayoría parlamentaria con una votación apreciablemente inferior al 50%, lo que era posible si la Oposición iba dividida. Sin embargo, aunque ahora haya *dos* partidos federados de oposición (PN - DR y PDC - PIR), éstos se han confederado entre sí, lo cual, en la medida en que se mantenga, esfuma toda posibilidad de lograr un control del Parlamento si no es superando el 50% de la votación en marzo de 1973.

b) la aparente comprobación de las tesis de quienes aseguran el “inevitable fracaso” del camino revolucionario del Gobierno Popular, basados en que no se ajusta a la “vía correcta”; es decir, el fortalecimiento de las tendencias ultraizquierdistas¹²;

c) el fortalecimiento de las tendencias derechistas –de un derrotismo consolidacionista– en el seno de la Unidad Popular, e incluso el éxodo de los sectores más reformistas (PIR);

d) el estrechamiento, en consecuencia, del campo de acción de los sectores revolucionarios socialistas en el seno de la Unidad Popular; el reflujo de la marea revolucionaria.

11.– Puestas así las cosas, la situación hizo crisis en mayo recién pasado, a raíz de dos hechos principales:

a) las posiciones ganadas por el PDC y resto de la Oposición, al hacer aprobar por el Parlamento la Reforma Constitucional sobre áreas de propiedad de Hamilton-Fuentealba, lo que creó la perspectiva de un enfrentamiento de poderes entre Ejecutivo y Parlamento, con motivo de los vetos del Gobierno a ese proyecto;

b) la alarma del Partido Comunista ante la posibilidad de ser aislado dentro de la UP por una alianza PS-MAPU-IC-MIR, que aparece operando, de hecho en Concepción (“los confabulados de Concepción”, los llama Luis Corvalán), después del unilateral retiro del PC de una manifestación conjunta de masas que había sido acordada anteriormente, en forma unánime por la UP.

B.– Lo Curro: enfrentamiento de dos políticas económicas

12.– Se hace urgente, pues, solucionar la crisis. Así comienzan las conversaciones en el seno de la UP que –seguramente por la ausencia en ellas de una participación de las masas– han sido bautizadas como “Cónclave” de Lo Curro. Conversaciones en las cuales se mostraron con inusitada nitidez ciertas tendencias que, por su importancia estratégica para el futuro, vamos a analizar con detención. Es junio de 1972. A esta altura, la UP ha tomado ya conciencia de que alguna relación existe entre su retroceso en las masas, y los efectos de la política económica. En eso existe pleno acuerdo, y allí se centra la discusión. Pero en lo que no hay acuerdo es en el análisis que del problema económico se hace. Y es en torno a ello que se dejan ver *dos líneas diver-*

¹² El ultraizquierdismo no consiste en discrepar del PC, como a veces parecen pensar algunos compañeros; ni tampoco tiene domicilio fijo y eterno en el MIR, como sectariamente parecen creer otros. Pero en las *actuales* condiciones chilenas, una de las principales fuentes de tendencias ultraizquierdistas resulta ser *cierta manera* de entender el problema de las vías o caminos revolucionarios, que hace de él un problema *ferroviario* al creer que basta con averiguar por que “vía” viene el tren de la revolución chilena para que todo quede solucionado. Error que conduce a pensar que ante un fracaso del Gobierno UP (supuestamente identificado con la “vía pacífica”) basta con mover una palanca y pasar a la “vía armada” para que todo marche “sobre rieles”.

gentes, cuya importancia trasciende, con mucho, los marcos de la mera política económica, ya que envuelve un asunto de línea política *general*. Estas dos posiciones están representadas, en lo esencial, una por los representantes del Partido Comunista, la otra por los del MAPU. El resto de los partidos no tiene posiciones *globales* coherentes en lo económico. Así por ejemplo, el Partido Socialista actúa inicialmente en bloque con el PC, para alejarse de él más tarde y para terminar colocando un militante suyo (Carlos Matus) en la Cartera del desplazado Vuskovic, coincidiendo así, en los hechos, nuevamente con el PC.

13.- ¿En qué se manifiestan las dos líneas que se dejan ver en Lo Curro? En primer lugar, en la valoración que se hace de la política económica impulsada hasta entonces por Vuskovic y Garretón. Los dirigentes del Partido Comunista piensan que “el terreno vital, decisivo, de la producción, ha sido afectado por una política sectaria, subjetivista, de gente que deroga por sí y ante sí las leyes de la economía política e impone esquemas voluntaristas que no sólo no tienen nada que ver con la realidad, sino que arruinan la producción y crean al Gobierno Popular una *gravísima situación* en el campo económico”¹³. Es decir, creen que los problemas generados por la política económica de Vuskovic-Garretón se deben esencialmente a “errores políticos y económicos”¹⁴, a “las decisiones *subjetivas y voluntaristas* de los que pretenden *hacer a un lado las leyes económicas*”¹⁵. Lo único que olvidan es que marchar hacia el socialismo consiste, precisamente, en “hacer a un lado”, no ya “las leyes” de la economía capitalista ¡sino la economía capitalista misma! ¿Qué clase de revolución sería ésta si no “derogásemos” en la práctica la economía capitalista, y con ello sus “leyes” tan respetables?, ¿qué clase de revolución sería ésta si nos detuviésemos espantados ante tamaño “voluntarismo” y “subjetivismo”? Esa derogación práctica es precisamente lo que *comenzó* a hacer la política económica de Vuskovic-Garretón. Por eso era justa. Por eso los problemas que a raíz de ella surgieron, como el desabastecimiento, no son producto de “un error”, sino “una manifestación *del éxito* de la política económica de Gobierno”¹⁶ dentro del marco de la incapacidad de avanzar también en el terreno directamente político.

14.- Hay, pues, una primera divergencia en la apreciación del trayecto recorrido hasta la fecha. Pero esto lleva a una segunda divergencia: ¿cómo solucionar los problemas que enfrentamos?, ¿cómo hacer frente al deterioro de la UP en las masas? Los dirigentes comunistas afirman “la necesidad de dar un *golpe de timón*, la necesidad de darles al país y al proceso revolucionario en marcha una *conducción económica más adecuada*”¹⁷, la necesidad de impulsar “un

¹³ Mario Zamorano, Intervención de Resumen en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista; “El Siglo”, 26 de junio de 1972, pág. 4.

¹⁴ Orlando Millas, “La Clase Obrera en las Condiciones del Gobierno Popular”, en “El Siglo”, 5 de junio de 1972, pág. 4.

¹⁵ Orlando Millas, *idem*. (14).

¹⁶ Informe sobre Política Económica presentado por la Comisión Política al 5° Pleno del MAPU; 23, 24, 25 de junio de 1972, pág. 26.

¹⁷ Víctor Díaz, Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista; en “El Siglo” del 23 de junio de 1972, pág. 4.

firme proceso de rectificación”¹⁸. ¿Y en qué ha de consistir tal rectificación? Esencialmente en lo siguiente: “hemos sufrido una derrota muy dura *en el frente económico*; no podemos dudarla, ya que planteamos conscientemente la cuestión de una *política económica nueva*”; “nuestra nueva política económica tiene su raíz en el hecho de haber sufrido una derrota en este punto; ahora nos dedicaremos a *organizar un retroceso estratégico*, como quien dice”¹⁹. Y este “retroceso estratégico” ha de consistir en “*poner el acento* en la defensa del Gobierno Popular, *en su mantenimiento* y en la continuidad de su obra. Sería funesto –nos dice Millas– seguir ampliando el número de los enemigos y, por el contrario, *deberán hacerse concesiones*”. “Antes que bosquejar la etapa siguiente a la actual reforma agraria o de *hacer poner las barbas en remojo* a nuevas empresas capitalistas, lo que procede, en primer término, es aprovechar la incorporación al área reformada de 45% o 50% de la tierra, el inmenso poder económico de la gran minería del cobre y del acero, la irradiación financiera de la banca estatizada y de las empresas ya expropiadas o intervenidas y los resortes de que dispone el Gobierno”. En otras palabras, *frenar por ahora el avance* en el área social y en la reforma agraria, y hacer ciertas concesiones adicionales, para así “afianzar el Gobierno, *consolidar su obra* y modificar en su favor la correlación de fuerzas”²⁰. La manera de solucionar los problemas generados por el avance ya logrado hacia el socialismo, sería, pues, según Millas, *frenar ese avance* y aprovechar los lados positivos de lo *ya existente*, o dicho en sus propias palabras, *consolidar* la obra del Gobierno, cosa que equivale –y ello, como se ve, es captado perfectamente– a un *retroceso estratégico*. En efecto, siendo lo característico de la situación actual su *inestabilidad* (y por

¹⁸ Mario Zamorano, *ídem* (13).

¹⁹ Lenin, citado por Orlando Millas en el artículo mencionado en la nota 94). La cita no es casual, sino que está usada a modo de fuente de inspiración de la “rectificación” que se propone; por eso Millas dice a continuación: “la actitud leninista es fuente de profundas lecciones, por sobre las modalidades distintas”. Claro que no dice que esas “modalidades distintas” que hacen propugnar a Lenin en 1921 un “retroceso estratégico”, incluían la *ruina total* de la economía rusa (esta es “la derrota muy dura en el frente económico” a que se refiere Lenin), como consecuencia de tres años de *guerra civil*, así como incluían el hecho de que los bolcheviques habían conquistado *todo el poder* hacia cuatro años; e incluían la muerte en la guerra de gran parte del proletariado ruso más consciente y la dispersión y desorganización de casi todo el resto; e incluían, además, la *rebelión* de los marinos de Kronshtadt contra el gobierno de Lenin y un ambiente de rebelión *popular* también contra ese gobierno, ambiente que tenía repercusiones dentro del propio partido bolchevique (la “oposición obrera”). Tampoco explica, el compañero Millas, que el “retroceso estratégico” de Lenin no se proponía en modo alguno una consolidación estabilizadora en el terreno de la “nueva política económica”, sino una adecuación al reflujo del movimiento revolucionario en la cual *se continuaba* el proceso de desarticulación del funcionamiento capitalista. Y que, precisamente debido a la “consolidación” del proceso tras la muerte de Lenin, es que se necesitó más tarde (1930) una *brusca ruptura* de la misma, con consecuencias nada dignas de imitarse.

²⁰ Orlando Millas, artículo citado en (14), “El Siglo”, 5 de junio de 1972, pág. 5.

eso precisamente es una situación potencialmente revolucionaria), “consolidar”, vale decir, *estabilizar*, no puede significar sino *retroceder* hacia una nueva estabilidad capitalista, o bien avanzar más aún hasta alcanzar una estabilidad *socialista*. Hay quienes, en el PC, parecían optar entonces por la primera alternativa: retroceder. El MAPU y el Ministro Vuskovic proponían en Lo Curro, *implícitamente*, la segunda: avanzar más. ¿Es esto una afirmación gratuita? ¿Era acaso *posible* avanzar más? Vamos viendo.

15.- La “nueva política económica” que los dirigentes del PC programaban en Lo Curro, puede sintetizarse diciendo que se trataba de contrarrestar directamente *los efectos* visibles de la política económica anterior, y que se señalaron en el párrafo cinco²¹. De allí que esa nueva política “rectificadora” consistiese en²²:

a) respecto al área de propiedad social, concentrarse por ahora, en cierto “vértice” de empresas fundamentales, en torno a las cuales sería sencillo llegar a acuerdos con el PDC, y dejar el resto para más adelante;

b) lograr, mediante una eficiente planificación y política de precios y salarios, que las empresas del área social generen excedentes, lo cual permitirá ir disminuyendo el déficit fiscal;

c) mantener por ahora la redistribución ya conseguida del ingreso, mediante una política de reajustes parejos y, en lo posible, iguales al alza real del costo de la vida; política que, se llevaría a la práctica apelando a la “disciplina social” de la clase obrera y a “convenios de salarios” entre los trabajadores y el Gobierno;

²¹A saber: déficit fiscal creciente por excesivo gasto público, aumento descontrolado del dinero en manos privadas, comportamiento anormal de los empresarios que es causa de un florecimiento de la especulación, dificultades para obtener créditos externos. Que este es el enfoque, puede verse, por ejemplo, en documentos como el elaborado por un asesor técnico del PC ligado al sector financiero del Estado, y que se titula “*Esquema de una Estrategia de Comercio Exterior*”.

²²Lo que sigue corresponde a la posición que entonces (junio de 1972) sustentaron explícita o implícitamente, algunos dirigentes del PC. Ahora bien, esas opiniones pueden en parte haberse modificado más tarde, cuando cambiaron algunas circunstancias políticas de las cuales son inseparables (en especial las perspectivas de acuerdo con el PDC en torno a las áreas de propiedad). También es posible que hoy día algunos nuevos funcionarios de Gobierno comunistas se vean obligados, por la presión de los hechos, a actuar en la práctica de una manera diferente a la que proponían antes de asumir sus cargos. Pero lo que a nosotros nos interesa es mostrar el *curso histórico* de los acontecimientos, que es lo único que permite visualizar *las tendencias estratégicas* que subyacen bajo los hechos. Nos interesa descubrir el pensamiento político que está detrás de ciertas opiniones, y que es, hasta cierto punto, independiente de que esas opiniones pueden cambiar con el tiempo, e incluso hacerse exactamente opuestas. Nos interesa, en resumen, analizar *las líneas estratégicas* que orientan en cada momento histórico, las posiciones que sustentan algunos compañeros y partidos, posiciones que pueden variar orientándose por una misma línea estratégica, una línea constante. De allí que tomemos las opiniones tal cual fueron en cada instante, y no como pudieran ser hoy día o pasado mañana, ni como se puedan ver modificadas en la práctica por la fuerza de las circunstancias.

d) dar amplias garantías a los pequeños y medianos empresarios, acerca de que de ninguna manera serán estatizados, y podrán seguir ampliando sus negocios con márgenes de rentabilidad aceptables, con lo cual se espera “restablecer la confianza” y devolver a su situación “normal” el comportamiento empresarial, es decir, lograr que inviertan en producir y no en especular;

e) no rebasar ciertos límites en la inflación y en el déficit fiscal, para poder presentar una faz de “saneamiento económico” capaz de obtener créditos externos importantes y, al mismo tiempo, llevar una política de diplomacia cautelosa con el imperialismo, con el mismo objeto;

f) todo lo cual permitiría disminuir el ritmo de la inflación, terminar con el desabastecimiento, y reganar la confianza de las “capas medias”, modificando así, favorablemente, la correlación de fuerzas.

16.- No existen documentos públicos del PC en que se presente con nitidez aquella “nueva política económica”; pero que efectivamente era como se ha indicado, resulta claro no sólo para quien conozca las intimidades del “Cónclave” de Lo Curro, sino para cualquiera que sepa leer entre líneas los artículos e intervenciones de sus dirigentes. Así, por ejemplo, el diputado Millas, nos dice que “*la confusión* existente en algunos rangos de los propios personeros de Gobierno sobre las áreas de la economía, tiene efectos perniciosos”²³. ¿Y en qué reside esta “confusión” de ciertos “personeros” que, por lo visto, trabajan en el Ministerio de Economía o sus alrededor, puesto que si no sus opiniones no tendrían “efectos” tan “perniciosos”? Pues en el gravísimo pecado de olvidar que “el Programa Básico de Gobierno precisa que el área de propiedad social sólo se constituirá con las siguientes actividades” (y viene luego la enumeración conocida del Programa)²⁴. Ahora bien, como se sabe el Programa es, en este aspecto, bastante ambiguo; nos habla por ejemplo de “monopolio *estratégico*” o de “actividades que *condicionan el desarrollo económico*”, pero no nos dice qué significa eso. El problema real es entonces que cuando Millas dice que “*sólo* se constituirá con. . .”, significa una interpretación lo *menos* amplia posible; tan poco amplia que en ciertos momentos de la discusión de Lo Curro llegó a incluir un “vértice” de empresas monopólicas no mucho mayor del que integran las ya estatizadas. El problema es quizás que algunos parecían creer que como quedan aún 4 años de Gobierno, “no era necesario apurarse” en cumplir esta parte del Programa, ¡ya se incorporaría el resto en los años venideros! Pero otros, como el MAPU, exigían la “*incorporación rápida* al área de propiedad social de los enclaves monopólicos que forman las 91 empresas”, la “rápida incorporación al área reformada de los latifundios que aún subsisten”²⁵, en vez de “no hacer poner las barbas en remojo a nuevas empresas capitalistas” o en vez de ni siquiera “bosquejar la etapa siguiente a la actual reforma agraria”²⁶.

²³ Orlando Millas, ídem (20).

²⁴ Orlando Millas, ídem (20).

²⁵ MAPU, ídem (16), pág. 14.

²⁶ Orlando Millas, ídem (20).

17.- Sin embargo, la actitud que los representantes del PC mantenían en Lo Curro acerca del ritmo de crecimiento del área social, *estaba condicionada principalmente por situaciones coyunturales, como las perspectivas de entendimiento a corto plazo con el PDC*²⁷. Más importante es, en cambio, su manera de enfocar el problema de la inflación y del desabastecimiento. Como es sabido, el desabastecimiento aparece cuando se destina al gasto, más dinero que las cosas que se pueden comprar con ese dinero. De allí que algunos compañeros, demasiado respetuosos de las “leyes económicas” capitalistas, piensen que el problema se soluciona *disminuyendo el gasto, privado y público*. ¿Cómo? En primer lugar, disminuyendo los egresos fiscales (pagos de sueldos y salarios del sector público, inversiones para ampliar el APS o para la Reforma Agraria, etc.), y buscando, en cambio, aumentar los ingresos, en especial, tratando de que las empresas del área social “*generen excedentes* destinados al conjunto de la economía nacional y del Estado”²⁸; es decir, “tratando de sanear la situación financiera de las empresas del área social y, en base a un *autofinanciamiento* real, incentivarlas *para que obtengan beneficios*”²⁹. Es así como el diputado Millas piensa que “son *contrarrevolucionarios* los criterios *oportunistas* según los cuales podría tolerarse que no hubiese excedentes”³⁰. Vale decir, la óptica fundamental, a la que toda otra consideración debe subordinarse, la norma básica cuya transgresión lo ubica a uno automáticamente en el bando, “contrarrevolucionario” y “oportunista”, resulta ser, según Millas, *acumular excedentes* en manos del Estado, establecer “un plan económico realista que se proponga metas muy claras. . . de *reproducción ampliada*”³¹. ¡Perfectamente claro. . . si estuviésemos ya construyendo el socialismo, si hubiésemos ya conquistado todo el poder para el proletariado! Pero no tan claro si miramos las cosas desde el ángulo de la lucha por el poder, desde el ángulo de acumular, no excedentes, sino fuerzas políticas, apoyo de masas para objetivos políticos socialistas, para la construcción de un estado popular y proletario, para “convertir la victoria en poder”.

18.- Ese es el problema. Porque, naturalmente, nadie piensa que no sería bueno que las empresas del área social dejaran excedentes, en vez de trabajar a pérdida. No es que nos opongamos a una cuestión tan “obviamente” beneficiosa. Muy por el contrario. Pero el problema reside en que la óptica de la “reproducción ampliada”, el enfocar todo desde el ángulo de “acumular excedentes”, es olvidar que ello implica, en las condiciones actuales, restarle al Gobierno instrumentos para acrecentar su control sobre la economía (el *gasto* fiscal, aunque sea deficitario), e implica, además, *subir los precios* de los produc-

²⁷ El asunto de las conversaciones con el PDC, en torno a las cuales se ha hecho tanto ruido, no puede analizarse aisladamente de la discusión sobre la política económica, discusión sobre la que no se ha informado casi por parte de la prensa. Ver, más adelante, el párrafo 30.

²⁸ Orlando Millas, *idem* (14).

²⁹ “Esquema de una Estratégica. . .”, pág. 32 (ver nota 21).

³⁰ Orlando Millas, *idem* (14).

³¹ Orlando Millas, *idem* (14).

tos del área social *sin subir en igual medida los salarios*: ¿cómo, si no, genera excedentes? Por eso el MAPU no enfoca el problema desde el punto de vista de la “acumulación de excedentes” y nos dice: “no podemos permitir que ganen fuerzas las tendencias que hoy, confundidas por la magnitud de algunos problemas, pierden la brújula de clase, y pretenden implementar programas restrictivos ya fracasados. Esos son los programas de los que analizan *tecnocráticamente* los problemas, de los que no advierten con claridad la enorme concentración del consumo y de los ingresos que aún subsisten en nuestro país”³². Si “el imperialismo y sus aliados han hecho un escándalo de los niveles que ha alcanzado el gasto fiscal”, ello es porque “saben que si el Gobierno gasta menos, ellos tienen más *control sobre la economía*. . . saben que si el Gobierno no compra determinados recursos materiales, éstos quedan a disposición de ellos”³³. Por eso, para el MAPU, no se trata de “reducir los gastos. . . Creemos que ésta no implica descuidar el gasto”). “Las inversiones de las empresas del APS son *indispensables* para garantizar el crecimiento orientado de la economía”³⁴. Y si estamos de acuerdo en que es necesario “obtener ingresos financieros por el Estado”, pensamos que éstos “deben provenir de los grupos que concentran cuotas importantes del ingreso y del consumo material: *los capitalistas, los comerciales, los especuladores, y algunas capas profesionales y burocráticas altamente rentadas*”³⁵. Como puede apreciarse, criterios todos altamente “contrarrevolucionarios” y “oportunistas”. . .

19.- Y así llegamos al nudo de la discrepancia entre las dos políticas económicas que estamos analizando: en el PC hay quienes quieren solucionar el desabastecimiento *disminuyendo el gasto de dinero* para consumo a través de los mecanismos del mercado. El MAPU quiere hacerlo, en cambio, *disminuyendo directamente el consumo de los sectores de altos ingresos*, a través de mecanismos de control de masas y gubernamentales. El MAPU no se opone a que las empresas del área social y privada generen excedentes; pero no oculta que eso implica “el alza de algunos precios de bienes de consumo masivo”, por lo cual exige “que las alzas de precios no sean pagadas por los trabajadores, sino por los sectores que hoy concentran mayoritariamente los ingresos nacionales”, lo que significa que “toda alza que afecte el nivel de ingresos de los trabajadores debe estar *compensada*” (por el respectivo reajuste de salarios) “para aquellos estratos más bajos”³⁶. Claro está que esa mayor cantidad de dinero en manos de los trabajadores no sirve de nada si no hay cosas que se puedan comprar con ella. Pero por eso es necesario disminuir *drásticamente* el consumo de ese 7% de la población que todavía compra el 50% de todo lo que puede comprarse en Chile. Por eso es que la inflación no importaría; pero siempre y cuando se disminuyesen los ingresos exorbitantes de ese 7%, siempre y cuando a ello no se les permitiese reajustar sus ingresos, siempre y cuando a ellos se les restringiese el consumo. Siempre y cuando el problema se enfoque

³² MAPU, “Informe Político” al 5° Pleno, junio de 1972.

³³ MAPU, ídem (16), pág. 14.

³⁴ MAPU, ídem (16), págs. 27 y 28.

³⁵ MAPU, ídem (16), pág. 28.

³⁶ MAPU, ídem (16), pág. 30.

con un criterio de *clase*, con un criterio *proletario*, y no con criterios tecnocráticos.

20.- Para los dirigentes del PC, en cambio, el énfasis parecía estar puesto, durante las conversaciones de Lo Curro, en “adecuar el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado”, en lograr “la estabilidad monetaria”³⁷. ¿Cómo? Pues, como ya se dijo, en primer lugar, disminuyendo el gasto fiscal, frenando las inversiones deficitarias del Fisco en cosas como las empresas del APS, y “no tolerando” que no haya excedentes, porque ello sería “promover la inflación monetaria”³⁸. Pero, en segundo lugar, vendiéndoles caro a los sectores de altos ingresos artículos suntuarios que, en consecuencia, se hace necesario producir e incluso. . . *importar*³⁹; o sea, no sólo no disminuyendo el consumo suntuario de la burguesía, sino *fomentándolo*. Y en tercer lugar, *manteniendo* la actual distribución del ingreso, o lo que es igual, *conteniendo* la redistribución que se había iniciado el año pasado. Es decir, dando reajustes iguales para todos, en vez de reajustes mayores para los que ganan menos; y tratando de que no sobrepasen el alza oficial del costo de la vida. Dicho en otras palabras: “se efectuarán ciertos reajustes salariales para mantener este nivel para los asalariados”⁴⁰. Así se explica la persistente insistencia con que los dirigentes del PC atacan, últimamente, “las posiciones oportunistas de los que lanzan el tejo pasado”, “las tendencias de un economicismo oportunista”⁴¹, o “cierta demagogia de viejo corte economicista”⁴², o bien “el reivindicacionismo, el economicismo y otras manifestaciones de desproletarización”⁴³. Porque, en abstracto, naturalmente que todos podríamos estar de acuerdo en rechazar el “economicismo” y el “reivindicacionismo”. Pero ni nosotros ni el PC orientamos nuestra política por “principios” abstractos; y ello queda muy claro si se recuerda que ha sido el propio PC quien, en otras circunstancias, ha impulsado peticiones “con el tejo pasado”. De lo que se trata es de que, en las actuales circunstancias, la dirigencia del PC ataca al “economicismo”, y ello no

³⁷ Orlando Millas, ídem (14).

³⁸ Orlando Millas, ídem (14). La verdad es que, aunque se expresase de esa manera, lo que se quería decir no es tanto el disminuir la cantidad de dinero circulante, ni tampoco erigir en dogma el que no haya inflación. Sino más bien *disminuir el gasto*, tanto público como privado, disminuir no necesariamente el dinero, pero sí el uso para consumo de ese dinero, o sea, lograr una acumulación de excedentes para la inversión productiva, tanto pública como privada, la cual no obsta para que se trate, en lo posible, de frenar la inflación –a largo plazo–, pero puede significar –a corto plazo–, incluso, acelerarla.

³⁹ En “Esquema de una Estrategia. . .”, se propone la “captación de liquidez. . . por medio de la importación de ciertos bienes de consumo duradero (automóviles)” (pág. 13). Es, precisamente, la misma iniciativa que se ha hecho pública últimamente. Se ha hablado de importar, con el objeto de recoger dinero que hoy está en manos de particulares, autos japoneses.

⁴⁰ “Esquema de una Estrategia. . .”, pág. 32.

⁴¹ Orlando Millas, ídem (14).

⁴² Mario Zamorano, ídem (13), pág. 5.

⁴³ Víctor Díaz, ídem (17).

tiene un significado abstracto, sino muy concreto: un significado dado por todo el contexto de la política en que se presenta. El significado de impedir que los reajustes salariales sobrepasen los marcos de la política de contención de la redistribución del ingreso que se nos propone⁴⁴. La lucha contra el “economicismo” de que los dirigentes del PC nos hablan hoy día, no es, pues, más que el enarbolamiento de una bandera ideológica destinada a sustentar su política de *restricción* del gasto público y privado, del gasto de dinero en consumo.

21.- Para el MAPU, como para Vuskovic, se trataba, en cambio, *no* de disminuir *el gasto de dinero*, sino de aumentar *las cosas* que se pueden comprar con ese dinero. Lo cual no puede lograrse sólo aumentando la producción, sino que requiere además disminuir el consumo de los sectores de altos ingresos para poder así abastecer a los sectores populares. La alternativa que el MAPU ofrecía en Lo Curro implicaba entonces:

a) una política de *suelos y salarios* discriminatoria, que diese reajustes *superiores* al alza real del costo de la vida para los ingresos más bajos, e *inferiores* a esa alza para los sueldos más altos; vale decir, una política de remuneraciones cuya consigna no podría ser, ni mucho menos, “la lucha contra el economicismo de los trabajadores”;

b) una política *tributaria* discriminatoria, que cobre altos impuestos a los ricos, termine con la evasión y libere a las masas de la carga de los tributos indirectos;

c) una política de precios discriminatoria que *suba* los precios de los artículos suntuarios que consume la burguesía y que *no suba* los precios de los bienes de consumo popular;

d) una política de *producción* discriminatoria, que oriente la producción de las empresas hacia aquellas cosas que necesita el pueblo y que no produzca artículos de lujo para los ricos;

e) una política de *importaciones* discriminatoria, que no cometa la aberración de gastar nuestras pocas divisas en traerles más automóviles y artículos suntuarios a los capitalistas, sino que importe *sólo* aquellos bienes de consumo, materias primas y repuestos que se necesitan para abastecer al pueblo;

f) en fin y sobre todo, una política de *abastecimiento* discriminatoria, que entregue productos preferentemente a los sectores populares, y que impida que lleguen, a los almacenes en que compran los ricos, más productos que los necesarios.

22.- Ahora bien, lo anterior no se puede hacer sin organizar *redes especiales* de abastecimiento para los trabajadores, mediante la multiplicación y perfeccionamiento de organismos de control popular, como las JAP u otros

⁴⁴ Naturalmente, esto no impide que pueda haber reajustes grandes. La “contención” no reside en que no haya reajustes importantes, sino en el hecho de que esos reajustes sean *parejos* para todos en vez de discriminados, en el hecho de que no sean *mayores* que el alza de los precios y en el hecho de que *no se impida* a los sectores no asalariados (burguesía y pequeño-burguesía) apropiarse de la mayor parte del consumo nacional.

similares. No se puede hacer sin que la DIRINCO, DINAC, etc., apoyándose en la *organización de base* de las masas, establezcan un *férreo control* sobre las principales empresas productoras y distribuidoras, que según opinaba el compañero Vuskovic, serían unas 1.500 a 2.000 empresas medianas (no se trata de estatizarlas, sino de controlarlas). Ni se puede asegurar una política de aumento de la producción de aquellos bienes que necesita el pueblo, sin fortalecer con rapidez el *área de propiedad social*. Ni tampoco se puede llevar adelante políticas de precios, salarios, producción, importaciones, impuestos y abastecimientos discriminatorios, sin la más amplia organización y *control* de los trabajadores sobre la actividad de las empresas, incluso en el área de propiedad privada. No se puede hacer nada de esto sin apoyarse en la organización de las masas, sin movilizar al pueblo. Por eso el MAPU plantea que “*los trabajadores deben extender su control: control sobre la producción y los stocks, sobre los costos y los precios, sobre las inversiones y la mantención de los equipos, sobre las finanzas, el pago de impuestos y aportes para la previsión, además del ya mencionado control sobre las importaciones*. En cada uno de estos rubros existen instituciones gubernamentales sobre las que cae la responsabilidad legal del control. *Hay que vincular su trabajo con el de los sindicatos y Comités de Vigilancia*”⁴⁵. Al aparato de distribución debe. . . relacionarse estrechamente con las organizaciones vecinales, sindicatos, Comités de Vigilancia y, fundamentalmente, con las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP). De esta relación debe surgir el tipo de producto que se distribuya y las formas de distribución: a través de centrales de abastecimiento, supermercados en barrios populares y el apoyo masivo al pequeño comercio. . . Tarea para los próximos meses es que todo lo que es producido por el APS sea mayoritariamente distribuido por empresas distribuidoras del APS⁴⁶. Por eso el MAPU critica a “los que asustados por los problemas de abastecimiento y liquidez, adoptan posiciones restrictivas: buscar reducir el gasto público, buscar atenuar las políticas redistributivas. . . No entienden que si tenemos problemas de abastecimiento es porque *aún hay muy pocos que consumen demasiado*”⁴⁷.

23.— Sin embargo, se dirá: es que una política como la planteada por el MAPU no significa echarse encima a nuestros aliados, a los pequeños y medianos capitalistas, a la pequenoburguesía, a los sectores asalariados de ingresos altos y medios. Así lo creen sin duda los dirigentes del PC, y por eso interpretaron el control sobre “las 1.500 empresas de Vuskovic” como una “estatización disfrazada”, incompatible con las “garantías” que es necesario dar al sector privado. *En parte* es por eso, también, que Millas ataca “*la fraseología sobre el control obrero*”⁴⁸, y afirma que “tampoco tiene que ver con el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular el. . . *control de los trabajadores en la industria privada*”, y que “lo que sin ambages, y se interprete como se interprete, representa una negación absoluta de la política de la Unidad Popular es el planteamiento

⁴⁵ MAPU, ídem (16), págs. 23 y 24.

⁴⁶ MAPU, ídem (16), pág. 30.

⁴⁷ MAPU, ídem (16), pág. 15.

⁴⁸ Orlando Millas, ídem (14).

de una administración que se constituya unificando las organizaciones populares en consejos comunales de trabajadores que, a través de asambleas por la base, resuelvan *cuestiones de interés inmediato* para los trabajadores *como el control del abastecimiento a través de las JAP*, como Educación y Salud, etc. Esto –nos informa Millas– es *anarquismo puro* (sic)⁴⁹. Lo que en vez de eso habría que hacer es, según Millas, “sostener una acción sindical social, política, económica y administrativa coordinada y eficiente que. . . gane a los empresarios”⁵⁰. ¿Cómo?: “asegurando su estabilidad y ascenso económico”⁵¹, en vez de “despertar suspicacias, incomprensiones y resistencias innecesarias”⁵². ¿Y en qué ha de consistir, entonces, tal “acción sindical” que “gane a los empresarios”, sin “despertar suspicacias” y sin caer en la consigna “anarquista” del control de los trabajadores? Pues, en que “la participación obrera en el área privada asume *una nueva dimensión*”, una dimensión que ya no debe temer “*los peligros de incurrir en colaboración de clases*” como cuando existía “la dominación del aparato estatal por la oligarquía financiera y las empresas imperialistas”, porque “hoy estamos ante una realidad diferente, y tenemos la obligación, en las nuevas circunstancias, de *no ponerle cortapisas*, tampoco, a esa participación”⁵³. En una palabra, se trata de garantizar la prosperidad de los empresarios capitalistas, rechazando “el economicismo” de los obreros que piden mayores salarios y el “anarquismo” de los que reivindican una participación real (o sea, con control sobre la marcha económica de las empresas). Por ese camino se cree posible “ganar a los empresarios” capitalistas, ya que “desde el punto de vista de sus intereses *objetivos* en cuanto capitalistas, la eliminación de la concentración monopólica privada y la creación de un nuevo dinamismo de crecimiento económico, les abre condiciones nuevas mucho más favorables para su acción”⁵⁴. Así, pues, si a esas “condiciones favorables” e “intereses objetivos” de los capitalistas sumamos las garantías de “estabilidad y ascenso económico” que ofrece Orlando Millas, lograremos que los capitalistas vuelvan a hacerle caso a las leyes de la economía” (que por lo visto no es sólo Vuskovic quien las pasa por alto) y se decidan a “impulsar las inversiones para fines productivos en las empresas del área privada”⁵⁵ en vez de dedicarse a la especulación. ¿Será verdad tanta belleza?

24.– La verdad es que, hasta la fecha, los empresarios capitalistas no han dado señales de *creer*, no ya en las “garantías” ofrecidas por la UP, sino ni siquiera en el mejoramiento real de su situación que “el nuevo dinamismo del crecimiento económico” ha provocado. La verdad es que “este Gobierno, como ningún otro *ha beneficiado* desde el punto de vista material a los peque-

⁴⁹ Orlando Millas, “Salvar la crisis y reforzar la Unidad Popular”, en “El Siglo” del 28 de mayo de 1972, página editorial.

⁵⁰ Orlando Millas, *ídem* (20).

⁵¹ Orlando Millas, *ídem* (20).

⁵² Orlando Millas, *ídem* (20).

⁵³ Orlando Millas, *ídem* (20).

⁵⁴ Sergio Ramos, citado por Orlando Millas, *ídem* (20).

⁵⁵ “Esquemas de una Estrategia. . .”, pág. 32.

ños y medianos empresarios. Todas las estadísticas así lo demuestran. . . la tasa de ganancia de los capitalistas medios y pequeños *ha aumentado*. Sin embargo, estos beneficios materiales *no se han traducido* en un apoyo político importante, de esas capas, al Gobierno Popular. Por el contrario, la burguesía monopólica, sus partidos y sus organizaciones han tenido éxito en atraer a estos sectores hacia su política y en enfrentarlos al Gobierno”⁵⁶. Y en cuanto a los asalariados de altos ingresos, la verdad es que “las remuneraciones de los sectores profesionales y técnicos se han elevado sustancialmente.

Pero estas medidas, que indudablemente han favorecido a los sectores medios, *no se han transformado* en un apoyo masivo ni al Gobierno ni a sus medidas”⁵⁷. ¿Puede pensarse, entonces, seriamente, que continuar con la política de dar “garantías de estabilidad y ascenso económico”, nos conduzca a alguna otra parte que no sea al empantanamiento de nuestro proceso revolucionario? Tiene razón la revista socialista “Posición” cuando dice que “lo que el diputado Millas llama suspicacias, incomprensiones y resistencias innecesarias, brotaron precisamente del hecho de *no ser claro* en cuanto al futuro, de dejar a estos sectores en la incertidumbre respecto a su suerte” (o sea, “en el marco de *indefinición* que propone Millas en su artículo al insistir en que no se debe poner el acento en lo que haremos en el futuro, cuando haya condiciones más desarrolladas”), “en circunstancias que *ellos conocen* claramente cuál es la ideología del proletariado y la de sus expresiones políticas en la UP”⁵⁸. Para que los empresarios creyesen en las garantías de desarrollo capitalista que propone Millas, “habría no sólo que proporcionarle condiciones favorables al desarrollo capitalista. . . , sino que directamente *subvencionar* ese desarrollo, a fin de cubrir, a dichos sectores burgueses, del riesgo de futuras acciones políticas del proletariado. . . ; pero con ello se estaría volviendo a una situación de capitalismo de Estado”⁵⁹. En cambio, pensamos nosotros, la manera correcta de impulsar y hacer realidad *la alianza* con los pequeños y medianos empresarios, es poner *al proletariado* al centro y a la vanguardia de esa alianza. La manera correcta de fortalecer la alianza de clases con esos sectores no es ofrecerles garantías de desarrollo capitalista, sino mostrar con claridad el camino de desarrollo no capitalista que el proletariado les propone; mostrar con claridad cuál es la política de *transformación gradual socialista en el área de propiedad privada*⁶⁰,

⁵⁶ MAPU, “Informe Político”, al 5° Pleno del partido, junio de 1972.

⁵⁷ MAPU, *idem* (16).

⁵⁸ “Se avanza consolidando o se consolida avanzando”, artículo anónimo aparecido en las páginas centrales de “Posición”, 14 de junio, 1972.

⁵⁹ *Idem* (58). El autor quiere decir, ciertamente, “capitalismo *monopólico* de Estado”.

⁶⁰ Esta política ha sido bosquejada en diversos folletos sobre Comités de Vigilancia y Área de Propiedad Privada editados por compañeros de la Comisión Nacional Sindical del MAPU, y del MAS. Véase también “Áreas de Propiedad Bajo el Gobierno UP”, de Kalki Glauser (Cuadernos de la Realidad Nacional N° 11), y “La Construcción de la Nueva Economía”, de Julio López (“Cuadernos de la Realidad Nacional” N° 13).

que pasa por el “control de los trabajadores” y por el fortalecimiento de los “Comités de Vigilancia” en el área privada. La alianza no se logra mediante la colaboración de clases, sino “aclarando con precisión” a los empresarios pequeños y medianos “cuál es el papel que en la organización social futura –que expresará los intereses del proletariado– les corresponderá a cada uno de ellos. Esa actitud eliminará las *suspicias, incertidumbres y resistencias innecesarias*, obligará a una definición, ya sea por la alternativa proletaria, ya sea por la burguesa. . . No todos aceptarán la alianza, pero quienes la acepten serán aliados que efectivamente permitirán avanzar, generando una correlación de fuerzas favorables al proletariado”⁶¹.

25.– Es cierto que la política económica propuesta por el MAPU parece tener, aún, otro “problema”. Y es que, al no respetar ciertos márgenes máximos de déficit fiscal y de inflación, no da “garantías” tampoco a nuestros actuales o posibles *acreedores extranjeros*. Pero, ¿es qué ganamos gran cosa con respetar esas garantías?, ¿es qué podemos avanzar efectivamente hacia el socialismo sometiéndonos a requisitos impuestos por potencias extranjeras, cuyo cumplimiento no va en interés de nuestra revolución, sino en interés de la política exterior de esos países? ¿Es que nos ayuda en algo una política débil frente al Imperialismo? “De una u otra manera *nos hemos dejado enredar* por las sutilezas de los círculos imperialistas, como lo demuestran algunos aspectos relacionados con la renegociación de la deuda externa”, nos hemos dejado enredar “por un manejo puramente diplomático de estas cuestiones, respecto de las cuales las masas, prácticamente, han quedado marginadas”⁶². “Los imperialistas han preferido una táctica sutil, que evita la agresión abierta, pero que, dejando *sin solución* de fondo nuestro problema de divisas, nos deja, en buena medida en manos de acreedores”⁶³. La diplomática debilidad frente al imperialismo *no le impide* acercarnos económicamente, no le impide hacer el “bloqueo invisible” del que hablaba el compañero Ambrosio, y en cambio, *le ahorra* los problemas políticos de actuar a la luz del día y *desorienta* a nuestro pueblo, sembrando falsas ilusiones de “buena vecindad”. Por otra parte, si “las negociaciones con la URSS y con los países socialistas de Europa han marchado muy lentamente”⁶⁴, no es manera de acelerarlas el ofrecer garantías de “saneamiento económico” que bien podía exigir en otro tiempo el Fondo Monetario Internacional (controlado por los yanquis), pero que no pueden ser exigidas por países socialistas. La ayuda de los países socialistas a nuestra patria no puede basarse en que cumplamos “condiciones” de ninguna especie, sino en la convicción de que nos une un mismo propósito revolucionario socialista. Así lo han entendido, por lo demás algunos países amigos, como China Popular, que nos ha otorgado créditos y ha firmado convenios comerciales, como el de las compras de salitre, sin pedir requisito ni condición previa alguna, e, incluso, sin que estos convenios le resulten muy provechosos.

⁶¹ Idem (58).

⁶² MAPU, idem (56).

⁶³ MAPU, idem (16), pág. 9.

⁶⁴ MAPU, idem (16), pág. 20.

26.- El panorama de las divergencias entre la política económica propuesta por los dirigentes del PC en Lo Curro y la propuesta por el Ministro Vuskovic y el MAPU queda, pues, más o menos claro. La primera se reseñó en el párrafo 15. La segunda, de acuerdo a lo ya dicho, puede resumirse así (sin que ello signifique que hubiese absoluta *identidad* entre Vuskovic y el MAPU):

a) la manera de solucionar el problema del desabastecimiento es restringir el consumo de los sectores de altos ingresos, para poder aumentar el consumo de los sectores populares, para que éstos puedan encontrar más productos para comprar con la mayor cantidad de dinero que tienen;

b) Por eso el problema central es el de aplicar una política de sueldos, salarios, precios, impuestos, producción, importaciones y abastecimiento, discriminatoria, favoreciendo a los que tienen menos y desfavoreciendo a los que tienen más;

c) ello exige contar con instrumentos de dirección de la economía que requieren incorporar rápidamente al área social las 91 empresas, usando para ello todos los medios legales, incluyendo las intervenciones y requisiciones;

d) también, ello exige establecer un control férreo del Gobierno y de los trabajadores sobre las más importantes empresas privadas del comercio y de la industria, y multiplicar los organismos de control y poder popular de base, tales como las JAP, en especial en lo que se refiere a la red de abastecimientos o distribución;

e) dar garantía de no estatización a los pequeños y medianos empresarios que han de permanecer en el área privada; pero no garantías capitalistas, sino garantías que les muestren cuáles son las nuevas reglas del juego a las que se verán sometidos, y qué se espera de ellos en el proceso de transformaciones que vive el país, y cuyo objetivo es el socialismo;

f) ahorrar al máximo las divisas, no importar nada que no sea estrictamente indispensable para las masas populares. Promover la fabricación, en Chile, de repuestos y similares y fomentar el consumo de productos nacionales: no someterse a las condiciones que exige la “ayuda” imperialista, aprovechar las contradicciones entre EE.UU. y Japón y Europa, y apelar la solidaridad revolucionaria de los países socialistas para subsanar los problemas de divisas que subsistan;

g) todo lo cual permitirá reganar el apoyo perdido de las masas populares, más pobres, afectadas por el desabastecimiento, arrastrar realmente a un sector de los pequeños y medianos empresarios, y modificar, así, favorablemente, la correlación de fuerzas, fortaleciendo, al mismo tiempo, el avance hacia el socialismo del Gobierno y del pueblo.

C.- La lógica de la línea económica de Millas es el entendimiento estratégico con la Democracia Cristiana

27.- Hasta aquí, hemos tratado de presentar, esquemáticamente, un aspecto de la discusión de Lo Curro: la polémica sobre la política económica. Sin embargo, este aspecto no es aislable de los demás, y es allí, en esa conexión, donde pueden descubrirse las opciones estratégicas que estaban y es-

tán en juego. En efecto, a primera vista, pareciera que tanto los dirigentes del PC como el MAPU buscaban, en Lo Curro, lo mismo: introducir las medidas necesarias para modificar favorablemente la correlación de fuerzas, recuperar y aumentar el respaldo de masas al Gobierno, ganar las elecciones de marzo de 1973. La política económica sustentada por el MAPU, y personificada hasta cierto punto en Vuskovic, no es de fácil implementación; no puede llevarse a cabo sin establecer ciertas discriminaciones ya indicada que presentan dificultades técnicas nada de simples; y sobre todo, no puede llevarse a cabo sin la *voluntad política* de organizar y movilizar a las masas populares, desde la base, *entregándoles control e iniciativa*. No es una política sencilla, como no lo son tampoco los problemas que busca resolver; pero de lo que no cabe ninguna duda es de que se trata de una política *capaz de ganar a las masas*, capaz de reconquistar el apoyo de algunos sectores pobres del pueblo, que se habían ido desilusionando del Gobierno. Capaz, sobre todo, de crear un poder popular de base, que sirva a la UP para pararse muy firmemente sobre él y sobre el Gobierno, como sobre dos robustas piernas, en vez de seguir haciendo equilibrios sobre un solo pie. La política económica sustentada por el MAPU es una política que se dirige derechamente al corazón de los sectores más pobres, y que apunta, también, derechamente contra el bolsillo de los privilegiados de altos ingresos. Es, por eso, una política que puede ganar el apoyo de la mayoría del país.

28.- La política económica sustentada por los dirigentes del PC en Lo Curro es, en cambio, una política más fácil de implementar, pero que difícilmente puede esperarse que suscite el entusiasmo de “los pobres del mundo” en nuestro país, como se ve de los párrafos anteriores. En efecto, cualquiera se da cuenta de que por muchas campañas que se hagan contra el “economicismo”, ellas no han de impedir que los trabajadores presenten pliegos “con el tejo pasado”, así como no lo impidió este año el convenio suscrito con la CUT. Lo más que puede ocurrirnos que si las directivas sindicales de alto nivel acuerdan con el Gobierno no pasar de ciertos límites, ello redunde sólo en el descontento de sus bases, que no pueden estar dispuestas a aceptar “una política de austeridad y economía consciente”⁶⁵ que significa mantener los injustos privilegios de una minoría que consume hoy el 50% de todo lo que se puede consumir en Chile. Tampoco es fácil convencer a los obreros del área privada de que bajo el “Gobierno de los trabajadores” ellos no tengan ningún control sobre la marcha económica de las empresas. Ni es fácil, en suma, contener los impulsos revolucionarios de las masas, que no entienden por qué habría que “consolidar” aquí el proceso. Los dirigentes del PC no ignoran nada de esto. Y es por eso que últimamente insisten con mucha fuerza en lo que llaman la “participación” de los trabajadores. ¿En qué consiste, para ellos, esa “participación”? Orlando Millas es muy claro al

⁶⁵ “Esquema de una Estrategia. . .”, pág. 1. Sobre el descontento que provocan los “acuerdos por arriba” entre el Gobierno y las directivas sindicales, baste recordar el ejemplo del Convenio Nacional de la Construcción, firmado a principios de año por el Ministro del Trabajo, la Federación de la Construcción y la Cámara Chilena de la Construcción, pero repudiado por las bases.

respecto. En primer lugar, nos explica en qué no consiste. Dice: “en el área social. . . el control de la administración de las empresas por los organismos de participación corresponde a una concepción anarquista antisocialista”⁶⁶. (Para qué hablar del área privada!⁶⁷). Así, pues, queda claro que la participación no consiste en el control por parte de los organismos de participación, ya que ello sería, según Millas, “anarquismo puro”. ¿Y, en qué consiste entonces? –podríamos preguntar ingenuamente nosotros. Millas nos responde: Consisten en que hoy día los obreros “tienden a continuar planteando sus reivindicaciones de la manera tradicional, a través de los pliegos de peticiones meramente economicistas, de las huelgas. . .” y en que “si no se aprecian debidamente estas realidades. . . se corre el riesgo de que muchos trabajadores no comprendan la política de los comunistas. . . el peligro de que la vanguardia se aisle de las masas”⁶⁸; por lo tanto hay que estar, en primer lugar, muy consciente de que los trabajadores “tienden” a no hacer caso de las consignas “antieconomicista”; pero, en segundo lugar, hay que entender que la “indisciplina social”⁶⁹ no puede manejarse ya a la manera de los antiguos empresarios monopolistas; intentar tal cosa sería “como un cochero que pretendiera dirigir un camión con las riendas, la huasca o los silbidos”⁷⁰. Por eso se requiere otros mecanismos de “disciplina democrática, rigurosa pero consciente”⁷¹, basado en “una auténtica participación”⁷² entendida como “una conexión coherente, dinámica y directa entre la producción, la productividad, la rentabilidad de las empresas del área social, su entrega de excedentes y los salarios e incentivos materiales al trabajo”, todo ello unido a “una dirección eficiente, racionalizada, moderna y avanzada” y a una “férrea disciplina social de los trabajadores”⁷³. Por eso, explica Millas, “una participación revolucionaria es real si opera en el terreno, ante todo de los convenios de producción y de salarios basados estrictamente en un plan económico realista que se proponga metas muy claras de aumento de la productividad y de reproducción ampliada y *que comprometa a cada obrero, empleado y técnico*”, para que el trabajador llegue así “a respaldar, con convencimiento, la necesidad de las jerarquías, de la dirección democrática central, de la disciplina y de la responsabilidad individuales”⁷⁴. En una palabra, lo que Millas llama “participación”, es un mecanismo de integración de los trabajadores a la política por él propuesta, es un mecanismo de “férreo disciplinamiento social” combinado con “incentivos materiales”, para lograr que los trabajadores acaten “las jerarquías” y no se salgan de los marcos de los “convenios de salarios” concertados entre el Gobierno y las altas directivas sindicales. De allí que se presente al plan como garantía de la participación. De allí que, para Millas, no haya participación “auténtica” si

⁶⁶ Orlando Millas, ídem (6).

⁶⁷ Ver párrafo 23.

⁶⁸ Orlando Millas, ídem (14).

⁶⁹ Víctor Díaz, ídem (17), pág. 6.

⁷⁰ Orlando Millas, ídem (14).

⁷¹ Orlando Millas, ídem (14).

⁷² Orlando Millas, ídem (14).

⁷³ Orlando Millas, ídem (14).

⁷⁴ Orlando Millas, ídem (14).

no opera sobre la base de un “plan económico” que comprometa con la “reproducción ampliada” a “cada obrero, empleado y técnico, o sea, si no asegura una “dirección democrática central” cuyo prototipo debe ser, sin duda, el *centralismo “democrático”* en base al cual funciona internamente el propio PC. . . Muy distinto es, en cambio, lo que el MAPU entiende por “participación”. Para el MAPU, como ya vimos, se trata fundamentalmente *del control* por parte de los trabajadores, se trata de su *poder de decisión*. Por eso, el MAPU plantea de otra manera la cuestión del *plan* y de la *participación*. No el plan como garantía de la participación, sino al revés, la participación como garantía del plan. No un plan para “acumular excedentes”, sino al revés, para satisfacer las necesidades de consumo de las grandes masas: “Surge la necesidad de un plan y una dirección clara como requisitos indispensables para *responder* a las demandas de las grandes masas con *la elevación de su nivel de vida*”, y para *responder* “a la participación de los trabajadores en la producción y en la conducción del proceso”⁷⁵; “un plan que implique redefinir las líneas de producción existentes en el área social, teniendo como referencia básica *los requerimientos de consumo de las grandes masas*. . . Es iluso pensar que la Dirección y el Plan se puedan desarrollar *sin participación activa del proletariado y los trabajadores en general*”⁷⁶. “Los que hoy piensan que el Plan y la Dirección se realizan y controlan mediante el aparato bancario, no perciben el cambio objetivo que ha habido en la base material de la economía; desprecian la fuerza *de conducción* del proletariado y los trabajadores en general, caen en la concepción más vulgar y burocrática de dirección”⁷⁷.

29.- Lo más que puede pretender la política económica propugnada en Lo Curro por los dirigentes PC es, pues, hacer “participar” en ella a los trabajadores más susceptibles de ser sometidos a una “férrea disciplina social”⁷⁸, pero jamás encender a tal punto el entusiasmo revolucionario de las masas de bajos ingresos como para recuperar siquiera el apoyo político perdido por el Gobierno en los últimos meses. Porque, efectivamente, el avance del 36% al 50% en la votación de la UP a comienzos de 1971, *no se debió sustancialmente a que hubiese ganado a las “capas medias”*, sino a que contingentes populares *muy pobres, de subproletariado* entre otras cosas, fueron atraídos por la disminución de la cesantía, la redistribución del ingreso y el tono decididamente revolucionario de la política gubernamental⁷⁹. De manera que si se quiere recuperar

⁷⁵ MAPU, ídem, (16), págs. 11 y 12.

⁷⁶ MAPU, ídem (16), págs. 22 y 23.

⁷⁷ MAPU, ídem (16), págs. 24 y 25.

⁷⁸ Naturalmente, no todos estarán tan dispuestos a acatar esa “disciplina”, y algunos buscarán entonces encauzar su descontento bajo un liderazgo izquierdista al exterior de la UP. De allí que la política de Millas sea inseparable de la *represión al MIR*, y a quien quiera que se aparte de esa política.

⁷⁹ La dirección del MAPU parece estar consciente de este hecho, ya que el “Informe Político” al 5° Pleno dice: “No cabe duda de que el enemigo ha logrado *mantener* su penetración en los diversos sectores de la burguesía media y pequeña, en la pequeño-burguesía y ciertas cajas de trabajadores. *A pesar de ello*, desde el punto de vista electoral, la UP avanza del 36% que tenía en 1970, a poco menos del 50.

y sobrepasar el 50%, lo que se necesita es una política orientada a ganar a las masas populares *de más bajos ingresos* (como la política planteada por el MAPU) y no una política que fundamentalmente beneficia y da garantías a los sectores de ingresos medios (como la propuesta por dirigentes del PC), pues esos sectores, como ya se discutió, *no votarán por la UP*, por muchas garantías que les demos⁸⁰, a menos, precisamente, que dejemos de exigirles ser más papistas que el Papa, a menos que no les pidamos que se vuelvan revolucionarios cuando las fuerzas políticas del proletariado *vacilan* en llevar adelante una política revolucionaria socialista, a menos, entonces, que apliquemos una política que no se base en hacerle concesiones capitalistas a esos sectores, sino en impulsar con firmeza las medidas que benefician al proletariado y demás sectores, populares de ingresos bajos.

30.- Pero, se preguntará, si la política económica de los compañeros Millas y otros no es capaz de ganar respaldo de masas para la UP, ni por el lado de los pobres ni por el lado de los sectores medios, entonces ¿cuál es su lógica? ¿Cómo se pretende, entonces, solucionar las dificultades que enfrenta el Gobierno? ¿Qué pasa con las elecciones de marzo de 1973? Aparentemente, tales preguntas no tendrían respuesta. Pero, creerlo así, sería un error. Sería creer que los compañeros dirigentes del PC no saben lo que hacen; y no es así, lo saben muy bien. *Hay una lógica en esa política*. Y esa lógica se llama Democracia Cristiana. En efecto, con la política económica que sustentaba el MAPU en Lo Curro, era posible reconquistar el respaldo perdido de los sectores populares más pobres, pero a costa de provocar una agudización tal de la lucha de clases, un enfrentamiento hasta tal punto directo con los intereses de los sectores de más altos ingresos, que podía desembocar en una crisis social y política para la cual el PC, que es el partido más fuerte de la UP, no se considera preparado. En cambio, la política económica planteada por los dirigentes del PC en Lo Curro, si bien no permitía ganar para la UP el respaldo de masas necesarias como para triunfar en marzo de 1973, evitaba –sin embargo– ese enfrentamiento social y político, y podía aminorar los efectos de la inminente crisis económica para los sectores de ingresos medios, a costa, claro está, de los sectores más pobres. A su vez, estos sectores de ingresos medios, si bien no creen en las garantías de prosperidad que pueda darles la UP, sí creen, en cambio, en las garantías que pueda avalar la Democracia Cristiana. Y es en la posibilidad de entenderse, a más corto o a más largo plazo, con la DC, donde reside –entonces– la salida que los dirigentes del PC visualizan. Una salida que permitiría salvar la situación, incluso, perdiendo las elecciones de marzo de 1973. Se trata, entonces, para estos dirigentes, de poner en práctica una política económica que, resguardando los intereses materiales de las llamadas “capas medias”, y de los pequeños y medianos empresarios, obstaculicen lo menos posible un entendimiento de largo alcance con la Democracia Cristiana, entendimiento que se busca concretar a partir de las conversaciones sobre áreas de propiedad, y que puede postergarse, incluso, hasta después de marzo de 1973. Así lo planteó Millas desde un comienzo: “el asunto

⁸⁰ Ver párrafo 24.

primordial en el proceso revolucionario chileno consiste, en la actual coyuntura, en que *la clase obrera* asuma, en él, el papel que históricamente le corresponde. . . que reagrupe junto a ella a todas las fuerzas interesadas en el progreso, lo cual exige que apoye resueltamente las reivindicaciones legítimas y los derechos democráticos de cada una de las clases y capas sociales susceptibles de interesarse en la lucha antiimperialista y antioligárquica”⁸¹. No hay que ser adivino para entender que “la clase obrera” es, en estos casos, sinónimo de “el Partido Comunista”⁸² y que “las fuerzas interesadas en el progreso” son aquí sinónimo de “la Democracia Cristiana”. Pero, por si cupiera alguna duda, el último Pleno del PC se encargó de disiparla. Así, por ejemplo, Víctor Díaz nos dice: “queda en evidencia que más allá de la Unidad Popular hay gente que está por los cambios, que por sobre la línea divisoria entre oposición y Gobierno hay posibilidades de desarrollar la acción común por el avance del proceso revolucionario. . . Desde que verificamos este hecho hemos venido planteando nosotros, el Presidente Allende y los demás partidos (sic) de la Unidad Popular, la necesidad de dar un golpe de timón, *la necesidad de . . . una conducción económica más adecuada*”⁸³. Y al clausurar el Pleno, Mario Zamorano remacha: “En Chile, las fuerzas partidarias de los *cambios* se encuentran también *más allá* de las filas de la Unidad Popular. Los comunistas hemos señalado esta realidad en reiteradas ocasiones”. “De esto se trata. Tal es el espíritu del Pleno: evitar *la falsificación del cuadro político, restablecerlo* en sus verdaderas líneas unir a la mayoría absoluta que quiere cambios”⁸⁴. No cabe duda entonces de que la lógica de la política económica planteada en Lo Curro por los dirigentes comunistas, está precisamente en que, con esa política es factible ganar el apoyo más o menos permanente de la DC (o como ellos dicen, “restablecer el cuadro político en sus verdaderas líneas”), mientras que, con una política como la planteada por el MAPU, tal cosa es imposible. Así se explica la importancia que para el PC tenían las conversaciones llevadas con la Democracia Cristiana sobre el problema de las áreas. En efecto, si en ese punto se llegaba a acuerdo, entonces se aseguraba el primer paso de un entendimiento mucho más amplio y a más largo plazo. Por eso el PC hizo lo indecible por llegar a acuerdo, se jugó por decirlo así, entero. Las conversaciones no tenían para el PC una importancia meramente *táctica* (como para el MAPU), sino una importancia *estratégica*. Que ello es efectivamente así, puede verse del hecho de que aún después del fracaso de las conversaciones UP-DC, los dirigentes comunistas digan: “Nuestra

⁸¹ Orlando Millas, ídem (14).

⁸² Recuérdese si no, cuál era la consigna del PC en la última campaña de la CUT; “que la clase obrera siga dirigiendo a la CUT, o sea, que *sólo* si ganaba el PC había dirección de “la clase obrera”, mientras que si ganaba el PS, entonces ya no.

⁸³ Víctor Díaz, ídem (17).

⁸⁴ Mario Zamorano, ídem (12). Claro está que un lector desprevenido podría pensar que cuando se habla de “fuerzas más allá de la UP” quizá se hace referencia a las masas de trabajadores DC y no a sus directivas partidarias. Pero no es así. Se trata del PDC como partido. Y ello queda claro en la cita de Volodia más adelante.

idea es perseverar en la idea de unir a todos los chilenos que buscan los cambios de estructuras y abrir el paso a una sociedad nueva. . . Por esto creemos que si se llegó a virtuales acuerdos, estropeados en el último minuto, sobre materias trascendentes, que significaron en todo momento la posibilidad de un avance en el cumplimiento del Programa de la Unidad Popular *en aquello que tenía de coincidente con anchas áreas del Programa de Radomiro Tomic*. . . no es un hecho gratuito, sino porque corresponde a *una necesidad profunda de la sociedad chilena*, necesidad que no desapareció. . . , sino que *continúa vigente y pendiente*, porque es un *imperativo histórico*⁸⁵. Así, pues, está claro absolutamente: los dirigentes del PC buscan un entendimiento a largo plazo con el PDC, lo consideran un “imperativo histórico”, que todavía está “pendiente”. Para ellos, no se trata simplemente de los vetos a la Reforma Constitucional, no se trataba sólo de impedir el “enfrentamiento de poderes”, sino que se trataba de “unir a la mayoría absoluta que quiere cambios”, se trataba y se trata de seguir gobernando, más allá de marzo de 1973, con el apoyo –desde fuera o desde dentro del Gobierno– de la DC, o al menos, de su sector “progresista”, “tomicista”. Y es eso lo que explica el tipo de política económica que los dirigentes del PC planteaban en Lo Curro. Y lo que explica por qué en esa perspectiva, ya no eran tan importantes las consecuencias de esa política para la votación de la UP en marzo de 1973.

31.– Ahora bien, nosotros comprendemos perfectamente que no puede tomarse a los partidos como bloques homogéneos. Que dentro de cada partido, y en especial del PDC, existen contradicciones que es necesario aprovechar en favor de una política revolucionaria socialista. Que, por lo tanto, no puede rechazarse “por principio” el buscar algunos acuerdos concretos con fuerzas más allá de la UP. Más aún, creemos que *es fundamental romper la unidad del enemigo*, entorpecer los entendimientos entre la DC y el PN-DR. Pero no olvidamos, tampoco, que cualquier acuerdo con la DC tiene que ser un acuerdo sobre la base de que nos permita impulsar *nuestra política*, de que nos permita avanzar hacia el socialismo. Y que, debido al carácter de clase de su dirigencia y de su línea partidaria, es imposible pensar que la Democracia Cristiana, *como tal*, esté dispuesta a orientarse de acuerdo a una perspectiva socialista. Por ese motivo, cualquier entendimiento, cualquier unidad de acción con el PDC, tiene que ser sólo un acuerdo coyuntural, momentáneo, en un punto concreto, o sea, un acuerdo *táctico*. Pero nunca podríamos aceptar un entendimiento *a largo plazo* con el PDC, nunca podríamos aceptar un entendimiento que se plantee con el carácter de “¿imperativo histórico”, como pretende el compañero Teitelboim, nunca podríamos aceptar un entendimiento *estratégico*, ya que en tal caso se trataría de un entendimiento que lejos de permitirnos avanzar hacia el socialismo, entorpecería la marcha, *nos amarraría a alguna estación intermedia de tránsito*. Porque no se trata de “unir a la mayoría absoluta que quiere cambios”, sino que se trata de unir a los que estén por cambios *que nos*

⁸⁵ Volodia Teitelboim, iniciando una conferencia de prensa que con el título “La Movilización del Pueblo Resolverá la Crisis”, publica “El Siglo” del 15 de julio de 1972, pág. 7.

ayuden a caminar hacia el socialismo, no por cualquier clase de cambios. La Unidad Popular es una unidad que se hace con esa perspectiva; así se desprende de su Programa, así lo entendemos nosotros, y así lo entiende también el pueblo. El “imperativo histórico” de la unidad con el PDC ya no tendría ese carácter, sería, cuando más, una unidad para el capitalismo de Estado; pero esa unidad a nosotros no nos interesa.

D.- En Lo Curro triunfó la línea del PC

32.- Así, pues, queda claro hasta ahora que la política sustentada por los dirigentes del PC en Lo Curro consta de tres aspectos íntimamente relacionados, e inseparables entre sí; tan inseparables que, como hemos tratado de mostrar, no se pueden entender racionalmente si uno no los toma en conjunto. Estos tres aspectos, recordémoslo, son:

a) una política económica que, a grandes rasgos, puede describirse como *restrictiva* del gasto público y privado; que se centra en el mercado a nivel de los precios y salarios y que considera el control social de la economía, sólo como un complemento secundario;

b) una política de implementación de la anterior que exige la *integración* de los trabajadores al plan económico y la *represión* contra los sectores que se resiste a aceptarla;

c) una política de *alianza estratégica* con la Democracia Cristiana.

Ahora bien, es teniendo esta política *global* como marco de referencia que uno puede valorar los acuerdos tomados en Lo Curro. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? Los siguientes:

a) cambios en el Gabinete que en esencia consisten en *la salida de Vuskovic* de Economía y *la entrada de Millas* en Hacienda;

b) *ruptura de relaciones con el MIR*;

c) búsqueda de *entendimiento con el PDC* en torno al problema de los vetos y las áreas de propiedad.

¿Qué significa todo esto?

33.- Hay algunos compañeros que tienden a considerar cada uno de los acuerdos de Lo Curro *por separado*, como si fuesen aislables entre sí. Y, entonces, nos dicen: “la salida de Vuskovic fue mala”, “las conversaciones con la DC fueron positivas”, etc. Hacer tal cosa es caer en un grave error. Es creer que cada acuerdo significa algo por sí mismo, al margen del contexto político global en que se da. Es perder de vista el bosque por mirar a los árboles. No. Los acuerdos de Lo Curro no son “buenos” ni “malos” por separado. Lo son sólo *en referencia a lo que en conjunto significan*. Y a estas alturas de la discusión, ya nadie podrá dudar de que *en conjunto* significan algo muy claro: *el triunfo de las posiciones que sustentaban los dirigentes del Partido Comunista*, el triunfo evidente de la línea política planteada por los dirigentes del PC. En esto no podemos llamarnos a engaño. Claro está que no se trata de un triunfo *absoluto* ni definitivo, como veremos en seguida, sino de un triunfo relativo y a veces hasta indirecto. Pero ello no aminorará el hecho de que, en Lo Curro, es la tendencia de los dirigentes del PC la que se impuso. Y ese hecho no tiene un sig-

nificado meramente táctico, sino un significado estratégico, como ya se intuirá de lo dicho: “En la actual discusión en el seno de la Unidad Popular y de la izquierda en general, está planteado a nuestro juicio un problema de fondo, una cuestión de carácter estratégico”⁸⁶.

34.— Porque, ¿qué significan, en primer lugar, los cambios de ministros, en este contexto? Significan, en la práctica, el rechazo a la política económica sustentada por el MAPU y por Vuskovic, y la aceptación, de hecho, de la política económica de Millas. Porque es cierto que en Lo Curro no se adoptó ningún acuerdo global sobre política económica; pero no es menos cierto que la *conducción real*, los *mecanismos administrativos* indispensables para implementar una política económica, quedaron en manos de Orlando Millas (nuevo Ministro de Hacienda) y de Carlos Matus (nuevo Ministro, socialista, de Economía), mientras Vuskovic fue relegado a la honorífica, pero carente de mando real, condición de “superministro”. Ahora bien. Orlando Millas en Hacienda es garantía de enérgica aplicación de la línea económica que él mismo propicia, mientras que Matus (ex ejecutivo de la CAP) en Economía, puede asegurar allí una eficiente conducción técnica, pero de ningún modo una *línea política* económica capaz de imponerse a Hacienda⁸⁷. Es sabido que, tradicionalmente, la política económica la ha conducido en este país el Ministerio de Hacienda, y si ello no fue así durante el período del Gobierno de Allende que concluye en Lo Curro, ello se debe esencialmente a dos factores: primero, *al tipo* de política que impulsó Vuskovic desde Economía, y que rompió los criterios presupuestarios y financieros hasta entonces predominantes, chocando, precisamente por eso con el Ministerio de Hacienda; y segundo, *al tipo de conducción* que el ex Ministro Zorrilla dio a Hacienda, conducción incapaz de imponerse a la línea de Economía. Así, pues, con el cambio de ministros, lo que realmente ocurre es que la balanza de la dirección económica se inclina nuevamente, como antaño, hacia el Ministerio de Hacienda. Lo que realmente ocurre es que termina la dualidad en la dirección económica, termina la lucha entre Hacienda (Zorrilla) y Economía (Vuskovic), decidiéndose esta lucha a favor de Hacienda, y restaurándose, así, en toda su “normalidad”, “las leyes de la administración económica”, como, tal vez, diría Orlando Millas. Claro está que en Lo Curro se decidió crear, además, un “Comité Económico Nacional” dirigido por Vuskovic y que se supone debe unificar las políticas de ambos ministerios, así como las de otros organismos, como el Banco Central. Pero, aparte de que ese “Comité” no tiene visos de cobrar existencia real, la verdad es que si efectivamente llegase a funcionar, *se reproduciría en su seno* la lucha entre las dos tendencias antes esbozadas en materia económica, y en esa lucha, todas las de ganar las llevan los nuevos ministros, que son quie-

⁸⁶ MAPU, ídem. (56).

⁸⁷ En todo este análisis, no puede olvidarse el papel que jugó la dirigencia del PS en toda esta discusión; oscilante entre la línea de Millas y la del MAPU; pero en todo caso *antiVuskovic* por motivos no siempre ideológicos. Ni puede olvidarse que en el PS coexisten diversas tendencias, siendo Carlos Matus un representante, no precisamente de las más izquierdistas, sino más bien del sector tecnocrático-allendista.

nes tienen “la manija”, como se dice, del aparato económico estatal, o sea, las palabras de mando reales. Así, pues, el real significado del cambio de Gabinete es el triunfo (al menos en esta primera batalla) de la línea dirigente del PC y la derrota de la línea del MAPU y de Vuskovic. Los dirigentes comunistas lo entienden perfectamente: “El cambio de Gabinete no es simplemente el cambio de cinco o seis hombres, sino parte integrante del esfuerzo por resolver de una vez por todas *los problemas de conducción política y de conducción económica únicas*, cuya *ausencia* ha dificultado la aplicación del Programa”⁸⁸. “Se ha producido una significativa modificación en el Gabinete. La prensa reaccionaria se ha esmerado en *hacer creer que no habrá cambio de política. . . Pero habrá. . .* en cuanto a *corregir errores* propios del curso de un proceso revolucionario”⁸⁹. Claro está que este triunfo de la línea Millas en materia económica, es sólo el triunfo en una primera batalla. No *asegura*, por sí mismo, la posibilidad de traducir en hechos reales lo que hasta aquí ha sido sólo un planteamiento teórico. En primer lugar, porque en todo organismo jerárquico, como son los ministerios, no importa sólo su cabeza más alta, sino que, también, tienen mucha importancia los funcionarios de rangos más bajos que son los que ponen en práctica las políticas, y los llamados “mandos medios” que gozan de relativa autonomía. Así, por ejemplo, podrá ser Millas, como hombre fuerte de Hacienda, quien oriente en el más alto nivel la política económica; podrá ser Matus quien esté al frente del Ministerio de Economía; pero aquí y allá hay numerosos militantes del ala izquierda socialista, mapucistas, independientes, y también comunistas, que *no están* con la política de Millas, y que, dentro de su campo de relativa autonomía, no la van a aplicar. Ejem-

⁸⁸ Víctor Díaz, ídem (17), pág. 5.

⁸⁹ Víctor Díaz, ídem (17), pág. 4. La referencia a los “errores” es, evidentemente, una referencia a Vuskovic. Respecto a que efectivamente se produjo un “cambio de política”, puede verse el discurso de Allende del lunes 24 de julio (fue publicado completo en “El Mercurio” del día siguiente), donde se dice por ejemplo:

“Entre los criterios básicos que orientan los objetivos del Gobierno en esta *nueva etapa* de construcción económica y social, está presente la voluntad. . . de reafirmar *seguridades de estabilidad y desarrollo* en amplias capas de pequeños y medianos empresarios del campo, la industria y el comercio”; “Los precios deberán fijarse sobre la base de que las empresas de propiedad social *se autofinancien y dejen excedentes* normales para su propia expansión. . . , los precios para el sector privado de pequeños y medianos industriales y comerciantes se fijarán sobre la base de que esas empresas operen con *niveles normales de rentabilidad*”. “Para *frenar las presiones inflacionarias* y restablecer niveles más normales de abastecimiento, se hace imprescindible la aplicación de medidas especiales *de fomento del ahorro, calificación de sueldos líquidos en poder de particulares*”. “El incremento de las remuneraciones debe guardar relación directa con el de la producción y productividad”. . . (págs. 6 y 19). Sin embargo, no puede negarse que también se propone, en ese discurso de Allende, otras medidas que tienen que ver con algunas de las “discriminaciones” del párrafo 21, aunque no con el mismo énfasis ni como centro de una política global, sino, más bien, como incrustaciones complementarias, como ayudas adicionales dentro del proyecto político fundamental, que sigue los lineamientos diseñados por el Ministro Millas.

plos hay muchos, pero no está demás citar que en la Subsecretaría de Economía permanece el compañero Oscar Guillermo Garretón, y que en la Vicepresidencia de CORFO está ahora el propio compañero Vuskovic. Así, pues, este es un primer obstáculo práctico con que se encuentra la línea económica de los dirigentes del PC en su aplicación. Pero, en segundo lugar, hay otro obstáculo, que ya antes señalamos, y que es “la vida misma” como gustan decir los compañeros comunistas. “La vida misma”, vale decir, en este caso, el movimiento espontáneo de las masas, su espíritu de lucha, de combate, que se hace cada vez más difícil de contener, y que se traduce concretamente en impulsar *en los hechos* la política de redistribución del ingreso y del consumo que propicia el MAPU, así como en impulsar *en los hechos* la ampliación acelerada del área social. Hasta ahora, por más que haya habido cambio de Gabinete, Millas *no ha logrado* implementar la política que proponía en Lo Curro. Ha tenido que conceder un reajuste masivo para dentro de poco, mientras la inflación continúa y el desabastecimiento no da señales de desaparecer. Parece que, además, ese reajuste va a ser ligeramente discriminatorio (cuestión en la que Millas no estaba de acuerdo), como producto de las presiones que se ejercen sobre el Ministro. Pero, por ese camino, tratando de impulsar una política que se orienta directamente contra la marea de las masas, tratando de remar contra la corriente, lo que puede ocurrir es, no que triunfe la política económica de Millas, sino que se imponga cada vez más una situación caótica, en que no haya línea económica alguna, lo cual puede tener nefastos efectos en el terreno político al aumentar el descontento popular.

36.- De allí que no pueda esperarse que una situación de este tipo sea tolerada por mucho tiempo por los dirigentes del PC; de allí que deba esperarse que, a corto o largo plazo, traten de imponer *el resto de su política* en este campo, sin lo cual las medidas económicas no puedan llevarse a la práctica, vale decir, la “*férrea disciplina social de los trabajadores*” y la integración de los obreros del área social a un plan económico dirigido desde Hacienda, o como ellos lo llaman, la “participación” sin “control”. Pero esa es una política en esencia *represiva*⁹⁰, una política que necesita de un “chivo expiatorio” que sirva para justificar sus acciones; y ese “chivo expiatorio” está a la mano; basta con acusar de “ultraizquierdistas” a todos los que no se sometan a esa “férrea disciplina”, basta que acusarlos de “miristas”, para que todo quede justificado. El MAPU ya ha sufrido en carne propia esa manera de proceder del PC, con motivo de la marcha del 12 de mayo pasado en Concepción, cuando los dirigentes locales comunistas, presionados por su Comisión Política, se retiraron de los preparativos de la marcha que ellos habían propuesto, desataron “la represión policial. . . no contra la derecha, sino contra la izquierda”, y lanzaron “*la acusación de ultraizquierdismo* a quienes estaban por realizar lo propuesto por ellos mismos”⁹¹. Así, pues, a nadie podrá extrañar que en el futuro, si com-

⁹⁰ Ver párrafos 27 y 28).

⁹¹ Informe de la Comisión Política al 5° Pleno del MAPU, junio de 1972. Ver también el folleto del Regional de Concepción del MAPU: “Apuntes Críticos y Autocríticos Acerca de los Sucesos de Concepción y sus Perspectivas”, aparecido en De Frente N° 10-11.

pañeros nuestros intentan impulsar en la práctica, desde las fábricas o desde las subsecretarías, una política incompatible con la idea de los dirigentes del PC, a nadie podrá extrañar que estos compañeros nuestros pudiesen ser tildados de “ultraizquierdistas” o de “miristas”. De allí que constituya otro gran triunfo para los dirigentes del PC en Lo Curro, el lograr un acuerdo de *ruptura* de relaciones con el MIR. Con ello tienen otro punto ganado para implementar su política, que, ya hemos visto, *no es la nuestra, no es la del MAPU*. Aquí no se trata de que defendamos al MIR. Muy por el contrario, el calificativo de “ultraizquierdista” con que se le asocia se lo tiene bien ganado. “Las contradicciones y confusiones implícitas en su línea política, producto del esquematismo y subjetivismo de su análisis, ha conducido al MIR efectivamente, a una práctica política de corte espontaneísta y aventurero”⁹². Pero nuestra absoluta divergencia con la política que lleva el MIR, no puede justificar una “ruptura” total de relaciones con él, que esconde en sí *un claro propósito represivo*, y que envuelve peligros no sólo para el MIR, sino para nosotros mismos y para todos los que dentro de la UP están por una revolución socialista. Estamos en desacuerdo con el MIR; pero no podemos aceptar una política “antimirista” ni oponernos a todo acuerdo con el MIR si no es bajo la condición de que entre, o poco menos, a la UP. Sería lo mismo que negarnos “por principio” a todo acuerdo con la DC si ésta no se sale de la Oposición. Lo correcto es decir: “la acción conjunta con el MIR, *posible en determinadas circunstancias*, debe pasar por una *lucha ideológica* interna, resuelta e indispensable”⁹³. Lo *incorrecto* es plantear una negativa de “principios” a toda acción conjunta con el MIR, creando así un “chivo expiatorio” para el uso de la dirigencia del PC. Tal “ruptura antimirista se puede volver fácilmente contra nosotros. Ello está implícito en la política de participación *integrativa* y de *férrea disciplina social*” de que habla Millas. Pues no hay que olvidar que esa “disciplina” se plantea como una disciplina que tiene por condición de ejecución el que sea el PC quien la encabece, que sea él quien esté en su centro. Millas, como siempre, es también en esto escandalosamente claro. Nos dice: “lo decisivo en todos los terrenos, es que *la clase obrera*” (o sea, “el PC”; ver nota 82) “*vaya asumiendo*, realmente y en forma orgánica, *más y más funciones*, correspondientes a un *papel dirigente de la economía y de la sociedad*”, para lo cual “reviste suma importancia una conducción política homogénea”⁹⁴. “Se requieren medidas concretas tendientes a asegurar una *conducción homogénea* en todos los terrenos y en todos los niveles, que realce *la autoridad* del Gobierno Popular al *sancionar sin contemplación* cualquier transgresión a los compromisos contraídos con el pueblo”⁹⁵. “Discute, pero gobierna sin la menor

⁹² Regional de Concepción, “Algunas Consideraciones Acerca de la Situación Política Nacional y las Tareas del MAPU”, pág. 6.

⁹³ Idem (90).

⁹⁴ Orlando Millas, ídem (20).

⁹⁵ Orlando Millas, ídem (49). Como se sabe las “transgresiones” de que habla Millas son toda política que no sea la de los dirigentes del PC; por ejemplo, “los errores políticos y económicos” de Vuskovic-Garretón.

vacilación; y gobierna con mayor firmeza de lo que lo hizo el capitalista antes que tú. De lo contrario, no podrá derrotarlo. Recuerda que *es necesario gobernar con mayor firmeza y vigor que antes*. “En esto no hay elección posible ni puede haberlo; *tampoco tiene que existir sentimentalismo de ninguna clase*. El sentimentalismo en la guerra es un crimen no menor que el egoísmo. Quien en estos momentos olvida la disciplina y el orden, deja que el enemigo entre en su medio”⁹⁶. Así, pues, ¡que no se diga que no se nos *había advertido!*

37.- Los acuerdos sobre cambios de ministros y sobre el MIR tomados por la UP en Lo Curro, son, pues, dos puntos a favor importantísimos conseguidos por los dirigentes comunistas en beneficio de su política global. ¿Puede decirse lo mismo del tercero, o sea, del acuerdo sobre negociaciones con la DC? Es indudable que sí. Es cierto que se trataba sólo de una autorización de entendimiento coyuntural, sobre *un punto determinado*: el problema de los vetos y las áreas de propiedad. Es cierto también que, *tomado aisladamente*, ese acuerdo podía ser muy positivo, ya que en ese caso podría entenderse como un acuerdo *táctico* que nos permitía, en caso de concretarse, avanzar en la dirección de nuestra política. Pero el problema reside en que la búsqueda de un acuerdo con la DC en torno a las áreas de propiedad podía ser un asunto meramente táctico para nosotros, para el MAPU, pero evidentemente no lo era para el PC, y desde que era la táctica global del PC la que se imponía, desde que en este caso esa táctica es incompatible con nuestra estrategia y desde que no es, en esas condiciones, precisamente el MAPU quien puede pretender hegemonizar la conducción política de la alianza, entonces la cosa cambiaba de carácter, revestía una importancia *estratégica*, no meramente táctica. Así lo entendió por cierto, el PC, y al parecer también el PS (tanto los sectores favorables como los que se opusieron a ese acuerdo). Es decir, el problema de estos entendimientos con el PDC, aparentemente puntuales, reside en que el sector hegemónico de la UP (el PC y los socialistas del sector de Allende) los consideraba como *un primer paso* para un entendimiento más global y a largo plazo. El problema reside en que “cuando existen serias posibilidades de concretar acuerdos muy favorables con la DC en torno de la Reforma Constitucional en curso, *aparece también en el seno de la UP, la tendencia de derecha* a buscar la ampliación de la base de sustentación social, política e institucional del Gobierno, con una política hacia la DC que busque, más allá de entendimientos tácticos, acuerdos *estratégicos*. Pensamos que esa es una política imposible, *salvo que se renuncie al Programa*”⁹⁷. De manera que, mirando las cosas desde este ángulo, podemos volver a plantearnos, ya con cierta perspectiva, la pregunta: ¿era o no era conveniente la búsqueda de entendimiento con la DC *en esas condiciones* concretas, *en ese marco* político global?

⁹⁶ Lenin, citado por Millas, *idem* (20). La cita, por supuesto, no es casual, sino que al ser separada de su contexto histórico, *sólo pone en boca* de Lenin lo que en realidad quiere decir Millas. Por eso, a renglón seguido, éste último aclara: “Exigió que, en vez de explicaciones, se obtuvieran *resultados económicos palpables*” (*idem* 20), alusión directa a los compañeros del sector económico cuya política no es del gusto de los dirigentes del PC.

⁹⁷ MAPU, *idem* (56). Ver también párrafos 30, 39 y 44.

E.- Existen tendencias objetivas que favorecen el “Centrismo Revolucionario” del PC

38.- La política de los dirigentes del PC se anotó pues, en Lo Curro, tres grandes triunfos a su favor. Sin embargo, *los hechos*, los porfiados hechos, “se confabulan”, como diría Luis Corvalán (ver párrafo 11), contra esa política. Una parte de la “confabulación” consiste, como hemos visto, en la imposibilidad práctica de sujetar a las masas y a no pocos funcionarios díscolos de Gobierno, dentro de los magros márgenes de la “nueva política económica” de Millas, en la imposibilidad en que se halla, hasta hoy, el flamante ministro para poder hacer realidad esa “nueva política”. Esto tiene, como pudimos ya observar, su solución: la puesta en marcha de la férrea disciplina social y de la integración participacionista a un plan dirigido desde el aparato financiero. Cuestión nada fácil. Ni nada deseable. Pero la parte de la “confabulación” que realmente parece escapar a todo control (incluso al control policial) reside en la situación interna del PDC. Ocurre que en el PDC conviven, no sin conflictos, dos tendencias políticas e ideológicas principales: una que representa los intereses de un sector de la burguesía monopólica (Frei, Zaldívar, etc.), otra que representa los intereses de un sector de la pequeña-burguesía (Tomic, Leighton, especialmente)⁹⁸. Ahora bien, debido a que el debilitamiento general del Gobierno, experimentado desde fines del año pasado, fortalece las posibilidades políticas de los sectores centristas (cuestión que se analizó en el párrafo 10), desde el Consejo Ampliado de Cartagena del PDC, en marzo de 1972, se ha venido imponiendo en el seno de ese partido la tendencia pequeño-burguesa, o sea, su ala izquierda o “progresista” que es la que “está por los cambios”, al decir de los compañeros del PC. En qué medida lo está, puede verse de las siguientes frases de Tomic en esa reunión de Cartagena: “No a la política de negar al Gobierno de la UP la sal y el agua. . . Sí a la conveniencia de mantener y ahondar el diálogo con *aquellos partidos* de la Unidad Popular que *rechazan los planteamientos de otros grupos de Gobierno para desnaturalizar el programa de Allende*. . . para avanzar hacia la imposición de una *dictadura marxista* en Chile”⁹⁹. Es decir, la tendencia pequeño-burguesa de Tomic está por la alianza con “aquellos partidos de la Unidad Popular” que, como parece ser el caso del PC, rechazan “los errores políticos y económicos”¹⁰⁰ cometidos por “otros grupos de Gobierno”, errores que según piensa Millas, coincidiendo con Tomic, “podemos resumir diciendo que constituyen *transgresiones al Programa de la Unidad Popular*”¹⁰¹. Claro que Tomic es mucho más explícito que Millas, al precisar que esas “transgresiones” son, en realidad, todo lo que conduzca efectivamente a hacer del Gobierno UP “la prime-

⁹⁸ Así lo presenta, acertadamente, el informe mencionado en la nota (92).

⁹⁹ Radomiro Tomic, en “Política y Espíritu”, N° 331.

¹⁰⁰ Orlando Millas, ídem (20).

¹⁰¹ Orlando Millas, ídem (100).

ra fase de una revolución socialista”¹⁰², o como dice eufemísticamente él, todo lo que conduzca a “una dictadura marxista en Chile”. Pero dejemos de lado por ahora este “pequeño detalle”. Lo importante es que la tendencia “progresista” del PDC, los que dentro del PDC quieren “los cambios” (siempre, claro, que no sean socialistas), estaban, al iniciarse las conversaciones UP-PDC sobre áreas de propiedad, en inmejorables condiciones dentro de su partido. Tenía una directiva favorable (Fuentealba), tenían una UP disciplinada que no proporcionaba ningún pretexto a los freístas para entorpecer las conversaciones, tenían un importante triunfo en la CUT, tenían un contexto económico y político propicio a sus posiciones, sin embargo, a pesar de todo eso, *las conversaciones fracasaron*. ¿Por qué fracasaron? ¿Por intransigencia de la UP? ¿Por algún “desborde ultraizquierdista”? De ningún modo. La UP cedió y cedió incluso más de lo que pareciera permisible. Y si las conversaciones fracasaron, fue esencialmente porque *la tendencia pequeño-burguesa del PDC no pudo imponerse dentro de su partido*. Fracasaron porque la derecha democristiana, la tendencia freísta, *tuvo fuerza* suficiente como para entorpecer las conversaciones, como para hacerlas naufragar. Fracasaron porque en el PDC, “los que están por los cambios”, no tienen el peso necesario como para que el “imperativo histórico” de la alianza estratégica UP-PDC pueda concretarse. ¡Esta es la parte de la “confabulación” que la dirigencia del PC no puede controlar!

39.- No obstante, si los hechos son porfiados, más porfiados suelen ser los Partidos Comunistas. La historia es rica en ejemplos al respecto: el PC de Indonesia entre 1962-1966, el PC de Grecia entre 1945-1949, el PC de Filipinas en el mismo período, el PC de Francia entre 1943-1948, el PC de Malasia entre 1945-1950, son Partidos Comunistas que se obstinaron en llevar adelante una línea estratégica a todas luces inviable, hasta que “la confabulación” de los hechos los obligó a *improvisar* una política nueva, con trágicas consecuencias en casi todos los casos. Porque en esto no se puede improvisar. Uno no puede girar en 180 grados de la noche a la mañana y pretender salir bien de la prueba. El empirismo político, que también se llama oportunismo, no ha sido nunca un aval de victorias, sino, más bien, una fuente inagotable de derrotas. ¿A qué viene todo esto? Pues a que todo hace suponer, con respecto a nuestro PC chileno, que *se obstinará* en llevar adelante su política de alianzas estratégicas más allá de la UP, como puede verse de la ya citada Conferencia de Prensa ofrecida por su Comisión Política. Y la verdad es que existe alguna base para intentar tal cosa. En efecto, ¿qué alternativa política tiene el sector tomicista del PDC hacia el futuro? Aparentemente, mantener al PDC en la Oposición, colaborar al debilitamiento del Gobierno en una alianza a largo plazo con el PN, y esperar que Allende sea reemplazado, triste y pacíficamente, por un nuevo gobierno democristiano, encabezado por ellos tras la derrota histórica de la UP. Sin embargo, por ese camino el sector tomicista del PDC sale perdiendo. “Cuando se gana con la Derecha, es la Derecha la que gana”, dijo una vez, muy sabiamente, Tomic. Y la verdad es que *esperar* que Allende termine su período y pretender reemplazarlo por un nuevo Presidente del sector “pro-

¹⁰² Ver nota (1).

gresista” del PDC, es utópico. Si la Oposición puede derrotar electoralmente a la UP en una confrontación decisiva, el líder de la Oposición sería necesariamente de derecha, llámese Frei o Jarpa. Jamás sería Tomic ni nadie parecido. Por lo demás, al PN y al ala freista del PDC no les interesa *esperar* que Allende caiga “por su propio peso”. Quedan aún 4 años de Gobierno, y en esos 4 años los intereses de la burguesía monopólica, de seguro, seguirán siendo seriamente dañados. El ala pequeño-burguesa del PDC puede esperar. Pero no el ala monopólica. Esta última buscará, en lo posible, derribar al Gobierno, constitucionalmente o no. Todo lo cual hace que el sector “progresista” de la DC no tenga verdaderamente salida en una alianza a largo plazo con la Derecha. Su única alternativa a largo plazo es una alianza con la UP, al menos con “aquellos partidos de la UP”, que ya sabemos. Las contradicciones internas del PDC juegan, pues, en favor de la perspectiva estratégica de los dirigentes comunistas. Los que en el PDC “están por los cambios”, pueden aliarse *tácticamente* con la Derecha; sobre todo, les conviene mantener *ahora* la unidad del PDC y la unidad PN, DR, PDC, PIR, de esa manera, debilitan al Gobierno en la perspectiva de las elecciones parlamentarias de 1973, y colaboran, así, a crear condiciones más favorables para *después* buscar con la UP, una alianza sobre la base del programa *de ellos*, no de un programa socialista. La tendencia pequeñoburguesa del PDC puede, pues, aliarse *tácticamente* con los sectores monopólicos dentro y fuera del PDC, pero su perspectiva *estratégica*, su *única* salida política a largo plazo, es aliarse con “aquellos partidos” de la UP que estén dispuestos a aceptar *su* programa, el programa del sector “progresista” del PDC, en la medida en que la pérdida de respaldo de masas y el empate institucional (Parlamento, Poder Judicial, etc.), al que ellos junto con el PN están *contribuyendo*, obliguen al Gobierno a renunciar al carácter socialista del Programa de la UP. Hay, pues, condiciones reales para esperar en el futuro que la alianza estratégica con el PDC, o al menos con su ala izquierda, pueda concretarse. Y el PDC confía en esas condiciones: “el Partido Comunista, más que a ciertas situaciones externas que pueden ser ruidosas y que, por cierto, tienen alguna significación, atiende a *las corrientes de fondo de nuestro proceso*”¹⁰³. Claro está que nadie puede asegurar que la tendencia pequeñoburguesa del PDC logrará imponer dentro de su partido (ya hemos visto que hasta ahora no le resulta tan simple). Nadie puede asegurar que el dar a luz de las corrientes de fondo que los dirigentes PC buscan, no sea un “parto de los montes”, y que al final no se reduzca a una simple nueva escisión del PDC, estilo Izquierda Cristiana, que no altere sustancialmente en nada el cuadro político. Nadie puede asegurar que la derecha freista y nacional no se adelante a los plazos de “las corrientes de fondo de nuestro proceso”. Nadie puede asegurar, en suma, que la *improvisación* de una línea nueva, no sea una urgencia ineludible a la que se vea enfrentado nuestro PC, como en tantas ocasiones históricas anteriores se vieron enfrentados otros. Ni que el resultado de esa improvisación no pueda ser tan trágico como los de aquellas otras ocasiones.

¹⁰³ Volodia Teitelboim, *ídem* (85).

40.- Pero ¿por qué esta obstinada búsqueda de alianzas a la derecha de la UP? ¿De adónde viene esta manía de “restablecer” un “cuadro político” en unas “verdaderas líneas” que nunca han existido más que en la imaginación? Aquí está el centro del problema. No se trata, en verdad, de ninguna “manía”, de ningún capricho de los dirigentes del PC. Se trata, simple y llanamente de *su línea estratégica, de su manera de entender la revolución chilena, de su concepción del socialismo*. Se trata, en suma, de que esa es la política del PC. Se trata, entonces, de que en una discusión aparentemente coyuntural, como las de las últimas semanas y meses, en una discusión aparentemente táctica, se esconde una cuestión estratégica. Se esconde una divergencia de línea estratégica. No sobre este o aquel detalle, sino *globalmente*. La verdad es que no hay problemas tácticos que no supongan un problema estratégico. La verdad es que, a veces, *una misma opción táctica* puede responder a los intereses de *dos opciones estratégicas* diferentes, y hasta divergentes. Pero otras veces no se puede dejar por determinada táctica sin optar a la vez por determinada estrategia, y es en estos últimos casos cuando las divergencias de fondo pueden aflorar a la luz del día¹⁰⁴. La discusión que hemos estado analizando ofrece un buen ejemplo de ello.

41.- En efecto, ¿qué significa el proyecto estratégico implícito en las proposiciones tácticas que los dirigentes del PC lograron imponer en Lo Curro? Significa una determinada concepción de la revolución chilena, diferente de la nuestra. Millas lo explica, cuando dice que “la dilucidación de si una conducta es revolucionaria o es reformista. . . se decide en el terreno de la *posición que asume en la sociedad la clase obrera*, la forma en que se resuelvan los problemas de la *propiedad sobre los medios de producción fundamentales*, el carácter del *proceso mismo de trabajo*, y las *alianzas de clase* que, de acuerdo a la correlación de fuerzas, *permitan asegurar la estabilidad del propio* Gobierno Popular y cierren el paso a la sedición reaccionaria”¹⁰⁵. Esto suena muy bonito, pero ¿qué significa, dicho por el compañero Millas y escrito en “El Siglo”? Significa que para los dirigentes del PC, el carácter revolucionario del proceso chileno “se decide en el terreno de”:

- a) “la posición que asume en la sociedad” el Partido Comunista,
- b) “la propiedad” estatal sobre las principales empresas del país,
- c) los cambios en “el proceso de trabajo”, vale decir, en la relación técnica del trabajador con los medios de producción, a lo cual se agrega la *planificación* central y, la “participación” al estilo ya analizado, y
- d) “las alianzas de clases” con los sectores centristas, es decir, con aquellos partidos y fuerzas que den *estabilidad al Gobierno*, lo cual significa, que *aseguren* su subsistencia sin el peligro de polarizar al país en dos bandos

¹⁰⁴ Luchar por el triunfo de Allende en 1970 y suscribir el Programa de la UP, fue elegir una determinada opción táctica en la cual todos los partidos de la UP coincidieron. Pero eso no significa que esa opción tuviese para todos el mismo significado estratégico. Ese es un ejemplo de cómo estrategias diferentes pueden encontrar puntos de coincidencia táctica. En cambio, Lo Curro es un ejemplo de una situación en que cada línea estratégica implica una táctica diferente.

¹⁰⁵ Orlando Millas, *ídem* (14).

irreconciliables, *sin arriesgar*, entonces, algún enfrentamiento decisivo entre esos bandos.

Analicemos más detenidamente estos puntos, empezando por la última cuestión:

42.- Toda política que nos proponen los dirigentes del PC se orienta “a buscar la ampliación de la base de sustentación social, política e institucional del Gobierno”¹⁰⁶. Y a buscar esa ampliación hacia el centro. La base social, porque trata de ganar a la pequeñoburguesía y a los sectores no monopolísticos de la burguesía ofreciéndoles garantías de desarrollo capitalista, es decir, ofreciéndoles no una alianza para construir el socialismo, sino una alianza *para liquidar a la burguesía monopolística* en beneficio del desarrollo capitalista de las empresas del área privada, y del desarrollo “con vistas” al socialismo de las empresas estatizadas. Pero esto, en sí mismo, supone un régimen híbrido, una especie de “estación de tránsito”, de etapa intermedia, de paso previo, antes del inicio del proceso revolucionario de transformación socialista, el cual, como proceso total, no puede dar garantías de desarrollo capitalista a ninguna zona del sistema social, por más que en ciertas fases coexistan relaciones capitalistas con relaciones socialistas. La política de los dirigentes del PC supone, además, una ampliación hacia el centro, *de la base política*, posibilitada por lo anterior, porque busca alianzas estratégicas, más allá de la UP, con el PDC, en lo posible entero, y cuando menos con su ala no monopolista. E implica una ampliación *de la base institucional* porque, con las condiciones anteriores, es una política susceptible de ser respaldada, e incluso impulsada sin problemas, por ciertos institutos profesionales y constitucionalistas del aparato civil y militar del Estado. Habría que agregar que supone, también, una ampliación de la base de sustentación económica exterior, en la medida en que da “garantías” a los países de Europa Oriental, en especial a la URSS¹⁰⁷. Para decirlo más claramente, con un eje central formado por el PDC y el sector allendista del PS los dirigentes comunistas esperan concitar el respaldo, tácito o no, del PDC y de las Fuerzas Armadas, más el sólido respaldo exterior de la Unión Soviética. Tal congregación de fuerzas haría posible *asegurar la estabilidad* del Gobierno, contra cualquier intento golpista de la Derecha, o contra cualquier “trasgresión” de la izquierda. Se trataría, pues, de un Gobierno *centrista, de un centrismo revolucionario*.

¹⁰⁶ MAPU, ídem (97).

¹⁰⁷ No es casualidad el que después de la “lentitud” con que marchaban las negociaciones económicas con la URSS, éstas se hayan acelerado bruscamente tras el triunfo de la dirigencia PC en Lo Curro. Y es así como la misión Altamirano-Cademartori pudo obtener créditos por 260 millones de dólares en la URSS, según informa “El Siglo” del 15 de julio de 1972, lo cual es muchísimo más que todo lo obtenido hasta ahora. Si bien es cierto que sólo 20 de esos 260 millones pueden considerarse créditos en dinero propiamente tales, siendo el resto maquinarias y otros equipos. China Popular, con muchos menos recursos, nos ha prestado ya 65 millones de dólares en dinero, sin intereses, y cuya primera cuota de devolución es pagadera a varias décadas plazo.

43.- ¿En qué sentido “revolucionario”? Revolucionario porque aseguraría la liquidación definitiva de la vieja clase dominante, o sea, de los sectores dominantes (o monopólicos) de la burguesía, de los terratenientes, y de los imperialistas. Revolucionario porque implicaría acabar bruscamente con la que hasta ahora era clase dominante, porque implicaría cumplir el Programa de la UP en su aspecto antiimperialista, antimonopólico y antiterrateniente. Y es esto lo que explica la desesperación de los sectores monopólicos del PDC, así como del PN y otros reaccionarios, ante el triunfo de la política del PC en Lo Curro. De allí que tratasen, por todos los medios, de romper las conversaciones UP-PDC, y que al final lo lograsen. De allí que el pasquín de Chamudes, “PEC”, titulase a toda página: “El PC traiciona el Programa de la Unidad Popular”. Porque la puesta en práctica del “centrismo revolucionario” de los dirigentes del PC, significa efectivamente la liquidación de los intereses que representan el PN, PEC y Frei. Sin embargo, ¿significa también el inicio de una transformación socialista? He allí el problema.

44.- El “centrismo revolucionario” que nos propone la dirigencia comunista, asegura el avance de la revolución, pero *no de una revolución socialista*. Es revolucionario, pero no revolucionario *socialista*¹⁰⁸. En efecto, el carácter socialista no se decide en “la propiedad sobre los medios de producción fundamentales” ni en “el proceso de trabajo”. La propiedad es una cuestión jurídica, formal. Hoy día Yarur sigue siendo “propietario” de “su” fábrica; pero ¿qué importancia tiene eso?: en la práctica la fábrica es estatal. El socialismo no consiste en la “propiedad colectiva” como falsamente se repite a menudo. Las sociedades anónimas son propiedad colectiva, la propiedad estatal capitalista es propiedad colectiva, pero no son socialismo, porque son propiedad colectiva de la burguesía, o de un sector de ella. Tampoco consiste, el socialismo, en el cambio del “proceso de trabajo”. El proceso de trabajo no es sino la relación técnica entre la fuerza de trabajo, los medios de producción y el producto. Es común a todos los regímenes de producción hasta la fecha. El socialismo se define, esencialmente, no por el proceso de trabajo, sino por el proceso de producción, o sea, por las relaciones sociales de producción, por las relaciones de los hombres entre sí, en la producción. Es cierto que Millas nos habla de “cambios en las relaciones de producción”¹⁰⁹ y nos dice que “limitarse al

¹⁰⁸ Claro está que se podrá objetar que si no es socialista no puede ser revolucionario, porque mantiene de todos modos el régimen capitalista, siendo en ese sentido simple “reformismo”. Eso podría ser cierto si dejásemos de lado el hecho de que *no todo régimen postcapitalista tiene que ser socialista*. Pero aún no considerando ese hecho, aplicar el término “reformismo” a la política del PC es dar a la palabra “reformismo” una acepción demasiado amplia, una acepción económica (referente a las relaciones de producción), mientras que normalmente esa palabra se usa en sentido político. Lo que aquí importa no son, sin embargo, las palabras, podemos llamarlo, si queremos, “*reformismo revolucionario*”, o como sea. Lo que importa es comprender que tal “reformismo” no tiene nada que ver con el de Frei, y que tal “revolución” no es socialista.

¹⁰⁹ Orlando Millas, *ídem* (14).

capitalismo de Estado conduce, se quiera o no, a la inestabilidad”¹¹⁰, pero esas frases hay que entenderlas en el contexto total del artículo en que se encuentran, y de ese contexto se deduce con claridad meridiana, que lo que se quiere decir con eso es que no basta con traspasar las empresas a la propiedad del Estado, sino que además se requiere una planificación central “científica” y una integración (“participación”) de los trabajadores a ese plan, de manera que los excedentes generados queden en manos del Estado y no en manos privadas. En otras palabras, que “las condiciones de la economía de Chile son las de una economía de mercado con un fuerte sector estatal que todavía no puede ser calificado de socialista porque los productos de las empresas del área social en general no generan excedentes y trabajan a veces con pérdidas, pero son puestos en venta (comercializados) por el sector privado que realiza gruesos beneficios”¹¹¹. Lo que Millas llama “no limitarse al capitalismo de Estado” es, en realidad, no limitarse al capitalismo monopólico de Estado, es “actuar con las masas para aprovechar las leyes económicas”¹¹² (capitalistas), o bien “una planificación de medidas administrativas y de la utilización del instrumento económico”¹¹³ (capitalista). Pero eso no es socialismo. El socialismo se decide en el terreno del *poder colectivo de decisión de las masas, dirigidas por el proletariado, sobre el uso de los medios de producción, de la fuerza colectiva de trabajo y de los excedentes*, es decir, el socialismo se decide en el terreno del *control por parte del proletariado* de la actividad económica y del Estado, cosas todas que para el diputado Millas resultan “fraseología sobre el control obrero”¹¹⁴. El socialismo es, pues, incompatible con todo verticalismo, con toda casta de funcionarios que decida por encima de las masas, al margen del control de sus decisiones por las masas dirigidas por el proletariado. Y no puede, pues, haber socialismo con una política como la de los dirigentes del PC, que en vez de organizar el poder colectivo de masas del proletariado, busca dar garantías capitalistas a la burguesía no monopólica; que en vez de allegar fuerzas para reemplazar el actual aparato civil y militar de Estado por otro, busca el apoyo *fundamental* precisamente en ese mismo aparato y en el de los partidos; que en vez del control del proletariado y del pueblo sobre las empresas, la distribución, etc., propugna la “férrea disciplina social” y la integración “participacionista”. El centrismo revolucionario de los dirigentes del PC, es, pues, “revolucionario” hacia el pasado, hacia la *vieja* clase dominante; pero es reaccionario hacia el futuro, porque crea condiciones que dan origen a una nueva clase dominante, a través de los aparatos estatal y partidarios. Un ejemplo de adónde puede conducir tal “centrismo revolucionario” es el Egipto donde la revolución de Nasser liquidó a la vieja oligarquía monopolista y terrateniente y rompió con los intereses imperialitas, pero *no ini-*

¹¹⁰ Orlando Millas, ídem (14).

¹¹¹ “Esquema de una Estrategia. . .”, pág. 10.

¹¹² Orlando Millas, ídem (14). El capitalismo monopólico de Estado se diferencia del capitalismo de Estado monopólico, en que en el primero existen monopolios privados, mientras en el segundo es el Estado como tal el único monopolista.

¹¹³ “Esquema de una Estrategia. . .”, pág. 12.

¹¹⁴ Orlando Millas, ídem (14).

ció el tránsito socialista, sino que creó *un nuevo capitalismo de Estado, esta vez sin monopolios*, sin grupos monopólicos, pero sí gestando, a través del aparato estatal una nueva *burguesía de Estado*, compuesta por los altos funcionarios del régimen, tanto civiles como militares. Así, pues, una revolución “antiimperialista, antimonopólica y antilatifundista”, no es necesariamente una revolución socialista. Puede perfectamente acabarse con el poder de esos tres “enemigos fundamentales”, sin que por eso se acabe con el régimen capitalista en el país: El propio proceso puede generar una nueva burguesía estatal, a partir de los elementos pequeñoburgueses y de las capas burocráticas del Estado y de los partidos¹¹⁵. Es precisamente por todo esto, porque la revolución “antiimperialista, antimonopólica y antilatifundista” que nos proponen los dirigentes del PC *no significa*, necesariamente, una revolución socialista, es por eso que puede contar con las simpatías de la fracción pequeñoburguesa del PDC. Pero es, también precisamente por eso, que esa línea estratégica no socialista no puede ser la del MAPU.

F.— Nuestra línea estratégica no es la del Partido Comunista

45.— Y hemos llegado, así, al fondo de la cuestión. Existe una divergencia estratégica, fundamental, entre nosotros y la dirigencia del PC. Por eso es, entre paréntesis, que somos un partido distinto del PC. ¿En qué reside esa divergencia? Primero, en la concepción del Gobierno Popular; para nosotros, éste es, en la medida en que cumple el Programa (Estado popular y área social especialmente), “el inicio de una transformación socialista” de la vida del

¹¹⁵ Naturalmente, nadie podría sostener seriamente que los dirigentes del PC busquen *quedarse* en un capitalismo de Estado de nuevo tipo. Sostener tal cosa sería caer en la superficial crítica ultraizquierdista acerca del supuesto carácter “reformista” del PC. El PC no es reformista. El PC busca *el socialismo*. Pero el problema reside en que:

a) como una etapa previa *en el camino hacia el socialismo*, los dirigentes del PC piensan que es necesario pasar por un período de “centrismo revolucionario”, necesidad que está condicionada no sólo por las *posibilidades* que ofrece la realidad chilena, sino esencialmente por la *política internacional de coexistencia pacífica*. Nosotros, en cambio, pensamos que tal “etapa” de capitalismo de Estado no sólo no es necesaria sino que es además *empantanar* la revolución en un régimen que, lejos de durar “un corto período” como parece opinar el PC, se estabilizaría y haría abortar el proceso revolucionario chileno, resultando así una política objetivamente reformista, aunque no sea esa su intención subjetiva;

b) en segundo lugar, el problema reside en que lo que el PC entiende por socialismo, *dada la forma en que se alcanza*, no resulta ser tal socialismo. En efecto, a través del aparato del Estado y del partido, *no sólo* puede gestarse una nueva burguesía, sino que, incluso destruida ésta, puede también gestarse *una nueva clase burocrática*, de lo cual hay sobrados ejemplos históricos. Y el que se gesticione o no, *no es independiente del camino, de la forma* en que se entiende y se practique el proceso de marcha hacia el socialismo a nivel nacional y mundial. En una palabra, se trata de que el PC parece ignorar que *hay regímenes postcapitalistas que no son socialistas*.

país. Para los dirigentes del PC, en cambio, “Chile se ha dado un Gobierno Popular *correspondiente a una democracia avanzada* que asegura condiciones favorables a la lucha por el socialismo”¹¹⁶, o sea, es una *etapa previa* al inicio de la transición socialista, una etapa que se ubica, por tanto, dentro del capitalismo, por más que “asegure condiciones favorables” a la lucha por el socialismo. Y en esto puede verse con claridad en qué consiste, en segundo lugar, la divergencia. Se trata del carácter de la revolución. Para nosotros, ese carácter es el de una revolución socialista, el de un solo proceso revolucionario *ininterrumpido* que, por más que atravesase por fases diferentes –algunas de las cuales no son por sí mismas socialismo– es, sin embargo, un proceso cuyo carácter global es socialista. Lo cual significa que, para nosotros, “esta revolución es *una sola*, que consiste en un proceso que *no termina* sino con la construcción plena del socialismo, que desde su iniciación apunta contra las bases fundamentales del sistema capitalista y que, del comienzo al fin, la conducción la tiene el proletariado”¹¹⁷. En cambio, para el PC, “el poder popular que queremos generar y la revolución que necesitamos hacer son, por su esencia y objetivos, antiimperialistas y antioligárquicos con la perspectiva del socialismo”¹¹⁸. Para el PC se trata de “el peso de la revolución antiimperialista y antioligárquica a la revolución socialista”¹¹⁹, es decir, de *dos* revoluciones, de dos *etapas estables*, consolidadas, no de un proceso único e inestable hasta su consumación socialista. Se trata, pues, de una revolución “por etapas”, “por gradas”, y no de una revolución *ininterrumpida*. Se trata, pues, de “una concepción esencialmente gradualista”¹²⁰ de la revolución chilena, con todas las consecuencias tácticas que, como hemos visto, ello trae. He aquí la divergencia estratégica entre nosotros y la dirigencia del PC.

46.– Y no se crea que este planteamiento del PC es nuevo. No. Corresponde a su *Programa*, a su concepción central del carácter de la revolución chilena (y no sólo desde el X Congreso, de 1956). Así, leemos en la redacción que se le dio a ese mismo Programa en 1962, que el carácter de la revolución es el de “una revolución popular, democrática, antiimperialista, antifeudal, antimonopolista, de liberación nacional y social”¹²¹; pero como se ve, no es el de una revolución anticapitalista. Y en la redacción vigente desde 1969, después de advertírseles que las “tesis fundamentales son las mismas que se elaboraron y aprobaron en el Décimo Congreso Nacional efectuado en marzo de 1956”¹²², se nos dice que “la revolución chilena, por su esencia y objetivos, es antiimperialista, antimonopólica y agraria, y con vista al socialismo”¹²³ y que los co-

¹¹⁶ Orlando Millas, *ídem* (20).

¹¹⁷ MAPU, “El Carácter de la Revolución Chilena”, pág. 77.

¹¹⁸ Luis Corvalán, “Informe al XIV Congreso Nacional del PC”; en “El Siglo” del 24 de noviembre de 1969, pág. 11.

¹¹⁹ *Idem* (118).

¹²⁰ *Idem* (92).

¹²¹ “Programa del Partido Comunista de Chile”, 1962, pág. 18.

¹²² “Programa del Partido Comunista de Chile”, 1969, pág. 3.

¹²³ *Idem* (122), pág. 14.

munistas luchan “por unir a la mayoría del país. . . a fin de avanzar *en una primera etapa*, por la senda de la revolución antiimperialista y antioligárquica”¹²⁴. Es decir, se trata siempre de la concepción de una revolución “por gradas” o “etapas”, de la concepción gradualista de una revolución “democrática”, primero, y una “revolución socialista”, después. ¿Es esto un capricho del PC o una mera cuestión de palabras? Que no es cuestión de palabras queda claro de sus consecuencias, que pueden aquilatarse en toda la discusión anterior. Y que no es un capricho queda claro, para cualquiera que comprenda que esa manera de entender la revolución (como *no socialista*) y esa manera de entender el Gobierno Popular (como “democracia avanzada”), son sólo la expresión nacional de una política internacional. Son sólo *la consecuencia* de pensar que el futuro de la revolución mundial se decide en el terreno de la “coexistencia pacífica” entre el “campo socialista” y el “campo capitalista”, es decir, en el terreno de un avance del llamado “campo socialista” que se realice sin poner en peligro la estabilidad y seguridad del “campo” ya existente, y, en primer lugar, de lo que se considera su vanguardia, la Unión Soviética.

47.- Hemos llegado, pues, a partir de un problema aparentemente coyuntural, como el de la discusión sobre la política económica en Lo Curro, a develar la concepción estratégica que sustenta la táctica propuesta por los dirigentes del PC. Naturalmente, los planteamientos económicos que estos dirigentes hagan en el futuro pueden variar mucho, así como pueden variar sus planteamientos frente a la DC y en general todos sus planteamientos tácticos. Y de hecho varían periódicamente al vaivén de las diversas coyunturas y cambios de situación. Lo que hoy dicen los dirigentes del PC, no tiene por qué ser lo que dijeron ayer ni lo que dirán mañana. Puede ser incluso diametralmente opuesto. Pero lo que uno tiene que comprender es que esos cambios de posición *no son arbitrarios*. Que tienen una lógica. Que hay una regla que los rige y *que no varía*. Y esa regla fundamental es *la línea estratégica* del PC, su línea política fundamental. Pues bien, es con esa lógica que nosotros diferimos. Es allí donde discrepamos. Por eso somos un partido distinto. Por eso, y no por ningún azar histórico, somos un MAPU. Porque tenemos otra concepción acerca de lo que es el socialismo, y no nos convencen como “socialistas” ciertos regímenes que quieren pasar por tales. Porque, debido a eso, tenemos otra concepción acerca de la revolución socialista mundial. Porque, a raíz de ello, miramos de otra manera la fase chilena. Porque, en ese entendido, el Gobierno Popular cumple para nosotros con el Programa de la UP sólo si inicia una transformación socialista de la economía y construye un Estado Popular que sea una forma de Estado socialista. Porque no luchamos por una “democracia avanzada” sino por el socialismo. Porque creemos que las condiciones actuales de Chile impiden plantear otro objetivo realmente revolucionario que el socialismo. Porque, debido a todo ello, enfocamos con otra perspectiva los problemas tácticos y coyunturales. Entendemos de otra manera la participación. De otra manera la política económica. De otra ma-

¹²⁴ Idem (122), pág. 10.

nera la planificación. De otra manera la movilización de las masas. De otra manera la organización del partido. Porque, en suma, somos un MAPU, y no un Partido Comunista.

**G.- La alternativa a mediano plazo es:
o “democracia avanzada” o socialismo**

48.- Ahora bien, existen actualmente una serie de circunstancias que tienden a favorecer la alternativa centrista-revolucionaria, la alternativa que propugnan los dirigentes del PC. Estas circunstancias son:

a) la actual política económica –o la ausencia de toda política económica coherente– que impide solucionar a corto plazo los problemas que afligen a los sectores más pobres (en especial el desabastecimiento), lo cual significa que existe tendencia a que *continúe el progresivo deterioro de la UP* en las masas;

b) la alta probabilidad, por tanto, de que la UP *no logre controlar el Parlamento* después de marzo de 1973, por mucho que conserve el tercio que le permite maniobrar como hasta ahora (aunque en condiciones más difíciles), pero que no le permite disponer de los mecanismos políticos para controlar los desequilibrios del proceso y seguir avanzando hacia el socialismo;

c) la tendencia, a raíz de lo anterior, a que cobren realidad las intenciones del PC de buscar *un entendimiento duradero con la DC*, fortalecidas por intenciones similares del ala pequeño-burguesa del PDC;

d) el predominio del PC dentro de la UP, y la hegemonía de Millas dentro del PC;

e) la debilidad y dificultades para imponerse que encuentra la política revolucionario-socialista que se haya presente en sectores de izquierda del PS y en el MAPU;

f) la posición del Presidente Allende, favorable a una salida como la que propone el PC porque da estabilidad al Gobierno;

g) la ideología de defensa, desarrollo y unidad nacional de las Fuerzas Armadas que las hace inclinarse favorablemente a una alternativa de “centrismo revolucionario”;

h) la posición favorable de la URSS a la alternativa centrista.

49.- Pues bien, todas estas condiciones favorables al centrismo revolucionario, hacen que nosotros debamos tomar muy en cuenta la *probabilidad real* que existe de que aquél termine por imponerse. Es decir, la probabilidad real de que la *próxima fase* del proceso revolucionario chileno sea una “etapa” de centrismo revolucionario, o como dicen los compañeros del PC, una etapa de “democracia avanzada”. La alta probabilidad, en suma, de que la alternativa a mediano plazo para Chile no sea, como algunos creen, “socialismo o fascismo”, sino más bien “ni socialismo ni fascismo: democracia avanzada”. ¿De qué depende que ocurra o no efectivamente así? Depende, naturalmente, de la posibilidad que tengan los sectores revolucionarios socialistas de reunir a corto plazo las fuerzas suficientes como para contrarrestar la hegemonía actual de los sectores centristas en el proceso chileno. En efecto, el análisis político de la realidad no puede hacerse sólo constatando que exis-

ten tales o cuales tendencias “objetivas” de los hechos. No puede hacerse pasando por alto el hecho de que los sujetos políticos, o sea, los partidos, nosotros mismos, también pertenecemos a la realidad, y que por lo tanto el movimiento real no depende sólo de las tendencias “objetivas”, sino además, de la actividad política nuestra, de lo que nosotros mismos seamos capaces de hacer, como partido, para modificar esas tendencias, para transformar revolucionariamente la realidad. En este caso, de la posibilidad que tengamos, a corto plazo, de hacer triunfar, a pesar de los factores adversos, y apoyándonos en la organización de un poder popular de base, nuestra política económica, de reganar el respaldo de masas perdido, de derrotar el predominio del centrismo dentro de la UP, de hacer cambiar así el signo* de la fuerza del Presidente Allende en el interior de la UP, de llevar una actitud independiente frente a todo “centro” revolucionario internacional, de avanzar más en el campo de ideología de las instituciones del aparato civil y militar del Estado, de estar preparados para los cambios previsibles en las formas de lucha. Depende, en suma, de que seamos o no capaces de reunir en torno a nuestra línea estratégica y táctica, las fuerzas políticas necesarias para vencer la hegemonía de la política centrista-revolucionaria del PC, o al menos, para impedir, a corto plazo, que cristalice el régimen de “democracia avanzada” que las actuales tendencias “objetivas” dibujan como más probable.

50.- Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros de modificar lo que aparece actualmente como curso más probable de los acontecimientos? El PC es hoy el partido más fuerte de la Unidad Popular.

No sólo ni tanto por su volumen, sino en especial por su *firmeza y claridad política*, que se traduce en capacidad organizacional. De allí que la tendencia centrista revolucionaria del PC sea hoy la más fuerte. Pero el PC y la UP *no son idénticos*. Allí está, especialmente, el Partido Socialista, que es tanto o más grande que el PC, y que si no es más fuerte, se debe esencialmente a que no logra definir *una línea estratégica y táctica clara*, lo cual se expresa en su dispersión ideológica y orgánica. Pero entonces, nuestra posibilidad y nuestro deber es, en la hora actual, aportar a la Unidad Popular aquella línea estratégica (alternativa a la del PC) que no es capaz de aportar el Partido Socialista. Lo cual proporcionaría un eje político en torno al cual estructurar una alianza mapucista-socialista susceptible de imprimir a la UP un rumbo socialista auténtico. Es cierto que las relaciones entre el PS y el MAPU no son todo lo buenas que quisiéramos; y que tanto el PC como el PS ponen en el centro de su política “la unidad socialista-comunista”. Es cierto que a veces nos indignan algunas torpezas del PS, que muchas veces somos víctimas de la rigidez principista y de cierto sectarismo de los compañeros socialistas. Pero no debemos olvidar que todo ello no se debe a meras “fallas orgánicas”, ni menos a lo que simplistamente se califica de “coexistencia de muchas fracciones” en su seno. Sino que se debe, fundamentalmente, a la ausencia de una línea política propia global y coherente (tanto a nivel internacional como nacional), en base a

* Se refiere, sin duda, a si el signo es positivo (izquierda) o negativo (derecha). (Nota del Editor).

la cual pudiese nuclearse una organización sólida (lo que no es lo mismo que “monolítica”). Por lo cual, en la medida en que nosotros, el MAPU, logremos explicitar con claridad una estrategia y una táctica consistentes, todos esos obstáculos pueden ser superados, allanándose así el camino para cimentar una alianza PS-MAPU sólida, ideológica y políticamente. *Sin el PS no es posible, hoy día, imponerse a la tendencia de los dirigentes del PC.*

51.- Pero ¿qué significa “imponerse” a la tendencia de los dirigentes del PC? ¿Acaso oponerse frontalmente al PC? ¿Acaso salirse ahora mismo de la UP y del Gobierno? No. De ninguna manera. Tal como sería una estupidez política. En primer lugar, porque si bien la tendencia del PC es la predominante, ya hemos visto que no tiene en modo alguno *asegurado* de antemano su éxito a largo plazo; más aún, que incluso a corto plazo hay serias dificultades con las que se encuentra. En segundo lugar, porque si bien *diferimos* estratégicamente del PC, existe sin embargo con él *un amplio margen de coincidencia*, en la medida en que se orienta también, como nosotros, en un sentido *en última instancia anticapitalista*. En tercer lugar, porque concordamos con el PC en muchas cuestiones tácticas, de lo cual es ejemplo relevante el que hayamos participado juntos en la batalla por el triunfo de Allende y por la defensa de su Gobierno, el cual sin duda es un importante instrumento de lucha por la construcción del socialismo en Chile (aunque también puede servir, claro está, para construir una “democracia avanzada” no socialista). En cuarto lugar, porque aunque no sea esa nuestra política, nosotros no podríamos estar contra un gobierno de “centrismo revolucionario” que liquide los monopolios, el latifundio y los intereses imperialistas. En quinto lugar, porque el PC representa a un amplio sector de la clase obrera y del pueblo en la lucha conjunta contra esos tres grandes enemigos de Chile. Así, pues, si es cierto que sin el PS no es posible imponerse a la tendencia de los dirigentes del PC, también es cierto que *sin el PC no puede hacerse hoy día ninguna revolución en Chile*. Nuestro deber revolucionario es, pues, hoy día, permanecer en la Unidad Popular y en el Gobierno. Fortalecer la alianza MAPU-PS-PC. Trabajar por hacer del eje PS-MAPU el centro de esa triple alianza. Aprovechar las condiciones objetivas que pueden favorecer hoy día la línea socialista. Apoyarnos en ellas y en la unidad socialista-mapucista para impulsar la revolución chilena por un rumbo socialista. Apoyarnos en el Gobierno para crecer en las masas. Apoyarnos en la organización de un poder popular de masas para fortalecer la orientación socialista dentro del Gobierno. Vigorizar, así, a nuestro partido MAPU y al conjunto de las fuerzas que están por el socialismo en todos los partidos del proletariado.

52.- Si logramos hacer todo eso. Si logramos movilizar al pueblo en torno a nuestra política, a corto plazo, entonces podríamos lograr también modificar las tendencias objetivas, restar fuerza a los factores mencionados en el párrafo 48, vencer el predominio de la línea centrista-revolucionaria del PC y abrir paso así a *la alternativa socialista*. Si no somos capaces de hacer todo eso, si no estamos en condiciones de movernos con rapidez en ese sentido, entonces tenemos que tener muy claro que, en el mediano plazo, se impondrá *la alternativa centrista-revolucionaria*, y tendremos, pues, que diseñar una política socialista para esas

nuevas circunstancias. ¿Estamos o no en condiciones de intentar contrarrestar a corto plazo las tendencias centristas del PC? ¿Qué condiciones nos esperan si lográsemos y cómo actuar en ellas? ¿Qué política aplicar en el caso de que, intentándolo, no lo lográsemos? ¿En qué condiciones nos hallaríamos entonces? ¿Cómo actuar, en un sentido socialista, frente a un Gobierno de “democracia avanzada”, de “centrismo revolucionario”, que como en los viejos tiempos del primer período de Ibáñez, “aplique el termocauterio arriba y abajo”, reprima a la Derecha y a la Izquierda? ¿Cuál es la línea política socialista a impulsar frente a un Gobierno progresista, que liquida revolucionariamente a la vieja clase dominante, pero que detiene la marcha hacia el socialismo? *Son éstas las preguntas que es urgente responder.* Son éstas las preguntas que tenemos la obligación de responder como partido, como MAPU. Necesitamos diseñar una táctica, una manera específica y detallada de acción para las condiciones que nos esperan en el futuro cercano, y que pueden ser más novedosas que lo que muchos creen. Esto, sin duda, debe ser materia importante del próximo Congreso del partido, puesto que él debe definir la línea de acción para los próximos dos años. Por lo pronto, podemos decir que, en cualquiera de las dos alternativas (socialista o centrista-revolucionaria), lo que hoy día corresponde hacer no es, usando una metáfora, “hacerle guerrillas guevaristas a la señora Banderanaike”¹²⁵, ni tampoco estar incondicionalmente con ella, sino impulsar con fuerza *nuestra propia línea política, con plena independencia*, dentro de la Unidad Popular y del Gobierno. Hoy día, al menos, no cabe duda de que nuestras consignas han de ser:

¡UNIDAD Y LUCHA DENTRO DEL GOBIERNO!

¡UNIDAD Y LUCHA DENTRO DE LA UP!

¡UNIDAD Y LUCHA CON EL PARTIDO COMUNISTA!

¡¡UNIDAD EN LO TACTICO

LUCHA EN LO ESTRATEGICO!!

Kalki Glauser R.

Julio de 1972

¹²⁵ La señora Banderanaike es actualmente la jefa del Gobierno Popular de Ceilán, y enfrenta la encarnizada oposición de izquierda de unas autodenominadas “guerrillas guevaristas”.

Salvador Allende: Discurso radial

(24 de julio de 1972)

Conciudadanos:

Afirmar la independencia económica de la Patria es la noble e histórica tarea reservada al esfuerzo de las actuales generaciones.

Tenemos la responsabilidad de avanzar en el desarrollo económico. Liberándonos de la subordinación a poderosos intereses capitalistas extranjeros.

Semejante empresa requiere del patriotismo más encendido y de la voluntad más firme ante las restricciones externas contrarias a nuestras acciones emancipadoras.

La presión del capital foráneo está poniendo a prueba la cohesión interna de nuestro pueblo y nuestra capacidad de respuesta digna y patriótica. Estamos enfrentando al poder del imperialismo; nuestra posición se fortalece porque contamos con la ayuda de los gobiernos revolucionarios del mundo entero, que solidarizan con la lucha del pueblo chileno, como testimonian los créditos y la cooperación técnica concedidos.

El internacionalismo de los trabajadores contribuye, así, a la lucha nacional y revolucionaria de los trabajadores de Chile.

Por otra parte, hemos encontrado la colaboración y cooperación de los países industriales de Europa Occidental y de otros continentes. De lo cual siempre hemos dejado público testimonio.

La transformación de una realidad estructural es algo gigantesco, lleno de dificultades y peligros. Nuestro país ha dejado de caminar dentro del orden de cosas establecidas para cuestionar y alterar ese mismo orden tradicional en su raíz más profunda: La estructura económica.

El esfuerzo nacional en que el país está lanzado quiebra un sistema social fundado en la desigualdad y en la explotación de los trabajadores.

Los cambios revolucionarios y el desarrollo económico constituyen para el Gobierno Popular su misión fundamental. El buen éxito de nuestro proceso revolucionario depende, en gran medida, del rápido crecimiento de la economía, y a su vez, el desarrollo económico, generalizado a las grandes mayorías del pueblo. Depende de la autenticidad y vigor de la obra revolucionaria.

Por eso, desde un comienzo, fue nuestro propósito impulsar la explotación máxima de la capacidad productiva instalada para sacar al país del estancamiento profundo en que lo recibimos.

Si bien los índices de crecimiento alcanzado son, por lo general, ampliamente satisfactorios, el ritmo acelerado impuesto a la actividad económica, en

los últimos meses, evidencia descarnadamente contradicciones y desequilibrios que limitan en forma considerable la intensidad del crecimiento.

El desafío que nos hemos planteado, de movilizar el país al máximo, ha dejado al desnudo las verdaderas manifestaciones del subdesarrollo.

Es ahora, más que nunca, cuando se hacen evidentes los contrastes entre las necesidades de un país con voluntad de crecer y la realidad de su infraestructura.

Medios de comunicación y de transporte absolutamente insuficientes, que entorpecen el abastecimiento; medios de producción industrial desequilibrados, que no responden a la real estructura de las necesidades, servicios deficientes, capacidad técnica reducida, y una maraña administrativa anacrónica y semiimpenetrable.

Es sobre esta base que debemos establecer nuestra política creadora, evaluarla o crítica.

I.- Balance económico: 1971-1972

Las características del estancamiento a las que tradicionalmente la economía chilena estaba sujeta en los últimos años, ha sufrido una modificación fundamental, a consecuencia de la política de activación que el Gobierno ha venido implementando. Su recuperación y el crecimiento sostenido quedan de manifiesto en los indicadores sobre la producción y el empleo alcanzados a la fecha.

El ritmo de expansión de la producción interna lograda en 1971 fue del orden del 8,5 por ciento y para 1972 es estimado en un 6 por ciento. Este hecho, comparado con el promedio de crecimiento durante el período 66-70 de un 3,7 por ciento, nos permite establecer que, desde un enfoque global, se ha entrado en una firma etapa de avance.

Al mismo tiempo esta recuperación significó, en la producción industrial, un aumento de 12 por ciento en 1971 y de un 13 por ciento en el primer semestre del presente año, lo que proyectado para 1972 nos permite pensar en un crecimiento del 10 por ciento para dicho sector que, en comparación con la tasa tradicional de un 3,3 por ciento, hace evidente una superación del inmovilismo tradicional.

El importante crecimiento de la producción en todas las ramas de la actividad económica para el año 1971, y su mantención apenas atenuada para 1972, configura el cuadro de una economía en plena expansión.

Presten ustedes, compatriotas, especial atención a lo siguiente:

La economía chilena alcanzó en 1972 la expansión ya descrita, pese al brusco descenso del precio del cobre en el Mercado Mundial, y cuando además, los indicadores del comercio exterior nos eran desfavorables.

Si hubiéramos encarado tal situación del modo tradicional no habríamos conseguido el fenómeno casi inédito en nuestra historia de crear expansión en medio de un proceso crítico del comercio exterior.

Lo tradicional era restringir la economía cuando se enfrentaban a alternativas similares.

Este proceso expansivo de nuestra economía hay que mirarlo desde otro punto, véaselo desde el punto de vista de los trabajadores. Para ellos ha significado aumentar en más de doscientos veinte mil el número de puestos de trabajo, reduciendo la tasa de desocupación en el Gran Santiago, en un 8,3 por ciento, en diciembre de 1970, a un 3,8 por ciento durante el mismo mes de 1972.

La tendencia a la disminución de la cesantía, es confirmada por la encuesta de junio del presente año, que muestra un 3,7 por ciento en la tasa de desocupación, la más baja desde hace quince años. Es decir, cerca de un millón de compatriotas se benefician directamente de la expansión actual de la economía. La mayor producción, ligada al aumento del empleo, la mejor ocupación de los equipos e instalaciones, permitió recuperar y superar niveles de actividad económica. Al mismo tiempo, el crecimiento logrado, se hizo con un cambio fundamental en la distribución del ingreso, elevando la participación de los trabajadores de un 52 por ciento a un 59 por ciento del producto, aparte, de todos los mecanismos indirectos de redistribución dados por las inversiones en salud y educación.

Lo que concede su real contenido a esta expansión económica es que ella tiene lugar, simultáneamente, con cambios estructurales en profundidad, reafirmando nuestra tesis de que sólo un hecho de tales características abre paso a un proceso de crecimiento económico sostenido, con una modificación en la distribución del ingreso y, en consecuencia, la alteración de las medidas de consumo y niveles de existencia en provecho de los asalariados, y de aquellos que encontrándose antes sin ocupación, no tenían acceso alguno a los frutos del desarrollo económico.

El proceso de transformaciones económicas básicas ha supuesto la reincorporación al patrimonio nacional de los recursos estratégicos mineros, industriales y financieros, poniendo bajo el control de Chile, actividades de singular connotación tecnológica como la Gran Minería del Cobre, donde por vez primera, el Estado y los trabajadores asumen la responsabilidad de dirigir y administrar las más grandes empresas mineras del mundo, así como la compleja comercialización del metal rojo con el mercado internacional, la nacionalización de empresas monopólicas de la actividad industrial, comercial y financiera, así como la intensificación de la reforma agraria ha posibilitado la constitución del sector de la economía.

Este hecho hay que medirlo en toda su magnitud. En él tiene planteado nuestro pueblo uno de los más importantes desafíos históricos que jamás haya encontrado: el de crear nuevas relaciones de producción y organización que apoyado en una disciplina laboral, de elevada conciencia política, permitan desarrollar la economía sobre un criterio de racionalidad y justicia, que anteponga el interés de los trabajadores al de los monopolistas y monopolios.

II.- Dificultades básicas

Sin embargo, es necesario analizar algunos desequilibrios y dificultades económicas que han surgido, simultáneamente, con el aumento de producción

que comentamos. La política económica del Gobierno, es de carácter expansivo que pone énfasis en dos elementos:

En primer lugar, el aumento de la demanda, mediante el alza de los salarios y del poder de compra de éstos. El crecimiento de salarios nominales promedio fue, en 1971, de un cincuenta y cinco por ciento, mientras el alza de precios durante el mismo año alcanzó sólo un 22,5%, es decir, el reajuste de los asalarios por arriba del índice de precios permitió un fuerte incremento del poder de compra de los trabajadores.

En segundo lugar, el aumento del gasto público, a través de los programas de Vivienda, Reforma Agraria, Salud y Educación, se elevó el nivel de la demanda y se impulsa el programa de Gobierno. El crecimiento de la demanda, derivada de esta política económica, tuvo un resultado positivo, como lo revelan las cifras de oferta global de producción, ya que existían márgenes de capacidad ociosa en términos de equipos y fuerza de trabajo.

No obstante lo lógico, existen, como lo habíamos previsto, algunos obstáculos que deben ser analizados con detenimiento, para fijar, correctamente, las tareas económicas que tenemos por delante.

1.- Escasez de divisas

El aumento del ingreso en la población ha significado un gran crecimiento de la demanda de alimentos que el sector agrícola no puede satisfacer.

También el período de reactivación ha impulsado, considerablemente, la necesidad de mayores cantidades de materias primas, repuestos y equipos para el sector industrial. Parte de esta demanda adicional tiene que satisfacerse mediante importaciones, creando así, una gran presión sobre la disponibilidad de divisas que nuestra economía genera a través de sus exportaciones e ingresos de créditos tradicionalmente, los capitalistas chilenos atendían la escasez de divisas endeudando al país de modo indiscriminado y estimulando la entrada de capitales extranjeros que se apropiaban de parte del patrimonio de las empresas nacionales. Nuestro Gobierno ha enfrentado, de modo revolucionario, esta situación preservando los intereses de Chile, por un lado, mediante la recuperación del cobre, evitando con ello la sangría de divisas que anualmente se llevaban por concepto de utilidades, éste es el hecho básico.

Por otra parte, hemos buscado fuentes de crédito menos gravosas, encontrando una respuesta positiva, como era lógico suponerlo, de los países socialistas, que han otorgado créditos sobre los cuatrocientos millones de dólares para maquinarias, equipos y plantas, y en condiciones financieras extraordinariamente favorables para Chile. Estos créditos contribuyen decisivamente al gran impulso dado a la inversión durante este año y el próximo. Además, hemos procurado reconstituir nuestras líneas de créditos para contrarrestar la disminución provocada por los bancos norteamericanos.

En este sentido, también hemos encontrado respuestas afirmativas de parte de los países socialistas, de los bancos latinoamericanos y de los bancos de Europa y Japón. El país conoce el detalle de estas operaciones. A su vez, hemos tomado medidas de corrección, que permitan ir saneando nues-

tro comercio exterior a través de un presupuesto de divisas, para el año mil novecientos setenta y dos-mil novecientos setenta y tres, como un instrumento de realización planificada del uso de nuestras divisas de acuerdo a prioridades de interés nacional.

En forma complementaria hemos incrementado nuestros lazos de comercio con los países latinoamericanos, tanto los agrupados en la ALALC como en el Pacto Andino. Las importaciones procedentes de éstos alcanzaron 218 millones de dólares en 1971 lo que, respecto a 1970, significa un 75 por ciento de aumento.

Al mismo tiempo, las líneas de crédito otorgadas por los bancos latinoamericanos suman hoy cerca de setenta y cinco millones de dólares.

Desde el mes de noviembre del año pasado, como es de conocimiento público, Chile pidió a sus acreedores renegociar la deuda externa, proceso que sólo culminó a fines de marzo del presente año. En esa fecha se llegó a una resolución general, que permitió abrir las conversaciones bilaterales para concretar los acuerdos y llevar, así, un alivio real a nuestra balanza de pagos.

Con todo, no obstante los hechos positivos que hemos acumulado para la resolución de los problemas de nuestro comercio exterior, su saneamiento, mediante la nacionalización de la gran minería y del control planificado de nuestra capacidad para importar, es necesario que el país sepa que la situación de divisas que enfrentamos para el presente año es difícil, difícil debido, en gran medida, a factores que van más allá del ámbito de las decisiones, que tienen que ver con la política económica del Gobierno, como son los siguientes:

1° El promedio del precio del cobre, durante 1970, fue de cincuenta y nueve centavos, mientras en mil novecientos setenta y uno fue sólo de cuarenta y seis centavos. Este solo hecho significó un menor ingreso de doscientos millones de dólares, que a pesar del aumento de la producción de cobre de treinta y un millones de dólares, supuso una reducción de la entrada neta de divisas de ciento setenta y nueve millones de dólares el año último.

Para mil novecientos setenta y dos, la diferencia de precios respecto a 1970 significa una disminución aproximada de ciento setenta y cinco millones de dólares, que, a pesar del aumento estimado de la producción de cobre equivalente a cincuenta millones de dólares, va a significar una menor entrada neta de divisas de ciento quince millones. Es decir, aunque aumentáramos la producción de cobre en un quince por ciento, meta en sí misma difícil, Chile recibiría menores ingresos al estar el precio internacional en situación desfavorable respecto de los promedios alcanzados en mil novecientos setenta. ¡Exportamos más y recibimos menos! Vivimos, como siempre, la dolorosa realidad de los países subdesarrollados, seguimos vendiendo barato y comprando caro, característica también de los países en vías de desarrollo.

2° La desvalorización experimentada por el dólar en el mercado mundial elevó el precio de las mercancías que nosotros importamos, alzándolas en un diez por ciento como promedio. Esto nos enseña que, si mantuviéramos para mil novecientos setenta y dos el nivel de importaciones corriente de mil novecientos setenta y uno, Chile debería pagar alrededor de noventa millones de dólares más por los mismos productos.

Con las divisas que estamos gastando, cerca de treinta y seis millones adicionales son fruto del aumento de precios en los alimentos importados que se elevaron en un catorce por ciento como promedio, destacando las alzas del arroz, en un cuarenta y cinco por ciento; de la leche en un quince por ciento; de la carne, en un nueve por ciento; del azúcar, en sesenta y tres por ciento; de la mantequilla en un quince por ciento; del aceite, en dieciséis como uno por ciento.

3° La rigidez en la capacidad para importar también se manifiesta en la necesidad que tenemos de pagar nuestras deudas. A pesar del acuerdo alcanzado para renegociar parcialmente, los servicios de 1972, no por ello debemos dejar de desembolsar este año más de doscientos cuarenta millones de dólares. De esta cifra significa que estamos destinando un veintidós por ciento de nuestras exportaciones al pago de la deuda contraída por gobiernos anteriores.

4° En este cuadro de dificultades habría que subrayar la deliberada disminución de líneas de créditos a corto plazo desde Estados Unidos, que de doscientos veinte millones de dólares en agosto de 1970, cayó a treinta y dos millones en junio de 1972. Esta disminución de las líneas de crédito significa que se nos reducen los plazos para pagar nuestras importaciones corrientes, debiendo, ahora, cancelar al contado lo que antes tenía un plazo entre ciento ochenta días y un año.

Yo les pido que consideren la envergadura de estas cantidades de divisas y la repercusión negativa que su substracción brusca ha representado para el normal mantenimiento del flujo renovable del financiamiento de importaciones.

5° No menos importantes son las dificultades que nos han impuesto algunos organismos multinacionales de créditos, a los que tenemos derecho a acudir porque somos miembros integrantes de ellos. Chile ha pedido financiamiento para la realización de algunos proyectos. Nos han sido rechazados sin que exista ninguna objeción de carácter técnico sobre los mismos.

6° Por otra parte, si tradicionalmente Chile, para usar créditos para maquinarias y equipos pagaba en promedio un quince por ciento al contado, lo que representaba un desembolso aproximado de cuarenta millones de dólares anuales, hoy día, ante la negativa de los proveedores tradicionales norteamericanos a otorgar este tipo de crédito y dado el carácter estratégico de algunas de nuestras compras de equipo, como las ligadas a la Gran Minería del Cobre, nos hemos visto, muchas veces, obligados a comprar al contado.

Este hecho, aunque compensado en parte por las condiciones favorables ofrecidas por los países socialistas, ha conducido a una situación en que las cuotas al contado por bienes de capital representarán, en promedio, un treinta por ciento sobre el valor de éstos. Esto lleva a un desembolso adicional de cincuenta millones de dólares debido, exclusivamente, a las acciones de represalias de intereses económicos internacionales afectados por mi Gobierno.

Las dificultades que estoy señalando forman parte de un virtual bloqueo económico, que la población no alcanza a percibir en toda su magnitud y sobre el cual no se pronuncian los medios informativos opositores, a pesar que es la causa principalísima del daño de nuestra economía, que repercute desde la producción hasta el abastecimiento diario, pasando por el transporte.

Justo es reconocer que junto a las dificultades que obedecen a factores externos como el precio del cobre o la paridad del dólar, también existen fac-

tores internos que agudizan la presión sobre la disponibilidad de divisas, como es el caso del aumento del nivel de demanda que la política redistributiva y de expansión económica ha desatado. Es dentro de este contexto donde debemos situar las medidas que el Gobierno adoptará.

El actual ritmo de crecimiento acelerado de la economía encuentra otro obstáculo en el agotamiento de la capacidad ociosa de producción mientras la demanda se expande en forma sostenida. No debemos olvidar que hemos heredado un sector industrial insuficientemente desarrollado para hacer frente al volumen de necesidades sociales insatisfechas.

El crecimiento de la producción durante 1971 y primer semestre de 1972 fue alcanzado, en forma especial, mediante el aumento en el uso de los equipos e instalaciones, así como por el mayor nivel de empleo. Continuar la expansión de la producción supone, en esa etapa, aumentar la productividad y ampliar dichas instalaciones, objetivo este último que el Gobierno está realizando a través de su programa de inversiones.

Sin embargo, estas inversiones toman un período de maduración que cubre más de un año, período de la construcción y puesta en marcha de los equipos. Esto significa que la producción, en algunos sectores, tendrá un retraso en el tiempo, respecto a las necesidades creando problemas de desabastecimiento parcial y que dada la situación de divisas no pueden satisfacerse fácilmente con importaciones.

Deseo detenerme en el punto del subdesarrollo. Es indispensable que todos aprecien, descarnadamente, este fenómeno y sus efectos, del cual mucho se habla pero que, a fuerza de repetirlo, se transforma en un lugar común, sin contenido, o en un elemento abstracto si no se liga a la realidad cotidiana. El subdesarrollo lo sufre fundamentalmente el pueblo. Es el legado de nuestra histórica subordinación al imperialismo y a los grupos oligárquicos criollos, desde los años en que las vías ferroviarias eran desviadas con el exclusivo fin de pasar por campos de latifundistas influyentes, que las necesitaban. Y dirigían el país, hasta nuestros días, en que la insuficiencia de los transportes compromete el éxito de cualquier impulso en la producción, hay todo un espectro que resume el daño causado a la nación por los intereses privados cuando primen sobre los de la colectividad.

La infraestructura de Chile está a tal grado subdesarrollada, que los puertos son casi incapaces de recibir el flujo de productos importados, los que, una vez en tierra, con gran esfuerzo encuentran el bodegaje suficiente.

En 1971, la considerable importación de alimentos destinado a satisfacer a una masa consumidora en expansión, se transformó en una prueba para la infraestructura, que terminó por mostrar sus serias deficiencias. El puerto de Coquimbo, por ejemplo, considerado como alternativa al de Valparaíso, es incapaz de permitir la descarga simultánea de dos barcos y el propio Valparaíso no está en condiciones de atender más de 11 barcos a la vez.

El almacenaje muestra fallas, tanto en los puertos como en las ciudades y en el campo y a esa realidad se suma la insuficiencia de transportes, podemos entender cómo en este momento en Bío Bío hay un stock, importante, de leche condensada que no puede salir de la provincia por falta de vehícu-

los y otro tanto ocurre con la leche fresca almacenada en las provincias de Osorno y Llanquihue, que es requerida con ansia en la zona central. En los patios de almacenajes de la usina de Huachipato hay toneladas de acero y grandes equipos, fabricados allí, que no pueden ser sacados de la región porque además de la escasez de vehículos adecuados para su transporte existe el temor de que algunos puentes no pueden resistir el peso de los vehículos y de su carga.

Otro gran obstáculo económico que estamos encontrando, ligado a la rigidez del mecanismo de importaciones, es el relacionado con fuertes presiones inflacionistas, que ponen en peligro el ingreso real ganado por los trabajadores. El aumento de la cantidad de dinero, resultado de los niveles de gasto público alcanzado, y del financiamiento de algunas empresas estatales, con precios y tarifas congeladas, proporcionan un mecanismo adicional de propagación de dichas presiones inflacionarias.

Los desequilibrios financieros y las dificultades en la balanza de pagos no son fenómenos nuevos en la economía chilena, pero tradicionalmente estas dificultades han sido abordadas desde el ángulo financiero, sacrificando el crecimiento económico y la distribución del ingreso, en desmedro del sector trabajador y desembocando, más pronto o más tarde, en nuevos desequilibrios financieros.

Hoy día, el contexto en que planteamos estos problemas es totalmente diferente. El Estado controla gran cantidad de recursos productivos en las actividades minera e industrial. En consecuencia, posee instrumentos de política económica que inciden tanto en el comportamiento económico del resto de los sectores como también en la producción misma en los propios canales financieros. Además, la política económica se desarrolla con el apoyo de los trabajadores, ya que éstos asumen las tareas de dirección, en las actividades estatales ligadas a la producción.

Todos estos elementos, articulados en una política económica realista, nos permiten encarar los obstáculos señalados, de acuerdo a un plan de acción inmediato que vaya rompiendo las dificultades y corrigiendo los desequilibrios, sin sacrificar la expansión económica, ni producir un deterioro en la distribución del ingreso alcanzado.

III.- Tareas para la nueva etapa de la construcción económica y social

En los criterios básicos que orientan los objetivos del Gobierno en esta nueva etapa de construcción económica y social está presente la voluntad de profundizar el proceso de cambios y la perspectiva de transformación socialista de reafirmar seguridades de estabilidad y desarrollo en amplias capas, de pequeños y medianos empresarios del campo, la industria y el comercio, de enfrentar problemas y dificultades económicas con realismo, sin ocultar los sacrificios que sean necesarios, pero con la decisión, al mismo tiempo, de defender, ante todo, los intereses de los trabajadores.

Nuestras tareas inmediatas consisten en definir, producir, avanzar.

Definir, en un doble sentido. En el de las reglas que cada sector de trabajadores o de pequeños y medianos empresarios debe considerar garantizadas para el desempeño normal de sus actividades, y en el de los esfuerzos y sacrificios, que son necesarios, para superar los problemas presentes y sentar las bases materiales de una sociedad transformada.

Producir, para sostener el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; para procurarnos nosotros mismos lo que la herencia de endeudamiento y las obstrucciones del imperialismo nos impiden traer desde afuera, para movilizar recursos que amplíen nuestras capacidades productivas y aseguren trabajo a toda la población en edad de hacerlo.

Avanzar, para asegurar condiciones que hagan irreversibles los cambios ya realizados para terminar rápidamente la formación del área de propiedad social. Para que los trabajadores y la sociedad, en su conjunto controlen todos los centros productivos estratégicos, aún en manos de intereses monopólicos nacionales y extranjeros, y como requisito para definir con claridad y precisión las áreas de la economía.

1° Definiciones básicas

Llevar a cabo las tareas supone la participación del sector social y privado en la actividad económica y, naturalmente, significa delimitar funciones y procedimientos sobre la interrelación de ambos sectores.

A) En lo que se refiere a la constitución del área de propiedad social cabe reiterar la decisión irrevocable del Gobierno de integrar, cuanto antes, las áreas social y mixta de la economía, con las noventa empresas que fueron definidas públicamente.

Para las empresas que ya forman parte del Área de Propiedad Social, y como un primer paso para la organización de un sistema de planificación operativa anual, se definirá un estatuto del Área de Propiedad Social que contemple:

- Los procedimientos generales de conducción de estas empresas;
- La formación y destino de sus excedentes;
- La participación de los trabajadores;
- El grado de autonomía de sus funcionamiento y se destaquen las normas de contraloría interna, que para el conjunto de estas empresas establecerá el Gobierno, a fin de velar por la corrección de sus procedimientos los sistemas y canales de dependencia de los órganos del Estado.

B) Sobre el funcionamiento de la pequeña y mediana empresa privada en la actividad industrial y comercial, enviaremos al Congreso un proyecto de ley que contemple lo siguiente: garantías de trabajo necesarias; normas sobre fijación de precios y rentabilidad; procedimientos de colaboración de las asociaciones representativas de las empresas medianas y pequeñas, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en la determinación de las normas básicas de ética profesional y de las sanciones a sus trabajadores; normas sobre los canales de distribución y abastecimiento de productos, especialmente, los originados en el área de propiedad social; normas sobre créditos de

operación y expansión de las empresas acogidas a estos estatutos y acceso ágil y oportuno a las materias primas nacionales e importadas mediante el fomento a la organización de centrales de compras e importaciones, que actúen a nombre del conjunto de los organismos de un mismo ramo.

En relación con los pequeños y medianos agricultores privados, definiremos con toda claridad y precisión las siguientes reglas de aplicación inmediata: Inexpropiabilidad de los predios de cuarenta hectáreas básicas o menos, con las únicas dos excepciones siguientes:

A) Absoluto abandono del predio, comprobado fehaciente y objetivamente;

B) Ofrecimiento voluntario de entrega a la CORA por el propietario.

– Para aquellos predios mayores de cuarenta hectáreas básicas y menores de sesenta hectáreas, garantía de no expropiación en los dos próximos años. La forma cómo haya sido explotado el predio durante este tiempo será de una importancia determinante, en las causales de expropiación posterior y de derecho a reserva.

– Definición inmediata del derecho a reserva, localización y tamaño de ésta para todos los predios, sobre el límite de inexpropiabilidad, es decir, con más de cuarenta hectáreas básicas y menos de ochenta hectáreas básicas. La determinación de la reserva se hará a solicitud del interesado y se definirá independientemente del año en que pueda estar programada la expropiación del predio.

De esta forma, el pequeño y mediano propietario estará estimulando a realizar inversiones en el predio definido como reserva. Todo agricultor que trabaje directamente su predio y obtenga de él su única fuente de ingreso, tiene asegurado el derecho a reserva. Podrá solicitar su definición inmediata, salvo que el predio esté evidentemente abandonado.

IV.– Redefinir la política de precios y salarios

Los ajustes en el sistema económico, necesarios para atender el desabastecimiento parcial, el estrangulamiento en el comercio exterior y el financiamiento sano del sector público y del Área de Propiedad Social, exigen una revisión del sistema de precios en conformidad con el programa a desarrollar en los próximos meses.

La inflación es un mal endémico de nuestra economía capitalista. Por primera vez en la historia los trabajadores están en el Gobierno. Por primera vez, por consiguiente, se trata de entender el problema de la inflación de acuerdo con el interés de quienes viven de un sueldo o salario, reciben pensiones, jubilaciones y montepíos. Por ello, por primera vez también, el Gobierno Popular con el objeto de defender el ingreso real de los trabajadores de los aumentos de precios ocurrido desde enero hasta el primero de octubre, anticipará el reajuste anual y enviará al Congreso, en la primera semana de agosto, un Proyecto de Ley con este objeto.

Para los servidores públicos este Proyecto de Ley establecerá que el reajuste correspondiente se realice al primero de octubre, es decir, a los nueve meses del anterior. Y, en el futuro, se realicen permanentemente en esa fecha, diferenciándolos del periodo presupuestario que sigue el año calendario.

El sueldo vital será fijado también, a un nuevo valor en esa misma fecha, al igual que el sueldo mínimo, el salario mínimo y las pensiones mínimas.

Para los trabajadores sujetos a convenios colectivos, el proyecto establecerá la opción de que los sindicatos se acojan al mismo sistema, cambiando la fecha de sus pliegos al primero de octubre, en cuyo caso recibirán un reajuste extraordinario equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida, ocurrido entre la iniciación del pliego y el momento de vigencia de dicho reajuste. En septiembre se otorgará como anticipo al reajuste, una bonificación compensatoria extraordinaria de Fiestas Patrias a todos los trabajadores. Por último también se fijará una nueva asignación familiar desde el 1° de octubre, en concordancia con los principios anteriores.

Los criterios básicos que orientarán la política de precios y el programa de reajustes contemplados para el futuro serán:

- Los precios deberán fijarse sobre la base de que las empresas de propiedad social se autofinancien y dejen excedentes normales para su propia expansión, salvo los casos de utilidad pública en que expresamente se decida subsidiar el precio de venta.

- Los precios para el sector privado, de pequeños y medianos industriales y comerciantes, se fijarán sobre la base de que esas empresas operen con niveles normales de rentabilidad.

- Las noventa empresas monopólicas definidas por el Gobierno mientras no pasen a constituirse en propiedad social o mixta, tendrán precios estrictamente suficientes para operar. Se exceptuará de esta norma aquellas que suscriban convenios de inversión con el Estado.

Las alzas de precios y tarifas que sean necesarias para aplicar los principios anteriores, se realizarán en todo cuanto sea posible, discriminando su efecto, de tal manera que paguen un precio más alto aquellos sectores que por tener más ingresos deben aportar más al desarrollo del país.

Mecanismos especiales de captación de liquidez y excedentes

Para frenar las presiones inflacionarias y restablecer niveles más normales de abastecimiento, se hace imprescindible la aplicación de medidas especiales de fomento del ahorro, captación de saldos líquidos en poder de particulares y desviación del gasto de las personas hacia el uso de bienes y servicios en que exista capacidad de aumento de la producción y tengan simultáneamente, un bajo impacto sobre las importaciones. Asimismo, deberán ser beneficiosas para los trabajadores.

A este respecto, se aplicarán las siguientes medidas: planes de veraneo popular para los asalariados, a fin de que, junto con descansar merecidamente y poder conocer nuestro país, consuman servicios que podemos aumentar, sin mayores efectos sobre las importaciones.

Establecimiento de un sistema de ahorro reajutable en condiciones preferentes para los próximos cinco años, al que podrán acogerse todas aquellas personas que paguen una comisión bancaria especial.

El uso del sistema de estancos en la comercialización de algunos productos suntuarios, tanto con fines de regulación entre oferta y demanda, como para captar liquidez.

Uso más intenso del sistema de peaje, aplicables a los automóviles particulares.

El establecimiento obligatorio de seguros de automóviles, bienes raíces, sobre un valor mínimo, y de vida para toda la población.

Reforma Tributaria.

– Establecimiento de un sistema de depósitos previos, para las importaciones del sector privado.

Tareas en la producción

La situación de los desequilibrios básicos ya analizados, así como la continuación del crecimiento económico, requiere de un impulso continuo de la producción, que se logra por los aumentos en la productividad del trabajo y mayores esfuerzos de inversión.

El incremento en los rendimientos de la fuerza de trabajo ocupada supone buscar nuevas formas de organización en el proceso de producción, con la participación directa de los trabajadores, a través de una discusión amplia de normas y metas de producción. Significa ir desarrollando la planificación y gestión de orientación socialista en el área de propiedad social, cimentadas en formas superiores de disciplina en el trabajo.

Por otra parte, la batalla de la producción exige ampliar las instalaciones existentes, lo que estamos realizando a través de un vasto programa de inversiones. Siendo los trabajadores los que administran la parte más importante de la economía nacional, debemos tomar conciencia de la necesidad de vincular su bienestar al aumento de la producción y de la productividad. Por consiguiente, el incremento de las remuneraciones debe guardar relación directa con el de la producción y productividad. Serán los propios trabajadores los que encontrarán, junto a su Gobierno, los mecanismos adecuados para la aplicación de estos principios.

Las normas, las metas y los sistemas de incentivos serán discutidos en cada empresa, en cada industria, en cada centro de trabajo.

En los próximos años el logro de niveles, cada vez más elevados de producción, nos exige ampliar las instalaciones existentes en diversos sectores que permitan corregir las actuales deformaciones y abrir nuevas líneas de desarrollo industrial.

Consecuente con esta perspectiva, el Gobierno ha formulado un ambicioso Plan de Inversiones, ya iniciado durante el presente año, sólo para el sector industrial, a través de CORFO, significa una inversión total de veintidós mil millones de escudos y seiscientos millones de dólares, lo que para 1972 representa cerca de cinco mil doscientos millones de escudos y más de cuarenta millones de dólares.

Hoy es posible asignar esta inversión, de acuerdo a criterios distintos de los de la rentabilidad privada o de inversión de apoyo, a un sector monopólico. El control sobre los recursos permite al Estado ordenarlos y jerarquizarlos,

2840 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

para invertirlos conforme a las necesidades sociales más urgentes y teniendo en consideración a la sociedad en su conjunto.

Al acabar con la atomización en las decisiones inversionistas, el Estado ha podido planificarlas dentro de la siguiente prioridad:

Primera prioridad, para inversiones que garanticen el abastecimiento esencial y el transporte.

Segunda prioridad, para inversiones que generen divisas o incrementen nuestra capacidad exportadora.

Tercera prioridad, para aquellos proyectos de inversión que promueven una selectiva política de sustitución de importaciones.

Para precisar, mencionaré los proyectos más significativos que ya están iniciados durante 1972, ordenados de acuerdo a las prioridades prefijadas.

En abastecimiento esencial distinguiremos los proyectos que se destinan a los siguientes sectores:

Alimentación:

Inversiones avícolas. Objetivo básico, cumplir el programa nacional del desarrollo avícola. La meta es lograr una producción anual cercana a los cien millones de pollos, lo que representa un incremento de ciento cincuenta por ciento con respecto a 1971. En este programa alcanzaremos este año cincuenta millones y se cumplirá la meta durante 1973. Esta mayor producción se distribuirá, fundamentalmente, entre Coquimbo y Concepción.

Los proyectos para este programa son:

Tres planteles integrados para producir diez millones de pollos cada uno. En ello se desarrollarán procesos de reproducción, incubación, fabricación de alimentos, etc. Se amplía en treinta y tres por ciento la capacidad de los actuales planteles de reproducción. Los mayores se encuentran en Ovalle y Santiago.

Plantas de incubación: cinco nuevos grandes planteles de incubación, además de los tres de las plantas integradas, ubicados en Coquimbo, dos en Santiago, en Talca y Ñuble.

Conjuntamente con INDAP, se construyen más de doscientos mil metros cuadrados de planteles de engorda. Estamos levantando fábricas de alimentos para animales, las cuales estarán en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Concepción y Cautín.

Se instalan cuatro nuevos mataderos de aves en Coquimbo, Valparaíso, Ñuble y Concepción.

Leche:

Comenzó la edificación de tres nuevas grandes plantas en Valparaíso, Talca y Malleco, y se amplían las existentes en Ñuble, Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue, lo cual significará un incremento superior al cincuenta por ciento. Todo esto estará en funcionamiento durante 1973.

Ganado:

Este año se están invirtiendo más de quinientos millones de escudos y dieciséis millones de dólares en el programa de desarrollo de la masa ganadera,

orientado hacia la compra de vientres, importaciones de reproductores, centro de inseminación artificial, fabricación masiva de vacunas. Estos dos últimos proyectos deberán estar terminados a comienzos de 1974 o a fines de 1973.

Frutas:

Está en marcha la construcción de centrales frutícolas en Maipo, O'Higgins, Doñihue, San Fernando y Codegua, que permitirán procesar toda la fruta de la región e incrementar su exportación. Además, se construye un gran frigorífico en Valparaíso. El plan quedará terminado entre fines de 1973 y comienzos de 1974.

Granos:

Se realizan tres grandes proyectos para almacenarlos. Especialmente, de trigo y maíz. Estarán ubicados en San Pedro, Malleco y un puerto granelero en San Antonio, que garantizará seguridad y rapidez, en la descarga de las importaciones de estos productos.

Las obras estarán listas durante 1973.

Azúcar:

A comienzos de 1973 se terminará la nueva planta azucarera de IANSA en Curicó. Producirá cincuenta mil toneladas de azúcar al año, lo que representa un ahorro de diez millones de dólares anuales, aproximadamente.

Bebida:

Se puso en marcha un gran programa de expansión en todas las plantas de la Compañía Cervecerías Unidas. Representará un aumento de producción cercano al sesenta por ciento, con respecto a los niveles actuales, que ya superan en un treinta y cinco por ciento a los de 1970. Este programa será terminado en 1973.

Alimentos protéicos:

Contemplando todas estas iniciativas en la industria alimentaria se inicia este año un programa de inversiones para la elaboración de concentrados de productos agrícolas y del mar, de alto contenido de proteínas. Están en construcción dos proyectos que serán terminados en 1973 y que producirán un sustituto de leche en polvo, que hoy se importa.

Para el desarrollo agrícola hemos considerado un plan de mecanización que se implementará con la compra de diez mil tractores por un valor de treinta millones de dólares. Llegarán en el período 1972-1973. Esto significa que en menos de dos años duplicaremos el parque de tractores.

Pesca:

Se construirá un gran puerto pesquero que será situado en la zona central. La puesta en marcha de las obras, cuyo financiamiento será asegurado, se iniciará en noviembre de este año o en los comienzos del próximo. Se contempla la adquisición de barcos para pesca en Alta Mar, un barco factoría y la modernización de la actual flota pesquera.

2842 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

A los proyectos de pesca industrial deben sumarse los apoyos que se entregarán a los pescadores artesanales para el almacenamiento y transporte de productos marinos. Se amplía la red de fríos, la construcción de carros frigoríficos y se completará la entrega de dos mil vitrinas para las carnicerías y comercio. Se ha fabricado un prototipo de carro frigorífico, cuyo modelo permitirá construir otros en serie en Chile y adquirir el resto en el extranjero si fuere necesario.

Vestuario:

En el sector textil está en marcha una gran cantidad de proyectos de inversión, que permitirá abastecer la demanda en hilados de algodón, lana y sintéticos, hasta por lo menos 1975. La política ha sido ampliar las capacidades de producción de hilados, que permitirá utilizar al máximo las hoy existentes, en tejedurías del área de propiedad social y privadas.

En algodón, las inversiones representarán un incremento superior al 30 por ciento, incluidos los aumentos de producción de hilos de coser.

En lana, las inversiones se traducirán en aumento de un 20 por ciento en hilados.

En sintéticos, las inversiones acentuarán la sustitución de algodón y lana con un sustancial ahorro de divisas. Todo esto, estará en marcha en 1973.

Se ampliará la capacidad instalada de las plantas Yarur, Hirmas, Sumar, Fabrilana, Bellavista, Oveja y se formará un complejo lanero en Magallanes. La inversión alcanzará a 40 millones de escudos y 19 millones de dólares. Finalmente, hemos adquirido en la República Popular China una planta textil con 50 mil husos.

Calzado:

Comenzarán a funcionar este año tres fábricas de calzado, en Iquique, Santiago y Punta Arenas. Con ellas, más las existentes, seremos capaces de abastecer el total de las necesidades del país.

Construcción:

El próximo año empieza a producir la planta de cemento de Antofagasta, que entregará 130.000 toneladas al año y que abastecerá al norte. Se ampliarán las plantas de Cemento Melón y Polpaico. Con las inversiones descritas, a fines del próximo año nuestra capacidad de producción de cemento habrá subido de un millón 500 toneladas durante 1972 a 1.800.000 toneladas. También se ampliará la planta de Biobío y se construirá una nueva gran planta de 200 mil toneladas en la zona sur-austral, es decir, para 1974 nuestra capacidad de producción será superior a los 2 millones de toneladas anuales. Un 35 por ciento superior a la existente. En octubre del presente año, entrará en producción la planta de viviendas prefabricadas que nos ha sido obsequiada por la Unión Soviética, que actualmente se construye en la provincia de Valparaíso. Producirá 70 mil m² de paneles para la prefabricación de viviendas.

Transportes:

Este año LAN-Chile adquirió otro avión Boeing 727 para servicio nacional. En España fue comprado un barco metalero de 30 mil toneladas para minerales de hierro; para el transporte de productos fueron adquiridos seiscientos camiones pesados que empezarán a llegar en agosto. Se están armando cuatro mil camiones medianos de los cuales ya se ha entregado una gran cantidad.

Para cubrir el trayecto marítimo Puerto Montt-Punta Arenas se negocia la adquisición de un barco de carga y pasajeros. Está en marcha la adquisición de un transbordador para el proyecto Pargua-Chacao.

Para el transporte de pasajeros ya fueron entregados mil taxis a sus propietarios de acuerdo con claras disposiciones legales; se han comprado dos mil autobuses, entre los que figuran los mil carrozados traídos del Brasil, y mil chasis desde Argentina, para los cuales se fabrican en estos momentos las carrocerías. Antes del comienzo de la próxima temporada primavera-verano, estarán en circulación doscientos nuevos buses interurbanos; se están fabricando tres mil seiscientos carros de ferrocarriles en el sexenio.

Proyectos para generar divisas

Sólo en la gran minería del cobre, este año invertiremos 721 millones de escudos y 40 millones de dólares, destacando el proyecto de la colada continua, para producir 100 mil toneladas anuales de alambrón. La planta se construirá en Antofagasta y representa siete millones de dólares de costo.

Hay que agregar la planta de ácido sulfúrico, con una inversión de 17 millones de dólares, y la renovación de camiones y palas en Chuquicamata, por un valor de cinco millones de dólares.

Este año queda listo el estudio para la instalación de una nueva refinería de cobre. Necesitamos encontrar su financiamiento adecuado y estamos en este camino.

El plan de expansión de la CAP, en plena realización, permitirá pasar de 630 mil toneladas anuales a un millón de toneladas de acero en 1974, elevando significativamente la producción de la minería del hierro. En cuatro años se invertirá en CAP cerca de 300 millones de dólares, es decir, a un ritmo anual de setenta y cinco millones de dólares. El proyecto es equivalente en términos de inversión anual al total de los planes de expansión del cobre del Gobierno anterior. Tendremos, además, la primera planta de extracción de acero de América Latina y la planta más avanzada de recuperación de renio y molibdeno, que deberá estar terminada en 1974. Además, este año se termina la nueva usina de aceros especiales de Rengo, que representa un gran salto tecnológico en esta área.

En el sector forestal se destacan varias importantes iniciativas. A mediados de 1973 se termina la Planta de Celulosa "Constitución", que representa una inversión superior a los setecientos millones de escudos y cuarenta y seis millones de dólares. Esta planta producirá sobre las 150.000 toneladas de celulosa anualmente; equivale a una exportación de 28 millones de dólares.

2844 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

A comienzos de año inició sus operaciones la Planta de Celulosa de Forestal Arauco, que representa una producción de ciento veinte mil toneladas al año y veinte millones de dólares de exportación.

Junto a estos proyectos, en la actualidad se realiza un gran esfuerzo de reforestación, sin precedentes en la historia de Chile. Se reforestarán ochenta y seis mil hectáreas, con una inversión superior a los ciento setenta millones de escudos.

Para aquellos proyectos ligados a la sustitución de importaciones podemos destacar:

En el sector automotriz se termina este año la gran fábrica de cajas de cambio, levantada en Los Andes, que permitirá abastecer la industria automotriz nacional.

En Rancagua se realiza la ampliación de la fábrica de motores e implementos eléctricos, que estará terminada en los primeros meses del próximo año.

Entró en operaciones la planta de neumáticos Coquimbo.

Se realizan ampliaciones de INSA en Santiago.

Esta semana se firmará el contrato de producción de automóviles pequeños.

En los próximos días se finiquitará la licitación para los vehículos pesados y, dentro de 1972, se definirá la política para los vehículos medianos.

Sector Químico

Se inicia en San Antonio un gran complejo del plástico, que producirá artículos de uso industrial. También Petroquímica Chilena inicia la construcción de una nueva planta de clorosoda que producirá productos necesarios para la expansión de la industria química y de la celulosa.

En el sector de energía y combustible, basta sólo mencionar el plan de expansión del carbón, que representa pasar de un millón seiscientos mil toneladas a dos millones de toneladas al año.

El proyecto iniciado en el período anterior de la Central El Toro, se termina en marzo de 1973. Pronto se iniciará la construcción de una nueva central térmica en Ventanas.

A los planes de exploración y expansión de la Empresa Nacional de Petróleo, se ha agregado en 1972, la investigación de la plataforma submarina. La inversión en la exploración alcanzará en ese rubro a unos siete millones de dólares. En la actualidad se está analizando el gas que fue descubierto frente a la provincia de Cautín para determinar si su explotación es comercial.

Para resumir, podemos afirmar que para el conjunto de las empresas del Área de Propiedad Social de la gran minería del cobre, transporte y energía, este año se gastarán más de seis mil ochocientos millones de escudos y ochenta millones de dólares, lo cual significa, una vez que todos estos proyectos produzcan un incremento de las exportaciones superior a los ciento cuarenta millones de dólares y una sustitución de importaciones por ochenta millones de dólares.

2. Superar los problemas de comercio exterior

Nos interesa que encaremos con realidad lo relacionado con el comercio exterior. Nuestro comercio exterior tiene dificultades, ellas se generan en causas que se radican en las ya aludidas, de alto grado de endeudamiento externo, la baja del precio internacional del cobre y presiones del imperialismo sobre nuestra Patria, lo que exigen esfuerzos en los siguientes campos:

1.- Aumento de la producción del cobre. El papel de los trabajadores y técnicos chilenos es preponderante en esta materia.

2.- Aumento de la producción agropecuaria. Se requiere, por un lado, un gran esfuerzo de organización del sector reformado y, por el otro, la definición clara de un sector privado en la agricultura, que se vea motivado a colaborar en el esfuerzo por la producción. A este respecto daremos esencial importancia a la fijación de los precios agrícolas.

3.- Limitación severa del consumo de algunos abastecimientos críticos, el de la carne de vacuno y mantequilla, para ser sustituidos por aves, cerdos, pescados y margarina, donde estamos haciendo esfuerzos rápidos y eficaces para aumentar la producción.

4.- Establecimiento de un sistema de producción de exportaciones, que permita la compra interna en escudos y la exportación centralizada, al precio de competencia internacional que sea necesario.

5.- En el desarrollo del programa de inversiones expuesto, cuyo objetivo central es substituir importaciones y crear nuevas fuentes de exportación.

6.- En el uso de nuestro alto nivel de exportaciones, como un elemento de negociación para obtener facilidades crediticias y oportunidades nuevas de intercambio con los países que se vean beneficiados por la reorganización de nuestro comercio.

7.- En la creación de empresas de prototipos por sectores para superarlos técnicamente, aprendiendo de la tecnología extranjera, acelerando el reemplazo de importaciones de productos más complejos.

8.- En la creación de empresas de ingeniería, para diseñar los proyectos de inversión con nuestra propia capacidad, contratando en el exterior lo estrictamente necesario y acumulando las experiencias de esos aportes técnicos que traigan a nuestras empresas.

9.- Compromiso de ahorro de divisas por empresas

Los trabajadores de las empresas de propiedad social, mixta y privada, así como los empresarios de estas últimas, deberán extremar el ingenio y la creatividad, en un gran esfuerzo nacional para obtener un ahorro de divisas, resultado de una amplia discusión comprometiendo metas públicas de ahorro de ellas haciendo posible que los aumentos de producción se logren con un uso más eficiente de todas las materias primas y equipos importados.

3.- Incentivo a la producción agropecuaria

Todo asentamiento, unidad productiva reformada o agricultor particular sujeto a convenios de producción, que demuestre ante las instituciones pertinentes que ha sobrepasado los rendimientos por hectárea definidos por el Ministerio de Agricultura para una lista de productos y, simultáneamente con ello haya aumentado la producción del año anterior, tendrá una prima de incentivo a la producción, equivalente a un porcentaje del precio establecido por los poderes compradores del Estado, aplicado sobre el total de las ventas.

En los casos en que el vendedor disponga físicamente de una menor superficie explotable en razón de haber sido expropiado, el Ministerio de Agricultura determinará las normas para establecer los aumentos de producción, en el primer año de aplicación de este incentivo.

Convenios de compra, asistencia técnica y crediticia a largo plazo

Estos consistirán en:

- Convenios de producción, con poder de compra asegurado por el Estado.
- Fijación anual de precios con suficiente anticipación a la época de la siembra.
- Garantía de recuperación de la inversión y pago de la producción perdida, por causas de fuerza mayor no atribuibles a agentes de la naturaleza.

Medida para abordar los problemas de transporte y distribución

Frente a las deficiencias del sector transporte señaladas anteriormente y a los problemas de distribución igualmente comentados, hemos decidido tomar las siguientes medidas:

Primero:

Centralizar en un comando único la política de transportes del país, mediante la creación del Comité Ejecutivo de Transportes, como una primera etapa de la creación del Ministerio de Transportes. Este Comité Ejecutivo de Transporte dependerá transitoriamente del comité integrado por los tres ministros del sector económico. Este Comité Ejecutivo de Transportes será presidido por el Ministro de Economía e integrado por representantes de los Ministerios de Economía, Hacienda, Obras Públicas, Agricultura y Defensa. Sus facultades serán las más amplias, tanto en la formulación como en la ejecución de políticas y coordinación de las organizaciones y empresas públicas de transportes.

Segundo:

Formular un plan de emergencia para superar, siquiera parcialmente, los agudos problemas de movilización de la carga.

Este plan de emergencia contempla:

- Un programa extraordinario de reparación de 600 carros de ferrocarril en los próximos 6 meses, lo que representa la mitad de los carros paralizados actualmente por falta de reparación;
- Un programa extraordinario de reposición de importación de medios de tracción ferroviarios;
- Mejoramiento drástico de la actual utilización media de los carros de ferrocarril, para la cual es necesario, entre otras cosas, racionalizar los medios de descarga;
- El uso y fabricación rápida de bodegas transportables, facilitará la mejor utilización de los equipos existentes;
- La readaptación urgente de algunos puertos de provincias para la descarga de granos;
- Drásticas reformas en la organización, mediante la cual se coordinan las tareas en los puertos y se define la prioridad de descarga y carga en casos de atochamiento;
- Estudio minucioso y rápido de la mecanización de los puertos. Sobre esta materia ya se están instalando 18 nuevas grúas en Valparaíso;
- Aceleración de las obras del metropolitano de Santiago. A mediados de 1973 se terminaría la Línea 1 y estará en ejecución la N° 2.

Distribución de productos

Mejorar el sistema de distribución de productos supone la organización de los consumidores y la eficacia de las empresas y procedimientos de distribución. A este respecto se han definido las siguientes políticas:

- Promover en forma más acelerada la formación de las Juntas de Abastecimientos y Precios;
- Establecimiento de una red nacional de almacenes y supermercados controlados por DINAC, considerando los intereses legítimos de los pequeños y medianos comerciantes.
- Fomento de la organización cooperativa en la distribución de productos;
- Establecimiento de convenios entre DIRINCO y dichas organizaciones cooperativas, para la distribución de productos;
- Obligatoriedad para las empresas del área de propiedad social y mixta de organizar cooperativas de distribución de productos esenciales para su personal;
- Supresión definitiva de la venta en fábricas a particulares de la producción textil y otros bienes, ya que con ello se fomenta la especulación, en desmedro de los pequeños y medianos industriales, comerciantes y consumidores reales;
- Regulación drástica de la entrega de bienes en especies a los trabajadores, como parte de sus remuneraciones, y supresión en todos aquellos casos en que existe desabastecimiento y las cuotas excedan el consumo normal de los trabajadores. Esta es una resolución adoptada por los propios trabajadores textiles en su reciente encuentro, y será generalizada. El Estado hará uso

2848 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

de todo su poder de compra y venta de que dispone para la regulación de abastecimientos y precios.

Conciudadanos:

Cumplo una vez más con la obligación que contraje cuando asumí el Gobierno, de entregar una información franca y acabada de la realidad del país.

En esta oportunidad me he referido a la situación en que se encuentra la economía y las proyecciones que alcanzará, una vez que superemos las contradicciones que han surgido y las dificultades que se nos han creado –desde dentro y desde el extranjero– y se desarrolle el vasto plan de vitalizadoras y dinámicas inversiones que están en marcha.

Hemos encontrado la colaboración de otros países, especialmente los socialistas, para impulsar un programa consecuente con la nueva economía que pusimos en marcha cuando resolvimos recuperar las riquezas para la nación y, lo que es muy importante, hallamos la comprensión resuelta de nuestros trabajadores, vitales en el proceso que hemos echado a andar.

En determinados momentos, hasta los niños de nuestra patria, como ocurriera en vísperas de la inauguración de la Tercera Conferencia de UNCTAD han entregado su apoyo a las tareas propuestas por el Gobierno, mientras que jóvenes y adultos lo han venido haciendo con constancia a través del trabajo voluntario.

Tenemos por delante un desafío decisivo para vencerlo, hemos escogido la fórmula revolucionaria, que se afina en las nobles tradiciones que han caracterizado a Chile, como pueblo digno, soberano, laborioso y luchador.

Estos atributos serán puestos a prueba en los duros momentos que debemos encarar.

Saldremos vencedores del subdesarrollo. El subdesarrollo es una realidad y la sufren dos tercios del orbe. Para superarlo existe una alternativa y esa es la que hemos tomado, la que, si bien al final entregará un porvenir promisorio, exige para llegar hasta él, de la firme voluntad de los jóvenes, mujeres y hombres.

Al hacer un llamado al pueblo, sé que estoy pidiendo sacrificios a sectores que lo han venido haciendo durante años, víctimas del desempleo, la subalimentación y la incultura. Ahora con mayor razón, los insto a trabajar con firmeza, porque serán los auténticos beneficiados con la nueva economía.

En esta hora de sacrificios, como Gobernante Popular, he cuidado que esos sectores alcancen un trato más justo en la distribución del ingreso nacional. Dentro de la segunda fase de nuestro programa económico, su situación mejorará, pero insisto en que la verdadera solución a sus antiguos problemas surgirá en la sociedad que construiremos.

El país deberá tener conciencia:

Del esfuerzo que hay que realizar. De nuestra responsabilidad dependerá que alcancemos éxito o que fracasemos.

Hay manos fraternas tendidas hacia nosotros. Ello es una gran cooperación, una importante ayuda. Si otros se sacrifican o nos cooperan, con mayor razón debemos hacerlo nosotros. Ningún pueblo ha alcanzado su liberación sin fe, sin mística, sin cariño por su patria, por su tierra, por su historia.

Chile tiene que hacerlo, con el sacrificio de los patriotas, como lo hicieron en el pasado los héroes de la emancipación.

Apelo a la reserva moral y a la capacidad de mis compatriotas, especialmente de los trabajadores, para llevar adelante la tarea constructora.

El mundo nos mira.

Los pueblos en vías de desarrollo esperan y anhelan que vencamos.

Les respondo, en nombre de mi patria, VENCEREMOS.

Salvador Allende: Carta a los dirigentes de la UP sobre la Asamblea del Pueblo en Concepción

(31 de julio de 1972)

A los Compañeros
Jefe de los Partidos de la
Unidad Popular
Presente

Estimados compañeros y amigos:

En los últimos días han acaecido algunos acontecimientos sobre los que estimo conveniente llamar la atención de los dirigentes máximos de la Unidad Popular. Aunque de relevancia delimitada en estos momentos, estos hechos encierran en sí mismos una potencialidad perturbadora de la más extrema gravedad. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para concretar más el sentido real del camino revolucionario que está siguiendo el movimiento popular y que orienta la acción del Gobierno. Considero, igualmente, útil que estas reflexiones sean sometidas a la consideración del pueblo. Y para eso las haré publicar.

Cada uno de los militantes de la Unidad Popular además de ser protagonistas del proceso revolucionario que está en marcha, es responsable de su presente y de su futuro. La tarea más dura y más activa está reservada a los dirigentes, por eso es a ellos a quienes dirijo esta carta, nacida de la más íntima convicción de que estamos frente a un instante en el cual debe imponerse la claridad y la definición.

No deseo que se piense que estoy instando a los dirigentes superiores, mandos medios y militantes a disfrazar su comportamiento para evitar hechos que den armas al enemigo. Al pedirles claridad y definición estoy colocándolos frente a la verdadera responsabilidad histórica, que es la meta que impulsó a los jefes del movimiento popular a ponerlo en marcha, y que ha sido y debe ser la razón de nuestra lucha. Ya que el afán de convertirnos en protagonistas de ella para obtener una satisfacción puramente individual es una grave deformación que conduce a algunos a impulsar fórmulas aventureras, que ponen en riesgo el éxito de la gran batalla que libramos contra los verdaderos enemigos de la Patria: el imperialismo y los clanes económicos monopolistas y oligárquicos.

En la semana comprendida entre el 24 y el 30 de julio cumplí con dos misiones que fueron resueltas por la Unidad Popular y por el Gobierno: fijar la segunda fase del proceso económico que descansa en tres bases: defi-

nir, producir, avanzar. Di cuenta de la situación política del país, revelé los planes de los adversarios y diseñé las tareas para los próximos meses, dentro de la auténtica estrategia del movimiento de liberación de Chile. En el curso de esa semana el pueblo respaldó a su Gobierno en un multitudinario acto de masas que se celebró en Santiago.

He mencionado específicamente la expresión tareas porque tal carácter tiene las diversas acciones que deben cumplir los militantes de la Unidad Popular. Recalco que en ningún caso cabe que surjan contradicciones entre las tareas específicas que se establecen y la estrategia de la Unidad Popular. Es por eso que rechazo cualquier intento de diseñar tácticas paralelas, espontaneístas, so pretexto de que personas o grupos se sientan depositarios de la verdad y persistan en su afán de desviar la marcha del pueblo para colocarlo frente a riesgos en los cuales la vida de hombres, mujeres y jóvenes está innecesariamente expuesta.

La Unidad Popular tiene que ser un movimiento homogéneo, y las decisiones que dentro de ella se tomen deben ser acatadas por que reflejan conclusiones tomadas con responsabilidad por sus dirigentes, de acuerdo con un pensamiento común.

He dicho que los enemigos del movimiento popular están empeñados en destruir la imagen que el pueblo tiene de su Gobierno con el propósito de restarle autoridad y crear las condiciones para un intento de subversión.

Nada mejor para esa táctica del enemigo que las manifestaciones divisionistas que alientan personas o grupos dentro de la Unidad Popular. Los adversarios estimulan a través de su poderoso aparato publicitario interno y extranjero, cada gesto de indisciplina, porque saben que está llamado a transformarse en parte de un fenómeno que deforme la visión del verdadero movimiento popular, al que les complacería ver aparecer como una montonera incapaz de realizar la tarea de conducir el país a una meta histórica como es la transición hacia el socialismo.

El pueblo de Chile tiene frente a sí un enemigo poderoso que usa las técnicas modernas para combatirlo. Y eso debe saberlo cada militante de la Unidad Popular, así como cada simpatizante de la causa nacional que no milite en los partidos de la UP. El enemigo estudia nuestras debilidades y las explota. Está en condiciones, por ejemplo, de dar apoyo financiero indirecto a cualquier aventura, como también opera psicológicamente sobre toda persona que, impulsada por una impaciencia producto de un bajo nivel ideológico, se desprende de la lucha colectiva para emprender acciones individualistas.

Todo luchador nacional debe estar consciente que jamás recibirá de su enemigo un consejo útil para la causa patriótica y que, por el contrario, cada adversario está resuelto a destruir los avances que ha hecho el movimiento popular.

Cada partido debe ocuparse de elevar el nivel ideológico de sus militantes, de su disciplina, e impulsar la estrategia común de la Unidad Popular, base del Gobierno de los trabajadores.

Las deformaciones individuales repercuten en el comportamiento de los partidos. Si ellas no son corregidas con energía por los dirigentes y las pro-

pías bases, ellas conspiran contra la unidad de la clase trabajadora, ponen en peligro al movimiento popular organizado y sirven a los planes del enemigo que insiste en imponer el caos político y provocar una crisis económica.

Algunas deformaciones transformadas en práctica corriente trascienden hasta niveles superiores y exigen una corrección ejemplar de parte del Gobierno. La que se ejerce no para satisfacer las presiones de los adversarios sino porque le está reservada la misión de gobernar al país, la que cumplirá implacablemente.

Si los partidos impulsan con decisión las tareas que se entregan al pueblo, para que él construya su propio destino, se producirá una movilización gigantesca y el enemigo tendrá que retroceder ante la fuerza de los trabajadores. Los valerosos vietnamitas dan una lección diaria a los revolucionarios del mundo, porque demuestran que la resolución de cada patriota de cumplir la misión que se le ha encomendado es un aporte vital para la lucha común. Así, la mujer que se ocupa de producir la cuota de alimentos para un combatiente, es también una combatiente, y no necesita de la espectacularidad de una acción para sentir que está cumpliendo con su deber.

La mujer que en nuestro país lucha en su barrio contra los acaparadores y especuladores, así como el trabajador que vigila el funcionamiento de su centro de producción y cumple con la labor que le corresponde, están movilizados en la defensa de su Gobierno e impulsando las grandes tareas que nos hemos fijado como metas.

He sido muy claro cuando he hablado que Chile enfrenta un tipo de bloqueo silencioso que causa tanto daño como cualquier otro. Para vencerlo hay exigencias para todos los patriotas, y la realización de ellas representa la movilización del pueblo.

En la provincia de Concepción se ha producido por segunda vez en tres meses un fenómeno de tendencia divisionista que atenta contra la homogeneidad del movimiento de la Unidad Popular. No vacilo en calificarlo como un proceso deformado que sirve a los enemigos de la causa revolucionaria.

Los hechos me obligan a subrayar el contraste entre ese proceso divisionista con los éxitos obtenidos en las elecciones registradas en la Universidad Técnica del Estado, en la Central Unica de Trabajadores, en la Federación de Estudiantes y en la provincia de Coquimbo. Los éxitos han resentido al adversario y en los momentos en que se repliega para reponerse surge dentro de nuestro movimiento un proceso que los alienta, porque desorienta a nuestros compañeros y, lo que es más serio, los puede llevar a un enfrentamiento interno lamentable.

El enemigo ha buscado e insiste en crear un enfrentamiento artificial que divida al país en una lucha cuyas proyecciones ellos mismos no pueden prever. Nada mejor para esto que profitar de un enfrentamiento artificial dentro de la Unidad Popular.

He dicho que en Chile no hay enfrentamiento de Poderes y que el Poder Ejecutivo encara un conflicto político creado por los que desde otros poderes del Estado sobrepasan sus competencias, desconociendo la Constitución, para imposibilitar nuestra misión histórica.

El conflicto político quedó una vez más de manifiesto la semana pasada, cuando la mayoría opositora al Gobierno constitucional destituyó en el Senado al Ministro del Interior, compañero Hernán del Canto.

Para superar en su raíz las bases de ese conflicto político, señalé como objetivo prioritario ganar las elecciones generales de parlamentarios de 1973. Una mayoría popular en el Congreso permitirá impulsar los cambios institucionales y legales indispensables para sacar al país del subdesarrollo, y acabará con el poder de obstaculizar de una oposición revanchista que ampara los intereses de la reacción y llega a favorecer los planes del imperialismo.

El poder popular no surgirá de la maniobra divisionista de los que quieren levantar un espejismo lírico surgido del romanticismo político al que llaman, al margen de toda realidad, "Asamblea Popular".

¿Qué dialéctica aplican los que han propuesto la formación de tal Asamblea? ¿Qué elementos teóricos respaldan su existencia?

Una Asamblea Popular auténticamente revolucionaria concentra en ella plenitud de la representación del pueblo. Por consiguiente, asume todos los poderes. No sólo el deliberante sino también el de gobernar. En otras experiencias históricas, ha surgido como un "doble poder", contra el poder institucional reaccionario sin base social y sumido en la importancia. Pensar en algo semejante en Chile en estos momentos es absurdo, sino crasa ignorancia o irresponsabilidad. Porque aquí hay un solo Gobierno, el que presido, y que no sólo es el legítimamente constituido, sino que, por su definición y contenido de clase, es un Gobierno al servicio de los intereses generales de los trabajadores. Y, con la más profunda conciencia revolucionaria, no toleraré que nada ni nadie atente contra la planitud del legítimo Gobierno del país.

El Gobierno de la Unidad Popular es resultado del esfuerzo de los trabajadores, de su unidad y organización. Pero también de la fortaleza del régimen institucional vigente, que resistió los embates de la burguesía y del imperialismo para destruirlo. Por eso, para continuar gobernando al servicio de los trabajadores es mi deber defender sin fatiga el régimen institucional democrático. Y no concibo que ningún auténtico revolucionario responsable pueda, sensatamente, pretender desconocer en los hechos el sistema institucional que nos rige y del que forma parte del Gobierno de la Unidad Popular. Si alguien así lo hiciera, no podemos sino considerarlo un contrarrevolucionario.

El régimen institucional actual debe ser profundamente cambiado, porque ya no se corresponde con la realidad socioeconómica que hemos creado. Pero será cambiado de acuerdo con la voluntad de la mayoría del pueblo, a través de los mecanismos democráticos de expresión pertinentes.

Está claro que nos se ha hecho un examen correcto de la correlación de fuerzas en el país para imponer por un simple acto de voluntad de algunos apasionados un instrumento que, en lugar de servir a las masas, las colocará en una situación difícil si los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular no rectifican su conducta.

No es una arbitrariedad proclamar a la llamada Asamblea Popular como fenómeno artificial. Si fuese un proceso social auténtico, estaríamos ante un

fenómeno capaz de impulsar la lucha del pueblo y tal calidad sería apreciada por los revolucionarios, y también por los enemigos que descubrirían en ella un elemento peligroso para sus intereses. Sin embargo, son los adversarios los que se han encargado de publicitar su existencia porque saben que es útil alentar todo proceso que distraiga al pueblo de sus verdaderas tareas y que lo saque de la estrategia trazada a través de un programa.

Presentada como una tribuna verbalista, podría permanecer como un fenómeno que no interesa mayormente al Gobierno. Pero es mi deber señalar que ella entraña un peligroso antecedente, ya que puede convertirse en una fuente de provocaciones y sobre éstas últimas es conveniente recordar las amargas experiencias que tenemos.

No me imagino que ustedes puedan aceptar, y desde luego rechazo que se deforme la vida chilena creando la imagen de un localismo político, porque es mi deber imponer los compromisos que a nivel nacional contrajimos con la ciudadanía, con el pueblo, y que están debidamente definidos en el Programa de Gobierno.

Las tareas económicas están absorbiendo hoy la mayor parte de las preocupaciones del pueblo y los partidos políticos tienen al respecto que dar el ejemplo. Si no exportamos más, si no aumentamos la producción, especialmente aquella que sustituye a la importada, se agudizarán nuestros problemas, lo que permitirá a la oposición que acentúe su función obstructora. Necesitamos disciplina laboral, responsabilidad, hondo sentido nacional que impulse al renunciamento y al sacrificio si fuere menester. Es tarea revolucionaria desarrollar la economía. No hacerlo favorecerá a los que han conspirado y siguen haciéndolo para precipitar la subversión contra el Gobierno Popular.

No es válido decir que el pueblo no tiene además tareas políticas por las cuales movilizarse. Las hay. Han sido diseñadas.

Nuestro gran objetivo es conquistar el Congreso en 1973, como ya lo señalamos. Pero no se trata de movilizarlo sólo desde el punto de vista electoral, hay que hacerlo social y políticamente para elevar la conciencia de los trabajadores, con objetivos tan trascendentes que aun cuando nuestro esfuerzo no alcanzara a sumar la mayoría absoluta del electorado, las metas buscadas queden en pie como auténticamente revolucionarias. Debemos hacer aprobar por el pueblo, para obtener que lo haga el nuevo Congreso del 73, la Constitución, la Nueva Reforma Agraria, la Reforma Educacional, haremos el nuevo Código del Trabajo, normaremos la seguridad social, pondremos en práctica el Servicio Unico de Salud, ampliaremos la descentralización y tenemos que establecer un nuevo régimen comunal. En otras palabras, se trata de crear el régimen institucional que culmine la asunción directa por el pueblo trabajador del poder económico y del poder político. Son tareas importantes, revolucionarias, capaces de movilizar a todos los trabajadores. Ellas deben preocupar a los militantes de los partidos. Porque, además, son inmediatas. Estarán de acuerdo conmigo los dirigentes políticos que todo esto sí tiene contenido. No se trata de consolidar sólo lo mucho que hemos hecho, y que el mundo está consciente en apreciarlo como un proceso importante en la hora

actual, sino de avanzar con decisión conforme a las definiciones que hemos dado al país.

Saben ustedes que el Gobierno está trabajando resueltamente en el diseño de una nueva Constitución Política del Estado que reemplace la burguesa actual por otra de transición al socialismo. Sobre esto, les anuncio que el próximo cuatro de septiembre, fecha que recordará el segundo aniversario de nuestro triunfo, entregaremos a los partidos y a la Central Unica de Trabajadores sus grandes lineamientos, para que inicien su análisis y estudio, en todos los niveles. Nadie debe restarse a la tarea de contribuir con iniciativas al documento que consolidará constitucionalmente lo que hemos venido realizando revolucionariamente en la infraestructura económica. Tras dos años de transformaciones socioeconómicas profundas, es posible –porque se impone como necesidad– emprender el cambio supraestructural. A este respecto, me atrevo a anticiparles que jamás Chile habrá conocido un diálogo más democrático para definir la ordenación jurídico-revolucionaria de su porvenir.

Tenemos grandes metas por cumplir. Como Presidente de la República les señalé que ejerceré cada día mis legítimas y claras funciones para asegurar las generosas ventajas que entrega la convivencia chilena a los que respetan la decisión del pueblo de darse un Gobierno, y hacerlo respetar cabalmente.

Cuando tan magna empresa absorbe toda la capacidad de acción de los trabajadores y de los movimientos populares, los partidos de la Unidad Popular deben rechazar con resolución y energía los sucesivos ensayos divisionistas que intentan desviar la atención hacia hechos secundarios o quiméricos que, aunque incapaces de aportar nada positivo, consumen inútilmente esfuerzos y preocupación. Por eso, es igualmente imperiosa la vigilancia permanente sobre la militancia disciplinada y organizada de cada partido, para descubrir y denunciar –pública y oportunamente– a quienes de modo deliberado, buscan alterar nuestra línea política programática.

Estoy persuadido de encontrar entre ustedes la más amplia identidad de criterio, y espero que hallarán los medios más eficaces para que nuestros planteamientos básicos comunes orienten claramente la actuación de cada partido o movimiento en todos sus niveles.

Los saluda fraternalmente,

Salvador Allende Gossens.

Partido Socialista: Artículo sobre la “Asamblea del Pueblo” en la ciudad de Concepción

(Punto Final N° 163 del 1 de agosto de 1972)

La posición del PS

El artículo de Guaraní Pereda Da Rosa, en nombre del Partido Socialista, señala en primer lugar que no hay peor forma de enfrentar los hechos que partiendo de datos falsos. “Se suele dar crédito –dice– a la imagen espuria de los hechos, según son presentados por la prensa reaccionaria”. En Concepción, agrega, “no nació ningún poder paralelo al Gobierno ni al Congreso ni a la Corte Suprema. Nadie se propuso tal cosa”.

“La idea inicial de realizar esta Asamblea del Pueblo en Concepción –agrega–, surgió del MAPU, de sus dirigentes regionales, los que la propusieron a los demás partidos de la UP. La aprobaron el PS, el PR y la IC, y la rechazó el PC. Luego la aprobó el MIR. Se realizaron múltiples reuniones bilaterales entre partidos de la UP que estaban por su realización, con los dirigentes comunistas, con el fin de intercambiar ideas y para tratar de lograr la unanimidad de las fuerzas que están en el Gobierno, a fin de lograr que en la Asamblea participaran todas las fuerzas de izquierda”.

Añade el artículo del dirigente socialista: “Ya sobre el día de su realización, el Partido Comunista calificó públicamente a la Asamblea del Pueblo como una “mascarada” inventada por la “ultraizquierda”, “que de manera artificial. . . se plantea desconocer la presencia del pueblo en el Gobierno”.

“La prensa derechista de la provincia y de Santiago, resaltaba día a día la misma imagen de la Asamblea del Pueblo, como un poder paralelo al legalmente constituido”. Da a conocer enseguida las declaraciones formuladas el 25 de julio por el secretario regional del PS, Rafael Merino, en las que se repudia “la actitud contrarrevolucionaria del Parlamento” que “obstruye sistemáticamente el cumplimiento del Programa Popular” y señala que la Asamblea discutiría medidas “para que las organizaciones de masas coordinaran sus luchas para apoyar al Gobierno Popular en sus objetivos de destruir el poder de los monopolios pasando las 91 grandes empresas al área social”. También Merino dijo que la Asamblea debía discutir la formación de los Consejos Comunales Urbanos, integrados por las organizaciones de masas, y “que se dedicarán, entre otras cosas, a ver problemas de abastecimiento, producción, salud, educación”.

Se pregunta el autor del artículo: “¿Dónde se encuentran los objetivos de crear un doble poder, un poder paralelo o alternativo al del Congreso o al del propio Poder Ejecutivo? Sus tareas son las de dar solución, mediante la organización de las masas, a los problemas más candentes que éstas enfrentan a

diario, y que el Gobierno Popular, mediante los mecanismos institucionales existentes, se ve imposibilitado de cumplir eficientemente. Y más aun cuando muchas de esas instituciones (como el Parlamento y el aparato judicial) entorpecen y boicotean las iniciativas del Gobierno”.

Enseguida, el dirigente del Comité Central socialista se refiere al respaldo de masas que tuvo la Asamblea celebrada en Concepción, aspecto que califica de “decisivo” y “definitorio”. Señala: “La Asamblea del Pueblo contó con el respaldo, además de los cuatro partidos de la UP ya mencionados (PS, PR, MAPU e IC) y del MIR, de 60 sindicatos de la provincia, entre los cuales figuraba el Sindicato Unico de CAP (Compañía de Acero del Pacífico), los 4 textiles, varios sindicatos del carbón, CCU (cervecerías), varios madereros, metalúrgicos, de la construcción, FENATS (Salud Pública), ASMAR (astilleros), y otros. También adhirieron 5 organizaciones campesinas, 31 campamentos de pobladores, 16 organizaciones estudiantiles y 27 centros de madres. En total, 5 organizaciones políticas y 139 organizaciones de masas representantes de obreros, campesinos, pobladores y estudiantes”.

“¿Fue éste un acto “artificial” como manifestó el dirigente estudiantil comunista, ¿o una “ficción” como con abundancia de calificativos y epítetos lo califica un editorial del diario “Clarín”?, ¿o fue una “lesera”, según las palabras del senador Montes? Estos juicios van lanzados a las decenas de miles de trabajadores, estudiantes y dueñas de casa que estaban representados por alrededor de las cinco mil personas que atestaron y rebasaron la capacidad del Teatro Concepción el jueves 27 pasado”.

“Ahora bien. No puede desconocer –agrega el dirigente socialista– que la Asamblea del Pueblo realizada en Concepción no fue todo lo que pudo haber sido. Allí un partido popular, el Comunista, expresión de un gran sector de la masa obrera de la zona y del país, de indudable peso y responsabilidad en el proceso revolucionario que vive Chile, se restó, se marginó de participar en el evento. Para ningún revolucionario chileno, para ninguna organización popular, este hecho puede conformarlo, ni mucho menos mostrar satisfacción. De ahí el llamado público, realizado repetidamente por la Dirección Regional del PS y por los restantes partidos de la UP, a los comunistas, para que estuvieran presentes”.

“Pero tampoco puede aceptarse el calificativo de “divisionistas” que se ha atribuido a la mayoría de la UP, porque éstos no acataron la opinión contraria del PC acerca de la Asamblea Popular. El Secretario Regional del PS sostuvo que “mientras un partido se crea el conductor del proceso es muy difícil mantener la unidad”. Este es uno de los problemas que han aflorado en torno a la Asamblea del Pueblo. Es abiertamente antiunitario razonar pensando que “donde está el PC está la UP”. Vistos los hechos, si en Concepción se produjo un quiebre en la UP, que sabemos no perdurará, la responsabilidad ¿es de cuatro partidos de la UP o es de uno de ellos que se restó a participar en una asamblea representativa de los más diversos sectores populares?

El artículo de Guaraní Pereda concluye señalando que “la Asamblea Popular surgida en Concepción es tan sólo el inicio de una gran tarea que ahora se deberá desarrollar en todas aquellas comunas que ofrezcan las mejores condiciones”.

Izquierda Cristiana: Respuesta a la carta de Salvador Allende sobre la Asamblea del Pueblo en Concepción

(5 de agosto de 1972)

Estimado compañero:

Por la presente respondemos a su carta pública de fecha 31 de julio que usted dirigiera a los Jefes de Partidos de la Unidad Popular.

A juicio de la Izquierda Cristiana, la actual situación política está caracterizada por la presencia de una ofensiva desatada y sin treguas de los sectores reaccionarios de este país y del imperialismo, para lo cual utilizan, sin consideraciones éticas ni jurídicas, a los organismos de poder que controlan: Parlamento, Poder Judicial, Contraloría, Poder Económico. Prensa, Organizaciones Empresariales, etc. Frente a tal ofensiva se observa, sin embargo, una ausencia de movilización adecuada de los sectores regulares, y entendemos que sin ella no será posible derrotar a los enemigos del proceso de cambios y hacer irreversible la marcha al socialismo.

Esta desmovilización popular obedece a dos causas fundamentales: insuficiencias en la conducción política de la Unidad Popular y carencia de una estrategia que simultáneamente con plantear transformaciones de fondo a la estructura burguesa que hemos heredado, sea capaz de recoger la mística, la disciplina y el combate revolucionario de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.

Fallas en la conducción política de la Unidad Popular

Cuando la Izquierda Cristiana nace con el propósito de participar en el proceso revolucionario, al mismo tiempo que valora los elementos positivos, detecta una serie de errores y los hace públicos: cuoteo, sectarismo interferencia partidista en los asuntos administrativos en la moral revolucionaria, poca participación. Estos planteamientos son recogidos por la Unidad Popular y se expresan en el documento conjunto suscrito en los momentos de nuestra incorporación a ella. A pesar de las buenas intenciones, sólo se han realizado algunos esfuerzos correlativos aislados, los que no han logrado eliminar los vicios anotados. Lo mismo pasa con los acuerdos de El Arrayán, donde se anuncian algunas importantes medidas correctivas que aún no se ponen en práctica. Usted mismo anunció en el mes de noviembre del año pasado una reestructuración de los mandos medios y, sin embargo, hasta ahora poco se ha hecho.

Vale la pena destacar lo sucedido en el último cónclave. El es citado con el objetivo de definir las estrategias y políticas consecuentes que la UP y el Gobierno impulsarían, a partir de este segundo año. Se inicia el debate y se manifiestan diferencias de criterios en materias importantes. Sin embargo, aun cuando el

Cónclave no termina sus deliberaciones y ellas se ven interrumpidas, se inician las fracasadas conversaciones con la DC. Y no sólo eso sino que hace pocos días atrás usted anuncia al país las bases de una nueva política económica. Los compañeros Ministros de Hacienda y Economía anuncian medidas concretas como expresión de esta nueva política, en circunstancias que los jefes de la UP son informados de tal política y de tales medidas varios días después. Cabe señalar asimismo que la UP ha analizado muy escasamente políticas sectoriales de carácter social como la de Vivienda, Salud, Previsión, Educación, etc., por no decir que en algunas de ellas no lo ha hecho nunca.

Todo esto revela, como lo señalábamos, deficiencias serias en la conducción de la UP, lo cual resulta aún más grave si se considera que al no ser planteadas y analizadas estas cuestiones en la base social se crea una desorientación que acentúa la falta de movilización popular.

Insuficiencias de la estrategia seguida por el Gobierno y la Unidad Popular

Pero la desmovilización popular también obedece a insuficiencias de la estrategia seguida por el Gobierno y la UP. La Izquierda Cristiana lo planteó al momento de su ingreso y lo ha reiterado en cada oportunidad la necesidad de readecuar la estrategia programática y en función de ello diseñar y lanzar una segunda etapa de ofensivas revolucionarias.

Pensamos que el proceso de avance del socialismo, que caracteriza al Gobierno actual, no puede plantear la movilización popular tan sólo para perseguir objetivos antiimperialistas y antimonopólicos. Dichos objetivos son básicos, pero no constituyen por sí solos una respuesta satisfactoria para la masa al conjunto de conflictos sociales que diariamente vive. Mientras muchos no tienen lo necesario para vivir dignamente, hay otros que disfrutan de un bienestar excesivo. Si la revolución no ataca estas desigualdades en el nivel mismo del consumo, se termina por hacer creer erróneamente que el traspaso de propiedad de los latifundios y los monopolios se hace con el único objeto de que el aparato económico sea más eficiente, para poder dar creciente y aceleradamente a todos el nivel de consumo que muestran los sectores de la burguesía. Así orientada la masa, ninguna perspectiva socialista podrá tener lugar y no resulta extraño que el reivindicacionismo salarial se haga presente cada vez con más fuerza y con menos sentido de clase.

Mayor participación: requisito esencial para una segunda etapa de ofensivas revolucionarias

Por eso la segunda etapa de ofensivas revolucionarias debe contemplar como punto básico una lucha contra las desigualdades sociales y el modo de vida de la burguesía. Una lucha que debe tener como primer objetivo la disminución drástica del nivel de consumo de los sectores de altos ingresos y la obtención de un nivel mínimo indispensable de aquellas cosas vitales que amplios sectores

del pueblo no poseen de manera suficiente para vivir con dignidad: trabajo para todos, vivienda, salud, alimentación, transporte colectivo, previsión, educación, recreación. Para todo esto el pueblo se verá motivado, hará sacrificios, entenderá la batalla por la producción, se autoimpondrá una disciplina en el trabajo y en el consumo. Por ello hemos propuesto una Reforma Constitucional para limitar las diferencias de ingresos entre los chilenos ricos y los pobres y poder financiar un Fondo de Igualdad de los Niños y planes de inversión que significan trabajo para todos los chilenos.

Así orientada la estrategia revolucionaria, el pueblo entenderá cabalmente el sentido del Área de Propiedad Social y de la Reforma Agraria, estará dispuesto a sufrir las consecuencias negativas de los desajustes orgánicos que dichos cambios necesariamente acarrearán y asumirá una actitud de combate para defender la revolución frente a los enemigos.

Todo esto requiere, por cierto, una lucha por la participación de las organizaciones populares de base en la conducción del proceso y en la institucionalidad del Estado. Por eso creemos que esta segunda etapa de ofensivas revolucionarias debe ser diseñada y explicada con claridad al pueblo y las iniciativas legales deben ser discutidas con sus organizaciones de clase, antes de ser debatidas con los representantes de la burguesía en el seno del Parlamento. Así, por ejemplo, propusimos que el proyecto de ley sobre empresas de autogestión, originalmente elaborado por la Izquierda Cristiana y representantes de las brigadas de trabajadores actualmente existentes, fuera consultado con todos los trabajadores antes de ser enviado al Congreso. La segunda Ley de Reforma Agraria debe ser el fruto de una consulta a los campesinos a través de sus organizaciones de clase. Lo mismo debe suceder con iniciativas como las que usted propone como la nueva Constitución, la reforma del poder comunal y de base, el servicio único de salud, etc.

Las medidas de transformación revolucionaria no han sido discutidas hasta ahora con el pueblo. Por ello no hay una comprensión ajustada por todos los trabajadores del contenido de esta fase, de su significación y de la forma en que deben actuar para impulsar el proceso revolucionario.

Los acontecimientos de Concepción: consecuencia inevitable de una insuficiente movilización popular

Consecuencia inevitable de esta situación es que un pueblo consciente políticamente trate por su cuenta de superar estas deficiencias. El Gobierno y los partidos deben reconocer la dinámica propia de la masa para defender sus intereses y presionar por el cambio de la institucionalidad burguesa. Es necesario reconocer en la masa, además del papel productor, un papel de crítica y de combate, y el deber del Gobierno y los partidos no es condenar esos impulsos sino encauzarlos, orientándolos en una perspectiva revolucionaria orgánica.

Acontecimientos como los de Concepción los entendemos como una manifestación concreta de este fenómeno. Su parte positiva reside en que se trata de una forma de movilización de masas para seguir avanzando. Esto debe ser tenido en cuenta, valorado y utilizado para reforzar el proceso mediante la

canalización de esas inquietudes y la clarificación ante el resto del país de los objetivos que tiene ese movimiento, los cuales han sido distorsionados por la prensa derechista hasta deformar su verdadera naturaleza. En efecto, esa reunión no pretende transformarse en un sustituto del esquema institucional de poderes del Estado ni en ente paralelo a ello sino que aspira a ser el lugar de encuentro, diálogo y coordinación para el combate de las fuerzas populares y progresistas de esa provincia.

Entendidas así las cosas, la UP no puede condenar a fardo cerrado y de manera lapidaria estos hechos, sino canalizarlos, conducirlos y orientarlos. Con franqueza revolucionaria creemos que debe corregirse, y haremos cuanto esté de nuestra parte, el insuficiente esfuerzo que se ha hecho, para impulsar estas movilizaciones con el acuerdo de todas las fuerzas de la UP, porque ello se traduce en una desvalorización objetiva de la UP, lo que debilita el mejor instrumento político de que dispone el proletariado y dificulta el éxito del proceso de transformaciones. Igualmente debe criticarse la utilización de un concepto como el de “Asamblea del Pueblo”, que tiene un significado distinto al de la movilización aludida, lo que se presta a equívocos y da lugar a las deformaciones interesadas que de ella hace el enemigo.

El camino correcto: cambiar y canalizar la movilización popular

Pero los aspectos positivos de estos hechos deben servir para que la UP impulse a fondo la iniciativa acordada hace varias semanas. La constitución de asambleas en todas las comunas y provincias para que las organizaciones políticas y sociales, revolucionarias y progresistas, conozcan y discutan la segunda etapa de ofensivas, coordinen las acciones de movilización y destaquen los errores que el proceso debe corregir. Para, en una palabra, poner en actitud de combate al pueblo contra sus enemigos de clase.

La Izquierda Cristiana ratifica su juicio de que el proceso impulsado por la UP tiene una inmensa significación histórica. En él se encarnan las posibilidades de liberación de nuestro pueblo. La UP es el mejor y más acerado instrumento revolucionario que el pueblo se haya dado nunca en nuestra patria. Por lo mismo, todos debemos esforzarnos en corregir las deficiencias observadas, ya que la revolución sólo tendrá éxito con una férrea unidad de todas las fuerzas de izquierda y una adecuada movilización de las masas, lo que sólo puede obtenerse con una conducción política clara y una estrategia revolucionaria que recoja los conflictos sociales que vive el pueblo.

La Izquierda Cristiana le reitera que contribuirá con todos sus esfuerzos a corregir estas deficiencias, entendiendo que esta será nuestra mejor contribución al Gobierno Popular y a la revolución chilena.

Lo saluda atentamente,

Secretario Nacional
Organización de Izquierda Cristiana
(5 de agosto de 1972)

Central Unica de Trabajadores (CUT): Resultados oficiales sobre la elección de la CUT

(Julio de 1972)

Los votos de cada lista – Los consejeros elegidos por cada una

Central Unica da a conocer los resultados de las elecciones de la CUT en las principales provincias del país. Estos escrutinios permiten apreciar que los trabajadores inclinaron sus preferencias hacia las listas de los partidos populares.

Los resultados restantes serán dados a conocer en la próxima edición o en un suplemento especial.

Sobre un total nacional de 559.756 sufragios, los resultados principales fueron:

Provincia Arica

Trabajadores inscritos	15.382
Votaron	10.022
No votaron	5.360
Porcentaje abstención	34,84%
Cifra repartidora:	286
Lista C, Partido Comunista	

Votos por listas

MAPU: 436, porcentaje, 4,35%; titulares, 1, suplentes, 1; PC: 3.430, porcentaje, 34,35%; titulares, 12; suplentes, 3; USOPO: 135 votos, porcentaje, 1,34%, no saca titulares ni suplentes; PS: 1.216 votos, porcentaje, 12,13%; titulares, 4, suplentes 1; PR: 596 votos, porcentaje, 5,94%; titulares 2, suplentes ninguno; FTR: 251 votos, porcentaje 2,50%, no saca titulares ni suplentes; PDC: 3.026 votos, porcentaje 30,19 por ciento; titulares 10, suplentes 4; Indep.: 557 votos, porcentaje 5,55%; titulares 1, suplentes 1. Blancos: 196 votos, porcentaje 1,95%. Nulos: 171 votos, porcentaje 1,70%.

Total votos por lista:	10.022
Titulares:	30
Suplentes:	10

Ocupa el cargo de Secretario General un representante del Partido Comunista.

Provincial de Iquique

Trabajadores inscritos	9.820
Votaron	7.528
No votaron	2.292
Porcentaje abstención	23,34%
Cifra repartidora	323
Lista C Partido Comunista	

Votos por listas

MAPU: 160 votos, porcentaje 2,12%, no saca titulares ni suplentes; PC: 3.236 votos, porcentaje 43%; titulares 10, suplentes 2; USOPO: 63 votos, porcentaje 0,83%, no saca titulares ni suplentes; PS: 1.517 votos, porcentaje 15,38; titulares 3, suplentes 1; PR: 588 votos, porcentaje 7,81%; titulares 1, suplentes 1; PDC: 1.610 votos, porcentaje 21,40%; titulares 4, suplentes 2; PN: 404 votos, porcentaje 5,36%; titulares 1, no saca suplentes; Indep.: 74 votos, porcentaje 0,90%, no saca titulares ni suplentes; Blancos: 152 votos, porcentaje 2,01%; Nulos: 84 votos, porcentaje 1,11%.

Total votos:	7.528
Titulares:	19
Suplentes:	6

Secretario General un representante del Partido Comunista. Subsecretario General un representante del Partido Demócrata Cristiano.

Provincial Antofagasta

Trabajadores inscritos	38.812
Votaron	23.972
No votaron	14.840
Porcentaje abstención	38,23%
Cifra repartidora	1.024
Lista M, Partido Demócrata Cristiano	

Votos por listas

MAPU 660 votos, porcentaje 2,75%, no saca titulares ni suplentes; PC: 7.837 votos, porcentaje 32,71%; titulares 7, suplentes 2; USOPO: 1.231 votos, porcentaje 5,13%; titulares 1, no saca suplentes; PS: 4.792 votos, porcentaje 19,98%; titulares 4, suplentes 2; PR: 1.986 votos, porcentaje 8,28%; titulares 1, suplentes 1; FTR: 485 votos, porcentaje 2,02%, no saca titulares ni suplentes; IC: 140 votos, porcentaje 0,58%, no saca titulares ni suplentes. PDC: 6.146 votos, porcentaje 25,65%, titulares 6, suplentes 1. Nulos: 331 votos, porcentaje 1,38%. Blancos: 365 votos, porcentaje 1,52%.

Total votos por listas	23.972
Titulares	19
Suplentes	6

2864 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

Secretario General, un representante del Partido Comunista. Subsecretario General, un representante del Partido Demócrata Cristiano.

Provincial Atacama:

Trabajadores inscritos	18.485
Votaron	15.394
No votaron	3.091
Porcentaje abstención	16,72%
Cifra repartidora: 539	
Lista M, Partido Demócrata Cristiano	

Votos por listas:

PC: 6.062 votos, porcentaje 39,37%; titulares 11, suplentes no saca.
 PDC: 3.374 votos, porcentaje 24,51%; titulares 7, suplentes ninguno.
 PS: 3.358 votos, porcentaje 21,81%; titulares 6, suplentes no saca.
 PR: 1.030 votos, porcentaje 6,79%; titulares 1, suplentes no saca.
 MAPU: 453 votos, porcentaje 2,94%; no saca titulares ni suplentes.
 FTR: 252 votos, porcentaje 1,63%; no saca titulares ni suplentes.
 Blancos: 264 votos, porcentaje 1,71%.
 Nulos: 201 votos, porcentaje 1,30%.
 Secretario General: un representante del Partido Comunista.
 Subsecretario General: un representante del Partido Demócrata Cristiano.

Provincial Coquimbo:

Trabajadores inscritos	23.594
Votaron	16.165
No votaron:	7.429
Porcentaje abstención	31,48%
Cifra repartidora	668
Lista A MAPU	

Votos por listas:

PC: 6.092 votos, porcentaje 37,68%; titulares 9, suplentes no saca.
 PS: 3.519 votos, porcentaje 21,76%; titulares 5, suplentes no saca.
 PDC: 3.513 votos, porcentaje 21,73%,; titulares 5, suplentes no saca.
 MAPU: 1.060 votos, porcentaje 6,68%; titulares 1, suplentes no saca;
 FTR: 390 votos, porcentaje 4,13%; titulares 1, suplentes no saca;
 Indep.: 157 votos, porcentaje 0,95%; titulares no saca, suplentes no saca.
 IC: 155 votos, porcentaje 0,95%; no saca titulares ni suplentes.
 IND.: 83 votos, porcentaje 0,51%; no saca titulares ni suplentes.
 Blancos: 225 votos, porcentaje 1,39%.
 Nulos: 282 votos, porcentaje no tiene.
 Total votos por listas: 16.165.
 Titulares: 21.
 Suplentes: no saca
 Secretario General: un representante del Partido Comunista.
 Subsecretario General: un representante del Partido Socialista.

Provincial Valparaíso:

Trabajadores inscritos:	53.721
Votaron	39.233
No votaron:	14.488
Porcentaje abstención	26,96%
Cifra repartidora	1.371
Lista M, Partido Demócrata Cristiano	

Votos por listas:

PC: 14.022 votos, porcentaje 35,74%; titulares 10, suplentes 3.
 PDC: 12.342 votos, porcentaje 31,45%; titulares 9, suplentes 3.
 PS: 6.457 votos, porcentaje 16,45%; titulares 4, suplentes 2.
 PR: 2.023 votos, porcentaje 5,15%; titulares 1, suplentes no saca.
 MAPU: 1.717 votos, porcentaje 4,37%; titulares 1, suplentes no saca.
 FTR: 741 votos, porcentaje 1,88%; titulares no saca, suplentes no saca.
 PIR: 515 votos, porcentaje 1,31%; no saca titulares ni suplentes.
 IND.: 318 votos, porcentaje 0,81%; no saca titulares ni suplentes.
 USOPO: 268 votos, porcentaje 0,68%; no saca titulares ni suplentes.
 Blancos: 358 votos, porcentaje 0,91%.
 Nulos: 372 votos, porcentaje 1,20%.
 Total votos por listas: 39.233.
 Titulares: 25.
 Suplentes: 8.
 Secretario General: un representante del Partido Comunista.
 Subsecretario General: un representante del Partido Demócrata Cristiano.

Provincial Curicó:

Trabajadores inscritos	10.249
Votaron	6.955
No votaron	3.294
Porcentaje abstención	32,94%
Cifra repartidora	324
Lista C, Partido Comunista	

Votos por listas:

PC: 3.899 votos, porcentaje 56,06%; titulares 12, suplentes 4.
 PS: 1.138 votos, porcentaje 16,36%; titulares 3, suplentes 1.
 PDC: 1.083 votos, porcentaje 15,57%; titulares 3, suplentes 1.
 PR: 380 votos, porcentaje 5,46%; titulares 1, suplentes no saca.
 USOPO: 124 votos, porcentaje 1,78%; no saca titulares ni suplentes.
 FTR: 78 votos, porcentaje 1,12%; no saca titulares ni suplentes.
 MAPU: 49 votos, porcentaje 0,70%; no saca titulares ni suplentes.
 Blancos: 96 votos, porcentaje 1,38%.
 Nulos: 108 votos, porcentaje 1,55%.
 Total votos por listas: 6.955.
 Titulares: 19.

2866 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

Suplentes: 6.

Secretario General: un representante del Partido Comunista.

Subsecretario General: un representante del Partido Socialista.

Provincial Concepción:

Trabajadores inscritos	56.096
Votaron	48.896
No votaron	7.200
Porcentaje abstención	12,83%
Cifra repartidora:	1.208
Lista H, Partido Radical	

Votos por listas:

PC: 15.010 votos, porcentaje 30,69%; titulares 12, suplentes no saca.

PS: 13.132 votos, porcentaje 26,85%; titulares 10, suplentes no saca.

PDC: 9.992 votos, porcentaje 20,43%; titulares 8, suplentes no saca.

MAPU: 2.791 votos, porcentaje 5,70%; titulares 2, suplentes no saca.

PR: 2.417 votos, porcentaje 4,94%; titulares 2, suplentes no saca.

FTR: 1.830 votos, porcentaje 3,74%; titulares 1, suplentes no saca.

USOPO: 1.144 votos, porcentaje 2,32%, no saca titulares ni suplentes.

IC: 667 votos, porcentaje 1,36%; no saca titulares ni suplentes.

IND.: 362 votos, porcentaje 0,74%; no saca titulares ni suplentes.

PSD: 235 votos, porcentaje 0,48%; no saca titulares ni suplentes.

Blancos: 559 votos, porcentaje 1,14%.

Nulos: 757 votos, porcentaje 1,54%.

Total votos por listas: 48.896.

Total titulares: 35.

Secretario General: un representante del Partido Comunista.

Subsecretario General: un representante del Partido Socialista.

Provincial Bio Bio

Trabajadores inscritos	15.494
Votaron	11.901
No votaron	3.593
Porcentaje abstención	23,18%
Cifra repartidora	521.
Lista C, Partido Comunista	

Votos por listas:

PC: 4.697 votos, porcentaje 39,46%; titulares 9, suplentes 2.

PS: 2.442 votos, porcentaje 20,51%; titulares 4, suplentes 1.

PDC: 2.124 votos, porcentaje 17,84%; titulares 4, suplentes 1.

MAPU: 1.107 votos, porcentaje 9,30%; titulares 2, suplentes no saca.

PR: 475 votos, porcentaje 3,99%; no saca titulares, suplentes 1.

IND.: 401 votos, porcentaje 3,36%; no saca titulares, suplentes 1.

FTR: 128 votos, porcentaje 1,07%; no saca titulares ni suplentes.

PIR: 169 votos, porcentaje 1,42%; no saca titulares ni suplentes.

IC: 2 votos, porcentaje 0,01%; no saca titulares ni suplentes.

Blancos: 141 votos, porcentaje 1,18%.

Nulos: 213 votos, porcentaje 1,78%.

Total votos por listas: 11.901.

Secretario General: un representante del Partido Comunista.

Subsecretario General: un representante del Partido Socialista.

Provincial Santiago:

Trabajadores inscritos	309.146
Votaron	211.324
No votaron	97.822
Porcentaje abstención	31,64%
Cifra repartidora	5.240
Lista A, MAPU	

Votos por listas:

PDC: 68.127 votos, porcentaje 32,23%; titulares 13, suplentes 2.

PC: 54.954 votos, porcentaje 26 por ciento; titulares 10, suplentes 2.

PS: 54.709 votos, porcentaje 25,88%; titulares 10, suplentes 2.

MAPU: 10.412 votos, porcentaje 4,92%; titulares 1, suplentes 1.

PR: 8.294 votos, porcentaje 3,92%; titulares 1, no saca suplentes.

FTR: 4.361 votos, porcentaje 2,06%; no saca titulares, suplentes 1.

IND.: 2.176 votos, porcentaje 1,02%; no saca titulares ni suplentes.

PSD: 1.385 votos, porcentaje 0,65%; no saca titulares ni suplentes.

API: 971 votos, porcentaje 0,45%; no saca titulares ni suplentes.

Blancos: 3.171 votos, porcentaje 1,50%; no saca titulares ni suplentes.

Nulos: 2.764 votos, porcentaje 1,30% no saca titulares ni suplentes.

Total votos por listas: 211.324.

Titulares: 35.

Suplentes: 8.

Secretario General: un representante del Partido Demócrata Cristiano.

Subsecretario General: un representante del Partido Comunista.

Resultados Elección CUT - Julio 72

Lista C: Comunista	173.068
Lista G: Socialista	148.140
Lista M: D. Cristiana	147.531
Lista A: MAPU	25.984
Lista H: Radical	21.910
Lista I: FTR-MIR	10.181
Lista E: Soc. Popular	5.420
Lista K: Izquierda Radical	3.572
Lista J: I. Cristiana	3.330
Lista D: P. Comunista Rev.	3.216

2868 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

Lista B: API	1.599
Lista F: Social Democracia	1.616
Lista L: Anarquistas	676
Nulos:	8.348
Blancos:	5.652
Total de electores:	560.056

De acuerdo a estos resultados el Consejo Directivo de la CUT queda integrado por 18 comunistas, 16 socialistas, 16 democratacristianos, 2 mapucistas, 2 radicales y 1 FTR-MIR.

www.cepchile.cl

MIR: Informe de la Comisión Política al Comité Central

(10 de agosto de 1972)

Situación actual y perspectivas

El tratamiento que haremos aquí de la situación actual y sus perspectivas, será necesariamente, general y esquemático. Pretende ser sólo una minuta que oriente en general la discusión alrededor de la nueva situación, que actualice la discusión desarrollada en el último CC, y que verbalmente podrá ser expuesta más extensamente en el CC mismo.

1. *La política de la clase dominante:*

Rotas las conversaciones entre la UP y el PDC pareciera, a primera vista, que la política de la clase dominante y sus alianzas hubieran vuelto a reajustarse en forma idéntica al período anterior a la apertura de dichas conversaciones. Sostenemos que no es así.

Si bien es cierto que se han decidido los sectores más importantes de la clase dominante (PN y PDC) a mantener su unidad frente al gobierno y como forma de combatirlo, a la vez este reencuentro se hace sobre la base de una nueva situación, que mantiene importantes trizaduras.

Distintos factores determinan la existencia de una alianza de nuevo tipo (todo esto será y está siendo desarrollado con mayor profundidad en los documentos para el Congreso Nacional). Estos factores son:

a) Una correlación de fuerzas en general y estratégicamente favorable para la clase dominante, que abre las condiciones para que su desesperada unidad de 1971 pueda hoy permitirse el juego de diferentes políticas e incluso choques entre sí en plena alianza.

b) La definición tomada en los primeros meses de este año por las clases dominantes, de desarrollar su enfrentamiento con el gobierno enmarcado en el camino institucional: plebiscito y acusación constitucional. (Informe CC de mayo). Hoy la clase dominante ha ido más allá. La dinámica de los hechos la ha llevado a tener que aceptar el enfrentamiento electoral de 1973. Esto obliga a los partidos de la clase dominante a tener que buscar los votos de la pequeña burguesía propietaria y no propietaria, e incluso a sectores de la clase obrera, y, de esta manera, a tener que hacerle concesiones a estos sectores en sus formulaciones políticas. Desde aquí nacen distintas convocatorias políticas en la disputa por el liderazgo de la clase dominante.

c) Una situación con rasgos de prerrevolucionaria que se abrió en 1970 y que en el curso del proceso no maduró a revolucionaria (Informe CC de

junio), pero que en cualquier caso colocó en ebullición al conjunto de la sociedad, hizo que distintos sectores y clases sociales se ordenaran políticamente en forma distinta a como lo hace en períodos de “normalidad” política y social. Siempre en general, podríamos decir que la ebullición del conjunto de la sociedad abrió en abanico a sus componentes: *las clases sociales* (incorporándose enormes sectores a la vida política, cohesionándose cada capa y sector, expresando cada capa directamente sus intereses, etc. . .); *el Estado* (resquebrajándose su unidad estructural, representando estructuras distintas y distintos intereses de clase, disociándose sus niveles superiores con los inferiores, etc. . .); *los partidos políticos* (creciendo todos ellos, diferenciándose uno del otro incluso dentro de cada bloque, dentro de cada partido abriéndose el espectro de las tendencias internas y distintos sectores sociales buscando expresarse directamente, por sí mismos, o cuestionando la representatividad tradicional de sus intereses a los diferentes partidos).

De todo esto, que veremos con mayor profundidad y extensión en otros documentos, aquí nos interesa destacar tres elementos importantes que condicionan el comportamiento político de la clase dominante:

- La relativa autonomía alcanzada por las FF.AA. después que un sector “constitucionalista” logró la hegemonía decantándola relativamente de los extremos “politizados” de izquierda y de derecha, enfrentando hoy como fuerza autónoma tanto a la clase dominante como al gobierno (CC de febrero y CC de junio). Ello obliga a importantes sectores de la clase dominante que están decididos a mantener la estabilidad del gobierno hasta las elecciones de 1973 a tener que hacer concesiones al gobierno, por temor a que el gobierno, debilitado como está en su base social y política de apoyo, busque ganar estabilidad y fortaleza a través de la incorporación de militares al gabinete.

- Por otro lado, por diferentes razones (CC febrero) los dueños de los medios de producción (empresarios de la industria y el Agro) ganaron una relativa autonomía de los partidos políticos que tradicionalmente los representaban. El desarrollo de un grado de cohesión, organización y conciencia que les permite intentar expresarse políticamente por sí mismos, aprovechando sus tradicionales y nuevas organizaciones (SOFOFA, SNA, Sindicato Empleadores Agrícolas, Confederación de la Producción y el Comercio, FRENAT, etc. . .), o bien hacer exigencias imperativas a los partidos políticos que, en distinto grado, dependiendo a qué sectores tradicionalmente influenciaban, se ven obligados a tener que hacerles concesiones.

- El otro sector importante que se activó políticamente, se organizó y cohesionó en este período, fue la pequeña burguesía. Este probablemente es uno de los factores fundamentales que determinará las perspectivas. Las capas medias en Chile deben ser analizadas teniendo en consideración que su comportamiento es distinto al comportamiento político que han tenido en situaciones prerrevolucionarias que maduran rápidamente a situación revolucionaria (Rusia, 1917). En dichas situaciones, en la medida en que el proletariado toma fuerza y avanza con rapidez, la agudización de la lucha de clases más bien tiende a debilitar y dividir a la pequeña burguesía. Pero en Chile, al menos en este momento, estaría ocurriendo lo contrario: amplios sectores

de la pequeña burguesía estarían alcanzando un grado relativo de autonomía y de fortaleza, y así, de alguna manera estarían condicionando su posible apoyo a la clase dominante o a los trabajadores. Así también, obligan a la clase dominante a tener que hacerle concesiones.

Todos estos factores generales dan origen *actualmente* a, por lo menos, tres convocatorias políticas en clase dominante que tienen como base común, entre otros, dos factores: el establecimiento de la alianza y la lucha en el interior de ella por el liderazgo (polémica entre Claudio Orrego y Onofre Jarpa, réplica de P. Rodríguez a E. Frei, etc. . .). Expuestas en lo general, las tres convocatorias son las siguientes:

- La del PDC que categóricamente se propone mantener la estabilidad del gobierno hasta las elecciones parlamentarias, siempre que esté asegurada la permanencia irrestricta de los elementos superestructurales que sostienen el actual sistema de dominación capitalista (el Moscú de C. Orrego V. y los Seis Pilares de la democracia de A. Zaldívar), y una defensa no tan categórica de cada medio de producción en particular. Se propone una convocatoria de tipo más bien populista y participacionista que está dispuesta hacer concesiones a la pequeña burguesía, e incluso a sectores del proletariado y del pueblo, con tal de lograr conservar los cauces institucionales y, en particular, los instrumentos que le permitan detener y revertir el proceso.

- La del PN que, aceptando el enfrentamiento en las elecciones del 73, no se compromete categóricamente con la mantención de la estabilidad del gobierno hasta esa fecha. Proclama la defensa irrestricta de cada bien de producción amenazado y enmarca su convocatoria a la pequeña burguesía en una política más bien de rasgos fascistoides.

- Un sector de empresarios agrícola-industriales y fracciones del PN y del PDC que no sólo no se comprometen con esperar el 73, sino que incluso insinúan la posibilidad de precipitar las definiciones a través de un plebiscito. De menor gravitación, esta convocatoria se expresa a través del artículo de la revista "Que Pasa" reflatando a Patria y Libertad, persistentes editoriales de El Mercurio exigiendo un plebiscito, declaraciones de algunos parlamentarios del PDC y PN en el mismo sentido, etc.

Probablemente el conjunto de estas convocatorias políticas lleven a una política resultante que intente conciliar la representación política de extensos sectores de la clase dominante, de la pequeña burguesía, e incluso del pueblo, que se caracterice al menos por cuatro cuestiones fundamentales:

- Que por encima de sus divisiones se mantenga la unidad de la clase dominante en determinados niveles.

- Que la lucha por el liderazgo en el seno de la alianza y las distintas convocatorias políticas abran el campo a polémicas, diferencias y choques entre sus distintos sectores.

- Que en su conjunto, salvo la aparición de factores y hechos no perceptibles hasta aquí, se mantenga la institucionalidad y estabilidad del gobierno y se llegue al enfrentamiento electoral de 1973, al menos.

- Que aprovechando su fuerza económica, política, social e institucional, desarrolle una ofensiva en contra del gobierno, golpeándolo de acuerdo a sus distintas convocatorias políticas.

– Que este conjunto de factores, políticas y sectores, termine por entregar a la clase dominante una política de conjunto que le permita neutralizar al gobierno a la vez que golpearlo, y que probablemente en el curso de los meses tienda a definirse más precisamente en favor de una de las distintas convocatorias de la clase dominante.

NOTA: Por distintas razones sólo fue entregado por escrito la parte que se refiere a la clase dominante y su política. Lo que correspondió al análisis del gobierno y de la Unidad Popular, del estado de movimientos de masas, y de nuestra política, sólo fue entregado verbalmente. Consideramos útil publicar ahora esta minuta, pues en ella se trata de explicar someramente algunos instrumentos conceptuales de los que haremos uso en los informes al Comité Central de las crisis de agosto, septiembre y octubre.

MIR: Texto de introducción a la colección de Documentos Internos 1972

(Agosto de 1972)

Introducción

La publicación de esta serie de documentos internos representa un enorme esfuerzo destinado a ayudar a la discusión interna y al armamento político de la organización. No queremos dejar de insistir en la necesidad de su estudio acucioso y de destacar el esfuerzo puesto en la redacción, impresión y publicación para una organización pequeña como la nuestra.

Los informes del Comité Central han sido recogidos a base de grabaciones transcritas y luego corregidas, lo que los hará seguramente insuficientes, en cuanto a rigor y sistematización. En ellos se ha buscado atenerse al contenido original, haciendo sólo correcciones menores de redacción y de subtitulación.

El Informe del C.C. de fecha 8 de septiembre busca fundamentalmente explicar el origen y las formas que asumió la crisis de agosto y establece también algunas precisiones en nuestras políticas de alianza en general, y en terrenos concretos electorales, de masas, alzas, orgánicos, etc. Fue llamado de urgencia y tuvo el carácter de restringido.

El Informe del C.C. de fecha 3 de octubre buscó, a su vez, analizar el carácter de la “crisis de septiembre”, definir el carácter potencialmente explosivo de la situación subsiguiente (casi anuncia la crisis de octubre) y configurar las dos fracciones de la clase dominante. También en este informe intentamos definir algunos problemas del partido y abrir el camino a algunas soluciones. En ese Comité Central se rindió también un informe sobre el problema electoral, orientado más bien a perfilar lo que debe ser una correcta política electoral de un partido revolucionario y a corregir insuficiencias que teníamos como organización, en lo ideológico y político, con respecto a esa forma específica de actividad política de las masas.

En el Informe del Comité Central de fecha 3 de noviembre más bien se intentó analizar y evaluar la “Crisis de Octubre”. Su resolución a través de la constitución del Gabinete UP-Generales, sólo fue estudiada desde el punto de vista de contrastar y adecuar a la forma y carácter que realmente tomó la constitución del nuevo gabinete, las apreciaciones y previsiones que anteriormente habíamos formulado acerca del carácter que asumiría un “gabinete militar”. El C.C. aludido fue realizado 24 horas después de constituirse el nuevo gabinete y 48 horas antes que ese gabinete formulara su política. Días

después emitimos nuestra declaración pública sobre el carácter de ese gabinete. Fue también llamado de urgencia y tuvo el carácter de restringido.

También en ese Comité Central discutimos la táctica electoral del partido frente a las elecciones de marzo del 73. Consideramos allí útil para el armamento político de los militantes publicar el texto de las intervenciones fundamentales de los miembros del C.C.

Creemos necesario aclarar un aspecto. En estos Comités Centrales hemos convenido utilizar una determinada terminología provisoria para denominar los sectores de la clase dominante y de las FF.AA. Así, designamos como “precipitante” y “no precipitante” a las fracciones políticas fundamentales de la burguesía y como “golpista” y “no golpista” a los dos grupos fundamentales de las FF.AA. Con ello no se pretende más que utilizar una terminología más bien descriptiva y que guarde relación con la manifestación táctica de las fracciones y grupos aludidos en lugar de usar una terminología que signifique adelantar juicio prematuro y/o intuitivamente respecto de la política definitiva de estas fracciones o grupos. Por ejemplo, en lugar de decir “gorilas”, lo que –en rigor– aludiría a agentes hipotéticos de un modelo específico de dominación política, preferimos decir “golpista”, lo que más bien reconoce la táctica evidente que este grupo impulsa. Del mismo modo, en lugar de decir “fascista”, lo que –en rigor– corresponde a una política o un modelo de dominación política específica (que no es, ni mucho menos, claro que alcance su desarrollo cabal en Chile o que sea en definitiva el modelo de dominación que se instaure en Chile), preferimos hablar del “jarpismo”, “los duros” o los “precipitantes”, lo que hace más bien a los líderes que encabezan estos sectores o la táctica que estos sectores impulsan.

El contenido de estos informes de C.C. es el de intervenciones que, usando instrumentos conceptuales válidos para el periodo o apreciaciones generales, más bien estudian y levantan políticas para coyunturas concretas. Lo otro corresponde a los aspectos que tratarán los documentos de Congreso.

En los informes de C.C. se buscó respetar y mantener el texto casi original, sólo corrigiendo la redacción. De esta forma se conservaron detalles, problemas concretos, incluso errores o insuficiencias de análisis, tal cual como se dieron en esos C.C. De esta manera, si bien a veces se oscurecerá la esencia de las cosas e incluso las evaluaciones, los militantes se armarán de los elementos concretos que nos permitieron levantar determinadas políticas y de la forma en que se analizaron los problemas.

A cada Comité Central se le anexaron las declaraciones emitidas en esas etapas, pues, como los informes del C.C. fueron discutidos después de cada crisis, las políticas mismas fueron más bien formuladas antes y no se incluían explícitamente en los informes, dándose por conocidas. También se anexaron algunas entrevistas y documentos internos que ayudan a la precisión de esas políticas.

Se agregaron también dos documentos más: una minuta resumen que se presentó al C.C. de julio, en la que se analizan algunos instrumentos conceptuales y la situación de la clase dominante entonces. También se incluyó un documento construido a partir de la transcripción de una grabación de una

exposición hecha a un Ampliado del Comité Regional Santiago, días antes de la constitución del Gabinete UP-Generales, de la que aprovechamos la parte que corresponde a la caracterización del período. Nos parece que ambos documentos desarrollan, si bien de manera general, instrumentos conceptuales que son utilizados en los tres informes del C.C. y que no son aplicados allí, por haber sido discutidos en otros C.C. anteriores. Recomendamos leerlos antes de los informes del C.C.

Otro documento incluido es uno de la Comisión Nacional Sindical que analiza el comportamiento del movimiento de masas en los dos semestres de 1971 y el primero de 1972.

www.cepchile.cl

Luis Corvalán:
“La Reforma Agraria es tarea de todo el pueblo”
Informe al Pleno Agrario del Partido Comunista

(*El Siglo*, 14 de agosto de 1972)

“Queridas compañeras y compañeros:

El Comité Central del Partido Comunista dedica este Pleno a los problemas de la agricultura.

Han llegado a este amplio teatro, miles y miles de trabajadores de la tierra. Vienen de los asentamientos, de los Centros de Reforma Agraria, de los Centros de Producción y de aquellos fundos expropiados que están dirigidos por Comités de Campesinos. Están con nosotros centenares de pequeños agricultores, comuneros del Norte Chico y de San Pedro de Atacama, una delegación de mapuches y un representante de la lejana Isla de Pascua. También se encuentran aquí numerosos funcionarios del agro, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, ingenieros forestales, técnicos agrícolas.

Con este motivo, permítanme saludar a todos los hombres y mujeres que en el campo chileno se esfuerzan por sacar las mejores y los máximos frutos de la tierra.

Reforma Agraria

Durante los años que gobernó la Democracia Cristiana se expropiaron 1.408 latifundios. El Gobierno de la Unidad Popular, sólo en 18 meses, ha expropiado 3.374. En total, han pasado a manos de los campesinos 8 millones 996 mil hectáreas, de las cuales 669 mil son de riego y 1 millón 266 mil de secano arable. El 48% de la tierra regada está en el sector reformado de la agricultura. Por su parte, los pequeños y medianos propietarios, considerados estos últimos con menos de 40 hectáreas básicas, cuentan con el 25% de la superficie de riego y con el 30% del secano arable.

De todo esto se desprende que el Gobierno de la Unidad Popular no ha actuado precisamente con paso de buen cansino. Ha hecho realidad la sentencia que propagó Chonchol, que recogió la Democracia Cristiana en su tiempo y que sin embargo no pudo llevarla a cabo. Me refiero a aquello de que la reforma agraria debe ser un proceso rápido, masivo y drástico de redistribución de las tierras y las aguas.

Con este Gobierno se ha logrado, pues, un gran avance, un cambio verdaderamente histórico en el régimen de tenencia de la tierra, eliminándose en lo fundamental el latifundio, es decir, el obstáculo principal para la expan-

sión de la producción agropecuaria y la dignificación del campesino. Ello constituye una de las conquistas más grandes de la revolución chilena.

Los grandes señores de la tierra dominaron durante siglos el campo chileno, manteniendo a los seres más humildes en la esclavitud y la servidumbre.

Con cuanta razón, en los albores de la República, el Padre franciscano Fray Antonio Orihuela los marcó a fuego con las siguientes palabras, dirigidas a los artesanos y los campesinos de ese tiempo:

“Mientras vosotros –les decía– sudáis en vuestros talleres; mientras gastáis vuestro sudor y fuerza sobre el arado; mientras veláis con el fusil al hombro, al agua, al sol y a todas las inclemencias del tiempo, esos señores condes, marqueses y cruzados, duermen entre limpias sábanas y en mullidos colchones que les proporciona vuestro trabajo; se divierten en juegos y galanteos, prodigando el dinero que os chupan con diferentes arbitrios que no ignoráis; y no tienen otros cuidados que solicitar con el fruto de vuestros sudores, mayores empleos y rentas más pingües, que han de salir de vuestras miserables existencias, sin volveros siquiera el menor agradecimiento, antes sí desprecios, ultrajes, baldones y opresión. Despertad, pues, y reclamad vuestros derechos usurpados. Borrada si es posible, del número de los vivientes a esos seres malvados que se oponen a vuestra dicha, y levantad sobre sus ruinas un monumento eterno a la igualdad”.

Siglo y medio de explotación

Durante un siglo y medio esto no cambió gran cosa. Hasta hace pocos años, bajo el yugo de los terratenientes, el campesino chileno era víctima de una cruel explotación y de irritantes humillaciones. Los grandes señores del latifundio se consideraban no sólo dueños de la tierra, sino también de los seres humanos que vivían en las haciendas. Los hacían trabajar de sol a sol, les pagaban salarios de hambre, les robaban las asignaciones familiares, les birlaban las imposiciones al Seguro Social, les imponían derecho a puerta, les impedían recibir visitas, los lanzaba a los caminos por quitame estas pajas, obligaban a sus mujeres e hijas a servir en las casas patronales.

La original biografía de Juan Chacón Corona, escrita por José Miguel Varas, empieza con el testimonio de Amelia Román, campesina de Lampa de ochenta y tantos años de edad. “El verdadero padre de Juan Chacón –dice doña Amelia– no fue, según me han dicho, el inquilino Francisco Chacón, sino un rico de aquí. Su madre, Lucía, llegó del sur, de Río Bueno. Era mapuche. Llegó con la madre de ella, o sea, la abuela de Juanito. Las dos venían escapando por problemas de tierras y persecución que hubo contra los mapuches. Apenas hablaban castellano”.

“A poco de llegar, Lucía entró a trabajar de empleada y tuvo relaciones con su patrón. Nació Juan en esta misma casa donde le estoy hablando. . .”

“El padre era uno de los ricos de Lampa. De los más. Tenía mucho comercio aquí. En esos tiempos los hombres, y más siendo ricos, no reconocían a los chiquillos que hacían por ahí, sobre todo en las mujeres que servían. El niño creció huachito al comienzo, pero no le faltó cariño. Cuando su madre

se casó con Francisco Chacón, como tres años después, él lo tomó por hijo y le dio su apellido, y fue entonces Juan Chacón Corona”.

Golpe de muerte al latifundio

Así era la vida en nuestros campos. Existía hasta el derecho a pernada. Chacón llegó a ser alto dirigente comunista y diputado por Valparaíso. Gran parte de su vida la entregó a la causa de la emancipación de los campesinos. Y si hemos recordado su origen, que realza y no merma su personalidad, es para dar una prueba más de hasta dónde llegaban los abusos de los patrones en los campos de nuestro país.

Pero ese pasado no volverá jamás.

Se ha dado un golpe de muerte al latifundio.

Cumplimos una etapa y pasamos a otra. La etapa cumplida no ha sido precisamente fácil. Se ha llevado a cabo venciendo la tenaz resistencia de los potentados del campo. Con todo, podríamos decir que ahora viene lo más serio, lo más difícil y lo que, en definitiva, más interesa: organizar la nueva agricultura teniendo como objetivo central el aumento de la producción agropecuaria y el bienestar de los campesinos.

Los cambios que se han operado en el campo chileno se han hecho con el más bajo costo social. No hay en el mundo ninguna otra reforma agraria que se haya desarrollado en forma más pacífica.

De no haber conquistado nosotros el Gobierno, si en septiembre de 1970 hubiese ganado la Derecha, e incluso la Democracia Cristiana, nada ni nadie habría podido detener la marcha acelerada de la reforma agraria y cualquier resistencia al cambio o una política de paños tibios respecto de los terratenientes habría conducido a violentos y sangrientos choques de clase con resultados imprevistos.

Camaradas:

En estos últimos años, se han tomado diversas medidas destinadas a lograr un reordenamiento económico y financiero para resolver importantes problemas que preocupan al pueblo y al país.

Nueva política económica

La política económica que aplicó el Gobierno desde el mismo día que tomó en sus manos los destinos de Chile ha dado resultados positivos. Hemos utilizado la capacidad desaprovechada de la industria; hemos hecho una substancial redistribución en los ingresos; hemos logrado un incremento notable en la producción industrial; hemos bajado los niveles de cesantía a porcentajes que no se conocían desde hace muchos años. Sin embargo, a esta altura del tiempo, el Gobierno produce un nuevo reordenamiento económico y financiero, cambios en su política, determinados por fenómenos y razo-

nes que en mucho escapan a su voluntad y que en gran parte son consecuencias de una coyuntura internacional desfavorable en relación a la crisis monetaria que sufren grandes países capitalistas. Recibimos un país endeudado hasta la coronilla y aunque hemos renegociado la deuda externa, tenemos que pagar más de 200 millones de dólares este año por los compromisos contraídos por anteriores gobiernos. Además, ha bajado el precio del cobre y Estados Unidos ha restringido las líneas de crédito. Ha caído el valor del dólar arrastrando a otras monedas de curso internacional. Disponemos de menos dólares por el valor de nuestras exportaciones. Tenemos que pagar más caro las mercaderías que importamos. Ha subido extraordinariamente el precio de la carne, de la leche, del maíz, del trigo, del petróleo, de todo lo que traemos del exterior.

Sepa el país que al comienzo de este Gobierno, cuando resolvimos darle medio litro de leche a cada niño, calculamos que ello significaba un gasto en dólares de 10 millones anuales, con el agregado de que en el Mercado Común Europeo había una superproducción de leche en polvo y se entregaba a crédito. Ahora, tenemos que gastar no 10 millones, sino 54 millones de dólares para darles el medio litro de leche a nuestros hijos. Pero sepa también el país que en este terreno tampoco vamos a retroceder. Vamos a mantener el compromiso de darle el medio litro de leche a cada niño chileno porque este compromiso interesa vitalmente a nuestro país.

Por otro lado, los antiguos dueños de los latifundios y de los bancos siguen disponiendo de un gran poder financiero, que aplican en vasta escala a la especulación, el mercado negro y el contrabando, lo que ha traído no pocas complicaciones.

Inflación favorece a los potentados

En las condiciones descritas, la negativa de la mayoría parlamentaria reaccionaria a otorgar financiamiento a los gastos fiscales, y los déficits de las empresas del área social a consecuencia de la rigidez de los precios, nos han obligado a emitir dinero más allá de la cuenta. La inflación monetaria perjudica a la clase obrera, al conjunto del pueblo y al desarrollo económico, amenazando al proceso revolucionario. Los beneficiados con la inflación son los potentados que dedican sus recursos a la especulación y que han aprovechado el que a Chile no le saliera a cuenta, por el bajo precio del dólar de retorno, mandar a otros países nuestros productos de exportación, mientras, en cambio, el contrabando de productos chilenos hacia el exterior y el acaparamiento y la especulación en el mercado interno, agudizan los problemas de abastecimiento.

Se puede afirmar que, en estas circunstancias, la política aplicada en la primera etapa de este Gobierno necesitaba un ajuste, teniendo en cuenta siempre los intereses generales del país y, en primer término, los intereses de los trabajadores. Y esto es lo que se ha comenzado a hacer.

El Gobierno ha modificado los tipos de cambio en diferentes proporciones, dejando más bajos los destinados a la importación de alimentos, combus-

tibles y materias primas y subiendo más el precio del dólar para la importación de artículos de lujo. Al dólar de retorno de las exportaciones también se le fijó cotizaciones más elevadas que las que regían antes, tendiendo a favorecer particularmente a los productos de la agricultura y de la industria.

En el pasado, las devaluaciones de la moneda chilena favorecían a las empresas imperialistas, porque así necesitaban menos dólares para pagar sus costos de producción y se llevaban más al exterior. Ahora que esas empresas están nacionalizadas los recursos que obtienen con esas decisiones le sirven al país.

Reajuste y cambio de impuestos

Para compensar las alzas de precios producidas ya en el curso del año, además de las que determinan las medidas en materia de cambios internacionales y la necesidad de asegurar el autofinanciamiento de las empresas del área social, el Gobierno ha decidido reajustar los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones, en un 100% del alza del costo de la vida a contar del primero de octubre y dar una gratificación de Fiestas Patrias de 700 escudos para todos los trabajadores.

Al mismo tiempo ha tomado diversas medidas que implican modificaciones muy importantes, en el sistema de impuestos, favoreciendo con ellas a los trabajadores y a los pequeños comerciantes y empresarios y cargando la mano a los poderosos.

El conjunto de esta nueva política tiene un sentido de clase. Es la continuidad de la anterior en cuanto a mantener como objetivo esencial la defensa y el incremento de los ingresos de los trabajadores, complementada con el propósito de lograr que la economía chilena, particularmente el área social, produzca excedentes para la ampliación y el desarrollo de la industria nacional.

Importancia del aumento de producción

En el marco de esta nueva política económica y financiera cobra hoy una significación mayor el aumento de la producción en general y, en particular, el aumento de la producción agropecuaria por la importancia que ésta tiene para asegurar la alimentación del pueblo y por los enormes gastos en divisas, en divisas que no tenemos, a que nos viene obligando el retraso agropecuario.

Heredamos una agricultura en crisis. Hasta el año 25 Chile fue exportador de carne. Hasta fines de los años 30, fuimos exportadores de trigo. El hecho de que tengamos que importar cientos de miles de toneladas de trigo y de maíz y miles y miles de cabezas de ganado, no es responsabilidad de este Gobierno, no es de responsabilidad del pueblo sino de la generalidad de los gobiernos y de las clases hasta ayer dominantes.

La oligarquía se apoderó de mala manera de la tierra chilena. La que no recibió en repartimiento, se la robó a sangre y fuego, corriendo cercos, asesinan-

do indígenas, metiendo trampas en los juzgados, usando el Banco y la Caja Hipotecarios durante casi un siglo, para adquirir propiedades con dinero ajeno y pagar los dividendos a huevo, puesto que al mismo tiempo echó a andar el proceso inflacionario y estableció la no reajustabilidad de sus deudas. Luego, dueños de la mayor parte de la tierra cultivable, no la puso al servicio del país, taló los bosques a destajo, provocó la erosión de provincias enteras, impuso de hecho un racionamiento que condujo a la desnutrición de millones de chilenos y a la dependencia y el endeudamiento del país respecto del extranjero.

Actitud criminal con masa ganadera

En una proporción todavía mayor, los terratenientes concentraron en sus manos el ganado bovino y ovino. Y pese a los cuantiosos créditos recibidos de la Banca, no aumentaron la masa ganadera del país siquiera en la proporción en que aumentaba la población de Chile. Hay más, burlando claras disposiciones legales, guiados por los mezquinos intereses de sus bolsillos, han mandado millones de vientres al matadero, y cientos de miles de vacunos a la Argentina, en una actitud criminal en contra de los intereses generales de la Patria.

Más aún, durante todo el siglo pasado y parte del presente aprovecharon sus influencias en el Gobierno para pagar irrisorias contribuciones. La contribución agrícola fue en 1898 de sólo 115 pesos; en 1902, de 28 pesos y desde 1903 hasta 1916, durante trece años, se las ingeniaron para no pagar absolutamente nada, ningún impuesto por sus bienes raíces.

Castas privilegiada y abusiva

No negamos el hecho de que un determinado número de agricultores haya dado su aporte y entregado su esfuerzo al desarrollo agropecuario. Pero tomados en conjunto, los grandes terratenientes han sido una casta privilegiada y abusiva desde tiempos inmemoriales.

Ahora se trata de liquidar para siempre la nefasta herencia del latifundio.

Un rasgo característico de la revolución chilena está en que ha comenzado con los cambios en la estructura económica, con el viejo régimen de propiedad de la tierra con la nacionalización del cobre y demás riquezas extractivas, con la estatización de la Banca y el traspaso al área social o mixta de las más grandes empresas industriales.

Hay que seguir adelante por este camino, y al mismo tiempo, poner el acento en la batalla de la producción. En el caso concreto del campo, se debe demostrar que sin los terratenientes, los campesinos son capaces de producir mucho más y de poner la agricultura a tono con las necesidades generales del país.

Esfuerzo productivo

Nuestras tareas son grandiosas. El suelo agrícola y el clima de Chile se cuentan entre los mejores del mundo. Con él se puede satisfacer las necesi-

dades alimenticias del país y dejar importantes saldos de exportación en productos de gran demanda internacional. Podemos y debemos producir todo el trigo, todo el maíz, todas las semillas oleaginosas que necesitamos ahora y mañana. En materia de leguminosas, frutas, vinos y hortalizas, podemos y debemos producir no sólo lo que exige el consumo interno, sino transformarnos en estos rubros en uno de los más grandes exportadores entre todos los países. Podemos y debemos tener una masa ganadera vacuna de alta calidad y en una cantidad susceptible de alcanzar unos 20 millones de cabezas. Podemos y debemos mantener 80 millones de ovinos, diez veces más que la cifra más alta que Chile alcanzó hace algunos años. Podemos y debemos convertirnos en uno de los más importantes países exportadores de celulosa, de papel y de maderas prensadas para múltiples aplicaciones. Podemos y debemos levantar una avanzada y eficiente agroindustria.

Estas son nuestras grandes tareas, tareas para largo plazo, que constituyen objetivos patrióticos esenciales, metas vitales para el desarrollo progresista de nuestra Patria.

Planificación y participación

La eliminación del latifundio es el primer paso que nos abre a este camino. El segundo paso está en la planificación y la organización de la agricultura para cumplir, bajo el Gobierno de la Unidad Popular, una parte de estas metas. El tercer paso, que en el orden cronológico no está precisamente en tercer término sino al orden del día, consiste en resolver ahora las tareas inmediatas en cuanto a producción, planificación a corto plazo, participación masiva de los campesinos y organización transitoria del agro, para asegurar el abastecimiento alimenticio de nuestro pueblo y vencer dificultades nacionales tan grandes como la falta de divisas.

¿Cuál es nuestro punto de partida en cuanto a la producción agrícola?

La verdad estricta es que no hay una estadística completa. La peor estadística que ha habido en Chile es la que tiene que ver con la agricultura. A los grandes terratenientes les interesa mantener en la penumbra la verdadera realidad del campo para evadir impuestos, exigir precios altos viniera o no a cuento y obtener créditos, subsidios y moratoria de pagos tanto cuando llovía como cuando no llovía, cuando caían heladas o cuando no caían, sino que los beneficios que obtenían alcanzaran en lo más mínimo a los pequeños y medianos propietarios de la tierra.

Lo cierto es que en el año agrícola 1971-72 ha habido un leve aumento del área sembrada y que, si por un lado ha bajado un tanto la superficie de siembra y también la cosecha de trigo, de papas y de remolacha, se registran al mismo tiempo significativos progresos en maíz, cebada porotos y otros cultivos.

En cualquier caso, lo real es que el país no ha logrado el despegue correspondiente al crecimiento de las necesidades de consumo y que, con este fin, tenemos tareas muy concretas: aumentar el área cultivada y elevar los rendimientos.

La producción agrícola ha crecido a un ritmo inferior al aumento de la población, a menos del 2% anual. Nuestra tarea consiste en romper esta tendencia que nos ahoga y lograr un crecimiento no inferior a un 5% al año. Esto es perfectamente posible.

Más producción en área reformada

En el área reformada podemos observar algunos fenómenos. Se puede afirmar, como una ley general, que en el primer año que los campesinos trabajan la tierra, la producción del predio expropiado aumenta apreciablemente. Liberados del patrón, laboran con entusiasmo, le ponen pino al trabajo, aumentan el área cultivada. Pasado el primer año, la tendencia es al descenso de la producción, aunque no estamos en condiciones de afirmar que vuelve a los bajos niveles de la explotación de la tierra durante el latifundio.

¿Cuáles son las causas que determinan este fenómeno?

El latifundio, con todos sus vicios, no obstante las injusticias y hasta crímenes que la acompañaban, era después de todo una organización centralizada y jerarquizada. Había en él una capacidad empresarial, con patrón, administrador, capataces, llaveros, contadores, que manejaban la producción del predio y tenían en sus manos las relaciones con los bancos y la comercialización. Al expropiarse un fundo y tomarse posesión de él, dicha organización desaparece virtualmente por completo, pues la tendencia de los campesinos, por cierto comprensible, es no aceptar que siga trabajando con ellos ni siquiera el más modesto de los empleados por el hecho de haber estado o haber aparecido vinculado al explotador.

La sustitución de la organización latifundista por otra superior, por la organización de los propios campesinos no ha sido fácil, tanto menos cuanto que el campesinado ha estado sometido al atraso y al analfabetismo por generaciones y generaciones, la Democracia Cristiana llevó al campo el paralelismo sindical y nosotros –por qué no decirlo– nosotros, los de la Unidad Popular, hemos tomado no pocas decisiones en la oficina de la ciudad, al margen de la realidad.

Opinión de los campesinos

De los antecedentes recogidos en el terreno mismo se pueden sacar algunas conclusiones. Ni los asentamientos establecidos por la Democracia Cristiana, ni los CERAS creados bajo el actual Gobierno, satisfacen íntegramente a los campesinos, ni constituyen, como están, las formas más adecuadas de organización transitoria del sector reformado. Ultimamente ha surgido una nueva forma de organización transitoria, los Comités Campesinos, como una manera de iniciar el proceso productivo y evitar el conflicto en torno a si deben constituir CERAS o Asentamientos. Nos parece fundamental y urgente revisar todas estas formas orgánicas y tener indispensablemente en cuenta la opinión e interés de los campesinos, única manera de contar con ellos

para el cumplimiento de las grandes tareas que tenemos en el campo. Lo anterior no significa que seamos partidarios de someternos a cualquier idea o interés que surja del seno de los campesinos, tanto menos que entre ellos opera el enemigo y que nuestra obligación consiste en ayudarlos a esclarecer problemas y a elevar su nivel político. Significa sí, lo reiteramos, considerar "impajaritablemente" sus opiniones y buscar con ellos las soluciones que más convengan y que por cierto estén de acuerdo con el interés del país.

Los campesinos no aceptan, por ejemplo, que los excedentes de su producción vayan a un fondo común, ni que el derecho a talaje se fije arbitrariamente, sin considerar la situación real de cada predio reformado. Creemos que tienen razón y que sería funesto imponerles normas que van contra sus intereses y también contra los intereses nacionales. El aporte que hoy por hoy tienen que entregar al país está fundamentalmente en el aumento de la producción y en la devolución de los créditos y las inversiones. Mañana se podrán aplicar otras formas de contribución en una agricultura más desarrollada.

Hay que crear sistema contable

Hablando siempre en términos generales, sucede que ni bajo el Gobierno demócratacristiano ni bajo el Gobierno de la Unidad Popular hemos sido capaces de establecer en las unidades reformadas un sistema contable adecuado. Cuando asumimos el Gobierno, nos encontramos con un retraso de tres años en los balances de los asentamientos. En muchos casos hemos logrado ponerlos al día, pero en otros, incluidos predios expropiados bajo este Gobierno, el problema subsiste. En estas condiciones, el anticipo a cuenta de utilidades que recibe el campesinado, adquiere para él la forma de salario, con la agravante de que por no haber rigurosidad en el control del aporte de jornadas que realiza cada uno de los integrantes de la unidad reformada, aparecen recibiendo más o menos lo mismo tanto el que se sacó la mugre trabajando como aquel que lo hizo a medio cuerpo. Agréguese a esto el hecho de que no se tiene siempre conciencia exacta del valor de las inversiones efectuadas en el primer año en plantaciones, ganado, construcciones productivas y adquisición de algunos equipos, de todo lo cual los frutos se ven después de algún tiempo. Además, el campesino ha sufrido otras dificultades. No siempre las semillas y los fertilizantes han llegado oportunamente, la asistencia técnica la recibe tarde mal y nunca y suele verse envuelto en pugnas políticas y en discusiones estériles, en un constante tira vaca tira buey, que afecta a la unidad campesina y a su entusiasmo en el trabajo. Cierta número de funcionarios del agro actúa con sentido paternalista y algunos dirigentes campesinos, aunque inspirados en el buen propósito de sacar adelante las tareas, suelen exigir en tal forma el cumplimiento de los deberes que no pocos de sus compañeros reaccionan negativamente, alegando que si se acabaron los patrones nadie los viene a mandar. En este clima recrudece el alcoholismo y el ausentismo del trabajo y abundan los casos en que parte de la producción se vende por la puerta de atrás, no figurando por lo tanto en las cuentas de las unidades reformadas.

Adquiere entonces una importancia decisiva la puesta en marcha de un sistema contable y de control que le permita al campesino saber, no sólo a fin de año, sino mes a mes, cómo va la producción, cómo va el cumplimiento de las tareas, para que visualice de esta manera la significación de su esfuerzo en su propio interés.

El área reformada constituye la base fundamental para organizar la nueva agricultura, para cumplir las tareas de la producción.

¿Qué hacer en este sentido?

No hay más que echarle para adelante y no para atrás.

Reforma Agraria, tarea nacional

Y a este respecto tenemos que plantear con mucha fuerza que la falla principal no ha estado en los propios campesinos, sino en nosotros mismos, en el hecho de que hemos bajado la guardia en el campo. Hasta hoy tenemos considerado que la reforma agraria es una tarea de los campesinos y de las instituciones del agro. Y esto no es así. Es una tarea nacional, de todo el país, de todo el pueblo y, en primer lugar, de la clase obrera del campo y de la ciudad.

Puedo decirles que el fin principal que persigue el Partido Comunista al celebrar este Pleno del Comité Central es, precisamente, dar un vuelco en este sentido, es decir, meternos en la cabeza y en la sangre el contenido revolucionario y el carácter decisivo que tiene la batalla de la producción en el campo y la idea de que para asegurar la marcha hacia el socialismo hay que estrechar más y más la alianza obrero-campesina, y esto no con palabras ni buenos propósitos, sino con hechos concretos.

Es claro que hay muchos compañeros que dejan las suelas de sus zapatos recorriendo los campos y que hay Direcciones Regionales que tienen una real preocupación por los problemas agropecuarios. Pero hay también otras, que se dan vueltas sólo en torno a los problemas de las ciudades no obstante que el campo suele ser en sus zonas más importante desde todo punto de vista.

Al que le venga el sayo que se lo ponga, y que corrija como comunista.

Trabajo obrero-campesino

También es claro que no se trata sólo del trabajo del partido, aunque este trabajo y su actitud serán decisivos. Se trata de impulsar la acción de la clase obrera organizada. Hay, como se sabe, valiosos ejemplos de sindicatos y de trabajadores de empresas estatizadas que prestan ayuda efectiva a sus hermanos del campo. En la discusión del Pleno podemos y debemos volver sobre estos ejemplos, pero no para sacarnos los balazos, porque esta tarea no corresponde a algunos sindicatos, a un sector relativamente reducido del proletariado, sino al conjunto de la clase obrera.

Invitamos fraternalmente a los demás partidos de la Unidad Popular a empujar, con más fuerza y unidos, el cumplimiento de estos deberes revolucionarios.

Un papel muy importante les corresponde a los funcionarios del agro. Apreciamos sinceramente su trabajo. Destacamos como un hecho positivo la labor responsable y eficiente que realizan miles y miles de estos funcionarios, incluida la mayor parte de aquellos que no pertenecen a los partidos de gobierno.

En la lucha por la reforma agraria, los funcionarios del agro tienen un mártir, Hernán Mery, asesinado por orden de los latifundistas. Varios otros han caído en actos de servicio, en choques en los caminos y en otros accidentes durante las horas de trabajo. Entre ellos están Pablo Rojas, comunista; René Maluenda Fernández, comunista; Osvaldo Jeldres San Martín, comunista; Charo Dib Sacremende, socialista; Manuel Villagrán Palma, radical; y Enrique Rocafior Iturrate, Gastón Ravanal Solar, Enrique Arredondo Gronow y Guillermo Tapia Morales, sin afiliación política.

Centenares o miles de funcionarios van a menudo a terreno. Pero no basta. Se requiere que una parte importante, algunos centenares o miles de agrónomos, veterinarios y técnicos vivan y trabajen en el campo. Y si para ello hay que dar algunos incentivos bien vale la pena hacerlo.

Coordinar organismos del agro

En el sector de Melipilla, un solo médico veterinario atiende el ganado en 31 predios reformados. Esto es tan irracional que ha significado una merma en la producción de leche. Y este no es el único caso. Un mejor aprovechamiento de los recursos profesionales exige la integración rápida, en la cúspide y en la base, en el terreno mismo, de todos los funcionarios del agro, sacándose cada cual las camisetas institucionales en aras del interés del país. Hay 23 organismos que tienen que ver con el agro y que, para colmo, dependen de 3 ó 4 ministerios. Somos partidarios de que todos ellos actúen coordinadamente bajo una sola orientación.

En el latifundio había siempre o casi siempre un práctico agrícola, una persona más o menos entendida, a través de la cual, en la oficina de la ciudad o en una visita de médico, se podía dar alguna recomendación técnica. Pero este sistema no es aplicable ahora, al menos en relación a las unidades reformadas. Allí el técnico debe trabajar y convivir con los trabajadores. Los comunistas debemos dar el ejemplo. Concretamente, planteamos que los técnicos comunistas, los más jóvenes, se vayan al campo por algunos años y que todos sin excepción, hagan lo mismo aunque sea por un par de meses.

Grupos de vanguardia

La Comisión Nacional Agraria del partido tiene la idea de organizar grupos de vanguardia de trabajadores del campo y de la ciudad para empujar ciertos trabajos agrícolas. Apoyamos resueltamente esta iniciativa.

En el mes de octubre celebra su Congreso Nacional la Confederación Nacional Campesina Ranquil. Pensamos que este Congreso, así como las re-

uniones provinciales previas, deben realizarse rodeados del apoyo de los trabajadores y en función del cumplimiento de las tareas concretas.

En este momento hay alrededor de 300 mil trabajadores del campo organizados en sindicatos. La importancia de este número de organizados no sólo es grande en comparación a la población activa del agro, sino al hecho de que hace apenas 10 años los trabajadores sindicados no eran más de 5 mil. Nos pronunciamos por la acción común de todas las organizaciones campesinas y el fortalecimiento de los Consejos Campesinos a través de los cuales los trabajadores del campo deben alcanzar una mayor participación en las decisiones sobre la política agraria y el aumento de la producción.

Pues bien, tenemos que aprovechar el ímpetu inicial de los campesinos en los predios expropiados en este último año y acelerar la toma de posesión de los quinientos y tantos predios que aún no han pasado a sus manos no obstante existir la resolución correspondiente.

Aunque han corrido algunos meses del presente año agrícola y los planes de cultivo están más o menos determinados, hay que hacer un esfuerzo extraordinario con vistas a ampliar aquellas siembras que aún es posible expandir.

Mecanización del campo

A comienzos de año nos propusimos ampliar el área cultivable en 300 mil hectáreas, especialmente en trigo y maíz. Con tal fin, el Gobierno resolvió importar alrededor de 10 mil tractores. Para esto hemos contado especialmente con la ayuda de los países socialistas. En el cumplimiento de esta tarea ha habido algunas dificultades, debido a lo cual se han producido serios atrasos en la llegada de estas máquinas. Para contar la película tal cual es debemos decir que este atraso es fundamental o exclusivamente de nuestra responsabilidad. Durante varias semanas se estuvo discutiendo de dónde debían traerse tractores. No obstante que Fidel Castro –que por cierto sabe de agricultura– dijo cuando vino a Chile que los tractores soviéticos son muy buenos, no faltaron quienes pretendieron dilatar una decisión mediante el expediente tan chileno de mandar comisiones al exterior, en este caso a la Unión Soviética, para ver cómo son en realidad. Felizmente no cuajó esta proposición, con lo cual –dicho sea de paso– el país se ahorró por lo menos el gasto de una inútil misión. El bacalao se cortó cuando en una reunión, en la que estaba el Presidente de la República y el propio Ministro de Agricultura, sostuvimos que a nosotros, comunistas, nos interesaba fundamentalmente que se trajeran tractores de donde fuera y que sin ser expertos en la materia, sin poder opinar con todo fundamento acerca de cuáles son los mejores, sabíamos sin embargo que el peor tractor era el tractor que no teníamos y que, en tal virtud, dada nuestras necesidades, teníamos que aprovechar todos los ofrecimientos.

Ya han llegado o vienen en camino algunos miles de tractores desde Checoslovaquia, Rumania y la Unión Soviética. Desgraciadamente, una partida de tractores soviéticos estuvo varias semanas en el puerto de Leningra-

2888 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

do, sin ser embarcados, porque los papeles, la autorización de embarque no se enviaba desde Chile. A pesar de estos retrasos, bajo el Gobierno de la Unidad Popular se está dando un impulso sin precedentes a la mecanización de la agricultura.

Ya no podremos ampliar el área de siembra en la cantidad de hectáreas proyectadas, pero no sólo por el problema de los tractores, sino, porque ha habido fallas en el suministro oportuno de semillas y fertilizantes debido a la incapacidad de Ferrocarriles y a la falta de otros medios de transporte. Y también fue débil el esfuerzo de los funcionarios de Gobierno y de las organizaciones campesinas para llevar esta tarea a los trabajadores de la tierra.

Aprovechar el tiempo

Volviendo a los tractores y a las tareas inmediatas tenemos que decir que el mejor aprovechamiento de estas máquinas irá sobre todo en beneficio del próximo año agrícola, el cual desde el punto de vista de la preparación de los suelos para la siembra de cereales comienza con los barbechos en el mes de noviembre de este año. Pero en alguna medida podemos y debemos aprovecharlos también para las siembras de 1972, especialmente para el trigo de primavera y el maíz, la maravilla, los porotos de exportación y el arroz. El período de siembra de estos cultivos está por comenzar y hay que aprovechar los tractores y el tiempo, trabajando día y noche. Podemos y debemos también dar un impulso desde ya a la siembra de papas, cebollas, ajos y hortalizas en general.

Lo que el país necesita importar sólo en trigo, maíz, arroz y aceites, vale 80 millones de dólares anuales. Con el esfuerzo que podemos hacer este año para aumentar todavía la siembra, es posible rebajar a la mitad estas importaciones.

Ha terminado el período de sequía que ha sufrido la Zona Central y el Norte Chico. Es de esperar un aumento en la cosecha de trigo de secano, si, como es probable, caen nuevas lluvias en estas regiones y, sobre todo, es posible lograr un aumento importante en el uso de las tierras de riego, ya que la nieve acumulada en la cordillera y el agua en los tranques garantizan un año con riesgo excepcional.

San Isidro nos echó su manito. Ahora, nosotros tenemos que ponerle el hombro.

Mucho depende del esfuerzo de cada uno. Por ejemplo, a causa del mal manejo del almacenaje de trigo, el 10 por ciento se lo comen los ratones o simplemente se azumaga. Si cuidamos los granos y redujésemos sólo al 5 por ciento las pérdidas, podríamos ahorrarnos 5 millones de dólares.

Eliminar trabas burocráticas

El camino a seguir para asegurar el mayor aumento posible de la producción en este año exige la inmediata rediscusión de los planes de cultivo

en todos los niveles, la discusión de estos planes por la masa misma de los campesinos, la toma de medidas oportunas para asegurar el suministro de semillas y fertilizantes, la eliminación de las trabas burocráticas del Banco del Estado para la otorgación de créditos y la firma de contratos de producción respaldados por la rápida fijación de una política de precios.

Hemos tenido en cuenta ante todo nuestras obligaciones con el sector reformado de la agricultura. Pero existe otro grupo social, los pequeños y medianos propietarios, que son hombres de trabajo, que usan la tierra con una intensidad entre 2 y 4 veces mayor que el latifundio, que producen casi la totalidad de las hortalizas, gran parte de la chacarera, tienen las lecherías más intensivas y una parte apreciable de las plantaciones frutales del país.

Ayuda a pequeños agricultores

Los gobiernos dominados por los banqueros y latifundistas no les permitieron gozar del crédito, de la asistencia técnica, de las ventajas que ellos se fabricaron. Ahora los buscan, quieren sacar las castañas con la mano del gato, e impulsarlos contra el Gobierno Popular. Hay más de 200 mil propiedades menores de 40 hectáreas básicas. Centenares de miles de chilenos forzados viven en ellas. No podemos abastecer al país si prescindimos de su producción. El Gobierno Popular ha ampliado su ayuda crediticia hacia ellos, pero es insuficiente. Es preciso ayudar a su organización en cooperativas, otorgarles créditos, ampliar en forma efectiva los poderes de compra para que no caigan en manos de los intermediarios, asegurarles un transporte que cumpla un objetivo social, desarrollar proyectos que diversifiquen y absorban la producción a precios realmente remunerativos y, sobre todo, establecer en los hechos la seguridad de la tenencia de la tierra.

Los pequeños y medianos agricultores deben convertirse en aliados del proceso histórico que vive Chile y es contrarrevolucionario quien con su torpe acción los empuja al otro lado.

Apoyamos la posición expresada por el Presidente de la República en el discurso que pronunció el 24 de julio, en el sentido de garantizar la propiedad inferior a 40 hectáreas de riego básicas; no expropiar por dos años las que tengan entre 40 y 60 hectáreas; presentar más adelante un proyecto de ley para reducir la cabida máxima a 40 hectáreas y dar la oportunidad para que, desde ya, los interesados o si se quiere los afectados soliciten y obtengan la reserva que les corresponda.

Queremos detenernos en un problema que hemos mencionado de pasada. Se trata de los precios agropecuarios. Estos no pueden ser fijados al tuntún, como en cierto modo se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, cuatro litros de leche se convierten, en el ternero, en un kilo de carne viva cuyo valor en el mercado es cuatro veces superior. Esto conduce a que cierto número de propietarios de ganado prefieran dar la leche al ternero en vez de mandarla a las plantas para el consumo humano.

Cuatro o cinco kilos de trigo se convierten en un kilo de carne de cerdo, que vale también varias veces más, lo que, unido a los precios altos y a

la escasez de alimentos concentrados, induce a muchos pequeños y medianos agricultores a alimentar sus chanchos con este grano, restándolos a la fabricación de harina y pan.

Con el ajo, la cebolla, la papa y otros productos ha sucedido un hecho que también merece comentario. En algunos casos se han abierto poderes compradores de estos artículos a precios inferiores de los que luego han ido a ofrecerle a los productores los comerciantes particulares.

Cálculos y precios reales

A nuestro juicio, los poderes compradores del Estado deben hacer, junto con los campesinos y demás productores del agro, cálculos reales de costos de cada cultivo, costos conocidos y aceptados por ambas partes y que se incorporen al contrato respectivo de producción dejando abierta la posibilidad a los reajustes correspondientes si hay cambios en dichos costos y estableciendo algún tipo de incentivo por la calidad del producto y lo que sobrepase el volumen del contrato. Más todavía, en los casos de productos agrícolas que importamos en grandes cantidades y que podemos sustituir con relativa rapidez, vale la pena establecer fuertes incentivos por la vía de los precios o cualquiera otra.

Nos estamos refiriendo, reiteramos, a los precios al productor. Todo esto exige terminar con las anomalías que hay en la comercialización, precisando los límites de operación de los poderes compradores, eliminando o refundiendo algunos, reorganizando aquellos que han funcionado como las tristes, como en el caso de SACOP y dándole a cada poder comprador la participación correspondiente en las decisiones sobre créditos, abastecimiento de insumos y asistencia técnica.

Se pueden mencionar algunos casos que sirven de ejemplo acerca de cómo se debe operar. Tal es el de SOCORA. Este organismo se vio impedido de adquirir entre los productores lo que debía exportar debido a la rigidez con que operaba el cambio del dólar de exportación. Dio la batalla contra este obstáculo y, luego de apartarlo con la colaboración del Banco Central, ha entrado a jugar un importante y eficiente papel. Precisamente SOCORA tomó en sus manos el contrato con los productores, el abastecimiento de insumos, el control del crédito que dio el Banco del Estado y la asistencia técnica y es la única institución del sector público que puede exhibir el retorno total de los créditos otorgados a los campesinos no obstante que no les exigió ningún aval.

IANSA también es un ejemplo. Cada una de sus plantas contrata la remolacha con los agricultores, les adelanta dinero para pago de salarios, les da créditos en insumos y asistencia técnica y les asegura la compra de toda su producción. Citamos este caso porque indica que a partir de la creación de grandes empresas industriales en el agro se puede ampliar y diversificar la agricultura y asegurar el interés de cada cual.

Es de suponer que no faltará quien diga que ahora los comunistas están planteando políticas de precios a las cuales se oponían ayer. Esto tiene una

explicación muy clara. Antes, bajo los gobiernos de la oligarquía y de la burguesía se jugaba con los precios, en primer término para beneficiar a los terratenientes, para aumentar sus ganancias, mientras producían poco y favorecían la especulación. Los terratenientes controlaban casi toda la producción y constituían un poder comprador del producto de los pequeños y medianos agricultores, adquiriéndolos muchas veces en verde. Ahora, cuando existe un área reformada de la agricultura y el Estado se convierte casi en el único poder comprador, la política de precios puede y debe manejarse en favor del aumento de la producción, contemplando al mismo tiempo, como ya se ha dicho, ganancias razonables para los productores.

Nos parece fundamental hacer uso de los valiosos suelos y climas de Chile, especialmente de los suelos regados, para una gran expansión de las plantaciones frutícolas y vitivinícolas, para el desarrollo de una gran producción de hortalizas y para transformar la ganadería extensiva tradicional en ganadería fundamentalmente lechera.

Sólo es posible lograr estos objetivos a través de la planificación de una red de industrias agrícolas y lecheras, de plantas de embalaje, de complejos conserveros, deshidratadores, concentradores de jugos, centrales lecheras, fábricas de cecinas, etc. Es decir, en suma, se trata de transformar el agro chileno en un sector industrializado de la economía.

Aprovechar los recursos

Chile tiene en este aspecto un gran porvenir. Hay una nación pequeña, más pequeña que la nuestra, con 8 millones y medio de habitantes, con poco menos de 5 millones de hectáreas arables, de las cuales un millón cien mil son regadas, igual que en nuestro país. Se trata de la República Socialista de Bulgaria. Todo su territorio agrícola se dedica a cultivos intensivos. Un millón de hectáreas se siembran allí con trigo, con un rendimiento medio nacional de 30,2 quintales por hectárea. Nosotros dedimos a este cultivo 711 mil hectáreas con un rendimiento de sólo 18 quintales por hectárea. Bulgaria dedica 660 mil hectáreas a producir maíz con un rendimiento superior a 40 quintales por hectárea. Nosotros sólo sembramos 84 mil hectáreas de maíz, con un rendimiento de 34 quintales por hectárea. Con un territorio siete veces más pequeño que el nuestro y con recursos naturales arables muy similares tanto en extensión como en clima, produce más de tres veces el trigo que produce Chile, casi 10 veces más maíz y 27 veces más maravilla que nosotros, más cebada, tabaco, frutas y hortalizas en general. Tiene casi tres veces más cerdos que nosotros. Nos dobla en ganado ovino. Y si en vacunos dispone sólo de poco más de la mitad de lo que tiene nuestro país, cabe precisar que ese ganado búlgaro es casi todo lechero de alta calidad.

Bulgaria era, cuando hizo su revolución, un país atrasado, importador de trigo y maíz. Hoy es una de las naciones más florecientes, con una agroindustria que satisface las necesidades de su consumo interno y le permite exportar productos elaborados y en verde por más de mil trescientos millones de dólares al año.

Citamos este ejemplo para señalar cuán maravillosas son nuestras perspectivas, para reafirmar la idea de que la emancipación de los campesinos, y en buena parte la solución de nuestro grave problema de divisas, depende por un lado de la posesión de la tierra por parte de quienes la trabajan y, de otro lado, del grado de intensidad con que esa tierra se utilice, de la agroindustria y la mecanización. La agroindustria impone modificaciones en el uso de los suelos, conduce a cultivos más intensivos y de más alta rentabilidad, que requieren de mucho más mano de obra. Por ejemplo, una hectárea de trigo sólo ocupa siete días de trabajo al año, en tanto que una hectárea de frutales o de viña ocupa 150 días de trabajo al año y una hectárea de hortalizas necesita 240 días de trabajo.

30 mil familias sin tierra

En el área reformada de la agricultura sólo han sido beneficiadas directamente 70 mil familias campesinas. Quedan más de 30 mil familias sin tierras o con muy poca tierra. El problema de tierra para los mapuches está virtualmente sin solución. La reducción de la cabida máxima a 40 hectáreas o menos, cuestión con la que estamos de acuerdo y sobre la cual fuimos los primeros en pronunciarnos cuando se discutió la actual ley de reforma agraria, no resuelve, sin embargo, este problema. Sólo permitiría darles tierra a no más de 30 mil nuevas familias campesinas. Por eso, colocar hoy el acento en la reducción de la cabida máxima es algo así como poner los bueyes detrás de la carreta. Ya lo dijimos: habrá que hacer esa modificación. Pero lo que tiene prioridad y lo que en definitiva conduce a resolver el problema de toda la población campesina es la utilización racional de nuestro suelo, ahora en forma extensiva e intensiva y mañana sólo intensiva.

Bajo el Gobierno de la Democracia Cristiana hizo escuela la idea de dejar en los asentamientos sólo a los trabajadores que laboraban en el fundo expropiado. Esto ha conducido a que sólo un sector minoritario de los campesinos sean favorecidos directamente con la reforma agraria, afirmándose en muchos de ellos la resistencia a incorporar a esas unidades reformadas a otras familias campesinas, no obstante que en muchos casos hay cabida inmediata para ellas. Ahora surge en algunos grupos, particularmente de parte de la ultraizquierda, la idea de que en los fundos expropiados debe meterse todo el mundo. Se trata, a nuestro juicio, de dos posiciones igualmente equivocadas.

Nosotros sostenemos que hay solución para todos los problemas sociales del agro, para que todos los campesinos tengan trabajo y eleven su nivel de vida. Pero esto no se logrará de la noche a la mañana y no depende sólo de los cambios en la tenencia de la tierra, sino, como queda dicho, del mejor uso de los suelos y de la agroindustria.

Favorecer a los mapuches

Con todo, somos partidarios de que se haga hoy todo lo que se pueda hacer en favor de los mapuches, afuerinos, minifundistas y comuneros, que aparecen

al margen de los beneficios de la reforma agraria. Por ejemplo, somos partidarios que se avance en la solución del problema mapuche a través de la compra por el Estado de las tierras usurpadas y de su restitución a las comunidades indígenas, tal como establecía el proyecto de ley que la mayoría del Senado ha hecho tira. Es necesario que el Estado les asegure un poder comprador de la papa y de la artesanía. Se trata de una artesanía que por su belleza puede ser colocada a precios altos en las ciudades y también en el exterior. Y nos parece que no admite más dilatación la puesta en práctica de una política dirigida a estimular también los otros aspectos de la cultura mapuche, asegurándoles desde luego la enseñanza en todos los niveles en su propio idioma.

Debemos preocuparnos también de los ex empleados de los latifundios, capataces, contadores, administradores, alistadores, llaveros, etc. Les tocó en la vida desempeñar esos puestos y no nos parece que ésta sea una razón como para marginarlos de la actividad del campo, tanto menos cuanto que en el adquirieron experiencia. Nosotros les decimos a los campesinos de las unidades reformadas que debieran reconsiderar sus puntos de vista sobre el particular, salvo en los casos de aquellos que fueron sus peores cuchillos. Un cambio en esta dirección irá en beneficio de los propios campesinos.

Solucionar el abastecimiento

Nos preocupa sobremanera, como a todo el pueblo, las dificultades que hay en el abastecimiento. Este problema angustia con razón sobre todo a las dueñas de casa, particularmente en lo que se refiere a la escasez de carne. Ya nos hemos referido a las causas lejanas y cercanas que la originan. Para el Gobierno y los partidos que lo integran, para nosotros comunistas en particular, las tareas relativas a este grave asunto nos exigen una entrega total. Se han tomado y se están tomando pocas medidas para enfrentar la situación.

La escasez de carne de vacuno es un fenómeno mundial. Afecta a países como Uruguay, que tiene 10 millones de cabezas de vacuno y sólo 2 y medio millones de habitantes, y que, sin embargo, por constituir la carne y los cueros de bovinos y la lana de ovinos su principal fuente de exportación, ha tenido que establecer una veda de cuatro meses seguidos.

Una de nuestras grandes tareas es convertir a Chile en un país ganadero. Pero su cumplimiento exige plazos más largos. Por ahora, la solución del problema consiste, esencialmente, en sustituir en gran parte el consumo de carne de vacuno por las de ave, cerdo y productos del mar. Con la ayuda de Bulgaria, se iniciará pronto la construcción de tres planteles integrados para producir 30 millones de pollos y un gran plantel de producción de cerdos en la zona mapuche de Cautín, y se trabaja para ampliar en un 33 por ciento la capacidad de los actuales planteles de producción, se construyen planteles de incubación, nuevos mataderos de aves y fábrica de alimentos concentrados.

Los planes que se trazaron el año pasado para aumentar verticalmente la producción de pollos se hicieron en el aire. Este año se pisa sobre terreno más firme. Pero tenemos serias dificultades en la producción de alimentos concentrados, tanto para aves como para porcinos. La principal dificultad está

en la producción del maíz y de otros componentes de tales concentrados. De ahí que subrayemos la importancia de prestar especial atención al aumento de las siembras de maíz y de generalizar el uso de las semillas de más alto rendimiento. Debemos aprovechar, como materia prima de los alimentos concentrados, los afrechos de trigo, arroz, soya, maravilla y parcialmente de raps. En la actualidad estos afrechos, que son componentes básicos en la producción de alimentos concentrados, no se aprovechan racionalmente. También debemos utilizar las aguas residuales de las plantas de celulosa y de alcohol, que contienen nutrientes para los alimentos concentrados. Asimismo, debemos aprovechar la caña y coronta de maíz para mezclarla con alfalfa y concentrados, lo que da un alimento especialmente apto para los terneros a partir del destete. Quisiéramos agregar que las nuevas técnicas permiten utilizar de un cuanto hay para la alimentación de aves, cerdos o ganado mayor. Por ejemplo, el guano de los pollos broilers sirve como componente de alimentos concentrados para el vacuno. Y de este mismo tipo de aves se puede aprovechar todo: las plumas para hacer harina que se incorpora a la misma alimentación de los pollos; la sangre y hasta las tripas, en este último caso, para incorporarlas a la alimentación de los cerdos.

Si sólo usáramos racionalmente los afrechos que produce el país, podríamos reducir nuestro actual déficit de maíz forrajero a una tercera parte, es decir, de unas 100 mil toneladas, y éstas podríamos producirlas sembrando 25 mil hás. más de este grano.

Necesitamos mejorar el ambiente en que se crían los pollos broilers. La generalidad de los pabellones para la crianza de éstos tienen una temperatura baja, sobre todo en la noche, lo que hace aumentar el consumo de alimentos. En nuestro país, tres kilos y fracción de alimentos concentrados se transforman en un kilo de carne de ave viva. La creación de un ambiente adecuado durante las 24 horas del día, junto a un manejo también adecuado y automático del uso de la luz en la noche, puede reducir en un tercio la cantidad de alimentos que se necesita para producir un kilo de ave.

También debemos elevar la siembra de maravilla, tanto para aumentar la producción de aceite como para incrementar las disponibilidades de afrecho para alimentos concentrados. Y dicho, aunque sea de paso, se necesita generalizar las nuevas variedades de maravilla. La que se cultiva en nuestro país da un 35 por ciento de aceite, en tanto que las variedades usadas en la Unión Soviética, Bulgaria y otros países, dan entre un 45 y un 49 por ciento.

Usar capacidad industrial

En el país se proyectan también nuevas fábricas para procesar ciertos productos del agro, particularmente frutas y algunas hortalizas. Al mismo tiempo, debemos aprovechar la capacidad instalada de las industrias existentes. Contamos con alrededor de 10 importantes plantas conserveras, la mayoría de las cuales no se utilizan de acuerdo a su capacidad de producción. Hay plantas conserveras que trabajan sólo tres o cuatro meses al año, en circunstancias que podrían hacerlo todo el año, puesto que en ellas no sólo se

pueden elaborar los productos frutícolas y algunos de hortalizas y chacarearía, sino también productos menos perecibles, como el poroto de cosecha, por ejemplo. Las 10 más grandes plantas conserveras producen alrededor de 50 mil toneladas, pudiendo producir 100 mil.

Las fábricas de conservas de Nieto Hermanos no cumplían con su obligación de producir de acuerdo a sus posibilidades. Por esto fueron intervenidas. Apoyamos tal medida y creemos que otro tanto hay que hacer con las demás grandes plantas conserveras que no cumplen con su obligación ante el país. Por otra parte, se les debe dar plenas garantías a los pequeños propietarios de plantas conserveras, incluso a aquellas más grandes como Camelio, que producen todo el año, asegurándoles poder comprador.

La utilización durante todo el año de las plantas de conserva permitirá, entre otras cosas, que ocupen mano de obra permanentemente y que paguen a los productores de frutas y hortalizas y de otras materias primas, precios mucho más altos de los que pagan hoy. En los países que tienen una industria conservera desarrollada, el valor de la materia prima alcanza hasta el 50 por ciento de los costos de producción. Aquí no pasa del 20 por ciento.

En relación a los pollos, el Estado debe, como ya se ha informado, no sólo construir grandes complejos agrícolas, sino también tener una política adecuada respecto a los productores particulares, sean estos pequeños o grandes. Hasta hace poco, imperó la tendencia a estatizar toda clase de establecimientos avícolas, hasta los gallineros. Ese fue un error. Necesitamos producir aves, así como cerdos, y en esto tiene su papel el empresario particular. A él se le debe asegurar los alimentos o materias primas, imponiéndoles una sola condición: que su producción la vendan al Estado a precios convenidos de antemano, porque actualmente muchos de ellos la llevan al mercado negro, y esto no se puede tolerar.

En conclusión, el problema del abastecimiento depende de una serie de factores que hemos venido señalando, de la nueva política económica y financiera del Gobierno, de los poderes compradores y sobre todo del aumento de la producción agropecuaria en general y en particular de la producción de granos, afrechos y demás componentes de los concentrados.

Más participación del pueblo

Los poderes compradores forman parte de la comercialización. Pero no bastan. Se necesita ir al desarrollo de los supermercados y a una mayor participación del pueblo, de los consumidores y pequeños comerciantes, en las Juntas de Abastecimiento y Precios, las JAP, para asegurar la mejor distribución de los productos disponibles y evitar el mercado negro y la especulación.

La cuestión agraria es lo más complejo en toda revolución. En la transformación del campo influyen cientos de factores y problemas. Son tantos que ni siquiera hemos podido abordarlos todos y algunos apenas los hemos conocido. Entre ellos están el transporte, el almacenaje de productos, la capacidad de carga y descarga en los puertos, la red de frigoríficos, la investigación tecnológica, la educación técnica de los propios campesinos de cuyos hijos de-

ben salir en el futuro los agrónomos, veterinarios y demás profesionales del campo; la política de créditos, el papel de los Consejos Campesinos, la necesidad de que los Centros de Producción se transformen en Haciendas Estatales modelos, la organización del uso racional de la maquinaria agrícola, el cuidado y mantención de esta maquinaria, la participación de la mujer y de la juventud campesina, etc. Esperamos, sin embargo, que en el desarrollo de este Pleno se aborden o discutan más a fondo estos asuntos.

Enfrentando dificultades

Camaradas:

Chile vive un período trascendental en su historia. Rompe sus ataduras con el imperialismo y pone fin al dominio de las castas oligárquicas. Deja atrás la noche que cubrió sus campos por siglos y siglos. Pasan a manos del pueblo los principales medios de producción. Forja así su nueva independencia. De hecho y no sólo de palabra, se transforma en un país más democrático. Le da libertad a millones de chilenos, principalmente a la masa campesina que, todavía, en pleno siglo XX, ha estado sometida a la servidumbre y la miseria.

Como todo cambio social, éste se hace con dificultades.

El enemigo imperialista trató de impedir el acceso de Allende a la Presidencia de la República. La reacción interna ha buscado la caída del Gobierno. Pero el pueblo les ha salido varias veces al camino.

Estamos enfrentando las dificultades y los problemas con coraje y patriotismo. Los objetivos que nos trazamos, las tareas relativas a crear, por ejemplo, una nueva agricultura, corresponden plenamente a las conveniencias presentes y futuras de la nación chilena. Las clases reaccionarias colocan sus mezquinos intereses por sobre los intereses de Chile. Hay opositores que se transforman en delirantes catastrofistas, pronosticando para el país la peor de las crisis. Con su prédica favorecen el acaparamiento masivo de productos. Ayer no faltaron quienes trataron de sabotear una medida tan patriótica como el aumento del consumo de productos del mar. Hace pocos días, un pintoresco personaje que tiene título de diputado por los escudos que gasta en sus campañas, ha llegado al extremo de la irresponsabilidad, anunciando que el cerdo importado de China viene contaminado. Los que están contaminados con el virus del antipatriotismo y del odio al pueblo son los chanchos de la oligarquía y sirvientes de imperialismo.

El afán de recuperar posiciones perdidas conduce a muchos opositores a mentir inescrupulosamente, a falsear los hechos, a atacar al Gobierno por todo lo que hace.

Nos pondrán palitos

Las nuevas orientaciones económicas son tan correctas que de momento apenas pueden criticarlas. Pero que nadie se engañe. A medida que pasan

los días irán poniéndoles palitos. Tratarán de desvirtuar en el Parlamento aquello que requiere sanción legislativa. Por ejemplo, en relación al proyecto de reajustes, intentarán lanzar por el camino del economicismo y el reivindicacionismo sin principios a diversos grupos de trabajadores. En suma, harán todo lo posible por echar abajo la política del Gobierno.

En este camino tienen como aliados a la ultraizquierda y que llega al cinismo de afirmar que éste es un Gobierno reformista. Los ultras se aprestan para seguir revolviéndola en el campo, en la oposición frontal a lo que ha expresado el Presidente de la República en su ya citado discurso del 24 de julio. Mientras los trabajadores concentran su atención y su esfuerzo en las tareas verdaderamente revolucionarias de este momento, que siguen siendo las tareas de la transformación económica a expensas del imperialismo y la oligarquía y las tareas dirigidas a elevar la producción en todos los terrenos, acumulando fuerzas para pasar a los cambios revolucionarios institucionales, que nos permitan contar con un nuevo tipo de Parlamento y una nueva judicatura, el MIR cae en el infantilismo de propiciar caricaturas de Asambleas del Pueblo que sólo sirven para meter bulla y tratar de confundir a los trabajadores.

El Presidente de la República, compañero Salvador Allende, en carta dirigida a los partidos de la Unidad Popular, sale al paso de estas posiciones infantilizas y en el fondo contrarrevolucionarias. En ese documento, el Jefe del Estado traza una línea de conducción política del Gobierno, de la clase obrera y del pueblo, que apoyamos resueltamente, porque es una línea realista y revolucionaria.

La provocación de Lo Hermida

El contenido de ese documento volvió loco al MIR, el cual trató de ambientar más y más la infamia de que el Gobierno abriga propósitos represivos contra el pueblo. Para darle visos de verdad a tal mentira, se mostó la provocación de Lo Hermida, donde, por desgracia, cayó un obrero en la refriega con la policía. Los hechos que allí sucedieron son de público conocimiento y no hay por donde perderse. Una cosa son los pobladores y otra los delincuentes y provocadores. Estos últimos toman como pretexto los problemas reales que hay en las poblaciones para pasarse por revolucionarios, y especulan con el legítimo dolor que ha motivado la muerte de René Saravia, para crear la falsa imagen de que los responsables políticos de tan lamentable hecho son el Director General de Investigaciones, militante socialista Eduardo Paredes; el Subdirector del mismo servicio, nuestro camarada Carlos Toro, y el Subsecretario del Interior, nuestro compañero Daniel Vergara.

Rechazamos con indignación tales imputaciones.

Solidaridad con Toro y Paredes

Los comunistas expresamos nuestra solidaridad con Eduardo Paredes y declaramos enfáticamente que no aceptamos que se descargue la calumnia y

el impropio sobre militantes de nuestro partido, que son probados revolucionarios y abnegados y leales funcionarios del Gobierno, como Daniel Vergara o Carlos Toro, presentes en la Presidencia de este acto.

Los comunistas hemos batallado durante cincuenta años contra la represión que tantas vidas ha costado a los trabajadores, y, al llegar al Gobierno, mantenemos y mantendremos inquebrantablemente esta línea de conducta.

La Unidad Popular dio oportunamente su palabra sobre aquellos sucesos, dejando en claro, entre otras cosas, que la actuación de la policía correspondía a órdenes judiciales y no iba dirigida contra los pobladores. Por esto, sin perjuicio de admitir la posibilidad de errores cometidos por la policía, queremos expresar que también rechazamos las tergiversaciones que el MIR hace de los hechos, para atribuirle a ella la suma de las responsabilidades.

A pesar de que se trata de una policía formada en los regímenes pasados, a pesar de que es un cuerpo que no está constituido precisamente por luchadores revolucionarios, salvo en el caso de sus más altos jefes y de otras probables excepciones, no se puede olvidar que muchos de sus hombres se han jugado el pellejo en defensa del Gobierno, enfrentando a los pijes de Providencia, y que varios de ellos cayeron asesinados por los delincuentes de la VOP.

No propiciamos medidas represivas

En cuanto a la ultraizquierda, hemos dicho, y lo reiteramos hoy, que combatimos sus posiciones en el terreno ideológico y político y que no propiciamos contra ella medidas represivas. Son algunos de sus componentes los que andan arrastrando el poncho y buscan medidas de ese tipo para inducir a algunos sectores populares a enfrentar al Gobierno, inspirados en la idea calenturienta de que así podrán abrir una alternativa revolucionaria que niegan que ya la haya abierto la victoria popular en septiembre de 1970.

Papel contrarrevolucionario

La experiencia nacional e internacional demuestra el papel objetivamente contrarrevolucionario que juega la ultraizquierda y la frecuente infiltración en sus filas de agentes de la CIA. Demuestra, también, que el anticomunista es la principal bandera del imperialismo y de los reaccionarios para tratar de dividir el pueblo. Al sumarse al anticomunismo, el MIR le hace el juego a la Derecha, a los enemigos del Gobierno y de la revolución chilena. Por eso, nos preocupa que sus posturas seudorrevolucionarias encuentren algún eco.

Este es un gran peligro, acerca del cual alertamos al pueblo.

Decimos francamente que todo se iría al tacho si la orientación política trazada en la carta del Presidente de la República quedara sólo en el papel.

Pero al mismo tiempo, sabemos que los partidos de la Unidad Popular son capaces de cohesionar sus filas en torno al Programa de Gobierno; que el Presidente de la República, con el apoyo de los partidos que lo acompa-

ñan, es capaz de mantener firme en sus manos el timón, en plena consecuencia con las ideas expresadas en su ya referida carta, y que, por sobre todo, la clase obrera y el pueblo revolucionario tienen claridad sobre los rumbos que debe seguir la nación, fuerza para imponer esos rumbos y plena conciencia de que deben continuar jugándose enteros por llevar adelante, sin desviaciones, la revolución que está en marcha en nuestro país.

No nos apartaremos del Programa

Por nuestro lado, declaramos una vez más, enfáticamente, que no estamos dispuestos a apartarnos ni un milímetro del Programa de la Unidad Popular, que seguiremos trabajando por el más sólido entendimiento entre socialistas y comunistas y entre todas las fuerzas populares que están por los cambios y que son leales al pueblo y al Gobierno revolucionario que, en medio de tan serias dificultades, lleva y llevará adelante, y a la victoria, las tareas de la transformación social.

Y si hoy hemos colocado en el centro de vuestra atención la gran empresa de construir una nueva agricultura y de hacer un esfuerzo para aumentar la producción en el campo, es porque, a pesar de las provocaciones, no perdemos ni perderemos de vista a los enemigos fundamentales ni las tareas concretas y constructivas de la revolución".

Eliana Ahumada: Intervención en el Pleno Agrario del Partido Comunista

(*El Siglo*, 15 de agosto de 1972)

Un análisis de las experiencias agrarias del sector comprendido en el Comité Regional Cordillera, hizo Eliana Ahumada, miembro del Comité Central y Secretaria de ese Regional, al intervenir en el Pleno Agrario. En su intervención dijo:

El frente agrario, tema central de discusión de este Pleno del Comité Central, debiera haberse abordado con bastante anterioridad. Ciertamente es, que en varios Plenos anteriores el problema de la agricultura fue tratado, pero junto con los otros problemas que nos afectan este, según mi opinión, no fue tratado en profundidad como lo ha sido en el informe rendido ayer por el compañero Corvalán.

Ciertamente es también, que sólo en abril se dio término, en lo principal a la reforma agraria, o sea, las 80 hás de riego básicas, pero no eran un misterio para nadie, que la producción tanto en el área reformada como en el sector avícola y agropecuario evidenció fallas y retrasos durante el año agrícola y si ahora hacemos un recuento estas fallas y deficiencias no tienden a corregirse, sino a aumentar.

Por lo tanto, consideramos que esta discusión es no sólo necesaria sino imprescindible. Todos recordamos que cuando se había producido lo que se dio en llamar el “cuello de la botella” en los planes de vivienda, uno de nuestros plenos analizó el problema y planteó medidas concretas que se tradujeron en un avance en ese aspecto.

La Derecha y la ultraizquierda que le hace el trabajo se empeñan en desbaratar la economía, crear caos, llevar la intranquilidad a vastos sectores de campesinos medios y aún de parceleros.

Si a esto se añaden la verdadera invasión de personeros de organismos del Agro, que no sólo no ayudan, sino que confunden al campesino, tendremos que reconocer que en los sitios donde ha aumentado la producción, porque los hay, se debe más que nada a la fuerte conciencia que se ha desarrollado en el campesinado en este corto tiempo.

Aventureros ultras

En el sector de San José de Maipo, por ejemplo, los ultras están empeñados en que se expropien pequeños predios, hijuelas que por las condiciones del terreno sólo pueden ser aptos para ganado menor, pero lo que es más

grave, se engaña a los campesinos, y con medidas arbitrarias se lanzan a un buen sector de propietarios medios junto a la Derecha con estas medidas; las siembras y cultivo se retrasan, determinando baja en la producción.

La ultra en sus planes divisionistas se aprovecha de aquel sector de campesinos con mayor inexperiencia, determinado principalmente por su incorporación reciente a la organización, pero todo indica que allí donde el campesino siente la presencia del partido, no sólo rechazan a los chuecos, sino que les propina su merecido. Un caso concreto lo tenemos en el CERA, Salvador Allende, donde trabajan 80 campesinos y que tiene 1.200 hás. Allí los ultras con vista a ganar votos para la elección CUT, pretendieron dividir el predio y entregar parte de él a campesinos que trabajaban en quema de carbón. Fue tanta la indignación de los trabajadores, que se pararon todos los asentamientos y CERAS y en una movilización extraordinaria en que incluso se tuvo que llegar a la toma del camino para llamar la atención de las autoridades y se logró dejar sin efecto la aventura.

Hemos sacado de esta movilización una experiencia, que naturalmente debe servirnos, el partido tomó en sus manos firmemente la defensa de los campesinos, defendió sus derechos y estuvo junto a ellos a través del regidor y sus dirigentes. Y los ultra sintieron el repudio de los propios campesinos, y quedó demostrado que fueron éstos con su serena actitud quienes los desalojaron.

El aumento de la producción debe preocuparnos, de eso depende un ahorro considerable de divisas, pero acontece que no todos de los muchos organismos del agro, y ni siquiera muchos de nuestros compañeros funcionarios están firmemente convencidos de ello, decimos esto porque en el Asentamiento El Principal, se rebajó la cuota de siembra de trigo para este año en relación con el año anterior en 200 hectáreas. Se ve que la batalla de la producción de trigo y maíz no está todavía en la cabeza de nuestros compañeros. Ni siquiera están convencidos que los planes de producción deben ser discutidos con los campesinos, terminar con la imposición desde arriba de los planes agrícolas, sin considerar la capacidad y experiencia de los propios campesinos.

Diversificar producción

En el CERA, Salvador Allende de Pirque, de 620 hectáreas de riego, los campesinos han acordado aumentar la producción de maíz, ya que este año obtuvieron 600 mil escudos con la venta de maíz y 300 mil escudos de ganancia, pagaron el préstamo al Banco del Estado y con el excedente están construyendo casas sólidas y modernas para los trabajadores. Se proponen dar un impulso a la producción avícola y para eso están en plena construcción tres pabellones con capacidad para 36.000 aves. Con todo allí se debería ir a la ampliación y diversificación de la producción, especialmente la chacarería, ya que hasta las lechugas deben llevarse desde Santiago a precios especulativos. Pensamos que una buena medida sería crear cursillos para adiestrar a las mujeres campesinas en el cultivo de hortalizas, crianza de conejos, cerdos, adiestrar mano de obra en la crianza de

2902 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

aves en pabellones semiindustriales. Allí en ese mismo CERA las compañeras nos manifestaban que estaban cansadas de los ofrecimientos de diversos funcionarios de los distintos organismos en cuanto a la enseñanza y la ayuda técnica, cabe decir que el campesino en general tiene seria resistencia a estos ofrecimientos, ya que al no materializarse sólo confunden al campesinado, y por lo demás en muchos casos sólo contribuye a que prolifere el paternalismo como, en el mejor tiempo de la DC.

Ejemplos en el trabajo

Con todo, compañero, creemos que se evidencia en el campesino un espíritu nuevo, una elevación de la conciencia, de la responsabilidad. En el CERA Fidel Castro de 600 hás, trabajan allí 65 campesinos con una producción de 5 mil litros diarios de leche con alta técnica, el trabajador, un técnico lechero, nos manifestaba que su mayor anhelo era convertir ese CERA en un centro reproductor de ganado fino para toda la zona, y no como antes en que el propietario sólo se preocupaba del mejoramiento de sus animales. Y qué decir de la actitud de los compañeros del Salvador Allende que en una visita que hicimos con el compañero Figueroa y el compañero Millas el presidente del CERA nos decía que tanto la cosechadora como los tractores que ellos tenían, eran facilitados a los otros asentamientos y CERAS, para que así nadie quedara atrás en las labores por falta de maquinarias, y cómo no sentirse orgullosos de los campesinos del CERA Huingal de 410 hás, que están trabajando hasta altas horas de la noche para ponerse al día en la siembra del trigo, debemos señalar que en este caso la asesoría de CORA ha sido efectiva, se les entregó un tractor rumano y una rastra, y las formas de participación son satisfactorias. Creemos que este es un buen ejemplo de toma de posesión y que por lo tanto la respuesta de los campesinos no se hace esperar.

En el sector agrícola de nuestro Regional tenemos 5 CERAS y dos asentamientos, siendo en Pirque donde la participación se da en mejor forma, casos de CERA Fidel Castro, Salvador Allende y el Huingal. En San José de Maipo está recientemente constituido el CERA Ricardo Fonseca. En los asentamientos la participación no se produce, ya que allí aún imperan formas paternalistas. El caso más dramático es el de El Principal, de 1.295 hás de riego y sólo se explotan 600 hás, ya dijimos que este año se les impuso una rebaja de 200 hás, de trigo, de 1.943 hás de empastadas naturales, de ellas 243 de riego. Pues bien, estas empastadas no son aprovechadas para nada. En total hay 400 animales de propiedad de los asentamientos, en circunstancias que estas magníficas empastadas podrían recibir un número mayor de cabezas de ganado.

Falta más contacto

Capítulo aparte de la relación entre nuestros funcionarios del Agro y las direcciones locales y regionales del partido. Esta es débil o inexistente, generalmente el partido se informa por el diario de las expropiaciones o la toma de

posesión, y mucho menos poder conocer los planes de producción a pesar de todos los esfuerzos hechos y de contar con una buena Comisión Agraria.

En relación con las viñas que están o pasarán al área mixta y reformada, la información es escasa, aun cuando hay no menos de seis que están en la lista.

Compañeros, por constituir el sector de Pirque y San José de Maipo, una concentración importante de campesinos, se impone ir inmediatamente a la creación de una escuela agrícola, cuyo proyecto fue anticipado por el compañero Millas, hace bastante tiempo, pero a pesar de los viajes, trámites, ante-salas en el Ministerio de Educación, esto aún no se concreta y tenemos que sólo en El Principal hay 600 jóvenes que no tienen perspectivas de trabajo.

Estamos totalmente de acuerdo con la proposición del compañero Corvalán de desplazar a los técnicos agrícolas al trabajo junto con los campesinos, lo mismo creo, que debería verse el caso de muchos técnicos agrícolas, que están en otras labores no de tanta importancia y que en cambio su aporte en el campo sería valioso.

José Cademártori: Intervención en Pleno Agrario del Partido Comunista

(*El Siglo*, 15 de agosto de 1972)

Area reformada, eslabón decisivo en el mercado de la producción

Camaradas:

El propósito principal por el cual ha sido convocado este Pleno lo expresó ayer el camarada Corvalán: "Meternos en la cabeza y en la sangre el contenido revolucionario y el carácter decisivo que tiene la batalla de la producción en el campo". Comprender la idea de que el avance hacia el socialismo pasa por el fortalecimiento de la alianza obrero-campesina.

En efecto, millones de chilenos, centenares de miles de niños están desnutridos, como consecuencia de decenios de explotación capitalista y terrateniente. La posibilidad de mejorar la dieta alimenticia, de aumentar la cantidad de calorías y proteínas que consume nuestro pueblo depende esencialmente de que nuestra tierra produzca con el esfuerzo laborioso de los campesinos y la ayuda de la clase obrera, los cereales, la carne, frutas y verduras que necesita la población.

Alzas en el mercado mundial

Ahora que se está poniendo fin al latifundio, que se ha erradicado la cesantía y que los salarios miserables van quedando como cosas del pasado, se acrecientan los consumos alimenticios. El pueblo quiere ejercer su poder de compra y en estos veintiún meses no ha habido otro camino para satisfacerlo que el de traer más carne, trigo, leche y demás productos, desde el exterior. Pero esta salida se estrecha cada día más, en razón de las graves dificultades en nuestro comercio exterior. La diferencia en el precio del cobre, que regía en el año 1970, comparado con el actual, está significando una pérdida de ingresos de divisas de 115 millones de dólares, lo que representa casi el 50% de las divisas presupuestarias para importar los alimentos y productos agropecuarios que nos hacen falta. Además, las alzas que han experimentado en el mercado mundial en el último año los precios de la carne, azúcar, arroz, leche, mantquilla y aceite significan un mayor gasto para las mismas cantidades que importamos el año pasado de otros 90 millones de dólares.

Hay que marchar hacia el campo

La baja del precio del cobre tiene efectos tan poderosos que aunque la producción del mineral aumente al máximo en las actuales condiciones, no podrían compensar las pérdidas por la baja del precio. Por eso, no hay otra alternativa que mirar la agricultura. No hay más remedio que dar un vuelco y marcha hacia el campo.

Los terratenientes pretenden hacer creer que, porque se termina el latifundio, la producción agropecuaria se ha venido al suelo. Hablan de quiebra, de catástrofe como si viviéramos bajo los efectos de una guerra o un cataclismo. Esto no pasa de ser una falsedad propia de quienes han sido desplazados por el inevitable progreso social.

Los revolucionarios deben saber y conocer bien la verdad que no está en los terratenientes, pero tampoco en aquellos compañeros que ocultan los problemas y pretenden mostrar un panorama color de rosa como el que supone la Oficina de Planificación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura que calculó un aumento del 5,5 por ciento de la producción agrícola para el presente año. Lo más probable es que este año tendremos un aumento de producción, con incrementos importantes en algunos rubros y bajas considerables en otros, lo que, en todo caso, es insuficiente para las necesidades acrecentadas en el último tiempo.

El eslabón decisivo

El área reformada de la agricultura está llamada a ser, en los próximos años, el eslabón decisivo en el mercado de la producción agropecuaria. Como lo dice el informe, el 48 por ciento de la tierra regada está ya en manos del sector reformado. En los fundos expropiados hasta diciembre del año pasado se podía producir casi el 20 por ciento del trigo cosechado en el país; casi el 30 por ciento del arroz; el 25 por ciento de los porotos en sus diversas variedades; casi el 25 por ciento del raps; más del 50 por ciento de la remolacha y cerca del 80 por ciento de la maravilla. Algunos cálculos preliminares indican que la cosecha de vino proviene hoy en su mayoría del área reformada. Esto significa que si impulsamos fuertemente la producción en este sector ya el próximo año podemos esperar efectos significativos en la disponibilidad de cereales, hortalizas y frutas para la población.

El año pasado la CORA hizo un primer plan rudimentario de siembras en el sector reformado, los resultados de este primer esbozo de plan, ejecutado con muchos defectos, particularmente por la falta de una amplia participación de los campesinos, demuestra con todo que se pueden lograr éxitos significativos. Así, por ejemplo, la siembra de cebada cervecera, de trigo no asociado, de frejoles de exportación y de cultivos industriales como el pino y el tabaco se cumplieron o estuvieron muy cerca de la meta programada.

Intercambio justo y equitativo

En el macizo informe del camarada Corvalán se analizan diversos y delicados problemas políticos y organizativos del sector reformado. Allí se contienen criterios y orientaciones plenamente justas cuya aplicación permitirá dar un impulso al desarrollo productivo de las haciendas reformadas.

De lo que se trata a nuestro juicio es de organizar el intercambio justo y equitativo, entre la ciudad y el campo, establecer las nuevas relaciones entre la industria y la agricultura, es decir, plasmar en las relaciones económicas, la alianza obrero-campesina.

El Estado, bajo el Gobierno Popular, Gobierno de trabajadores, tienen la tarea de proporcionar los medios de producción, los abonos, las maquinarias, el combustible, los anticipos financieros en dinero para adquirir esos elementos de trabajo y los objetos del consumo personal. Nada de esto puede entregarse a título gratuito sino que a cambio de un valor económico equivalente. Y ese valor económico equivalente no puede ser otro que el valor correspondiente a la producción que entreguen los campesinos de acuerdo con cálculos económicos objetivos y precisos. Se trata de obligaciones y derechos equivalentes por ambas partes, la producción que exceda del valor de los medios de producción y medio de consumo entregados por el Estado, es propiamente el excedente, que queda en poder de los campesinos para su libre disposición, sea para convertirlo en dinero mediante la venta, también al Estado, de esta producción excedente o para venta libre en el mercado o bien para su propio consumo personal.

Ampliar el estímulo y la ayuda

Este tipo de relaciones mercantiles no es enteramente nuevo en el país. El informe ha destacado los ejemplos de SOCORA e IANSA, dos empresas del Estado que desarrollan con los campesinos y agricultores pequeños o medianos estas relaciones de intercambio. Ellas constituyen una forma de estímulo y ayuda a los campesinos. De lo que se trata es de ampliar a todo el sector reformado y también al sector privado pequeño y mediano y no sólo para un producto sino para todos, para cereales y chacras, vinos y frutos, carnes y leches.

Las relaciones entre CORA, ECA y otros organismos estatales con los campesinos adolecen de diversas fallas, entre otras, el que las operaciones de compra y venta, de crédito, de planificación de la producción marchan casi por completo, separadamente. ECA compra trigo y otros productos, sin contratos previos, sin relación con los anticipos que van por el Banco del Estado. CORA planifica por su cuenta, con toda razón el informe se refiere a la deformación que se produce con el anticipo a cuenta de utilidades que recibe el campesino por parte de CORA, el Banco del Estado que adquiere para él la forma de salario. Si a esto se agrega que las contabilidades se atrasan por años, se comprenderá la imposibilidad práctica de determinar los verdaderos excedentes o utilidades de la producción.

Las cuentas claras

Así, pues, se hace necesario una revisión a fondo de las actuales relaciones entre ECA, CORA y Banco del Estado por una parte, y las empresas campesinas, sean estas asentamientos, “Ceras”, o cooperativas asignatarias. Los anticipos, la entrega de medios de producción y consumo, la asistencia técnica tienen que estar vinculados a la producción y esta a la venta a los organismos del Estado del volumen equivalente a los anticipos. El riguroso cálculo económico, las cuentas claras, el establecimiento de compromisos y contratos anticipados, van en beneficio de los campesinos y del Gobierno Popular, contribuye al desarrollo de relaciones mutuamente favorables, fortalece la alianza obrero-campesina, estimula el aumento de la producción y de los ingresos campesinos.

No habrá desarrollo de la producción si en ella no están interesados directa y personalmente los obreros y campesinos. Ya lo decía Lenin: “Hay que construir cada una de las grandes ramas de la economía nacional sobre la base del interés personal”. Es por eso que el compañero Corvalán expresa en su informe “adquiere una importancia decisiva la puesta en marcha de un sistema contable y de control que le permita al campesino saber, no sólo a fin del año, sino mes a mes, cómo va la producción, cómo va el cumplimiento de las tareas para que visualice de esta manera la significación de su esfuerzo en su propio interés”.

Por eso corresponde enteramente a estos mismos propósitos, lo enunciado por el Presidente Allende en su discurso del 24 de julio cuando señaló que “todo asentamiento, unidad productiva reformada o agricultor particular sujeto a convenio de producción que demuestre que ha sobrepasado los rendimientos por hectárea y simultáneamente con ello, haya aumentado la producción del año anterior, tendrá una prima de incentivo a la producción equivalente a un porcentaje del precio establecido por los poderes compradores del Estado, aplicado sobre el total de sus ventas”.

Empeñarse a fondo en la batalla

Desde el punto de vista político, uno de los problemas más negativos que enfrentamos, es el desabastecimiento, particularmente de productos alimenticios.

Para enfrentar este problema de manera de lograr resultados visibles de aquí a los próximos meses, no queda más que empeñarse a fondo en la batalla de la producción, particularmente en aquellos rubros en que son más notorias las deficiencias y hay más posibilidades de éxito a corto plazo, en este sentido.

En este sentido el informe dedica una parte significativa a tratar el problema de la industria avícola. Aquí tienen la palabra los campesinos de los predios donde hay o habrá planteles de engorda, los trabajadores de las plantías ENAVI y las privadas, los funcionarios de las instituciones que tienen que ver con esta industria y los comités regionales donde están instaladas empre-

sas de este tipo. Se trata de ver aquí cómo superamos las deficiencias y errores anotados en el informe.

Del mismo modo y por las razones ya anotadas hay que destacar que los cultivos en los que hay que poner el acento son particularmente, el trigo, el maíz, el arroz, la maravilla y el raps, la remolacha, las cebollas y las papas, la crianza de cerdos, la producción de leche y aves. Todos estos productos pasan a ser decisivos en estos momentos porque si en las cosechas de la presente temporada obtenemos buenos resultados lograremos también éxito en los problemas del abastecimiento y de las divisas, problemas ambos que están íntimamente ligados entre sí.

Finalmente, para los comunistas que no tenemos directa relación con las tareas del campo, este Pleno nos llama a preocuparnos de un asunto, al cual sólo de tarde en tarde le prestamos atención. Si de las necesidades de la mayoría de los chilenos, alrededor de un 40 por ciento corresponden a los alimentos, si de cada cien chilenos, 30 viven en los campos y aldeas; si de cada 100 divisas casi un tercio estamos dedicando a productos del campo; quiere decir que nuestro trabajo, nuestros pensamientos y preocupaciones, nuestras tareas concretas, nuestro tiempo y reuniones tiene que dedicar una proporción similar a todos los asuntos relativos al campo, a la agricultura, a la alimentación.

El éxito, la victoria de nuestra revolución, así lo exige.

Alejandro Toro: Intervención en el Pleno Agraria del Partido Comunista

(*El Siglo*, 15 de agosto de 1972)

En el Informe entregado a este Pleno por el camarada Corvalán se destaca la importancia que la asignamos los comunistas a la participación en el proceso revolucionario de los pequeños y medianos agricultores. Se recuerda que en la historia de Chile, si se compara la producción entregada por el latifundio, con la de los pequeños y medianos agricultores, estos últimos superan a los primeros de dos a cuatro veces. Sufrieron muchas dificultades y trabas por parte de la oligarquía que manejaba a su antojo los créditos o la comercialización de los productos; a menudo les negaron la sal y el agua, y en general fueron explotados por el latifundio. *Por lo tanto, los pequeños agricultores han jugado un papel progresista y patriótico.* Por eso la Unidad Popular, y así lo expresa el Programa, por eso los comunistas, los consideramos parte integrante del proceso, y en este instante, llamados a jugar un papel importantísimo en la producción agropecuaria. No entenderlo así, y por el contrario, crear dificultades odiosas y caer en la torpeza sectaria, lo único que permite es que la Derecha se los pololée, pretenda manejarlos y los embarque en acciones para favorecer sus intereses reaccionarios.

Ganar aliados

Por eso, que quien no entiende esto, y le da con el mocho del hacha al pequeño agricultor, cae en la contrarrevolución, como muy bien lo ha dicho nuestro Secretario General.

Por eso estimo que la gran mayoría de los pequeños agricultores se sentirán interpretados por el Informe a este Pleno en la medida que tomen conocimiento de él, en la medida, que tomen conocimiento de sus debates y conclusiones. Esta será nuestra tarea que involucre ganar un aliado para la revolución.

Ya en su tiempo, Lenin señalaba que para satisfacer los intereses de los campesinos son necesarias dos cosas: primero, cierta libertad en la circulación de mercancías, libertad para el pequeño propietario privado, y segundo, mercancía para ponerlas en circulación. Si tenemos en cuenta las leyes económicas, más aún, si nos ubicamos en la complejidad de nuestra actual situación en que se trata de pasar de una agricultura atrasada a una avanzada; en que se trata de liquidar la herencia funesta del latifundio, de terminar con sus vicios, generando una agricultura progresista que ponga en plena producción la tierra, y si a esto agregamos las características del proceso revolucionario chileno, cobran aún más fuerza las recomendaciones de Lenin.

2910 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

Porque sucede que en este período de transición en que se trata de consolidar el área reformada de la agricultura surgen dificultades naturales, a menudo agudizadas por nuestros propios errores, o deficiencias o por los vicios que vienen del pasado. Hay problemas ideológicos y de conciencia. Por eso, este Pleno está llamado a jugar un gran papel en el futuro, en la medida en que la situación del agro sea tarea de todo el pueblo, en la medida en que el sacrificio y la entrega, la pasión y el coraje sean nuestras características para cumplir con las tareas de producción y desarrollo de nuestra agricultura. Sabemos que hay muchas experiencias positivas en el campo y aquí tendremos la oportunidad de escucharlas; aprendamos de ellas.

Incorporarlos al proceso

Pero en este instante, ¿en quién más fuera del sector reformado, podemos y debemos apoyarnos? Sin duda alguna, que en los pequeños agricultores, en los pequeños productores, considerando su incorporación y participación en el proceso.

Días antes del Pleno llegaron a la Cámara de Diputados, un grupo numeroso de pequeños agricultores. Antes habían concertado entrevistas con los diversos comités parlamentarios: en lo que respecta a los comunistas fuimos designados Mario Riquelme y el que habla para conversar con ellos. Los escuchamos largamente, y luego les planteamos algunas cuestiones de nuestra política, informándoles de la realización de este Pleno. Se interesaron de tal manera que de inmediato convenimos en comenzar a concretar algunas cosas, y el sábado en la mañana han venido a conversar con la Comisión Nacional Agraria, al Comité Central del partido.

Se trata de la Confederación Nacional de Pequeños Agricultores de Chile que agrupa sobre noventa mil socios en el país, según expresión de ellos, y después de conversar largamente con ellos nos entregaron por escrito sus demandas y preocupaciones, sus críticas y deseos de colaborar, pidiendo participación en la política agropecuaria. Y la verdad, como bien se los expresó el compañero Nazal, podemos ponernos de acuerdo en el ciento por ciento de las cuestiones planteadas.

Algunos de estos dirigentes de pequeños agricultores han participado en retomas de predios chicos y han caído presos durante este Gobierno. Ellos mismos lo plantearon. Otros han sido ganados para algunas acciones que emprenden los momios, entre otras razones, porque no hemos sabido trabajar con ellos.

Nos dijeron que había faltado contacto con nosotros, conversar con nosotros. Pero lo importante, compañero, es que han venido a la casa de los comunistas, a ponerse de acuerdo con los comunistas.

Camaradas:

Estimo que todo lo planteado por los pequeños agricultores es atendible y coincide en general con lo planteado en el Informe a este Pleno. La Comisión Nacional Agraria estimó, que cada uno de sus integrantes abordara aspectos determinados de la cuestión agraria. A mí me ha correspondido men-

cionar el papel de los pequeños agricultores. Estimamos que es una obligación y deber de nuestra parte ganarlos para la revolución, en particular en esta etapa para cumplir con las tareas de la producción.

César Cerda, del Comité Central y de la Comisión Agraria: Para afianza el proceso hay que lograr la unidad del campesinado

El informe rendido por el camarada Corvalán indica que el Gobierno de la Unidad Popular en el lapso de 21 meses casi ha completado la expropiación de los latifundios superiores a 80 hás. de riego básico. Esto es lo que caracteriza al Gobierno del Pueblo en la lucha contra el imperialismo y la reacción oligárquica y terrateniente.

Formas de organización

A cualquier punto del país que vamos de Arica a Magallanes, nos encontramos con que se está llevando a efecto el proceso de Reforma Agraria, pero al mismo tiempo nos encontramos con que el campesinado está preocupado y abocado al problema de cómo organizar las unidades productivas, es decir, cómo orientar las nuevas relaciones de producción que se van dando en el campo.

Existen asentamientos, y se ha asignado la tierra a aquellos que ya cumplieron su plazo legal como organización transitoria pasando a constituirse en Cooperativas Asignatarias, se encuentran los Centros de Reforma Agraria, organización transitoria la cual tendrá que asignar la tierra una vez cumplido el plazo legal; existe además, el Comité Campesino, organización intermedia entre el Asentamiento y el CERA, que cuenta también con el apoyo técnico y crediticio del Estado; existen Centros de Producción cuya forma de organización y su estructura; aún no se define dentro de la Unidad Popular; están las Cooperativas de Producción que se organizan en las Reducciones Mapuches, organizaciones productivas que se están dando nuestros hermanos como una manera de paliar en parte el problema del minifundio en las reducciones, experiencia que está dando buenos resultados.

Todo este tipo de organización productiva que aparece en el campo lleva también consigo una fuerte lucha ideológica, donde por un lado el sector derechista de la Democracia Cristiana impulsa junto con el Partido Nacional la propiedad individual y la política del tejo pasado y por el otro extremo, nos encontramos con la política de la ultraizquierda que desea e impulsa la estatización de la tierra en el campo y las peticiones desmedidas.

La distribución de la tierra

En los campos aparecen diversas teorías sobre la tenencia de la tierra, unas que no debe asignarse la tierra a los campesinos y que debe crearse un

fondo nacional de la tierra y otras sostienen la necesidad de integrar predios, estos últimos incluso hablan de integrar comunas enteras, lo que a nuestro juicio, viene a ser una copia de la Comuna Popular China. Al respecto conviene recordar que el decreto de Lenin, sobre la propiedad de la tierra se basaba en el mandato de los campesinos a sus diputados, acerca de la distribución equitativa de la tierra, a pesar de que Lenin consideraba que tal distribución no era justa, pues la pequeña hacienda no podía sacar a los campesinos de la miseria, ni a la agricultura del atraso.

¿Por qué Lenin accedió al mandato de los campesinos? “Como Gobierno democrático –respondía Lenin–, no podemos dejar de lado la decisión de las masas populares, incluso aunque no estamos de acuerdo con ella. En el crisol de la vida, en su aplicación práctica, poniéndola en ejecución en cada localidad, los propios campesinos verán dónde está la verdad. . .”

Escuchar a campesinos

Hace cuatro días, hemos tenido conocimiento que en Osorno se estaba planeando una reunión para este jueves recién pasado de campesinos de 16 predios de una comuna, los cuales discutirían la necesidad de integrarse y formar una sola cooperativa. Cabe recordar que el año pasado ya se había intentado erróneamente formar cooperativas regionales agrarias, metiendo en un sólo saco a pequeños agricultores, a asentamientos antiguos y predios recién expropiados, lo cual no nos pareció ajustado. Con relación al caso de Osorno hemos planteado a nuestros compañeros de CORA la necesidad de estudiar minuciosamente este caso por examinar los orígenes de esta iniciativa y, lo principal, saber *qué opinión tienen los campesinos* para poder avaluar así qué resultados positivos puede traer una organización de este tipo, a pesar que está probado históricamente que estas grandes empresas en el campo no dan tan buen resultado.

Este problema no es nuevo, se lleva discutiendo más de un año y los propios campesinos han sido los encargados de poner las cosas en su lugar, tal es el caso de lo que sucede en las Estancias Ganaderas de Magallanes, que al ser expropiadas pasaron a organizarse en Centros de Producción y allí llegó la orientación de integrar dos o más estancias de más de 50.000 hás. cada una en una sola empresa. ¿Qué han dicho los campesinos? Ellos manifiestan que no es correcta esta solución por cuando se corre el riesgo de perder la dirección y el control de la producción, porque incluso no se controla el trabajo y se roban los animales.

Lo esencial: la unidad de los campesinos

Decía que las nuevas relaciones de producción en el campo se están llevando a efecto, junto a una fuerte lucha ideológica, pero es bueno recalcar, que lo fundamental para afianzar este proceso y ganar al campesinado para la ideología del proletariado como su aliado fundamental, está primero lograr la unidad de todo el campesinado chileno y existen las condiciones objetivas para

ello. Al campesino le une un interés común: el derecho a la tierra que trabaja y el bienestar de su familia.

El hecho que 3.374 predios hayan sido expropiados por este Gobierno en poco más de un año da la posibilidad de que la correlación de fuerzas se vuelva favorablemente al Gobierno, en la medida en que nos despojemos de todo sectarismo y en que libremos la lucha política contra las desviaciones de izquierda y de derecha, en forma resuelta sin dar tregua al enemigo.

La unidad de los campesinos se logrará y se logra en los hechos, en la medida en que se toma contacto con ellos y se les ayuda a resolver sus problemas. Ejemplos hay muchos de esos, pero queremos destacar uno: el de los campesinos de Coquimbo en las elecciones recién pasadas en el Asentamiento "Unión Campesina" de Punitaqui, los cuales siendo en su mayoría democratacristianos estuvieron de acuerdo en unirse como clase trabajadora en contra de sus enemigos representados por el señor Poblete. Estos campesinos trabajaron junto a socialistas y comunistas en contra de la Derecha y apoyaron a la candidata comunista. Esto nos está demostrando que es necesario romper con el sectarismo y dejemos de considerar como enemigo tal o cual asentamiento, porque está dirigido por democratacristianos. Por el contrario, hay que hacer esfuerzos por entregarles ayuda técnica y crediticia y no pensar en vengarnos y castigarlos porque no nos acompañaron en este proceso y por este hecho los confundamos con el enemigo principal.

Consejos Comunales y Sindicatos

Camaradas, existe preocupación en la Comisión Agraria porque a pesar de haber decisiones en políticas agrarias dentro de la Comisión Nacional de la Unidad Popular no se hacen en las bases los suficientes esfuerzos porque sean respetados, tal es el caso de los Consejos Comunales Campesinos, donde hemos estado de acuerdo en el carácter que tiene este Consejo y en sus atribuciones.

El Consejo Comunal Campesino fue concebido con el espíritu de unificar a todos los campesinos en función de sus intereses y respecto a ello llevar a cabo acciones comunes.

Está planteado que la solución de los problemas de la ciudad y del campo está ligada íntimamente a la acción de las masas organizadas, y para nosotros comunistas el sindicato es la organización que garantiza la participación de los campesinos en todo el proceso de reforma agraria.

En este instante está en discusión en la Comisión Nacional Agraria de la Unidad Popular la integración de los organismos del agro. Esto ha demorado más de la cuenta y creemos que se debe fundamentalmente a que ha faltado presión de las masas campesinas y de los propios trabajadores del agro, en las zonas.

A esto hay que agregar que hemos tenido que enfrentarnos a una estructura heredada del pasado y que trae consigo la burocracia, la tramitación y el camisetismo institucional. Además nos hemos tenido que enfrentar con algunos funcionarios de Gobierno que no ayudan a que la integración se acelere.

Es necesario que las masas exijan la pronta puesta en práctica de los acuerdos del Arrayán el cual consideró especialmente la integración. La discu-

sión de la integración ha llegado a su fase final. De lo que se trata ahora es de superar los “detalles” que han detenido su aplicación.

Existe consenso casi unánime de todos los partidos de la UP en que Producción, Tenencia de la Tierra y Obras Civiles queden en CORA; Comunicaciones y Capacitación en INDAP; Centrales Agropecuarias, Desarrollo y Conservación de los recursos naturales en el SAG. Es posible que esto quede solucionado a la brevedad siempre que haya presión.

La integración ayudará a que los campesinos tengan una mayor atención desde el punto de vista técnico crediticio y social, además significará ahorro de los recursos humanos y financieros para el Estado. Las organizaciones de masas campesinas y de funcionarios del agro, tendrán la responsabilidad de luchar contra la burocracia y la tramitación.

En la última reunión de nuestro Comité Regional, realizada para recoger la opinión de la Dirección sobre los avances y dificultades habida en el agro y con motivo de la citación a este Pleno, uno de los compañeros participantes resumió su pensamiento diciendo: “Esperamos que la realización de la reunión plenaria del Comité Central contribuya a definir con claridad el pensamiento de los comunistas sobre los problemas agrarios frente a los campesinos del país y se convierta en la luz orientadora necesaria a objeto de superar con la participación consciente de la clase obrera y los campesinos en las complejas dificultades presentes”.

Hemos llegado y saldremos de esta reunión con este espíritu. Concordamos con el Informe del camarada Luis Corvalán cuando plantea que “la cuestión agraria es lo más complejo en toda revolución” y saludamos este informe como una valiosa contribución a la aclaración de nuestro pensamiento y como útil herramienta para la rectificación de los errores en la política agraria del Gobierno Popular.

Estimamos que es imposible abordar los complejos problemas agrarios con comisiones tradicionales y rutinarias, por tal motivo hemos conformado un secretariado de la Comisión Agraria, compuesto por los encargados de las siguientes subcomisiones: Área Reformada, Área no Reformada, Pequeña y Mediana Agricultores, Cooperativas Campesinas, Consejos Comunales, más la participación de un representante de las J.J.CC. Con esta escritura estamos afrontando con mayor éxito el primer imperativo: organizar a los campesinos, logrando en ellos influencia del partido y la Unidad Popular.

Talca tiene una población de 231.008 habitantes: la población rural es de 129.887; en esta población rural existen 24.076 asalariados agrícolas, de los cuales 9.907 están organizados; 7.488 pequeños agricultores, entre los que hay 4.776 organizados; hay 5.246 mujeres y están organizadas 5.033. Estas cifras ponen de manifiesto las metas que nos falta lograr.

Comisión Agraria UP

Por otra parte, funciona presidida por el Intendente de la provincia la Comisión Agraria de la Unidad Popular, cuya programación hemos impulsado con relativo éxito, orientándola a la coordinación de los servicios del agro,

donde hemos logrado la fusión y coordinación de las áreas de CORA y SAG, por ejemplo, para fortalecer la campaña de la producción; a la organización de los Comités de Vigilancia; al funcionamiento y ampliación de los Consejos Comunales Campesinos; a mejorar la capacitación que permita al campesino integrar y participar en el proceso; a fortalecer la unidad campesina y la alianza obrero-campesina y hay un delegado campesino de la CUT en esta Comisión; a la movilización activa que permita defender las conquistas alcanzadas, en especial contra las maniobras de los latifundistas apoyados por el Tribunal Agrario que ha dictado lo que llaman medidas prejudiciales precautorias, que impiden en la práctica el impulso de la Reforma Agraria. De los predios expropiados, 15 tienen medidas prejudiciales y 5 de ellos estaban ya en manos de los campesinos, incluso trabajándolos. Nuestra respuesta ha sido la de continuar con las labores agrícolas y solicitar la intervención de estos predios, para que contribuyan a la batalla por la producción. Otra preocupación conjunta del partido y la Unidad Popular es lograr la incorporación de las mujeres y los jóvenes campesinos, para tal efecto, programaremos asambleas o Encuentros Comunales. Otra preocupación importante son los Consejos Comunales Campesinos formado en las 9 comunas de la provincia por el anterior decreto y ampliación por la base en 5 comunas, trabajo que aún se continúa; creemos necesario, para que haya efectiva participación, se resuelva el problema del financiamiento de estos consejos.

Si bien es cierto, se afianzan algunas cosas, no todo, por cierto, es miel sobre hojuelas, las descoordinaciones, lo visos de sectarismo y burocratismo, el trabajo oficinesco, el camisetaismo institucional, el impulso a las expropiaciones con criterio administrativo y sin participación combativa de los campesinos, se produce, e incluso alguna suerte de indiferencia de organizaciones campesinas.

Existen en la provincia 47 asentamientos, 198 comités campesinos, 10 CERA, 31 predios que no se han recibido, 9 cooperativas. Conforme al plan de expropiaciones del año 1972 se han recibido 174 predios y falta por tomar posesión de 31.

Trabajo ejemplar

La mayor cantidad de problemas está en los asentamientos y así como se dan casos de ausentismo laboral, alcoholismo, sobresalen también excelentes ejemplos.

Queremos destacar el del CERA Luis Emilio Recabarren, por la alta conciencia demostrada en su trabajo y el Cóndor, de Molina, quienes trabajando incansablemente podaron en 15 días su viña.

Por otra parte, la batalla por la producción, pese a las condiciones climáticas, no es una batalla perdida aunque la gran cantidad de trabas hagan temer un normal resultado. Estamos empeñados en llevar adelante, con mucha fuerza, una campaña de permanente estímulo a la productividad de los predios, el esfuerzo de los compañeros campesinos más responsables, iniciando al mismo tiempo, campañas de emulación entre ellos y buscando formas

1916 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

sencillas de entregar estímulos morales y materiales; junto a ello empeñaremos nuestro esfuerzo en estudiar el problema de los estímulos económicos a los trabajadores especializados y el problema de los tratos que no se contemplan en los planes de explotación.

Algunas de las trabas a que aludíamos son las siguientes: en primer lugar, el problema de los créditos y las deudas de los predios. Podemos decir enfáticamente que el Banco del Estado sigue operando en el criterio burocrático clásico: por ejemplo, le negó a los predios que no tenían abiertas sus cuentas corrientes el crédito necesario para la compra de semillas, el banco no tiene semillas forrajeras, como trébol y ballica; lo que es peor, no tienen lista de precios de insumos, etc. Por otro lado, el 6 de junio la deuda de 82 unidades reformadas ascendía a E° 56.340.793,17, sin embargo, debemos dejar establecido que esta deuda habría sido rebajada, pues estaban pendientes las cosechas de arroz, vino y remolacha.

Otro problema es la falta de semilla de papa temprana y cosecha; se necesitaban en el área Talca entre 20 a 30.000 qq de semillas de papas de primer año, y como no es posible conseguirlas se tendrá que estudiar la siembra de papas de semillas de segundo año, lo que, indudablemente disminuiría los rendimientos. Falta asimismo salitre el que no ha llegado a la zona por falta de transporte y hay urgente necesidad de azufre. Se ha detectado falta de colosos, rastras y arados de discos y en maquinarias, y el problema de tractores está normalizándose.

La superficie sembrada en el año agrícola 71-72 en la provincia fue la siguiente: trigo, 28.320 hás.; arroz, 7.500 hás.; porotos, 9.480 hás.; maravilla, 2.890 hás.; maíz, 5.080 hás.; sólo por mencionar algunos.

El área mixta

Es preciso recalcar que no se ha fijado la política de precios que se había prometido para el mes pasado y que se producen competencias inútiles entre algunos organismos de Estado como SOCORA y ECA.

En relación a las viñas se mantiene sin aclarar el problema del área mixta lo que da lugar para muchas posiciones extrañas y esta cuestión sigue siendo tan confusa como el problema de la integración o estructuración de los servicios del agro.

Sobre el abastecimiento, creemos que no habrá problema de trigo, por lo menos, hasta enero; en la carne hay dificultades, el papel de los compradores que mantiene SOCOAGRO es muy especial, no responden a nadie y no cumplen muchas veces con las normas fijadas y publicitadas por ese organismo; en los pollos, sabemos que ENAVI no entregará hasta octubre, creemos que no se aprovecha bien la producción de la provincia, ya que hay cerca de 1.200.000 ponedoras. El subtitulo de la carne, el pescado, no tiene posibilidad que se nos entregue hasta por lo menos, 30 días más, lo que nos enfrentará a un 18 muy difícil.

Insistimos en que es urgente una subsidiaria del terminal pesquero en las instalaciones del Matadero Maule, que permanece casi inactivo, con esto podríamos suplir la falta de carne y pollos.

Compañeros: Es indudable que no podemos abarcar la multiplicidad de problemas. Quiero decir que nos orientamos a enfrentar las dificultades y en alguna medida lo estamos haciendo. Hemos lanzado la consigna de: El partido hacia el campo, compartida por las resoluciones del Congreso Regional de nuestras Juventudes Comunistas; vamos a aumentar los programas radiales que mantenemos hacia el campo; masificaremos los esfuerzos de la alfabetización; consolidaremos los vínculos de la clase obrera con los campesinos, pero en cosas concretas, como por ejemplo, ya están trabajando dos obreros en la comisión preparatoria del Congreso Campesino; estamos dando la batida para fortalecer los organismos de dirección intermedia en las zonas rurales, no descuidando otras medidas, ni el esfuerzo hacia los pequeños y medianos agricultores, ya que con una parte importante de ellos mantenemos buenas relaciones y magníficas experiencias.

Sabemos que el proceso revolucionario espera eso y mucho más de nosotros. Que es necesario ponerle el hombre. . . y lo haremos.

Jorge Insunza: Informe resumen al Pleno Agrario del Partido Comunista

(El Siglo, 18 de agosto de 1972)

Camaradas:

Finalizamos una Sesión Plenaria de gran significación para el desarrollo de nuestro proceso revolucionario, sesión que, no exageramos, marca un hito en el desarrollo de nuestro partido.

El Informe del camarada Luis Corvalán abordó con profundidad los problemas agrarios más importantes. En él se resuelve una línea general de trabajo de los comunistas que nos permite aportar en conjunto con nuestros aliados a la organización de la nueva agricultura. Que se trata de un documento de gran valor, por las perspectivas que traza, por su concreción y realismo lo ha comprobado el propio desarrollo de nuestro Pleno. El Informe ha dado lugar a una discusión muy rica, comparable a las mejores que el partido haya realizado en todas las épocas. Han intervenido 60 compañeros, sobre todo trabajadores de la tierra, con palabras llenas de sabiduría, de conocimiento, de voluntad de avanzar, que han expuesto problemas concretos, pero proyectándolos hacia el éxito de las tareas del proceso revolucionario.

El partido se muestra, a través de esta discusión, como un verdadero partido proletario de Gobierno, capaz de abordar los problemas concretos. Partido que se esfuerza por modificar y colocar el aparato estatal al servicio de la clase obrera y el pueblo, pero que al mismo tiempo no restringe su acción al puro manejo del aparato estatal, sino que, recurre a las masas que son la fuerza principal de la revolución.

Al actuar como lo señala el Informe y lo ratifican las intervenciones en esta Sesión Plenaria, queda definido en los hechos un nuevo estilo de Gobierno, que no tiene nada que ver con el oficialismo “a la burguesa”, que intentó siempre presentar como perfecto todo lo que se hacía desde el Gobierno. Actuando así nos apartamos del paternalismo que niega a las masas las posibilidades del desarrollo de su capacidad creadora. Y nos apartamos también, del anarquismo, del espontaneísmo, que pretende hacer creer que no se requiere ni dirección, ni autoridad para llevar adelante el proceso revolucionario.

Discusión abierta

Conocido el Informe del camarada Corvalán la prensa reaccionaria ha intentado presentarlo como un documento pesimista. Pretenden utilizar la

franqueza del Informe, que se ha ratificado en la discusión habida en este Pleno, para ambientar la idea de que Chile vive un período catastrófico, que el Gobierno Popular está ante una situación sin salida. Nada más ajeno al espíritu del Informe, nada más ajeno al espíritu del partido. Lo que ha habido aquí ha sido una discusión abierta hecha con el pueblo y de cara al pueblo y lo que surge de ella es una línea de lucha y de trabajo que parte de la confianza en las masas populares, de la confianza en el futuro de la revolución. Confianza que se afianza por ejemplo, en la experiencia contada en este Pleno por el camarada Villalobos que ha informado que 94 tractores enviados a Coquimbo para aprovechar las aguas caídas (la manito que nos ha echado San Isidro, como decía el camarada Corvalán) han roturado 8.000 hectáreas hasta el 10 de agosto y continúan trabajando día y noche.

Nuestro Pleno se ha propuesto contribuir a transformar los problemas del desarrollo agropecuario en una gran tarea nacional. Y el Informe, luego de subrayar el profundo significado revolucionario, patriótico y humanista que tiene el proceso de liquidación del latifundio, dice francamente que “ahora viene lo más serio, lo más difícil y lo que, en definitiva, más interesa: organizar la nueva agricultura teniendo como objetivo central el aumento de la producción agropecuaria y el bienestar de los campesinos”.

Para resolver bien esta cuestión es que se muestran abiertamente las dificultades ya habidas, nuestros errores y nuestras insuficiencias.

Especulaciones del enemigo

Sí, para nosotros está planteada una tarea difícil, pero para los reaccionarios era una tarea imposible de cumplir.

Los enemigos del Gobierno especulan por ejemplo, con el problema de la carne, con las dificultades reales que existen hoy para obtenerla y achacan esto al Gobierno Popular. Es en verdad un grave problema, que tendrá solución en un plazo no tan breve.

Pero con un Gobierno Popular tendrá solución. En cambio, su hubiéramos continuado sometidos a la férula de los terratenientes, la situación hubiera seguido empeorando.

En el año 1945 el consumo de carne por habitante por año era, en nuestro país, de 52 kilos, o poco más. En el año 1970, después de 25 años de gobiernos burgueses, ese consumo había bajado a 18 kilos por habitante por año. Esta tendencia hubiera seguido si hubieran continuado los gobiernos reaccionarios dirigiendo el país, y de aquí a diez o veinte años, el pueblo no hubiera comido carne. El mismo día que “El Mercurio” hablaba de “sombrio panorama”, y en la misma página donde se evaluaba así el Informe del camarada Corvalán a este Pleno, el diputado reaccionario Manuel Tagle se veía obligado a reconocer que el consumo de carne aumentó durante el año 71 en un 4 por ciento en relación con el año anterior, esto es, más que el aumento vegetativo de la población. Vale decir, los chilenos comieron mejor y, sobre todo, comió mejor el pueblo ahora que con la política de redistribución de rentas del Gobierno Popular tuvo posibilidades de comprar. Podemos agre-

gar a lo dicho por el diputado Tagle que, pese a las dificultades, este año ha habido un nuevo aumento del consumo general en el primer semestre.

Crímenes de la reacción

Los reaccionarios fueron desplazados del Gobierno porque demostraron ser incapaces de resolver los problemas del pueblo. Las angustias que hoy subsisten son sobre todo el resultado de la herencia recibida de los gobiernos de esos sectores. Tales problemas fueron las causas inmediatas de la victoria popular, lo que determinó que el pueblo decidiera desplazarlos del Gobierno e iniciar la Revolución. Hoy, los reaccionarios se esfuerzan por transformar aquellos problemas en factores que ayudan a la contrarrevolución, intentan inclusive agudizar los problemas del boicot, del sabotaje, de la especulación, del engaño, del crimen de lesa patria. Sólo un ejemplo, cuando el Gobierno se esfuerza por incrementar la masa ganadera bovina evitando la matanza de vientres, cuatro médicos veterinarios reaccionarios son denunciados ante el Colegio respectivo por el profesional Divaldo Román, por haber otorgado 14 mil certificados autorizando la liquidación de vacas en plena producción, en connivencia con latifundistas inescrupulosos. Esto es una muestra de la clase de “patriotismo” que profesan las viejas clases dominantes.

El problema del abastecimiento, de la alimentación adecuada de todo el pueblo, es asunto de primera prioridad para el Gobierno Popular. Tenemos la obligación de resolverlo rápido, y bien. Y en esto es, por cierto, decisivo el aumento de la producción agropecuaria.

El camarada Corvalán expresa en el Informe Central que lo que está a la “orden del día” es resolver ahora las tareas inmediatas en cuanto a producción, planificación a corto plazo, participación masiva de los campesinos y organización transitoria del agro, para asegurar el abastecimiento alimenticio de nuestro pueblo y vencer dificultades nacionales tan grandes como la falta de divisas.

El cumplimiento de esta tarea de acuerdo con la voluntad reflejada en el Pleno, debe comenzar de inmediato y empeñando en ella a nuestro partido, tendremos tanto mayor éxito cuando más férreamente nos unamos en su cumplimiento a todos los integrantes de la Unidad Popular y a las masas campesinas.

Para obtener éxito tenemos que operar simultáneamente en muchos frentes.

El compañero Rojas de Rengo, el compañero Herrera de Curicó y muchos otros camaradas han planteado el grave problema que significa el hecho de que la toma de posesión de los fundos expropiados sea demorada por las leguleyadas de los latifundistas, que se comportan como perros de hortelano, que no trabajan las tierras ni dejan que las trabajen los campesinos. Son muchos los miles de hectáreas las que quedan por esta razón al margen de la producción. Surge del Pleno la necesidad de adoptar con las masas campesinas, en base a acuerdos con nuestros compañeros de la Unidad Popular, y con uso adecuado del aparato estatal todas las medidas conducentes a la toma de posesión rápida de esos fundos que son 171 a través del país.

El Pleno reafirma la necesidad de llevar de inmediato a las masas las proposiciones del informe para hacer un esfuerzo extraordinario con vistas a ampliar este año aquellas siembras que aún es posible expandir.

Como ha sido dicho y subrayado por el compañero Hugo Díaz, la lucha deberá estar centrada en el aumento de la superficie de siembra principalmente de trigo, maravilla, porotos, avena, cebada y raps. Se dispone por ejemplo, de 22.000 quintales de semilla de maíz híbrido, lo que permite sembrar una superficie de 88.000 hectáreas.

Se prevén, no obstante, algunas dificultades para disponer del fertilizante necesario para asegurar un buen rendimiento, pero todo indica que es posible reemplazar ese fertilizante en otras siembras y aprovecharlo mejor en el maíz. Si nos proponemos trabajar decididamente en esta dirección es posible resolver estos problemas.

Cómo llegar adelante las tareas

La convicción expresada por el Pleno a través de decenas de ejemplos concretos es que si se gana la conciencia de los campesinos, es posible llevar adelante estas tareas.

El informe del camarada Corvalán hacía notar que prácticamente sin excepción en el primer año que los campesinos trabajan la tierra, la producción del predio aumenta apreciablemente y en su análisis comprobaba cómo la producción está ligada directamente al entusiasmo con que trabajan los campesinos, a la conciencia con que desarrollan su labor. La influencia del nivel ideológico en la producción y en la productividad no es, por cierto, una constatación que sólo se puede hacer en el campo.

Los compañeros de Chuquicamata han comprobado, por ejemplo, que la productividad en las jornadas de trabajo voluntario, que se hacen, naturalmente, con una motivación ideológica y política, es notablemente superior a la productividad en una jornada de trabajo normal. Por eso, es que tiene una importancia tan grande y ha preocupado tanto en esta sesión plenaria los problemas de la organización transitoria de las unidades reformadas.

El Pleno ha precisado una línea general para el trabajo de los comunistas en este aspecto. Y el criterio básico, es que los comunistas nos guiaremos no por lucubraciones de oficina, sino ante todo por el respeto a la voluntad de los campesinos.

El camarada César Cerda ha recordado con razón los conceptos aplicados por Lenin, para la puesta en práctica del Decreto sobre la Tierra, dictado por la Revolución de Octubre. El Decreto aceptaba el mandato de los campesinos acerca de la distribución equitativa de la tierra nacionalizada. A pesar de que Lenin, como científico y como marxista, sabía que tal distribución no era buena, pues la pequeña hacienda no puede sacar a los campesinos de la miseria y ni a la agricultura del atraso, respaldaba el mandato, porque decía “como gobierno democrático no podemos dejar de lado la decisión de las masas populares, incluso aunque no estemos de acuerdo con ella. En el cri-

sol de la vida en su aplicación práctica, poniéndola en ejecución en cada localidad, los propios campesinos verán donde está la verdad”.

Nosotros partimos objetivamente de un nivel más alto, de una cierta tendencia ya establecida entre los campesinos a aceptar la cooperación. En estas condiciones se justifica mucho más al respecto a su voluntad en cuanto a las formas en que se realice ese trabajo en cooperación.

Lo que el Informe plantea y el Pleno ratifica es que los comunistas debemos esforzarnos por eliminar la tendencia a inventar en escritorio la forma que deben adquirir las nuevas relaciones de producción en el campo. Esto es subjetivismo y se expresa en el afán de meter a la fuerza formas de distribución de los excedentes o reglamentos de organización que pueden ser justas en lo ideal, pero que no tienen en cuenta y muchas veces se contraponen al nivel de conciencia que efectivamente ha alcanzado el movimiento campesino considerado en su conjunto.

En el curso de debate se han dado valiosos ejemplos de organización del trabajo en las unidades reformadas resueltos por los propios campesinos.

El compañero Ramírez, de Quillota, se refirió al de la Cooperativa Los Almendros, donde, a través de grupos de trabajo por rubro se logró modificar el estado de la cooperativa que pasó de tener un déficit de 400.000 escudos en el año 70-71, a una utilidad de E° 1.200.000 en el año 72-71. Los éxitos permitieron que los propios campesinos resolvieran eliminar una lechería, traspasarla a otro asentamiento más atrasado, mejorar ellos sus condiciones de vida y contribuir a que mejoraran otros trabajadores agrícolas.

La experiencia no tiene por cierto el carácter de receta. No está en este Pleno el espíritu de elaborar un recetario. Muy por el contrario, lo que los comunistas queremos es contribuir al encuentro en común con nuestros aliados y las masas campesinas de las condiciones adecuadas, pero ante el partido queda claro la necesidad de jugarse por una línea de masas que parta por tener en cuenta los criterios de los campesinos.

El compañero Cademártori planteó al iniciarse este Pleno, subrayando las proposiciones del Informe del camarada Corvalán, que “no habrá desarrollo de la producción si en ella no están interesados directa y personalmente los obreros y campesinos”. El compañero Corvalán anotaba que en este sentido, “adquiere una importancia decisiva la puesta en marcha de un sistema contable y de control que le permita al campesino saber no sólo al fin del año, sino que mes a mes, cómo va la producción, cómo va el cumplimiento de las tareas para que visualice de esta manera la significación de su esfuerzo en su propio interés”.

Carencia de estímulos: un problema

El compañero Peña, de Valdivia, los compañeros del Comité Regional Norte y del Comité Regional Sur de Santiago, entre muchos otros, han subrayado en base a experiencias concretas las dificultades que crea el aumento de la producción, la inexistencia de estímulos materiales y morales a los campesinos, por su trabajo.

Aparece claro que es indispensable resolver el problema del igualitarismo de los anticipos que reciben los campesinos del área reformada y paralelamente, la imagen que se crea ante los campesinos cuando asimilan el anticipo a salario de que el paso de la tierra a sus manos los lleva a condiciones de vida peores que antes porque los salarios que recibían del patrón, conquistados en dura lucha, muchas veces con nuestra dirección, resultan mayores que los anticipos con los que deben vivir buena parte del año. Son situaciones como éstas las que han permitido a reaccionarios, como Sergio Diez, acarrear con algunos campesinos engañados, hasta las oficinas de la Vicepresidencia de la CORA para pedir el regreso de los patrones.

Una política correcta de estímulo, de emulación y de cooperación, que todavía no hemos desarrollado, es que la asegure la integración de las masas campesinas de cuerpo entero a la batalla de la producción.

Empeñarse en el trabajo de vanguardia

Este esfuerzo no excluye el trabajo de choque, el trabajo de vanguardia, en que el partido debe empeñarse.

El camarada Corvalán expresó el apoyo resuelto de la Dirección del partido a la idea de organizar grupos de vanguardia de trabajadores del campo y de la ciudad, para empujar ciertos trabajos agrícolas. A ello se refirió en detalle el compañero Jacinto Nazal; definió estas brigadas como producto de la iniciativa de las masas campesinas y del trabajo político y planificado de nuestro partido y la Unidad Popular, brigadas de participación voluntaria donde no exista asomo de sectarismo, donde los trabajadores más conscientes y en primer lugar los comunistas se distingan por el mayor trabajo que realicen.

En este terreno los jóvenes comunistas han dado ya los primeros pasos como lo expresó al Pleno el compañero Carlos Opazo. Han creado 4 brigadas juveniles del agro que toman en sus manos tareas sacrificadas.

La organización urgente de este trabajo de vanguardia por cada Comité Regional puede ser una importante contribución a la ampliación del área de siembra que nos hemos propuesto.

Diversas intervenciones en el Pleno han confirmado las posibilidades de los propietarios pequeños y medianos de aportar en el cumplimiento de las tareas del desarrollo agropecuuario que el camarada Corvalán puso de relevancia en su informe.

Hay más de 200.000 propiedades menores de 40 hectáreas básicas. Cientos de miles de chilenos esforzados viven en ellas. "No podemos abastecer al país si prescindimos de su producción", afirmó el camarada Corvalán.

La Confederación que agrupa a estos propietarios se ha dirigido a nuestro partido exponiendo su posición. Recogiendo el espíritu del Pleno, queremos expresar públicamente que pensamos que el Gobierno debe llegar a un acuerdo concreto con este sector, sobre la base de la garantía de su propiedad, de la ayuda técnica y económica, de la creación de incentivos a su trabajo a través de una nueva política de precios que ya ha sido anunciada por el Gobierno y también, como ellos lo proponen, de la consideración de as-

pectos sociales y culturales que explican en su carta, de la que dio cuenta aquí el compañero Toro.

Como lo ha expresado este compañero, todas las proposiciones generales que hacen los pequeños propietarios son coincidentes con las líneas programáticas de la Unidad Popular. Estamos seguros que hay un campo amplio para llegar a acuerdo. Baste tener en cuenta que los pequeños y medianos propietarios han concordado por ejemplo en la ventaja de mantener un pool de maquinaria al cual ellos puedan tener acceso para mejorar la productividad en este sector, por vía de la industrialización del pequeño predio, que como ellos lo afirman, ha sido tradicionalmente postergado.

En el próximo mes de octubre tendrá lugar el Congreso de la Confederación Campesina Ranquil y es una obligación de todo el partido y del movimiento obrero contribuir al éxito de este IV Congreso. Los compañeros Avendaño y Sepúlveda señalaron la magnitud de las tareas que este Congreso deberá resolver.

Un tema decisivo es el de la contribución de la organización sindical en la batalla por el aumento de la producción agropecuaria, que está al orden del día como lo venimos diciendo y que estará en el centro del debate del Congreso. Como se dijo durante el Pleno es también fundamental que el Congreso de Ranquil resuelva una adecuación real y práctica de la Confederación, de sus Federaciones y Sindicatos a las nuevas condiciones y relaciones de producción que se crean en el campo chileno. Como lo expresó el compañero Sepúlveda, “ya no se trata de que los sindicatos estén sólo orientados a la atención de pliegos de peticiones, sino que deben entrar a jugar un papel primordial en la dirección de las actividades en el agro, en la dirección de la economía agraria y el proceso productivo”.

Unidad de todos los campesinos

Y en el curso del Congreso deberá estar también presente la tarea urgente que es unir a todos los campesinos. Si en la CUT están integrados todos los sectores no hay razón para que en el campo no ocurra lo mismo. Y deberán de allí surgir iniciativas para discutir los problemas comunes a todos los campesinos que abran las vías de la unidad, no sólo de los asalariados agrícolas. Cuya defensa sigue siendo una tarea decisiva, o de los que hoy trabajan en el área reformada sino que inclusive de otras capas sociales del campo con quienes es posible hacer unidad.

En la tribuna del Pleno se han expresado las minorías nacionales. Por primera vez en un Pleno del Comité Central del partido ha usado de la palabra un representante de la Isla de Pascua, el compañero Arsenio Rapu, describiendo la vida y el trabajo de la Cooperativa que preside.

Han estado presente también los problemas del pueblo mapuche. El compañero Painemal ha mostrado el mejoramiento sustancial que en las condiciones de vida de la producción ha provocado el desarrollo del movimiento cooperativo, llevado adelante en base a la voluntariedad de los minifundistas mapuches.

El compañero Venancio de Ercilla ha mostrado cómo en el curso del proceso de Reforma Agraria con una política correcta se ha podido fundir el trabajo de los mapuches con el de sus hermanos huincas según sus expresiones.

No obstante estos hechos positivos, subsisten graves problemas para el pueblo mapuche. De 6.375 que han sido favorecidos con la Reforma Agraria en la provincia de Cautín sólo 800 son mapuches, expresó el compañero Molina. Hechos como estos son los que enmarcan la necesidad de poner en práctica de inmediato con el acuerdo del Gobierno las medidas propuestas por el camarada Corvalán en su Informe, respecto de la compra de las tierras usurpadas y una política destinada a defender la cultura nacional mapuche.

Coordinación de los servicios

En el curso del debate se ha examinado como era natural desde muchos ángulos, el trabajo de las organizaciones estatales del agro. El Pleno concluye la evidente necesidad de marchar a la coordinación y centralización de los servicios del agro para poder evitar entorpecimiento en la batalla por la producción. Un ejemplo relatado aquí por el compañero Huenuman tipifica las dificultades que crea el funcionamiento anárquico. Se había resuelto dejar en manos de los pequeños propietarios el desarrollo de la crianza de cerdos en la provincia de Cautín. Esto favorecía sobre todo a los mapuches. INDAP destinó para eso 3 millones de escudos.

CORA, sin conocer tal resolución, destinó 9 millones de escudos para los mismos efectos en el sector reformado, con las pérdidas de esfuerzo consiguientes. Nos proponemos trabajar intensamente junto a nuestros aliados para dar rápida solución a la integración de los servicios del agro.

En la batalla en la que estamos empeñados tienen un papel decisivo los profesionales del agro, muchos de los cuales, como ha expresado el camarada Corvalán, trabajan intensamente para atender las necesidades que surgen de la puesta en marcha de la nueva organización de la agricultura. Estos son los que saben, como decía el compañero Vergara, del Regional Oeste, “cuándo y por dónde sale el sol”. Se requiere, no obstante, un trabajo todavía más intenso.

Reiteramos aquí el llamado hecho por el camarada Corvalán a los profesionales comunistas para marchar al campo desde ya, para tomar posiciones en esta batalla decisiva.

Esto es una parte importante, por cierto, porque ayuda a mostrar a todo el pueblo que nosotros, comunistas, en cuanto a partido de Gobierno, no pretendemos caracterizarnos por los privilegios de que poseemos, sino identificarnos por la capacidad de tomar en nuestras manos las tareas más sacrificadas. Pero sin duda que gente de otros partidos, y no sólo de la Unidad Popular, están en condiciones de hacer lo mismo y tenemos que alentarlos a ello. En la CORA, por ejemplo, muchos profesionales vivían preocupados de los indispensables trámites burocráticos previos a la expropiación de un fundo. Debían hacer encuestas, tasar, comprobar la tasación en bienes raíces, etc. En esto estuvieron un par de años; hoy día tienen nuevas posibilidades de ejercer efectivamente sus funciones profesionales.

Esperamos que ya en los próximos días se alisten los primeros profesionales que se irán al campo.

La realización del presente Pleno, por su riqueza, por la fuerza con que ha planteado la necesidad de llevar adelante las tareas trazadas en el Informe del camarada Corvalán, exige del partido un gran esfuerzo. La importancia del trabajo partidario fue bien expresada por el compañero Sepúlveda, de San Clemente: "Cada hombre campesino, por inocente que sea, con la dirección del partido atraviesa el desierto". Son palabras de un campesino, y lo decimos en mérito a su inteligencia, analfabeto, pero que mostró cuánta capacidad de lucha es capaz de desarrollar como obrero consciente.

El trabajo del partido, muestra, como es natural, desniveles de una a otra provincia. Lo que importa subrayar, es que debe ser todo el partido, no sólo el que ha trabajado hasta ahora tradicionalmente hacia el campo, el que debe en el período inmediato llevar a la práctica las conclusiones del Informe y de esta Sesión Plenaria.

Nuestra fuerza no reside tanto en el manejo en el aparato del Estado, como en la integración de las masas populares al ejercicio real del poder, por eso es decisivo llevar a la base las conclusiones de este Pleno.

Ahora bien, el trabajo de nuestro partido por diligente y esforzado que sea no puede resolver todos los problemas. Es decisivo el que seamos capaces de vincularnos estrechamente a nuestros aliados. Un compañero habló aquí de que "habíamos ganado" a los compañeros socialistas para una determinada posición. Este es un lenguaje que refleja los resabios sectarios que aún dificultan nuestro trabajo. Lo más probable es que haya habido coincidencia de opiniones, que se haya arribado a criterios comunes en el trabajo unitario. Debemos convencernos de que no hay política justa en abstracto, que una política justa es la que une, moviliza a las masas en tareas concretas que afirman el proceso revolucionario y la unión y movilización de las masas es más fecunda y más fuerte cuando la hacemos de conjunto con nuestros aliados. Una política justa, por tanto, es aquella que nos permite coincidir con nuestros aliados, en las formas concretas que hacen posible poner en práctica el Programa de la Unidad Popular.

Verdadero trabajo unitario

El trabajo unitario, por otra parte, es el que mejor nos ayuda a combatir las deformaciones que se hacen presentes en la marcha del proceso de la Reforma Agraria y que han causado daño tanto a la producción como a la política de alianza del Gobierno Popular, entregando gratuitamente, pero esperamos que temporalmente, aliados a los enemigos fundamentales. Estas deformaciones, alentadas por los ultraizquierdistas, podrán ser vencidas mejor, precisamente, si mejoramos nuestro trabajo unitario.

Entre las deformaciones más frecuentes está el ataque indiscriminado a los propietarios que niega a la revolución la posibilidad de ser flexible en la aplicación de la política que nos hemos propuesto, lo que nos crea enemigos innecesariamente.

Quisiera traer aquí el relato sobre la actitud leninista en el proceso sobre la nacionalización de la tierra en la Rusia soviética que hace el escritor Lujanov. Textualmente: “Al llevar a cabo la confiscación de las fincas, el Estado soviético se comportaba humanamente con sus dueños. Si los terratenientes no se resistían y manifestaban deseos de trabajar se les asignaba tierra con arreglo a la norma establecida. Además, las personas inválidas para el trabajo que habían quedado sin medios de existencia por la confiscación, podrían dirigirse al juzgado local y al Comisariado de Asistencia Social, solicitando se les concediera pensión. Y naturalmente, a los dueños de las fincas se les dejaba sus objetos de uso personal, muebles, y utensilios necesarios para la economía doméstica. Al mismo tiempo el humanismo del Estado soviético no significaba conceder privilegio alguno a los terratenientes; se les daba la posibilidad de vivir de una forma nueva, de su trabajo, y no a cuenta de la explotación, como antes”.

Hay quienes quieren hacer aparecer actitudes como ésta como “debilidad revolucionaria”.

Tanto en el Informe como en el Pleno, señalamos problemas y dificultades y aunque sobre cada asunto tenemos, por cierto, opiniones, lo que planteamos es ver con los demás partidos cómo salimos adelante dejando expresada nuestra predisposición a entregar al máximo de nosotros mismos.

El Pleno se ha concentrado en la discusión de los problemas agrarios. Queremos decir que esto deja a la Dirección del partido una experiencia valiosa, por la inmensa riqueza de ideas y opiniones contenidas, primero en el Informe, y luego, en la discusión, acerca de cómo sacar más a luz las ideas del partido, la elaboración cada vez más colectiva de la línea del partido.

Felonías de la reacción

No obstante, por cierto, han estado también presente en el Informe y en la discusión, las tareas políticas que surgen del momento.

El camarada Corvalán definió las dos cuestiones esenciales. Por una parte, la necesidad de enfrentar a los reaccionarios que intensifican su ofensiva, para tratar de echar abajo el proceso. Hoy día mismo dan una nueva confirmación de su felonía. Cuando se fijan los precios al productor para la próxima cosecha de los productos agropecuarios engañan a la gente sencilla haciéndoles suponer que son precios que rigen ya hoy y que tiene un impacto en la proporción en que se han establecido en los precios al consumidor, lo que es falso. Esta maniobra no tiene en cuenta, por cierto, el que hasta ayer se presentaban como defensores de los pequeños y medianos agricultores exigiendo precisamente, la fijación de estos precios.

Todo esto está determinado, por cierto, por el mismo afán de favorecer el acaparamiento masivo de productos, al que se refería el camarada Corvalán, en su Informe. Esto sirve, digámoslo también, para mostrar que el problema de abastecimiento no será nunca sólo un problema de producción, sino también de distribución y la lucha de masas por combatir la especulación y el mercado negro a través de las JAP, o el boicot y el sabotaje a la produc-

ción a través de los Comités de Producción y de Vigilancia de la Producción siguen a la orden del día.

Lucha sin cuartel a los ultras

Por otra parte, el Informe del camarada Corvalán planteó el daño que la acción de ultraizquierda causa al Gobierno. El Pleno reafirma que consideramos de nuestro deber, indispensable para el éxito de la revolución, llevar adelante, sin tregua, la lucha contra la ultraizquierda, lucha que, como lo ha mostrado la vida, es condición indispensable para cumplir las tareas verdaderamente revolucionarias.

Por eso, al finalizar este Pleno, en el que nos hemos propuesto empeñar al partido en la decisiva tarea del desarrollo agropecuario, reiteramos nuestro acuerdo con las expresiones del compañero Presidente en su carta de 31 de julio: “Cuando tan magna empresa (la Revolución Chilena) absorbe toda la capacidad de acción de los trabajadores y el movimiento popular, los partidos de la Unidad Popular deben rechazar con resolución y energía los sucesivos ensayos divisionistas que intentan desviar la atención hacia hechos secundarios o quiméricos que, aunque incapaces de aportar nada positivo consumen inútilmente esfuerzo y preocupación”.

De acuerdo con esto, llamamos al partido a mantener una firme lucha ideológica, contra el divisionismo y a actuar al mismo tiempo con flexibilidad, para conseguir la derrota total de las maniobras contra la unidad de los partidos populares, de los intentos para sacar provecho y ahondar las diferencias que puedan producirse entre socialistas y comunistas, por aislar al Presidente de la República de las masas populares, para dar al traste con los intentos de aislar a nuestro partido. Los riesgos de derecha o de ultraizquierda podemos enfrentarlos y salir adelante trabajando con las masas, enfilando los cañones contra los enemigos principales, uniendo a todo el pueblo en torno al Programa de la Unidad Popular.

Hugo Díaz (Presidente de la Corporación de la Reforma Agraria: Informe al Pleno Agrario del Partido Comunista

(*El Siglo*, 18 de agosto de 1972)

Quisiéramos referirnos principalmente a dos problemas:

- 1.- El trabajo de los profesionales técnicos y prácticos en el agro y,
- 2.- Problemas inmediatos de la producción.

En relación al primer punto, es necesario no olvidar que como consecuencia de una nefasta herencia administrativa, las funciones meramente burocráticas de los organismos estatales del agro están entregadas a profesionales y técnicos lo que significa aislar, alejar y divorciar del proceso productivo propiamente tal a elementos altamente calificados. Como consecuencia de esto mismo se da la paradoja que la mayoría de agrónomos y veterinarios trabajan en Santiago y una parte importante en las cabeceras de provincia, careciendo muchas veces las comunas e incluso los departamentos de profesionales y técnicos.

Este es el proceso que es necesario quebrar de raíz, modificar enteramente para que con la plena participación del campesinado se abran las compuertas de las nuevas formas de producción social.

¿Cómo conseguirlo? Desde luego el informe del compañero Corvalán entrega algunas directrices: Todos los jóvenes profesionales comunistas al campo y los viejos también o cuando puedan.

Es necesario sacar a los profesionales de las oficinas y una primera etapa podría ser de cuatro días en el campo y dos en la oficina.

Brigadas de la producción

La formación de brigadas de aumento de la producción integradas por los propios campesinos y engarzadas adecuadamente a la nueva forma de trabajo de profesionales y técnicos como asimismo a la labor de las brigadas de trabajo voluntario hacia el campo, abrirá, estamos seguros, nuevos e interesantes senderos para ganar una batalla tan decisiva como la de la producción agropecuaria.

Debemos organizar a la brevedad posible una campaña de emulación para asegurar el éxito de la producción agropecuaria, responsabilizando de su marcha y control a las comisiones agrarias de los Regionales y de los Comités Locales del partido trabajando en conjunto con la UP en esta tarea. En esta campaña deben correlacionarse muy estrechamente la labor del partido con la de nuestros cuadros que trabajan en el agro, pero todo ello debe rea-

lizarse como decía Lenin “con un control práctico para que la palabra se transforme en acción... deben comprender que hoy todo radica en la práctica. Que ha llegado precisamente el momento histórico que la teoría se transforma en práctica, se vivifica por la práctica, se corrige por la práctica, se comprueba por la práctica y que son particularmente exactas las palabras de Marx: de que cada paso de movimiento real vale más que una docena de programas”.

Se atiende los sábados

Otra manera de luchar contra la burocracia y desenredar su maraña es el trabajo de todos los comunistas los días sábados. Sería bello ver en una oficina donde trabaje un comunista un aviso diciendo que SE ATIENDE LOS SÁBADOS. Todas estas tareas las consideramos imprescindibles.

Lenin resumía esta situación magistralmente expresando: “Para triunfar, para crear y consolidar el socialismo, el proletariado debe resolver una tarea doble, o más bien una tarea única con dos aspectos: primero, con un heroísmo a toda prueba en la lucha revolucionaria contra el capital, atraer a toda la masa de trabajadores y explotados, organizarla, dirigir sus esfuerzos para derrocar a la burguesía y aplastar plenamente toda resistencia de ella. Segundo, conducir toda la masa de trabajadores y explotados así como a todos los sectores de la pequeña burguesía, al camino de la nueva construcción económica... de una nueva disciplina laboral y de una nueva organización del trabajo que conjugue el aprovechamiento de la última palabra de la ciencia y de la técnica capitalista con la agrupación en la masa de los trabajadores conscientes entregados a la gran producción socialista. Esta segunda tarea es más difícil que la primera porque no puede ser cumplida en modo alguno con un esfuerzo heroico momentáneo, sino que exige el heroísmo más prolongado y difícil, el del trabajo cotidiano y masivo. Aumentar la siembra de maíz”.

Con referencia a los problemas inmediatos de la producción, la lucha deberá estar centrada en aumentar la superficie de siembra, principalmente de trigo, maravilla, porotos, avenas, cebada y raps. Teniendo sin embargo como baluarte, principalmente en el aumento de la superficie de siembra de maíz. Para lo cual disponemos de 22.000 qq. de maíz híbrido, lo que permite una superficie de 88.000 hás. de siembra, habiéndose sembrado el año pasado 60.400 hás. Dentro de esta programación se presume estática la superficie de siembra de maíz corriente que alcanzó aproximadamente el año pasado a 24.000 hás. El programa implica aumento de la superficie de siembra entre las zonas comprendidas entre Coquimbo y Malleco. Sin embargo el mayor aumento y en donde por tanto debe centrarse una mayor responsabilidad de control corresponde a las provincias de Aconcagua a Talca.

El cumplimiento de este programa significará alcanzar una producción de 360.000 a 400.000 ton. en el período 1972-1973 contra de la producción de 1971-1972.

En resumen el programa corresponde a 98 zonas. Proponemos que se nombre a un responsable para cada una de las 5 principales zonas afectas a

este programa, el cual deberá estar en contacto directo con las organizaciones de masas y del propio partido para resolver todos los problemas que puedan impedir o retrasar el cumplimiento del Programa.

Inseminación artificial

Se observa una gran falta de reproductores, tanto de toros como carneros y verracas, es por tanto necesario dar un fuerte y rápido impulso a la inseminación artificial sobre la cual no hemos hecho nada en un año y medio. Sin embargo al revisar los predios del área reformada hemos visto que existen lecherías que en monta libre usan un toro para más de 100 hembras, cuando en tal caso se puede usar uno por cada 25 hembras y aún existen asentamientos lecheros en los cuales no hay toros y de esta forma es imposible mejorar la fertilidad y la producción.

El Informe del camarada Corvalán expresa que las estadísticas agropecuarias son pésimas. Tan cierto es esto que no se sabe con exactitud la cantidad de hectáreas que forman el área reformada, pues no se sabe cuántas de las hectáreas apropiadas corresponden a las reservas.

Por ello, proponemos como una manera de poner pie en tierra firme realizar entre el 20 y 30 de septiembre una encuesta elemental básica no alambicada ni pretenciosa respecto a algunos índices agropecuarios para lo cual sería necesario movilizar en uno o dos días de trabajo voluntario a los organismos del agro, al partido y a la juventud.

La rediscusión del programa de producción de que habla el Informe central la entendemos en el sentido de aceptar como mínimo el marco de programación con que hasta hoy se ha estado trabajando y sobre esta base realizar estudios y esfuerzos para alcanzar aumentos sustantivos.

Compañeros, existe de parte de la juventud de obreros, de campesinos e incluso de los propios funcionarios del agro, una reserva moral inmensa que aún no hemos sido capaces de movilizar. Así lo demuestra el ofrecimiento para trabajar todos los sábados, de 57 alumnos de un curso de 60 de la Escuela de Medicina Veterinaria, ofrecimientos similares hechos por los estudiantes secundarios, por profesionales del agro de las más diversas tendencias, como asimismo, del compromiso de trabajo ofrecido por cátedras completas de la Facultad de Agronomía y de Medicina Veterinaria.

Camino a la participación

Todo lo anterior no podría ser alcanzado si no damos una lucha franca y decidida por la participación de los trabajadores de las diferentes instituciones del agro y la codirección de dichos organismos.

Son innumerables los problemas administrativos que detienen, frenan el desarrollo de las actividades en estas instituciones y muchas veces aparecen problemas de enorme gravedad, no sólo de negligencia, sino que incluso, de inmoralidad funcionaria, que se han generalizado y que por tanto, se le puede

2932 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

poner coto con una adecuada participación de los trabajadores. La importancia de acelerar el proceso de participación se realza cuando entendemos que ella separa al funcionario de la rutina diaria de su trabajo entregándole proyecciones que le permiten modificar y mejorar la eficiencia de su propio servicio.

El camino de la participación es el único que permite el desarrollo de una nueva conciencia frente al trabajo y una nueva conciencia frente a la disciplina laboral.

www.cepchile.cl

S. Wiesenthal: Carta a Salvador Allende solicitando la extradición del criminal nazi Walter Rauff

(21 de agosto de 1972)

“Centro de Documentación
de la Liga de los Judíos Perseguidos por el Régimen Nazi
1010 Viena 1 Rudolfplatz 7/II
Austria

Viena, 21 de agosto de 1972

A su Excelencia
Sr. Salvador Allende
Presidente de la República de Chile
Santiago de Chile
Chile

Estimado señor Presidente:

Walter Rauff, SS-Standartenfuhrer, vive impune en su país. Este sujeto cometió crímenes horribles durante la guerra. En sus funciones en el Departamento de Seguridad del Reich de Berlín, él fue responsable de la introducción de los así llamados camiones de gas. El Departamento de Seguridad del Reich ordenó la construcción de estos camiones especiales herméticamente cerrados. Cincuenta o más seres humanos eran encerrados en estos vehículos sufriendo muerte por asfixia durante un recorrido de 15 a 30 minutos mientras los gases asfixiantes penetraban al interior del vehículo.

Era una muerte cruel y dolorosa. Ello ha sido testimoniado por numerosos miembros de la SS, quienes les dieron muerte.

Estos asesinatos tuvieron lugar en Ucrania, Bielorrusia, Yugoslavia y otros lugares. Informes sobre ese “tratamiento especial” a seres inocentes eran permanentemente enviados al SS Obersturmbannfuhrer Walter Rauff en Berlín. Rauff recibió también informes sobre los numerosos accidentes ocurridos en los “camiones amargos”. El se encargó de perfeccionar ulteriormente el método de exterminio. Esta carta va acompañada por un documento elaborado en Nuremberg en 1947 y que lleva la cifra 501-PS. Este documento, junto a muchos otros, es parte del volumen Nr. 26 del International Military Tribunal de Nuremberg.

Fundándose en informes alemanes que no alcanzaron a ser destruidos, puede afirmarse que Walter Rauff causó la muerte cruel de 96.000 seres hu-

manos, en su mayoría judíos, pero también socialistas y comunistas en los territorios ocupados por los nazis.

Después de la guerra Walter Rauff huyó a Italia. Fue recluido en un campo de internación en Rimini. Con la ayuda de la organización clandestina nazi «Odessa» y con el apoyo del obispo alemán acreditado en Roma, Alois Hudal, Rauff pudo abandonar este campo. Munido con documentos de la Cruz Roja Internacional, emigró a Sudamérica como refugiado. Primero vivió en Ecuador y en 1961 llegó a Chile. Adjunto sus direcciones postales en Chile:

1. Santiago / Chile
Casilla 99 D
2. c/o Goldmann, Jansen Cía.
Santiago / Chile
Casilla 13.750; Correo 15

Su última dirección postal es:
Punta Arenas / Chile
Casilla 606/A.

El Fiscal Federal de Osnabruck (República Federal de Alemania) persigue judicialmente a Walter Rauff y, una vez descubierta la residencia de Rauff en Chile, ha encomendado la solicitud de extradición mediante los oficios de la Embajada de Alemania Federal en Santiago de Chile. Pese a ello, el gobierno de Chile denegó la solicitud en 1963.

Señor Presidente, es un hecho que la representación de su país no sólo se ha pronunciado en las Naciones Unidas por la persecución de todos los sujetos que hayan cometido crímenes contra la humanidad en la última guerra, sino también que su país se adhirió a la Convención de Londres de 1948 reafirmando su compromiso. Hace dos años Chile votó en las Naciones Unidas por la ulterior persecución de los crímenes de guerra. La ley internacional tiene primacía sobre la ley nacional; es por eso que me he dirigido a Usted con esta solicitud.

Le ruego disponer una revisión de la decisión que el gobierno de Chile tomó en 1963. Nosotros estamos convencidos de que desde entonces han ocurrido grandes transformaciones en su país. Estamos ciertos de que Usted, señor Presidente, está dispuesto a defender la causa de los seres inocentes que fueron perseguidos: Usted será consciente de los crímenes cometidos por el Nacional socialismo en toda Europa.

Serán millones los seres humanos de todo el mundo quienes le estarán agradecidos si Walter Rauff es arrestado y entregado a la Corte de Justicia de Alemania Federal en Osnabruck, la que lo inculpa de ser el asesino de casi 100.000 seres humanos.

Reciba, Señor Presidente, la expresión de mi más alta consideración,

(SIMON WIESENTHAL)."

Salvador Allende: Respuesta a S. Wieselthal sobre extradición de Walter Rauff

(Agosto de 1972)

“República de Chile
Ministerio de Relaciones Exteriores

Señor Simon Wieselthal
Centro de Documentación de la Liga de los judíos
Perseguidos por el Régimen Nazi
1010 Viena 1, Rudolfsplatz 7/III.

Estimado señor Wieselthal:

Doy respuesta a su carta de 21 de agosto último, relativa al caso Rauff.

Como Ud. bien sabe, a raíz de un pedido de extradición formulado por la autoridad judicial competente de la República Federal Alemana, y cursado por la vía diplomática, la Corte Suprema de Chile, conociendo de este asunto, falló negativamente, fundada en la prescripción de la acción penal correspondiente. Empero, el considerando 38 de dicha sentencia envuelve la más amplia condenación moral de los alevosos crímenes del Nacionalsocialismo y de sus ejecutores materiales.

En cuanto a la posibilidad de que el pedido de extradición se reactualice, lo que legalmente requeriría como condición sine qua non de una nueva solicitud formulada por la vía diplomática, ello sería de la exclusiva competencia de los tribunales de justicia de Chile, los cuales, en virtud del artículo 80 de la Constitución Política del Estado, son los únicos facultados para conocer de las causas civiles y criminales. Al Presidente de la República le está vedado, en virtud de la Ley, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.

Éstas son las disposiciones constitucionales y legales vigentes en Chile, a las cuales es mi deber atenerme.

Lo anterior no obsta, por cierto, a que, como ciudadano y Jefe de Estado, comparta plenamente sus sentimientos y condene una vez más los alevosos crímenes cometidos por el nazismo y sus servidores.

Siento verdaderamente, estimado señor Wieselthal, que mi respuesta deba ser negativa a su petición. He admirado y admiro su tenacidad para perseguir a los autores de los más horribles crímenes que registra la Historia de la Humanidad. Pero sé también el apego que Ud. siente por el imperio de la Ley dentro de los regímenes políticos y, por ello, estoy cierto de que Ud. comprenderá mi posición como Presidente de la República.

Con mucho afecto, le saluda,

Salvador Allende,
Presidente de Chile.”

MIR: Declaración sobre la política de alzas de precios del Gabinete Millas-Matus

(27 de agosto de 1972)

Una avalancha de alzas ha caído sobre el pueblo

Además, en los últimos días los problemas del desabastecimiento se han agravado por la acción de los acaparadores y especuladores.

Los mismos que procaron, bajo falsos pretextos, el paro del comercio que culminó en Santiago con una asonada fascista.

Los dueños del poder y la riqueza son los verdaderos responsables; gozan con este espectáculo y tratan de sacar aún más partido de la situación.

Unos preparando el derrocamiento del Gobierno para después de las elecciones del 73.

Otros más impacientes, desatan una escalada sediciosa que busca definir el problema del poder lo más pronto posible.

El desconcierto de las masas es muy grande

Es muy grande para que pueda ser remediado por el reajuste del 100% que ofrece el Gobierno.

Las alzas han golpeado muy duramente los ingresos populares. Y las capas más pobres del pueblo, que no tienen empleos estables ni siquiera tienen la posibilidad de ser beneficiados por este reajuste.

Esto exige una clara definición ante los trabajadores

* La raíz del problema está en el hecho de que las clases dominantes re-tienen todavía importantes posiciones en el aparato de producción y distribución.

* Industrias fundamentales para el control de la economía siguen en manos de los patrones.

* La mayor parte de la producción agropecuaria continúa bajo el control de la burguesía agraria que posee fundos con más de 40 hectáreas de riego básico.

* El sistema de comercialización es esencialmente privado.

Los patrones son los que se han enriquecido con las ganancias obtenidas por el aumento de la producción en 1971. Y se niegan a invertir esas ganancias para aumentar la capacidad productiva.

* Los patrones son los mayores responsables de que no se producen ni distribuyen los bienes esenciales de consumo.

* La actitud de los patrones es igual a la del imperialismo yanqui, que corta los créditos a Chile, que baja el precio al cobre y que impone sus condiciones para renegociar la deuda externa.

Hace poco tiempo en la reunión de Lo Curro, las corrientes revolucionarias de la UP, representadas por Vuskovic, la Izquierda Cristiana, sectores del MAPU y del PS dejaron clara la actitud de los patrones y levantaron una política revolucionaria para hacerles frente.

Pero los reformistas se han alzado contra esta política para imponer la suya:

- No seguir expropiando a la gran burguesía.
- No imponer controles al sector privado.
- Ofrecer a los patrones posibilidades de enriquecerse más para incentivarlos a aumentar la producción.

Las alzas son el resultado necesario de la política reformista

El propósito de los señores reformistas es entregar al mercado capitalista, entregar a los patrones la tarea de restablecer el equilibrio entre lo que se produce y lo que se consume, o sea, entre la oferta y la demanda, así como aumentar la rentabilidad de las inversiones.

Y no les importa sacrificar el consumo del pueblo. Porque de esto se trata.

¿O pretenden hacer creer que con el reajuste compensatorio también van a recuperar su nivel de vida los artesanos, los feriantes, los semiproletarios y cesantes?

Las alzas se decidieron a espaldas del pueblo

Se decidieron a espaldas del pueblo, sin darles ni siquiera el derecho a informarse. Se negó a los trabajadores y organizaciones populares la capacidad efectiva de participar en los problemas de abastecimiento y precios.

Esto quiere decir, a nivel de política económica, la total renuncia del reformismo a la movilización de masas.

Para resolver este problema se necesita una política revolucionaria

Para resolver la situación crítica provocada por los patrones y agravada por los reformistas se necesita:

Una política revolucionaria

* Significa empezar a recuperar la confianza del pueblo.

* Significa conceder un reajuste capaz de reponer el nivel de vida de los trabajadores.

* Significa encontrar los mecanismos para que el efecto de las alzas no haga más pobres a los sectores más pobres.

* Significa incorporar a las masas al control directo de la producción, la distribución y los precios única medida que puede resolver los problemas más inmediatos del pueblo.

Pero una política revolucionaria no se puede sostener si no se entra a golpear duramente a los patrones y al imperialismo.

* Expropiando las grandes fábricas y los grandes fundos.

* Expropiando el gran comercio.

* Atajando las presiones yanquis sobre el sector externo de nuestra economía y poniendo así en las manos del pueblo los resortes básicos que le permitan ejercer su control.

Por todo esto exigimos:

1. Reajuste compensatorio inmediato del 100% del alza del costo de la vida, que favorezca sobre todo a los asalariados más pobres y que se aplique cada vez que el costo de la vida sobrepase el 5%.

Y que esto no limite la legítima lucha de los trabajadores por arrebatarle a los patrones partes crecientes de sus ganancias.

Por otro lado, establecer a precios subvencionados un sistema estatal de comercialización de bienes esenciales que beneficie principalmente a las capas más pobres que carecen de empleo estable.

2. Control obrero de las empresas del sector privado sobre la base de supresión del secreto comercial y bancario. Y la dirección obrera de las empresas estatales.

3. Control popular sobre el abastecimiento y los precios, que incluye si es necesario el racionamiento de los bienes esenciales a ser aplicado por los sindicatos, las JAP, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de masas, agrupadas en los Consejos Comunales de Trabajadores.

4. Establecimiento de una canasta de consumo popular cuyos precios no puedan ser aumentados.

Alzas discriminatorias sobre los productos que consumen los ricos.

Política de precios que transfiera eficazmente recursos del área privada hacia el área de propiedad social.

5. Expropiación inmediata de los grandes comerciantes minoristas (Almac, Unicoop, etc.).

6. Expropiación de la gran burguesía industrial.

Sólo el pueblo puede producir para el pueblo.

7. Expropiación de los fundos de más de 40 HRB a puertas cerradas sin reserva, sin pago de la tierra.

Con la entrega inmediata de la tierra a los campesinos bajo la conducción de los Consejos Comunales Campesinos.

8. Control de los trabajadores sobre los medios de comunicación de masas para detener la campaña de terror respecto al desabastecimiento.

9. Suspensión inmediata del pago de la deuda externa a los norteamericanos y apertura de negociaciones bilaterales con los países que estén dispuestos a colaborar con Chile.

Necesitamos los dólares para alimentar al pueblo.

Secretariado Nacional
del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria

Comité Nacional de la Unidad Popular: Declaración sobre los sucesos de Lo Hermida del 6 de agosto de 1972

(7 de agosto de 1972)

“El Comité Nacional de la Unidad Popular se reunió extraordinariamente para expresar su respaldo al Gobierno que encabeza el compañero Salvador Allende ante los ataques de que son objeto diversos personeros populares, desde la derecha como desde la ultraizquierda, aprovechando los graves y dolorosos sucesos ocurridos en la población “Asalto al Cuartel Moncada”, que costaron la vida a un poblador y dejaron varios heridos entre los pobladores como entre las fuerzas policiales.

Las fuerzas de la policía civil y Carabineros, que actuaron en la población lo hicieron por orden judicial, orden emanada del proceso que por asaltos y robos se sigue contra el grupo ultraizquierda detectado en las últimas semanas.

Las diligencias ordenadas por el Ministro sumariante para detener un implicado residente en esa población debían ser cumplidas. En el ánimo de evitar incidentes en el allanamiento ordenado, el Director General de Investigaciones, Eduardo Paredes, habló por el citófono de Gobierno con un dirigente de los pobladores cuando éste se encontraba en el despacho del Ministro de la Vivienda y propuso realizar una reunión entre el Servicio de Investigaciones y la directiva de los pobladores el día anterior a los incidentes, proposición que fue rechazada por estos últimos. No obstante, ante la negativa de la directiva de los pobladores a conversar, como consta de sus propias declaraciones, al cumplirse la orden, se produjo el desgraciado incidente, como resulta de la incitación criminal e inmediata al choque frontal por parte de elementos irresponsables, que inclusive dispararon contra el inspector de Investigaciones, señor Juan Moena, quien fue herido a bala en el instante en que se bajaba de la patrullera.

Decenas de pobladores inocentes fueron engañados acerca del carácter de la acción policial que no estaba dirigida contra ellos sino contra un delincuente.

El Comité Nacional de la Unidad Popular entrega su total respaldo al Gobierno ante el uso que de estos incidentes hace por una parte la ultraizquierda y por otra la derecha que, ahora aparece defendiendo a los pobladores que siempre ha despreciado, para tratar de lanzar a sectores del pueblo contra su Gobierno.

El Comité Nacional de la Unidad Popular apoya el esfuerzo del Gobierno para evitar a los pobladores, para diferenciarlos claramente de los delincuentes y de provocadores de ultraizquierda y evitar así que sean confundidos por una propaganda mentirosa, que pretende presentar al Gobierno Popular como un Gobierno que ejerce represión contra el pueblo.

Del mismo modo, el Comité Nacional de la Unidad Popular apoya la investigación ordenada por el Gobierno para poner totalmente en evidencia a los responsables de los dolorosos sucesos.

El Gobierno Popular, por su mismo carácter, no usa ni usará de la represión contra el pueblo como argumento político y las provocaciones no lo apartarán de esa línea de principios.

El Comité Nacional de la Unidad Popular estima su deber denunciar ante los trabajadores los sucesivos intentos de la ultraizquierda para producir enfrentamientos de sectores del pueblo con su Gobierno, haciendo pie en problemas reales para los cuales proponen soluciones falsas. En estos últimos días se ha producido una seguidilla de acciones orientadas al único objetivo de provocar choques frontales. Es el caso de la ocupación de la Gobernación de San Bernardo por un grupo minúsculo que se negó a parlamentar con las autoridades, la toma de algunas plazas y calles sin motivos que la justifiquen, agresiones físicas y verbales de toda índole. Esto pone de relevancia que existe un plan de provocaciones promovido por los ultraizquierdistas que están siendo usado intensamente por la derecha para atacar al Gobierno.

Todos los partidos de la Unidad Popular llaman al pueblo a prevenir en base a una férrea acción unitaria y a una estrecha vinculación con las masas las provocaciones de ultraizquierda que favorecen el juego de la derecha. Para ello, la Unidad Popular debe tomar en sus manos los problemas de los trabajadores y el pueblo, proponiendo ser llevadas adelante por ellos mismos y el Gobierno actuando en conjunto.

El Comité Nacional de la Unidad Popular
Santiago, 6 de agosto de 1962".

Salvador Allende: Discurso en Lo Hermida

(8 de agosto de 1972)

“Compañeros, les insisto, que quede bien en claro, yo no puedo meter a la cárcel a nadie, ni puedo decretar la libertad de nadie en este país.

Estas son las dificultades de las que les hablaba y por eso lo hacía observar a un compañero, que por la forma que está vestido, me pareció que tenía que comprender con claridad lo que estaba diciendo yo. A un compañero modesto, a un poblador, yo puedo estar horas explicándole, pero a un hombre que tiene la apariencia de tener un nivel educacional más alto, yo tengo la obligación de hacerle escuchar las cosas y que me las conteste, pero con razón, no a gritos.

Compañeros, yo no puedo poner –repito– en libertad a nadie. ¿Qué más quisiera yo, camaradas, que devolverle la vida al compañero caído?

Yo soy compañero de ustedes. Por último soy un hombre que tiene sentimientos. Tengo mujer, tengo hijas, tengo nietos, camaradas. Yo también hablé en los funerales de mi padre, me dieron media hora para salir porque estaba preso, compañeros. Eso merece respeto.

Compañeros, ¿qué quisiera yo? Que no hubiera ocurrido lo que ocurrió, camaradas. ¿Qué tengo que hacer? Nombrar una Comisión, además de la justicia a la cual ustedes van a recurrir, además del sumario administrativo, una Comisión en que van a tener representación los pobladores por primera vez en la historia y por primera vez en la historia, mientras dure la investigación, han hecho dejación de su cargo por petición mía el Director y el Subdirector de Investigaciones. Por petición mía, camaradas. ¿Cuándo ocurrió esto? Y cuando los pobladores exigieron, algo muy distinto que lo que hicieron con los de José María Caro, con las calles de Santiago, con El Salvador, con Pampa Irigoin. Yo estuve en José María Caro, yo estuve en El Salvador, yo estuve en Pampa Irigoin. Yo llevé al Senado, camaradas, las bombas lacrimógenas lanzadas en El Salvador. Pero también tengo que decirles, no se puede juzgar ni a una institución cualquiera por la actitud de un hombre ni dos, y nadie puede ser juzgado sin ser oído, absolutamente nadie. Ni en la justicia burguesa, ni en la justicia proletaria. Si no procediéramos así, compañeros, se acabarían los derechos que cada uno de ustedes reclama.

Por eso, yo he dictado –voy a dictar para ser más claro apenas termine esta reunión– el decreto a que he hecho referencia. En seguida he aceptado puntos esenciales de ustedes: Investigar si vinieron ambulancias. Si compañeros tengo que investigar, y lo voy a hacer, me parece muy extraño que hubieran llegado ambulancias del Servicio Nacional de Salud, apenas llegaron aquí

las fuerzas policiales y lo voy a investigar. Sí compañeros, lo voy a investigar. Me lo han sostenido los compañeros dirigentes de ustedes; lo voy a investigar; ¿qué más que han pedido los compañeros que no haya represión? Sí compañeros, se los he dicho, pueden estar tranquilos. Por esto estoy aquí yo también con el mismo dolor de ustedes, pero como Presidente de Chile dándoles mi palabra que pueden volver al campamento los que se han ido con su familia y que no les va a pasar nada. ¿Qué más me pidieron los compañeros? Que diera pensión para la viuda y también compañeros en el caso que algún compañero quedara inválido. No necesité ser Presidente para comprender eso, porque los proyectos de ley que le dan pensiones a las viudas del carbón llevan la firma del Senador Allende. Lo mismo lo de El Salvador. Con mayor razón ahora que soy Presidente. Me han pedido los compañeros que se indemnice a aquellas familias cuyas pertenencias han sido destruidas o han desaparecido. Serán los propios compañeros de esos campamentos, yo confío en su honradez y en su sentido de dirigentes, los que tendrán que decir efectivamente esta familia tenía tales bienes que se han desaparecido o se han destruido y se les va a indemnizar compañeros. ¿Qué más me han pedido los compañeros? Que use una cadena nacional para exponer los puntos de vista de los pobladores. ¿Qué les dije yo a los compañeros? Voy a estudiar esta petición. Pero también les dije, compañeros si la acepto tenemos que ponernos de acuerdo –no es censura previa– sobre cómo se van a plantear los problemas, porque tampoco es posible que se use cadena nacional para aseverar cosas que no sean exactas o en las que haya un error de interpretación. No se puede culpar a una institución porque ha habido errores. Nadie podría culpar al Partido Socialista si yo mañana cometo un error. Me podrán culpar a mí compañeros, pero no se puede generalizar. Este es un error camaradas. Tengo entendido, que estos son los puntos esenciales sobre los cuales yo ayer me pronuncié favorablemente.

Me han planteado compañeros, –se me olvida un punto– que se investigue si ha habido torturas; ¿qué dije yo? que bueno, pero le expliqué a uno de los compañeros, que tiene que informar –para que tenga validez ante la justicia– el médico legista, y yo me empeñaré que así sea. Yo no tengo, camaradas, sino que decirles cómo y qué instrumento puedo usar y esos instrumentos los voy a usar, pero los compañeros tienen que entender que no es fácil cambiar la mentalidad. Si muchos compañeros no quieren entender que este Gobierno es de ustedes y que es distinto lo que pasa hoy día, basta mirar mi ejemplo. Aquí estoy camaradas, aquí estoy con tres compañeros o cuatro, ¿por qué estoy aquí? Porque soy compañero de ustedes. Pero hay mucha gente que no entiende que está en el Gobierno”.

MIR: Mensaje de los pobladores de Lo Hermida a los pobres de todo Chile

(8 de agosto de 1972)

“Nosotros, los pobladores de los Campamentos “Vietnam Heroico”, “Lulo Pinochet”, “Asalto al Cuartel Moncada” y “Trabajadores al Poder”, queremos informar al país de los salvajes hechos desatados por la policía en el sector Lo Hermida, que culminaron con el asesinato de nuestro compañero René Saravia Arévalo, y más de seis heridos a bala. Queremos relatarles a nuestros hermanos trabajadores la verdad sencilla y honesta sin tapujes ni chivas, de esta horrible tragedia que sufrió nuestra población.

Los pobladores de Lo Hermida hemos sido difamados y calumniados por la prensa de derecha y por diarios irresponsables de la izquierda. Nos han acusado a los pobladores de provocadores, de delincuentes comunes, de ser los culpables de la masacre. Pero nosotros no estamos dispuestos a aceptar el guardar silencio frente a los mentirosos, a ser humillados en forma tan injusta. Tenemos el derecho a defendernos, a decirle a todos los chilenos la verdad.

El día jueves 3 de agosto, los pobladores observamos con extrañeza cómo un helicóptero sobrevolaba nuestros campamentos. No imaginábamos a qué obedecía ni lo que vendría después. A las doce de la noche, seis patrulleras de Investigaciones entraron al Campamento “Asalto al Cuartel Moncada”, se dirigieron a la casa de un dirigente y procedieron a allanarla sin mostrar orden judicial alguna. Al no encontrarlo, pusieron dos metralletas en el pecho de su compañera y groseramente la presionaron para que dijera dónde estaba. Al no lograr intimidarla, quisieron hacerlo maltratando a su guagua de tres meses. Compañeros que vieron la violenta acción de los policías avisaron a los vecinos. Los que intentamos acercarnos fuimos amenazados de muerte con las metralletas, provocando la respuesta airada de parte nuestra, produciéndose un incidente en el cual la policía utilizó el máximo de violencia, tras lo cual procedió a retirarse disparando ráfagas de metralletas que nos obligaron a tirarnos al suelo para no sufrir las consecuencias. Queremos decir a nuestros hermanos de clase, que no hubo ningún detenido en el campamento esa noche y que dentro de una camioneta de Investigaciones estaba el detenido el día anterior, Héctor Prieto Cayupil. Queremos dejar en claro, también que esa misma noche recibimos la solidaridad de los otros campamentos ante la violencia policial.

El día viernes 4 a las 10 de la mañana nuestros dirigentes tenían una reunión con el Ministro de la Vivienda, acordada una semana antes, para plantear una vez más el problema de nuestros campamentos.

Allí, nuestros dirigentes le plantearon al Ministro de la Vivienda, como encargado de los problemas de los pobladores nuestra fuerte protesta y extrañeza por lo ocurrido el día anterior, ya que nosotros no comprendíamos por qué había sucedido todo eso. ¿Por qué se allanaban nuestras casas, humillándonos y golpeándonos en la forma que lo hicieron? ¿Por qué para entrar a la mansión de un rico se avisa al jefe de casa, se muestran autorizaciones, se hace con una serie de cuidados y por qué a nosotros los pobres, no sólo se nos avisa, sino que se nos golpea, tanto a nosotros como a nuestras compañeras y a nuestros hijos y, además, se nos rompe lo poco que tenemos? ¿Qué razón habría para todo esto?

El Ministro habló por teléfono con el señor Paredes, Jefe de Investigaciones, y le preguntó todo esto. El señor Paredes respondió que lo que había pasado en Lo Hermida se había hecho cumpliendo instrucciones de la Justicia por el caso de unos remedios y de una camioneta que había sido asaltada. Ahí fue donde por primera vez, se nos dijo la razón de por qué habían sido allanadas en forma humillante nuestras casas. Luego el señor Paredes citó a los dirigentes nuestros que estaban allí para ir a hablar con él a las once y media. Los dirigentes haciendo caso de los presentimientos y las razones de los pobladores, no fueron, pues no tenían garantías, ni les ofrecía confianza el señor Paredes. Un día más tarde los presentimientos de desconfianza se los iban a confirmar en forma brutal.

En la tarde del mismo viernes, reunidas las jefaturas de los campamentos “Vietnam Heroico”, “Asalto al Cuartel Moncada”, “Lulo Pinochet”, “Trabajadores al Poder”, “Villa Los Lagos”, “René Schneider” y dos dirigentes del campamento “Guillermo Manuel Rodríguez”, resolvimos que esta situación no se podía permitir. Que era nuestro deber protestar y denunciarle a nuestros hermanos de clase, el atropello de que habíamos sido víctimas y la represión que se comenzaba a dejar caer sobre nosotros, pobladores y militantes revolucionarios. Queríamos también exigir la libertad del compañero Víctor Toro, junto a la de los demás detenidos por la represión en San Bernardo.

Para ello decidimos bajar a la Plaza Egaña, desde donde informamos a la prensa, televisión y radio de estos hechos y exigimos que las autoridades dieran una explicación. Durante el mitin, que fue por espacio de una hora, bloqueamos las calles para impedir provocaciones y no hubo vandalismo ni enfrentamientos con la policía. Durante el mitin fueron identificados tres agentes de Investigaciones dispuestos a provocarnos y con eso justificar una represión. Sin embargo, no nos dejamos provocar, pusimos guardia donde los detectives huyeron (un bar), donde permanecieron hasta nuestra ida. Es falso que los hayamos agredido.

Cuando cumplimos los objetivos de la movilización y nos retirábamos, una camioneta de Investigaciones se encontró de frente a la marcha. A pesar de que nuestra indignación era enorme, nos contuvimos para no provocar una masacre, ya que nos apuntaban metralletas y un detective amenazaba con tirar a matar. Es falso que hayamos enfrentado con armas de fuego a los detectives, como lo señalan los diarios de derecha y de izquierda.

Al llegar a nuestras casas, no imaginábamos que al otro día estaríamos viviendo los resultados de una masacre.

Horas después de lo ocurrido en la Plaza Egaña, aproximadamente a las cuatro y treinta de esa madrugada, que no se nos olvidará jamás, se empezó a tender un amplio cerco con una cantidad inconcebible de personal policial, civil y uniformado a todo el sector de Lo Hermida que rodea nuestros campamentos. Compañeros que a esa hora tienen que salir a sus trabajos fueron los que después nos contarían de este hecho que nosotros no podíamos ni siquiera imaginar por qué se producía.

A las seis de la madrugada, aproximadamente, las barricadas que habíamos puesto como defensa por el allanamiento anterior, fueron barridas por una tanqueta de la policía y el cerco mortal se dejó caer con una furia increíble hacia nuestros campamentos “Asalto al Cuartel Moncada”, “Lulo Pinochet”, “Vietnam Heroico” y “Trabajadores al Poder” y los sectores alrededor de ellos donde dos mil quinientas familias trabajadoras todavía dormíamos sin pensar que íbamos a ser despertados de una manera tan inhumana.

Treinta y siete camionetas de Investigaciones, cuatro micros de carabineros, dos camiones de transporte de caballos (donde se llevaron posteriormente a los detenidos), una tanqueta y ambulancias, o sea, de trescientos a trescientos cincuenta hombres armados de metralletas, fueron los que después de haber rodeado silenciosamente el sector, cayeron sobre nosotros, cortaron la luz y lanzaron luces de bengala; prendiendo reflectores se abalanzaron sobre nosotros y nuestras familias.

Los detectives, quienes resultaron ser nuestros verdugos, nos empezaron a gritar a través de megáfonos cosas que resultaban sólo ser gran desengaño y crueles mentiras para que nosotros saliéramos de nuestras mediaguas y quedáramos aún más indefensos a sus insultos, golpes y balas.

Los pobladores salimos de nuestras casas, si a lo que tenemos le podemos llamar casas, con la ropa con que dormíamos, tratando de proteger a compañeras y a nuestros niños y tanto nosotros como nuestras mujeres fuimos golpeados brutalmente e insultados en forma humillante una y otra vez. A los pobladores que no alcanzaron a salir, los detectives se metieron a sus casas, y los expulsaron de ellas a puntapiés y a cachazos de metralleta, tratando a nuestras compañeras en la forma más baja imaginable y también golpeándolas, mientras afuera todo era ruido de balas y bombas lacrimógenas.

Tratamos de defendernos con lo único que podíamos defendernos, con nuestras manos, con las mismas que mediante nuestro trabajo creamos riqueza para el país y de la cual sacan su sueldo los señores policías que, sin que nosotros nos explicáramos por qué, ahora se convertían en nuestros sanguinarios castigadores.

Pero ellos estaban armados hasta los dientes y empezamos a ver caer a nuestros compañeros e incluso a una compañera. Una bala en el muslo hacía caer en la calle Tres de Octubre del “Lulo Pinochet”, a nuestra compañera Ana Núñez Núñez, de 42 años de edad, que en este momento se encuentra grave en el Hospital El Salvador. También caía con una bala en el abdomen y otra en la mandíbula, nuestro compañero Luis Molina, quien se encuentra más grave aún en la Posta 4, luchando contra la muerte y para quien hemos estado pidiendo desesperadamente sangre, pues, se ha desangrado demasiado. Lue-

go Luis Herrera, después Bernardico Cofré, Manuel Gómez, ambos en la Posta Central, etc.

Y mientras corría a protegerse detrás de un viejo camión, herramientas de subsistencia de un compañero poblador, caía cobardemente asesinado de un balazo en la frente el compañero René Saravia Arévalo, de 22 años de edad, obrero de la construcción, hijo de campesinos, inquilinos del fundo "Butalón" de Carahue, donde Elías Manríquez, su dueño, los explota de tal manera que una familia de doce hijos ya no podía subsistir. Es por eso que René Saravia, en la flor de su vida, se viene a Santiago a buscar trabajo para ayudar a su familia. Había encontrado trabajo y estaba ahorrando para traer a su gente a Santiago. Para darles una casita pobre, pero digna, había participado tres días antes en la toma de los terrenos del campamento "Trabajadores al Poder". Pero los señores detectives dispusieron otra cosa. Fue muerto a mansalva por el delito de luchar por sus compañeros, por su familia a quienes les mandaba el dinero que podía juntar. Así como el compañero Saravia, los heridos y ultrajados pobladores en su generalidad, tenemos motivos similares para luchar por un sitio y una casa. De alguna manera todos nos llamamos, y ahora con dolor, pero con orgullo, lo decimos, todos nos llamamos René Saravia. Y estos René Saravia, nosotros, que tenemos que luchar por la vida día a día, somos los provocadores, bandidos y "ultras" que los detectives debían reprimir por ser delincuentes según sus jefes que ordenaron esa acción maldita con gran despliegue policial. Y estos éramos la horda de malhechores que había que combatir hasta las últimas consecuencias, según los funcionarios que se hicieron cómplices de los asesinos, al apoyarlos y falsear y deformar los hechos.

Así fuimos separados de nuestras mujeres, puestos de boca al suelo, tratando tierra y amenazados de muerte si nos levantábamos, para luego ser empujados sin importar los heridos y golpeados que estábamos, en los camiones para transportar caballos y a las micros, para ser llevados detenidos al cuartel de Investigaciones de Zañartu. Allí estuvimos, sin mediar explicación alguna, siendo golpeados cuando los señores detectives querían hacerlo.

Allí los señores detectives se ensañaron con el compañero Ramón Serrano, obrero de la construcción, quien fue vejado, flagelado, golpeado, incluso en los testículos, llegando al colmo de la crueldad al arrancarle uno por uno los pelos de esa zona. Laura Allende, Arsenio Poupin y el Ministro de la Vivienda con nuestros dirigentes, al permitirlo el Presidente, pudieron ser testigos al visitar Zañartu, de cómo quedó el compañero Serrano. Todo esto fue hecho para intimidar a los compañeros pobladores, para llevarlos a traicionar a sus compañeros y denunciar a los dirigentes. Pero de nuestros campamentos, todos los pobladores mantuvieron una actitud digna de miembros de la clase obrera. Quizás los que dirigían la inhumana operación, trataron de convertirnos en lo que ellos son, traidores al pueblo, pero en eso fracasaron y fracasarán. La dignidad de un trabajador consciente sobrepasa en mucho a la bajeza de los que los golpean.

Luego, al no tener resultados, los fueron soltando sin tener excusas, sin tener nada. Si piensan que a nosotros los trabajadores se nos puede golpear y seguir impunes, se equivocan medio a medio.

Compañeros trabajadores: ésta, y nada más que ésta, es la verdad de la masacre de Lo Hermida. Sin embargo, la derecha de los ricos y privilegiados, interesada en atacar a los revolucionarios y al pueblo, ha aplaudido a los culpables directos de esta masacre, con el propósito de seguir empujándolos en este camino contra los trabajadores. Los culpables en su cobardía han coincidido con los señores de la derecha, desatando una ola de calumnias contra los pobladores; han tratado de esconder la verdad y así evitar la responsabilidad criminal que tienen por la muerte de nuestro compañero René Saravia y el asalto brutal a nuestra población.

El señor Paredes, Director de Investigaciones, y el señor Toro, Subdirector de Investigaciones, los responsables de estos hechos, secundados por los diarios "El Mercurio", "La Segunda", "La Tribuna", "El Siglo" y "Puro Chile" nos han acusado con toda desvergüenza de que somos nosotros los pobladores de Lo Hermida, los que provocamos esta masacre. Los pobladores preguntamos: ¿Cómo pudimos provocar esta masacre si cuando la policía invadió nuestra población disparando y lanzando bombas contra nosotros, estábamos durmiendo en nuestros hogares? ¿Acaso hemos asaltado alguna vez a la policía en sus cuarteles? ¿Acaso las metralletas que asesinaron e hirieron a nuestros compañeros, las tanquetas y las bombas que dañaron nuestras casas las teníamos los pobladores? ¿Para qué, con qué fin, vamos los pobladores a provocar y a enfrentar un verdadero ejército de policías civiles y uniformados? ¿Qué podíamos ganar con ello?

Los jefes de Investigaciones, nuevamente aplaudidos por la derecha explotadora que toda la vida inventa la existencia de grupos armados en las poblaciones para justificar su política de reprimir al pueblo, dijeron que nosotros resistimos la acción de la policía, emboscados en los techos, con armas de fuego. Los pobladores preguntamos: ¿Cómo podíamos emboscarnos sobre los techos, cuando nuestras casas son mediaguas con fonolas que se desarmen y se caen si uno se sube a ella? ¿Dónde están las metralletas, las bombas, los arsenales que la policía dijo que teníamos? Nosotros queremos que los chilenos de corazón bien puesto, conozcan la verdad, que la policía muestre las armas que dijo haber encontrado, que se den a conocer públicamente los partes de Carabineros e Investigaciones donde aparecen los resultados de la vandálica acción policial.

El asalto de la policía contra nuestra población fue brutal y cayó en forma indiscriminada sobre nosotros. Es verdad que hubimos algunos que nos defendimos contra la brutalidad policial que golpeaba nuestras mujeres, que amenazaba nuestros hijos, destruía nuestras casas. Pero nos defendimos contra las ráfagas de ametralladora y las bombas, con piedras, con palos y con nuestros puños. ¿Acaso lo que quiere el señor Paredes, el señor Toro, es que nos dejemos matar sin defendernos? ¿Que nos dejáramos matar como perros? ¿Es justo que se nos pida eso?

Se nos acusa de haber disparado contra la policía, de haber herido a bala a varios policías. Pero la verdad es que lo único que hemos encontrado en la población son las vainillas de las balas de metralleta, los restos de las granadas lanzadas por la policía. Los únicos heridos que conocemos por los pe-

riódicos, son compañeros pobladores. Pues aún no hemos visto las fotos de los policías heridos.

El señor Vergara, Subsecretario del Interior, que se ha destacado por su afán de mentir, calumniar e injuriar a los pobladores, mientras no trata con el mismo odio a los patrones que matan campesinos, retoman armados fundos y fábricas del pueblo, ha dicho que nuestros campamentos son la guarida de la mal llamada “ultraizquierda”. Más aún, “El Siglo” nos acusa a los pobladores de ser utilizados por el MIR para provocar enfrentamientos. Esta es otra falsedad más, otra coartada tonta con que tratan de ocultar la responsabilidad que Paredes, Toro y otros funcionarios tienen en los hechos de Lo Hermida. En nuestros campamentos hay pobladores militantes del MIR, pero también los hay socialistas, de la USP, de la Izquierda Cristiana, del MAPU, independientes y aún militantes comunistas, y siempre ha existido entre nosotros el respeto. Los pobladores nos sentimos dolidos e insultados cuando se nos acusa de ser manejados como monigotes, como niños, para provocaciones de la izquierda revolucionaria que no existen más que en la imaginación de los calumniadores. Nosotros no somos ovejas irresponsables. Sabemos que nuestros enemigos están en la derecha, entre los patrones. Y no los buscamos como estos calumniadores en la izquierda y en el pueblo.

Estos mismos funcionarios responsables del asalto a nuestros campamentos han intentado también justificar su injustificable acción diciendo que tenían orden de la justicia de allanar la casa de Prieto Cayupil en el campamento “Asalto al Cuartel Moncada” para detenerlo y recuperar especies robadas.

Pero resulta que Héctor Prieto Cayupil ya había sido detenido con anterioridad. Los pobladores preguntamos: ¿Se justifica, para recobrar especies robadas, que no se encontraron, esta salvaje operación de este tipo militar, con tanqueta y cientos de policías? ¿Por qué no se ha dado a la publicidad la orden del juez? ¿Por qué René Saravia y la mayoría de los detenidos cayeron bajo las ráfagas de metralletas en los Campamentos “Lulo Pinochet” y “Trabajadores al Poder”, cuando la orden de allanamiento sería para el “Asalto al Cuartel Moncada”?

Por último, aquella prensa de izquierda que siempre ha deformado nuestras luchas y ha atacado nuestras movilizaciones, ni siquiera ahora, por respeto a nuestro compañero asesinado, ha querido decir la verdad. Para justificar los hechos de Lo Hermida, ha recurrido a la injuria de que nuestros campamentos son nidos de delincuentes. Esto también es falso y no explica de ningún modo la necesidad de tener que asaltar con balazos, bombas y tanquetas nuestra población. Nosotros nunca hemos defendido la delincuencia; por el contrario, siempre la hemos combatido. Más aún, nunca nos negamos a colaborar con la policía para terminar con los delincuentes comunes en las poblaciones. Al propio señor Paredes le hicimos llegar la lista de lugares donde se expende el licor clandestinamente.

Estas son las falsedades que los culpables y los interesados de la derecha han inventado con tanta maldad y cobardía para culparnos a nosotros de la masacre de Lo Hermida. Nosotros les hemos relatado la verdad. Los pobladores estamos convencidos que el asalto a nuestra población que culmi-

nó tan trágicamente no tiene otra explicación que ser una represalia policial. Los señores Paredes y Toro quisieron hacer un escarmiento en nuestra población al igual que en el pasado lo hicieron los jefes de la policía de los gobiernos de los patrones, de los ricos. Los señores Paredes y Toro son unos malos funcionarios, que debiéndose a un gobierno elegido por el pueblo escucharon las presiones de los ricos y traicionaron a los trabajadores. Señores como éstos, le hacen un daño enorme al Gobierno de la Unidad Popular. Sólo favorecen a los enemigos del pueblo.

Nuestros campamentos, son campamentos de trabajadores. Nosotros hemos luchado siempre por el trabajo digno para conquistar un techo dónde vivir, para ofrecerles a nuestros hijos un lugar que, aunque humilde, les permita crecer en la limpieza, en la solidaridad obrera.

Nosotros tuvimos que tomarnos los terrenos donde vivimos, porque durante los gobiernos anteriores, los gobiernos de los patrones, fuimos explotados implacablemente y perseguidos por la miseria. Nos unimos los sin casa y luchamos por nuestro derecho a tener un techo que cobijara a nuestras familias. Así hemos seguido luchando, organizados y con el esfuerzo colectivo para tener también salud, educación, bienestar, para los nuestros. Nuestra lucha es la lucha de los pobres, de los miles de trabajadores de Chile.

Es por eso, también, que en este momento de dolor e indignación justa, hemos recibido la solidaridad y apoyo de miles de pobladores y de trabajadores y de todos los revolucionarios de la izquierda que con honestidad y conciencia han apoyado valientemente nuestras luchas.

Los pobladores de Lo Hermida hemos sido siempre de izquierda. Nosotros votamos por la Unidad Popular, asistimos a cada uno de los llamados que se hizo al pueblo a movilizarse; por eso mismo es que nos duele tanto que haya personeros y funcionarios de este mismo gobierno que, olvidándose de la causa del pueblo, nos haya golpeado y reprimido.

Es amargo para nosotros que diarios irresponsables de la izquierda nos traten así, como perros. Que a nosotros, los pobladores, nos llamen delincuentes, mientras que a los señores de la derecha, que siempre nos han explotado, no los tratan así.

Sin embargo, los pobladores de Lo Hermida queremos advertirles a los derechistas de la Democracia Cristiana y al Partido Nacional, que se equivocan al creer que los dolorosos hechos que hemos sufrido pueden quebrar nuestra fe en la revolución. Nosotros no dejaremos nunca de luchar por la unidad de todos los revolucionarios de la izquierda, no dejaremos nunca de luchar por la causa sagrada de los pobres, de los trabajadores de todo Chile. Nuestro dolor por los compañeros caídos bajo la inhumana represión policial ha sido y es grande. Pero mayor ha sido la indignación de ser tratado con tanta calumnia e injuria. Por eso los pobladores de Lo Hermida nos levantaremos unidos como un solo hombre para limpiar nuestros nombres y honrar al compañero asesinado. Por eso hemos denunciado implacablemente esta masacre y exigimos al gobierno la justicia que nos corresponde.

La asamblea de los campamentos reprimidos de Lo Hermida acordó presentar públicamente al Presidente de la República un petitorio. Este petito-

rio, que entregamos al Presidente durante la entrevista que sostuvo con nuestros dirigentes en La Moneda, más que reivindicaciones materiales levanta reivindicaciones morales. Pues, nosotros jamás olvidaremos las balas y las bombas que nos cayeron aquella noche, el salvajismo de la policía, ni la memoria de nuestro mártir, el compañero Saravia. Y como queremos que estos hechos no se repitan jamás contra los pobres de Chile, estamos resueltos a luchar por obtener el castigo y encarcelamiento ejemplarizador de los culpables, y el esclarecimiento público definitivo de nuestra condición de víctimas de una agresión policial injustificada, cobarde y premeditada.

El respeto a la memoria de nuestro mártir y sus familiares nos exige reivindicar públicamente su nombre, y las circunstancias en que cayó muerto, de todas las mentiras que han dicho en la prensa, radio y televisión, tanto de izquierda como de derecha.

Por eso, porque nuestra indignación era auténtica, porque nuestras peticiones de justicia eran legítimas y justas nos decidimos desde un primer momento a combatir la tergiversación y la mentira con una actitud muy firme y decidida. Si nosotros teníamos la razón y decíamos la verdad, era nuestra obligación comportarnos con firmeza para llevar esta verdad al resto de nuestros hermanos de clase. Sabíamos que el pueblo tenía que hallarnos la razón.

Y no nos equivocamos. El Presidente Allende fue el primero en atender nuestros deseos de justicia, fue él el primero en guardar una actitud de respeto hacia nuestro dolor e indignación, hacia nuestros dirigentes y en mostrar una disposición a investigar los hechos y ubicar a los responsables, en lugar de culparnos a nosotros o a la mal llamada “ultraizquierda”.

Así el Presidente dio un tapabocas a aquellos burócratas y diarios irresponsables de la izquierda que nos han acusado a los pobladores y a nuestros dirigentes de culpables de la masacre.

Abierto el diálogo con el Presidente, le llevamos el petitorio que resumía nuestras legítimas aspiraciones de justicia y reparación moral. El Presidente de la República lo ha aceptado y cumplido ya casi en su totalidad. Aquellos puntos aún pendientes se conversan actualmente con el Ministro de la Vivienda.

Los mismos diarios irresponsables de la izquierda que nos han atacado, han coincidido, curiosamente, con los diarios de derecha al decir que los pobladores hemos querido “humillar” al Presidente de la República con nuestro petitorio.

¡A qué extremos puede llegar la intriga, el sectarismo, el rencor y el odio al que no piensa igual que ellos!

Nosotros queremos contestarle a estos mentirosos.

En primer lugar, en nuestras conversaciones con el Presidente, mantuvimos una actitud firme, pero siempre respetuosa hacia su persona. El hizo lo mismo con nosotros.

En segundo lugar, nuestro petitorio era justo. Su aceptación por el Presidente significa para nosotros, entonces, que nuestro petitorio tiene que haber estado de acuerdo con la conciencia del Presidente y con su ánimo de hacernos justicia.

Suponernos intenciones de “humillarlo” sólo puede caber en mentes enfermas de rencor y sectarismo en contra nuestra.

Nosotros, en todo momento, hemos actuado con serenidad y responsabilidad.

Sabemos que el carácter ejemplarizador de las sanciones que se tomen sobre los culpables de la masacre es la garantía más segura para que estos hechos no se repitan nunca más.

Por eso, nos hemos querellado por homicidio contra los funcionarios Paredes y Toro, Director y Subdirector de Investigaciones, respectivamente.

Lo decimos claramente: queremos que vayan a la cárcel por su responsabilidad en estos hechos de Lo Hermida.

También, nos querellaremos contra Daniel Vergara, Subsecretario del Interior, por las injurias y calumnias expresadas en contra nuestra, a raíz de los hechos de Lo Hermida.

Además, hemos pedido que la comisión investigadora de estos hechos se constituya de acuerdo a una fórmula paritaria gobierno-pobladores reprimidos de Lo Hermida o sus representantes. Estamos esperando su respuesta.

La masacre de Lo Hermida no se puede olvidar.

La vida de ese compañero no se puede recuperar.

Su recuerdo nos impulsa a continuar en forma más intensa y decidida la lucha por la causa de los pobladores de Chile, que es nuestra causa, por la lucha, por los derechos de los pobres de Chile, que son nuestros derechos.

Derecho de los pobres a organizarse y exigir respeto a sus organizaciones y dirigentes.

Derecho de los pobres a rebelarse contra las injusticias.

Derecho de los pobres a combatir la burocracia insensible y tramitadora.

Derecho de los pobres a culpar a quienes nos provocan daños y exigir castigo para ellos.

Derecho de los pobres a restituir la verdad de los hechos, cada vez que ellos sean falseados, calumniados o atacados injustamente.

Derecho de los pobres a defenderse, cuando son agredidos sus mujeres y sus hijos, destruidas sus viviendas y golpeados ellos.

Derecho de los pobres a combatir por sí mismos la delincuencia y a organizarse para ello.

Derecho de los pobres a movilizarse en defensa de los intereses del pueblo en contra de los reaccionarios y enemigos del pueblo.

Derecho de los pobres a ser revolucionarios, sin ser postergados, perseguidos, reprimidos ni torturados.

El derecho de los pobres a la vivienda y a organizarse para conseguirla y construirla.

El derecho de los pobres a luchar por una sociedad justa en que aquellos que hemos construido la patria, seamos quienes decidamos los destinos de ella.

El derecho de los pobres a la vida, derecho que no tuvo el compañero Saravia”.

¡PATRIA O MUERTE!

¡VENCEREMOS!

Partido Socialista, Cristianos por el Socialismo, MIR: Declaraciones sobre sucesos de Lo Hermida

(Agosto de 1972)

“En un penoso episodio producido en la madrugada del sábado recién pasado se ha derramado sangre obrera. En efecto, con ocasión de un allanamiento policial practicado en la Población Lo Hermida perdió la vida un trabajador, otros resultaron heridos y muchos más fueron objeto de violencia innecesaria. Decir la verdad ante los trabajadores ayuda a la revolución. Por eso, el Partido Socialista considera que constituye un deber revolucionario exponer su juicio sobre tan lamentable suceso.

“El Gobierno Popular es el resultado de la lucha abnegada de las clases trabajadoras. El proceso revolucionario iniciado por él sólo será coronado por el éxito si continúa nutriéndose de la energía proletaria, debiendo tener la sensibilidad requerida para percibir las más profundas aspiraciones de las masas –a veces difusas– y disciplinar esta fuerza poderosa a través de una clara orientación política.

“Los socialistas sabemos que los pobladores son los que, casi con mayor intensidad, sufren los efectos brutales de la miseria y explotación del sistema capitalista que heredamos, por lo que nos guía una especial preocupación por impulsar sus reivindicaciones y desde el Gobierno Popular asegurar sus derechos. Por eso, reprobamos la acción policial ejecutada en la Población Lo Hermida el sábado recién pasado, por la falta de justificación y la forma en que fue ejercida, atentando contra la vida de trabajadores y vejando a centenares de familias obreras.

“Por el carácter condenable de estos hechos, los socialistas creemos conveniente reiterar que nada ni nadie hará variar nuestra posición contraria a toda política atentatoria contra los trabajadores. Ninguna consideración, de cualquier carácter que sea, nos hará transigir en esta cuestión de principios.

“La afirmación anterior impulsa al Partido Socialista a destacar la superior decisión del Presidente de la República de no aceptar el comportamiento policial en este caso, y disponer una investigación para determinar las causas de este acto represivo y las responsabilidades personales. Destacamos también el profundo sentido revolucionario que tiene el gesto del Presidente de la República de invitar a su despacho, primero, a los pobladores de Lo Hermida para examinar la situación producida y concurrir, después, al propio campamento a dialogar con ellos.

Esta conducta del compañero Allende no tiene precedentes en la historia de Chile y nos llena de satisfacción, por cuanto expresa su identificación con los trabajadores y su voluntad de darles una reparación moral. Ella es

comparable sólo a la consideración que los pobladores tuvieron hacia él, con lo que ofrecieron también un ejemplo de la calidad humana que tienen al sobreponerse a su dignidad lastimada.

“Del mismo modo, señalamos ante el país, que el Ministro del Interior, compañero Jaime Suárez, no ha tenido responsabilidad alguna en estos hechos, por su desconocimiento de la naturaleza y alcance del allanamiento que se realizó en la Población Lo Hermida. Al enterarse de lo sucedido se ocupó personalmente de hacer la investigación preliminar y de reparar algunas de sus consecuencias inmediatas como fue, por ejemplo, ordenar la libertad de los detenidos injustificadamente.

“Por la gravedad que reviste la situación expuesta el Partido Socialista dispuso, por su parte, una investigación política para obtener sus propias conclusiones. En un proceso revolucionario sustentado en las masas trabajadoras, y dirigido por sus genuinos representantes los actos extremos producidos sólo tienen explicación por la subsistencia de hábitos y formas de acción policiales, que constituyen una herencia de los regímenes burgueses y que, por no aceptarlos, el país ha visto acusados injustamente a dos ministros populares. De esos hábitos son culpables esencialmente aquéllos que en el pasado manipularon las fuerzas policiales para la defensa mezquina e hipócrita de sus intereses reaccionarios.

“Los socialistas condenamos de la manera más enérgica la hipócrita y canallesca explotación publicitaria que está haciendo la Derecha de estos sucesos. Los reaccionarios no tienen autoridad moral para emitir juicios al respecto, toda vez que los gobiernos anteriores dirigidos por ellos se sustentaron por la represión, convirtiéndola en método permanente de dominio.

“Del mismo modo, condenamos el oportunismo de algunos sectores infantelistas en su desmesurado afán de constituirse en una alternativa de poder en el proceso revolucionario, buscan sacar provecho político juzgando al Gobierno, a la Unidad Popular y a sus mandatarios, cuya rectitud moral y vocación revolucionaria están fuera de toda duda”.

La Comisión Política del Comité Central del Partido Socialista,
Santiago, agosto 8 de 1972

Cristianos por el socialismo

“He visto el sufrimiento de mi pueblo y he oído los gritos de angustia por su opresión. . .”. (Exodo 3)

1.- Ante los hechos ocurridos en “Lo Hermida” (y en industria conservera DEYCO, en desalojos campesinos y otros), donde el pueblo más, aún mujeres embarazadas y niños, han sido reprimidos violentamente y, en algunos casos, torturados por fuerzas policiales, levantamos nuestra voz de solidaridad y protesta. Estos hechos se suman a la opresión constante, y la violencia permanente que sufren los pobres (viviendas, salud, locomoción, explotación

en el trabajo, etc.), como cristianos y sacerdotes sabemos que Dios no quiere este sufrimiento. En los oprimidos de hoy, Cristo sigue sufriendo.

2.- El sufrimiento, la opresión y la violencia que sufren los pobres no son pura casualidad. No son errores independientes a la voluntad de los hombres. Tienen causas concretas que la clase trabajadora va conociendo cada día mejor. La gran causa es el sistema capitalista (donde manda el dinero y el poder para reprimir), que todavía existe en Chile. Pero ¿no habrá en los hechos citados otras causas inmediatas? ¿No será la represión contra el pueblo el precio de debilidades y búsqueda de alianzas? ¿No habrá ceguera y falta de confianza en el avance revolucionario del pueblo? ¿No se estará cediendo a la presión de los poderosos y sus representantes políticos? Como cristianos nos hacemos estas preguntas. Nuestro compromiso evangélico con los oprimidos debe ser eficaz. Esto nos exige ir al fondo de los problemas.

3.- Frente a la violencia permanente contra los pobres y frente a las represiones recientes, el silencio o la pasividad es cobardía y complicidad. Rechazamos también la versión mentirosa de los hechos con la cual se ha buscado engañar al pueblo. Tampoco aceptamos la defensa hipócrita que los poderosos hacen del pueblo al que siempre han explotado. Por el contrario, los trabajadores llaman las cosas por su nombre. Tienen derecho a conocer toda la verdad. Sólo la verdad es revolucionaria. Los poderosos no dicen la verdad. No les imitemos mintiendo al pueblo o deformando los hechos. Como cristianos descubrimos la verdad en la lucha de los pobres por la justicia. Como creyentes en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, no aceptamos el atropello a la verdad de los oprimidos que luchan por su liberación.

4.- El único camino de liberación está en la unidad combativa de los pobres. Esta unidad se construye a partir de los intereses, luchas y organizaciones de la clase trabajadora. Es el momento de unir fuerzas para avanzar. Es el momento de ser consecuentes con la construcción del socialismo, lo que exige sacrificio y austeridad, sobre todo en los que tienen la responsabilidad de conducir el proceso. Las fuerzas contrarias a los intereses de Chile están unidas. En la defensa de sus intereses egoístas, usan el Parlamento, las leyes y los tribunales de justicia. Usan la burocracia y las fuerzas represivas. Engañan al pueblo deformando valores como "libertad", "patria", "paz", "orden", "nacionalismo", "participación", "democracia", etc. Hasta llegan a usar el sentimiento religioso del pueblo.

La situación es compleja, pero el evangelio nos exige una acción definida y sin ambigüedades. No se puede servir a dos señores. O estamos con los pobres y su historia de liberación, o estamos contra ellos.

Secretario Nacional de Cristianos por el Socialismo.

MIR: El MIR a los obreros, campesinos, pobladores, estudiantes, soldados, y al pueblo de Chile

1.- El pueblo los trabajadores tienen derecho a exigir que se conozca toda la verdad de los hechos de Lo Hermida y que se le haga justicia.

Hoy día las causas y los responsables de la represión y el asesinato de un poblador en Lo Hermida, están suficientemente claros; el conocimiento de los hechos permite establecer lo siguiente:

a) Los hechos protagonizados en el Campamento “Asalto al Cuartel Moncada”, son el producto de un plan elaborado y puesto en práctica por los jefes máximos de Investigaciones, Eduardo Paredes y Carlos Toro (hoy suspendidos) y otros funcionarios de gobierno. Así lo han reconocido los propios implicados y personeros de la actual Administración.

b) El uso de la fuerza policial contra los pobladores de Lo Hermida, como lo han reconocido Paredes y Toro, obedeció a una táctica de intimidación y amedrentamiento sobre los pobladores y la izquierda revolucionaria, y no a una simple diligencia de carácter policial.

c) Para llevar a cabo sus propósitos los autores intelectuales y materiales decidieron concentrar un enorme contingente de fuerza policial civil y de Carabineros, con el objeto de contar con una enorme superioridad de fuerzas que, por su sola presencia, disuadiera y paralizara la respuesta de los pobladores. Se trata, en realidad, del uso de una táctica que viene siendo empleada desde hace tiempo por sectores del gobierno para enfrentar y reprimir a sectores movilizados del movimiento de masas; el uso de este método ya ha sido empleado en la lucha campesina –en el desalojo de fundos, como “Estados Unidos” en Malleco, “Monte Blanco” en Santiago–, la acción contra pobladores en la Gobernación de San Bernardo, los sucesos de Concepción del 12 de mayo, etc.

d) La intimidación y la represión no terminó con los acontecimientos desgraciados del sábado 5 de agosto, sino que continuó, más tarde, con la tortura física en el cuartel de Investigaciones de Zañartu a los pobladores detenidos y con la violencia verbal, ejercida por funcionarios de Investigaciones y de gobierno y la prensa adicta.

2.- Los resultados de la acción de la policía fueron el asesinato de un poblador, decenas de heridos, apaleo, humillación y vejamen de mujeres y niños, destrucción de viviendas, detención de casi 200 pobladores, el robo de especies, etc.

Los propósitos de la operación policial sobre Lo Hermida no son los de una acción normal del cuerpo policial, sino que constituye un nuevo tipo de acción, de carácter político-policial sobre sectores de trabajadores y las masas.

3.- Concretada su acción represiva, Eduardo Paredes, Carlos Toro y otros funcionarios comprometidos elaboraron una versión deformada y mentirosa de los hechos, destinada a encubrir su responsabilidad política, administrativa y moral.

Pretendieron hacer creer a la opinión pública que la acción policial sobre Lo Hermida obedecía a una orden judicial pendiente sobre personas de-

terminadas de la población, y que en la ejecución de la orden judicial sobre una o dos personas del sector, para lo cual se hizo un despliegue policial enorme, la policía habría encontrado la resistencia organizada y armada de los pobladores. Pretendieron, al mismo tiempo, responsabilizar políticamente de los resultados de esta acción represiva a la izquierda revolucionaria, al MIR, al MPR, a los pobladores, en general.

Esta versión fue sospechosamente adoptada de inmediato por el Partido Comunista, por sus máximos personeros, quienes la transmitieron, defendieron e impusieron en el Comité Político de la Unidad Popular. Al mismo tiempo, presionaron a ese Comité para que emitiera una declaración que deformaba absolutamente los hechos y lograba el propósito de encubrir a los responsables de la represión y asesinato, al mismo tiempo, que impulsaba los hechos a la izquierda revolucionaria.

4.- Mientras sectores del gobierno y de la izquierda, mientras la derecha inculpaba al MIR de los sucesos de Lo Hermida, el MIR continuó junto a los pobladores, decidido a correr su misma suerte en la lucha por establecer definitivamente la verdad de lo ocurrido. El MIR ha estado siempre a la cabeza de las luchas de los más pobres de la ciudad y el campo y nunca ha eludido su responsabilidad, como conducción política de los trabajadores que luchan y se movilizan.

5.- Sin embargo, la fuerza misma de los hechos, la actitud intransigente de los pobladores, su movilización constante contra el engaño y la mentira, permitieron que la verdad se fuera imponiendo progresivamente. Así fue como por la fuerza de los hechos, las opiniones se dividieron al interior de la Unidad Popular y el PS y la IC emitieron una declaración que difería radicalmente de la declaración oficial del Comité Político de la Unidad Popular y especialmente de la versión difundida por el Partido Comunista y ciertos funcionarios de gobierno. El propio Salvador Allende tuvo que reconocer la real dimensión de los hechos y la responsabilidad de sectores funcionarios de su gobierno en lo ocurrido.

6.- Sin embargo, aclarados los hechos en lo sustancial, establecidas las responsabilidades respectivas, reconocido su error inicial por diversos sectores, partidos y funcionarios, el Partido Comunista, sus funcionarios de gobierno, parlamentarios, dirigentes, órganos de prensa continuaron deformando los hechos, tratando de radicar la causa en la lucha de los pobladores y en la acción política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

El Partido Comunista ha construido una imagen absolutamente falsa, mentirosa e hipócrita de los hechos de Lo Hermida y, a través de un inmenso montaje publicitario, de la intimidación ideológica y de la presión, trata de meter en la conciencia de las personas y la opinión pública su versión oficial y oficiosa. El PC pretende transferir al MIR sus propias responsabilidades en hechos desgraciados como los de Lo Hermida. El MIR señala que jamás ha asesinado a un militante comunista, pero Arnaldo Ríos murió, en Concepción, víctima del sectarismo. También, en Concepción, fue asesinado Eladio Caamaño y el MIR no controla ni al Intendente ni a las fuerzas policiales de esa provincia; por otra parte, el MIR no es parte del gobierno ni dirige a los

funcionarios de Investigaciones. El PC jamás ha aclarado su responsabilidad ante estos hechos. Por último, es altamente sospechoso que el Partido Comunista coincida con Fuentealba y la DC en imputar al MIR el origen de la violencia en Chile y la responsabilidad de sucesos como los de Lo Hermida.

7.- Los hechos de Lo Hermida no son casuales y productos del azar; muy por el contrario, son la expresión de tendencias profundas existente en el seno del gobierno y la UP, obedece a la política de ciertos sectores muy definidos, son el resultado natural de la acción del reformismo.

Precisamente, estos hechos se producen porque existen ciertos sectores en el gobierno y la Unidad Popular que difieren de aquella conducción que señala que el gobierno debe ser un instrumento que apoye plenamente la lucha de las masas y del pueblo, creando una serie de condiciones políticas, entre ellas, el cese temporal de la rutina represiva del aparato policial que permitan la más amplia movilización de los trabajadores de la ciudad y del campo, la elevación de sus niveles de conciencia, de organización y de su capacidad de combate. Pues, el avance del pueblo y la estabilidad del propio gobierno no se logran buscando acuerdo con los enemigos de clase y paralizando la actividad y la lucha de las masas. Los hechos de Lo Hermida son la consecuencia de la política práctica de aquellos sectores que conciben al gobierno y al Estado con instrumentos que deben regular por decreto o por la fuerza de la policía el desarrollo de la lucha de clases. En Lo Hermida, como ayer en Concepción, Lautaro, San Bernardo, etc., sectores de gobierno empezaron a optar por un modelo político que requiere utilizar la fuerza policial para controlar el movimiento de masas. El gobierno, el aparato del Estado, el aparato represivo ya no se utiliza para apoyar, favorecer, ampliar las luchas del pueblo, sino por el contrario, para someterlas a la camisa de fuerza de los campeones del reformismo, del parlamentarismo, de la legalidad, de las concesiones y de la conciliación de clase. Es un hecho la existencia de sectores que pretenden controlar por la fuerza la actividad de las masas, la acción de la izquierda revolucionaria, primero por la intimidación represiva y, luego, con la represión abierta es la forma en que aparece el "stalinismo", como práctica política en las condiciones particulares del proceso político chileno.

8.- La causa de fondo de los problemas señalados se encuentra en la existencia de una política reformista en el seno del gobierno y de la UP. La lucha entre las posiciones reformistas y revolucionarias, de dentro y fuera de la UP, se ha venido expresando en la política que las propias masas han desarrollado en las movilizaciones de Cerrillos, Maipú, Melipilla, Barrancas, Macul, Concepción, Cautín, Lo Hermida, etc. Como las masas se radicalizan cada vez más y adoptan el camino revolucionario, el PC y los reformistas, en general, se han ido aislando de ciertas luchas de las masas, ha ido perdiendo su control hegemónico sobre la conducción de la lucha de clases y, ante ello, reacciona violentamente, recurriendo a cualquier procedimiento. Por eso, el PC y los sectores reformistas, incapaces de librar el combate en el seno del pueblo, en el terreno de la lucha ideológica, recurren a la deformación y falsificación de las posiciones revolucionarias, pretendiendo presentarlas como

actitudes aventureras, contrarrevolucionarias, contrarias a los intereses del pueblo, contrarias a la estrategia y la táctica que las propias masas tienen en su camino hacia la conquista del poder. Conforme a esta situación, su actitud frente a los hechos de Lo Hermida no puede haber sido más falaz e irracional, porque en el fondo lo que sucede es que el PC no se atreve a discutir abiertamente sus reales concepciones, su real pensamiento y esto lo encubre bajo una política sistemática de descalificación de todos los que en la izquierda no sustentan sus erradas posiciones. En el caso de Lo Hermida, la actitud del PC se ha transformado en encubrimiento de los responsables de la represión y del asesinato, en eludir la discusión de las concepciones políticas que llevan a esas actuaciones al aparato policial.

9.- Pero esta situación no puede continuar más. El PC, los reformistas y todos sus seguidores, deben tener, una vez por todas, la valentía política y moral para enfrentar de cara al pueblo, la discusión ideológica acerca de la conducción, de la lucha política de las masas en Chile, sin esconderse en la cómoda práctica de la mentira, la deformación, el engaño, la descalificación. Si el PC cree que el camino para defender la estabilidad del gobierno, para asegurar el avance permanente de las masas, son las concesiones a los enemigos del pueblo, son el estancamiento y el retroceso en la lucha, son la represión y el asesinato de pobladores, que lo señale claramente y sin miedo a los ojos de todo el pueblo; si el PC y los reformistas piensan que las masas no tienen derecho a luchar por sus intereses y que tiene que subordinarlo todo a lo que disponga el Parlamento, la legalidad burguesa, la burocracia funcionaria, debe señalarlo claramente. Si el PC y los reformistas están decididos a utilizar la fuerza policial para controlar el movimiento de masas y a los revolucionarios, que no lo enmascaren más y lo asuman públicamente como política. Si el PC piensa que la izquierda y el gobierno deben mentir al pueblo, ocultando las causas reales y los responsables de la represión – masacre sobre Lo Hermida –, que lo asuma, también, públicamente.

Está bueno ya que el PC deje de escudarse en la fórmula de que toda crítica, toda discrepancia con el gobierno y sus políticas, de que toda crítica a las políticas del Partido Comunista, de que la divergencia y la lucha contra el reformismo, que el señalamiento de la verdad, son armas que sirven a la Derecha.

10.- El MIR llama a no dejarse arrastrar por el engaño del reformismo y a no permitir que la Derecha se aproveche de los errores del reformismo en el seno del pueblo.

El MIR llama a repudiar la represión, como tentación y como método, a exigir el castigo de los responsables políticos y administrativos de la masacre de Lo Hermida.

El MIR llama a unir al pueblo a través de la lucha, a unir a las corrientes revolucionarias de dentro y fuera de la Unidad Popular, a levantar un nuevo programa que permita unir a todo el pueblo y a los revolucionarios, que permita golpear al conjunto de la gran burguesía industrial, comercial, financiera y agraria, y al imperialismo, a través de la movilización directa de las masas, combinando las formas de lucha que sean necesarias.

2960 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

El MIR llama a combatir frontalmente al reformismo, a impedir que éste siga ganando fuerzas en el seno del pueblo, a impedir las concesiones a los explotadores, porque el reformismo sólo conduce a la derrota del pueblo y al triunfo de la contrarrevolución.

El MIR llama a avanzar con las masas, combatiendo al conjunto de los explotadores, movilizándolo al conjunto del pueblo, cuestionando al Parlamento y la legalidad burguesa y afirmando en la lucha el surgimiento de un poder popular que se afirme en los Consejos Comunes de Trabajadores y vaya abriendo una alternativa real de poder para las masas.

Comité Central Movimiento de Izquierda Revolucionaria,
Santiago, 11 de agosto de 1972.

MAPU: Los sucesos de Lo Hermida

(Agosto de 1972)

En esta Declaración, mañosamente silenciada o recortada por muchos órganos de información, la Comisión Política enjuicia con severidad una serie de acciones de la ultraizquierda, desencadenadas justo en el momento en que el pueblo se anota una serie de victorias sucesivas.

Condena también en forma clara la represión policial ejercida contra pobladores de Lo Hermida, como contraria a la política de la UP y del Gobierno.

El pueblo sabe que, después de los triunfos de Coquimbo, de la Central Unica de Trabajadores, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica, se han creado condiciones favorables para iniciar un período de ascenso de su vanguardia política, la Unidad Popular, un período de triunfo de la clase obrera y un período de desconcierto y dificultades en el campo enemigo.

Se comprobó, en el caso de Coquimbo, que todo el aparato electoral que el imperialismo y los monopolios pueden llegar a levantar, se viene abajo cuando el pueblo lo enfrenta unido. La carta bruja del imperialismo, el frente amplio al revés, la Confederación antipopular del freísmo y la derecha, no es carta segura contra el pueblo. Al contrario, bajo las banderas de la Unidad Popular, éste puede derrotarla.

Justo en este momento de victoria, de ascenso del movimiento popular y de repliegue de sus enemigos, éstos reciben su tablita de salvación. Una escalada, aparentemente dispersa, es desatada por la ultraizquierda. El llamado Ejército de Liberación Nacional es sorprendido con las manos en la masa; el dirigente del MIR, Víctor Toro, no encuentra nada más útil que tomarse la Gobernación de San Bernardo; la Plaza Egaña, Macul, Barrancas, Departamental, son centros de aventuras contrarrevolucionarias; en Ventanas estalla un explosivo que preparaban elementos irresponsables.

Los equivocados de antes y de ahora, los ultraizquierdistas, siguen atornillando al revés, para beneplácito de quienes hoy, más que ayer, se sentían heridos de muerte en sus intereses, acorralados por el Gobierno y la Unidad Popular.

La clase obrera y el pueblo, los partidos del proletariado en especial, tenemos la obligación de enfrentar de cara a las masas, con máxima dureza y energía a esos aventureros, pues tras cada una de sus acciones está el interés de nuestros enemigos.

Pero el MAPU distingue, con mucha claridad, la lucha ideológica sin contemplaciones contra la ultraizquierda, la represión contra los delincuentes comunes que se llaman a sí mismos revolucionarios, de la represión desatada –intencionadamente o no– en contra de cualquier sector del pueblo.

Los revolucionarios no juzgamos las intenciones; juzgamos los hechos. Y por eso condenamos la acción policial ejecutada en Lo Hermida el sábado pasado.

Nada justifica, a juicio del MAPU, lo obrado allí, una acción de esa naturaleza. Ella no corresponde a la política de la Unidad Popular ni del Gobierno.

Una medida así no ubica delinquentes sino que desconcierta al pueblo, atenta contra la vida de inocentes, desanima a las masas, confunde a los sectores menos preparados del pueblo acerca del verdadero carácter del Gobierno, y en definitiva abre, al crear confusión de todo tipo, más camino a los aventureros para aprovecharse de la situación y cumplir sus anhelos de lanzar las masas contra el Gobierno.

Si alguien soñó que así se combate a la ultraizquierda erró trágicamente la puntería.

La ultraizquierda y la derecha han competido en estos días en sus ataques al Gobierno. La reacción, los monopolistas, los terratenientes y sus pasquines, han salido en airada defensa de los pobladores. ¡Ellos, que explotaban y reprimían al pueblo por más de un siglo!

La ultraizquierda pretende llevar aguas al molino de su política –objetivamente contrarrevolucionaria– de enfrentar las masas al Gobierno Popular, de negar su carácter revolucionario, de desprestigiarlo ante el país.

Nuestro partido respalda absolutamente todo lo obrado por el compañero Presidente de la República, fiel representante del Gobierno Popular.

Exige, como él, la más amplia investigación y las sanciones más duras para los responsables.

Con su conducta, el compañero Presidente ha dejado en claro, una vez más, para todos, dónde están a juicio del Gobierno sus enemigos principales y cómo entiende este Gobierno revolucionario su relación con las masas. En este caso, con los compañeros pobladores, cuyos graves problemas heredados de gobiernos anteriores, son utilizados por los aventureros para sacar partido.

Chile sabe que después de la nacionalización del cobre, Allende no visitó las oficinas de la Anaconda.

Chile sabe también que después de los dolorosos sucesos de Lo Hermida, el Presidente estuvo con los pobladores.

Un Gobierno distinto, un Gobierno Popular, un Gobierno revolucionario, un Gobierno de los trabajadores, dirige hoy por primera vez los destinos de la patria.

Resultarán infructuosos los intentos de la derecha y del imperialismo, que han hecho de la represión su escuela, y los intentos desequilibrados de la ultraizquierda, que hoy están descubiertos, por debilitar la potencia del Gobierno Popular.

Los pobladores, como la clase obrera, los campesinos y los sectores medios, saben, más allá de cualquier consideración, que este es su Gobierno.

10 de agosto de 1972.

Provocación y diversionismo

(Editorial de *El Siglo* del 8 de agosto de 1972)

Todos los desplazamientos de los grupos ultraizquierdistas en la política nacional tienden a distraer a las masas de las grandes tareas históricas y revolucionarias que plantea la Unidad Popular. Tienden luego a obstaculizar el cumplimiento de esas tareas.

Cuando el Gobierno acomete vigorosamente la realización de grandes objetivos revolucionarios como el cambio de las relaciones de producción en el campo, con la profundización del proceso de reforma agraria y la liquidación del latifundio, como la liquidación del dominio imperialista en Chile mediante la nacionalización del cobre y de nuestras otras riquezas básicas, etc., como la liquidación del poder que ostentaba la oligarquía financiera y monopólica que de manera tan fundamental deformaba y hería a la economía del país, mientras el movimiento popular arrincona a sus enemigos, mientras todo esto ocurre, una y otra vez el ultrismo de izquierda aparece en el momento preciso para entregarles una bolsa de oxígeno a la reacción y al imperialismo.

Así han actuado los “ultras” a lo largo de todo lo que va corrido de este Gobierno.

Así están actuando ahora.

El pueblo había arrinconado a sus enemigos con triunfos electorales sucesivos.

Primero un triunfo resonante en la Universidad Técnica del Estado, para las fuerzas de docentes, no docentes y estudiantes que apoyan al Gobierno y a su política de cambios revolucionarios.

Segundo, una contundente victoria de la Unidad Popular –y del Gobierno, por ende–, en las filas combativas de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Tercero, en las elecciones para elegir a las autoridades de la Central Única de Trabajadores, los partidos Comunista y Socialista demuestran ser los más poderosos y en conjunto con los otros partidos de la Unidad Popular, sobrepasan el sesenta por ciento de la votación.

Cuarto, bajo las banderas de la Unidad Popular, triunfó en Coquimbo la ex Gobernadora del departamento de ese mismo nombre y militante del Partido Comunista, Amanda Altamirano, y se demostró, de paso, que la reacción se ha descapitalizado políticamente y que ya no puede contar con el voto mayoritario de las mujeres que antes la favorecía.

Arrinconada por esta serie de triunfos populares, la derecha encuentra de pronto en sus manos el salvavidas que le han tirado los ultraizquierdis-

tas y puede sacar el habla para condenar al Gobierno a coro con sus aliados y salvadores del MIR.

¿Y esto en qué momento?

En los momentos en que además de los triunfos obtenidos por las fuerzas populares había otro hecho altamente favorable para los intereses del pueblo y el país, el discurso del Presidente de la República, compañero Salvador Allende -24 de julio- en el cual el Primer Mandatario dio al pueblo un informe sobre la situación financiera del país y diseñó una estrategia económica revolucionaria destinada a ser puesta en práctica en un plazo relativamente breve y encaminada a romper las trabas del subdesarrollo que frenan nuestro progreso.

Para distraer la opinión pública de estas tareas tan fundamentales para el país, la ultraizquierda organizó y dirigió una provocación que costó una vida, la vida de un trabajador, y que sirvió y sigue sirviendo al dúo reacción-imperialismo.

Los dirigentes de ultraizquierda que padecen de una lamentable verbosidad revolucionaria, pretenden acusar a la Unidad Popular y a su Gobierno, de reformista. La verdad es otra. La verdad es que ese verbalismo sólo sirve para frenar o tratar de frenar el trabajo revolucionario del Gobierno y de las organizaciones populares mediante la utilización de pequeñas tácticas marginales que ni siquiera son reformistas, sino simple y definitivamente contrarrevolucionarias.

La delincuencia no es revolucionaria

(Editorial de *El Siglo* del 9 de agosto de 1972)

Nadie puede asegurar seriamente que son revolucionarios los que asaltan una camioneta fiscal y se roban cerca de trescientos millones de pesos, destinados a pagar los salarios a un grupo de trabajadores.

Una acción así nada tiene que ver con la revolución.

Una acción así es, simplemente, un delito común y sus hechos son, evidentemente, delincuentes comunes, pero de ninguna manera son revolucionarios.

Los que asaltan un domicilio particular para robar dinero e incluso las sortijas de los dueños de casa, cometen un delito que es castigado en todos los países de la Tierra, y que no puede ser considerado un acto revolucionario, sobre todo si los que lo ejecutan utilizan el botín no en actividades políticas o revolucionarias, sino en asuntos relativos al lucro personal de los delincuentes.

Estos asaltantes no son, por tanto, revolucionarios.

Asaltar un laboratorio y despojar de su reloj a un trabajador encargado de las tareas de nochera, no es un acto revolucionario. Es un robo, simplemente.

Todas estas y varias otras fechorías forman la labor “revolucionaria” del grupo de ultraizquierda, cuyas actividades investigaba la policía cuando, para proteger a estos delincuentes, los dirigentes del MIR montaron la provocación de Lo Hermida, que culminó con un hecho muy doloroso para las fuerzas populares del país: la muerte del poblador René Saravia y, además, un numeroso grupo de heridos, varios de ellos graves.

Por primera vez en nuestro país un grupo político actúa con las armas en la mano para proteger a una gavilla de delincuentes comunes y darles patente de “revolucionarios”.

Pero el país sabe que no lo son.

El país sabe que con esa gente no es posible establecer un diálogo político.

Resulta sospechoso, además, el hecho de que la ultraizquierda esté trabajando paralelamente con bandas de delincuentes y brindándoles protección. Porque lo único que se puede lograr por ese camino es crear un clima caótico y anárquico que afecte a todo el país.

¿Y a quién le sirve el caos y la anarquía en Chile?

No le sirven al Gobierno, como es obvio.

No le sirven a la Unidad Popular, de ninguna manera.

No le sirven a ningún partido que tenga vinculaciones normales con las masas.

Una imagen de caos y anarquía sólo les sirve a los pijes que quieren dár-selas de revolucionarios –con lo que consiguen defender también “desde la izquierda” los intereses económicos y políticos de la Derecha– y, esa imagen les sirve también, a los delincuentes que han recibido la patente de “revolucionarios” de parte de quienes dicen ser revolucionarios. Y esto les sirve también al imperialismo, a la reacción y a los grupos fascistas que planifican el golpe contra el Gobierno de la Unidad Popular.

Los que crean el caos y la anarquía son enemigos de la revolución chilena y con ellos no se puede dialogar.

Tampoco, por cierto, con aquellos que, so pretexto de la revolución, se empeñan en destruir las bases de nuestra economía, para hacer fracasar el Gobierno Revolucionario. Este es el caso del grupo de terroristas que pretendía volar la refinería de Las Ventanas.

Obstaculizar criminalmente la marcha del proceso revolucionario es, objetivamente, trabajar contra la revolución. Y con los que así actúan no puede haber diálogo.

Lo que se necesita frente a esta gente es más unidad y más disciplina.

La situación que vive el país obliga a los partidos realmente revolucionarios a mantener, de manera imperiosa, “la vigilancia permanente sobre la militancia disciplinada y organizada de cada partido para descubrir y denunciar –pública y oportunamente– a quienes, de modo deliberado buscan alterar nuestra línea política programática”, como lo expresó el Presidente de la República, compañero Salvador Allende en su carta a los jefes de los partidos de la Unidad Popular.

Las aventuras políticas emprendidas por el delincuentes o mentalidades afiebradas, buscan, precisamente, alterar la línea político-programática de la Unidad Popular y de su Gobierno.

Petitorio de los pobladores de Lo Hermida

(9 de agosto de 1972)

“Petitorio presentado por el Comité Coordinador de todos los campamentos de “Lo Hermida”, víctimas del asalto policial entregado al Presidente de la República hoy, 6 de agosto de 1972, por los dirigentes de los pobladores en entrevista pedida por el señor Presidente de la República, Salvador Allende, a los pobladores para conocer su versión de los hechos como cuestión previa a cualquier diálogo.

Rogamos a todos los periodistas que, independientemente de su posición política, repudian el fusilamiento de los pobladores por los gobiernos como método, difundir “in extenso” este comunicado.

- 1.- Libertad inmediata de los detenidos, incluyendo los de San Bernardo.
- 2.- Término de la incomunicación de los heridos.
- 3.- Conocer la verdad: el número de muertos, heridos, detenidos.
- 4.- Término de la persecución a dirigentes y pobladores.
- 5.- Destitución y cárcel de los asesinos, estén donde estén, sean el Ministro del Interior, el Subsecretario del Interior, Ministro en Visita que dio la orden, Director y Subdirector de Investigaciones y Carabineros.
- 6.- Llamado de atención del Presidente de la República al Subsecretario del Interior por las declaraciones mentirosas, injuriosas y provocadoras. Desmentido público de todas las falsedades y calumnias propaladas por personeros de Gobierno.
- 7.- Red nacional de la OIR que difunda una declaración conjunta de los campamentos, en que se establecerá la verdad de los hechos y el desmentido a los diarios “El Mercurio”, “La Segunda”, “La Prensa”, “El Siglo”, “Puro Chile” y otros. Esta declaración debe ser leída por un dirigente de los pobladores y el espacio sólo debe referirse a esta lectura.
- 8.- La Asamblea estima que sus dirigentes deben ir a informar al Gobierno y deben exigir que todo acuerdo y explicación del Gobierno debe ser dada en una gran asamblea de pobladores de “Lo Hermida”, adonde el Gobierno debe concurrir a dar las explicaciones.
- 9.- Pensión de gracia para las viudas o familiares de los muertos o heridos que queden imposibilitados para ganarse la vida.

2968 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

- 10.- Que se forme una comisión investigadora que identifique a los culpables, con participación de los pobladores en la comisión.
- 11.- Investigación en el SNS para determinar las responsabilidades administrativas por la presencia de ambulancias del SNS en el allanamiento.
- 12.- Devolución de todas las especies robadas por Investigaciones y Carabineros. Indemnización por las especies destruidas en el curso de la masacre.

Petitorio aprobado a las 21 horas del 6 de agosto de 1972, por la Asamblea General de los Campamentos de “Lo Hermida”.

www.cepchile.cl

Miguel Enríquez: Entrevista en *Chile Hoy*

(*Chile Hoy*, N° 9 del 11 de agosto de 1972)

Ch. H.: ¿Qué papel cree usted que debe desempeñar el MIR en el actual proceso? ¿Está ligada su suerte al éxito o fracaso de esta experiencia?

M. E.: No puede estar ligada la suerte del MIR al fracaso de una determinada experiencia. Ninguna organización, ninguna estrategia, ninguna política, está ligada a un momento táctico de la lucha de clases. El fondo del problema es que en este minuto algunos dirigentes del PC y distintos sectores de la UP han querido plantear que la suerte definitiva tanto del movimiento de masas como de la izquierda en su conjunto está ligada directamente al éxito o al fracaso de este gobierno. Ahora bien, si se trata de valorar lo que han llamado “el proceso” –lo que nosotros llamamos situación con rasgos de prerrevolución, abierta en 1970– como condición objetiva, lo hacemos. Si se trata de valorar en concreto el gobierno de la UP como cuestión concreta, también lo valoramos: hemos dicho que el gobierno de la UP abrió nuevas condiciones, más allá de la sola maduración de las condiciones generales. En primer lugar permitió terminar con la rutina represiva del aparato del Estado al modificarlo y a partir de esto permitió una enorme capacidad de movilización de las masas, una enorme capacidad de iniciativa de ellas e incorporó también a muchos sectores a la lucha política, activó a extensos sectores.

En razón de esto hemos llamado a la defensa de la estabilidad del gobierno, fórmula levantada por nosotros desde el 4 de septiembre. Esta defensa de la estabilidad del gobierno no presupone la identificación con cada uno de sus políticos o cada uno de sus actos, sino colocarse en forma irrestricta en la defensa de su estabilidad y su existencia.

Ch. H.: Pero en la práctica del MIR no aparece eso tan claro.

M. E.: Depende de qué llamas la práctica política diaria, porque si la movilización de las masas, y la conquista de sus derechos, si la lucha por sus intereses, el levantar su programa, la misma polémica ideológica no fortalece este gobierno, yo no sé qué puede fortalecerlo. El problema que existe no se da entre nuestra política de masas y el gobierno, sino en la política del gobierno frente al movimiento de masas. Ello hace que el gobierno se haya ido colocando muchas veces en contradicción con el movimiento de masas. El gobierno no ha sabido reconocer que la fuente fundamental de fuerzas es el movimiento de masas.

Ch. H.: Los comunistas acusan al MIR de pretender aislarlos del resto de los partidos de la UP. ¿Creen ustedes que el proceso revolucionario chileno puede prescindir del Partido Comunista?

M. E.: Es absurdo plantearse la pregunta de si alguien podría prescindir de una fuerza política. Es más, al MIR no le interesa prescindir de ninguna fuerza; le interesa realmente enfrentarlos o arrastrarlos detrás de su política. Ahora, si se trata de la valoración que hay que hacer en términos de su existencia, su fuerza, lo valoramos. Pero la sola valoración, su peso, no puede llevarnos a aquellas concesiones que hacen una cantidad de sectores, sean intelectuales, sean periodistas, sean vacilantes de la izquierda que han estado planteando que esa valoración presupone que subordinar las políticas de las organizaciones políticas y del movimiento de masas a las políticas reformistas del PC.

Se trata de combatir, no al PC, no al ente y objetivo orgánico, sino se trata fundamentalmente de combatir determinadas políticas. Son dos políticas que se están enfrentando la una contra la otra, la revolución y la reformista, cosa que no guarda relación con la prescindencia de la existencia del PC, y que sí guarda relación con el contenido y orientación que el PC da a su política. Eso lo combatiremos en forma irrestricta, y pensamos que cualquier concesión que se haga en ese plano, lo único que está haciendo es desarmar políticamente a quien lo haga. Digámoslo claramente; éste es un supuesto razonamiento lógico, que predomina en amplios sectores de la izquierda: "nada puede hacerse sin el Partido Comunista"; por tanto, "todo tiene que hacerse con el acuerdo del PC" y si se difiere del PC y éste impone condiciones, entonces hay una cantidad de cosas que no se hacen o no se dicen y que pueden justificarse a base de que "el PC no quiso". Pasa a ser, entonces, el PC el culpable de todos los males que están ocurriendo, y todos los vacilantes pueden refugiarse detrás de eso. Esta es la cuestión que nosotros rechazamos.

Ch. H.: Algunos analistas sostienen que ustedes constituyen una especie de "conciencia revolucionaria" del gobierno popular. Otros sostienen que ustedes desean el fracaso de la UP, para luego convertirse en alternativa diferente. ¿Qué hay de cierto o errado en estas apreciaciones?

M. E.: Ahí hay dos presunciones. Respecto de ser conciencia crítica, probablemente eso lo plantean los que tienen mala conciencia. El MIR es una organización que trabaja en el movimiento de masas y ahí se expresa. Relegar al MIR a una condición exclusiva de conciencia crítica, es un poco eliminar la realidad.

En cuanto a que el MIR esté interesado en el derrocamiento o fracaso de este gobierno y esta experiencia para levantar después una alternativa, en ningún caso. Nada quisiéramos más que el éxito de la revolución. El MIR plantea tareas y en función de eso trabaja; y si entra en contradicción con fuerzas de la UP, nace el enfrentamiento político, pero no guarda eso relación con el deseo del fracaso de una determinada experiencia.

Ch. H.: La consecuencia de este enfrentamiento de dos posiciones dentro de la izquierda, que cada vez más pareciera que se va agudizando. ¿No puede llevar a un punto

de debilidad tal que toda la experiencia se venga abajo, sin que siquiera las masas tengan la posibilidad de tomar el control y asegurar el proceso revolucionario?

M. E.: Si la contradicción se hace muy grave, debilita al gobierno. Pero esto no es mecánico. Va repercutiendo en los partidos de la UP, que comienzan a radicalizarse y crecen las corrientes que nosotros llamamos revolucionarias. Comienzan a presionar con políticas distintas, intentando compatibilizar el control de una porción del aparato del Estado con el movimiento de masas y colocar lo primero al servicio de lo segundo. Mas esto todavía no ha madurado y es una batalla a dar. Pero, jamás se obtendrá eso frenando el movimiento de masas o haciendo concesiones a políticas reformistas. Es la política reformista sola, de por sí, la que lleva al caos y la crisis. Los revolucionarios existen en representación de intereses de determinados sectores sociales.

Ch. H.: El MIR ha insistido siempre en que el programa de la UP no es el suyo. ¿No ha confundido el MIR el programa mínimo con el máximo? Están planteando ahora ustedes un programa revolucionario que debería modificar el programa de la UP. ¿Cuáles serían estas modificaciones?

M. E.: El problema de fondo tiene que ver con la concepción programática del MIR y la de algunos sectores de la UP. Un programa se define a partir de las condiciones que en un determinado país existen: la estructura económica, las capas, clases y sectores sociales que se dan y el nivel de conciencia que tienen. Esto permite definir los enemigos, las capas motrices y fuerzas aliadas, pronunciarse respecto del aparato del estado, y por último, respecto del modelo de desarrollo de la lucha revolucionaria de las masas.

Pero además, las diferencias en este terreno tienen lugar en relación con las adecuaciones programáticas que tanto la UP como el MIR realizan para enfrentar cada período concreto.

Nosotros establecemos, en primer lugar: lo que una revolución debe perseguir es la destrucción o reemplazo de determinados sistemas de dominación, y ello envuelve golpear al conjunto de la clase dominante. Clases dominantes no son sólo algunos propietarios de algunos medios de producción, sino que es un complejo social y político que hay que golpear en su conjunto y simultáneamente. La discusión planteada en Chile tiene que ver fundamentalmente con eso. Sectores de la UP han hecho predominar una determinada política que ampara a sectores de las clases dominantes.

Al definir enemigos, la UP yerra al golpear sólo a sectores de la clase dominante, no los golpea en el conjunto ni como enemigos de clase. Al elegir los enemigos, la UP entra de hecho, por un lado, a golpear a algunos sectores, a otros se limita a herirlos y a otros de hecho los ampara. Más todavía, incluso se propone en este momento fortalecer a sectores de la burguesía.

Desde el punto de vista de lo que constituyen las clases motrices y sus aliados, el esquema que se utiliza adolece de dos tipos de errores.

El primero nace de la errada concepción de lo que constituyen los enemigos del pueblo.

El señalar como enemigos sólo a restringidos sectores de la burguesía agraria, mientras se ampara al resto, impide poner en movimiento, en pie de

combate, al conjunto de los pobres del campo, constituido por el proletariado agrícola, los semicesantes, el semiproletariado y los campesinos pobres. Se renuncia al empleo de la enorme fuerza potencial que constituyen.

Otro tanto ocurre con los obreros urbanos, incluso los de las grandes industrias. Sólo se entregan banderas a los obreros de las 91. El resto de los trabajadores de la gran industria y de la mediana y pequeña no son movilizadas. No faltan, mientras tanto, las declaraciones referidas a las políticas propuestas a los empresarios de la pequeña y mediana industria.

El segundo error proviene del esquema esencialmente europeo con que la UP analiza las clases motrices: la lleva a ignorar y a no dar conducción, por tanto, a una gran cantidad de capas pobres urbanas con las cuales el proletariado industrial puede y debe imprescindiblemente establece una alianza permanente.

Ch. H.: En varias declaraciones el MIR ha hablado de la gran burguesía y en otras de área social al apoyar reivindicaciones "economicistas"?

M. E.: Esta es una de las más grandes falacias del reformismo, la confusión interesada entre la lucha económica y el economicismo. Porque la lucha económica es el punto de partida de la conciencia de clase de los trabajadores. Baste remitirse a Lenin.

Precisamente en el área social el FTR no ha desarrollado jamás una política economicista y por esto ha chocado con los sectores reformistas; porque no es precisamente economicismo levantar un programa que exige la rápida nacionalización de todas las empresas de la gran burguesía industrial, comercial y financiera, un programa que plantea que el área social se constituya en el sector dominante de la economía, que se establezca la dirección obrera y no sólo limitadas formas de participación. Pero algo muy distinto del economicismo es insistir en la necesidad de movilizar a las masas para extender y acelerar la política de nacionalizaciones de las grandes empresas antes que esperar lo todo de la aprobación de los representantes de los patrones en el Parlamento o de acuerdos políticos de pasillo.

Otros teóricos, políticos e ideólogos nos acusan de economicismo porque apoyamos la lucha económica de las masas en la defensa de sus salarios y de sus niveles de vida en las industrias del área social y también en las del área privada. Pero resulta que aquí también siempre hemos planteado la lucha por mejores salarios como una lucha de los obreros y los trabajadores por arrancar a los patrones, a los capitalistas, una mayor porción del ingreso nacional. Hemos dicho que esta lucha por mayores salarios está ligada a la lucha por extender el área de propiedad social, por poner límite a la ganancia de los capitalistas, por establecer el control obrero de la producción en el área privada, y el control de la distribución, etc.

Por otra parte, a la clase obrera, a los trabajadores se le pueden pedir sacrificios en relación con la lucha económica, pero nunca cuando los burócratas que se lo piden gozan de sueldos millonarios, pero nunca cuando una determinada política de precios, de salarios, cuando los mecanismos de la inflación, cuando toda una concepción económica se orienta a dar garantías de estabilidad y enriquecimiento a ciertos sectores de grandes capitalistas.

Por último, el economicismo es un componente del reformismo, de los que se quedan a medio camino, de los que no se atreven a empujar la lucha revolucionaria hacia adelante.

Ch. H.: ¿Por qué ustedes se han negado a asumir mayores responsabilidades en esta experiencia?

M. E.: Si por asumir responsabilidades en esta experiencia se entiende ubicarse en un puesto burocrático, con un sueldo millonario, evidentemente el MIR no lo ha hecho, pero hemos asumido la responsabilidad más grande: tratar de dar conducción al movimiento de masas, defender el proceso, combatir la sedición, enfrentar al reformismo. Si la pregunta es otra: ¿Por qué el MIR no ha entrado al Gobierno? Es otro problema, esto jamás le fue planteado, pero desde la partida señalamos que no estaba en nuestras perspectivas.

Lo hemos vuelto a señalar posteriormente en cada conversación con la UP. Eso tiene que ver fundamentalmente con esta diferente apreciación programática, por un lado, y por el otro con el modelo de desarrollo parlamentario al que antes hacíamos mención. De hecho la UP como conjunto levanta determinadas cuestiones programáticas en la práctica, con las cuales desde la partida el MIR difirió.

Ch. H.: Pero en el seno de la UP se registra un choque de estas dos corrientes. ¿La presencia de ustedes en el Gobierno no favorece el triunfo de la que consideraban como revolucionaria?

M. E.: Yo creo que una de las limitaciones más grandes que tienen las corrientes revolucionarias dentro del Gobierno es justamente tener que responder por el aparato burocrático del Estado. Es una de las cosas que más claramente plantea Lenin cuando le responde a Kerensky que le plantea qué haría el partido bolchevique en el gobierno. Lenin decía que la primera tarea de un revolucionario era jamás cargar sobre sus espaldas el lastre del Estado capitalista, sin modificarlo sustancialmente y subrayaba la necesidad de mantener la independencia del movimiento de masas para hacer las exigencias que deseara, para combatir, para avanzar.

Con esto no estamos llamando a otras fuerzas a que se salgan del Gobierno, ni mucho menos. Cada uno cumple su rol donde históricamente está ubicado en este minuto. Pero si el MIR ha podido levantar un movimiento de masas o realiza una cantidad de actividades, es fundamentalmente por su no ligazón con el aparato burocrático del Estado. No se trata de un purismo. Si eso lo es, entonces Lenin también era un purista.

Ch. H.: En el trabajo de masas que ustedes desarrollan, ¿no se han trasladado tácticas de la lucha insurreccional?

M. E.: Lo primero que convendría destacar es que la lucha insurreccional es una forma superior de la lucha de masas. En ese sentido, la insurrección es una de las formas de la lucha de masas, y el MIR en ningún caso utiliza tácticas que son propias de una forma particular de lucha de las masas en todos los momentos de la lucha de clases.

En Chile, en el actual período, se han producido dos desviaciones con respecto a la lucha de masas. Una de derecha y otra de izquierda. La desviación de derecha es típica del reformismo y consiste en que éste tiene la concepción de que se puede llegar al socialismo por los medios legales más que por los ilegales; eleva la acción parlamentaria y legal a la categoría de la única forma de lucha legítima de las masas. Postula que los objetivos del proletariado en la situación presente se pueden lograr principalmente por la vía legislativa, por medio de una evolución orgánica y sin ruptura, por medio de un conjunto de reformas. Esto, en definitiva, significa restringir la actividad de las masas al marco permitido por la legalidad burguesa e impide que el proletariado y las masas puedan acumular la fuerza que necesitan para derrocar a sus enemigos de clase.

Por otro lado, está la desviación del “izquierdismo” que parte de un análisis errado del período y de una definición incorrecta del carácter de clase del Gobierno. Conviene destacar que nuestra crítica al izquierdismo es totalmente distinta a la crítica que los reformistas hacen a estos sectores acusándolos de delincuentes comunes o de “ultraizquierda” en general. Para nosotros se trata de problemas que se producen en el seno del pueblo y a través de la lucha ideológica. El MIR se diferencia en los métodos que aplica en la lucha de masas de las desviaciones de derecha y de izquierda y sostener que el proletariado debe mantener su independencia y avanzar a través de formas legales e ilegales de lucha apoyándose principalmente en la iniciativa política y en la actividad de las masas, utilizando las formas legales y el aparato de Gobierno, pero sin jamás subordinarse a ellas.

Ch. H.: ¿Qué piensa de la consigna “la orden del momento es destruir el Parlamento”?

M. E.: Una cosa es destruir el Parlamento y otra hacerlo hoy. Nuestro objetivo es destruir el aparato de Estado burgués; jamás el MIR se ha planteado destruir hoy el Parlamento.

La disolución del Parlamento es un objetivo estratégico y unificador de las luchas del pueblo. Que hoy no pueda hacerse no significa que la destrucción del Estado no sea una consigna a agitar, ni que hoy no se deba hacer nada. Significa elaborar una política que permita agrupar fuerzas para disolverlo, levantando un programa para el conjunto del pueblo que golpee al conjunto de los enemigos.

Es posible y necesario levantar fórmulas, como las planteadas también por el PS y la IC, y que nosotros llamamos los Consejos Comunales de Trabajadores.

Ch. H.: ¿Y cuáles serían las tareas concretas de esos organismos?

M. E.: Fundamentalmente, unir e incorporar al conjunto del pueblo, levantando el programa que abarque las reivindicaciones de sus diversos sectores. Eso se está ensayando en Concepción, Cautín y Santiago en menor medida, en alianza con otras fuerzas. Allí está la respuesta sobre el enfrentamiento ideológico en la izquierda. Si la polémica tiene un lugar donde darse, en el seno de las masas, en organismos como éstos, la situación cambia

radicalmente. La polémica viva en estos organismos permitirá invertir la correlación de fuerzas en la izquierda, así como a nivel global. Esta es una perspectiva y por allí está la única salida del proceso. No podrá haber salida revolucionaria jamás conduciendo un aparato burocrático, un movimiento de masas fragmentado y no incorporado. Para evitar esta polémica, el reformismo ha calumniado la asamblea del pueblo, diciendo que el MIR quiere disolver el Parlamento ahora. Es tan estúpida esta formulación como si se pretendiera la existencia de una polémica en la dirección del FLN en Vietnam entre disolver el ejército norteamericano o combatirlo.

El objetivo era una asamblea agitativa y propagandística; crear condiciones políticas que después se proyectaran en Consejos Comunales. Ese fue el origen, desarrollo y final de la asamblea realizada en Concepción.

Ch. H.: Nosotros estamos informados de que las conversaciones entre ustedes y la UP habían avanzado bastante. ¿A qué se debe su interrupción y qué posibilidades hay para reanudarlas en el futuro?

M. E.: Ha habido varios periodos de conversaciones. El primero va desde diciembre de 1970 hasta la noche de la muerte de Pérez Zujovic. El PC estableció en ese minuto la exigencia de que nosotros entregáramos a Ronald Rivera y participáramos en la represión a la VOP, cuestiones a las que nosotros nos negamos. Ellos consideraron que esa actitud no les ofrecía garantías suficientes y rompieron las conversaciones. Después, el PC formuló esto frente al resto de la UP como la razón de fondo de la ruptura.

M. E.: El segundo intento de conversaciones se reabrió en diciembre de 1971, recién ido Fidel Castro de Chile. Alcanzó a haber una sola reunión, ya que esta vez distintos sectores (no nosotros) fallaron. En el mes de abril, por iniciativa de Allende, hubo conversaciones. Duraron más o menos un mes y medio. En ellas se llegó a acuerdos importantes, incluso a elaborar una política agraria de conjunto que contenía una serie de cuestiones absolutamente contradictorias con la política agraria formulada hoy tanto por Allende como por el Partido Comunista.

Había acuerdos respecto del contenido de una nueva ley de reforma agraria, de su formulación en términos de una plataforma a entregar al movimiento de masas, y respecto de la forma de utilización de la actual ley de reforma agraria durante este año.

Hubo acuerdos también en la cuestión industrial; con una diferencia: pocos días antes del término de las conversaciones se había planteado el reestudio de estos acuerdos.

Estos contactos últimos fueron rotos unilateralmente por la Unidad Popular como conjunto y también sin mediar explicación alguna, a partir de los hechos de Concepción, del 12 de mayo.

En cuanto a las posibilidades de reanudarlas, ello depende de la Unidad Popular. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de conversación, sea para buscar un modo de convivencia, sea para buscar acuerdos. En este minuto es más bien un problema de la Unidad Popular.

Carlos Matus (Ministro de Economía PS): La política económica del nuevo gabinete

(Entrevista en *Chile Hoy*, N° 7, julio de 1972)

Ch. H.: Uno de los argumentos que la oposición utilizaba para cuestionar a su antecesor, el ministro Vuskovic, y en general a la política económica del Gobierno, era que se valía de las requisiciones –una medida de control económico– como fórmula de traspaso de empresas al área social. ¿Qué criterio tiene en esta materia?

C. M.: Hay planteamientos muy claros en ese aspecto de la política del Ministerio de Economía. No ha habido variación, no puede existir variación, ni habrá variación. Hay una definición muy clara en el programa de la UP en el sentido de formar un área de propiedad social, que hemos definido con una lista de empresas. Desde el momento es conocida la lista, los empresarios incluidos en la misma inician toda una serie de manipulaciones que van creando problemas con los trabajadores y los niveles de producción. Existen instrumentos que nos permiten el control inmediato sin el traspaso de la propiedad: nuestra obligación es usarlos. Eso tiene una total legitimidad, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la base popular que apoya estas medidas. Es evidente que nosotros seguiremos utilizando este instrumento mientras exista, para someter a control a las empresas monopólicas e, incluso, aquellas empresas no monopólicas en que surjan conflictos laborales insuperables o se esté saboteando la producción.

Para el cambio de la propiedad tenemos dos caminos: la negociación o el traspaso por ley. Hay un tercer camino, pero es más restringido: la expropiación, que fue el mecanismo usado en el caso de Bellavista-Tomé. Todos estos caminos los estamos explorando y avanzando en ellos, porque este proceso es irreversible: empresa de la lista de las 90 que han sido requisada no será devuelta.

Ch. H.: El Gobierno ha establecido una serie de medidas para favorecer al pequeño y mediano empresario, pero políticamente no hay una respuesta acorde de ellos. Organizaciones como el FRENAP, dirigidas y orientadas por los grandes monopolios, tienen una gran base de sustentación constituida por este tipo de empresarios. . .

C. M.: Por algunas agrupaciones de ellos. No todas.

Ch. H.: Por algunas, pero en un porcentaje significativo. . .

C. M.: Más o menos la mitad, digamos.

Ch. H.: Se plantea un conflicto aquí, en torno a cómo orientar la política económica para ganar a estos empresarios y, simultáneamente, combatir las maniobras en que son utilizados. ¿Cómo enfoca usted este problema?

C. M.: Lo enfoco en un doble sentido. En primer lugar, una lucha frontal, dentro de los marcos legales establecidos, contra las organizaciones que son representativas de los monopolios. Casa típico, la Sociedad de Fomento Fabril. Para los señores de la SOFOFA están cerradas las puertas de este ministerio; ningún funcionario de Gobierno conversa con ellos. Porque tienen una actitud de sedición, una actitud de agresión al Gobierno y porque sus manejos son dudosos.

Segundo: Definiciones muy claras para la pequeña y mediana empresa. Para que existan organizaciones de pequeños y medianos empresarios tiene que existir una incompatibilidad muy clara entre pertenecer a esas organizaciones y pertenecer al mismo tiempo a la SOFOFA, a la ASIMET o a la Confederación de la Producción y el Comercio. Porque entonces quiere decir que ya no son organizaciones de pequeños y medianos empresarios, cuyo fin es ver cómo arreglan sus problemas gremiales, cómo se entienden con el Gobierno, obtener facilidades de producción, tributarias, de importación, etc., sino que entran en organizaciones que tienen un carácter político perfectamente definido. El pequeño y mediano empresario debe elegir si quiere pertenecer a organizaciones políticas, de oposición y agresión al Gobierno, o quiere estar en el plano de un empresario, de un productor que quiere contribuir a ganar la batalla de la producción.

Ch. H.: Está también la “batalla de la participación”, que no es de los empresarios sino de los trabajadores. ¿Qué medidas piensa aplicar en el ministerio para continuar impulsando la integración de los trabajadores a la dirección económica?

C. M.: Aquí entramos a un punto fundamental, porque es básica, para cualquier medida de gobierno, la participación informada y consciente de los trabajadores; si no, éste no puede ser un Gobierno Popular. Incluso en el sentido de tomar medidas eficaces, porque si no existe la participación, esas medidas van a ser ineficaces, van a ser resistidas.

Me correspondió clausurar el Encuentro Textil. Ahí se vio el grado de madurez que alcanzan los trabajadores en pocos meses de trabajo en las empresas del área social, donde recién se va abriendo y gestando el sistema de participación. Creo que nadie puede estar satisfecho, todavía, de la forma en que funciona la participación; pero aun así, en el poco tiempo recorrido y con todas las deficiencias que tenga el sistema, el grado de madurez alcanzado por los trabajadores es extraordinario. En el Encuentro Textil los mismos trabajadores plantearon terminar con los salones de venta en las fábricas, porque representan un vicio que incide en la distribución. Son los mismos trabajadores quienes plantean reducir las cuotas que tienen convenidas con la administración de las empresas, porque son un pago en especies, en telas que en este momento se transforman en un germen de mercado negro. Para nosotros es fundamental que en las grandes masas de trabajadores se mantenga la honestidad, que se mantengan allí con más fuerza que en ningún otro lado los valores morales. Son los mismos trabajadores textiles los que se preocupan de plantear cosas que en algunos casos los perjudican económicamente.

Se envió al Congreso un proyecto de ley para institucionalizar el sistema de participación, que debemos reforzar y ampliar. En el mismo proyecto proponemos una comisión nacional ejecutiva de participación que será

paritaria: mitad representantes del Gobierno y mitad de los trabajadores, estos últimos elegidos libremente por las bases.

Ch. H.: Queremos conocer su opinión respecto a la siguiente inquietud que nos han manifestado algunos trabajadores. Un consejo de administración tiene representatividad paritaria del Gobierno y los trabajadores; pero además hay un miembro –el ejecutivo máximo de esa empresa estatizada– que es designado por el Gobierno. Ello rompe la relación paritaria y, a juicio de algunos, puede ser un germen de burocratización.

C. M.: En el proyecto de ley que se ha enviado se termina con eso. Ahí la representación queda estrictamente paritaria: cinco representantes de los trabajadores y cinco del Gobierno, o el número que corresponda, y no hay una persona adicional que es el presidente del consejo, sino que se elige dentro de los cinco de cualquiera de los dos lados. El proyecto enviado por nosotros tiene un defecto, al plantear la elección sólo entre los representantes del Gobierno. Ya expresamos la necesidad de modificar ese punto. Es lógico que empresas del área social que juegan un papel estratégico, tengan su cordón umbilical hacia los organismos de planificación para que exista coherencia. Porque si no, estaríamos hablando de otro sistema, el sistema de autogestión, que es materia de otro proyecto enviado al Congreso.

Ch. H.: ¿En qué sentido se está explorando el camino del traspaso por ley de empresas al área social? ¿Podría suponerse como una posibilidad, una esperanza, llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana?

C. M.: No. Nosotros vamos a enviar un proyecto de ley traspasando las 90 empresas al área social. Y que entonces se pronuncien ahí, sin ningún acuerdo previo. Creo que sobre esa base podríamos ir a un plebiscito.

Ch. H.: ¿Sería en ese caso una lista intransable? ¿No se podría reducir a 89 en el curso del debate parlamentario?

C. M.: Ya esa es una cuestión de táctica política que escapa a la visión de un Ministro de Economía. Pero un proyecto de ley tiene varias ventajas, existe la posibilidad del veto, que nos da buenas expectativas.

Ch. H.: El problema del desabastecimiento está muy estrechamente ligado al estado de las relaciones con el imperialismo. ¿Cuál es su enfoque respecto a cómo equilibrar la balanza de pagos y superar esto que llamamos el bloqueo invisible?

C. M.: Primero, yo creo que en el problema del desabastecimiento tenemos que distinguir varios elementos que confluyen a la generación del mismo. Está el problema de transportes, que ha sido poco difundido, como determinante, en muchísimos casos, de los niveles de desabastecimiento. Por ejemplo, tenemos escasez de acero, pero en este momento hay 25 mil toneladas de acero en la planta de Huachipato, que es un stock anormal. ¿Por qué está ese stock anormal? Porque no se puede transportar hacia las industrias que tienen que utilizar ese acero; entre otras, la industria que produce o repara carros de ferrocarril. A su vez, el transporte falla, entre otras cosas, porque no existen carros de ferrocarriles. A veces tenemos casos dramáticos, de

descarga de granos en los puertos, en que los barcos quedan dando vueltas y no pueden descargar.

En segundo lugar restá lo que podemos llamar el nivel de desabastecimiento real, generado por nuestra capacidad de producción y de importación, ligado al problema de balanza de pagos. Tercero, está un cierto nivel de desabastecimiento artificial, ligado a las organizaciones especulativas que han surgido en este país en función del desabastecimiento y en función de la política de precios. Ahora, con relación al desabastecimiento real tenemos problemas internos y tenemos problemas externos que son producto del imperialismo, donde entra este término del bloqueo invisible, del cual fue autor el compañero Ambrosio. Creo que es un concepto bastante acertado; basta con analizar toda la serie de medidas que se han ido adoptando en contra de Chile. Todo eso constituye un factor esencial en el problema del desabastecimiento, vía limitación de la capacidad para importar.

Ch. H.: Usted mencionaba el surgimiento de las prácticas especulativas, del mercado negro y el contrabando. ¿Cómo se plantea combatir esto y qué papel asigna a la participación del pueblo organizado, por ejemplo, a través de las JAP?

C. M.: Creo que ahí tenemos tres vías. Primero, evidentemente, la participación del pueblo organizado en las JAP. Tenemos que ampliar las JAP, organizarlas mejor, dotarlas mejor. Hay unas JAP que funcionan a punta de ñeque no más. A las JAP tenemos que agregarles otros tipos de organización, por ejemplo, que todas las empresas del área social tengan cooperativas de distribución de productos básicos. Está planteado que en el medio de las poblaciones marginales vamos a colocar centros de producción de la DINAC, supermercados, que van a ser administrados con participación comunitaria de los pobladores.

En segundo lugar está el problema de la política de precio como tal. Para realmente controlar la especulación tenemos que revisar la política de precios, en parte, porque esa política de precios está dejando déficit muy grandes en las empresas del área social. Tenemos invertido el panorama: grandes utilidades en las empresas privadas y pérdidas en las empresas del área social. Tenemos que revertir ese panorama, justamente para captar excedentes a favor del Gobierno y retirar liquidez de los grupos de ingresos más altos. Revisando la política de precios ayudamos a eliminar el mercado negro y la especulación, al mismo tiempo que vamos aminorando el desabastecimiento. La tercera vía es la penalización del delito económico y para eso está el proyecto, también enviado al Congreso, con toda una configuración de una serie de delitos y las penas correspondientes. Esas son las tres medidas para ir atacando a corto plazo el problema.

Ch. H.: En relación con la política de precios también podríamos hablar de la política de remuneraciones y la redistribución del ingreso, vista la necesidad de captar excedentes. El año pasado la redistribución operó en favor de los menores ingresos, pero no implicó un traslado de parte de los que tenían más.

C. M.: Operó a favor de los de menores ingresos sin quitarle a los otros. Eso es parte del problema del exceso de liquidez. Bueno, dentro de la política econó-

mica están diseñados una serie de mecanismos de captación de liquidez. La misma política de precios ayuda a eso. Le pongo un ejemplo, ejemplo que ha sacado roncha y con razón, porque nosotros lo vamos a seguir haciendo en otros casos: el de las tarifas telefónicas. Con las tarifas telefónicas estamos haciendo pagar más a los que más pueden pagar porque tienen más. Lo mismo vamos a hacer con varios precios, con los precios de los productos textiles, con las tarifas eléctricas. O sea, que la discriminación de precios es otro mecanismo. . .

Ch. H.: El estanco automotriz también.

C. M.: El sistema de estancos. Después para captar liquidez emplearemos a fondo el sistema de seguros, porque los seguros van a estar en manos del Estado. El seguro obligatorio de automóviles será otro mecanismo de captación de liquidez. Ahora, como la política de revisar los precios va a implicar una mayor alza del costo de la vida, tiene que haber una política de remuneraciones consecuente con la redistribución del ingreso. A los trabajadores hay que compensarles íntegramente esas alzas.

Ch. H.: En otras palabras, reajuste escalonado.

C. M.: Reajuste, digamos. Porque es mucho más complicado. En todo caso, el sistema de reajuste será coherente con la mantención y afianzamiento de la redistribución del ingreso.

Ch. H.: Su ingreso al ministerio coincidió con el establecimiento de nuevas estructuras de dirección económica. ¿La corta experiencia del Comité Ejecutivo Económico justifica su creación, está cumpliendo con los objetivos que se proponían al crearlo?

C. M.: Está por verse todavía. La experiencia futura tendrá que decir si realmente es un organismo eficiente. Yo creo que es un paso adelante. ¿Es la mejor fórmula para coordinar la política económica? Eso tenemos que demostrarlo en la práctica. En todo caso, es mejor que antes, en el sentido de que la coordinación, por ejemplo, de la política de los ministerios de Hacienda y Economía está bastante fuerte. Buena parte de los problemas que tuvo el Ministro de Economía anterior se originaron justamente en esa descoordinación.

Ch. H.: ¿Cómo se define usted? Pesa sobre este ministerio la figura de su antecesor, que fue definido como un ministro de masas, que salía de este gabinete e iba a las fábricas; a conversar con las dueñas de casa en el Estadio Chile; iba a las JAP, etc. ¿Usted piensa mantener este sistema de contactos con las bases?

C. M. Yo creo que es imprescindible ese contacto con las bases, en todos los ratos que he podido lo he hecho: fui al Encuentro Textil, fui a las JAP en Concepción; apenas asumí hice una visita a Mademsa, que en esos momentos tenía serios problemas. De manera que ese contacto con las bases yo creo que es fundamental. Ahora, yo no me puedo autodefinir. Creo que mi actuación acá dará origen a que alguien defina qué soy yo: si soy un ministro burócrata, un ministro tecnócrata o un ministro que tiene contacto con las masas; un ministro que es eficaz o un ministro que no sirve. Pero el contacto con las masas no es un problema, sino un deber. Es parte de las reglas de comportamiento de todos los ministros de Estado en un Gobierno Popular.

Kalki Glauser y Julio López (MAPU). ¿Táctica económica o estrategia política?

(*Chile Hoy* N° 13 de septiembre de 1972)

En los últimos días, el pueblo se ha visto sorprendido por un conjunto de alzas de precios cuya magnitud, extensión y concentración sólo parece comparable a fenómenos de las postrimerías del segundo gobierno de Ibáñez. En pocos días, el índice de precios sufrió un aumento cercano al 20 por ciento mientras se doblaban o triplicaban los precios de algunos artículos de consumo popular. Las explicaciones de los ministros Millas y Matus y la certeza del reajuste compensatorio de octubre no han podido disipar el descontento que estas medidas han producido en las masas. Pero sí han llevado a preguntarse sobre cuál podría ser la racionalidad de estas medidas, si tal racionalidad existe, y cuál es su sentido político.

Con ello se ha renovado la discusión –que fue central en el “cónclave” de Lo Curro– acerca de las formas concretas de solucionar los problemas económicos. Cuestión que no es, como se verá aquí, puramente de política económica, sino que envuelve opciones de fondo que trascienden el mero marco de la coyuntura actual. Se trata, en definitiva, de la relación entre lo económico y lo político, y entre lo táctico y lo estratégico.

¿Por qué estas alzas y el prometido reajuste? ¿Para qué? No cabe duda de que el problema central a cuya solución se desea apuntar de esta manera es el del exceso de demanda en relación con la disponibilidad de bienes, o sea, el tan conocido “desabastecimiento”, en donde se resume el problema económico central que hoy afecta al país.

Tal como se presenta, esta solución busca corregir los desequilibrios existentes fundamentalmente a través del movimiento de los precios y los salarios, poniendo entonces al mercado en un primer plano. Se procura, en definitiva, contraer la demanda del sector público: las inversiones, las obras de beneficio social, las expropiaciones. Si tal cosa fuese objetivamente imposible (como en efecto no lo ha sido, sobre todo después del fracaso de las conversaciones de la UP-DC), será la demanda privada aquella que deberá reducirse.

En este último caso surge una dificultad inmediata: a través de las leyes del mercado, es prácticamente imposible, en el corto plazo, obtener una reducción significativa de la demanda de los grupos adinerados de la población. Inclusive una reducción de sus ingresos corrientes, o un aumento de los precios de los bienes suntuarios, no asegura que esa reducción se verifique: la enorme cantidad de dinero atesorado que ellos poseen (la famosa liquidez) les permite adquirir lo que desean, aunque para ello tengan que gastar una masa monetaria mayor.

A través del mercado, entonces, la única demanda privada que puede contraerse es la de la clase trabajadora. Para ello habría que aumentar los precios más que lo que aumentan los salarios, reduciendo así el poder de compra de los asalariados. De otro modo no se corregirían los desequilibrios existentes; éstos simplemente se producirían a un nivel de precios más elevados. Con lo cual resultaría, dentro de las leyes de la economía capitalista, una política incoherente, que no llevaría a ninguna parte.

Si se eligiera realmente disminuir la demanda privada actuando a través del mercado, habría entonces que limitar el consumo material de las masas. La solución de los problemas económicos exigiría el sacrificio de este sector de la población.

Pero al actuar así, se tendería a reducir la base popular de apoyo con que se cuenta. Principalmente por el lado del semiproletariado y el subproletariado. Pero también por el lado de sectores del proletariado cuyas condiciones objetivas, cuya organización y conciencia le impiden luchar en buena forma por remuneraciones adecuadas. Para que el Gobierno Popular pudiese subsistir, habría entonces que ampliar esta base de apoyo hacia otros sectores, hacia las famosas capas medias y sus representantes políticos.

De allí que la consecuencia lógica de decidirse por el mecanismo del mercado como principal corrector de los desequilibrios económicos implique en la práctica una opción política de más largo alcance, de un alcance incluso estratégico. Primero, porque implica ampliar la base de apoyo hacia el centro de la gama social, mientras se pierde apoyo de los sectores populares más pobres, lo que tiene su expresión política en buscar el respaldo fundamental al Gobierno. También en el centro de la gama política, como podrían serlo los sectores de la izquierda del PDC (después del marco de 1973, naturalmente), y segundo, porque supone apoyarse fundamentalmente en el aparato del estado burgués y de los partidos, en vez de hacerlo en la organización de las masas.

Todo ello configuraría un régimen que, probablemente, podría tener la solidez necesaria para completar las medidas antimonopolistas, antilatifundistas y antiimperialistas. Pero que sin duda haría al Gobierno Popular incapaz de iniciar una transformación socialista de la vida nacional, entre otras cosas porque el Estado consolidaría su carácter burgués. En una palabra, la lógica de una política económica basada en las leyes del mercado lleva a consolidar un régimen que, siendo progresista, no sería socialista. Más aún, en su búsqueda de la gradualidad, interrumpiría el proceso revolucionario de avance hacia el socialismo en una etapa “democrática” previa, estabilizada. La línea estratégica implícita en tal política no es pues la de una revolución socialista, sino la de una revolución “democrática”,

Pero el desabastecimiento, los desequilibrios económicos que todos constatamos, no tienen esa política como única solución. Ya en Lo Curro se presentó una alternativa distinta, defendida en aquella oportunidad principalmente por el MAPU y el entonces Ministro Vuskovic, y enunciada de nuevo hoy día bajo la forma de proposiciones concretas (incluso de baja de algunos precios ya alzados), por el mismo MAPU. Se trata en suma de solucionar el proble-

ma del desabastecimiento a partir del hecho de que todavía hay un 7 por ciento de la población que consume el 50 por ciento de todo lo que se consume en Chile. Se trata, pues, de redistribuir el consumo, de enfrentar a ese 7 por ciento. Y ello sólo es posible recurriendo a las masas, planteando el control obrero y del pueblo, sobre la producción y la distribución. No se trata aquí por cierto de dejar totalmente de lado los mecanismos administrativos y de mercado. Se trata, sin embargo, de darles a éstos un lugar secundario dentro de la estrategia. Es por ello que entre estas opciones, entre estas dos políticas económicas, no está planteada sólo una cuestión de énfasis, sino en rigor un asunto de fondo.

En esta segunda alternativa el recurso a las masas no es una pura cuestión abstracta ni formal. Se parte del supuesto de que la magnitud de las tareas que plantea el reordenamiento de la economía es imposible sin la dirección y el control de la clase obrera en sus lugares de trabajo, y del pueblo en sus poblaciones. Se reconoce que el control del Ejecutivo, aunque importante, es insuficiente, y que la flexibilidad que posee la institucionalidad burguesa tiene sus límites, que se estrechan a medida que la oposición se cohesiona políticamente y se fortalece.

Esta alternativa supone entonces que es imperativo seguir avanzando en las tareas democráticas y en particular en la redistribución del ingreso. Pero que esto es imposible si no se empiezan a impulsar desde ya tareas de contenido socialista, tales como el control popular sobre la economía. Además, al plantearse el control popular sobre la economía se inicia, quíerese o no, la destrucción del Estado burgués y la construcción, en germen, del Estado Popular, que exige la creación de órganos de poder popular y coordinación y centralización.

Lo que hay implícito detrás de esta opción aparentemente económica y táctica es entonces mucho más. Se trata de la estrategia de la revolución socialista, que nunca consolida las relaciones de clase y de poder alcanzadas, que nunca se estabiliza en ninguna etapa. Porque la organización de clase que requieren las tareas que se le proponen al pueblo le muestran en la práctica la forma en que se pueden y deben solucionar las contradicciones de la etapa, y le crean la conciencia y la organización para buscar esas soluciones. Y por esto ellas exigen de sus vanguardias que se pongan a la altura y se eleve la lucha de clases a niveles día a día superiores.

Se urge así la definición del problema del poder, aún pendiente, y se hace al mismo tiempo posible que de esa definición salga triunfante el proletariado.

Claro está que, como toda política verdaderamente revolucionaria, la estrategia de la revolución socialista también tiene sus riesgos. No existe una garantía absoluta de que en la agudización de la lucha de clases triunfe el proletariado; no puede excluirse a priori una derrota. Y es por ello que quienes tengan una concepción más gradualista del proceso, quienes no deseen acelerar la definición de la cuestión del poder, por estimar que ello puede afectar desfavorablemente la correlación de fuerzas, se sentirán tentados a solucionar los problemas económicos de una manera diferente.

Jaime Gazmuri (Secretario General del MAPU): Corregir los errores de la política económica

(25 de agosto de 1972)

En estos días el Gobierno Popular, el pueblo en el Gobierno, vive, a juicio del MAPU, una grave situación, una situación difícil, la más grave y difícil de las vividas desde el 4 de noviembre de 1970.

El momiaje se insolenta; las bandas de Patria y Libertad levantan barricadas en la capital de Chile y en otros puntos del país; declaran, en la práctica, territorio independiente a todo lo que queda entre la Plaza Baquedano y la cordillera; asesinan a un compañero dirigente del Partido Socialista, en Los Angeles, y a compañeros campesinos en Frutillar; las viejas de las cacerolas, aprovechando el mes, hacen su agosto en muchos sectores; la derecha se siente ya tan fuerte que intenta sacar a los estudiantes y a amplias capas de la población a la calle; al imperialismo no se le arruga tanto la máscara y juega todos sus peones en esta partida, que puede llegar a colocar en jaque al Gobierno del Pueblo.

Y ante esa arremetida en tropel de los enemigos, ante esa ofensiva antipopular y antipatriótica, las masas, nuestro pueblo, incluso sectores conscientes de nuestra clase obrera, militante de los partidos populares, nuestros militantes, se encuentran, por decir lo menos, perplejos, confundidos, con menos confianza en sí mismos, menos seguros de su propio poder.

Digámoslo con franqueza: todavía en pocas partes, el pueblo responde con el ronco sonar de sus consignas victoriosas al ruido que hacen las cacerolas.

Esto es especialmente grave en la época en que estamos viviendo.

Cuando por primera vez en la historia de Chile, y a raíz del triunfo de septiembre de 1970, la clase obrera y el pueblo se han puesto en situación inmejorable para desalojar definitivamente del poder a sus enemigos –y eso es lo que caracteriza centralmente el período que vivimos– cuando estamos en eso, es doblemente grave una situación en que, en el campo de batalla, por una parte los enemigos arremeten con todo, con cajas y pitos, y por otra, el pueblo aprieta los puños, pero está perplejo, casi inmóvil, con escasa preparación para desarrollar su ofensiva.

Si una situación así es grave en cualquier campo de batalla, inmensamente más grave lo es aún cuando, como hoy, cada batalla tiene una importancia como nunca antes; cada situación debe ser enfrentada con el máximo de preparación; cada combate estudiado con más acuciosidad que nunca; cada medida consultada e informada.

¡Cuando lo que está en juego es nada menos que el poder de la sociedad; cuando la guerra es a muerte entre el pueblo y sus enemigos: ninguna bata-

lla victoriosa puede ser dada con un ejército perplejo, confuso, desinformado, no consultado! ¡Este ejército del pueblo de Chile es un ejército en guerra por el poder y cada soldado de la causa del pueblo debe conocer cada uno de los desplazamientos!

Es con nuestro pueblo con quien queremos entendernos

Consciente de esta situación, nuestra Dirección Nacional, la Dirección Nacional de nuestro partido, quiere dirigirse al pueblo; decir su palabra responsable, serena, combativa, a nuestra clase obrera, a los campesinos, a los trabajadores de cuello y corbata, a las mujeres, a la juventud, a los pequeños y medianos productores y comerciantes, entendiendo que esa es una obligación primera y fundamental de la dirección.

Es con nuestro pueblo con quien queremos entendernos; a quien queremos dirigirnos. Explicar la situación en toda su magnitud; señalar la verdad de la milanesa, como siempre lo hemos hecho; referirnos a nuestros problemas –a los que nos pone el enemigo, que tiene que defenderse con todo; y a los palitos que nosotros mismos nos colocamos por fallas graves en nuestra dirección; plantear las proposiciones que nos parecen indispensables para corregir errores en que hemos caído; prepararnos para detener la ofensiva momia con las masas de pie y, con nuestro pueblo preparado al máximo, derrotar una vez más al imperialismo y sus lacayos; tomar la ofensiva en esta ocasión, y alcanzar con ella nuevamente la victoria.

Es con nuestro pueblo que queremos conversar.

No nos sentimos, ni mucho menos, con la obligación de dar explicaciones a los comandos de la oposición, a las directivas de los enemigos, a los traidores a la patria y a la libertad de nuestro pueblo, que hablan y actúan por encargo del imperialismo.

Y es precisamente en estos momentos, de objetivo desconcierto en nuestras filas, cuando se abre un campo más fértil para que prendan las prédicas más insolentes de los sectores más reaccionarios, y cuando la Democracia Cristiana, que no siempre ha entendido con claridad por dónde pisa, conducida hoy por sus sectores más reaccionarios, manejada por control remoto por el Sr. Frei, camina detrás del fascismo, inconscientemente al despeñadero de un enfrentamiento acerca del cual sabemos un solo dato absolutamente seguro: que allí desaparecerá por desintegración el Partido Demócrata Cristiano. Detrás del fascismo, la DC sólo puede encontrar su propio y definitivo fin.

Pero, decimos, es con nuestro pueblo con quien queremos conversar. Es con el pueblo y con el Gobierno Popular con quienes nuestro partido –partido de la clase obrera– selló su suerte desde que nació. Nuestra responsabilidad es con la clase, con el pueblo, con el Gobierno del Pueblo.

Los problemas económicos

Hablando en plata, compañeros, y repitiendo una vez más lo que hemos venido planteando desde siempre, aquí no hay que hacerse ilusiones. La pe-

lea en que estamos metido no es fácil, la revolución no es juego de niños, nosotros nunca hemos soñado con que consolidar y avanzar, afirmar el Gobierno y conquistar el poder sea una tarea sencilla.

Aquí tenemos y vamos a seguir teniendo problemas todos los días. Algunos graves.

No cabe duda que es en el terreno económico donde hoy enfrentamos mayores problemas. Las alzas, el desabastecimiento, las dificultades para conseguir oportunamente y a precios oficiales muchos artículos indispensables para parar la olla, en cada hogar del pueblo, son cuestiones que preocupan hoy día a amplios sectores. Son las dueñas de casa quienes más directamente viven estos problemas. Los enemigos del Gobierno Popular hacen lo suyo:

Magnifican cada dificultad en su prensa. Crean alarma, ocultan las causas reales de los problemas, mienten descaradamente. Al mismo tiempo que especulan y acaparan, que boicotean la producción, que guardan un silencio traidor y antipatriótico frente a las agresiones del imperialismo contra nuestro país, rasgan vestiduras en defensa del consumo de las masas, compiten en la demagogia. Los mismos que han sido los responsables de la explotación centenaria de la clase obrera y del atraso del país, pretenden hoy día convertirse en sus defensores.

El pueblo podrá hoy día estar mal informado y perplejo, pero ya no colmulga con tan grandes ruedas de carreta. Los trabajadores, los patriotas de este país, saben que si la derecha triunfara en sus sueños, si los Onofre Jarpa, los Durán y los Frei volvieran al Gobierno no serían capaces de resolver ningún problema; que se descargaría sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la persecución y de la explotación, que intentarían entregar las industrias nacionales a los antiguos patrones, las tierras a los terratenientes, la patria al amo yanqui. Nuestro país no tiene más alternativa que avanzar con el Gobierno Popular en el camino de la independencia nacional, del progreso y del socialismo o volver atrás a la servidumbre, a la dictadura de los poderosos.

Los problemas ocasionales que hoy enfrentamos son fundamentalmente el producto de los éxitos del Gobierno Popular y no de sus fracasos. Son el producto también de las enormes dificultades del Bloqueo Invisible a que nos tiene sometidos el gobierno de los Estados Unidos, el imperialismo yanqui.

Lo que ha ocurrido en estos veinte meses de Gobierno Popular es que por primera vez en nuestra historia existe una política económica orientada a satisfacer las necesidades de la mayoría de la población y no los de la minería de los grandes capitalistas. Por primera vez en nuestra historia se ha comenzado a recuperar para el país y sus trabajadores lo que legítimamente les pertenece: las riquezas básicas en manos de los capitalistas extranjeros, los centros claves de la industria en manos de los monopolistas, las tierras de los terratenientes. En suma, una política orientada a elevar el nivel de vida de las masas y sentar las bases para el desarrollo independiente y socialista en nuestro país. Todo ello en medio de la lucha política más intensa que registra la historia de Chile. Esa política ha dado sus frutos. Los asalariados han aumentado extraordinariamente su nivel de vida: los salarios en 1971 aumentaron en un 50%, la inflación sólo alcanzó el 28%; la cesantía ha disminuido notablemente, la mortalidad infantil ha descendido, las consultas médicas crecieron en un 18%, el consumo de leche se elevó en un 300%, en

1971 se inició la construcción de un número de viviendas 10 veces superior al de 1970. Al mismo tiempo se ha recuperado el cobre para Chile, se ha nacionalizado la banca, una buena parte de los monopolios son hoy del pueblo y se ha liquidado el latifundio mayor de 80 hectáreas.

En medio de estas gigantescas transformaciones sociales y económicas, la producción de 1971 ha si la más alta de nuestra historia, la economía creció en un 8%, cifra nunca alcanzada antes. Este año 1972 la producción aumentará considerablemente.

Si todo esto es así –como lo es– ¿por qué se producen entonces problemas económicos como los que vivimos? Contestar esta pregunta, aclarar la real situación que vivimos, y hacerlo ante todo el país, es la primera condición para superar las dificultades.

Ocurre que en la medida en que los trabajadores, las capas pobres del pueblo, se incorporan al consumo de muchos bienes que no consumía: huevos, verduras, carne de vacuno, ave, pescado, vestuario, cocinas, etc., la demanda, la capacidad del pueblo han crecido extraordinariamente. Y como las clases ricas no han disminuido sus niveles de consumo, sino por el contrario lo han aumentado por la gran cantidad de dinero que tienen, por mucho que aumente la producción, si no se asegura una adecuada distribución, la demanda es mayor que los aumentos de la producción. La economía se pone en tensión, por cuanto la producción y la distribución que estaban organizadas para atender un mercado reducido, hoy tienen que satisfacer las necesidades de toda la población. El desabastecimiento parcial de algunos productos que se ha manifestado, tiene principalmente esta causa. Y en la medida en que los trabajadores mantengan su nivel actual de consumo, y deben tenerlo a toda costa, este problema estará siempre presente. Es un factor con el cual tenemos que contar de aquí para adelante y que nos impone la gran tarea de garantizar –con la participación activa del pueblo– una adecuada distribución de la producción.

La otra gran dificultad es la que surge de la acción criminal de nuestros enemigos, en especial del imperialismo yanqui. Chile está actualmente bloqueado por el imperialismo, nos ha cerrado las líneas de crédito de corto plazo, los embargos ordenados en el Estado de Nueva York sobre los bienes de la Corporación del Cobre, la CORFO y otras empresas, nos impiden comprar y vender mercaderías en ese Estado y lo hacen extremadamente riesgoso en el resto de ese país. Por tanto el abastecimiento normal de repuestos para la gran minería del cobre y en especial para los equipos y maquinarias norteamericanas, se hacen cada vez más indirectos, riesgosos y caros. No se nos ha concedido ningún crédito de largo plazo en los organismos de crédito internacionales como el Banco Mundial y el BID, donde el Gobierno yanqui tiene influencia importante. En la renegociación de la deuda externa se jugó a fondo contra Chile y a pesar de que logramos renegociar una parte de la deuda, este año debemos pagar 20 millones de dólares por deudas que contrajeron gobiernos anteriores.

Los efectos de este bloqueo, invisible pero efectivo, son enormes. Nos crean dificultades en el abastecimiento, en la disponibilidad de dólares, en la adquisición de repuestos. Las masas no tienen conciencia suficiente de los efectos del ataque imperialista contra Chile. La derecha oculta este lado. Nosotros no lo hemos explicado con suficiente claridad.

La batalla de la producción, la campaña por el ahorro de los dólares, por la fabricación en Chile de repuestos, partes y piezas, que nuestro querido Secretario General, Rodrigo Ambrosio, enunciara el 28 de abril, se hace hoy día un deber de todos los patriotas de este país.

A las dificultades de la agresión imperialista, se suma la ayuda de sus peones internos: el acaparamiento, la especulación, el desarrollo del mercado negro.

En suma, compañeros, en la medida que el pueblo de Chile ha decidido pararse en sus propios pies, poner su economía a su servicio y crear las condiciones para un desarrollo independiente, tenemos que enfrentar problemas en el campo económico que sólo resolveremos en la medida que la clase obrera y el pueblo tomen cada día más el control de la producción, la distribución y el abastecimiento, con el consenso de los medianos y pequeños empresarios patriotas y en lucha a muerte contra el imperialismo, los monopolios, los terratenientes y sus servidores.

Corregir nuestros propios errores

Pero una cosa es que el piso sea resbaloso y otra es que le echemos jабoncillo.

Una cosa son esos problemas naturales que se presentan en el proceso revolucionario y otra los problemas que nos creamos por nuestra propia cuenta.

Un partido obrero, un Gobierno Popular, no tiene por qué temer a la autocritica y a la corrección de su política. Si ha tenido errores hay que corregirlos de cara a las masas.

Por el contrario, esta conducta autocritica debe ser permanentemente utilizada como la mejor forma, la única forma, de salir adelante.

No es primera vez que el MAPU reconoce así sus propios errores. De cara a sus bases, a su clase y a su pueblo.

Hoy, derechamente afirmamos que a juicio de nuestro partido ha habido en los últimos días errores graves en la Unidad Popular y en el Gobierno, errores que centralmente tienen que ver con algunas cuestiones de la política económica y con el tratamiento dado a la derecha.

Si la principal debilidad de la política del Gobierno es la insuficiente movilización de masas, las deficiencias en la incorporación de la clase obrera y el pueblo a la dirección del proceso, en suma, el carácter burocrático de la relación entre el Gobierno y las bases, en estos días esas deficiencias se han manifestado agudamente en torno a la política de precios y de reajustes.

Ello no puede volver a repetirse.

Sobre estas cuestiones queda decir una palabra.

El reajuste

El pueblo sabe que en esto de las críticas, de las observaciones, de las proposiciones en torno a los reajustes y, en general, a los beneficios en favor de

los trabajadores, hay que andarse con cuidado. En muchos casos, hay que pedir por abajo.

No son, por cierto, los representantes de los partidos de la burguesía, que con distintos nombres gobernaron este país hasta 1970, que desataron la inflación y no dieron reajustes, o al final soltaron reajustes enanos al precio de huelgas y la sangre de nuestro pueblo, los que pueden venir hoy a dar cátedra en esta materia.

Sólo la clase obrera y el pueblo, sólo los partidos del pueblo, tienen autoridad política y moral para analizar hoy lo positivo y lo negativo de nuestro proceso revolucionario, lo que es claro y lo que es oscuro en nuestra dirección y en nuestra política económica, y de poner más luz allí donde la cosa no está del todo clara.

En materia de reajustes, ésta es la primera vez en nuestra historia que habrá un reajuste general, para todos los trabajadores, anticipado en tres meses, y una bonificación sustancial en el mes de septiembre.

Es la primera vez que, en menos de un año, se compensará a los trabajadores el alza de los precios de los meses anteriores.

Es la primera vez que el aumento de los sueldos y salarios y de las pensiones, será tan sustancial y tan completo.

Es la primera vez que el salario mínimo sube tan sustancialmente que queda casi equiparado con el sueldo mínimo, que a su vez se reajusta en un 100%. Los jubilados y pensionados serán beneficiados por el reajuste, sin necesidad de leyes especiales, a contar del mismo 1° de octubre y en un 100% del alza del costo de la vida.

Nunca antes se había procedido así.

El proyecto, en general, tiene la virtud de ir en beneficio de todos los trabajadores de la ciudad y el campo y de los jubilados, y por otra parte, de beneficiar también, lo que nos parece altamente positivo, a los pequeños comerciantes y productores.

Se rebajarán las tasas de impuestos para los trabajadores; se condonará el global complementario que debía pagarse por las rentas de este año de 1972, se suprime definitivamente –para todos los artículos de primera necesidad– el impuesto de compraventas, quedan liberados de cobrar impuesto de compraventa todos los pequeños comerciantes que vendan hasta 60 millones de pesos anuales y que son del orden de los 35.000 pequeños comerciantes. Es, sin duda, una ley de reajuste de nuevo tipo, en la perspectiva de un Gobierno Popular, y no hubo nunca antes otra mejor.

Pensamos, sin embargo, que esto no es todo.

Pensamos en que debe insistirse en el criterio de la Central Unica de Trabajadores, de aplicar una política de reajuste discriminada.

En relación con el bono, con el aguinaldo de septiembre, queremos ser también muy claros.

No somos, ni nunca hemos sido, partidarios del tejo pasado. Por el contrario, siempre hemos combatido con dureza esa política economicista e irresponsable, que no toma en cuenta con seriedad la situación que vivimos. Pero para nosotros es un error también jugar a la rayuela con el tejo quedado. No

2990 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

es la política del tejo quedado la mejor para derrotar la del tejo pasado. Y en ese sentido decimos que estamos por aumentar sustancialmente el bono, el aguinaldo de septiembre.

Ese aguinaldo debe ser suficiente como para responder, en parte, a las fuertes alzas habidas en estos días. De otras manera, objetivamente, disminuiríamos el poder adquisitivo de los trabajadores y echaríamos marcha atrás en la política redistributiva.

Estamos entonces por un aguinaldo que en vez de ser de 700 escudos, sea de 1.200 escudos, para todos los trabajadores, tengan el ingreso que tengan. Es decir, por un bono un tanto superior al vital.

En ese sentido hemos propuesto que el Gobierno Popular, en el trámite de discusión del reajuste, envíe al Congreso una iniciativa sobre la materia. Estamos plenamente conscientes que el otorgar este beneficio, como lo proponemos, es un gran esfuerzo para las arcas nacionales.

Pero entendemos que ello es necesario, y que el mayor hueco producido por este aumento indispensable para los trabajadores deberá ser llenado por el aporte adicional obligatorio que los sectores de más altos ingresos deberán pagar a través de tributos.

Las alzas

Respecto a las alzas de precios que ha habido en los últimos días, pensamos que en general es necesario realizar alzas en los precios de la mayoría de los productos. Ello se hace necesario para cubrir aumentos en los costos, financiar el Área de Propiedad Social, estimular la producción en ciertos sectores, contribuir a la lucha contra el mercado negro y la especulación. Pensamos, sin embargo, que no hubo explicación suficiente a las masas sobre esta medida y que no se aplicó con vigor el criterio de alzar más los precios de los artículos suntuarios y menos los indispensables, los artículos de primera necesidad. Y que francamente en el alza de algunos productos se nos pasó la mano.

Planteamos muy responsablemente que es indispensable corregir algunas alzas y concretamente bajar los precios fijados al pan, el azúcar, el aceite y la leche. Ello es posible y nuestro pueblo lo exige.

En las alzas de precios que vienen deberá aplicarse estrictamente el criterio de elevar los precios discriminatoriamente.

El abastecimiento

Creemos que las medidas anunciadas por el Gobierno y las rectificaciones que hemos propuesto permiten a nuestro pueblo mantener los niveles de vida y de consumo que ha conquistado con el Gobierno Popular. Sin embargo, ello puede convertirse en una ilusión, si no somos capaces de meter mano en la distribución, si no aseguramos el abastecimiento de la población, si con el reajuste en el bolsillo las dueñas de cada no encuentran productos que comprar.

La tarea de asegurar el abastecimiento para los sectores populares se convierte así en una cuestión central, decisiva. Ello no podrá realizarse sin la activa participación de la población, de sus organizaciones.

Hay que asegurar que la producción disponible llegue al pueblo, a los precios fijados. El desarrollo de las JAP, el trabajo de los Centros de Madres y de los sindicatos en esta tarea, junto con el Gobierno Popular, es la única forma de garantizar que nuestra política favorece a los trabajadores.

Desarrollaremos la más intensa movilización en torno a esta materia, debemos impulsar las iniciativas de masas que han surgido y asegurar el control de los trabajadores y del Gobierno sobre la distribución y el abastecimiento.

Mano dura al fascismo

En relación con el tratamiento de los grupos fascistas de dentro y de fuera de Patria y Libertad, pensamos que hemos tenido graves rasgos de debilidad.

El pueblo debe ser informado que la red terrorista de derecha ha llegado a altos grados de perfeccionamiento y que las asonadas de los últimos días han sido claramente sincronizadas.

Por otra parte, el pueblo debe saber que sectores del Poder Judicial –que así sirven a quienes los crearon– colaboran en la práctica con los delincuentes y le echan leña al fuego de las asonadas. Ellos han puesto, inexplicablemente, en libertad, en menos que canta un gallo, a los delincuentes de derecha detenidos en los últimos días.

¡Están sentando el principio de que aquí la derecha tiene impunidad para delinquir, para hacer asonadas!

Creemos que los fascistas deben ser enfrentados con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza de los trabajadores.

Estamos, en ese sentido, porque se aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra del movimiento Patria y Libertad.

Y estamos también por llamar al pueblo, a todos los trabajadores, a estar alertas para responder al llamado que haremos los partidos populares y su Gobierno para derrotar al fascismo en todos los terrenos.

Tarea de masas

El movimiento popular, la UP, los partidos obreros, debemos desarrollar la más amplia ofensiva de masas, para que éstos recuperen su confianza en sí mismos, dirijan el proceso revolucionario, derroten el burocratismo y desbataremos la escalada reaccionaria.

Se trata hoy día de:

- Impulsar la lucha antiimperialista, desarrollando la campaña de ahorro de divisas, de fabricación en el país de muchos de los repuestos, partes y piezas que importamos, de cuidado de las maquinarias.

- Asegurar el control y la dirección de los trabajadores en el Área de Propiedad Social.

- Crear comités de vigilancia en las empresas privadas para que los trabajadores aseguren la producción y los precios.
- Dar un gran impulso a la batalla de la producción tanto en la ciudad como en el campo, entregando a los campesinos y sus organizaciones la dirección de la Reforma Agraria.
- Incorporar a la población al control de precios, la distribución y el abastecimiento, a través de las JAP, de los sindicatos y las organizaciones vecinales. De tal manera asegurar el consumo popular.
- Desarrollar convenios de producción y distribución con los medianos y pequeños industriales, comerciantes y agricultores que están por contribuir al desarrollo del país.
- Desarrollar la más intensa movilización en defensa del Gobierno Popular, de aplastar al fascismo, demostrar que la clase obrera y el pueblo son Gobierno en este país hoy día, y mañana será poder.

Compañeros:

Nuestro partido ha querido decir su palabra en un momento difícil en el desarrollo de nuestro proceso revolucionario.

Queremos, al finalizar esta exposición, reafirmar, como lo hicimos en nuestro 5° Pleno, y en todas y cada una de nuestras actividades, la validez insustituible de la Unidad Popular como vanguardia política de nuestro pueblo y de la unidad inquebrantable de los partidos proletarios, de los partidos de los trabajadores.

Sólo la Unidad Popular ha llevado al pueblo a la victoria y sólo ella asegura al pueblo las victorias de hoy y de mañana.

Nuestro respaldo, sin titubeos de ninguna especie, también al Gobierno Popular.

Nuestros enemigos, que han acumulado también una gran experiencia, tienen en su mira derrocar a la corta o a la larga el Gobierno Popular. Ese es su objetivo central. Ellos entienden que es nuestro Gobierno su principal enemigo y la herramienta más poderosa que la clase obrera y el pueblo se han dado para destruirlos.

El imperialismo y los monopolios apuntan contra el Gobierno Popular.

Una elemental brújula de clase nos indica que en el fortalecimiento del Gobierno está nuestra principal tarea, la principal tarea del pueblo y de la clase obrera.

Es con este Gobierno Popular que los trabajadores hemos dado golpes mortales a nuestros enemigos y es con este Gobierno Popular en las manos que la conquista del poder se hace posible a un plazo más corto de lo que muchos imaginan.

El MAPU expresa nuevamente su solidaridad combatiente con la compañera Mireya Baltra, atacada físicamente por los delincuentes de Patria y Libertad; con el compañero Matus que también ha recibido estos ataques; con todos y cada uno de los compañeros ministros y funcionarios de Gobierno que hoy son el centro del odio desatado de la reacción.

Nuestra solidaridad muy especial también con el compañero Jacques Chonchol, acusado hoy por los latifundistas y sus representantes.

Corrigiendo errores, incorporando a las masas al control de la economía y, por lo tanto, a sus decisiones, fortaleciendo al Gobierno, derrotaremos una vez más a los reaccionarios.

¡EL MAPU EXIGE MANO DURA CONTRA LOS MOMIOS ASESINOS!
¡QUE LA INFLACION LA PAGUEN LOS PODEROSOS!
¡MANTENGAMOS LA REDISTRIBUCION DE LOS INGRESOS EN FAVOR DEL PUEBLO!
¡ASEGUREMOS EL ABASTECIMIENTO PARA EL PUEBLO!
¡CON LAS MASAS Y EL GOBIERNO POPULAR DERROTAREMOS AL IMPERIALISMO Y LA REACCION!
¡ADELANTE CON LA UNIDAD POPULAR Y CON EL GOBIERNO POPULAR!
¡SOLO AVANZANDO CONSOLIDAMOS LA VICTORIA!

Extractos de un documento sobre la política económica del Gobierno

El desarrollo de los últimos acontecimientos y la creciente ofensiva de la Derecha, crean, a juicio del MAPU, una de las coyunturas políticas más críticas para la Unidad Popular en sus veinte meses de Gobierno. Nos parece evidente que en estos momentos las necesidades de estrechar filas en torno a la defensa del Gobierno, de unificar al máximo la dirección política de la Unidad Popular, de desarrollar una contraofensiva unitaria de masas y de corregir los graves errores que subsisten en la conducción del proceso revolucionario, se convierten en las tareas que están puestas a la orden del país. En estos momentos difíciles, nuestro partido levanta las banderas de la unidad, y de la defensa del Gobierno.

Pensamos, sin embargo, que muchos de los problemas que vive el movimiento popular encuentran su raíz en las deficiencias y contradicciones de la política económica que está aplicando el Gobierno.

Pensamos que la devaluación y los reajustes de precios otorgados (consecuencia en gran parte necesaria de la medida anterior), manifiestan una decisión de resolver los problemas económicos que hoy enfrentamos, apoyándonos principalmente en mecanismos de mercado. Si bien estos mismos instrumentos nos permitieron resolver nuestros problemas y obtener resonantes éxitos, durante el año 1971, no ocurre lo mismo con los problemas que tenemos actualmente. Los grandes objetivos siguen siendo los mismos: acumular fuerzas, convertir la victoria en poder. Sin embargo, han cambiado sustancialmente las condiciones en que se desenvuelve nuestra economía, y por eso la manera de encarar los problemas debe modificarse apreciablemente también. Una política basada en mecanismos de mercado tuvo éxito

durante 1971, debido a los importantes niveles de subutilización de las fuerzas productivas (equipos, divisas, fuerza de trabajo), que las propias contradicciones del sistema capitalista nos dejaron como herencia. Por eso pudimos aumentar decisivamente el poder de compra de las masas sin reducir en magnitudes equivalentes las utilidades de la burguesía.

Ello nos condujo a una situación en que ambos grupos aparecen con poderes de compra muy acrecentados, luchando en el mercado por el control de los bienes materiales y por realizar sus deseos de consumo. La producción no podrá crecer en este tiempo con la velocidad del año pasado, principalmente porque las capacidades ociosas se han venido copando y porque, especialmente, enfrentamos una situación de comercio exterior muy aflictiva. En consecuencia, la lucha de clases en el plano económico, la lucha por el consumo, adquiere un carácter extraordinariamente agudo, provoca una gran tensión en el aparato productivo, genera los problemas de escasez que estamos viviendo.

El MAPU piensa que aquí no hay dónde perderse. No existen recetas mágicas para resolver el problema del abastecimiento. Es una de las manifestaciones más agudas, hoy por hoy, de la lucha de clases. Por lo tanto, resolver el problema de la escasez implica resolver la lucha por el consumo en uno o en otro sentido. Entendemos que el imperativo de la acumulación de fuerzas obliga a aliviar este problema, cargando la balanza del lado del proletariado y de los sectores más pobres.

Entendemos, además, que el problema no resuelto del poder nos impide resolver las dificultades económicas en forma absoluta, y que, por lo tanto, cualquiera sean las decisiones que se tomen, los problemas de desabastecimiento y de escasez seguirán, en alguna medida, subsistiendo.

En las reuniones que la Unidad Popular sostuvo en Lo Curro, se dibujaron con alguna claridad dos posiciones. Las últimas decisiones sobre política económica demuestran que, en los hechos, se ha impuesto una de ellas, precisamente aquella que no era compartida por el MAPU. El esquema de esta posición, no explicitado en su totalidad, implica en los hechos resolver los problemas económicos utilizando principalmente mecanismos de mercado (en este caso, precios).

Como ello significa en primera instancia reducir el poder de compra de los trabajadores, se ha planteado desde ya el reajuste automático de salarios. Sin embargo, no por ello las capas pobres dejarán de pagar el costo principal de los problemas económicos. La decisión de reajustar precios y salarios no resuelve las dificultades de desabastecimiento y escasez: no hace más que plantearlas a un nivel superior de precios y remuneraciones. En consecuencia, la burguesía y los grupos de ingresos altos podrían derrotar al proletariado en la lucha por el consumo, mediante la especulación, el mercado negro y el acaparamiento. En definitiva, esta política de apoyarse exclusivamente en el mercado, llevará al Gobierno a enfrentar una situación en la que el consumo popular se verá reducido apreciablemente. Todo ello tenderá a llevar al Gobierno a enfrentar con excesiva dureza las peticiones salariales de los sindicatos, encaminándose así hacia una situación potencialmente represiva.

Uno de los puntos específicos donde nuestro partido planteó ya su discrepancia, fue la decisión de devaluar en más del 90%. Es para nosotros muy

claro que este mecanismo no resuelve hoy día los problemas de divisas que nos afectan. El grueso de las importaciones y de las exportaciones está siendo efectuado por las empresas del Área de Propiedad Social, que operan sobre la base de programas materiales. Estos reflejan, en el caso de las importaciones, los requerimientos ineludibles de abastecimiento, y, en el caso de las exportaciones, los planes objetivos de producción (cobre, salitre, hierro, etc.). Por lo tanto, la devaluación no aumentará las exportaciones ni reducirá las importaciones en magnitudes apreciables: precisamente porque un instrumento de mercado no puede afectar una situación regulada por programas planificados.

Pensamos que el objetivo principal de la devaluación fue presentar ante los organismos internacionales de crédito, y especialmente ante el Fondo Monetario Internacional, la decisión del Gobierno de iniciar una política económica "ortodoxa" y "sensata". Entendemos además que estuvieron en Chile un asesor de alto nivel del FMI, y uno de sus Directores (lo que no se informó a la Unidad Popular), quienes plantearon como cuestión previa al apoyo financiero de ese organismo, la necesidad de una devaluación sustancial. Esta actitud frente al imperialismo contradice todas las posiciones que nuestro partido ha planteado acerca del bloqueo invisible, y de la forma en que el Gobierno y la Unidad Popular deben enfrentarlo. Una concesión de este tipo no es neutra: parte importante de las alzas que se están planteando obedece a los mayores costos provocados por la modificación cambiaria. Así, el proletariado recibe un golpe en su lucha económica, como consecuencia de una forma errónea de enfrentar al imperialismo.

El estilo político con que se ha efectuado el reajuste de precios es, a nuestro juicio, igualmente erróneo. Nadie aclaró esta cuestión previamente ante las masas. La CUT aparece absolutamente desinformada. Más grave aún es el hecho de que no se hayan explicado todavía las decisiones ya tomadas, ni tampoco el volumen de alzas por venir. El pueblo y los partidos están completamente desorientados. Y este es un problema central. Las masas que han apoyado incansablemente al Gobierno cada vez que se les ha hablado con claridad, aparecen hoy acorraladas y perplejas. Eso permite a los sediciosos y fascistas organizar asonadas, e impedir de hecho el quiebre del paro de los comerciantes. Si la situación política que hoy enfrentamos es difícil, se debe en buena parte al deficiente estilo de masas que el Gobierno no ha sabido corregir.

En suma, compañero Presidente, nuestro partido ve con preocupación el hecho de que en el desarrollo de nuestra política económica tienden a surgir inevitablemente tendencias reformistas y burocráticas. Ello no es el producto, a nuestro juicio, de una voluntad de la dirección económica en el sentido de frenar o de burocratizar el proceso, sino de un error en la apreciación del funcionamiento real de la economía, en las condiciones generadas por la existencia del Gobierno Popular y por la aplicación de su Programa. Lo que ocurre es que las leyes del mercado, que funcionaban en la situación de una economía capitalista como la nuestra, se han dislocado en estos veinte meses. La expropiación de los monopolios, la política redistributiva, la perspectiva revolucionaria de toda nuestra política, hacen que el sistema económico debe

de funcionar como lo hacía en las condiciones normales de los gobiernos burgueses. Este es un hecho objetivamente irreversible. Partir del supuesto implícito o explícito de que los problemas económicos los podemos resolver recurriendo fundamentalmente a mecanismos de mercado, constituye por tanto un grave error de apreciación, una perspectiva irreal. Una política sustentada en ese supuesto está inevitablemente condenada a generar tendencias reformistas en su aplicación práctica y a ser burocrática, en la medida en que pone en el mercado y su funcionamiento, y no en el control social, su fundamental énfasis.

Un ejemplo claro de estos errores lo constituye la creencia de algunos, de que los problemas de la producción y la distribución en el sector privado, pueden ser resueltos con sólo una política de precios que lo estimula. En nuestras condiciones, si no se desarrolla la vigilancia y el control de la producción con el concurso de los trabajadores, si no se desarrolla el control de la distribución y los precios con la participación de la población –a través de sus organizaciones– el alza de precios, por sí sola, no garantiza ni el aumento real de la producción, ni el respeto de los precios oficiales, ni la distribución hacia los sectores populares, ni la liquidación del mercado negro y la especulación.

Queremos reiterarle a usted los planteamientos del MAPU acerca de la política económica, ya expuestos en las reuniones de Lo Curro, y aprobados en nuestros dos últimos plenos. Nuestra orientación central es que no se pueden ir resolviendo los problemas de nuestra situación económica actual, acumulando así fuerzas, apoyándonos en los mecanismos del mercado, sino, por el contrario, implementando el control social. Esta política reconoce en cada uno de los problemas que enfrentamos una ofensiva de nuestros enemigos, busca sobre esta base la agitación de masas, les plantea a éstas los problemas en términos de tareas a realizar, y crea organizaciones de Gobierno y de masas para implementar estas tareas.

Planteamos la necesidad de controlar más estrictamente las empresas medianas. El Gobierno cuenta con el APS en los sectores correspondientes, cuenta con los convenios de producción para orientar éste en función de las metas programadas. Cuenta con Dirinco para controlar los precios, las calidades, etc. Cuenta con Impuestos Internos para controlar la evasión tributaria, cuenta con el Banco Central para controlar la especulación en divisas. Sin embargo, estos mecanismos resultan burocráticos si no se apoyan en los trabajadores de las empresas. Se impone por tanto el control de los trabajadores en las empresas medianas, desde los sindicatos y los comités de vigilancia.

Frente al problema de la especulación, del acaparamiento, y del mercado negro, planteamos también la necesidad del control por parte del Gobierno y de las masas. Contamos con Dirinco, con las empresas distribuidoras estatales. Las masas tienen sus organizaciones poblacionales.

Los problemas de la producción agrícola muestran claramente las imposibilidades de las soluciones que se apoyan exclusivamente en el mercado. Cualquiera sea el precio que se fije a los productos agrícolas, los capitalistas especuladores, operando con precios negros y con recursos cuantiosos, sobrepasarán los poderes de compra estatales, haciendo llegar esos productos al

mercado negro urbano. De tal manera que, sin un control fuerte por las instituciones del Agro, y sin un apoyo en los sindicatos del área reformada y privada, las políticas de precios serán enteramente insuficientes.

Frente al problema de las divisas, nuestro partido ha sido claro. Toda la política de masas del Gobierno debe centrarse en el antiimperialismo. Debemos agitar con claridad y con fuerza la realidad del bloque invisible, sus consecuencias sobre la disponibilidad de divisas y, por lo tanto, sobre el problema del abastecimiento y la producción. Debemos preparar al pueblo para enfrentar la ofensiva que desatará el imperialismo debido a los resultados de su apelación en el Tribunal del Cobre. El apoyo financiero decidido de los países socialistas, sólo podemos obtenerlo con una consciente movilización antiimperialista, más que con el envío de misiones negociadoras más o menos tímidas.

Con relación al déficit fiscal y a la liquidez, el Gobierno debe plantear una gran ofensiva de masas por la defensa de los ingresos del Estado, junto con una decidida reforma tributaria que haga pagar sustancialmente más a los que tienen más. Hay que explicar cómo niveles de liquidez excesivos entregan recursos a la burguesía, y le permiten enfrentar con buen pie la batalla por el consumo, desatando la especulación y el mercado negro, y cómo los parlamentarios que se oponen al aumento de los impuestos están defendiendo estos comportamientos.

Esta política de control social ofrece dos resultados. Por una parte, mejoramos nuestras posibilidades de superar los problemas económicos, con el menor costo para el proletariado. Por otra, nos permite acumular fuerzas a pesar de los problemas económicos que, en uno o en otro esquema, persistirán indudablemente.

Definidas y desarrolladas estas campañas de masas es necesario, desde luego, entrar a moverse además con los instrumentos del mercado: precios, salarios, tipo de cambio, etc. Pero incluso en este ámbito del manejo de los instrumentos de política económica, planteamos nuestra discrepancia con las medidas acordadas.

-La discriminación de los precios para favorecer a los bienes de consumo popular debe mantenerse como una cuestión central de nuestra política económica. Las alzas concedidas parecen obedecer precisamente al criterio contrario: las mayores alzas afectan a los alimentos (más del 100%). Esta situación debe corregirse, revisándose los precios del pan, azúcar, aceite y leche.

-Las alzas de precios para algunos productos suntuarios producidos por industrias del área privada, deben ir acompañadas del estanco. En caso contrario, las utilidades crecientes van directamente a los capitalistas privados: así sucede, creemos, con los televisores. Estancos deben crearse para los artículos eléctrico-electrónicos, y línea blanca (televisores, refrigeradores, cocinas, lavadoras, etc.). El Estanco Automotriz ha conseguido utilidades superiores a los E° 200 millones anuales, sobrepasando considerablemente las utilidades de todas las empresas del APS. Al mismo tiempo, la absorción de liquidez del Estanco Automotriz sobrepasa los E° 1.500 millones.

-El criterio adoptado en cuanto a alzar los precios de tal manera que se financien cada una de las empresas del APS, nos parece erróneo. No se pue-

de terminar con los subsidios de una vez, sin provocar aumentos de precios como los otorgados en el rubro alimentación. El APS es un complejo social de producción, y en tal sentido debe ser gestionado. Entendemos la necesidad de preocuparse por el financiamiento global del APS, en el sentido de cubrir los déficit de algunas empresas con los excedentes de otras. Esto permite mantener una política de precios correctamente discriminada.

—En el caso de los productos agrícolas, nos parece necesario diferenciar entre precios al productor y precios al consumidor. El criterio de que cada empresa se autofinancia, implica en el caso de empresas como ECA, que los precios al consumidor deben alzarse considerablemente para no bonificar. Esta política nos parece errada en relación con los productos de consumo masivo como son los alimentos. Los poderes compradores, como monopolio estatal, deben asumir las pérdidas que la decisión de diferenciar acarrea. Estas pérdidas deben ser compensadas por utilidades en los estancos, y por los precios superiores en los artículos de uso suntuario.

—Con las alzas ya otorgadas, el problema del reajuste a los trabajadores no se plantea en septiembre o en octubre, sino que hoy día. Como las alzas son muy elevadas, y afectan el poder de compra de los trabajadores durante el mes y medio anterior al reajuste de octubre, planteamos la necesidad de incrementar el bono compensatorio a E° 1.200, ya que este es el monto aproximadamente equivalente al deterioro de salarios producido.

—Debemos insistir en la necesidad de impulsar un reajuste discriminado, tanto por motivos políticos como por motivos de financiamiento.

No debe pensarse, sin embargo, que estas discrepancias en cuanto al uso del instrumental de política económica sean nuestra crítica fundamental. Nuestra discrepancia es más general, pues se refiere al papel que las masas deben desempeñar en la conducción de las tareas del Gobierno y del pueblo.

Comité Político de la Unidad Popular Declaración pública del 26 de agosto de 1972

“Estamos en la obligación de manifestar a la opinión pública, que el país está viviendo momentos de la mayor gravedad, no sólo en la vigencia de sus instituciones, sino que ya se acecha la vida misma de todos los conciudadanos. La acción de la derecha y en general de todos los partidos de oposición, ha llegado a los términos tales, que nosotros no nos cabe duda y es por eso que queremos alertar a la nación, que se está buscando un enfrentamiento de hecho.

La obstrucción parlamentaria, la injuria, la difamación y tergiversación de los hechos por medio del periodismo hablado o escrito, la excitación a la violencia de los grupos armados de orientación derechista en permanente acción en las calles y en el campo de todo el país, el sabotaje a las medidas del Gobierno, las declaraciones insolentes de las directivas de los partidos de oposición, persiguen producir el caos para recuperar el poder para las clases sociales que secularmente han explotado y usufructuado de la riqueza nacional, en clara concomitancia con los intereses del imperialismo.

Cuando la Unidad Popular asumió el Gobierno de la República rápidamente se desvaneció la imagen de terror que había presentado al país la derecha y la Democracia Cristiana para el caso que el Dr. Allende asumiera la Presidencia de la República. Sólo unos cuantos incautos de sus propias filas se fugaron de Chile, más que por temor a lo que pudiera ocurrir, por el pánico que sus dolosas actividades económicas fueran revisadas.

En los 20 primeros meses del Gobierno Popular se ha cumplido fielmente su programa de Gobierno sin violentar las estructuras institucionales y jurídicas en que descansa el desarrollo de la vida nacional.

Hemos evitado la violencia y no permitiremos que la derecha la use impunemente. Como lo hemos sostenido reiteradamente, a la violencia reaccionaria el pueblo apoyará la violencia revolucionaria. Rechazamos al fariseísmo de la derecha que se traduce en declaraciones democráticas de una parte y en organización armada, de otra.

El Gobierno y el pueblo no pueden tolerar más asesinatos de compañeros trabajadores. Repelaremos los vejámenes y asaltos a nuestros ministros, dirigentes y militantes. Enfrentaremos la lucha en todos los terrenos, pues estamos hartos del cinismo y la prepotencia de los enemigos del pueblo.

El Comité Político de la UP.

Luis Corvalán: Respuesta del Partido Comunista a la carta del Presidente Salvador Allende del 31 de julio sobre la Asamblea del Pueblo en Concepción

(El Siglo, 31 de agosto de 1972)

Santiago, 29 de agosto de 1972.

Al compañero

Presidente de la República

Salvador Allende Gossens,

Presente.-

Estimado compañero y amigo:

Hubiésemos deseado que la Unidad Popular diera respuesta oficial y directa a la carta que, con fecha 31 de julio, Ud. envió a los representantes máximos de los partidos que la integran. Pero estos partidos, en una actitud que respetamos plenamente, han preferido responderle por separado a fin de expresar no sólo el pensamiento común de las fuerzas populares, sino también los puntos de vista particulares que sustentan sobre uno que otro asunto. Por este motivo hemos decidido contestar su carta a nombre de nuestro partido y hacer también públicos nuestros planteamientos.

Como Ud. bien sabe, desde el primer instante los comunistas dimos nuestro decidido apoyo a su valioso documento. Lo hicimos a través de varias declaraciones de miembros de nuestra Comisión Política, interrogados a propósito por los periodistas, en comentarios editoriales del diario "El Siglo" y, especialmente, en el discurso pronunciado por el camarada Volodia Teitelboim en una asamblea que se realizó a teatro lleno en el Caupolicán. Este discurso fue publicado íntegramente en nuestro diario del día 6 de agosto. En el Informe al último Pleno de nuestro Comité Central ratificamos nuestro apoyo al contenido de su referida carta.

En consecuencia, estamos seguros que Ud. comprenderá por qué aún no le habíamos contestado formalmente y, sobre todo, porque en esta respuesta pensamos que es innecesario opinar sobre cada una de las cuestiones planteadas por Ud. en la oportunidad de que se trata.

El espíritu esencial que anima sus reflexiones es lograr una mayor cohesión de la Unidad Popular en todos los niveles. Ello exige, como Ud. anota, "claridad y definición" respecto "del camino revolucionario que está siguiendo el movimiento popular y que orienta la acción del gobierno", en relación a los verdaderos enemigos que enfrentamos, a las tareas que tenemos por delante, a la importancia decisiva de la lucha que sin "espectacularidad" libran miles y miles de hombres y mujeres, modestos combatientes de la causa del pueblo,

y a la necesidad de que cada partido se preocupe “de elevar el nivel ideológico de sus militantes, de su disciplina, e impulsar la estrategia común de la Unidad Popular” rechazando “con resolución y energía los sucesivos ensayos divisionistas” y denunciemos “pública y oportunamente a quienes de modo deliberado buscan alterar nuestra línea política programática”.

Una vez más expresamos nuestro pleno apoyo a tales planteamientos.

Objetivos verdaderamente patrióticos

Compañero Presidente: estamos en vísperas del segundo aniversario de la histórica y victoriosa batalla popular del 4 de septiembre de 1970. En este período, bajo el Gobierno que Ud. preside y con la participación activa del pueblo, se han producido cambios trascendentales. La nacionalización del cobre y otras industrias extractivas, el paso a manos de los campesinos de 9 millones de hectáreas –de las cuales 700 mil son de riego y más o menos el doble de secano arable–, la estatización de la banca, la formación del área social y mixta de la economía, los avances logrados en el manejo directo del comercio exterior, por parte del Estado, todo ello unido a una política exterior plenamente soberana, han colocado a nuestro país en el camino de su propia revolución, de una nueva independencia, del cumplimiento de los objetivos verdaderamente patrióticos de esta época.

Por fin se ha logrado el despegue, del cual tanto se hablaba en el Gobierno pasado, para que la sociedad chilena resuelva las contradicciones que se habían acumulado en su seno y se abran las compuertas que nos permitan salir del subdesarrollo y darle a nuestro pueblo bienestar, justicia y verdadera libertad. A despecho de lo que dicen los reaccionarios, Chile es hoy más independiente y el pueblo más libre. A pesar de lo que afirma la ultraizquierda, lo que se ha hecho en estos 20 meses tiene un contenido profundamente revolucionario.

El Gobierno cuenta con apoyo popular

Hemos cometido errores, como todo Gobierno, con la diferencia de que éste es el único que tiene la suficiente valentía y honradez para ponerlos de relieve a fin de que el pueblo los analice y participe resueltamente en la tarea de superarlos. Pero lo que prevalece no son los errores. Y lo que cuenta para los futuros destinos de Chile son las grandes transformaciones revolucionarias que se han realizado desde el 3 de noviembre de 1970 y las que estamos impulsando en estos momentos. Los trabajadores y gran parte de la ciudadanía así lo comprende. Por eso, pese a los problemas que afectan a las masas, el Gobierno cuenta con un sólido y decidido apoyo popular, que ha quedado de relieve en grandes manifestaciones públicas y en las elecciones que han tenido lugar en la CUT, en la UTE, en la FECH y en la provincia de Coquimbo.

Para los pueblos latinoamericanos y de todo el mundo, lo que sucede en Chile tiene vastas proyecciones. La experiencia chilena se observa con gran in-

terés, sobre todo en tanto demuestra la posibilidad de transitar hacia el socialismo sin pagar un tributo de sangre derramada a raudales.

Frecuentemente, llamamos proceso revolucionario a lo que estamos haciendo. En el concepto científico, la revolución es precisamente eso, un proceso de cambios profundos, de desplazamiento y reemplazo de las clases dominantes y esto es lo que se está llevando a cabo entre nosotros con vistas a abrir camino a la edificación de una sociedad más justa, más libre, más humana, la sociedad socialista.

El enemigo resiste estos cambios históricos. Lo que ha sucedido en estos días demuestra qué busca y qué quiere una parte del mismo. La autopsia ha verificado que el comerciante de Punta Arenas, Manuel Aguilar, falleció de un infarto cardíaco. Por lo tanto, está absolutamente claro el carácter político del paro a que se arrastró al comercio, en el contexto de un plan sedicioso en contra del Gobierno. Parte de este mismo plan es el alevoso asesinato, en el lapso de una semana, de cuatro modestos campesinos, crímenes que fueron cometidos por terratenientes miembros del Partido Nacional. Además, los secuaces de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus han perpetrado agresiones y provocaciones en las personas o los hogares de tres Ministros de Estado y del Comandante en Jefe del Ejército. Y en Valparaíso, el viernes de la semana pasada, violaron las decisiones de la autoridad provincial, adoptadas de conformidad a las disposiciones legales y con acuerdo del Ministerio del Interior. De este modo, realizaron desfiles que se habían prohibido, se lanzaron contra la Intendencia, atacaron la sede de varios partidos y dejaron gravemente heridos a dos jóvenes comunistas.

Escalada que conduce a guerra civil

No puede escapar al criterio del compañero Presidente la gravedad de esta situación. Estamos en presencia de una escalada sediciosa que quiere conducir al país a una guerra civil.

“El Mercurio”, afectado el imperio económico de sus propietarios por las medidas del Gobierno, se ha dedicado a justificar dicha escalada, sentando la teoría de que la violencia y la ilegalidad revolucionarias surgen con posterioridad “a los asaltos y robos protagonizados por la VOP y otras organizaciones extremistas”, “al homicidio de don Edmundo Pérez Zújovic y diversos crímenes propios de un desorden moral”, y como respuesta “al alza súbita de los precios” por parte de “los descontentos desesperados”.

El diario de los clanes pasa por alto la prontitud y energía con que el Gobierno ha actuado ante los hechos delictuosos protagonizados por elementos descompuestos de la ultraizquierda, como es el caso del asesinato de don Edmundo Pérez Zújovic. Y trata de pasar gatos por liebres, de hacer creer que los pijes reclutados por Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus, los niños bien de Providencia actúan movidos por la desesperación que provocarían las alzas. Este es el colmo del tartufismo. Ninguno de ellos ha conocido jamás el hambre y la necesidad.

De otro lado, el conjunto de los dirigentes de la oposición, exceptuando a sus elementos más enjuiciados, aparece empeñado en buscar por todos los caminos a su alcance el deterioro de la situación económica, el agravamiento de los problemas, la agudización de las dificultades. Estas son, ante todo, consecuencias del atraso en que mantuvieron al país las clases hasta ayer dominantes, del medio siglo de saqueo de las empresas norteamericanas, “del bloqueo silencioso” del imperialismo, de la baja del precio del cobre que es nuestro principal producto de exportación y de las alzas verticales que han tenido los productos que importamos y que debemos pagar al contado para asegurar el abastecimiento de la población.

El Gobierno, los trabajadores, la mayoría del país desean superar estas dificultades. Se hacen esfuerzos patrióticos en esta dirección. Las jornadas de trabajo voluntario a las que se incorpora un número creciente de chilenos, la formación de centenares de Juntas de Abastecimiento y Precios, en las que actúan miles de mujeres junto a los propios comerciantes; los esfuerzos de trabajadores y de técnicos para ahorrar divisas, fabricando especialmente piezas y repuestos; las medidas que se toman para mecanizar el campo, elevar la producción agrícola, substituir parcialmente el consumo de carne de vacuno por el de aves, porcinos y productos de mar; la roturación de miles de hectáreas vírgenes por los campesinos del norte chico y de otras regiones; la entusiasta campaña de las juventudes organizadas para recolectar chatarra y papel y aumentar así la disponibilidad de acero y fonolita; la colaboración ejemplar del Ejército, en la formación de tractoristas, el apoyo que a esta misma tarea presta la Universidad Técnica; el aporte de sindicatos, de gremios y de los propios institutos militares en la subscripción de bonos de la reconstrucción, son algunos de los muchos hechos demostrativos de que la inmensa mayoría de los chilenos está dispuesta a superar creadoramente y con patriotismo los problemas del país.

Siguen imperando planes de la ITT

En la realización de algunas de estas grandes tareas suelen demostrar interés jóvenes y mujeres de la Democracia Cristiana, obreros y técnicos que no pertenecen a la Unidad Popular. Pero, en general, nada de esto les importa a los partidos de la oposición. Lo único que hacen y buscan es obstruir.

Por lo visto, siguen operando los siniestros planes que los documentos de la ITT pusieron al descubierto, es decir, provocar el caos, la desorganización, el sabotaje, tratar de meter cañas en la Unidad Popular y utilizar con fines de provocación la desesperación pequeño-burguesa de la ultraizquierda.

La Democracia Cristiana sostiene, a menudo, que está en contra de la sedición y el golpe de Estado, venga de donde venga, y creemos que tal sentimiento es real. Pero se junta cada vez más con los sediciosos y algunos de sus voceros suelen superar en procacidad y reaccionarismo a los dirigentes del propio Partido Nacional. Además se dedica o se suma al juego de las acusaciones, sin fundamento, contra los Ministros de Estados, y al propósito de crear con-

diciones para llegar a la acusación y la destitución del propio Jefe de la Nación y a no permitir que el Gobierno que Ud. preside cumpla su período constitucional. De esta manera, quiéranlo o no, la Democracia Cristiana le echa agua al molino de la sedición y asume así una grave responsabilidad ante el país.

Lo que sucede, lo que hace el enemigo no puede extrañarnos ni mucho menos desesperarnos. Pero tenemos la obligación de actuar de manera tal que impidamos la guerra civil, aseguremos la continuidad del proceso revolucionario y superemos las dificultades.

Exigimos aplicar la ley

No patrocinamos la ilegalidad ni la arbitrariedad, sino la resuelta aplicación de la ley. Ud. sabe, compañero Presidente, que hemos tenido y tenemos una posición muy definida en cuanto al reconocimiento de los derechos de la oposición que se ejerzan dentro de la ley. Por eso, hemos sido partidarios de que se autoricen los actos públicos de los partidos de oposición, sin perjuicio de que, en relación a ellos, se apliquen las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo a fin de evitar que los grupos fascistas, los aprovechen para caer en desbordes que minen la autoridad del Gobierno y cometan desmanes y alteraciones inaceptables del orden público. Pero el reconocimiento de los derechos de la oposición no puede llevarnos a aceptar toda clase de excesos y fechorías. Ciertos opositores creen que se puede hacer cera y pabilo de la ley. Hay diarios y radios de la oposición, que han convertido en pan de cada día la mentira, la injuria, la calumnia, las publicaciones falsas y alarmistas. Como dice el pueblo: “De frente pelea el Buin”. Por ello, creemos indispensable que por estos delitos antes que por incumplimiento de formalidades, se adopten las medidas legales correspondientes. El Gobierno nunca será criticado por el pueblo si aplica medidas enérgicas contra los enemigos que se salen de la ley, que mienten descaradamente, acaparan mercaderías, crean el mercado negro, hacen contrabando con el exterior y especulan con los productos alimenticios. Por estas mismas razones ha recibido con júbilo las decisiones que en Punta Arenas, en Arica y Santiago se han tomado contra acaparadores y contrabandistas y las que acaba de anunciar el Ministro del Interior, compañero Jaime Suárez, en orden a denunciar a la Justicia las actividades delictuosas de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus y a clausurar la Radio Agricultura de Los Angeles por su responsabilidad en la instigación que culminó con el asesinato de un campesino de esa provincia. Pensamos que cada medida de este tipo que se vea obligado a tomar el Gobierno se estudie atentamente desde el punto de vista legal y político a fin de mantenerla contra toda presión.

Nuestra primera y principal obligación con el pueblo y el país es ponerles camisa de fuerza a los que quieren arrastrar a Chile a un baño de sangre.

La necesidad de mantener y asegurar el desarrollo de la libertad y la democracia nos impone el deber de aplicar la ley contra quienes incurren en delitos en busca de la caída del Gobierno y de la implantación de una dictadura fascista.

Mantener a raya a ultraizquierda

Al mismo tiempo, nos pronunciamos, una vez más, por mantener a raya a los provocadores de la ultraizquierda, sobre la base de la lucha ideológica y política contra sus posiciones aventureras, sin perjuicio del legítimo derecho de autodefensa del Gobierno revolucionario y popular, evitando por todos los medios que tal política se confunda en lo más mínimo con afanes de represión.

Cualquier vacilación de nuestra parte frente a las actitudes delictivas de la ultrarreacción o a las provocaciones y planteamientos aventureros de la ultraizquierda iría en perjuicio de la autoridad del Gobierno y de la cohesión misma de la Unidad Popular.

Damos por descontado que “El Mercurio” tratará de especular con estas ideas, presentándonos como patrocinadores de una dictadura totalitaria. Pero eso nos tiene sin cuidado. Lo que defiende ese diario no es la libertad, puesto que siempre le negó al pueblo este derecho y aplaudió todos los gobiernos despóticos, las masacres y leyes liberticidas. La libertad que reclama ese diario es la que quieren los traficantes del mercado negro, los acaparadores, los calumniadores, los grandes explotadores.

Creemos que la situación ha llegado a un punto tal que o pasamos a la ofensiva, actuando dentro de la ley, o el enemigo hace tabla rasa de toda autoridad. Por otra parte, bien sabe Ud. que no sólo los comunistas, sino todos los partidos de la Unidad Popular, coincidimos en estas ideas. Además, consideramos que calzan con el contenido de su carta, con su decisión expresa de “asegurar las generosas ventajas que ofrece la convivencia chilena a los que respetan la decisión del pueblo de darse un Gobierno y hacerlo respetar cabalmente”.

Comprendemos que la fuerza o la debilidad del Gobierno dependen en grado considerable de la correlación de clases y, en particular, de lo que la Unidad Popular logre en materia de mayor cohesión de sus filas y de más alto grado de movilización de las masas.

Sobre el particular, queremos manifestarle que a nuestro juicio estamos seguros que todos los partidos de la coalición popular haremos nuevos y fructíferos esfuerzos en dicha dirección. Es cierto que en este terreno se pueden observar debilidades, pero el espíritu que nos anima a todos, según nuestro entender, es superar las fallas y empujar más el carro de la unidad y las luchas populares. Consideramos tarea ineludible apresurar el tranco de la participación de los trabajadores en la dirección de la economía y de la administración general del país y ampliar el diálogo con los sectores medios, arribando a acuerdos concretos que contemplen sus intereses y las conveniencias de la nación.

Programa UP está vigente

En su carta, Ud. se refirió expresamente “a la maniobra divisionista” que surgió en Concepción con el nombre de Asamblea Popular. Con posterioridad a sus palabras condenatorias, algunos de los patrocinantes de esa asamblea han dicho que no pretendían establecer un doble poder, un poder

paralelo al actual Parlamento y mucho menos al Ejecutivo. Bien. ¿De qué se trataba entonces? ¿De buscar nuevas fuerzas de organización popular y de poder popular en apoyo del Gobierno? No. Se trataba, al menos, de sustituir la alianza y el Programa de la Unidad Popular, cuestión que no se puede tolerar porque la Unidad Popular y su Programa no han perdido vigencia.

La Unidad Popular es una coalición de varios partidos con raigambre en diversas clases y capas sociales y distinta formación política. Es una coalición pluralista. Ello explica el hecho de que cada una de las fuerzas que la integran tenga sus propios perfiles. Esto es natural. Pero es también un hecho que debemos cuidar y fortalecer esta unidad y en especial el entendimiento socialista-comunista, porque el enemigo trata de separarnos, de lanzarnos unos contra otros, de apartarnos del propio Jefe del Estado y, sobre todo, porque férreamente unidos no nos podrán derrotar. Representamos los intereses auténticos del pueblo y de la patria y actuando en un solo bloque, somos capaces de hacerlos prevalecer.

Somos partidarios de que los partidos de la Unidad Popular busquen efectivamente nuevas formas de organización y de poder del pueblo en apoyo del Gobierno. Por eso hemos contribuido a la formación de las JAP, apoyamos los Consejos Campesinos y de Salud, la incorporación de los estudiantes de la Enseñanza Media a los Consejos de Profesores y trabajamos por la formación de los Consejos de Administración de las empresas del área social, de los Comités de Producción y de las Comisiones de Vigilancia en todas las áreas de la economía. Puede que la vida haga necesario el surgimiento de otros organismos. Como van las cosas, acaso nos veamos obligados, por ejemplo, a crear comisiones de autodefensa por cuadra o Unidad Vecinal para aplastar cualquier intento de sedición. La actitud, no precisamente aislada, del Ministro de la Corte de Apelaciones que dejó en libertad a todos los protagonistas de los delitos de la noche del lunes antepasado, indica que gran parte de los jueces no constituyen ninguna garantía seria en resguardo de la tranquilidad de la ciudadanía ni menos de la estabilidad del Gobierno legítimamente constituido.

Pensamos que los partidos de la Unidad Popular deben tomar las medidas pertinentes para cumplir con el acuerdo de celebrar sus asambleas comunales y provinciales que han de culminar en una gran asamblea nacional. En tales reuniones deben considerarse estos problemas, éstas y otras sugerencias que se puedan hacer, consultándose la opinión de los militantes y simpatizantes de base del movimiento popular. Tal vez podamos convenir también en que se hace necesario estructurar el Partido Federado de la Unidad Popular a todos los niveles.

Fortalecer organismos de masas

Pero hablando con toda franqueza, lo que hace más falta es fortalecer las organizaciones existentes de obreros, campesinos, empleados, pobladores, etc. En particular, debemos trabajar más en el seno de las Juntas de Vecinos y de los Centros de Madres, uniendo y movilizandolos sus efectivos, por encima de las diferencias políticas, en torno a la solución de problemas que les son comunes.

Exceptuando las naciones socialistas, Chile es tal vez el país que tiene proporcionalmente un más alto grado de organización popular. Más de un millón de obreros están organizados. Más de 600 mil mujeres tienen sus Centros de Madres. Gran parte de la población está en las Juntas de Vecinales. Cientos de miles de comerciantes, pequeños agricultores, artesanos y otros grupos de las capas medias y todos los profesionales y técnicos tienen sus organismos específicos. Es cierto que no pocos de ellos se hallan bajo la influencia de la oposición, tienen una orientación reformista o son proclives al paternalismo. Pero el deber de los revolucionarios es actuar con las masas, en sus propias organizaciones, impulsando sus luchas, elevando su nivel político, ganándolas para la revolución. Recabarren fundó el movimiento obrero revolucionario, conquistando la dirección de la FOCH, que hasta 1919 estaba en manos de los conservadores. Y socialistas y comunistas ganamos la Confederación de Sindicatos Legales, creada en el primer Gobierno de Ibáñez, como una organización reformista en oposición a la FOCH. Es una expresión de sectarismo la subestimación que impera entre nosotros respecto de las citadas organizaciones de masas. Y en esto debemos cambiar de actitud.

El papel de los partidos de la Unidad Popular debe ser, en nuestra opinión, fundamentalmente el de organizadores y orientadores de las luchas de las masas. En cuanto a su participación en el Gobierno, la concebimos, en todo lo que tiene que ver en las tareas concretas, con estricta sujeción a las decisiones que tomen los respectivos órganos colegiados como el Comité Económico de Ministros y los Jefes Administrativos. El Comité Nacional de la Unidad Popular, principalmente por iniciativa suya mantiene con Ud. un permanente contacto, enteramente justo en el plano del intercambio de opiniones sobre orientación política. Esta es una buena práctica. No obstante, nos parece que en el Presidente de la República y en su Consejo de Gabinete se debe concentrar la suma de las decisiones gubernamentales. Este es un procedimiento más operativo.

En el presente, el deber fundamental de los partidos es movilizar a las masas en contra de la sedición y en apoyo a los nuevos rumbos de la política económica y financiera del Gobierno, en estrecho vínculo con las tareas básicas para impulsar el proceso revolucionario.

Correcta orientación económica

La política económica aplicada en el primer año de Gobierno dio sus resultados positivos. Permitió una redistribución de los ingresos, un incremento de la producción industrial y del producto bruto y una disminución vertical de la cesantía, todo lo cual nada tiene que ver con el caos y el desastre económico de que habla el enemigo. Pero había que ajustar aquella política a las nuevas condiciones creadas por diversos factores de orden nacional e internacional que el Gobierno ha dado a conocer con franqueza y claridad.

Las nuevas orientaciones económicas y financieras son por completo correctas y están dirigidas a sanear la economía en un nuevo nivel de precios y

3008 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

de remuneraciones, a afianzar la política de redistribución de los ingresos en favor de los trabajadores, a lograr que por fin paguen los poderosos y a estimular la producción.

Esta política está llamada a tener éxito tanto más cuanto que el Gobierno ha fijado los nuevos precios agrícolas antes de las siembras de primavera y de los barbechos para el trigo del próximo año, da paso a las alzas inevitables para que todas ellas sean compensadas en los reajustes y, en los meses venideros, afluirán al mercado los productos de chacarería y hortalizas que en el invierno escasean tradicionalmente y suben de precios.

En vista de estos alcances y del contenido de clase que tienen los nuevos rumbos del Gobierno en el orden económico y financiero es de prever una mayor resistencia opositora y una agudización de la lucha de clases.

Mezquinos intereses de la oposición

Complica el panorama la proximidad de elecciones parlamentarias, puesto que los partidos de oposición colocan sus mezquinos intereses por sobre los del país y guían sus actos tras el afán de agravar la situación para pescar votos a río revuelto. Su objetivo confeso es ganar los dos tercios en ambas ramas del Parlamento, para enseguida ponerle la pistola al pecho al Poder Ejecutivo, no dejarlo gobernar y exigirle la entrega del Mando Supremo de la Nación.

Tenemos plena confianza que el pueblo frustrará tales intentos reaccionarios. En los próximos días, el Partido Federado de la Unidad Popular presentará sus listas de candidatos y enfrentará la batalla electoral del 73 con toda energía y voluntad de triunfo.

Ud. afirma que el triunfo del Partido Federado de la Unidad Popular en las elecciones de marzo próximo “permitirá impulsar los cambios institucionales y legales para sacar al país del subdesarrollo y acabará con el poder obstaculizador de una oposición revanchista que ampara los intereses de la reacción y llega a favorecer los planes del imperialismo”.

Nosotros también pensamos que ello “permitirá impulsar” tales cambios; pero, en definitiva, creemos que éstos se harán realidad si, ante todo, modificamos la correlación de fuerzas a nuestro favor y hacemos más conciencia acerca de la necesidad de reemplazar el actual Estado de Derecho por otro superior.

La mentira: arma de la Derecha

Resumiendo, las tareas principales dirigidas a modificar la correlación de fuerzas consisten, según nuestra opinión, en la aplicación de una política firme contra los sediciosos, en hacer nuevos y más eficientes esfuerzos para aumentar la producción y en lograr que todos los trabajadores y las capas medias apoyen resueltamente la política económica y financiera del Gobierno.

Tal política favorece claramente a estos sectores que constituyen la mayoría del país. El enemigo trata de presentar las cosas al revés de lo que son. Miente cuando afirma que los tributos gravarán más a los trabajadores y al pueblo en general. Miente cuando afirma que se castigarán con mayores impuestos los depósitos de ahorros y las utilidades de los ahorrantes. Miente cuando sostiene que se aplicarán tributos a los modestos propietarios de casas o departamentos acogidos al DFL 2. Todos estos embustes hay que echarlos abajo. Como suele decirse, la mentira tiene las patitas cortas. La verdad puede alcanzarla e imponerse si damos con fuerza esta pelea y mejoramos la publicidad de la Unidad Popular y del Gobierno.

En los sindicatos, en todas las organizaciones populares, en todos los sitios de trabajo y residencia hay que explicar urgentemente el proyecto de reajustes, los cambios en el sistema tributario, las nuevas orientaciones de la política de Gobierno.

La decisión de la mayoría de la Cámara de darle simple urgencia al despacho del proyecto de reajuste es una maniobra que va contra los intereses de todos los trabajadores, cualquiera sea su ideología, puesto que amenaza con dilatar su pago en tres o cuatro meses.

Podemos y debemos ganar esta batalla porque estamos en buen caballo.

Apoyamos resueltamente las consignas que la Unidad Popular ha levantado para la gigantesca movilización de masas del 4 de septiembre. No podemos permitir que el enemigo salga con las suyas y lleve al país al retroceso, la anarquía o la guerra fratricida.

Tenemos confianza, compañero Presidente, que con el apoyo y una mayor participación del pueblo en todas las instancias y en todos los frentes, Ud. y su Gabinete saldrán adelante.

Lo saluda fraternalmente:

Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista.

Clodomiro Almeyda (Partido Socialista, Ministro de Relaciones Exteriores): Carta al Gobierno de la República Argentina sobre el asilo político concedido a ciudadanos argentinos escapados de la prisión de Trelew

(6 de septiembre de 1972)

“Santiago, 6 de septiembre de 1972.

Señor Encargado de Negocios:

Tengo el honor de referirme a la nota, de fecha 27 de agosto pasado, por la cual el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina dio respuesta a la que el suscrito entregara a Vuestra Señoría el 25 del mismo mes.

Ambas notas tienen relación con la determinación adoptada por mi Gobierno respecto a las 10 personas que llegaron a Chile y solicitaron asilo territorial, después de apoderarse, el 15 de agosto pasado, de una aeronave comercial argentina.

Concordará Vuestra Señoría en que, en esa oportunidad, mi Gobierno agotó sus esfuerzos para evitar cualquier incidente, de imprevisibles consecuencias, derivado de dicho apoderamiento, obteniendo en un plazo muy breve que fueran devueltos a ese país amigo tanto la aeronave como sus pasajeros y tripulación.

La nota que contesto ha sido estudiada con el mayor detenimiento y consideración por mi Gobierno y, al respecto, cúpleme manifestar a Vuestra Señoría lo siguiente:

1.- Estima el Gobierno argentino que, en el presente caso, el de Chile ha desconocido un tratado internacional, concretamente que ha dejado de cumplir la Convención de Extradición de 1933, vigente entre Argentina y Chile. Mi Gobierno disiente de esta aseveración y considera que el examen riguroso de los hechos y la exacta interpretación de las normas aplicables demuestran que el Gobierno de Chile ha cumplido, también en esta oportunidad, y de acuerdo a su tradición inalterable, sus obligaciones jurídico-internacionales, en particular la Convención de Montevideo de 1933, y las reglas pertinentes de su propio derecho interno.

La nota que contesto afirma que hubo incumplimiento, por parte del Gobierno de Chile, del artículo X de la Convención de Montevideo, en cuanto no ordenó la inmediata detención de los inculcados, de acuerdo con la solicitud formulada por el Gobierno de Vuestra Señoría.

Cabe precisar, al respecto, que el objetivo perseguido por la norma a que se ha hecho referencia es el de asegurar la persona del inculcado mientras se dicta una resolución competente. Esa finalidad aparece cumplida, desde luego, con la decisión administrativa del Gobierno de Chile, que actuando con-

forme a la legislación nacional, concordante con lo dispuesto en el artículo X de la Convención de Montevideo, había resuelto la retención de las personas aludidas, en tanto adoptaba una resolución sobre su solicitud de asilo territorial.

Ahora bien, una medida de seguridad provisional como la señalada, lógicamente debía cesar en el instante mismo en que Chile concediera asilo político a dichas personas. Con esta determinación adoptada por el Gobierno chileno se configuró la excepción indicada en la letra e) del artículo III de la Convención de Montevideo, que hace improcedente la extradición cuando se trata de delitos políticos o conexos con los mismos.

2.- Más adelante, sostiene el Gobierno argentino, que, en el Derecho chileno, sólo a las autoridades judiciales compete resolver si corresponde o no conceder la extradición solicitada por otro Estado, aludiendo a los artículos 644 y siguientes del Código de Procedimiento Penal de Chile.

Aunque esta materia es propia del ordenamiento jurídico interno chileno, y su interpretación y ejecución competen a los órganos del Estado de Chile, cúmplame precisar ante Vuestra Señoría la sistemática de las disposiciones que reglamentan la extradición pasiva y el asilo territorial con el objeto de esclarecer las decisiones tomadas por mi Gobierno.

Existe en mi país todo un procedimiento con exclusiva competencia de las autoridades del Poder Ejecutivo, para decidir la admisión, la residencia, el otorgamiento de asilo político o la expulsión de ciudadanos extranjeros. Estas atribuciones, y otras más, corresponden al Poder Ejecutivo, conforme a la Constitución Política del Estado, a la Ley N° 13.353 y a su Reglamento N° 5.021 del Ministerio del Interior, de 1959.

La autoridad puede negarse a aceptar el ingreso de una persona sometida a proceso o condena por delitos comunes, o proceder a su expulsión del país.

En el caso de las personas procesadas o condenadas por delitos políticos, respecto de quienes se anuncie una petición de extradición, el Gobierno chileno puede concederle asilo territorial –calificando su responsabilidad como política–, con la cual hace improcedente el pedido de extradición por los hechos respectivos. Todo lo anterior puede ser resuelto por la decisión soberana del Gobierno, y en la oportunidad que éste considere adecuada, mientras no se abra la instancia judicial a que seguidamente me refiero. Efectivamente, puede también el Gobierno chileno, en estos casos, no ejercer estas facultades político-administrativas, transmitiendo la petición formal de extradición al tribunal competente, aplicándose –entonces– el procedimiento previsto en los artículos 644 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Sólo en esta última situación se origina la vía judicial y, al abrirse esta instancia, queda excluido en adelante cualquier pronunciamiento de la autoridad política.

La decisión de un órgano en materias que se encuentran dentro de sus atribuciones expresa la voluntad del Estado, que es unitaria. No cabe, por tanto, concebir que, a virtud de la decisión de otro órgano, pudiera imputarse también al Estado una voluntad contradictoria con la anterior, a menos que se trate, como es obvio, de una instancia de revisión o control expresamente estatuida. Por consiguiente, dentro del ordenamiento jurídico de mi país, en

las materias de extradición y asilo territorial, las competencias de los órganos judiciales y políticos son diversas y se aplican en situaciones distintas. De modo que el asilo territorial constituye esencialmente un acto de gobierno, de ejercicio de la soberanía, que sólo puede ser revocado por la autoridad que lo otorgó.

En suma, en este aspecto, y en lo pertinente al caso analizado, las normas del derecho chileno consagran el siguiente régimen: el otorgamiento del asilo territorial en resolución definitiva hace improcedente la extradición pasiva, precisamente por tratarse de delitos políticos o conexos con éstos; la concesión del asilo compete al Poder Ejecutivo y, si este Poder ejerce la facultad de otorgarlo definitivamente, no son aplicables los preceptos del Código de Procedimiento penal.

Es sabido que respecto del procedimiento de la extradición pasiva existen en el derecho comparado diversos sistemas: hay Estados en que su derecho obliga al Gobierno a someterse a la decisión judicial; hay otros en que si bien opera un procedimiento jurisdiccional, éste no obliga al Poder Ejecutivo a entregar al afectado en caso de decisión afirmativa, pues el Gobierno resuelve en última instancia; existen sistemas en que la decisión judicial no es obligatoria en caso alguno; y hay también sistemas en que las autoridades judiciales están excluidas de todo pronunciamiento.

Pues bien, el sistema del derecho chileno –en especial tratándose del enlace entre los institutos del asilo político y de la extradición pasiva– es de la naturaleza particular ya indicada. Este régimen guarda, por lo demás, plena armonía con lo dispuesto en el artículo 8° de la Convención de Montevideo.

3.– Manifiesta el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina que la denegación de la extradición no puede decidirse en Chile sin que se cumpla previamente el procedimiento previsto en la citada Convención.

Sobre este particular, cabe hacer presente que aquélla regula, fundamentalmente, aspectos sustantivos de la extradición. En orden a procedimiento, contiene sólo un mínimo normativo: algunas reglas sobre detención provisional, respecto de documentos que deben acompañarse con la petición formal, y otras relativas a los trámites subsiguientes a la concesión de la extradición. No reglamenta, propiamente, el procedimiento relativo a la forma en que adopta la decisión el Estado requerido y se remite a la legislación interna de éste: “El pedido de extradición será resuelto de acuerdo con la legislación interior del Estado requerido”, dice expresamente el artículo VIII.

Si la Convención de 1933 no consulta un procedimiento previo y necesario; y si la concesión definitiva del asilo territorial excluye la posibilidad de la extradición pasiva, resulta una conducta perfectamente conforme a ese tratado internacional adoptar una decisión tan pronto como se tengan los elementos que permitan al Estado apreciar la excepción atinente al delito político o conexo.

4.– En lo que respecta al modo de conectarse la concesión del asilo político con la puesta en ejecución de la Convención de Montevideo, considera mi Gobierno, conforme también a lo ya expresado, que aquella decisión no

significa enervar la aplicación de dicha Convención, ya que, en ese caso, se excluye la extradición, pero se cumplen las normas convencionales, precisamente el artículo III, en su excepción de la letra e) y el artículo IV que estipula: “La apreciación del carácter de las excepciones a que se refiere el artículo anterior corresponde exclusivamente al Estado requerido”.

5.- Expresa la nota argentina que de la comunicación del señor Ministro del Interior de Chile se desprende un juicio lesivo para la justicia argentina, ya que si ésta procesa a delincuentes y reclama su extradición cuando se refugian en un país amigo, lo hace sobre bases jurídicamente serias.

En mi nota, de 25 de agosto, dirigida a Vuestra Señoría, se manifestó que, a juicio del Ministerio del Interior de Chile, “del estudio de los antecedentes emanados de las autoridades argentinas y de los recogidos por los de nuestro país, aparecen datos que permiten concebir dudas razonables de que los delitos que se atribuyen a las personas afectadas puedan ser calificados de comunes y, por el contrario, el Gobierno aprecia la existencia de hechos constitutivos de delitos políticos y de otros conexos con los mismos”.

La nota del 27 de agosto alude a la primera parte de la proposición citada. Esa primera idea constituye expresión del respeto que nos merecen las decisiones de los tribunales argentinos y las actuaciones de sus autoridades del Gobierno. Sin embargo, está en la misma naturaleza del asilo territorial la posibilidad de diferentes apreciaciones sobre el carácter de los hechos que pueden darle origen y, por tanto, corresponde al Estado asilante decidir conforme a su propia calificación.

Como, con razón, expresó la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre el Asilo Territorial (Resolución 2312, de 1967), el otorgamiento de asilo por un Estado “es un acto pacífico y humanitario y que, como tal, no puede ser considerado como inamistoso por ningún otro Estado”. Y, dentro del ámbito continental, la Convención sobre Asilo Territorial suscrita en Caracas por Chile y Argentina y que consagra los principios generalmente aceptados sobre la materia, expresa textualmente que “todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno” (artículo I).

Si el principio antedicho constituye una expresión general de la comunidad internacional, con cuánta mayor razón él se aplica a las relaciones entre Argentina y Chile, cuya amistad se remonta a los albores de la gesta emancipadora.

6.- La decisión de hacer salir a las personas asiladas del territorio nacional, fue una medida posterior a la concesión misma del asilo. Ella se adoptó, dando aviso al Gobierno argentino, conforme a las normas internacional y con el objeto, como lo expresara el Presidente de Chile, en su declaración pública de 25 de agosto último, de evitar “que aún del modo más indirecto, puedan manifestarse en Chile actividades que pudieran estimarse como políticas, dirigidas hacia asuntos internos de Argentina”.

7.- En la comunicación que contesto se recuerda, con justeza, que en la historia de las vinculaciones entre Chile y Argentina, ambos Estados se han

atenido estricta y permanentemente al cumplimiento de los tratados vigentes y han podido destacar, con orgullo, ante la comunidad internacional, el ejemplo de sus relaciones, siempre regidas por el derecho internacional, y en las que la norma “*pacta sunt servanda*” fue regla inexorable de conducta. Agrega que el Gobierno argentino está convencido que el mejor y más seguro modo de consolidar nuestras relaciones es la fiel observancia de los tratados que nos ligan.

Comparto plenamente los conceptos enunciados y la convicción antedicha. No podría ser de otra manera, tanto porque ellos corresponden a la realidad, cuando porque el principio de respeto de los tratados internacionales ha sido norma invariable de la política internacional de Chile.

Los antecedentes que he señalado y explicaciones que he dado en la presente nota, demuestran que mi Gobierno no se ha apartado de este principio y que ha dado cumplimiento a la Convención de Montevideo.

Parece innecesario agregar a Vuestra Señoría que la decisión adoptada por mi Gobierno en el caso preciso que nos ocupa, y que se fundamenta en los argumentos legales que he señalado, no constituye una política de orden general ni menos una práctica permanente que deba regir para casos futuros, los que serán siempre analizados de acuerdo con las circunstancias y en el contexto de las amistosas relaciones que deben existir con la República hermana de Argentina.

Lamenta profundamente el Gobierno que la divergencia de interpretaciones legales producida en torno a la extradición pasivo y al asilo político, haya causado desagrado al de la República Argentina. Por tratarse de una diferencia de apreciación motivada no por una contradicción de intereses sino por la forma de aplicar el referido derecho de asilo, espera mi Gobierno que ella será superada dentro del marco de las relaciones que unen a mi país con el de Vuestra Señoría.

Está cierto mi Gobierno que un episodio aislado, tan ingrato como imprevisible e involuntario, puede, a lo sumo, producir una circunstancial divergencia de opiniones jurídicas entre ambos Gobiernos; pero que, en ningún caso, alcanza a afectar la amistad que felizmente existe entre nuestras naciones, y que es voluntad decidida del Presidente de la República, del pueblo chileno y de su Gobierno, hacer cada día más estrechas y cordiales.

Me valgo de esta oportunidad para reiterar a Vuestra Señoría las seguridades de mi más distinguida consideración.

(Fdo.): Clodomiro Almeyda.

MIR: Informe de la Comisión Política al Comité Central Restringido sobre “la crisis de agosto”

(Documento Interno del 8 de septiembre de 1972)

Compañeros:

Hemos citado este C.C. Restringido para informarles acerca de los acontecimientos que se han precipitado en las últimas semanas. No citamos a un C.C. propiamente tal, para no desarticular el trabajo en los C.R. trayendo a Santiago más compañeros en una situación como ésta.

El informe será necesariamente extenso, pues, fuera de los acontecimientos vinculados a la crisis de agosto (de los que ustedes recibieron información periódica por medio de los boletines, pero que no analizamos ni discutimos), tendremos –por lo menos– que informarles y discutir sobre otros tres importantes problemas que se produjeron vertiginosamente en el mes de agosto: el análisis de los acontecimientos de Lo Hermida, la lucha en apoyo de los revolucionarios argentinos y la política de precios y salarios desarrollados por el Gobierno.

Más aún, sería difícil entender la nueva situación si no la analizamos estudiando la evolución de los acontecimientos desde la situación anterior (analizada en el pasado C.C. del 10 de agosto) hasta hoy.

La actividad que necesariamente desarrollamos este mes y el hecho de que aún estemos en plena “crisis de agosto”, nos obligan a realizar este informe improvisada y verbalmente, razón por la cual probablemente será débil en lo que a sistematización y rigor se refiere.

Más tarde, a partir de la grabación, trataremos de convertir este informe en un documento de discusión interna del partido.

El informe se extenderá, además, porque en él no sólo tenemos que analizar, evaluar y mostrar las perspectivas, sino también informarles acerca de una serie de antecedentes concretos que rodearon los acontecimientos, lo que evidentemente, al obligarnos a entrar en detalles, oscurece el análisis. Sin embargo, nos parece imprescindible para una mejor comprensión del análisis y la evaluación, que conozcan y manejen dichos elementos.

Abarcaremos los siguientes puntos:

- I. El modelo político de la UP en 1971
- II. Resultados de la política UP de 1971
- III. La política reformista para 1972
 - a) Síntesis del modelo reformista
 - b) Evolución de la política reformista 1972.

3016 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

- IV. Cuál fue la política de los revolucionarios en 1972
- V. Situación previa a la crisis de agosto
 - a) Clase dominante.
 - b) La Unidad Popular.
 - c) Otros aspectos de la situación
- VI. Evolución de la situación hasta la crisis de agosto
 - a) Las conversaciones entre el MIR y la UP.
 - b) Las conversaciones con el PDC.
 - c) Los hechos de Concepción.
 - d) Lo Hermida.
 - e) Hechos alrededor de los revolucionarios argentinos.
 - f) El problema de las alzas.
 - g) Conclusión.
- VII. Evolución de la crisis de agosto
 - a) Asonada de los comerciantes.
 - b) Marcha en Concepción.
 - c) Asonada del viernes en Santiago (1° de septiembre).
 - d) Marcha del 4 de septiembre.
 - e) Situación en este momento (8 de septiembre).
- VIII. La evaluación de la crisis
 - a) Factores constantes de la situación.
 - b) Factores precipitantes de la crisis.
 - c) Bloques en la clase dominante a que dio origen la crisis.
 - d) La debilidad del Gobierno.
 - e) La perspectiva.
- IX. Políticas planteadas en la izquierda como salidas a la crisis
 - a) La política reformista.
 - b) Las corrientes revolucionarias.
- X. Algunas enseñanzas de la crisis de agosto
- XI. Precisión del carácter de esta crisis
- XII. Sobre la actitud de la organización ante la crisis

I. El modelo político de la UP en 1971

No creo que sea necesario explayarse en ésto. Sin embargo, es importante observar cómo fue madurando una situación que comienza a estallar en agosto. Para ello hay que ver, al menos en general, sus raíces en 1971.

- 1. La UP centró su estrategia fundamentalmente en:
 - No golpear al conjunto de la burguesía.
 - No incorporar ni unir al conjunto del pueblo al no resolver los problemas de todos los sectores.

- No enfrentar la superestructura política e institucional del sistema.
 - 2. Esto llevó de inmediato a una situación de debilidad del Gobierno y la UP y de fortaleza relativa de la clase dominante.
 - 3. Deben destacarse tres resultados que van a hacerse después críticos:
 - a) Se acumuló una crisis económica que entendemos que en sus causas y rasgos generales ustedes manejan; aumento de la producción, aumento del excedente en manos del capitalista, ruptura del ciclo económico normal –en cualquier sistema económico– debido a la no inversión de ese excedente por razones políticas, y aumento del consumo a partir de colocar ese excedente a competir en el mercado y, en consecuencia, enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda, y así inflación y desabastecimiento.
 - b) La división del pueblo.,
 - c) La división de la izquierda y los revolucionarios.
- Con estos tres puntos estamos apuntando a las razones que hoy dificultan un “remontamiento” del proceso.

II. Resultado de la política UP en 1971

En forma sintética, se trata del desarrollo en Chile de una situación que hemos analizado como la de la creación en septiembre de 1970 de una “situación pre-revolucionaria” que no madura a “revolucionaria”, pero que todavía no revierte a la “normalidad”.

Se abre así el abanico de la nueva situación, que podríamos caracterizar para 1972 a través de 8 factores:

a) Agudización de la lucha de clases. Esto debe entenderse no esquemáticamente. Enorme aumento de los enfrentamientos y de la agudización de esos enfrentamientos sociales y políticos, en todos los niveles tanto cualitativa como cuantitativamente.

b) Lo que en febrero llamamos “extensión a social del proceso” y en otros momentos hemos llamado “autonomización relativa de las clases”. Tiene a referirse a la incorporación de cada vez más contingentes y capas de distintos sectores sociales a la actividad política. A la vez que a la organización, cohesión y búsqueda de representación directa de sus intereses, etc.

c) Autonomización relativa y cohesión relativa de importantes sectores de la pequeña burguesía, especialmente propietaria y también asalariada, urbana y rural (“enardecimiento”).

d) Autonomización relativa de los militares (entendemos que estos conceptos fueron explicados en el C.C. anterior).

e) Fortaleza de la clase dominante, a la vez que una feroz lucha por el liderazgo que los diferentes sectores libran en su interior (por lo tanto crisis interna).

f) Debilidad del Gobierno y de la UP.

g) División de la izquierda, división de los revolucionarios y división del pueblo.

h) Contradicción permanente e incluso en momento pasando a primer plano –propia del sistema capitalista y de cualquier sistema social, pero aquí

3018 *LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)*

agudizada- entre el aparato del Estado y el movimiento de masas (explicada en el C.C. de marzo).

Todo esto nadando en una crisis económica –muchas veces analizada-, en una inestabilidad del sistema, entendido como la inestabilidad del Gobierno, de la inestabilidad de las alianzas políticas, de la inestabilidad de la relación entre el movimiento de masas y los partidos; es decir, una inestabilidad en casi todos los planos.

III. La política reformista para 1972

a) Síntesis del modelo reformista

Aquí interesa destacar cómo frente a la situación anterior, se fueron levantando como salida diversos modelos políticos. Todas las fuerzas políticas de la izquierda reconocían los factores antes enumerados aunque con diversos ángulos de análisis y matices, y fueron levantando diversos modelos. La política reformista en esencia consistió en, primero, intentar poner el ya existente capitalismo de Estado al servicio de sectores de clase dominante; segundo, en la mantención y sujeción al aparato institucional burgués como tal; tercero, en buscar alianzas con fuerzas de la burguesía (de sus representantes políticos: es decir, el PDC). Freno por tanto a la movilización y las aspiraciones del pueblo.

Desde allí se dividen los reformistas en dos sectores: los reformistas inconsecuentes y los estalinistas; por cuanto el freno lleva necesariamente a reprimir al movimiento de masas en ascenso y mientras unos no lo quieren admitir los otros lo impulsan.

Básicamente buscan la fortaleza que no tienen, a través de alianzas con la burguesía en el seno del aparato institucional (Congreso) y en el aparato burocrático del Estado, por medio de alianzas explícitas o implícitas con los militares. Esto a través de entendimientos con los partidos políticos, dando también garantías a los empresarios, si bien es conveniente precisar que no se plantearon la alianza directa con los empresarios, pero sí lo hicieron directamente con los representantes políticos de la clase dominante (DC).

b) Evolución de la política reformista durante 1972

Aquí hay muchos matices discutibles y mucho de interpretación, pero es bueno ir precisando un modelo interpretativo del comportamiento del reformismo.

Al parecer sectores importantes del PC (sectores “más” reformistas) comienzan, desde fines de diciembre de 1971, a plantearse el modelo explícitamente formulado por Millas y Teitelboim en junio. (Durante el año 71 hay una pugna dentro del PC y del conjunto de la UP, pero aquí nos interesa la de los comunistas). Posteriormente, a fines de diciembre, un sector se decide y realiza un primer intento de plantear su política de combate a las políticas

revolucionarias y de búsqueda de alianzas explícitas y públicas con la DC. En el mes de enero, después de las elecciones de Linares, lo impulsan decididamente. A partir de ese momento se encuentran con dificultades en diferentes planos:

- En primer lugar, con resistencias en el seno mismo del PC.
- En segundo lugar, con diferencias en la UP.
- En tercer lugar, con dificultades con los partidos de la burguesía que no muestran “comprensión” para estas políticas.
- También con el movimiento de masas, que no estaba todavía “ablandando” en función de un esquema reformista. Se les había ofrecido una revolución y ahora había que frenarla y transformarla en otra cosa.

Debido a ello, estos sectores del PC se repliegan durante los meses de enero, febrero y marzo hasta los primeros días de abril. En este último mes hay dos plenos del PC: uno público, en el cual se enfrentan las dos corrientes y no se logra imponer una sobre la otra, y otro privado, que se realiza, más o menos, en el período en que estábamos conversando nosotros con el PC, en el cual triunfa la política más reformista. En ese momento (abril-mayo) el PC comienza a crear las condiciones para la conciliación y el freno, cuyos resultados hoy estamos midiendo.

- En primer lugar, busca establecer una alianza más estrecha con Allende, crear dentro de la UP un eje Allende-PC, que sólo logra afianzarse públicamente a partir de la carta pública de Allende sobre la Asamblea del Pueblo, pero es evidente que ésta existe desde antes.

- En segundo lugar, intenta someter al PS a sus posiciones, lo que logra en alguna medida durante las elecciones de la CUT, paralelamente a la prosecución de estas medidas está dando un cerrado, inescrupuloso y descarado ataque contra la Izquierda Revolucionaria, que desencadena en definitiva y como nunca a partir de las elecciones de la CUT (un poco antes, se morigera luego con las conversaciones y luego vuelve a la ofensiva).

- Desde esas posiciones busca, entonces, un grado de alianza con la DC y se abren públicamente las conversaciones UP-DC. Si bien estas conversaciones fracasan desde el punto de vista de su estridencia original y formalidad pública, la verdad es que se mantienen hasta hace muy poco a través del Parlamento (a nivel casi público, puesto que lo advierten públicamente). De este modo, tienen conversaciones periódicas por intermedio de los parlamentarios, especialmente en el Senado, sobre las mismas cuestiones que se discutieron cuando constituyeron las comisiones bilaterales.

- Más todavía, desde allí el PC ya logra tomar el control de la UP y se comienza a hablar del “golpe de timón”, de la “hegemonía” del PC dentro del Gobierno donde imponen sus políticas.

- Ofrecen un modelo político que fue analizado por nosotros en una declaración del Secretariado Nacional, publicada internamente y en los diarios (inserción en “La Tercera”). Todo esto señala cómo el PC fue configurando el modelo político de “ultra-izquierda – ultra-derecha”; luego cómo fueron buscando las alianzas con la burguesía, y cómo entraron a ofrecer garantías a sectores de la burguesía empresarial. Ya el 5 de junio, O. Millas podía de-

cirlo públicamente. Para ese entonces el sector “más” reformista había podido resolver la amplia gama de problemas anteriores, cuestión requerida para iniciar esa determinada política. De este modo el PC pudo abrir el combate virulento y ciego contra el MIR; pues con su modelo político Patria y Libertad y el MIR aparecían como los dos grandes elementos antinómicos al “proceso”, entre ellos se abría una “franja democrática y constructiva”, a partir de la cual era posible golpear fuertemente al MIR. Esto es lo que el PC comienza a realizar y esa es la situación que antecede a la crisis. El PC controla el manejo del movimiento de masas con el aparato policial y controla, además, las relaciones con la burguesía y el imperialismo a través del Ministerio de Hacienda (O. Millas). Así “el modelo Millas” tiene ya condiciones favorables para comenzar a operar, y lo hace. En cuanto a los resultados, como veremos más adelante, al mes y medio casi se cayó el Gobierno. Ese fue el resultado final de la política reformista ejecutada como nunca y como nunca tan claramente expuesta por ellos, con absoluta hegemonía en el Gobierno y en la UP.

IV.Cuál fue la política de los revolucionarios en 1972

Se verá la política de los revolucionarios, entendiendo las corrientes que están “dentro y fuera de la UP”. Posteriormente vamos a hacer distinguos entre los que llamamos “vacilantes” y los que llamamos “consecuentes”, pero por ahora hablaremos en general de la política de “los revolucionarios”.

Entiendo que en el terreno económico son conocidas aquí las posiciones que se plantearon:

- No someterse al poder económico y político de la burguesía; tratar de canalizar a la inversión ese excedente económico no invertido, a través de la expropiación y del control obrero; tanto en el campo como en la ciudad, golpear al conjunto de la clase dominante a partir de movilizaciones del pueblo. Esta formulación programática fue sostenida también por corrientes de la UP dentro del “cónclave”.

- En segundo lugar, una formulación más precisa por parte nuestra en cuanto al tratamiento a dar a la Cámara Chilena de la Construcción; a la burguesía agraria; al conjunto de los sectores sociales que había que golpear y movilizar. La alianza del proletariado agrícola y urbano con aquellos que llamamos “pobres”, y el problema de levantar una actitud política que entregara fortaleza política con la cual enfrentar a la burguesía en todos los planos.

- En tercer lugar, comenzar a levantar la necesidad de resolver la contradicción entre el aparato burocrático del Estado y el movimiento de masas a favor del pueblo, a partir de lo que llamamos “tareas de poder”: consejos comunales de trabajadores (organizando a sectores que tradicionalmente no lo están, movilizandolos a sectores no “incorporados”). Incluso posteriormente –al elaborar más– observamos que a través de este mecanismo era posible incorporar a la pequeña burguesía bajo la conducción del proletariado agrícola y urbano. Entregando a estos consejos las tareas para resolver las reivindicaciones programáticas levantadas por cada uno del Estado, para que

–de acuerdo a la correlación de fuerzas– lograran estos sectores, la unidad de ellos y a partir de ellos el control del aparato ir constituyéndose en embriones de poder.

– En cuarto lugar, planteamos la reagrupación de las fuerzas revolucionarias, cuestión que con cierta lentitud comenzó a mostrar sus primeros resultados en Concepción, más tarde –y en forma larvaria también– en Santiago y otras provincias. Pero todavía a un ritmo lento, un tanto endeble y “por arriba”.

– En quinto lugar, levantamos “el combate contra el reformismo”, batalla en la que hemos sido combatientes solitarios pero que continuamos y continuaremos dando, ya que entendemos que nada de lo anterior puede darse sin combatir las políticas reformistas.

Esto sería en términos generales, el cuadro anterior a la crisis de agosto. Recomendaría que se utilicen –a falta de más documentos internos– algunos documentos públicos (buscando encontrar allí algunas precisiones conceptuales) como: la entrevista de “Chile Hoy” que pretende señalar con cierta precisión la ubicación del MIR con respecto al Gobierno (no en su titular, que fue una “maña” de los editores de la revista); la diferencia existente entre el combate contra todos los militantes del PC y aquel que se da contra su política reformista; la valoración precisa que hacemos del Gobierno (8). También puede usarse la conferencia de prensa sobre los sucesos de Lo Hermita y los documentos anexos al libro “Lo Hermida, la cara más fea del Reformismo”, que está listo este fin de semana y que trae las entrevistas de prensa, los discursos de los pobladores e incluso un epílogo, que creemos puede ser útil.

V. Situación previa a la crisis de agosto

En este punto seremos esquemáticos y sintéticos. Nos remitiremos al informe al C.C. pasado. Con todo, esto siempre será insuficiente y tendremos que aportar más adelante mayores elementos y documentos.

a) *Clase dominante:*

(En el C.C. pasado se presentó un documento escrito sobre este aspecto).

En la situación previa a la crisis la correlación de fuerzas la favorece ampliamente. Pero está dividida en dos convocatorias fundamentales que ya dibujamos en el C.C. pasado: la jarpista (con rasgos fascistas) y la freista (con rasgos más bien demagógico-populistas). Ambas luchan por obtener el liderazgo del conjunto de la clase dominante.

Ambas fracciones representan políticas distintas y no exactamente partidos políticos diferentes, puesto que ambas tienen tras ellas miembros destacados de los dos partidos. Este es el ordenamiento que se apreciaba antes de la crisis de agosto (y podrá no corresponder al de hoy). La primera con

una convocatoria a la pequeña burguesía, de tipo fascistoide y la segunda con una convocatoria a las capas medias, de tipo demagógico-populista. (Esto último se ha hecho mucho más evidente ahora). Aún así y por sobre sus divisiones, el conjunto de los representantes políticos de la clase dominante (que no necesariamente la representan directamente como clase) optaba entonces por la alternativa electoral de 1973 como meta.

En ese momento (C.C. anterior) nosotros distinguíamos un tercer sector en la clase dominante. Sosteníamos que además de estas dos convocatorias, existía una tercera que buscaba resolver “las cosas” antes de 1973. Que representaba a algunos sectores empresariales, que “El Mercurio” parecía estar mezclado y que también existía alguna participación yanqui. Igualmente participaba en ella Patria y Libertad, algunos sectores del PN y del PDC. Dijimos que estos sectores escapaban a las dos convocatorias anteriores, a esta aceptación del juego del 73 y definimos incluso con cierta precisión lo que buscaban. Sosteníamos que ella tenía menor gravitación, cuestión que ha variado, ya que han tomado una gravitación mayor en esta crisis (digo mayor, no superior al resto).

b) La Unidad Popular:

1. La debilidad del Gobierno era importante. La existencia de una crisis política debilitaba enormemente su base política de apoyo; la división del pueblo que con el alejamiento de capas pobres quebraba y debilitaba su base social de apoyo; una situación económica que lo golpeaba y prácticamente sólo le ofrecía un camino sin salida; una debilidad institucional enorme: Parlamento, Justicia, Ejército, aparato burocrático, se colocaban abiertamente en contra del Gobierno o le imponían poderosas condiciones, como era el caso de los militares.

2. La fortaleza y hegemonía del reformismo, ya analizadas.

3. Bajo la hegemonía del reformismo, una extensión cada vez mayor de la crisis UP con el crecimiento de las corrientes que sustentan posiciones más radicales. Me explico: en la cúspide cada vez mayor hegemonía reformista que logra también la hegemonía del Gobierno y, por debajo, una mancha que se extendía, abarcando mayores sectores que se acercaban a posiciones más radicales o iban cuestionando progresivamente los modelos reformistas, pero sin fuerte expresión en la cúspide y sin fortaleza ni cohesión entre sí.

c) Otros aspectos de la situación

– El “enardecimiento” de la pequeña burguesía (coherencia, autonomización, ya analizados).

– Una “relativa autonomía” de los militares. Ya en marzo tenían un ministro militar, en el cónclave casi se nombran cinco ministros militares, y ya la fuerza militar está identificada relativamente como una fuerza propia que condiciona su apoyo a Allende. A pesar de ello, dentro de la institución la

hegemonía estaba en los “no golpistas” (“constitucionalistas”), pero existiendo además un poderoso sector “golpista”, todavía minoritario pero con representación en la cúspide.

– Un fenómeno que destacábamos a partir de febrero; que denominábamos “extensión social” del conflicto y que algunos llaman “la crisis de representante-representado”: el hecho de que las clases someten a exigencias a los partidos y no se dejan conducir pasivamente por ellos. Esto proyecta un relativo grado de roces entre las clases y los partidos que las representan o, al menos, la exigencia de las clases de optar entre partidos, de exigir, influir o chantajear a los partidos políticos que aspiran a representarlas.

– El movimiento de masas –que también analizamos en el C.C. pasado– en un notorio ascenso de su actividad –particularizándose entonces en qué consistía ese ascenso sector por sector, cuantificando con cierta mesura, evitando exagerar y midiendo también los grados y niveles que tenía y cómo se expresaba). Allí destacábamos un fenómeno: que este ascenso se daba con una segunda connotación, un grado de desconfianza en el Gobierno y en la UP, que no le quitaba apoyo ni “clientela” política a esta última pero que, en cuanto a la resolución de sus problemas, la masa operaba por sí misma, restando una cuota de confianza entregada a la UP y ganando propia iniciativa.

– Por último, sin ser lo más importante desde el punto de vista político, pero siéndolo en la práctica, el MIR tuvo un repliegue interno bastante importante, con una discusión intensa y un reajuste orgánico interno. Cuestión que le restó un grado de eficiencia, en términos de presencia y respuesta, en los frentes durante el período de crisis. A la vez operábamos en un crecimiento de nuestra influencia entre las masas significativo e incluso en parte explosivo, en comparación con los resultados de las elecciones de la CUT. Además la política de ir conquistando sectores de la UP para una reagrupación revolucionaria de fuerzas iba teniendo éxito relativo, pero lentamente.

VI. Evolución de la situación hasta la crisis de agosto

Lo primero que habría que plantearse es cómo distintos hechos fueron cuestionando el esquema fundamental planteado por los reformistas.

a) *Las conversaciones entre el MIR y la UP*

Estas conversaciones expresaron dos cosas: un débil intento del sector “izquierdista” del PC por tratar de lograr un grado de entendimiento, de acuerdo con la Izquierda Revolucionaria, sector que fracasa al interior del PC siendo reemplazada su política, en el transcurso de las conversaciones, por otra que más bien hace un intento por utilizar al MIR y someterlo a sus políticas. Esto interesa en el sentido de que sectores del reformismo quisieron en un momento buscar un grado de sometimiento del MIR a sus políticas, fracasando en ella.

b) *Las conversaciones de la UP con el PDC*

Posteriormente abre conversaciones con la DC; intenta estridentemente “sumar fuerzas” y así “ganar” estabilidad para el Gobierno. Fracasa en ese grado, pero mantiene las conversaciones. En cualquier caso no obtiene el resultado esperado.

c) *Los hechos de Concepción*

Si bien ellos logran amarrar mucho más férreamente a Allende y, en cierta medida, al conjunto de la UP, a las políticas del PC, evidencian –por otro lado– y como nunca la crisis de la UP en su base.

d) *Lo Hermida*

En lo concreto, aquí, se llevó a la práctica un modelo reformista que había declarado que “la ultraizquierda” era un tumor para el proceso, externo a él, autonómico con “la convivencia” y “la democracia”; un modelo en el cual nosotros éramos “enemigos de la revolución”; en el cual se sostenía que, en el terreno de las clases, no había que hacer alianza con “los pobres” y más bien éstos eran “lumpen” o “poblada”.

Ese esquema reformista creó las condiciones para el exceso de estupidez stalinista de algunos. Nosotros no tenemos claro si lo de Lo Hermida fue planificado por el PC como tal, pero de no ser así en todo caso lo fue por un poderoso sector de PC, pues:

- En primer lugar, no se trata del error de dos “funcionarios”: hay un modelo reformista que permite esto, hay un importante sector del PC que lo planifica, y luego hay dos estúpidos que son los funcionarios que tenían que exagerar el error en lo concreto.

- Los antecedentes que tenemos, y que ustedes no conocieron en ese tiempo, nos dicen que, en segundo lugar, este fue un plan preparado por Daniel Vergara, Carlos Toro y Eduardo Paredes, que contempló también un intento para comprometer a Jaime Suárez.

- En tercer lugar, este plan contemplaba el allanamiento de Lo Hermida, para luego allanar el Nueva La Habana, en la misma noche: es decir, esto fue planificado, fría y calculadamente. No es solamente la premeditación de Lo Hermida, sino que hay mucho más que eso: es un plan escalonado que empezó en San Bernardo, siguió con Lo Hermida y que en la misma noche pretendió terminar en Nueva La Habana.

- En cuarto lugar, la configuración de este plan se da simultáneamente con la orden dada por el PC a sus militantes para que estudien al MIR como quien estudia una fuerza enemiga.

- Por último, el día antes de la conferencia de prensa, se plantea un intento de allanamiento y detención en contra nuestra. Incluso fuimos avisados de ello. Y fue consenso generalizado en el Gobierno que todo “fue una estu-

pidez del PC y de Carlos Toro". O sea, constituyó un intento de amedrentamiento o de algo más. Aprovechándose un procedimiento de rutina policial Carlos Toro montó una maniobra desde la oficina de la Dirección General de Investigaciones, no siendo ya Subdirector.

En definitiva, aquí tenemos expresada la ofensiva del reformismo en todos sus planos: el PC o su sector más reformista cree tener ya las condiciones necesarias para golpear definitivamente al MIR y a sectores radicalizados del pueblo. La verdad, es que el fracaso es rotundo, y que Lo Hermida constituye su primer gran error.

Algunas consecuencias se harán entonces evidentes:

1. El PC se quedó relativamente aislado de la UP. No creo que valga la pena que conozcan los detalles de cómo fue pero, en esencia, el PC lanzó una ofensiva inmediata y le exigió a todos los partidos de la UP que emitieran la siniestra declaración que se conoció entonces (6 de agosto). En ese mismo momento mayores antecedentes se iban acumulando y continuaba creciendo la repulsa general de cuadros de izquierda, de partidos, de masas, de movimiento obrero. La imagen que se había creado era tan siniestra y nuestra denuncia tan categórica, al mismo tiempo que no aparecía la "comprensión" DC que habían buscado durante meses que, en resumen, se les desarma el cuadro anterior y el PC queda relativamente aislado en la UP y como único responsable. En ese preciso instante sobreviene la "pirueta" de Allende, forzada por las circunstancias en que se encuentra. Quedando así el PC, públicamente, como masacrador.

2. Por otro lado, estamos nosotros que no dejamos de desenmascararlos, de denunciarlos públicamente para, finalmente, evidenciarlos como los responsables en la conferencia de prensa (1) y (2).

La evolución que tomaron los acontecimientos se encuentra en el folleto que está editándose. Lo recomendamos desde el punto de vista: es útil observar cuál es la forma de enfrentar al reformismo. Cómo se puede ser enormemente duro, agresivo, golpearlos con toda fortaleza cuando se va siguiendo una secuencia política y de masas ordenada. Queremos finalmente señalar que cuando un problema de este tipo se enfrenta con rigor y cuidado puede golpearse al reformismo hasta el extremo.

Consideren ustedes las primeras declaraciones nuestras, el petitorio de los pobladores, el hecho de que por primera vez una población masacrada se levante con voz política propia, como organismo censor que enfrenta, potencia a potencia, al Presidente de la República y a todos los partidos de la izquierda y la prensa, dando conferencias de prensa en la puerta de La Moneda, transformándose en tribunos que son escuchados porque se encuentran respaldados por un movimiento de masas y una situación objetiva y concreta. La labor del Regional Santiago permitió crear las condiciones de masas para dicha acción de los pobladores de Lo Hermida.

Planteamos todo esto, ya que a menudo el problema de la batalla contra el reformismo es confuso. Para nosotros no se trata de cuán "duro" se sea, sino de qué condiciones se crean para poder ser "duros". No existe ningún riesgo si se actúa, respaldado por el movimiento de masas y frente a cuestiones concretas y evidentes, con rigor y con cuidado.

Posteriormente, el funeral. Nuevamente el esfuerzo del Regional Santiago consigue una movilización notable (alrededor de 15.000 personas en un día de semana y cuando sólo se juntan entre 3 y 5 mil personas para actos similares).

Más tarde, se da la visita de Allende al campamento. Nuevamente hay que destacar la secuencia de petitorios y el enfrentamiento de los pobladores a Allende. Cuestión en la cual fue la importancia el trabajo de los compañeros. (Salvo la información del PCR –Bandera Roja– la asamblea fue un éxito).

A continuación la entrevista de los pobladores con Allende en La Moneda (donde los pobladores establecen una forma dura y exigente de relación sin llegar a ser groseros). El comportamiento que tuvieron en Investigaciones, donde exigen ver a los detenidos, donde se enfrentan con los directivos de Investigaciones, ganándose un respeto y un fuero. Finalmente, la Conferencia de Prensa que corona políticamente todo lo anterior. Considerando también las alianzas que se establecen con la IC, el PS e incluso a veces con el MAPU.

Creemos que todo ello constituye un modelo de manejo de situaciones que podría repetirse en otras condiciones adecuadas.

3. Se triza la alianza Allende-PC.

4. Se resiente la subordinación socialista al PC.

5. Aparecemos con voz independiente y respaldados por masas, por encima de las alianzas con otras fuerzas, como fuerza propia. A pesar de la avalancha de ataques de los primeros días se mantiene y se levanta una opinión y actitud independiente, que más tarde se irá extendiendo en alianzas con otros sectores. Cuestión que sólo puede darse a partir de la fortaleza y claridad con que estamos enfrentando el problema y, básicamente, a la reacción del movimiento de masas.

El problema de Lo Hermida más el problema de las alzas son fundamentales para entender lo que está ocurriendo hoy. Digamos que desde entonces comienza a resquebrajarse el modelo reformista triunfante en la UP. Que desde allí en adelante esa política comienza resentirse: la crisis UP aumenta; los roces de Allende con el PC son serios; las trizaduras entre el PS y el PC durante varios días son también serias; nuestra actitud se demuestra capaz de establecer alianzas con importantes sectores de la UP y de arrastrar a crecientes contingentes de masas en situaciones de este tipo; aparecen rasgos de independencia política del movimiento de masas (se dieron desfiles y marchas por Santiago gritando contra el Subsecretario del Interior, contra la represión reformista, contra el reformismo, cuestión que hasta aquí no se había producido). Esto tiene una connotación distinta a cualquier otro fenómeno de radicalización de masas: aparece un grado de enfrentamiento directo del movimiento de masas a los excesos de un gobierno reformista. Para el PC esto constituye un serio golpe. Probablemente no lo esperaban. Creían tener mucho mejor amarrado y controlado todo.

e) Hechos alrededor de los revolucionarios argentinos

Aquí se sumó otra vez el modelo reformista con la estupidez.

¿Cuál es la verdadera actitud del Gobierno? Busca desde el primer momento entenderse con Lanusse, devolver a los revolucionarios, llegando incluso a: prometerles que van a salir, en horas o a lo más días, libres y no les dicen que hay tribunales de justicia de por medio, que van a estar sometidos a una justicia que ellos no controlan. La verdad era, que lo más sencillo habría sido pedir en Pudahuel un cambio de avión para viajar a La Habana. Al otro día en la mañana Allende dice públicamente lo que no habían informado a los argentinos: que serían entregados a la justicia chilena, que no controlaban.

Esta vez logramos, igualmente, articular una buena política de masas y de alianzas (que fue también mérito del Regional Santiago), que consistió en reagrupar fuerzas con los regionales socialistas (3) y (4).

El Gobierno, además, no informó categóricamente que si los argentinos caían en manos de la justicia no había nada que hacer. Sabiéndolo, durante 48 horas, continuó afirmando que la justicia podía concederles incluso la libertad. No se dijo la verdad a los argentinos ni al Comité Político de la UP. Nosotros asegurábamos lo contrario y sólo entonces el Gobierno dejó de sostener esa solución.

Los argentinos fueron incomunicados y no se les informó de la situación durante varios días. Un miembro del C.C. del ERP tuvo conocimiento de la real actitud del Gobierno. Posteriormente este compañero pudo informar a los compañeros incomunicados, quienes se sorprenden al recibir la información de la verdadera situación en que se encuentran. Más tarde, se les ofrece como salida procesarlos en Chile, lo que rechazan. Finalmente, con la oposición del Gobierno se preparó una defensa legal independiente de la ofrecida por el Gobierno, basada en un juicio político a la dictadura de Lanusse y en demostrar el carácter político de los delitos imputados a los compañeros.

Todo esto, más la matanza de Trelew, la movilización callejera que realiza el Regional Santiago en conjunto con los regionales socialistas y de la Izquierda Cristiana y las movilizaciones en provincias (Concepción, Antofagasta, etc. . .), van creando las condiciones que obligan a Allende a optar por la salida positiva que se tomó. Es importante aclarar todo esto porque el problema del salvoconducto para los compañeros ha sido explicado por algunos como una decisión tomada por el Gobierno desde un principio, donde no hubo vacilaciones y donde la demora correspondió a que se dieron "un tiempo de estudio" para después conceder la salida. Las cosas, como hemos visto, no fueron así. Si por un lado la actitud del Gobierno corresponde a un modelo reformista, esta vez la estupidez se llama vacilación y tuvo un costo; los argentinos debieron salir fuera del país esa misma noche que llegaron. Así se habría ahorrado todo el conflicto político que tuvo que enfrentar después. Nadie lo habría podido recriminar de nada, pues se habría tomado la medida en nombre del resguardo a la seguridad de las personas. Pero hubo de esperar que llegaran dos peticiones para inicio de proceso de extradición y de detención preventiva, hubo de ofrecerse garantías mundiales de que serían entregados a la justicia chilena, para finalmente darles salvoconducto.

Este problema tuvo una segunda proyección, que se dio en relación con las FF.AA. Se sabe que es tradición que los problemas chileno-argentinos tengan una resonancia importante en las FF.AA. Nuestra Marina desde este punto de vista se desarrolla como fuerza militar en función de un posible conflicto con Argentina; nuestro Ejército se prepara también en alguna medida previendo posibles conflictos con Perú y Argentina. De este modo, las FF.AA. han sido tradicionalmente las que han estado preocupadas de los problemas fronterizos. El problema de las relaciones con Argentina y las prevenciones frente a posibles conflictos con ella son materias de cuidadoso estudio en nuestras academias de guerra. Así el potencial conflicto que creó Allende con Argentina y la precaria situación chilena, provocó algunas repercusiones en las FF.AA. Dichos problemas comenzaron a ser explotados lentamente por “El Mercurio” y “La Prensa”, sosteniendo que esa decisión de Allende habría “cuestionado la seguridad nacional”. Esperaron el discurso de Altamirano en Talca y dijeron que él prefería, antes que la “seguridad nacional”, el “internacionalismo proletario”. Esta campaña tenía un objetivo claro que era intentar provocar problema al Gobierno con las FF.AA. Lo que en cualquier caso complicó aún más el cuadro general.

f) El problema de las alzas

1. ¿Cuál es en lo fundamental la política reformista al respecto? La esencia de su política, analizada en sus propósitos finales, es dar garantías de precios y salarios a la burguesía. Buscando de este modo bajar los ingresos reales de los trabajadores y aumentar la cuota de plusvalía de los empresarios, para hacer más rentable la explotación capitalista en la industria y en el campo.

El segundo propósito de su política, que “El Mercurio” aplaude todos los días, es resolver el problema de desabastecimiento por la vía del aumento de los precios de los productos. Si hay poca carne, no se trata ni remotamente de racionarla, o sea, de distribuirla de acuerdo a algún mecanismo igualitario; se trata en el fondo y descarnadamente de “que coman los que tienen más plata”. Se sube el precio de la carne con lo cual sólo pueden consumirla los pocos que tienen un nivel de ingresos que se los permita. Se “soluciona” así el problema de desabastecimiento y del desequilibrio entre la oferta y la demanda, por la vía del aumento de los precios.

Hay muchas otras implicancias, pero lo fundamental en este plano es que en vez de “tomar” el excedente económico obtenido del aumento de la producción –hoy no invertido por la burguesía–, o sea, aumentar la capacidad productiva a través de la inversión de ese excedente por medio de la expropiación o del control de las empresas privadas, se prefiere solucionar el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda ofreciendo garantías de precios y salarios para que la burguesía se “tiente” e invierta ese excedente que hoy saca del país o lanza al mercado a competir con el consumo de las capas de más bajos ingresos.

2. Ahora bien, esta política no solamente atenta contra los intereses de los trabajadores; no solamente golpea duramente a los “pobres”, es decir,

aquellos sectores que no viven de un salario y por lo tanto no obtendrán reajuste, pero sí deberán pagar los altos precios; no solamente entrega garantías a la burguesía y dificulta seriamente el camino para golpear los intereses de la gran burguesía, con lo cual se prosterna en los hechos ante su poder económico; no sólo eso, sino que además el reformismo no obtuvo para nada los resultados esperados. La gran burguesía no aceptó esas garantías para someterse. No solamente no invirtió sino que incluso fue precisamente en ese momento cuando impulsó una fuerza ofensiva contra el Gobierno. El esquema, por lo tanto, no sólo era reformista, no sólo era antipopular, sino que además estaba políticamente fracasado.

3. Habría que agregar algunos detalles para que los compañeros conozcan mejor cómo se fue gestando la política de precios del Gobierno. Ella se originó en un grupo reducido de personeros de Gobierno que aplicaron en este problema la nueva fórmula en que el reformismo busca imponer sus políticas en el Gobierno: no se plantean objetivos reformistas sino que se los impone por la vía de hechos consumados y bajo otra fachada política o tecnócrata, para así someter a sectores vacilantes de la “izquierda” UP.

El objetivo de dar garantías a la burguesía, la forma de intentar resolver el desabastecimiento, esta política de no golpear en los hechos las bases de poder de la gran burguesía, sometiéndose en la práctica a su poder económico, no forzándola a invertir, no fue jamás así planteada explícitamente en la UP. El Gobierno partió de otro tipo de análisis (fundamentalmente tecnocrático).

1. El área social está desfinanciada, por lo tanto hay que subir los precios del área social. Esto conlleva consecuencias, pues, al subir los precios del área social –que fundamentalmente entrega a las industrias manufactureras insumos o productos semielaborados– hay que aumentar también los precios de los productos elaborados y terminados donde predominan los empresarios privados. (Aquí hicieron un débil intento de retringir un tanto los precios).

2. De hecho los costos ya han subido (por muchas razones: dólares, alza de precios de los insumos, etc. . .), por lo tanto hay un segundo margen que eleva los precios.

3. El tercer margen de alza de precios es explicado por Millas muy cuidadosamente sostiene que si antes (para colocar un ejemplo), los costos subían un 30% y se subían los precios en un 30%, se justificaba un reajuste posterior de un 30% en los salarios. Ahora bien, la novedad que él descubre es que, subiendo los salarios en un 30%, de hecho los precios vuelven posteriormente a subir en un 10 ó 15% (ya que los salarios son también un factor del costo). De ahí, lo “revolucionario” que el Gobierno propone: aumentar los precios, previendo esa futura alza, no en un 30 sino en un 45%.

De este modo, sumado el margen de desfinanciamiento del área social, más el margen del alza real de costos, más el margen de supuestos costos por salarios que iban a tener que subir posteriormente, se terminó configurando alzas cercanas al 100%.

Esto originó un fenómeno económico que no manejaban: el pánico que corresponde al fenómeno subjetivo de creer que las cosas se van a terminar,

lanzando así el público todo el dinero al mercado, con el cual la demanda crece mucho más de lo que ya estaba aumentada. De este modo se han tomado providencias de precios y salarios frente a un determinado equilibrio entre oferta y demanda, pero la gente saca ahora sus ahorros y los lanza de inmediato al consumo ante el temor del aumento acelerado de precios y la sensación de que todo va a terminarse. Así fue creado un clima de pánico en el consumo y de descontento enorme, como de verdad este país no veía hace muchos años, que la oposición explotó de inmediato.

Hasta aquí hemos analizado exclusivamente la política reformista como tal, ahora hay que sumarle la irracionalidad. No explicamos esto para que centren aquí el análisis del problema, pero es útil apreciar cómo a partir de un manejo tecnocrático y reformista es posible cometer enormes errores en política económica.

Destacados personeros reformistas del Gobierno discutieron la necesidad de elevar notoriamente los precios de los productos agropecuarios (alimentos) sobre la base de:

- Ya “no hay” latifundio, sólo existen “medianos” productores. (Disquisición que hacen en base a sus concepciones reformistas sobre la cuestión agraria).

- Hay un enorme déficit de productos agropecuarios en el mercado. Es necesario entonces estimular a los empresarios a la inversión y al aumento de la producción. Para ello, había que aumentar los precios de dichos productos en un margen importante.

De esta forma los tecnócratas decretaron alzas importantes a todos los productos agropecuarios que se consumían en este país. Pero aproximadamente sólo un 30% de dichos productos son producidos en Chile, el 70% restante es importado. Estos últimos sufrieron la devaluación del dólar y a los primeros se les quería dar un margen mayor de alza para que aumentaran la productividad. Sin embargo, la tecnocracia reformista no discriminó: subió los precios de todos los productos agropecuarios y así sumó el alza de los precios por la devaluación del dólar al alza para estimular al productor nacional. Es decir, le aplicó al productor australiano un estímulo económico que no recibe y al productor nacional la devaluación del dólar (lo que no tenía por qué hacer).

Pero no se detuvo allí, como había déficit presupuestario fiscal eliminó las bonificaciones de precios que abarataban los productos agropecuarios. De esta manera el alza de los alimentos (y a eso se refiere el MAPU en su primera declaración, donde adoptó una política un poco más radical que el resto, diciendo “se nos pasó la mano en algunas alzas”) que estaba estudiada sobre la base de un criterio de que el costo de la vida iba a subir entre un 45 y un 60% provocó que, sorprendentemente, fuera en realidad de un porcentaje que oscila entre un 100 y 119%. Ver (5) y (9).

g) Conclusión

Todo esto dio origen a fenómenos nuevos e importantes:

– Lo que hasta aquí nunca había aparecido en este Gobierno con esa magnitud: un enorme descontento del movimiento de masas. La masividad del descontento, de la protesta –que no es la de la “cacerola” ni la de la oposición– del pueblo, de gente de izquierda, de las JAP, de socialistas, comunistas, UP, independientes, pobladores, agrietó la relación entre el Gobierno y el pueblo.

– El conjunto de acontecimientos del mes de agosto hizo evidente un relativo fracaso del modelo reformista, con un aislamiento relativo del PC y de las políticas reformistas en la UP; un fracaso casi evidente a nivel de masas y al interior de la UP, con desmoralización, baja de espíritu, quiebre interno relativo y luego fricciones y roces dentro de la UP y públicamente con el MIR. Recuerden los titulares de “El Siglo” que dan además una impresión de quiebre definitivo en la izquierda, que la oposición aprovechó.

– Se hizo evidente también que la UP, como frente político organizado no funciona como tal desde el Cónclave. (Casi no existe el Comité Político Nacional de la UP). Si leen con calma la carta de Corvalán a Allende sobre la Asamblea del Pueblo, verán que ahí figura un claro intento de eliminar el comité político como organismo resolutorio planteando solamente, para cumplir esas tareas, al Gabinete y al Presidente. En estos momentos eso es una realidad: no existe dirección ni coordinación en el Gobierno, cada organismo funciona por sí mismo, cada personero, cada partido, cada sector, cada periodista o parlamentario, opera independiente y autónomamente.

– El fenómeno de las FF.AA.: la autonomización progresiva de que hablábamos antes persiste y, por otro lado, el crecimiento de los sectores golpistas prosigue lento pero seguro; fortalecidos por la impunidad de que gozan los conspiradores que estuvieron en el frustrado putsch de marzo. Estos continúan en las mismas posiciones de mando que antes tenían y se ven fortalecidos por el descontento y enardecimiento de oficiales y suboficiales (incluidos suboficiales de izquierda) a raíz de las alzas.

– La crisis es provocada por la clase dominante que adquiere conciencia de su fortaleza, vista la profundización de la crisis en la UP, y que además se ve sometida a un fenómeno puntual y coyuntural importante (que otro compañero explicará más extensamente después): el problema de la disputa por el liderazgo de la clase dominante se ve agudizado por la competencia electoral entre las candidaturas de Frei y Jarpa. A raíz de esto hubo momentos en que Frei y la DC –a través de “La Prensa”– quisieron aparecer como los más violentos y decididos líderes de la pequeña burguesía enardecida, a la vez que Jarpa quería mostrarse más moderado y ponderado. Es decir, invertían sus posiciones reales con el fin de extender su convocatoria a otras capas. Sin embargo, por momentos, Jarpa necesitaba mostrar –ante la presión de aquella pequeña burguesía enardecida– una posición más agresiva. Este es un fenómeno que hay que analizar con más cuidado, porque esta situación hizo que, por un momento, nos encontráramos un tanto desconcertados: parecía que Jarpa y un sector del PN no estaban embarcados en la asonada fascista. Hoy, se puede decir con certeza que, después de la muerte del carabinero en Concepción, está liderando la ofensiva reaccionaria. Lo que no está muy claro es su actitud al comienzo de la asonada del comercio.

VII. Evolución de las crisis de agosto

Analizaremos sólo en general los siguientes aspectos:

- a) Asonada de los comerciantes.
- b) Marcha en Concepción.
- c) Asonada del viernes en Santiago (1° de septiembre).
- d) Marcha del 4 de septiembre.
- e) Situación en este momento (8 de septiembre).

a) Asonada de los comerciantes

Al parecer originalmente ni el PN como tal, ni el PDC, en su conjunto, estuvieron interesados en provocar e impulsar la asonada del comercio. Más bien fueron sectores de los propios comerciantes, lo que corresponde a ese enardecimiento de la pequeña burguesía del que hablamos, con conducción explícita sólo aceptada por Patria y Libertad. Esa es la sintomatología que pesquizamos en los inicios, incluso hay declaraciones de la Juventud Nacional y de otros sectores, en que piden disculpas por los desmanes y donde “aseguran” que ellos no participaron en la asonada.

Es probable que la raíz fundamental de la asonada estuviera en el enardecimiento de la pequeña burguesía y que, en segundo lugar, fuera precipitada por sectores empresariales que tomaron la iniciativa. “El Siglo” denuncia una supuesta reunión, 48 horas antes de la asonada, entre Fontaine (Conf. Prod. y Comercio) y “El Mercurio”, cuyos acuerdos habrían sido consultados con Hamilton, Juan de Dios Carmona y entendemos que también Amunátegui, en el sentido de impulsar la asonada y combinarla con una ofensiva de “El Mercurio” ese lunes 21 de agosto. Nosotros tenemos también información en el mismo sentido. Así se explicaría la ruptura inesperada y unilateral de los acuerdos entre el comercio y el Gobierno, por Cumsille y compañía.

En segundo lugar, esa fue una asonada con notorios rasgos fascistas. Cualquiera sea la apreciación que se tenga acerca de la política predominante en la clase dominante, si es contrarrevolución, gorilismo, etc. . . , esa asonada, al menos, tuvo claros rasgos fascistas y no cabe confusión. Otra cosa es que esa sea la política que predomine en definitiva en la clase dominante.

En esa oportunidad, uno de los factores fundamentales que explican lo ocurrido es la fisura aparecida en la relación entre el Gobierno y las masas, a raíz de la política de alzas, que hizo que se plegaran enormes sectores que no estaban antes como participantes de las movilizaciones pero que descontentos se activaron.

El Gobierno agravó el problema al reaccionar no enfrentando el problema de fondo, ni reconociendo que él había provocado esa reacción masiva de descontento por su política de precios y salarios. No reconoció ese origen al problema y prefirió culpar exclusivamente “al fascismo” y acusando a un extenso sector social –como son los comerciantes, de “conspiradores”. Se negó a apoyarse en una movilización del pueblo en contra de ésta, que era una extensa movilización reaccionaria de una capa social, y prefirió usar, como for-

ma exclusiva de enfrentamiento a los comerciantes, el estilo burocrático de represión apoyándose en el aparato policial.

Eso no sólo les dio una imagen siniestra ante la opinión pública que llevó a una reacción airada y violenta de parte de la pequeña burguesía, incluso periférica a la UP, y de los comerciantes como era natural, sino que además el Gobierno se encontró con otra sorpresa que el reformismo todavía no comprendía y que recién entonces comenzó a entender: Carabineros por primera vez desobedece a las autoridades de Gobierno en Santiago, surgiendo así el primer intento de rebeldía de carabineros. Este problema va a ser enormemente grave algunos días después; pero ya en esa oportunidad el Gobierno comienza a recibir información de que problemas similares con carabineros se están dando en diferentes provincias. Si bien existían antecedentes que venían de tiempo atrás, el problema toma ahora y en Santiago una connotación que nunca había tenido. Hasta ese momento Carabineros a lo más se había “arrancado un poco para apalear miristas”, al decir de personeros de Gobierno, pero eso de desobedecer ante un desorden callejero evidente en contra del Gobierno, era una cuestión nueva y grave.

Ante esto, la reacción predominante en el Gobierno no fue apoyarse en el movimiento de masas y desde allí pasar a la ofensiva sino que, al contrario, fue fundamentalmente represiva. Al respecto, nosotros no estamos cuestionando los golpes que desde el aparato burocrático del Estado puedan darse en contra de la clase dominante y sus aliados; no es eso lo que se cuestiona, lo que cuestionamos es que el Gobierno no reconozca la raíz del problema en las alzas que exageradamente decretó y que no tome así las medidas necesarias para recuperar la confianza de las masas. Al no hacer esto, no puede apoyarse en el movimiento de masas. Queremos ser precisos: sería muy torpe de nuestra parte si levantáramos como problema fundamental que “no había que reprimir” a los comerciantes en huelga; no es esa nuestra forma de analizar la política del Gobierno. Nuestra crítica reside en la política de precios y salarios decretada por el Gobierno antes de la crisis y en la forma de enfrentar la crisis ese día, por no haber llamado al movimiento de masas a movilizarse, a enfrentar como fuerza social a esa pequeña burguesía enardecida. Por el contrario, en ese momento, el PC a través de O. Millas está insistentemente planteando que no hay problemas con la política de alzas porque “el reajuste va a resolver todo”, y “este es el reajuste más revolucionario” que se ha hecho nunca, y que estas “son alzas de precios revolucionarias” porque se “han protegido los intereses del pueblo”. (Entiendo que ustedes manejan nuestra política frente al reajuste, el que entre otras cosas, además de no ser discriminatorio no es tampoco automático. Sobre esto no nos referiremos porque fue analizado en el C.C. pasado y se encuentra en otros documentos). Ver (7).

Después de todo esto vienen movilizaciones del momiaje en distintas partes del país: realizan agresivas concentraciones en San Fernando, en Rancagua y en Valparaíso y una fundamentalmente DC en Concepción y Antofagasta. Se trata de la creación del clima a partir del cual se van creando las condiciones para una ofensiva en la cual los partidos políticos recuperen el

control y reconstruyan su unidad. Así, Moreno y Diez –expresión de la unidad de los partidos de la clase dominante– van recorriendo distintas provincias, realizando concentraciones en la que es notoria la agresividad contra el Gobierno y la estridente aparición de los “comandos Rolando Matus”.

b) Marcha en Concepción

En Concepción, el PN se planteó realizar una concentración para el miércoles 30 de agosto. Los compañeros socialistas y MAPU comienzan a plantearse la necesidad de realizar una movilización para impedir esa concentración. El MIR en ese momento estaba planteando la lucha contra las alzas y por la constitución de los consejos comunales al interior del “grupo de los cinco”, como cuestión fundamental. Para sorpresa nuestra, y de todos, el PC también comienza a plantear la idea de “impedir que los momios ocupen la calle”, si bien no emite declaraciones. De modo que, en los hechos está citada una concentración del PN y de hecho también está convocada para el mismo día otra, con el fin de impedir la anterior, por el “grupo de los cinco” más el PC esta vez.

El lunes 28, a través de informaciones, recibimos datos de que hay grupos sediciosos organizados que esperan provocar una situación nacional de caos y anarquía a partir de lo que ocurra en Concepción ese miércoles 30 de agosto.

El martes 29 a mediodía ya se sabe que el Intendente ha prohibido la concentración del PN y, para sorpresa de los conspiradores, el PN acepta la suspensión de la marcha (lo que probaría la existencia de vacilaciones por parte de los partidos políticos de la derecha en apoyar estas asonadas). Con ello les han impedido la creación de la situación objetiva a partir de la cual esperaban empujar a sectores de las FF.AA. a posiciones golpistas.

Sigue planteada entonces sólo la concentración de la izquierda. El martes en la tarde el General de Carabineros de Concepción, por sí y ante sí, en un gesto evidente de rebeldía emite una declaración en la cual plantea que Carabineros impedirá toda marcha o concentración (la concentración de la izquierda había sido implícitamente autorizada por el Intendente). Así van surgiendo algunos hechos que nos preocupan:

La cadena de “El Mercurio” habría publicado la amenaza de impedir la marcha de los momios, no en base a las primeras declaraciones hechas por los socialistas y el MAPU, sino sólo en base a una declaración del MUI –que publicó íntegramente– y no mencionan que el PS y el MAPU la apoyan. Distintas fuentes concluyen que hay intentos que buscan crear imagen y clima de caos a partir de lo que ocurra en Concepción.

El miércoles 30, a mediodía, Carabineros ha impedido una marcha de estudiantes diciendo que lo hacen por orden del Presidente de la República, lo que termina siendo falso.

Durante esos días estamos también recibiendo información que nos preocupa, sobre las FF.AA.: Oficiales que hablaban contra el Gobierno, descontento y desconcierto en los suboficiales.

Se realiza la concentración. Asisten 15 mil personas, hay una buena participación del MIR, está comprometido el PS e implícitamente el resto de la izquierda para permitir que Félix Hueltelaf hable como representante del MCR. La concentración está rodeada directamente por Carabineros. Se produce un incidente que le quita toda conducción a la concentración: el sectarismo PC opera en el sentido de impedir que hable Hueltelaf, a pesar de que lo está pidiendo gran parte de la concentración. Insistimos en esto porque hay responsabilidad del PC en las consecuencias posteriores, ellos crean las condiciones de anarquía en la concentración. Esta tiene que disolverse para evitar incidentes, originándose así a lo menos tres marchas: Un grupo comunista que se va a su local, un grupo socialista con parte FER se enfrenta al Partido Nacional, frente a su local; y un grupo socialista-MIR que se queda en la concentración ante la cual habla Hueltelaf (éste estima que un 40 a un 50% de la concentración se quedó). Finalmente, los socialistas se van a su local y en el camino les tiran piedras y les tocan cacerolas. A esto, responden tirando piedras y de alguna parte disparan. En ese momento llegan carabineros y los socialistas arrancan a su local. Carabineros asalta el local del PS disparando al cuerpo con bombas lacrimógenas, se produce el enfrentamiento y muere un carabiniere. Hay dos socialistas heridos en la cabeza con bombas lacrimógenas. El resto lo conocen a través de la prensa.

Pocas horas antes de esos hechos, socialistas, comunistas, MAPU, recorren en la tarde del miércoles 30, las comunas de Santiago pidiendo “hombreres en condiciones de empuñar armas para ir a defender Tomás Moro que va a ser asaltado por Patria y Libertad”. A nosotros que ya se nos había complicado bastante el cuadro con las noticias de Concepción, nos llega esta información, que no teníamos, que no nos parecía seria y efectivamente no lo era. Se produce una movilización hacia allá, en la que nosotros no participamos como organización.

En esos días y particularmente ese día, nosotros recibimos información de que hay sectores importantes del Gobierno, y Allende entre ellos, que se plantean la posibilidad de buscar como salida un Gabinete militar. Desde entonces estará planteado en lo concreto, como salida en todos los momentos de crisis, la posibilidad de un Gabinete militar.

En esos mismos días se reciben desordenadamente distintas informaciones del Gobierno que nos preocupan: Además de que Allende constituiría un Gabinete militar, que el PC se opone, que Altamirano ha renunciado a la Secretaría General del PS, que se han abierto las conversaciones del PC con el PDC a través del PR; que en el Gobierno existen personeros que incluso toman medidas concretas para una posible represión al MIR. (Frente a este cuadro emitimos algunos días después, una declaración del Secretariado Nacional anexa al final). Ver (10).

c) La asonada del viernes 1° de septiembre

El viernes al mediodía, se produce una marcha de la FESES. Se provocan algunos incidentes en el centro, y ahora la iniciativa la toma Patria y Li-

bertad, que ocupa las calles del centro con unos dos mil momios organizados, en grupos de 50 a 60 en cada esquina, con walkies talkies, por todo el centro de Santiago. Ocupan la calle impúnemente. Al mediodía después de los incidentes de los secundarios, carabineros se retiran del centro y quedan sólo los del tránsito. Carabineros abandona el centro a los momios. Durante aproximadamente una hora y media a dos horas, los momios dominan el centro, se corta el tránsito, se prenden fogatas; desde todas las ventanas de los edificios los empleados públicos les tiran papeles. No hay resistencia, ni policial ni de izquierda.

Hay relativa desesperación en el Gobierno. Comparan la situación a la del 2 de abril de 1957. Vacilan si decretar Estado de Emergencia y poner a las tropas de la guarnición de Santiago a cargo del orden en el centro. No tanto por la magnitud de los desórdenes, sino por la impunidad del momiaje y por el hecho que carabineros no está presente.

Por mientras, nosotros tenemos constancia de que unidades militares se trasladan al menos desde Valparaíso y que también hay desplazamientos de tropas al interior de Santiago. (Cuyo motivo real no conocimos).

Ante la impunidad del momiaje y la pasividad del Gobierno, estuvimos a punto de movilizar compañeros trabajadores a despejar el centro. Es útil que tengan la experiencia que tuvimos nosotros. Después de discutirlo llegamos a la conclusión, que en casos así es mejor no enviar masas al centro, salvo que se manden grupos grandes, bien organizados, bien delimitados y siempre que se controle la posibilidad de movilizar al resto permaneciendo en la periferia. El centro es una ratonera; eso es especialmente claro aquí en Santiago, creo que en Concepción, Antofagasta y Valparaíso, la situación debe ser similar. Nosotros no podemos pretender llevar enfrentamientos al centro. Si en un momento decidimos destacar un sector de pobladores por ejemplo, a un determinado frente, ese es un problema táctico, pero nadie puede confundirlo con una perspectiva estratégica.

Posteriormente nos conectamos con el Gobierno, la preocupación allí era importante, pero ya estaba resuelto que Carabineros iba a actuar.

Antes que esto se concretizara, grupos dispersos del FER, MIR y PS –según dicen predominantemente MIR– se organizaron espontáneamente y en número menor a un centenar alcanzaron a despejar Ahumada. Carabineros actuó, es verdad, con mucha energía y detuvo a más de 500 personas. Horas después comenzaron a llegar columnas de socialistas, que fueron devueltas.

Por mientras, en la tarde, en el cementerio de Concepción durante el funeral del carabinero se produce el incidente contra Suárez, donde es apedreado por el momiaje y dejado inerte por carabineros.

En esta asonada nosotros podemos asegurar que ya estaba participando el PN de lleno, e incluso lidereando por lo menos sus sectores más importantes; también fracciones del PDC se sacaron la careta –Hamilton en concreto– participando directamente en esta asonada, lo que no había ocurrido en los desórdenes del día del paro del comercio ni en los incidentes de Concepción.

En esta oportunidad también la situación en las FF.AA. se torna incierta, si bien según el modelo de análisis socialista el problema se reduce a los

conflictos con Carabineros, con una intranquilidad en las FF.AA. Nosotros no estamos tan seguros, pareciera que las FF.AA. también tienen sectores directamente involucrados en esta coyuntura.

De allí hay un compás de espera, resuelto al menos coyunturalmente el problema con Carabineros, vuelve “el orden” hasta el 4 de septiembre. Mientras hemos seguido confirmando el rumor acerca de la constitución del Gabinete militar, y de la renuncia de Altamirano.

En síntesis el PN se ha incorporado de lleno a la ofensiva, hay problemas con Carabineros, la situación en las FF.AA. es incierta. Por todo esto, nuestra evaluación nos indica que hay riesgos que merecen preocupación en la coyuntura.

Si bien es cierto que puede contarse con fortaleza de masas –reforzada ésta por la posición asumida por el PC, de impulsar las tareas de autodefensa de masas– cuestión que valoramos como positiva, pero notoriamente insuficiente, porque no plantea coordinación comunal entre los frentes en lo orgánico, ni resuelve el problema de las alzas en lo político. (Como planteamos en declaraciones públicas).

La evaluación para nosotros es: se podrá o no se podrá superar la coyuntura en este minuto. Durante todo este último período, lo que está fallando, en síntesis, es la estabilidad del Gobierno por falta de fortaleza institucional, política y social.

Frente a esto hay tres soluciones y aquí está la médula del problema:

a) La solución militar, de un gabinete militar, que le va a dar fortaleza al Gobierno (que es indudable que se la dará), pero a costa de una crisis importante de la UP, roces con el PC y PS, e incluso con el retiro probable del PS y del PC del Gobierno (dependiendo la forma que adopte); alejamiento del movimiento de masas; represión paulatina al pueblo.

b) La negociación con el PDC, esto sin posibilidades de rendimiento, ya que no le dará la fortaleza que el Gobierno necesita, pero sí va a producir una crisis en la UP. Esta salida redundaría en el alejamiento del movimiento de masas y la represión a sectores del pueblo. A pesar de ello ya era un hecho la apertura de conversaciones con el PDC.

c) La salida revolucionaria, la única salida para nosotros (que será explicada más adelante).

Sin embargo, importantes sectores del Gobierno se inclinan por la salida militar dada la crisis de la UP, la ofensiva de la clase dominante, su desconfianza esencial en el movimiento de masas y dados los problemas con las mismas FF.AA.

d) *La marcha del 4 de septiembre*

Aprovecharemos aquí de hacer una análisis, por general que éste sea de las reacciones que el movimiento de masas fue adoptando en el transcurso de la crisis.

A partir de los hechos de Lo Hermida y muy especialmente a partir del desencadenamiento de la ola de alzas, en el movimiento de masas apareció

el desconcierto y el descontento como no se había dado hasta aquí. Más aún, en sus sectores más conscientes, se acentuó una tendencia que venía desarrollándose desde antes, el rescate de una cuota de iniciativa antes entregada al Gobierno, y una mayor confianza en sus propias fuerzas para resolver sus problemas.

Recién decretadas las alzas, fuimos los únicos que desde la izquierda nos pusimos a la cabeza del descontento de las masas; mientras el resto de la izquierda o vacilaba en débiles críticas o incluso defendía la política de alzas. Encontramos en todo el país, y especialmente en las capas más pobres buena acogida y fuimos capaces de lograr un grado de actividad de masas en este sentido.

Posteriormente, producido el paro del comercio, y el inicio de la ofensiva reaccionaria, desarmado por la forma burocrática y puramente represiva que levantó el reformismo y aún desconcertado por las alzas, el movimiento de masas no reaccionó masiva ni enérgicamente, excepción hecha de algunas provincias (Cautín, donde los Consejos Comunales Campesinos, organizaron brigadas que salieron a abrir el comercio y lo lograron con éxito: Cunco, Lautaro, etc.).

Al prolongarse la ofensiva reaccionaria y adoptar la forma de asonadas callejeras periódicas, el movimiento de masas se reactivó masivamente. Si bien es cierto en esta etapa, el reformismo desconcertado y atemorizado ante la ofensiva de la clase dominante, lanzó llamados de alerta y convocatorias orgánicas de masas en el plano de la autodefensa.

Masiva y velozmente cundieron, especialmente en la clase obrera industrial, los Comités de Vigilancia, la organización de tareas nocturnas de vigilancia, etc.

Entre los pobladores, especialmente los Campamentos de los Sin Casa florecieron los comités de autodefensa, que organizaron la vigilancia en las calles, al interior de sus poblaciones y en las grandes arterias periféricas de Santiago.

Los estudiantes secundarios, si bien fueron débiles al principio en el enfrentamiento político a las demagógicas posturas de la DC, posteriormente resolvieron ésto y pasaron a enfrentar en las calles a la DC y PN.

Se lograron incluso avances mayores, se lograron organizar algunos Comités Coordinadores Comunales, fundamentalmente en Santiago, pequeños aún, organizados todavía sólo por arriba, pero rompiendo al menos con la lentitud con que se habían organizado antes.

En los cordones industriales fundamentalmente se pasó más allá, como en algunas poblaciones, liceos y escuelas universitarias; se abrieron discusiones acerca de planes de defensa comunal, se hizo instrucción especial e incluso con alguna masividad, brigadas de masa organizada.

En resumen se produjo una activación masiva de pueblo, donde la clase obrera evidenció su papel de vanguardia, se mantuvo alerta, elevó sus niveles de organización y conciencia, a pesar de haber sido heridos sus intereses por la política de alzas del mismo Gobierno que se disponían a defender. Un telón en Hirmas expresaba claramente su actitud: "Defendamos este Gobierno de mierda".

Más aún, la clase obrera en especial y el pueblo, en esta oportunidad se activaron por objetivos políticos y orgánicos de superior nivel; distinguiendo nítidamente a sus enemigos y desarrollando tareas que sólo una elevada conciencia puede permitir. De alguna forma embrionaria comenzó también a resentirse el control puramente reformista del movimiento de masas.

La marcha del 4 de septiembre en Santiago y en provincias, fue la coronación de ese proceso.

La de Santiago al menos fue la más grande, combativa y organizada que se hubiera dado, al menos en los últimos años. Hizo evidente un nivel de conciencia y combatividad de la clase obrera y el pueblo, al recoger la convocatoria por encima del golpe a sus ingresos que recién habían sufrido.

A partir de esta marcha podría asegurarse, que si el curso de los acontecimientos futuros no lleva a la desarticulación del movimiento de masas, si la clase dominante intentara derrocar al Gobierno, obtendría como resultado, al menos el inicio de la guerra civil.

Aquella tarde, la clase dominante adoptó una astuta política que fue la de intentar neutralizar el impacto de esa marcha llamando al paro total en todo el país. Otro elemento es que a partir de ese intento consiguieron reorganizar y fortalecer lo que han llamado PROTECO, la organización de defensa por manzana del barrio alto. Agitando que esa noche habría asalto de "pobladas" al barrio alto. Su organización en ese momento creció y fue relativamente eficiente: sus acuartelamientos, sus unidades, su actitud de vigilancia. Así como tenemos nosotros al partido convulsionado y alerta, también extensas capas de la burguesía y de la pequeña burguesía están en la misma actitud. Es decir, no será fácil que se alivie la tensión, en el país, así ya polarizado y activado, aunque en la apariencia se resuelva esta crisis.

Otro elemento que nos interesa destacar, evidentemente en otro plano, fue nuestra participación en la marcha: la cantidad de gente, su organización, su disciplina, su actitud y el contenido de sus consignas: Por cálculos que se han hecho parece que no pudo haber estado bajo 13 ó 15 mil personas. Nótese que se mantuvo el correspondiente nivel de alerta y por tanto importantes sectores del partido no asistieron, realizando otras tareas.

Una cuestión que vale la pena tratarla como experiencia y enseñanza es la experiencia con compañeros del resto de la izquierda, ésta nos indica que son enormemente liberales en la distribución y uso de elementos defensivos. Nuestros compañeros desfilaron sin nada, no así el resto. Nosotros somos categóricos en eso: que en las concentraciones de masas no estamos dispuestos a dar batallas. Donde no hay un control, ninguna fuerza especial, pretender dar enfrentamientos de ese tipo es irresponsable.

Por último todos los cuadros y militantes de la izquierda iban comentando la posibilidad de que se convocara a un gabinete con los militares y en general lo rechazaban enérgicamente, lo mismo un entendimiento con la DC.

En verdad estamos con la información demasiado reciente y no la hemos incorporado al análisis.

En el día de ayer murió un estudiante en los desórdenes del centro. (7 septiembre). Según sabemos, carabineros ayer reprimió enérgicamente al mo-

miaje. Parece que el carácter de la asonada y su envergadura fue bastante más limitado que la del día viernes 1° de septiembre. Ayer hubo también movilización estudiantil reaccionaria y lo mismo el día anterior. Tuvo éxito en ambas oportunidades la correspondiente contramanifestación del FER que fue bastante numerosa. Hasta ayer éramos la única fuerza que hacía contramanifestación permanente a las movilizaciones de los momios. Hoy el conjunto de la izquierda marchó por el centro. Por momento pareció que habría paro de la locomoción, pero finalmente no fue así.

Antes de terminar esta ya larga entrega de antecedentes, nos parece importante destacar tres aspectos recientes que pueden ser importantes para la precisión de la perspectiva:

a) Parece que extensos sectores democratacristianos son contrarios a la perspectiva de un enfrentamiento que se está abriendo en el curso de esta crisis, incluso sectores tradicionalmente “duros” y “agresivos” y buscarán la forma de aliviar las tensiones.

b) Tenemos informaciones de que sectores importantes de empresarios, altos personeros del PDC y del PN, e incluso altos oficiales de las FF.AA. constituyen el núcleo dirigente de esa ofensiva, y lo que es más riesgoso, se proponen por todos los medios seguir impulsando “crisis” periódicas hasta hacer caer este Gobierno (cuando hablamos de personeros de partidos políticos, hablamos de algunos de ellos, de sectores dentro de esos partidos y no de su conjunto, lo mismo vale para las FF.AA.).

c) Importantes sectores del Gobierno seguirían tentados con la idea de constituir un gabinete con militares, y se lo proponen para un corto plazo, “de semanas” o “de meses”.

VIII. La evaluación de la crisis

Aquí analizaremos:

- a) Factores constantes de la situación.
- b) Factores precipitantes de la crisis.
- c) Bloques en la clase dominante a que dio origen la crisis
- d) La debilidad del Gobierno.
- e) La perspectiva.

La evaluación de la crisis, sólo la haremos en el sentido de ayudarnos a concluir una perspectiva por ahora. Aquí, yo trato de esquematizar lo que podríamos llamar los fenómenos “constantes” de la situación y los factores precipitantes de la crisis. La debilidad del Gobierno y por último algunas apreciaciones acerca de la perspectiva. Esto hasta donde nuestra información y elaboración da, entendiendo que lo agudo de la coyuntura y su riqueza pueden alterar el curso de los acontecimientos.

Diferencio lo que llamo los factores constantes de los precipitantes: porque hay una tendencia en la organización a ir analizando milímetro a milímetro si va a haber “golpe esta noche o no”, y si “no hay golpe en la noche”

se desarticulan y retroceden anímicamente a cero; por eso es importante precisar cuáles son los factores que hacen que se defina un determinado período y cuáles son los que pueden precipitar una “crisis” o coyuntura de carácter agudo.

a) *Factores constantes de la situación* (los fundamentales)

- La fortaleza de la clase dominante y su crisis.
- La debilidad del Gobierno.
- El enardecimiento de la pequeña burguesía: esa situación que se revela, por ejemplo, en las asonadas callejeras en que centenares de habitantes de los edificios céntricos y del barrio alto empiecen a apoyar a los manifestantes y les tiren proyectiles a los carabineros y a los estudiantes de izquierda, que les tiren papeles a los momios para que hagan fogatas, es una actitud constante, allí hay una base social de apoyo, hay un fenómeno político y social, no un accidente conspirativo.
- La situación interna de las FF.AA., el descontento de su suboficialidad por las alzas, la agresividad de ciertos sectores y la sedición de otros. (Distingo agresividad de sedición, porque hay un sector mayoritario, predominante, enormemente agresivo entre la oficialidad, baja y media, en contra del Gobierno, pero que se resiste al golpismo y pone condiciones para intervenir en la situación política: que haya caos o anarquía). La UP como tal es aquí minoritaria, y algo que no está claro es cuál es el peso real de los sediciosos: pareciera que en la cúspide son pocos. En esencia, división al interior de las FF.AA.
- El descontento del pueblo (mientras no se modifique la política de precios y salarios del Gobierno).

b) *Factores precipitantes de la crisis*

En general la política de alzas del Gobierno, el problema de los compañeros argentinos y la lucha por el liderazgo dentro de la burguesía.

Habría que estudiar entre otros factores que ya vimos, la muerte del cabo Aroca en Concepción y otros que se han ido agregando: probablemente, la asonada de los comerciantes haya tenido también, su efecto como tal. Esta última asonada tuvo otros condicionantes que precipitaron la de Concepción y ésta a su vez precipitó la del viernes 1° de septiembre. Habría que hacer un análisis más cuidadoso, de cómo una serie de fenómenos y acontecimientos han ido agravando la crisis y desatando su propia dinámica, cuando nadan en los factores aquí llamados constantes.

c) *Bloques en la clase dominante a que dio origen la crisis*

(Preferiría que lo hiciera otro compañero en profundidad, yo sólo los reseñaré en general).

3042 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

Los bloques hasta ayer: (7 de septiembre).

1. Los que quieren el derrocamiento a breve plazo. Son:

- Un sector importante de Carabineros.
- Un sector que parece menos importante –en cuanto a la cúspide– de militares (sin dejar de ser significativo).
- El más importante: sector de empresarios.
- El sector predominante en el PN hasta ayer.
- Fracciones de la DC. (Se insiste en que todo esto puede ser cuestionable hoy día).

2. Los que quieren ir a las elecciones del 73 manteniendo la estabilidad del sistema democrático (no del Gobierno), ya fuera bajo la forma de gabinete militar, bajo condiciones de exigencia categórica al Gobierno –condicionando la estabilidad del Gobierno a cambio de concesiones– para después de la elección derrocarlo con un apoyo civil importante. Este sector se confunde por momento, en su expresión pública y agitativa, con el sector golpista. Está formado por:

- El sector predominante en la cúspide de la DC.
- El sector predominante todavía, de las FF.AA.

d) *La debilidad del Gobierno.*

(Debilidad política, institucional y militar; económica y social).

De incorporarse la DC al Gobierno, evidentemente habría una superación de esta debilidad. Igual cosa sucedería de incorporarse los militares al gabinete. Pero mientras éstos u otros factores no entren a superar esta debilidad en los hechos, no caben las evaluaciones superficiales e impresionistas, que sólo desarman. Les digo esto porque a veces aparecen momentos que en apariencia alivian las tensiones y presiones, pero que no corresponden a la situación real y de fondo y más bien, corresponden a juegos, maniobras o intentos frustrados de negociaciones, de los que son parte de las cúspides políticas, manipulados por la prensa y que no modifican la relación y la actitud de las clases.

Más vale ser un poco riguroso y reconocer que hay algunos factores que estudiar y analizar. Mientras ellos no se modifiquen sustancialmente, es mejor estar prevenidos.

e) *La perspectiva*

Siendo esquemático, y sólo en general, podemos decir que el problema tiene dos grandes salidas posibles:

- Que no se supere esta crisis y que tengamos un momento de ruptura de algún tipo, en este período.

Es importante destacar que tenemos por delante un 18 y 19 de septiembre en la vertiente de esta salida. Desde hace cuatro años han existido intentos de golpes de Estado en Chile para los 18. El año 69 se negaron a marchar

los regimientos dirigidos por el mayor Marshall y el capitán Haenckel, de San Felipe; por lo cual fueron expulsados 7 oficiales, entre ellos Marshall. Ese fue un intento de rebelión que en octubre de ese año devino en el “Tacnazo”. Posteriormente, en 1970, fue en esa fecha, cuando se organizó el asesinato de Schneider.

Es decir, cuando hablamos de 18 y 19 nos referimos a que se produce una concentración de tropas que, según antecedentes que tenemos, ya se están realizando. (Casi se duplican los efectivos en Santiago).

Si gobierno estables de la burguesía, como el de Frei, estuvieron sometidos a crisis militares en dos 18 de septiembre, y el año pasado que era –en apariencia al menos– relativamente estable, se dieron inquietudes y amenazas de sedición, ahora que la situación está agudizada y es un hervidero, vale la pena estar con los ojos abiertos, haya o no información concreta al respecto.

Por lo formulado anteriormente no puede descartarse que la crisis se resuelva ahora y no se supere (creándose así algún grado de ruptura, enfrentamiento o agudización). Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes que estamos recibiendo, no es esto lo más probable; entre otras razones, por la aumentada disposición de importantes sectores del Gobierno a la concesión y la negociación, tendiendo esta actitud de empeorarse la situación, a alcanzar un grado extremo.

– La segunda variante tiene dos aristas:

1. Que dentro del Gobierno predomine el camino a un gabinete militar o a un gabinete con la DC. De concretarse ésto, aceptando los militares o la DC, dependiendo de la forma que adopte tendría consecuencias dentro de la UP. Pero, sería una variante que le permitiría superar la crisis; y es al parecer de las más probables.

2. Podría también superarse la crisis apoyándose el Gobierno en el movimiento de masas y en una política revolucionaria. Evidentemente esto no parece lo más probable.

IX. Políticas planteadas en la izquierda como salidas a la crisis

Aquí analizaremos:

- a) La política reformista.
- b) Las corrientes revolucionarias.

a) La política reformista

Que tiene dos variantes:

1. La que preconizan algunos personeros de Gobierno, tecnócratas, políticos, burócratas, que nosotros reconocemos como representantes de la “pequeña burguesía reformista”. Probablemente su diferencia fundamental con el “reformismo obrero”, estriba, fuera de su origen y rol histórico concreto y su base social fundamental de apoyo; en su posible relación con el imperialismo.

Estos se plantean como salida un gabinete militar, o un gabinete con demócratacristianos, o un gabinete conjunto. Probablemente tienden mucho más a un gabinete con militares: lo indican así empíricamente las informaciones con que contamos desde hace meses.

Paralelamente irían las concesiones a la burguesía, directamente, ya que estos sectores son renuentes a hacer concesiones a representantes políticos de la clase dominante como tales; ya que ellos aspiran asumir por sí mismos la representación política; incluso de capas como aquellas.

Estas concesiones serían de todo tipo: económicas, políticas, etc. De esta manera, suponen ellos, estaría asegurada la estabilidad del Gobierno hasta la elección del 73. Así, en lo fundamental su política seguirá amparándose y sometiéndose al mayor rigor de la legalidad; manteniendo la política de precios-salarios en lo fundamental y desarrollando una política económica similar a la ya diseñada por el reformismo. Con una relativa salvedad en lo político: tras la fachada de la búsqueda de “la unidad de la izquierda”, amplía o intenta hacerlo su campo de maniobra hasta incluir a la izquierda revolucionaria.

Si triunfara una variante de este tipo, conduciría –según nuestra evaluación– a una división de la UP (dependiendo de la forma y en perspectiva). Se ha planteado, pero es dudoso, que el PC podría retirarse del Gobierno; no está claro, pero parecería que al menos se opone a la constitución de un gabinete con militares.

También en perspectiva y dependiendo de la forma que adopte el PS se dividiría y extensos sectores tenderían a irse del Gobierno, y también, importantes sectores –hay que reconocer– se quedarían. El resto de la UP también se resentiría seriamente.

La represión a las organizaciones revolucionarias y a sectores del pueblo, sería una norma de un Gobierno de ese tipo; no sabemos qué velocidad o ritmo adopte.

El camino militar sería irreversible y terminaría en definitiva por intentar copar todo el poder; después de desarticular y confundir al pueblo.

Un gobierno de este tipo produciría un progresivo alejamiento del movimiento de masas; en la medida de la aplicación concreta de su política.

Hay un aspecto a destacar en esta variante: que es la más desconcertante y difícil de enfrentar para el movimiento de masas y los revolucionarios, lo que no la hace imposible de enfrentar; pero hará necesario construir todo un esqueleto conceptual, político y agitativo que pudiera demostrar que ese Allende, en el que el pueblo de hecho delega una importante cuota de conducción, fuera una pieza en el juego que interese a la clase dominante, y que esos militares no están en el gabinete producto de una “astucia” de Allende.

Si los PC se van del Gobierno eso es políticamente menos difícil de enfrentar en una situación de este tipo. Pero si permanecen en la UP, aunque se retiren del gabinete, darán origen a una especial situación: a un Gobierno de combinación militares-UP en que las contradicciones se eleven al interior del Gobierno. El problema será mucho más difícil de enfrentar, y se abrirá la posibilidad de una desarticulación y confusión progresiva del movimien-

to de masas como paso previo a la restauración plena de la clase dominante en el poder.

2. La que podríamos llamar reformismo obrero propiamente tal. Esta tiende mucho más a aliarse con la DC que con los militares. Si bien no podemos afirmar su actitud definitiva frente a un gabinete militar, en ningún caso lo impulsa y más bien lo rechaza. En cuanto a la política de precios y salarios, tiende a mantenerse en los marcos generales que ya han sido formulados por el Gobierno; lo mismo en cuestiones programáticas y en este terreno su disposición a las concesiones a la burguesía, son también importantes. A diferencia del reformismo pequeño-burgués prefiere hacerlo con los representantes políticos de la clase dominante. Otro aspecto en el que se diferencian, al reformismo obrero le interesa fortalecer las organizaciones de masas para así mantener un grado de fortaleza con el cual enfrentar cualquier alianza con la burguesía (sindicatos, federaciones campesinas, etc.), pues a diferencia del otro sector reformista, no aspira a representar los intereses de capas de la burguesía.

Normalmente su “endurecimiento” contra sectores más reaccionarios que no sean de los “DC progresistas” –como ellos los ven– tiende a ser esencialmente burocrático, lo que también lleva a confusión a sectores más radicales de la izquierda y a veces, incluso, confunden a gente nuestra. Parecen a veces, enormemente decididos a “aplicar la ley”, “a imponer impuestos”, a no financiar la propaganda de la derecha, a reprimir policialmente a la clase dominante; todo se asemeja al esquema stalinista de represión burocrática. Este es un modelo al cual tienden con facilidad y así muchas veces parecen adoptar una actitud decidida, lo que confunde a sectores de la izquierda y a otros, a los que les parece que el PC “ha modificado” su política y aparenta radicalizarse. La verdad es que el modelo reformista obrero permite eso; pero a la vez, en lo fundamental, buscan dar la lucha antifascista sin contenido de clase, no intenta darla con carácter de lucha proletaria, contra la gran burguesía; no se plantea como objetivo la lucha por el socialismo, avanzar y golpear, o ser derrotados, sino que artificialmente se intenta paralizar la lucha del pueblo y su lucha por conquistar el poder y se detiene y reduce a defender lo ya “ganado” y las reglas del juego legales “la ley y la constitución” (lo que en nada se asemeja a nuestra política, no sólo porque atenta contra objetivos revolucionarios, sino porque, además, está demostrado históricamente y nuestra experiencia y lo evidencia, que es el camino de la derrota para la clase obrera y el pueblo, pues, no da fuerza, sino desarma).

b) Las corrientes revolucionarias

En las cuales voy a distinguir, sólo con fines de aclaración, entre los sectores “vacilantes” y los “sectores consecuentes”. Creo que es importante porque siendo los sectores vacilantes aliados nuestros en esta vertiente o “corriente revolucionaria” general, tienden a influir a nuestros cuadros y tienden nuestros cuadros a identificar nuestra política, a veces, con las vacilaciones de esos sectores, que si bien están enmarcados en una “corriente

revolucionaria”, no están directamente identificados a nuestras políticas e incluso tenemos importantes diferencias con ellos.

1. Las corrientes revolucionarias vacilantes:

Cuáles son las coincidencias: ellos son partidarios y levantan criterios programáticos genéricos, formas de lucha, objetivos de poder, etc., similares al nuestro; pero ya en el terreno de la práctica vacilan en dos aspectos que definen si esa formulación se lleva a cabo o no: practicarla y denunciar a quienes no lo hacen. Me explico por medio de una caricatura: una cosa es “ser bueno” y “predicar el bien” y otra “hacer el bien” y “combatir el mal” (cuestión mucho más eficiente). Probablemente, “intentar” hacer el “bien” y proponérselo lleva a muy poco.

De esta manera, en el terreno de las alzas, coinciden con nuestros criterios generales, pero no son capaces de denunciarlas y levantar una política alternativa. Así, es muy fácil entenderse con ellos entre cuatro paredes para una política sobre precios y salarios, pero es enormemente difícil llevar a la práctica una política que realmente permita combatir las alzas, o que permita denunciar el carácter antipopular de las políticas que el reformismo ha estado levantando en este terreno.

En las “políticas de poder” son bastante más fáciles los acercamientos. La formulación de los Consejos Comunales que, de acuerdo a nuestra concepción, irán asumiendo tareas de poder en relación a la correlación de fuerzas que vayan desarrollando; y que no pasan por una ruptura del bloque político de la UP sino que más bien pasivamente permiten acumular fuerzas, les hace mucho más fácil aceptar en este plano el acuerdo e incluso hacer agitación por la constitución de los Consejos Comunales urbanos (como ellos los llaman). Pero ya caminar concretamente en la construcción de un Consejo Comunal Urbano es hasta aquí difícil. Una de las razones es que –al no denunciar ellos, en términos programáticos, la política precios-salarios del Gobierno y al no buscar resolver ese problema a las masas– no se pueden realmente construir Consejos Comunales, a pesar de su posible buena disposición. De este modo, a lo más, vamos a tener Consejos Comunales burocráticos sin verdadera y significativa representación de base. Ya que no es posible hoy incorporar al pueblo casi a ninguna tarea, si no se le resuelve uno de sus principales problemas: como han sido golpeados sus ingresos por la ola de alzas.

A estos sectores es posible convocarlos con alguna facilidad para una coyuntura aguda: por ejemplo, una en la cual pueden combatir fascistas que buscan la lucha callejera; pero no van mucho más allá. Ellos rechazan también el entendimiento con los demócratacristianos y los militares, pero, otra vez, es más bien entre cuatro paredes. En finales, hasta aquí, vacilan. Todo esto obedece más bien a un fenómeno de desarme ideológico que los conduce con rapidez a un análisis “cuantitativo” de sectores, capas sociales y “tendencias”, y no a un análisis con criterio de clase cuando entran a analizar la DC, sin un criterio público categórico. Así a pesar de que en la cúspide se oponen cuando prosperan conversaciones con la DC, estos sectores de hecho le hacen el juego a esa fórmula al no denunciarla públicamente. En privado co-

mentan que “no les gusta”, para poder decirlo después –cuando ya fracasan– en un discurso; pero no las combaten oportuna y públicamente. Con rapidez informan a sus partidos de que entre los DC “hay también obreros”, mientras otros sólo entonces recuerdan a “los campesinos democratacristianos”, a los cuales habían olvidado antes. De allí, nace una actitud de “crítica de pasillo”, que intenta a veces realizar en la práctica una política distinta, pero sin denunciar a quienes hacen lo contrario. En definitiva, a los fines de una política revolucionaria, vacilan.

En relación a la política de “reagrupación de los revolucionarios”, también vacilan. Más bien les interesa la “unidad de la izquierda”. Como se encuentran en la práctica con una cerrada oposición del PC a cualquier apertura con la Izquierda Revolucionaria, puntualmente entran en acuerdos con nosotros, pero, estratégicamente trabajan en alianza y, en los hechos, subordinados a los reformistas. (Precisamos esto porque tenemos la impresión de que en distintos lugares se está produciendo confusión en la apreciación que se hace sobre estos “sectores revolucionarios vacilantes”. Lo hemos hecho muy apresuradamente, sin sistematización, sin atreverme a prometer un documento, si bien lo ideal sería poder enfrentar este problema con un grado de precisión y rigor mayor).

Su actitud frente a la movilización de masas es evidentemente más favorable, también en la práctica. Sobre esto es posible, con mayor facilidad, implementar acciones conjuntas en los frentes de masas para golpear determinados enemigos y, con algunas limitaciones, usar determinados métodos de lucha, defender ciertas movilizaciones.

En esencia, estas “corrientes revolucionarias vacilantes” no se plantean el combate contra el reformismo y así, si en los otros niveles de acción política revolucionaria vacilan, esto simplemente ni lo intentan como práctica política.

2. Una política revolucionaria, poco rigurosamente llamada aquí, “consecuente”. Pero, al menos en la práctica, distinta por ser más clara y categórica.

Esta política se plantearía los siguientes aspectos:

1. Resolver los problemas de ingresos de las masas combatiendo la política de alzas y precios, salarios y reajuste del Gobierno de la UP, planteando lo que está contenido en la declaración y el documento que ustedes conocen (5) y (9).

Aquí nos interesa precisar un problema: no podemos oponernos a una ofensiva fascistoide sin convocar a las masas a resolver este problema. Si no lo hacemos, las masas no nos siguen. Puede ser más cómodo, para obtener más fácilmente la “unidad de la izquierda”, pero obtenemos una unidad –sin exagerar– casi de fachadas formales ya que, en ese caso, las masas de alejan de nosotros. Necesitamos recuperar la confianza de masas, si no en lo concreto –porque no tenemos la fuerza suficiente para imponer una modificación en los hechos de la política de precios y salarios– por lo menos debemos colocarnos a la cabeza de su descontento.

Esa es una condición imprescindible para llegar a entendimientos con otras fuerzas de la izquierda y enfrentar en conjunto la reacción patronal. Hay a veces tentación en algunos compañeros de relegar a segundo plano este pro-

blema. Se plantean que cuando la ofensiva reaccionaria aparece, es mejor “cerrar filas” y “olvidar diferencias”. Eso es un anhelo teórico y éste, en cambio, es un problema concreto, un problema de masas. No se trata de un problema de simples luchas entre “los comunistas y nosotros”, se trata aquí de construir una relación revolucionaria entre el movimiento de masas y los revolucionarios, cuestión en la que nosotros no podemos fallar. Si fallamos en esto, perdemos el apoyo de masas, nos aislamos de ella y nos quedamos disputando con los reformistas las mismas capas sociales ya ganadas para la izquierda: pequeña burguesía y clase obrera organizada y de más altos ingresos. Con lo cual toda una amplia gama de capaz y sectores sociales que están desconcentrados quedan sin conducción y se las regalamos al fascismo.

A pesar de lo anterior, nuestra política no es rígida sino flexible en cuanto a la forma, pero no puede modificarse su esencia, a riesgo de desarmarnos. Es posible que en un momento dado la condición de ofensiva reaccionaria sea muy evidente y aguda, podemos no tener entonces que denunciar explícitamente al reformismo, como responsable de la situación de todos los pronunciamientos públicos. Esto para una muy determinada coyuntura, pero en general debemos hacerlo. Si apreciáramos una fuerte ofensiva reaccionaria podemos convocar a las masas a enfrentarla, pero también necesitamos llamarlas a luchar por mejores salarios, contra las alzas, siendo posible que no busquemos en esa precisa coyuntura destacar la responsabilidad del reformismo. Sin embargo, todavía no hemos tenido ninguna coyuntura aguda en la que nos hayamos visto obligados a no precisar, por lo menos, la cuota de responsabilidad del reformismo. En efecto, a lo más que hemos llegado es a que en algunas declaraciones no hemos nombrado a los comunistas como tales.

En síntesis, sobre esto, una ofensiva reaccionaria no puede confundir nuestra política. No por un problema de rigidez en los principios o puramente ético, no por buscar artificialmente la alternativa, o para recoger demagógicamente descontento o para convertirnos en ala estridente de la izquierda. La lucha por la defensa de los niveles de ingresos de las masas es, para nosotros, la única forma de recuperar la confianza de masas; siendo, por eso, además, el punto de partida de la formulación de cualquier otra política.

2. El segundo elemento, al que tampoco podemos renunciar, es el objetivo programático de golpear al conjunto de la burguesía, luchando así por resolver el conjunto de los problemas del pueblo. Porque ni podemos resolver los problemas de alzas y salarios, ni tampoco podemos incorporar a sectores del pueblo a la actividad política si no les proponemos la solución de sus problemas fundamentales. Además, no se puede limitar la agitación y la organización del pueblo en la lucha contra la agresión patronal: “hay que golpearlos donde más les duela”; “quitémosle las fábricas y los fundos” que es la fórmula que queremos plantear públicamente.

“Golpear a la clase dominante donde le duele”: no se trata de un esquema teórico, ni de estridencias políticas, ni de ultraizquierdismo: se trata de un manejo elemental de las leyes de la lucha de clases. En el fondo se trata, con este criterio, de entregarle un claro contenido de clases a nuestra política.

ca contra la ofensiva reaccionaria porque, bajo esa formulación aparentemente tan pragmática, estamos estableciendo en el terreno de lo concreto, que frente a la contrarrevolución burguesa sólo hay una alternativa: la revolución socialista. En vez de formularlo en forma esquemática o teórica buscamos hacerlo de una forma que es fácilmente más agitable y mucho más perceptible a nivel de masas, pero la idea es exactamente la misma (fue por último, el problema central planteado en la Revolución Española).

Se trata en el fondo, de que cualquiera sea la coyuntura, no podemos renunciar al combate contra el reformismo, a la defensa de los intereses de las masas y a la lucha por el socialismo.

3. El tercer elemento que define nuestra política, y que tiene mucho que ver con la coyuntura (y éstas no son puras proposiciones “acerca del método”, tienen que ver con lo que está ocurriendo en Chile), es el problema de los militares.

Esta crisis no se resuelve operando como si los militares no existieran, que es aproximadamente lo que hace la UP. Es decir, olvidándose por un tiempo de su importancia, para poder “jugar con los fascistas en la calle y con el PN y PL como enemigos fundamentales”. Tenemos que resolver el problema de la fuerza militar enemiga y de la debilidad militar nuestra. Y para ello tenemos que operar neutralizando sectores o ganando a nuestro lado fuerzas del otro campo. Para eso estamos esperando el momento apropiado (lo malo es que la agudización de la situación nos lo impide) de plantear el derecho a voto de los suboficiales para las elecciones del 73. En todas las declaraciones tratamos de acercarnos al problema: se las dirigimos a los soldados, hablamos de que “sabemos que los soldados no dispararán contra el pueblo, porque son del pueblo”; jugamos con una fórmula u otra. No se trata, en todo caso, de llamar a los soldados a levantarse contra los oficiales, o de llamar “al levantamiento” o “al motín”; se trata de evitar cuidadosamente incluso lo que mañosamente pueda ser presentado como provocación, pero, tampoco puede ser el camino, ignorar su existencia e importancia.

4. El otro elemento en nuestra política, guarda relación con las formas que se han estado planteando en la organización de las masas.

De hecho el PC y la CUT plantearon los Comités de Autodefensa y Vigilancia y luego a partir de esos Comités, propusieron una tarea orgánica que es la ocupación de los frentes de trabajo en caso de intentarse un golpe de Estado.

Para nosotros el problema no es tan simple. Antes que estas nuevas formas de organización de masas existieran como realidades concretas, existían otra serie de organismos que no se pueden desconocer: sindicatos, consejos comunales campesinos, JAP, comités de pobladores, comités sin casa, etc. . . Consideramos fundamental que estas estructuras sean aprovechadas e incorporadas a las nuevas tareas. Si tenemos dentro de ellas representación reaccionaria predominante podemos entonces crear allí un Comité de Autodefensa que vincule a todos los sectores de izquierda, sin dejar de dar la batalla política e ideológica en la organización gremial.

Queremos ser cuidadosos con este problema orgánico, porque tememos que tienda a desarticularse la estructura orgánica de masas. Supongamos que

existe un sindicato, que allí hay un 30% DC y un 70% de izquierda; nosotros no desconocemos la existencia del sindicato, y dentro de él damos la batalla ideológica, en la asamblea sindical frente al conjunto, frente a los DC. Pero, como también hay cuestiones que no podemos discutir frente a los DC –como la toma de las fábricas– creamos entonces comités de autodefensa, que vienen a ser la “asamblea de la izquierda”. La creación del Comité de Autodefensa no significa olvidar que el sindicato existe; no podemos abandonar ese frente. Pero a la vez la existencia del sindicato no tiene por qué impedirnos buscar una vinculación más estrecha con los sectores que están más decididos, en un plano superior.

Existen también frentes de masas absolutamente controlados por la izquierda o por nosotros: fundos, poblaciones, incluso fábricas. En ese caso la asamblea misma del sindicato puede constituirse en comité de autodefensa. Lo importante es que estemos en todos los frentes y niveles. El Comité de Autodefensa o cómo se quiera llamar, es también un instrumento para organizar a “los pobres”, a “los no incorporados”: por manzana, por área, por junta vecinal; todo esto debe ser para nosotros enormemente importante. Debemos incorporar a ellos las estructuras que ya existen, si son de “izquierda” y organizarlos allí donde no existen.

La organización de los Consejos Comunales de Trabajadores no lanzarla sólo como si fue el momento de imponer nuestra anterior formulación de constituir los Consejos Comunales, sino que llamar a la constitución de los “Comités Coordinadores Comunales” (que está indicado en nuestra declaración). Esta es una forma de presentar el problema mucho más fácilmente aceptable por el resto de la izquierda. Hacerlo como surgiendo de la realidad misma, a partir de la existencia de numerosas organizaciones de masas en la comuna y, de allí, la necesidad de coordinar al conjunto de ellas en un solo organismo. Creemos que eso es posible en muchas comunas del país. De hecho en Santiago y Concepción están surgiendo. Ahí estará el embrión de lo que en su desarrollo y democratización será, posteriormente, el Consejo Comunal de Trabajadores.

Es decir, hay que diferenciar la organización por la clase (hasta allí llega el PC) de la coordinación comunal que para nosotros es básica, pues será el embrión de los futuros órganos de poder popular.

5. Otro es el problema de las movilizaciones de masas contra el fascismo. Este problema lo desarrollará otro compañero de la C.P. mañana; pero la idea central es la siguiente: existe toda una experiencia que hemos ido ganando para enfrentar las coyunturas “agudas” pero hasta aquí, hemos tendido normalmente a orientar nuestra actitud en dos sentidos: una política pública difusa por un lado y, por el otro, una política orgánica de acuartelamiento, de red, de afirmamiento orgánico y de constitución de masa organizada. A veces se ha hecho algo –en Santiago algunas cosas y entendemos que en Concepción y otras provincias también–, pero no muy bien estructurado y organizado, en cuanto a desarrollar una vertiente de la movilización activa de las masas frente a estas situaciones de ofensiva reaccionaria. Este problema hay que elaborarlo y desarrollarlo, discutirlo en conjunto, escuchando

primero al compañero y luego la experiencia de cada provincia. Con alguna razón se planteó en la C.P. que nuestra política en este tipo de coyunturas sería un tanto defensiva, y hay algo de real en eso. De allí que debemos precisar muy bien en qué quedan las luchas por las reivindicaciones en una coyuntura como ésta; en qué pie quedan las formulaciones de tipo programático; en qué pie quedan y se insertan las llamadas “tareas de poder” y qué carácter preciso tienen “las alertas orgánicas”; qué carácter tiene también la constitución de la “masa organizada”.

6. Existe otro problema –que no dejamos resuelto en el C.C. pasado– en cuanto a la política de alianzas. Allí dijimos que si bien definiáramos la reagrupación de los revolucionarios y el combate al reformismo como formas de definir nuestras relaciones con la izquierda, no clarificamos una política para el conjunto de la UP. Hoy, hemos agregado otro elemento para precisar el carácter de las alianzas con el conjunto de la UP, que formulamos como “marchar separados y golpear juntos”. Esta fórmula ha buscado, en especial, resolver el problema con el PC y el reformismo. Nos parece que, por un lado, ella no oscurece nuestro combate con el reformismo y, por el otro, no debilita nuestra política de reagrupación revolucionaria, permitiéndonos –en lo concreto– golpear juntos frente a ofensivas de la clase dominante, estando separados por profundas diferencias. Nótese entonces que aquí no ha sido levantada la “unidad de la izquierda” como política de alianza. No creemos que esté planteado en este momento considerar la unidad de la izquierda como objetivo fundamental; preferimos hablar de “unidad de los revolucionarios” y con el conjunto de la izquierda “marchar separados y golpear juntos”. Esto nos parece importante, porque no creemos sea el momento de desconcertar al pueblo y a la izquierda con fórmulas utópicas e irreales.

Sigue planteado, evidentemente, el problema de la reagrupación de los revolucionarios y el combate al reformismo en la fórmula precisa que estamos planteando aquí. Indudablemente será más fácil establecer contacto con las corrientes revolucionarias que con los reformistas y, si fuera necesario establecer alguna alianza de carácter más amplio, será necesario establecerla en forma bilateral con aquellos que están más cercanos a nosotros. Es cierto que en el curso de las discusiones debemos evitar, por todos los medios, que se rompan los coordinadores a raíz de discusiones entre partidos o al interior de ellos; debemos mantener la lucha ideológica y política con el reformismo sin hacer concesiones que nos parezcan fundamentales, pero enormemente flexibles en lo formal y secundario.

7. Otra precisión que debemos hacer dice relación con la política de la clase dominante. En el manejo incluso agitativo del problema nunca debe dejarse de plantear la existencia de dos sectores en su interior: “uno que quiere derrocar al Gobierno después de las elecciones, otro que quiere derrocarlo hoy día”. Porque, si no se explicita que el primero lo quiere derrocar después del 73, no sólo faltamos a la verdad y nos desarmamos, sino que también damos base a la política comunista –que influye entre los vacilantes– de que habría “progresistas democratacristianos”, que están con la legalidad y con el fair play electoral, y de allí nace la política de la conciliación. (Nos pre-

ocupamos de este proyecto de las precisiones formales porque no dejan de ser importantes). Constituyen, de alguna forma, el armamento ideológico, cuando son expresados pública y agitativamente.

8. Un último problema, importante de discutir, es *nuestra política frente a las elecciones de marzo de 1973*. Entendiendo que el problema fue tratado en el C.C. anterior (julio) aquí sólo nos interesa precisar un aspecto del problema, más en función del enfrentamiento con las posiciones que a este respecto levanta el reformismo.

El PC y especialmente Allende han venido sosteniendo que ganando una mayoría parlamentaria se estaría, en los hechos, prácticamente conquistando el poder; pues a partir de allí se podría desde disolver el Parlamento, modificar el aparato judicial, hasta llevar a cabo todas las políticas hoy frenadas por el Parlamento y otras instituciones del aparato del Estado que controla la clase dominante.

Para demostrar que eso es así, tendremos que partir de un problema más general.

De aquí a marzo de 1973 el proceso social y político se desarrollará en los hechos por dos vertientes: una será la actividad social y política del pueblo, en la lucha por la defensa de sus ingresos, por los fondos, por las fábricas, por la participación, por obtener mayores cuotas de poder en sus manos, etc. . . , que golpeando al enemigo de clase y elevando los niveles de conciencia y organización del pueblo, acumulará fuerzas. Y, la otra, será la electoral, la que en su resultado –de alguna forma– será un indicador que ayudará a medir la fuerza acumulada en la otra vertiente pero que, por sí misma, no entregará, en lo fundamental, mayor fuerza; constituyendo su resultado, en cualquier caso, un importante antecedente que en gran medida puede definir el curso de los acontecimientos futuros en Chile. Quien busque fuerza como tal, en el resultado electoral, estará cometiendo un similar error al que busca gas en el medidor de éste y no en la llave.

La verdad es que si se obtuviera una mayoría parlamentaria, se originaría una situación similar a la que hoy enfrenta el Gobierno, que contando con el Decreto 11.520 que, desde el punto de vista legal, le permitiría requisar todas las grandes empresas, no puede hacerlo por no contar con la fuerza política, de masas, militar e institucional para hacerlo.

Así, pues, el problema fundamental aquí es de fuerza y no de instrumentos legales, para poder ejecutar una política u otra.

Ahora, será la vertiente de la lucha del pueblo, en todos los niveles la que entregará esa fuerza y la otra, la vertiente electoral, en lo fundamental medirá la fuerza acumulada.

Nosotros participaremos activamente en ambas vertientes y buscaremos cruzarlas, hacerlas empujar en un mismo sentido, participando en las elecciones a partir de levantamiento de un Programa, que será el mismo que orientará nuestra participación en las luchas del pueblo. De esta forma buscando además romper la polaridad electoral actual: gobierno-oposición, tratando que ésta adopte un carácter de clase: clase dominante-trabajadores.

X. Algunas enseñanzas de la crisis de agosto

Seremos desordenados al configurar períodos y etapas. (En estos aspectos es mejor remitirse a partes anteriores de este informe). Está surgiendo una confusión en nuestras bases. Algunos militantes tienden a ver una volubilidad y un supuesto viaje permanente de nuestras políticas y de esta supuesta inestabilidad en nuestra política no logran captar y decantar más que uno u otro concepto, y a veces no los fundamentales, sin relacionarlos uno con otro. Vamos a tratar de afirmar algunos criterios y problemas porque no creemos que en lo fundamental sea así. Lo que ha estado ocurriendo es que se han ido sumando coyunturas agudas que han dificultado la tarea de ir conformando un conjunto de ideas, conceptos y políticas. Todo puede hacerse coherente, bien expuesto y analizado.

Veamos, por ejemplo, qué ha ocurrido desde marzo. En marzo, a partir del incidente de “Curimón” de un fortalecimiento de las FF.AA. y de un debilitamiento del Gobierno a raíz de la salida del PIR, se planteó la posible entrada de los militares al Gobierno, se planteó la cuestión del control de los grupos armados, la oposición en el Parlamento lanzó una ofensiva y se planteó una tentativa de represión al MIR, que logramos neutralizar. Los militantes fueron informados que existía una posibilidad de represión, y que por tanto había que tomar “medidas de seguridad”; con lo cual algunos militantes de más bajo nivel político identificaron la adopción de “medidas de seguridad” casi exclusivamente a una represión a la organización. Posteriormente se abrieron las conversaciones entre la UP y el PDC: la imagen –no las discusiones de fondo nuestras como C.C.– era que se había alcanzado un grado importante de estabilidad. Insistimos en que no era posible, que la inestabilidad social y política continuaba; sin embargo hubo confusión en algunos sectores de base y se vivió un clima en el cual se suponía que vivíamos una etapa de estabilidad política, confundiendo la estabilidad institucional con la política y social, y de allí surgió el criterio de que este era un período puramente político de masas –nosotros dijimos predominantemente político de masas– entonces la adopción de medidas de seguridad y el desarrollo de planes especiales en sectores de la organización se relegaron a segundo plano. El militante abandonando o descuidando lo anterior, se centró en la discusión ideológica, política, en el trabajo de frente. Con anterioridad se dieron los problemas de las elecciones CUT, la Asamblea del Pueblo en Concepción y un combate furioso del PC contra nosotros. Surgió entonces la imagen de que el combate al reformismo pasaba a un primer plano y también de que se daba una especie de aislamiento de la organización, cuestión que no era real, pero que a nivel de la percepción de algunos militantes tendía a verse así.

Con posterioridad vinieron los problemas de Lo Hermida, el ERP, las alzas, dándose allí evidentemente un relativo deterioro del reformismo y una activación, a un nuevo nivel, con participación de sectores de masas, del combate contra el reformismo. Y hoy de nuevo se plantea una ofensiva reaccionaria, estando incluso planteada la posibilidad de un golpe de Estado. Con

lo cual algunos militantes naturalmente se confunden en los hechos: de nuevo “medidas de seguridad” y ahora un “alerta”. La percepción de algunos militantes de estas situaciones y políticas es naturalmente relativamente incomprensible, ni bien articulada y coherente. De ahí nace la percepción inarticulada (comprensión a través de “compartimentos estancos” de nuestra política, en que una política no tiene relación con otra) y coyuntural (análisis por sumatoria de coyunturas y no análisis de conjunto). Esta es una debilidad de nuestra política y especialmente de su implementación, en la que la responsabilidad fundamental no corresponde a los militantes, sino a nosotros, como Dirección (falta de documentos escritos del C.C. y la C.P., rigor en análisis de conjunto, etc. . .).

Trataremos de explicar por lo menos cuatro grandes conceptos que parecían antinómicos y que no lo son. La explicitación de ellos ayudará, al menos, a superar esta debilidad.

1° El trabajo conspirativo por perspectivas de represión de cualquier tipo, parece contradictorio con las tareas de masas y políticas que en general definen el período.

2° La contradicción aparente –aunque no tan conflictiva como la anterior– que se da entre las tareas que se derivan de la lucha por un programa por frentes y las tareas de poder, y que más que contradictorias, no siempre se articulan cuidadosamente la una con la otra. Porque hablamos de consejos comunales, de pasar desde ellos a la lucha contra el Parlamento y sin mediar análisis riguroso a la política frente a las elecciones del 73, así el militante tiende a confundirse.

3° El combate al reformismo y su relación con la política de reagrupación de los revolucionarios, parecen contradictorios entre sí y la política de reagrupación de los revolucionarios con la política de marchar separados y golpear juntos, para relacionarnos con el reformismo.

4° La organización de masas o la masa organizada como le llamamos, que no siempre se articula con la movilización política, que tiene que ver con la que la coyuntura nos exige y con la movilización de masas por sus intereses de más largo alcance, como los objetivos programáticos. Una cosa es la organización y las medidas entre los militantes; son cuestiones que aparecen, en la plaza de un pueblo, como no teniendo nada que ver con la lucha contra el reformismo.

Todas estas tareas y conceptos tienden a verse como cosas sin relación entre sí, como “estancos” conceptuales, no relacionados. Aquí trataremos de tomar estos cuatro conceptos, explicar el carácter de uno y otro y ver su real relación entre sí.

Lo primero que hay que ver es que la lucha por objetivos programáticos: una movilización por la tierra, por casa, contra la Cámara Chilena de la Construcción, es una movilización que se caracteriza, en primer lugar, por ser una lucha a plantear en forma permanente entre las masas; en segundo lugar, es distinta para cada sector social; y en tercer lugar, que así como las reivindicaciones alrededor de la defensa de los ingresos de las masas, están ligadas a cualquiera otra forma de lucha que se plantee (ya que casi no pue-

de hacerse nada con las masas, sin considerar este problema), no puede acercarse nadie al movimiento de masas sin llevar reivindicaciones y sin proposiciones de programa; no puede pretenderse organizar a las masas, si no lo hago proponiéndome al menos resolver sus problemas fundamentales detrás de los objetivos programáticos que postulo.

Si vamos a una fábrica a construir una brigada de masa organizada, no debemos postergar las reivindicaciones y el contenido programático, porque la reacción haya pasado a la ofensiva. Si le quito el carácter de clase a la política de masas, alejo más capas que las que neutralizo. La reivindicación es la primera etapa para acercarme a los trabajadores, pero tras esa reivindicación yo traigo una proposición programática, aún en una coyuntura aguda, uno propone una organización de tipo político o una organización de tipo masa organizada, pero siempre tengo que hacerlo a partir de las dos primeras cuestiones planteadas. Es importante que el militante no se confunda en el frente y se limite a plantear las tareas de la coyuntura y se olvide el programa; o se limite al programa y se olvide de las reivindicaciones o llega sin la coyuntura política analizada a la fábrica, sólo con políticas programáticas en un momento en que la reacción pasa a la ofensiva.

Esta es una cuestión de validez general: no son exactamente las mismas cuestiones, son distintas y requieren rigor y precisión en su implementación, pero están la una vinculada a la otra. En un análisis evolutivo, viene probablemente primero la reivindicación, paralela al análisis de coyuntura, ambas nos acercan y permiten entrar en un frente. A partir de esas dos variables, pasamos a plantear objetivos programáticos; a veces hay coyunturas importantes que nos permiten articular las tres cosas, ganando la fuerza suficiente para poder dotar a ese frente de un cierto grado de organización. Y esa masa organizada –que es a la vez una organización política– le va a dar fuerzas a ese frente, no sólo para enfrentar una ofensiva reaccionaria, sino es también una organización para poner al servicio del consejo comunal, para la lucha por el salario, para la conquista de la tierra, para la conquista de las fábricas. Pero el temor nuestro –y esto tras una pesquisa superficial, a lo mejor las cuentas de ustedes nos ayudan a hacer un cuadro más claro– es que algunos sectores de la organización, en las coyunturas agudas se orientan a construir masa organizada y se posterga todo lo otro.

La lucha por objetivos programáticos es una actividad permanente. La organización de las masas, en sus distintas formas, es una actividad permanente. Otra cosa es que en una determinada coyuntura como ésta sea más fácil levantar ciertas formas orgánicas a nivel de masas. La lucha reivindicativa es una actividad permanente muy ligada al frente, y tercero, el análisis de la coyuntura política, es un deber diario del agitador, que tiene que ser capaz de incorporar los tres problemas para poder ligarse a la conciencia de las masas.

El trabajo de masas tiene tres características por lo menos, que también nos preocupa (esto debía ser elaborado en documento sobre el estilo en el trabajo de masas, no aquí). El primero: hay necesariamente en toda movilización de masas y actividad política en el seno del movimiento de masas una

progresión longitudinal o lineal: parto de una reivindicación, llego a plantear un objetivo programático y así voy avanzando a medida que tengo fuerzas. Pero lógicamente también –y aquí vienen dos conceptos que queremos introducir y que no siempre se practican– se requiere una línea transversal, que es por una parte la ampliación del apoyo de masas que justifica y permite esa progresión, o sea, que tengamos realmente la fuerza en el frente para poder hacer lo que nos proponemos (en cuanto especialmente a “tomas”) (eso elimina todas las desviaciones de “grupo conspirativo”) y otra cuestión que actualmente es particularmente importante para todas las tareas, es que además la línea transversal debiera incluir relaciones políticas con las otras corrientes, o sea, que también son necesarias las alianzas políticas.

La alianza no existe sólo para combatir al reformismo o porque, “lo dijimos en febrero”, detrás de la reagrupación de fuerzas, existe en toda actividad política, es permanente, y hay que incorporarla en las concepciones de los militantes. Eso es factible en todos los niveles: de sectores, comunales, regionales. Posteriormente, resuelto, todo esto, viene el tercer problema, que ya es la forma concreta que adopta la lucha en un determinado frente, que tiene mucho que ver la coyuntura, con las características del frente, la situación concreta, etc., y más bien corresponde a decisiones del respectivo Comité Regional o G.P.M.

Desde el punto de vista de la seguridad, pasando a analizar este problema, hay dos tipos de medidas de seguridad, quiero diferenciar la seguridad necesaria para enfrentar la represión, de la de acuartelamiento de la seguridad para un enfrentamiento.

Una cosa es una medida de seguridad –por ejemplo– frente a una represión sobre la organización que tiene más que ver con una red de seguridad de casas, limpieza de casas y operar con medidas de clandestinidad y seguridad, y que debiera ser una actividad permanente en la organización y no una actividad que tengamos que renovar coyunturalmente “por teléfono”. Nosotros diferenciamos en esta última dos tipos: tipo 1, para coyunturas inciertas, y un tipo 2 para “después de un golpe”, que vale la pena tener preparada.

Otra cosa son las redes de acuartelamiento, que tienen que ver con un sistema orgánico de las estructuras, que aseguran estar juntos, y por tanto en disposición de operación de cualquier tipo, tanto político como conspirativo. Y eso a su vez es conceptual y prácticamente distinto de los grados de alerta, que son graduaciones de cómo ir aplicando la seguridad y el acuartelamiento de acuerdo a una situación concreta. Y eso a su vez es distinto a la red de comunicaciones, que atraviesan los tres problemas anteriores.

Lo tercero podría llamarse activación de la organización que busca que se activen las estructuras antes pasivas, más, “Los Alertas” conectadas. Estos son los distintos grados en que se activan y realizan las tareas antes analizadas.

El cuarto problema que se deriva de éste es el de las comunicaciones, que atraviesa todas las tareas vistas anteriormente.

Todos estos aspectos tienen que ir paralelos a una progresión de la actividad de masas (bajo la forma que recién analizamos), y que tiene más o

menos que estar en un esquema genérico, siguiendo una progresión longitudinal y una transversal y que tiene finalmente que entroncarse con la activación de la masa organizada como tal y los planes de defensa comunal. Supongamos una coyuntura aguda con ofensiva reaccionaria, empezamos a agitar la asamblea por frentes, abrimos relaciones con otras corrientes, relaciono la organización con el frente, tanto con el frente que controlo o estoy enraizado y también con el que no he trabajado antes, luego busco relacionar los distintos sectores sociales: estudiantil, poblador, obrero, etc., de allí quizás marchas por la comuna; después si tenemos fuerzas, comité coordinador, de allí si podemos, concentración comunal y quién sabe, si hemos logrado una agitación suficiente; vuelvo a extenderme a otros sectores y a consolidar lo ganado, mientras voy extendiendo alianzas políticas con otros sectores. De ahí podemos plantearnos ciertas acciones ofensivas: una contra-manifestación por ejemplo, en caso de haber ganado bastante fuerza. Todo esto tiene que ir paralelo a una tarea orgánica interna y otra orgánica en el frente, que es el problema de construir la masa organizada.

Hacemos estas salvedades y precisiones que pueden parecer de perogrullo, porque hay en los hechos tendencias en muchos cuadros a consumirse en aspectos o en la organización del movimiento de masas, o en el desarrollo del aparato de clandestinaje, o en la pura agitación, y aquí el equilibrio tiene que intentarse seriamente. No podrá desarrollarse una cosa sin la otra, sabemos que todo esto hay que llevarlo a mayor sistematización, pero aprovechamos aquí para avanzar algo. Yo no sé si de aquí a mañana el compañero encargado de RIS pueda tener listo un esquema tan sistemático que incluya estos aspectos en los manuales de alerta. Pero es un nivel de problemas que nuestros militantes tienen que comprender y manejar con urgencia. Podrán no conocer el significado en profundidad y detalle de cada concepto, de cada red, de cada elemento concreto; pero los criterios generales tienen que manejarlos. Lo decimos, porque en la militancia de base existe confusión, por ejemplo, en una base de Santiago les llegó la orden de alerta, ni sabían lo que era ese alerta y decidieron acuartelarse en vez de ir al frente, y eran una base política.

Hay una tendencia a creer que lo primero que hay que hacer es fortalecer los aparatos conspirativos y eso es un poco culpa nuestra, no responsabilidad de los militantes. En concreto, hay un desbalance nuestro como organización en el sentido de que ha sido tal el retraso orgánico y especial nuestro, que en muchas de estas coyunturas agudas, gastamos gran cuota de los esfuerzos superando el déficit anterior. Esto pues no se trabaja constantemente y en forma permanente en las tareas especiales, se trabaja a veces sólo en la coyuntura. De modo que, durante las coyunturas agudas no se puede ocupar todo el tiempo necesario para discutir los problemas de las políticas de masas y los problemas políticos propiamente tales, y se tiende, por fuerza, más bien a solucionar problemas orgánicos, porque hay un retraso muy grande. Entonces ustedes y nosotros pasamos a impregnarnos de un esquema un tanto conspirativo y eso se ha transmitido al resto del partido, no porque nadie haya estado conceptualmente equivocado, sino porque la práctica

y los retrasos concretos nos ha llevado a eso. Por eso revisar estos criterios, discutirlos y conversarlos nos parece importante.

El problema de la lucha reivindicativa y de la lucha por objetivos programáticos por frente y su relación con la lucha por más poder popular, por constituir los consejos comunales, yo entiendo que la explicamos bien anteriormente. No es posible ganar fuerza de masas para constituir los consejos si no se hace a partir de los intereses de los sectores que se quiere incorporar; no se va a poder decidir democráticamente qué fundos se van a expropiar si no se constituyen consejos comunales campesinos por la base y no se van a desarrollar éstos sólo entre grupos de militantes de la cúspide de los partidos y menos se logrará si antes no se plantea un programa y una agitación en el movimiento de masas que dé la fuerza suficiente. Una cosa va íntimamente ligada a la otra, y yo creo que eso lo hemos discutido varias veces.

El problema de nuestra política de alianzas en la izquierda; visto ahora en general, una cosa es “marchar separados y golpear juntos”; esta política está tratando de resolver el problema de las alianzas del conjunto de la UP con nosotros y es una fórmula genérica que envuelve a la izquierda y que no compromete retroceder en los contenidos de nuestra política, define el enemigo común y permite golpear juntos. En segundo lugar “el combate al reformismo”. Este es el combate a la política reformista, que no constituye un combate contra el objetivo llamado Partido Comunista, y que sí es golpear las políticas reformistas. Distingue sectores dentro de la UP, es discriminatoria en esencia. Y la reagrupación revolucionaria que es “unir a los revolucionarios”. Con esa triada nosotros podemos completar el abanico y nos manejamos en las alianzas, sobre la base de que una de las tareas fundamentales del período es revertir la actual conducción reformista del movimiento de masas, como única forma de hacer madurar el proceso a una situación revolucionaria.

XI. Precisión del carácter de estas crisis

Por todos estos problemas y confusiones antes planteadas, nosotros queremos establecer para el manejo de los compañeros –porque ha habido confusión en el partido también– lo que llamamos la diferenciación de tiempos políticos en tres niveles; por absurdo y heterodoxo que pueda carecer, permítanme precisar lo que quiere plantear.

a) Hay un período abierto el 4 de septiembre que hemos definido muchas veces como de rasgos prerrevolucionarios y conocemos sus características gruesas. Es fundamentalmente, además, un período político y de masas.

b) Hay luego al interior de éste, períodos de agudización, hay períodos de semanas, meses, que se pueden diferenciar uno del otro. El período de las conversaciones UP-PDC es uno; éste de agosto es un período de agudización de los enfrentamientos sociales y políticos a un grado varias veces superior al que tenían antes.

Esta definición del período inmediato nos interesa por dos razones:

—La primera de ellas: diferenciarlo y denominarlo “coyuntura aguda”, “período de agudización” y no “período de golpe”. Noten la diferencia con los esquemas anteriores nuestros que ayudaban a confundir. Al principio hablabamos de estos períodos —ya van a ver ustedes por qué interesa la denominación— como de “períodos sediciosos” después hablabamos de “períodos de amenaza de golpe”, ahora hablamos de “períodos agudos”. Qué queremos decir con eso; un período agudo puede tener dos salidas, puede dar como resultado un golpe de Estado, que está dentro de las variantes posibles, o debe significar un salto adelante en nuestras políticas.

La crisis del reformismo y la inestabilidad del Gobierno vienen llevando al pueblo y a la izquierda al defensismo, a sólo “defender” al Gobierno, y nosotros pensamos que son los momentos en que debemos avanzar hacia adelante, entregando un camino alternativo y una política distinta. (“La catástrofe que nos amenaza y cómo conjurarla”, Lenin, lectura recomendada). De la crisis en períodos como éste no sólo deben hacer las medidas defensivas frente a las iniciativas que la burguesía tome, los revolucionarios y el movimiento de masas pueden y deben aprovechar esta “crisis” para demostrar que la única alternativa ante esta catástrofe es una política distinta, y hacer prender eso en el movimiento de masas. Esto no tiene nada que ver con el criterio “ético” de “aprovecharse” de la crisis, sino que además de necesario, es una realidad. De modo que no estamos hablando de un período “de golpe”, sino de una coyuntura “de agudización extrema de los enfrentamientos sociales y políticos”, la cual puede o no puede devenir en un golpe de Estado. En general, nuestro militante, por terminologías y concepciones confusas anteriores, tiende a esperar si “hay golpe o no hay golpe”.

Una coyuntura del tipo que estamos hablando es una crisis de los modelos vigentes en la izquierda o/y en la clase dominante, que hacen crisis, que originan enfrentamientos importantes y que pueden tener distintas vertientes de salida: o golpe de Estado, que está dentro de las posibilidades, o gabinete militar, o negociación con la DC o, para nosotros, un desarrollo importante en las políticas revolucionarias. Y es muy importante para nosotros distinguirlo, porque esto abre un abanico mayor de posibilidades y permite explicar lo que estábamos planteando antes, lo justifica teórica, política y semánticamente lo anterior y explica con mayor claridad por qué esta es una coyuntura fundamentalmente de masas.

Antiguamente el agitador nuestro, el militante, tendía a pensar: “si hay golpe entonces me acuartelo”, las masas “las movilizo para el momento del golpe” y después “si no hubo golpe” se desactivaba. Al contrario, ahora se trata de un ritmo de actividad ascendente, que no se activa por “golpe”, no se detiene si “no hay golpe” y que es una actividad en lo fundamental de masas, buscando dar un salto adelante.

—La segunda razón, diferenciarlo de los períodos extensos y de las coyunturas tácticas. Un período mediano, como el que estamos viviendo, se define por ciertos factores, y mientras no se alteren sustancialmente esos factores el período sigue siendo el mismo. Me explico: se tiende a confundir estos períodos o etapas de agudización de meses con coyunturas tácticas de horas y

de días, y por análisis impresionistas y de hecho puntuales, se intenta regir la actitud a tomar y frecuentemente a “desactivarse”.

Sin analizar los factores de fondo y fundamentales, que originaron la crisis y sin estudiar si se modificaron o no (les aclaro que esta es una lección reciente, no la tenemos absolutamente clara, lo estamos descubriendo en el curso de esta crisis, son enseñanzas que hemos estado adquiriendo, todos hemos aprendido en esto). En resumen, nos interesa establecer que se trata de períodos que pueden durar semanas, o meses, definidos por ciertos factores que hay que analizar bien, pesquisar, abstraer muy bien; conocer su causa, su evolución, sus características y su perspectiva. Y mientras no se modifiquen, seguir en la misma actitud de alerta y compulsión.

c) El tercer tipo de problema es el análisis puntual, coyuntural, diario, que uno debe hacer, y que consiste, en el transcurso de un período agudo, en analizar cómo van los flujos y reflujos de la situación. Normalmente nuestro militante tiende a hacer única y exclusivamente este tipo de análisis. Se olvida absolutamente que es un período de masas en general, tiende a ocuparse fundamentalmente de las tareas conspirativas y así se van desarmando políticamente. (Les advierto que esto lo hacíamos nosotros también en parte hasta hace un tiempo).

Qué es lo que uno debe analizar en la coyuntura; algunos factores: es posible, o no, que la prensa exprese algo, pero un “relajo” de la prensa no significa que deje de ser aguda una coyuntura, pero es un buen indicador; la información que se recibe de los partidos de la UP, no es tampoco antecedente suficiente, es un antecedente más a considerar, pero no es el único y es con frecuencia de mala calidad, el “estado de ánimo” o “el clima” o el que “huele” que “no hay golpe”, tampoco es un análisis global, de fondo y sistemático, y confunde en la coyuntura. Estos tres antecedentes y otros, analizados en concreto para el estudio de la crisis de agosto, constituyen elementos que permiten conocer la evolución de una crisis. Dicho francamente, para nosotros no es válido el tipo de análisis “de café” o el del “evaluador” francotirador de izquierda.

XII. Sobre la actitud de la organización ante la crisis

Un último concepto de manejo orgánico, instrumental y conceptual: una cosa es nivel de agudización objetivo y coyunturalmente presente en la situación, otra cosa es la actitud y la compulsión que como organización tomamos. La gravedad de la situación no se proyecta mecánicamente en el nivel de activación militante que nosotros tomamos. Nosotros tenemos que estar en un grado de activación superior, preventivo a la gravedad de la situación objetiva que se está dando. Si en los escritos de Lenin, no encuentran estos esquemas de “alerta”, de “acuartelamientos”, etc., es porque Lenin tenía una fuerza acuartelada permanente que era su “regimiento de ametralladores” o su flota del Báltico, o su fortaleza Cronstadt, pues la crisis del sistema les abrió a los bolcheviques esas posibilidades, no así a nosotros. Tenían miles de sol-

dados concentrados en los cuarteles con las armas en la mano, durmiendo en los cuarteles bajo régimen militar de funcionamiento, así pues, preparados para reaccionar ante cualquier eventualidad. Nosotros en esta situación tenemos que hacer el esfuerzo nosotros mismos y así nuestros grados de compulsión siempre tienen que ser en grado superior al que la coyuntura aparentemente requiere. Cuando ustedes vean que baja la “presión” y “el clima” de crisis difícilmente verán que les digamos que bajen la compulsión a cero, mientras el período no se modifique y los factores que originaron la crisis no desaparezcan o se modifiquen sustancialmente.

Este informe político va a ser completado con informes de distintos compañeros sobre el problema de la clase dominante, las tareas a cumplir en el terreno conspirativo como de masas. Estoy seguro que no hay ningún “aporte” en este informe, más bien se han apuntado una serie de precisiones, de manejo de antecedentes, cuestiones y políticas que nos parecen necesarios, porque si no precisamos y relacionamos las distintas políticas, difícilmente serán comprensibles.

Antes de terminar, quisiéramos insistirles que lo primero debe ser superar nuestro déficit orgánico: la constitución de una red de acuartelamiento no es tarea de coyuntura, es tarea permanente; la seguridad, las comunicaciones, los alertas y su manejo, son cuatro problemas que nosotros nos proponemos resolverlos en estos días y dejarlos resueltos. A nosotros como dirección nacional nos pasa –no sé si a las direcciones regionales les pasa lo mismo– es que los contactos los va concentrando cada vez más la cúspide orgánica; nuestra dirección media son muchos de ellos rentados, que han perdido relaciones personales y están bastante aislados. Por eso nosotros gastamos un tiempo increíble ayudando a construir este tipo de estructuras, así no nos podemos centrar en las cuestiones fundamentales, por eso nos proponemos hacer un serio esfuerzo y dejarlo en estos días montado en definitiva. . .

Compañeros, eso sería todo.

Salvador Allende: Entrevista concedida a Radio Portales

(10 de septiembre de 1972)

Periodista: Resulta que en 15 días el país ha estado marcado por la violencia. Numerosos hechos, en diversas ciudades del país, han configurado un panorama, que por decir menos, preocupa e inquieta a los chilenos. Es por eso que hemos creído interesante dedicar este programa a conversar libremente con el Presidente de la República.

Por otra parte todos los chilenos saben que el Dr. Allende es uno de los mandatarios en la historia de Chile que más habla con su pueblo, que más viaja, que más está en contacto con las masas.

Un periodista extranjero lo definió a usted, Dr. Allende, como el Presidente que había instalado su despacho de trabajo en la cabina de un avión, en el asiento trasero de su automóvil. Esto es para graficar su permanente movilidad por todo el territorio nacional. Sin embargo, no es frecuente que el Presidente converse con un grupo de periodistas.

Esta es la primera vez, desde que asumió el mando, que concede una entrevista a un grupo que integra un programa radial estable. Quisiéramos conversar con usted acerca de los más importantes y urgentes problemas que preocupan a los chilenos. El problema económico, por ejemplo. Yo creo que vamos a hablar de eso. Pero la noticia de estas últimas horas la constituye la situación creada por una empresa norteamericana que explotaba las minas de cobre.

Si usted prefiere comenzaremos hablando de este tema.

Presidente: Como usted quiera, pero antes quiero manifestar que yo me he reunido y me seguiré reuniendo frecuentemente en conferencias de prensa con periodistas nacionales y extranjeros.

Y efectivamente en un programa estable sólo he conversado con ustedes, ahora y antes, cuando era Presidente electo.

Aprovecho entonces los micrófonos prestigiados de Radio Portales, y este espacio *La Gran Encuesta*, para saludar a los oyentes de Radio Portales, para saludar a mis compatriotas y decirles que estoy llano a que dialoguemos sobre los tópicos que ustedes quieran. Usted me ha planteado el problema de la Kennecott, y yo creo que con mucha razón no puede haber un solo chileno que no esté inquieto e indignado por la resolución de esa empresa transnacional, que pretende se embargue la producción de cobre chileno, los embarques de nuestro cobre, para resarcirse, según ellos, del no pago de indemnizaciones. Hay que destacar una vez más que lo que el Gobierno ha he-

cho es aplicar una reforma constitucional aprobada por unanimidad en el Congreso, donde el Gobierno es minoría, apreciable minoría. Además parece no sólo paradójal, sino que inconcebible, que una empresa que recurre a un tribunal, cuando le es adverso, desconoce la sentencia de ese tribunal.

Qué validez jurídica, qué actitud puede significar esto. Yo creo que Chile entero, no sólo los partidos políticos que aprobaron en el Congreso la iniciativa del Gobierno, sino que el país debe reaccionar con dignidad de país, con sentido nacional, con patriotismo. (...)*

(...) los contratos del cobre. Son verdaderos documentos entregados a los bancos, que se hacían cargo de la cobranza y por eso tenían un interés determinado. Pero además anticipaban divisas, dólares, ¿por qué?, porque los corredores son en dólares. Con la campaña que se ha hecho internamente en Chile, de las grandes fallas, de la deficiencia, que no vamos a poder cumplir, que se han reventado tres, cinco hornos reverberos, etc., se ha creado una atmósfera internacional. Entonces esos contratos llevados a los bancos, hoy día para los bancos no son documentos que tengan respaldo. . . no va a producir el cobre. Y este hecho es un simple papel. Es un daño extraordinario para Chile.

Periodista: Presidente, en esto que usted está diciendo uno puede advertir que es tal la dificultad fundamental, vale decir, en lo siguiente: que para nosotros, para el proceso chileno, la forma de imperialismo, ha sido sofisticada, mucho más en la sombra, que las que han vivido otros pueblos de otras experiencias, y que tal vez esa es quizás la dificultad mayor que hoy día se afronta respecto a una unidad interna. No sé cómo lo ve usted.

Presidente: Claro, usted tiene razón, Fernando Reyes, porque en este país nadie aceptaría una intervención directa, nadie aceptaría lo que ocurrió en Santo Domingo. Chile es un país que tiene un gran sentido nacional, y ha habido una reacción de todos –pienso yo– de todos, aun de los más recalcitrantes opositores al Gobierno. Pero entonces, esta manera de actuar, soterrada, encubierta, no la ve la gente. No la palpa la gente. Además qué sabe el campesino, qué saben muchos compañeros obreros, inclusive empleados, y aun profesionales, por ejemplo: como hemos pagado indemnizaciones por las compañías del cobre, piensan que nosotros hemos tomado las mismas sin hacernos cargo de ningún compromiso. No, las compañías tenían una deuda de 726 millones de dólares que tiene que servir al Gobierno chileno. Como no indemnizamos a las compañías, por aplicar la reforma constitucional, bueno, nos han seccionado los créditos a corto plazo en los bancos americanos, a pesar de haber renegociado con los bancos la deuda que tenía Chile con ellos, y en buenas condiciones, yo diría con comprensión de los bancos, pero no han repuesto las líneas de créditos. Chile tenía 230 millones de línea de créditos de los bancos norteamericanos. No tenemos un centavo. Piense usted lo que significa entonces, el hecho de que además el precio del cobre ha

* Original ilegible. (VF)

bajado extraordinariamente. En el Gobierno del Sr. Frei, el año 70, el precio del cobre fue de 59 centavos la libra. El año 71 fue de 49 centavos la libra; o sea, 175 millones de dólares de menor ingreso.

Produjimos más cobre, a pesar de todo lo que han dicho, produjimos más cobre porque entró a caminar la Exótica y la Andina. Este año vamos a producir más cobre porque va a aumentar la producción realmente. Ya en marcha la Exótica y la Andina vamos a producir más que el año 71. Sin embargo, vamos a tener menos ingresos, porque el precio del cobre ni siquiera va a llegar a 49 centavos, va a ser 48.

Periodista: Presidente, yo sobre este punto quisiera hacerle una pregunta. En verdad que este asunto de la Kennecott, además de serio, es grave, y usted dice que el país va a tener que respaldar a su Gobierno, cosa que me parece absolutamente lógica, porque a partir de la aprobación unánime de la reforma constitucional se ve que en el país hay consenso, hay un criterio unánime, respecto a la conveniencia en esta materia del cobre; pero ¿cuáles van a ser las reacciones, las actitudes del Gobierno para defenderse de esta embestida de la Kennecott? Porque en la medida que la gente pueda ver, no sólo el problema sino la manera de defender el país, su resolución entonces puede hacer más claro el apoyo.

Presidente: En primer lugar formar conciencia. Insistir sobre esta materia y decir, que lo que yo he llamado “el sueldo de Chile”, el cobre, cada vez disminuye más, pero no como dicen los opositores, por la menor producción, sino por un menor precio, por la amenaza de los embargos. Esto sí que es importante; que el país lo sepa positivamente, porque además tenemos ahí, en puerta, otros conflictos derivados también de la aprobación por el Congreso de un proyecto de iniciativa del Ejecutivo. Ustedes saben, compañeros de *La Gran Encuesta*, y no lo olvide Raúl Tadré, que lo noto interesado en lo que estoy planteando, no olviden que hemos enviado un proyecto para nacionalizar la ITT. Ha sido aprobado por unanimidad en la Cámara, ¡por unanimidad!

Pasa en segundo trámite al Senado. Vamos a tener, indiscutiblemente, problemas, dificultades, porque ellos pretenderán que se le pague indemnización a esa empresa que estuvo a punto de llevarnos a una guerra civil, que intervino, que gastó dinero, que movilizó influencias, que prácticamente definió en forma despectiva a los sectores chilenos, desde las Fuerzas Armadas hasta los políticos; que tuvo influencias en el asesinato del general René Schneider. Bueno, viene la nacionalización de la ITT, puesto que la ITT tiene un fuerte seguro que la respalda, por lo cual es responsable el Estado americano. Dicen que para pagarle a la ITT este seguro, al ser nacionalizada, tiene que poner impuesto al contribuyente americano. Entonces se crean una serie de problemas que la gente no los percibe, o sea, no se da cuenta, como decía Fernando Reyes Matta: esta es una forma mucho más encubierta pero, caramba, extraordinariamente dañina, porque eso sólo cabe crear conciencia entre la gente, y además (perdón, un momento compañero Cáceres, para con-

testarle a Juan Gana), digo que nosotros tenemos, desde el punto de vista jurídico, que hacer los estudios más profundos y serios. Apelar a la conciencia internacional, además si se nos cierran algunos mercados, por ejemplo la producción de El Teniente, cerca de 70.000 toneladas que tienen una característica especial de cobre que se produce, estaba destinado fundamentalmente a Inglaterra. No creemos que Inglaterra deje de reclamar el cumplimiento del contrato, que es a largo plazo. Pero nosotros tenemos también la posibilidad de colocar ese cobre en otras partes, donde no va a poder ir a embargarlo. Pero nos interesa mucho que haya una gran expresión de protesta nacional, y que además internacionalmente se vea cómo actúan estas compañías. Por lo demás quedó muy claramente establecido en la reunión de la Tercera UNCTAD, y además inclusive el Secretario General de las Naciones Unidas, sobre todo el Subsecretario ha condenado la reunión habida en Ginebra.

Nuestro delegado, Hernán Santa Cruz, sacó un acuerdo que no me imaginé jamás que iba a ser aprobado, unánime, fíjense ustedes, unánime. O sea, hay una condenación mundial, y esto es favorable a la posición de Chile.

Periodista: En todo esto que hemos conversado ha estado latente un tema que nosotros hemos denominado la Unidad del Pueblo. Yo quisiera conversar un poco sobre eso, tal vez sea Hernán Rodríguez. . .

Periodista: Presidente, yo quisiera hacerle una pregunta sobre eso, porque he estado conversando hace algunos días, con un periodista norteamericano que es corresponsal del *Washington Post* en América del Sur, y lleva como dos años instalado en Buenos Aires y viaja mucho a Chile. Está muy interesado por el caso chileno y le llamó profundamente la atención la marcha del lunes pasado. Le llamó la atención que un Gobierno después de dos años obtenga un respaldo tan grande, sobre todo de la clase trabajadora, y me decía: “esa gente es la que produce, la que desfiló allí”.

Después también le llamó profundamente la atención el resultado de la elección de Coquimbo, donde una obrera de la Unidad Popular, Amanda Altamirano, logró derrotar a toda la fuerza de la oposición unida, cosa que nunca se había visto, hacía años por lo menos que no se veía en Chile. Indudablemente que esto demuestra un gran respaldo popular. Ahora más, él también me comentaba lo de la CUT, cómo estaba trabajando la CUT, y como no entendía mucho el proceso chileno en este aspecto me preguntaba a qué se debía que en la CUT, incluso los demócratacristianos estuvieran trabajando junto con los socialistas, los comunistas y demás partidos de la Unidad Popular. Y después –perdone que me alargue en esto– pero resulta que después me comentaba por ejemplo que en las salitreras, en la Oficina Pedro de Valdivia, los trabajos voluntarios, el presidente de los trabajos voluntarios, elegido por los votos de la Unidad Popular es un demócratacristiano. Pero todo eso, indudablemente, me decía este periodista norteamericano, es incluso difícil de explicar para el resto de sus lectores del *Washington Post*.

Presidente: Lo interesante sería que los periodistas americanos trataran de explicarlo. El problema es que no tienen mucho interés en decirlo, en expli-

carlo. Por lo menos, por lo que yo veo en los recortes de prensa que llegan de los diarios americanos. También hay periodistas que tienen un sentido ético y que dicen lo que ven por lo menos. En este caso el periodista tiene la razón en sorprenderse. Yo le he dicho, es posible que alguna gente no lo crea, pero la verdad es así, y usted mismo acaba de decir algo que yo quiero reforzar. Es la primera vez durante este Gobierno, y creo que habrá habido dos veces, o tres a lo sumo, en los últimos 30 años, en que oposición y Gobierno se han enfrentado y ha ganado la oposición al Gobierno. Recuerdo el caso de las elecciones complementarias en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda. No las elecciones presidenciales, hablo de las elecciones complementarias parlamentarias.

Así que esta victoria en Coquimbo es muy significativa. Sacamos el 53% de los votos, además yo le he dicho a Chile, este es el Gobierno que tiene más apoyo. Ningún Gobierno después de 20 meses de actuar, ha tenido como el Gobierno que presido un apoyo expresado en las urnas frente a la oposición unificada. Sin tomar en cuenta las elecciones municipales donde ganamos nosotros, la fuerza de Gobierno sacó 50 puntos y tanto. Sin tomar en cuenta esa votación. Eso sí, considerando las elecciones complementarias que ha perdido el Gobierno y la de Coquimbo que ganó. El promedio es de 47 puntos 8. En cambio la DC a los 20 meses de Gobierno en la elección sacó el 43% de los votos.

En segunda están las fuerzas sociales de los trabajadores a pesar de haber vivido, a pesar de todo lo que se dijo, sacamos más del 70% de los votos en la CUT. Y que se haya movilizado de Arica a Magallanes, en las capitales de provincia y en algunos departamentos así como yo creo se lo digo, esa es mi creencia, más de un millón y medio de chilenos, según las informaciones que tengo, y ustedes lo deben haber oído, en los actos realizados en Valparaíso, en Antofagasta, en Concepción, en Los Angeles, en Puerto Montt, está allí vivo el drama de los tres campesinos asesinados, como estaba en Los Angeles, como estaba en Valparaíso el muchacho muerto, el muchacho de la Juventud Comunista.

El hecho es que nunca, nunca, se movilizó una masa así, casi el 10% de la población.

En seguida no sólo la gente en la calle, sino que además la paralización de las grandes industrias, el cobre, carbón, salitre, simbólicamente ferrocarriles, hospitales, escuelas, comercio, estaban señalando la gran fuerza social que tiene el pueblo, pero lo que es más importante es meditar lo que yo señalé en una frase.

Aquí en Santiago nadie se ha atrevido a discutir las cifras que se dio por no alarmar a los periodistas extranjeros: fueron 600 ó 700 mil personas. Pero, ¿cuándo se moviliza esa gente?, se moviliza en el momento en que las alzas golpean más fuertemente en sus hogares. Se movilizan en un momento en que el costo de la vida ha alcanzado niveles de crecimiento, que nosotros mismos no nos imaginábamos y sin que se estuviera despachado el reajuste.

Por eso, a mí me emocionó extraordinariamente, me golpeó, tuve conciencia de lo que es el pueblo y la plena convicción cuando la gente tiene fe,

tiene confianza; los trabajadores saben que este es su Gobierno. Entonces, los yerros, los errores, los comprenden. Y por último los admiten, y por último están dispuestos a sufrir. Por eso un obrero llevaba un letrero, un cartón escrito por él que decía: “prefiero comer un pan de pie que una gallina arrodillada”. Yo creo que eso simboliza una dignidad, que antes no vimos. Y esta es la fuerza del pueblo, la conciencia en que él es el factor de la historia, y este es su Gobierno y por lo tanto sus errores, son sus errores, los errores de los trabajadores, porque este es el Gobierno de los trabajadores.

Periodista: ¿Qué importancia le atribuye usted, dentro de este tema a la declaración conjunta de comunistas y socialistas? Le pregunto, porque se ha venido hablando, y con bastante frecuencia de la división que hay dentro de la UP.

Presidente: Yo no diría división, Leonardo Cáceres; yo diría falta de pensamiento homogéneo, central; falta de una concepción táctica igual, ya que es de suponer, hay una estrategia común para llegar al socialismo. Lo he dicho públicamente, por lo demás.

Yo mandé una carta a los partidos de la UP y me contestan independientemente. ¿Quiénes? El MAPU, la Izquierda Cristiana, el API, los comunistas. Pero todavía no me contestan los radicales, ni mi propio partido.

Ahora, la contestación de los cuatro partidos, cuyos documentos he recibido, no es significativa de un pensamiento homogéneo, han habido discrepancias; en todo el mundo las hay y aquí las he criticado duramente.

Lo ocurrido en Concepción tiempo atrás, cuando participaron con el MIR todos los partidos de la UP, menos los comunistas.

Después la llamada Asamblea Popular, como he condenado en la forma más dura lo ocurrido el miércoles de la semana pasada, que significó la muerte de un carabinero y dos heridos. El cabo Aroca murió y he criticado y he dicho que es inconcebible que alguien pueda pensar que un partido de Gobierno pueda deliberadamente haber provocado, a través de un militante, la muerte de un carabinero, en circunstancias que el orden público, el orden que el Gobierno necesita, lo mantiene el cuerpo de Carabineros; fue de hecho un provocador o un degenerado, que puede haber estado infiltrado en las filas de los partidos populares. Pero hay un hecho real, claro suceden esas cosas.

Entonces, el pueblo tiene que entender que debe tener sumo cuidado y evitar las provocaciones.

Yo he tenido que utilizar toda mi influencia para atajar a grupos fuertes de obreros, es el grupo por ejemplo, del Cordón de Cerrillos; podrían venir 15.000 trabajadores al centro de Santiago, para barrer con los 300, 600 –digamos– fascistas insolentes, provocadores; yo les he dicho: no. No, eso es lo que quieren, un enfrentamiento, eso es lo que desean.

El Gobierno tiene la fuerza del orden público que le permite garantizar el orden. Fuera de eso está la Zona de Emergencia si la cosa se agrava, el Estado de Sitio, etc. Diga no más. . .

Periodista: En torno a esto que usted está recién señalando, uno advierte la importancia de una frase que dijo en el Estadio Chile, exactamente fue ésta: “Derrumbar este Gobierno es hacer estallar este país; pretenden derrumbarlo porque no lo van a derrumbar es destruir este país”, detrás de esa afirmación, en consecuencia, uno advierte que el Presidente Allende gobernando este país es la mayor garantía de paz para hoy en Chile. Es así y ¿por qué?

Presidente: Yo pienso que es así, porque en esencia subsiste la democracia amplísima que todos vivimos; aquí no sólo hay elecciones complementarias, municipales, hay elecciones todos los días, además los derechos ciudadanos no sólo han sido preservados, sino que han sido ampliados por nosotros: la libertad. ¿Usted cree, por ejemplo, en otros países un Presidente se somete a esta conversación? Ustedes preguntan lo que quieren, lo que se les ocurre.

Yo creo que la libertad de información aquí es la más amplia que pueda haber, la libertad de prensa en algunos momentos tiene caracteres de libertinaje, no una libertad.

Yo he visto opiniones de dichas relaciones, de otros países que lo han dicho admirados; me han dado inclusive la opinión de: “Sr. Presidente, cómo puede llegarse a ese extremo la libertad en Chile, cuando se traspassa la ética, cuando todos los días se desinforma, cuando se niegan hechos evidentes y claros”.

Por ejemplo algunos diarios, decían que todo el mundo quedó impactado por la marcha en Santiago, ¿verdad?, ese discurso que usted comenta, imagínese pues, Fernando Reyes, en él, usted ha leído una frase: yo he visto tergiversado lo que planteo en las mayorías de las publicaciones de los diarios de oposición. Nadie, por ejemplo, nadie, comenta que yo acogí con fervor, con respeto, con afecto, las palabras del Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Y dije con qué tranquilidad de conciencia que yo acogí a ese llamado, porque díganme ustedes no ha habido ni una dificultad, una molestia, un incidente entre el Gobierno y las distintas iglesias. Hablo de la Iglesia Católica, Ortodoxa, Sabatina, Protestante, Evangélica.

Ahí están los Congresos Ecuménicos. ¿Dónde, en qué país se han realizado como se realizan aquí?

He planteado yo, he hecho la denuncia, he demostrado cómo, por ejemplo, se movilizan 700 mil personas en Santiago y no se quiebra un vidrio, no se abolla un auto, no se hiere a una persona. En cambio 600 ó 700 personas, por desgracia algunos muchachos estudiantes, a quienes colocan adelante todavía y los dirigen desde atrás; y un grupo de maleantes quemando fardos de papel, rompiendo vidrios, las vitrinas de los comerciantes; inclusive disparando con hondas en fin. . . Acciones netamente que podríamos llamar de desplazamiento fascista, casi de un aspecto subalterno, pero eficaz en esta especie de enfrentamiento urbano; cosa que nunca ocurría en Chile; ahí está el toque de las cacerolas.

Todos hemos visto en los titulares de los diarios, en primera página: “acumulen rabia”, y yo decía en algunos discursos, ¿y si el pueblo acumula-

ra rabia? ¿y si esa rabia se desbordara algún día? ¿Alguien podría moralmente criticar al pueblo cuando son ellos los que le han estado diciendo a los chilenos que acumulen rabia? Nosotros hemos estado diciéndole al pueblo “no, no queremos, no deseamos el camino a la violencia, lo rechazamos”.

Cuando yo oigo hablar a cierta gente de la guerra civil, por ejemplo – no diré que se me pone carne de gallina, en lo personal–, pero sí me inquieta profundamente. Este país tiene tal madurez, los obreros tienen tal fuerza, manejan un porcentaje tan alto en la economía, tienen influencia política, no sólo en los sindicatos industriales, sino que agrícolas. ¡Imagínese si se desbordara aquí la pasión! ¿Qué pasaría con nuestra economía? Fuera de lo que no queremos hablar, lo que significaría un verdadero genocidio, entonces, compañero, yo le digo, he recogido las palabras del cardenal, he mirado con mucha complacencia lo que plantean algunos hombres de la Democracia Cristiana, la declaración de Tomic, lo que he oído respecto a Leighton, inclusive el planteamiento del Presidente del Senado. Yo creo que el 90% de los chilenos no quieren un enfrentamiento. Yo sé perfectamente bien que en los sectores de izquierda tenemos termocéfalos pero... ¡caramba! Nadie puede negar que el Gobierno ha sido duro con ellos. En Curimón: detenidos, justicia militar, eso que llaman Ejército de Liberación Nacional –además es un mito– también: en la cárcel; lamentablemente lo de Las Ventanas: en la cárcel. Acaba de ocurrir una cosa absurda en la Posta Central: en la cárcel. No hemos tapado ni taparemos jamás a un hombre de izquierda, porque si es hombre de izquierda, y si es militante del Partido Socialista, es doblemente delincuente. Porque este es el partido del Gobierno y yo soy militante de ese partido, soy fundador del partido; porque nos hemos comprometido a usar una táctica ante la conciencia nuestra y ante el país.

Periodista: Lo que usted está diciendo es altamente positivo. Porque si vamos a decir las cosas derechamente, hay muchas personas que se inquietan a veces por cierto tipo de acciones que no aparecen suficientemente aclaradas, entonces se dice, se piensa, se habla, y hay problemas que rebotan indirectamente aquí en el Gobierno.

Entonces, para decirlo con franqueza, hay gente que piensa que a usted le falta un poco de autoridad, Presidente, entonces yo he dicho –y se lo voy a repetir aquí mismo– que usted es un poco el director de la orquesta y que a veces la orquesta desafina porque algunos músicos no ponen atención a la batuta, o porque tocan por su cuenta, como solistas; entonces yo considero que esto que ha dicho usted es realmente positivo, porque es una respuesta a la gente que tiene incertidumbre, dudas. Este concepto suyo me parece bueno.

Presidente: No sólo lo he dicho, sino que yo le pregunto a usted: ¿Cuándo este Gobierno ha amparado o ha dejado en la sombra un hecho de esta naturaleza? Hemos entregado a la justicia a los culpables, a la mayoría de ellos por violar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Bueno, hasta ahí llegamos. Yo sé, por ejemplo, que alguna gente me criticó cuando yo fui al Campamento Lo Hermida. Bueno, si lo he dicho ante el país; tengo un concepto

distinto de cómo ejercer la autoridad; yo creo que no he rebajado la autoridad, yo creo que es mi obligación, primero por convicción, segundo porque yo soy un hombre elegido por el pueblo, por los trabajadores, por los pobladores. Si había muerto un poblador en un hecho que yo estimo desgraciado y que no debió producirse jamás, mi obligación era ir a enfrentar allá las cosas. Dicen: “pero el Presidente pierde autoridad porque allí se leyó un documento en que se faltaba al respeto”. A mí no me han faltado el respeto. Además fui allá y les dije: “en la mañana de hoy me han entregado un documento en el que me exigen que públicamente y por escrito acepté estos puntos y en caso contrario que no viniera al campamento. Yo no les he aceptado los puntos y estoy aquí, y estoy aquí solo, con el Edecán de Servicio y además con el Director de Investigaciones subrogante”, con lo cual yo estaba defendiendo el Servicio y demostrando que yo respeto a los servicios.

Como estaba cuestionado el Servicio de Investigaciones fui nada más que con dos personas, pero una de ellas era el Director de Investigaciones subrogante, y puedo decirles a ustedes que yo les dije cosas muy claras a los pobladores. Expresé con un lenguaje justo, para que ellos me entendieran, que yo era el principal responsable; porque en un país el Presidente de la República es el responsable de la marcha administrativa y económica de la nación, y que yo por cierto, iba a tomar las medidas diciendo que no soy un hombre que pueda colocar en la cárcel a nadie ni sacar de la cárcel a nadie; aquí hay poderes del Estado, aquí hay normas que respetar, aquí no se puede juzgar a una institución si es justa o injusta su acción por la actitud de una o dos personas. Eso se lo he dicho a los pobladores, como lo he dicho que no me pueden exigir más de lo que yo pueda hacer.

Este es mi concepto de autoridad, lo que el Gobierno va a hacer.

Periodista: Respeto a lo que han dicho los pobladores de Lo Hermida, que nunca iban a ir más a una concentración llamada por el Gobierno, y sin embargo fueron todos, llevaron carteles, asistieron organizadamente.

Presidente: He sido invitado nuevamente a Lo Hermida. Voy a ir a conversar con ellos. Allá me interrumpió un hombre que no es poblador, Moore, es el mismo que se ha tomado ahora la Universidad; como nosotros respetamos la autonomía de la Universidad no podemos hacer nada. Pero eso, es, respecto a mi juicio, bueno. . . por respeto al público y a ustedes no voy a decir nada. Pero no es la actitud de un dirigente político formal, la del Sr. Moore; la tuvo ya con exhibicionismos y los propios pobladores le dieron una muy buena lección. Y ahora el Vicerrector de la sede de Osorno, según se dice, encabeza la toma del local central de la Universidad.

Bueno, nosotros respetamos la autonomía universitaria. Yo espero que las organizaciones estudiantiles reaccionen y señalen la actitud de este grupo que yo pienso está efectuando una provocación, porque no va a solucionar ningún problema, no va a trazar ningún camino reivindicativo, justo, no va a encontrar el apoyo –este señor fue candidato a secretario general de la Universidad y sacó un número increíblemente ínfimo, subínfimo de votos y

sin embargo se permite estas cosas. Bueno, también, como decía Juan Gana que es falta de autoridad, no, si estas cosas ocurrieron; la gente tiene mala memoria, acuérdesese cuando fue Caldera el Presidente de Venezuela, y estaba Bernardo Leighton de Ministro del Interior, se produjo un hecho bochornoso que yo lamenté profundamente. Acuérdesese también de las tomas de distintos planteles universitarios de los gobiernos de Alessandri y Frei, como tomas de sitios, etc. A propósito de esto, acuérdesese de las huelgas. ¿Cuánto duraron las huelgas de maestros? Duraron tres meses y tanto. Las huelgas del cobre, de la salud, del carbón; todas esas cosas ya se han borrado de la memoria de mucha gente, porque intencionalmente quieren borrarlas. Y magnifican algunos hechos que no debían ocurrir, sobre todo de parte de la izquierda. En eso sí yo he sido muy duro, precisamente con los militantes de la UP y más duro con los militantes de mi partido.

Pero nunca hemos tapado a nadie, y no taparemos jamás. Mucho menos que haya gente que está jugando con polvorita, no, jamás.

Periodista: Usted recién habló de provocación; creo que en este momento en Santiago se está viviendo un ambiente de provocación, sobre todo en sectores populares, porque grupos organizados de ultraderecha se están entregando a algunas tomas, están hostigando a los pobladores, concretamente en Las Condes, en La Granja, por Maipú, y se han ido creando algunas situaciones bastante conflictivas.

Ahora, usted habló también del estado de emergencia. . .

Presidente: Son hechos aislados. ¿De dónde salieron los 700 mil manifestantes? De las poblaciones, ahí está la fuerza nuestra.

Son hechos aislados. ¿Por qué? Porque ellos son mercenarios, y ahí está la declaración de un muchacho que dice que le pagaron como se dice 10 lucas, por venir a provocar incidentes aquí en el centro, la madre lo reafirmó.

Periodista: Yo le hablo, Presidente, de unos grupos organizados de ultraderecha, que no son populares, que instalan sus automóviles frente a los campamentos, que los amenazan, que los hostilizan, que les encienden las luces en las noches, que los amenazan de que van a incendiar las casas, que balean a los pobladores.

Presidente: Eso sí, claro, esa es la imagen más clara del fascismo, esos son los hechos absolutamente ajenos a lo normal de nuestro país. Esto es una cosa "craneada", organizada, yo diría que hay consejeros con mucha experiencia internacional en este tipo de hechos. Y el que lee los documentos de la ITT encuentra, estimados compañeros de *La Gran Encuesta*, encuentra que ahí está diseñado todo el plan de provocación, no lo estudian o no lo leen, o no quieren recordarlo.

Pero aquí hay hechos evidentes que demuestran corrupción, aquí hay mentalidad extranjera; la idiosincrasia, la aptitud del chileno, su modo de ser es muy ajeno a lo que ha ocurrido. ¿Cuándo, por ejemplo, estuvieron rodea-

3072 LA IZQUIERDA CHILENA (1969-1973)

das las casas de los ministros? ¿En qué gobierno? Ni siquiera en el gobierno de González Videla, cuando hubo el campo de concentración de Pisagua, la gente opositora reaccionó de esa manera. ¿Cuándo pasó en el caso de Alessandri, cuándo hubo muertos en la población de José María Caro? ¿Cuándo sucedió en el gobierno del señor Frei, a pesar de lo ocurrido en Pampa Iri-goyen? ¿Cuándo se tuvo sitiada a una madre con tres hijos como en el caso de la esposa y los hijos del ministro Matus?

Enseguida los dirigentes políticos de izquierda, en seguida la propia gente de izquierda, empleados, profesionales, que viven en el sector de Providencia, en el sector de Las Condes, son atacados también. ¿Cuándo había presenciado el país un hecho más deleznable que el atentado contra Mireya Baltra, básicamente por ser mujer, además de ser Ministro de Estado? Le hicieron casi pedazos el auto; yo no les voy a hablar de las cosas familiares porque yo sí, yo también tengo hijas; la menor de mis hijas vive en la que ha sido siempre mi casa y a la que voy a volver cuando deje Tomás Moro – que no es casa particular, sino que es la casa del Presidente de Chile–, en Guardia Vieja.

Noche tras noche, oyendo tocar las cacerolas en la calle; los vecinos no lo hacen, porque nos conocen demasiado; estamos viviendo allí desde hace 20 años; mucha gente no comparte nuestras ideas pero yo nunca vi un afiche, a dos y media cuadras de Guardia Vieja, nunca vi un afiche de ninguno de los candidatos opositores o de mi candidatura ni en las campañas de Alessandri ni en las campañas de Frei ni en la otra campaña de Alessandri.

Yo sabía que en esas dos cuadras y media que hay desde Providencia hasta mi casa, el 80, el 90, el 95 por ciento de la gente no estaba conmigo, pero, ¿por qué no ponían los afiches?, por respeto al vecino, al padre de la familia, que hacía una vida normal, tanto con su mujer como con sus hijos. Y gente que caminaba por el barrio como cualquier persona y que nunca tampoco fue a molestar ni a provocar a los vecinos. Ahora, dos, tres, cinco noches seguidas, no sólo con cacerolas sino que disparando al aire y lanzando toda clase de denuestos. Entonces, son cosas ajenas; contrastan la movilización de miles y miles de gentes nuestras sin que haya habido un vidrio roto; ¡ah!, ahí está el fascismo, ahí está pues, y esto tiene que ser una advertencia, esa gente que es capaz de tener como argumento la cachiporra, el fierro, la honda, el revólver, la violencia: en resumen, esa gente no se detiene ante nada, y el fascismo es la negación de la vida, de la libertad y la democracia.

Periodista: Presidente, puedo invitarlo a que miremos el otro lado de la medalla.

Presidente: Pero diga no más, si esto es una conversación.

Periodista: Gracias, Presidente. Usted destaca y con razón, plenamente con razón el apoyo popular que se ha manifestado en la última concentración en términos concretos. Yo le quisiera decir una cosa, si se quiere modesta o si se quiere doméstica. A la radio llegan muchas cartas de todo el país, de Fu-

taleufú, de Lonquimay, de Marchigüe, de todas partes, y le voy a decir: la mayoría de los cientos de cartas traen recado para el Compañero Presidente, y son recados que yo le voy a decir aquí, que son recados de la vida doméstica. Presidente, de pesar, de angustia, de orden económico, no son críticas, y dicen: “dígame por favor al Compañero Presidente...”

Entonces, yo le digo a usted. Usted no puede estar en todas partes, pero alguien tiene que poner en la horma a los abusadores, por ejemplo, el kilo de cebollas tiene un precio oficial de E° 4 y tanto, y en los mercados se vende a 15, a 20 escudos el kilo; entonces esa gente que lo apoya a usted honestamente, con fidelidad, paralelamente está viendo este tipo de problemas y debe ser bastante difícil, Presidente.

Presidente: Usted tiene, Juan Gana, toda la razón. Pero hay que ir a la raíz del problema, y esos compañeros que escriben, compañeras modestas, humildes, que maravillosamente todavía dicen “dígame al compañero Allende que los precios han subido, que aquí hay especulación”, ellas no pueden encontrar una explicación. Pero usted y yo se la podemos dar. Yo le puedo traer a usted altos de declaraciones de ministros de todos los gobiernos en que hablan de la veda de la carne; además ustedes la vivieron, la vivieron con Frei, la vivieron con Alessandri, la vivieron con Ibáñez, ¿verdad? Inclusive, nosotros vamos a superar algunos de los meses más altos de la inflación durante el gobierno de Ibáñez, pero vamos al otro reverso: los reajustes.

Nosotros acabamos de lanzar un proyecto de reajuste; todavía no sale del Senado y acabamos de enviar otro, porque nos hemos dado cuenta que nos quedamos cortos, que la movilización tenemos que alzarla, entonces nos hemos anticipado al reclamo justo de la gente, y hemos defendido fundamentalmente, ¿a quiénes?, a los que viven de un sueldo o de un salario. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este país? Que este país no estaba preparado para el consumo de los que tienen que consumir. En primer lugar había un 25% de capacidad ociosa en las industrias, lo echamos a andar; sin embargo, el poder de compra interno es más grande. Y además, usted lo sabe, el contrabando organizado. Este país es uno de los países más baratos del mundo en alimentos: Frei, Alessandri, González Videla, todos los presidentes compraban 160, 180, 200 millones de dólares en carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite.

¿Cuántos serán los hogares chilenos que comieron mantequilla o que comen mantequilla?

Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros hicimos una redistribución del ingreso, o sea, le dimos poder de compra a miles de chilenos que no tenían. Nos hemos encontrado con una producción, en el caso del industrial que a pesar de estar en marcha y ha de hacer producir a plenitud a las empresas, no satisface la demanda. Hay mayor demanda que oferta.

Además está el contrabando que no es despreciable. Y en el caso de los alimentos, aun importando lo que les digo a ustedes, que se importaba el 42%, el chileno se alimentaba mal.

Si nosotros hemos dado trabajo a 220 mil chilenos, significa que 600 ó 700 mil personas que no tenían nada para comprar, ni con qué comprar nada, hoy día han podido comprar.

Y, entonces, lógicamente nosotros tenemos que importar más alimentos y lo hemos dicho, pero nos encontramos con que los precios de los insumos, los alimentos, los repuestos en el mercado internacional han subido extraordinariamente, ¿por qué?, por la devaluación del dólar. Por ejemplo, mucha gente –y lo he dicho–, mucha gente dice: ¡ah! ¡imagínese, capaz que el señor Allende (con cierto tono despectivo) nos lleva a un racionamiento! Y yo digo honestamente, por ejemplo, si se pudiera o hubiera aquí la manera de racionar algunos artículos, como la carne, lo haría.

¿No es mucho más justo que si usted, Juan Gana, o usted, Hernán Reyes, que son padres de familia y tienen tres personas en su casa, cuatro, reciban lo que necesitan de consumo a la semana, para esas cuatro personas? En cambio familias de dos, o a veces de 5 personas, compren, no para 2 ni para 5, sino para 15 ó 20 y para varios meses, ¿por qué en la guerra se toman esas medidas? ¿por qué? Porque está el peligro ahí, ¿no es cierto?, porque se siente el retumbar de los cañones. Pero, ¿acaso no estamos en guerra contra el hambre, la desocupación que sienten algunos en este país? Sin embargo, todavía no vivimos una revolución, una conciencia revolucionaria. Yo lo he dicho, no podemos de la noche a la mañana suprimir la compra de carne de vacuno, porque no tenemos los pescados suficientes, porque todavía no hemos podido desarrollar una gran política avícola o de producción porcina. Los temporales, por ejemplo, nos echaron abajo la mayoría de las posibilidades de aumentar extraordinariamente la producción avícola.

Nos encontramos con que faltan elementos, nos falta techo para muchas aves –digámoslo así simplemente–, gallineros, criaderos de aves, nos faltan techos. ¿Por qué? Porque no producimos las fonolitas suficientes u otros elementos que se usan para los techos, porque no producimos suficiente cemento para construir. Chile debería duplicar su producción de cemento, estamos levantando una fábrica de cemento, una fábrica de cemento bueno, el crédito, la factibilidad, el agua, el sitio donde se va a instalar, las máquinas, dónde se van a comprar; son dos años para que esto sea una realidad. Vamos a empezar a producir cemento en Antofagasta, pero a fines del próximo año.

Entonces, todo esto tiene razón y tienen que producirse cemento. Dijo John Kennedy, “en este país se acuestan con hambre dos millones de personas”. ¿Dónde lo dijo?, en el país más poderoso del capitalismo. ¿Qué dijo el Ministro de Agricultura de EE.UU., hace tres años? Dijo que la década del 70 iba a ser la década del super-hambre de la América Latina. Estas son cosas que se han dicho, se han repetido, pero claro, ahora se aumentan, se agigantan, se magnifican. Esa no es culpa de nosotros ¿verdad?, ¿cómo es posible, cómo es posible, que en 35 años no se haya fomentado la ganadería?

No es culpa nuestra, una masa ganadera no se puede crear en un año y en dos y así le podría decir, entonces, todo este país en cualquiera de los aspectos.

Por ejemplo: los puertos, Coquimbo, dos barcos y pare de contar, fuera de las malas costumbres de algunos gremios que yo he censurado extraordinariamente y sobre todo en las faenas marítimas y portuarias.

En Valparaíso pueden descargarse, así, simultáneamente, 9 u 11 barcos. Hay barcos que están a la guardia; aquí en Chile, dando vuelta durante dos o tres días y el costo de sus barcos son mil o 1.500 dólares diarios.

Los transportes –no digo transporte colectivo– fíjese usted el 50% de los carros de ferrocarriles hay que repararlos.

Hay planchas de acero en Huachipato para reparar, pero no hay carros, ¿cómo ir a buscarlos?, entonces es un círculo vicioso, ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la remolacha, para las plantas de IANSA, con los conflictos, por ejemplo, con los camioneros?

Entonces, este es un problema; la gente no ve que es un país para una vida restringida y en beneficio y goce de muy pocos. Y de la noche a la mañana usted le da a la gente conciencia de sus derechos. Entonces, la gente reclama salud, y no podemos darle salud porque faltan médicos, faltan matronas, faltan enfermeras.

Les voy a decir una cosa a ustedes, compañeros, que seguramente no saben: el Laboratorio de Chile, para satisfacer las demandas del formulario nacional, ¿saben cuánto aumentó su producción?; ¡en 596%! Bueno, muchas más personas que demandan derechos a la salud, y todavía, en algunas maternidades –como lo he dicho– en Valparaíso, están dos o tres personas en una cama.

No se puede, imposible, verdad, es imposible, verdad, es imposible solucionar estos problemas de los países en vías de desarrollo.

Si acaso no hay un gran esfuerzo nacional, una gran conciencia, las masas se movilizan y nos apoyan a nosotros; pero en cambio, no hay la misma comprensión –inclusive en sectores de trabajadores– cuando se refiere al costo de la vida.

Ha aumentado en un 40%, en un 80%, ¿qué sacan con tener más billetes si la producción ha aumentado presiones inflacionarias? Ahí usted tiene el caso de las Cajas de Empleados Particulares, de Servicio Social; en consecuencia, un error cometido por el vicepresidente de la Caja de Carabineros, reclamando un pago que está discutido por la Contraloría; que da un informe contrario la Superintendencia de Previsión Social; ahora si usted paga lo que la gente quiere, algunos funcionarios, va a recibir 150 millones de pesos, 120 millones de pesos. Y algunos son parejas porque trabaja la esposa en una caja y el marido en otra caja van a recibir 300 millones, ¿es posible eso? ¿es admisible eso, cuando en las cajas hay gente que saca indemnización por años de servicio, 800 millones de pesos y todavía tienen jubilación reajutable?

Todo este proceso de reajuste, compañeros, es sumamente difícil. Es una tarea muy dura cuando hay una oposición implacable, que empuja mucho más allá, que si nosotros decimos: el reajuste, ellos dicen: “el reajuste no”, “el reajuste enano”, “reajuste miserable”, “trabajadores estafados”.

Periodista: Yo quisiera volver sobre un tema que ha estado aludido varias veces, que es la unidad del pueblo, y la unidad de las bases. ¿Qué piensa usted concretamente de las JAP, de los Comités de Unidad, de los Comités de Autodefensa, planteados por la CUT, en un plenario de la CUT Santiago, que es presidida por un democratacristiano y donde se acordó la creación de los Comités de Unidad?

Presidente: Si nosotros no estamos reclamando la unidad de la Unidad Popular: para emplear una forma clara, estamos peleando por la unidad de los

trabajadores, las necesidades de un trabajador democratacristiano, son las mismas que un trabajador socialista o comunista. Las necesidades de un obrero.

Cuando hablo de trabajador, hablo de obreros y campesinos, empleados pequeños o medianos comerciantes, profesionales, son las mismas. Nosotros no estamos realizando una política para la Unidad Popular, para los militantes de la Unidad Popular.

A ellos les reclamamos que comprendan, que estén dispuestos a sacrificarse, para que pueda progresar la política de unidad de los trabajadores; ese es el problema.

A ver, pues, otra pregunta, que vamos avanzando en la hora.

Periodista: En lo que se refiere a la unidad, hay ciertas frases y perdone que me remita a su discurso, el último, que entre paréntesis, creo que marca una segunda etapa en su Gobierno; ahí hay una frase que dice que más allá de las fronteras de la Unidad Popular, cuando hablaba del rechazo al enfrentamiento, y luego agregaba que ellos tienen un sentido político que les indica que hay que buscar la solución política y el pueblo –que es mayoría– tiene que indicar el camino de estas soluciones y entender con claridad, cómo alcanzarlo.

A mí me parece que allí usted abre un poco el camino a más allá de la Unidad Popular y está sentando bases para algo que no se advierte con precisión todavía pero que es una salida política.

Presidente: Pero lógico. En primer lugar ¿cuál es la solución? Yo creo que la pregunta le interesa a usted, que la ha formulado, Fernando Reyes. Y yo quiero contestarle, pero si usted quiere interrumpirme, hágalo nomás.

Periodista: Lo que dice Reyes coincide en algo con declaraciones que hizo ayer Bernardo Leighton, y que hizo Tomic en su carta aclaratoria a los diarios.

Presidente: Este es un momento duro, difícil, las orejas del fascismo están en las calles, la insolencia fascista está en las calles, la provocación está en las poblaciones, estamos viviendo una etapa anormal. Frente a esta etapa ¿qué cabe? El enfrentamiento. Lo rechazo, rotunda y categóricamente. Usted comprende –lo he dicho– maleantes y algunos obcecados fascistas, son 600 personas; imagínese, 10 mil o 20 mil obreros en el centro marchan apoyando a su gobierno. Bueno, ese no es el problema. Entonces no es la represión ni es lanzar la fuerza pública, ni es una actitud de violenta represión que pueda llegar a obligar a usar las armas, porque muchas veces los instigadores y los responsables se arrancan y cae gente inocente. Entonces ¿qué salida política tiene? Una salida política que interesa a todos los chilenos; para nosotros, por ejemplo, hay una meta: marzo. Ustedes comprenden que si en marzo el electorado, la voluntad de las urnas es drásticamente contraria al Gobierno, bueno, yo tendré que darme cuenta qué graves errores hemos cometido cuando la gente no vota por nosotros. Entonces, tendré que preguntarme seria-

mente: bueno, ¿qué pasa en este país? O por último voy a decir; el equivocado soy yo.

A la inversa: si la gente vota por nosotros en un porcentaje alto, por último, si se produce lo que es muy posible, que haya casi un equiparamiento de fuerzas, habrá que entender que la gran mayoría quiere cambios. Porque si nosotros pensamos lo que ha dicho Tomic en su campaña, en lo que dice la Democracia Cristiana, y pensamos que hay trabajadores, obreros, empleados, campesinos demócratacristianos, si vemos que Vogel firma un llamado, una comunicación antifascista –ustedes mismos están señalando estos hechos–, bueno, quiere decir que no el 50%, sino el 70% de los chilenos, está por los cambios. Bueno, busquemos la manera de realizarlos, que no implique violentar la conducta, la apreciación de la gente; por ejemplo, ahí está el caso del Congreso. Yo siempre sostuve mi pensamiento: si era posible abrir el camino del socialismo en pluralismo, en democracia y libertad, siempre que el régimen en Chile institucional fuera flexible, que entendiera.

Me refería fundamentalmente al Congreso, donde no tenemos mayoría; pero un Congreso que rechaza el Ministerio del Mar, un Congreso que se demora dos años en despachar –y todavía no sale– el Ministerio de la Familia, a nosotros que nos dijeron que íbamos a mandar los niños a Cuba y a la Unión Soviética.

Una de las mejores iniciativas humanas, crear el Ministerio de la Familia. ¿Para qué? Para poder dar los servicios para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. Nosotros lo que queremos es dictar el código de la familia, nosotros lo que queremos es que haya igualdad de derechos entre los hijos, nosotros lo que queremos es defender fundamentalmente a la mujer; cuando veo, por ejemplo, que hay gente que combate obcecadamente, el servicio llamado obligatorio de la mujer, ¿por qué esa iniciativa del Gobierno? Pero cómo no entender que no puede haber guarderías infantiles, o jardines infantiles, porque para un millón 200 mil niños, una persona por diez niños supone 120 mil personas de servicio. ¿Cuántos millones de millones hay que pagarles sueldos? En cambio hay miles y miles de muchachas que no hacen nada y que les haría muy bien entender que van a ser madres algún día, que les haría bien a esas muchachas de la burguesía el ir a las poblaciones para darse cuenta allí, cómo vive nuestra gente, cómo les es difícil conseguir un pañal, cómo no saben lavar una guagua, cómo no tienen agua para lavar; cómo les es muy útil para esa muchacha de la población también, adentrarse a nuestros conocimientos, porque más tarde va a ser madre, que no ha tenido la posibilidad de ir a una escuela para que le enseñen. Y sin embargo, conoce ¿por qué? ¿Porque es iniciativa de este Gobierno?

Entonces la pasión política llega a extremos tales que uno se pregunta, bueno ¿y cómo? Entonces yo soy partidario del diálogo sobre los problemas nacionales, con claridad. ¡Pero si lo hemos buscado! Yo invité al senador Renán Fuentealba a mi casa; yo le dije que encontráramos una solución para que votáramos de acuerdo, a fin de evitar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, en la interpretación de la insistencia por simple mayoría. Verdad, no quiero dar detalles, pero nosotros no fuimos renuentes a esto.

Yo puedo decirles a ustedes, como primicia a esta conversación, que el Ministro de Justicia y el Subsecretario General de Gobierno, vale decir, Jorge Tapia y Sergio Inzunza, me trajeron los proyectos que de común acuerdo se habían redactado, en una carta. Venían del Senado; lo único que yo tenía que hacer era firmar. Firmé, y cuando volvieron al Senado, ya se había producido la votación y las conversaciones habían desaparecido.

Y yo he firmado eso. Me quedé callado. Podría haberles dicho: eso es una burla a un Presidente de la República. Me mandan los proyectos de acuerdo, los acepto, hemos estado estudiándolos durante una semana, y cuando llega el momento en que materialmente tienen que venir el Ministro de Justicia y el Subsecretario de Gobierno a 4 cuadras de distancia, que se demoran 10 minutos, cambia totalmente el panorama de conversaciones mantenidas durante un mes y medio.

Periodista: Señor Presidente, usted ha hablado de la descomposición moral de los adversarios de la Unidad Popular.

Presidente: No, efectivamente no, sería injusto, sería duro, no quiero entrar a profundizar en este aspecto, puede haber habido muchas razones, vaya usted a saberlo. Cuando me refiero a la descomposición moral me refiero a otras personas que mienten, a la gente que usa la difamación, la calumnia; a la gente que sabe perfectamente bien que no pueden plantearse en un país algunos problemas que entrañan una gravedad, como lo ha hecho en el caso del cobre: decir que no vamos a producir nosotros para cumplir nuestros contratos, es dañar a Chile en la forma más salvaje que se pueda hacer.

Engañar a Chile como se dice enfáticamente que el oro ha desaparecido de las arcas del Banco Central, y tiene que ir a testimoniar que está el oro ahí un magistrado del Poder Judicial, es dañar a Chile.

Creo que es muy grave, extraordinariamente grave, cuando un senador habla de la desobediencia civil y cuando la Juventud Nacional reparte volantes que dicen: “la desobediencia civil va”, entonces, miramos dónde están ubicados aquellos que plantean cosas, que indiscutiblemente pueden traer consecuencias graves y dramáticas para el país y yo me empeño en evitarlo; y por eso he planteado públicamente un llamado, he extendido la mano, pero he dicho: si tenemos interés en evitar esto, yo sé que hay en determinados sectores de este país, aún en sectores duramente adversarios al Gobierno, la comprensión para evitar un hecho social y económico que puede crear para Chile condiciones que nunca nos imaginamos, que pudieran llegar a crear una guerra civil. No sólo días, sino que las secuelas de odios, entre familias, entre grupos, entre los integrantes de una misma familia, duran a veces dos o tres generaciones.

Y la economía de un país, que interesa a todo el mundo.

Imaginense ustedes, aquí con una fuerza obrera que dirige la economía del país. No basta decir una frase como esa; hay que pensar, sentirla, y darse cuenta.

Por eso, ese llamado mío es honesto, y esa apertura mía es clara. Buscar una solución política, pero una solución política, digamos, que permita in-

discutiblemente consolidarlo alcanzando y caminar hacia lo que quiere la mayoría del país.

¡Pero, si la DC lo ha dicho en su programa! Lo dice en sus declaraciones; lo dicen en sus discursos, gentes de la DC que les merecen respeto a muchos chilenos y fundamentalmente a mí, porque los conozco de muchos años. Estar en una posición como esta, es bueno. Yo no voy a hablar con ellos. No, yo estoy dispuesto a hablar, nadie me lo va a impedir ¿no?, pero quiero hablar sobre una posibilidad cierta; llegar a acuerdos y mantenerlos, no estar un mes y medio discutiendo, para en 5 minutos deshacer lo que ha costado tanto creer que se podría lograr.

Ahora, como digo, la salida política, la salida política está en marzo, así que no hay tiempo para un plebiscito. Ellos estuvieron mucho tiempo hablando del plebiscito. Nosotros no nos opusimos, pero dijimos: llamaremos a plebiscito cuando las circunstancias nos obliguen y sobre las materias que estimemos convenientes, pero eso es una prerrogativa presidencial.

Ahora no hay otro enfrentamiento ciudadano, político, que las elecciones, porque le digo a usted: yo evitaré drásticamente toda posibilidad de enfrentamiento; les cortaré las alas a los afiebrados termocéfalos pseudoizquierdistas o izquierdistas, como a los ultraderechistas. Lo he demostrado; nadie puede decirme que a un hombre de izquierda que haya delinquido o que se haya salido de la línea, no lo hayamos nosotros enviado a la Justicia. Entonces, pues, tenemos autoridad para ello.

Periodista: Presidente, aquí hay un problema que surge. Por ejemplo, da la impresión de que la marcha del lunes pasado fue una especie, entre otras cosas, de respuesta hacia todos estos boches callejeros; hay niñitos que dicen tienen hambre, que viven en el barrio alto y vienen al centro a causar desórdenes. Entonces, como que el pueblo (y perdone la expresión) se está choreando.

Presidente: La obligación mía es que no se choree mucho (risas). Porque si se chorea demasiado, va a hacer lo que ellos quieren que haga; salir a hacerse justicia por sus propias manos, y ahí está el comienzo definitivo del caos. El pueblo tiene que tener confianza en el Gobierno y en las medidas que el Gobierno toma y eso es lo fundamental; debe tener confianza el pueblo en que el Gobierno no acepta –y al decir el pueblo me refiero a todo el país–, no acepta otra cosa que las Fuerzas Armadas que establece la Constitución: la Aviación, Marina de Guerra, Ejército de Chile, Carabineros e Investigaciones, Policía. Los grupos armados de ultraderecha, los armados, donde estén, es mi obligación eliminarlos. Lo he estado haciendo, pero resultado que también se usan nuevas tácticas. Si a veces mando a allanar los locales (insalubres moralmente) de Patria y Libertad, ¿qué es lo que voy a encontrar adentro? Afiches, tarros de pinturas ¿y los implementos con que salen a los desfiles, dónde los tienen? En sus casas. Este es el problema, por eso que se requiere la organización del pueblo, no sólo de la gente de la Unidad Popular, de todos los que quieren defender la democracia. Vea usted, por ejem-

plo, yo he sido el primero en condenar, y está haciendo la investigación un juez letrado de Carabineros, por el caso de la muerte del cabo Aroca. Pero, la explotación que se hizo de esa muerte es algo que demuestra relajo moral.

¿Cuándo se había suspendido la sesión del Senado por los otros muertos, 10 ó 15 carabineros? Estos últimos días, una semana antes, había muerto un carabinero asesinado por delincuentes. ¿Fue algún parlamentario de la derecha a sus funerales? Fue un ministro.

¿Cuándo se había faltado el respeto a un ministro e inclusive a un muerto de la institución, cuándo el propio Cuerpo de Carabineros se ve obligado a hacer una declaración pública, protestando por la explotación política de la muerte del cabo de Carabineros? ¿Y los tres campesinos muertos en Frutillar? ¿Han visto ustedes que salgan en la prensa opositora al Gobierno, que les hayan dedicado algunos artículos, que hayan protestado o que hayan pedido castigo implacablemente? No señor. ¿Y el campesino muerto?

Nosotros indiscutiblemente hemos cometido errores, muchos errores más que todo en el orden económico y lo reconocemos, pero también una raíz y una base y los he explicado someramente en algunos aspectos de abastecimientos, movilización, transporte.

Pero, políticamente usted que es un periodista, aquí hay quienes dicen que no hay democracia, que aquí no hay libertad de prensa, que aquí no hay derecho de asociación. Pero se han juntado hace poco tiempo atrás, que sé yo, 300, 250 mil, pongan lo que quieran. Yo nunca discuto las cifras; se van a juntar el martes y les hemos dado autorización. Le he dicho al Intendente de Santiago: mire, llame a los dirigentes democratacristianos y dígales: estos son los dispositivos del Gobierno, esto es lo que queremos hacer para evitar cualquier provocación. Además los partidos de la Unidad Popular y yo, le diremos a la gente nuestra que no salga a la calle a provocar. Que salga a la calle, como siempre, porque nosotros no queremos dar, como respuesta, una ciudad desierta, que perjudica a Chile en el exterior y ese era el propósito.

En primer lugar, desfilan en una ciudad 700 mil personas. No es una ciudad desierta. Pero dejar otras calles, cerrar el comercio, hacer que la gente de los sectores del barrio alto estuvieran con las persianas bajas durante 8 horas, les crearon una especie de sicosis. ¡Si el pueblo no hace eso, si los dirigentes se lo hemos dicho que no lo hagan, yo tengo autoridad!

Le voy a decir a través del Intendente: vamos a movilizar tantos carabineros de uniformes, tantos carabineros de civil, tantos de investigaciones, pongan ustedes gentes en tales edificios, en tal parte, contribuyan, ayuden, porque la provocación puede venir de cualquier parte, ¿no es cierto? Hay 100 mil, 200 mil, 300 mil personas que pueda haber en una calle, ¿cuántos edificios hay?

De la terraza de un edificio puede salir una provocación, intencionada, para crearnos problemas, para que nos echen la culpa a nosotros.

Entonces, tienen que asumir la responsabilidad, ellos saben en qué clima se está actuando.

Lógicamente, no quise por ejemplo que la gente desfilara masivamente y puse el sitio de concentración en las Torres de Tajamar, antes que dejarlo en

Providencia con Pedro de Valdivia, porque no costaba nada que también pudiera haber salido una provocación, no digo de gente de derecha, digo de provocadores y provocadores mercenarios, que pueden estar al servicio de un grupo pequeño, son fascistas internos, al servicio de intereses extraños extranjeros. Los que hoy se han sentido por las medidas del Gobierno, los que no les importa en el fondo de la vida de los chilenos, los que han estado a punto de crear una guerra civil, los que están acostumbrados a corromper, los que están acostumbrados a amenazar, los que siempre han pensado que los países pequeños son sencillamente caudales sin fondo para ello. Este es el problema.

Periodista: Frente a esto que usted decía del clima. . .

Presidente: Oiga, no me exploten más.

Periodista: No, pero es que yo creo que esta última pregunta le va a interesar a la gente. ¿No es cierto? Un clima tenso, de dificultades. Se han diagnosticado una serie de elementos sobre el problema económico, etc. Entonces, hablemos del hombre medio, por dar una imagen abstracta, usted se pregunta, bueno ¿y vale la pena vivir esto?, porque está claro todas las razones que usted dio, todos los problemas que tenemos, los problemas externos, la compulsión del imperialismo sobre un país, etc. Bueno, pero la gente se pregunta: ¿vale la pena vivirlo y por qué vale la pena?, ¿cuál es la explicación que usted le daría a la gente?

Presidente: No vale la pena.

Periodista: ¿Quién es el hombre medio?

Presidente: El hombre medio es el empleado, es el técnico, es el profesional, es el soldado, es el militar, es el Chile que trabaja.

Yo le pregunto a usted, ¿puede sentirse satisfecho un hombre que llega a ser arquitecto, y sabe que él nunca podrá trabajar en un país donde faltan 500 mil viviendas?

¿Podrá sentirse satisfecho un hombre que es médico, que sabe puede mejorar aparente o realmente la salud de miles de niños en las diarreas estivales, que salen del hospital y vuelven a enfermar?

¿Puede sentirse satisfecho el comandante de un regimiento que sabe que en la puerta del cuartel se rechaza un porcentaje altísimo de gente porque no tiene las condiciones físicas exigidas?

¿Puede sentirse satisfecho el comandante en jefe de cualquiera de nuestras instituciones sabiendo que se necesita para ser eficiente, no sólo el estado físico, sino el desarrollo mental necesario?

¿Puede sentirse satisfecho el médico, el profesor o el militar, el marino, el aviador o el carabinero si sabe que en Chile hay 600 mil niños retardados mentales porque no han recibido proteínas? ¿Pueden sentirse satisfechos ustedes, periodistas? No.

Son esos sectores de clase media los que tienen que entender que en un momento determinado su situación pudiera parecer como desmejorada, pero que en el fondo es esencialmente para ellos la lucha que se está dando. Para que no haya, por ejemplo, esa separación entre trabajador manual y trabajador intelectual. Para que no haya ese desprecio, por ejemplo, por la empleada doméstica. Para que la gente entienda que el mundo tiene otra dimensión. Yo creo, además, que los sectores de la clase media tampoco han sido perjudicados en sus ingresos, yo les puedo decir que creo que como nunca han ganado los comerciantes en este país. Venden todo; todo, lo que usted quiera vender lo vende.

Lo que pasa es que la gente es poco apta para pensar un poco generosamente en su vecino y a veces no piensan ni en su propia familia. Este es el problema, así es que creo que los sectores de la clase media, el pequeño artesano, comerciante, industrial, agricultor, tiene que entender que en el régimen capitalista la concentración del poder económico, lentamente se va produciendo en muy pocas ramas. Y están entonces los grandes monopolios que precisamente han estrangulado a los medianos y pequeños comerciantes. Nosotros queremos para ellos seguridad y garantía, y hemos planteado proyectos de ley destinados a eso; lamentablemente no han sido despachados en el Congreso, pero nosotros queremos darle la confianza a esa gente porque contra esa gente no tenemos nada. Por ejemplo, cuándo dicen va a suprimir los comerciantes detallistas –debe haber ¿cuántos?, 180 mil, 240 mil en Chile–. ¿Se imagina usted suprimirlos?, ¿darle trabajo en qué a esa gente? Imposible imaginar; a esa gente la necesitamos; esa gente, el pueblo debe comprender que es indispensable, podemos colocar al lado almacenes populares, podemos crear distribuciones nacionales, pero esa gente sirve, es necesaria, cumplen una función y ellos mismos pueden encontrar respaldo en los propios consumidores de su barrio, y pueden obtener ellos mismos que se les entregue los productos que en realidad necesitan; si ellos mismos proceden correctamente va a ser ayudados por los propios consumidores. El problema es la organización y la conciencia de la gente y esa es la lucha en que estamos empeñados, ahora es muy difícil hacer una revolución en pluralismo, democracia y libertad, con una oposición tan violenta y una presión internacional del imperialismo tan dramáticamente injusta y dramáticamente violenta también. Es difícil cuando se niega y no se está dispuesto a ayudar casi en nada.

Periodista: Presidente, habíamos pensado conversar una hora y llevamos una hora y media; indudablemente que quedan muchos temas en camino. Yo quisiera pedirle una última cosa: en toda esta conversación hemos estado hablando de lo que puede ser el país, de lo que tiene que llegar a ser y los niños, los jóvenes de este país son los que van a construir, los que van a vivir, todo el mundo que ustedes se imaginan, que muchos en este país estamos tratando que sea así. ¿Ud. qué tiene que decirles a los jóvenes secundarios, a los jóvenes que están en la enseñanza básica?

Presidente: Tengo que decirles que ellos son el futuro y que lo fundamental es tener un profundo sentido patriótico y nacional; comprender que la obligación básica de un hombre es trabajar por el porvenir y el futuro de su patria, de su pueblo. Este es un país de gente joven y hay que decirle a la gente joven que tiene que comprender, que para poder hacer que un país progrese se necesita trabajar más, estudiar más, producir más. A mí, no me impresionan los revolucionarios verbalistas que son malos estudiantes, malos obreros, malos dirigentes, yo creo que la primera lección de un revolucionario es dar con su ejemplo la posibilidad que otros sigan su ejemplo. Por eso he repetido tantas veces y tantas veces qué buena esa frase escrita por un estudiante en la muralla de una Universidad de París “La revolución comienza por las personas antes que por las cosas”. Y eso es muy serio y muy profundo.

Bueno, me han explotado ustedes bastante, he estado muy agradado, espero que no pasen tantos meses antes que volvamos a conversar y reitero mis saludos a los radioescuchas de Portales y *La Gran Encuesta*.

**Gobierno de la República: Vetos del Gobierno al
Proyecto de Ley que modifica la Ley de Seguridad
Interior del Estado en lo relativo al control de armas,
municiones y explosivos**

(Proyecto)

(6 de octubre de 1972)

Artículo 18.– Sin perjuicio de lo establecido en las letras d) y e) del artículo que antecede, los procesos a que dieren lugar los delitos previstos en el título anterior sólo se iniciarán a requerimiento o denuncia de alguna de las siguientes autoridades: Ministro del Interior, Ministro de Defensa Nacional, Fiscal de la Corte Suprema, Fiscales de las Cortes de Apelaciones, Intendentes, Director General de Reclutamiento y Estadística, Comandantes de Guarnición, Prefectos de Carabineros y alcaldes y regidores de comunas cabeceras de departamentos.

(En lugar del texto anterior el Gobierno envió el siguiente a fin de sustituirlo, VF):

Artículo 18.– Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras d) y e) del artículo 18, sólo podrán iniciarse los procesos por delitos previstos en el título II por requerimiento o denuncia de alguna de las siguientes autoridades: Ministro del Interior, Ministro de Defensa Nacional, Intendentes, Director General de Reclutamiento y Estadística de las Fuerzas Armadas y Comandantes de Guarnición.

Conversación del embajador A. V. Basov con Luis Corvalán y Volodia Teitelboim

(13 de septiembre de 1972)

*Transcripción de la conversación del embajador A. V. Basov con Luis Corvalán y Volodia Teitelboim**

En la conversación L. Corvalán destacó que existen rumores sobre un posible golpe de Estado. Según la información que tiene el PCCh, dentro de las Fuerzas Armadas se preparan grupos de conspiradores. La derecha pretende provocar a los militares para que se tomen el poder.

Según el interlocutor, los factores que favorecen estos ánimos son: alza de precios, problemas con el abastecimiento, asesinato de un carabinero, descubrimiento de la actividad funesta de los grupos de ultraizquierda y de los vínculos entre éstos y el PSCh, realización de entrenamientos militares por los socialistas. Todo eso lleva a la brusca caída del prestigio del gobierno de Allende.

Corvalán subrayó que en estas condiciones existe un peligro real de intentos de golpe de Estado.

El dirigente comunista informó que frente a estas amenazas se elaboró una estrategia basada en la movilización de las masas alrededor de la CUT, que llamó a los trabajadores a tomar fábricas y a comenzar una huelga general en el caso de un putsch.

L. Corvalán comentó la situación en las Fuerzas Armadas. Subrayó la actitud leal del alto mando militar al gobierno y su disposición a mantener el orden público en el país.

V. Teitelboim, por su parte, informó de su reunión con el jefe de contrainteligencia del Ejército, general Sepúlveda. Se llegó a un acuerdo sobre la coordinación de las fuerzas de seguridad y de los partidos del bloque popular [...]. Se decidió a la vez movilizar a las fuerzas leales al gobierno, de acuerdo al decreto del Presidente del 18 de septiembre.

L. Corvalán consideró que una parte de la Democracia Cristiana se pronuncia por la colaboración con la Unidad Popular, pero la mayoría del partido tiene ánimos revanchistas.

El secretario general del PCCh expresó su preocupación por el fortalecimiento de las tendencias anticomunistas al interior de uno de los grupos del PSCh. Según él, numerosos militantes socialistas se dirigieron al PC solicitando su ingreso al partido. El secretario general del PS no se sintió capaz de poner orden en su partido, lo que obligó a C. Altamirano a renunciar de su cargo. En una oportunidad, Altamirano declaró haberse desempeñado como

* Del diario de A. V. Basov. Publicado originalmente en *Estudios Públicos*, 72 (primavera 1998). Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile.

árbitro entre Allende y el Partido Socialista y entre distintos grupos al interior del PS. La falta de un entendimiento mínimo entre Altamirano y Allende contribuye a su desencuentro personal.

V. Teitelboim destacó que uno de los problemas más agudos del momento es el de la futura evolución del PSCh: si éste gira a la derecha o camina por la vía del programa de la Unidad Popular. Mencionó las apreciaciones de Allende acerca de la falta de apoyo por parte del PS. En la actualidad, el Presidente Allende busca reestructurar el gobierno, sin excluir la posibilidad de incorporar a las Fuerzas Armadas.

A su vez, Luis Corvalán, refiriéndose a las elecciones de marzo de 1973, comentó que la Democracia Cristiana no tiene ilusiones en cuanto a sus posibilidades de triunfar, como tampoco cree que la izquierda pueda conquistar la mayoría en el Congreso*.

El dirigente comunista subrayó que la política económica de la Unidad Popular fue elaborada a corto plazo. Ha sido un error haber congelado los precios de los productos del sector público, lo que provocó pérdida de rentabilidad de las empresas estatales, donde el aumento de personal fue acompañado por la disminución de su productividad. Por otra parte, una de las condiciones desfavorables para la economía chilena consiste en la reducción de créditos estadounidenses.

Pero la dirección del Partido Comunista considera erróneo el aumento brusco de precios declarado recientemente. La política económica del gobierno debería orientarse a elevar la rentabilidad de las empresas estatales, aumentar la productividad, alcanzar la autogestión financiera de las empresas, modificar el sistema tributario nacional en el sentido de gravar a los sectores más ricos de la población y asegurar la redistribución de ingresos.

Al mismo tiempo, es imprescindible la revisión inmediata del nivel de remuneraciones, acorde al crecimiento de precios de uno y otro tipo de bienes de primera necesidad.

Luego V. Teitelboim informó sobre los intentos de los grupos de ultraizquierda de penetrar las filas del Ejército, provocando creciente preocupación en los círculos militares. Destacó que, en su mayoría, las Fuerzas Armadas no reflejan el modo de pensar de los ricos, ni de los pobres, sino de las capas medias de la población. También mencionó la creciente presión que las fuerzas reaccionarias realizan sobre el Ejército.

V. Teitelboim subrayó que todo el cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas de Chile y el general C. Prats se encuentran en posición de lealtad al constitucionalismo. Según Teitelboim, Carlos Prats declaró en una reunión de oficiales del Estado Mayor: "No soy el coronel Torres, los conspiradores pasarán sólo a través de mi cadáver. Soy así, que lo sepan".

Según las informaciones de la CIA, el 85% de las Fuerzas Armadas de Chile son leales a la Constitución y las leyes chilenas existentes. Pero el empeoramiento de la situación económica no está fuera de la atención de las Fuerzas Armadas.

V. Teitelboim destacó el creciente interés del Partido Socialista por consolidar sus relaciones con el PCUS y la URSS.

* Redacción confusa en el original.